

CAPÍTULO 2

HISTORIAS REPRESENTATIVAS DE LA VIOLENCIA

2.1. El PCP-SL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto armado interno.....	15
2.2. La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca.....	51
2.3. Los casos de Chungui y de la Oreja de Perro.....	85
2.4. El caso Uchuraccay.....	121
2.5. La SAIS Cahuide.....	183
2.6. Los sindicatos mineros.....	197
2.7. Molinos: derrota del MRTA en la región central.....	223
2.8. Los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas.....	241
2.9. El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga.....	277
2.10. El frente nororiental del MRTA en San Martín.....	309
2.11. La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo.....	343
2.12. La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga.....	381
2.13. La violencia en Huaycán.....	417
2.14. Raucana: un intento de comité político abierto.....	437
2.15. Los sindicatos de la carretera central: entre el radicalismo o la resignación.....	465
2.16. La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villar El Salvador.....	485
2.17. El PCP-SL y la batalla por Puno.....	525
2.18. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.....	575
2.19. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.....	605
2.20. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos.....	633
2.21. La Universidad Nacional del Centro.....	661
2.22. Las cárceles.....	697
2.23. Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción.....	731

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha considerado necesario estudiar en profundidad y presentar en este informe un conjunto de casos para comprender de una manera más cabal cómo el conflicto armado interno impactó en las distintas regiones.

Las historias regionales que preceden a esta sección indican que aquellas regiones donde se evidenció una relación conflictiva con fragmentos de proyectos de modernización inacabados fueron particularmente permeables al mensaje del PCP-SL. Los estudios de caso muestran cómo se tradujo este proceso en la vida diaria de las comunidades durante la violencia. Si el recuento del proceso nacional y regional de la violencia explica la gran diversidad de procesos de la violencia a través del tiempo y el espacio, los estudios de caso se detienen a indagar sobre hechos particulares del conflicto armado interno.

Los estudios en profundidad demuestran que ante la ausencia de propuestas alternativas en estas regiones expuestas a la subversión, el PCP-SL surge llenando inicialmente este vacío con sus promesas de orden, seguridad y justicia. En el caso de *Los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas*, el PCP-SL representaba la promesa de un mayor acceso a beneficios materiales y por lo tanto al progreso económico y social. Resulta claro, entonces, que el problema no se reduce a que la violencia prendió en sectores pobres y marginales, sino en aquellos lugares donde se evidenció de manera dramática la expectativa trunca de un mayor reconocimiento de parte del Estado y la posibilidad de una vida digna y un futuro mejor. No es tanto la escasez en sí misma, como el contraste sentido entre la precariedad de recursos y la posibilidad de superar de manera inmediata una situación agobiante y a todas luces injusta.

La complejidad y diversidad cultural, de otro lado, se hace claramente manifiesta a través de los estudios de caso, donde vemos que no hubo respuestas uniformes de parte de la población hacia los procesos de la violencia. Si en un momento inicial, las comunidades se vieron atraídas por el discurso senderista, en otro contexto las comunidades Cashibo-Cacataibo y Shipibo-Conibo en la región Ucayali, no se *engancharon* con el PCP-SL, sino más bien lo utilizaron para su propio provecho. Aunque es cierto que cuando eso sucede, al PCP-SL le interesaban más los réditos económicos que brindó el control de las actividades alrededor del narcotráfico que el desarrollo de una base social de apoyo y fundamento de su *nuevo Estado*.

En un análisis más detallado y denso, encontramos igualmente que el PCP-SL fue muy hábil en identificar fricciones y conflictos interpersonales y capitalizarlos a su favor. La manera cómo ganaba aliados, primero a través del circuito educativo y luego exacerbando las contradicciones locales, se tornó perversa, azuzada finalmente por el terror de ser eliminado cruelmente. Como lo demuestran los casos de los asháninka y diversas comunidades en Ayacucho, en reiteradas ocasiones, los propios vecinos y familiares terminaron acusándose y matándose unos a otros en esta guerra descarnada, defendiendo lo único que les quedaba: el derecho a la vida misma. De esta manera, los estudios en profundidad nos enseñan que la división entre víctimas y perpetradores fue muchas veces difusa y tenue. La noción de quién era el contendor y quién el coadjutor se fue diluyendo en pleno fragor de la guerra. Resulta claro que precisamente una de las

secuelas que quedó (factor que influyó en el proceso de investigación) fue la desconfianza reinante en los pueblos y el gran temor al resurgimiento de la violencia.

La base de datos de la CVR, construida a partir de testimonios de declarantes que se aproximaron a la CVR, nos muestra la magnitud en cifras sobre las víctimas del conflicto armado. Los estudios en profundidad que aquí se presentan, ilustran en forma complementaria la intensidad del proceso de la violencia, su significado e impacto en la dinámica de la vida cotidiana de las comunidades y circuitos familiares.

Si bien la base de datos de la CVR señala que las víctimas causadas por el PCP-SL exceden a las ocasionadas por las fuerzas del orden, en todos los casos coincide que la población guarda un recuerdo particularmente negativo de la presencia de Bases Militares. No pretendemos con esto poder medir el sufrimiento ocasionado por un bando y otro agente. Sin embargo queremos llamar la atención sobre el hecho —que aparece tanto en los estudios de caso como en las Audiencias Públicas— que el dolor ante un evento se hace más intenso cuando a esto se añade la incomprensión de los acontecimientos y el no poder procesar bajo una lógica determinada los sucesos que uno experimenta.

Mal que bien, los pobladores entendieron qué perseguía el PCP-SL, pero la estrategia de matanza indiscriminada por parte del Estado los tomó por sorpresa. Los agentes del gobierno les declararon la guerra sin advertencia y explicación alguna ¿Por qué esperar una cabal comprensión de la violencia de parte de los pobladores? Tanto en los estudios de caso como las Audiencias surge la interrogante ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿De qué somos culpables? Si bien la población mantuvo una actitud ambivalente ante las fuerzas del orden (los necesitaban, pero repudiaban sus actos de injusticia y corrupción) la indignación aumentó con la sinrazón.¹

Los relatos incluidos en el estudio sobre Chungui, «Oreja de Perro», narran cómo el PCP-SL arrastró a límites catastróficos. Al igual que en el caso asháninka, a un sinnúmero de comunidades y familias campesinas al sureste de Ayacucho, que terminaron viviendo en un estado de esclavitud y precariedad total en las *retiradas* del PCP-SL por varios años.

Los estudios de caso también nos permiten entender que no todos los actores se comportaron de la misma manera. En el caso anteriormente mencionado de Chungui y Oreja de Perro, encontramos un ejemplo de comando militar que modificó el tipo de estrategia *contrasubversiva* a fines de 1987 a beneficio de la población, ante las reiteradas demandas de los comuneros. Esto nos lleva a afirmar que la población también tuvo un rol activo durante el proceso de la violencia. Desde el inicio del conflicto armado registramos, por ejemplo, casos de resistencia y rebelión ante el PCP-SL, como lo demuestra el caso de Lucanamarca que marcó el inicio de una etapa de represión, por parte del PCP-SL, contra aquellas poblaciones que decidieron sublevarse frente al *nuevo poder* de este grupo maoísta.²

¹ La adhesión al PCP-SL en el caso de *El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga*, se explica en parte como reacción ante el repudio que la población tenía a los miembros de la policía.

² Véase caso de *La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca*.

El estudio sobre *El frente nororiental del MRTA en San Martín*, muestra claramente la lógica distinta de inserción del MRTA, que se vale del trabajo de organizaciones regionales ya constituidas que no han satisfecho sus demandas ante el Estado, mientras el PCP-SL ejerció en la práctica un férreo control sobre la vida y sentimientos de las personas que lo llevó incluso a prohibir estados de ánimo que denotaran hartazgo, tristeza y descontento. Como dueño soberano de las personas bajo su control, el PCP-SL terminó por destruir aquello que proclamaba defender. En el fondo constatamos que el PCP-SL despreciaba a las *masas* y que prefirió construir su *nuevo Estado* sobre la base de una élite de cuadros cuidadosamente seleccionados.

El PCP-SL siempre estuvo presente en las ciudades, aunque es hacia finales de la década de los 80 que intensifica su accionar. En el caso de la ciudad de Lima, el examen de Raucana, en contraste con los casos de Villa El Salvador, muestra cómo las poblaciones más permeables a la estrategia senderista fueron las más marginadas, con escasa o nula articulación a redes políticas y sociales. El patrón se repite en otros términos: el PCP-SL aprovecha los vacíos dejados por las organizaciones políticas y sociales, estatales y privadas, y gana aliados exacerbando las contradicciones existentes. Ante la ausencia de orden y seguridad, por ejemplo, el PCP-SL se encarga de generar su propia forma de gobierno, como en Raucana, donde el PCP-SL instaura el único Comité Político Abierto de Lima el 28 de julio de 1990, aprovechando el cambio de gobierno. A escala regional, este mismo tipo de conclusiones son válidas para localidades y regiones como se señala en el estudio sobre Puno, donde el PCP-SL difícilmente ingresa precisamente porque tuvo que enfrentar una sólida amalgama de redes sociales y organizaciones previamente constituidas, a las cuales poco o nada tenía que ofrecer.

Cuando las fuerzas del orden empiezan a recuperar terreno, a finales de los años 80, y cambian de estrategia, el PCP-SL se repliega hacia el Alto Huallaga y luego hacia la zona del Ucayali; así, en el estudio sobre *El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga* se ve cómo va desvirtuando su accionar en pleno *equilibrio estratégico*, como lo manifiesta el informe sobre *La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo*.

Finalmente queremos resaltar cómo los prejuicios y estigmas que circulan en la sociedad peruana, magnificados muchas por los medios de comunicación y políticas gubernamentales, sirvieron de excusa para implementar estrategias anti subversivas injustificadas como sucedió en algunas universidades estatales donde se exageró la magnitud de la presencia de las fuerzas subversivas. Asimismo, uno de los casos más dramáticos dentro de esta perspectiva fue el despliegue de *La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga*, donde —a pesar de haber cambiado de estrategia— las fuerzas del orden bombardean los *bolsones* Cuchara y Primavera del distrito de José Crespo y Castillo, en el departamento de Huánuco, zonas donde al parecer ya no existía peligro subversivo mayor.

2.1. EL PCP-SL EN EL CAMPO AYACUCHANO: LOS INICIOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

2.1.1. *El Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo, comité principal*

El Comité Regional Principal, eje fundamental de acción del PCP-SL, comprendía cuatro comités zonales: Huancavelica, Ayacucho (Huanta, Huamanga, La Mar), Apurímac y el Comité Zonal Cangallo-Víctor Fajardo, que es designado como Comité Fundamental (CZ CF).

Desde fines de los años 70, el PCP-SL empezó a preparar el terreno con un trabajo proselitista, en forma simultánea en varios lugares, como los distritos de Vinchos y San José de Ticllas, al suroeste de la ciudad de Huamanga y Santo Tomás de Pata en Huancavelica. Fue en el espacio del CZ CF donde, sin embargo, se dan condiciones propicias para que el PCP-SL ensaye reclute, adoctrine y entrene a jóvenes elegidos para lo que denominó el Inicio de la Lucha Armada (ILA). Luego, el CZ CF es el espacio donde el PCP-SL construye de manera más temprana sus *comités populares*. Siendo esta zona eminentemente campesina, el objetivo del PCP-SL fue desarrollar una masa campesina con una «sólida cabeza proletaria».¹ El CZ CF, en este sentido, fue considerado simbólicamente por el PCP-SL como la locomotora que avanza a todo vapor abriendo trocha.

De acuerdo a los documentos del PCP-SL, la provincia de Huancasancos estuvo también bajo control del CZ CF.² Huancasancos se trata de una provincia inserta en mayor grado a los circuitos comerciales de la costa, cuya población se movilizaba frecuentemente hacia áreas que el PCP-SL no controlaba. De esta manera, de acuerdo a nuestras entrevistas, encontramos un mayor esfuerzo del PCP-SL por fiscalizar desde un inicio la circulación de personas y bienes en Huancasancos en contraste con lo acontecido en la provincia de Vilcashuamán, donde no surge una resistencia grupal cohesionada y abierta hacia el PCP-SL.

La complejidad del conflicto armado fue tal que, en una misma zona, se originan respuestas distintas de parte de los pobladores hacia el PCP-SL. En efecto, mientras que en lugares como Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca encontramos relatos de rebeliones tempranas de un grupo importante de la población que se enfrenta al PCP-SL, en Vilcashuamán, las respuestas al PCP-SL son más tardías y fragmentadas. Una parte de los pobladores en los lugares estudiados, terminaron

¹ «Hace años nos planteábamos que hay que pensar en desarrollar campesinos con cabezas proletarias, hay que insistir más en este problema, que sobre la vigorosa combatividad del campesinado se sustente una sólida cabeza proletaria, esto es, armada de marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, armada en la política y en el estilo partidario, en el espíritu del Partido, eso es lo que necesitamos». Sobre el Comité Zonal Cangallo Fajardo. Cuestiones Políticas Fundamentales. Documento para el III Pleno.

² Reuniones del buró político con los comités partidarios sobre sus planes. CZ CF del 6 de julio de 1985.

conviviendo entre dos fuegos, mientras otros decidieron formar parte de los Comités de Autodefensa o continuar apoyando al PCP-SL.³

2.1.2. La efervescencia política no empieza con el PCP-SL

El PCP-SL tuvo una presencia temprana en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán y Víctor Fajardo, pero no incursionó en el escenario político en forma solitaria pues tuvo que competir con otros partidos y grupos políticos para ganar el control de la zona, como veremos más adelante. La atracción hacia un discurso político que apostara por la «transformación del país y la revolución» no era un hecho desconocido en la zona.

En efecto, Vilcashuamán fue una de las zonas de Ayacucho donde hubo mayor presencia temprana de una variedad de partidos y movimientos políticos desde inicios de los años 60 y en especial en los 70. De acuerdo a las entrevistas, en la zona hubo presencia de dirigentes del SUTEP departamental, de la Federación de estudiantes secundarios de Ayacucho (FUESA), del FER y de la CCP Bandera Roja, además de partidarios del PAP, AP y el FOCEP.

La paulatina inserción y extensión del PCP-SL en la zona a mediados de los años 70, coincide con una situación de expectativas económicas y sociales de parte, sobre todo, de maestros y estudiantes, que las reformas implementadas por el gobierno militar habían contribuido a exacerbar. El PCP-SL se benefició de un ambiente reivindicativo, donde diversas demandas se vieron frustradas debido a la crisis económica desatada desde 1976, que redujo los puestos de trabajo estables y los salarios en el país. El PCP-SL se insertó y aprovechó el ambiente político febril, sobre todo entre maestros de escuela, que exigían clamando por mejores condiciones de vida, quienes se *enganchan* con su discurso desde un primer momento. Ayacucho fue precisamente el único lugar en el país donde el PCP-SL obtuvo el control del SUTEP departamental. Sumado a esto, la represión política de parte del gobierno militar, exasperó aquello que buscaba aplacar: la efervescencia política de distinto signo y radicalidad, expresada en las huelgas nacionales a fines de los años 70.

Los puntos más álgidos en la historia regional habían sido la toma de la hacienda Pomacocha, en Vilcashuamán, en 1961 por un grupo de campesinos, los movimientos estudiantiles de Huanta y Ayacucho en el año 1969 y las huelgas magisteriales de fines de la década del 70. A pesar del gran repudio del PCP-SL por los partidos políticos de izquierda, Pomacocha ha quedado

³ Este estudio enfatiza lo sucedido en Vilcas, Pujas, Huambalpa y Accomarca en la provincia de Vilcashuamán. Véase el caso de Huancasancos en *Estudio sobre Lucanamarca*.

en el discurso del PCP-SL como una referencia importante y un ejemplo movilizador de la posibilidad real de formación de un territorio liberado.⁴

Según datos del INEI, las provincias de Cangallo y Vilcashuamán,⁵ que incluyen la cuenca del río Pampas, son eminentemente rurales y figuran como una de las zonas más postergadas en Ayacucho, con una débil articulación al mercado. Junto con la precariedad económica y social, encontramos también una ausencia notoria de los servicios del Estado. Para el PCP-SL fue relativamente fácil asentarse en la zona dada la ausencia casi total del Estado. Incluso, los insuficientes contingentes de la Guardia Civil, por ejemplo, habían sido expulsados mucho antes del inicio de la *Lucha Armada* por una población descontenta con el trabajo de la policía.⁶ Pero también es una zona de contrastes pues, junto con esta marginación, constata un decisivo aumento en términos absolutos de jóvenes que, en los años previos a la guerra, consiguen proseguir estudios superiores.⁷

En suma, más allá de toda planificación previa, el PCP-SL encontró en esta zona una situación política propicia y un ambiente propicio en ideas y reivindicaciones a favor de un cambio radical de la situación económica y social del país, difundiendo sus ideas de orden y justicia a través de una población especialmente receptiva de maestros de escuela y jóvenes estudiantes.

El PCP-SL capitaliza así los sentimientos de marginación, olvido y desigualdad que existían en la zona. Sin embargo, la situación fue mucho más compleja que afirmar que todo maestro y todo estudiante ayacuchano *marginado* se adhirió sin cuestionamientos al PCP-SL. Es innegable que las respuestas fueron diversas, incluyendo el sometimiento pasivo, la curiosidad, el estado de alerta y, sobre todo, el temor.

2.1.3. El retorno de los maestros y la inserción del PCP-SL en el circuito educativo

El incremento de la población estudiantil y la oferta de plazas educativas en la zona coinciden con el ingreso y paulatina inserción del PCP-SL en la zona de Cangallo.

En 1966, se creó en Vilcashuamán el Colegio Secundario General Córdova que se convirtió

⁴ Al respecto se había producido un acercamiento entre los líderes de la toma de Pomacocha, es especial con Manuel Llamocca Mitma, y dirigentes del PCP-SL (Gorriti. *Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú*. Cuarta edición. Lima: Apoyo, 1991. p. 82).

⁵ Es importante recordar que la provincia de Vilcashuamán formó parte de Cangallo hasta 1984.

⁶ Gorriti. *Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú*. Cuarta edición. Lima: Apoyo, 1991. p. 87

⁷ Este incremento no se debe a un aumento de la población infantil y juvenil. De acuerdo a los censos nacionales, la población total de Cangallo sufrió más bien un decrecimiento en los años previos a la guerra de 0.12, donde desciende de 69,872 pobladores en 1972 a 69,155 en 1981. El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años se mantuvo más o menos estable entre 1961 y 1981. Para los años 1961, 1972 y 1981, del total de la población de Cangallo, el 13.9%, 12.2% y 13.7% son jóvenes de 15 a 24 años. En el caso de la población menor de 15 años, para los mismos años, del total de población de Cangallo, hubo un ligero crecimiento expresado en 45.1%, 47.4% y 47.4% respectivamente. Ver Censos Nacionales y Degregori, Carlos Iván (1986). *Ayacucho, raíces de una crisis*. Ayacucho: IER José María Arguedas, páginas 117, 188, 130, 134 y 137.

Para 1993 la población de Cangallo sumada a la de la provincia de Vilcashuamán era de 56,135, es decir, desciende aún más, como consecuencia muertes y desplazamiento de personas, es decir, un descenso de 18.8% respecto a 1981.

en pocos años en uno de los colegios más importantes de la provincia de Cangallo.

En los años previos a la violencia, entre 1972 y 1977, la población estudiantil del Córdova registró un crecimiento importante. El número más alto de estudiantes se registró en 1977, donde se reconoce la asistencia de 414 alumnos. A partir de este año —1977—, el número de estudiantes en el Córdova sufre un decrecimiento constante debido, entre otras razones, a la competencia y construcción de otros colegios secundarios en otras localidades.

Esta presión por educación se convirtió también en una demanda notoria por estudios superiores, particularmente en Educación. No fue raro el caso de estudiantes que retornaron a su zona de origen para emplearse como maestros.

Es así que el incremento de la población estudiantil se plasmó en el aumento de estudiantes provenientes de Cangallo en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En efecto, de Cangallo y Vilcashuamán provino en 1976 el segundo grupo más grande de estudiantes en UNSCH (364 de total de 2309) y también de la especialidad de Educación (41 de 316 estudiantes) después de Huamanga.⁸ Más aun, la población estudiantil procedente de Cangallo había crecido seis veces (de 58 a 364 estudiantes) en menos de ocho años (1968 a 1976).

Según los testimonios recogidos, mientras el PCP-SL iniciaba sus labores de proselitismo a través de las escuelas, los integrantes de la Confederación Campesina del Perú (CCP) trabajaban directamente con los campesinos, especialmente en la localidad de Pomacocha. Nuestros informantes señalan que el PCP-SL no tuvo influencia entre los campesinos, siendo básicamente los profesores y los estudiantes, hijos de campesinos, quienes se *enganchan* con su discurso político.

Algunos jóvenes que salieron de Vilcashuamán hacia fines de la década del 60 a estudiar secundaria retornaron luego a ocupar cargos de maestros en sus propias localidades, donde muchos maestros titulados rechazaban ir a trabajar. Profesores de la localidad como José por ejemplo —a quien señalan como uno de los responsables de la quema de ánforas de Chuschi— enseñaron en las comunidades de Chuschi, Accomarca y Pujas.

Marcos, originario de Pujas, quien volvió a su pueblo para desempeñarse como maestro, es mencionado en reiteradas ocasiones en nuestras entrevistas. Participó en los movimientos estudiantiles de Huanta y Ayacucho en 1969 en torno a la defensa de la gratuidad de la enseñanza, siendo estudiante de Educación en la UNSCH, donde se incorporó al FER antes de pertenecer al PCP-SL. Los pobladores lo recuerdan como un estudiante *aplicado*, perteneciente a una familia campesina de escasos recursos económicos.

El caso de *Lauro* es distinto, pues se casó con una comunera y se convirtió en *yerbo* de Accomarca, como refieren los testimonios. Según éstos, *Lauro* fue dirigente del SUTEP y con él se

⁸ Fuente: UNSCH. Dirección de Planificación.

inició el PCP-SL en Accomarca. Antes de desempeñarse como profesor en Accomarca había enseñado en Ahuaqpampa. *Lauro*, natural de Guacho, no hablaba quechua pero trabajó con niños y jóvenes sin mayores dificultades. Tal como señalan las entrevistas, *Lauro* «tenía mal genio» (pobladora de Accomarca) y «cuando no podíamos resolver un problema, nos tiraba palo, cocachos y jalones» (*Focus group de mujeres, Accomarca, 22 de junio 2002*). Nuestros informantes señalan que *Lauro* se encargaba de reclutar jóvenes para adoctrinarlos en las escuelas populares de Llocllapampa. A *Lauro* se le asocia con la decisión drástica de eliminar a las autoridades de Accomarca y de Ahuaqpampa, como manifiesta el siguiente relato:

Nos ha reunido a todas las autoridades para quitarnos los sellos y ese mismo día mataron al señor Narciso Pulido, teniente gobernador de Accomarca. También a Bartolomé Mendoza en Ahuaqpampa, quien era teniente gobernador, mataron con bala por el estómago, luego remataron con cuchillo el cuello. En reuniones nos amenazaban sino están con nosotros los matamos, en cambio el resto aceptaron por ser débil de corazón, principalmente los jóvenes del colegio. Uno de ellos, *Lauro* y un tal Aurelio (huambalpino) los dos eran promotores principales aquí. Los padres de los alumnos por miedo aceptaron. Yo dos veces me escapé de la muerte, por ser autoridad. Los terrucos venían en grupos de diez, cinco, seis, entre hombres y mujeres (muchachas), a las muchachas obligaban su jefe para reclutar a los jóvenes para reclutar a los varones. (CVR. BDI - I-P51. Notas de campo P51, Accomarca (Ayacucho) ,junio de 2002. Varón ,agricultor ,su esposa murió en la masacre de Lloqllapampa)

2.1.3.1. El discurso de la igualdad del PCP-SL

Los profesores de distinto signo político del colegio General Córdova solían organizar debates ideológicos. En varias ocasiones, estas discusiones políticas se hicieron públicamente en la plaza de Vilcashuamán. El discurso que el PCP-SL propalaba en las aulas del Córdova estaba sostenido no solamente en la autoridad del maestro sino en las expectativas de un futuro mejor. Sus enseñanzas se basaban en manuales marxistas que circulaban en el medio universitario, que resumían verdades universales no cuestionables, ofreciendo con ellos respuesta a una generación signada por inquietudes y cuestionamientos; el mundo se dividía entre explotadores y explotados y por tanto el nuevo sistema que planteaba la revolución debía cambiar radicalmente las estructuras en las cuales se basaba este viejo orden.

Por ello, el PCP-SL llegaba proclamando un discurso de igualdad entre ricos y pobres:

Bueno en primeros momentos ellos (PCP-SL) han entrado con buenas condiciones porque yo he escuchado [...] Entraron y dijeron que nosotros estábamos luchando para la gente pobre, para que seamos iguales, para que no tengamos diferencia con ricos y pobres y así vamos a luchar» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P 162, Vilcashuamán, septiembre de 2002. Mujer, líder local de organización local de mujeres de base de Vilcashuamán)

No creo que la gente concientemente conociendo [...] Ahí no sabían qué cosas era el Sendero en la realidad ¿no? [...]. Entonces aprovechando esos problemas, esa coyuntura problemática que el pueblo vivía, Sendero estaba ahí [...] ;Señor vamos a levantarnos para reclamar nuestros derechos! Entonces ¿quién decía que no? Unos cuantos de repente. Al que decía que no, no lo obligaban los Senderos, sino que llegaban a la parte débil (CVR. BDI Entrevista en profundidad P3 .Grupo focal, Vicashuamán, junio de 2002. Asistieron cuatro varones)

Totalmente olvidado. Hace cuenta que el pueblo no existía no solamente en Pujas, sino de Huamanga [...] Siempre ha sido así. Para mí, en una parte Sendero, tuvieron razón en reaccionar [...] Donde hay dinero, el juez come a las leyes. Donde hay dinero, hay justicia. Para mi modo de decir, en una parte tuvieron razón, pero lo que pasa que las actitudes que tomaron no eran razonables (CVR .BDI .Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002. Varón 60 años, obrero retornante de Pujas)

Este discurso de igualdad confluyó con el sentimiento de expectativas frustradas, sobre todo de los profesores, que exigían una paridad de condiciones desde mediados de los años 70.

2.1.3.2. Del discurso a la acción consecuente

Asentado en Vilcashuamán, los cambios que paulatinamente el PCP-SL introdujo en la organización política y económica de las comunidades no implicaron inicialmente restricciones de movimiento, ni afectaron mayormente las actividades regulares de los comuneros, por supuesto siempre y cuando mostraran adhesión al PCP-SL. Situación diferente a otros lugares, como las alturas de Huanta, por ejemplo, donde el PCP-SL había prohibido a los pobladores establecer relaciones comerciales con las zonas bajas y acudir a ferias semanales.

En Vilcashuamán las comunidades siguieron cultivando sus tierras, produciendo maíz, tubérculos y cereales, además de seguir acudiendo a la feria de la capital a proveerse de productos como sal, aceite y azúcar. Pero paulatinamente el control de movimientos fue incrementándose conforme progresaba el conflicto armado interno y la sospecha de desertión: «si no los quieres a ellos, ya te cuidan, ya no puedes ir a ninguna parte, te cuidan, te vigilan y si te encuentran yendo estas muerto» (varón, Pujas, agosto de 2002).

El PCP-SL logró imponerse en las escuelas y luego activó la creación *comités populares*; a través precisamente de la captación de maestros con vínculos familiares locales. Este trabajo se vio luego reforzado por la presencia de jóvenes estudiantes foráneos, quienes, junto con los maestros locales, trabajaban en el adoctrinamiento de la población. Estos jóvenes estudiantes militantes del PCP-SL, a quienes los comuneros llamaban visitantes, provenían de diversos lugares y su presencia en la comunidad era aceptada, pues eran presentados como parientes de familias de la localidad cuyos hijos estudiaban en la UNSCH y con quienes el PCP-SL había establecido relaciones.

Estos jóvenes, identificados como estudiantes universitarios sin necesariamente serlo, por la manera que tenían de expresarse y por los temas que trabajaban en la comunidad, enfatizan la situación de desigualdad e injusticia en la que vivían los campesinos.

Nuestros informantes recuerdan la etapa inicial del PCP-SL como un momento donde sus miembros demuestran una serie de principios férreos y de compromiso con la comunidad en el manejo de los quehaceres cotidianos. De esta manera, el PCP-SL practica en pequeña escala su propuesta de *nuevo Estado* para cubrir aquellas demandas que el *viejo Estado caduco* no había logrado satisfacer:

En un principio los estudiantes, se preocupaban por los problemas y las necesidades del pueblo como, por ejemplo, la refacción de la escuela, faenas, ayudaban a las mujeres viudas sin pago alguno, entre otras actividades caritativas. Hubieron hasta casos de mujeres que se llegaban a enamorar de VA por la amabilidad que este mostraban (CVR. BDI. P150. Notas de campo P150, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

El inicio de Sendero Luminoso está relacionado con la aparición de estudiantes universitarios. Recuerdo una chica María, de un señor al que le decían Chino. Ellos ayudaban a las madres solteras. También ayudaban cuando se realizaban faenas, ellos hablaban de las cosas que debíamos hacer como el techado de la Iglesia.(CVR. BDI. P13 Notas de campo P139, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

2.1.3.3. Construcción del *nuevo Estado*

Una vez instalado en las comunidades, el PCP-SL se propagó a través de las *escuelas populares*, clandestinas según las entrevistas, a las cuales asistía un grupo escogido de jóvenes de distintas localidades para ser adoctrinados, pero sobre todo para formar parte del Ejército Guerrillero Popular (EGP) y recibir entrenamiento militar. Los jóvenes escogidos pasaban así a formar parte del destacamento especial de la estructura militar, es decir, de la *fuerza principal*.

Sendero escogía para adoctrinar a los jóvenes más inteligentes, a los líderes que podían influenciar más sobre sus compañeros. Como escuelas populares y a través de ello, salían al campo algunos a organizar esos años, a campesinos, organizaban por barrios (CVR.BDI .P8. Notas de campo P8, Vilcashuamán, junio de 2002. Varón de 50 años ,ex director de USE de Vilcashuamán)

Las escuelas populares eran más profundas [...] Se tocaba más que nada como era las estrategias de las guerrillas, cuando uno salía en la lucha armada con sus pelotones, los cuidados, los arrasamientos, que desplazamientos se iba ser. Cuales eran las reglas de uno cuando uno entraba a una comunidad, cuando entraban a una casa. Todas esas cosas más que nada se analizaba. Como era la guerra, ah en china, en Rusia de eso se analizaba. (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P15,Vilcashuaman, septiembre de 2002.Varón de 36 años ,profesor de la USE de Vicashuamán)

Las *escuelas populares* se realizaban por grupos. Cada profesor se ocupaba de capacitar a un grupo de quince estudiantes. Una vez obtenido el compromiso de parte de los jóvenes, la asistencia a las escuelas era obligatoria.

(Los profesores) MC y JC hablaban al pueblo de las necesidades que este podía tener. Hablaban en cada barrio. También cuando se realizaban faenas, ellos hablaban de las cosas que debíamos hacer como el techado de la Iglesia, del colegio. Cuando los C se fueron, los universitarios se quedaron organizando. Los que no iban a las escuelas populares eran marcados, la organización era por barrios. En aquellos años sólo eran nueve barrios: plaza vieja, plaza nueva, Tranca, tenería, Atocpuquio, Marayjata, Billullo, Chacchapa, Tucuna y Yanama, que era el más alejado pero que ya no existe. Estos barrios estaban separados unos de otros» ». (CVR .BDI .P139, Notas de campo P139, agosto de 2002. Mujer de 55 años ,partera ,conoce los detalles de la violencia ,fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

Pero cuando el PCP-SL logra una importante adhesión de maestros y jóvenes, la guerra se complica y la captación de maestros se vuelve cada vez más agresiva y violenta. Un poblador nos relata que en la navidad de 1983 incursionó un grupo de senderistas en Huamanmarca para comunicar de manera prepotente y con insultos a los maestros que «tienen plaza hasta fin del año» y «olvídense de recoger su miserable cheque» que «las clases se iban a convertir en escuelas populares» (CVR. BDI. Notas de campo P82, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, autoridad en los 70, en la época de la violencia fue rondero, fue amenazado por el PCP-SL).

Según nuestros informantes, las escuelas populares se establecieron en lo que los pobladores identifican como campamentos —concepto y denominación que no existe en el léxico y práctica del PCP-SL— que eran además lugares de refugio, escondite y tránsito,⁹ con viviendas precarias camufladas con follaje. Los datos que poseemos señalan que el PCP-SL había establecido un campamento en Llocllapampa, en el distrito de Accomarca., que operó entre 1983 y el 14 de agosto de 1985, fecha en la que la patrulla Lince 7, comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado, asesinó a 69 comuneros entre mujeres, ancianos y niños.

En el campamento de Llocllapampa se daban clases a los jóvenes que provenían de lugares diferentes y del lugar (CVR. BDI. Notas de campo P34, Accomarca, junio de 2002. Varón de 40 años)

Ayudé a construir un campamento en Llocllapampa que utilizaron durante el 84 y el 85. En este lugar adoctrinaban a los jóvenes del PCP-SL y reunían a la población cada 3 semanas tanto a jóvenes, a niños como a adultos. Los senderistas les pedían comida y animales a la gente como colaboración. (CVR. BDI P25. Notas de campo. Testimonio 201614, Accomarca. Varón)

Eso era 1984 por ahí. Entonces fui a la invitación de ellos a Llocllapampa, donde hacían fulbito así y los senderistas venían de todas partes también. Eran trescientos tantos (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P76, Huambalpa, agosto de 2002. Varón)

Igualmente, el PCP-SL estableció otros lugares de encuentro o campamentos en Saywa (un monte cerca de Huamanmarca) y cerca de Huambalpa.

⁹ La terminología del PCP-SL no solamente no utiliza la denominación de *campamentos*, sino que su estrategia militar no se asienta, como es el caso del MRTA, en campamentos propiamente dichos.

Otro campamento senderista funcionó en Saywa. Eran campamentos rústicos contruidos de adobe y quíncha, también había comentarios que existían túneles. (CVR. BDI .P65. Notas de campo, Accomarca, septiembre de 2002. Varón)

En Huambalpa también hubieron campamentos. Almacenados de enseres de cocina para la preparación de alimentos (CVR. BDI .P65. Notas de campo, Accomarca, septiembre de 2002. Varón)

El campamento era todo techado, solamente con ramas de molle verde nomás. Nadie se veía dentro del molle y almacenaban todo cereales, para el consumo de ellos. Habrían habido otros productos, ya no he entrado, solamente donde cocinaba las mujeres he visto sacos. (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P76, Huambalpa, agosto de 2002. Varón)

Tenemos información que el PCP-SL había exigido la construcción de túneles en preparación para la guerra en los campamentos de Accomarca y Umaru

Sendero había dicho que deben hacer túneles en distintos sitios para que puedan guardar sus cosas. Todo eso habían enseñado, a llevarse todas sus cositas, ponerlos ahí (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P56, Accomarca, junio de 2002. Varón de 50 año, docente)

CVR. BDI P89 refiere que las rondas encontraron cuevas de cinco metros de profundidad en Huamanmarca.

Bueno así por, haciendo un seguimiento, los rastros de ellos ya después que todo pasado ya, ya lo hemos hecho un allanamiento, emboscadas así, en cuevas ¿no? [...] Ellos ya tenían su bandera [...] y martillo, después folleto, alambres cortados. Así por lo mucho, dos rollos a tres rollos [...] Eso será para bomba. También latas [...] Tenían pues cuevas de más o menos de cinco metros de profundidad acá atrás de altura de Huamanmarca. Ahí hemos encontrado grabadores, máquina de escribir, máquina de coser, mantas, zapatillas, frazadas. Ya totalmente deshecho, pero nuevo, pero ya podrido ya. Hasta zapatos también, pero totalmente podridos ya. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002. Varón, ex rondero de Huambalpa, actualmente comerciante, incursionó con los rondas de Vilcas en la zona de zona de Huamanmarca)

De acuerdo a CVR. BDI P89 y CVR. BDI P99, concluimos que en Huamanmarca además de existir un lugar de encuentro (o campamento de acuerdo a los pobladores), había una base de apoyo del PCP-SL, así como también en Accomarca, en localidades como Yanto, Huanquispa, Ansarqui, Rimariq Huambalpa y Churiacocha, entre otras.

En esas bases, las mujeres estaban reunidas bajo una secretaría, que organizaba las tareas que el PCP-SL encomendada, especialmente labores domésticas para el sustento del EGP. Ocasionalmente las mujeres debían realizar pailas comunales, especialmente después de saqueos o robos a tiendas.

Cuando Sendero Luminoso dominaba el pueblo hasta la comida se hacían en pailas comunes y para no ser sorprendidos los vigías cuidaban los cuatro lados del pueblo.»

(CVR. BDI .P64. Notas de campo P64, Accomarca, junio de 2002. Varón agricultor de 30 años ,durante la época de la violencia estudiaba en el colegio General Córdoba)

En la casa de B.G., las mujeres viejitas preparaban chicha, hilaban para ponchos y chalinas para los tucos. Preparaban comida, molidos de trigo, cebada y maíz, y preparaban cancha. Toda la gente estaba obligada a llevar sus productos y todo ello era controlado por B.G. Una de las mujeres me comentó lamentándose «maquiy cupas manañan karqañachu, huasay cupas tukurruq qinañam nanahuaqku» [las mujeres no descansamos ni un solo instante] (CVR. BDI .P82 Notas de campo P82, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, autoridad en los años 70, en la época de la violencia fue rondero, fue amenazado por el PCP-SL)

Cuando venían estos grupos, los líderes de acá los recibían y se alojaban en la casa de G.B. Ahí hacían reuniones y comían lo que la gente les daba lo que ellos decomisaban. Dicen (los comuneros) que en esa casa cocinaban, almacenaban productos y las mujeres cocinaban, algunas hacía tejidos y otros hilaban para que luego confeccionen ropa y abrigos para esta gente que tenía que ir de zona en zona. (CVR. BDI. P110. Notas de campo P110, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, jubilado, en la época de la violencia fue docente y organizó un CAD)

Pero, en estos lugares, la población femenina mantenía definitivamente un rol subordinado.

Aproximadamente una semana del atentado de Llocllapampa, A y los hermanos Q tenían previsto realizar una recepción a los senderistas que llegarían de diferentes lugares. Para ello se realizarían diversos preparativos en el campamento de Lloclla. Las mujeres tenían que estar a cargo de los preparativos de la comida. (CVR.BDI, P68 Notas de campo P68, Accomarca, junio de 2002. Mujer campesina de 45 años, su hijo desaparece en la masacre del 85 en Accomarca)

Las mujeres tenían que trabajar pelando papa y maíz en bastante cantidad, sus manos estaban heridas y no les daban ni comida. (CVR.BDI. P70 Notas de campo P70, agosto de 2002. Mujer campesina, su hijo desaparece luego de la masacre de Accomarca del 85)

A la fuerza nos hicieron todo esto. Nos obligaban a hacer cosas. Nos obligaban a cocinar y con el temor nosotros obedecíamos. Al ver a las personas que mataban, nosotros teníamos miedo y cómo no íbamos a obedecer. Pensábamos que a nosotros también de la misma manera nos iban a matar. Cuando venían los otros, venían también teníamos miedo, cuando venían los soldados. De igual manera ambos mataban, tanto los soldados como los senderistas (CVR. BDI .P48 Grupo focal, Accomarca, junio de 2002. Participaron 5 mujeres)

Los campamentos, como definimos, sirvieron de lugares de preparación para la guerra, pero también fueron escondite cuando ingresaron las Fuerzas Armadas a la zona y la violencia aumentó en 1983: «Su plan de ellos (del PCP-SL) era cuestión de amenazar, no más nadie vaya con cuentos a ninguna parte. Que estén tranquilos. Cuando vengan los militares hay que escapar al monte y eso era su organización» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P131, Pujas, agosto de 2001. Varón antiguo líder de la comunidad)

Pero, antes que retirados en orden, cuando la población se encontró entre dos fuegos, sin embargo, cualquier lugar fue válido para escapar y esconderse:

Nos escondíamos en los montes, en las cuevas, debajo de los árboles. A veces sin cama dormíamos. No sólo era miedo a Sendero, sino miedo a los dos, porque cuando estabas sembrando o cosechando o siquiera un rato estás en tu casa y cuando decían ¡vienen los militares! Entonces tenías que correr como sea para esconderte donde sea, a los huaycos, al monte. Porque cuando llegaban los militares acá a la población hasta kerosene echaban a nuestros cereales que estaban almacenados. Orinaban a ese trigo o cebada que estaban depositados. Ahí orinaban, mezclando con sus heces. (CVR. BDI. P48. Grupo focal Accomarca, junio de 2002. Participaron cinco mujeres de Accomarca)

Estar en calidad de clandestino significó que la comunidad no supiera de la existencia de las escuelas populares y de lugares de encuentro. Lo importante era no divulgar su presencia más allá de las fronteras de la localidad; por ello, cuando el conflicto armado interno e intensifica, los sospechosos de ser *soplones* y sus familiares eran castigados muchas veces con la muerte misma.

Cuando salíamos del pueblo los de sendero nos decían soplones, ovejas negras, están yendo a soplar a sus padres decían. (CVR.BDI. P48. Grupo focal Accomarca, junio de 2002. Participaron cinco mujeres de Accomarca)

Pero cuando trabajamos así, reconstruir nuestras casas o a nuestras instituciones no nos dejaba trabajar. Hay veces cuando conversamos con militares, con policías, nos decían soplones, doble caras, chupa medias diciendo nos hacia corretear, incluso nos ponía a la lista negra, incluso en esa lista nosotros estábamos buscados, varios autoridades.(CVR. BDI. Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002. Varón, ex rondero de Huambalpa, actualmente comerciante, incursionó con los rondas de Vilcas en la zona de zona de Huamanmarca donde se dice cometieron muchos abusos contra la población)

Así cuando estaban organizados pues, las rondas habían muerto, por eso hemos tenido miedo, en esa su primera incursión, cuando estaban organizados, a ese señor Azursa lo han matado entonces lo habían cortado miembro viril (hari kaiinintpas kuchurusqa) y en todo acá lo habían pegado en su cuerpo papeles ¡así mueren los soplones sirvientes de los militares! Diciendo en la plaza señor (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P104, Huambalpa, agosto de 2002. Mujer de 43 años autoridad club de madres)

Al revisar la documentación del PCP-SL, encontramos que la Base Principal del Comité Zonal Fundamental no fue ninguno de estos centros poblados, pues el llamado *punto clave* fue la localidad de Concepción.

2.1.3.4. Tomar a los pueblos por asalto

Desde 1984, la *fuerza principal* (FP) se desplazaba por la cuenca del Pampas entre diversos campamentos que formaban un corredor, cercanos al río, especialmente a través de caseríos y anexos de distritos alejados de la carretera y de la capital del distrito, con el fin de evitar toparse con militares.

De acuerdo a los documentos del PCP-SL, la *fuerza principal* de esta zona estaba compuesta por 48 miembros, la *fuerza local* la integraban 250 personas y la *fuerza de base* en total sumaba 1,310 pobladores.

La FP —o lo que la población conoce como patrullas— del EGP estaba integrada exclusivamente por jóvenes que provenían de distintos lugares. Encontramos evidencias, una vez más, que corroboran el hecho de que no todos los jóvenes se pliegan al PCP-SL y a la FP por decisión propia. La tarea de la FP era tomar por asalto a los puestos policiales, por ejemplo, para proveerse de armamento, dinero y ropa. El armamento que portaban distaba en gran medida de ser sofisticado y las condiciones de vida durante los recorridos eran difíciles. Salir en patrullas no era sinónimo de vivir una aventura épica.

Habían personas que se resistían a pertenecer a las patrullas, pero Sendero empezó a obligar. Las armas que portaban las patrullas fueron bombas fabricados de lata y pólvora, cuchillos, lanzas. Estas patrullas al regresar traían dinero, ropa, repartiéndose solo entre los que habían salido (CVR. BDI .P6. Notas de campo P64, Accomarca, junio de 2002. Varón en la época de la violencia era estudiante del colegio General Córdoba)

Cuando salían en las patrullas, la gente sufría en frío, hambre, y el temor de ser sorprendidos por el ejercito (no tenían suficiente armamento para defenderse) cuando llegaban a la comunidad contaban a su parientes del sufrimiento y del riesgo que estos corrían, ya en la comunidad los jóvenes eran atendidos de las heridas que habían sufrido y de otros males que aquejaban (bronquios) en esas filas solo dos chicas participaron estas tenían como armamento tan solo las bombas caseras (CVR.BDI .P65 Notas de campo P65, Accomarca, septiembre de 2002.Varón)

Otra misión de la FP fue tomar por asalto a los pueblos para organizar en ellos *comités populares*, tal como ocurrió en Accomarca:

En la plaza nos reunió. Estaban todos armados. No recordamos la fecha. Estaban encapuchados. Los niños temblaban de miedo así como las mujeres. Nos decían, si no asistíamos que nos matarían con hacha, cuchillo. Así rodearon la plaza y hablaban que al entrar al comunismo vamos a estar alimentado por igual. Comeremos de una sola olla. Nos vestiremos con una sola ropa. El gobierno no nos recuerda. Nos está dando comida de perro, del chanco. A este pueblo haremos formar e iremos adelante. Subiendo al cedro empezó a predicar. Después de hacer entender a la gente, empezaron a nombrar a la gente. Ya al irse nos avisaron que no nos teníamos que mover a ninguna parte (CVR. BDI P30)

Por lo general, en las zonas que se *liberaban*, las autoridades tradicionales eran destituidas. En muchos casos, se les pedía la renuncia o se los amenazaba con la muerte para que dejaran el cargo. En Pujas, las autoridades fueron acusadas de *soplones* por el PCP-SL y asesinadas en 1981. En el caso de Accomarca, sin embargo, las autoridades originales no son reemplazadas supuestamente para confundir a la base militar de Vilcashuamán: «Las estrategias era adoctrinar a los representantes de la comunidad para despistar a la base de Vilcas que constantemente pedía informes sobre la situación del pueblo. La gente iba a presentarse a Vilcas» (CVR. BDI Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca, Vilcashuamán, varón 58 años).

Un poblador afirma que las comunidades de Concepción, Carhuanca, Huambalpa y Accomarca fueron también zonas liberadas (CVR. BDI P8). A ello se suman las *bases de apoyo* en Parqo, Pujas, Saurama y Huaccaña (CVR. BDI P152)

Los pobladores que no «estaban llamados en las patrullas», eran designados para producir en las chacras, organizados en cuadrillas para los trabajos de siembra y cosecha. Un tercer grupo estaba encargado de realizar la vigilancia y proveerse de materia prima para la fabricación de material explosivo, como latas de leche o atún. Había vigías en los cuatro lados del pueblo. Estos dos últimos grupos de pobladores pasaban a formar lo que el PCP-SL denominaba la *fuerza local*.

A diferencia de lo que puede haber ocurrido en otras zonas del departamento —como Chungui, por ejemplo— en esta zona no existieron parcelas de producción comunal, destinadas a beneficiar al grupo. La producción se hacía en parcelas familiares. En la siembra y la cosecha se ayudaban en *minka* y una vez recogidos los productos la producción era para la familia que usufructuaba del terreno. En Accomarca, los mandos del PCP-SL establecieron un sistema de responsables de producción por barrios. Los comuneros de cada barrio debían cultivar sus chacras y turnarse en *minka* para ayudar a sus vecinos. Este sistema se utilizaba para la cosecha y la siembra, pero el resto del tiempo cada familia se hacía cargo de su chacra.

Sendero había logrado organizar al pueblo en cuadrillas, para trabajos de sembrío y cosechas, en estas actividades todo el pueblo participó. Los trabajos eran realizados en ayni y minka, pero era para el consumo individual (familiar) y no comunal... (CVR. BDI P67. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002, varón, agricultor)

Con Sendero empezaron a sembrar las tierras de la gente en minka, divididos en grupos estaban dirigidos por personas encargados de poner orden e informar al jefe de barrio. (CVR. BDI P67. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002, varón, agricultor)

De esta manera, el PCP-SL simplemente fortalece la parte comunitaria de un sistema de trabajo ya existente: «Trabajábamos de forma conjunta la chacra de tales, tales, tales, acabamos pero lo que sacábamos era para cada uno. Por ejemplo lo que sacaba de mi chacrita era para mí, no era para ellos y así era con todos» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P76, Huambalpa (Vilcashuamán), agosto de 2002, varón, docente).

Sin embargo, una parte de la producción debía darse al PCP-SL en forma de *colaboración* para la alimentación de los visitantes. En Huambalpa y en Pujas el sistema practicado fue que cada familia cultivaba su chacra y proporcionaba una *colaboración* al PCP-SL, que consistía en dar *molidos*, granos y tubérculos. En el caso particular de Pujas, algunos entrevistados afirman que el PCP-SL propuso repartir las chacras de quienes tenían más tierras, lo cual afectaba directamente

los intereses de los mandos del PCP-SL de la localidad, que se opusieron y por ello fueron ejecutados en 1982.

Cuando aumentó el desplazamiento de algunas familias hacia la ciudad de Vilcashuamán y Huamanga, la población en Pujas se redujo de tal manera que el PCP-SL llevó campesinos de Umaru a Pujas en 1986. En estos casos, el PCP-SL no se apropió de las chacras de personas que abandonaron la comunidad o de quienes fueron asesinados, que fueron tomadas por estos comuneros trasladados, quienes las cultivaron y entregaban parte de la producción al PCP-SL.

2.1.3.5. Orden y justicia en el *nuevo Estado*

Se formaron los Comités Populares en los diversos lugares. ¿Qué representa el Comité Popular? El poder de la masa y bien nos dijo en alguna ocasión el presidente Gonzalo, si estamos entregando poder al pueblo, nos tenemos que sujetar también nosotros a ese poder, no podemos obrar como nos dé la gana en el campo y me alegro de que eso hubiera ocurrido, porque en algunos lugares como en el Pampas cuando alguien de las fuerzas del ejército guerrillero popular se portó mal, el Comité Popular tomó medidas y cuando se planteó al propio presidente Gonzalo y se nos comunicó, nos dijo tienen derecho a ejercer ese poder y si no han respetado a la masa tiene que agachar la cabeza ante ello. (Osmán Morote, Penal Yanamayo, Puno 19/06/2002)¹⁰

Pero además lo reitero eso está dentro de lo que expresamente desde el comienzo definimos y establecimos en nuestras normas de disciplina. Hoy no lo voy a detallar, solo quiero destacar dos, partiendo de que no se toca ni una aguja ni un hilo de las masas, nos se les malogra sus chacras. No se comete abuso con las mujeres. Eso es sancionado y luego no se tortura a los prisioneros. Si en algún momento ha habido un hecho de tortura o de un acto que si lo ha habido, inmediatamente lo hemos advertido y corregido, porque obviamente Dr. en un acto de guerra, en cual los campesinos se levantan en contra del abuso de los gamonales, centenaria explotación, muchas veces el odio concentrado se presta, el problema nuestro era explicarle de que el problema no era simplemente un afán de venganza, pero no íbamos a simplemente sancionar a la persona que lo hizo. El problema era educarlo en el sentido de orientar correctamente toda esa acción. (Osmán Morote, Yanamayo, 19/06/2002)

Estas citas contrastan con las manifestaciones de los pobladores. Cuando el PCP-SL ingresa en la cuenca del Pampas, la gran propiedad latifundista, basada en un sistema semi-feudal, no existía. Entonces, hay que poner en duda la afirmación de Morote sobre el hecho de encontrar campesinos que «se levantan contra el abuso de los gamonales». No fue el gran poder terrateniente lo que azuzó a las huestes de comuneros de esta parte de la región en contra del estado. La atracción hacia el PCP-SL surgió porque se presentó como una oferta de circuito alternativo de movilidad social, entre otros factores.

De acuerdo a las declaraciones obtenidas, es cierto que en los primeros tiempos del PCP-SL, antes del ILA, se respetó el principio de «no tocar ni una aguja, ni un hilo de la masa». Los testimonios de Huambalpa, por ejemplo, señalan la existencia de un mando local (AP) que ejecutaba a las personas en forma arbitraria y sin el consentimiento del PCP-SL. Peor aun, este

¹⁰ Esta entrevista fue tomada el 25 de junio del 2002 al final de la primera visita de la CVR-Sede Surandino.

mando aprovechaba su poder para obtener bienes y productos de los comuneros, además de demandar favores sexuales a las mujeres jóvenes de la comunidad. Cuando la gente de la comunidad comunicó estos hechos a los mandos que venían de afuera, éstos capturaron a AP, lo llevaron al cementerio donde le hicieron cavar su tumba y lo ejecutaron con un disparo en la cabeza.

Desde el punto de vista de Morote, la ética del PCP-SL contempló un espacio para la rectificación y el perdón. Sin embargo, en los hechos, encontramos un férreo *sistema de justicia* donde no se toleraba el error y simplemente no existía oportunidad alguna para la reconciliación. El PCP-SL sólo entendía dos cosas: se estaba a favor de ellos o, de lo contrario, se tenía que morir.

Los *soplones* eran identificados por pobladores-espías designados por el PCP-SL. Cuando ocurría una incursión del ejército, se le encomendaba a campesinos de la comunidad — generalmente mujeres— a vigilar quiénes hablaban con los militares y quiénes no. Los primeros eran acusados de *soplones* ante los mandos políticos y militares del PCP-SL, los cuáles a su vez tenían la responsabilidad de informar a un mando superior. Este mando político, que venía de afuera, reunía a toda la comunidad en una asamblea pública y comunicaba a los comuneros la presencia de un *soplón* en el grupo, luego de lo cual se consultaba supuestamente a la población qué castigo debía darse a esa persona: «Cuando venía esa gente de afuera, él daba cuenta y los otros decían: «a ver ¿qué ha pasado?, ¿cómo están?» y la gente decía «esto pasó, esto fue así, esto fue así» y los que venían preguntaban: «¿y qué dicen?», entonces respondían «¡Hay que ejecutarlo!». O sea la misma gente del pueblo vendía a sus compañeros de barrio». (CVR. BDI Entrevista informal P113, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), autoridad)

Al igual que en otros casos, la información recogida particularmente en Huambalpa y Accomarca, indica que la estrategia del PCP-SL se superpone a conflictos familiares, exacerbándolos, por los que no es raro encontrar el caso de miembros de un mismo núcleo familiar quienes víctimas de celos, rencores o envidias, se acusan mutuamente ante el PCP-SL y ante los militares.

Cuando Sendero estaba dentro del pueblo, la gente se empezaba a acusar («entre nosotros»). Es así que acusan uno de los paisanos a Q.C. por haber participado en el izamiento de bandera (bandera peruana)... (CVR. BDI P64. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002, varón, 30 años agricultor, en la época de la violencia era estudiante del colegio General Córdoba)

Pero aquí basta que uno se burlaba de alguien, que te acusen por tenerte cólera de envidia, ya era para que te maten (CVR. BDI Entrevista informal P113, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 40 años, autoridad)

Como acto de revanchismo, con el acto de resentido, algo resentido ya. Con quien, contra quien van a luchar con sus propios paisanos...Ya, el otro también igual, por venganza ni siquiera era por cuestión político, ni siquiera cuestión del partido, era cuestión de venganza de terreno o de ciertos intereses, por ejemplo, por aquellos que han unido al Sendero eso

mayormente ha pasado. O sea que desde el 84 la gentes de Sendero, ya no se unía así por convicción, no por ideología sino que por así por venganza (CVR BDI P153, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón 36 años, profesor trabajador de a USE de Vilcashuamán)

Solamente por envidia hacen eso, hasta inclusive mis primos se han metido allí a la fracción de Sendero, solamente para dañar a mi familia (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P161, junio de 2002, Vilcashuamán, varón 50 años, es ex director de la USE de Vilcashuamán, según los comentarios fue militante de PCM SL hasta que asesinaron a su familia)

2.1.3.6. La primera víctima de la guerra

El conflicto armado interno se inició propiamente en la región con la incursión del PCP-SL en la hacienda Ayzarca, fundo de extensión pequeña que no había sido afectado por la Reforma Agraria, el 24 de diciembre de 1980. Un grupo de 200 a 300 personas fueron reunidas en Pujas para asaltar durante la noche a la hacienda vecina de Ayzarca, donde asesinaron a Benigno Medina, el propietario, y a su mayordomo, el señor Morales, en forma cruel. Su esposa María Zea y su hijo lograron escapar. Al día siguiente, llegaron policías de Vilcashuamán, quienes interrogaron a los comuneros pero no hubo detenidos. Medina se convirtió así en la primera víctima mortal del conflicto armado interno.

Luego de asesinar a Medina, la columna del PCP-SL no ocupó la hacienda ni realizó reparto alguno de tierras. Entonces, si no buscaban tierras, ¿con qué finalidad fue atacada y por qué mataron a Medina con tanta crueldad? Detrás de las declaraciones de Osmán Morote a la CVR vislumbramos una respuesta:

Yo le digo somos responsables, por ejemplo, de la acción en las haciendas del Pampas. Si lo asumimos y ahí en esa acción murió el hacendado de esa hacienda, ahorita no recuerdo, de Ayzarca. Yo le diría que si y hay responsabilidad y una exigencia y una demanda de las propias masas de sancionar a una de las personas que tenía larguísima situación no sólo de humillación sino de tortura, de opresión en reiteradas veces contra la gente. Entonces yo entiendo de que los familiares de los dueños de Ayzarca transmitan eso. Lo hemos planteado, lo reitero públicamente en los documentos dice, hemos hecho la acción de saludar, esa es nuestra responsabilidad [...] Lo que tendría que decir es explicarle por qué se obró en cada uno de los casos, sólo le planteo una cosa por lo general creo de que en el caso - y en el de 100% de los casos cuando se han hecho- se han dado sanciones a determinadas personas, previamente ha habido una reunión con las masas de tal manera de que la propia población del lugar o la inmensa mayoría de ellos han planteado una decisión de ese tipo. Luego nosotros hemos asumido como responsabilidad [...] Si se acepta lo referente a la autoridad del estado peruano como la única que tiene que establecer esas leyes, hemos estado en guerra y así como el estado pretendía aplicar una política, una justicia, nosotros estábamos desarrollando y creando un nuevo estado. Lo que en todo caso habría que juzgar es si se ajustaba o no a las demandas a las exigencias de la propia población. Nosotros nos hemos planteado el problema de que en los casos en los cuales se afectara seriamente al interés de las masas, había incluso que llegar hasta la sanción de esas personas... (Yanamayo, 19/06/2002)

Es decir, desde la lógica del PCP-SL, son supuestamente las masas las que tomaron la decisión de eliminar a Medina por el hecho de ser la encarnación de una larga tradición de «humillación, tortura y opresión». Morote equipara en su discurso a hacendados, gamonales y fuerzas armadas, que resultan siendo parte de las mesnadas, dueños de vidas, abusivos, saqueadores y destructores. En la entrevista en mención, Morote califica a los generales jefes político-militares como los «nuevos amos, dueños de vidas y haciendas, redivivos gamonales engalonados de horca y cuchillo». Tal como se explica en el capítulo de historias regionales, Cangallo y Víctor Fajardo, en la década previa a la entrada del PCP-SL, eran fundamentalmente un territorio compuesto por comunidades campesinas con una frágil y precaria economía, salpicado por unos cuantos fundos y cooperativas en quiebra. Ayzarca era un fundo, cuya situación y dinámica distaba en gran medida del gran latifundio. La mayor parte de informantes, recuerdan a Medina como «una persona generosa», además de haber sido un «gran amigo», «teníamos una relación armoniosa, respetuosa», «bien humano, bien cristiano, comprensivo, colaborador» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas, esposo de Marilu Rua) y «un señor que nos dio la mano en el momento más necesitado» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas). Es más, existe una calle en Pujas con su nombre: «La calle tronca que pasa por abajo que viene de Vilcas, le hemos puesto su nombre: Benigno Medina. Avenida Benigno Medina porque se la merece» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas).

Medina es recordado por haber sido belaundista, promotor de la construcción de carreteras, productor de caña y agua ardiente. Para la población femenina la situación es diferente. Los recuerdos en este caso se tiñen de amargas acusaciones que nos transmiten un comportamiento que cuenta con el consentimiento de la población masculina. De acuerdo a Rosa, Benigno Medina «tenía la costumbre de acostarse con mujeres que eran sus propias clientas» (CVR. BDI Notas de campo P150, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán), mujer 55 años, nuera de Pujas, partera que conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por PCP-SL para que entregara a sus hijas al partido, por ello se retiró de la zona). Más aun, «Los esposos de las mujeres sabían lo sucedido con Medina, pero la cantidad de alcohol que recibían un poco más de lo normal, hacía que no se rindieran más cuentas. Los hombres cambiaban a sus mujeres por trago» (*ibidem*). Conociendo la lógica del PCP-SL, nos parece extraño que ningún entrevistado identifique el doble *error* de Medina: concentrar propiedad que él no trabaja directamente, pero igualmente producir una sustancia asociada a los vicios de una *clase corrupta*. En estas circunstancias, no sorprende que los cultivos de caña hayan sido quemados la tercera vez que es tomada la hacienda (CVR BDI Entrevista en profundidad P152).

En las entrevistas hemos encontrado indicios de un discurso ambivalente y contradictorio cuando se trata de explicar tanto la presencia y adhesión al PCP-SL en la zona, como caracterizar

los vecinos *notables*, autoridades y hacendados. Este hecho hace que la labor de identificar y entender quién y por qué fue atraído por el PCP-SL haya sido particularmente compleja. Lo que sí queda claro es que las declaraciones están moldeadas por el miedo y la desconfianza. Existen, en este sentido, distintas razones por las cuales se comete este crimen. Las diferentes explicaciones de lo ocurrido involucran en diverso grado a los pobladores de las comunidades circundantes: «Ante la muerte de Medina mucha gente reaccionó favorablemente, decían *allinta ruachun* (bien hecho), mientras otros decían qué pena, porque lo habrán matado si no era malo... (CVR. BDI Notas de campo P149, agosto 2002, Pujas (Vilcashuamán), mujer 53 años, comerciante).

La mayor parte de entrevistados que aceptan la participación de los pobladores en este crimen, explican que éstos no tuvieron la culpa directamente porque fueron engañados o dopados con licor, drogas o pastillas. A partir de las declaraciones de nuestros informantes identificamos distintas posiciones que nos revelan no solamente el caso de una comunidad dividida, fragmentada, donde no cabe la imagen de bucólica. Igualmente en estos relatos contrapuestos constatamos la existencia de una comunidad atemorizada de ser sindicado como simpatizante del PCP-SL. Es, por lo tanto, el ejemplo de muchas otras.

2.1.3.6.1. Los autores

- a) Los autores fueron básicamente visitantes foráneos que *engañan* a la población.

La decisión de tomar Ayzarca no solamente fue externa a la comunidad, sino realizada por un grupo foráneo:

He escuchado rumores que en Santa Rosa por Concepción habían personas que estaban preparando. Había gente que venía y hacían reuniones años antes en el año 80. Vienen a matar a un hacendado, a Benigno Medina quien vivía a 2 kilómetros hacia abajo cerca al río Pampas. Venían con caras bonitas, te hablaban y decían que estaban luchando por los pobres [...] con esas palabras confundieron a la gente pobre, a los campesinos, quienes no sabían de política y engañaron a la gente (CVR. BDI P413. Taller con desplazados, Huamanga (Ayacucho), octubre de 2002).

- b) Los autores fueron principalmente comuneros de la zona.

Algunos relatos indican que «los pujinos fueron en su mayoría los que participaron en el asesinato de Medina». Un entrevistado detalla incluso quiénes eran: «El PCP-SL asesina a Medina con apoyo de muchos comuneros, entre ellos, los pujinos pero, estos eran más humildes, gente analfabeta. Sin embargo habían también intelectuales, hijos de Pujas como RR, AP y los hermanos MC y JC». (CVR. BDI Notas de campo P151, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 38 años).

2.1.3.6.2. Las razones

a) ¿Acto de justicia?

El asesinato de Medina fue en defensa propia, sea porque representó al gamonal abusivo o porque atacó primero. Esta interpretación se ubica en el plan del PCP-SL de batir el campo y ajusticiar a autoridades y terratenientes abusivas, del *viejo orden*: «A Medina lo matan en el año 80 ¿qué pasó? ¿cómo fue? Licor fue un poco, lo que nos estaba contando la gente. Era, ya vamos a matar al hacendado, vamos a tomar posición de la hacienda para repartir» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P132, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 55 años).

El PCP-SL se presentó como la posibilidad inmediata de acabar con abusos y desarrollar un sistema más justo e igualitario como lo hemos señalado líneas arriba:

Entonces, una vez llegado al poder, las tierras eran o sea compartidas por todos, para todos, tierras para todos o sea para todos por igual. ...No deberían existir un pobre y un rico, sino que todos por igual. Esa era la pretensión de ellos. (CVR. BDI notas de campo P64, agosto 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón, 30 años, agricultor, en la época de violencia era estudiante del colegio General Córdoba)

El discurso senderista de igualdad era lo que más atraía a la gente: «seremos iguales, tierras grandes y chicas se nivelarán» (CVR. BDI Notas de campo P64. Junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón 30 años, en la época de la violencia era estudiante del colegio General Córdoba)

En este mismo sentido, otro informante señala que el PCP-SL no tuvo intenciones de matarlo, pero que se ven obligados a hacerlo porque «lo encuentran en estado de ebriedad y este intentó defenderse con su arma» (CVR. BDI notas de campo P150). Además de ello, Medina fue advertido previamente pero «no se ha retirado, entonces ellos ya hicieron venganza» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán), varón 60 años, retornante de Pujas).

b) Terror y sometimiento

Según algunos testimonios, los comuneros fueron sometidos a la fuerza por intermedio del terror. Dice un poblador que la población fue constreñida a participar en este asesinato, ya que el PCP-SL «valiéndose de las armas, obligaron a la comunidad contra su voluntad» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán), varón 60 años, retornante de Pujas).

Un testigo menciona que fue capturado por el PCP-SL junto con otros jóvenes en circunstancias poco claras, donde: «no sabíamos qué hacer. Se reunieron a unas 200 a 300 personas que fueron de Pujas con dirección a la hacienda Ayzarca. En esa ocasión a todos les dieron carne, recogieron fruta y caña» (CVR. BDI Notas de campo P150, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 36 años, profesor trabajador de la USE de Vilcashuamán).

c) Fue un acto involuntario

Encontramos también explicaciones donde los pobladores narran que han actuado sin tener plena conciencia de sus actos: «Ellos han actuado mediante la pastilla [...] no sienten nada. Ni

padre, ni su madre no existe. No tenía miedo a matar a nadie [...] los senderistas eran personas anormales en estado de drogadicción» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán) varón 60 años, retornante de Pujas).

d) Rendición de cuentas

Sólo en un caso, entre los testimonios, se interpreta este acto sanguinario como un afán de venganza. En efecto, de acuerdo a un dirigente campesino, este hecho se originó por conflictos entre Benigno Medina y trabajadores de Pujas, de Sarca y también de Parco «porque Medina había asesinado a tres comuneros de Pujas a golpes, de ahí que los campesinos habían entrado y habían asesinado» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P670, varón 73 años, dirigente campesino de la zona de Vilcashuamán, presidente de la confederación campesina del Perú en los años setenta).

2.1.4. Ataques al puesto policial de Vilcashuamán

En Vilcashuamán —que nunca llegó a ser declarada ZL por el PCP-SL— estudiantes del General Córdova atacaron el puesto policial del distrito el 31 de marzo de 1982. No fue la primera vez que el puesto era agredido. Anteriormente, se habían movilizado contingentes de Vischongo, Pomacocha y otros lugares para expulsar a los efectivos policiales y al director del Núcleo Educativo que había recesado profesores participantes en la huelga del SUTEP.¹¹ Los alumnos rompieron puertas e hicieron pintas. Si estos ataques fueron posibles, tal como indican las entrevistas, sólo cabe pensar que el puesto policial era cubierto por pocos efectivos, que realizaban su trabajo en las peores condiciones. En efecto, nuestros informantes afirman que el destacamento policial no era suficiente para el área que debían cubrir. Durante esos años (1981-1982), salvo escasos patrullajes, la policía no tuvo presencia importante en los distritos ni comunidades aledañas a Vilcashuamán. Cuando se indica que hubo un ataque al puesto policial, debemos tener en cuenta que éste formaba parte de un conjunto de otras instituciones del Estado ubicados en la misma casona. Esto significó que no todos los inquilinos que compartían el espacio eran efectivos de la policía. Por la información recogida sabemos que profesores foráneos y policías pernoctaban juntos en un mismo lugar. En suma, dicho edificio era un símbolo contundente del *viejo Estado caduco* y abatirlo de la forma que fuere, de acuerdo al PCP-SL, era necesario.

El punto culminante de los ataques al puesto policial de Vilcashuamán fue el atentado perpetrado el 22 de agosto de 1982, cuando un grupo de senderistas armados ingresó a Vilcas y bombardeó dicha construcción toda la noche. El saldo de esta incursión fue de siete policías muertos y varios heridos. Este sería la peor ofensiva que sufriría el puesto policial luego de los embates perpetrados el 31 de marzo y 25 de julio del mismo año. El local municipal y el puesto policial quedaron completamente destruidos. A la mañana siguiente del ataque, la prensa nacional

¹¹ Gorriti (op cit, página 87)

llegó a Vilcashuamán acompañando al Ministro del Interior Gagliardi, el general de la GC Humberto Catre, jefe de la GC. Presidía la comitiva el presidente Fernando Belaunde, quien consultó a la población sobre la instalación de una «base de *sinchis* para proteger a la población».¹² El resultado final fue la instalación de una base militar en Vilcashuamán en 1983.

2.1.5. ¿Entre dos fuegos?

Si inicialmente el PCP-SL se había visto favorecido por el enganchado con un discurso radical ya existente en la zona y el ambiente de expectativas frustradas, con el tiempo la población se sitúa literalmente entre dos fuegos.

Mi vida no vale nada. Viene uno te mata. Viene el otro, te pega (viday carajo valenñachu, quknin qamun wañuchin, quknin qamun payakun) (CVR. BDI notas de campo P17, informante anónimo)

Acaso éramos como gente allí estábamos como en nuestros sueños [...] los de Sendero nos mataban, los militares nos mataban, quien ya pues nos miraría (todos recuerdan y lloran) (CVR. BDI grupo focal Loqllapampa P30, junio de 2002, Accomarca, Vilcashuamán)

Para algunos, el momento de definirse por uno u otro bando ocurría cuando la circunstancia lo exigía, bien sea por protección y defensa de la vida —como en el caso de algunos miembros de los comités de autodefensa— o por venganza cuando sufría la pérdida de algún familiar.

Yo estaba en la lista negra (del PCP-SL). Por esa razón, yo —con capricho— yo me he metido como comando autodefensa. (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón 50 años, ex rondero de Huambalpa, actualmente es comerciante)

Cuando lo mataban los militares, con ese resentimiento se comprometían y algunos ya, también, cuando lo mataban los senderos a sus familiares, a los militares siempre se comprometían. (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P162, septiembre de 2002, Vilcashuamán, mujer 48 años, líder local de organizaciones de base de mujeres en Vilcashuamán)

En un grupo de cinco mujeres de Accomarca que realizó un balance con la CVR de la actuación tanto de las Fuerzas Armadas como del PCP-SL, los militares reciben las peores calificaciones. Mientras el PCP-SL fue símbolo del miedo y el terror selectivos, los militares constituyeron una amenaza y peligro perenne, sobre todo para la población femenina. Es especialmente alrededor del caso de la masacre de Accomarca que hemos encontrado las

¹² En términos generales, constatamos que entre la población civil estudiada no se hace una clara distinción entre militares y *Sinchis* que junto con los *Llapan Atic* constituyen una fuerza especial de las fuerzas policiales (La primera perteneció a la Guardia Civil y la segunda a la Guardia Republicana) En varios testimonios, indistintamente se les denomina a los militares, *Sinchis*.

referencias más descarnadas referidas a crímenes, abusos y violaciones de parte de los militares como lo expresa el siguiente testimonio:

Los militares venían algo de cuarenta o cincuenta con perros. Así llegaron a mi casa como treinta. El resto ya también estaba reuniendo a toda la gente diciendo asamblea. La mayoría nos escapamos al monte. Han quedado muerto algo de noventa personas, ancianos, niños, mujeres embarazadas. A los bebés los arrojaron en medio del fuego como si fueran sapos. Reunieron a toda la gente. Luego comenzaron a reventar bala. Así como los ha llevado allá a casa de mi madre, pero antes las mujeres violaban en la pampa Chilcamonte [...] Yo estaba viendo desde Salvia-ayuy. Ahí en la puerta de nuestra casa comenzaron a clasificar mujeres, varones. A los varones a la casa de ichu. A las mujeres a la casa de teja. Comenzaron a disparar por la puerta. Igual a las mujeres. Las mujeres y varones gritaban, pero seguían disparando. Cuando ya no escuchaban gritos, empezaron a quemar las casas. Después de todo esto, estaban festejando. Hacía la fiesta en la casa de TP. Tenía trago, caña, vermú. Ahí bailaban después de matarlos. Luego se fueron hacia Pitecc y se fueron a Vilcas. Al día siguiente y los días siguientes continuaban viniendo. Los soldados cada vez que venían se comían una vaca, una oveja que ya no tenían dueño. Era total silencio. Los perros nomás aullaban. (CVR. BDI Notas de campo, P23, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón 65 años, testigo de la masacre de Accomarca, sus familiares murieron en la masacre)

De igual modo, los profesores tampoco guardan un buen recuerdo de la presencia de los militares en la zona. Dos informantes nos rebelan que en el mes de mayo de 1989, los militares detuvieron a 33 profesores de distintos lugares y los llevaron a la base de Vilcashuamán a cargo del teniente Oso.¹³ Allí se quedan aproximadamente una semana. Diez fueron trasladados a Pampacangallo y cuatro de ellos a la base de Huamanga. En todos estos lugares, son torturados reiteradamente en las bases militares de Ayacucho:

En Vilcashuamán nos colgaron arriba, amarrados las manos atrás. Había un palo y nos empujaron a tirar palo, punta pies, puñetes, con piedra nos tiraban cuando estábamos colgados. Cuando se cansaron, nos sueltan a un pozo de agua. Así amarrado a cinco metros de profundidad con agua [...] Así semi muerto nos sacan, nos llevan a un cuarto especial y nos amarran del cuello, de la cintura, de las manos como crucificados [...] (en Huamanga) nos castigaban feamente. Nos pisaban en la cabeza. Tenían tipo martillo. Con eso te daban en la cara [...] Los cuatro nomás en un ambiente nos dejaron y a las tres de la mañana otro grupo entra con aparatos y nos cuelgan. [...] Ese aparato, al otro mi pata le han puesto al ano. A mí me puso en las orejas y empiezan dar manijuela [...] Yo quedé muerto.

¿De qué los acusaban?

Por el hecho que trabajábamos en zonas rurales y además habrá habido alguien quien informaba en contra de nosotros. Hasta ahora no sabemos [...] Yo cuando llegué en el año 72, ya habían grupos políticos en el Córdova. Me invitaban a reuniones. Asistía. Si, asistía [...] Yo era anti-facista. Esa fecha vi dos grupos: antifacista y Sendero Luminoso [...] entre grupos nos agarrábamos, entre partidos, en trabajos, en faenas escolares. Eso era en Vilcashuamán y cuando había paros, huelgas, también salíamos en contra. Si el otro no participaba, seguro son gobiernistas, oportunistas. Así entonces teníamos que participar obligado. Hasta 1976 no había problemas graves. Era más o menos 78, esos años. Los alumnos salían ya casi de frente a las plazas, hablando de lucha armada y quemaban los puentes, bloqueaban las carreteras. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P147, agosto, varón, 60 años, profesor alcalde de Pujas, estudiante en la época de la violencia)

¹³ La Base de Datos registra varios otros casos de tortura donde también se menciona la presencia del teniente Oso. Ver testimonios 204452, 204470, 204600, 204461, 204377, 201033, 201057, 203931 y 201005.

De acuerdo al grupo de mujeres de Accomarca antes mencionado, el PCP-SL «es el que hacía a la gente un maltrato físico, psicológico [...] nos ha dejado alteraciones nerviosas», pero «eran tranquilos, no robaban, ni violaban a las mujeres». El PCP-SL «castigaba (con azote) a los hombres borrachos, que maltrataban a sus esposas» (CVR. BDI grupo focal de mujeres P48, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán)). Los militares, en cambio «han dejado a las chicas con hijos» y «los de Sendero (en cambio) no» (*ibidem*). Pero el PCP-SL también asesina, aunque de manera selectiva, solamente a «a gente que no querían participar. A las autoridades. A ellos les decían que eran los que llevaban la ley del gobierno [...] El deseo de ellos era que no existan autoridades» (*ibidem*).

En contraste a los hechos reportados sobre los militares, los pobladores varones se refieren a sucesos sanguinarios donde mujeres integrantes del PCP-SL fueron las protagonistas, como la camarada *Marcela*. El testimonio 201057 indica que ella ordenó la tortura y muerte de VEG que trabajaba de panadero para la base militar de Vilcas. El 20 de noviembre de 1991 por la noche, ingresa la camarada Marcela a la comunidad de Pillucho con varios hombres más. En lugar de encontrar a VEG, encuentran a su hermano, a quien detienen, torturan y matan. La camarada Marcela ordena que «por su hermano, muere ese perro mantenedor de moro allqo». Marcela dispuso primero que «lo ahorquen con hilo nylon». Seguidamente «con un cuchillo le cortaron el cuello y le sacaron la lengua». Posteriormente, refiere el testimonio, «hicieron vivas y obligaron a la comunidad de Pillucho para que lo entierren al día siguiente» (CVR testimonio 201057).

2.1.5.1. La base militar de Vilcashuamán y la espiral de la violencia

Cuando el EP instaló una base en Vilcashuamán, en 1983, una de sus primeras órdenes fue que todas las autoridades debían de reportarse en ella, enviando informes en los cuales constara que eran las autoridades de la comunidad.

Sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la zona, hemos encontrado varios relatos que resaltan matanzas indiscriminadas. Nos referiremos solamente a dos. El primer caso nos revela que, antes de la masacre de Llocllapampa, más conocida como la masacre de Accomarca, hubo otras que no han sido dadas a conocer por los medios de comunicación.

2.1.5.1.1. El asesinato de once miembros de una familia en Vilcashuamán el 2 de septiembre de 1983

Existen varias versiones sobre las causas de la masacre de una familia en Vilcashuamán en septiembre de 1993, pero todas coinciden en señalar que fue el estudiante *Mauro*, hermano del

profesor GC, que los delata torpemente un día que se había embriagado. La versión afirma que MC llegó borracho a la comunidad de Chiara (sic) y

[...] sobre la torre de la Iglesia comienza a doblar la campana y toda la gente se reúne y comienza hablar ¡esto es la lucha armada! ¡Qué viva Mao! En eso uno de los comuneros al toque corrieron con caballo a avisar a los militares de Vilcas. Vinieron y capturaron a ese C, terrucos de mierda porque tienen que hablar esa cojudez [...] Como estaba huasca habló y lo han llevado casa por casa (CVR. BDI Notas de campo P28, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón, 70 años, autoridad en la época de la violencia y testigo de la masacre de Llocllapampa)

Un segundo informante señala que *Mauro* era músico y «cuando estaba borracho en Vilcas, había hablado de Sendero en la comunidad. Los militares se dieron cuenta y lo alcanzaron en Churiacuto, donde le preguntaron por los líderes senderistas y lo exigieron que los entregue» (CVR. BDI Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón 58 años, primer sanitario de la posta, llega en 1985).

Una tercera versión lo convierte en el *profesor Mauro* que «había sido detenido por la gente en Churia y entregado a los militares en Vilcas y ellos seguramente lo habrían golpeado y habló que en Accomarca hay terrucos» (CVR. BDI relato de testimonio P26, agosto de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón, 38 años, comerciante, presunto ex integrante del PCP-SL).

Finalmente, disponemos de un cuarto testimonio que relata que la noche del 1 de septiembre de 1983, el *profesor Mauro* había viajado a Vilcashuamán, donde se puso a beber licor en una tienda. En un momento, una joven presente de las chicas le comentó que su padre había desaparecido. El *profesor Mauro* le responde que sabía el paradero de su padre. Al escuchar esto, otra joven sale de la tienda e informa de la conversación al cuartel. Los militares capturan y torturan a *Mauro* dentro de las instalaciones del cuartel para que revele el nombre de los miembros del PCP-SL (testimonio CVR 201544). Enseguida, los soldados ingresan violentamente a la casa del profesor CQ y disparan indiscriminadamente en su interior, matando a once miembros de una misma familia, entre ellos seis mujeres (una en estado de gestación), tres varones y dos niños de once y tres años de edad, respectivamente.

2.1.5.1.2. Masacre de Llocllapampa (14 de agosto de 1985) e inicio del desenlace para el PCP-SL

Este hecho, conocido como la masacre de Accomarca, tuvo importantes repercusiones a escala local, pues significó el final del control del PCP-SL en Accomarca y el inicio del dominio militar, aunque el PCP-SL no desapareció de la zona como lo demostró a través de incursiones en los anexos del distrito, donde asesinó a quienes consideraba como traidores. Así sucedió en 1990, por ejemplo, cuando los puestos policiales de los distritos de Huambalpa, Carhuanca y Vischongo se

retiraron, «inmediatamente los terroristas han entrado. Empezó a quemar el Concejo» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuaman), varón, 50 años, ex rondero de Huambalpa).

Los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la masacre de Accomarca casi un mes después de haber sucedido. Fue el portavoz del PCP-SL *El Diario* que, en primer lugar, difundió la noticia el 11 de septiembre de 1985.¹⁴ La prensa en ese entonces estaba enfocada en condensar el entusiasmo que el flamante gobierno de Alan García Pérez había despertado en la población peruana. A ello se sumaba la noticia de hechos tan contrastantes como la reorganización y moralización de las fuerzas policiales, el caso Villa Coca que involucraba a miembros de la Policía de Investigaciones, y anuncio de la tregua hecha al gobierno por el MRTA. La noticia de la masacre de Accomarca coincide también con el terremoto de México, ocurrido el 16 de septiembre de 1985, que llenó las primeras planas de los medios por varios días consecutivos.

2.1.5.1.2.1. Los hechos¹⁵

Ante la denuncia formulada por el Senador César Rojas Huaroto y por iniciativa del Senador Javier Diez Canseco, el pleno del Senado, en sesión celebrada el día 11 de setiembre de 1985, acordó por unanimidad designar una Comisión Investigadora de los hechos producidos en Pucayacu y Accomarca.

De acuerdo a esta Comisión Investigadora, el Ejército detuvo un grupo de personas en Accomarca que delatan la existencia del campamento del PCP-SL de Llocllapampa. El informe proporcionado por el ejército a esta Comisión enfatiza los aspectos bélicos de este descubrimiento. Según el mismo, en Accomarca a los detenidos «los esperaban sus compañeros con comida» y tenían un túnel en Llocllapampa, donde «hay escondidas dos FAL, dos SIMA y granadas caseras y en otro cueva 3 FAL, un revolver, una granada piña, 15 cajas de dinamita». En un informe militar señala que existe «la compañía Accomarca (del PCP-SL) con un total de sesenta hombres que conformaban los pelotones 13, 14, 15, 16, 17 pertrechada de seis FAL y dos metralletas». Teniendo en cuenta esta información, la base militar de Vilcashuamán dispone de una operación conjunta de varias patrullas, que el día ocho de agosto de 1985 sale hacia varias localidades, entre ellas Accomarca, Accomay, Cayara y Llocllapampa.

El informe del Comando Conjunto a la Comisión Investigadora consigna que una de estas patrullas, Lince 7, comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado, incursiona el 14 de agosto en la quebrada de Huancayocc y «al llegar a un lugar denominado Llocllapampa observa que la gente que estaba reunida, comienza a correr al notar la presencia de la patrulla, por lo que hace disparos

¹⁴ Ver *Caretas* 868, 16 de septiembre de 1985, p. 23.

¹⁵ Los hechos del contexto han sido reconstruidos gracias a material proporcionado por Aprodeh y fichas cedidas por Desco, como también recortes de prensa de la época.

al aire para que se detengan y como no lo hacían, a cinco individuos que se alejaban más, les dispararon eliminándoles». Hurtado divide su patrulla en dos grupos para cercar al resto de los pobladores, consiguiendo capturar a 25 personas, incluyendo cinco niños. Seguidamente comenzó a separar a los hombres de las mujeres y los niños e inició el interrogatorio con la ayuda de un guía traductor (los relatos de los testigos no mencionan la presencia de un guía) que ayudó en «la identificación, determinando que la gran mayoría eran terroristas, ya que fueron encarados con el guía que los conocía». Finalmente, fueron «conducidos a una casa, donde Hurtado ordena a los soldados abrir fuego. Para rematar el acto, arroja una granada de mano al interior de la casa, además de reunir a las cinco personas eliminadas anteriormente y las introduce a otra casa, la misma que también es incendiada». Este informe no menciona el hecho de que los soldados violan a las pobladoras durante la matanza, que hayan seguido a las víctimas con perros o que el crimen haya sido finalizado con una festividad como citamos más arriba.

De acuerdo a nuestras entrevistas, cuando los comuneros se percataron que una patrulla había llegado a Accomarca, los varones adultos y jóvenes, así como las mujeres jóvenes escaparon a ocultarse en huaycos y cerros. Muchos de los comuneros creyeron que —tal como había sucedido en incursiones anteriores— a las mujeres mayores, a los ancianos y a los niños no les ocurriría nada. Todas nuestras entrevistas coinciden en que, tal como mencionamos en el relato anterior, al llegar a Lloqllapampa, los militares reunieron a todos y separaron a los varones de las mujeres. De acuerdo a nuestros informantes, a estas últimas las reunieron en una casa donde las violaron a todas, incluyendo mujeres mayores, embarazadas y niñas. Seguidamente reunieron a las mujeres con los varones en la casa de Cipriano Gamboa, les dispararon y luego les prendieron fuego.

Los testigos de la masacre, que lograron observar los hechos ocultos en los cerros, se organizaron para enviar una comisión a Lima, encabezada por Clemente Baldeón Tecse y Víctor Baldeón Reza, para que denuncie lo sucedido.¹⁶ La acusación llegó hasta el Senado y el Poder Judicial.

Ante el descubrimiento de estos hechos, el gobierno obligó a renunciar al general FAP César Enrico Praeli, presidente del Comando Conjunto el 15 de septiembre de 1985. El 17 de septiembre, el general FAP Luis Cavallerino, nuevo presidente del Comando Conjunto, anunció mediante un comunicado oficial el relevo del general de división EP Sinesio Jarama Dávila, comandante general de la II Región Militar y del general de brigada EP Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de la Sub- Zona de Seguridad Nacional No. 5. En el mismo comunicado, se explica que había sido aceptada la solicitud de pase al retiro de este último. Todas estas remociones no vendrían, sin embargo, acompañadas de un cambio de la estrategia *contrasubversiva* que continuaría produciendo matanzas indiscriminadas hasta fines de la década de 1980.

¹⁶ Véase *Caretas* 868, 16 de setiembre de 1985, p. 23. De acuerdo a informe de la Comisión Investigadora, los testigos entrevistados fueron Clemente Baldeón, Víctor Baldeón, Félix Palacios Ramírez, Alberto Palacios Ramírez y el niño Teodolio Palacios.

Interrogado por la Comisión Investigadora en Ayacucho, el subteniente Telmo Hurtado justificó su actuación explicando que «según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir». Igualmente añade que «uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño... los (terrucos los) comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas... poco apoco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa».

Los sucesos de Llocllapampa del 14 de agosto fueron precedidos por otros operativos ocurridos desde inicios de agosto en Accomarca, Huampalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuamán, Vischongo y Cangallo.¹⁷ A esto se suman las incursiones posteriores que, de acuerdo al Diario de Marka, entre el 8 y 10 de septiembre, las fuerzas del ejército acantonadas en el cuartel Los Cabitos de Vilcashuamán, realizaron en Accomarca para «borrar las huellas de la horrenda matanza» y para ello «asesinaron a siete campesinos, testigos del vandalismo perpetrado el pasado 14 de agosto».¹⁸

En marzo de 1986, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema, entregó los expedientes del juicio a la justicia del fuero militar, que absolvió al teniente EP Telmo Hurtado del delito de homicidio, negligencia y desobediencia, y lo sentenció por abuso de autoridad a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas, que nunca fueron pagados. El resto de militares fue absuelto.

2.1.5.2. Seguridad y fiscalización por cuenta propia

En términos generales, tal como concluye la investigación sobre Comités de Autodefensa, las provincias del sur de Ayacucho, a diferencia de las del norte, se mostraron más renuentes a conformar rondas campesinas antisubversivas. Los testimonios recogidos en este caso, señalan que los grupos de autodefensa en las comunidades estudiadas se forman a iniciativa de la Bases militares de Cangallo y Vilcas: «La ronda nace a la fuerza, organizado por la fuerza militar» (CVR. BDI grupo focal de Estudios en Profundidad P3, junio de 2002, Vilcashuamán).

De acuerdo a P1, los ronderos empiezan a organizarse en 1987. Al inicio no tenían armas y «sólo servían como alarma de la Base» (CVR. BDI Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón, 58 años primer sanitario de la posta, llega en 1985). Asimismo, se señala que «la Base obligó a la formación de ronderos, primero para que cuidaran la base» (CVR. BDI Notas de campo P54, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán), varón, 40 años, profesor, presunto ex integrante del PCP-SL).

¹⁷ Ver Informe de la Comisión Investigadora y el *Diario de Marka*, 18 de septiembre 1985, p. 4

¹⁸ *Diario de Marka*, Lima, 15 de setiembre de 1985, p. 3, sección política.

Es recién, cuando se institucionalizan las rondas a partir del DL 741 de noviembre de 1991 que las Fuerzas Armadas les dan entrenamiento militar y armas tipo Mauser y Winchester.

Un testimonio, refiere de manera bastante elocuente, el apoyo inicial del gobierno de Fujimori para mantener un Comité de Autodefensa (CAD):

Los militares nos preparaban en las instrucciones. Físicamente como se puede enfrentar, como se puede defender, como se puede cuidarse, como se puede parapetarse, como se puede tirar granadas o dinamitas, en cuantos segundos, en cuantos minutos. (CVR. BDI Notas de campo P90, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 50 años, comerciante, ex rondero de Huambalpa)

Este CAD se crea debido a que «no había un puesto policial acá». En otras palabras, la población asume una función que en realidad compete al estado. De otro lado, otros testimonios afirman que también se creó un CAD en defensa de los militares que «tiraban mucho abuso», como forma de control al desempeño de las funciones del Estado mismo.

En muchos casos quienes inicialmente participaron en las rondas, eran militantes senderistas que por venganzas y rencillas familiares, se «voltean» hacia el lado del EP amparándose en la ley de arrepentimiento. (CVR. BDI Notas de campo P90 Agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón 38 años autoridad del concejo, presunto militante de PCP-SL que participó en los cuadros jóvenes de ese grupo)

En 1991 los primeros en conformar las Rondas Campesinas fueron los desertores de SL por resentimientos personales. Esto se organizó con apoyo de los militares; formaron los CAD con los resentidos, especialmente G.R. que se convirtió en el comando... (CVR. BDI Notas de campo P15, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 38 años, profesor director de mujeres, en la época de la violencia, era estudiante del colegio General Cordova).

Entonces a su hermano de G.R. lo mata el Sendero en Huayllán y él también se mete por capricho. O sea trata de organizarse con los ronderos. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P154, septiembre de 2002, Vilcashuamán, varón, 36 años, profesor trabajador de la USE de Vilcashuamán, en los años de la violencia era estudiante y participó en las incursiones del PCP- SL).

Muchos de los que formaron parte de SL se voltearon y formaron parte de los CAD, amparándose en la ley de arrepentimiento (la Ley de Arrepentimiento es de Fujimori, ya en los noventa) A.A., los P., R., L.P... (CVR. BDI notas de campo P98, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán) mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época de la violencia, su madre fue asesinada por el PCM SL en 1983).

Los CAD fueron entrenados por los militares y quedan envueltos en una lógica donde todo aquel que pareciera sospechoso era eliminado sin mayores indagaciones.

[...] cuando conversé con el comando de autodefensa, con el comando Darío, con el comandante Gasparín, cuando informé, me dijo ¡antes que te mate tu tienes que enfrentarte bastante, matando uno, dos, aunque sea mueres. Ahora tu mismo vas a enfrentar. Sino matas, nada, tu vas estar cobarde. ¡Tú estas entregando tu cuerpo a la gente, a esos terrucos!

Empezó a decirme... (CVR. BDI entrevista en profundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 50 años, comerciante, ex rondero de Huambalpa).

Algunos testimonios se refieren también a los abusos conjuntamente cometidos por el Ejército y los CAD.

Solamente venía y malograba ¡Ustedes han sido terrucos! ¡Paj! Lo mataba. En una, ni siquiera venía a explicar. No venía ¿cómo te puedo decir? Hacernos entender de cómo debería ser, sino venían a malograr, maltratar. Muchas cosas se aprovecharon de ahí los ejércitos: violación, robos, saqueos. Hasta los ronderos mismos ya. Después ya cambio poco a poco la ley y ellos tampoco ya no cometieron más error. (CVR. BDI Notas de campo P74, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), varón, 35 años, alcalde de Huambalpa, en la época de violencia era estudiante)

2.1.6. Epílogo

Cuarenta pobladores de Huambalpa retornaron en diciembre de 1985 a su localidad con ayuda de Cáritas. El retorno fue liderado por un profesor apellidado Cárdenas que «dicen que hablaba a la gente para que apoyara al progreso del pueblo y que no se uniera a los senderistas» (CVR. BDI entrevista en profundidad P121, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán), mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época de la violencia, su madre fue asesinada por el PCP-SL en 1983).

Tres meses después del regreso de los pobladores, el profesor Cárdenas fue asesinado por el PCP-SL. Después de este suceso, algunos retornantes abandonan nuevamente la localidad. El grupo que se queda demanda instalar un puesto policial, pero éste se desactiva en 1990 por «los abusos que cometían» (CVR. BDI Notas de campo P98, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán) mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época de la violencia, su madre fue asesinada por PCP-SL en 1983). Tal como hemos mencionado anteriormente, apenas se retira el puesto policial, el PCP-SL ingresa a la comunidad a incendiar el municipio.

Desde 1985, recoge la historia de una población que vive a salto de mata, aún pendiente de ser escrita. Hay un contingente grande de personas que se desplaza, vuelve y nuevamente se desplaza. A pesar de la presencia de las bases militares en Vilcashuamán, Accomarca y Cangallo, el PCP-SL siguió rondando activamente en la zona, como hemos visto, hasta el inicio de los años 90.

2.1.7. Conclusiones

Este informe, sustentado en relatos de los mismos actores, ilustra lo que representó la presencia del PCP-SL en la zona de Cangallo y Vilcashuamán, y muestra una diversidad de situaciones en el ámbito del CZ CF que forman parte de un proceso cuyo punto más álgido fueron las matanzas de Llocllapampa, Huamblapa y Umarm-Bellavista.

El PCP-SL quiso convertir al CZ CF no solamente en la encarnación de la revolución y el cambio, sino la región desde donde avanzaría en *su guerra* hacia la conquista de *zonas liberadas*. Esta idea descansaba en el supuesto apoyo total que la población le brindaría en su afán de combatir a los *gamonales* y grandes hacendados que en la práctica, paradójicamente, nunca existieron en esta parte de Ayacucho.

Nuestro objetivo, sin embargo, fue mostrar qué factores favorecieron la entrada del PCP-SL a la zona.

Por un lado, el PCP-SL se asentó en un ambiente político efervescente, en una de las zonas más postergadas de Ayacucho, donde existía una presencia variada de grupos y movimientos que igualmente mantenían un discurso radical. La zona comprendida en el CZ CF figura como una de las zonas donde la presencia de los servicios del Estado es bastante débil, sin una sólida inserción al mercado. Pero en los años 70, al momento del ingreso del PCP-SL, se da en ella un crecimiento de la población estudiantil.

El PCP-SL no fue el único partido que proclamaba hacer la revolución o que consideró a la escuela y la universidad como medios a través de los cuales hacer imponer sus acciones e ideología y captar seguidores. Pero, a diferencia de otros grupos políticos, sin embargo, fue el único que logró trascender la escuela y el partido a través de un calculado proselitismo que tradujo en acción un discurso basado inicialmente en el despliegue de un altruismo consecuente. Una vez iniciada la guerra, el apoyo de la población al PCP-SL, sin embargo, se basó no sólo en una convicción voluntaria por parte de la población, sino que se llevó a cabo también a través de la coerción y una efectiva campaña de terror.

Este estudio corrobora la importancia que tuvo el circuito educativo para que el PCP-SL capte adeptos en las escuelas secundarias de la región *enganche* con la población como una figura justiciera en un ambiente donde las expectativas por una vida más segura y digna habían rebasado lo que el Estado podía ofrecer.

A través de la información recibida, podemos concluir que la población de las provincias de Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcashuamán, no apoyó de manera total al PCP-SL como éste pretendía para convertir esta zona en el motor de una historia que nos hubiese podido llevar al totalitarismo más extremo y radical.

Anexo I: Cronología

1966

En Vilcashuamán, por resolución de la Dirección Regional de Educación - Ayacucho se crea el Colegio secundario General Córdova

1977

Abril

18 de abril, por resolución directoral zonal de Concepción, jurisdicción del NEC 10-35 de Vilcashuamán, provincia de Cangallo, Luis Regalado Huamán es nombrado director del C.E. N° 38676-35/E MX de San Juan de Ahuaccpampa jurisdicción del C.E. 24-35 de Huambalpa, Regalado sería considerado como el líder principal del PCP-SL en la zona y el iniciador de la lucha armada.

1978

Mayo

En mayo, se inicia una huelga indefinida del SUTEP que duraría hasta julio. Las razones principales son las medidas económicas que desembocan en un paro nacional.

1979

En Pomacocha, se realiza el 5to congreso de la CCP con discursos acalorados que terminaron con expulsión de los estudiantes del FER-SL.

De mayo a septiembre

Huelga magisterial del SUTEP. Esta se convirtió en el eje del movimiento popular y en un punto importante de convergencia con fuerzas políticas de izquierda. La huelga se prolongaría tres meses y el Ministerio del Interior la vincularía con acciones de Patria Roja, negándose a un diálogo.

Diciembre

Un grupo de agitadores políticos tomó el local del NEC-10/35 del distrito de Vilcashuamán. Obligarón al personal a abandonar junto con sus familias dicha localidad. Asimismo, se suspendieron las clases en el Colegio General Córdova (Archivo-USE Vilcas)

1980

Mayo

El 17 de mayo, el PCP-SL quema las ánforas electorales en el distrito de Chuschi, acto que quedó simbolizado como el inicio de la *guerra popular* en el Perú. Se dice que en dicho atentado participa Bernardo Azurza, uno de los principales líderes del PCP-SL en Vilcashuamán.

Agosto

El Ministerio de Educación inició una política de diálogo con el SUTEP. Mientras ello ocurría en la capital, en algunos distritos como Vilcashuamán, Pujas (anexo de Vilcas), Accomarca, Huambalpa, Concepción y Pomacocha los profesores dejaron de dictar clases para unirse a la huelga magisterial con prolongadas semanas de asuetos con el consentimiento de los comuneros.

Diciembre

El PCP-SL realiza su primer asesinato. El 24 de diciembre por la noche un grupo de senderistas incursiona en la hacienda de Ayzarca y asesina a Benigno Medina del Carpio, yerno de Augustín Zea, propietario de la hacienda.

1982

Marzo

El 31 de marzo el puesto policial de Vilcashuamán sufrió un atentado terrorista.

Julio

El 25 de julio se produjo un ataque del PCP-SL al puesto de la Guardia Civil de Vilcashuamán.

Agosto

El 3 de agosto se producen atentados del PCP-SL frustrados en el poblado de Vilcashuamán.

El 22 de agosto, un destacamento del PCP-SL atacó el puesto de la Guardia Civil de Vilcashuamán. Luego de cinco horas de enfrentamiento, siete policías son muertos.

1983

En el distrito de Accomarca, el PCP-SL realizó los primeros asesinatos *ejemplares* de dos autoridades: Narciso Pulido y Bartolomé Mendoza. Se dice que el principal motivo fue porque estas autoridades se negaron a entregar los sellos del Concejo Municipal.

Este mismo año se instala la base militar de Vilcas que permanece hasta el día de hoy.

Enero

En el distrito de Huambalpa, una cuadrilla de militares compuesta por siete tanquetas ingresó a este distrito. Sacaron a los pobladores a la plaza donde fueron torturados y uno de ellos ejecutado.

Marzo

El 10 de marzo se produce un paro nacional general encabezado por el SUTEP. Mientras que en los anexos de Accomarca, Pujas y Huambalpa se producían abandonos de los centros educativos de parte de profesores y alumnos.

El 15 de marzo en el distrito de Huambalpa, SL incursionó en la localidad e incendió el Concejo Municipal.

Mayo

El 4 de mayo, en Huambalpa, el PCP-SL asesinó a tres campesinos (dos mujeres y un varón) por considerarlos *soplones*.

El 13 de mayo pelotones senderistas sufren una emboscada a orillas del río Pampas cuando pretendían incursionar en la base militar de Ocros. Mueren, según algunos relatos, ochenta

presuntos miembros del PCP-SL reclutados de las comunidades de Pujas, Parco, Huaccaña y Pomatambo.

El 26 de mayo, en la comunidad de Pujas, el PCP-SL asesinó a dos autoridades: Alberto Jáuregui y Cesario Gutiérrez.

Ese mismo día, pelotones del PCP-SL incursionaron, por segunda vez, en la hacienda de Ayzarca. Torturan y secuestran al señor Andrés Gutiérrez, yerno de Benigno Medina y a policías que lo protegían. Horas después los policías aparecieron golpeados mientras que el cuerpo del señor Gutiérrez no fue encontrado sino meses después.

Luego del abandono definitivo por la familia Medina Zea de Ayzarca, pelotones del PCP-SL incursionan por tercera vez en esta hacienda. Estos pelotones provenientes de las comunidades de Parco y Pujas incendian la casa hacienda, el trapiche y los campos de cultivo.

Por la situación de violencia que vivían, algunos comuneros del distrito de Accomarca solicitan a la base de Vilcas que instale una base militar en la zona, pedido que fue negado.

Julio

El 10 de julio, el PCP-SL asesinó en Huambalpa al director de la escuela, profesor Tineo Linares, quemando su vivienda.

Septiembre

El 2 de septiembre un grupo de militares de la base de Vilcas incursiona en la comunidad de Accomarca y asesina a 11 campesinos y un profesor.

Octubre

El 17 de octubre se produce una incursión del PCP-SL contra el cuartel de Ocros, produciéndose un enfrentamiento en el cual los subversivos logran incautar 73 metralletas y otras armas.

Noviembre

Aproximadamente entre 1983 y 1985, Accomarca fue considerada como *zona liberada* por el PCP-SL y llevó el nombre de Balconcillo.

1984

Septiembre

El 24 de septiembre es creada la provincia de Vilcashuamán.

El 16 de septiembre se produce un enfrentamiento entre el EP y el PCP-SL en Mayupampa (Cayara), donde probablemente existió un campamento del PCP-SL.

1985

Los comuneros de Huambalpa desplazados entre 1980 y 1985 realizaron el primer retorno organizado por el Comité de residentes de Lima con apoyo de CARITAS.

Junio

El 30 de junio se produjo un enfrentamiento entre una patrulla del EP y un grupo del PCP-SL en Mayupampa (Cayara).

Agosto

El 7 de agosto (fecha aproximada), los líderes locales de sendero en Accomarca (A.F. y los Q.P) recibieron pelotones del PCP-SL provenientes de diversas zonas. Para ello organizaron un recibimiento especial en el campamento de Lloqllapampa.

El 14 de agosto, el EP incursionó en el distrito de Accomarca. El Operativo Lince se llevó a cabo bajo el mando del subteniente EP Telmo Hurtado y Juan Rivera, quienes al mando de 24 efectivos ingresaron a Accomarca y luego a Lloqllapampa (Accomarca), donde asesinaron a 69 campesinos acusándolos de senderistas, entre ellos 25 niños y mujeres.

La semana siguiente fueron asesinados varios testigos claves del crimen de Lloqllapampa.

Septiembre

El 11 de septiembre, el Senado de la República nombró una comisión investigadora para investigar los casos de Pucayacu y Accomarca, presidida por Javier Valle Riestra.

El 13 de septiembre, a un mes de la masacre de Lloqllapampa, el EP asesinó a cinco comuneros de Accomarca entre ellos ancianos y niños.

Este mismo mes el diputado Fernando Olivera comprobó la existencia de una fosa común con 69 cadáveres en Lloqllapampa, distrito de Accomarca.

El 17 de septiembre el fuero militar abrió instrucción a Telmo Hurtado y otros militares por abuso de autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles.

Octubre

El 12 de octubre la Comisión investigadora del Senado de la República presentó un informe final donde señalaba que se había perpetrado un delito común y no castrense, por lo cual Telmo Hurtado y el resto de militares debían ser procesados en el fuero civil.

Noviembre

El 5 de noviembre se produjo una incursión senderista en la comunidad de Escorno, anexo de Huambalpa. Esta incursión dejó como saldo tres campesinos muertos.

Diciembre

Por pedido expreso del comité de residentes de Accomarca en Lima se instaló la base militar. A la vez se realiza el primer retorno organizado en Accomarca de los desplazados.

En Huambalpa, el responsable local del PCP-SL A.P. es asesinado por mandos de mayor rango, siendo acusado de cometer abusos en su comunidad.

Instalación de la base militar de Accomarca.

1986

Marzo

La primera sala de la Corte Suprema de Justicia transfirió el caso Accomarca al fuero militar. En ese fuero Hurtado fue absuelto del delito de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado por abuso de autoridad a seis años de prisión y el pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas; el resto de militares fue absuelto.

Octubre

El 8 de octubre, un destacamento del EP entró a la comunidad de Pujas y asesinó a 32 personas, durante la celebración de la fiesta patronal de la comunidad.

A Pomatambo llegó una patrulla militar, realizó saqueos y detuvo a siete personas, a quienes llevó hacia Parqo Alto donde fueron asesinados.

El 23 de octubre, el Comando de las FFAA emite el comunicado N° 74CCFFAA/RRPP donde señalaba que eran subversivos que murieron en un enfrentamiento.

Diciembre

El Comando Conjunto de las FFAA reconoció la responsabilidad de dos oficiales en la muerte de doce personas en la localidad de Pomatambo y Parqo, en la provincia de Vilcashuamán.

1990

En la provincia de Vilcashuamán se instaló oficialmente, el Comité de Autodefensa Civil (CAD).

1993

En el distrito de Huambalpa se instala oficialmente el Comité de Autodefensa Civil.

Diciembre

El 8 de diciembre se produce un segundo retorno organizado a Huambalpa.

En la comunidad de Pujas, el PCP-SL tortura y ejecuta a cuatro comuneros: Aparicio Najarro, Juan Gomez, Leoncio Zea y Moisés Sandoval.

1995

Septiembre

El 26 de septiembre, miembros de la jefatura Provincial de Palpa detuvieron a Casimira Hernández Bautista (*María*) y Aníbal Castro Palomino (*Joselo*), mandos político y logístico respectivamente del comité zonal Cangallo, Víctor Fajardo, principales seguidores de Óscar Ramírez Durand (*Feliciano*).

Octubre

Según la versión del Comando Conjunto de las FFAA, el 5 de octubre en la quebrada de Ccaccapaqui, en el distrito de Palqo, provincia de Lucanas, después de un enfrentamiento con las fuerzas combinadas de la policía y el EP, muere el militante del PCP-SL Pedro Gómez Quispe

(Cayo), principal mando militar del CZ CF. Sin embargo, su compañera *Silvia* logra huir en medio de la confusión.

En la comunidad de Pujas se forman los Comités de Autodefensa Civil.

1996

Noviembre

En Pomatambo, durante el período electoral municipal, *Marcela*, probable mando militar del CZ CF, y su compañera *Case* mueren al enfrentarse con miembros del EP de la base de Vilcashuamán.

1998

Abril

El 20 de abril es capturado Pedro Domínguez Quinteros, considerado el número dos del Comité Central de Emergencia del PCP-SL después de *Feliciano*.

2.2. LA VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES DE LUCANAMARCA, SANCOS Y SACSAMARCA

La escalada de rebeliones en la provincia de Huancasancos contra el PCP-SL empieza en febrero de 1983, en Sacsamarca, asesinando a líderes importantes. Le siguen Sancos y Lucanamarca. En represalia, el 3 de abril de 1983, el PCP-SL incursiona en la comunidad de Lucanamarca, provincia de Huancasancos, departamento de Ayacucho, y asesina en diferentes lugares y en forma despiadada, con machetes y cuchillos, a 69 comuneros, entre niños, mujeres y ancianos. Junto con los ataques a las comunidades de altura de Huanta, esta fue la primera matanza masiva que ejecutaba el PCP-SL contra poblaciones por las que decía luchar. Es a partir de ese momento que el PCP-SL, en su lógica de construir el *nuevo Estado*, desata una cruel represión contra aquellas poblaciones que se resistían a su sometimiento.

Más tarde, en 1988, Abimael Guzmán recordó Lucanamarca como una acción «contundente» para diezmar las «mesnadas contrarrevolucionarias». Sin embargo, reconoció que la matanza, aprobada por el propio Comité Central, había sido también un «exceso».¹

Este es uno de los tantos casos que pasaron casi inadvertidos para la opinión pública nacional. La poca difusión de este hecho se debe a que los medios de comunicación habían centrado su atención en la matanza de ocho periodistas en Uchuraccay, ocurrida el 26 de enero de 1983.

El estudio de la masacre de Lucanamarca es importante porque, en primer lugar, marca el inicio de la política de represión masiva de parte del PCP-SL en el escenario político nacional. Igualmente, es un caso que nos ilustra claramente que la población no fue un agente meramente pasivo, sino que también hubo muestras de resistencia frente a los grupos subversivos.

Este hecho se produjo en una coyuntura de inflexión y en una zona dentro del ámbito del Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo del PCP-SL.²

Lucanamarca se rebeló contra el PCP-SL y sufrió represalias. El caso muestra cierta similitud con los de Uchuraccay y Huaychao pero, sobre todo, evidencia las complejidades de la violencia en la región y, sobre todo, los patrones de crímenes y violaciones a los derechos humanos en la nueva etapa del conflicto.

Entre enero y abril de 1983, un conjunto de acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la historia de la violencia política en Ayacucho y en todo el país. Resumiendo diremos que:

- a. A fines de diciembre de 1982, las fuerzas armadas se hicieron cargo del combate contra la subversión en Ayacucho y se desató una represión sangrienta en la región.

¹ Ver más adelante página 26 en esta misma sección.

² Ver caso sobre *Comité Zonal Fundamental Cangallo Fajardo, Comité Principal* en esta misma sección.

- b. Por la misma época, algunas comunidades comenzaron a rebelarse contra el PCP-SL. Los casos más conocidos son los de Uchuraccay, Huaychao y otras comunidades de las alturas de Huanta.
- c. En ese contexto, con el fin de mantener su control sobre el campesinado y resistir así la contraofensiva de las fuerzas armadas, el PCP-SL realizó matanzas indiscriminadas de campesinos, especialmente en las provincias de Huanta y Huancasancos. En esta última, la matanza más violenta se produjo en la comunidad de Lucanamarca.

2.2.1. Factores que favorecieron la entrada y el desarrollo del PCP-SL en la región

Huancasancos se creó como provincia el 23 de septiembre de 1984. se trata de una zona tradicionalmente ganadera, que cuenta con importantes recursos naturales, sobre todo extensos pastizales naturales y agua, que permitieron el desarrollo de una ganadería de calidad. A inicios de los 80, Huancasancos, a diferencia de otras zonas (como las vecinas zonas bajas del río Pampas), tenía una economía mucho más dinámica vinculada al mercado, pues las comunidades ganaderas asentadas en la zona conforman un eje comercial estrechamente ligado a ciudades de la costa como Nazca, Ica o Lima. De manera paralela, mantienen una relación activa con Huamanga, Cuzco y Puno.

Los primeros vínculos con el PCP-SL se establecieron a través del barrio de Carmen Alto de la ciudad de Huamanga, barrio tradicional de arrieros, en donde desarrollaron redes sociales importantes que han servido de nexo para la incursión de cuadros del PCP-SL en Huancasancos, ya que encontramos profesores de Carmen Alto, militantes del PCP-SL, que trabajaron como docentes en Huancasancos.

2.2.1.1. El poder local: características de las élites

Las élites locales se convirtieron en el primer objetivo del PCP-SL. Ellas fueron el blanco de saqueos y robos de ganado. A través de estas acciones, el PCP-SL imaginaba que estaba legitimando su discurso de igualdad y justicia a través del castigo a supuestos *gamonales*, creyendo demostrar al pueblo que estaban luchando por los *pobres* de la comunidad.

Aunque las élites —identificadas como *mistis*— no fueron necesariamente gamonales, sí podemos distinguir que se desarrolló en la zona un sistema de poder y relaciones serviles.

Como es usual en zonas rurales del interior del Perú, las élites de Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca poseían tanto el control económico como el político de la comunidad. Coincidió que las autoridades eran los ganaderos más prósperos, que contaban con abundante ganado ovino y vacuno, varias estancias y cercos privados, que dejaban a cargo de pastores de la misma comunidad.. Su poder económico les permitió acceder desde temprano a la educación y

relacionarse con la ciudad de Huamanga. En los años 40, los hijos de estas élites se educaron en Huamanga y en Lima. Por lo general, al terminar sus estudios regresaron a sus comunidades para hacerse cargo de sus propiedades.

En la década de 1970, la élite en Sancos estaba constituida por familias militantes de Acción Popular y el APRA que concentraban el poder económico y político. Ellos eran, por ejemplo, los únicos que sabían leer y escribir. El *poder del conocimiento* se consolidaba con el poder de decidir sobre los aspectos claves de la comunidad.

Acá había una familia Sumari enquistada en todos los centros educativos y ellos se tomaban todos los años el cargo de autoridades. Tomaban cargos de autoridades y si ellos no eran autoridades. Ellos tenían pues un compadrazgo único porque como personas visibles tenían ahijados, compadres, sobrinos y a través de esta familiaridad, ellos controlaban. Incluso he visto profesores foráneos que venían. Eran marginados, maltratados, moral, psicológicamente. Tenían que renunciar a su cargo, irse. Entonces todos los centros educativos estaban copados por sus ahijados sobrinos, hijos, familias, parientes. E: ¿Y a qué se debe ese poder alcanzado por ellos?

LM: Es que ellos son económicamente, tienen, tienen ganado. Además del ganado, son profesores. Como tienen dinero se han educado pues. Mientras el resto, la mayoría no entendía el valor de la educación, muy pocos. Incluso se nota que ellos tienen las mejores estancias. Entonces la gente tiene los cerros rocosos, pequeños ¿por qué? porque desde mucho más antes, pasaban cargos de autoridades y en esos tiempos entonces como había tierras del estado, pasando cargo de autoridades con una resolución se hacían otorgar posesiones, los terrenos del estado en pugna. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P334, Lucanamarca (Huancasancos), abril de 2002. Docente del colegio Los Andes)

Se abrió una mayor oportunidad para que un sector social antes excluido pueda acceder a la educación. Este fenómeno que se da a nivel nacional con mayor fuerza a partir de los años 60, coincide con un progresivo desarrollo de una conciencia política y el cuestionamiento del monopolio de poder de las élites locales en este caso.

Nuestros informantes afirman que había una diferencia entre los primeros profesores de la década del 60 y los profesores de la década del 70 y 80. El primer grupo procede esencialmente de las élites que detentan el poder económico y político. El segundo grupo de profesores, proviene de los sectores sociales antes excluidos que logran acceder a la educación. Hacia finales de los 70, al igual que en otras regiones de Ayacucho, los profesores desarrollaron en Huancasancos un discurso donde se criticaba constantemente la situación de injusticia en la cual vivía el campesinado, donde los ricos se aprovechaban de la ignorancia de los pobres y débiles, especialmente de los pastores.

Cuando llegó el PCP-SL a estas comunidades, lo primero que hizo fue capitalizar en beneficio propio estos sentimientos colectivos de malestar, expresado principalmente entre los maestros, logrando así reelaborar un discurso a su favor y tener mayor acogida en un sector de la población.

Venían diciendo: «Nosotros somos pobres, compañeros, trabajamos en nuestras chacras, y en Lima y en otros países, las personas son millonarias, tienen haciendas, por eso nosotros nos hemos levantado, estamos en lucha, hemos visitado ya varios pueblos. Nosotros hemos venido por los pueblos, estamos dejando nuestra sangre, estamos muriendo, pero eso lo hacemos por Uds.» Así diciendo han venido, nosotros escuchábamos calladitos. (CVR.

BDI Entrevista en profundidad P355, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002, mujer, 45 años, comerciante y ganadera)

A diferencia de las comunidades de Sancos y Lucanamarca, en Sacsamarca parecería que la diferencia socioeconómica entre *pobres* y *ricos* no era tan grande y, por lo tanto, podría hablarse de una comunidad económicamente más homogénea. Así, encontramos una élite distinta a la de Lucanamarca y Sancos desde los años 60, que legitimaba su poder básicamente en el hecho de ser profesores antes que en sus propiedades.

2.2.1.2. Educación y modernidad

Al igual que en la provincia de Vilcashuamán, fue a través de maestros y jóvenes que el PCP-SL encontró un mecanismo para instalarse en las comunidades tratando de construir en ellas una *nueva realidad* frente al «abuso» y «opresión» de los poderosos. Las viejas élites comenzaron así a ser cuestionadas por el nuevo sector educado de la población.

Es través de las estrechas conexiones comerciales que los comuneros desarrollaron con diversas ciudades debido a su actividad ganadera, que se constituyen en redes importantes que luego habrían de permitir el ingreso del PCP-SL a la región. La temprana relación con las ciudades les exige el manejo de ciertas herramientas como leer, escribir y hablar castellano, por lo que la educación se convirtió desde épocas tempranas en una preocupación importante para las élites y también para los propios pobladores.

De acuerdo a la información recogida, Huancasancos es regionalmente reconocido como un lugar donde la élite local desarrolló un temprano interés por el estudio y la lectura.

Antes de los años 60, los hijos de estas élites salían a Huamanga, Lima o Ica para concluir la secundaria. En algunos casos, incluso, continuaron estudios superiores en la UNSCH o en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Al regresar y convertirse en autoridades del pueblo, comenzaron a desarrollar una política educativa a través de la construcción de escuelas de las cuales ellos fueron los primeros maestros. Esta no es una zona donde existiera lucha por tierras, pero, a través de estas familias que se autodefinen como intelectuales, se desarrolló un discurso político que vinculaba el interés por el progreso del pueblo con el desarrollo de la educación.

2.2.1.3. El colegio Los Andes

Con el transcurrir de los años, las autoridades en Huancasancos vieron la necesidad de fundar un colegio secundario para facilitar el acceso a los jóvenes que tenían que trasladarse hasta Huancapi o

Huamanga. Es así como en 1967 se crea el colegio secundario Los Andes que luego se formaliza como colegio nacional Los Andes.³ Los creadores del colegio fueron las autoridades de la comunidad y del distrito, las cuales fieles a su discurso se mostraron interesados en la educación como medio importante de desarrollo y modernización: «Como alcalde, mi preocupación estaba orientada a la educación, mandé a construir aulas y la conclusión de la obra del local del Colegio Mixta «LOS ANDES» de Huancasancos-Ayacucho» (Molina 2000: 49).

Los comuneros de Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca empezaron a enviar a sus hijos al colegio Los Andes, mientras las élites locales continuaron enviando a sus hijos a Huamanga o Lima.

El colegio Los Andes contó con una buena reputación y la calidad de la enseñanza era reconocida a nivel regional. Esta fama llegó hasta las comunidades de la zona baja del río Pampas, hecho que impulsó a los comuneros con mayores recursos económicos a enviar a sus hijos a *Los Andes*. Fue así como empezaron a llegar alumnos de *los interiores*, como llaman los comuneros de Huancasancos a los pueblos más pobres de Sarhua, Tiquihua, Umaru, Cayara, Hualla, comunidades de donde provenían los peones que venían a trabajar en las chacras y estancias de las familias *ricas* de la provincia de Huancasancos.

Como hemos mencionado anteriormente, los primeros profesores del colegio eran de la localidad y fue recién a partir de la década del 70 que empezaron a llegar profesores de otros lugares, formados en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. En aquellos años, entre los profesores del colegio Los Andes empezó a predominar una línea política de izquierda radical, acorde a la época, ambiente que dio pie a la organización de un Frente de Estudiantes.

Dentro del grupo de profesores que llegó a Huancasancos proveniente de la UNSCH, se encontraban también profesores ideológicamente formados por el PCP-SL. Paralelamente, grupos del PCP-SL empezaron a visitar las comunidades y realizaban reuniones en casas particulares.

2.2.1.4. La pedagogía del PCP-SL

El PCP-SL encontró en el maestro un personaje capaz de ejercer un rol importante dentro de la comunidad. En muchos casos, además de ser maestro, ejercía algún cargo público en la comunidad. Era un líder con prestigio y autoridad, lo cual resultaba muy conveniente para el PCP-SL. En resumen, los maestros se convierten en aliados estratégicos para el PCP-SL para cumplir sus objetivos de convertir la «serranía en columna vertebral para desenvolver la guerra y conquistar el Poder».⁴

³ En realidad, no se ha encontrado la fecha exacta de la creación del colegio Los Andes, pero se sabe que sucede durante el primer gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968).

⁴ Véase entrevista con el presidente *Gonzalo*. Lima, julio de 1988.

Tal como hemos expresado, de acuerdo a nuestros entrevistados, en los años 70, los profesores que llegan al colegio Los Andes provienen, en su mayoría, de la Universidad de Huamanga y están formados bajo una corriente radical de izquierda propia de la época.⁵ Estos profesores llegaron con ideas *revolucionarias*. Entre ellos llegan militantes y cuadros intelectuales importantes del PCP-SL como parte de su estrategia de formación de militantes. Esta estrategia implicaba la utilización de la estructura del Estado, buscando su destrucción. El PCP-SL buscó controlar el sector educación, donde la corrupción existente en el medio le permite comprar cargos y logran nombramientos en zonas de interés.⁶

EL PCP-SL desarrolló una pedagogía en la cual ellos eran los maestros y los que poseían el poder del conocimiento para sacar a la población rural de la ignorancia y la ceguera en la cual habían permanecido durante siglos, al *recordarles* la brutal explotación de la cual habían sido víctimas tanto ellos como sus antepasados.

A nosotros nadie nos recordaba y decían nosotros no comemos carne, no tomamos leche. El trabajo de Uds. se lo van a llevar. Lo que crían sus animales se lo van a llevar. Lo que trabajan sus chacras se lo van a llevar. Les van a explotar y no les van a pagar. Nosotros sabemos, decían «A nosotros no nos cuenta nadie. Tenemos orejas y sabemos». (CVR. BDI Entrevista en profundidad P321, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002, pastora de Puna, 70 años)

EL PCP-SL construía una realidad adecuándola a los objetivos del *Partido*. Esta realidad se centraba en el análisis de la lucha y contradicciones de clases y el resto de elementos carecía de importancia.

El PCP-SL encontró en los profesores un vínculo importante para llegar al campo, como sucedió con el profesor Juan (camarada Víctor), a quien los campesinos señalan como el principal líder del PCP-SL en Huancasancos, que fue el primero que llegó con el propósito de adoctrinar a los jóvenes del colegio.

Las lecturas de los estudiantes se centraban en las obras de Marx, Lenin, Mao y Mariátegui, (datos proporcionados por el Juez de Paz de Huancasancos) y tenían conocimiento sobre la Revolución China y los acontecimientos en la URSS.

Los jóvenes eran seducidos por los ofrecimientos de acceso al poder, para cambiar la estructura tradicional de la comunidad y el mundo, donde las masas serían las que gobiernen: «Ellos como profesores han seducido, bien palabreado, una cosa fácil «tú vas a ser director, tú capitán», así es la política de Mao Tse Tung, no sé qué cosas hay y eso te estarían leyendo, que

⁵ Nos es difícil precisar cuáles eran los grupos de izquierda más importantes, pero sabemos que Patria Roja tenía un interés en el área educativa. Sin embargo, existen una multiplicidad de partidos de izquierda que van desde las posiciones más radicales como el PCP-SL hasta las más moderadas que terminaron integrándose en los 80 al escenario electoral. Al respecto, ver el estudio sobre la violencia en universidades estatales.

⁶ Véase estudio sobre magisterio y violencia en este mismo informe.

lindo para ellos era» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P335, Sancos (Huancasancos), marzo-mayo de 2002, comerciante y ex autoridad, 70 años).

2.2.1.5. Las escuelas populares

EL PCP-SL comenzó sus primeras visitas a través de grupos de militantes que se desplazaban en la noche entre Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca hacia fines de los 70. Estos grupos, que realizaban visitas a las comunidades cada quince días, conformaron los embriones de la *fuerza principal*. La primera llegada se dio en Sancos. Los comuneros recuerdan que los primeros rumores sobre la existencia del PCP-SL provenían de la zona de Vilcashuamán. Muchos de los profesores que luego enseñarían en el colegio Los Andes trabajaron en esta zona, que llegó a ser uno de principales bastiones del PCP-SL.

Al igual que en Vilcashuamán, el PCP-SL formó e instruyó a los jóvenes de la comunidad en estrategias de guerra a través de las *escuelas populares*, realizadas por las noches en casas particulares apartadas de la población, en la localidad u otras comunidades. Al principio, era sólo un grupo el que participaba activamente y se invitaba a los profesores tanto del colegio como de las escuelas para dictar algún curso sobre marxismo o política en general.

En las *escuelas populares* se adoctrinaba a los asistentes a través de clases de marxismo y política y se les entrenaba militarmente para luchar frente a los militares con cenizas, ají y huaracas. Las *escuelas populares* tenían también un carácter obligatorio para los cooptados y estaban divididas según edades. EL PCP-SL se preocupó por formar a quienes serían los futuros líderes, educando niños bajo la ideología del PCP-SL y, en muchos casos, como Sacsamarca, llevándoselos de la comunidad hacia otros lugares para formarlos militarmente. Así también existía la *escuela popular* para los jóvenes, para las mujeres y las personas mayores.

No todos los profesores, sin embargo, estaban a favor del PCP-SL. Los profesores y maestros de las escuelas primarias, especialmente en Sacsamarca, no se aliaron a esta política. Uno de los principales factores puede haber sido que ellos eran las autoridades locales y por lo tanto tenían el poder. Otro es su militancia en partidos políticos como el PAP y Acción Popular.

2.2.2. EL PCP-SL y la república popular de nueva democracia

En Sancos, donde se encontraba el puesto policial en 1982, un día se armó una trifulca con uno de los efectivos, a quienes un grupo de comuneros acusó de violar a una joven de la comunidad. El pueblo estaba dispuesto a linchar a dicho policía, pero personajes *notables* de la comunidad salieron en su defensa. Luego de este hecho, los policías se retiraron a Huancapi, dejando así el

campo libre para la entrada del PCP-SL en las tres comunidades, hecho que expresa la presencia frágil del Estado en la zona pues bastó que la comunidad enfrente a los policías para que se derrumbe la presencia de los supuestos vigilantes del orden oficial.

La gente ya sabía (de la existencia del PCP- SL en la comunidad), ya estaban preparadas. Había un guardia, un joven, un buen militar era. Le hicieron un jueguito: que este guardia la ha violado a esta, una mujer indefensa, joven así como para inculpar a ese guardia [...] se iban a la turba, a linchar, a quitar su arma [...] es la primera vez. Ya estaban las consignas. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P346, Sancos (Huancasancos), abril de 2002, ganadero, ex autoridad, 70 años)

Según relatan los comuneros, el PCP-SL entró para *tomar el poder* en Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca en octubre de 1982:

En octubre-noviembre de 1982, entraron un hombre y una mujer desconocidos al pueblo y me reclamaron la llave del Concejo. Esta pareja venía de Pampa Cangallo. Me reclamaban que deje el cargo como secretario del Concejo porque sino me iban a matar, pues a partir de ese momento decían que el Partido iba a cambiar el orden de la comunidad, ya no iban a haber adúlteros ni abigeos... (CVR. BDI Notas de Campo P327, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002, es director de la escuela de Colcabamba, en los años de la violencia era autoridad del Consejo, 55 años)

Al entrar a cada comunidad los mandos del PCP-SL, que venía de otra región, procedieron a tomar el control total del pueblo y exigieron que todas las autoridades renuncien bajo amenaza de muerte. Una vez declarada la vacancia del poder tradicional, los mandos proclamaron a las comunidades a nombre del PCP-SL como *comités populares*.

De acuerdo a nuestros informantes, las autoridades decidieron retirarse en forma pacífica. En el caso de Sancos y Sacsamarca, las autoridades accedieron a quedarse y someterse al PCP-SL.

Los contingentes de la Fuerza Principal que llegaron a Sacsamarca fueron recibidos con frazadas, leña y alimentos, especialmente por parte de jóvenes estudiantes. En los tres casos tomaron el local Municipal, obligaron a la población a reunirse en asamblea en la plaza y nombraron a la Fuerza Local (FL) del Ejército Guerrillero Popular (EGP), que en adelante sería quien detente el poder y el control total sobre la comunidad y sus pobladores. La FL estaba a cargo de un líder y diez militantes aproximadamente, entre varones y mujeres, que se repartían las responsabilidades de primer responsable, comisario de seguridad, comisario de producción, comisario de asuntos comunales y comisario de organización.

Las versiones de los comuneros en Huancasancos y Lucanamarca no precisan bien cómo fue la toma de poder del PCP-SL mientras que en Sacsamarca sí señalan que vienen *personas foráneas* a nombrar a los líderes y a establecer el nuevo orden.

Por los datos recogidos en las entrevistas, podemos deducir la existencia de una jerarquía de mando, donde el mayor poder estaba concentrado en el *Comité Popular* de Sancos a cargo de Juan. Esta jerarquía de mando generó descontentos de los otros mandos y de la población en general, ya que reforzaba una antigua rivalidad existente entre Sancos y el resto de los distritos.

2.2.2.1. Perfil de los líderes y los jóvenes del PCP-SL

Como vimos, los profesores se convirtieron en el nexo entre los cuadros más importantes del PCP-SL y los jóvenes. Muchos de ellos habían sido formados por los principales cuadros intelectuales del PCP-SL. Uno de los lugares importantes para la captación fue la UNSCH.

Los jóvenes fueron captados por el PCP-SL a través de un discurso que proponía que ellos accederían al poder y todos serían iguales. Así, los jóvenes motivados por ambiciones de poder e ilusiones de formar parte de la revolución para cambiar el orden tradicional en el que vivían se alían al PCP-SL. Por primera vez estos jóvenes, empiezan a sentir el poder que les ha conferido el PCP-SL: «Ella me contaba pues: «qué lindo, es lindo agarrar el arma, e irse así»» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P322, Sancos (Huancasancos), marzo de 2003. Varón, ganadero de 70 años).

Si bien es cierto que un grupo de pobladores participó por temor, no debemos olvidar que otros participaron en el PCP-SL por voluntad propia. El PCP-SL, como en otros lugares, logró también exacerbar los conflictos personales y *despertar* los resentimientos contra el sector económicamente poderoso de la comunidad. Es la conjunción de estos factores la que explica en parte la adhesión de un grupo de jóvenes al PCP-SL: «“¡Carajo! Esas gentes de plata a barrer las calles, bien ordenaditos, nada de sacavueltera”, a esos que era waqras, no había eso, a esos al toque castigo[...], todo bien limpiquito era pues esas veces» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P335, Sancos (Huancasancos), entre marzo y mayo de 2002, comerciante y ex autoridad, 70 años).

2.2.2.2. Las mujeres del PCP-SL

De acuerdo con nuestras informantes, el PCP-SL ofreció un espacio de desarrollo personal a las mujeres que se adhirieron a él: «Las mujeres siempre hemos sido marginadas, teníamos miedo de opinar. SL valoraba a las mujeres. La camarada Carla decía «las mujeres tenemos que actuar, tenemos nuestras ideas, somos iguales a los varones»» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P363, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Mujer, 35 años, ama de casa).

Si bien las mujeres no tuvieron un rol protagónico en el PCP-SL local, lo *seductor* —sobre todo para las mujeres más jóvenes— era haber ganado un espacio de reconocimiento importante en el proyecto político del PCP-SL, lo cual fue mal visto por el poder tradicional como lo afirma la siguiente declaración: «Chicas, así armadas me llevaron a la plaza [...] sí chicas que no valían la pena, pero como tenían arma teníamos que obedecer, pues [...] ¡Repugnante esta situación!, si tenía arma yo hubiera parado» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P363, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002, 35 años).

Fue así como la *República Popular de Nueva Democracia* planteaba cambios que

atentaban contra la organización tradicional. Si bien el PCP-SL llegó a las comunidades cuestionando la legitimidad de las autoridades por los abusos que cometían contra el pueblo, al dejar el poder y el control en manos de jóvenes inexpertos generó que un grupo importante de la población cuestionara el proceder del PCP-SL, sobre todo las personas mayores.

2.2.2.3. Características de la vida cotidiana

Cuando el PCP-SL tomó el poder, su primera acción fue confiscar armas y explosivos. Por ser zona ganadera los dueños de ganado poseían armas en sus casas o estancias para proteger a sus animales de los zorros, pumas o abigeos. En Sacsamarca, quienes tenían carabinas se dedicaban a la caza de vicuñas.

EL PCP-SL manejaba toda la información de «quién era quién y quién poseía qué cosa». El trabajo previo de redes, a través de sus primeras visitas y la captación de adeptos en la comunidad, les permitió tener un panorama preciso de la comunidad, de las autoridades y sus élites.

El régimen impuesto por el PCP-SL obligaba a los comuneros a reportarse constantemente ante los mandos del *comité popular*, que mantenían el control de entrada y salida de todos los comuneros, incluyendo la salida a sus chacras y a sus estancias.

Diariamente se realizaban asambleas donde se proclamaban vivas al presidente Gonzalo y se marchaba por la plaza. Todos estaban obligados a participar, incluyendo el cura de la localidad: «Esto es del Partido: «¡a marchar!. Viva la lucha armada, ¡que viva Gonzalo!, ¡qué viva Gonzalo!», hasta el cura... todos los principales: Ranulfo, Oscar, Matías, principales han marchado por la calles» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P335 Sancos (Huancasancos), varón, 70 años).

Estas arengas debían ser aprendidas y recitadas de memoria, pues de lo contrario se castigaba a los comuneros.

La presión y las amenazas para asistir a estas actividades era muy fuerte y aun la gente tiene muy presente cómo entró el PCP-SL y qué era lo que decían. Hasta hoy en día recuerdan lo que era vivir bajo la amenaza del terror que les producían «los mil ojos y mil oídos del Partido»: «También nos decían: “Uds. sólo se van a escapar cuando se vayan al cielo, aunque se vayan a otra nación van a morir” nos decían» (varón, 40 años, Sacsamarca).

El orden vertical se había instalado en la vida cotidiana, en las relaciones familiares y de parentesco. Muchos jóvenes, convencidos de la legitimidad de morir por una causa, terminaron abandonando su familia y cambiaron completamente el sentido de sus vidas.

Si los comuneros no asistían a las reparticiones, reuniones y asambleas que realizaban las distintas organizaciones del PCP-SL, eran castigados. Los castigos tenían una escala y dependían de la falta y la recurrencia en ella. Por ejemplo, si era la primera vez que faltaban a una asamblea se le daba un aviso, a la segunda falta se le castigaba físicamente en una asamblea pública. La organización de seguridad registraba las faltas cometidas por cada comunero y aplicaba sanciones

de acuerdo a una lista, que luego llamaron *lista negra*. La escala, de acuerdo a nuestros informantes, era:

1. Amonestación
2. Corte de cabello y otros castigos físicos
3. Ejecuciones

Primero advertían, si seguían le cortaban el pelo y ya a la tercera, si seguía igual, se le hacía juicio popular... A Emilio se le dijo, pero no hizo caso. Ricardo y Sebastián se moderaron... (Varón, 40 años, Sacsamarca)

Estos castigos trataban de ilustrar la rigidez y la disciplina que ejercía el *Partido* en las comunidades; sin embargo, existían también sutilezas particulares en cada caso, como la exoneración de ciertos castigos y la nueva oportunidad para enmendar sus faltas.

El tercer nivel, y el más cuestionado por la población era la ejecución. Si a pesar de habersele avisado y castigado, la persona seguía cometiendo esa falta, era ejecutado en la plaza pública bajo la figura de un *juicio popular*. Este nivel correspondía a las faltas más graves que alguien podía cometer contra el PCP-SL, como la traición a la causa.

El primer *juicio popular* se realizó en Sancos el primero en noviembre de 1982, mientras que en Sacsamarca ocurrió en enero de 1983 y en Lucanamarca en febrero del mismo año.

El primer *juicio popular* en Sancos fue contra el juez de paz y profesor Alejandro Marquina el 19 de noviembre de 1982. Los militantes del PCP-SL sacaron de sus casas a Alejandro Marquina, junto con William Molina, la esposa de Cesario Sumari y otro comunero. Trajeron a los detenidos con las manos atadas, los ojos vendados y la boca llena de algodón. Un informante afirma que los hicieron arrodillar; seguidamente, según nuestras entrevistas, acusaron a Marquina de abusivo, explotador y mujeriego, y luego le dieron un disparo en la sien a la voz de «¡Compañeros! ¡Viva la Lucha Armada! ¡Qué muera este gamonal!» (Testimonio CVR 203197). Un testigo afirma que, en aquella oportunidad, los mandos del PCP-SL liberaron a varios presos que estaban en la cárcel de Sancos.

Alejandro Marquina era un personaje de la comunidad que pertenecía a la élite, pero que provenía de una familia de escasos recursos. Los comuneros de Sancos lo acusaban de pagar un precio muy bajo por el ganado que compraba, que luego vendía a un precio alto, lo cual generaba una ganancia importante. Hemos encontrado varias opiniones sobre el profesor Marquina. Para algunos fue una persona buena, mientras otros afirman que habían escuchado que más bien «prepotente era, egoísta, así dicen», pero que en realidad nadie estaba de acuerdo con su muerte.

Un poblador explica por qué se dio este hecho y resume el efecto que produjo:

Un día sorpresivamente los policías han hecho su misa a la Virgen Santa Rosa de Lima y luego nos han dejado, sin nada. Por eso ellos (PCP-SL) han aprovechado. En 82 se habrán ido. Luego ellos (PCP-SL) entraron y mataron en vista de todos nosotros al señor Alejandro Marquina, y eso nos traumó. Desde que yo nací nunca había visto matar a una

person. A la vista de nosotros mató, y eso ha sido causante, otros se han ido a Lima, otros a la puna, eso ha sido el trauma. Como no teníamos ninguna fuerza que nos ampare, ellos (PCP-SL) hacían lo que querían, ellos nos han obligado, ha sido el miedo. Asimismo cuando llegó los militares, los Sinchis, de nosotros hacían lo que querían, hasta casas nos robó, yo he sufrido un robo cuando estaba de jefe Yanawiku. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P366, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002, mujer, 50 años, jueza de paz no letrada, en la época de la violencia era ganadera)

En el caso de Lucanamarca, el primer *juicio popular* ocurrió el 17 de febrero de 1983 contra Marciano Huancahuari, su esposa y su yerno, quien estaba de visita en la comunidad. Marciano Huancahuari era uno de los líderes mayores de la comunidad; al momento de ser ejecutado, tenía 74 años de edad y era el vicepresidente de la comunidad. Había pasado por casi todos los cargos tanto de la comunidad como del distrito. Sus hijos estudiaban en Lima y tenían un nivel educativo alto. Para algunos pobladores, era reconocido como una de las personas con mayor cantidad de pastos naturales y ganado, que maltrataba a sus pastores y abusaba de sus vecinos quitándoles terrenos con documentos fraguados de compra y venta, o con usurpaciones ilícitas. Para otros, en cambio, no había razón de matarlo y solo pendían falsas acusaciones sobre él. Así como en Sancos, las tres personas fueron amarradas con los ojos vendados y les leyeron un listado de acusaciones. Una vez terminada de las imputaciones un subversivo procedió a sentenciarlos a muerte:

[...] este señor (proclaman los mandos senderistas) era así, que él era engañador, explotador, no sé que cosas más. Tantas otras cosas. Yo era menor de edad. Habrá sido alguien que le denuncie ¿no? y así lo han declarado con sentencia. Entonces, algunos lloraban... (unos reclamaban) ¡no, no lo maten! (mientras otros denunciaban) ¡ta bien que lo maten!... Sale del Consejo de acá y lo buscan. Lo ha hecho firmar en seguida nomás, sale corriendo y después sentencia, sale corriendo estas tres tiendas y se mantenía y eso le han tirado, a la escopeta. Así, así muere y entonces para acabar le ha matado al Walter y así... ese Walter le han sacado también sus cosas (CVR. BDI Entrevista en profundidad P352, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002, hombre, 55 años ganadero, presunto ex integrante del PCP-SL)

En Sacsamarca, unos afirman que fue durante los carnavales del 1981 (CVR BDI Entrevista en profundidad P354), otros en 1982 (CVR. BDI Entrevista en profundidad P329), cuando el PCP-SL llevó a cabo el primer *juicio popular*, asesinando al profesor Teodoro Fernández, docente y *yerno* del anexo de Palcca. Este caso pone en evidencia las dificultades del PCP-SL para asentarse en la zona, debido a pugnas por el poder e intereses contrapuestos tempranamente entre el PCP-SL y la población. De acuerdo a un entrevistado, Fernández se enfrentó a los mandos subversivos en una *asamblea popular*, protestando por las restricciones impuestas a la población. Las entrevistas sugieren que Fernández fue portavoz de un malestar que ya se venía evidenciando dentro de la población. Otro testigo refiere que, cuando llegó una brigada del Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo, reciben las quejas de los mandos locales sobre el comportamiento de Fernández, a quien acusan de *oveja negra*, traidor, *soplón* y tener *doble cara*, estas dos últimas las peores acusaciones que podían sufrir de parte del PCP-SL. De acuerdo a

este testigo, Fernández quería «dominar el partido de sendero», «quería estar en el poder», «él quería liderar».

Entonces los senderistas han dicho, así son estos que están en contra de la patria, estos van a morir diciendo lo han metido adentro y dice le han metido en la boca bastante plástico para taponarlo y después lo han sacado afuera, así mueren los que están en contra del partido diciendo le han metido bala ante todo el público, de ahí toda la gente se escapado a los cerros. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P354, Sacsamarca (Huancasancos), abril del 2002, varón, ganadero, ex autoridad, 72 años)

Una de las acciones más importantes del PCP-SL en la región fueron los arrasamientos de ganado y bienes, tanto a particulares como comunales. Se saquearon con ellos los animales y bienes de las familias más *ricas* de la comunidad. De esta manera, Huancasancos se convirtió en un ejemplo para los militantes senderistas de cómo castigar a las personas que hicieron fortuna a costa de los pobres.

En Sancos, el PCP-SL expropió el ganado de Adán y Cesario Sumari, Sócrates Salcedo, Alejandro Marquina y Antenor Molina. Todas estas personas habían sido autoridades en épocas anteriores y se contaban entre las familias que tenían mayor cantidad de ganado.

Cuando arrasaron el ganado de Antenor Molina, los senderistas tomaron sus ocho estancias: 1800 ovinos, 80 vacunos y 120 alpacas, que fueron repartidos a los comuneros de Huancasancos, Lucanamarca, Carapo, Sacsamarca, Manchiri, Porta Cruz, entre otros. También fueron saqueadas sus dos tiendas. Cuando su ganado fue confiscado, Antenor Molina presentó una denuncia a la policía de Ica, que capturó a uno de sus pastores: «Mi padre trabajaba con Matías y él lo acusó de haber robado su ganado para Sendero. De ahí lo ha metido a la cárcel. Mi mamá murió y perdimos todo. Yo andaba por la puna con mis hermanitos» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P363, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002, mujer, 35 años, ama de casa, presunto miembro del PCP-SL).

Uno de los acontecimientos más importantes, que tuvo repercusiones a escala regional, fue el arrasamiento del ganado de la Granja Comunal de Caracha, de Sancos, en diciembre de 1982. A este acto acudieron, según recuerdan los comuneros, cientos de personas de diferentes comunidades: Lucanamarca, Sacsamarca, Sarhua, Tiquihua, Manchiri, Umaru, Hualla, Pampa Cangallo, etc. Todos ellos, comandados por *Juan*, llegaron a Caracha y se llevaron el ganado vacuno y ovino de la comunidad:

Eso habrá sido en diciembre de 1982. Llegamos a Huancasancos y el dirigente máximo dijo: «hay una tarea que cumplir» Tres días caminando en fila hasta Caracha, en eso llega una señora a buscar al camarada Carlos [...] ahí todos cantaban, no sabíamos como cantar ni como aplaudir [...] empezaron a decir (PCP-SL) tenemos más poder que ellos, empezó a repartir de todos los sitios habían venido la gente de Cangallo, Huancapi, Hualla, todos los interiores gente cantidad y pobres [...] en Huancasancos repartieron... (CVR. BDI Entrevista en profundidad P323, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002, varón, 65 años, es teniente alcalde y en la época de la violencia era autoridad)

Este hecho generó malestar entre los comuneros de Sancos, porque el PCP-SL repartió su *ganado* a gente de los *interiores* de la zona baja del Pampas, a quienes consideraban que no tenían por qué recibir nada, puesto que el ganado no era suyo sino de la comunidad.

En Sancos, los subversivos también saquearon locales comerciales, como el de *Raúl*, y la tienda comunal. Los bienes fueron repartidos en la plaza a los comuneros.

En Lucanamarca, el PCP-SL se expropió el ganado de Marciano Huancahuari antes de asesinarlo. También saqueó la tienda comunal y repartió los bienes obligando a los comuneros a hacer fila para recibirlos.

En Sacsamarca, hizo lo mismo con la Granja Comunal que, aunque no tenía el número ni la calidad de los animales de la Granja de Sancos, también conmovió a la población, pues el ganado de la comunidad fue repartido a comuneros de otras localidades. Pero, en Sacsamarca, más importantes fueron los saqueos a las tiendas comerciales y a los carros que venían con productos desde la costa, pues desde diciembre de 1982 los subversivos interrumpieron la carretera con trancas y sólo permitían el ingreso de ciertos camiones previo pago de cupo.

2.2.3. Los puntos de quiebre

Así, se fue gestando un contexto en el cual el propio accionar del PCP-SL terminó minando sus propósitos y generando rebeliones contra los líderes y el Comité Popular, a la vez que permitiendo a los comuneros establecer una alianza con la Policías y el Ejército.

Consideramos que fueron cuatro las causas principales que provocaron que el PCP-SL terminara rechazado por la población:

- Ataque a la economía familiar
- Contradicciones entre la ideología y la práctica del PCP-SL
- Instalación de la muerte en el centro de la vida cotidiana
- Pugnas al interior del partido.

2.2.3.1. Ataque a la economía familiar

El orden establecido por el PCP-SL restringió las posibilidades de intercambio comercial y movilidad en la zona e impuso un régimen casi de autoconsumo. El accionar subversivo en las comunidades se centró en un estricto control de entrada y salida de la comunidad, impidiendo el libre tránsito de los comuneros hacia sus chacras o sus estancias. Esto fue un grave obstáculo al desarrollo de la economía local, pues, por ejemplo, entre los meses de enero y marzo los ganaderos deben subir a las zonas altas para aprovechar la abundancia de pastos. Los meses en que el PCP-

SL declaró Huancasancos como *territorio liberado* fueron precisamente los meses de lluvia cuando los pastores deben trasladarse a las estancias.

En Sacsamarca, quizás debido a su posición estratégica cerca de la carretera, los controles de entrada y salida fueron aún más restringidos. Estaba prohibido que los comuneros vayan a sus estancias por periodos prolongados y más aún se los castigaba si desaparecían días continuos. No se impidió ni el comercio ni la entrada de camiones provenientes de la ciudad, pero estos debían pagar cupos para poder ingresar a las comunidades. Se restringieron los viajes a la zona quechua para realizar trueque. Las relaciones de intercambio fueron controlados por el PCP-SL.

La interrupción de la vida cotidiana, el acoso a la economía familiar y local, la obligación de asistir a asambleas antes que ir a cuidar sus animales, sin tener libertad para trasladarse libremente, terminó provocando un malestar general. El discurso de igualdad y de justicia no se estaba manifestando en los hechos, pues, en lugar de progresar las condiciones de vida, estaban deteriorándose de manera peligrosa.

Si bien es cierto que las expropiaciones más importantes se realizaron contra quienes tenían mayor cantidad de ganado, ello no quiere decir que fueran los únicos afectados. Los comuneros acusan a líderes locales del PCP-SL de cometer robos en la puna a comuneros y pastores, además de pedirles comida.

SL controló todas esas situaciones. Ellos ya no eran dueños de su ganado, SL era dueño de su ganado [...] entonces les dolió en el alma, entonces con qué va a vivir [...] Según me cuentan, eso no lo he visto, los senderistas ya no dejaban salir a la población a sus chacras a ver sus ganados, eso motivó desesperación (CVR. BDI Entrevista en profundidad P334, Sancos (Huancasancos), abril de 2002. Es abogado, 60 años, en la época de la violencia era docente del colegio Los Andes)

2.2.3.2. Contradicciones entre la ideología y la práctica del PCP- SL

Cuando el PCP-SL *bate* el campo y se produce un repliegue inesperado de las fuerzas policiales, busca reemplazar el viejo orden por una nueva organización de gobierno local antes de lo planificado. Con este fin, reemplaza a las «viejas» autoridades por jóvenes de la localidad que calificó como más capaces de conformar una *fuerza local*. En muchos casos, sin embargo, la conducción de los Comités Populares por estos jóvenes, sufre una serie de contradicciones cuando se ve filtrada por intereses y revanchas personales.

Para el grupo de pobladores a quienes el PCP-SL había expropiado bienes, éste estaba conformado por un grupo de *jóvenes vagos* que pretendía obtener todo fácil a costa del trabajo *honrado*. Para otro grupo de comuneros, el problema era que el PCP-SL y sus militantes no ponían en práctica lo que decía a través de su discurso. Hablaban de la igualdad y de la justicia, pero no la practicaban. Las entrevistas mencionan que cuando realizaban expropiaciones de ganado o

saqueos a tiendas comerciales, la *fuerza local* se apropiaba de los mejores bienes y animales, mientras que al pueblo le daban las *sobras*:

Mataban las vacas, para el consumo de ellos, a la comunidad le repartían cosas inservibles, estaban al servicio de ellos (los comuneros) es por eso el descontento... (CVR. BDI Entrevista en profundidad P329, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002, varón 67 años, docente jubilado, era profesor en Sacsamarca en la época de la violencia)

Estábamos tristes, tomaban cerveza, leche de las mejores vacas y no compartían con nosotros, sólo con las milicias. Eso no es Partido decíamos... (CVR. BDI Entrevista en profundidad P329, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002, varón 67 años, docente jubilado, era profesor en Sacsamarca en la época de la violencia)

Aunque el PCP-SL planteara una sociedad igualitaria, en los hechos persistían las diferencias, pues sin duda alguna la *fuerza local* estaba por encima del resto del pueblo. A su vez, los Comités Populares de Sacsamarca y Lucanamarca estaban a su vez subordinados al centro de la *base de apoyo* que se hallaba en Sancos.

El PCP-SL restringió de igual manera, las fiestas y rituales religiosos, así como también la celebración de funerales. Sin embargo, hemos recogido información en la cual los campesinos señalan que pedían permiso al los mandos locales para la realización de sus fiestas, como el aniversario del pueblo y carnavales. Sin embargo había excepciones. En Lucanamarca se pidió a los dirigentes senderistas que se celebrara el aniversario del pueblo, ellos accedieron. Las fiestas se convierten en celebraciones políticas donde se proclamaban vivas al *presidente Gonzalo*. De acuerdo a los informantes, el PCP-SL prohibió que los comuneros consumieran alcohol, sin embargo, los militantes y los líderes podían hacerlo. Las mejores comidas estaban reservadas para ellos. En la memoria colectiva quedó fijada la idea que sólo los miembros del PCP-SL tenían derecho a celebrar: «El cargonte tenía que pedir permiso al Partido para hacer la fiesta y sólo para ellos la hacían, la demás gente ya no participaba (CVR. BDI Entrevista P372, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón presidente de la FADA, en la época de la violencia era docente).

Por temor al castigo nadie se pronunciaba, a menos que estuviese borracho, como le sucedió a un comunero de Lucanamarca. Luis Enrique, quien se emborrachó para el aniversario de Lucanamarca el 29 de enero de 1983 y empezó a reclamar a viva voz a los mandos por qué los tenían así y les prohibían celebrar, reclamándoles también por la coerción en la cual tenían que vivir. Fue asesinado por el comité popular el 30 de enero de 1983.

El PCP-SL empezó a cometer abusos contra aquellos que pretendía defender. La expropiación de la Granja Comunal fue un acto que causó estupor entre la población. Si el PCP-SL actuaba en beneficio del pueblo, ¿por qué, en el arrasamiento de la Granja Comunal de Caracha, reparte animales a otras comunidades si eso era propiedad de la comunidad de Sancos?: «Repartían a otros pueblos ¿por qué si era nuestro?» (CVR. BDI Entrevista P372, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón presidente de la FADA, en la época de la violencia era

docente).

2.2.3.3. Instalación de la muerte en el centro de la vida cotidiana

La población en general aceptaba el castigo a los abusivos, a los explotadores y a los abigeos, pero no concebía su asesinato:

De repente la preparación hubiera sido, te digo más participativa. Demostrando la verdad, como dicen en el campo. Haciendo que la justicia fuera igual para todos, que todos trabajen, que todos tengan comodidades. Para mí habría sido eso, de repente hubiera tenido acogida. Pero en cambio acá parece que mayormente vino la matanza de los más humildes. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P334, Sancos (Huancasancos), abril del 2002. Abogado, 60 años, ex profesor del colegio Los Andes, presunto ex integrante del PCP-SL)

En vez de que maten ¿por qué ni siquiera le habrán sacado la oreja? Por decir, yo soy una mujer mañosa me cortan la oreja [...] no matarlo, matando ¿qué saca? Nada... (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P368, Sancos (Huancasancos), abril de 2002. Varón, aproximadamente 40 años, comerciante, ex estudiante del colegio Los Andes)

Los propios miembros del PCP-SL empiezan a cuestionar los criterios con los cuales son seleccionados los próximos a ser ejecutados, ya que, en muchos casos se trataba de sus propios familiares. Cuando algún militante tenía la osadía de mostrarse contra y cuestionaba, era severamente castigado. Tal como hemos visto líneas más arriba en el caso del profesor Teodoro Fernández, el castigo implicaba la muerte misma.

El hecho de no poder expresar libremente sus opiniones y sentirse obligados a cumplir normas y patrones de conducta que rompían con sus rutinas diarias, provocó una psicosis donde muchos, sin estar necesariamente convencidos de la doctrina del PCP-SL, actuaban por miedo. Pero el temor tiene un límite, por ello escapaban a las punas y a la ciudad buscando proteger sus vidas: «A quién no le va a dar pues miedo, esos políticos inhumanos, no respetaban nada, demonios eran, Satanás, parece que espiritualmente el demonio les dominaba...» (CVR. BDI Entrevista en profundidad P, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002, varón, sanitario de 58 años, testigo de la masacre de Lucanamarca).

El PCP-SL termina así convirtiéndose en una autoridad injusta y violenta. El componente de violencia, muerte y destrucción son elementos que los campesinos no esperaban encontrar aceptando al PCP-SL.

2.2.3.4. Pugnas al interior del PCP-SL

EL PCP-SL tomó el poder en las comunidades a través de los jóvenes mientras muchas de las autoridades legítimas aceptaron al PCP-SL por miedo. En Sacsamarca el grupo de poder local, liderado por los profesores, no está conforme y cuestiona el accionar del PCP-SL. De esa manera, se agudizaron los conflictos por el poder y el control del pueblo. El PCP-SL pretendió canalizar

estos conflictos pero la violencia que generó termina siendo más dura que estas pugnas internas por terrenos, venganzas, etc.

A través de su accionar, el PCP-SL abrió una *caja de pandora* que después no pudo controlar mezclándose los intereses individuales se mezclaron con los del partido. Esta fue una de las *consecuencias imprevistas no deseadas* por la directiva del PCP-SL. La *guerra popular* toma una dinámica que no pudo ser controlada y la dinámica que impone exacerba las contradicciones anteriormente existentes. La supremacía de Sancos sobre los demás distritos se agrava. Sobre los actos de la guerra se interponen con antiguos conflictos interpersonales, familiares y locales.

Existe mucho resentimiento contra Sancos, siempre han sido centralistas, ellos querían que la carretera fuese por Llauta y no por Putaqasa, así nos obligaban a trabajar en la carretera. Al día siguiente de la rebelión los sanquinos llegan y nos toman presos, me duele en el alma como me llaman hermano (refiriéndose a los sanquinos)... (CVR. BDI Entrevista en profundidad P357, Sacsamarca (Huancasancos), marzo de 2002, varón, 45 años, es presidente del CAD del barrio de Tupac Amaru, ganadero)

2.2.4. Las respuestas locales

La rebelión de Sacsamarca constituye el punto de inicio de las sucesivas rebeliones contra el PCP-SL, que comienzan en por Huancasancos y terminan en Lucanamarca, siendo la matanza de Lucanamarca del 3 de abril del 1983 representa la acción más emblemática, que en los propios términos de Abimael Guzmán tenía que ser contundente y ejemplarizadora.

2.2.4.1. La respuesta de Sacsamarca

Rubén me dijo que nos rebeláramos, acaso nosotros somos sus perros para que nos maten, ¿acaso el gobierno dice al ratero, al ladrón hay que matar? [...] Ellos nos van a matar. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P358, abril de 2002, Sacsamarca (Huancasancos). Varón, 40 años, rondero, obrero, participó en la rebelión de Sacsamarca)

Tal vez resulte difícil precisar la gota de agua que rebalsó el vaso. En las comunidades en estudio, el PCP-SL siempre se sintió seguro del poder y la sumisión del pueblo que significaba su lógica de sometimiento en base al terror y el miedo. Así, más que encontrar el punto de quiebre asistimos a un conjunto de factores que sumados terminan por romper el poder senderista.

En una conversación informal con comuneros del anexo de Colcabamba, en el distrito de Sacsamarca, se afirma que en la fecha en que se produce la rebelión (15 ó 17 de febrero del 1983) «los periódicos de la capital» habían publicado mapas en las que se señalaban las zonas de mayor presencia y dominio senderista. En estas mapas aparecían Huancasancos, Lucanamarca y Sacsamarca como *zonas rojas*, por lo que, según la explicación de los propios comuneros, esto habría sido el motivo por el cual el Ejército no intervenía en la zona, pues temía el poder y la respuesta de la denominada *zona roja*. En efecto, encontramos en la edición de la revista *Oiga* del

30 de agosto de 1982 un mapa señalando los focos subversivos en Ayacucho (página 12): Ccute, Sacsamarca, Canaria, Cayara, Huancapi en Huancasancos, Accomarca, Vilcashuamán, Vischongo, Concepción, Ocros en Vilcashuamán, Chiara y Acocro en Huamanga. Al norte de Ayacucho estarían las comunidades de Huanta, Luricocha, Huayllay, San José de Secce, Lirio y Sachabamba.

Los sacsamarquinos residentes en Lima, enterados de la situación, acudían insistentemente a las distintas instancias del Estado exigiendo la autorización respectiva para que el Ejército o la Policía intervengan en la zona y reordenar el *desorden* que el PCP-SL había ocasionado. Al mismo tiempo enviaban misivas a la comunidad mostrándoles su preocupación por la publicación de estos mapas, por lo que incitaban a la población a asumir una decisión para resolver el problema y evitar una intervención del Ejército que implique un alto costo social. Es decir, exigían orden y al mismo tiempo temían una intervención dura del Ejército.

Por otra parte, en la versión de Narciso (40 años, de Sacsamarca), se habría filtrado una lista negra en la que aparecían los nombres de algunas personas próximas a ser ejecutadas por el PCP-SL, entre las cuales figuraban los nombres de quienes lideraron la rebelión. Según Narciso, era cuestión de «matarlos antes que nos maten» y fue así cómo habrían decidido enfrentarse al PCP-SL.

De acuerdo con Hernán (ex integrante del PCP-SL, 40 años, Sacsamarca), al interior del grupo militante del PCP-SL había *compañeros* que filtraban información, no sólo a la población sino también a la base del Ejército en Huancapi. Es posible, por lo tanto, que la lista negra se haya filtrado y que ello sea el punto que atizó la rebelión.

Sea como fuere, un número no determinado de comuneros de la comunidad de Sacsamarca, preparó un plan de resistencia clandestina en las noches en los cerros o puntos distantes de la población para no levantar sospechas. Un requisito clave fue mantener la rebelión en absoluta reserva. Era cuestión de vida o muerte. No estaba permitido comentar el hecho a nadie, incluyendo a sus esposas.

Nadie tenía que saber, porque era cuestión de vida o muerte, era prohibido avisar a nuestras esposas, porque decían ellas son chismosas [...] Incluso cuando empezó la rebelión yo estaba con mi esposa en mi casa, y mi esposa a darse cuenta me decía vámonos, hay que escaparnos, pero yo le decía, tranquila, no va a pasar nada, porque yo sí sabía lo que estaba pasando, pero mi esposa no sabía, por eso se desesperaba... (CVR.BDI Entrevista en profundidad P323, abril de 2002, Sacsamarca (Huancasancos). Varón, 65 años, teniente alcalde de Sacsamarca, en la época de la violencia era autoridad)

El plan consistía, en primer lugar, en asaltar los domicilios de dos líderes locales del PCP-SL: *Elio* y *Wilfredo* y asesinarlos en el acto. En segundo lugar, apresar a sus seguidores y por último, tomar el local donde los subversivos almacenaban sus armamentos.

Así, decidieron aprovechar la fiesta de carnavales, entre el 15 y el 17 de febrero de 1983, para llevar adelante la *revuelta*. Se suponía que en ese día los senderistas festejarían los carnavales, bailarían y se emborracharían; sería el mejor momento para actuar:

Claro habían prohibido la fiesta, pero teníamos que aprovechar los carnavales que se acercaba, por eso hicimos una trampa, teníamos que exigir para festejar y de tanta insistencia nos aceptaron [...] Yo soy músico, por eso mi misión era tocar en el cortamonte con otras tres personas más, no tenía que tomar porque, tenía que observar todos los movimientos de estos terrucos, y asegurar para que se emborracharan. Por eso cuando me servían yo me disimulaba y en un descuido lo echaba, por eso yo no me emborraché... (CVR.BDI Entrevista en profundidad P323, abril de 2002, Sacsamarca (Huancasancos). Varón, 65 años, teniente alcalde de Sacsamarca, en la época de la violencia era autoridad)

La estrategia surtió efecto, a las diez de la noche, los líderes senderistas habían ordenado el fin de la fiesta. Quienes tenían la orden de tomar el domicilio de Wilfredo, ingresan por el techo, y le incrustan una barreta a la altura del estómago. Seguidamente lo apedrean hasta matarlo. Igual suerte corre Elio. Mientras tanto, los otros *camaradas* son tomados presos y encerrados en un calabozo conjuntamente con sus demás seguidores. Ante la pregunta del por qué, una vez reducidos, estos líderes locales del PCP-SL no fueron entregados a las autoridades correspondientes, uno de los entrevistados nos responde lo siguiente: «No podíamos entregarlo al ejército, porque no había autoridades y porque temíamos que Sendero nos atacase en el camino [...] la decisión era matarlo...» (Marcos, 60 años, Sacsamarca).

Sin embargo, algunos miembros del PCP-SL habían logrado escapar, entre ellos *Carmen*, quien llega a Huancasancos y da cuenta de la rebelión a los mandos locales máximos del PCP-SL. Al día siguiente se organiza la respuesta. Toda la población se reúne en la plaza los mandos, evalúan la situación y deciden ir a cobrar venganza:

Cuando volví, igualito como en esa fecha, silencio estaba el pueblo, entonces llego y no había gente ¿qué, dónde están?. No había gente, entonces solo en la directiva comunal estaba hirviendo una ollas con comida y había dos viejitos que estaban tomando, ¿qué pasa tío?, y me dice, se han ido a Sacsamarca a capturar a esos reaccionarios, nosotros nada más, viejitos que no podemos nos hemos quedado, entonces me dio pánico. (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P350, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Varón de 65 años, sanitario de la posta)

Un grupo de subversivos llega a Sacsamarca y toma presos a un número aproximado de 40 personas, entre ellos a 14 de los involucrados en la rebelión que son conducidos a Huancasancos para ser ejecutados. Antes habían ordenado enterrar los cadáveres de los sus mandos muertos, «con homenajes, dando vivas a Sendero».

Una vez llegado a Huancasancos, los prisioneros son encerrados en un calabozo, a la espera de Julio (*camarada Víctor*), líder máximo del PCP-SL en Huancasancos, quien en *juicio popular* ordenaría la ejecución.

El PCP-SL no había previsto que simultáneamente a la rebelión de Sacsamarca, una comisión de esa comunidad había sido enviada a Huacacapi para dar cuenta al Ejército y pedir su intervención: «La familia X fue comisionado para ir a Huacacapi, y dar cuenta al ejército, además pedir su apoyo para que nos apoyaran...» (Marcos, 60 años, Sacsamarca).

Al tercer día llegan miembros del Ejército que los pobladores identifican erróneamente como *Sinchis* a bordo de dos helicópteros. Al percatarse, la población que se había concentrado en la plaza para asistir al *juicio popular*, decide escapar como puede, produciéndose una trifulca. Los militares disparan indiscriminadamente, matando a 14 personas, entre estas a nueve subversivos: «En helicóptero vinieron los militares y mataron sin ninguna explicación a cualquier persona, entre ellas a dos señoritas, que en ese año habían venido de Lima de vacaciones y que no tenían nada que ver en el asunto» (Vitaliano, 45 años, Sancos).

El Ejército logra controlar la situación y los *presos* de Sacsamarca son liberados y nombran a las autoridades locales entre las personas más distinguidas (alcalde, gobernador, juez de paz, etc). Los informantes afirman que el ejército insta a la población a tomar posición contra el PCP-SL y ordenan a matar al principal líder del PCP-SL, JLL o camarada *Víctor*, de lo contrario se atendería a las respuestas del Ejército: «Entonces ahí se establecieron (el ejército), después de dos, tres días se establecieron las autoridades, entonces habían dejado órdenes, ustedes me hacen esperar para tal fecha al jefe, a los jefes vivo o muerto, sino ustedes van a ser castigados [...] entonces no sabíamos que hacer» (Javier, 70 años, Sancos).

2.2.4.2. La respuesta de Sancos

En Sancos se había concentrado la principal cúpula dirigencial del PCP- SL en la zona, liderada por un profesor de matemáticas del colegio Los Andes, Julio o camarada *Víctor*. Tras el levantamiento de Sacsamarca y ante la presencia del ejército, Julio abandonó la zona. Refugiado en las punas, reorganizó sus cuadros a fin de recobrar el poder que había perdido: «Hay un túnel de agua potable arriba, allí lo habían llenado, después 2 camiones de la comunidad había, eso dice estaban llenos cargados de comestibles [...] entonces había dicho el domingo le van a repartir a cada uno su ración. Estaban por acá arriba nada más, el jefe con su gente tomando acuerdos para contraatacar» (Javier, 70 años, Sanco).

Apenas se retira el Ejército, en febrero de 1983 aproximadamente, Julio y sus seguidores hacen su aparición como a la una o las dos de la tarde. Todos los senderistas estaban con los rostros cubiertos, sólo 4 o 5 estaban armados, los demás con bombas caseras. Es en ese instante en que la gente decide enfrentarlos. Son las mujeres las que dan la iniciativa y una de ellas logra impactar una piedra en uno de los ojos de Julio y cae al suelo.

Entonces ahí lo agarraron, a uno de ellos lo mataron, después a una chica también, y ahí es justo donde aprovechan dispararle a JLL, cuando el otro estaba entrando a dispararle, ahí lo madrugaron, entonces sintió al toque y el concejo que es ahora coliseo municipal, había una casucha grande, ahí se habían corrido casi todos los de Sendero, entonces la comunidad

ya los había seguido. JLL ya estaba herido, entonces lo han seguido y ahí lo han destrozado, inclusive del arma también ya se habían apoderado, eran carabinas nada más, pero se han apoderado sin tiro (municiones) nada, así lo han hecho (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P350, marzo de 2002, Sancos (Huancasancos). Varón de 65 años, sanitario de la posta).

Los cuerpos de los subversivos caídos, incluido el de Julio, son llevados y abandonados en un paraje de la quebrada que va hacia el río Caracha. Al día siguiente llega el ejército y obliga a la población para que los entierren.

Es así como la población decide enfrentar y poner fin al poder de la cúpula más importante del PCP-SL en la zona, encabezada por Julio. A partir de este momento se restablecen las rutinas diarias en la zona, se eligen nuevas autoridades, comenzando una nueva etapa en la historia de Huancasancos, en la cual resalta la formalización de la alianza entre el Ejército y la comunidad.

2.2.4.3. La respuesta de Lucanamarca

Lucanamarca, al igual que las otras dos comunidades estudiadas, fue uno de los bastiones más importantes del PCP-SL. *Oscar*, natural de la zona, había asumido el liderazgo local. Edwin era su lugarteniente. Asimismo, se sabe que estos líderes locales gozaban del apoyo y la aceptación de un gran sector de la población, principalmente joven; sin embargo, no es posible precisar si dicho respaldo que recibían era un apoyo conciente y voluntario. Oscar compartía el poder con Nilo y Gregorio, sus hermanos. Los informantes mencionan que el padre de Oscar, Atilio, y su madrastra Zenaida, habían decidido formar también parte de las filas del PCP-SL.

En febrero de 1983, el PCP-SL dominaba el escenario local, mientras que en Sacsamarca, la población había decidido enfrentarlo. El 24 de febrero de aquel año, el ejército incursiona en Lucanamarca de manera sorpresiva, en momentos en que algunos de los líderes locales del PCP-SL estaban reunidos en el Concejo. Al percatarse los subversivos intentaron huir hacia una quebrada. Los militares les dan alcance y se produce un enfrentamiento, en el cual mueren nueve personas, entre éstas uno de los importantes jefes del PCP-SL en la zona, el camarada *Nelson*. Si bien el Ejército había decidido ingresar a Lucanamarca, con el apoyo de algún sector de la población, lo que no queda claro es el momento en que se produce esta alianza entre la población y el ejército.

Una vez controlada la situación, el Ejército reúne a la población en la plaza en donde, al igual que en Huancasancos, nombra a las autoridades entre las personas más *notables*, en la intención de reestablecer el orden y ordena a la población a rebelarse contra el PCP-SL, tomar preso al importante líder local del PCP-SL de la zona como es *Oscar*, entregarlo al ejército o en todo caso matarlo. De lo contrario, el Ejército arrasaría con la población.

La población, desconcertada, decide acatar las órdenes del Ejército, pero además acuerda enfrentar decididamente al PCP-SL y una de las primeras acciones es retomar el sistema de vigías

que el mismo PCP-SL había impuesto, pero ahora para defenderse de éste. Una vez ubicado el paradero de *Oscar*, la población organiza un pelotón para ir en su búsqueda, apresarlo y conducirlo hasta la plaza. El pelotón llega al lugar donde se escondía *Oscar* a la una de la madrugada y lo captura. Los pobladores afirman que en el trayecto *Oscar* pedía a gritos clemencia, perdón y suplicaba que no lo mataran que lo entregaran vivo al Ejército, que estaba dispuesto a aceptar sus errores y corregirlos, a pagar cualquier precio como multa, e incluso donar sus bienes a la comunidad con tal que lo dejaran vivo.

A *Oscar*, según dicen, se dio cuenta que lo estaban buscando, entonces en la estancia le han buscado y el estaba viviendo ahí. Entonces han ido las autoridades citadas por el pueblo de acá, han ido como ocho personas y... entonces por el llano lo han traído, así no más con engaño dice y llegando acá se han vengado, lo han tapado, le han vendado los ojos (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P340, marzo de 2002, Lucanamarca (Huancasancos). Varón de 48 años, pastor evangélico)

Al amanecer del 22 de marzo del 83, quienes lideraron la rebelión concentran a la población en la plaza, supuestamente para que en conjunto decidiesen la suerte de este importante líder subversivo. En este punto creemos importante detenernos un instante; pues cuando tocamos el tema con los entrevistados aparecen dos versiones distintas sobre el móvil del apresamiento y ejecución de *Oscar*. La versión más generalizada señala que habría sido la propia población furiosa la que había tomado la iniciativa y la decisión no sólo de capturarlo sino también asesinarlo: «Prácticamente él era un enemigo total [...] porque a causa de ellos tantas cosas han estado sucediendo en el pueblo, la matanzas, las venganzas, o sea es el autor intelectual de ellos, lo condenan el pueblo, por eso es todo eso capricho de ajusticiamiento» (Varón, 50 años, Lucanamarca).

Otra interpretación, principalmente la de los ex senderistas entrevistados, sostienen que no fue así, que más bien habría sido la decisión de los propios colaboradores de *Oscar*

Porque sabían que si los entregaban vivo al ejército, éste los delataría y el ejército también tomaría represalias contra ellos, por eso es que mataron a *Oscar*, porque sólo así quedaban bien ante el ejército. La presencia de la gente era solo pretexto para hacer parecer ante el ejército que la acción contra este líder era una decisión que el conjunto de la población había tomado... (Varón, 55 años, Lucanamarca)

Así, *Oscar* es condenado a muerte, maniatado y vendado los ojos es puesto en el frontis de la iglesia, delante de la gente que había sido concentrada. De acuerdo a los protagonistas de la rebelión, las mujeres dan la iniciativa lanzándoles piedras en el cuerpo. *Oscar* pide clemencia y perdón. La población enardecida no lo escucha. Seguidamente lo arremeten con palos, tiran de los cabellos hasta dejarlo inconsciente «semimuerto». Luego ponen su cuerpo sobre una ruma de ichu, le echan kerosene y le prenden fuego.

Los familiares de Oscar también estaban presentes en el momento de su ajusticiamiento, sin embargo no se atrevían impedirlo por temor a correr la misma suerte.

De acuerdo a un testimonio, se difundió la noticia de la conveniencia de presentarse ante los militares para deslindar responsabilidades, pero el 25 de marzo de 1983 los hermanos Tinco Paucarhuanca, que deciden hacerlo, son acusados de subversivos, apresados y golpeados a patadas, llevados al puente Marita a dos kilómetros de Sancos y ejecutados a balazos. Este no fue el único caso de ejecución extrajudicial que se comete en la zona en estas fechas.

2.2.5. La represión del PCP-SL

La respuesta de Sacsamarca contra el PCP-SL constituye el punto de inicio que pone fin al poder del PCP-SL en la zona. Hasta este momento el PCP-SL había logrado hacer de Huancasancos, Sacsamarca y Lucanamarca «zonas liberadas», en las que había logrado expulsar el poder tradicional e imponer una lógica de sometimiento en base al terror y al miedo, en la que, como ya dijimos, el partido se constituía en el eje central de la vida comunal.

Este revés contundente sufrido por el PCP-SL termina con el asesinato de Oscar, líder senderista de Lucanamarca. A partir de este momento, el PCP-SL se repliega. La población empieza a entablar una relación más fluida con las fuerzas del orden, principalmente con el ejército, quienes visitan la zona con más frecuencia. Tal como veremos más adelante, el antiguo sistema de vigías impuesta por el PCP-SL es retomada por el ejército e impuesto a la población para defenderse del PCP-SL. Los antiguos líderes locales del PCP-SL de Lucanamarca, ahora luchan contra el PCP-SL. Sin embargo, continúa latente el temor por una posible respuesta.

El 3 de abril de 1983 ha quedado sellado en la memoria colectiva como una de las fechas más importantes de la historia reciente de este lejano distrito como es Lucanamarca. Aquella fecha, el PCP-SL arremete de la manera más despiadada contra esta población indefensa, en la que asesina a 67 campesinos entre mujeres y hombres, niños y ancianos. La magnitud del evento lo convierte en uno de los elementos más traumáticos que tapa los múltiples y pequeños episodios ocurridos a lo largo del proceso del conflicto armado interno.

Posteriormente, Lucanamarca aparece en la justificación del propio Abimael Guzmán sobre la necesidad de responder contundentemente ante quienes habían decidido enfrentar el poder del PCP-SL:

La lucha ha sido intensa, dura, han sido momentos complejos y difíciles. Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca, ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de 80, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones, como en ésta, fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido. Ahí lo principal es que les dimos

un golpe contundente y los sofrenamos y entendieron que estaban con otro tipo de combatientes del pueblo, que no éramos los que ellos antes habían combatido, eso es lo que entendieron; el exceso es el aspecto negativo. Entendiendo la guerra y basándonos en lo que dice Lenin, teniendo en cuenta a Clausewitz, en la guerra la masa en el combate puede rebasar y expresar todo su odio, el profundo sentimiento de odio de clase, de repudio, de condena que tiene, ésa fue la raíz; esto ha sido explicado por Lenin, bien claramente explicado. Pueden cometerse excesos, el problema es llegar hasta un punto y no pasarlo porque si lo sobrepasas te desvías; es como un ángulo, hasta cierto grado puede abrirse, más allá no. Si a las masas les vamos a dar un conjunto de restricciones, exigencias y prohibiciones, en el fondo no queremos que las aguas se desborden; y lo que necesitábamos era que las aguas se desbordaran, que el huayco entrara, seguros de que cuando entra arrasa pero luego vuelve a su cauce. («Entrevista con el *presidente Gonzalo*», *El Diario*, lima, julio de 1988.

En la versión de los propios comuneros, la muerte de *Oscar*, habría sido la causa principal para que el PCP-SL arremeta contra ellos. Sin embargo, creemos que a ello se suman las ejecuciones de los otros líderes subversivos tanto de Sacsamarca como de Huancasancos. De igual forma existe otra posibilidad, y es que en la primera incursión del ejército a Lucanamarca hacia en febrero de 1983, se produce un enfrentamiento en el que muere el camarada «Nelson», que en opinión de los propios comuneros era el mando más importante del Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Farjardo.

Los pobladores explican que luego de la ejecución de *Oscar*, los padres y/o los hermanos de éste se habrían retirado hacia la zona de Vilcanchos (distrito de la provincia de Fajardo) para conjuntamente con la base subversiva de estos lugares organizar la respuesta. Mientras una versión refiere que fueron los padres de *Oscar* quienes fueron a Vilcanchos a dar cuenta de lo sucedió a la base subversiva y planificar la respuesta; la otra versión refiere que habrían sido sus hermanos los que habrían planificado la acción conjuntamente con la base de Vilcanchos.

El 3 de abril de 1983, el PCP-SL ataca Lucanamarca, produciéndose una de las peores masacres a población civil en la historia del conflicto armado interno. Un número aproximado de ochenta subversivos entre hombres y mujeres, en opinión de algunos entrevistados, hacen su ingreso a Lucanamarca al mando de uno de los importantes cuadros del PCP-SL, *Horacio*, líder principal del PCP-SL en la zona de Paras, Espite y Totos, en donde, en opinión de algunos entrevistados se habría planificado la acción del 3 de abril de 1983 en Lucanamarca. Se sabe que la acción se dio inicio en la madrugada de aquel día, comenzando por las estancias ubicadas en la puna, asesinando a cuanta persona encuentren en el camino. A las diez de la mañana, algunas personas que habían logrado escapar de la masacre comunican de la acción del PCP-SL a quienes se encontraban en la faena comunal de refacción de la carretera que va hacia Huancasancos. Entonces la población organiza una comisión de diez personas para pedir auxilio al ejército acantonado en Huancasancos. Mientras unos regresan al pueblo, otros se van a sus estancias a resguardar a sus animales, ya que pensaban que los senderistas arrasaría con ellos. Mientras tanto, la columna subversiva llega a la carretera y asesina a cuanta persona encuentra. La desesperación cunde en la población, aunque intentan escapar, la geografía de la zona no lo permite, ya que el

pueblo se encuentra rodeado por barrancos, existiendo sólo dos vías de entrada y salida, las cuales habían sido tomadas por los subversivos.

A viva fuerza, varones, mujeres, niños y ancianos son conducidos a la plaza. A los que ponían resistencia los mataban en el acto. Al parecer, entre la propia población habían senderistas infiltrados, que desde días antes del evento habían permanecido en el pueblo para planificar la acción desde adentro y estar al tanto de los movimientos de la gente. Esta versión fue comprobada por los propios comuneros, porque en el momento mismo en que se ejecutaba la acción, algunos comuneros que habían logrado escapar a las zonas altas, son llamados por estos infiltrados diciéndoles que no se escapen, que no les harían nada, que sólo se realizaría una asamblea. Creyendo esto, los comuneros vuelven al pueblo y son inmediatamente capturadas y sumados al grupo que posteriormente sería ejecutado.

La población concentrada en la plaza es puesta contra el piso, impedidos de voltear la mirada. Seguidamente se ordena la ejecución, empezando por el lado de los varones a quienes les tapan el rostro con sus ponchos para que no vean la forma como serían ejecutados. A un costado las mujeres esperan, presenciando estas escenas de muerte donde los hombres son victimados con hachas, machetes, palos y picos. Los heridos recibieron un tiro de gracia con el fin de no dejar sobreviviente. Los entrevistados comentan que, en los instantes que las mujeres habían sido roseadas de kerosene para ser quemadas, un niño grita desde la torre de la iglesia, «compañeros, los guardias están entrando, escápense». Al oír esto los subversivos abandonan el pueblo. En opinión de muchos informantes, este atinado grito de alarma salvó a la población de ser completamente masacrada. Dos personas sobrevivieron a la matanza, el entonces alcalde Fermín y el comunero Alberto. Este último nos narra pasajes de la cruel incursión.

Ya estaban viniendo tres personas y me llaman y no le hice caso y me fui a mi casa, pero ellos me siguieron y me agarraron, y me decían donde está la plata del negocio, no tengo le dije [...] en eso cuando entro nos comenzó a pegar, tanto a mi como a mi esposa, en eso mi esposa le dio en un mantel el dinero, pero yo escapé, en eso me alcanzaron cerca de la puerta y me amarraron y me llevaron a la plaza y me pusieron boca abajo [...] Mi cabeza me envolvieron con poncho, yo gritaba que me suelte y decían vas a morir [...] en eso el arma como el sonido de hacer cancha empezó a sonar y por mi cabeza, como piedras llegaron en eso quedé desmayado [...] y dicen que de mucho tiempo comencé a moverme, entonces de nuevo me lanzaron con hacha y cuchillo (CVR. BDI Entrevista en profundidad P371, Lucanamarca (Huancasancos). Varón, 50 años, ganadero).

Nadie puede entender aún la magnitud y la forma como fueron ejecutados estos 69 campesinos. Hachas, cuchillos, piedras, palos y picos fueron los instrumentos del crimen, será tal vez que la acción tenía que tener un componente ejemplarizador, o es que como dicen algunos entrevistados, se tenía que ahorrar municiones, para enfrentarse contra el Ejército:

Todo con hacha, nada más, con sus propios picos de trabajo entonces ya estaban los guardias, fuimos y no había chofer, yo mismo tuve que manejar, como un poquito sabía fuimos. Llegamos, pobres estaban ahí, con sus canchitas todo, hasta los sesos desparramados, qué pena, eso estaba clarito (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P350, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, 65 años, sanitario de la posta)

Al día siguiente, algunos de los sobrevivientes irrumpen violentamente en el domicilio de los padres de *Oscar* y los asesinan en el acto, en señal de venganza. La población siempre pensó que ellos fueron los que los acusaron ante la base subversiva de la zona de Vilcanchos, Paras o Totos de haber asesinado a su hijo, motivo de la cruel represalia.

Algunos entrevistados refieren que la incursión se hubiera evitado si inmediatamente después de tomar conocimiento de los hechos el ejército hubiera intervenido. El Ejército recién se hizo presente al tercer día de ocurrido la masacre. A bordo de dos helicópteros hacen su arribo integrantes del Ejército al mando del entonces general EP Clemente Noel, quien ordena el traslado de los heridos a la ciudad de Huamanga, mientras que algunos muertos son enterrados en el cementerio de la localidad. Asimismo el general Noel ordena el establecimiento del puesto policial que desde entonces asumiría la seguridad del distrito.

No sólo Lucanamarca, sin embargo, fue *sancionada* por sublevarse contra la *revolución*. Así, el PCP-SL organiza otra respuesta, en este caso le toca a Sacsamarca. En la madrugada del 21 de mayo de 1983, un número no precisado de senderistas entre varones y mujeres, venidos de la parte baja (Hualla, Tiquihua, Canaria, etc.) y dirigidos por el camarada *Omar* preparan el ataque. Sin embargo, cuando estos se encontraban en el anexo de Pallcca, uno de los comuneros logra escapar y llega a Sacsamarca, donde se encontraba un mayor de la policía quien había ido en misión de inspección. Al ser informado de la posible incursión senderista, éste organiza a la población para responder el ataque. Tres policías, más un aproximado de veinte personas van al encuentro de los subversivos, decididos a enfrentarlos. A las diez de la mañana se produce el enfrentamiento, en las alturas de Sacsamarca. Los senderistas tenían armas caseras en su gran mayoría. Sólo sus mandos tenían armamentos relativamente buenos, por lo que no pueden contener la respuesta de la fuerza mixta y algunos subversivos caen abatidos, entre ellos los camaradas *Omar* y *Andrés*, mientras que por el otro bando mueren once personas, entre ellos un *Sinchi* apellidado Dueñas.

A ese Omar lo agarraron dice así vivo. Quisieron hacerle hablar, dice que no quiso hablar. Mátenme, mátenme decía y estaba con las piernas destrozados. Lo habían eliminado pues que iban hacer. El guardia también estaba herido, estaba mal herido, lo han traído, ha fallecido en el camino dice. El mayor también estaba herido, le había pasado una bala por acá, raspetón nada mas por el cuello casi, que tal si era un poquito más lo hubiera matado, casi de milagro se ha salvado el mayo (Varón, 70 años, Sancos)

Veinte subversivos son tomados presos y conducidos a Sacsamarca. Se trataba de un grupo de varones y mujeres, en algunos casos menores de edad, quienes suplicaban clamorosamente su libertad, aduciendo haber sido engañados u obligados por el PCP-SL. Los *Sinchis* los encierran en el calabozo y los someten a intensas torturas. Varios entrevistados comentan que estos presos fueron privados de ingerir alimento alguno. Después de tres días son sacados del encierro, para conducirlos a Jinquipata, paraje cerca de la carretera que va a Huancasancos, los hacen parar en

fila y los fusilan. Luego los cuerpos de los caídos son conducidos más abajo, por la propia población de Sacsamarca y los entierran en una fosa común.

Un mes después es el caso de Huancasancos. El PCP-SL aprovecha la celebración de la fiesta del Corpus Christi, del 24 de Junio de 1983. En la víspera un número no precisado de subversivos ingresa violentamente a la casa de los *carguyuq* (responsables de organizar la fiesta), y a los presentes los tiran al suelo, los golpean, los acuchillan: el pretexto era que estos estaban gozando mientras ellos estaban en guerra. Mientras tanto otro grupo de senderistas irrumpe en las demás casas, de igual forma maltratando a las personas, en muchos de los casos saqueando sus bienes.

Para entonces se había instalado formalmente el puesto policial, con quince efectivos aproximadamente. La directora del Jardín de Niños había organizado una kermés, en la cual se encontraban tomando algunos de los policías, incluido el capitán jefe de la base. Cuando los subversivos ingresan detonando dinamitas y dando vivas al partido. Al oír esto, el capitán tomó su revólver y salió a enfrentarlos, de inmediato le disparan y cae muerto. Por su parte, la población presa del pánico se esconde en sus casas y algunos corren intentando refugiarse en los cerros. Mientras tanto los subversivos proceden a asesinar a algunos comuneros. En la madrugada, se retiran dando vivas, algunos en dirección de Sacsamarca y otros en dirección a Carapo.

Al amanecer, la ciudad se muestra desolada. La gente desesperada comienza a buscar al único sanitario de la zona, para que auxilie a los heridos que sumaban treinta personas aproximadamente, mientras que los muertos sumaban ocho.

En eso un hombrecito apareció, me estaba buscando, pucha, de repente los terrucos, dije. No señor, los guardias están heridos, me dijo. Entonces fuimos, todos los guardias estaban heridos y dos estaban muertos, triste era la vida. Después de allí, comenzamos a buscar casa por casa, comenzaron comisiones, en tal sitio está muerto (diciendo). Así a la plaza lo juntaron para atender a toditos, fuimos a la posta y sacamos dextrosa, había un estudiante de veterinaria, él ya tenía que ayudarme. Los heridos todos a cuchillazos, tenía que hacer suturas, había un señor que tenía las tripas afuera entonces tuve que lavarlo al consejo, tender unas frazadillas, hay que coserlos pues, lavando los intestinos, meter adentro y coserlos. Todas esas noches pasamos bravo, yo tenía que amanecerme en la plaza con los heridos (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P350 Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Varón de 65 años, sanitario de la posta)

Los pobladores dejan de entender cuál era el sentido del PCP-SL: «¿Si dicen que (el partido) trabajan para los pobres y por qué matan a los pobres? ¿Qué tipos de hombres serán que matan a sus semejantes (*runa masinta*)?».

2.2.6. La respuesta de las fuerzas del orden

Al inicio (las fuerzas del orden) uno, dos, tres, cuatro meses, por ahí muy bien. Se compadecían de nosotros. Amigos todos estos y se inicio a formar grupos de comuneros, para hacer vigías, para que los subversivos no puedan entrar fácilmente. Y pasaron días, meses se descansó como recién casado, una vida feliz, todo igualito que se cansa la mujer

del marido, igualito ya se nos cansó. Ya era otro terror. Era otro terrorista, para nosotros igual que los subversivos. (Cristian, 50 años, Lucanamarca)

Los miembros de la entonces Guardia Civil no sólo se muestran incapaces de contener el avance del PCP-SL, sino que no reciben ningún sólido apoyo de los agentes del gobierno. Las fuerzas policiales se repliegan y abandonan los puestos policiales. Ante esta ausencia, el PCP-SL toma el control y se organiza la vida comunal. El PCP-SL cae en una serie de contradicciones y la población afectada auspicia y exige la intervención de las fuerzas del orden. Luego de la matanza del 3 de abril en Lucanamarca se instala un puesto policial, al igual que en Sancos, cuya circunscripción abarcaba también el vecino distrito de Sacsamarca. Empero luego de la batalla de Sacsamarca del 21 de mayo de 1983, se autoriza la instalación de una base policial compuesta principalmente por efectivos de la sección especial contrasubversiva los *Sinchis*. Mientras que en Sancos, luego de la incursión senderista del 24 de Junio del mismo año, se retira el puesto policial y en su reemplazo se instala la base militar, que permanece en el lugar hasta 1994.

Carentes de una clara y adecuada estrategia contrasubversiva, las fuerzas del orden, se limitan a utilizar todo tipo de mecanismos que les permita controlar a la población, desde detenciones, secuestro y torturas hasta violaciones a mujeres .

Vitaliano (Sancos, 40 años) recuerda que una noche cuando se encontraba en su cuarto haciendo las tareas del colegio, «llegan los sinchis, militares o policías» y le tocan la puerta: «Compañero, sal un rato, necesitamos medicinas porque vamos atacar el puesto». Vitaliano abre la puerta y sin mediar explicación alguna le patean en el pecho diciendo: «Así que tú eres, no, concha tu madre» y le llevaron a Huaqanapata. Eran «como ocho tombos» —afirma Vitaliano—. En un primer momento no reconoció la voz de sus captores. Sólo cuando era conducido a Huaqana pata, logró identificar la voz de uno de ellos. Eran los policías «porque yo jugaba con ellos pelota y conocía su voz». Una vez llegado a Huaqana pata le hacen arrodillar en el piso y lo golpean con patadas, puñetes y la culata de sus fusiles al borde de una peña, diciéndole que colaborara con ellos, que revelara el nombre de los profesores que hablaban mal de los militares.

La relación entre las fuerzas del orden y la población no dejó de ser ambivalente. La población se divide, ya que existe un sector importante que aprueba su presencia, mientras que otros no.

El sistema de vigías impuesto por el PCP-SL. Las fuerzas del orden retoman esta estrategia. Se formaron grupos para patrullar conjuntamente con los militares por los cerros y se ubicó a lugares estratégicos para dar señales de alarma en caso necesario. Este sistema de defensa implicó asumir conductas militarizadas a la vez que un gran esfuerzo físico: «El 84 justamente había un capitán «Canán». Era un terror. Nos formó vigías por las esquinas. Ya no nos dejaba ni respirar. Con un carajaso todos estaban tranquilos. Por las puras maltrataba a la gente» (CVR. BDI.

Entrevista en profundidad P324, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón de aproximadamente 45 años, ganadero).

La población fue obligada a entregar leña, carne y demás enseres para la manutención del puesto. Si al inicio esta forma de apoyo era una obligación, con el paso del tiempo la propia población la ve como una necesidad, porque no hacerlo significaría el retiro de la base y consiguientemente la vuelta a un pasado en la que el PCP-SL hacía del lugar un espacio *sin control*. El tema de la seguridad se convierte en la agenda más importante de la población, sin embargo, estas comunidades de Huancasancos forman Comités de Autodefensa Civil (CADC) a diferencia de otras zonas de la región norte de Ayacucho.⁷

En 1994 el ejército decide retirarse de Sancos. Es en este momento que el jefe de la base exige a la población que se organice en CADC. Consideraba que si bien la intensidad de la violencia había disminuido sustancialmente, la población tenía que estar alerta ante cualquier eventualidad. Por ello, en una asamblea comunal, la población nombra a ocho personas para encargarse de la seguridad, asignándoles las ocho armas que el ejército había entregado antes de retirarse. Sin embargo, la expectativa duró poco tiempo y se abandona la iniciativa, debido a que el proceso de pacificación se hizo evidente, pero también debido a la falta de voluntad de la población.

Cuando el Ejército se establece en Huancasancos, muchos jóvenes que adhirieron al PCP-SL, se retiran a las punas para evitar ser arrestados y/o asesinados. Otros deciden arrepentirse, abandonar las filas del PCP-SL y reinsertarse a la vida comunal. Conocedor de ello, el jefe de la base militar de Sancos de apelativo *Yanahuico* realiza una campaña por el que solicitaba a todas aquellas personas que voluntariamente quieran arrepentirse se presentasen a la base militar para recibir la autorización que le permitiera reinsertarse a la vida comunal. Tal como lo habíamos mencionado, hubo casos de jóvenes arrepentidos que desaparecen una vez que ingresan a la base militar de Huancasancos o aparecen muertos:

Por eso lo pusieron (a mi hijo) a al cárcel pues dos días, lo maltrataron y al final el ejército, la reacción se retiró, se lo habían llevado mientras que yo no había vuelto de la puna, se lo llevaron a Tranca que queda más arriba de Sacsamarca ahí se lo llevaron bastantes muchachos, lo mataron a tres; dos sacsamarquinos y a mi hijo este lo habían soltado del carro les habían dicho que escapen y en el momento que comenzaron a escapar a unos pocos pasos les dispararon, ahí mataron a mi hijo Nicanor. Cuando regresé de la puna quise recoger el cuerpo de mi hijo y las autoridades no quisieron que lo recoja ni lo entierre en el cementerio, así que enterré aquí en Marita- Ni querían asentar la partida de defunción (CVR. BDI. Estudios en profundidad P332, Sancos (Huancasancos), marzo 2003. Varón de aproximadamente, 70 años, ganadero)

2.2.7. Conclusiones

La masacre de Lucanamarca es una respuesta a la rebelión campesina que contra los líderes locales del PCP-SL en los tres distritos de la provincia de Huancasancos (Sacsamarca, Sancos y Lucanamarca). Más específicamente, una respuesta a la emboscada que tendió la población, en coordinación con las fuerzas armadas, contra algunos líderes locales y regionales del PCP-SL que estaban de visita en la comunidad.

Hacia 1980, el PCP-SL encontró en la provincia comunidades al margen de los programas del Estado, con una élite deslegitimada de ganaderos y comerciantes que controlaban el poder económico y político. Frente a los abusos de los poderes locales —corrupción, usurpación de tierras comunales, maltratos a los más pobres— el PCP-SL propuso la construcción de un *nuevo Estado*, donde la igualdad y el respeto habrían de primar.

Por su ubicación geográfica al suroeste, dentro del ámbito del Comité Zonal Cangallo Fajardo del PCP-SL y su relativa prosperidad como zona de ganaderos, Huancasancos adquirió importancia estratégica para el PCP-SL, se convirtió en un *libro pedagógico* donde pudo legitimar por un tiempo su discurso de igualdad y justicia: expropiar a los *ricos* para redistribuir entre los más pobres. Al mismo tiempo, las comunidades de Huancasancos se convirtieron en la despensa de las comunidades de la zona baja del río Pampas o *frente principal*.

En un primer momento, el discurso de orden del PCP-SL ganó aceptación entre sectores importantes de la población. Su nexa con ella lo constituyeron los sectores más educados.

En efecto, el PCP-SL tuvo mayor aceptación en sectores donde el interés por la educación y el desarrollo intelectual era mayor. Maestros provenientes de Ayacucho, convirtieron el colegio Los Andes de Huancasancos en un espacio de adoctrinamiento y captación de jóvenes escolares.

Varios de los maestros que enseñaron hacia finales de los 70' en Huancasancos fueron cuadros importantes del PCP-SL. A partir de nuestra investigación, creemos que varios de ellos caen en la emboscada de Lucanamarca y que esta es una de las razones por las cuales la respuesta del PCP-SL fue tan brutal y por lo que Guzmán recuerda Lucanamarca.

El PCP-SL encuentra en los jóvenes sus principales aliados, entre otros factores porque su conocimiento del mundo y de la realidad del país terminaba siendo moldeada por los maestros –guías. Queda por investigar otras razones por las cuales los jóvenes se alían al PCP-SL, más allá de la seducción del poder que la doctrina del PCP-SL y el fusil les ofrecían.

El ascenso de estos jóvenes al poder provoca el enfrentamiento con las personas mayores de la comunidad, pues provoca el quiebre de las estructuras de relaciones locales y la consiguiente rebelión de las mayores frente al ejercicio autoritario de la violencia y el nuevo orden establecido. En algunos casos, la rebelión fue literalmente contra sus propios hijos.

Sin embargo, el nuevo estado que el PCP-SL ofrecía se construía en una realidad cultural y política compleja, que haría de la violencia política un vaso de agua rebalsado por micro conflictos

⁷ Véase capítulo sobre Comités de Autodefensa.

locales. Lo que en un primer momento significó orden, terminó convirtiéndose en un escenario teñido por micro conflictos locales y familiares, exacerbando conflictos previos.

La transformación del comportamiento en contextos del conflicto armando interno nos muestra cómo los campesinos alteran sus valores y comportamientos a tal punto que en ciertas circunstancias estas poblaciones han sido capaces de llegar a matar a sus vecinos, familiares y copoblanos.

La desconfianza y temor sigue pautando las relaciones y vida cotidiana en estas comunidades. Esto nos plantea preguntas hacia el largo plazo, ¿cómo construir comunidad si no hay confianza entre ellos?, ¿Qué implica reconstruir la comunidad y qué obstáculos encuentran para lograrlo? La gran desconfianza para hablar sobre la época de la violencia política y el miedo a represalias, nos hace pensar que estamos en una comunidad donde viven víctimas y victimarios de ambos lados. Esto ha provocado cambios importantes en la comunidad, donde los conflictos y los rencores están presentes en el discurso formal de reconciliación, que aún dista mucho de ser real.

CRONOLOGÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LUCANAMARCA, SACSAMARCA Y SANCOS- AYACUCHO

1982

- A mediados de 1982, se crean las escuelas populares senderistas para adultos, jóvenes y niños (de ambos sexos) en los tres distritos.
- 28 de julio, SL toma el pueblo de Sacsamarca, como zona liberada.
- Octubre, el PCP-SL tiene el control de los tres distritos: Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca.
- 19 de noviembre, Sendero Luminoso asesina a su primera víctima, Alejandro Marquina Martínez, en Sancos.
- Fines de 1982, el PCP-SL cierra el paso de camiones, se da el momento de la ruptura del comercio.
- A partir de diciembre de 1982 hasta febrero de 1983, el PCP-SL organiza la olla común en los tres anexos

1983

- Enero de 1983, Sendero arrasa con los ovinos de la granja comunal de Sancos (Caracha) y los reparte a campesinos de Espite, Totos, Paras, entre otras comunidades.
- 13 de febrero en Sancos, el PCP-SL obliga a la población a celebrar la fiesta de los carnavales en cuadrilla.
- 15 de febrero, Sacsamarca se revela contra Sendero Luminoso, asesinan a los principales líderes senderistas: Walter Huaccachi y Elacio Llacsa, el mismo día son capturados los autores de la rebelión y son conducidos a Sancos por senderistas del lugar, para ser ejecutados.
- 16 de febrero, llegan tres helicópteros de Ayacucho, logran liberar a los comuneros de Sacsamarca a punto de ser ejecutados por senderistas, en el enfrentamiento producido mueren 6 comuneros inocentes.
- 16 de febrero, de los sucesos ocurridos en Lucanamarca, el comando político-militar de Ayacucho señala la muerte de 25 guerrilleros.
- 20 de febrero, una columna de sesenta senderistas incursionan Sancos para castigar a desertores y a los que apoyaron al comando militar, sin embargo, hay respuesta del pueblo, asesinan al líder senderista Juan López Licerías, camarada *Socorro*, y Rubén Sumari Alanya.

- 21 febrero, se declara la desaparición de: Walter Timpo, Augusto Meza, Félix Huamaní, Bernardo Huaripaucar, entre otros.
- 24 de febrero llega la Fuerza conjunta (ejército y policías) realizando vigilancia terrestre y aéreo, el mismo día dan muerte a 5 terroristas (enterrados en el puente Marita, Sancos).
- 24 de febrero, el ejército desaparece a Gilber Curitumay Allancca (de 16 años).
- 26 de febrero, el ejército ejecuta a Hugo Calderón y a otros comuneros en Pallqa .
- 28 de febrero en el anexo de Lucanamarca, la policía y el ejército realizan una matanza a sangre fría a un aproximado de 10 comuneros y 9 desaparecen entre ellos: Teófilo Cueva, Manuel Casavilca y Juan Misaico (en Lucanamarca)
- 22 de marzo, el anexo de Lucanamarca se revela contra Sendero Luminoso, dando muerte al líder senderista Oligario Curitumay .
- El 3 de abril, se da la masacre senderista a Lucanamarca, deja como saldo 69 muertos, se restringe acceso a la prensa. Sólo logra el ingreso un reportero gráfico de *Caretas*.
- Pasado los sucesos del 3 de abril en Lucanamarca, unos días después, la comunidad da muerte a los padres del líder senderista, Oligario Curitumay.
- El 4 de abril fuerzas conjuntas de los servicios de seguridad fueron enviados a la zona para capturar a los responsables de la matanza de Lucanamarca.
- 2 de mayo, se presenta Julián Vivanco ante la base policial como arrepentido y es asesinado por los policías.
- 21 de mayo, se produce un enfrentamiento en Sacsamarca donde muere un Sinchi y 9 Sacsamarquinos, en Palqa muere el camarada Omar a manos de los Sinchis.
- 20 de diciembre, la Guardia Civil toma preso a Máximo Vilchez, Cirilo Quispe, Macedonio Tinko. Estas personas son llevados a Ayacucho y el 26 de diciembre son liberados.

1984

- Abril en Sacsamarca, se instala la base militar.
- 23 de junio del 84. Sendero Luminoso incursiona Sancos, aprovechando la fiesta del día del campesino, asesinan a dos policías y 24 comuneros, dejando decenas de heridos.
- 16 de julio, desaparece un campesino (Marcial) a manos de efectivos policiales a cargo del capitán *Abuelo*, se presume que el cadáver estaría enterrado detrás del antiguo cuartel de Sancos.
- 28 de julio, fueron asesinados por el PCP-SL dos pastores en la puna, luego incursionan en Sancos.
- 23 de septiembre, Huancasancos es declarado provincia.

1986

- Se instala el puesto Policial en Sacsamarca, retirándose el 90.

1987

- 30 de julio, el PCP-SL incursiona San Martín de Tiopampa, anexo de Lucanamarca y deja como saldo siete campesinos muertos.
- 14 de setiembre, senderistas incursionan a Putaqasa, incendian viviendas y dejan nueve víctimas.

1989

- 10 de febrero, el PCP-SL ataca Putaqasa, mueren dos campesinos.
- 19 de diciembre, matanza campesina en el poblado de Palqa, comprensión del distrito de Sacsamarca, 11 campesinos fueron asesinados en una batalla contra senderistas y militares, se desconoce el número de víctimas senderistas.

1992

- 19 de junio, en una emboscada senderista dinamitan el vehículo de la municipalidad de Sancos, muere el alcalde y su comitiva.

1993

- Se instala la base en Putaqasa

2.3. LOS CASOS DE CHUNGUI Y DE LA OREJA DE PERRO

2.3.1. Datos generales

2.3.1.1 Chungui y Oreja de Perro: consideraciones geo-políticas

El distrito de Chungui, al extremo este de la provincia de La Mar en Ayacucho, colinda con los departamentos de Apurímac y Cusco; en él, podemos identificar dos zonas que se diferenciaron por sus distintas dinámicas históricas. Por ello, distinguimos dentro del espacio dos zonas: Chungui al oeste, *Oreja de Perro*, al este (ver mapa). La zona de Chungui comprende las actuales comunidades de Chungui, Huarcca, Ccarín, Anama, Angea, Rumichaca, Huecchues, Espinco, Churca, Qotopuquio, Tantarpatá, Santa Rosa de Marco, Tiqsiyampa, Cachimira, Villavista, Villa Aurora, Chinchibamba, Chinete y Moyabamba. La subregión denominada *Oreja de Perro* abarca las comunidades de San José de Soccus, Sonccopa, Pallqas, Chupón, Totorá, Putucunay, Tastabamba, Oronqoy, Chillihua, Occoro, Pallqa, Vacahuasi, Hualhúa, Yerbabuena, Ninabamba, Mollebamba y Santa Carmen (Ver Mapa). El proceso de violencia se superpuso sobre los circuitos comerciales que cada zona había establecido a través del tiempo.

Entre Chungui y *Oreja de Perro* no existen vínculos territoriales fluidos. En términos generales, el distrito de Chungui es un lugar de difícil acceso, internamente desarticulado, que carece de una infraestructura vial que vincule a todas las comunidades de la localidad. Las únicas posibles vías de acceso terrestre a Chungui son por San Miguel al oeste y por Andahuaylas al este. La carretera que viene de San Miguel —capital de la provincia de La Mar— termina en Chungui. El recorrido desde la ciudad de Huamanga a este distrito, es de aproximadamente siete horas en carro. Las comunidades de *Oreja de Perro* tienen escasa vinculación con la capital del distrito.

La vía más accesible a *Oreja de Perro* es desde Andahuaylas. Sin embargo, los vehículos solamente pueden llegar hasta el puente peatonal de Cutinachaca, después de tres horas de viaje en carro (no llegan camionetas de servicio rural). Desde allí se continúa por un camino de herradura empinado que llega hasta Oronqoy, en un promedio de ocho horas de caminata. De Oronqoy a Chungui no existen carreteras, solamente vías sin pavimentar que atraviesan esta ruta en tres días aproximadamente. La falta de articulación entre Chungui y *Oreja de Perro* convirtió al en una zona atractiva para el PCP-SL, por la imposibilidad que recorrerlo de manera rápida y efectiva, y las posibilidades de relaizar un trabajo

La provincia de La Mar abarca distintos pisos ecológicos —el valle del Pampas, el territorio alto andino y la selva del río Apurímac— donde habita una población que desde tiempos remotos se desplaza entre la sierra y la ceja de selva. La selva es importante para la población

chunguina, en tanto que ella provee de diversos productos comerciales como café, cacao, maní y, en la actualidad, la hoja de coca. Todas estas características constituyeron una ventaja desde el punto de vista del PCP-SL para establecer los cimientos de su llamado «Nuevo Estado».

La comunidad de Chungui era, en la década de 1980, una organización con importantes recursos, tanto naturales como económicos, pues recababa importantes sumas de dinero a través de impuestos recaudados por la salida de productos como café y cacao hacia la feria de Sacharaccay, en el distrito de Anco, provincia de La Mar (ver mapa). Además, la comunidad contaba con un fondo monetario que provenía del arriendo de tierras a terceros —especialmente en la selva— hasta finales de la década del setenta.

Por su parte, *Oreja de Perro* está articulada con los distritos de la provincia de Andahuaylas (departamento de Apurímac) como Ongoy, Ocobamba y Andarapa (ver mapa). Las relaciones comerciales con Andahuaylas se basan, especialmente en él del comercio de ganado en pie. Por lo general, los comerciantes andahuaylinos provenientes de Ongoy y Andarapa acudían a la *Oreja de Perro* en busca de ganado, que luego vendían en la ciudad de Andahuaylas. Pero al igual que los comerciantes acudían a esta región, muchos comuneros de *la Oreja* se desplazaban hacia los distritos andahuaylinos para vender sus animales a mejor precio.

La zona de *Oreja de Perro* es aún hoy contemplada como una zona rica en pastos por los andahuaylinos. En la actualidad, familias de Andahuaylas contratan a los comuneros de la zona para alimentar su ganado en estas tierras, a cambio de ello, por ejemplo, les dan como pago un becerro al año.

2.3.1.2. Chungui: una zona ausente de haciendas

Como ya mencionamos, Chungui —en su estatus de comunidad— arrendaba terrenos, especialmente los de la selva, por los cuales recaudaba fondos en beneficio de la comunidad. Los arrendatarios se convertían en comuneros temporales que debían cumplir una serie de obligaciones y, a la vez, debían pagar cierta cantidad de dinero al año por el terreno que arrendaban. Procedían de distintas zonas, pero especialmente de Mara Mara y Huaccana (Andahuaylas).

En Chungui, los conflictos por linderos, sobre todo aquellos ubicados en la parte de la selva eran hechos conocidos. El caso más recordado es el de Salvador Arce, abogado huamanguino, que se estableció como arrendatario en el anexo de Chinchibamba y fue a través de relaciones de compadrazgo con las autoridades de la comunidad que llegó a apropiarse de tierras de la comunidad fraguando títulos de propiedad. Arce tenía además la intención de formar una empresa de procesamiento de aguardiente de caña. Frente a ello la comunidad reaccionó expulsando a Salvador Arce de Chungui y expropiando los terrenos de Chinchibamba, para lo cual ingresaron a sus tierras y junto con sus bienes lo maniataron y lo enviaron a caballo a San Miguel.

Arce, a raíz de este hecho, presentó una denuncia en la ciudad de San Miguel. Como resultado de esta acción, la directiva en pleno fue trasladada y encarcelada en dicha ciudad.

2.3.1.3. Oreja de perro: un punto olvidado en el mapa

A diferencia de Chungui, *Oreja de Perro* había sido un territorio poblado de haciendas, especialmente productoras de aguardiente de caña. El sistema de haciendas había colapsado en particular a raíz de dos grandes acontecimientos: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 1965 en la provincia de La Mar y la toma de tierras liderada por Vanguardia Revolucionaria (VR) en 1974, como respuesta a la demora en la implementación de la Reforma Agraria en las provincias de Chincheros y Andahuaylas.

El hecho que más recuerda la población, tanto de Chungui como de *Oreja de Perro*, en relación con la guerrilla del 1965, es el asesinato de los hermanos Carrillo, dueños de la hacienda Chapi, una de las más grandes de la zona. Lo que también recuerdan bien los pobladores fue la violenta incursión de la Guardia Civil en esta zona después de este suceso, exigiendo alimentos, reprimiendo a los campesinos, cometiendo torturas y asesinatos.

La guerrilla del 1965 ha quedado grabado en la memoria de los pobladores de *Oreja de Perro* como una acción exitosa y el «gran movimiento» que los liberó de la opresión y del abuso gamonal, a pesar de la autocrítica que los mismos actores de la guerrilla hicieron más adelante.¹ Esta visión cobró fuerza, sobre todo en los hijos de los ex feudatarios de las haciendas y empató con la imagen que el PCP-SL proyectaba en la zona. El PCP-SL fue confundido —por los comuneros y los jóvenes— en un primer momento, como la continuidad de esta guerrilla, donde el discurso era aparentemente similar, pues buscaban la igualdad y afirmaban luchar por los campesinos.

La provincia de Andahuaylas vivió intensos momentos entre julio y septiembre de 1974, cuando cerca de 30 mil campesinos se movilizan para invadir tierras y haciendas. A la cabeza del movimiento estaba VR y la Federación Provincial de Campesinos (FEPCA).^{*} La infinita prolongación del proceso de afectación y adjudicación de tierras, sumado al hecho que el Estado tomaba decisiones sin consultar con la población campesina, provocaron masivas movilizaciones cuyo punto culminante fue la protesta de alrededor de 15 mil campesinos —según algunos— el primero de mayo de 1973 en la ciudad de Andahuaylas.²

¹ Véase Béjar 1973. Igualmente el documento del II Comité Central del MRTA (agosto 1988) analiza las razones por las cuales la guerrilla del 65 fue derrotada.

^{*} Véase el capítulo sobre historias regionales aquello que cuenta la historia de la región Sur-central, zona IV: Anadahuaylas-Chincheros.

² Mallón, Florencia (1999) ¿Crónica de un sendero anunciado? Velasco, Vanguardia Revolucionaria y «presagios luminosos» en las comunidades indígenas de Andahuaylas, en Steve J. Stern *Los senderos insólitos del Perú*. Lima. IEP-UNSCH, p. 107.

Luego de la ocupación de setenta haciendas —que incluyeron *juicios populares* y expulsión de los hacendos— miembros del gobierno conjuntamente con la FEPCA y VR, firmaron el Acta de Toxama y Huancahuacho entre el 4 y 8 de agosto de 1974, donde se establece el compromiso de parte del Estado de aceptar las demandas y la ocupación de tierra a cambio del reconocimientos de la deuda agraria.³ Sin embargo, el Estado rompe rápidamente estos acuerdos y reprime el movimiento campesino entre septiembre y octubre de 1974, luego de lo cual varios dirigentes campesinos, así como de VR, son apresados. A consecuencia de estos sucesos, tanto el movimiento campesino como VR se fragmentan. La posterior autocrítica de la firma del Acta de Toxama y Huancahuacho que realizaron los dirigentes de la FEPCA y VR y de la «traición» de la cual, desde su punto de vista, fueron víctimas por parte del Estado, llevó a los representantes más radicales de VR a plantear que solamente una guerra revolucionaria, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un *nuevo estado* resolverían los problemas del pueblo.⁴

De acuerdo a la información recogida, el PCP-SL impulsó un trabajo de proselitismo político desde mediados de los años 70 a través del circuito educativo focalizado en los colegios de enseñanza secundaria en Ongoy, Acobamba y Andarapa en Andahuaylas (véase también historias regionales, Ayacucho, zona IV).

El final del sistema de haciendas en la zona de Oreja de Perro se produjo, sin que la guerrilla haya enfrentado a los propietarios; pues el asesinato de los Carrilloos en Chapi generó como reacción que el resto de propietarios vendieran sus haciendas o simplemente las abandonaran, ante la amenaza que representaba la presencia de guerrilleros y el hecho que también podían ser asesinados. El poco apoyo con el que contaban de parte de la población, a final de cuentas, facilitó el desencadenamiento de los hechos y la consecuente creación de comunidades campesinas en Oreja de Perro, salvo el caso de la hacienda Ninabamba, cuyas tierras fueron compradas individualmente por los pobladores como vemos en la siguiente relación (véase también el mapa):

- (a) La hacienda Chapi, propiedad de la familia Carrillo, se convirtió en la **comunidad campesina de Chapi** —hasta 1987 en que el EP le cambió el nombre a comunidad campesina Belén Chapi— comprendía los ex pagos de Chupón, Chapi, Chillihua, Pallqa, Huallhua, Yerbabuena, Occoro y Oronqoy.
- (b) La hacienda Cunaywa, propiedad de la familia Altamirano, se convirtió en la **comunidad de Tastabamba**, con los anexos de Putucunay y Totorá.
- (c) La hacienda de Ninabamaba se transformó en la **comunidad privada de Ninabamba** con sus anexos de Mollebamba y Santa Carmen.⁵
- (d) La hacienda de Soccos se convirtió en la **comunidad de Soccos**

³ (Mallón: 1991, p. 113).

⁴ Véase como ejemplo el testimonio de Lino Quintanilla (1981) Andahuaylas: la lucha por la tierra (testimonio de un militante). Lima: Mosca Azul Editores.

- (e) La hacienda de Sonccopa se convirtió en la **comunidad de Sonccopa**
- (f) La hacienda de Pallqas se convirtió en la **comunidad de Pallqas**.

La desaparición del sistema de haciendas en la zona permite a los comuneros mejorar su ingresos al poder administrar directamente sus tierras de cultivo, pastos y ganado. El desarrollo de la ganadería estaba alentado por el comercio con las zonas de Andahuaylas y La Mar desde donde los comerciantes continuaban acudiendo para comprar ganado y/o realizar trueque con productos industriales como azúcar y ropa. Otros cambios importantes que se produce al finalizar la guerrilla y crearse las comunidades, fue el desarrollo de la educación mediante establecimiento de más escuelas en la zona. Los comuneros de Oreja de Perro empiezan a enviar a sus hijos a las escuelas de los distritos de Andahuaylas, Ongoy y Andarapa, especialmente quienes contaban con mayores recursos económicos, es decir, mayor número de cabezas de ganado.

El mejoramiento económico de las familias de la zona, sin embargo, no se dio por igual. Mientras los que tenían mayor experiencia y relaciones con Andahuaylas incrementaban su capital y sacaban sus productos a Ongoy y a Ocobamba, otros no lograban vender suficiente ganado a los comerciantes de Andahuaylas.

Por otra parte, paralelamente al cambio de la propiedad de la tierra, se intensificaron los conflictos intercomunales por linderos entre las nuevas comunidades, muchas veces basado en las rivalidades heredadas del antiguo sistema de haciendas. Mientras la comunidad campesina de Chapí, por ejemplo, poseía cuatro mil hectáreas, las comunidades de Soccos, Sonccopa y Pallqas eran mucho más pequeñas.

El conflicto por la tierra incluía también por la posesión de pastizales y terrenos de cultivo en la selva, los cuales resultaban siendo muy importantes porque ahí se cultivan los principales productos destinados al mercado como café, cacao, caña y especialmente coca.

Fue así como se acentuó un proceso de diferenciación social en base a la tenencia de tierras entre las comunidades que se formaron oficialmente luego de la Reforma Agraria. Cuando ingresa el PCP-SL en la zona, se sirve de esta situación para ganarse aliados:

No todos éramos iguales. Sólo una parte éramos pobres. A ellos, a los que tenían, eran a quienes los subversivos buscaban al inicio. Había también odio entre pobres y ricos, los contrarios te decían «tú tienes tu animal» entonces te odian, tienes más que ellos, o tienes tu selva aquí o allá, por eso también te odiaban. Los que tenían te odiaban, tu casa te hacías donde podías y te odiaban (CVR.BDI-I-P662. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 60 años.).

Los senderos nos fastidiaban porque nos tenían envidia, como esa fecha teníamos bastantes becerros. En total teníamos como 600 animales, por eso nos decían gamonales.(CVR BDI-I-P612. Entrevista en profundidad, Sonqopa (Chungui). Mujer profesora de 34 años.).

⁵Comunidad privada se le llama a la hacienda cuyos feudatarios compraron las tierras del hacendado, por lo cual cada miembro de la comunidad tiene un título de propiedad sobre el cual puede hacer el uso que desee.

Uno de los testimonios se refiere ,por ejemplo, a los conflictos existentes —debido al paso de ganado entre los terrenos colindantes— entre las comunidades de Oronqoy, Yerbabuena, Panto y VacaWasi con Santa Carmen y Mollebamba, que eran propiedades privadas de los campesinos compradas a las familias Portugal y Cáceres. Las mútuas acusaciones se exacerban durante el periodo de la violencia.

La intención de la gente de Mollebamba había sido terminar con toda la gente de Chapi, de la Oreja y quedarse con todo nuestro territorio (CVR.BDI-I-P618. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Hombre de 40 años, evangélico.)

En la comunidad de Oronqoy se emiten graves acusaciones hacia los pobladores de Mollebamba, Chungui y Pallqas:

Las primeras personas que nos tildaron de terroristas fueron los comuneros de Mollebamba, después de sacar una patrulla de militares y establecerlo en sus casas. Pero estas mismas personas fueron los primeros en venir a favor de los terroristas anteriormente seguro que ellos también han sido engañados estas personas de Mollebamba, Jarín, Chungui y como ellos se encontraban unidos llegaron ellos como los soldados y nosotros no hemos podido reconocer cual de ellos era y estuvimos con miedo como si fuéramos unos animales nos encontrábamos y así pues los comuneros de Mollebamba entraron a matarnos, de la misma forma también entraron los comuneros de la parte de Chungui, Pallqas. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).)

Por el hecho de ser comunidades privadas, los propietarios de Mollebamba y Santa Carmen eran percibidos por los pobladores de Oronqoy como «campesinos que tenían poder económico y ocupaban sus tierras» (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar) 24 de junio del 2002). El PCP-SL más adelante, se beneficia de esta situación creando, como lo reconocen los mismos pobladores, «mayor confusión entre las comunidades», «divisionismo» y «pugna» (ibid).

En resumen, si bien la desaparición de las haciendas representó el fin de una etapa de explotación, sin embargo, esto no significó el final de las pugnas por tierras y linderos. El antiguo sistema de haciendas no fue reemplazado por otra forma de gobierno que haya implicado un efectivo sistema de control, seguridad y organización. Al entrar el PCP-SL, las comunidades no contaban con mecanismos que regulen eficientemente la convivencia y los conflictos entre familias y comunidades. Esta situación fue aún más sentida, ante un Estado ausente que no brindaba suficiente seguridad, menos aún un sistema de administración de justicia adecuado.

2.3.2. Primera etapa: PCP-SL se infiltra a través del circuito educativo

Hemos dicho que, después de la guerrilla del 1965, además de la destrucción del sistema de haciendas, los comuneros acceden con mayor facilidad a la educación.

Nuestros informantes de *Oreja de Perro* manifiestan que antes de la guerrilla, los hacendados no veían con buenos ojos que sus trabajadores invirtieran tiempo enviando a sus hijos a

la escuela. Por esta y otras razones características, el espacio de la hacienda fue sinónimo de vil explotación, como lo manifiesta la siguiente declaración:

Te diré que en esta hacienda de Chapi pues también murió mi abuelo trabajando, vomitando sangre y muchas veces cuando las personas morían trabajando en las haciendas y dejaban vivas a sus mujeres. Este hacendado cuando iba a la hacienda estas viudas muchas veces las violaba. Una de las víctimas también fue la madre de mi madre. Ellas tenían que ir a estas haciendas a trabajar, dejando a sus hijos. Nosotros nacimos cuando la situación estaba de esta misma forma, esto era desde el tiempo de mis padres y mis abuelos que ellos también prestaban servicios en la hacienda, cuando yo tenía más o menos dos o tres hijos que este problema llegó a su fin y es por esta razón que recién pues nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, porque los hijos de las personas de anterior generación pues seguían siendo ignorantes, tanto varones como mujeres, todos somos ignorantes. (CVR BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).)

En forma similar a los casos de Huancasancos y el valle del Pampas, el inicio del PCP-SL en Chungui se dio a través de la transmisión de su ideología y captación de jóvenes en las escuelas. El trabajo del Comité Zonal de Andahuaylas del PCP-SL entre 1975 y 1980 se centró en la formación de cuadros jóvenes y en un trabajo focalizado en los colegios secundarios de Ongoy, Ocobamba y Andarapa donde los hijos de los campesinos de Oreja de Perro estudiaban secundaria, principalmente provenientes los anexos de Tastabamba, Oronqoy, Putucunay, Socco, Santa Carmen, y Mollebamba.

Mi hermano mayor estudió en Ongoy... en ese colegio le enseñaban profesores de ese partido. Yo también estudié ahí pero sólo un año porque tenía miedo, los profesores me obligaban a participar haciendo pintas y a hablar de ese partido, ellos (SL) hablaban de la igualdad (CVR. BDI-I-P627. Chungui (Chungui). Mujer de 40 años).

Estos colegios secundarios contaban con la presencia de maestros de la zona que se habían formado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) donde habían tenido contactos con el PCP-SL. Fue de esta manera que maestros de Ocobamaba y Ongoy regresaron a enseñar a los colegios de su localidad con la finalidad de formar cuadros para la lucha armada que el PCP-SL pretendía iniciar.

Uno de nuestros entrevistados —un maestro de Oronqoy que estudió Secundaria en el colegio de Ongoy— relató que conoció a Abimael Guzmán, quien llegó al colegio de Ongoy en 1975 como profesor invitado de la UNSCH. La visita de Guzmán se concentró, según contó, en dar charlas a los jóvenes estudiantes sobre la realidad nacional y el problema del campesinado. El maestro afirma que centró su discurso en hacer una evaluación negativa de los resultados de la Reforma Agraria y la toma de tierras del 1974. Igualmente, de acuerdo a él, Guzmán señaló que el principal problema de la guerrilla del ELN había sido la falta de formación de cuadros y bases de apoyo en el campesinado; alegando que lo más importante para la revolución era adoctrinar al

campesinado y formarlo dentro de una ideología, lo bastante sólida como para enfrentar una revolución a largo plazo, como había sucedido en China en la época de Mao Tse Tung.

El trabajo que venía realizando el PCP-SL en los colegios de Andahuaylas se difundió hasta Oronqoy, que a mediados de 1978 ya contaba con un colegio comunal por iniciativa de autoridades que habían sido educadas en Andahuaylas. Seguidamente, se creó también en el anexo de Oronqoy el colegio secundario Neri García Zárate.

En términos generales, si bien el recuerdo de los pobladores de la entrada del PCP-SL se sitúa en un momento posterior a los hechos, es muy probable también que la población no se haya percatado de inmediato del tipo de posición que asumían algunos maestros en la zona, lo que indica, según los relatos, el ingreso de PCP-SL fue al inicio paulatino y mantuvo un perfil clandestino y bajo los primeros años:

[...] (Don EH) era la persona quien construyó la escuela (en 1978). El, durante dos años más o menos enseñó y todos los comuneros le pagábamos y después es que ya tuvimos que exigir un profesor que se quede en este mismo lugar. Cuando CP enseñaba en esta escuela es que empezaron los problemas cuando ya eran numerosos alumnos. Pero nosotros éramos personas muy confiadas, además aquejados por nuestra ignorancia. No nos dimos cuenta que el profesor del colegio les enseñaba a nuestros hijos sobre el partido político. No nos dimos cuenta que el profesor era subversivo.»(CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).)

En este colegio dice que el profesor le decía a algunos alumnos que hicieran la hoz y el martillo para ganarse un dinero y entonces profesores como PZ empezaron a presentir que algo iba a pasar y a partir de ahí los profesores dejaron de ser estables. Los profesores del colegio estaban buscados. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).)

La presencia del PCP-SL en *Oreja de Perro* se hizo evidente a raíz de un hecho aparentemente aislado. Después de sufrir múltiples robos, la población con mayores recursos de Mollebamba presentó una denuncia en Andarapa. De manera simultánea, de acuerdo al informe de Proande (2002: 11), el 27 de septiembre de 1982 se produjo un asalto al puesto policial de Erapata (distrito de Incahuasi, Cusco, en la margen derecho del río Apurímac). En este atentado murió un policía. A consecuencias de ello, la policía situada en Illahuasi (distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas en Apurímac) incursiona en Mollebamba, donde toma presos a siete comuneros. Los policiales expulsan a los subversivos de Mollebamba y apoyan la formación de un sistemas de vigías que luego se transforman en rondas campesinas.

En 1982 los ronderos de Mollebamba ingresaron a Oronqoy —lugar considerado base de los subversivos— capturaron a *Venancio*, mando local del PCP-SL, reunieron a toda la población en la plaza y frente a ellos lo torturaron quitándole las uñas y cortándole la lengua la lengua; finalmente, lo colgaron de un poste del colegio. Luego de ello obligaron a la población a organizarse en rondas campesinas, tal como se expresa en las siguientes declaraciones:

Tranquilo era todo, pero cuando empezaron a hacer la ronda y empezaban a decir «hay que cuidarnos del enemigo que está cerca de nosotros, tenemos que cuidarnos» Cuando decían eso teníamos miedo. Nosotros decíamos «quienes serán los enemigos» no sabíamos que eran gente como nosotros nomás. Cómo éramos niños no sabíamos. (CVR.BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 37 años.)

Siempre hacían ronda, entonces cuando habían venido creo que habían venido más antes los *sinchis* y los habían organizado y ahí a mi papá le habían nombrado autoridad [...] y andaban de noche con huaracas y con yachi haciendo reventar hay un látigo que suena como arma haces dar vuelta y suena «plaf, plaf » Con eso andaban y andaban y a veces nosotros hacíamos hervir café cuando prestaban servicio de ronda hacia mucho frío hacíamos hervir agua y cuando regresaban tomaban (CVR.BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 37 años.)

2.3.3. El inicio del conflicto armado

2.3.3.1. La Fuerza Principal (FP) del PCP-SL ingresa al distrito de Chungui

Si la primera etapa se resume en la inserción silenciosa que hizo el PCP-SL desde las escuelas, una segunda etapa, al inicio de la llamada *Lucha Armada* (ILA) se inaugura cuando la FP del PCP-SL toma por asalto a las comunidades para formar Comités Populares. El recuerdo de la población sitúa el ingreso del PCP-SL al distrito de Chungui por dos frentes: el primero desde Andahuaylas hacia *Oreja de Perro* y ,posteriormente hacia 1984, cuando el EP cobra presencia en Ayacucho, desde Cangallo.

Como hemos mencionado, sin embargo, hubo una influencia anterior del PCP-SL en las comunidades de Oreja de Perro anterior, que provino de Andahuaylas y Chincheros desde mitad de la década de los setenta, iniciando acciones de proselitismo en Andarapa, Ocobamba y Ongoy que son zonas próximas a Oreja de Perro.

De esta manera, los pobladores de Oronqoy identifican Andarapa (distrito de Andahuaylas) como el lugar desde donde se desplaza PCP-SL a Oreja de Perro, territorio que fue precisamente uno de los focos de VR durante la toma de tierra de los años 70. Existe, de otro lado, consenso entre nuestros informantes en afirmar que los primeros cuadros del PCP-SL ingresan a la comunidad de Mollebamba desde Andahuaylas y que los primeros en llegar con ideas subversivas, las cuales luego se extienden a Oroncoy, fueron maestros de escuela

De Andahuaylas dicen que ha venido, así cabecillas netamente personas que tenían estudios. Llegan a diversas comunidades: Mollebamba, Oronqoy, Yerbabuena. Llegan para conquistar gente y como todo joven quiere cambios... entonces se unen...» (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.)

El terrorismo ha empezado en Mollebamba con las muertes, en sus casas encerrándolos los han matado con cuchillo, todo le habían amarrado. Después han ido a Hualhwa y a otros

pueblos. (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua, Anco (La Mar) Mujer de 65 años.)

Los comuneros de Mollebamba fueron los que vinieron a organizarnos por vez primera para pertenecer a las filas subversivas. Argumentaban que éramos personas muy pobres. Y estas mismas personas fueron las que nos denunciaron después y trajeron a los soldados, ellos (los pobladores de Mollebamba) ya no eran subversivos sino que ya estaban de parte de los militares. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).)

Llegaron como subversivos de Mollebamba, no pudimos reconocerlos porque estaban con pasamontañas. Te preguntaban el nombre y te anotaban, luego se iban y después de esto ya empezaron a reunirse, hasta que después nos quedamos con los subversivos y después empezamos a unir nuestros animales para todos y hacíamos todo para todos. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui).)

2.3.3.2 El PCP-SL toma por asalto la comunidad de Chapi (1982)

Para el caso de *Oreja de Perro*, de acuerdo un testimonio, «el inicio del terrorismo es cuando por primera vez en 1982 llegaron los subversivos a la comunidad de Chapi, allí quemaron la fábrica de cañazo y organizaron a la gente para que les siga y apoye». Al enterarse los *sinchis* de esta incursión, llegan al lugar e interrogan a los pobladores. La población niega haber alimentado y alojado a los subversivos. Al no darse por satisfechos con la respuesta, los miembros del orden rastullan la población y en una de las viviendas encuentran una escopeta, prueba suficiente para los *sinchis* para no solamente acusar a su dueño de subversivo sino de querer asesinarlos. Para salvar su vida, este poblador se vió obligado a delatar a presuntos subversivos. A los dos días, el grupo de *sinchis* retorna a la comunidad con las personas que habían sido acusadas de pertenecer al PCP-SL. Después de hacer que la población los identifique como los causantes del incendio de la fábrica de cañazo, los llevan a un sector llamado Chinchihuasi y los fusilan (CVR.Testimonio 202014. Chungui (La Mar), 22 de marzo de 2002). Fue entonces que los subversivos retornan para averiguar quiénes habían sido los soplones y vengar la muerte de sus partidarios. Un comunero señaló a tres personas como soplones, quienes fueron llevadas a la comunidad de Vacahuasi y ahorcadas sin mayor miramiento (ibid).

Como en una especie de juego perverso, los *sinchis* retornan a la comunidad de Chapi, pero solamente encontraron ancianos, mujeres y niños, quienes fueron sacados de sus casas. Al preguntarles por sus hijos y esposos, contestaron que se habían ido a trabajar a la selva. A los dos días regresaron los subversivos y después de arengas y un discurso pasaron a organizar a la población en grupos y designando a la comunidad de Chapi como base de Miraflores.

2.3.3.3 La masacre de Santa Carmen de Rumichaca

El 8 de diciembre de 1982 incursionó un grupo de personas armadas y con uniformes de militares en la comunidad de Santa Carmen de Rumichaca preguntando por las autoridades (CVR.Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002).⁶ A los tres días regresaron por la tarde y convocaron a toda la población mediante la campana de la escuela y a una asamblea.

Los supuestos policías (que en realidad eran subversivos) separaron a las mujeres de los varones en dos aulas distintas y les preguntaron «quiénes eran las personas que estaban haciendo la ronda campesina, porque esas personas iban a ser premiadas» (CVR.Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002). Aquellos que fueron señalados como responsables de la ronda fueron asesinados por el PCP-SL esa misma noche (ibid). Entre los asesinados, que de acuerdo a este testimonio fueron nueve (otra versión menciona que fueron ocho), se encontraba el presidente de la APAFA, líderes y autoridades comunales (ibid). Otro testimonio añade también que uno de ellos era el presidente de la ronda campesina.

Varios pobladores decidieron irse de la comunidad, escapando hacia las ciudades, mientras que otros se refugiaron en sus hatos. Otra versión también se refiere a la confusión que hubo frente a estas personas que llegaron de incógnito portando pasamontañas:

Esos —refiriéndose a los subversivos— ya en los morros se habían puesto y veían de donde venía la gente en una de esas cuando estaban hablando, hablando, hablando. A mi papá pues le echan látigo a su arma con su huato (cordon) le echan látigo yo digo «por que le estarán echando látigo» y después a mi tía le dije: «tía papaytam subaycuchcan (tía a mi papá le están dando con el látigo)» y mi tía me dice: «jinam chayna castigacun guardiacunan ñuqapamanpas qamura qinaspanmi chayna mana imatapas allinta rurachirachu jinaptinga castigan (así es, siempre los policías castigan, yo me recuerdo que también vinieron donde nosotros y castigaban, ellos castigan porque de repente no hizo cumplir lo que tenían que hacer)» (testigo de la masacre de Rumichaca. (CVR.BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer.)

El PCP-SL ajusticiaba a las autoridades con brutalidad:

Entonces seguíamos y a toda la gente le reúne a todos los niños, a todos los reúne y a un negociante que había venido de Talavera le quitan su grabadora y la llevan a la escuela y ahí adentro tenían reunión, no sé que harían pues, por que ahí adentro estaban y las señoras haciendo bailar a sus bebés con la música ¡ todos felices bailaban huaynos! todo para que haya más bulla y la gente no escuche lo que gritaban y yo de la cocina que tenía una pequeña ventanita de ahí estaba viendo todo lo que hacían. Unos estaban en una reunión y otros están en otra parte. Yo estaba escondida en la cocina de mi tía y miro pues. Nosotros no habíamos visto ni sospechábamos esto, solo otra gente vino y este pues no dejaba que le conociéramos pues él era así, así, estaba con pasamontañas, quien habrá sido pues, pero nos preguntó nuestros nombre y nosotros sin saber como tontos nos hicimos anotar y el resto de la gente ya tenían muchos apuntes. Esos hombres tenían un libro grande y llaman lista y dicen su nombre de mi papá, pronuncian XZ diciendo dice pues y de ahí le sacan y a mi papá le dicen XZ «presente jefe » dijo mi papá. Decían ya muy bien, muy bien te están llamando corre, corre te están llamando allá le dicen y le hacen correr a la escuela y detrás

⁶ Una característica constante en nuestras investigaciones es que los pobladores denominaban indistintamente militares a policías miembros del ejército y viceversa.

le estaban esperando varios más o menos como seis o siete estaban esperando, y alrededor de la muralla también estaban. Entonces mi papá llega y ni bien estaba volteando a la espalda de la escuela, uno le agarro de atrás y le empezó a patear y mi papá al querer defenderse más ya lo acuchillaron. Un chuchillo se lo meten por la espalda y mi papá empieza a agarrar a puñete y patada y paj, paj paj. Lo tiran y en el suelo lo pisotean y mi papá no muere y cuando le meten otro cuchillo en la barriga y en el corazón grita mi papá «ayyyyyyyyy, ayyyyyyynooo» gritó sólo tres veces. Y después de esto al otro señor ya también, le llama lista y él le dice presente y otra vuelta el otro también corre, corre y el otro también igualito corre y en la lista le llaman, ocho personas habían muerto. Los ocho eran autoridades ellos eran como teniente, presidente de la ronda creo que ha sido el señor PJ creo que él ha sido el presidente de la ronda. (Testigo de la matanza de Santa Carmen) (CVR.BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 37 años.).

Una semana más tarde, el 15 de diciembre, apareció otro grupo de 12 «personas uniformadas» cuando los pobladores de la comunidad campesina de Santa Rosa (un anexo de Santa Carmen de Rumichaca) estaban en asamblea. Estas personas igualmente separaron a varones de mujeres en la escuela y los encerraron. A las ocho de la noche «victimaron a mi padre sin explicación alguna con un cuchillo en la cabeza, sacándoles fuera de la escuela. De igual manera asesinaron a mi hermana» (CVR.Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002). En una tercera incursión, los subversivos mataron a más de treinta personas, incluidos niños y bebés y «obligaron a la gente a que se refugie en el monte, ya no querían que vivan en sus casas. Era necesario que abandonen, porque les decía que la represión iría a la zona y ellos también iban a sufrir» (ibid).

A excepción de los pobladores de Mollebamba, es a partir de estos acontecimientos que los comuneros de Oronqoy, Santa Rosa y Yerbabuena se refugiaron en el monte, abandonando sus casas, animales y pertenencias y empieza la vida en las retiradas.

2.3.3.4 El PCP-SL toma por asalto Chungui

De acuerdo a algunos testimonios de los pobladores de Chungui, el PCP-SL ingresó en 1983. La etapa de adoctrinamiento finaliza en 1983 y el curso de los acontecimientos cambia a partir de diciembre del mismo año, cuando hace su ingreso un grupo subversivo de aproximadamente treinta personas (CVR.Testimonio 202695. Chungui (La Mar), 22 de julio de 2002), algunos de ellos encapuchados para no ser reconocidos. Los mandos que llegaron a la comunidad de Chungui reunieron a la población en la plaza y les hablaron del Partido. Ingresaron a la escuela, separando a los profesores en un ambiente donde les dieron una charla y a los niños les enseñaron cánticos guerrilleros.

Llegaron un día, toda la noche hicieron una asamblea popular así y al día siguiente ya no estaban. Casi todos se habían ido.(CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.)

Ahí mismo de frente llegaron a la escuela y llegaron al salón. Se presentaron «nosotros hemos venido, estamos en la lucha armada, queremos que estudien.Las cosas que está estableciendo este gobierno de Belaúnde tenemos que derrotar. Ya no hay azúcar, ya no hay kerosene, no hay nada y el costo de vida sube cada día. Nosotros tenemos que cambiar esto, somos la última opción. Tenemos que vivir en igualdad y estos miserables que tienen plata tienen que morir.A nosotros el pueblo nos toca gobernar» entonces el profesor salió y ellos —el PCP-SL— escribieron un himno en la pizarra para que lo aprendiéramos (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.)

Nos enseñaron una canción que era así: «por los valles y los Andes guerrilleros libres van, los mejores luchadores son del campo y la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos harán retroceder, seguiremos adelante sin jamás desfallecer, sin jamás desfallecer». Otra era «pueblo nos ordena combatir hasta el final, adelante compañeros nuestra consigan es vencer. Venceremos al fascismo en la batalla final, abajo el imperialismo, ¡viva nuestra libertad! Las banderas de Gonzalo como mantos cubrirán a los bravos guerrilleros en la lucha caerá ¡Viva el PCP!» (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.).

Leoncio, entonces presidente de la comunidad de Chungui, se dirigía a su semental de papa que tenía al otro lado del pueblo, cuando fue detenido por un grupo de subversivos el 14 de diciembre de 1983 y asesinado a cuchillazos (CVR.Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). Esa misma madrugada había sido colgado de un árbol y asesinado el juez de paz del distrito de Chungui en la comunidad de Marco (cerca de Chungui) por las huestes subversivas. Finalmente Ramiro, considerado «próspero comerciante» fue también detenido y asesinado con hacha y cuchillo por un grupo de 15 a 20 subversivos entre varones y mujeres (ibid). Seguidamente a estos asesinatos, el camarada David informa a la población que habían muertos los miserables «ñam sucurunñ» y que ya estaban con San Pedro (ibid).

A continuación los subversivos obligan a la población a festejar. PCP-SL también reparte las mercaderías y productos que habían sido propiedad de Ramiro, además de llevarse ropas, telas y grabadoras. Antes de retirarse los subversivos dejaron la comunidad a cargo del comunero Gregorio que le cambian de nombre por camarada Pepe (CVR.Testimonio 202695. Chungui (La Mar), 22 de julio de 2002). Igualmente la responsabilidad cayó en Justo (cuyo nombre cambió a David), Noël (que pasa a ser llamado Carlos por el PCP-SL) y otros jóvenes como Modesto. Esto significa que el PCP-SL ya había hecho un trabajo previo de identificación de jóvenes más aptos para la destrucción del viejo estado.A las personas más capaces las convirtieron en líderes y posteriormente estas personas convertidas en líderes captaban adeptos y los organizaron para pertenecer a Sendero. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 35 años.)

Más adelante, fue el camarada Pepe, identificado como aquel que comanda a la población a realizar las retiradas (CVR.Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002).

Aparentemente —por las informaciones recogidas tanto en Oronqoy como en Chungui— la reacción de la población no fue rebelarse. Sin embargo, esto no es indicador de plena adhesión, ya que, hubieron pobladores que se refugiaron en sus hatos y migraron hacia las ciudad por temor a las incursiones subversivas, que hacia el 84 se tornaban más violentas.

Hasta el momento, el PCP-SL había sido un actor lejano. Los pobladores habían escuchado del PCP-SL por las noticias en la radio y los rumores que circulaban en los alrededores de la comunidad, las pintas que veían en el pueblo y porque pobladores de Chungui que acudían a la feria de Sacharaccay solían encontrarse con personas extrañas, de los cuales decían que eran «buenos y bondadosos» porque «comparten» las cosas. Nada todavía haría presagiar lo que esa aparente generosidad implicaba para el derecho a la vida y a la muerte.

Y un día llega la gente de la feria de Sacharaccay diciendo que los compañeros venían. La misma gente decía que ya estaban en Anco y que son buena gente y dice que normal agarran las cosas y comparten y normal no hacen nada. (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.).

2.3.3. 5 PCP-SL y las escuelas en la zona de Chungui

Como hemos visto, en 1983 el PCP-SL, se presenta no solamente de manera más abierta y agresiva sino también más persistente, tomando por asalto comunidades, asesinando a autoridades, eliminando y castigando a todo aquel que consideraba representante del desorden (abigeos, mujeriegos, mujeres infieles), así como del poder del viejo estado, riqueza ilícita y el abuso.

Igualmente resulta claro que la población haya anclado el recuerdo del ingreso del PCP-SL posteriormente a lo que realmente ocurrió, ya que, cruzando la información vemos que tuvo presencia a través del circuito educativo.

En Chungui, la asamblea comunal impulsa la creación del colegio secundario Túpac Amaru II en 1978 con recursos de la comunidad. El gestor de la obra fue Helí La Rosa, natural de Chungui que veía necesario desarrollar la educación en la comunidad, para lo cual invitaron a los residentes chunguinos de Lima y Ayacucho a regresar a su comunidad (Libro de actas de la comunidad de Chungui, 1977). En ambos centros educativos la presencia de profesores subversivos fue muy importante para la captación de jóvenes estudiantes, pero también para convencer a jóvenes adultos de la población y sus familias, especialmente aquellas que contaban con menos recursos.

Los profesores que enseñaban en el colegio secundario Túpac Amaru II de Chungui —según señalaron los entrevistados— tenían una filiación a partidos de izquierda, entre los cuales se encontraban algunos militantes del PCP-SL, como lo afirma la siguiente entrevista:

Mi hermana estaba en secundaria y ella decía que sus profesores, especialmente uno que enseñaba Ciencias Sociales hablaba de todo lo que era comunismo y les explicaba todas esas cosas. Ella decía «¡Qué bonito todo lo que es Rusia, lo que es el socialismo, lo que fue la revolución China del 47! » y entonces todo eso ya les explicaban.(CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.)

En el 81, 82 esos años aparecen las primeras pintas. Pero nunca sabíamos de qué se trataba , qué cosa era. Eran pintas color rojo sangre. Aparecían en la plaza, en las piedras, pero no causaba ninguna impresión ¿Por qué habrá sido? Los profesores decían «ah son comunistas» entonces nos explicaban que en otro país, Cuba, ya habían tomado el poder. (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.).

En los años 80 los hermanos Paredes del PCP-SL, que habían sido captados por Edith Lagos, iniciaron a su vez la captación de jóvenes estudiantes del colegio y de otros jóvenes de la comunidad de Chungui. Realizaban reuniones donde hablaban de la inminente presencia del Partido en la zona y de cómo el PCP-SL iba a luchar a favor de los campesinos. Las primeras acciones de este grupo de jóvenes estaban orientadas a realizar pintas en la comunidad en las cuales se vivaba a la Lucha Armada, así también se amenazaba a las autoridades para que dejen su cargo.

Observamos también que, en forma paralela a estos maestros de escuela, habían jóvenes pobladores (especialmente aquellos que mantenían un contacto estrecho con las ciudades) que apoyaban la labor de adoctrinamiento del PCP- SL.

2.3.3.6. ¿Desde dónde llega el PCP-SL a la zona de Chungui?

De acuerdo a nuestros informantes, el PCP-SL llega a Chungui desde Oreja de Perro. De otro lado, de manera simultánea los pobladores señalan que la primera incursión armada provino de Ayacucho, ingresando por Chungui hacia los anexos de Jarín, Churca, Pallqas, Totorá, Tastabamba, Putucunay, Chillihua, Chapi, Yerbabuena, Mollebamba y Oronqoy. Los pobladores de Chungui recuerdan dos mandos importantes del PCP-SL en sus inicios:

Había un joven que no comprendía quechua, sólo hablaba castellano... también había una chica la camarada Nancy, ella tenía su revólver en la cintura.(CVR.BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 55 años, ex rondero de Chungui.)

El compañero Coco era el primero que llegó. Era alto, muy alto, pero yo no sé quién era. También había la camarada Elena que llegó.(CVR.BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 55 años, ex rondero de Chungui.)

Entonces ya llegó PCP-SL primero a Chungui y luego pasó a la Oreja, y empezaron a matar. Mataron en la comunidad de Chupón y de ahí pasaron a otro sitio y regresaron acá a Chungui y también mataron gente (CVR.BDI-I-P604. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 50 años, ex presidnete del Comité de Autodefensa).

Comenzaron entonces una asamblea popular esa noche nos han obligado a todo el pueblo a asistir, han roto las banderas y solamente lo rojo se lo quedaban, lo blanco lo quemaban,

también quemaron la foto del presidente Belaunde. (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años.)

PCP-SL decía nosotros estamos a favor de los campesinos y casa en casa venían a visitarnos y nos invitaban a reunirnos en el estadio. (CVR.BDI-I-P618. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 40 años, evangélico.)

2.3.4. El nuevo poder: las retiradas como estrategia (1982-1987)

Las retiradas fueron organizadas por el PCP-SL con el fin de huir y despistar a las fuerzas del orden, pero también constituir las bases de apoyo del nuevo estado. La población de *Oreja de Perro* vivió en retiradas a lo largo de casi cinco años. Entre 1982 y 1987, los comuneros de las localidades de Orongoy, Santa Carmen, Tastabamba, Putucunay y el resto de anexos se habían dispersado en grupos hacia la selva y la quebrada.

Rápido hicieron que se retirasen y comenzaron a organizar con los responsables que ya habían nombrado. Así empezaron las retiradas y nos esparcieron por aquí y por allá, ya estábamos completamente organizados. (CVR.BDI-I-P638. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 58 años)

En *Oreja de Perro*, el PCP-SL dispuso que la población de las comunidades fueran organizadas en cuatro grupos los cuales debían dispersarse por los alrededores de zona.

A la retirada salíamos, por ejemplo, los que vivíamos en Orongoy a la parte baja junto con los vivían ahí. Estábamos organizados en cuatro grupos y cada uno estaba en un sitio diferente, porque antes vivíamos todos separados en nuestros hatos en Puquiora, Jabas huayco, Jerona, Sarachacra y Ccanjahua. Pero de todos también teníamos casa en el mismo pueblo. Entonces en la retirada hemos estado así separados en cada sitio, estábamos en cuatro grupos que estaban en Sarachacra, Ccanjahua, Puquiora y Accopampa junto con el pueblo mismo y en cada grupo había un mando político y otro militar.(CVR.BDI-I-P657. Entrevista en profundidad, Orongoy (Chungui). Hombre de 45 años.).

En Chungui, se organizó la «retirada» dos años más tarde, en febrero de 1984, ante la amenaza de una incursión del EP en el distrito como lo manifiesta la siguiente afirmación:

Lo que pasó es que los militares empezaron a venir al pueblo —se refiere al pueblo de Chungui— Los Sendero decían que debíamos escaparnos a los cerros y a los montes. Algunas personas empezaron a huir a los montes. El 84 empezaron las retiradas. Cuando estábamos en el mes de la cosecha de papa —mes de junio— en plena cosecha ya estábamos en retirada (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años).

Los mandos locales en Chungi las organizaron. Esta se dio por grupos de familias.

2.3.4.1. La organización del PCP-SL en las retiradas

Dentro de la estructura organizativa del PCP-SL, la población reclutada en retiradas era organizada en Bases de Apoyo que representaba la forma de gobierno del PCP-SL en la zona. La población de las comunidades que fueron organizadas en «retiradas» pasó a representar lo que en el léxico del PCP-SL se conoció como *la masa* que tenía como objetivo formar la base del gobierno del PCP-SL. Asimismo, estas familias proveían a la *Fuerza Local* de militantes.

Todos en la *masa* eran tratados y atendidos por igual, sin que existieran diferencias. Las parejas, viudas y madres solteras dormían juntas con sus hijos cuando estos aún eran pequeños y no habían pasado aún a formar parte de la *Fuerza Local*. En las mujeres recaía el cuidado de los niños huérfanos.

La *Fuerza Principal* era un grupo itinerante que transitaba por toda la zona y supervisaba las acciones tanto de la *Fuerza Local* como de *la masa*. La composición de este grupo era también de jóvenes pero los mandos no eran de la zona. Eran desconocidos como dicen los pobladores de Chungui. En términos generales su armamento era bastante precario y no portaban uniforme (para más información sobre la estructura organizativa del PCP-SL, véase capítulo sobre el PCP-SL como actor del conflicto armado en este mismo informe. Solían llegar con víveres y vestimentas para la masa, producto de sus patrullajes y tomas de comunidades. Estos bienes eran repartidos por la *Fuerza Principal* que llegaba cada cierto tiempo a supervisar el desarrollo de la guerra en la zona.

Igual que en otros pueblos teníamos niños abandonados. Cuando morían sus padres nosotros les dábamos alimentación y ropa. (CVR.BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 35 años)

Utilizábamos la poca ropa que ya teníamos y un poco de ropa que nos traía el grupo que venía con el camarada Aurelio. Ellos nos entregaban algunas ropas y sandalias. El camarada Aurelio se las entregaba al mando de nuestro grupo y él hacía la entrega de acuerdo a la necesidad. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años).

Las directivas se daban a través de una compleja red de mandos, desde la Dirección Central, pasando por los comités regionales y zonales. La responsabilidad del grupo estaba a cargo de un mando político y uno militar, quienes a su vez habían nombrado a un responsable de producción, uno de organización, uno de vigilancia y una responsable de las mujeres. Los varones se dedicaban a trocha a través de la selva para cultivar maíz, calabaza y camote. La población se transformó en recolectores de frutos de la selva también, labor en la que eran apoyados por los niños. Las chacras eran cultivadas comunamente y la producción debía repartirse en forma

equitativa entre todos los miembros de *la retirada*. En teoría nadie debía recibir más que otro, ni siquiera los mandos.

Los mandos mandaban llevar comida, ordenaban lo que se cultivaba, mandaban a otros lugares donde estaban los caminantes. Había vigilantes para que nos avisen qué sucedía... también había un mando encargado de la organización. (CVR.BDI-I-P613. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 60 años).

En estos lugares sembrábamos en los lados extremos de Chapi. Después de poner vigilancia en los lados extremos de los terrenos, los quemábamos para sembrar luego maíz, zapallo y esas cosas que comíamos. También sembrábamos yuca, camote (CVR.BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Mujer de 50 años).

Los niños entre ocho y diez años eran designados «niños pioneros». Ellos ayudaban a sus madres acarreando agua, alimentos y leña al campamento. Paralelamente a estos deberes debían asistir a las escuelas populares. Uno de los mandos les enseñaba canciones sobre la guerrilla, a dibujar la hoz y el martillo como símbolo de la revolución y estrategias para escapar en caso de ocurrir una incursión militar. Toda la clase se impartía en forma oral y utilizando gráficos, ya que la mayoría de estos niños no sabían ni leer ni escribir.

Si estaba con los niños y niñas pioneros. Nos enseñaban canciones y nos decían constantemente que íbamos a llegar al poder y que, si escapábamos, los militares nos iban a matar. (CVR.BDI-I-P667. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Hombre de 38 años).

No nos enseñaban a leer o a escribir, todo era verbalmente. Sólo ellos —haciendo referencia a los mandos subversivos— tenían un cuaderno para poder dibujar, graficaban cómo debíamos de escapar de los militares, cómo esquivar las balas y todo eso (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años).

Desde pequeños los formaban en una ideología de enfrentamiento con las fuerzas del orden. El PCP-SL se convertía para ellos en una especie de manto protector. Al cumplir los doce años, los niños y niñas eran separados de sus padres y llevados a la *Fuerza Local*, donde serían entrenados para convertirse en militantes de la *Fuerza Principal*. Solamente los más listos y fuertes eran reclutados y preparados para soportar las duras condiciones de vida que iban a enfrentar y formar parte de la *Fuerza Principal*. Este grupo estaba compuesto por jóvenes, adolescentes y en muchos casos niños de 12 años tanto varones como mujeres. Caminaban por los montes con un mando político y uno militar y pernoctaba en los campamentos en los que llegaran y eran atendidos por la *masa*. Dormían aparte de *la masa*, varones y mujeres juntos intercalados por sexo de forma muy pegada, a esta forma de dormir le llamaban «acuchillarse».

Debíamos dormir pegados, nos intercalaban hombre, mujer, hombre, mujer y entonces a eso le llamaban ellos «acuchillarse». (CVR.BDI-I-P665. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Hombre de 33 años).

Conforme avanzaba el conflicto armado, la *masa* empezó a vivir a salto de mata:

Nueve años ya creo que tenía. Con esta gente estuvimos caminando por Chapi, Achira y por los montes caminábamos trabajando y cuando venían los soldados nos escapábamos y a veces a muchos de nosotros lo mataban y muchos de nosotros nos escapábamos en fin así andábamos.(CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años).

Cuando las mujeres quedaban embarazadas, no recibían ningún trato especial. Solo cuando estaban a punto de dar a luz eran separadas y llevadas a una cueva para que los niños nacieran. Luego regresaban a la *masa*. En el caso que se tratara de una mujer de la *Fuerza Local*, durante su embarazo pasaba a la *masa*, luego regresaba a la *Fuerza Local*.

Muchas veces a causa de la desnutrición, nosotras las mujeres en los montes dábamos a luz en las cavernas, a niños retrasados o no sobrevivían. (CVR BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui). Mujer de 60 años.)

La violencia recrudecía y la comunicación entre las tres fuerzas del PCP-SL se va deteriorando, especialmente entre la *Fuerza Principal* y la *Fuerza Local*. Mientras pasa el tiempo, las supervisiones de la *Fuerza Principal* se van haciendo cada vez más esporádicas lo cual permitía que tanto la *Fuerza Local* como los mandos de la *masa* fuesen adquiriendo mayor autonomía y poder. Los entrevistados señalan que la mayor parte de los abusos provenían de la *Fuerza Local*. Ellos cometían abusos con sus propios paisanos, castigándolos y en muchos casos ejecutándolos con armamentos rústico, algunas granadas y carabinas. Muchas veces también las rencillas personales y familiares se convierten en los móviles de las ejecuciones a nombre del PCP-SL.

De los mandos (de la *Fuerza Local*) no conocíamos sus (verdaderos) nombres. Ellos nada más te organizaban o te hacían escapar —se refiere a la *Fuerza Local*— entonces tenías que estar de acuerdo con ellos. Si en caso te oponías te amarraban, te castigaban y luego te mataban (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años)

Así mismo las violaciones sexuales teóricamente prohibidas y castigadas con la muerte, se empiezan a presentar con mayor frecuencia.

El PCP-SL implanta un férreo orden y control. No perdonaba ninguna traición o sospecha de traición o que osaran cuestionar el nuevo orden que estaba implementando el Partido. Cualquier deliberación era inmediatamente reprimida con castigos físicos.

Ellos —el PCP-SL— venían a ver si estaban haciendo caso, si estaban organizándose bien, si todos están comiendo igual, a ver qué errores cometíamos y a los que cometían errores

los han amarrado y los han matado. (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años)

Yo estaba preocupada porque los compañeros llamaban a asamblea y los que no asistían iban a morir. De mucho miedo fui a la asamblea. A mi esposo y a mi papá, como no fueron les dieron mil látigos hasta que se enfermen. Luego cocinábamos juntos porque cuando nos encontraban cocinando individualmente se molestaban y nos castigaban. (CVR.BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 35 años).

La vida en las retiradas se cometió en un tormento infernal. Un testigo que en aquel entonces tenía siete años de edad relata cómo fue especialmente *la masa* la que posee menores ventajas que la *Fuerza Principal* y *Local* para mantenerse viva y escapar:

Tuve mucha pena. En mi base quedamos pocos y escapamos hacia la puna donde comimos papas. El enterarnos que los sinchis se fueron, volvimos los que quedamos de mi base al sector de Achira, donde volvieron a venir los subversivos para organizarnos nuevamente. Nos dijeron: Nosotros somos bastantes, como la arena del río y los militares son como las piedras grandes del río. La organización de las masas en mi base era: las señoras se ocupaban en cocinar y —si los adultos trabajaban en la chacra—, llevar la comida, los adultos y jóvenes participaban en la fuerza principal y a la vez eran agricultores. Todos trabajaban para todos. No había individualismo. Los niños mayorcitos ayudaban en lo que podían y a los más pequeños, el senderista SF nos enseñaban a leer, escribir, nos habían cantar y jugar. Yo tenía siete años en ese entonces. Lo que me duele recordar es cómo las masas morían porque no podían escapar de los ataques que hacían los militares. La Fuerza Local y Principal casi nunca caía. Eran jóvenes a partir de los 12 años y los adultos hasta los 40 años de edad, quienes podían escapar fácilmente de los militares, pero no podían enfrentarse, porque sólo eran veinte combatientes y estaban armados con palos, hondas, dos escopetas y dos fusiles. Así iban muriendo muchas masas y quedábamos pocos (CVR. Testimonio 202014. Chungui, La Mar, 22 de marzo de 2003)

Este mismo testigo reporta que en 1986 desaparece la Base de Yerbabuena al irse muriendo la gente. Los sobrevivientes de la Base de Miraflores pasaron a la base de Pucallacta. Las 27 víctimas regresaron a Chapi buscando comida. Allí decidieron presentarse a los militares.

emprendimos un viaje a la comunidad de Tastabamba, caminamos dos noches... cuando llegamos al río Pampas teníamos tanta hambre que comíamos raíces, troncos podridos y fruta verde. Cuando pasábamos al departamento de Apurímac, en las alturas de la comunidad de Cabaña, un anciano nos da de comer y nos aconseja que nos presentemos a la Base Miliar de Ocobamba (provincia de Chincheros, departamento de Apurímac). (CVR. Testimonio 202014. Chungui, La Mar, 22 de marzo de 2003)

La *masa* se encontró entre dos fuegos:

Estos subversivos al igual que a los militares llegaron también matándonos a muchos de nosotros estos nos mataban argumentando que nosotros éramos soplones y por esta razón le teníamos miedo a los subversivos y como también a los militares y posteriormente con el miedo empezamos a escapar al monte, como a mi hermano también le habían matado. Nosotros no podíamos apoyar a ninguno de los dos por que uno de ellos nos buscaba y si nos encontrábamos con el otro nos mataba y por esta razón nosotros no sabíamos que hacer, yo creo que es Dios quien me ha salvado de muchos incidentes horribles. Como le decía es que por todas estas razones nosotros salimos de nuestra casa por que nos quemaba junto

con todos nuestros hijos y cuando estuvimos en nuestra casa de campo venían también con unas dos personas más que habían capturado y ellos al rendirse traían a los militares como guía al lugar donde nos encontrábamos y al encontrarnos nos mató a muchos de nosotros junto a nuestros hijos mas la verdad es que en acontecimientos como esto han muerto muchas personas y es por esta razón que salimos de nuestra casa y estuvimos en los montes en pequeñas casa que habíamos construido, además como nosotros nos conocíamos ninguna ciudad, ni conocíamos el camino para poder irnos a otros pueblos, es por esta razón que nosotros nos quedamos en nuestro pueblo. Nosotros nunca le hicimos daño a ninguna persona nosotros permanecemos puramente muchas veces hasta comiendo sin sal, trabajábamos. Pero a pesar que nos mataban a muchos de nosotros las personas que quedábamos seguíamos trabajando cuidándonos y protegiéndonos cada uno de nosotros, sembrábamos maíz, papa, y de esto nos alimentábamos en nuestro pueblo mismo, sólo nos hacia mucha falta la sal, por ello comíamos sin sal y a veces preparábamos mazamorra de calabaza. Siempre comíamos sin sal además no conocíamos ningún pueblo para poder ir adquirir la sal. Nosotros parecíamos unos niños en nuestro pueblo...si queríamos irnos del lugar tampoco podíamos debido a que el único puente de Punki lo habían volado por donde hubiéramos pasado, pero no sabemos cual de ellos cortó este puente de repente la patrulla o tal vez los subversivos quienes habrán sido ni siquiera eso sabemos nosotros por que estuvimos en el monte ocultos y no salíamos y cuando los militares nos acechaban no tenias nada para comer y es cuando sobrevivíamos comiendo hierbas, tomando agua, y en fin estuvimos así de hambre, es todo lo que sé mamita. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Las mujeres con niños no podían esconderse y escaparse tan rápidamente: «Escapar con niños era más difícil, te alcanzaba entre dos y te mataban.» (CVR.BDI-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años). La situación de las retiradas empeoró cuando entran los militares a eliminarlos:

Cuando empezaban con esta búsqueda nosotros nos escondíamos en los montes, en los huecos, las cavernas, en las aguas, etc., nosotros pasamos todo tipo de peripecias después de todo esto solo hemos podido sobrevivir unos cuantos nada más y retornamos a nuestro pueblo a pesar de estar buscados, perseguidos y después tuvimos que huir a las ciudades y conforme van pasando los años solo pudimos volver a nuestro pueblo solo pocas personas, en estas caminatas que realizábamos muchos de nosotros murieron por hambre, disparados con bala que a muchos de nosotros nos llegaba en la cabeza, en la mano, en el cuerpo etc., algunos en la fuga se rompían los pies y de otros modos diferentes mas pues fallecieron y otros a causa de ellos quedamos sin brazo, sin manos, perforados por la bala pues no estuvimos ilesos sino dañados, desnutridos, te diré que hasta el día de hoy yo me encuentro desnutrida, con poca sangre por que no tenemos para alimentarnos bien, muchas veces por causa de la desnutrición nosotras las mujeres en los montes dábamos, en las cavernas a luz niños retrasados y si muchas veces estos niños sobrevivían hasta ahora sufren una desnutrición y estos niños no se encuentran bien, los hijos de muchas personas han muerto agujereado por bala, y otros en manos de los soldados y nuestros padres muchas veces asesinados por los subversivos, otros murieron arrastrados por el cuse del río cuando estuvimos escapando, arrastrados por las piedras, etc., nosotros nos fuimos a los diferentes pueblos en completo abandono sin prendas con las justas llevábamos nuestra ropa encima, ni siquiera teníamos una manta, ni una ropa, así nos íbamos del lugar y aquellos que retornaban nuestro pueblo mucho mas antes que nosotros aprovechaban de nuestros animales y de las cosas que quedaban. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Nuestros informantes recuerdan cómo los militares abusaban de las mujeres:«En tiempo de militares tambien era así, cochino, cualquiera te agarraban los militares y te violaban. Estes donde

los terroristas de respetar te están respetando, pero los pasan al pelotón, ellos con cuchillo te hacen dormir, entonces ahí lo violaban a las chicas»(CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años)

Ya no tenían sal, ni ropa, menos ojotas para caminar. Empezaron a morir de tifoidea y de paludismo. Las muertes por causa natural, las emboscadas y las amenazas para no escapar aumentaban, mientras los ánimos de la masa bajaban; sin embargo, los mandos constantemente les decían que ya estaban cerca del poder, que ya estaban en la puerta del Palacio de Gobierno.

Muchas veces caminábamos por toda la quebrada sin calzado y como nos encontrábamos en una situación de extrema pobreza (parece que ahora hay alguna ONG ahí...), eso nos obligaba a fabricar una protección para nuestros pies. Para protegernos de las espinas envolvíamos nuestro pie con la hoja seca del plátano y este lo sujetábamos con la fibra del plátano. Nos duraba muy poco tiempo y apenas caminábamos unos dos o tres kilómetros este se nos acababa y nuevamente caminábamos despacio.(CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Hombre de 30 años)

Ya no teníamos ropa, era marzo y el río había bajado, y no nos dejaban solos, nos amenazaban diciéndonos que nos iban a volar en pedazos. (CVR.BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 35 años)

Moríamos con muchas enfermedades aparte de todo esto, pues imagínate con qué alimento vamos a estar bien en esos lugares. En ese monte que no había absolutamente nada. Comíamos hierba en el monte y cuando nos perseguían los militares, hasta nuestros niños comían hierba y tierra. Al no poder soportar el hambre, estos niños comían como especie de una cabra hierbas y tierra, como había peligro no podíamos salir a ningún lugar.(CVR.BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer de 50 años)

Los niños estaban desnutridos y lloraban de hambre por lo que los mandos de la masa y de la Fuerza Local decidieron que fueran ejecutados. En varios de los campamentos de «Oreja de Perro» obligaban a las madres a matar a sus propios niños, algunas los ahogaban en su pecho, pero cuando la madre no quería acatar la orden del mando político del campamento, este agarraba los niños pequeños de los pies y les golpeaba la cabeza contra una piedra. Otros los juntaban y les amarraban una soga alrededor del cuello y los ahorcaban. El argumento para asesinar a estos niños era que los llantos los delataban frente a las patrullas de militares.

La propia madre mató a su hijo, lo mató en Patawasi. Era de noche y no sé adonde lo habrán llevado, tampoco sé si lo han enterrado... era un bebito, habrá tenido aproximadamente medio año... lloraba mucho y para que no lo oyeran los soldados llamaron a la madre y le dijeron «miserable, calla a tu hijo» y cuando le obligó a callarlo, ella —la madre— lo apretó entre sus senos al bebé y este murió asfixiado, le quitó la respiración(CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años)

Cuando lloraban de hambre los niños, lloraban pues y ellos los mataban cruelmente. ¡Qué iban a hacer los niños, tenían hambre y lloraban!... los mataban ahorcándolos, los apretaban del cuello y le tapaban la boca así le mataban a los niños... yo he visto que han matado a una niña de una señora que estaba junto a mí, yo estaba viendo (CVR.BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Mujer de 50 años)

A pesar de las constantes amenazas de los mandos locales, algunos decidieron escapar, más aún cuando por la radio comenzaron a escuchar que los militares ya no estaban matando a los *capitulados* (estos eran los arrepentidos se presentaban a una patrulla militar o a una de las bases).

2.3.5. Las incursiones del EP

2.3.5.1. La llegada del EP a Chungui

La primera incursión del EP en Chungui se realizó en marzo de 1984. Al llegar los militares al mando del Capitán Terrones encontraron un pueblo vacío. A los pobladores que encontraron en los alrededores los llamaron para regresar a la comunidad y acercarse a la patrulla. Así un grupo de aproximadamente quince personas regresaron. Este grupo que se acercó a los militares no había salido de la comunidad hacia la selva —como había sido la orden de PCP-SL— sino que se quedaron en sus hatos en las alturas con sus animales, cerca del pueblo. Ellos acudieron al llamado del EP por miedo y probablemente no estaban de acuerdo con PCP-SL. Al lograr que regresara un grupo y se estableciera nuevamente en el pueblo, en una segunda incursión del EP, a inicios de abril del 84 el Capitán Edison Rivas formó el grupo de Defensa Civil, que tiempo después cambiarían de nombre a Ronda campesina (testimonio 202695 y 204052). Junto con el grupo de Defensa Civil empezaron a salir a patrullar la zona. La orden que tenían era la de asesinar a quien encontraran en la selva, así se encontrara indefenso.

A fines de abril de 1984, se instaló la base militar en Chungui (testimonio 204052). La base obligó a la población concentrarse en el pueblo, restringió la salida a la selva y a la feria de Sacharaccay. La población en un primer momento debía dormir en la base, que era el local municipal. Se instaló un sistema de vigías y el patrullaje junto con defensa civil fue constante.

El PCP-SL no había logrado tener mayor acogida en la población de Chungui, pues a la primera incursión militar varios pobladores regresaron a su comunidad y se organizaron junto con los militares en comités de defensa civil para iniciar la guerra contra los subversivos. Cada vez que salían de patrulla, los militares iban al medio protegidos por atrás y por delante por la defensa civil. Cuando traían gente que capturaban en el monte —en el caso que los trajeran con vida— llamaban a toda la población de Chungui a que se formaran en fila y les hicieran una suerte de «callejón oscuro», donde estaban obligados a insultar y golpear a los capturados, de lo contrario la población era castigada.

Capturaban a cantidad de gente y nos hacía reunir en la plaza. Nos decían «tienen que meterle palo a los Senderistas» sino le metías palo creían que eras parte de ellos (de PCP-SL), entonces todos hasta los chiquitos metíamos palo. y si te veían que no pegabas entonces al toque te reclusa y comenzaba a golpearte. A los niños nos hacían comer bosta

sino golpeábamos (CVR.BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 30 años, agrónomo).

Las personas que participaron en la organización de defensa civil en la zona de Chungui — que fueron todos los varones y niños a partir de los 14 años— señalan que entre 1984 y 1988 fue la etapa más cruel y sangrienta de la guerra, especialmente por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que realizó el EP. Los que fueron miembros de defensa civil intentan constantemente excusarse de algún tipo de responsabilidad, culpando de todas las acciones a los militares y a quienes están muertos.

Entonces el capitán nos inculcó y como castigo me mandaron con dos terrucos. Ahí es que lo han colgado de un árbol y empezamos a quemar con chamizos, con todo desperdicio, con troquitos y empezaron a quemarlo y no se moría. Calatito no más estaba con las manos atadas. Eso fue nuestro castigo porque se nos escaparon terrucos. (CVR.BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre de 60 años

El capitán *Samuray* —responsable de la base en 1985— es uno de los militares a quien la población de Chungui señala como uno de los más sanguinarios y violentos militares que haya tenido la base de Chungui. Por ejemplo, el primer presidente del comité de defensa civil de Chungui, fue Maurino Quispe quien por órdenes del Capitán Samuray fue asesinado junto con su vice-presidente, José Jaycuri en 1985. Las razones no resultan claras, sin embargo la gente de Chungui, presume que Samuray lo castigó porque creía que era senderista.

2.3.5.2. La incursión del EP en Oreja de Perro

Como habíamos mencionado anteriormente, la zona de Oreja de Perro había sufrido la incursión de los *sinchis* de Andarapa e ingresaban esporádicamente desde 1982 a la zona para supervisar el funcionamiento del sistema de vigías, que desaparecieron en la mayor parte de las comunidades con las ejecuciones que PCP-SL realizó en 1983, salvo en Mollebamba donde continuaron funcionando hasta que se convirtieron en Defensa Civil.

En la comunidad de Chungui se estableció la base militar en 1984 que dependía de Ayacucho mientras que en Mollebamba se estableció la base militar en 1985 que dependía de Apurímac. A su vez se estableció en 1986 se instaló una base militar en Pallqas, pero luego de un ataque fue desplazada a Chapi en 1987.

Entre febrero y marzo de 1984, el EP de Andahuaylas ingresó a Oreja de Perro por Mollebamba donde organizaron a la población en Defensa Civil. Así se iniciaron incursiones más sistemáticas a la zona de la Oreja de Perro, tanto el EP como los miembros de defensa civil de Mollebamba

Desde Mollebamba, los policías que se habían establecido en esta localidad, programaban salidas hacia las comunidades anteriormente mencionadas. Solamente encontraron comunidades despobladas. De esta manera, de acuerdo a nuestro informante: «acordaron hacer redadas y salir en busca de la gente. Entonces a los que encontraban ya les mataban. Por otro lado, saqueaban sus casas y se llevaban sus pertenencias, arreaban sus animales. En ese momento empezó el pillaje. Se llevaron miles de cabezas de ganado en complicidad con los ganaderos de Andahuaylas y Ayacucho. Los propios mollebambinos se aprovecharon de los bienes patrimoniales de todas las comunidades que sufrieron el flagelo» (CVR. Testimonio 201316.Chungui (La Mar), 24 de junio del 2002).

Los causantes de la represión, de acuerdo a los pobladores de Oronqoy, fueron los comuneros de Mollebamba:

Las primeras personas que nos tildaron de terroristas fueron los comuneros de Mollebamba quienes después de sacar una patrulla de militares y establecerlo o instalarlo en sus casas. Pero estas mismas personas fueron los primeros en venir a favor de los terroristas anteriormente seguro que ellos también han sido engañados estas personas de Mollebamba, Jarín Chungui, etc., y como ellos se encontraban unidos llegaron ellos como los soldados y nosotros no hemos podido reconocer cual de ellos era y estuvimos con miedo como si fuéramos unos animales nos encontrábamos y así pues los comuneros de Mollebamba entraron a matarnos, de la misma forma también entraron los comuneros de la parte de Chungui, Pallqas ellos vinieron proponiéndonos de cómo deberíamos de ser por que somos pueblos hermanos. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

El razonamiento que hacen es que los militares de por si solos no hubieran podido llegar hasta Oreja de Perro:

Yo creo que los soldados solos no podrían venir a este lugar por que ellos eran personas de otros lugares y impulsados por los comuneros del lugar donde les había instalado el gobierno desde estos lugares venían estos militares con los mismos comuneros de Molle y lugares cercanos para matarnos. (CVR BDI-I-P643.Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Algunos de los antiguos subversivos se pasaron del lado de los militares, especialmente en Mollebamba. En una de sus incursiones, tanto la defensa civil como el EP de Andahuaylas ingresaron a Oronqoy; ahí sólo encontraron un pueblo abandonado con animales esparcidos en las pampas. Aprovechando la ausencia de la población tanto la Defensa civil de Mollebamba como el EP saquearon, quemaron las casas y se llevaron los bienes que la gente había dejado, así también algunos empezaron a llevarse animales que encontraban en su camino.

Entonces vino los militares de Mollebamba junto con los civiles y ahí empezó todo. Quemaron casas y todos los pueblos los quemaron. De ahí empezaron a traerse los animales. En todo eso ha participado Walter Díaz, él trabajaba con los militares y el Partido lo buscaba porque él se había escapado de PCP-SL. (CVR.BDI-I-P638. Entrevista en profundidad, Hualhúa (Amco). Hombre de 60 años)

Las matanzas y el arrasamiento de los pueblos fue en general. En toda la zona no existió comunidad o anexo que se librara de alguna incursión militar, con lo que ello implicaba que era el robo de bienes, animales, ejecuciones si encontraban gente cerca y la respectiva quema de casas. De acuerdo a los testimonios, la violencia provenía tanto de militares como de ronderos. «La gente de Mollebamba decía «mátenlos. Maten al ratero, al terruco que nuestra comida se llevó, que hicieron masacre» así decían los de Mollebamba.» (CVR.BDI-I-P619. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Hombre de 38 años.)

Según los testimonios, en las siguientes incursiones que realizaron el EP y la defensa civil de Mollebamba, a toda persona que encontraban en el campo lo mataban, pero antes eran torturados, mutilados; a las mujeres —incluyendo a las niñas— las violaban desde el oficial de mayor rango hasta el último miembro de defensa civil.

Le teníamos más miedo a los ronderos y a los militares , especialmente a los ronderos porque mataban así nomás. Sus ojos de las mujeres sacaban, sus senos los cortaban, sus dedos le sacaban, sus orejas cortaban, entonces de eso tenía miedo. Así aniquilaban. (CVR.BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer de 60 años)

Manifiesta un informante (CVR. Testimonio 201316.Chungui (La Mar), 24 de junio del 2002) que en Sillapata, a orillas del río Pampas, que fuerzas represivas encontraron 60 señoras que fueron asesinadas a mansalva formándolas en columnas.⁷ Igualmente denuncia que arrojaron a 120 mujeres que se habían escondido en la puna al vacío, desde Sonqo María. Finalmente reporta que en Oronqoy, en un sector llamado Tayaccata, encerraron a 120 personas entre varones, mujeres y niños en una casa para quemarlos vivos. Este informante también explica que —a raíz de estas matanzas extrajudiciales, acciones rapaces y actos de pillaje de miembros del ejército— pobladores naturales de Santa Carmen, se aproximan al cuartel de Andahuaylas en 1986 a denunciarlos. De acuerdo a este testigo, el mismo comandante de la Base, al tomar conocimiento de estos crímenes llama a la prensa. De acuerdo a lo que reporta este testimonio, este hecho constituye un viraje importante para el cambio de actitud y estrategia de las fuerzas del orden. Fue a partir de ese momento que empieza el rescate de los pobladores a manos de los subversivos. Estas acciones permitieron rescatar a 1215 personas de Oronqoy, Chapi, Pallqa, Vacahuasi, Putucunay y Totorá que permanecieron varios meses en Andahuaylas.

Conjuntamente con estas medidas, se establece una base militar en Chapi a finales de 1987 que retornan 150 personas.

Otra versión que afirma que a raíz de la extorsión, los abusos y las violaciones sexuales cometidas por los militares, los pobladores de la zona de Chungui mandan un memorial al cuartel de Ayacucho. Cuando llegan al cuartel, «solo en la mesa de partes les recibieron el documento y no

les dejaron hablar con el general» (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). Es más, esta comitiva fue detenida por esa acción y tuvieron que pagar con un «poncho de Villa» para salir en libertad (ibib). Los pobladores no dieron su brazo a torcer y al año siguiente volvieron a mandar «una nueva queja, con otro comisionado al cuartel de Ayacucho»..

Lo cierto es que la población recuerda que es con la llegada del Mayor Miguel Seminario *Ayacuchano* (CVR Testimonio 202678), que fue designado como jefe de la base de Chapi entre octubre y diciembre de 1987, que la actitud del ejército cambia. «Ese Mayor Ayacuchano no permitía que se le golpee a los detenidos. El reúne a la gente de los montes y hace el repoblamiento de Chapi antes del 25 de diciembre de 1987», lugar que el Mayor *Ayacuchano* cambia por Belén de Chapi por la fiesta de Navidad »(CVR. Testimonio 202678. Chungui (La Mar), 5 de noviembre de 2002). Fue a partir de esa fecha, con el Mayor Ayacuchano que «lograron algo de pacificación» (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002).

Cuando me agarraron me encarcelaron los soldados, me agarraron en Matachacra, pero no nos mataron sino nos juntaron. Los que querían matarnos eran los ronderos de Mollebamba, pero entonces un oficial nos libró (CVR.BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Mujer de 38 años)

Ya no los castigaban mucho, sólo golpeaban a todo los que agarraban y en el río los bañaban, pero ya no mataban a los que capturaban, los mandaban aquí a la base de Pallqas y a otros lugares, pero no los mataban. Sólo los agarraban a 20, a 30 hasta a 40. Los agarraban con sus ollitas, con sus mantitas venían. Otros venían con sus bebitos, otras mujeres estaban embarazadas y lloraban. Ellos decían —refiriéndose a los capitulados— «teníamos miedo de morir por eso escapábamos».(CVR.BDI-I-P636. Entrevista en profundidad, Pallqas (Chungui). Mujer de 40 años)

La misión central de las fuerzas del orden ya no era asesinar a mansalva de manera indiscriminadamente a todo aquel que los miembros del orden encuentren a su paso en las retiradas. Ahora la consigna era salvar a los pobladores y recuperarlos (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002).

Los militares habían venido de Chungui, Mollebamba y también vinieron los civiles — refiriéndose a la patrulla de defensa civil— también de los mismos lugares y otros anexos. Nos capturaron a todos, pero ya nos tenían de forma normal. Nos dijeron: «¡Alto! Ya no escapen que no los vamos a matar» y después nos llevó hacia los sembríos de papa, que ya estaban buenos para comer y al lado de este sembrío teníamos un local que habíamos construido y ahí se pusieron a cocinar las señoras para que pudiéramos comer papa. Ahí es cuando nos pusimos a recuperar del hambre y después de esto nos condujo hacia Chapi. Ahí en Chapi sólo habían helicópteros que transportando a los militares.Después de estos ya estuvimos contentos porque ya no mataban. A los mandos subversivos les tomaban su manifestación y después se los llevaron en helicópteros. Los llevaron presos y ellos estuvieron presos en diferentes lugares. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer de 30 años)

⁷ Esta afirmación no precisa si se trata de policías, ronderos o miembros del ejército.

Es así que a partir de 1987 confluyeron varios factores que apuntan al fracaso del PCP- SL en la zona. La población que se encontraba viviendo en las retiradas con PCP-SL, tanto *la masa* como la *Fuerza Local*, empezaron a desertar y se presentaron a las distintas Bases militares existentes. Las condiciones de vida en la selva se tornaban insoportables . Los niños morían de hambre, de sed, comían semillas de calabaza, maíz crudo, no tenían sal y por lo tanto la desnutrición se hacía más crónica y las muertes más frecuentes. Así mismo fueron importantes los rastrellajes que el Mayor «Ayacuchano», junto con los capitanes de la base Mollebamba y Pallqas, comenzaron a realizar. Capturaban a los pobladores que encontraban en la selva y los propios militares, protegiéndolos incluso de las rondas, ya que, en muchos casos éstas reclamaban que se los ejecuten por ser terroristas. Sin embargo, los capitanes y el Mayor Ayacuchano prohibieron este tipo de acciones así como cualquier tipo de tortura, como ya lo habíamos mencionado.

La gente de Mollebamba nos agarró primero. Entonces nos dijeron «¡los vamos a cortar como a perros, como a corderos! Nosotros los vamos a matar de una vez» Entonces pensábamos ya estamos en sus manos y seguro íbamos a morir, pero después aparecieron los soldados y nos rescataron (CVR.BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Mujer de 38 años).

Entonces nosotros —refiriéndose a los soldados— teníamos que ayudarlo a caminar, los chiquitos no podían caminar y teníamos que cargarlos, cargábamos sus cosas, sus ollas, sus frazadas... nosotros teníamos que ayudarlos (CVR.BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Hombre, ex sanitario del EP de la base de Chungui).

Una vez recuperados, eran ofrecidos y «repartidos» a las familias del distrito. En algunas lugares se ejerció a partir de allí un tráfico de niños que fueron usados como servidumbre.

Cuando llegué aquí a la base de Chungui me sacó la señora Emilia. Es que cuando estábamos en la base ofrecían a los pobladores quién quería llevarse a uno de nosotros. Entonces esta señora me preguntó si quería irme a vivir con ella, entonces ya estuve sana y salva. (CVR.BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer de 50 años)

Para esto los militares habían dicho que en la base habían varios niños y que si querían podían sacarnos. Entonces vino este señor y me escogió, como yo tenía el mismo nombre que su padre. Él me sacó para que pudiera ayudarlo en su trabajo. (CVR.BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer de 30 años)

En 1988 se desactiva la Base de Chapi y las personas vuelven a retornar Andahuaylas. En 1992 se implementa un programa de retorno a Yerbabuena, Putucunay, Belén de Chapi, Oronqoy, Santa Camren, Chillihua y Tastabamba (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio del 2002).

Al final del conflicto armado, según los datos que reunidos por la CVR, se registran 1381 personas muertas y desaparecidas en Chungui entre 1980 y el 2000 casi un 17% de la población del distrito censada 1981.

Si comparamos los Censos de 1981 y 1993 en el distrito de Chungui, constatamos un descenso de cerca de 47.5 por ciento de la población total (de 8,257 habitantes en 1981 a 4,338 en 1993). Es especialmente la población en áreas rurales la que ha descendido de 7,682 habitantes en 1981 a 3,797 pobladores en 1993, lo que representa una baja del orden del 51%. No existen datos exactos que nos digan cuánta de estas personas se han desplazado a otros lugares y cuántos han sido asesinados y desaparecidos.

2.3.6. Conclusiones

En el recuerdo de la población entrevistada en *Oreja de Perro*, el PCP-SL aparece inicialmente identificado como continuación de la guerrilla de 1965. Pero la realidad muestra que con el PCP-SL se inaugura una estrategia inédita en la historia de los conflictos internos en el Perú, una de las más autoritarias, despiadadas y crueles.

Cuando el PCP ingresa a la zona, el sistema de haciendas había desaparecido por completo. En Oreja de Perro habían habido seis haciendas, de las cuales destacaba Chapi. Todas ellas habían sido desmembradas hace mucho tiempo atrás, principalmente a raíz de la guerrilla del 65, la Reforma Agraria de los años 70 y la toma de tierra por VR en 1974. No todos los comuneros, sin embargo, se beneficiaron de la misma manera puesto que se dio un proceso de diferenciación interna. En muchos casos también, los problemas derivaban de anteriores conflictos por linderos. Fue en medio de este complejo panorama que ingresa el PCP-SL que fue muy hábil en identificar y situarse en estos intersticios y exacerbarlos a su máxima expresión y ganar de esta manera aliados.

Al colapsar el sistema de haciendas, desaparece con ello un tipo de orden determinado. Se produce un vacío de poder en el campo y el PCP-SL aparece llenando este vacío con un nuevo tipo de orden. Este caso ilustra claramente lo que el tipo de Estado que el PCP-SL ofrecía: autoritario y sanguinario, cuyo horizonte se diluía con la destrucción de los pueblos e individuos que no estaban de acuerdo con ellos.

Inicialmente el ingreso del PCP-SL fue paulatino y silencioso a través de las escuelas, a partir de las cuales pudo asentarse en la zona.

El control y coacción que ejerció el PCP-SL en las retiradas en la zona de *Oreja de Perro*, superó lo humanamente permisible. En las retiradas la vida entera de los pobladores era controlada, a punto que incluso estaban obligados a quererse y a no mostrar sentimientos de desaprobación, duda o tristeza. En otras palabras, el PCP-SL se había convertido en amo y señor de los pobladores

y ellos en sus esclavos que tenían que obedecer con sus mandatos, de lo contrario eran vilmente asesinados.

Vivir en retiradas significó no solamente el desmembramiento de las comunidades, sino también de las familias mismas. Hasta el día de hoy encontramos historias de pobladores que fueron niños en esos años, que fueron entregados a diversas familias en calidad de empleados y que continúan buscando a sus familiares hasta el día de hoy.

A través de este estudio distinguimos claramente dos etapas en la estrategia contra subversiva. En primer lugar, se dio el caso que los pobladores fueron coaccionados por los militares a formar rondas. En caso de no cumplir con estas órdenes, los comuneros eran detenidos y torturados bajo la misma lógica utilizada por el PCP-SL: o te unes conmigo o mueres. (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). La tortura se convirtió, de acuerdo a los pobladores en sinónimo de confesión y verse en la obligación de delatar a personas que colaboraron en distinto grado con el PCP-SL. El círculo se completa y los acusados, sin posibilidad de explicación alguna, son ejecutados sin mayor cuestionamiento (ibid).

La segunda etapa, relacionada con los cambios en la estrategia *contrasubversiva*, ejemplifica muy bien cómo hubieron importantes márgenes de discrecionalidad de los comandos de las fuerzas del orden, junto con un importante cambio de actitud frente a la población civil en cuyo territorio se estaba llevando a cabo el conflicto armado interno. En ese sentido, tenemos que reconocer la actuación del, Mayor Miguel Seminario *Ayacuchano* que, en lugar de seguir aniquilando indiscriminadamente a la población decide recuperarla de manos de la subversión. Ello favoreció a que muchos se animaran a desertar del PCP- SL y se incorporaran a formar comités de autodefensa. Este cambio de estrategia *contrasubversiva* coincide con un hartazgo de la masa que empieza a desertar.

En efecto, la vida en el monte se había tornado insoportable. Los pobladores que conformaban *la masa* se encontraban completamente desmoralizados, porque mientras los mandos les prometían el poder, ellos no encontraban más que sufrimiento y muerte por parte de PCP-SL y del EP. Ello fue mermando el apoyo con el que contaban inicialmente. Este desencanto gradual conduce al escape con más frecuencia hacia 1986 y la época de sequía, con lo cual podían cruzar el río Apurímac. Otros en la huida eran atrapados por los militares; los que se entregaban pacíficamente y «colaboraban» eran liberados y podían migrar hacia Andahuaylas. También registramos el caso de un campamento de alrededor de veinte personas de Tastabamba que escapó junto con sus mandos hacia Ongoy.

Anexo I: Cronología

1967

- Después de los sucesos de la guerrilla de 1965, las comunidades de *Oreja de Perro*: Mollebamba, Santa Carmen, Oronqoy, entre otras crean escuelas comunales.

1973

- En Ongoy- provincia de Andahuaylas, el colegio secundario se politiza. Abimael Guzmán da una charla a los estudiantes sobre la pobreza en el Perú, la Reforma Agraria y los errores de la guerrilla del 1965.

1978

- En la comunidad de Oronqoy, por resolución directoral se crea el colegio estatal mixto N° 38692 con el nombre de Neri García Zárate.

1979

- En la capital distrital de Chungui se crea el colegio secundario con el nombre de Túpac Amaru II.

1980

- En el colegio secundario de Oronqoy, profesores subversivos inician el adoctrinamiento a estudiantes de las 19 comunidades de *Oreja de Perro*.

1981

- En el Poblado de Oronqoy se instala por varios meses las Fuerzas del orden y los ronderos de Mollebamba. Posteriormente se retiran para luego retornar a causa del asesinato del comunero Emiterio Huamán por el PCP-SL.

1982

- Los mandos subversivos del sector de Chapi, en sus afanes de expandir el área de influencia de las llamadas *zonas liberadas* fueron tomando contacto con otros poblados.
- A la comunidad de Chapi, por ejemplo, entran en 1982 y queman fábrica de cañazo (testimonio 202014).
- Los comuneros de Mollebamba toman preso a siete campesinos acusados de terroristas y son entregados al capitán Zagástegui (Guardia Civil de Andarapa-Andahuaylas); estos terroristas fueron enviados a la cárcel del Frontón. Cinco de ellos fallecieron en el motín de

1986. Como respuesta a esta captura PCP-SL ejecutó a varios campesinos de Ninabamba y Mollebamba.

- En Oronqoy es torturado y asesinado Valerio Flores, estudiante del colegio (acusado de senderista) en manos de la Guardia Republicana proveniente de Andahuaylas y los ronderos de Mollebamba .

1983

Enero

- Se instala una base mixta (*sinchis*, policías, Guardia Republicana) en la comunidad de Pallqas, después de la matanza de 40 comuneros en el templo del mismo pueblo a manos de subversivos.
- A mediados de enero, la policía y los *sinchis* organizan las primeras rondas campesinas en Ninabamba, Mollebamba y Santa Carmen.

Mayo

- En el poblado de Yerbabuena aprovechando la ausencia de la Guardia Republicana, el PCP-SL ingresa al poblado y asesina a 29 comuneros.

Noviembre

Llegada del PCP-SL al distrito de Chungui, que los obliga a vivir en retiradas (testimonio 204052)

Diciembre

- 9 de diciembre, llegó a Santa Carmen un grupo de senderistas, fingiendo ser policías torturaron y asesinaron a 7 comuneros y un negociante de Talavera (Andahuaylas). El mismo grupo subversivo realizó un alto en Tuqarway aduciendo que eran militares, terminaron con la vida de 4 comuneros. Lo mismo hicieron en Oronqoy donde asesinaron a cuatro comuneros.
- PCP-SL asesina al presidente de la comunidad de Chungui, Leonidas Roca (testimonio 204052).

1984

Marzo

- En la comunidad de Yerbabuena, una cuadrilla del ejército detuvo a 12 supuestos subversivos, llevándolos a la base de Mollebamba donde desaparecieron sin dejar rastro alguno.

Abril

- Cerca a Hualhwa, en la quebrada de Chakiqmayo, un grupo de personas desplazadas provenientes de Tastabamba, Hualhwa y Oronqoy fueron brutalmente asesinados por las Fuerzas del orden de Andahuaylas y los ronderos de Mollebamba. Se estima que fueron 13 comuneros asesinados.
- Por primera vez se instala la base militar en de Chungui. El ejército a cargo del capitán Edison Rivas, organiza a la población en grupos de Defensa Civil.

Noviembre

- En la comunidad de Lucmahuaycco- Cusco, aproximadamente 40 subversivos ingresan al poblado con el fin de concientizarlos.

Noviembre y diciembre

- Masacre en Muru Muru. Aproximadamente a las 11 pm las fuerzas del orden y los ronderos de Mollebamba ingresaron al poblado y asesinaron a 10 comuneros.⁸
- En el poblado de Oronqoy, las fuerzas del orden incendian y asesinan a 29 comuneros, acusados de subversivos.⁹

1985

Abril y mayo

- En la comunidad de Chillihua, después de un atentado subversivo fueron capturados por las fuerzas del orden y por los ronderos de Pallqas y Chupón un total de 25 comuneros acusados de ser subversivos, posteriormente fueron eliminados.¹⁰
- En la comunidad de Accocharcas y Hatumpampa, incursión armada del PCP-SL y las fuerzas del orden, deja como saldo siete comuneros muertos.¹¹

1986

⁸ Fuente: datos basados en el informe de PROANDE.

⁹ Fuente: datos basados en el informe de PROANDE, corroborados con entrevistas de Oronqoy.

¹⁰ Fuente: datos basados en el informe de PROANDE y corroborados con entrevistas de Oronqoy.

¹¹ Fuente: datos basados en el informe de PROANDE.

Octubre –noviembre

- Pobladores de Oronqoy y Chillihua que habían sido refugiados en Chaupimayo, fueron asesinados por los militares de Pallqas, en total suman 31 fallecidos.¹²
- La situación de vida en las denominadas «retiradas» se agudizan por el incremento de las fuerzas armadas y rondas organizadas.¹³

1987

- El gobierno cambia de política para captar a los comuneros.¹⁴
- La base de Pallqas se retira.
- Efectivos militares de Base de Chungui obligan a la población a levantar muros alrededor de la plaza. Los pobladores reportan malos tratos y abusos en esta acción (testimonio 204052)

Diciembre

- El 24 de dic. Se instala la base militar de Belén de Chapi.¹⁵ A consecuencia de esto, de Andahuaylas retornan alrededor de 150 personas a Chapi que toma el nombre de Belén de Chapi (testimonio 201316)

1988

Enero

- 10 de enero se produce un enfrentamiento en Qachiqasa, deja como saldo 21 muertos.¹⁶
- La base de Chapi se retira.

1989

- La base de Mollebamba se retira.

1991-1992

- Vuelven los primeros retornantes a Mollebamba.

1994-1995

¹² Fuente: entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy y corroborado con el informe de PROANDE.

¹³ Fuente: entrevistas realizadas en el distrito de Chungui y Oronqoy.

¹⁴ Fuente datos basados en el informe de PROANDE y corroborado con entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy y Chungui.

¹⁵ Fuente: entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy.

¹⁶ Fuente: entrevistas realizados en la comunidad de Oronqoy.

- La población de Santa Carmen comenzó a retornar, pero esta vez no a su lugar de origen si no a Muyu Urqu.

2.4. EL CASO UCHURACCAY

Uchuraccay es una comunidad quechua ubicada en las alturas de la provincia de Huanta (Ayacucho) a 4,000 metros sobre el nivel de mar (véase mapa de la ubicación de Uchuraccay). El 26 de enero de 1983 fueron asesinados allí los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de *El Diario de Marka*, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de *El Observador*, Jorge Sedano de *La República*, Amador García de la revista *Oiga* y Octavio Infante del diario *Noticias de Ayacucho*, así como el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccaíno Severino Huáscar Morales.

Durante los meses siguientes, Uchuraccay continuó siendo escenario de violencia, muerte y desolación: ciento treinta y cinco comuneros fueron asesinados como consecuencia de los ataques del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, la represión de las fuerzas contrasubversivas y de las rondas campesinas. A mediados de 1984, Uchuraccay dejó de existir debido a que las familias sobrevivientes huyeron, refugiándose en las comunidades y pueblos cercanos de la sierra y selva de Ayacucho, así como en las ciudades de Huanta, Huamanga y Lima. Recién en octubre de 1993, algunas familias se aventuraron a retornar a sus antiguos pagos.

El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones. La primera estuvo a cargo de la *Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay* nombrada por el presidente Fernando Belaunde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, señalando como responsables a los campesinos de Uchuraccay. La segunda investigación fue realizada por el poder judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros catorce campesinos de Uchuraccay.

La muerte de los ciento treinta y cinco uchuraccaínos, así como la desaparición de la comunidad por largos años, nunca alcanzaron notoriedad pública, quedando en la memoria privada de los familiares y comuneros hasta el 1 de junio de 2002, día en que la población entregó a los representantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación la «Lista de uchuraccaínos asesinados» elaborada en dos asambleas comunales.

Por todos estos sucesos, Uchuraccay es un referente emblemático de la violencia y el dolor en la memoria colectiva del país, así como de las demandas de justicia y verdad efectuadas durante todos estos años. Al olvido que durante veinte años recubrió la muerte de los comuneros, se suma el carácter controvertido de las investigaciones sobre la muerte de los periodistas.

El presente informe trata sobre estos temas y se basa en las investigaciones realizadas por el Área de Estudios en Profundidad y el Equipo Móvil de Recojo de Testimonios de la Sede Sur Central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entre las fuentes analizadas mencionamos:

1. 21 testimonios recogidos por el Equipo Móvil de Recojo de Testimonios
2. La «Lista de uchuraccaínos asesinados» proporcionada por los comuneros de Uchuraccay en junio del 202
3. El expediente del proceso judicial
4. El manuscrito de un mando local senderista de sobrenombre «Suní Puni», escrito en 1985
5. Libro de Actas de los comités de Defensa Civil de las comunidades de Balcón, Carhuapampa y Acco, 1984-1985
6. Entrevistas realizadas por el Equipo de Estudios en Profundidad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
7. Asamblea con las autoridades de la comunidad y entrevistas realizadas por el Comisionado Alberto Morote Sánchez el día 27 de abril de 2003
8. Entrevistas realizadas anteriormente como parte de una investigación antropológica del historiador y antropólogo ayacuchano Ponciano del Pino (entre los entrevistados figuran comuneros sobrevivientes de Uchuraccay, familiares de los periodistas y comuneros asesinados, abogados, periodistas, militares y policías)
9. El Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay presidida por Mario Vargas Llosa
10. La transcripción de la Asamblea Comunal realizada con dicha Comisión Investigadora en Uchuraccay el 11 de febrero de 1983, la cual ha sido proporcionada por el periodista norteamericano Phillip Bennet
11. Diversas fuentes periodísticas y bibliográficas

El informe está organizado en seis partes. La primera corresponde a la presente introducción. La segunda, que presenta los antecedentes y las circunstancias de la matanza de los periodistas, ofrece una descripción densa de los hechos, utilizando distintas fuentes hasta ahora no conocidas. La tercera parte rescata la historia no conocida de la represión y violencia contra la comunidad de Uchuraccay. Da rostro a las otras víctimas, testificando así el horror de la violencia de la que fueron objeto. La cuarta parte analiza las investigaciones e interpretaciones realizadas sobre los hechos ocurridos en Uchuraccay. La quinta parte presenta las conclusiones derivadas de los testimonios recogidos y las investigaciones realizadas. Finalmente, la sexta parte recoge dos anexos complementarios: la cronología detallada de los acontecimientos y la lista de personas fallecidas en Uchuraccay.

2.4.1. Los antecedentes y hechos de la masacre

2.4.1.1. Uchuraccay

El 10 de octubre de 1993, veinticuatro familias retornaron a Uchuraccay después de un largo período de ausencia, desarraigo y diáspora. Habían pasado diez años desde que abandonaron sus hogares, tierras y animales huyendo de la violencia; años durante los cuales vivieron refugiados en diversos caseríos del valle del río Apurímac y algunos asentamientos humanos de ciudades como Ica, Huanta, Ayacucho y Lima.

Una de las novedades que trajo consigo el retorno fue la formación del nuevo pueblo de Uchuraccay, compuesto por medio centenar de pequeñas casas contiguas hechas con paredes de adobe y techos de teja y calamina, recostadas sobre una inmensa ladera, desafiando el viento frío y cortante de la puna. El antiguo Uchuraccay, en cambio, era una comunidad con patrón de asentamiento disperso, cuyas familias vivían en pequeños pagos bastante distantes entre sí, dispersos por el territorio comunal.¹ Desde el nuevo pueblo, todavía puede observarse el antiguo centro de Uchuraccay con los restos de la plaza, la iglesia de piedra, el local comunal y el cementerio.

En 1981, la población de Uchuraccay era de aproximadamente 470 habitantes, de los cuales alrededor del 30% sabían leer y escribir, según la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca, quien tuvo a su cargo el censo de ese año en la comunidad.² En la plaza del pueblo se ubicaban la casa hacienda, la iglesia, el cementerio, el cabildo y la escuela, y en sus alrededores vivían unas ocho familias. Hacia el este, en la parte alta de la plaza, se encontraba el pago de Wachwasaga, y a unos 15 o 20 minutos a pie, Uchuraccaypata y Huantaqasa. Tikllaqocha y Wachubamba se encontraban a unos 40 minutos a pie de la plaza del pueblo.

Ubicadas a más de 3800 msnm, las punas de Uchuraccay eran una zona de frontera entre la selva y los valles de Huanta y Tambo (véase mapa de ubicación de Uchuraccay). Una zona estratégica para el PCP Sendero Luminoso, que consideró dicho territorio como corredor para incursionar en esos valles desde el Rasuwilca, nevado y *apu* tutelar más importante del norte de Ayacucho que los miembros del PCP SL convirtieron en base de operaciones.

2.4.1.2. Antecedentes

A mediados de 1981, llegaron a Uchuraccay algunas personas desconocidas que se presentaron ante los pobladores «como negociantes o buscando trabajo».³ Los forasteros visitaron la escuela y

¹ Esta modalidad de ocupación del espacio, común en poblaciones de altura dedicadas al pastoreo, permite a las familias manejar eficazmente el difícil territorio de la puna.

² Declaración de la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca, a fojas 1642 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

³ Testimonio N° 201681.

las casas de algunas familias, buscando intercambiar sus productos por chuño y ocas. Algunos ofrecían botones, agujas, hilos, prendedores, anillos y medallas. Otros, especies de cocina como pimienta, comino, sal y palillo. Uno de estos negociantes comenzó a visitar la comunidad de manera constante. Era un hombre adulto que se presentó como «Martín» y dijo ser natural de Macachacra;⁴ se hizo conocido en la comunidad mediante la entrega de sus productos:

[...] caminaba de casa en casa repartiendo estos productos y diciéndoles que regresaría otro día para que le pagaran con chuño, pero el tema de conversación era la situación de pobreza en que se encontraban los pobladores y la situación de los policías y la gente rica.⁵

[...] yo le dije para cancelar con chuño blanco y nos dice que sólo dejaría y vuelve luego... no quiso recibir y nos dejó varias cosas que ni recuerdo qué cosas eran, había también pimientitas, imperdibles... Cuando vuelva me van a dar *muray* (chuño blanco) nos dijeron.⁶

Al cabo de un tiempo, «Martín» y sus amigos lograron entablar amistad con algunas familias, ganándose su apoyo y haciéndose compadres «por levantar del suelo a los recién nacidos con varios pobladores».⁷ De ese modo, logró convencer a algunos a unirse a la «guerra popular», realizando reuniones en la escuela de la comunidad:

Haciéndose compadres los ha convencido... Los engañaba y la maestra les decía está bien que anden en eso, porque ustedes para que salgan de lo que están pobres tienen que apoyarlos, así tendrán otra vida mejor. Todo eso decía la profesora todas las noches cuando se reunían en la escuela... a toda la gente, a sus compadres, comadres y ahijados los juntaba la maestra, y a las personas que venían del otro lado les daba comida, incluso con los chicos, o sea sus alumnos, mandaba pedir alimentos y los hacía llamar a sus padres porque la profesora necesitaba verlos y, a cambio, a los chicos les regalaba caramelitos o galletitas. Entonces esta gente extraña se alojaba junto con la maestra por dos o tres días.⁸

Otros comuneros, en cambio, comenzaron a sospechar de los forasteros:

[...] empezó a hablar que las haciendas tenían que desaparecer y mi esposo al escuchar esto se aburrió... este cojudo tonterías me conversa... no entiendo por qué tiene que desaparecer las haciendas si nosotros somos los que estamos trabajando en esas tierras.⁹

El PCP Sendero Luminoso se estableció de esa manera en Uchuraccay bajo el mando de «Martín», contando con algún tipo de apoyo de la profesora del pueblo¹⁰ y de algunos pobladores. Hacia mayo de 1982, los miembros del PCP SL podrían haber logrado el apoyo de alrededor de quince pobladores.¹¹ Un manuscrito senderista fechado unos años después se refiere a Uchuraccay

⁴ Testimonio N° 201681.

⁵ Testimonio N° 201695.

⁶ Testimonio N° 201679.

⁷ Testimonio N° 201679.

⁸ Testimonio N° 201681.

⁹ Testimonio N° 201681.

¹⁰ Los testimonios que insisten al respecto son varios: N° 201681, N° 201687, N° 201690, N° 201995.

¹¹ Testimonio N° 201695.

como una de las comunidades en las cuales el PCP Sendero Luminoso había logrado conformar bases de apoyo:

Desde 1981, Uchuraccay, Iquicha y Huaychao eran bases de apoyo donde existían ya pelotones de la fuerza local y unidades guerrilleras. Entre los combatientes de esta zona figuraba el compañero Severino, comisario del Comité Popular de Uchuraccay. Varias de nuestras compañías de la fuerza principal habían permanecido en esta zona por varios días. Desde aquí fueron nuestros combatientes a sacudir al soñoliento enemigo que dormía en los puestos G.C. de Huanta y de Tambo.¹²

Este manuscrito pone en evidencia la formación de células miembros del PCP SL en las comunidades de las alturas de Huanta y la participación activa de algunos comuneros como el «compañero Severino» de Uchuraccay.

El PCP Sendero Luminoso buscó controlar las comunidades de las punas de Huanta con la finalidad de utilizar dicha zona como un corredor estratégico para el desarrollo de sus acciones, por su ubicación intermedia entre los valles y la ceja de selva ayacuchana. La ubicación de Uchuraccay, a su vez, calzaba plenamente con dichos objetivos, debido a que era la comunidad más cercana al Rasuwilka, en cuyas inhóspitas faldas las huestes miembros del PCP SL encontraron un lugar ideal para su refugio y desplazamiento militar. Así pues, en enero de 1982, luego del asalto al puesto policial de San José, las columnas miembros del PCP SL huyeron hacia Uchuraccay para ocultarse y luego dispersarse hacia diversas localidades: «los que asaltaron se fueron para arriba... incluso bailaron en la puerta del cementerio del pueblo y de allí se separaron para allá y para acá».¹³

Durante los años 1981 y 1982, el incremento de las acciones del PCP Sendero Luminoso en el marco de su II Plan Militar dirigido a «desarrollar la guerra de guerrillas»,¹⁴ significó también la intensificación de sus acciones a lo largo del corredor estratégico de las alturas de Huanta y el paulatino aumento de su presión sobre las comunidades de la zona. Uno de los efectos de esta escalada subversiva fue el repliegue de la presencia policial en el campo: muchos puestos policiales de los pequeños pueblos y capitales de distrito fueron retirados y concentrados en las capitales de provincias. Con ello dejaron desguarnecidas las zonas rurales justamente cuando las maniobras políticas y militares de las columnas miembros del PCP SL aumentaban al implementar su

¹² Suni Puni (seud.), «Plumas y montañas». Manuscrito de un mando local senderista fechado en marzo de 1985, p. 22.

¹³ Testimonio N° 201681.

¹⁴ Se trató del segundo plan militar de Sendero Luminoso, implementado bajo la consigna «Desarrollar la guerra de guerrillas» y programado entre enero de 1981 y marzo de 1983. Este plan, conocido también como «La gran ola», estuvo compuesto por dos momentos (olas) de acción estratégica: la primera se desarrolló entre enero y mayo de 1981 bajo la consigna «abrir zonas guerrilleras en función de las bases de apoyo», y la segunda entre mayo de 1981 y marzo de 1983 bajo la consigna «desplegar la guerra de guerrillas». Esta segunda ola, a su vez, se componía por tres oleadas dirigidas a «conquistar las armas y medios» (mayo a septiembre de 1981), «remover el campo con acciones guerrilleras» (octubre de 1981 a marzo de 1982) y «batir al enemigo» (noviembre de 1982 a marzo de 1983) estableciendo finalmente los llamados Comités Populares. (Véase: «Resumen de planes y campañas durante nueve años de guerra popular», en *Documentos de la III sesión —18 al 29 de junio de 1989— del I Congreso de Sendero Luminoso*).

estrategia de «liberar» el campo destituyendo y reemplazando a las autoridades locales por sus comisarios.

El ataque al puesto policial de Tambo, ocurrido el 11 de octubre de 1981, mostró la debilidad de los puestos policiales que no habían sido diseñados para resistir ataques de este tipo y en su mayoría estaban conformados por apenas media docena de policías.¹⁵ Cinco meses después de ese ataque, el 15 de mayo de 1982, el PCP Sendero Luminoso atacó nuevamente Tambo, encontrando «un pueblo totalmente desguarnecido de vigilancia policial: toda la dotación había sido retirada a la capital provincial».¹⁶ Este panorama de abandono se extendió durante todo 1982. El ataque al puesto policial de Vilcashuamán, el 22 de agosto, con el saldo de cuatro policías muertos y tres heridos, representó la gran victoria del PCP Sendero Luminoso en las provincias del norte de Ayacucho. Los ataques a los puestos policiales tenían un impacto significativo en la imagen de avance incontenible que el PCP Sendero Luminoso quería proyectar entre sus bases en el marco de su II Plan Militar.¹⁷

El «compañero Severino», que en el manuscrito senderista es nombrado como «comisario del Comité Popular de Uchuraccay», era Severino Huáscar Morales Ccente, uchuraccaíno que vivía en Huantaqasa, uno de los pagos de la comunidad. Severino, quien tenía 31 años de edad, era músico arpista y comerciante de ganado con muchas relaciones en otras comunidades. Su esposa, su hijo¹⁸ y la gente del pueblo, reconocen que fue él quien permitió el establecimiento del PCP Sendero Luminoso en Uchuraccay. En una ocasión, se perdieron vacas, caballos y ovejas de su propiedad; al no lograr recuperarlos, Severino viajó a buscar apoyo, regresando con una persona que comenzó a exigir bajo amenazas a los presuntos responsables del robo para que le restituyan los animales. Posteriormente, «la comunidad se dio cuenta que la persona desconocida era un senderista, pues antes de resolver el problema del robo, buscó el apoyo de Sendero Luminoso. A partir de esa fecha, esta persona frecuentaba a la comunidad acompañado de otras más».¹⁹

Por intermedio de Severino, así como de colaboradores cercanos como Gregorio Cárdenas, Francisco Morales y otros,²⁰ los miembros del PCP Sendero Luminoso llegaron a visitar casa por casa a los uchuraccaínos, recibiendo algún tipo de apoyo. Bajo el mando de «Martín», estos

¹⁵ Tanto en el ataque al puesto policial de Tambo como al de Huancasancos, el PCP Sendero Luminoso encontró contingentes de seis policías que frente a los ataques se replegaron, el primero a San Miguel y el segundo a Huancapi, capitales de sus respectivas provincias. En Huanta, durante 1982 los puestos policiales de San José de Santillana, Mayocc, Luricocha terminaron igualmente replegándose. El ataque a puestos policiales fue una de las grandes estrategias militares del PCP Sendero Luminoso, junto a las emboscadas a patrullas policiales y militares.

¹⁶ *Caretas*, n.º 699, 24 de mayo de 1982, p. 18. Lima.

¹⁷ Un documento del Comité Central de Sendero Luminoso fechado en 1982, señalaba la realización de dos mil novecientas acciones —entre ellas los ataques a los puestos de Tambo y San José de Secce— como evidencia de que la guerra de guerrillas se había «fortalecido y conquistado un gran salto en su desarrollo», logrando el «surgimiento y desarrollo de zonas guerrilleras, cuya importancia está en que son los ámbitos en que, a través de la pujanza y creciente marea armada de la guerra de guerrillas, hemos de levantar nuestras futuras bases de apoyo» (PCP-Comité Central. *Desarrollemos la guerra de guerrillas*. Lima: Ediciones Bandera Roja, 1982).

¹⁸ Su viuda dio su testimonio al responsable zonal de la CVR en Ayacucho, confirmando una entrevista anterior hecha en Uchuraccay el 9 de febrero de 2002. Su hijo también ha ofrecido su testimonio: N° 203432.

¹⁹ Testimonio N° 201687.

miembros del PCP SL —jóvenes que en su mayoría venían de Huanta y Tambo— convocaban a las reuniones en casa del responsable local y adoctrinaban a los jóvenes del pueblo que participaban de ciertas acciones en la zona:

Martín y otros miembros del PCP SL convocaron a una reunión a todos los pobladores y nombraron a seis «milicias»... estas «milicias» junto a Martín y otros miembros del PCP SL, durante cuatro meses, desaparecieron de la comunidad, sólo refieren sin dar mayores comentarios que habían salido a caminar.²¹

Sin embargo, el PCP Sendero Luminoso no logró establecerse del todo en Uchuraccay e imponerse sobre la estructura tradicional de poder. Aunque Severino era el comisario local del PCP Sendero Luminoso, y «los que se agarraban de los miembros del PCP SL ya eran intocables»,²² las autoridades comunales y los varas tradicionales seguían ejerciendo su mando en Uchuraccay, al igual que en las comunidades vecinas de la zona como Huaychao, Macabamba, Cunya, Ccarhuahurán, entre otras. Tal situación de ejercicio paralelo del poder en Uchuraccay entre las autoridades comunales tradicionales y el responsable del PCP Sendero Luminoso, se diferenciaba sustancialmente de lo que venía sucediendo en esos momentos en comunidades de la provincia de Víctor Fajardo como Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca, por ejemplo, donde Sendero Luminoso impuso su poder por medio de sus comisarios locales.²³ Esta diferencia puede explicarse por la ausencia de una base social juvenil, colegiales de secundaria, especialmente, que el PCP Sendero Luminoso no encontró en Uchuraccay, donde la escuela era muy pequeña y contaba con una sola profesora encargada de enseñar cada año a 40 o 50 alumnos agrupados en una sola aula, en su mayoría varones de diferentes edades que cursaban hasta el cuarto año de primaria.²⁴ Por ello, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades, la escuela de Uchuraccay no tuvo tanta fuerza como punto de irradiación del PCP Sendero Luminoso y su nuevo poder.²⁵ La permanencia de la organización comunal, además, permitió a las autoridades articular poco a poco a los comuneros opuestos a la presencia senderista, cuyo rechazo se hizo evidente hacia octubre de 1982. En las mencionadas comunidades de Víctor Fajardo, en cambio, no existía ya el sistema de varayocs.

²⁰ Testimonio N° 201681. Se mantienen en reserva otros nombres de colaboradores cercanos del PCP Sendero Luminoso porque actualmente están vivos.

²¹ Testimonio N° 201695.

²² Testimonio N° 201679.

²³ A partir de 1984 esas comunidades-distrito pasan a constituir la provincia de Huancasancos. Véase el estudio de caso de estas comunidades en el Informe Final de la CVR.

²⁴ Declaraciones de Alejandrina de la Cruz Llamocca, profesora de Uchuraccay, a fojas 1642 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

²⁵ Aunque había sido inaugurada en 1959, el mismo año de la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el escaso desarrollo de la escuela y las dificultades de su articulación con la vida comunal fueron consecuencia de la pobreza generalizada y no tanto de la falta de interés de los campesinos. La debilidad de la escuela fue percibida por el asesor lingüístico de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, Rodolfo Cerrón Palomino, quien mencionó en su informe que se trataba de una «escuelita» que «no parece jugar un rol significativo para la población estudiantil» («Informe de la Comisión de Lingüistas», en *Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay*. Lima, 1983, p. 106).

Las tensiones afloraron conforme los miembros del PCP SL aumentaron sus presiones sobre los pobladores, conminándolos a participar de sus acciones, sobre todo a los más jóvenes.²⁶ De igual modo buscaron adoctrinar y organizar a las mujeres del pueblo a través de la formación de una Escuela de Mujeres:

[...] nombraron a personas responsables para que se movilicen con ellos, para que realicen asambleas y para que agrupen a las personas. Era como autoridades nombrados por ellos, en el 82. En esa fecha hacían asambleas, especialmente en las noches diciendo estamos haciendo Escuela de Mujeres. Entonces las autoridades de la comunidad empezaron a oponerse y a discutirles, diciendo que eso está mal y que no podían hacer lo que quieren.²⁷

[...] en octubre de 1982 los miembros del PCP SL y las seis milicias regresaron nuevamente y empezaron la creación de la Escuela para Mujeres; a todas las mujeres las invitaron a participar en esta Escuela, pero las mujeres avisaron a sus esposos y padres, esto sembró una sospecha a los varones.²⁸

Tal vez «tenían otra intención», según uno de los entrevistados, sobre todo porque las señoras y jóvenes eran convocadas por las noches. «¿Qué tipo de reunión va a ser? Nosotros también vamos a escuchar, queremos conocer, somos sus parientes y esposos, diciendo».²⁹ Así es como se organizan clandestinamente para oponerse a la formación de la Escuela bajo el liderazgo de Alejandro Huamán Leandro, presidente de la comunidad, Dionisio Morales Pérez, Alejandro Morales Pérez y Sacarías Mauli.

Poco después la población captura a «Martín» y otros cinco jóvenes miembros del PCP SL, entre ellos una mujer. Los jóvenes lloraron pidiendo perdón y rogando que los dejen irse. «Martín» fue el único que no quiso hacerlo. Las autoridades habían decidido asesinarlos, sin embargo, la comunidad se opuso y decidió perdonarlos y dejarlos ir, advirtiéndoles que no vuelvan nunca más.

Estuvimos varias horas discutiendo, más o menos hasta las 4 de la tarde. Nosotros seguíamos tomando nuestro traguito para seguir teniendo valor. A esa hora empezamos a agarrar a Martín y éste sacó de su bolsillo un arma chiquito. De entre todos lo agarramos, lo tumbamos y le pisamos las manos, pero no soltó su arma, tampoco disparó. Mientras tanto, los demás también agarraban a los cinco acompañantes de Martín. Los queríamos matar, pero a oposición de la mayoría los dejamos ir, advirtiéndoles nunca más volvieran.³⁰

Al cabo de unos días, durante la realización de la fiesta de la Virgen del Rosario, el PCP Sendero Luminoso colocó una bandera roja en uno de los cerros, la cual fue arrancada y quemada por el presidente de la comunidad, Alejandro Huamán:

Nosotros fuimos organizadores de la fiesta de octubre y esa noche lo plantaron banderolas en el cerro del frente, allí empezó. Se reventó cohetes porque era la víspera de una fiesta,

²⁶ Testimonio N° 201695.

²⁷ Testimonio N° 201690.

²⁸ Testimonio N° 201695.

²⁹ Testimonio N° 201679.

³⁰ Testimonio N° 201679.

luego allí pues Alejandro Huamán, cuando estaban retornando de la fiesta encontró la banderola de los subversivos y diciendo: «carajo esta banderola para qué hacen flamear aquí» y empezó a despedazar y quemarlo. Pero antes de colocar la bandera roja, los subversivos pasaron por la casa de NN³¹ y éste les dijo: «yo camino con mi negocio», pero ellos le gritaban que avisara quiénes estaban en contra de ellos porque si no eres un cómplice carajo, tienes que hablar, y este contestó: «ya no voy hablar de nada a nadie ni en contra de nada porque no pueden acusarme de nada». Eso le había comentado a mi esposo Ale Huamán cuando rompieron la banderola y quemaron.³²

Estas primeras acciones de rechazo frontal de la comunidad frente a la presencia senderista fueron pacíficas, pero la situación cambió cuando hacia fines de noviembre o inicios de diciembre el PCP Sendero Luminoso asesinó a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad, así como al comunero Venancio Auccatoma. En el caso de Alejandro Huamán, «dos grupos de los *tuta puriqkuna* que aproximadamente sumaban sesenta» lo detuvieron en su vivienda a las tres de la madrugada frente a su familia diciéndole «levántate carajo» y acusándolo de ser un «soplón» y «*yana uma*» (cabeza negra). Su nuera, Dionicia Chávez Soto, fue herida de bala en ambos muslos al intentar defenderlo, mientras algunos de los miembros del PCP SL allanaron la casa de *ichu* y luego la quemaron. Alejandro fue conducido a la plaza del pueblo, siendo sometido a un *juicio popular* y encerrado en el local comunal. En horas de la tarde, a pesar de los ruegos de su esposa, hermanos e hijos, Alejandro fue asesinado baleado en la frente. Cometido el asesinato «ya nadie quería acercarse por lo menos a ver el cadáver, quien lo hacía o recogía corría la misma suerte y nos tildaban de *yana umas* cabezas negras; habían personas como espías que estaban viendo quiénes se acercan».³³

El hijo de Alejandro Huamán recuerda que después «sólo quedaba llorar amargamente. Toda la familia quedó muy mal. Nunca antes habíamos visto tanta violencia, sangre. Lo único que nos quedaba era dedicarnos a trabajar en la chacra, al igual que toda la comunidad, pero siempre con ese temor de que iban a regresar en cualquier momento».³⁴

Los miembros del PCP SL habían tomado venganza y mostrado lo que pasaría contra quienes osaran asumir la actitud de Alejandro Huamán. Lo mismo hicieron por esos mismos días con el presidente y teniente gobernador de la vecina comunidad de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, asesinados en plena plaza del pueblo. Sin embargo, antes que neutralizar el descontento, estas acciones cambiaron la imagen con la cual el PCP Sendero Luminoso buscaba legitimarse entre los campesinos, generando el rechazo violento de las comunidades. Como señala un testimoniante: «allí empezó la matanza ya entre nosotros».³⁵

³¹ Nombre inteligible en el testimonio.

³² Testimonio N° 201681.

³³ Testimonio N° 201681.

³⁴ Testimonio N° 201692.

³⁵ Testimonio N° 201679.

Bajo el mando de sus autoridades tradicionales como los presidentes de comunidad, *varayocs* y tenientes gobernadores, las comunidades se organizaron para enfrentar violentamente a los miembros del PCP SL, reuniéndose en el local comunal de Uchuraccay:

[...] realizaron una asamblea comunal reuniéndose en esta casa comunal cada domingo, acordando por unanimidad de votos realizar los actos de legítima defensa de sus vidas y de sus integridades físicas contra los terroristas, causándoles muerte... asimismo acordaron pedir ayuda a las comunidades de Huaychau, Cunlla, Ccocha Ccocha, Ccochan, Paria con el fin de combatir a los terroristas.³⁶

De esta forma, Uchuraccay fue asumiendo el liderazgo de lo que fue la primera rebelión multicomunal contra el PCP Sendero Luminoso. Los campesinos de las comunidades ayacuchanas más pobres, ubicadas en las punas, escapaban así al libreto senderista que les adjudicaba el papel de aliados estratégicos y «fuerza principal» de su revolución, buscando el apoyo de las fuerzas del orden, para lo cual enviaron emisarios a las ciudades de Huanta y Ayacucho solicitando garantías y protección:

En una reunión de los comuneros siempre bajo la dirección de las autoridades acordamos formar una comisión para ir a la ciudad de Huanta ante las autoridades a pedir garantías... a su retorno nos manifestaron que habían entrado a la policía, y que les habían ofrecido prestarles toda clase de garantías y que los habían exhortado para que siempre les comuniquen de cualquier acontecimiento.³⁷

El 21 de enero, a menos de un mes de la intervención de las fuerzas armadas en el departamento de Ayacucho y del establecimiento de la Infantería de Marina en la provincia de Huanta,³⁸ se produjo la matanza de siete miembros del PCP SL en las comunidades de Huaychao y Macabamba (véase el mapa de ubicación de Uchuraccay). Los comuneros, luego de recibir amistosamente a la columna senderista en el local comunal, coreando sus arengas en pro de la lucha amada y el camarada Gonzalo, como solía ocurrir, los detuvieron y asesinaron a cuatro miembros del PCP SL en Huaychao y tres en Macabamba.

Por esos mismos días, cinco miembros del PCP SL fueron asesinados en Uchuraccay:³⁹

³⁶ Declaración informativa del regidor mayor vara del anexo de Uchuraccay, don Dionisio Ramos Ricra, a fojas 1521 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

³⁷ Declaraciones de Dionisio Ramos Ricra en el acta de la diligencia realizada por el juez Juan Flores Rojas el 3 de marzo de 1983 en Uchuraccay.

³⁸ El 12 de octubre de 1981, mediante el DS 026-81-IN el gobierno declaró en estado de emergencia a las provincias ayacuchanas de Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. El 29 de diciembre de 1982, mediante el DS 068-82-IN se encargó a las Fuerzas Armadas asumir el control interno en estas cinco provincias. El general Roberto Clemente Noel Moral fue nombrado Jefe del Comando Político Militar de la zona de emergencia, a la cual fueron destacados dos mil efectivos. La infantería de Marina asumió el control de la provincia de Huanta, instalándose allí durante las primeras semanas del enero de 1983.

³⁹ Los partes policiales dan cuenta del ajusticiamiento de los cinco miembros del PCP SL en Uchuraccay hacia el 22 de enero. En el informe final de la Comisión Vargas Llosa, así como en su anexo N° 2, este hecho fue mencionado apenas como un dato adicional, sin reparar en su importancia como muestra del proceder violento adoptado por los campesinos, y de la rápida recomposición de alianzas que ocurría en la zona debido a la guerra iniciada por las comunidades contra el PCP Sendero Luminoso (*Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay*, pp. 31 y 99). El

[...] aparecieron cinco terroristas hacia el camino de la herradura que viene de San José de Secce, con dirección a este pueblo por el lugar denominado Champacoca, por lo que los comuneros de Uchuraccay entre varones, mujeres y niños, después de reunirse, lograron interceptar a dichos terroristas en el sitio denominado Chancahuayco que queda a unos tres kilómetros de distancia hacia arriba de esta casa comunal, y cuando les interrogaron supieron manifestarles de que los terroristas de San José de Secce y Pacchanca, van a ingresar a Uchuraccay a matarles por lo que todos los comuneros los mataron, empleando huaraca, piedras y a puñetes y a puntapiés, y luego enterraron sus restos en el cementerio de Polvorín... estos terroristas no llevaban ninguna clase de armas, sino solamente portaban dos de ellas, cada una un tarro de leche Gloria vacío, de estos hechos no hicieron aviso a los sinchis quienes los habían visitado en los primeros días de enero del presente año.⁴⁰

Este hecho resulta sumamente ilustrativo, pues muestra lo convulsionada que se encontraba la comunidad después del asesinato de Alejandro Huamán, así como el rápido giro hacia la violencia por parte de los campesinos desde que perdonaran la vida a «Martín» y a otros miembros del PCP SL sólo tres meses atrás.

Luego de producidas las muertes de los presuntos miembros del PCP SL en Huaychao, Macabamba, Uchuraccay y otras comunidades,⁴¹ la población se organizó rápidamente temiendo represalias. Las autoridades de las comunidades coordinaron el patrullaje de la zona, estableciendo sistemas de vigilancia desde las cumbres de los cerros, usando cornetillas como señal de alarma y pernoctando en las laderas de las montañas.⁴² En la memoria de los uchuraccaínos este momento es recordado por el estado de alarma en que vivían. Los comuneros sabían que los miembros del PCP SL buscarían venganza, pues habían contraído lo que el PCP Sendero Luminoso llamaba «deuda de sangre con el partido».

Los hechos que trascendieron a los medios fueron los de Huaychao. El 23 de enero, en una conferencia de prensa realizada para informar al país sobre las muertes ocurridas en esa comunidad, el Jefe Político Militar de la Zona de Emergencia, general Roberto Clemente Noel Moral, afirmó: «Hay una respuesta muy significativa del pueblo ayacuchano de desterrar el terrorismo. Con esta acción los hombres y mujeres están demostrando coraje y virilidad para no continuar siendo mancillados por un pequeño grupo con ideas descabelladas».⁴³

En Lima, el propio Presidente de la República saludó la acción violenta de los comuneros, brindando las siguientes declaraciones televisadas: «[espero que en Ayacucho] se restablezca la tranquilidad y que la presencia y el valor de estos pueblos sea suficiente y no se requiera acudir a la

ajusticiamiento de los cinco miembros del PCP SL en Uchuraccay fue mencionado también por algunos diarios de Lima (véase: «El pueblo se defiende». *El Comercio*, 26 de enero de 1983. Lima).

⁴⁰ Declaración informativa del regidor mayor vara del anexo de Uchuraccay, don Dionisio Ramos Ricra, a fojas 1521 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁴¹ En total, habrían sido aproximadamente 24 los miembros del PCP SL muertos en diferentes comunidades. El manuscrito del mando senderista citado anteriormente, se refiere a estas acciones de las comunidades como «mesnadas» y «bandas paramilitares».

⁴² Hacia el 23 de enero, cuando los sinchis llegan a Uchuraccay llevando alimentos, se sorprenden de la organización adoptada por la comunidad para su defensa. A pesar de ello, sentían algo de temor y desconfianza de los campesinos. Esta información fue proporcionada en Ayacucho el 12 de octubre de 2000 por un ex-sinchi que participó de esa patrulla policial.

fuerza para acabar con el terrorismo».⁴⁴ Justificando la muerte de los siete miembros del PCP SL, señaló también que la respuesta campesina era un ejemplo de patriotismo que hacía palpable el «resurgimiento de Ayacucho» frente a la «basura ideológica» del PCP Sendero Luminoso.⁴⁵

El general Noel informó del envío de una patrulla terrestre y de un comando helitransportado para prestar protección a las comunidades, la cual llevaba consigo alimentos para las comunidades, como reconocimiento del presidente Belaunde por las acciones emprendidas contra los miembros del PCP SL.⁴⁶ Es así como ese día llega en helicóptero a Uchuraccay un comando de 15 efectivos de los sinchis,⁴⁷ quienes se quedaron a pernoctar en la comunidad. El mensaje que dejaron a los campesinos fue claro: continuar con ese tipo de respuestas, matando a todo extraño que llegara a la comunidad a pie.⁴⁸ La incitación realizada por las fuerzas del orden a los campesinos de Uchuraccay para rechazar a los miembros del PCP SL usando la violencia, fue asumida como un respaldo a la decisión comunal de enfrentar al PCP Sendero Luminoso.⁴⁹

2.4.1.3. Los hechos del 26 de enero

Conocidos los sucesos de Huaychao, sectores importantes de la opinión pública dudaron de las informaciones ofrecidas por el general Noel. Lo que se conocía entonces sobre el PCP Sendero Luminoso y sobre lo que estaba ocurriendo en el campo ayacuchano era muy poco. Así fue como un grupo de ocho periodistas de medios limeños y ayacuchanos decidieron viajar hasta Huaychao, motivados por su incredulidad ante las informaciones oficiales, con el ansia de descubrir la verdad de los hechos. Al amanecer del 26 de enero, el taxista Salvador Luna —a quien habían contratado la tarde anterior— pasó a recogerlos de su hospedaje en el Hostal Santa Rosa. Media hora después, luego de recoger a Octavio Infante, director del diario ayacuchano *Noticias*, el vehículo hizo una breve parada en el Óvalo de la Magdalena, donde los viajeros compraron algunas provisiones. A las 6:30 de la mañana, aproximadamente, luego de cruzar sin dificultades el control de La Magdalena, los periodistas dejaron atrás la ciudad de Ayacucho sin imaginar que jamás retornarían.

⁴³ *El Comercio*, 24 de enero de 1983, p. 1. Lima.

⁴⁴ Citado en: *Violencia política en el Perú*. Lima, DESCO, 1989, tomo I, p. 93.

⁴⁵ *El Comercio*, 24 de enero de 1983, p. 1. Lima.

⁴⁶ *El Comercio*, lunes 24 de enero de 1983, p. 12. Lima. Esta información revela que el presidente Belaunde se hallaba debidamente informado de los sucesos que ocurrían en Ayacucho.

⁴⁷ Sinchis es el nombre de un destacamento contrainsurgente de las fuerzas policiales.

⁴⁸ Esta información fue repetida insistentemente por los comuneros: en las declaraciones recogidas por el periodista Luis Morales el día 30 de enero de 1983; en la asamblea que organizó la Comisión Investigadora presidida por Mario Vargas Llosa el 11 de febrero de 1983; en los testimonios brindados ante el juez Juan Flores Rojas en marzo y mayo de 1983; y en las declaraciones efectuadas durante el juicio oral. Es uno de los puntos que resalta en la memoria actual de los uchuraccaínos: «Los mismos sinchis dijeron: nosotros no vendremos por tierra, sólo en helicóptero. Y si algún desconocido viene por tierra, lo matan. Así pasó» (entrevista realizada por el Comisionado Alberto Morote Sánchez el 27 de abril de 2003 en Uchuraccay. Se mantiene en reserva la identidad del declarante por razones de seguridad).

⁴⁹ Ello no ocurrió solamente en Uchuraccay, sino también en otras comunidades. En Iquicha, según lo declarado por el alcalde menor, «en todas las veces (los sinchis) les ha advertido en la reunión de comuneros a fin de que no se metan a los actos subversivos de los terroristas, y al mismo tiempo les ha instruido para que los mataran si estos terroristas se presentaban a este pueblo» (declaración de Hipólito Vicania, alcalde menor de Iquicha, a fojas 1508 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

Esa misma mañana, en Uchuraccay, un joven comunero dedicado al comercio de ropa fue detenido a su arribo al pueblo, siendo acusado por las autoridades de seguir colaborando con los miembros del PCP SL⁵⁰ y de ser uno de los responsables de la presencia del PCP Sendero Luminoso en la comunidad, junto a su pariente Severino Huáscar Morales Ccente. Gracias a la intervención de su abuelo lo dejaron libre, no sin antes golpearlo y amenazarlo de muerte si seguía «caminando» con sus «compinches».

Alrededor de las 8:30 de la mañana, dos horas después de partir de Ayacucho, el taxi contratado por los periodistas llegó a Yanaorco, luego de realizar una breve parada en Pacla donde desayunaron y tomaron algunas fotografías. De acuerdo con lo previsto, los periodistas le solicitaron al taxista que los dejara un poco más allá de la laguna de Tocto, en un punto de la carretera de Huanta a Tambo en que una trocha usada por los campesinos de la zona comenzaba su ascenso hacia las montañas, permitiéndoles llegar más rápido a sus comunidades sin tener que llegar hasta Tambo. El grupo continuó el viaje a pie siguiendo ese atajo, guiado por Octavio Infante García quien conocía esa ruta y tenía familiares en Chacabamba.⁵¹ Al llegar a esa localidad, después de una caminata de dos horas que resultó sumamente fatigosa para algunos —sobre todo para Jorge Sedano, que era gordo y tenía 52 años— fueron atendidos por los familiares de Octavio. Los Argumedo (la señora Rosa, Juana Lidia, Juan y Julia; madre, hermana, hermano y cuñada de Octavio, respectivamente) compartieron una limonada con los periodistas, quienes les contaron que su objetivo era llegar a Huaychao.

A pesar de tener conocidos en las comunidades, doña Rosa y Juana Lidia se opusieron al pedido de Octavio para que su medio hermano Juan Argumedo García los acompañara como guía, «porque ya sabían por radio sobre las matanzas que estaban produciéndose en Uchuraccay y Huaychao».⁵² A pesar de esos temores, Juan se ofreció a guiarlos «con la condición de que volviera solamente del lugar de Wachwaqasa»,⁵³ abra ubicada a la entrada de Uchuraccay desde la cual no era difícil continuar camino hasta Huaychao pues no había más cerros que subir, disminuyendo la posibilidad de extraviarse.

Unos minutos después, siendo aproximadamente las 11:30 de la mañana, los periodistas retomaron el viaje guiados por Juan Argumedo, quien prestó una mula en la cual iba montado Jorge Sedano, y un caballo en el que cargaron los maletines y cámaras fotográficas.

En Uchuraccay, hacia mitad de la tarde, como a las quince o dieciséis horas, las autoridades se hallaban reunidas en casa de Fortunato Gavilán García, teniente gobernador de la comunidad, discutiendo sobre las posibles represalias del PCP Sendero Luminoso y bebiendo el alcohol que esa

⁵⁰ No se menciona el nombre de este comunero por estar vivo (entrevista realizada en agosto del 2000).

⁵¹ El itinerario del viaje seguido por los periodistas fue reconstruido por la Comisión Investigadora presidida por Mario Vargas Llosa, siendo descrito minuciosamente en su informe final (pp. 5-14). Fue recorrido, asimismo, durante la diligencia judicial de reconstrucción de hechos realizada el 31 de enero de 1984, cuyas actas corren a fojas 3231 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁵² Declaración de Juana Lidia Argumedo, a fojas 265 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁵³ Ibid.

mañana el joven capturado había pagado en retribución por su perdón. Uno de los temas delicados de la discusión era que, no sólo tenían que vigilar hacia fuera, en previsión de cualquier incursión senderista, sino también hacia dentro, pues consideraban que entre la población todavía seguían habiendo posibles colaboradores de los miembros del PCP SL, como el joven a quien habían castigado por la mañana. En esa reunión, también discutieron sobre las quejas de Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, contra Severino Huáscar Morales Ccente, quien había sido responsable del PCP Sendero Luminoso, por el robo de un caballo.

En esos instantes se oyeron gritos de alarma: «Los terroristas están viniendo».⁵⁴ La casa de Fortunato Gavilán se hallaba justamente en dirección al camino por donde se aproximaba el grupo de periodistas. Salieron corriendo hacia la cumbre cerca de la cual los acorralaron, mientras otros comuneros llegaban desde los alrededores del pueblo. Otro grupo salió en persecución del guía, quien según lo acordado con los periodistas retornaba hacia Chacabamba luego de haberlos guiado hasta la cumbre de Wachwaqasa. Los campesinos portaban sus propios instrumentos de trabajo como armas de defensa: palos, hachas, piedras y lazos. Los periodistas asustados «no podían hablar» y no pudieron entablar diálogo con los campesinos. No fue un problema de idioma, porque entre los periodistas había tres quechuahablantes y entre los campesinos más de dos hispanohablantes.⁵⁵ Según relató una comunera que observó los hechos, una de las autoridades que conversó con los periodistas fue el teniente gobernador Fortunato Gavilán:

[...] parecía que discutían... en eso vi que empezaron a pelear y a golpear a los desconocidos. Llamaron a los de la comunidad y todos salieron y se dirigieron hacia la casa de Fortunato Gavilán. Y de allí salieron diciendo así van hablar y de pronto empezaron a maltratar a los desconocidos. Yo dije, ¿quiénes serán? ¿qué será de la vida de estas personas? Empecé a llorar, ahora seguro nos matarán a todos.⁵⁶

Los periodistas intentaron explicar que no eran *terroristas*, palabra que los uchuraccaínos habían escuchado sólo poco tiempo antes de boca de los sinchis, quienes les habían dicho que ellos vendrían siempre en helicóptero y uniformados, mientras que los extraños que vendrían por tierra eran los *terroristas* a quienes debían matar. Pero el diálogo fue imposible. Los periodistas buscaron la mediación de un joven de la comunidad, quien vestía ropa de ciudad y hablaba castellano, para que les hiciera comprender a los comuneros el motivo de su visita.⁵⁷ Sin embargo, no fue posible. Al joven, que intentó mediar en el diálogo, una de las autoridades lo sacó a golpes acusándolo de apoyar a los forasteros. Frente a esa incapacidad de diálogo, los periodistas sugirieron a las

⁵⁴ Es como recuerdan varios entrevistados. Los comuneros de Uchuraccay supieron que los miembros del PCP SL también eran llamados «terroristas» al ser incitados por los sinchis a matar a todo extraño que llegase a pie a la comunidad.

⁵⁵ Uno de ellos era Olimpio Gavilán Huaylla, quien vivía en Lima desde niño y había llegado a Uchuraccay sólo unas semanas previas a ese día. Hacia mediados de 1983, fue secuestrado y presumiblemente asesinado por el PCP Sendero Luminoso. Su cadáver nunca fue encontrado por sus familiares.

⁵⁶ Entrevista realizada por el Comisionado Alberto Morote Sánchez el 27 de abril de 2003 en Uchuraccay. Por seguridad, no se menciona el nombre de la testimoniante.

⁵⁷ No se menciona el nombre de este comunero por estar vivo.

autoridades los entregaran a la policía de Tambo. Sin embargo, cuando parecía haberse llegado a ese acuerdo, Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, ordenó matarlos convencido de haber capturado a terroristas.

Habrían participado en la matanza unas cuarenta personas, entre varones y mujeres, jóvenes y adultos, muchos de ellos bajo la presión de las autoridades.⁵⁸ A quienes no lo hicieron, los buscaron casa por casa para que explicaran las razones de su ausencia. Por ejemplo, a uno de ellos lo acusaron de seguir colaborando con el PCP Sendero Luminoso, y casi lo matan. Otro, que se encontraba enfermo, tuvo que pagar su ausencia con alcohol.⁵⁹ Sería esa la bebida que tomarían luego para enterrar los cadáveres y vigilar esa noche frente a cualquier eventualidad de ataque senderista.

La matanza fue cruel y no duró más que treinta minutos. Esa misma noche mataron al guía Juan Argumedo y a Severino Huáscar Morales. A este último, por su vínculo con el PCP Sendero Luminoso, lo responsabilizaron por defender a los periodistas y al guía,⁶⁰ acusándolo de haberlos traído en abierto desacato a las decisiones adoptadas por la comunidad: «tú también a dónde has ido. Tú también estás apareciendo por abajo y ellos por arriba, aquí se están encontrando. Acaso por eso, ellos van a ser periodistas, no. Ellos son tus compinches terrucos, diciendo».⁶¹ Lo mataron cruelmente sin tomar en cuenta su situación familiar y a pesar de su condición de comunero: «dicen que lo golpeaban con piedras y palos como a cualquier animal, dicen que en eso sus ojos también ya han salido».⁶² Cuando agonizaba, arrastrado por la mula de Juan Argumedo a la cual fue amarrado, un comunero reclamó a los presentes: «cómo es posible que hacen sufrir de esta manera a su copoblano. O bien deben de perdonarle sano, o bien deben de matarlo de una vez, diciendo, se le acerca y le apuñala con un cuchillo».⁶³

También quisieron matar a su esposa, temiendo que pueda delatarlos; sin embargo, Teodora Soto Ticlla, madre de Silvio Chávez Soto, se interpuso sollozando para que la dejaran: «cómo ya es esto, cómo es posible a nuestro vecino van a terminar esposo y esposa. Si es así, cómo van a quedar los niños, diciendo».⁶⁴ La esposa de Severino recuerda:

Me acorralaron. «Si me matan, mátenme con mis hijos, sino quién los va a criar. ¡Traigan a todos mis hijos y mátennos!». Mi hijo estaba llorando. Yo no lloré; mi cuerpo se endureció totalmente. «Me matarán como a mi esposo», dije. Teodora Soto habló con Chávez: «déjenla a esa mujer, a quién se va quejar contra ustedes. Perdónenle. Si la matan, mátenla con sus hijos, si no, quién los va criar».⁶⁵

⁵⁸ Entre ellos Severino Huáscar Morales, a quien obligaron a participar del crimen diciéndole: «Mata a tu compinche, si no tú también vas a morir». (Testimonio No. 203432).

⁵⁹ Entrevista realizada en Uchuraccay el 23 de septiembre del 2000.

⁶⁰ Lo que dicen los campesinos es que lo asesinan al «ponerse de lado» de ellos (sayapakurqa kastan masinkunata)

⁶¹ Testimonio N° 203432.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Entrevista a Saturnina Figueroa, viuda de Severino Morales, realizada en Uchuraccay el 9 de febrero de 2002.

Le perdonaron la vida pero bajo la amenaza de no contar a nadie lo sucedido: «si hablas, cuentas, tú vas a morir ese mismo rato», le dijeron. Se impuso la decisión de callar, buscando evitar que estas muertes sean conocidas más allá de la comunidad. Por eso también le ordenaron esconderse:

Cuando aparecía el helicóptero venían [los comuneros] y nos hacían correr [a ella y a sus hijos], «escápanse a los cerros», y no nos encontrábamos con nadie. La gente de acá no me permitía que me viera con nadie, sino van a morir, nos van a llevar preso, nos van a quemar, no nos confiábamos.⁶⁶

Los campesinos estaban seguros que habían dado muerte a miembros del PCP SL, por eso mismo los sepultaron fuera del cementerio y sin velatorio: «a estos perros ladrones y terrucos no podemos enterrar en nuestro cementerio», diciendo.⁶⁷ También los cuerpos de los periodistas fueron depositados muy cerca de la plaza, a sólo 200 metros, sin ningún afán de ocultamiento. Debido a que caía la noche y había que mantener la vigilancia, sólo pudieron cavar cuatro fosas no muy profundas, en las cuales fueron colocados los ocho cadáveres:

[..] y como ya era muy tarde y estaba por anochecer todos los comuneros [incluyéndose el declarante] abrieron cuatro fosas empleando *chaquitaklla* y lampa, luego enterraron en cada fosa dos cadáveres colocándolos superpuestos... si hubiera habido tiempo hubieran abierto una fosa para cada cadáver.⁶⁸

No ocurrió lo mismo con los cuerpos de Severino Huáscar Morales y Juan Argumedo. El primero fue enterrado en la parte trasera de su casa, en Huantaqasa, y el segundo al lado de un riachuelo.⁶⁹ La muerte de ambos fue ocultada desde esa misma noche de manera absoluta, porque su descubrimiento delataría frente a los sinchis y militares la presencia que el PCP Sendero Luminoso había tenido en la comunidad.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Testimonio N° 203432.

⁶⁸ Declaración de Daniel Chocce Ayala a fojas 1530 del expediente judicial del proceso Uchuraccay. Otra declaración en el mismo sentido indica que «las fosas se han abierto empleando chaquitacla, pico, pala y lampa, que como estaba por anochecer y sería como a las 5:30 a 6:00 de la tarde» (declaración de Mariano Ccasani Gonzáles a fojas 2551 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

⁶⁹ En las noches siguientes los pobladores retiraron los cadáveres. El cuerpo de Severino fue trasladado al cementerio de la comunidad y el de Juan Argumedo fue llevado secretamente a uno de los cerros. El cadáver de Severino Huáscar Morales fue exhumado del cementerio de Uchuraccay el 14 de mayo de 1983, encontrándose «en el rincón del lado norte del cementerio, donde se hallaban, en la parte superior amontonadas varias piedras; se le encontró cubierto con un hábito de balleta color blanco», con perforaciones realizadas por un instrumento punzo cortante (acta de la diligencia de exhumación y autopsia del cadáver de Severino Huáscar Morales, a fojas 1550 del expediente judicial del proceso Uchuraccay). La ubicación del cadáver de Juan Argumedo fue averiguada por su hermana Juana Lidia, quien se apersonó a Uchuraccay con el juez Juan Flores Rojas el día 11 de febrero para la exhumación respectiva, la cual no pudo realizarse por no encontrarse el cuerpo. Tiempo después, Juana Lidia se enteró de que el cadáver de su hermano había sido trasladado al paraje de Juriputuna, en uno de los cerros de Uchuraccay, de donde lo llevó secretamente al cementerio de Chacabamba, siendo exhumado el 15 de agosto de 1986 (pericia del cadáver de Juan Argumedo, a fojas 6312 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

2.4.14. Los días posteriores

Al día siguiente, 27 de enero, la guerra emprendida por las comunidades contra el PCP Sendero Luminoso continuó. Uchuraccay se convirtió en el centro de los acontecimientos. Según lo acordado dos semanas antes en una asamblea intercomunal, llegaron a Uchuraccay muchos campesinos de Huaychao, Cunya, Paria, Ccarhuahurán, Pampalca y otras comunidades.⁷⁰ Un grupo numeroso se dirigió hacia Iquicha, comunidad que era considerada simpatizante de los miembros del PCP SL. Allí, capturaron a catorce campesinos que fueron golpeados, y fueron conducidos a Uchuraccay para ser juzgados. Durante el trayecto, Fortunato Gavilán, teniente gobernador de Uchuraccay, los amenazó con matarlos «haciéndoles chicharrones», diciéndoles que «los iquichanos ya no eran cabecillas sino los de Uchuraccay».⁷¹ Entre los capturados se hallaba Julio Huayta, teniente gobernador de Iquicha, quien llegó a Uchuraccay bastante golpeado y con una bandera roja amarrada al cuello.⁷²

Ese mismo día llegó a Huaychao un helicóptero en el cual viajaron los periodistas Gustavo Gorriti y Óscar Medrano de la revista *Caretas*. Encontraron a los campesinos movilizados, portando banderas blancas y en espera de represalias miembros del PCP SL. Al preguntarles por lo que ocurría, fueron informados que el alcalde de la comunidad y 50 comuneros habían salido hacia Uchuraccay, donde estaba ocurriendo «una guerra».⁷³

Por la tarde, llegaron a Uchuraccay Rosa García de Argumedo y Juana Lidia Argumedo, madre y hermana del guía, pues un joven residente en Yuracyacu les contó que éste había sido apresado en dicho lugar por los uchuraccaínos. Al acercarse a la comunidad con dirección a la casa de Teodora Soto, quien era hija de juramento de doña Rosa, oyeron los gritos de alarma: «ahí vienen los terroristas, escápanse vamos a matarlos». Asimismo, vieron que la hija de Teodora Soto se escapaba con su bebé en brazos. Corrieron tras ella y lograron alcanzarla, así ésta pudo reconocerlas y calmar a quienes se habían reunido para atacarlas, diciéndoles «que eran personas conocidas y que nada iba a pasar».⁷⁴

⁷⁰ Las declaraciones brindadas en el proceso judicial por Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar, así como por los campesinos interrogados por el juez Juan Flores Rojas abundan en detalles sobre esta impresionante movilización multicomunal. Algunos testigos mencionan que se reunieron entre 700 y 800 personas provenientes de diversas comunidades. Otros mencionan 4,000 y hasta 5,000 personas.

⁷¹ Declaración de Claudio Huamán Morales, uno de los iquichanos detenidos, a fojas 589 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁷² Esa bandera, que había sido retirada días antes por el teniente gobernador de Iquicha de uno de los cerros de esa comunidad, fue la que los comuneros de Uchuraccay entregarían a las fuerzas del orden dos días después, diciendo que era de los periodistas. Fue la bandera a la cual se refirió posteriormente el general Noel al mencionar que los periodistas llegaron a la comunidad portando una bandera roja.

⁷³ «Trágicos linchamientos». *Caretas*, 31 de enero de 1983.

⁷⁴ Declaraciones de Juana Lidia Argumedo en el atestado ampliatorio N° 14 de la Policía de Investigaciones del Perú, de fecha 14 de febrero de 1983, a fojas 469 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

En esos momentos retornaba el grupo de campesinos que se había dirigido a Iquicha. Doña Rosa y Juana Lidia —así como la esposa del guía, Julia Aguilar, quien llegó posteriormente— estuvieron otra vez a punto de ser linchadas, pero fueron salvadas gracias a la intervención de otra mujer que apaciguó a los comuneros:⁷⁵

[...] observé que se acercaba un grupo de hombres campesinos a caballo y también a pie; los de caballo eran más o menos alrededor de 50 campesinos gritando «vamos a matar o no», siendo Antonio Chávez Soto quien se interpuso y dijo que nada pasaba... Luego se hicieron presentes a pie cerca de 800 personas agrupadas según el pago o lugar al que pertenecían, cada grupo traía presos en un total de 13 personas entre hombres, mujeres y niños, a quienes se les acusaba de haber dado alojamiento a los terroristas, incluso de estar conspirados con ellos. Luego de aproximadamente media hora se hizo presente mi cuñada Julia Aguilar de Argumedo, a quien también amenazaron con darle muerte, circunstancias en que nuevamente la esposa de Lucio Gavilán Morán, Isabela Gonzáles Hinostroza, dijo que iba a apaciguar y que quien venía era su familia y conocida, en ese momento mi cuñada llegó desesperada diciendo «¿dónde está mi esposo Juan? Entréguenme», a la vez que lloraba. En esos instantes la comunidad se encolerizó y la rodeó, incluso uno de ellos le tiró un lapso en la cara diciéndole «¿a qué han venido ustedes? Esta prohibido andar allí», siendo así que quienes hablaban así eran los de Huaychao, los comuneros de Uchuraccay ya se habían calmado.⁷⁶

Las tres mujeres fueron apresadas en el local comunal, donde pasaron la noche temiendo por sus vidas. Al día siguiente, 28 de enero, los comuneros reunidos en la plaza juzgaron a los iquichanos presos, y posteriormente también a ellas:

[...] proseguían juzgando a los presos llevándoles a la plazoleta uno por uno para declarar ante la comuna... es así que conforme declaraban los presos según la gravedad del caso los soltaban a los que no tenían culpa, y a los que sí los hacían permanecer en ese sitio, para entregarlos a los sinchis según decían, pero que si no venían ellos mismos los matarían. Más o menos a las 2 de la tarde terminaron el juicio con los presos, llamándonos de inmediato a nosotras para declarar ante todos, siendo el Teniente Gobernador de Uchuraccay, Fortunato Gavilán, quien me preguntó públicamente en qué forma había venido yo y que declarara. Él estaba amargo y agresivo, procediendo yo a explicar que había venido en busca de mi hermano Juan Argumedo, a lo que la comuna empezó a gritar a iniciativa del *varayoc* de Iquicha: «¿A qué habían venido sabiendo que aquí nadie pasa? ¿No sabían ustedes que aquí nadie pasa?». Siendo Lucio Gavilán Morán y Silvio Chávez Soto quienes se ofrecieron de garantes de nosotras, ya que nos conocían, insistiendo en que nos dejaran libres y caso contrario nos mandarían a Huanta o a Tambo detenidas y no hacer justicia en ese lugar.⁷⁷

Las tres mujeres fueron perdonadas por tener conocidos en la comunidad, siendo garantizadas por seis comuneros de diferentes comunidades, entre ellos Silvio Chávez Soto por Uchuraccay. Las liberaron sólo después de hacerles juramentar:

⁷⁵ El importante papel de las mujeres en estos conflictos será desarrollado con amplitud en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

⁷⁶ Declaraciones de Juana Lidia Argumedo en el atestado ampliatorio N° 14 de la Policía de Investigaciones del Perú, de fecha 14 de febrero de 1983, a fojas 469 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁷⁷ Ibid.

[...] ante el crucifijo de la vara les han tomado juramento a cada una de ellas advirtiéndoles para que no avisen a nadie de la muerte de los periodistas y su hermano referido, en caso contrario ellas también serían muertas.⁷⁸

Posteriormente a estos hechos, los comuneros Constantino Soto Aguilar y Mariano Ccunto fueron enviados al puesto de la Guardia Civil de Tambo para informar a las autoridades sobre las muertes ocurridas y la detención de los presuntos *miembros del PCP SL* de Iquicha.

El secreto de la muerte de Juan Argumedo y Severino Morales fue guardado por todos los comuneros frente a los familiares del guía.⁷⁹ La cohesión comunal, que no existía en la vida diaria debido a las tensiones y conflictos subsistentes, se construyó al ritmo de los acontecimientos. Desde entonces, los uchuraccaínos buscaron mostrar una identidad consolidada, un *nosotros* homogéneo, eficaz como discurso silenciador de las tensiones del pasado inmediato; una identidad cerrada, monolítica.⁸⁰ Trataron de evitar cualquier fisura que alterara la imagen de una comunidad férreamente unida en su lucha contra los miembros del PCP SL, a los que identificaron como enemigos foráneos y amenazantes. Decidieron negar, por tanto, que el PCP Sendero Luminoso hubiera estado en la propia comunidad. Desde entonces, en las declaraciones de los comuneros, los miembros del PCP SL aparecen calificados como «*chay suwa terrorista*» (esos terroristas ladrones).

El 28 de enero, la desaparición de los periodistas estaba en camino de convertirse en noticia, temiéndose lo peor. Dos patrullas de efectivos acantonados en Tambo y Huanta fueron comisionadas para ir hacia las comunidades en su búsqueda. La primera de ellas fue una patrulla mixta compuesta por dieciocho infantes de marina y diez guardias civiles, al mando del Teniente Armada Peruana Ismael Bravo Reid y el Teniente Guardia Civil Hugo Vidal Ulloa. Los miembros de esta patrulla viajaron en jeep desde Tambo hasta Chalhuamayo, y desde allí emprendieron la ruta a pie hasta Uchuraccay. En el trayecto, se encontraron con los comuneros Constantino Soto Aguilar y Mariano Ccunto, quienes habían sido destacados por la comunidad para ir hasta Tambo a informar a las autoridades sobre los hechos ocurridos. Estos comuneros guiaron a la patrulla hasta Uchuraccay, a donde llegaron alrededor de las nueve de la noche. Las autoridades comunales informaron a la patrulla sobre las muertes y detenciones de los supuestos terroristas, alojándolos en el local comunal. Al amanecer del día siguiente, muy temprano, alrededor de las 6:00 a.m., las autoridades les mostraron las cuatro tumbas y les entregaron los enseres de los muertos: una bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de películas y algunas prendas de vestir.⁸¹ La patrulla regresó a Tambo llevándose dichos enseres y a dos iquichanas detenidas: Claudia Huamán Morales

⁷⁸ Declaración informativa de Juana Lidia Argumedo a fojas 265 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁷⁹ Juana Lidia Argumedo, Rosa García de Argumedo y Juana Aguilar relataron repetidas veces esos hechos durante el juicio posterior, como consta en sus declaraciones recogidas en el expediente judicial del proceso Uchuraccay. Juana Lidia también prestó declaraciones a *El Diario de Marka* en repetidas ocasiones.

⁸⁰ Fue lo que halló la prensa cuando se realizó la exhumación de los cadáveres el 30 de enero, y también la Comisión Investigadora en la asamblea comunal realizada el 11 de febrero de 1983.

⁸¹ Nota informativa de la patrulla mixta, a fojas 2353 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

y Epifania Huayta Lapa. Hacia la una de la tarde, al llegar a Tambo, el jefe de esta patrulla, oficial Ismael Bravo Reid, informó al Comando Político Militar de Ayacucho sobre lo hallado en Uchuraccay.⁸²

La segunda patrulla al mando del Capitán Guardia Civil Novato Soto Barreda, jefe del Comando Contrasubversivo de Huanta, llegó a Huaychao el 28 de enero alrededor del medio día, quedándose a pernoctar en esta comunidad. Al amanecer del día siguiente, varios comuneros de Huaychao acompañaron a los miembros de esta patrulla hasta Uchuraccay, a donde llegaron alrededor de las 8:30 a.m., siendo informados por los campesinos que la primera patrulla ya se había retirado llevándose las pertenencias de los ocho «terroristas» muertos.⁸³ Regresaron a Huaychao llevándose al detenido iquichano Dionisio Huachaca Sulca, encontrándose en esta comunidad con un helicóptero comandado por el Mayor FAP Jorge Ernesto Barboza Salaverry, quien alrededor de las seis de la tarde aterrizó en Uchuraccay para constatar la existencia de las tumbas, regresando rápidamente a Huaychao y Ayacucho, llevándose al iquichano detenido.⁸⁴

Para entonces, en Ayacucho crecía la preocupación de los corresponsales de prensa. Los primeros rumores e informaciones extraoficiales indicaban que los periodistas habían sido atacados rumbo a Huaychao, muriendo dos de ellos y quedando heridos los otros seis. Alrededor de las siete de la noche, se confirmó que todos habían muerto a manos de los campesinos de Uchuraccay.⁸⁵

Ante la gravedad de los acontecimientos, los hombres de prensa actuaron rápidamente. A la mañana del día siguiente, domingo 30 de enero, luego de un incidente producido por la cancelación del vuelo del avión presidencial, arribó a Ayacucho un avión fletado por el Diario *La República* conduciendo a un numeroso grupo de reporteros nacionales y extranjeros, parlamentarios, eclesiásticos y familiares de los periodistas asesinados. En la conferencia de prensa realizada seguidamente, el general Roberto Clemente Noel Moral negó haber conocido del viaje de los periodistas hasta la tarde del 28 de enero, y señaló que los periodistas llegaron a Uchuraccay portando una bandera roja, siendo asesinados por los comuneros en defensa de la legalidad. Asimismo, mencionó en un momento que los campesinos pudieron confundir las cámaras fotográficas con armas.⁸⁶

Esa misma mañana, desde temprano, arribaron a Uchuraccay varios helicópteros. En uno de ellos llegó el periodista ayacuchano Luis Morales Ortega, corresponsal del *Diario de Marka*, quien obtuvo las primeras declaraciones de los campesinos.⁸⁷ La exhumación, que inició el largo

⁸² Declaraciones del Teniente AP Ismael Bravo Reid a fojas 1216 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁸³ Declaraciones del Capitán GC Novato Soto Barrera a fojas 5584 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Guillermo Thorndike. *Uchuraccay, testimonio de una masacre*. Lima: E.I.R.L., 1983, p. 53.

⁸⁶ Al reseñar dichos acontecimientos varios años después en su polémico libro de memorias como Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, el general Noel mencionó que las intervenciones de algunos parlamentarios y periodistas durante la rueda de prensa exhibían el deseo premeditado de culpar al Comando Político Militar por la tragedia. (Roberto Clemente Noel Moral. *Ayacucho, testimonio de un soldado*. Lima: Publinor, 1989, p. 92).

⁸⁷ Luis Morales —quien había planificado el viaje junto a los ocho periodistas muertos— recogió grabadora en mano las declaraciones de Saturnino Ayala, Francisco Ñaupá, Olimpio Gavilán, Julia Aujatoma, Vicente Quispe Figueroa, Teodosio Soto, Alfonso Pérez, Mariano Figerba, Marcia Gálvez, Juanita Gavilán y Pedro Ramos, entre otros. Estas

proceso judicial del caso, fue realizada de manera irregular, en ausencia del Fiscal Provincial en lo penal y del Secretario Judicial, por lo cual el juez nombró a un sinchi como testigo actuario. Dicha situación fue producida por la intromisión del Comando Político Militar, que en lugar de conducir a Uchuraccay al juez instructor de Huanta, a cuya jurisdicción correspondía el caso, convocó al juez instructor de Huamanga, doctor Hugo Molina Ordóñez. Se encontraban además 13 especialistas en criminalística de la PIP llegados desde Lima.⁸⁸ El juez interrogó a algunos comuneros y recogió algunas evidencias de los hechos, pero no habló con las principales autoridades comunales porque habían viajado hacia Tambo, cumpliendo la citación realizada el día anterior por el jefe de la patrulla mixta, oficial Ismael Bravo Reid. Cuando el grupo de periodistas llegados desde Lima arribó a Uchuraccay, fue necesario sacar los cadáveres de las bolsas negras de polietileno en que habían sido depositados. Horas después, las imágenes de los cuerpos linchados propagadas por la televisión, transmitieron también una sensación de horror hasta entonces desconocida para la mayoría de hogares peruanos.⁸⁹

Las fuerzas del orden no se quedaron ni un solo día en Uchuraccay. Se fueron luego de realizadas las exhumaciones, dejaron a los comuneros completamente desguarnecidos. Además, en adelante disminuyeron sus patrullajes en la zona. En Lima, ante el carácter sumamente controvertido de los hechos, el gobierno nombró una Comisión Investigadora integrada por el escritor Mario Vargas Llosa, el entonces Decano del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas, y el jurista Abraham Guzmán Figueroa.

La Comisión se reunió con los comuneros de Uchuraccay en una asamblea realizada el 11 de febrero, tres semanas después de la masacre. A lo largo del diálogo de casi tres horas, efectuado mediante traductores debido a que ninguno de los comisionados hablaba quechua, los campesinos reconocieron que fueron los autores del asesinato de los periodistas e insistieron en que habían sido autorizados por los sinchis para matar a los «terroristas» pero callaron completamente sobre las muertes de Juan Argumedo y Severino Huáscar Morales, exigiendo garantías y declarando su apoyo incondicional al presidente Belaunde:

—Ñoqaykuja señor presidentitam apuyaniku, señor, paymanmi sayaniku, señor, manan pimanchu, señor. (Nosotros, señor, apoyamos al Presidente, señor, apoyamos a él, señor, y no a nadie más.)

—Wañuchiwanankupaqmi tuta armadu yaykumunku. Chaymi wañuchiwanankumanta tuta iskapaniku orqokunaman, señor. (Vienen por las noches para matarnos. Por eso de ser matados, en la noche nosotros nos escapamos hacia los cerros, señor.)

—Chaynapitay paykumuwanmanku, señor, chayna reqsiwaspankuqa, paymantam wañusaq. Kupus kay paguntin paguntin kumunidad, señor mayqenniypupas, señor, wañusaqku, chaypaqmi qarantiwanaykikupa kankiku, señor. (Así, cuidado que en esa forma nos entren, conociéndonos así, por él vamos a morir. Aquí pago tras pago, las comunidades, señor,

declaraciones son analizadas en la sección correspondiente al papel de los medios de comunicación («Así murieron los periodistas. Excepcional testimonio de tres comuneros». *El Diario de Marka*, 31 de enero de 1983. «Estos son los testimonios de Uchuraccay». *El Diario de Marka*, 12 de febrero de 1983, pp. 22-27).

⁸⁸ Acta de la diligencia de exhumación, a fojas 4 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

⁸⁹ Véase capítulo sobre el papel de los medios de comunicación.

cualquiera de nosotros vamos a morir. Para eso están ustedes, para darnos garantías, señor).⁹⁰

La demanda de protección fue uno de los temas que resaltó en la asamblea. Los comuneros pedían a gritos seguridad. Sabían que el PCP Sendero Luminoso los atacaría. Ya para entonces habían escuchado rumores procedentes de otras comunidades: «Uchuraqaytaqa wañuchisaqmi» (a los de Uchuraccay los mataremos), «wañuchiwaytan pinsanku» (están pensando matarnos). Se escucha en sus demandas el clamor por seguridad y la presencia semanal de los sinchis:

— Imaynayariki, siñur hifikuna sapa simana watukamuwachunku icha kayna... tardinkunapas yaykuramuwanmanku chay Aqomanta. Miskapampamanta, chay Challwamay, usnumanta... Chay tiruristakunan, siñur. Chaya kaynan sapa simanamriki watukamuwachunku, siñur. (Cómo va a ser, que los señores jefes nos visiten cada semana, o tal vez como ahora... por la tarde podrían entrarnos de Aqo, Michkapampa, de Challhuamanyo, de Usnu... esos terroristas señor. Por esa razón, señor, cada semana que nos visiten).

— (Mario Vargas Llosa): Eso vamos a transmitirlo al señor Presidente y vamos a decírselo a la autoridad ahora en Ayacucho que los comuneros de Uchuraccay deben de estar protegidos por los soldados, por las fuerzas del orden... y también contra los terroristas.

— Munanikutaqmi, siñur, mitrallata, huk iskay kinsallatapas difindikunaykupa, manachu siñur prisidinti faburta ruwaykamanmanku... chay llaqtaykupi difindikunaykupa, siñur. (También queremos, señor, unas dos o tres metralletas para defendernos, no podría hacernos ese favor el señor Presidente... para que aquí en este pueblo nos defendamos).⁹¹

Sin embargo, esa misma tarde la Comisión Investigadora emprendió el regreso a Lima y la comunidad volvió a quedar librada a su suerte. La región vivía sus meses más violentos. Las acciones de las fuerzas contrainsurgentes y del PCP Sendero Luminoso teñían de sangre Ayacucho, pero la tragedia se desarrollaba en sordina pues luego de los sucesos del 26 de enero, el Comando Político Militar bloqueó el acceso de la prensa a las zonas rurales.

2.4.2. La historia desconocida: violencia y represión contra Uchuraccay

2.4.2.1. Los ataques y la diáspora

Durante los meses siguientes, el PCP Sendero Luminoso incursionó varias veces en Uchuraccay, asesinando a quienes habrían tenido alguna participación en la matanza de los periodistas. Los comuneros recuerdan, sobre todo, tres ataques realizados durante 1983: el 20 de mayo, el 16 de julio y el 24 de diciembre. El recuerdo sobre el número exacto de muertos en cada ataque varía y

⁹⁰ Transcripción de la asamblea entre los comuneros de Uchuraccay y la Comisión Vargas Llosa, realizada el 11 de febrero de 1983.

⁹¹ Ibid.

los nombres se confunden, pero las fechas son registradas con exactitud por su asociación con el calendario religioso, pues las masacres ocurrieron durante las fiestas del Espíritu Santo (Corpus Christi), la Virgen del Carmen y Navidad. Los días de fiesta fueron ocasiones propicias para las irrupciones de los miembros del PCP SL pues en esas fechas todos los pobladores se encontraban reunidos, ocasión excepcional debido al patrón disperso de la comunidad. Las distracciones propias de las fiestas —cohetes, fuegos artificiales, música, corridas de toros, alcohol— relajaban la vigilancia; además, el arribo de muchos visitantes permitía a los miembros del PCP SL infiltrarse en celebraciones, aplicando una economía de la violencia perversa y deliberada.

Durante la fiesta del Espíritu Santo murieron alrededor de 20 campesinos. El PCP Sendero Luminoso llegó buscándolos por sus nombres casa por casa. El ataque se inició a las 4 a.m. en Huantaqasa, luego llegó al centro del pueblo y a Wachwaqasa. Un comunero relata que los atacantes gritaron diciendo:

Uchuraccayta, lliutam tukusaq, uma calaveraykichichpim traguta, yawarta tomasaqku (a los de Uchuraccay, a todos los vamos a terminar, en la calavera de sus cabezas vamos a tomar trago y sangre).⁹²

Esa madrugada murieron Marcia Gálvez Ñawpa y Juana Gavilán García, esposa y hermana del teniente gobernador Fortunato Gavilán García; Paula Ccasani Figueroa, Marina Ccasani Figueroa, Alberto Romero Nawpa, Telésforo Ayala Díaz, Sacarías Mauli y Alejandro Chávez, entre otros.⁹³

El segundo ataque ocurrió a la medianoche del 16 de julio, luego de concluida la fiesta de la Virgen del Carmen. Los varones habían tomado y estaban dormidos. Entonces, alrededor de cincuenta miembros del PCP SL entraron al pueblo por la parte alta de Tikllaqocha, donde se encontraba la casa de uno de los mayordomos de la fiesta: Alejandro Pérez Garagondo. En esta incursión fueron asesinadas unas 20 personas, entre ellas Alejandro y su hijo Marcial Pérez Rimachi, Pablo Taype, Baltazar Nawpa Ticlla, Benedicta Llanccce Gavilán, Francisca Llanccce Gavilán, Esteban Huachaca, Teófilo Huamán Cunto, Alejandra Figueroa Llanccce, Melquíades Gavilán Romero, Miguel Solier Quispe, quien era violinista de Llaulli y vino a Uchuraccay para la fiesta por invitación de su suegro Julián Ayala, maestro arpista de la comunidad. A Simón Figueroa Cunto lo hicieron arrodillar y le dijeron «ahora pues, habla mal del partido, grita, y le dieron un tiro en la cabeza con una escopeta».⁹⁴ Un comunero recuerda que al día siguiente, cuando los pobladores se reunieron para reconocer los cuerpos: «se nubló el poblado, por haber sucedido la

⁹² Testimonio N° 201695.

⁹³ Esta información, así como las que se ofrecen más adelante consignando el nombre de las víctimas, proviene de distintas entrevistas realizadas los años 2000, 2001 y 2002, contrastadas con los testimonios que la CVR recogió.

⁹⁴ Testimonio N° 201695.

masacre... A Pérez le habían ahorcado. A Pablo Taipe le habían baleado en la barriga, por eso los chanchos también le habían sacado los intestinos».⁹⁵

Los cadáveres fueron depositados en la escuela, mientras los sobrevivientes se organizaban para cuidarse y dormir fuera de sus viviendas; se formó además una comisión que viajó a Huanta para informar a las autoridades. Recién al día siguiente, el 19 de julio, llegaron los militares y autorizaron el entierro de los muertos.

El tercer ataque se dio en la víspera de la navidad, el 24 de diciembre de 1983. Después de ingresar violentamente al pueblo, el PCP Sendero Luminoso sacó nuevamente a los campesinos por sus nombres, con una lista, y luego de reunirlos en la escuela asesinó a ocho, entre ellos a Ignacio Figueroa Gavilán, Baltazar Figueroa Gavilán, Lorenzo Figueroa Cunto, Daniel Chocce Ayala, Benito Auccatoma Quispe, Teodora Soto Ticlla y Teófila Chávez Soto, madre y hermana de Silvio Chávez Soto, el secretario de la comunidad.

Nadie había podido dormir después que se fueron, en la mañana todos nos ayudamos a recoger a nuestros muertos, para velarlos y enterrarlos; pero teníamos mucho miedo de que fueran a volver, no podíamos estar tranquilos, estábamos muy asustados. Era imposible vivir así, pero qué podíamos hacer, nada... Yo lloraba todo el tiempo, hasta cuando comía, un día que estaba comiendo mi pan, mi hijita me dice mamita, no llores come tranquila que yo te estoy cuidando. Así, cuando me veían llorar mis hijitos, me acompañaban llorando también. No teníamos a nadie.⁹⁶

En esta espiral de destrucción, no sólo el PCP Sendero Luminoso agredió a Uchuraccay. En 1984 las comunidades organizadas en Comités de Defensa Civil habían estrechado sus coordinaciones con los militares. Las rondas de Ccaccas, Ccanis y Patasucro, ubicadas en las partes altas de la ciudad de Huanta, así como las de Tambo, Balcón, Acco, Challhuamayo y Ccarhuahurán, hacían campañas de rastrillaje por toda la zona buscando miembros del PCP SL.⁹⁷ Uchuraccay fue visitada en varias ocasiones, por estar ubicada en dirección al nevado Rasuwilca, que se había convertido en una base del PCP SL desde donde las columnas atacaban los pueblos. Muchas veces estos rastrillajes eran acciones conjuntas entre las rondas campesinas y los militares, que se convirtieron en violentas incursiones punitivas contra los uchuraccaínos.

Este último capítulo comenzó apenas unos días después del ataque navideño del PCP Sendero Luminoso, cuando los militares ingresaron al pueblo, ensañándose con los sobrevivientes:

Después de cinco días volvieron los del helicóptero, los de la naval, se bajaron allá al frente, y entraron al pueblo a robarnos todo lo que teníamos, ¡ustedes son terrucos! nos decían. Todas nuestras ropas, nuestras ollas, platos, lo que teníamos papita guardado, todo buscaban, y se lo llevaban; hasta nuestra comida se lo han llevado, nuestro chuño, caya, pellejos donde dormíamos; todo se lo llevaban. Después saliendo quemaban la casa, así hacían... a todos nuestros animales arreando se los han llevado insultándonos,

⁹⁵ Testimonio N° 201679.

⁹⁶ Testimonio N° 201681

⁹⁷ Esta información proviene de la transcripción del Acta de Organización del Comité de Defensa Civil de los pagos de Balcón, Carhuapampa y Acco, organizados desde 1984.

empujándonos, nos han quitado todo lo que teníamos, han destrozado lo que han querido, ¡terruco son, carajo! nos decían; nos han dejado sin nada, ni siquiera para comer teníamos, han quemado nuestras casas.⁹⁸

Las incursiones continuaron en los meses siguientes:

[...] los senderistas, miembros de Comité de Autodefensa y los militares, indistintamente llegaban y quemaban las casas, robaban los enseres y ganados, ovejas, llamas, caballos, no respetaban a varones, mujeres ni niños, eran maltratados delante de la gente, violaban a las mujeres y después las mataban; además, cuando querían, mataban a los niños; nadie podía reclamar porque sino los mataban; por eso los pobladores vivían escondiéndose en los cerros.⁹⁹

Rasgando la tierra hacíamos hueco. Así pasábamos todas las noches, así dormíamos, totalmente en el cerro, en el frío. Mi hijo también llorando. Al amanecer regresábamos a nuestras casas. Así en los huaycos escondiéndonos dormíamos.¹⁰⁰

Luego de los ataques, muchos sobrevivientes huyeron hacia la selva y los valles de Huanta y Tambo. Quienes se quedaron al cuidado de los animales y cultivos fueron sobre todo mujeres y niños. En abril de 1984 incursionaron las rondas de Carhuahurán, llevándose las campanas de la iglesia y las carpetas y el techo de la escuela. En agosto, fueron asesinados por el ejército la esposa y el pequeño hijo de Faustino Gómez, así como la hija menor de Paulino Figueroa. Ese mismo mes, cinco mujeres que escapaban en dirección a las cumbres del Rasuwilka fueron acribilladas desde un helicóptero. Lo escucharon venir y comenzaron a huir, como lo hacían cada vez que llegaban los miembros del PCP-SL y los militares, buscando refugio entre los cerros. Murieron Angelina Llanccce Puclla, Inocencia Llanccce, Bonifacia Gálvez Farfán, Emilia Ccahuana Cunto y María Maule.¹⁰¹

Por fin, hacia agosto de 1984, a los uchuraccaínos no les quedó más opción que vivir «esparcidos por todos lados».¹⁰² La comunidad quedó deshabitada. Para entonces, hacía ya tiempo que Silvio Chávez Soto, el secretario de la comunidad que encabezó el ataque contra los periodistas, se había suicidado, acosado por el PCP-Sendero Luminoso y presagiando la persecución de los meses siguientes. También Fortunato Gavilán, el teniente gobernador, quien trató de huir hacia la selva, terminó asesinado por el PCP-Sendero Luminoso el 2 agosto de 1983 en Tacctaca, en el km 48 de la carretera Tambo-Ayacucho. Sobre su cadáver se halló un cartel que decía «Fortunato Gavilán, cabeza negra de Uchuraccay, asesino de guerrilleros, campesinos y ocho periodistas. Así mueren los traidores del pueblo, serviles de Belaunde».¹⁰³

⁹⁸ Testimonio N° 201681

⁹⁹ Testimonio N° 201695.

¹⁰⁰ Entrevista a Teófila Huaraca realizada en Uchuraccay el 9 de enero de 2001.

¹⁰¹ Testimonios N° 201695 y N° 201693.

¹⁰² Testimonio N° 201690.

¹⁰³ Oficio del juez Hugo Molina Ordóñez, juez de primera instancia de La Mar, al presidente de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Ayacucho, en el expediente judicial del proceso Uchuraccay.

Así pues, los comuneros que decidieron huir tampoco estuvieron libres de ser asesinados. Al pasar por las alturas de Carhuapampa, mientras escapaban de Uchuraccay hacia Tambo en busca de refugio, los hermanos Juan Manuel Romero Araujo y Pablo Romero Araujo fueron asesinados por los ronderos e infantes de marina de la base de Tambo. La misma suerte tuvieron Patrocina Gavilán Curo, Emilia Huachaca y Esteban Huachaca Cárdenas,¹⁰⁴ quienes murieron cuando huían hacia Santillana y Huanta. En Chaca, cuando huían hacia Huanta, Justina Huamán y su hijo de 17 años fueron acribillados por los militares y sus cuerpos arrojados.

El vía crucis de los uchuraccaínos continuó en las zonas de refugio. La agrupación de desplazados de Ccarhuapampa,¹⁰⁵ a donde huyeron muchos uchuraccaínos, fue atacada por el PCP Sendero Luminoso en 1988. Murieron Paulina Ccasani Huicho, Fortunato Soto Ccasani, Dionisio Nawpa Gavilán y Angélica Huachaca Gavilán. Un sobreviviente recuerda que los miembros del PCP SL llegaron «aproximadamente a las ocho de la noche, varones y mujeres entraron, algunos pobladores empezaron a escapar pero otros, que no pudieron, se quedaron. Mataron a varias personas, los mataron con hacha en la cabeza».¹⁰⁶

Los uchuraccaínos recuerdan ese tiempo como una época de caos, confusión y extremo dolor: «muspaypa hina karaniku» (como entre sueños hemos estado, como atontados hemos vivido), dice Martina Gavilán Huamán, cuyo esposo Marcial Pérez Rimachi había sido asesinado la noche del 16 de julio, en plena fiesta de la virgen del Carmen: «ya nadie estaba en el pueblo, sólo aullaban los perros. Nosotros empezamos a correr por aquí por allá en esa hora, no podemos ir a ningún lado».¹⁰⁷

Las cifras son catastróficas. Murieron 135 personas en una comunidad que en 1981 tenía 470 habitantes. La crueldad con la que los mataron ahonda la tristeza y el dolor; muchos recuerdan que sus familiares y amigos fueron asesinados con hachazos, apedreados, acuchillados o ahorcados. En varios casos los cuerpos fueron arrojados en los cerros, siendo comidos por los perros. Algunos nunca fueron hallados. Tampoco fueron denunciados como desaparecidos.

La idea de vivir «muspaypa hina» no sólo remarca la confusión generalizada, sino también el estado emocional de zozobra e incertidumbre. Por contraste, algunos recuerdan que antes del tiempo de la violencia vivían tranquilos: «punta tiempopicca himapas tranquilullan karcca» (en los tiempos anteriores todo era tranquilo).¹⁰⁸

El estigma y la persecución obligaron a los uchuraccaínos desplazados a negar su propia identidad comunal y personal, «por todas las zonas donde se refugiaban... tenían que negar su

¹⁰⁴ Testimonios N° 201691 y N° 201690.

¹⁰⁵ Las llamadas «agrupaciones» fueron asentamientos de desplazados provenientes de diversas comunidades que se instalaron en los contornos de los cuarteles como consecuencia de la violencia. Las «agrupaciones» cobijaron a las familias campesinas más pobres: aquellas que no tenían recursos económicos ni familiares para migrar lejos de sus comunidades de origen. Muchos uchuraccaínos huyeron a la agrupación Ccarhuapampa, ubicada en Tambo, la cual albergó familias provenientes de diversas comunidades de las alturas de Huanta, como Paria, Ccarhuac, Tantacocha, Balcón, Polanco, Rucacyacu, Chululla y Uchuraccay.

¹⁰⁶ Testimonio N° 201695.

¹⁰⁷ Entrevista realizada en Uchuraccay el 7 de enero de 2001.

procedencia»¹⁰⁹ debido a la persecución cotidiana y las acusaciones de «salvajes», «chutos» y «mata periodistas». Así, cuando llegaron desplazados a Ccarhuapampa en agosto de 1984, los uchuraccaínos se asentaron como originarios de Huantaqasa.¹¹⁰ El testimonio de Saturnina Figueroa grafica bien esta situación:

La gente de Tambo más nos odiaba porque éramos de Uchuraccay. Decían que éramos asesinos porque mataron a los periodistas; nosotros más nos defendíamos diciendo que éramos de Huantaqasa, será de Uchuraccay quienes mataron, así nos defendíamos.¹¹¹

Los años transcurrían y la vorágine de la violencia continuaba. En 1992, un comunero uchuraccaíno enrolado en el Comité de Autodefensa de una comunidad vecina volvió a ver la comunidad:

[...] como parte de la patrulla civil de San José de Secce, llegué a un cerro de donde se veía mi pueblo, estaba totalmente silencio. Observé que mis árboles que los había dejado pequeños, ya se veían grandes. Miré a Rasuwilka y estaba todo negro, seguramente por las cosas que pasaban, y me puse muy triste y lloré al ver a mi pueblo.¹¹²

2.4.2.2. El retorno

Los años de la dispersión fueron muy duros para los uchuraccaínos sobrevivientes, quienes hicieron de la negación y del silencio una estrategia de defensa frente a situaciones límite. Por todo ello, a inicios de la década del 90 fue muy difícil plantearse la posibilidad del retorno, aunque en el fondo era algo muy querido. El líder de esta iniciativa fue el comunero Elías Ccente, quien siendo presidente de la Asociación de Comunidades Desplazadas de la Provincia de Huanta (ACODEPH) convocó durante varios meses al reencuentro de las familias uchuraccaínas desplazadas en Huanta, Tambo, Ayacucho, Lima y el Valle del Río Apurímac, mediante cartas, visitas personales y avisos por radio. Fue un proceso sumamente difícil, por la persistencia del miedo, la estigmatización de Uchuraccay y la incertidumbre sobre las posibilidades reales de reconstruir la comunidad. El grupo de uchuraccaínos residentes en Huanta, dirigidos por Elías Ccente, logró el compromiso de apoyo de diversas instituciones gubernamentales y privadas. Por fin, el 10 de octubre de 1993, ante la disminución de la acción subversiva en la zona, un grupo de veinticuatro familias apoyadas por el Concilio Nacional Evangélico Peruano (CONEP) volvió a Uchuraccay. Después de muchas discusiones respecto de, si era conveniente o no adoptar un nuevo nombre para la comunidad, los

¹⁰⁸ Testimonio N° 201691.

¹⁰⁹ Testimonio N° 201695.

¹¹⁰ En 1984, en el Libro de Actas de Constitución de la Agrupación Carhuapampa, los uchuraccaínos registrados mencionaron ser originarios de Huantaqasa, lo cual no ocurrió con los desplazados de las otras 14 comunidades, que mencionaron el nombre original de sus pueblos. «Uchuraccay era un nombre buscado y daba vergüenza» será lo que recuerde el líder del retorno, Elías Ccente.

¹¹¹ Entrevista realizada en Uchuraccay el 9 de febrero de 2002.

¹¹² Testimonio N° 201679

retornantes decidieron mantener el de Uchuraccay, sobreponiéndose así al estigma que los persiguió durante tanto tiempo.

Debido a razones militares, y para alejarse de las «memorias malas»,¹¹³ los retornantes decidieron emplazar el nuevo Uchuraccay en plena ladera, encima del antiguo centro del pueblo, en un lugar más frío pero seguro, adecuadamente resguardado ante la eventualidad de ataques. Después de tantos años, a pesar de la carencia de semillas y ganado, los uchuraccaínos volvieron a sembrar poco a poco los surcos de sus chacras y a pastar sus animales. Una base militar instalada en el pueblo brindó la seguridad necesaria para el retorno de otras familias desplazadas, quedándose hasta marzo de 1997.

Durante esos años, el gobierno de Alberto Fujimori utilizó el repoblamiento de las comunidades ayacuchanas como prueba del éxito de su política de pacificación. La comunidad fue mostrada como ejemplo de esa política y en 1995 el propio presidente inauguró el Nuevo Uchuraccay, compuesto por medio centenar de pequeñas casas contiguas, construidas por el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) de acuerdo con un modelo arquitectónico urbano. El presidente entregó también una posta de salud, una ambulancia y tres computadoras, a pesar de que la comunidad no contaba con energía eléctrica.

El 26 de enero de 1998, en conmemoración de los quince años de la muerte de los ocho periodistas, se realizó el «I Encuentro de la paz y la reconciliación nacional», impulsado por un grupo de periodistas ayacuchanos y las autoridades del distrito de Tambo, quienes se contactaron con los familiares de los periodistas y difundieron ampliamente la convocatoria a dicha actividad. Como parte de los actos conmemorativos, se realizó una caravana desde Tambo hasta Uchuraccay facilitada por la nueva carretera que se había construido hasta la comunidad. La caravana se ha venido repitiendo el 26 de enero de cada año bajo el nombre de «Ruta por la paz y la reconciliación nacional».

Sin embargo, para los uchuraccaínos la conmemoración más importante es el 10 de octubre, día del retorno, en que celebran la reconstrucción de la comunidad y recuerdan los dolorosos sucesos ocurridos durante el tiempo de la violencia y la diáspora.

En mayo del 2002, al enterarse que la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegaría a la comunidad, algunos comuneros pensaron que ésta iba para «juzgarlos por la matanza de los periodistas».¹¹⁴ Superada la primera desconfianza, los comuneros elaboraron en dos asambleas la lista de los uchuraccaínos muertos a causa de la violencia política. Era el primer acto de reconocimiento, mediante el cual comenzaban a darle rostro e identidad a sus muertos. El presidente de la comunidad, Emilio Ccente, hizo entrega de esta relación al representante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la sede de Ayacucho.

¹¹³ Orin Starn. «Uchuraccay y el retorno a los andes». *Quehacer*, n.º 77. Lima, DESCO, 1994, p. 84.

¹¹⁴ Entrevistas realizadas en Uchuraccay el 29 de mayo de 2002.

2.4.3. El contexto de interpretación

Después de la masacre de los periodistas, se realizaron investigaciones de distinto tipo, que buscaron identificar a los culpables y explicar las razones de lo ocurrido. Las más importantes fueron las realizadas por la Comisión Investigadora nombrada por el gobierno, por la prensa limeña y por el poder judicial.

2.4.3.1. El Informe de la Comisión Investigadora

La Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay fue constituida el 2 de febrero de 1983, una semana después de ocurrida la masacre de los periodistas, mediante la Resolución Suprema N° 0016-83-PCM, del 2 de febrero de 1983, que les encargaba elaborar un informe sobre los sucesos en el plazo de un mes. La Comisión fue presidida por el escritor Mario Vargas Llosa e integrada además por el periodista Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa. Los comisionados convocaron a un selecto equipo de asesores compuesto por tres antropólogos, un psicoanalista, un jurista y dos lingüistas.

Cumpliendo su mandato, en ceremonia especial realizada en Palacio de Gobierno, la Comisión entregó su informe al Presidente Fernando Belaunde a inicios de marzo. Ante la expectativa generada, el contenido del informe fue expuesto en la televisión por Mario Vargas Llosa. Diversas partes del mismo fueron publicadas por los medios de prensa y el texto completo, acompañado por cinco anexos elaborados por los asesores especialistas, referidos a los aspectos antropológicos, jurídicos, psicoanalíticos y lingüísticos del problema, así como por algunas fotografías, fue editado tres meses después en un libro que tuvo circulación muy restringida.¹¹⁵

El informe está organizado en dos partes. La primera de ellas, titulada «Cómo fue», busca reconstruir los hechos, describiendo cronológicamente los preparativos del viaje de los periodistas, el itinerario seguido y las circunstancias del encuentro fatal con los campesinos de Uchuraccay. La segunda parte, titulada «¿Por qué fue?», busca explicar la masacre presentando las «causas inmediatas» y las «causas mediatas» del escenario de violencia en que ocurrió.

A pesar de las limitaciones en la recolección de testimonios,¹¹⁶ el informe pudo describir el contexto en el que se produjo la masacre: la violencia generalizada que vivía la zona por el enfrentamiento abierto desatado entre comunidades y miembros del PCP-SL. Logró reconstruir verazmente, asimismo, los sucesos ocurridos desde que los periodistas iniciaron los preparativos

¹¹⁵ *Informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de Uchuraccay*. Lima: Editora Perú, junio de 1983. Citada en adelante como: *Informe...*

¹¹⁶ Ninguno de los comisionados hablaba quechua, y apenas pudieron realizar una visita a Uchuraccay el 11 de febrero, recogiendo las declaraciones de los comuneros en una Asamblea Comunal en la cual hablaron sobre todo los varones. La transcripción de esta asamblea nunca fue publicada.

del viaje hasta que ocurrió la tragedia, estableciendo con «convicción absoluta» que «el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ella fuerzas del orden».¹¹⁷

El silencio de los comuneros respecto del modo de ejecución de la masacre, motivado por su afán de ocultar la muerte del guía Juan Argumedo y del comunero Severino Huáscar Morales,¹¹⁸ impidió a la Comisión llegar a establecer los pormenores de lo ocurrido el 26 de enero, por lo cual el informe supuso, con «convicción relativa», que los periodistas «debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo».¹¹⁹ Posteriormente, el hallazgo de las fotografías tomadas por Willy Retto¹²⁰ demostró que dicha suposición era falsa, lo cual, para diversos sectores de la opinión pública, desacreditó el conjunto del informe, a pesar de que éste precisaba líneas abajo que «no se puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacias, pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase el malentendido en vez de disiparlo».¹²¹

Aunque niega la presencia de miembros de las fuerzas del orden el 26 de enero en Uchuraccay, el informe señala que los campesinos fueron alentados a usar la violencia por los sinchis, quienes les indicaron los días previos que debían matar a todo terrorista que llegara al pueblo. El informe determinó que en el desenlace de los hechos «jugó un papel importante, y acaso decisivo, la seguridad de los comuneros de que tenían autorización para actuar así por parte de la autoridad representada por los sinchis».¹²² Sin embargo, la Comisión concluyó que dicha incitación no fue sistemática, ni respondió a una política implementada por el Comando Político Militar, excluyendo de esa manera a los altos mandos militares de cualquier responsabilidad.

El informe determinó que los ejecutores directos del crimen fueron los campesinos de Uchuraccay, reconstruyendo fehacientemente los hechos ocurridos hasta el momento de la llegada de los periodistas a dicha comunidad, y entreviendo el contexto de violencia imperante. Pero brindó una explicación sumamente controvertida de los hechos, que tuvo consecuencias significativas en el contexto del conflicto armado interno de esos años.¹²³ La masacre fue presentada como resultado

¹¹⁷ Informe... p. 19.

¹¹⁸ Véase la parte del presente informe referida a los hechos ocurridos el 26 de enero.

¹¹⁹ Informe... p. 15.

¹²⁰ El 14 de mayo de 1983, al realizarse un patrullaje de búsqueda ordenado por el juez Juan Flores Rojas, fue hallado un malefín oculto en una pequeña cueva del cerro Raccraccasa, el cual contenía varios rollos fotográficos y los documentos personales de Willy Retto, Amador García y Pedro Sánchez. Fue hallada también una cámara fotográfica marca Minolta perteneciente a Willy Retto, la cual contenía un rollo con nueve fotos que captan los momentos previos a la matanza (acta de incautación a fojas 1544 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

¹²¹ Informe... p. 15.

¹²² Informe... p. 20.

¹²³ La invisibilidad de la muerte de 135 campesinos es, por ejemplo, causa y consecuencia del tipo de interpretaciones que aquí analizamos.

de un malentendido generado por las diferencias culturales existentes entre los campesinos quechuas y el país urbano.

Para explicar este malentendido cultural, la Comisión reprodujo la contraposición entre un «Perú profundo» y un «Perú oficial», concluyendo que la masacre mostraba la propia tragedia del Perú como país y nación, existiendo «una responsabilidad histórica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay que nos incumbe a una mayoría de peruanos».¹²⁴

El supuesto malentendido cultural subyacente a los hechos, fue destacado posteriormente por Mario Vargas Llosa, quien presentó a Uchuraccay como parte de un mundo completamente diferenciado del resto del país, congelado en el tiempo, «atrasado y tan violento», con hombres que viven «todavía como en los tiempos prehispánicos».¹²⁵ De acuerdo a esa visión, la distancia cultural entre los dos Perú, entendida también como una distancia histórica, aparece formulada como el gran problema nacional:

El que haya un país real completamente separado del país oficial es, por supuesto, el gran problema peruano. Que al mismo tiempo vivan en el país hombres que participan del siglo XX y hombres como los comuneros de Uchuraccay y de todas las comunidades iquichanas que viven en el siglo XIX, para no decir en el siglo XVII. Esa enorme distancia que hay entre los dos Perú está detrás de la tragedia que acabamos de investigar.¹²⁶

El énfasis en la absoluta diferenciación cultural, guió también las interpretaciones desarrolladas por los antropólogos asesores de la Comisión, quienes buscaron la clave de los hechos analizando el trasfondo mágico-religioso de la matanza. El tipo de ajusticiamiento —con golpes concentrados en los ojos y la boca, sobre todo— así como la forma de entierro —fuera del cementerio, con dos cuerpos por cada fosa, semidesnudos y boca abajo— mostrarían que los periodistas fueron considerados «diablos» o «seres que en vida hicieron pacto con el mal»,¹²⁷ siendo enterrados «según otros rituales destinados a los “no bautizados” o “no cristianos” o los “anticristos”».¹²⁸

Otro elemento que guió las explicaciones del informe, fue considerar la pertenencia de las comunidades de las punas de Huanta al «grupo étnico de Iquicha» o «iquichanos». Se trataría de un grupo étnico de orígenes prehispánicos, heredero de una historia caracterizada «por largos períodos de aislamiento casi total y por intempestivas irrupciones bélicas de esas comunidades en los acontecimientos de la región o de la nación».¹²⁹ El rasgo característico de esas comunidades —su

¹²⁴ Informe... p. 40.

¹²⁵ «Después del informe: conversación sobre Uchuraccay». Entrevista a Mario Vargas Llosa realizada por Alberto Bonilla. *Caretas*, n.º 738. 7 de marzo de 1983. Semejante imagen fue ofrecida por Mario Vargas Llosa en un extenso relato literario sobre la masacre publicado en la edición dominical del diario *The New York Times* («Inquest in the Andes». *The New York Times*, agosto de 1983. Publicado en castellano como «Historia de una matanza». En *Contra viento y marea*, 3. Lima: Editorial PEISA, 1990, pp. 139-170).

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Informe... p. 37.

¹²⁸ Juan Ossio y Fernando Fuenzalida. «Informe antropológico: la comunidad de Uchuraccay y la región iquichana». Informe..., anexo n.º 1, p. 64.

¹²⁹ Informe... p. 38.

cultura arcaica y ancestral— fue denominado en el informe como «tradición iquichana»: una «actitud atávica» determinada por el rechazo a las influencias externas y el uso esporádico de la violencia contra los foráneos:

La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que se siente transgredido, los arranca de su vida relativamente pacífica y huraña, y los precipita a luchar con braveza y ferocidad, aparece como una constante en la tradición iquichana y es la razón de ser de esa personalidad belicosa e indómita que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo en las ciudades.

De su voluntad de retraimiento o, de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuentas, son lo único que los iquichanos tienen (y es por lo tanto lo máspreciado de su existencia), la Comisión ha recogido abundantes ejemplos contemporáneos.¹³⁰

Sin embargo, la ancestral «etnia iquichana» no existió antes del siglo XIX, siendo más bien una identidad creada por las élites regionales ayacuchanas interesadas en diferenciarse de los campesinos de las zonas altas, presentándolos como herederos de la belicosa tribu prehispánica de los Pokras, conformante de la Confederación Chanka.¹³¹ Esta imagen de las comunidades de las alturas como un grupo étnico cerrado, atrapado en sus propias fronteras, contrasta con las demandas que los campesinos de Uchuraccay formularon a la propia Comisión en la asamblea realizada el 11 de febrero de 1983:

— Ari ñoqayku nisitaniku, manam kaypi kanchu ni kachiyku, bilayku, icha terroristakuna atakamuwaqtinku nisitaniku kintirna, pila, chaykunata, señor, imawanmi tutakuna ataka wanmanku, imawanmi chay terroristakunata abir hapiymanku ñoqayku, señor. (Sí, nosotros necesitamos, aquí no tenemos ni nuestra sal, nuestra vela, tal vez si los terroristas nos atacaran necesitamos linterna, pila, esas cosas, señor, sino con qué cosa si nos atacaran de noche, con qué cosa los agarraríamos a esos terroristas, señor.)

— (Mario Vargas Llosa): ¿Qué otros asuntos quisieran que habláramos, qué otras cosas quisieran que le dijéramos al Presidente?

— (Rumor): Chaymantan karritira chayamuwaqtinku... kaypi tranquilu kanaykupaq. (Si luego llega la carretera... para que aquí estemos tranquilos.)

— (Mario Vargas Llosa): El Presidente quisiera saber cómo funciona la escuela de Uchuraccay.

—Kay bin hamuytaqa hamuwankum prufisurakuna, siñur. Hinaptinmi mana kayna famillakunataqa allintaqa yachachinchu kumu innuranti kaniku... Ñoqaykuqa munaniku kayna innuranti kasqaykuman hina ñawiyku munaniku, siñur. Aski karritiratapas, aski iskwillakuna kananpaqpas munanikum, siñur, kayna wawayuq churiyuq kakqa, siñur, idukayta hina hay llaqtaykupi, siñur, munaniku, siñur. (Aquí, bien, de venir nos vienen las profesoras, señor. Y así a las familias como nosotros no nos enseñan bien, somos como ignorantes... Nosotros queremos, de acuerdo a lo que somos así ignorantes, queremos tener

¹³⁰ Informe... p. 39.

¹³¹ La denominación de «iquichanos» y el propio pueblo de Iquicha, fueron creados desde la tercera década del siglo XIX, según lo establecen recientes estudios históricos (véase: Cecilia Méndez. *El poder del nombre, o la construcción de identidades étnicas y nacionales en el Perú: mito e historia de los iquichanos*. Lima: IEP, documento de trabajo n.º 115, 2002).

ojos, señor. Aunque sea carretera también, que haya escuelas también queremos, señor, los que tenemos niños e hijos señor, queremos educar aquí en nuestro pueblo señor).

— (Mario Vargas Llosa): A mí me gustaría saber si quisieran que los profesores estos les dieran las clases en quechua o en castellano.

— (Se oyen respuestas, entre ellas): Castillanupi yachachiwanankuta iskayninpi yachachinantan munaniku. (Que nos enseñen en castellano, en los dos que nos enseñen, queremos).¹³²

De acuerdo con esa imagen de tradicionalidad extrema de Uchuraccay, el informe construyó asimismo su «otredad» jurídica. El asesor legal de la Comisión, Fernando de Trazegnies, consideró que «las comunidades de altura no tienen una clara conciencia del Estado peruano y, en cambio, viven intensamente su propia identidad étnica constituyendo verdaderas nacionalidades dentro de la Nación».¹³³ Sin embargo, las investigaciones de la CVR nos permiten afirmar que desde un primer momento los uchuraccaínos eran conscientes de la existencia del orden jurídico nacional y sus organismos de seguridad. Es por eso que desde octubre de 1982 y hasta el día mismo de la masacre, acuden en diferentes momentos a la Guardia Civil para que los proteja y restablezca el orden.

Por otro lado, el orden jurídico comunal se hizo invisible en el Informe, a pesar de que los propios campesinos, así como los familiares de Juan Argumedo, describieron en sus declaraciones el proceder de los tenientes gobernadores, presidentes, *varayocs* y demás autoridades comunitarias. Como vimos, de manera paulatina, a medida que los acontecimientos se sucedieron, las acciones de los campesinos transitaron del rechazo pacífico en octubre de 1982 a la expulsión violenta de los miembros del PCP-SL, hasta el punto de decretarse una auténtica rebelión intercomunal contra el PCP-Sendero Luminoso, dirigida por las autoridades tradicionales. En tal contexto, se realizaron juicios intercomunales como los ocurridos el 27 de enero en Uchuraccay, en que fueron juzgados los iquichanos sospechosos de pertenecer o apoyar al PCP-Sendero Luminoso, así como la esposa, madre y hermana del guía Juan Argumedo, quienes solamente fueron absueltas después de prestar juramento ante el crucifijo de la vara, símbolo máximo de la autoridad comunitaria.¹³⁴

Sin embargo, el informe determinó que los campesinos resolvían sus conflictos guiados por un instinto casi natural de supervivencia, prácticamente al margen de cualquier normatividad, considerando que en medio de la violencia «creen por su tradición, por su cultura, por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta lucha por supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir».¹³⁵ La distancia cultural de los uchuraccaínos, además, pondría en tela de juicio incluso su condición de ciudadanos y sujetos de derecho: «¿Es posible hacer aquellos distinguos jurídicos, clara y precisamente establecidos por

¹³² Transcripción de la asamblea entre los comuneros de Uchuraccay y la Comisión Vargas Llosa, realizada el 11 de febrero de 1983.

¹³³ Fernando de Trazegnies. «Informe». En *Informe...*, anexo n.º 5, p. 152.

¹³⁴ Véase la parte correspondiente a los hechos del 27 de enero en la primera sección del presente informe.

nuestra Constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primitivismo, aislamiento y abandono en Uchuraccay?».¹³⁶

Al respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala con énfasis que durante el conflicto armado interno, los principales perpetradores fueron el PCP-Sendero Luminoso, inspirado según sus propios dirigentes y documentos por una «ideología científica», y los agentes del Estado.¹³⁷ Asimismo, que en los días previos a la masacre de los periodistas, tanto los sinchis como el jefe del Comando Político-Militar y el propio Presidente de la República, que deberían hacer los «distingos jurídicos clara y precisamente establecidos en nuestra Constitución y nuestras leyes», saludaron los asesinatos de presuntos miembros del PCP-SL en Huaychao y alentaron sucesivamente a los comuneros de las alturas de Huanta a tomar la justicia en sus propias manos.

Por otro lado, en 1983 Uchuraccay distaba mucho de la imagen congelada e inmóvil brindada por el informe. Desde 1959 la comunidad contaba con una pequeña escuela, sostenida sobre todo por los propios campesinos, la cual ofrecía los primeros años de educación primaria. También habían dos pequeñas tiendas, las cuales vendían productos de consumo básico: sal, azúcar, fideos, conservas, etc. Dos comuneros se dedicaban al comercio de ropa, la cual traían de Huanta y Tambo. Otro al comercio de artefactos domésticos, como radios, máquinas de coser, etc., que los traía desde Lima y Huancayo. Muchos otros eran comerciantes de ganado.

Casi todos los varones salían temporalmente a trabajar hacia la selva de Ayacucho, para la cosecha de coca, cacao y café. Algunas familias ya tenían tierras compradas en el valle. Esta tradición migratoria de los uchuraccaínos, que se desplazaban tanto a los valles de Huanta como a la selva del Apurímac, era bastante antigua, y Uchuraccay era una ruta de tránsito antes de que se construyera la carretera Ayacucho-Tambo-San Francisco en 1964.¹³⁸ Desde la década de los 60, además, algunos uchuraccaínos habían migrado hacia Lima, como Olimpio Gavilán, uno de los comuneros vestidos con ropa de ciudad el día que mataron a los periodistas. Otro migrante, que había partido bastante joven a la selva, hacia 1983 ya tenía un carro que circulaba entre Huanta, Tambo y el valle del río Apurímac, llevando productos como ropas, abarrotes y verduras.

Así, mientras los uchuraccaínos soñaban y construían una mejor vida, migrando y participando del mercado local, aunque en condiciones de extrema pobreza, el informe de la

¹³⁵ *Informe...* p. 33.

¹³⁶ *Informe...* p. 34. Al hablar de distingos jurídicos dicho informe se refirió a la distinción entre legalidad e ilegalidad.

¹³⁷ De acuerdo con los testimonios recogidos por la CVR hasta el momento de presentar este informe (abril de 2003), el PCP-SL es responsable de alrededor del 50% de las víctimas mortales del conflicto, las Fuerzas Armadas y Policiales alrededor del 42%, mientras que los Comités de Autodefensa alrededor del 4%.

¹³⁸ El anexo antropológico del informe mencionó que los comuneros consumían productos de origen urbano, como fideos, azúcar, alcohol, y que poseían tocadiscos, linternas y otros artefactos eléctricos, por lo cual «las comunidades de la zona iquichana no pueden ser calificadas de primitivas, salvajes o aisladas por completo» («Informe antropológico: la comunidad de Uchuraccay y región iquichana». En *Informe...* p. 73). Sin embargo, el informe final consideró que: «La Comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como linternas, radios y tocadiscos a pilas. No es éste el primer caso de una sociedad en la que el primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos manufacturados modernos» (*Informe...* p. 23).

Comisión supuso que para ellos «la noción misma de superación o progreso debe ser difícil de concebir».¹³⁹

Esta imagen primitiva de Uchuraccay fue tal vez construida viendo la indumentaria de los campesinos, hecha de la bayeta confeccionada de la lana de sus animales, la cual los protegía bien del duro frío de la puna. Sin embargo, no todos usaban la misma indumentaria, habían jóvenes que usaban casacas y pantalones confeccionados en la ciudad. Algunos de ellos ya tenían relojes de pulsera. El uso de estos objetos «modernos» por parte de los campesinos sería el origen de las sospechas de quienes buscaron hallar las pruebas de la presencia de «agentes externos», suponiendo que se trataba de sinchis o infantes de marina infiltrados entre los comuneros.

Este modo de interpretación ha sido denominado «paradigma indigenista».¹⁴⁰ Se trata de un discurso que esencializa las diferencias culturales, presentando a los campesinos como reliquias vivientes de un pasado milenario, subsistente a pesar de las influencias de la sociedad moderna u occidental. Las interpretaciones desarrolladas por la Comisión Vargas Llosa muestran los límites de dicho paradigma, el cual funcionó como un lente que enfatizó las fronteras y convirtió en esencial las diferencias culturales, construyendo la imagen de una comunidad totalmente aislada y casi primitiva. Pero no sólo dicha Comisión buscó explicar de ese modo los acontecimientos ocurridos en Uchuraccay. Hacia 1983, dicho razonamiento estaba bastante extendido entre diversos sectores de la opinión pública y la intelectualidad. Incluso los medios de prensa y los magistrados reprodujeron dicha visión, buscando explicar el caso mediante interpretaciones que enfatizaron la diferencia cultural de los campesinos quechuas respecto al conjunto del país como causa fundamental de la tragedia. Tal perspectiva no sólo contribuyó a bloquear el acercamiento a la realidad de los hechos, sino también a reforzar la imagen paternalista según la cual los campesinos —considerados como seres «extraños» e «incapaces» pero en el fondo «buenos»— no podían actuar ni pensar por sí mismos.

2.4.3.2. Los medios y la construcción de la responsabilidad

Al momento de ocurrir la matanza de los periodistas, era muy poco lo que se conocía sobre el PCP-SL. Sectores significativos de la opinión pública, especialmente aquéllos de izquierda y centroizquierda, lo veían como un grupo guerrillero equivocado pero impulsado por el anhelo de transformación social del país. Aún cuando ya comenzaban a producirse asesinatos y atentados contra la infraestructura productiva, difíciles de comprender incluso dentro de la lógica de la lucha guerrillera,¹⁴¹ los hechos de más impacto fueron los asaltos a puestos policiales —que obligaron al

¹³⁹ *Informe...* p. 36.

¹⁴⁰ Véase: Enrique Mayer. «Peru In Deep Trouble: Mario Vargas Llosa's «Inquest in the Andes» Reexamined». En George Marcus (ed.). *Rereading Cultural Anthropology*. Durham and London: Duke University Press, 1992.

¹⁴¹ Como el asesinato del director de la filial ayacuchana del Instituto Nacional de Cultura o la destrucción del fundo experimental Allpachaca, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

rápido repliegue de las fuerzas policiales de las zonas rurales de Ayacucho— y el asalto a la cárcel (CRAS) de Huamanga en marzo de 1982. Poco se sabía de la construcción del «nuevo poder» senderista en el campo.

Por el contrario, desde que Ayacucho fue declarado en emergencia en 1981 se multiplicaron las denuncias contra las fuerzas policiales y en especial contra los sinchis. Este rechazo se agudizó luego del asesinato en el hospital general de Ayacucho de tres miembros del PCP-SL recapturados luego de fugar del CRAS. En ese contexto, el entierro de la militante senderista Edith Lagos en septiembre de ese mismo año convocó a miles de huamanguinos y se convirtió en una manifestación de reivindicación regional y rechazo a los abusos cometidos por las fuerzas del orden.

Poco después, en ese contexto de cierta legitimidad urbana del PCP-SL y creciente desprestigio de las fuerzas policiales, el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas asumir el control de las provincias ayacuchanas en estado de emergencia. La masacre de los periodistas ocurrida apenas un mes después de la instalación del Comando Político-Militar de Ayacucho, conmovió a la opinión pública, desprestigió al gobierno y polarizó al país. Los medios de prensa participaron activamente en la disputa por la construcción de sentidos comunes de un país que recién tomaba conciencia de la gravedad del conflicto armado interno.

Algunos medios de prensa convirtieron el caso en una batalla política contra el gobierno, enfatizando la supuesta responsabilidad del Comando Político-Militar y del propio Presidente de la República. Aunque *El Diario de Marka* fue el medio más insistente en esta campaña desde una oposición de izquierda al régimen,¹⁴² también participaron en ella otros periódicos como *La República* y *El Observador*. El semanario *Caretas* y el diario *El Comercio*, por su parte, disputaron el acceso a información y la búsqueda de primicias desde una posición editorial que otorgó más credibilidad a las informaciones oficiales.

Diversos intelectuales ejercieron también la autoridad de la palabra frente a una audiencia deseosa de explicaciones. Los elementos culturales y mágico-religiosos de la masacre, presentados en el informe de la Comisión Investigadora como «indicios muy claros respecto de la atmósfera dentro de la cual se han producido todos estos acontecimientos»,¹⁴³ fueron también el centro de la argumentación desarrollada por quienes criticaron dichas conclusiones. El mismo paradigma indigenista, preocupado sobre todo por la autenticidad cultural de la conducta campesina, permitió sustentar la tesis contraria: que los comuneros de Uchuraccay no podían haber sido los ejecutores de la masacre porque en el mundo andino no se entierra a los muertos semidesnudos, ni en parejas,

¹⁴² A través de *El Diario de Marka*, los partidos políticos de izquierda se pronunciaron insistentemente en torno a los hechos. El 31 de enero de 1983, el Comité Directivo Nacional de Izquierda Unida hizo público un comunicado responsabilizando directamente al Comando Político Militar de Ayacucho por los sucesos de Uchuraccay (*El Diario de Marka*, 31 de enero de 1983, p. 2).

¹⁴³ Juan Ossio y Fernando Fuenzalida. «Informe antropológico: la comunidad de Uchuraccay y la región iquichana». En *Informe...*, anexo n.º 1, p. 64.

ni en fosas superficiales.¹⁴⁴ Estas tesis fueron sostenidas en momentos en que el conflicto armado interno se extendía rápidamente, alterando patrones culturales vigentes en tiempos normales, como se puso en evidencia, por ejemplo, el 3 de abril de 1983 en Lucanamarca, donde fueron masacradas 69 personas.¹⁴⁵

El Diario de Marka asumió la matanza de los periodistas como un campo de lucha mediática desde el cual combatir la militarización y la «guerra sucia», responsabilizando al gobierno por lo ocurrido. Era el periódico más golpeado por la tragedia, pues tres de sus reporteros —Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán— habían muerto en la fatídica expedición.¹⁴⁶ Las sospechas de este diario respecto de la responsabilidad gubernamental por lo que sucedía en las alturas de Huanta surgieron a raíz de la muerte de los siete miembros del PCP SL en Huaychao. El último reporte de Eduardo de la Piniella sobre Huaychao, publicado antes de su viaje a Uchuraccay, afirmaba que: «testimonios de los lugareños ponen en duda que los comuneros puedan actuar de manera tan violenta con hijos de la zona»¹⁴⁷. Al conocerse los sucesos de Uchuraccay, la presunta responsabilidad de los militares y del gobierno fue presentada como verdad irrefutable. El domingo 30 de enero, día en que se exhumaron los cuerpos de los periodistas, *El Diario de Marka* informó sobre algunas «versiones» contrarias a las informaciones oficiales, las cuales terminarían convertidas en la versión de dicho diario sobre lo ocurrido: «Según versiones que circulan en Ayacucho serían sinchis disfrazados de campesinos. Los reporteros fueron asesinados por sinchis cuando conversaban con campesinos».¹⁴⁸ Ese día la prensa llegó por primera vez a Uchuraccay, y el país fue impactado por las imágenes televisadas de la exhumación de los cadáveres, pero *El Diario de Marka* ya había hecho pública la tesis de la responsabilidad militar.

Al día siguiente, 31 de enero, *El Diario de Marka* publicó tres de las entrevistas realizadas por el periodista ayacuchano Luis Morales,¹⁴⁹ presentándolas como evidencia de la culpabilidad militar, a pesar de que ninguna de ellas mencionaba la presencia de sinchis el día del crimen. El comunero Saturnino Ayala relató claramente la incitación de los sinchis días antes de la masacre, refugiándose en la «ignorancia» ante las incisivas preguntas del reportero:

—¿Los sinchis les han dicho que deben matar?

—Han venido en helicóptero y se han sentado en esa pata (morro) y nos han dicho «sáquele los ojos, la lengua a la gente que no conocen, que son enemigos».

¹⁴⁴ Véanse las opiniones de los antropólogos Juan Ossio y Rodrigo Montoya, quienes analizaron los elementos mágico-religiosos de la masacre sosteniendo tesis contrapuestas en el conversatorio «Uchuraccay: ¿crimen sin castigo?». *La República*, Lima, 19 de marzo de 1983.

¹⁴⁵ Entre los atacantes participaron campesinos reclutados por el PCP Sendero Luminoso entre las comunidades del río Pampas (véase el encarte periodístico: *Lucanamarca: una terca esperanza*. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2002). Son muchos los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad que relatan actos de violencia de niveles inconcebibles ocurridos en diversas regiones del país.

¹⁴⁶ Detallamos el caso de *El Diario de Marka* por tratarse del medio que sostuvo de manera más influyente la tesis de la responsabilidad militar. Esta posición editorial no impidió, sin embargo, que en sus páginas se publiquen algunos artículos que dudaban de dicha responsabilidad o asumían como cierta la culpabilidad colectiva de los comuneros.

¹⁴⁷ *El Diario de Marka*. Lima, 25 de enero de 1983, p. 3.

¹⁴⁸ *El Diario de Marka*. Lima, 30 de enero de 1983, p. 3.

¹⁴⁹ «Así murieron los periodistas. Excepcional testimonio de tres comuneros». *El Diario de Marka*, 31 de enero de 1983.

—¿Así les han dicho?
 —Sí.
 —Está bien, señor, eso es lo que nosotros queríamos saber. ¿Cuándo fue eso?
 —El 20 más o menos han venido los sinchis.
 —¿En diciembre?
 —En enero han venido los sinchis. Por eso nosotros, que somos ignorantes, hemos hecho caso a lo que nos han dicho.
 —Cuéntame claro, ¿cuántos días han pasado desde que les han dicho eso hasta que llegó esa gente? Los periodistas han venido el miércoles más o menos a la hora de la *tojra* (hora de *chacchar* la coca); a las 4 p.m.
 —Sí.
 —¿Qué día les han dicho eso los sinchis?
 —Han venido casi terminando la semana (pasada), más o menos el jueves o viernes. De eso no sabemos mucho, porque somos ignorantes.¹⁵⁰

Otro comunero cuyo nombre no fue mencionado en el reportaje, también negó la presencia de policías el día de los hechos:

—¿Dónde han matado a esa gente?
 —Los hemos alcanzado allá por la casa de Antonio Chávez, más arriba de la casa del teniente (gobernador).
 —¿En su casa o en la puerta?
 —No, más acá.
 —¿Hubo policías?
 —No, sólo la gente.
 —¿Sólo gente?
 —Sí, la gente de acá.¹⁵¹

Posteriormente, el 12 de febrero, se publicó la totalidad de testimonios recogidos por el periodista Luis Morales.¹⁵² Dichos testimonios desmienten los titulares publicados por el propio *Diario de Marka* durante todos esos días. El periodista, visiblemente contrariado por la muerte de sus compañeros, entrevistó a los campesinos usando un lenguaje que oscilaba entre el paternalismo y la agresividad:

—¿Cómo están, hijos? ¿Cuándo hicieron esto?
 —Anteayer, señor.
 —¿Anteayer nomás? ¿Pero, por qué los mataron?
 —Porque los «terrucos» no nos dejan.
 —Pero ellos vinieron sin armas.
 —Porque continuamente nos molestan. Tenían bandera roja.
 —Ellos (por los periodistas) vinieron sin bandera roja, en eso de la bandera roja mienten ¿Por qué mienten?
 —Sin bandera roja han venido.¹⁵³

Momentos después, dicho campesino condujo al reportero al lugar donde se hallaban las tumbas, afirmando que procedieron al desentierro de los cadáveres «por orden de los señores

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² «Estos son los testimonios de Uchuraccay». *El Diario de Marka*, 12 de febrero de 1983, pp. 22-27.

¹⁵³ Declaraciones de un comunero no identificado. Ibid, p. 23.

jefes». Pero el titular principal que acompaña los testimonios señala: «Los primeros testimonios: “Los señores jefes nos mandaron enterrarlos”. Las autoridades lo saben todo».¹⁵⁴ El periodista estaba convencido de que recién esa mañana habían sido enterrados los muertos por orden de los sinchis:

- A ver, llévame.
- Los señores jefes han ordenado que se abran las tumbas... (Alguien les indica que se callen).
- ¿Porqué los jefes han ordenado que los enterraran?
- Sí, señor... No señor. En este momento...
- Esto han enterrado ahora. ¿Por qué lo han hecho?
- Yo no soy quien ha enterrado. Aquí están señor (indica las tumbas). Nosotros sólo estamos viendo.
- Mientes. ¿Quién ha ordenado que se haga esto? ¿Por qué dices que vinieron con bandera roja? ¿Cuántos fueron los que vinieron?
- Ocho, señor.¹⁵⁵

Constantemente *El Diario de Marka* confunde la presencia de los sinchis en la comunidad en los días previos y su incitación a la violencia, con su responsabilidad directa en la masacre del 26 de enero. Antes que facilitar el relato de los hechos, las preguntas de Morales buscan imponerse sobre las opiniones del entrevistado, impidiéndole narrar completamente su versión sobre lo ocurrido. Así, por ejemplo, al entrevistar a Vicente Quispe:

- ¿Por qué los mataron entonces?
- Aquí no consentimos nada. Por eso les dimos muerte.
- ¿A ustedes nadie les enseñó para que mataran?
- No, no han enseñado, señor.
- ¿Nadie?
- Sí, señor.
- ¿Cómo es que tus copoblanos dicen que vinieron las tropas y les enseñaron?
- Sí, señor. Así va a ser. Éstos son gamonalistas (refiriéndose a las víctimas). No consentimos a gente extraña.
- Lo que te enseñaron, cuéntame.
- Yo no sé más, señor.
- ¿Si no sabes por qué hablas, entonces?
- Sí, señor, así es, pues, señor.
- ¿Si no sabes por qué hablas? ¿Por qué mientes?
- No miento, señor.
- ¿Entonces viste o no viste?
- Sí, señor, todos hemos visto.
- Pues entonces cuéntame lo que has visto
- Sí, hemos visto, señor. Sí hemos visto a esa gente (se refiere a los periodistas masacrados)
- ¿Qué cosa viste en ellos?
- Habían venido el miércoles por la tarde, por eso hemos visto.
- ¿Con qué les dieron muerte?
- Les hemos dado muerte con palos, nada más.
- ¿Les dieron muerte con palos nada más? ¿Sin armas, sin ningún motivo?
- Sí, señor.

¹⁵⁴ Ibid. p. 23.

¹⁵⁵ Ibid. Sólo posteriormente, al entrevistar a Teodosio Soto, el reportero aclaró sus dudas respecto de la fecha del entierro, a pesar de lo cual se publicó el titular mencionado.

—¿No tuviste pena de dar muerte a un hombre como tú?
—De tener pena, hemos tenido pena.¹⁵⁶

«Así será pues, señor [como Ud. diga]». La clásica respuesta defensiva del campesino ante el mestizo en posición dominante es traducida como «así es». Al margen de su calidad personal y profesional, Morales se revela en sus entrevistas como un *misti*,¹⁵⁷ que trata a los campesinos como «hijos» y parece acostumbrado a que le respondan lo que quiere escuchar. Éstas son sólo algunas de las transcripciones de las entrevistas publicadas por *El Diario de Marka*, todas en tono similar. No sólo se advierte la tergiversación de las declaraciones de los campesinos, sino también la ausencia de interés por otorgarle credibilidad a sus voces. En ningún momento se les toma en cuenta, a pesar de que todos los entrevistados afirman reiteradamente que fueron ellos quienes mataron a los periodistas.

Las declaraciones de Juana Lidia Argumedo, la hermana del guía de los periodistas, quien llegó a Uchuraccay al día siguiente de la matanza junto a su madre y cuñada, también fueron incorporadas dentro de esta visión de la comunidad como radicalmente ajena al resto del país. Juana Lidia contó que entre los comuneros figuraba «un joven alto, moreno con pelo crespo, vestido de campesino. Llevaba también una casaca y llevaba reloj. Hablaba perfectamente el castellano».¹⁵⁸ *El Diario de Marka* publicó dicha declaración como prueba de la responsabilidad militar, exponiendo en su titular: «Extraño que habla castellano estuvo en masacre de mártires».¹⁵⁹

Aunque ni los campesinos de Uchuraccay, ni Juana Lidia Argumedo, mencionaron la presencia de los sinchis al momento de ocurrir la matanza, *El Diario de Marka* terminó sindicándolos como responsables directos de la matanza, a pesar de la ausencia de evidencias y de las primeras declaraciones de Juana Lidia, en las cuales mencionó que dicho joven era un campesino de Putka.¹⁶⁰

También las fotografías publicadas por *Caretas*,¹⁶¹ así como las que valientemente logró tomar Willy Retto momentos antes de la matanza,¹⁶² fueron presentadas como evidencia de la presencia de supuestos militares o policías entre los comuneros. *El Diario de Marka* y *La República* reprodujeron una visión estereotipada de la vestimenta campesina, presentándola como absolutamente tradicional y sin ningún componente urbano. Los supuestos infantes de marina o

¹⁵⁶ Declaraciones de Vicente Quispe. Ibid, pp. 25 y 27.

¹⁵⁷ Nombre quechua para denominar a los mestizos vinculados a los poderes locales y al comercio dentro de la sociedad andina tradicional, anterior a la Reforma Agraria.

¹⁵⁸ *El Diario de Marka*, 10 de febrero de 1983, p. 3.

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ «[...] inmediatamente los acorralaron a su cuñada y luego tres campesinos de ese grupo lo agredieron a sopapos en la cabeza, por lo que un joven alto, al parecer licenciado del ejército y versado en castellano, residente en el pago de Putka, salió en defensa de su cuñada, expresando que no sean abusivos por su ignorancia por maltratar a mujeres y les sugirió que solamente les llevara presa, cumpliendo la sugerencia de este joven los comuneros les llevaron a la casa comunal» (declaración informativa de Juana Lidia Argumedo a fojas 265 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

¹⁶¹ Sobre todo las publicadas en su edición n.º 733, que mostraban a los campesinos de Huaychao acompañados por miembros de las fuerzas del orden.

¹⁶² El revelado original de las 9 fotografías, realizado en el Laboratorio Fotográfico Interamericano, se halla a fojas 1885 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

sinchis, fueron «reconocidos» por usar relojes, anteojos, pantalones de un material diferente a la bayeta común entre los campesinos y, además, por su «porte».¹⁶³

Las voces de los campesinos, testigos directos de los hechos, quedaron así silenciadas o fueron recogidas para tratar de acumular evidencias de la manipulación, la ignorancia y la diferencia cultural. Los testimonios considerados válidos por la prensa opositora fueron los de quienes sostenían que los verdaderos culpables del crimen no podían ser los campesinos, como el periodista Luis Morales de *El Diario de Marka*, la profesora Alejandrina de la Cruz y Juana Lidia Argumedo, convertida por los medios de oposición en «testigo clave» del caso, a pesar de no haber estado presente en la comunidad cuando ocurrieron los hechos.

Luego de los sucesos de Uchuraccay, la estrategia de «guerra sucia» puesta en práctica por el Comando Político Militar de Ayacucho contribuyó a generar un clima proclive a la creencia en la culpabilidad de los sinchis e infantes de marina en la matanza de los periodistas. Al prohibir la presencia de la prensa en las zonas rurales, las fuentes de información se restringieron principalmente a los comunicados oficiales. De esta forma, Uchuraccay aparecía como parte de un complot para justificar la política de desinformación impuesta por las autoridades militares. De hecho, fue un pretexto y sirvió para poner en sordina el rápido incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las zonas declaradas en estado de emergencia. Juana Lidia Argumedo fue una de sus víctimas. A mediados de setiembre de 1984 fue detenida por un grupo de infantes de marina y conducida al cuartel militar de Tambo, donde fue torturada y violada, a pesar de contar con las garantías del Episcopado Peruano y del Ministerio del Interior por ser testigo del caso Uchuraccay. Luego de tales hechos, las constantes declaraciones de Juana Lidia fueron una de las principales evidencias de las denuncias públicas efectuadas por los medios de oposición contra las Fuerzas Armadas y el gobierno.

2.4.3.3. El proceso judicial

El expediente judicial del proceso Uchuraccay se encuentra en posesión del Séptimo Juzgado de Procesos en Reserva de Lima. Se trata de un expediente voluminoso, compuesto por aproximadamente 10,000 folios que guardan toda la información utilizada por las autoridades judiciales para determinar la responsabilidad de la muerte de los periodistas.

El proceso judicial se inició el 30 de enero de 1983, día de la exhumación de los cadáveres. Desde entonces, jueces, fiscales y abogados buscaron resolver el caso, recogiendo pruebas y

¹⁶³ De las 9 fotos tomadas por Willy Retto los instantes previos a su muerte, sólo una distingue con claridad el rostro de dos campesinos: Teodora Soto Ticlla y su hijo Antonio Chávez Soto, quienes posteriormente fueron asesinados. Estos nombres han sido proporcionados por dos comuneros uchuraccainos sobrevivientes de los hechos, cuyos nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad.

analizando alrededor de un centenar de declaraciones.¹⁶⁴ El conjunto del proceso —abierto con la toma de conocimiento de los hechos por parte del juez, y culminado con la sentencia en segunda instancia— fue sumamente accidentado y complejo, prologándose durante cinco largos años, hasta que finalmente el 14 de junio de 1988 fue emitida la sentencia definitiva.

Sin embargo, el proceso aún no ha terminado, encontrándose en situación de reserva debido a que catorce de los diecisiete inculcados nunca fueron capturados. La orden de requisitoria de estos catorce campesinos todavía sigue vigente, hasta que se los capture, se certifique su muerte o finalmente prescriba el caso.¹⁶⁵ Periódicamente, el Séptimo Juzgado de Lima libra órdenes de captura contra estos requisitorizados no habidos, la mayoría de los cuales fallecieron debido a las represalias sufridas por la comunidad de Uchuraccay después del 26 de enero de 1983. Otros viven todavía, sin saber que la justicia los busca.

Desde el inicio, el proceso estuvo colmado de irregularidades. El 30 de enero de 1983, el juez instructor de Huamanga, doctor Hugo Molina, tomó conocimiento del caso a pesar de que Uchuraccay no se encontraba en su jurisdicción. Esta irregularidad fue ocasionada por la interferencia de los altos mandos del Comando Político Militar de Ayacucho, quienes solicitaron al juez conducir la diligencia de exhumación, trasladándolo con premura hasta Uchuraccay.¹⁶⁶ Una vez en el lugar de los hechos, el juez procedió a la exhumación de los cadáveres y a la realización de las primeras indagaciones, acompañado por trece especialistas en criminalística de la PIP llegados desde Lima. Sin embargo, dicho procedimiento no contó con la presencia del Fiscal Provincial en lo Penal y del Secretario Judicial encargado de certificar y legalizar el acta, por lo cual el juez nombró como Testigo Actuario al sinchi Luis Mesías Román.¹⁶⁷ Al término de la diligencia, el juez, también de manera irregular, determinó que se abriera instrucción «contra los que resulten responsables», incumpliendo las normas que disponen la individualización de los presuntos responsables al momento de abrir instrucción. Tampoco se realizaron detenciones, a pesar de encontrarse pruebas contundentes del crimen, como un hacha con restos de sangre y una olla con sangre y restos de masa encefálica, que fueron hallados en la casa del Teniente Gobernador, Fortunato Gavilán.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Entre los citados a declarar figuraron campesinos, periodistas, policías, altos mandos militares, familiares de las víctimas, especialistas en medicina forense y educadores. También los miembros de la Comisión Investigadora nombrada por el gobierno.

¹⁶⁵ En enero del 2003, al cumplirse 20 años de la masacre, se esperaba que fuese dictada la resolución de prescripción, pero las autoridades judiciales consideraron que el plazo legal de permanencia de la situación en reserva del proceso es de 30 años, por lo cual éste no prescribirá hasta dentro de una década, es decir hasta el año 2013.

¹⁶⁶ El 30 de enero, por órdenes del general Clemente Noel Moral, el coronel PIP Víctor Pizarro de los Santos envía un oficio al juez Hugo Molina solicitándole que su despacho tome conocimiento del caso y proceda a la exhumación de los cadáveres, debido a la ausencia del juez Instructor de Huanta y al arribo de peritos llegados desde Lima (Oficio Urgente 11-JBP, a fojas 1 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

¹⁶⁷ Acta de exhumación de los cadáveres, a fojas 4 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

¹⁶⁸ El periodista Luis Morales, que presencié la diligencia judicial, narró el momento en que se realizó dicho hallazgo, grabando además el breve interrogatorio realizado por el juez a Marcia Gavilán, esposa del teniente gobernador, quien informó que su esposo y el resto de autoridades se habían ido a Tambo, cumpliendo una citación realizada por la primera patrulla mixta que llegó al pueblo el día anterior. («Mi esposo conversó con esos señores. Declaraciones de Marcia Gálvez, esposa del gobernador Fortunato Gavilán». *El Diario de Marka*, 12 de febrero de 1983, p. 27).

Debido a las graves irregularidades cometidas durante el inicio del proceso, el 2 de febrero la Corte Superior de Ayacucho separó al juez Hugo Molina, nombrando como juez instructor ad-hoc al doctor Juan Flores Rojas. Aunque esta medida permitió la regularización jurídica del proceso, resultaba imposible subsanar los errores cometidos durante la diligencia de apertura. Además, dichas irregularidades generaron la desconfianza de los familiares de los periodistas y diversos sectores de la prensa respecto de la probidad e independencia de las autoridades judiciales de Ayacucho para resolver el caso.

Entre tanto, fue elevado el atestado N° 11-IC-JDP, del Departamento de Investigación Criminal de la PIP, el cual identificó a cuatro comuneros como presuntos responsables del crimen: Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto, Santiago Ccente y «un tal Arone».¹⁶⁹ El atestado concluyó, además, que los campesinos de Uchuraccay mataron a los periodistas por haberlos confundido con miembros del PCP-SL debido a que portaban una bandera roja.

El 7 de febrero, con base en los atestados policiales, la Fiscalía Provincial de Huamanga denunció a Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto y Santiago Ccente, ordenando su detención. Posteriormente, dicha denuncia fiscal fue ampliada contra más de una decena de comuneros de Uchuraccay, así como contra el periodista Luis Morales, quien fue responsabilizado por el general Clemente Noel Moral por la muerte de los periodistas, acusándolo de alentar el viaje a Huaychao y no haber comunicado sobre el mismo a las autoridades. Debido a estas denuncias efectuadas por el Ministerio Público, el juez ad-hoc amplió el auto apertorio de instrucción y procedió a tomar las instructivas de ley.

Conforme transcurrió el proceso se fue ampliando la lista de inculcados, llegándose a identificar a un total de diecisiete comuneros, entre ellos a dos mujeres.¹⁷⁰ Los criterios seguidos por el juzgado para la identificación de los presuntos responsables fueron básicamente dos: a) la presunta responsabilidad de las autoridades comunales de Uchuraccay, y b) los testimonios de Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar, quienes identificaron a algunos de los comuneros que estuvieron en Uchuraccay cuando fueron detenidas, los días 27 y 28 de enero. Los diecisiete comuneros identificados fueron acusados por el juez instructor, siendo detenidos solamente tres de ellos: el presidente de la comunidad Dionisio Morales Pérez, el varayoc Simeón Auccatoma Quispe y el comunero Mariano Ccasani Gonzáles.¹⁷¹

Entre marzo y mayo de 1983 el juez ad hoc Juan Flores Rojas viajó a las alturas de Huanta, procediendo a tomar las declaraciones de los campesinos que podían haber sido testigos de los

¹⁶⁹ Posteriormente, gracias a algunas declaraciones se pudo determinar que el «tal Arone» era el presidente de una comunidad cercana a Uchuraccay, que participó el 27 de enero en la expedición intercomunal realizada a Iquicha en búsqueda de miembros del PCP SL.

¹⁷⁰ La lista de los diecisiete comuneros acusados es la siguiente: Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe, Mariano Ccasani Gonzáles, Celestino Ccente Figueroa, Fortunato Gavilán García, Silvio Chávez Soto, Mariano Figueroa Rojas, Dionisio Ccente Auccatoma, Francisco Ñaupá Ticlla, Dionisio Ramos Ricra, Daniel Chocce Ayala, Antonio Chávez Soto, Teodora Soto Ticlla, Lorenzo Figueroa Cunto, Olimpio Gavilán Huaylla, Marcia Gálvez Ñaupá y Juan Ayala Cahuana.

hechos. El 3 de marzo se reunió con 18 hombres y 5 mujeres de Uchuraccay, recogiendo sus declaraciones sobre los hechos del 26 de enero.¹⁷² Posteriormente, del 9 al 14 de mayo recorrió las comunidades de Uchuraccay, Huaychao e Iquicha, recogiendo las declaraciones de diversas autoridades y campesinos.¹⁷³ La cámara fotográfica de Willy Retto fue hallada el último día de esta diligencia judicial, al realizarse una inspección ordenada por el juez en los cerros de Uchuraccay.

La investigación realizada por el Juzgado de Instrucción ad hoc finalizó el 17 de febrero de 1984, un año y un mes después de ocurridos los hechos, con la transferencia del expediente a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El 14 de agosto de 1984, el Ministerio Público formuló la acusación fiscal contra los diecisiete campesinos inculcados, solicitando como pena mínima 25 años de prisión por el delito de homicidio múltiple.

Después de formulada la acusación fiscal, el Primer Tribunal Correccional, presidido por el doctor Hermenegildo Ventura Huayhua, dictó el auto de enjuiciamiento contra los diecisiete campesinos acusados, declarando como ausentes a catorce de ellos y procediendo al inicio del juicio oral. Éste se inició con gran expectativa el día 28 de septiembre de 1984, en la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Ayacucho. Los tres acusados presentes fueron desde entonces el centro de atención de los asistentes y de la prensa.

Debido a que los acusados eran quechuahablantes, el juicio se realizó con la asistencia de intérpretes, quienes repetidas veces señalaron la dificultad de traducir al quechua las preguntas formuladas por los miembros de la sala, así como de interpretar literalmente las declaraciones de los acusados.¹⁷⁴ La carencia de una adecuada comunicación entre los miembros de la sala y los acusados fue una de las mayores dificultades presentes a lo largo del proceso. A ello se añadió la situación de desigualdad y evidente discriminación de que fueron objeto los acusados. En una de las audiencias, Mariano Ccasani Gonzáles llegó a solicitarle a uno de los vocales «que le haga preguntas como a una persona mortal sin tratarlo de hacerlo confundir».¹⁷⁵ Momentos después, dicho vocal trató de desacreditarlo, diciéndole que además de evangelista era ignorante, ante lo cual el acusado replicó: «están viendo que es ignorante y por el hecho de que es ignorante en el juzgado han puesto en su manifestación lo que han querido y ahora también le están tratando de sacar cosas, aprovechando de esta su ignorancia seguramente que Lidia Argumedo también lo mandó apresar

¹⁷¹ Dionisio Morales Pérez es detenido el 17 de mayo de 1983, Mariano Ccasani Gonzáles el 05 de julio de 1983 y Simeón Aucatoma Quispe el 20 de julio de 1983.

¹⁷² Entre los campesinos que brindaron declaraciones al juez figuran: Dionisio Ramos Ricra, Esteban Chávez Soto, Antonio Soto, Dionisio Ccente, Feliciano Soto, Mariano Gutiérrez, Esteban Marces Gavilán, Alejandro Ayala y Florencia Figueroa.

¹⁷³ Entre estas declaraciones figuran las de los comuneros de Iquicha que fueron apresados y conducidos a Uchuraccay el 27 de enero.

¹⁷⁴ El intérprete Edilberto Lara señaló que sólo podía realizar una traducción semiliteral, debido a las diferencias entre el quechua y el castellano (Fojas 3690 del expediente judicial del proceso Uchuraccay). Por su parte, el intérprete Clodoaldo Soto Ruiz señaló que en la audiencia existía «una contextura cultural muy diferente» por lo cual resultaba muy difícil realizar la traducción del quechua al castellano y viceversa (Fojas 3727 del expediente judicial del proceso Uchuraccay). Ambos intérpretes eran profesores de Quechua de la Universidad de Huamanga. Clodoaldo Soto se desempeña hoy como profesor en una universidad de los EE.UU.

¹⁷⁵ Declaraciones de Mariano Ccasani Gonzáles a fojas 3933 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

aprovechando de su ignorancia y si es posible a él lo pueden mandar a donde sea que nada le puede ocurrir... porque está bajo la protección de Dios».¹⁷⁶

Pero esa actitud fue una excepción, pues durante todas las audiencias los acusados se mostraron sumamente afectados y sumisos, sobre todo Simeón Auccatoma Quispe, quien irrumpió varias veces en llanto rogando a los magistrados creer en su inocencia y ser justos.¹⁷⁷ Los tres acusados señalaron en diversos momentos del juicio que desconocían las razones de su detención y encarcelamiento, solicitando ser liberados por no haber participado de la masacre y ser «ignorantes» por no saber leer, escribir, ni comprender el castellano. De ese modo, la situación de subordinación de los comuneros debido a su condición de acusados, también estuvo marcada por la discriminación étnica y diferenciación social prevalecientes en Ayacucho y en el país.

El juicio oral se prolongó a lo largo de diez meses, hasta el 24 de julio de 1985, fecha de la última audiencia. Durante ese tiempo, además de los acusados, declararon casi un centenar de testigos, los cuales expusieron diferentes versiones que reflejaron la complejidad de los acontecimientos.

Al carácter sumamente controvertido de los hechos investigados, se añadieron una serie de circunstancias que desacreditaron la actuación judicial ante la opinión pública, como las reiteradas opiniones del juez Ventura Huayhua ante los medios de prensa nacionales e internacionales, anunciando haber «descubierto» las razones del crimen y a los reales culpables. Asimismo, fue de conocimiento público que el Comando Político Militar de Ayacucho se negó a brindar las facilidades requeridas para el desarrollo del proceso judicial, negando apoyo, recursos e información, aduciendo para ello supuestas razones de seguridad.

Durante la audiencia del 26 de marzo de 1985, el fiscal Óscar Guerrero solicitó, ante el asombro de los asistentes, nada menos que el retiro de la acusación contra los tres procesados y su puesta inmediata en libertad, así como la reserva del proceso hasta que fuesen habidos los catorce procesados restantes. El argumento del fiscal fue que no se había logrado probar la participación de los acusados en la masacre. Ello generó la airada protesta de los familiares de los periodistas presentes en la sala, y el llamado al restablecimiento de la calma por parte del juez, quien enseguida desestimó la petición del fiscal. Producto de ese hecho, se inició un conflicto entre el Tribunal y el Ministerio Público, a lo cual se sumaron las denuncias de los familiares y algunos medios de prensa, culpando al Comando Político Militar de Ayacucho de presionar al Poder Judicial para que el caso quede impune.

El 12 de septiembre de 1985, fue declarada fundada la solicitud de los familiares de transferencia del proceso a Lima, y posteriormente, el 25 de noviembre del mismo año, el Octavo Tribunal Correccional de Lima fue designado para asumir la continuación del proceso.

¹⁷⁶ Ibid, fojas 3955.

¹⁷⁷ Declaración de Simeón Auccatoma Quispe, a fojas 3733 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

Ya en Lima, el expediente fue elevado al Octavo Tribunal Correccional, el cual desde mediados de abril de 1986 se convirtió en un Tribunal Especial dedicado exclusivamente al caso Uchuraccay, siendo presidido por el doctor. Luis Serpa Segura e integrado por los vocales César Tineo Cabrera y Arsenio Oré Guardia.

Se reinició así el juicio oral del proceso. Los magistrados volvieron a tomar las declaraciones de los familiares y principales testigos de los hechos, pero no pudieron realizar otra diligencia en el escenario de los hechos,¹⁷⁸ restringiéndose a tomar conocimiento de que Uchuraccay se había convertido en una comunidad fantasma, debido a que sus pobladores habían sido asesinados o habían huido hacia otras localidades. Durante este último período del juicio, fue descubierto el cuerpo del guía Juan Argumedo, el cual había sido trasladado secretamente por sus familiares desde Uchuraccay al cementerio de Chacabamba.

El Tribunal Especial emitió sentencia el 9 de marzo de 1987, cuatro años después de iniciado el proceso. Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe fueron condenados a las penas de diez, ocho y seis años de reclusión, respectivamente. A pesar de que el fiscal había solicitado 25 años de reclusión para los tres acusados por el delito de homicidio calificado, la sala determinó que no existían elementos de juicio para atribuirles la intención de aumentar deliberadamente el padecimiento de las víctimas, y además que se trataba de campesinos semianalfabetos sin antecedentes penales ni judiciales «sometidos a un estado genérico de violencia, y por así decir entre dos fuegos».¹⁷⁹ El tribunal resaltó la inaplicabilidad del artículo 45 del Código Penal entonces vigente, por no tratarse de «indígenas semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo» sino de «peruanos que viven en el marco de una cultura que no por diferente deja de ser creadora, eficaz y digna de todo respeto».¹⁸⁰

La sentencia declaró comprobada la presencia de personal militar y policial en Uchuraccay el día de la masacre, basándose en los siguientes indicios: a) la visita regular de patrullas a las comunidades; b) las fotografías de Willy Retto que mostrarían una persona con pantalón de material diferente al usado en el atuendo tradicional, con zapatos y un porte distinto; c) la presencia de personal encubierto reconocido por el uso de relojes y sortijas; y d) las declaraciones de Juana Lidia Argumedo sobre la presencia de un joven extraño el día de su detención, el cual hablaba castellano, usaba reloj, encendedor y tenía autoridad sobre el resto de comuneros. A la luz de lo que

¹⁷⁸ A lo largo del proceso las únicas diligencias judiciales realizadas en el escenario de los hechos fueron las siguientes, todas en 1983:

– 30 de enero: Primera diligencia judicial (exhumación de los cadáveres).
– 11 de febrero: Segunda diligencia judicial (exhumación del cuerpo de Juan Argumedo, el mismo día en que Vargas Llosa está reunido en asamblea con los campesinos de Uchuraccay. Sin embargo, no encuentran el cuerpo del guía).
– 3 de marzo: Tercera diligencia judicial (el juez Juan Flores Rojas visita Uchuraccay y tiene una reunión con los comuneros).
– 9 al 14 de mayo: Cuarta diligencia judicial (el juez Juan Flores Rojas llega a Uchuraccay, Huaychao e Iquicha y entrevista a las autoridades).

¹⁷⁹ Considerando cuadragésimo tercero de la sentencia judicial.

¹⁸⁰ Ibid. El Código Penal de 1924, entonces vigente, caracterizaba a los indígenas «semicivilizados o degradados» como inimputables.

hemos denominado paradigma indigenista, todos estos elementos fueron percibidos por los magistrados como indicios que evidenciaban la presencia militar o policial en Uchuraccay el día del crimen.

A pesar de que a lo largo de sus cuarenta y siete considerandos, la sentencia buscó diferenciarse del informe elaborado por la Comisión Vargas Llosa, terminó suponiendo —de manera semejante— que Uchuraccay era una comunidad absolutamente tradicional en términos culturales. De allí que en los considerandos dedicados a describir los rasgos del contexto socio-cultural de los hechos, la sentencia consideró que la modalidad de entierro podía brindar valiosos elementos de juicio sobre los hechos, determinando que la costumbre de los comuneros era enterrar a sus muertos «siempre en su cementerio, individualmente, con el cuerpo boca arriba, vestidos con hábito o mortaja, en fosas profundas».¹⁸¹ La deducción de los magistrados fue que los comuneros debieron ser obligados por personas extrañas al enterrar a los periodistas incumpliendo sus costumbres funerarias tradicionales.

Sin embargo, fueron los propios comuneros quienes relataron durante el proceso que al final de la tarde del 26 de enero depositaron los cadáveres de los periodistas en cuatro fosas cercanas a la plaza del pueblo, sin ningún afán de ocultamiento, debido a la premura del tiempo, pues caía la noche y temían las represalias de los miembros del PCP-SL.¹⁸² Uno de los testimonios recogidos por la CVR en Uchuraccay,¹⁸³ señala que los campesinos se negaron deliberadamente a usar el cementerio del pueblo por no enterrar allí a quienes fueron considerados extraños, ladrones y terroristas. Pero, como vimos anteriormente,¹⁸⁴ eso no ocurrió con el cadáver del comunero Severino Huáscar Morales, quien fue trasladado al cementerio luego de ser ocultado en un primer momento, siendo enterrado de acuerdo con las costumbres locales por sus familiares. Al realizarse la exhumación del cadáver de Severino Huáscar Morales, se encontró que había sido enterrado de acuerdo con las costumbres descritas por testigos como Mariano Ccasani Gonzáles¹⁸⁵ y la maestra Alejandrina de la Cruz.¹⁸⁶ Lo mismo ocurrió con el cuerpo de Juan Argumedo, que fue trasladado secretamente al cementerio de su pueblo por su hermana Juana Lidia. Los cuerpos de los

¹⁸¹ Considerando décimo sexto de la sentencia judicial.

¹⁸² Lo hicieron de modo similar que los campesinos de Huaychao, quienes enterraron a los siete miembros del PCP SL asesinados el 21 de enero de 1983 en una sola fosa. Véase la sección del presente informe correspondiente a los hechos del 26 de enero.

¹⁸³ Testimonio N° 203432.

¹⁸⁴ Véase la nota n.º 68.

¹⁸⁵ «Se entierran en el panteón. La gente que tiene dinero le pone el hábito y las zapatillas. Luego del entierro, encima de la fosa le colocan una piedra que ellos llaman fábrica rume» (declaración de Mariano Ccasani Gonzáles a fojas 3897 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

¹⁸⁶ «cavan en la tierra una profundidad regular, luego hacen una especie de empedrado en la base de la fosa, colocan al muerto boca arriba y a un costado de éste una jarra con agua, porque tienen la creencia que el alma en la otra vida no padezca de sed, luego lo cubren con tierra y sobre la tumba colocan una cruz» (declaración de Alejandrina de la Cruz a fojas 4202 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

periodistas, en cambio, sólo fueron depositados en las fosas, sin que dicha acción corresponda propiamente a un entierro.¹⁸⁷

Después de emitida la sentencia, los familiares de los periodistas presentaron un recurso de apelación, solicitando que el Poder Judicial determine la responsabilidad del presidente Fernando Belaunde y los altos mandos militares. Dicha revisión fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia, que emitió su fallo el 14 de junio de 1988, aumentando a 15 años la pena de reclusión de los acusados Dionisio Morales Pérez y Mariano Ccasani Gonzáles, por el delito de homicidio simple, y confirmando el resto de la sentencia. El fallo contra el tercer acusado, Simeón Auccatoma Quispe, fue declarado nulo debido a que seis meses antes había fallecido a causa de una tuberculosis contraída en el penal de Lurigancho.¹⁸⁸

Al final, la responsabilidad de los hechos recayó sobre los tres únicos detenidos, a pesar de que los magistrados no lograron comprobar su participación directa el día de la masacre. El Tribunal quiso probar la culpabilidad de los inculpados suponiendo que al menos dos de ellos, Dionisio Morales Pérez y Simeón Auccatoma Quispe, debieron participar de los hechos en su condición de autoridades de la comunidad. Y aunque este hecho resultaba insuficiente como prueba que permitiera desechar la presunción de inocencia, los tres comuneros fueron condenados de todas maneras.

¿Qué verdad se quiso descubrir durante todos los años que duró el proceso Uchuraccay? De modo infatigable, los magistrados buscaron comprobar la responsabilidad directa de militares o policías en la muerte de los periodistas. A pesar de lo dilatado del proceso, las pruebas jamás fueron halladas. El Comando Político Militar, por su parte, se encargó de obstaculizar reiteradamente las indagaciones judiciales.

Más allá de las fallas de fondo y de forma del proceso, y de la voluntad obstruccionista del Comando Político Militar, al cerrar los varios tomos del expediente resulta inevitable concluir que la condena contra los comuneros uchuraccaínos era irrelevante.¹⁸⁹ El objetivo real del proceso, que no varió a pesar de los cambios de jurisdicción, fue descubrir aquella supuesta verdad que la Comisión Vargas Llosa no había revelado: la culpabilidad de los infantes de marina o de los sinchis, quienes habrían actuado cumpliendo órdenes superiores.¹⁹⁰ La posibilidad de que los

¹⁸⁷ Son innumerables los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad que relatan hechos terribles cometidos en medio de la guerra, que no encuentran correspondencia con las costumbres locales en tiempos de paz.

¹⁸⁸ Simeón Auccatoma Quispe murió en prisión el 29 de diciembre de 1987. Su cuerpo —que pudo ser arrojado a la fosa común— fue enterrado gracias a la intervención del Consejo Indio de Sudamérica.

¹⁸⁹ En el expediente se encuentran constantes atestados policiales que señalan la destrucción y desolación sufrida por Uchuraccay durante esos años, hasta quedar convertida en una comunidad fantasma. Sin embargo, para algunos sectores de la opinión pública los comuneros estaban siendo desaparecidos por los militares con la finalidad de eliminar a los testigos.

¹⁹⁰ El considerando quincuagésimo sexto de la Sentencia Judicial refleja el ánimo de los magistrados ante la Comisión Vargas Llosa. Luego de señalar que su nombramiento transgredió la Constitución «pues la facultad de nombrar comisiones investigadoras de esa naturaleza es potestad del Congreso de la República», menciona que también violó la garantía de administración de justicia y la exclusividad de la función jurisdiccional del Poder Judicial «ya que se le encomendó investigar un hecho delictuoso». Enseguida destaca que «a pesar de los recursos y facilidades de que dispuso, la citada Comisión Especial incurrió en sorprendentes omisiones» y que sus conclusiones «contribuyen en algunos

campesinos pudiesen ser capaces de defenderse violentamente ante una situación de guerra, nunca fue considerada por los jueces. Durante los cinco años del proceso las voces de los comuneros ni siquiera fueron escuchadas.

2.4.4. Conclusiones

A partir de los testimonios recogidos y de las investigaciones realizadas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación considera:

Que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso no respetó la autonomía, las formas de organización y cultura de los campesinos de Uchuraccay, desencadenando una escalada de violencia a partir del asesinato del presidente de la comunidad.

Que esos y otros asesinatos de dirigentes campesinos en comunidades vecinas llevaron a que un conjunto de comunidades de las alturas de la provincia de Huanta se organizaran para su autodefensa y buscaran tomar la justicia en sus propias manos, protagonizando la primera rebelión intercomunal contra el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso.

Que diversos agentes del Estado —los sinchis e infantes de marina, el jefe del Comando Político Militar y el propio Presidente de la República— alentaron esta conducta, fomentando la ruptura del monopolio del uso de la violencia legítima por parte del Estado.

Que en diversas oportunidades, desde que el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas asumir el control interno del Departamento de Ayacucho mediante DS 068-82 IN del 29 de diciembre de 1982, las patrullas de infantes de marina y sinchis visitaron las comunidades de las punas de la provincia de Huanta, entre ellas Uchuraccay, incitando a los campesinos a matar a todo extraño que llegase a pie.

Que en medio del estado de guerra y miedo que se había impuesto en las alturas de Huanta y creyendo que contaban con el aval del Estado, el 26 de enero de 1983 los comuneros de Uchuraccay asesinaron a los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendívil, Willy Retto, Jorge Sedano, Amador García y Octavio Infante, así como al guía Juan Argumedo García y al comunero Severino Huáscar Morales Ccente, considerando que eran miembros del PCP-SL o apoyaban al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso.

Que en los sucesos del 26 de enero de 1983 no se constata la presencia de infantes de marina ni de miembros de la entonces Guardia Civil (sinchis) como perpetradores directos de los hechos.

aspectos a la averiguación de lo ocurrido, pero también, por desgracia, al margen de la buena voluntad y las calificaciones de sus integrantes y de manera indirecta, a dilatar el descubrimiento de la verdad, distorsionando lo acontecido y diluyendo responsabilidades». Pero los magistrados descartaron enjuiciar a los miembros de la Comisión por el delito de usurpación de autoridad «por cuanto su nombramiento emanaba de una Resolución Suprema».

Que los comuneros no pensaron ocultar los cuerpos de los periodistas, por lo cual enviaron emisarios al pueblo de Tambo para comunicar a las fuerzas del orden sobre lo ocurrido, enterrando provisionalmente los cadáveres muy cerca del núcleo de la comunidad.

Que después de los sucesos del 26 de enero, el Comando Político-Militar restringió severamente el acceso del periodismo a las zonas rurales de Ayacucho, lo cual llevó a que muchas masacres cometidas en los años siguientes no fueran conocidas.

Que a pesar de las demandas de protección formuladas por los comuneros de Uchuraccay, el Estado no cauteló sus mínimos derechos, especialmente el derecho a la vida. Ello llevó a la muerte de más de un centenar de miembros de la comunidad en el año posterior a la masacre, mayoritariamente a manos del PCP-Sendero Luminoso.

Que con el asesinato de decenas de comuneros de Uchuraccay con perfidia y a traición, el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso cometió crímenes de lesa humanidad, repudiables moralmente y punibles penalmente.

Que de acuerdo a testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Estado no sólo dejó desguarnecidos a los comuneros a manos de la subversión, sino que, en varias ocasiones, las fuerzas del orden se convirtieron también en agentes perpetradores de masacres en coautoría con los entonces denominados Comités de Defensa Civil de comunidades vecinas, que asesinaron a comuneros y saquearon los bienes comunales, hasta que la comunidad quedó totalmente despoblada.

Que la *Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay* nombrada por el gobierno logró reconstruir en líneas generales los hechos ocurridos el 26 de enero, pero ofreció una interpretación que reprodujo la imagen de infranqueable lejanía y diferencia cultural de los campesinos quechuas de Uchuraccay.

Que en su afán de esclarecer los hechos, los medios de prensa de oposición construyeron la tesis de la responsabilidad militar, argumentando así su rechazo a la «guerra sucia» y transmitiendo a la opinión pública una versión sobre lo ocurrido que con el paso del tiempo se convirtió en un sentido común bastante extendido.

Que el juicio realizado por el Poder Judicial, a raíz del asesinato de los periodistas, estuvo colmado de irregularidades desde que se inició, condenándose a quince años de prisión a los tres campesinos detenidos, a pesar de que nunca logró probarse que participaron de manera directa en la ejecución del crimen.

Que en dicho juicio volvieron a exhibirse la discriminación y los estereotipos con respecto a los campesinos indígenas, que atravesaron en mayor o menor medida al conjunto de actores implicados en estos trágicos sucesos.

Que en aras de la reconciliación nacional es necesario mantener vivo en la memoria nacional el recuerdo de los periodistas asesinados, como mártires del periodismo y la libertad de expresión.

Que en aras de la reconciliación nacional es necesario también que el país incorpore a su memoria colectiva el recuerdo de los 135 uchuraccainos muertos entre 1983 y 1984, recordando que la vida de todos y cada uno de los peruanos y peruanas tiene el mismo valor, recordando que esa comunidad impulsó la primera rebelión campesina contra la subversión y comprometiéndonos a que estos hechos no se repitan nunca más.

Anexo 1: Cronología de los acontecimientos

1981

Julio-agosto

- Militantes miembros del PCP-SL dirigidos por «Martín» se establecen en Uchuraccay y otras comunidades vecinas, buscando conformar bases de apoyo del PCP-SL.

12 de octubre

- Promulgación del DS 026-81-IN mediante el cual cinco provincias del departamento de Ayacucho son declaradas en emergencia: Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo.

1982

Durante todo el año

- Ante el incremento de los ataques del PCP-SL, los puestos policiales de las Provincias de Huanta y La Mar se van replegando hacia las capitales provinciales.

Octubre

- Primera semana: los comuneros de Uchuraccay expulsan a «Martín» y otros cinco miembros del PCP-SL, quienes intentaban establecer una Escuela Popular de Mujeres en la comunidad.
- 7 de octubre: durante la realización de la fiesta de la Virgen del Rosario, el PCP-SL coloca una bandera roja en uno de los cerros de Uchuraccay, la cual es sacada y quemada por Alejandro Huamán, presidente de la comunidad.

Fines de noviembre o inicios de diciembre

- El PCP-SL asesina a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad de Uchuraccay, en represalia por encabezar la expulsión de sus militantes y por haber quemado la bandera roja colocada en uno de los cerros durante la fiesta de la Virgen del Rosario.

Diciembre

- El PCP-SL asesina al presidente y al teniente gobernador de la comunidad de Huaychao.
- 29 de diciembre: promulgación del DS 068-82 IN, mediante el cual se ordena a las Fuerzas Armadas asumir el control interno en las provincias declaradas en emergencia bajo el mando del general Roberto Clemente Noel Moral. La infantería de marina asume el control de la Provincia de Huanta.

1983

Segunda y tercera semana de enero

- En diversos poblados de las alturas de Huanta, los comuneros dirigidos por sus autoridades capturan y asesinan a 24 militantes miembros del PCP-SL. En Uchuraccay, los comuneros matan a cinco miembros del PCP-SL hacia mediados de enero.

21 de enero

- Los comuneros de Huaychao y Macabamba asesinan a siete miembros del PCP-SL.

23 de enero

- El general Noel informa de los asesinatos ocurridos en Huaychao, saludando el «coraje y virilidad» de los campesinos.
- En Lima, el presidente Belaunde felicita la acción «patriota y saludable» de los comuneros de Huaychao.
- Por la tarde, llega a Uchuraccay una patrulla helitransportada de 15 sinchis, los cuales pernoctan en la comunidad e incitan a los campesinos a matar a todo extraño que llegase a pie.

26 de enero

6:00 a.m.

- Los ocho periodistas parten de Ayacucho hacia Huaychao en un taxi contratado el día anterior, cruzando sin dificultades el control policial de La Magdalena.

8:30 a.m.

- El taxi deja a los periodistas en el punto de la carretera Huanta-Tambo denominado Yanaorco.

10:30 a.m.

- Los periodistas llegan a la localidad de Chacabamba, donde son recibidos por los Argumedo, familiares de Octavio Infante.
- En Uchuraccay, las autoridades detienen y juzgan a un joven uchuraccaíno acusado de colaborar con el PCP SL.

11:30 a.m.

- Guiados por Juan Argumedo, los periodistas reinician su viaje hacia Huaychao.

12:00 p.m.

- Las autoridades de Uchuraccay se reúnen en la casa de Fortunato Gavilán, teniente gobernador, para discutir bebiendo sobre las probables acciones represivas del PCP-SL contra la comunidad.

3:00 a 4:00 p.m.

- Según lo acordado con los periodistas, el guía Juan Argumedo los deja en el punto denominado Wachwaqasa, ubicado al ingreso de Uchuraccay, desde el cual no es difícil el camino hasta Huaychao.
- Las autoridades comunales reunidas en casa de Fortunato Gavilán oyen los gritos de alarma sobre la llegada de terroristas a Uchuraccay, saliendo a enfrentarlos con palos, hachas, hondas, etc.
- Luego de darles alcance, después de un diálogo frustrado en medio de momentos de extrema tensión y miedo, alrededor de 30 a 40 comuneros linchan a los periodistas.

6:00 a 7:00 p.m.

- El guía Juan Argumedo es capturado a 5 kilómetros de Uchuraccay, en el punto denominado Yuracyacu, siendo conducido a la comunidad para ser interrogado.
- En Uchuraccay, mientras algunos comuneros entierran apresuradamente los cuerpos de los periodistas, otros detienen a Severino Huáscar Morales, acusándolo de mantener vínculos con el PCP-SL.

7:30 p.m.

- Al ser interrogados sobre sus relaciones con el PCP-SL, Juan Argumedo y Severino Huáscar Morales entran en contradicciones, por lo cual son asesinados por los comuneros, quienes ocultan sus cuerpos.

27 de enero

7:00 a.m.

- Siguiendo un acuerdo intercomunal adoptado dos semanas antes, los pobladores de Uchuraccay, así como los de otras comunidades vecinas como Huaychao, Cunya, Paria y Carhuahurán se dirigen a Iquicha para capturar a miembros del PCP-SL, deteniendo a 13 personas, entre ellas al teniente gobernador, acusándolos de ser colaboradores del PCP-SL y conduciéndolos posteriormente a Uchuraccay para ser juzgados.

10:00 a.m.

- El niño Pastor Ramos Romero llega a casa de los Argumedo en Chacabamba, informándoles que los comuneros de Uchuraccay habían apresado a Juan.

1:00 p.m.

- La madre, hermana y esposa de Juan Argumedo llegan a Uchuraccay, siendo detenidas y acusadas de ser miembros del PCP-SL por los comuneros, quienes las encierran en el local comunal.

28 de enero

12:30 p.m. a 4:00 p.m.

- Rosa Argumedo, Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar de Argumedo son juzgadas por las autoridades de Uchuraccay y otras comunidades en la plaza del pueblo. Luego de ser garantizadas por algunos comuneros que las conocían, son amenazadas de muerte y liberadas bajo juramento de no revelar lo ocurrido.

9:00 p.m.

- Llega a Uchuraccay una patrulla mixta de guardias civiles e infantes de marina, a quienes las autoridades comunales informan que han dado muerte a ocho miembros del PCP-SL.

29 de enero

6:00 a.m.

- Las autoridades comunales muestran a los miembros de la patrulla mixta las cuatro tumbas en las que habían enterrado a los miembros del PCP-SL, entregándoles una bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de películas y algunas prendas de vestir.

3:00 p.m.

- Se confirma la masacre de los periodistas, noticia que es difundida en el ámbito nacional e internacional.

30 de enero

- En un avión fletado por el diario *La República*, llega a Ayacucho un numeroso grupo de periodistas, parlamentarios y familiares de los periodistas.
- A solicitud del Comando Político Militar de Ayacucho, el juez Hugo Molina toma conocimiento de la muerte de los ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay, a pesar de que ésta no se hallaba en su jurisdicción. Trasladado a Uchuraccay, el juez procede a la exhumación de los cadáveres y abre instrucción contra los que resulten responsables, en ausencia del Fiscal y el Secretario Judicial.
- El periodista Luis Morales toma las primeras declaraciones de los campesinos.

2 de febrero

- El gobierno nombra la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, presidida por Mario Vargas Llosa.
- Debido a las irregularidades cometidas en la apertura del proceso judicial, la Corte Superior de Ayacucho separa al juez Molina y nombra como juez ad hoc al doctor Juan Flores Rojas.

7 de febrero

- El Fiscal Provincial de Huamanga denuncia a los comuneros Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto y Santiago Ccente por la muerte de los ocho periodistas. Se ordena la detención provisional de estos inculpados.

11 de febrero

- Se realiza en Uchuraccay una asamblea comunal con la presencia de los miembros de la Comisión Vargas Llosa.
- Diligencia judicial de exhumación del cadáver de Juan Argumedo, el cual no es hallado en el lugar señalado por su hermana, Juana Lidia Argumedo.

3 de marzo

- Diligencia judicial en Uchuraccay. El juez Juan Flores Rojas se reúne con los comuneros, recogiendo sus declaraciones.

9 al 14 de mayo

- Se realiza una diligencia judicial en las comunidades de Uchuraccay, Iquicha y Huaychao. El juez Juan Flores Rojas toma las declaraciones de los comuneros de estas tres comunidades.

14 de mayo

- En un cerro de Uchuraccay, son encontrados documentos y objetos personales de los periodistas, entre los cuales se descubre un rollo de fotos tomadas por Willy Retto momentos antes de la masacre.

15 de mayo

- Se realiza la exhumación del cadáver de Severino Huáscar Morales.

17 de mayo

- Detención del comunero Dionisio Morales Pérez, quien se encontraba hospitalizado en Huamanga. Se inicia su interrogatorio.

20 de mayo

- En la madrugada, el PCP-SL incursiona en Uchuraccay días previos a la fiesta de Espíritu Santo y asesina alrededor de 20 pobladores.

22 de junio

- Los familiares de los periodistas solicitan la nulidad del proceso por vicios procesales.

5 de julio

- Detención del comunero Mariano Ccassani, en Tambo.

16 de julio

- A la medianoche, concluida la fiesta de la Virgen del Carmen, el PCP-SL ataca la comunidad matando a otros 20 uchuraccaínos

20 de julio

- Detención del comunero Simeón Auccatoma Quispe.

1 de octubre

- Una delegación de la PIP viaja a Uchuraccay en busca de los comuneros requisitorizados, encontrando que muchas casas se hallan quemadas y abandonadas debido a los ataques de los miembros del PCP-SL.

24 de diciembre

- En víspera de Navidad, el PCP-SL realiza una nueva incursión en Uchuraccay, matando a ocho pobladores.

1984**Durante todo el año**

- Uchuraccay es atacada repetidas veces, tanto por el PCP-SL, los militares y las rondas campesinas de las comunidades aledañas, con el saldo de numerosos pobladores muertos y el completo abandono del pueblo debido a que los sobrevivientes huyen hacia la selva, Tambo, Huanta, Huamanga y Lima.

31 de enero

- Se realiza la reconstrucción de los hechos en la Comunidad de Uchuraccay.

17 de febrero

- El expediente del proceso Uchuraccay es elevado a la Corte Superior de Ayacucho.

Marzo

- La fiscalía emite acusación contra los tres detenidos y otros catorce comuneros requisitorizados.

14 de agosto

- Formulación de la acusación fiscal contra diecisiete comuneros de Uchuraccay.

28 de setiembre

- Inicio del juicio oral del proceso Uchuraccay en la Corte Superior de Ayacucho, en presencia de los únicos acusados detenidos: Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe.

1985

26 de marzo

- El fiscal retira la acusación contra los tres detenidos.

21 de junio

- Se declara la improcedencia del retiro de la acusación fiscal.

18 de julio

- Los familiares de los periodistas solicitan la transferencia de la competencia del juicio a la ciudad de Lima.

24 de julio

- Última audiencia del juicio oral del proceso.

31 de julio

- Los familiares recusan a todos los miembros de la sala de la Corte Superior de Ayacucho.

12 de septiembre

- Se declara fundada la transferencia de competencia del proceso a Lima.

25 de noviembre

- El 8vo Tribunal correccional de Lima asume el caso Uchuraccay.

1986

16 de abril

- El 8vo Tribunal se constituye en Tribunal Especial dedicado exclusivamente al caso Uchuraccay.

Mayo a diciembre

- Se realiza el juicio oral, en el cual declaran los miembros de la patrulla mixta que llegó a Uchuraccay después del asesinato de los periodistas. Es hallado el cadáver de Juan Argumedo

1987

9 de marzo

- El Tribunal Especial emite sentencia condenando a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe por el delito de homicidio simple, a las penas de 10, 8 y 6 años de reclusión, respectivamente.

29 de diciembre

- Simeón Auccatoma Quispe fallece de tuberculosis en el penal de Lurigancho.

1988

14 de junio

- La Corte Suprema cambia la condena a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado, confirmando el resto de la sentencia emitida por el Tribunal Especial.

1993

10 de octubre

- Un grupo de veinticuatro familias retorna a Uchuraccay después de casi una década, luego de meses de coordinaciones impulsadas por Elías Ccente, con el apoyo del Concilio Nacional Evangélico del Perú.

1998

26 de enero

- Se realiza el «I Encuentro de la Paz y la Reconciliación Nacional» en conmemoración de los quince años de la muerte de los periodistas.

2002

Mayo

- Los comuneros entregan a los miembros de la Comisión de la Verdad la lista de los 135 uchuraccaínos muertos por la violencia política.

2003

- El proceso Uchuraccay sigue abierto en el 7mo Juzgado de Procesos en Reserva de Lima.

Anexo 2: Lista de fallecidos en Uchuraccay

Relación de periodistas

Amador García Yanque
Félix Gavilán Huamán
Octavio Infante García
Jorge Luis Mendívil Trelles
Jorge Sedano Falcón
Eduardo de la Piniella Palao
Pedro Sánchez Gavidia
Willy Retto Torres

Guía de los periodistas

Juan Eudes Argumedo García

Relación de comuneros de Uchuraccay (que obra en poder de la CVR)

1. Alejandro Huamán Leandro
2. Venancio Auccatoma
3. Severino Huáscar Morales Ccente
4. Silvio Chávez Soto
5. Paulina Ccasani Figueroa
6. Marina Morales Gavilán
7. Juana Gavilán García
8. Fortunato Gavilán García
9. Ignacia Gálvez Nawpa
10. Alejandro Romero Quispe
11. Telésforo Ayala Díaz
12. Alberto Romero Nawpa
13. Sacarías Mauli
14. Marina Ccasani Figueroa
15. Pablo Taype
16. Alejandro Chávez
17. Benedicta Llanccce Gavilán
18. Francisca Llanccce Gavilán
19. Alejandra Figueroa Llanccce
20. Miligildo Solier Quispe
21. Simón Figueroa Cunto
22. Enrique Huamán Mauli
23. Teófilo Huamán Mauli
24. Baltazar Nawpa Ticlla
25. Simón Figueroa Cunto
26. Melquiádez Gavilán Romero
27. Alejandro Pérez Garagondo
28. Marcial Pérez Rimachi
29. Baltazar Figueroa Gavilán
30. Ignacio Figueroa Gavilán
31. Ezequiel Figueroa Gavilán
32. Daniel Chocce Ayala
33. Lorenzo Figueroa Cunto
34. Simeón Auccatoma Quispe
35. Benito Auccatoma Quispe
36. Teodora Soto Ticlla
37. Teófila Chávez Soto
38. Francisco Ramos Ricra

39. Jorgencio Quispe Ccasani
40. Clemencia Ccente Ccasani
41. Gregorio Quispe Huamán
42. Jesusa Mauli Figueroa
43. Justina Figueroa Ramos
44. Juan Mauli Figueroa
45. Francisco Mauli Quispe
46. Cristina Lapa Peña
47. Angelina Huachaca Gavilán
48. Jesús Mauli Huaranqa
49. Martina Gavilán García
50. Juan Ayala Ccahuana
51. Alejandro Ayala Ccahuana
52. Marcelina Mauli Ticlla
53. Emilia Ccahuana Canto
54. Lucas Ayala Nawpa
55. Saturnino Ayala Gómez
56. Candelaria Nawpa
57. María Huamán Núñez
58. Inocencia Llanccce Huamán
59. Cipriano Llanccce Huamán
60. Antonia Chávez Huicho
61. Alejandro Gavilán Figueroa
62. Santiago Gavilán Figueroa
63. Justina Peña Pacheco
64. Juan Cárdenas Quispe
65. José Ayala Gavilán
66. Bonifacia Gálvez Farfán
67. Demesia Huamán Llanccce
68. Rosa Gómez Gálvez
69. Teodora Gómez Gálvez
70. Lucra Huachaca Mayhua
71. Angélica Llanccce Puclla
72. Luis Ccente Auccatoma
73. Faustino Quispe Huamán
74. Marcial Huamán Peña
75. Juan Huachaca Pérez
76. Félix Huachaca Gavilán
77. Esteban Huachaca Cárdenas
78. María Huachaca Pérez
79. Sivestra Huachaca Pérez
80. Adrián Mauli Huamán
81. María Mauli
82. Justina Huamán Llanccce y su hijo
83. Patrocina Gavilán Curo
84. Alejandra Figueroa Leandro
85. Segundino Leandro Huamán
86. Vicente Huachaca Maywa
87. Remigio Soto Morales
88. Dionisio Morales Leandro
89. Erminio Gavilán Wicaña
90. Juan Manuel Romero Araujo
91. Pablo Romero Araujo
92. Alejandro Quispe Huaylla
93. Eulogia Quispe Huaylla

94. Rufina Ramos Quispe
95. Augusto Ccurimanya Cayetano
96. Víctor Rimachi Llanccce
97. Julia Nawpari Fajardo
98. Emilio Quispe Llanccce
99. Demetrio Quispe Llanccce
100. Vicente Urbano Guzmán
101. Leandro Guzmán Urbano
102. Juliana Farfán Ccoroq
103. Ezequiel Huaranqa Mauli
104. Alberto Huamán Arone
105. Paula Clarení Figueroa
106. Dionisio Nawpa Gavilán
107. Anselmo Quispe Huachaca
108. Félix Quispe Huachaca
109. Olimpio Gavilán Huaylla
110. Florencio Gavilán Huaylla
111. Feliciano Soto Gavilán
112. Francisco Romas Rivera
113. Constantino Soto Gavilán
114. Saturna Gavilán García
115. Feliciano Quispe Huachaca
116. Saturna Huamán Figueroa
117. Pelayo Rosa Gavilán
118. Amadio Auccatoma Peña
119. Clemente Figueroa Llamocca
120. Patricio Auccatoma Núñez
121. Marcelino Mauli Morales
122. Ignacio Pérez Gavilán
123. Elomina Cuchuri Ramírez
124. Teófilo Chocce Nawpa
125. Félix Chocce Nawpa
126. Francisco Nawpa Ticlla
127. Gregorio Soto Ayala
128. Celestino Ccente Figueroa
129. Teófila Hualla Inga
130. María Figueroa Chocce
131. Polinario Huaylla Taype
132. Salomón Sánchez
133. Paulina Ccasani Huicho
134. Fortunato Soto Ccasani
135. Esposa e hijo de 8 años, de Faustino Gómez Gálvez

2.5. LA SAIS CAHUIDE

2.5.1. *Importancia y contradicciones de la SAIS Cahuide*

La Sociedad Agraria de Interés Social (SAIS) Cahuide no solamente fue la empresa campesina más extensa del departamento de Junín creada por la reforma agraria, sino del país entero. Abarcó los distritos de Pariahuanca, Chongos Alto y Santo Domingo de Acobamba (provincia de Huancayo), Yanacancha (distrito de Chupaca) y el distrito de Comas (provincia de Concepción) del departamento de Junín. En el departamento de Huancavelica se localizó en el distrito de San Marcos de Rochac (provincia de Tayacaja). Esta empresa tuvo una extensión de 270 mil hectáreas, alrededor de 42,000 cabezas de ganado ovino; 4,500 vacas de raza Brown Suisse que les permitía captar 45 litros de leche por día. Incluyó a 28 comunidades campesinas como socias una cooperativa de servicios conformada por 900 trabajadores. Sus unidades de producción se localizaron sobre las antiguas ex haciendas LAIVE (37,000 Hectáreas), ANTAPONGO (36,000 Hectáreas), TUCLE-RIO DE LA VIRGEN (18,000 Hectáreas), ACOPALCA (37,000 Hectáreas), HUARI (36,000 Hectáreas), RUNATULLO (102,000 Hectáreas) y PUNTO (20,000 Hectáreas), ubicadas en ambas márgenes del río Mantaro (ver mapa).

La SAIS Cahuide contaba con una oficina principal de gerencia ubicada en la ciudad de Huancayo y oficinas de administración en cada unidad de producción que se hacía cargo de más de 1,000 cabezas de ganado vacuno, y 2,000 aproximadamente de ovino. Las personas que laboraban en estos cargos (gerentes, subgerentes y administradores) eran en su mayoría profesionales «foráneos» de la zona del Canipaco que percibían un sueldo que casi siempre provenía de la venta de ganado y de la producción de lácteos. El campesinado se beneficiaba con las raciones de carne y leche que se les proveía, algunos con las esporádicas capacitaciones en asistencia técnica, otros pocos trabajando como obreros en el mantenimiento de los equipos y maquinaria, y otras labores¹. Muchos lograron integrarse a la administración o gerencia de la SAIS Cahuide, en calidad de delegados de la SAIS en sus comunidades, con el propósito de mejorar la situación y defender los intereses de los comuneros.

La SAIS Cahuide fue creada con la idea de transformarse en eje y motor económico de la región. Sin embargo, no pudo evitar los efectos de la crisis económica de 1976 y las contradicciones propias de su estructura y organización a las cuales se vio sometida desde su creación. La drástica baja en las ventas de producción ganadera y de lana de ovino fue determinante para la dramática reducción de sus ingresos desde 1979 y finalmente para su propia liquidación en 1988. Sus ingresos en 1971, valorados a 1979, fueron de 599'077,830. En 1985, estos se redujeron en términos reales —siempre teniendo como base el año 1979— a 337'774,227;

¹ Reina, Percy. Op.cit. p. 9

es decir al 56% de lo que había representado en 1971 y 48% en 1979, que había sido el último año con más altas ganancias en su historia.² A su vez, el descontento de las comunidades socias fue creciendo no solamente debido a la caída de la producción y los ingresos, sino también porque al interior de la SAIS se produjeron conflictos entre comuneros socios y personal administrativo, debido centralmente a los ingresos y privilegios diferenciados de unos y otros. La mayor parte de los ingresos, casi las tres cuartas partes del total, se destinaron a cubrir sueldos y salarios de los técnicos y funcionarios de la empresa.³

Más adelante, el grupo de delegados de las comunidades campesinas fue contratado para laborar en la Unidad de producción, lo que causó motivó resquemores entre los demás socios no asalariados. En el caso de la Unidad de producción de Laive, sin embargo, se había logrado que algunas comunidades establezcan empresas comunales para la producción y venta de lácteos, generando así pequeños ingresos para los comuneros.

El panorama se complica cuando revisamos la historia de la creación de la SAIS por la Dirección General de Reforma Agraria y advertimos que hubo en efecto, una desigual distribución de la tierra entre las comunidades campesinas. Las empresas asociativas, junto con las cooperativas agrarias de producción se beneficiaron con el 75.4% del total de las tierras intervenidas. De otro lado, solamente el 1.1% del total fueron entregados a las comunidades campesinas que no eran parte de las empresas asociativas. A consecuencia de este panorama se suscitan una serie de enfrentamientos entre las comunidades socias y aquellas que quedaron fuera del esquema de la reforma agraria del gobierno militar.

De otro lado, la urgencia de las comunidades socias de solicitar la fragmentación de la empresa fue creciendo a lo largo de los años, a diferencia de los funcionarios remunerados de la SAIS que clamaban por la continuidad de la misma. Es de esta manera que en mayo de 1988 se aprueba en asamblea general de socios la «reestructuración» de la empresa. Igualmente, el 29 de diciembre de 1988, se ratifica la liquidación de la empresa. Es así que en enero de 1989, las comunidades socias pasan a formar empresas multicomunales en la margen derecha del río Mantaro.⁴

2.5.2. Ingreso del PCP-SL a la zona

La inserción de PCP-SL en zona tiene dos momentos claramente identificables. Uno primero de avance entre 1983 y 1984, hecho que coincidió con una acción de repliegue del PCP-SL desde la zona de Manta y Vilcas (departamento de Huancavelica) en 1983, cuando se instala una base militar. El segundo momento corresponde a la etapa de ataques sistemáticos a la infraestructura como a los funcionarios de la SAIS Cahuide, que se incrementan a partir de 1987, donde el PCP-

² Caballero (1990), p. 177.

³ Ibid, p. 177

⁴ Ibid, p. 172

SL busca expandir y consolidar su base social en la región centro, pretendiendo atraer a los trabajadores y comuneros descontentos en base a crímenes a los altos directivos de esta empresa.

La SAIS Cahuide, por la alta concentración de trabajadores campesinos que albergaba y por el importante lugar que ocupaba en la economía rural regional, se convirtió en un objetivo de primer orden que le posibilitaría consolidar su presencia y ganar adeptos para su lucha armada. La primera incursión de PCP-SL a la SAIS Cahuide se produce en diciembre de 1983, cuando atacan en forma simultánea las unidades de producción Laive, Antapongo y Tucle-Rio de la Virgen con el objetivo de apropiarse de explosivos, municiones y cabezas de ganado. En esta acción también destruyeron maquinarias e incendiaron algunas instalaciones. La unidad más afectada fue la de Tucle-Rio de la Virgen.

Por la información recogida sabemos que esta irrupción estuvo dirigida por los senderistas «Raúl» y Nelly» encabezaron la *Fuerza Principal* integradas por jóvenes reclutados de manera forzada de las comunidades del norte del departamento de Huancavelica, principalmente de Manta, Vilca, Laria, Nuevo Occoro y Yauli. Ellos ingresaron por Huancalpi hacia el valle del Canipaco. De acuerdo a un testigo reclutado obligadamente, los sucesos se dieron de la siguiente manera:

Sendero Luminoso lo tenía todo organizado: Dos jóvenes enviaron a destruir el puente de La Virgen, durante la noche todos los convocados (600 aproximadamente) caminaron rumbo a la unidad de producción de Tucle. En el camino decíamos qué vamos a hacer. Ahora el Ejército vendrá con helicópteros y van a bombardear a todos. Los senderistas nos decían, que los íbamos a atacar con bombas preparadas en latas de leche». (Testimonio 310558). «En la madrugada nos dividieron por grupos y salimos a diferentes direcciones. El camarada »Raúl» salió con dirección a la unidad de producción Laive, aproximadamente con 90 personas y yo salí en el grupo de la camarada »Nelly», nos trasladamos hacia la unidad de producción de Tucle y Antapongo [...] los subversivos tenían todo planificado. Decían entre ellos que a las 7 y 30 de la noche es el asalto y así fue. Regresamos al día siguiente a la misma hora. Sacaron cualquier cantidad de animales. Todas las ovejas sustraídas llegaron a Santa Ana (aproximadamente 6000 ovinos). Los senderistas entregaron las ovejas de acuerdo a la cantidad de participantes por cada pueblo. Algunos campesinos que acompañaron a los senderistas vinieron en carros y luego los devolvieron a la unidad de producción Tucle, ahí volaron con dinamita estos carros (testimonio 310553).

Como ya lo habíamos mencionado, los daños ocasionados por ésta acción, especialmente en el caso de la Sub unidad Tucle de Chuya, fueron enormes. Por temor, al poco tiempo, los comuneros desactivaron la granja comunal de crianza de alpacas, ovina y ganado vacuno de Chuya.

2.5.3. Exacerbando las contradicciones

El PCP-SL aprovecha los conflictos por linderos para introducirse en las comunidades, ganar aliados y hacer que se agudicen los enfrentamientos entre los pobladores, como lo veremos en seguida.

En los últimos meses de 1987, los caseríos más pequeños y alejados, ubicados al sureste de esta meseta empezaron a ser víctimas de saqueos de alimentos, caballos y reclutamiento forzoso

por parte del PCP-SL. Al mismo tiempo, las comunidades de Chongos Alto y Huasicancha, se enfrascaron nuevamente en una contienda de terrenos que tanto habían caracterizado sus relaciones en el pasado: ésta vez eran la tierras de la Unidad de Producción Antapongo, que comprendía más de 10 mil hectáreas de pastos naturales, las que estaban en disputa. Luego de los embates que sufriera esta unidad en 1983 y durante ese año 1987, se hizo insostenible la continuidad de Antapongo, por lo que sus propios asociados empezaron a señalar que las tierras de ésta unidad deberían pasar nuevamente a posesión de las comunidades socias, es decir: Chongos Alto, Llamapsillon, Palaco, y Palmayoc. En estas circunstancias, la comunidad campesina de Huasicancha —que no era socia de la SAIS— presenta una demanda contra la SAIS Cahuide y la Dirección de Reforma Agraria exigiendo la restitución del inmueble, relacionadas a los terrenos de la ex hacienda Antapongo y río de la Virgen. Era precisamente esta extensión territorial que la SAIS Cahuide debía de entregarle a la comunidad de Chongos Alto.

Para ser efectiva la mencionada demanda, la comunidad campesina de Huasicancha presentó un título de propiedad del año 1607, que le fuera otorgado por el gobernador de indios sobre el dominio de los pastos y estancias de la comunidad de Huasicancha. El representante legal de la SAIS-Cahuide por su parte alega, que el documento que presentó la comunidad de Huasicancha no cumplía con los requisitos suficientes para ser considerada un título de propiedad formal. Además que según la adjudicación de las tierras realizada por Decreto Ley, los terrenos de Antapongo y río de la Virgen estaban en los registros públicos sobre el proceso de reestructuración y estas deberían retribuirse a favor de las comunidades campesinas socias.

Ante estos hechos, la comunidad campesina de Huasicancha decide apelar. De igual manera, la comunidad de Chongos Alto presenta una copia certificada de un notario público de Matucana, mostrando un título de 1817 encontrado en sus archivos, como también la solicitud de copia certificada de la existencia de tres parcelizaciones comprendidas entre Chongos Alto, Chongos Bajo y Yanaolo, la que con fecha 20 de noviembre de 1817 fue entregada por el corregidor autónomo de Ulloa, en representación de su majestad el Virrey José Antonio de Manso de Velasco.

En medio de estos desacuerdos y reclamos, en enero de 1988, el PCP-SL toma por asalto la comunidad de Chongos Alto con el fin de organizar un Comité Popular. Los comuneros se ven obligados a convivir con una forma de gobierno que impartió una drástica manera de ejercer justicia donde los infractores eran severamente castigados, incluso con la vida misma. Los comuneros de Chongos Alto, sin embargo, logran negociar con los integrantes del PCP-SL para impedir la participación de los menores de 18 años en incursiones senderistas. Asimismo, exigen un margen de libertad para que los jóvenes puedan decidir abandonar o quedarse en el distrito si así lo quisieran.

Por esos años, las diferencias entre Chongos Alto como comunidad «madre» y las comunidades «hijas» (Llamapsillon, Palaco y Palmayoc) también se exacerbaban. El motivo fue un

conflicto por linderos y por la distribución de terrenos que fueron entregados por liquidación de la SAIS - Cahuide (que no incluye el predio Antapongo en conflicto con Huasicancha). La razón de este conflicto interno fue la distribución desigual de terrenos realizado por la SAIS - Cahuide, porque la mayor extensión se la entregó a la comunidad de Chongos Alto. Los pobladores de las comunidades campesinas de Palaco y Palmayoc alegan que poseen documentos acreditándolos como propietarios de los terrenos que los pobladores de la comunidad de Chongos Alto reclaman como suyos.

El Consejo Directivo de Administración Transitoria y de Disolución y liquidación de la SAIS-Cahuide, intentó sin éxito solucionar dicho conflicto en las instancias judiciales y para más adelante, en 1990 emitió una resolución en la cual explicaba que al haber sido acordada la disolución de la SAIS-Cahuide en 1988, se realizaría la respectiva transferencia de dominio y posición de los terrenos a las comunidades socias de la SAIS, con la excepción de los terrenos que se encontraban en procesos judiciales, tales como son el predio Antapongo y río de la Virgen. Para esta fecha la comunidad campesina de Chongos Alto ya había tomado posesión de la zona en conflicto, mientras esperaba el resultado del proceso judicial. Este conflicto sigue pendiente sin ser solucionado hasta el día de hoy.⁵

2.5.4. La violencia se incrementa: 1987-1990

Hasta 1987 no se detectan mayores incursiones del PCP-SL a la zona. La estrategia de PCP-SL de captación de nuevos militantes fue, primero a través de la identificación ideológica, y posteriormente a través del miedo y la fuerza. A partir de éste año hasta 1989, las apariciones del PCP-SL se vuelven cada vez más constantes, intensificando la violencia de sus acciones. No estamos frente al mismo grupo que hizo su aparición hacia 1983, sino de militantes de la zona, en estrecha relación con el trabajo que el PCP-SL venía realizando en la UNCP a través de su trabajo académico (prácticas de la facultad de zootecnia por ejemplo) o el trabajo político que desde algún tiempo atrás desarrollaban agrupaciones maoísta (Puka Llacta y Vanguardia Revolucionaria-Proletario Comunista).

Durante los últimos meses del año 1987, el PCP-SL irrumpe más de una vez en estancias pequeñas y alejadas, ubicadas en la Zona Alta del Canipaco, del Alto Cunas y de las Alturas de Yauyos (Lima). También fueron frecuentes los asaltos a pequeñas minas que existían en las alturas de Chupaca y en los límites de Huancayo y Yauyos, polvorines de los cuales sendero se pertrechaba de dinamita y explosivos para sus atentados.

Una testigo de sus primeras incursiones narra que en la zona de Yauyos venía actuando una fuerza principal senderista al mando de un varón que se hacía llamar camarada «Roly», acompañado de su

⁵Reina, Percy. Las guerras del Canipaco: Los distintos rostros de la violencia. Huancayo, Red de Ciencias Sociales, 2002, p.6

mujer «La Gringa». Un segundo testigo señala que los senderistas estaban al mando del compañero «Daniel», quien se trasladaba acompañado de dos chicas y de 6 a 7 varones. (Testimonio CVR 302690)

A la fuerza liderada por «Roly» y «La Gringa», se le atribuye acciones en los poblados de Allauca, Tauripampa, Pilas, Tallar, Quinchis, Quisque, Langaico y otros, en los cuales asesinaron a autoridades diversas, dirigentes comunales, comerciantes y miembros de las fuerzas del orden. En un enfrentamiento en Quisque (frente a Yauyos), los senderistas fueron rodeados por los soldados y cayeron «Roly» y su «masa», incluyendo «La Gringa». Afirman los testimonios que «Roly» logró escapar herido de una bala, que fue socorrido en la comunidad de Ayaviri. Anduvo un tiempo deambulando en forma solitaria por las comunidades de la zona. En Picamarán fue capturado por la comunidad, llevado a Yauyos y entregado a las fuerzas del orden (no sabemos si policías o militares), donde acabaron con su vida. Se dice que «Roly» fue natural de Huantan que también es un distrito de la provincia de Yauyos. (Testimonio CVR 300525).

Los testimonios afirman que el PCP-SL azuzaba los ánimos en cada arremetida, afirmando la necesidad de destruir el Estado actual «lleno de injusticias» y construir uno nuevo con equidad, donde los pobres gobernarían y no habría actos de inmoralidad. La población era obligada a unirse a los «alzados en armas», coaccionando a las autoridades a renunciar a sus cargos. Repitiendo la amenazante frase de que «*el partido tiene mil ojos y mil oídos*» se retiraban, habiendo previamente designado a sus delegados y estableciendo Comités Populares.

Según nuestros testimonios:

[...] los terroristas nos decían a la población que ellos eran el ejército de los pobres, por ello había que luchar, para lo cual teníamos que organizarnos en grupos, que cambiar la forma de gobierno y por eso había que abastecernos de todo. (Testimonio 301373).

Los miembros de Sendero Luminoso nos hablaban que estábamos siendo explotados por los dueños de la SAIS, y que nos pagaban una mínima cantidad en comparación a lo que ellos (dueños y jefes) se llevaban y beneficiaban, que se enriquecían a nuestras costas y nos jodían bien, «Escuchábamos atentos todo lo que ellos decían, creíamos que tenían razón en muchas cosas y que lo mejor sería apoyar». El mismo comunero agrega: «teníamos miedo en algún momento, escuchábamos que se enfrentaban a los militares, tenían sus ideas y tal vez estaban equivocados, pero nosotros todos, tuvimos que escuchar nada mas» [...] «también decían que el Gobierno era el enemigo del pueblo ya que las cosas subían de precio constantemente, por lo que debíamos combatir en la Guerra Popular» (testimonio 301694)

Uno de los objetivos primordiales del PCP-SL era destruir la Unidad de Producción Laive. Previamente, había reunido a los comuneros de Laive ordenándoles su desactivación y que el ganado sea repartido entre todos equitativamente. Sin embargo, y como ya lo mencionamos anteriormente, esta unidad de producción era precisamente la que mejor venía trabajando y tenía aceptación por la mayoría de las comunidades, entonces resultó difícil tal mandato. Como lo afirma un poblador:

Un número considerable de pobladores de Yanacancha, laboraban en la Unidad Productiva de LAIVE que era la más cercana y completa. Los pastos y tierras de esta zona eran de alta calidad, por eso aproximadamente el 90% de la población se dedicaba al pastoreo y crianza de animales propios o de la SAIS Cahuide. (Testimonio 301694)⁶

Al principio los comuneros y la administración se resistieron a las disposiciones del PCP-SL. Ante este hecho, el PCP-SL asesina al administrador de la Unidad de producción de Laive, Luis Capcha el 17 de noviembre de 1987, colgándolo en su propia oficina. El PCP-SL había aprovechado el ánimo adverso que algunos trabajadores mantenían con Luis Capcha:

Primero lo sometieron a una especie de «juicio popular». Algunos trabajadores que habían sido sancionados por él, se quejaron. [...] «El ingeniero» no era abusivo y respetaba los derechos laborales, «solo quería ser recto». (Testimonio 301685)

A partir de este hecho se precipitó la liquidación de esa unidad de producción en forma inminente e ineludible. Posteriormente, el PCP-SL llegó hasta la unidad de producción de Antapongo, donde la desactivación de la Unidad ya estaba en ciernes e iniciaban ese proceso repartiéndose algunos ganados. Los comuneros no pensaban liquidar del todo aun dicha unidad, pero la desactivación y el reparto total del ganado se realizó con mayor celeridad con la presencia del PCP-SL. La unidad de producción Tucle-Rio de la Virgen de la SAIS-Cahuide también fue desactivada y destruida.

La policía vigilaba la zona por medio de puestos policiales situados en Chongos Alto y Yanacancha, los cuales fueron destruidos por el PCP-SL a mediados de 1988. El ejército venía realizando algunos rastrillajes desde 1984, desde su base militar instalada en el distrito de Vilca (provincia de Huancavelica). Las acciones de los militares no impidieron, sin embargo, la destrucción de estas unidades de producción. En los últimos meses del año 1988 se decreta el estado de emergencia en todo el departamento de Junín, lo cual inicialmente no afectó el control de Sendero a los pobladores del valle por medio de la creación de una atmósfera de terror.

Entre fines de 1988 y los primeros meses de 1989, el PCP-SL había realizado un aproximado de cinco a seis incursiones en el anexo de Llamapsillon, obligando a las personas a quemar documentos, a las mujeres a tejerles capuchas, prohibieron realizar fiestas y castigaban a las personas cuando no les hacían lo que mandaban. (Testimonio 301374)

Los atentados perpetrados por el PCP-SL en éste periodo van a seguir cierto patrón como el de ajusticiamientos masivos en plazas pública a las principales autoridades y dirigentes comunales y golpes constantes hacia la infraestructura de las SAIS y unidades de producción con el objetivo de desestabilizar la autoridad reinante y crear un vacío de poder. Asimismo el PCP-SL ejercía una gran coacción sobre los jóvenes de la zona, a quienes reclutaba para realizar actos de sabotaje,

pintas, tomas de puestos policiales, o simplemente ir coordinando con la fuerza principal la próxima acción a realizar.

2.5.5. La destrucción de la SAIS Cahuide en la mira

A inicios de 1989, el PCP-SL arremetió contra la Unidad de Producción Laive, destruyendo la maquinaria de procesamiento de leche y derivados. No contentos con esta acción, incendiaron los pastos, saquearon la casa-hacienda y finalmente distribuyeron el ganado a los trabajadores presentes. En ese mismo año arrasan también las unidades de producción Tucle-Rio de la Virgen y Antapongo. Las comunidades vecinas de Palmayoc, Palaco, Llamapsillón y Chongos Altos azuzadas por los senderistas, concluyeron con el saqueo y repartición de bienes de estas unidades de producción. 120 mil cabezas de ganado ovino, 9 mil vacunos y 600 equinos de primera calidad fueron vendidos después de estos hechos, en los camales de la región. De acuerdo el testimonio CVR 301685, los senderistas quemaron carros, tractores y equipos. Incluso calcinaron las vacas mas finas que tenían crías, «les rocían gasolina y luego les prenden fuego, daba pena ver como sufrían esos animales y no podíamos hacer nada». Todas las instalaciones de la Sub Unidad LAIVE fueron destruidas y bombardeadas, «cuando alguien quería salvar algo, los amenazaban». A consecuencia de este hecho no solamente los empleados perdieron su puesto de trabajo, sino que se destruyó una importante fuente de desarrollo e ingreso de la región centro. Después del atentado, los subversivos ordenaron que los animales fueran repartidos entre los pobladores de las comunidades de Chicche, Santa Rosa, Vista Alegre, Quishuar, Magdalena, Huayucachi, Huancán, Chupaca, Santo Domingo de Cachi, San Juan de Jarpa, San José de Quero, Chaquicocha y Shicuy entre otros.

En enero de 1989, el PCP-SL secuestra a Víctor Lozano, autoridad comunal de Chicche y delegado de su comunidad ante la SAIS-Cahuide, junto a Manuel Soto, antropólogo y promotor de la ONG CICEP, que mantenía proyectos en el lugar. Luego de torturarlos con vesanía, los asesinan a tiros en un paraje desolado de la Comunidad de Palmayoc.

En éste periodo un buen número de personas se suma a las huestes senderistas. El PCP-SL exagera con mucha habilidad para su propio provecho, los conflictos y disputas previamente existentes entre las comunidades. Según los pobladores del valle, los senderistas tenían como sus más cercanos «aliados» a los comuneros de Langaico, comunidad que pertenece a la zona altina de Laraos, provincia de Yauyos; departamento de Lima.

Los problemas locales se entremezclan con el conflicto armado interno en detrimento de la propia población. Un poblador de Chongos Alto, señala que los pobladores de las comunidades de Langaico (distrito de Laraos, provincia de Yauyos), Atcas (distrito de Huantan, provincia de

⁶ Muchos coinciden en señalar que los pobladores de esta zona había logrado tal grado de especialización para el pastoreo, que muchos de ellos están en Estados Unidos o Europa, donde trabajan como «Ovejeros o Pastores».

Yauyos) y los comuneros del distrito de Huasicancha (provincia de Huancayo) invadieron los terrenos de Chongos Alto, apoyados por los miembros del PCP-SL (testimonio 302713)

El día 16 de marzo de 1989, los comuneros del valle del Canipaco llegaron a la zona que había sido ocupada por los langainos e iniciaron el desalojo. Los invasores se retiraron del lugar porque los pobladores del Canipaco que se autoproclaman los «Verdaderos Propietarios» eran mucho más numerosos. En el desalojo, tres personas se enfrentan a los comuneros del valle del Canipaco, argumentando que el PCP-SL había autorizado tal posesión. Estos tres rebeldes fueron trasladados hasta la comunidad de Chongos Alto donde los encarcelaron por tres días. Más tarde, por mayoría determinan entregarlos a la Policía Nacional de Huancayo. Cuando éstos eran trasladados aseguraron que se vengarían por todo lo acontecido. Después de una semana, la fiscalía provincial de Huancayo dejó en libertad a los detenidos, al no encontrar pruebas concretas.

El PCP-SL contaba con una red de información bastante efectiva y se informaba de todo lo que ocurría con mucha rapidez. Con la misma velocidad comenzaron a preparar la contraofensiva que sería la masacre más estremecedora de toda la zona del Canipaco. Los «*mil ojos y mil oídos*» volvieron a funcionar por última vez.

El 11 de abril de 1989, día de la feria semanal en el distrito de Chongos Alto, autoridades y pobladores representativos de las comunidades de Chinche, Chongos Alto, Llamapsillón, Palaco, Vista Alegre y Palmayoc se reunieron clandestinamente en algún lugar de este distrito con el propósito de planificar acciones de defensa frente a la presencia del PCP-SL en la zona. En la madrugada del día siguiente (12 de Abril) debían retornar a sus lugares de «seguridad» (muchas autoridades que vivían en las comunidades del Valle del Canipaco, debido a la presencia senderista habían emigrado por razones de seguridad hacía distritos cercanos a la ciudad de Huancayo, lugares donde había presencia policial o del ejército). Pero ese día en la madrugada llegan cuarenta senderistas al valle del Canipaco, quienes se dividieron en dos grupos. Uno de ellos se quedaría en Chongos Alto y Llamapsillon, y el otro se iría hasta Chicche. Por medio de listas sacaron de sus casas a doce autoridades de las comunidades de Chicche, Llamapsillón y Chongos Alto y los condujeron hacia la plaza de Chongos Alto. Echados boca abajo con las manos atadas, fueron asesinados con un tiro en la cabeza; las suplicas y ruegos de sus familiares fueron en vano. Ellos fueron:

De Chongos Alto:

Amadeo Vilcapoma Camposano, Presidente del consejo de administración de la comunidad campesina de Chongos Alto.

Melanio Castillon Román, Vicepresidente de la comunidad de Chongos Alto y profesor de educación secundaria.

Julián Ricardo Porta Tarma, Comunero.

Genaro Chanco Ricse, Gobernador.

Mario Molino Chávez, Comerciante Cuzqueño

De Chicche:

Elías Orihuela, Presidente del consejo de Administración de Chicche.

Flores Orihuela Lozano, Alcalde Distrital.

Macario Lozano Meza, Comunero.

Vidal Orihuela Acuña, Secretario del Consejo de Administración.

Donato Chagua Sauñe, Teniente gobernador.

De Llamapsillón:

Zocimo Rodríguez Porta, Teniente Gobernador.

Roque de la Cruz Cerrón, Comunero.

Al retirarse los senderistas incendiaron el local del municipio de Chongos Alto (con la intención de quemar toda la documentación y títulos de los terrenos) y el local de la sucursal del banco de la Nación. Luego se fueron caminando hasta Chicche donde abordaron el ómnibus que los llevó hasta las alturas de donde desaparecieron. Algunos pobladores alcanzaron a observar a los senderistas, cuando éstos se dirigían a Chicche y aseguran que la mayoría de ellos llevaban la vestimenta típica de los pobladores de «altura» y que únicamente 15 personas estaban armadas ¿Fue acaso un acto de venganza suscitada a raíz de la «alianza» entre «Langainos» y «Senderistas» como lo especulan los testigos?

Un testigo recuerda el horror vivido:

Los que fueron llamados estaban en el centro del parque y nosotros no podíamos hacer nada, porque el distrito estaba rodeado de senderistas y tuve que esconderme con las señoras y observar de lejos como mataban a los convocados. De pronto un grupo de senderistas se subió a un carro y se dirigieron a Chicche, por lo que corrí por una trocha que hay para transeúntes, de allí todavía pude ver como las señoras se pusieron fuertes y no les dejaban quemar el municipio. Sin embargo, lograron arrojar una dinamita al local de la Empresa Comunal, que era tienda y donde se vendía leche, queso, ovinos, carne y lana de la misma comunidad a precio de costo para tener algo de dinero. También dinamitaron el local de la Posta de Salud que tenía implementos y medicina. Estos locales funcionaban en los bajos del municipio. Ese día destruyeron una granja de ovinos, los canales de irrigación también los dinamitaron (testimonio CVR 301710)

Sin embargo, igualmente se afirma que otro de los motivos subyacente de la masacre fue el conflicto de tierras existente entre huasincanchinos y chonguinos. Victor, comunero de Chongos Alto, había participado en más de una oportunidad en invasiones de terrenos que afectaban a los comuneros de Huasicancha. A raíz estos hechos, los comuneros de Huasicancha le amenazaron de muerte a través de una carta. (Testimonio CVR 301034). Simón explica que la ambición por poseer las tierras hizo que los dirigentes del distrito de Huasicancha confabularan para provocar la matanza de las autoridades de Chongos Alto en 1989, masacre de la que el mismo logró escapar (testimonio CVR 302713)

2.5.6. La contraofensiva: instalación de base militar y rondas campesinas

Los militares llegan por primera vez al valle del Canipaco después del suceso del 12 de abril de 1989. Fueron los militares que se encargaron del levantamiento de los cadáveres del suceso de Chongos Alto. Desde entonces regresaron esporádicamente para realizar acciones de «rastrillaje». Posteriormente, con el gobierno de Alberto Fujimori, en 1990 se instalan bases militares en los distritos de Chicche (Anexo de Vista Alegre) y San Juan de Jarpa; luego en 1991, en los distritos de Chongos Bajo, Huamancaca Chico y Chupaca.

Con la instalación de la base militar en el anexo de Vista Alegre en 1990, la presencia del PCP-SL disminuyó notoriamente en toda la zona. Además se eligieron formalmente a las autoridades comunales y políticas de todas las comunidades del valle recientemente asesinadas. En 1990, el ejército desplegó una importante acción «rastreadora» por todo el Valle del Canipaco, llegando inclusive hasta las comunidades más alejadas; este hecho provocó la desaparición casi absoluta del PCP-SL. Fue también en este proceso que los militares «desaparecieron» a todos los sospechosos y presuntos senderistas. Éste fue el caso de Luis, el comunero de Langaico, sindicado por los pobladores de Chongos Alto y alrededores como senderista. En un suceso poco claro, en el momento del «ajuste de cuentas», Luis fue presentado a los militares como jefe «terrorista».⁷

Los militares de la Base de Vista Alegre rápidamente obtuvieron la fama de crueles y abusivos, en especial del capitán que se encontraba a cargo, quien por sus acciones recibió el apelativo de «Malacho». Desde esta base los soldados ingresaban a las diferentes comunidades altas de la Cuenca del Canipaco, ya sea con caballos o camiones, para patrullar la zona y buscar a los posibles senderistas. En estas acciones, los soldados cometían una serie de abusos; se introducían a las casas de los pobladores para destruir utensilios, vajillas, y mezclar semillas con kerosene o fertilizantes. Obligaban a los pobladores a entregar comida y animales. Mataban a balazos a las llamas y ovinos; y los subían a su camión para preparar su «rancho». También se llevaron cientos de caballos de las diferentes comunidades. (Testimonio CVR 302054)

Como observamos, tanto las rivalidades comunales como las personales, llevaron a que muchos fueran acusados —injustamente o no— de ser senderistas. Es el caso de Miguel, comunero de Chuya, quien tenía terrenos por la zona de la mina de Cercapuquio en Chongos Alto. A consecuencia de la destrucción de Laive y el reparto masivo de los animales, Miguel había incrementado sus ganados. Por esta razón las autoridades comunales de Chongos Alto le reclamaron por el uso excesivo de los pastos, a la vez que le solicitaron incorporarse como comunero a una de las cuatro comunidades de Llamapsillon, Palaco, Palmayoc o Chongos alto y reducir la cantidad de

⁷ Una versión sostiene que una de sus principales acusadoras habría sido su propia pareja. Los militares fusilan a Luis «pero las balas no le impactaron». Los militares sorprendidos piensan que Luis «es un Satanás, ni las balas lo matan». Los militares deciden soltarlo, pero su pareja insistió en que había que eliminarlo porque Luis se iba a vengar de todos. Fue así que los militares le responden: «bueno, ya que quieres que lo matemos, mátalos pues tú». Los militares traen un cuchillo de cocina, agarró el cuchillo y lo mató (testimonio CVR 302730).

animales. Miguel se niega a cumplir tales pedidos. Frente a esta resistencia, las autoridades comunales de Chongos Alto lo amenazan con acusarlo de senderista y denunciarlo a la base militar de Vista Alegre. En efecto, al poco tiempo fue denunciado. Sus familiares presumen que él y su familia fueron desaparecidos por venganza de las autoridades comunales por el uso de los pastos comunales. Afirman sus familiares además, que después de la detención de Miguel y su familia, «Malacho» regreso a Chongos Alto a entrevistarse con las autoridades comunales, a informar que ya habían sido ejecutados, pero las autoridades no le creyeron y le pidieron la cabeza. Ante esta presión, el militar regreso a la base militar, asesina a Miguel y le lleva la cabeza a las autoridades (testimonio CVR 302027)

2.5.7. La formación obligada de rondas de autodefensa

El proceso de formación de las rondas campesinas en esta región se inicia en el año 1991. Los militares reunieron a la mayor cantidad de pobladores de cada comunidad y explicaron los motivos y necesidades para organizar las rondas. En un primer momento la población se mostró desinteresada por el tema, por lo que los militares empezaron a coaccionar a los comuneros. Como nos relata un comunero de Chicche, al instalarse las rondas campesinas en las comunidades de Magdalena, Quisuar y Chinche (distrito de Chinche), el Ejército repartió armamentos para ser compartidos por las tres comunidades. Asimismo cuenta que los ronderos, a veces iban a la Base Vista Alegre, donde les enseñaban a armar, desarmar y limpiar las armas. «En Chicche, también hemos tenido varias capacitaciones en tiro libre con fusiles. Todos trabajábamos» (testimonio CVR 302368).

Otro rondero comenta que los militares de la base de Vista Alegre les decían que «El que no sirve para la base es Tuco». El mismo señala que muchos de los comuneros que participaban en las rondas campesinas fueron amenazados por los miembros de los grupos subversivos, por eso tuvieron que abandonar su pueblo y establecerse en otras ciudades. Si bien los militares no cometieron excesos con los familiares de los ronderos, llegaban a la casa de estos en cualquier momento y les exigían que salgan a realizar las rondas a los pueblos cercanos y nadie podía oponerse a esta orden. (Testimonio CVR 302710)

2.5.8. Epílogo

En un panorama bastante complicado, un grupo de comuneros que se opusieron a la continuidad de la SAIS Cahuide con anterioridad a la llegada del PCP-SL, respaldaron sus ideas destructivas. No obstante, una vez que perdieron sus trabajos, terrenos, y animales, sintieron en realidad el error de su «alianza».

Las reparticiones de ganado después de la destrucción de la SAIS-Cahuide no fue necesariamente justa. De acuerdo al testimonio CVR 301694: «según conveniencia se entregaba,

no era justo, no podíamos hablar nada porque nos marcaban y gritaban para apoyar a repartir [...] Ahì nos dimos cuenta de algunos atropellos que se cometían».

Muchos pobladores, a partir de estos hechos, se decepcionaron del PCP-SL y se dieron cuenta del gran error cometido.

Afirma el testimonio CVR 301694: «Más nos convencimos cuando la destruida Hacienda LAIVE no servía para nada, los buenos pastos que se habían mejorado se empezaron a perder, no había animales ya que habían obligado a regalarlos o comerlos».

No había quedado tampoco ningún animal de buena raza en los pastos y los comuneros perdieron la oportunidad de vender el ganado y obtener un ingreso económico. A esto se suma una economía inflacionaria que llevó a la quiebra a los comuneros, como lo manifiesta el testimonio CVR 301694: «si uno vendía un toro a 1,500 intis con este dinero no podías hacer nada ya que se devaluaba y sólo se podía comprar en cambio una bolsa de fideos, una caja de leche, arroz, y alguna que otra cosita más».

Las escasas ganancias que se obtenían no les permitían iniciar ni siquiera un pequeño negocio. Este mismo testimonio refiere además que no se pudo activar la SAIS, todo estaba destruido. Otro poblador después de la destrucción de la SAIS Cahuide recuerda que:

La SAIS Cahuide, nos apoyaba con equipos pesados (volquetes, camiones) para limpiar y mejorar nuestras vías de comunicación, para la limpieza de canales de irrigación, entre otras actividades. Pero como ya fue desaparecida esta SAIS, no tenemos estos beneficios ni tampoco podemos seguir aprendiendo nueva tecnología para mejorar nuestros pastos, la calidad del agua, sanidad de los animales, porque destrozaron nuestra empresa comunal, nuestra tienda [...] Los pobladores que tenían animales en su poder y los cuidaban independientemente, no sabían las técnicas para mejorar la raza». (Testimonio CVR 301710)

En palabras de los propios afectados:

Sendero llegó a destruir una organización campesina que sobresalía en el ámbito nacional, siendo a favor de los millonarios y no de los pobres. Añade que a nivel nacional tenían los mejores ganados y no tenía competencia alguna, así que iban a competir con la ganadería de Argentina, pero para esto la SAIS ya se había destruido». (Testimonio CVR 302708)

2.5.9. Conclusiones

La SAIS-Cahuide constituyó un referente importante para la economía rural de la región, a pesar de su paulatino decaimiento. Su destrucción significó una oportunidad, irremediablemente perdida para la región. Lamentablemente no contamos con cifras que den cuenta del grado y magnitud de destrucción habido. Ningún estudio ha realizado alguna vez, la contabilidad de los daños personales, ni materiales ocasionados por el conflicto armado interno para este caso.

¿Cómo fue posible su destrucción por el PCP-SL?

La SAIS-Cahuide se había asentado sobre terrenos que arrastraban una larga historia sellada por múltiples conflictos sobre la propiedad de la tierra. A este difícil panorama cruzado por disputas por tierras y linderos entre las comunidades socias y las que no lo eran, se sumaban las dificultades personales surgidas entre los mismos socios, donde solamente una parte de los socios fueron empleados en tareas administrativas con un sueldo fijo. El PCP-SL hábilmente se posicionó sobre estos conflictos y contradicciones locales exacerbándolos para ganar aliados en su trastornada carrera por destruir el viejo estado y establecer uno nuevo destruyendo de raíz una empresa que nunca más pudo volver a ser reconstruida. A esto se suma el terror que el PCP-SL desplegó en la zona a través de sus juicios populares, a quiénes no seguían sus pautas de conducta. Por estas razones, ya sea por miedo, interés directo por acceder a la maquinaria de las empresas asociativas o ambivalencia hacia los planes destructivos del PCP-SL, éste contó en determinado momento con el apoyo de una parte de la población.

¿Qué enseñanzas nos deja este capítulo dentro del conflicto armado interno?

La SAIS-Cahuide estaba signada a desaparecer como empresa asociativa desde su nacimiento debido a las profundas contradicciones a la cual estuvo sometida desde el inicio. Si bien fue un referente importante en la región, estuvo basada desde un principio en reproducir relaciones de desigualdad expresadas en la existencia de una elite privilegiada de empleados asalariados y una masa de trabajadores-proveedores de los productos e insumos para la venta. El PCP-SL supo ante el vacío creado, ubicarse rápidamente en los intersticios de estos conflictos y captar aliados para su causa. En otras palabras, los conflictos al interior de la SAIS y entre las comunidades fueron utilizadas para generar una base social que apoyara sus acciones destructivas. Cuanta sangre se hubiera podido ahorrar ante una política más clara y justa de parte del Estado de distribución de tierras y repartición de las ganancias en una empresa con objetivos comunes y desarrollo potencial para la región.

Bibliografía

- Caballero, Víctor (1990). Cambios en la propiedad de la tierra: Estudio de la SAIS Cahuide y las comunidades socias. En Sepia III
- Reina, Percy. *Las guerras del Canipaco: Los distintos rostros de la violencia*. Huancayo, Red de Ciencias Sociales, 2002.
- Montoya, Rodrigo. *La SAIS Cahuide y sus contradicciones*. Lima, UNMSM, 1972.
- Sánchez Enriquez, Rodrigo. «Las SAIS de Junín y la alternativa comunal». En Revista: *Debate agrario*, N° 7.

2.6. LOS SINDICATOS MINEROS

2.6.1. *La minería en el Perú: gran generadora de divisas*

El desarrollo de la minería en el Perú se remonta desde antes de la época de la conquista. La importancia que posee, sin embargo, no se traduce en la cantidad de estudios socio-económicos que existen sobre este trascendental rubro de la economía peruana, mucho menos en investigaciones que muestren el impacto del conflicto armado interno en este sector.

Desde inicios del siglo XX, la sierra central se había convertido en el centro principal de producción minera del país y como tal en parte importante de la creciente economía peruana de exportación. La región poseía los recursos necesarios para el crecimiento de esta actividad: ingentes reservas minerales y suficiente mano de obra para las actividades de extracción en las comunidades aledañas a los campamentos mineros. La gran mayoría de los obreros que laboraban en estos centros mineros provenían de las comunidades campesinas ubicadas en las partes altas del departamento de Huancavelica, del Valle del Mantaro y de Cerro de Pasco.¹

Los productos mineros han tenido siempre un peso considerable en nuestras exportaciones. En el año de 1969, los productos mineros constituían 52% de nuestras exportaciones. Desde 1977, las exportaciones de concentrados y refinados han representado más del 40% de las exportaciones totales del Perú. En 1977 y 1983 alcanzaron una participación superior al 50%, 45% en 1987 y 1988, para rebrotar en 1989 hasta 62%, a pesar de las políticas de exportación, los precios internacionales, los conflictos laborales y la violencia que se vivió esos años.²

En 1991, más del 50% del valor de la producción de los seis productos minero metalúrgicos (cobre, plata, zinc, polo, oro y hierro) estaban concentrados en cuatro empresas estatales y una privada; Centromín Perú, Minero Perú, Hierro Perú, Tintaya SA y Southern Perú Copper Corporation, esta última privada. Estas cinco grandes empresas generaban el 75% de los activos totales de sector en 1991³. La tendencia actual es haber seguido un proceso de privatización cuyo análisis detallado escapa los objetivos de este informe.

La minería ha venido empleando igualmente un importante número de trabajadores. En 1989, el total de trabajadores mineros llegó a 58,160, registrando una tasa de crecimiento negativa de 1.1% anual para el período comprendido entre 1980 y 1989.⁴ Del número total de obreros y empleados, los obreros representaban aproximadamente el 75% del total del personal ocupado en las minas.⁵

¹ Norman Long y Roberts Bryan: «Mineros, Campesinos y Empresarios en la Sierra Central del Perú» Pag. 25. IEP 2001.

² Sobre la contribución del sector minero al desarrollo nacional ver la publicación del Instituto de Estudios Económicos Mineros, La importancia económica de la minería en el Perú, Lima (1991).

³ Ibid, p. 44-45

⁴ Ibid, p. 101

⁵ Ibid, p. 103

2.6.2. Minas de Huancavelica: bancos de dinamita del PCP-SL

El departamento de Huancavelica tiene varios centros mineros importantes, los cuales están ubicados en las provincias de Castrovirreyna, Angaraes y Churcampa. La empresa Buenaventura era la más grande y sus unidades estaban ubicadas en San Genaro y Julcani. Cobriza, ubicada en la provincia de Churcampa era unidad de Centromín Perú; otras unidades mineras eran Caudalosa Grande, Caudalosa Chica y La Mejorada.

En los años 79 y 80, los sindicatos mineros de Huancavelica se caracterizaban por su alto grado de politización y porque gran parte de sus trabajadores militaban en diversos grupos políticos. Las organizaciones políticas que más destacaban eran el FOCEP, UDP, APRA, entre otros. En esos años también apareció el UNIR (Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria) a través de algunos profesores de las escuelas de los campamentos mineros. En un primer momento, el UNIR tenía como únicos miembros a los profesores del lugar, pero luego fue creciendo con la incorporación de trabajadores mineros. Según manifiestan ex trabajadores mineros de la zona, los primeros militantes del PCP-SL habrían llegado con estos profesores.

Mientras que la presencia del PCP-SL fue relativamente tardía en los centros mineros de Cerro de Pasco y Junín, para los últimos meses de 1980, el PCP-SL ya había tomado contacto con algunos asentamientos mineros de Huancavelica, sobre todo con los que se ubicaban cerca del departamento de Ayacucho, como Cobriza, Julcani y La Mejorada (ubicados en Churcampa y Angaraes, respectivamente).

Las relaciones entre los propietarios de las minas huancavelicanas y los obreros, igualmente, siempre fueron conflictivas. Los constantes paros y huelgas que protagonizaban los mineros en 1982, habían exacerbado los ánimos de algunos propietarios de las empresas, quienes enterados de la violencia y destrucción que provocaba el PCP-SL en las comunidades campesinas, constantemente trasladaban contingentes militares para brindar seguridad a los campamentos mineros.⁶

Militares y empresarios también buscaban intimidar a los dirigentes y desarticular los sindicatos:

Entonces poco a poco aparecieron, inclusive era cuando ni siquiera había llegado con fuerza Sendero, pero el mismo ejército se vestían de senderistas y entraban porque pedían al superintendente ó pedían al relacionador que intervenga, o sea entonces manejaban a su antojo, es una violencia que nosotros en oportunidades anteriores no hemos podido decir... inclusive algunas dinamitas han salido de la mina de la propia mano de los empresarios para que con eso traten de asustar a la gente; entonces poco a poco avanza y Sendero hace lo mismo y comienza a entrar, pero no tan violento como los del ejército.⁷

⁶ En el departamento de Huancavelica, se instalaron las bases militares en Castrovirreyna, Santa Inés y Churcampa, en 1982, 1982 y 1983 respectivamente.

⁷ Entrevista realizada por la CVR a Sixto Vilcas, ex dirigente minero de Julcani.

Desde los primeros años de la década del 80, las minas de Huancavelica representaban para el PCP-SL el centro de abastecimiento de material explosivo con los cuales realizaban sus atentados en las comunidades del noroeste de Ayacucho y del sureste de Huancavelica. En estos años, los centros mineros aún no eran el blanco de los atentados: «A las empresas mineras no atacaron al principio, sino que entraban a quitarles sobre todo las dinamitas y cometer sus actos terroristas en otros lugares».⁸

Para 1983, el PCP-SL habría logrado tener algunos simpatizantes dentro de los sindicatos, los mismos que por su trabajo en el interior de las minas sustraían explosivos para entregársela a los senderistas. En estos años, el PCP-SL también ingresaba casi sin violencia a las reuniones sindicales, arengaban a todos para que se unan a la guerra popular y después de distribuir volantes y realizar pintas se retiraban; pero los obreros siempre se negaron a formar parte de las huestes senderistas

A partir de 1984, los centros mineros de Huancavelica empiezan a vivir situaciones mucho más violentas. El PCP-SL incrementa el terror y la violencia en las comunidades campesinas aledañas a los centros mineros, provocando una gran convulsión en toda la zona por los constantes enfrentamientos entre militares y senderistas.

A media noche del 1 de enero de 1984, el PCP-SL ataca el centro minero de Cobriza con gente reclutada en las alturas de la comunidad Ayacuchana de Ayahuanco (que limita con la provincia de Churcampá, Huancavelica). En ese momento, la policía particular de la empresa, el personal administrativo y los obreros se refugiaron dentro de los socavones. Los senderistas aprovechan la situación y saquean los almacenes de la mina y todas las tiendas comerciales del campamento. A las pocas horas de la incursión senderista, llegan los militares y van en persecución de los sediciosos, pero no logran darles alcance. Aduciendo que ser una acción para proteger a los trabajadores mineros, los senderistas destruyen el puente metálico que unía Cobriza con el distrito de Ayahuanco. Días después de la destrucción del puente, el superintendente del centro minero John Broadle reclama airadamente a los militares por el hecho y en respuesta éstos lo golpean salvajemente. Después de estos sucesos, a fines de 1983 se instala una base militar en esta unidad de producción de Centromín Perú.

En noviembre de 1985, la mina de Caudalosa Grande (provincia de Castrovirreyna) es atacada por los senderistas quienes dinamitan parte de sus instalaciones, golpean y amenazan a los superintendentes para que éstos les entreguen dinamita y guías explosivas. A partir de ese momento los superintendentes eran inestables en las minas provocando el retraso en los pagos a los trabajadores.

⁸ Idem.

En esos años, otra de las empresas que fue atacada violentamente por los senderistas es San Genaro, también ubicada en Castrovirreyna. Ante estos atentados, las empresas convocan el apoyo de los militares para enfrentar al PCP-SL pero, al mismo tiempo, desarrollan acciones que van contra los sindicatos: comienzan a acusar de senderistas a algunos dirigentes y despidiendo a algunos sin ningún beneficio laboral. Las relaciones entre la empresa y los trabajadores se complican aún más con estos hechos:

La guerra sucia estaba implementada por el Estado, puesto que tenían mercenarios adiestrados para golpear y para calumniar. De noche ingresaban a los campamentos, a las casas de los dirigentes y los sacaban a plena luz del día poniéndole dinamita, poniéndole afiches de los subversivos y calumniándoles de esa manera; eso sabemos perfectamente porque nosotros somos dirigentes y hemos sido testigos (ex trabajador minero de Caudalosa Grande)

En octubre de 1986, un grupo senderista incursiona a la unidad minera Santa Rosa (Cobrizo) y saquea todo su material explosivo (dinamita, fulminantes y guías). Este hecho provoca el cierre definitivo de la unidad minera, dejando sin empleo a cientos de obreros de la zona. Después de este saqueo, los atentados dinamiteros se incrementan por todos los poblados de la zona.

En 1988, el PCP-SL nuevamente incursiona al centro minero de San Genaro (Castrovirreyna) y asesinan cruelmente al jefe de relaciones industriales y a un contratista de apellido Ponce; a éste último porque no tenía un «buen trato» con los trabajadores. Antes de retirarse, los sediciosos dinamitan torres de energía eléctrica y gran parte de las instalaciones. Ante estos hechos, la empresa minera Buenaventura decide cerrar temporalmente esta unidad.

Dinamitaron campamentos mineros como el caso de San Genaro, asesinaron al jefe de relaciones industriales, propiedad de Buenaventura, al contratista minero que explotaba... que trataba mal a los trabajadores, como el caso de Ponce, lo ajusticiaron entre comillas... es lo que yo recuerdo cosas así concretas. (Ex trabajador minero)

Similares acciones ocurrieron en la mina Caudalosa Grande (Castrovirreyna), y al igual que Buenaventura, los propietarios también cerraron las minas y dejaron sin empleo y sin beneficios a todos los trabajadores. Según señalan los ex trabajadores, la mayor presencia senderista se registró en el centro minero de San Genaro, este fue un factor más para que los propietarios cierren la mina. Después de estos atentados, los militares detuvieron a ocho dirigentes de San Genaro acusándolos de terroristas, quienes fueron encarcelados injustamente durante ocho meses; así lo recuerda un ex dirigente minero: «Por ahí entró sendero, inclusive han estado ocho compañeros en la cárcel acusados de senderistas, se han solidarizado todos los mineros del departamento y a nivel nacional e internacional y salieron después de ocho meses...» (Ex trabajador minero).

Luego de éstos hechos, en algunos centros mineros aparecieron personas extrañas que haciéndose pasar de senderistas cometían robos a las tiendas comerciales del lugar y el domicilio de los trabajadores mineros.

2.6.3. La centralidad de la región centro para el PCP-SL

El Comité Regional del Centro (CRC) integrado por los departamentos de Junín y Pasco, estuvo a cargo de Oscar Ramírez Duran, «Feliciano» entre 1981 y 1985. Con el CRC el PCP-SL abre por primera vez una zona de entrenamiento bélico en la quebrada de Chaupihuaranga, preparando a cuadros, militantes y simpatizantes para la lucha armada. Es en este lugar donde se ajusticia por primera vez en la región, a alcaldes, dirigentes comunales y policías.

De manera simultánea, cuando el PCP-SL inicia su «guerra popular» con la quema de los padrones y ánforas electorales en la comunidad de Chuschi, en el departamento de Ayacucho, ataca con petardos de dinamita el Concejo Provincial y el CE No. 34004 de la ciudad de Cerro de Pasco el 17 de Mayo de 1980. Esta primera incursión estuvo dirigida por «Feliciano» y «Johan». Con estos atentados, el PCP-SL hace su surgimiento en este departamento, pero es recién en los últimos meses de 1983 cuando aparece con fuerza en el escenario minero.

La violencia subversiva se extiende a los centros mineros en la década del 80, se inserta en algunos sindicatos y logra su control, a partir del cual, intentará de manera sangrienta cooptar a los demás sindicatos del sector. Queremos resaltar la resistencia de los trabajadores que supieron batallar por preservar su independencia gremial, demandas y aspiraciones, así también como de los funcionarios y empresarios mineros que hicieron frente de manera consecuente a las huestes senderistas.

A la llegada del PCP-SL en la región centro, mientras el APRA tenía mayor presencia entre los empleados, en los diversos sindicatos de obreros convergían distintos grupos políticos como Patria Roja, Bandera Roja, Pukallactas⁹, Partido Unificado Mariateguista, Izquierda Unida e Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria. Si bien estas agrupaciones mantenían diferencias ideológicas y políticas, los unía un propósito común: el liderazgo de la masa obrera con el fin de subordinarla a su propio proyecto político.

2.6.4. El PCP-SL en las minas de Cerro de Pasco

El PCP-SL reaparece en 1983 en la zona a través de algunos profesores de la Universidad Daniel Alcides Carrión dirigidos por «Johan», quien habría regresado de Huanuco junto a «Piter» para realizar una serie de actos sanguinarios. Desde ese momento, Huánuco se convierte en el

⁹ Puka Llacta que en quechua significa Patria Roja, era en realidad una escisión de la agrupación Patria Roja.

departamento que abastece de cuadros senderistas a Cerro de Pasco. Durante 1983, 1984 e inicios de 1985, los senderistas captan a algunos dirigentes mineros y realizan las primeras pintas llamando a lucha armada, haciendo vivas al presidente «Gonzalo». Para ese período el Frente Obrero Campesino y Estudiantil del Perú (FOCEP) había logrado ser el grupo más organizado y el que tenía mayor liderazgo entre los dirigentes sindicalistas, y donde además se formaban líderes como Seferino Requis y Teófilo Rímac Capcha, quienes más adelante fueron asesinados por el PCP-SL y los militares respectivamente.

En abril de 1985 es asesinado de un balazo en la cabeza el dirigente minero Demetrio Martínez, quien había propuesto en varias oportunidades a la empresa que otorgue una bonificación especial y los beneficios médicos que cubran especialmente, las consecuencias de los reactivos químicos que utilizan los obreros en la extracción de minerales. Los trabajadores atribuyeron el asesinato a la empresa minera Centromín Perú, sin embargo, no se ha podido comprobar quien finalmente fue el autor de este hecho. Sabemos además que para azuzar las contradicciones, el PCP-SL cometía actos que incidían en la polarización de los conflictos.

Un ex trabajador recuerda el hecho:

El 85 fue el año más difícil para mi, porque en primera instancia, el 25 de Abril lo asesinan a mi primo Demetrio. El también por entonces era dirigente sindical, pero él estaba luchando por el logro de un rubro muy importante. Nosotros en las minas sufrimos los efectos de toxicidad de los gases de los productos químicos. Entonces se formula para exigir a la empresa que de alguna forma nos considere una remuneración y ya cuando se encontraba en la parte final lo asesinan a mi primo. Yo más supongo que también ha sido de un comando de la misma empresa. Incluso han existido comandos de aniquilamiento internamente que han matado a dirigentes. (Ex trabajador de Centromín Perú en Cerro de Pasco)

Un grupo de senderistas ingresó a la planta concentradora de una de las unidades de la empresa y dinamitaron los molinos. Un testigo de la destrucción, manifiesta:

Yo estaba trabajando en horas de la noche, me faltaba una hora nomás para salir cuando ingresaron un grupo de terroristas bien armados a la concentradora. Me agarraron de sorpresa, me tiraron al suelo y me dijeron: ¡Quiero que pares todos estos molinos! En realidad yo me encontré encañonado en el piso. Incluso había varones y mujeres y yo pude reconocer a uno de ellos. Era un servidor de la Universidad (UNDAC). Luego me dieron un golpe en la cabeza y vi que pasaban costales de anfo, de dinamita, y lo ubicaban en la base de los molinos y así desencadenó una explosión en cadena. (Trabajador minero, testigo del atentado dinamitero senderista)

Después de esa acción, los senderistas intentaron consolidar su trabajo en los sindicatos, presionando a todos los dirigentes a que se unan a las filas de su partido. Los comunicados anónimos sobre la lucha armada y el «presidente Gonzalo» aparecían constantemente en los comedores y los vestuarios de los socavones.

En 1986, nuevamente el PCP-SL hace sentir su presencia. Hasta ese momento, los blancos de sus atentados habían sido las instalaciones de las empresas donde la más afectada había sido

Vinchos, donde el PCP-SL logró ingresar a las oficinas de la empresa y asesinar a balazos al gerente, subgerente y superintendente de mina, luego dinamitaron la planta concentradora causando irreparables daños materiales.¹⁰ Este hecho provocó el cierre de esta empresa. De acuerdo a la información recogida, «Hernán» y «Nelly», comandaron el atentado a la empresa Vinchos, los mismos que también arremetieron en las comunidades de Pasco. Después de los atentados a la unidad minera de Vinchos, con el propósito de evitar los atentados contra sus instalaciones, la empresa minera Centromín Perú, gestionó la instalación de una base militar dentro de su jurisdicción en 1983.

2.6.5. Nuevos actores en el escenario

Después del atentado a la empresa minera Vinchos, los senderistas ingresaban libremente a los sindicatos y asambleas de los trabajadores. El PCP-SL había logrado captar a algunos dirigentes, en detrimento del FOCEP y de las demás fracciones de Izquierda. Adicionalmente, habían logrado contactarse con algunos obreros que trabajaban en el interior de las minas, a quienes les ofrecían soles y dólares a cambio de material explosivo. Luego de un tiempo, frente a demostraciones de resistencia de los trabajadores mineros, el PCP-SL empieza a combatir a los dirigentes que no asimilaban su discurso, muchas veces con la muerte misma. Mientras esto sucedía, la empresa minera buscó el dialogo con los dirigentes para superar el panorama violento y evitar la confrontación con los trabajadores ante la creciente presencia senderista.

A mediados de 1986, la situación sindical se complica. Algunos dirigentes captados por el PCP-SL en el 83, reaparecen en el 86, como candidatos a la dirigencia sindical pero con un estilo político distinto y con un nuevo discurso.¹¹ Los obreros en general y los otros dirigentes no aceptan la inclusión de éstos «candidatos» a la dirigencia sindical. Además, los militares empezaron a asistir a las asambleas y seguir de «cerca» a los dirigentes.

El 19 de marzo de 1986, los obreros realizaron una marcha pidiendo la aprobación del pliego de reclamos. Uno de los delegados, Tomás Miranda que se mostraba reacio ante la doctrina senderista lideraba la marcha junto a otros dirigentes. Los manifestantes eran custodiados estrictamente por un centenar de militares que trataban de impedir la marcha, cuando en esos momentos entre la muchedumbre se escucha un estruendoso disparo de bala que impacta en la cabeza del dirigente. En ese momento, los manifestantes y los militares reaccionan y logran capturar a Florentino Cecones, autor del disparo, quien luego de su detención declaró abiertamente ser militante del PCP-SL. Luego del hecho los militares detienen a decenas de trabajadores que participaban en la marcha, a quienes los trasladaron hasta la base militar de Carmen Chico. Según

¹⁰ Vinchos, era una empresa minera particular que estaba ubicada en la provincia de Pasco.

¹¹ Habían incluido en sus arengas una fusión de la propuesta senderista y los reclamos del sector minero.

manifiestan los ex trabajadores, una vez fallecido el dirigente Miranda, los demás dirigentes y los obreros se enteraron que éste llevaba información confidencial de los obreros para la empresa¹².

A partir de entonces, los militares incrementan sus patrullajes por todos los campamentos mineros. Los militares solían ingresar violentamente a los domicilios de los trabajadores buscando material subversivo y detener a presuntos senderistas para ser trasladados a las bases de Quillacocha y Carmen Chico.¹³ Los trabajadores empiezan a ser presionados tanto por los senderistas como por los militares.

El 23 de junio de 1986, los militares llegan hasta la casa de Teófilo Rímac Capcha, dirigente del FOCEP, a quien detienen y junto a otros lo trasladan hasta la base militar de Carmen Chico. Fue el único que nunca salió de la misma como lo relata el siguiente testimonio:

El 23 de junio, ingresan los militares a mi casa y agarran a mi esposo, se lo llevaron hasta la base militar de Carmen Chico, nunca más volví a verlo... desde aquel entonces empecé a pedir ayuda para saber el paradero de mi esposo, porque temía por su vida...el 27 de junio yo ya tenía noticias de que mi esposo había sido asesinado,... el Secretario General de Centromín me mandó llamar a su casa y me dijo: «a su esposo lo han matado y tiene que buscar justicia. A él lo han torturado duramente, lo han puesto en un costal y han jugado fútbol con él, tenía las mandíbulas destrozadas, las costillas rotas, le han introducido el FAL por la boca, el mango de la escoba por el recto, y él no ha podido soportar todo eso; sin embargo, antes de fallecer me ha dejado un encargo para usted, él me ha dicho: “dile a Doris, mi esposa, que cuide a mis hijos, que haga de Iván un gran hombre, a mi me matan sin culpa alguna”». Después que desapareció Teófilo, durante dos años dormía sentada con mis hijos...fui detenida hasta en tres oportunidades, me golpearon, me amenazaron para que callara la situación de mi esposo, pero yo tenía que buscar a mi esposo.¹⁴

La familia de la víctima hizo todos los esfuerzos por ubicar el cuerpo del dirigente, pero nunca vieron sus restos.

La situación de violencia se agudizó aún más para 1987. Los senderistas veían fracasar sus planes de «masificar» la lucha armada en el sector minero e incrementan sus acciones de represión contra aquellos que trataban de desligarse del PCP-SL. El dirigente sindical Carlos Melo, en un inicio fue convencido por el discurso senderista y pasó a ser miembro de este partido, pero luego, por la violencia que imponía el PCP-SL cambio de parecer y decidió dejarlo. A la semana siguiente apareció muerto cerca de su domicilio, y sobre su cadáver encontraron un cartel que decía: «Así mueren los traicioneros». Después del hecho, los militares intensificaron sus patrullajes por todos los campamentos; todos los sospechosos fueron detenidos y trasladados hasta la base militar de Carmen Chico.

En 1988, el PCP-SL logra debilitar los sindicatos amenazando a los dirigentes. En uno de los enfrentamientos entre un grupo senderista y los militares, muere «Johan». En 1988 también se lleva a cabo la huelga nacional minera que termina con la radicalización de los sindicatos que

¹² Entrevista a un ex trabajador minero.

¹³ Las bases militares de Carmen Chico y Quillacocha, en la provincia de Pasco, se instalaron en 1984 y 1986 respectivamente.

¹⁴ «Testimonios De Dolor y Coraje, fotografías de Nelly Plaza». 2002.

exigen un pliego único a nivel nacional exigiendo, entre otras demandas, una homologación de salarios para los mineros en general. En diciembre del mismo año, en el poblado de Huariaca, el PCP-SL destruye una planta eléctrica que abastecía a los asientos mineros de Milpo, Atacocha y Chicrín, provocando la paralización de las labores de miles de trabajadores durante dos semanas.

En las vísperas de una nueva huelga nacional, en horas de la noche del 13 de febrero de 1989, el dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y la promotora social Consuelo García Filomenas son asesinados a balazos por un grupo paramilitar, por las inmediaciones del local de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros en Lima. La muerte de este dirigente minero provoca una gran movilización nacional. En la región central, La Oroya y todas las unidades de producción de Centromín Perú, al igual que en las otras empresas mineras de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco, acatan un paro de 24 horas convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

El 02 de marzo de 1989, el PCP-SL asesina a balazos a uno de los más representativos dirigentes sindicalistas de Cerro de Pasco: Seferino Requis:

Los mineros no asimilaban los principios que ellos querían, porque en realidad había limitaciones o sea no conocían en su real dimensión lo que era Sendero Luminoso, además hablar de muertes, de desastres y de situaciones de esa naturaleza a uno lo ponían en una situación más crítica. Siendo Pasco una ciudad minera por excelencia, el asunto de ellos era de todas maneras tomar posesión y dirigir dentro del sindicato. Esa es la idea del objetivo de Sendero Luminoso, cosa que ellos fracasaron porque ellos consideraban que los mineros eran unos brutos, «no asimilan lo que nosotros queremos», eso fue la idea de ellos, y al final de cuentas no logró. Entonces lo que buscó simplemente es reaccionar como una revancha...eliminando a personas. Ex trabajador minero

Seferino Requis, era secretario general del sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de Cerro de Pasco, quien había convocado a una asamblea extraordinaria para informar el plan de trabajo después de su viaje a Lima. A los pocos minutos de iniciada la asamblea, ante la mirada perpleja de los asambleístas, ingresó un grupo armado de ocho senderistas, arengando la guerra popular y haciendo vivas al «presidente Gonzalo». Estos llamaron a los dirigentes Seferino Requis y Hugo Poves, éste último aún no llegaba a la asamblea, entonces al único que asesinan es a Seferino Requis, aduciendo que «había traficado con los intereses de la clase obrera y que de acuerdo a los principios del Partido Comunista tenía que ser aniquilado». Lo pusieron en el piso boca abajo y lo asesinaron disparándole en la cabeza. Los asistentes nada pudieron hacer para evitar el asesinato, pues los senderistas se habían ubicado estratégicamente en el local y lograron «apuntar» a todos, con sus armas de fuego. Un testigo del hecho cuenta:

Llegaron con chalinas y gorras...quedamos casi hipnotizado por ese accionar y lo peor fue cuando llamaron... y uno de ellos no estuvo... y ellos decían que había actuado en contra de la clase trabajadora...entonces lo tenían pisado en el piso y le dispararon. (Ex trabajador minero)

El 07 de abril de 1989, el PCP-SL dinamita la locomotora Nro. 32 de la empresa Centromín Perú, provocando la paralización del traslado de mineral de la unidad de Cerro de Pasco a la fundición de la Oroya.

Después del asesinato de Seferino Requis, los militares realizan exhaustivos operativos por toda la zona, logran matar al camarada «Hernán», quien murió baleado cuando intentaba escapar de los militares y capturan a la camarada «Nelly». Ambos contaban con el apoyo de algunos comerciantes y se refugiaban en los pueblos aledaños de Chinchán, Huariaca y Pucuruguay. En la redada también caen personas inocentes que estuvieron varios días detenidos en las bases de Quillacocha y Carmen Chico. Con estas capturas, el PCP-SL perdió notoriamente poder en el sector minero. Así mismo, después de la muerte del dirigente Requis, disminuye la participación de los obreros en los sindicatos. Casi nadie aceptaba ser dirigente por el temor a las represalias del PCP-SL. Es así como los sindicatos llegan debilitados para los 90.

La gente ya no quería ir al sindicato, «para que voy a ir al sindicato si va haber muerte allí, si Sendero va a matar, ya no voy al sindicato», decía la gente; el sindicato es el único lugar donde uno se reúne para informar todos los problemas de los trabajadores y la gente ya no quería ir. (Entrevista al ex trabajador minero)

En 1990 es elegido como secretario general del sindicato de trabajadores mineros, el obrero Juan Santiago y en la noche del mismo día, un grupo senderista intenta asesinarlo en su domicilio. El dirigente logra salvarse del atentado. A partir de ese momento, al saber que su vida estaba amenazada, decide hacerle frente al PCP-SL y organiza la «guardia obrera», que estaba conformado por 60 obreros que laboraban en su misma sección y que trabaja independientemente de los militares y la empresa. En poco tiempo logran detectar la presencia de senderistas en los campamentos más alejados y bajo el mando de Juan Santiago, planifican una acción que llevaría a la captura de diez presuntos senderistas:

Esa noche yo ya tenía toda mi gente y más o menos eran unos veinte. Estábamos en toque de queda, pero el toque de queda era a partir de las once de la noche, faltaba dos horas, entonces le entregamos a los militares, eran bastantes pero se fugaron. Había gente campesina que no son de acá, no sé de dónde, pero seguramente vivían en pueblos jóvenes, gente campesina, gente pobre... algunos tenían armas, tenían dinamita, tenían afiches, tenían sus botas.

Pero los subversivos detenidos en la base, en venganza señalan a los militares que Juan Santiago también era miembro del PCP-SL, por lo que éstos lo detienen y lo llevan a la base de Carmen Chico, donde lo torturan duramente. Al no encontrar pruebas en su contra lo liberaron a las dos semanas.

Este hecho representó un duro golpe para el PCP-SL, los pocos subversivos que lograron escapar se replegaron en las comunidades de la zona. Juan Santiago recuerda ese momento:

Sendero Luminoso tiene fuerte presencia hasta el 90 más o menos, hasta que nosotros lo desarticulamos, lo expulsamos de la ciudad y de nuestro centro de trabajo. Sí, hasta esa fecha claro que ha tenido presencia, pero no como años anteriores,... nosotros desactivamos todo Sendero, todos los nidos de Sendero... No podían hacer nada porque detrás de mí estaban más de 60 personas; entonces lo único es que me han tirado dedo todos los que han caído presos, por eso hasta último estuve requisitoriado.¹⁵

Hacia 1990 los rezagos senderistas que aún permanecían en los campamentos mineros, se replegaron hacia las comunidades de la zona, donde algunos de sus miembros fueron capturados y asesinados en enfrentamientos con los militares y más adelante desaparecieron.

Para los primeros años de la década del 90, los sindicatos mineros ya no concentraban tantos trabajadores obreros, debido al proceso de privatizaciones y el cambio de leyes laborales en el sector minero implementados por el gobierno de Alberto Fujimori. Las privatizaciones generaron un proceso laboral penoso que implicó despidos masivos. Los nuevos propietarios de las empresas despidieron primero a los sindicalistas y ex sindicalistas, provocando la desaparición casi absoluta de los sindicatos:

Como ya había cambiado la política de gobierno, había cambiado la política laboral y, justamente, era pues privatizar todas las empresas del estado y para privatizar las empresas del estado tenía que disminuir personal y básicamente personal que trabajaba en los servicios y personal que ya habían sido dirigentes sindicales ya no deberían quedarse ya, porque la empresa privatizada va necesitar que han sido trabajadores sin conducta de dirigente sindical.¹⁶

Actualmente la población de Cerro de Pasco enfrenta las consecuencias que les dejó el proceso de violencia política a niveles familiar, social y económico. Y con la experiencia vivida sólo desean que jamás vuelva a ocurrir:

Cerro de Pasco ha quedado en la penumbra, es un pueblo apático e indiferente, un pueblo que no sabe sus derechos, que vive su vida, que defiende sus asuntos personales y no les interesa, digamos, el aspecto social, el aspecto comunitario... políticamente hemos decaído por ambos lados, por el armamentismo creado por Fujimori y esta de los Senderistas... el miedo, el temor... los militares aparte de los policías también hacían lo suyo, entraban en el terror. (Entrevista a ex trabajador minero)

2.6.6. Violencia política en los centros mineros de Junín: la doble lucha de los mineros.¹⁷ El sindicato metalúrgico de La Oroya

La ciudad de La Oroya es el centro metalúrgico más importante del centro del país desde la construcción de la fundición en 1922 por la compañía Cerro de Pasco Corporation.¹⁸ En 1974, la

¹⁵ Idem.

¹⁶ Idem.

¹⁷ El presente informe ha sido elaborado sobre la base de veinte entrevistas a dirigentes, ex dirigentes y asesores de los trabajadores de este sector en Cerro de Pasco, La Oroya, Morococha, Huancavelica, Huancayo y Lima. La información de estas entrevistas fue completada con testimonios tomados en el ámbito de los centros mineros y también con información bibliográfica.

¹⁸ La Oroya es la capital de la provincia de Yauli, en el departamento de Junín.

empresa Cerro de Pasco Corporation pasó a manos del Estado convirtiéndose en Centromín Perú y desde ese momento La Oroya se convirtió en el centro de operaciones de la nueva empresa estatal.

Cabe señalar que Centromin Perú fue la única gran empresa productora de zinc y plomo por excelencia. Del mismo modo, fue el primer productor de plata en aquellos años. De otro lado, sabemos que la importancia de Centromin Perú por el lado laboral, radicaba en la alta concentración de trabajadores obreros mineros, cuya Federación de trabajadores agrupaba en 1983 a 12,500 obreros.¹⁹

El PCP-SL buscó rápidamente vincularse a los sindicatos y captar a los principales dirigentes. Siempre se caracterizaba por sus intentos de realizar trabajos de base en los centros mineros teniendo como referencia los dirigentes sindicalistas. Pero a diferencia de los centros mineros de Cerro de Pasco y Huancavelica, donde realizó un trabajo político más afianzado, en La Oroya no tuvo mucha presencia debido a que en 1983 se instaló una base militar en Marcavalle.

Según manifiestan algunos ex trabajadores, en las asambleas era difícil identificar a todos los que ingresaban, sin embargo, se sabía que a estas reuniones asistían tanto los «comandos laborales» de la empresa, que mantenían informados a los empresarios mineros de los acuerdos a los que arribaban los trabajadores, como también militantes del PCP-SL. EL PCP-SL nunca pudo realizar un trabajo efectivo en el sindicato metalúrgico porque muchas veces los militares y la policía estaban presentes en éstas reuniones.

En un primer momento, un grupo de trabajadores percibió al PCP- SL como un partido que ayudaría a efectivizar sus reclamos ante la empresa, como se deducía del discurso inicial del PCP-SL que propugnaba luchar por los más necesitados. En los trabajadores obreros primaban las demandas laborales sobre la idea de la guerra popular del PCP-SL. Entonces, como en muchos otros lugares, en su afán por imponer su proyecto, el PCP-SL comenzó a presionar y desarrollar violencia, dinamitando una locomotora de la empresa Centromín Perú.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) presentó en 1987 el pliego nacional en el cual solicitaban mejorar las condiciones de trabajo, los salarios y otros beneficios laborales ante la Sociedad Nacional de Minería. Esta propuesta no fue aceptada. En consecuencia, los trabajadores realizan una huelga nacional en 1988, en la que participan los sindicatos de todas las empresas mineras; un año después, por circunstancias similares, se produjo la segunda Huelga Nacional de trabajadores mineros:

El 18 de octubre de 1988, el ex dirigente y militante del Partido Comunista del Perú Fidencio Coronel fue asesinado cerca al domicilio de su hermana.²⁰ Un día antes, en la asamblea del sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, se opuso a que su sindicato acate la segunda huelga nacional y, en efecto, los trabajadores metalúrgicos no acataron el paro y laboraron normalmente el día 17. Fidencio Coronel, dentro del sindicato había entrado en confrontación con militantes del

¹⁹ Denis Sulmont y Alfredo Silva (1983). La Minería y los mineros en el Perú. Lima, Asociación Trabajo y Cultura.

²⁰ Coronel fue dirigente sindical en 1978 y al momento de su asesinato era trabajador y militante del PCP.

Partido Unificado Mariateguista (PUM), por el hecho de que éstos últimos exigían que el sindicato acate la huelga nacional. Algunos atribuyeron el asesinato al PCP-SL, otros al PUM, y otros al SIN, pero al final nunca se confirmó quiénes eran los autores del crimen:

Acá se tiene que analizar tres cosas, una es Sendero, otro es el soplón y otra es el SIN, porque el mismo servicio de inteligencia acá tiene sus infiltrados, en toda asamblea y eso siempre se hizo, entonces no se puede deducir si lo hizo Sendero o lo hizo la empresa o lo hizo el SIN, porque no se ha llegado a descubrir, no se sabe a ciencia cierta quién lo elimino.²¹

En diciembre de 1988, los senderistas dinamitan tres torres del sistema de cable carril que trasladaba minerales de San Cristóbal hasta Marh Túnel, ambas unidades estaban ubicadas a unos 12 kilómetros de La Oroya y pertenecían a Centromín Perú. Ese mismo mes destruyeron además tres locomotoras eléctricas Diesel que transportaban mineral de las unidades de Cerro de Pasco a La Oroya. Para entonces, PCP-SL no sólo actuaba destruyendo las instalaciones de la empresa, también inició la convocatoria de «paros armados», al cual acataban algunos sindicatos mineros por temor.

Cuando los trabajadores estaban próximos a la realización de la tercera huelga nacional, el 13 de febrero de 1989, en Lima, fueron asesinados el dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y la promotora social Consuelo García. A continuación, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) convocó a un paro nacional de 24 horas, al cual acataron todas las empresas mineras de la región.

El 08 de julio de 1989, los senderistas dinamitan una subestación eléctrica, cerca al conjunto habitacional Santa Rosa. Como consecuencia de este atentado se paraliza el funcionamiento de las refinerías de cobre y plomo, así como el fluido eléctrico local. Más adelante, el día 22, dinamitan tres torres eléctricas y durante los últimos meses del mismo año, las amenazas de muerte contra los dirigentes complementaban el clima de violencia y terror que provocaban los atentados dinamiteros; las llamadas telefónicas y las cartas anónimas eran parte de la estrategia senderista para intimidar a los dirigentes.

En noviembre de 1991, una vez más se reinician los problemas entre Centromín Perú y los trabajadores; la empresa minera empezó a retrasar los pagos de los trabajadores sin darles explicación alguna, obligándolos a iniciar una huelga indefinida; los trabajadores entonces deciden realizar una manifestación por las principales calles de la ciudad. Es en estas circunstancias cuando los militares de la base de Marcavalle interceptan a los manifestantes y los detienen a todos los dirigentes y delegados que dirigían la manifestación acusándolos de terroristas. Entre los detenidos se encontraba el dirigente Emiliano Yurivilca, quien junto a otros dirigentes fue trasladado, primero a la base militar de Marcavalle y luego, junto a otro grupo reducido, hasta el penal de Huamancaca,

²¹ Entrevista al ex trabajador de Centromín Perú, Rodolfo Basilio, realizado por la CVR.

de donde logran salir todos menos él. Los familiares de Emiliano Yurivilca hicieron todos los esfuerzos por ubicarlo, pero hasta hoy se desconoce su paradero:

Dicen que acá los del sindicato estaban haciendo una manifestación, entonces, dice, vinieron los soldados y empezaron a llevar a los carros, a unos camiones los subieron... y de ahí, dice, le llevaron a Marcavalle y en Marcavalle los amarraron las manos y al amarrarles las manos boca abajo, les echaron y de ellos, dice, que llevaron de acá para Huamancaca... eran algo de ocho a diez personas... y ahí, dice, los metieron a un depósito, así un cuarto oscuro, entonces de ahí, dice, salían por turno....y a los que salían libres, dice, les decían «salga de acá y te callas la boca y si tu hablas algo te va a suceder», porque a los trabajadores les estaban golpeando duro... pero mi papá nunca salió.²²

A partir de ese año, la situación de los dirigentes mineros se complicó aún más. La Policía Nacional y los militares intensificaron las detenciones a los dirigentes sindicalistas: «El servicio de inteligencia se infiltraba dentro del movimiento sindical, era una realidad, gente preparada que se infiltraba al movimiento y participaba en las asambleas y el informe le daba a la empresa el servicio de inteligencia».²³

Las acciones de lucha contrasubversiva impuesta por el Estado, contrarrestó el accionar del PCP-SL, pero también debilitó a los sindicatos, porque estas acciones también estaban dirigidas contra los partidos de izquierda que tenían presencia en los sindicatos y muchas veces los dirigentes eran vinculados directamente con el PCP-SL y detenidos arbitrariamente.

En 1992, se empezaron a debilitar los sindicatos. Los dirigentes eran injustamente acusados de terroristas pese a que el PCP-SL ya casi no tenía presencia. En este año se produjo el asesinato del dirigente Donato Bernal, quien apareció muerto por las inmediaciones del barrio Club Peruano con un balazo en la cabeza. Nuevamente la población quedó desconcertada por que nunca se supo quiénes eran los autores del crimen.

A partir de 1993, se inició el proceso de privatización de la empresa Centromín Perú y se generó el despido masivo de miles de trabajadores, lo que redundó en una mayor impotencia de los sindicatos.

2.6.7. El PCP-SL en el asiento minero Morococha²⁴

En los sindicatos de Morococha predominaba el grupo «Pukallacta», una facción radical de Patria Roja con el que aparecería Sendero Luminoso en 1987. No se descarta la posibilidad, que algunos militantes senderistas que venían «trabajando» en La Oroya, hayan llegado hasta Morococha e influenciado a los pukallactas y otras fracciones de izquierda para que se unan a los «alzados en

²² Entrevista realizada por la CVR a Ana Luz Yurivilca Chávez, hija de Emiliano Yurivilca, ex dirigente sindical, desaparecido por los militares de Marcavalle en Noviembre de 1991.

²³ Ex trabajador Juan Santiago, entrevista realizada por la CVR.

²⁴ Morococha es un distrito de la provincia de Yauli, ubicado en la carretera central a unos 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad de La Oroya. En este distrito se ubicaban, además de una unidad de Centromín Perú, otras empresas mineras como Austria Duvaz, Santa Rita, Centraminas, y Alpamina (Minera Yauli).

armas».²⁵ En poco tiempo de trabajo organizativo, los militantes del PCP-SL llenaron con pintas de la hoz y el martillo y vivas al presidente Gonzalo todos los lugares visibles de la población. En los primeros meses de 1988, los senderistas se caracterizaban por su trato sutil con las personas a las que querían captar:

Se acercaban amablemente y de frente te pedían que seas partidario de ellos, de su partido, y no eran violentos, no entraban así con armas nada, si no como cualquier persona desconocida... entonces ellos se acercaban, me acuerdo que una vez vinieron a la tienda que mi mamá atendía, pero trataban de convencer a mi papá de forma tranquila, así.²⁶

El 16 de abril del mismo año, el PCP-SL inició sus «ajusticiamientos». La primera víctima fue Alejandro Patiño Flores, militante aprista, regidor del municipio y ex dirigente del sindicato de trabajadores mineros de Morococha. Al igual que Fidencio Coronel en la Oroya, Patiño también se había opuesto a la realización de la huelga nacional minera.

El 21 de julio de 1988, se realizó un paro nacional en el que participó la gran mayoría de los trabajadores y bloquearon la carretera central. Hasta el lugar se habían trasladado diversos vehículos militares y fuerzas especiales de la Policía Nacional con el objetivo de evitar el caos y controlar a los manifestantes. En esas circunstancias se produce un enfrentamiento entre efectivos de la Policía Nacional y un reducido grupo de madres de familia que se habían sumado al paro. El enfrentamiento llegó a mayores cuando un exaltado efectivo policial disparó a quemarropa contra la señora Francisca Quispe.²⁷ Después del asesinato, los policías acusaron de subversivos a algunos manifestantes, a quienes, junto al cadáver, los trasladaron hasta la base militar de Marcavalle.

El 26 de diciembre, el PCP-SL ejecuta uno de los más grandes atentados en Morococha. En horas de la noche de ese día, un grupo senderista ingresó hasta las instalaciones de la casa de compensoras (máquina que bombea aire) y luego de maniatar a los trabajadores de turno, dinamitaron toda la maquinaria. El hecho no provocó víctimas humanas pero sí cuantiosos daños materiales a la empresa Centromín Perú. Después del atentado, el PCP-SL se ganó más opositores de los que ya tenía, pues todos los trabajadores paralizaron sus labores durante 15 días a falta del aire comprimido para el funcionamiento de maquinarias y ventilación en los socavones.

El 15 de abril de 1989, en otro acto terrorista dinamitan las oficinas de relaciones industriales y la tubería de aire de ocho pulgadas de Centromín Perú.

Más adelante, el 7 de mayo, cuando salía de una asamblea, asesina de un disparo en la cabeza a Antonio Cajachagua Leiva, secretario general del sindicato de trabajadores mineros de Morococha. Sus ex compañeros manifiestan que él también estaba en contra de las paralizaciones y atribuyeron el asesinato a los senderistas.

²⁵ Los Senderistas se habrían replegado hacia Morococha por la fuerte presencia militar en La Oroya.

²⁶ Entrevista realizada por la CVR a Olinda Parra, hija de un ex trabajador de Centromín Perú en Morococha.

²⁷ La señora Francisca Quispe, era esposa de un trabajador de la empresa minera particular Austria Duvaz, se caracterizaba por su coraje y liderazgo en las marchas y manifestaciones. Su asesinato nunca fue esclarecido.

Los atentados dinamiteros continuaron contra las maquinarias de la empresa Centromín Perú. El 29 de junio de ese mismo año, los sediciosos una vez más destruyen por completo las instalaciones de la casa de compresoras de Centromín Perú, y los trabajadores de esta empresa empiezan a tildar de subversivos a los trabajadores de las otras empresas mineras ubicadas en Morococha por el hecho de que a las instalaciones de éstas no les sucedía nada. A las dos semanas, la empresa Centromín Perú culminaba de reparar las maquinarias de la casa de compresoras, y Sendero Luminoso atenta nuevamente sus instalaciones, esta vez dinamita las tuberías de ventilación, parte de la casa de compresoras y la central eléctrica, la misma que abastecía de energía a las empresas mineras vecinas de Austria Duvaz, Santa Rita, Minera Yauli y Centraminas. En los últimos meses de 1989, se lleva a cabo el XIV Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores de Centromín Perú con el objetivo de discutir la situación laboral de los trabajadores. En la inauguración del certamen se conforma entre los trabajadores la brigada de defensa denominada «Antonio Cajachagua Leiva», en honor al dirigente asesinado. El propósito de la brigada defensiva era proteger la integridad de los trabajadores de agresiones y acciones violentas que podrían provenir del PCP-SL o «cualquier otro grupo violentista»; pero los miembros de la brigada nunca tuvieron enfrentamientos con los senderistas pues al poco tiempo de su formación se instala una base militar en el campamento minero de Morococha.

Los militares comienzan a realizar incursiones violentas a los domicilios de todos los trabajadores con el objetivo de capturar a algún sospechoso. Si los militares encontraban algún libro mariateguista o leninista, detienen a sus portadores y los trasladan violentamente hasta la base, donde son golpeados y torturados:

Empezaron a venir a nuestros cuartos a las seis de la mañana por ejemplo, entraban y decían operación rastrillo y empezaban a revisar todo... lo que buscaban eran cajas donde decía explosivos o bolsas, o esos libros de Mariategui, los siete ensayos por ejemplo... yo recuerdo que algunos vecinos decían: ‘entierren todo eso, no tengan nada de eso, los van inculpar’, entonces la gente empezaba a enterrar esos libros... yo recuerdo que un profesor de Biología, Ospina se llamaba, él tenía una bolsa de esos libros, lo agarraron y lo llevaron al calabozo y lo maltrataron.²⁸

Los militares también ingresaban violentamente a los locales de los sindicatos donde se desarrollaban las asambleas y detenían a los dirigentes. Muchos de ellos eran trasladados hasta la base de Morococha y otros hasta la base de Marcavalle en La Oroya. Estas acciones, según los militares, tenían como objetivo la búsqueda de elementos subversivos, mientras que los dirigentes manifestaron que el propósito de esos operativos era «atemorizar a los trabajadores para que no se plieguen a las huelgas». A partir del 91, los militares utilizan una nueva estrategia de detención denominada «la leva» que consistía en detener en las plazas y calles a todas las personas «indocumentadas», a quienes los trasladaban a la base militar donde los que eran identificados

²⁸ Entrevista realizada por la CVR, a Olinda Parra, hija de un ex trabajador de Centromín Perú en Morococha.

salían y los que no, eran trasladados hasta la base de La Oroya. La actuación militar provocará muchas quejas por los excesos que cometen contra los dirigentes y la población en general.

Con la llegada de los militares, el PCP-SL desaparece totalmente. Después de su último atentado no vuelven a tener presencia en toda la zona de Morococha.

2.6.8. La presencia de los militares

Después de la realización de la huelga nacional minera en 1988, la economía del sector a nivel nacional y regional quedó afectada. Frente a ello, los principales empresarios a través de los medios de comunicación acusan a los dirigentes sindicales de terroristas; paralelamente gestionan la instalación de bases militares. En 1989, se instalan más bases militares en las provincias de Castrovirreyna y Churcampá, incrementándose así los patrullajes a todos los centros mineros de la zona; estas incursiones militares generan mucho malestar entre los dirigentes y trabajadores de las minas por las detenciones arbitrarias a los dirigentes y por los hurtos y maltratos a los trabajadores:

Quien más arremetía era el ejército y la policía contra los mineros, porque simplemente los empresarios les pagan a los policías y al ejército; cuando van a las minas les dan buenas propinas..., entonces hacen de la suya. Las fuerzas armadas disfrazados si robaban, les quitaban todo, entraban a las casas y les robaban todo y no pasaba nada, el pueblo es conciente de cómo actuaban las fuerzas armadas, que se hacían pasar por senderistas.

El 08 de octubre de 1989, en un operativo militar en el centro minero de Julcani, Santiago Lizana Acha es asesinado de un tiro en la cabeza. Según Sixto Vilcas, el dirigente supuestamente habría puesto resistencia al momento que era intervenido por los militares:

[...] después Lizana Acha estaba jugando billar, entonces entra y sin decir nada lo agarró a culatazos y le metió un balazo en la cabeza y el policía se hizo al loco y se corrió, lo agarraron, lo llevaron preso, pero al final todo quedó entre ellos, los policías así se protegen, ha habido una arremetida fuerte. Realmente a nosotros nos han tildado de terroristas por ser trabajadores mineros y el trabajador minero utiliza explosivos por naturaleza de trabajo.

Estos actos de violencia provocados por los militares, empezaron a debilitar notoriamente la organización sindical en la mayoría de los centros mineros de Huancavelica. En los primeros años de la década del 90, la situación de los sindicatos se hizo más complicada aún por la radicalización de la lucha contrasubversiva implementada por el nuevo gobierno.

El PCP-SL disminuyó en sus incursiones a los centros mineros, pero aún tenía presencia en las comunidades campesinas de la zona. Los senderistas planificaban estratégicamente su ingreso a los asentamientos mineros para evitar enfrentamientos con los militares. De este modo, en varias oportunidades, lograba reunir sin mucha violencia a los trabajadores para insistir que se incorporen a su partido, exigir la renuncia de sus cargos de las autoridades y representantes del Estado;

señalando que ellos eran distintos a los militares, a quienes se les tenía que combatir, advirtiéndoles que si no acataban sus órdenes serían aniquilados. Pero los trabajadores mineros no se dejaban persuadir por la prédica senderista y se preocupaba más por la mejora de sus salarios y la estabilidad laboral frente a las empresas.

A partir de los últimos meses de 1989, el servicio de inteligencia empezó a trabajar sigilosamente en todos los asentamientos mineros de la región. Los ex trabajadores de las minas Julcani y La Mejorada (provincia de Angaraes), señalan que en esos años, arribaron a los campamentos «nuevos» profesores a las escuelas y asistentes sociales a los clubes de madres, quienes llegaban a la empresa en calidad de practicantes, refiere Sixto Vilcas: «Entraban también practicantes, profesores, sastres, asistentes sociales y se pasaban de practicantes, eso sí, en el hablar nomás conocíamos de quién se trataba, al toque; ellos, primero te dicen: “¿cómo no vienen los compañeros, algo quisiera saber?”, ya está, esto era suficiente».

Otro ex dirigente, refiere: «Así en las señoras también iban, muchas señoras han hablado, muchas señoras han dicho: ‘por mi estancia han pasado, no sé qué le habrá dicho a mi esposo’; y, qué hacían, lo cancelaban poco a poco de alguna manera, porque ya estaba en la lista, así han bajado a la gente».

Aparentemente el trabajo del servicio de inteligencia era coordinado con las empresas mineras y tenía doble función: identificar a los senderistas y a sus colaboradores, y luego indagar sobre las actividades de los dirigentes sindicalistas para que la empresa los despidiera. Sostiene un ex dirigente:

Entonces ya el servicio de inteligencia decía: fulano de tal, fulano..., porque simplemente la señora le dijo a alguien: «no sé, mi esposo dice se ha encontrado con...»... «A ya, éste es el contacto», entonces ya estaba en la lista,... reducción de personal y hasta luego... Los del servicio de inteligencia como que detectaban supuestos senderistas, pero a la vez la empresa se servía de eso para sacar personal.

En 1993, en una de sus últimas acciones sanguinarias en los centros mineros, el PCP-SL asesina al relacionista industrial de la mina Julcani. A partir de este hecho, los militares y policías realizan mayor control en los centros mineros e incluso llegan a asesinar al trabajador Juvenal Martínez. Un ex trabajador minero narra este suceso:

Juvenal Martínez, uno de los trabajadores de Julcani fue baleado por un mayor (Rubén Rodríguez Rebanal), por ejemplo; así a quemarropa en una movilización y de eso son testigos todos los trabajadores, a Juvenal Martínez lo mataron en una movilización porque el relacionista era abusivo: a la profesora le sacó de su trabajo, se fue contra todos los padres de familia... y todo por hacer esa movilización le sigue al hombre y le mete bala, eso fue el 93 más o menos.

Los ex trabajadores señalan que estas acciones habrían sido coordinadas entre la empresa minera y las fuerzas policiales y militares con la finalidad de contrarrestar la presencia senderista y de paso desarticular la organización sindical.

Como la gran mayoría de los centros mineros de Pasco y Junín, las de Huancavelica también entraron en el proceso de privatizaciones a partir de 1993. En este departamento, igualmente, los despidos masivos de trabajadores fueron una constante en esos años; y la situación de los dirigentes era aún peor, pues ellos salían casi sin ningún beneficio laboral. El ex dirigente sindical Samuel Aroni, recuerda lo sucedido:

Toda esta guerra ha contribuido para el colapso de la minería, puesto que los dueños de las empresas han optado por retirarse sistemáticamente y de este modo dejaron sin trabajo a muchos trabajadores; por ejemplo, Caudalosa Grande ha sido vendido a otra empresa y así ha habido transferencias, concesiones y, en ese sentido, de todos modos hubo dejadez. Todo esto ha contribuido al colapso de la minería, a esta guerra sucia... y todo ha disminuido bastante. Por ejemplo de lo que era Caudalosa Grande, había 1500 trabajadores en el 80, en el 2000 solo había 100 trabajadores, eso demuestra que ha habido un despido masivo, sobre todo en muchos casos arbitrarios, y eso realmente duele... votan y despiden sin darle los beneficios sociales.

2.6.9. Conclusiones

Desde comienzos del siglo XX, la región central fue —y sigue siendo— centro principal de la actividad minera en el país y, como tal, parte gravitante en la economía peruana que en un porcentaje considerable se apoya en la exportación de minerales y consecuente captación de divisas.

En la región central, casi desde el inicio de esta actividad, la relación entre las empresas y los trabajadores se caracterizaron por una relación de permanente conflicto por las demandas salariales y de beneficios sociales de estos últimos. Situación que a partir de 1975 ingresa a una nueva etapa cuando los trabajadores mineros inician un proceso de manifestaciones y reclamos, exigiendo la nivelación de sus salarios y otros beneficios. En 1978, esta situación se agudiza aún más. Durante este período y la década de los 80, la presencia de las diversas agrupaciones de izquierda en este sector será bastante significativa y activa, lo que contribuirá al proceso de radicalización de los sindicatos mineros de toda la región.

En este sentido, al iniciar su «lucha armada», el PCP-SL encontrará en el sector minero de la región central un escenario bastante convulsionado y a los obreros en un creciente proceso de radicalización frente a las empresas, sobre el cual pondrá su atención buscando capitalizar esta situación para los propósitos de su guerra popular. Este caso ilustra la importancia de poseer políticas sociales y económicas que garanticen el apoyo de los trabajadores de las empresas de gran envergadura. A final de cuentas, los trabajadores constituyen una base social ganada y los empresarios tienen que poseer estrategias para legitimarse ante ellos como autoridad, como

también como aliado, de lo contrario, se genera una violencia que no tiene otra consecuencia que generar más violencia.

Por su parte, a mediados de los años 80, el MRTA también intentará desarrollar labor política en algunos sindicatos de las provincias de Pasco y Yauli (La Oroya), pero su presencia se verá opacada por la creciente presencia senderista que a diferencia de los primeros habían iniciado antes y todavía mantenían la simpatía de un sector de los dirigentes sindicales.

Pero el período más cruento para el sector minero de la región central será entre 1986 y 1989. Durante este período, ante el rechazo de los trabajadores a su proyecto político, el PCP-SL vanamente intentará «radicalizar» sus luchas, buscando montarse en la conducción sus gremios, intensificando su accionar contra las instalaciones, agrediendo y asesinando a sus dirigentes sindicales. Pero, la heroica resistencia de los obreros será mayor al terror que pretende doblegarlos. Los obreros mineros no se dejarán persuadir ni intimidar por el senderismo.

El violento accionar del PCP-SL en el sector minero y las millonarias pérdidas y paralizaciones que provocan sus atentados, afectarán seriamente la actividad minera propiciando en la práctica, tanto la total militarización de los centros y campamentos mineros.

El proceso de privatizaciones emprendidas por el gobierno fujimorista a partir de los años 90, establecerá el marco legal para el despido masivo de miles de trabajadores mineros, los despidos arbitrarios y sin beneficios de centenares de dirigentes sindicales, la legalización de los contratos eventuales y sin beneficios, entre otras medidas que prácticamente terminará por desarticular totalmente a la debilitada organización gremial de los trabajadores mineros de la región central.

Bibliografía

Norman Long y Roberts Bryan (2001): «Mineros Campesinos y Empresarios en la Sierra Central del Perú», IEP.

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (1989).. Edición Número 60 de la Revista Bimestral «Que Hacer», DESCO

Denis Sulmont y Alfredo Silva (1983) La Minería y los mineros en el Perú. Lima: Asociación Trabajo y Cultura.

Instituto de Estudios Económicos Mineros (1991) La importancia económica de la minería en el Perú.

Instituto para el Desarrollo de la Pesca y la Minería: (1991) Revista de Análisis del área de Minería.. «Nueva Minería», IPEMIN.

CRONOLOGÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS CENTROS MINEROS DE LA SIERRA CENTRAL DEL PERU

1980:

17 de mayo: Senderistas, presumiblemente dirigidos por los camaradas «Feliciano» y «Johan», dinamitan el local de la municipalidad provincial y del Centro Educativo No. 34004 en Cerro de Pasco.

1981:

Diciembre: Sendero Luminoso incursiona en los centros mineros de Cobriza, Julcani y La Mejorada (en el departamento de Huancavelica) y se apoderan de abundante material explosivo.

Noviembre: Sendero Luminoso dinamita las puertas de las oficinas de Relaciones Industriales y del Servicio Social de la empresa Centromín Perú en La Oroya.

1982:

Octubre: Se instala una base militar en la provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica, desde donde controlan los centros mineros de Caudalosa Grande, Caudalosa Chica y San Genaro.

1983:

Primeros meses: Sendero Luminoso inicia su trabajo político en los sindicatos mineros de Huancavelica y adquiere con facilidad material explosivo.

Octubre: Se instala una base militar en la provincia de Churcampá, departamento de Huancavelica.

Octubre: Sendero Luminoso reaparece en Cerro de Pasco y en La Oroya aparecen las primeras pintas senderistas; y ese mismo año se instala una base militar en Marcavalle, La Oroya.

1984:

01 de enero: Sendero Luminoso ataca el centro minero de Cobriza en Huancavelica y saquea las tiendas comerciales y los almacenes de dinamita.

Enero: Efectivos militares golpean cruelmente a John Broadle, Superintendente de la Empresa Minera Centromin Perú en Cobriza, por protestar ante la voladura del puente de metálico por los militares.

Agosto: En Cerro de Pasco, se instala la base militar de Carmen Chico, cerca de los centros mineros.

Noviembre: Se instala una base militar en el centro minero de Cobriza, en Huancavelica.

1985:

Inicios de año: En Cerro de Pasco se conforman los «comandos laborales» de las empresas mineras.

Abril: El dirigente minero Demetrio Martínez es asesinado de un balazo en la cabeza; según ex trabajadores de Centromin Perú, los jefes de la empresa serían los autores intelectuales del asesinato.

Octubre: Sendero Luminoso dinamita una locomotora en la Oroya.

Noviembre: En Huancavelica, los senderistas atacan y dinamitan las instalaciones de la mina Caudalosa Grande, luego golpean a los superintendentes para que éstos les entreguen material explosivo.

Noviembre: una columna de 10 senderistas ingresa a la Unidad de Centromín Perú en Cerro de Pasco y dinamitan los molinos de la planta concentradora.

Noviembre: el centro minero de San Genaro en Huancavelica es atacado por una columna senderista que dinamitan parte de su infraestructura. Los militares detienen a los dirigentes mineros.

1986:

Julio: Senderistas comandados por los camaradas «Nelly» y «Hernán», ingresan al centro minero Vinchos en Cerro de Pasco y asesinan a balazos al gerente, subgerente y superintendente de la mina, luego dinamitan la planta concentradora.

19 de marzo: En Cerro de Pasco, en una manifestación popular, Sendero Luminoso asesina al dirigente minero Tomás Miranda.

23 de junio: En Cerro de Pasco, el dirigente minero Teófilo Rímac Capcha, es detenido por militares de la Base de Carmen Chico. Luego de ser salvajemente torturado es asesinado, pero su cuerpo desaparece.

Octubre: Una columna senderista incursiona en la unidad minera Santa Rosa (Cobriza) y saquea todo el material explosivo de la mina: dinamita, fulminantes y guías.

Noviembre: Se instala la Base Militar de Quillacocha en Cerro de Pasco.

1987:

Mayo: En Cerro de Pasco, Sendero Luminoso asesina al dirigente sindical Carlos Melo y sobre su cuerpo deja un cartel en el cual se lee: «Así mueren los traicioneros». Producido el hecho, los militares detienen a varios dirigentes y ex dirigentes acusándolos de terroristas y los trasladan hasta la Base Militar de Carmen Chico.

Mayo: Los militares y la Policía Nacional intensifican los patrullajes en los centros mineros y continúan deteniendo arbitrariamente a los dirigentes sindicales.

1988:

Febrero: En Cerro de Pasco, en un enfrentamiento entre los militares y una columna Senderista muere el camarada «Johan».

21 de julio: En Morococha, efectivos policiales asesinan de un balazo a la señora Francisca Quispe, esposa de un trabajador minero.

Agosto: SL incursiona al centro minero de San Genaro en Huancavelica y asesina a balazos al jefe de relaciones industriales y a un contratista minero de apellido Ponce; antes de retirarse dinamitan torres de energía eléctrica y gran parte de sus instalaciones. Después del hecho, los militares detienen a ocho dirigentes, quienes son acusados de terroristas y encarcelados injustamente durante ocho meses.

17 de octubre: En Morococha, presuntos senderistas asesinan de un balazo en la cabeza al dirigente minero Alejandro Patiño Flores.

17 de octubre: Se inicia una huelga nacional indefinida de los trabajadores mineros y metalúrgicos.

18 de octubre: En La Oroya, SL asesina al ex dirigente y militante del PCP Unidad, Fidencio Coronel supuestamente por oponerse a la Huelga minera. Los militares y la Policía Nacional detienen a decenas de dirigentes y trabajadores, quienes son torturados en la Base Militar de Marcavalle.

Noviembre: En Huancavelica, una columna senderista dinamita las instalaciones del centro minero de Caudalosa Grande.

25 de diciembre: Sendero Luminoso dinamita tres torres del sistema de cable carril que trasladaba minerales desde San Cristóbal hasta Marh Túnel, ambas eran unidades de producción de Centromín Perú en La Oroya.

26 de diciembre: Una columna senderista dinamita la casa de compresoras de la empresa Centromín Perú en Morococha, provincia de Yauli.

31 de diciembre: SL destruye tres locomotoras eléctricas Diesel de Centromín Perú que trasladaban mineral de la unidad de Cerro de Pasco a la fundición de la Oroya.

31 de diciembre: SL dinamita una planta eléctrica en Huariaca (Cerro de Pasco) que abastecía a los asientos mineros de Milpo, Atacocha y Chicrín.

1989:

13 de febrero: En Lima, un grupo paramilitar asesina al dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y a la asistente social Consuelo García.

07 de abril: Sendero Luminoso dinamita la locomotora Nro. 32 de Centromín Perú en Cerro de Pasco.

15 de abril: En Morococha, una columna senderista dinamita las oficinas de relaciones industriales y la tubería de aire de ocho pulgadas de Centromín Perú.

16 de abril: En Cerro de Pasco, miembros de Sendero Luminoso asesinan a balazos en la cabeza a Seferino Requis, Secretario General del sindicato de trabajadores de Centromin Perú en Cerro de Pasco.

07 de mayo: En Morococha, una columna senderista asesina de un balazo en la cabeza al dirigente minero Antonio Cajachagua Leiva.

12 de mayo: Sendero Luminoso dinamita la locomotora Nro. 38 de Centromín Perú, cerca de La Oroya.

Junio: En Huancavelica, a través de los medios de comunicación, los empresarios mineros acusan de terroristas a todos los dirigentes de los sindicatos, provocando su detención y tortura por los militares.

29 de junio: En Morococha, una columna senderista dinamita la tubería de aire de Centromín Perú.

Setiembre: En un operativo militar en Cerro de Pasco, es detenida la camarada «Nelly» y el camarada «Hernán» cae abatido a balazos cuando intentaba escapar.

08 de Julio: En La Oroya, SL dinamita una subestación eléctrica.

13 de julio: senderistas dinamitan en Morococha la casa de compresoras, tuberías de ventilación y la central eléctrica de Centromín Perú.

22 de julio: Una columna senderista destruyó tres torres eléctricas en La Oroya.

Agosto: Nuevamente Sendero Luminoso dinamita por completo la compresora de la empresa Centromín Perú en Morococha, La Oroya.

1990:

Inicios de año: En Cerro de Pasco, en una asamblea de trabajadores de la empresa Centromin Perú, impulsado por el dirigente Juan Santiago se crea la «Guardia Obrera» para hacer frente a SL; posteriormente, en un operativo esta guardia logra la captura de 10 presuntos que son entregados a los militares. Por otro lado, se instala una base militar en el centro minero de Morococha, La Oroya.

En Huancavelica, los ataques de SL a los dirigentes y las detenciones que realiza el servicio de inteligencia terminan debilitando a los sindicatos.

1991:

Noviembre: Durante una manifestación de los trabajadores de La Oroya, los militares detienen a todos los dirigentes de la manifestación. Los detenidos son llevados a la base militar de Marcavalle; de allí un pequeño grupo de dirigentes son trasladados hasta el penal de Huamancaca (Huancayo), luego de un tiempo ponen en libertad a todos, excepto al dirigente Emiliano Yurivilca; sus colegas presumen que fue desaparecido en el referido establecimiento penitenciario.

1992:

Julio: Por las inmediaciones del Club Peruano de La Oroya, aparece el cuerpo sin vida del dirigente Donato Bernal; los presuntos autores del asesinato serían los efectivos de la Policía Nacional.

Frecuentemente, los militares detienen a los dirigentes sindicales acusándolos de terroristas, a quienes conducen a las bases militares de La Oroya, Huancayo y Lima, donde permanecen varios días y a veces los torturan.

1993:

Octubre: En el centro minero de Julcani(Huancavelica), Sendero Luminoso asesina a balazos al gerente de relaciones industriales.

Noviembre: En una movilización realizada en el centro minero de Julcani (Huancavelica), los militares asesinan a balazos al dirigente Juvenal Martínez.

En Cerro de Pasco y Junín, se inicia el proceso de privatización de la empresa minera Centromín Perú y miles de trabajadores son despedidos masivamente.

1994:

Febrero: En el centro minero de Julcani, efectivos de la Policía Nacional, asesinan de un balazo en la cabeza al trabajador Santiago Lizana Acha acusándolo de terrorista.

La mayoría de centros mineros de Huancavelica también entran a un proceso de privatización y miles de trabajadores son despedidos.

2.7. MOLINOS: DERROTA DEL MRTA EN LA REGIÓN CENTRAL

La debacle militar del MRTA en la sierra de la Región Central se marca con el enfrentamiento de más de 100 soldados del Ejército, el viernes 28 de abril de 1989 en la pampa Puyhuan, entre los distritos de Huertas y Molinos, provincia de Jauja, departamento de Junín, contra un contingente, compuesto por 67 integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que se dirigía hacia Jauja con el objetivo de tomar la ciudad de Tarma.

Inicialmente se creía que el objetivo del MRTA era ocupar la ciudad de Concepción. Sin embargo, diversos testimonios señalan que era la ciudad de Tarma; por lo que el encuentro con el Ejército no fue planificado y tomó por sorpresa a ambos bandos. Luego del enfrentamiento, el Ejército continuó con acciones de rastillaje realizando detenciones a pobladores igualmente sorprendidos por los acontecimientos. Algunos de estos figuran actualmente como desaparecidos.

2.7.1. El MRTA en la Región Central

Es difícil precisar la real dimensión que alcanzó el MRTA en la región central, por lo mismo que constituía una organización subversiva clandestina y muchas de sus acciones se desdibujaron en la multitud de hechos de violencia ocurridas en el campo y las ciudades.¹

En 1984, ya existía en Huancayo un núcleo de militantes del MRTA. Sus operaciones iniciales fueron básicamente de propaganda, como la colocación de banderas de su organización en Jauja, Concepción y Huancayo; el trazo de pintas con sus lemas y consignas, la difusión de mensajes en emisoras radiales y distribución de víveres *expropiados* a grandes distribuidores en sectores empobrecidos de Huancayo. Igualmente empezaron a participar en debates y actos de protesta realizados en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) por los estudiantes. Más aún, en la UNCP se formó el núcleo primigenio del MRTA, de donde saldrían militantes que jugarían roles importantes en los denominados Frente Nororiental y Frente Central.² Paralelamente empezaron a incursionar en colegios de educación secundaria y también desplegaron esfuerzos por ganar influencia en los gremios sindicales y organizaciones populares, donde la izquierda legal también actuaba, aunque con una lógica diferente. La pugna con el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) por aquellos espacios se evidencia desde 1986.

Como parte de su estrategia, el MRTA formó dos destacamentos militares en Junín, uno en la sierra y otro en la selva, estableciendo dos zonas para su trabajo proselitista y militar. La primera

¹ Véase el capítulo sobre el conflicto armado interno en la Región Central.

² Véase estudio sobre la Universidad Nacional del Centro del Perú.

comprendía los distritos de Mariscal Castilla, Cochas, Comas, Andamarca, Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca. En tanto, la segunda abarcaba Pichanaqui, Perené, San Luis de Shuaro, La Merced, San Ramón, Monobamba, Uchubamba y Curimarca. Del mismo modo, el MRTA estableció un corredor geográfico que le permitía emprender desplazamientos entre los departamentos de Pasco y Junín. El objetivo, a corto plazo, era formar su llamado Frente Central, integrando por estos dos departamentos. En ese sentido, la acción que daría inicio a dicho frente sería la toma de la ciudad de Tarma.

2.7.2. La fallida toma de Tarma

La madrugada del viernes 28 de abril de 1989, una columna del MRTA salió de Curimarca con dirección a Jauja a bordo de dos camiones con el propósito de tomar por asalto la ciudad de Tarma. Esta acción, de acuerdo a declaraciones de sus militantes, buscaba impactar en la opinión pública y ubicar al MRTA en un lugar preponderante de la escena política nacional. Además intentaba ser un *golpe de confianza* para sus militantes, mostrando que podían revertir los reveses sufridos hasta entonces en el Frente Nororiental.³

Pero, cuando preparaba la toma de Tarma, el MRTA sufrió un duro revés al ser capturado Víctor Polay Campos, máximo dirigente subversivo, en el Hotel de Turistas de Huancayo el 4 de febrero de 1989.

Para la toma de Tarma, la organización subversiva había seleccionando militantes de la región y de otros lugares del país,⁴ integrados en los destacamentos de la selva y de la sierra. Entre estos militantes, se encontraban dirigentes campesinos, como Antonio Meza Bravo, dirigentes universitarios como Martín Meza Gonzáles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex combatientes del Movimiento 19 de Abril (M-19) de Colombia que habían participado en el Frente Nororiental en noviembre de 1987 y también jóvenes incorporados recientemente al autodenominado Ejército Popular Tupacamarista (EPT), a quienes esta acción les significaba experiencia y aprendizaje.

Una vez definido el objetivo y seleccionados los oficiales y combatientes, ambas unidades comenzaron a organizar su desplazamiento hacia Uchubamba, de donde saldrían hacia su objetivo. El destacamento de la sierra contaba con dos sub-unidades, una que salía de Pariahuanca rumbo a Santo Domingo de Acobamba, pasando por Pasla Alta, conformado por aproximadamente 15 hombres. Y la segunda, que se encontraba en la zona de Cochas – Comas, integrado por 22 hombres armados. Ambas subunidades se encontraron en San Rafael, a pocas horas a pie de

³ Al respecto véase el capítulo sobre el MRTA.

⁴ *Cambio*, en su edición del 5 de mayo de 1989, menciona los nombres de 31 de los emerretistas muertos y en algunos casos se señala su procedencia. *Cambio*, 5 de mayo de 1989, Año V, N° 52, págs. 11-13.

Uchubamba, donde acamparon. San Rafael se encuentra ubicado en el anexo de Paltay, que pertenece al centro poblado de Curimarca (distrito de Molinos). Es un lugar donde la ceja de selva se une a la sierra. Por su vegetación y la existencia de pantanos se trataba de una zona ideal para ocultarse.

En tanto, el destacamento de la selva, formado por 31 subversivos, salió desde el anexo de Cuyani, Pichanaki, con la intención de dirigirse a la sierra de Concepción, específicamente por el anexo de Runatullo. Sin embargo, los planes se cambiaron y siguieron el recorrido por San Ramón, subiendo por La Esperanza, La Florencia, Pucará, Aguas Nieve y Rodayacu. A este último poblado llegaron en la tarde, reunieron a la población y durmieron en la casa de una pareja de ancianos, fuera del poblado. Al día siguiente partieron por la tarde y llegaron a la medianoche a Cedruyoc, para seguir por Chacaybamba hasta Uchubamba.

Pero los planes iniciales se modificaron debido a múltiples factores, entre ellos, propone el jueves 20 de abril, a las 7.30 de la noche, tras varias explosiones y posterior apagón, una columna del PCP-SL tomó la plaza principal de Acolla, apresó al alcalde aprista Víctor Mayta Galarza y luego de un *juicio popular* lo asesinó con dos balas en la cabeza. Procedieron luego al incendio del local municipal, dinamitaron la posta de salud, el Banco de la Nación y el Registro Electoral.

A la misma hora fue dinamitado el frontis del Centro Cívico del Distrito Metropolitano de Yauyos por otro contingente del PCP-SL. Asimismo, en el cruce de las localidades de Pucacocha, Marco y Acolla, los subversivos dinamitaron utilizada para trabajos de rehabilitación en la vía Jauja – Tarma.

En este contexto, el destacamento emerretista de la selva llegó con retraso al campamento de San Rafael, ya que, en su intento por cambiar la ruta y salir por Runatullo, se perdió. En su recorrido sus integrantes se enteraron de la presencia del Ejército en las inmediaciones:

Fue en Monobamba cuando nos alertaron de que el Ejército había entrado a Monobamba en esos días. Parece que ya el Ejército se había alertado y empezaron a hacer algunas exploraciones, algo por los movimientos que se habían dado, entonces nosotros, en esa vez, tratamos de meternos hacia el monte y esperar que el Ejército salga para continuar nuestra ruta. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos)⁵

Concientes del retraso y los movimientos de Fuerzas del Ejército por la zona, los mandos de ambos destacamentos, reunidos en el campamento, evaluaron la situación, produciéndose una discusión entre ellos, pues unos se oponían a seguir con el proyecto de tomar Tarma. Una militante del MRTA relata este episodio que le fue narrado por uno de los sobrevivientes:

⁵ Las entrevistas a sobrevivientes y militantes fueron realizadas en distintos penales para afectos de este estudio.

Hay una discusión entre los dos grupos, porque cada grupo tiene su comandante. Entonces empiezan a ver el problema que podía haberse suscitado posteriormente. Entonces ellos prefieren no tomar Tarma, o sea, suspender esa tarea. Pero ¿qué pasa? que entre discusión y dialogo que hubo, deciden mejor consultar a la dirección. Y la dirección, como ellos nunca han estado por esa zona, no conocen, ellos ordenan que sí tiene que salir. Porque si la dirección hubiese dicho que se suspende esa tarea, simplemente no [se] hubiese ido. Pero la orden ya estaba dada. Simplemente es un Ejército y tenían que cumplir... (CVR. BDI Entrevista en profundidad P179, Huancayo (Junín), 20 de julio del 2002, mujer militante del MRTA).

Finalmente, deciden tomar Tarma y optan por continuar en el camino a Jauja, atravesando Curimarca. *Carlos* fue el responsable de ir en búsqueda de un camión para el traslado de ambos destacamentos. Este militante no regresó, pero cumplió con enviar el camión, que esperó a los emerretistas en el puente Violeta Correa, a una hora de Curimarca. Sin embargo, al encontrar al camión, el chofer explica que no podrá llevarlos debido a que el camión no estaba en buenas condiciones. Así, los subversivos suben a Curimarca a buscar otra movilidad.

En Curimarca, al igual que en las demás zonas visitadas, los emerretistas aprovecharon para conversar con la población y hablarles sobre su proyecto político. Allí abordan y coaccionan al dueño de otro camión, que había ido a Curimarca junto con sus dos hermanos transportando productos. Uno de ellos lo recuerda:

[...] cuando estábamos tomando lonche tocan a la puerta y salí, estaba un uniformado a pedir un servicio para que le lleve hasta la cumbre, pero yo le he negado, ‘no tengo gasolina’ y me dijo que me iba a poner gasolina y tuvimos que ir. [...] como todavía faltaba descargar, nos llevaron a una casa en la plaza, allí hemos descargado, y nos han hecho esperar, ya van a llegar ya, nos dijeron... eran cantidad, no se podía ver porque estaba oscuro... como ochenta mas o menos yo había calculado. Cantaban, hacían sus chistes solo escuchaba que subían nomás porque no me dejaban bajar. Por el peso puedo decir que han subido unos cuarenta. [El otro camión] también estaba esperando, para que cargue igual. A él también seguro que le han dicho lo mismo. Con él no conversamos nada porque estaba cuadrado más atrás. [...] a mi no me dejaron bajar para nada del carro. Estaban haciendo guardia para no escaparme, porque dos días antes se habían llevado un carro de acá, lo habían contratado (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P177, Jauja (Junín), 29 de mayo del 2002).

De esta manera, dos camiones con 67 subversivos a bordo salen rumbo a Tarma.

2.7.2.1. El Ejército y los planes del MRTA

Algunos medios de comunicación señalan que el Ejército conocía las intenciones del MRTA de realizar una incursión a Concepción más grande que la ocurrida en Juanjui (San Martín) en noviembre de 1987:

[...] Un grupo de soldados del cuartel Teodoro Peñaloza... realizaba una patrulla controlando la carretera que, desde Tarma, viene por la ruta de Lomo Largo [...] Se sabía, por información de inteligencia del Ejército que el MRTA planeaba un ataque a Concepción y que pretendían que la acción fuera más espectacular que la de Juanjuí en 1987. [...] El Comando del Ejército dispuso la movilización de dos destacamentos de las fuerzas operativas especiales –consideradas una de las más eficientes– hacia la zona. El plan de operaciones consistió en lo siguiente: los destacamentos, cada uno con 100 efectivos, debían avanzar por los lados del camino principal por donde iban a venir los del MRTA; de manera tal que cuando fueran interceptadas por una tercera patrulla, éstos pudieran cercar toda la zona. Así se evitarían las minas que generalmente se colocan en el camino principal. La patrulla que debía detenerlos no podía ser mayor de seis u ocho hombres, a fin de que se creyera que no había capacidad de respuesta.⁶

La revista *Oiga* señala que «los 90 soldados de la base militar Pachacútec que conformaban las patrullas» fueron los que tomaron parte en esta acción.⁷ Otras fuentes señalan que se trataría de tres unidades, cada una conformada aproximadamente por 30 efectivos. Provenientes de Lima o Piura, en patrullaje de rutina: «parece que fue una unidad que vino de Lima, ya que luego venían personas preguntando por sus familiares que habían estado en servicio en el Fuerte Cáceres» (CVR. Testimonio 301719. Huertas (Junín), mujer).

Finalmente, el diario *Correo* de Huancayo señala que «fuentes dignas de crédito informaron que la patrulla militar se dirigía en plan de trabajo rutinario a la localidad de Quero».⁸

2.7.2.2. Encuentro en la pampa Puyhuan

Puyhuan en traducción para nosotros significaría «corazón del mundo». Eso es su significado para nosotros o «donde se origina la vida» o «donde late la vida» (CVR. BDI Entrevista en Profundidad P200, Molinos (Junín). Varón, teniente alcalde del distrito de Molinos).

El viernes 28 de abril de 1989, cuando los dos camiones que transportaban a los emerretistas transitaban por la pampa Puyhuan, se toparon repentinamente con un contingente del Ejército, que se encontraban patrullando la zona.

[el Ejército] nos hizo parar, paró el otro carro que estaba adelante y a su atrás paré. Un teniente le dijo al terruco «¿qué llevas?», éste le dijo «papa, olluco, soy comerciante» y le pidió documento y no le ha querido dar su documento y no quería bajar tampoco [...] Como los vio nerviosos, ordenó el EP [Ejército Peruano] que abriera la puerta de la carrocería. Al abrirla, escuchó disparos desde el interior. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P177, Jauja (Junín), 29 de mayo del 2002. Varón, chofer secuestrado por el MRTA).

⁶ *Caretas*, Lima, 2 de mayo de 1989. p. 34.

⁷ *Oiga*, 2 de mayo de 1989, p. 16.

⁸ *Correo*, Huancayo, domingo 30 de abril de 1989, p. 7

Cuando el teniente EP Jhonny Morales, acompañado de algunos soldados, abrió la compuerta del camión para revisar supuestamente la carga de «papa», se encontró con los miembros del MRTA, armados y *en posición de ataque*.⁹ Inmediatamente el teniente Morales y sus acompañantes cayeron fulminados por las ráfagas de los fusiles. Ellos eran: el Sargento Efraín Huaranga, Yuri Portocarrero, Ulises Rivera, Ladislao Choque y el Cabo Jorge Flores.

En la versión de uno de los sobrevivientes del MRTA, se constata que el Ejército tomó totalmente desprevenidos a los subversivos:

[...] siento voces. Y primero, el camión se detiene y comienzan a alumbrar con una linterna y el camión continúa [...] y de repente se ven soldados por ahí, los detienen y preguntan «¿qué hacen?», «estamos llevando papa». Después un teniente o sub oficial venía, alumbró y los dejó pasar. Entonces, el compañero supuso que era una patrulla, una patrulla son treinta hombres, si no se han dado cuenta mejor paso nomás, pero cuando el camión continuaba la marcha se dieron con la sorpresa que venían columnas por los lados de la carretera, el camión tuvo que ir despacio; ya pasando más de la mitad, lo detienen ya por segunda vez. Ahí parece que estaba el oficial que estaba a cargo, Mayor, y él ordena revisar. Yo me despierto ahí cuando escucho bulla, «bajen, bajen» decían, y los compañeros que estaban delante esperan, el chofer ha bajado, los soldados quisieron abrir la puerta de atrás y nosotros teníamos la puerta asegurada, habían compañeros indicados para eso. El chofer ha subido, le mandaron para que abra la puerta, los compañeros preguntaron «¿qué pasa?», «ellos son los soldados», le indicaron que se retire, bajó el chofer y los soldados seguían forcejeando la puerta. [...] ellos seguramente pensaron en un camión con campesinos, entre ellos uno o alguien sospechoso, este... vieron algo sospecho, no sé, escucharon algo sospechoso, ¿por qué pararon por segunda vez? pero lo que sí que, cuando ellos siguieron forcejeando la puerta, nosotros escuchamos disparos, estaban disparando y los compañeros que estaban en la puerta salieron disparando ya. Los compañeros que iban adelante también. Habían dos compañeros adelante y el grueso atrás. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

La experiencia de otro de los sobrevivientes del MRTA en el enfrentamiento es la siguiente:

[...] yo estaba despierto cuando ocurre todo el hecho, antes de llegar a Molinos vi por las rendijitas del carro que pasamos una casa con luz eléctrica, entonces el carro más adelante empezó a bajar la velocidad, no fue un ritmo normal que llevaba, [...] se escuchan voces y al rato se escucha una voz más fuerte que decía que abran la puerta de atrás y en eso sube el chofer a la parte de arriba y nos pasa la voz que era el Ejército; en ese momento, bueno, a uno se le cruza en la mente que en fin ahí nos capturaban y todas esas cosas, en eso se escuchan los disparos y yo lo que hago simplemente [es] tratar de calmarme, ponerme sereno. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

La sorpresa fue grande para ambos bandos:

Ahí comienza el combate, hemos salido casi la mayoría de los compañeros del primer camión, los compañeros que estuvieron adelante también lograron salir [...] Cuando nosotros escuchamos los tiros, nosotros hemos salido disparando también, o sea, bajo, disparo, agoto mis municiones de una cacerina, tuve que cambiar, en ese momento ya sabíamos que eran los soldados, cuando tienes ese tipo de situaciones lo que tienes que

⁹ Caretas, Op. cit p. 34

hacer es ponerte siempre a buen recaudo, o sea, parapetarte, buscar un parapeto, fuimos a un lado y nos chocamos, los soldados estaban corriendo, o sea, ellos fueron más sorprendidos, yo vi que bajaban y un poco más podía agarrarle las botas y así hemos tenido que combatir. Más de la mitad estábamos afuera, o sea, en el mismo camión veníamos como 23, entonces había varios compañeros que estaban heridos, venían disparos de diferentes lados, ellos no solamente estaban a nuestro alrededor, sino también por los costados, habían por diferentes lados. Lo que yo sé es que en ese lado que han estado de la carretera, de ahí también han estado disparando hacia los camiones, nosotros estábamos alrededor de los camiones... (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

Otro de los sobrevivientes del enfrentamiento añade:

[...] y en eso se ve de que las balas empiezan a atravesar los costados de los camiones y a cruzarse las balas del lado derecho y de la izquierda. Ya bueno veo que los compañeros estaban saliendo, yo estaba en la parte del fondo, pegado a la caseta, entonces veo que algunos salen corriendo y otros agachados, otros empiezan a rampar y también veo que algunos compañeros caen ahí heridos de bala, lo único que hice yo, como las balas venían de la parte baja hacia arriba, entonces se encontraban más o menos a media altura de la carrocería del camión, entonces yo trato de agacharme y paso por abajo, entonces ahí había incluso una llanta de repuesto del carro, entonces me acerco ahí, me detengo un poco y sigo avanzando hasta llegar al piso, al suelo; los compañeros de mi costado también comenzaron a bajar, ese fue el punto por donde salimos, el centro del carro, porque en los costados ya habían muerto algunos. Entonces al llegar al suelo encuentro a un compañero que estaba herido, el compañero Víctor. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

Los miembros del Ejército estaban, sin embargo, mejor situados:

Se presenta combate en ambos lados. Del primer carro, yo vi en el suelo a muchos. Llovían las balas. El Ejército tenía mejor posición, mejor control que nosotros. Entonces los disparos de los que salían hicieron que el Ejército se repliegue más abajo, y otro grupo por arriba, se tiraban para la chacra por los chaguales [magüey]. Era el amanecer, era semi oscuro, pero ya se vislumbraba el día. Yo estando en el suelo abajo, he sentido un bombardeo por la nuca, normalmente los disparos nuestros, no sabíamos cual era el origen, no sabíamos de donde viene, yo he mirado alrededor y todo era sangre, y muchos heridos, muertos, he contado un promedio de diez a quince hombres... (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

De acuerdo a los sobrevivientes entrevistados por la CVR, algunos subversivos solicitan el alto al fuego, pero son igualmente abatidos por los miembros del Ejército:

Cuando yo escucho esas voces «alto al fuego, alto, alto» [...] hay un momento en que se controló, se calló, silencio, silencio total. Pero no amanecía todavía. En ese momento es que nosotros tratamos de llegar a los heridos y sacarlos, pero no se podía, era imposible. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

[...] «Nos rendimos» no escuché, pero sí «alto al fuego», el compañero Cava Cord [dijo] «alto al fuego», él no era el mando ahí [...] Él estaba ordenando el alto al fuego, y ahí le disparan. [...] Todavía se da un tiempo «alto al fuego, alto al fuego», y nosotros hicimos un poco de alto al fuego, pero los soldados siguieron disparando y ahí cae... (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

Poco después llega un refuerzo del Ejército que, según la versión de los subversivos sobrevivientes, dispara a discreción:

El helicóptero llega más o menos a las 5.30. El helicóptero es el que arrasa con todo, o sea, a los que han estado en el Ejército, a los del helicóptero no les ha importado que han sido miembros del Ejército o del MRTA, han arrasado con todo... (CVR. BDI Entrevista en profundidad P179, Huancayo (Junín), 20 de julio del 2002. Mujer militante del MRTA).

2.7.3. Huída de Molinos

Uno de los conductores del camión se salvó de morir al igual que nueve de los 67 subversivos de acuerdo a la versión de los miembros del MRTA sobrevivientes.

Según el testimonio de una pobladora:

Aparecen como unos seis hombres que corrían, todos estaban mojaditos y uno de ellos nos mira y dice: ‘si alguien les pregunta, ustedes no han visto nada ni a nadie, mejor váyanse a Jauja, porque hubo un enfrentamiento entre el MRTA y el Ejército. Salva a tu familia’ le dicen a mi esposo y descansaron como 10 minutos y siguieron corriendo rumbo al norte de Huertas. Pudimos darnos cuenta que tenían unos armamentos grandes y vestían con un uniforme oscuro, parecía plomo o azul marino. Al parecer estaban mojados porque habrían tenido que cruzar el río. (CVR. Testimonio 301726, Huertas (Junín). Mujer)

Los sobrevivientes del MRTA relatan la ruta que siguieron después de huir de Molinos:

Primeramente nos quedamos en los alrededores de Jauja, llegamos a salir casi a la Laguna de Paca. Finalmente yo me retiré a la ciudad. [Nosotros estábamos] por Hualá, Pancán [...] ya en la tarde nos hemos desplazado hacia Jauja, pasamos por el aeropuerto de Jauja, los soldados estaban patrullando, hemos pasado por medio de ellos [...] uniformados, con armas, todo. [...] Había un compañero que estaba herido, yo estaba con una herida ahí [en la mano], herida de bala y no se podía caminar mucho, saltar porque se venía la hemorragia, no es que te impedía caminar, sino que se venía la hemorragia y te debilitaba y el hecho de haber perdido sangre te daba mareo. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

Ahí hay cosas que no te podría precisar, por ejemplo, hemos tenido que contar con el apoyo de las masas para eso, o sea, solo no haces. [...] tres hombres con armas, en medio de todo un despliegue militar, peinando, ya se había anunciado por la prensa, nosotros hemos llegado al otro día a Huancayo; entonces eso no es posible si no tienes el apoyo de la masa, o sea, la gente te cobijaba, te protegía en lugar de delatarte, te atendían, te curaban. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos).

Otro sobreviviente narra la retirada:

[...] Nosotros empezamos la retirada, Álvaro, Jorge Cusi, después otros dos compañeros de la sierra [...] y salimos de esa zona, más o menos a las seis de la mañana habríamos llegado a un cerrito, una loma, pero ahí atrás de la loma también empezamos a escuchar disparos

[...] después llega el helicóptero cuando nosotros ya bajamos al riachuelo, empieza a sobrevolar el helicóptero a no mucha altura, entonces primero el helicóptero empieza a bombardear por el lado derecho de nosotros pero después se acerca más hacia donde estábamos nosotros y empiezan los rocketeos y disparos de ametralladora del helicóptero [...] habremos avanzado a las nueve de la mañana menos de un kilómetro [...] entonces por el compañero herido que teníamos nos pusimos a descansar ahí, detuvimos el avance, la retirada, ahí es donde nosotros escuchábamos los disparos y los bombardeos que el helicóptero hacía por toda la zona y también los disparos que se escuchaba en la zona donde habíamos tenido el combate, de tiempo en tiempo se escuchaba unos disparos, aislados, no había unas ráfagas [...] Salimos del lugar ese a las cinco y media o seis de la tarde, emprendimos la retirada en sí [...] yo no conozco bien, pero nos hemos ido para... nosotros hemos llegado a la zona de Punto, pero eso está mucho más lejos de donde nosotros hemos tenido el enfrentamiento. [...] Para llegar a Punto nosotros caminamos, hemos tenido que pasar una cordillera, un nevado, por Comas, antes de llegar a Comas hemos entrado por estancias; al momento que salimos a las seis de la tarde hemos llegado a una estancia que estaba, todavía de ese cerro se veía la zona de combate que habíamos tenido, entonces pernoctamos ahí hasta las dos de la mañana, de ahí continuamos nuestra ruta, pero más allá se queda el compañero que estaba herido de bala. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Molinos)

Varios pobladores de las comunidades recuerdan haberlos vistos en su huída:

[en] eso llega uno, a partir de las cinco creo, un subversivo que había escapado del enfrentamiento y donde dijo que «hemos tenido una, un enfrentamiento». [...] Me dijeron que dice él había llegado con un costalito y una manta y alzada su ametralladora nada más y con su radio de comunicación, nada más dice, y acá le pidió comida, se comió y ese mismo rato se pasó, dice, ya a Paltay ahí, estaba pasando [...] esta pasando [...] dice los helicópteros que han llegado de Lima le ha alcanzado y al momento de alcanzar, dice, se tapaba con las ramas de eucalipto, para que no lo miran y así ha escapado y no sabía cuántos han muerto, nada (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P201, Curimarca (Junín). 6 de mayo de 2002. Varón, poblador de Curimarca, testigo de la presencia del MRTA).

Durante la huida de estos miembros del MRTA, la llegada de los helicópteros y los refuerzos por tierra, y las primeras noticias en las radioemisoras; la población de Huertas, Molinos e incluso Jauja no sabía a ciencia cierta lo que sucedía.

La gente del lugar que había salido y estaba chismoseando regresaron, porque dice que más arriba [hacia Molinos] encontraron a un joven que corría y les dijo que estaban matando a mucha gente, por eso es que nos quedamos. Luego de ello vimos a los helicópteros, sería las 7.00 a.m. [...] como estábamos haciendo nuestras cosas normal en el establo, un helicóptero que volaba bajito dando vueltas, tenía a un militar que con su arma apuntaba hacia abajo, cuando en eso le gritan a mi esposo ¡Perro de mierda, identificate si no te matamos!, pero mi esposo no le hizo caso y no se identificó por que también me vio quizá que estaba ahí cerca con mi bebé cargada en la espalda» (CVR. Testimonio 301726, Huertas (Junín). Mujer).

2.7.4. Operación de rastrillaje

Casi inmediatamente después de finalizado el enfrentamiento, y cuando ya el Ejército tenía noticias claras de lo acontecido en la pampa Puyhuán, dispuso la movilización de más militares para dar inicio a las operaciones de «rastrillaje» en todo el perímetro del lugar del enfrentamiento.

El Ejército ordenó cercar la zona por motivos de seguridad, impidiendo la entrada de cualquier persona ajena al Ejército, incluida la prensa y la ambulancia del Hospital Olavegoya de Jauja, que pretendía ingresar a recoger a los heridos y muertos. Este cerco se dispuso a la entrada del distrito de Huertas, en el ‘puente’. La protección permitiría realizar las operaciones de rastrillaje con más seguridad y hermetismo, pudiendo identificar a extraños sospechosos. Los soldados iban con pasamontañas e iban a pie, mientras un helicóptero podía llegar a zonas altas, alejadas y de difícil acceso para los soldados.

Un poblador de Jauja señala:

ni bien llegamos a la casa que está situado en el barrio Acoria [Huertas], nos detuvieron dos soldados que salieron de un patrullero con amenazas de dispararnos, entonces nos pidieron mis documentos y el soldado agarró mis documentos y se lo llevó al bolsillo y me dijo ‘ahora estas indocumentado’. Entonces caminamos como dos cuadras y en el tramo salió otro soldado de la chacra, estaba tan nervioso que no podía sostener su arma y empezó a disparar, incluso al soldado que estaba detrás mío. Felizmente las balas solo me rozaron, nos tiramos al suelo, estuvimos tirado como dos horas en el suelo (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P189, Jauja (Junín), 2 de mayo de 2002. Varón, profesor detenido el día del enfrentamiento, salió en libertad ocho horas después).

Una pobladora relata los pormenores del rastrillaje:

A mi casa entraron 10 a 8 militares, pedían que se les diga la verdad, preguntaban por emerretistas heridos o escondidos, entraron de cuarto en cuarto, a mi papá lo sacaron a viva fuerza, mis hermanas salieron llorando... nos sacaron a todos fuera de la casa, nos pusieron con las manos a la pared y a mi papá le golpearon, como mis hermanas eran más chicas y gritaban llorando, quizá eso hizo que se compadecieran... factor suerte [...] En cada cuarto de mi casa buscaron,... quizá si había un subversivo escondido, seguramente, no lo encontraron,... por eso se tranquilizaron y se fueron (CVR. Testimonio 301719. Huertas (Junín). Mujer).

En el distrito de Huertas fueron detenidos: Nicolás Chocas Cavero, Fredy Flores Salas, Raúl Salas Chocas, Wilson Salas Huanuco y Teódulo Fermín Simeón Yaringaño. Estas personas figuran en la actualidad como desaparecidos¹⁰. Al igual que en Huertas, en Molinos las operaciones de rastrillaje empezaron inmediatamente después de finalizado el enfrentamiento.

¹⁰ Véase capítulo preparado por la Unidad de Investigaciones Especiales de la CVR en este mismo informe.

Ese día cuando ya termina ese enfrentamiento, el Ejército Peruano ha ingresado domicilio por domicilio; en aquellas temporadas estas horas nueve, diez de la mañana la gente se va a la chacra, cierran su casa y se van, pero ¿qué es lo que han hecho?, han disparado, han roto el candado, han ingresado a buscar todo lo mínimo que se puede. Pobre de aquel que tenían de repente pintura negra, roja o de repente propaganda subversiva, eso es lo que han buscado... (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P183, Molinos (Junín). Varón, gobernador actual del distrito de Molinos).

En Molinos, los esposos Flora Mayta Curi y Simeón Estelito Aranda Camarena y también Teófilo Franco Orihuela fueron detenidos por los militares. Posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en la morgue de Jauja. En tanto, José Jacob Camarena Peña, poblador de Molinos, y Jaime Rolando Jesús Montalvo, poblador del distrito de San Pedro de Chunán, se encuentran hasta hoy en calidad de desaparecidos. Muchos testigos presenciaron estas detenciones, observando que los detenidos eran llevados en camiones del Ejército y helicópteros con rumbo desconocido.

En tanto, los soldados heridos ya habían sido trasladados al Hospital Olavegoya de Jauja, para su rápida atención. Aparentemente esto ocurrió a las 7.30 de la mañana y desde ese momento el hermetismo que imperaba en el hospital fue tanto o más estricto que el que había en Huertas. Muchas personas, entre civiles, soldados y parientes de emerretistas, se concentraron en la entrada del hospital indagando por sus familiares. La noticia ya para entonces había dado la vuelta al mundo. La envergadura de la noticia fue tal que el Presidente de la República se hizo presente en el lugar de los hechos el mismo día.

Al promediar las 3.30 de la tarde el Presidente de la República Alan García, llegó al aeropuerto Francisco Carle de Jauja [...] Lo hizo acompañado del ministro de defensa, general Enrique López Albújar¹¹ y el comandante general del Ejército, Artemio García. Inmediatamente se dirigió al Hospital Olavegoya de Jauja, donde se informó de los policías [sic, soldados] heridos [...] «Dijo que su visita al lugar tenía como objetivo respaldar la acción de las Fuerzas Armadas, que con la misma habían dado un duro golpe a la subversión. Dijo el Presidente a los periodistas «Es necesario e imprescindible que las armas legales de la república y el gobierno elegido por el pueblo se pongan a trabajar contra esta amenaza». Luego agregó que la acción «es un golpe fuerte para la subversión, pero no será el último que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional darán al terrorismo»»¹².

2.7.5. De la morgue a la fosa común

El 1 de mayo fueron inhumados en el Cementerio General de Jauja, los cuerpos de los subversivos muertos en Molinos. En los dos días anteriores, personal seleccionado del hospital Olavegoya y

¹¹ El general Enrique López Albújar fue asesinado por un comando del MRTA en Lima en enero de 1990. El MRTA justificó su asesinato afirmando que López Albújar había ordenado el «repase» de heridos y el asesinato de emerretistas rendidos

¹² *La República*. Lima, 29 de abril de 1989. Pág. 3.

miembros del Juzgado Penal Provincial de Jauja realizaron las autopsias de ley, redactaron los protocolos de necropsia e identificaron los 63 cadáveres ingresados a la morgue, de los cuales 58, según algunos testimonios, eran de militantes del MRTA. Los protocolos de necropsia de los subversivos señalan que la mayoría de los cadáveres mostraban muerte por:

[...] herida de bala o PAF, [Proyectil de Arma de Fuego]. Algunos tenían en la cabeza... la mayoría tenía orificio de entrada por la distancia y por el armamento que tenían, eran prácticamente FAL, porque eran precisos y dejaban secuelas, era impresionante ver. [¿Estaban los rostros destrozados?] Sí... en su mayoría. Era impactante, para llorar... podría ser que los soldados en venganza o que sé yo, se han ensañado [...] Para mí es producto de la emoción violenta que esos momentos todo soldado al ver vencido al enemigo, no contento con eso, aflora esa conducta reprimida, por ejemplo cuando cantan lemas alusivos a la victoria, a los subversivos los tratan como su peor enemigo, algo así ha ocurrido. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P187, Huancayo (Junín), 9 de mayo de 2002. Varón, asistente en la elaboración de los protocolos de necropsias en el Hospital Olavegoya)

La seguridad en los exteriores del hospital se mantenía de forma estricta, impidiendo el paso de cualquier persona no autorizada. El mismo 28 de abril habían ingresado por emergencia más de 20 soldados heridos, según como lo testifica el registro de Emergencias del Hospital Olavegoya.

Igualmente fueron conducidos al Hospital los seis soldados muertos, y transferidos a la morgue, ubicada en la parte posterior del nosocomio referido. El 29 de abril fueron enterrados en sus lugares de origen:

Los seis valerosos miembros del Ejército... fueron sepultados ayer en medio de la congoja general [...] En la tarde de ayer... fueron sepultados en el cementerio «El Ángel» los restos del teniente de infantería Jhonny Morales Rodríguez, del sargento Yuri Portocarrero y del cabo Ulises Rivera Flores.[...] El cortejo fue presidido por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Artemio Palomino Toledo [...] Los otros tres valerosos militares fueron trasladados en aviones de la FAP a sus lugares de nacimiento, el sargento segundo Ladislao Choque Enriquez fue sepultado en el Cuzco, Hernán Camavilca en Jauja y Jorge Flores Papuchi en Chiclayo.¹³

El domingo 30 de abril se permitió el ingreso de algunos familiares para que reconozcan a los cuerpos. Un poblador de Molinos, quien trabajaba en el hospital como técnico sanitario relató que ese mismo día el hospital seguía fuertemente resguardado por soldados, quienes permitían el ingreso sólo a trabajadores y algunos miembros de la prensa. Todos los empleados fueron prohibidos de dar alguna declaración. Cuando nuestro informante entró a la morgue, vio que había cadáveres amontonados con las piernas destrozadas por disparos, así como los rostros «abiertos como flor». Logró ver que había tres cadáveres aparentemente sin heridas. Dijo que eran *los*

¹³ *La República*, Lima, domingo 30 de abril de 1989, p. 20-21

colombianos, los únicos que estaban vestidos, eran altos y blancos, con barbas. Los demás eran jóvenes, señoras, niños y niñas. No había soldados.

Medio colorado era, estaba con su letrero, «colombiano» decía, después estaba un señor, ese que me han dicho número 40, pero era diente de oro, mi esposo no tenía diente de oro [...], ya no se conocía por su cara, estaban desquebrados por eso que buscado por las huellas de sus pies» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P167. Mujer).

Un poblador muestra su indignación:

A Estelito Aranda... realmente lo destruyeron, lo metieron... eso lo torturaron... es inaudito que quienes eran nuestros paisanos estaban totalmente desfigurados, mientras los terroristas propiamente nada, estaba igual como si hubieran muerto simplemente sin tortura, sin nada. Eso entonces a mí realmente me dolió, gente que no tenía nada... (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P200, Molinos (Junín). Varón, teniente alcalde del distrito de Molinos).

Los cuerpos de los esposos Estelito Aranda Camarena y Flora Mayta Curi, Teófilo Franco Orihuela y de los choferes Adril Hinostroza Molero y Rosendo Celestino Aquino Quito; así como de tres miembros del MRTA fueron reconocidos y retirados por sus familiares para enterrarlos. 55 cadáveres de militantes del MRTA nunca fueron reconocidos.

Al día siguiente, en el cementerio se mantuvo el hermetismo:

Como a las diez de la mañana, [antes de que los cadáveres fueran trasladados desde la morgue, los soldados] estaban en todo el contorno... serían unos veinte más o menos [...] no podían ingresar otras personas, porque los del Ejército habían anulado todo acceso... Afuera había personas, pero no podían ingresar [¿Usted fue la única persona civil que estuvo allá adentro?] Sí, después ya llegó un colega para el turno de tarde (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P202, Jauja (Junín), 20 de junio de 2002. Varón, encargado del cementerio general de Jauja la mañana cuando inhumaron los 55 cadáveres).

A las 11 de la mañana del 1 de mayo, los 55 cadáveres de los subversivos llegaron a bordo de varios volquetes. Un grupo de cinco soldados procedió a poner los cuerpos en una sola fosa.

A los quince días, los familiares de los emerretistas muertos compraron el terreno de la fosa, y levantaron allí un mausoleo recordatorio que al poco tiempo fue destruido por paramilitares.

Los días siguientes, el Ejército continuó visitando el cementerio, tratando de identificar a familiares de las víctimas no reconocidas que se acercaban a poner flores a sus parientes muertos.

Un trabajador del cementerio recuerda:

[...] al mes han venido [soldados], preguntando. Yo les dije que han venido los familiares y han hecho la verja inclusive al centro han puesto una placa de bronce, donde decía «Aquí yacen los restos de los que murieron en el enfrentamiento del combate de Molinos» y estaba con el nombre de todos. Pero cuando vino el Ejército ya no estaba, lo habían sacado el Comando de Rodrigo Franco de noche. [...] Habían dejado una nota [...] decía «El Comando de Rodrigo Franco» [...] estaba en ese cuadrilátero pegado con cinta adhesiva [...] como en la placa decía «A los héroes de Molinos», en la nota decía: «Nunca serán héroes los...» no sé que término usar, o sea, que no había sido un combate o algo así (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P202, Jauja (Junín), 20 de junio de 2002. Varón, encargado del cementerio general de Jauja la mañana cuando inhumaron los 55 cadáveres).

2.7.6. Acciones del Ejército post enfrentamiento

El Ejército, con el objetivo de buscar sobrevivientes o simpatizantes del MRTA, prolongó sus incursiones por algunos meses más. «Durante un mes continuaron los militares patrullando la zona de Molinos» (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P171, Molinos (Junín), 3 de mayo de 2002. Varón, ex alcalde de Molinos entre 1987 y 1989).

Durante ese tiempo, los pobladores de esta zona prácticamente convivieron con los militares y también con el maltrato de algunos, como lo manifiesta un poblador:

[...] revisaron, sacaron cosas los soldados, encontraron dinero se embolsillaban pues, eso fue, casi, casi común en todas las casas [...] lo que encontraron a mano: dinero, relojes, eso fue lo que llevaban; se llaman soldados, eso son los que se llaman soldados. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P200, Molinos (Junín). Varón, autoridad del distrito de Molinos).

Una semana después de transcurrido el enfrentamiento, el Ejército llegó de manera abrupta a Uchubamba.

[...] empezaron a hacer una búsqueda, esa vez yo era presidente de APAFA [Asociación de Padres de Familia], del jardín de niños, todo el dinero se llevaron, también tenía un reloj [...] dijeron que estaban buscando a los emerretistas que se habían escapado de Molinos. [...] Han agarrado personas, porque tenían una lista, los han llevado a una esquina de la plaza y les han metido adentro y les han tirado golpe. Incluso a un muchacho que había venido de la sierra le han castigado, le han hecho correr con los ojos vendados, chocándose, chocándose escapaba [...] Esas personas eran los que habían venido de Tambillo, cerca de Comas... ellos habían venido a comprar acá, siempre venían a hacer el trueque, ellos traían papa y nosotros le dábamos maíz, esas cosas. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P197, Uchubamba (Junín), 8 de junio de 2002. Varón poblador de Uchubamba).

Una pobladora de Huertas recuerda que incluso la búsqueda y el hostigamiento continuaron durante todo ese año:

En una oportunidad vinieron a la casa de mi abuelita, donde yo vivía con mis hijos y nos sacan afuera de la casa junto a mis tíos Domingo y Pablo, pero a ellos quizá por ser varones

los golpean, no se los llevaron, pero preguntando de mala manera por los emerretistas. Luego de eso nos insultaron «¡ya lárguense concha su madre, ahora sí carajo, ahora voy a matar a todos los que hospedan a los terroristas, ya saben no hospeden a los terroristas!». Teníamos miedo de denunciar esto, además adonde podíamos hacerlo si los malos tratos y las amenazas teníamos de los militares no de los terroristas, como también los desaparecidos fueron por obra de los del EP que eran militares y no terroristas, eran muy abusivos. (CVR. BDI. Testimonio 301726. Mujer, pobladora de Huertas, testigo del enfrentamiento).

El rastrillaje se prolongó por varias semanas y abarcó casi todas las zonas que utilizaron los subversivos en su recorrido desde la selva central.

[...] estaban apoyando por Chacaybamba, Uchubamba, hasta mi casa ha llegado el Ejército... mi mamá estaba sacando leche a los animales y llegaron los soldados bien armados, en siguiendo de los emerretistas, y nosotros le hemos informado, es cierto, han venido una vez no más acá, ya más no vuelven, «ya murieron», dijeron los soldados, pasó en el Molinos, entonces' ahora estamos yendo por Monobamba', dijeron los del Ejército. Un grupo del Ejército han pasado para Monobamba. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P203, Cedruyoj (Monobamba), 5 de mayo de 2002. Entrevista colectiva con pobladores de Cedruyoj).

2.7.7. Epílogo

Luego de este golpe, los subversivos, «con grupitos pequeños sacados de la Universidad [Nacional del Centro del Perú], de algunos barrios populares», retomaron el trabajo proselitista y militar en el distrito de Pariahuanca; pero, como sostiene un ex dirigente del MRTA, «nosotros nos dábamos cuenta que había, no rechazo, pero había cierto temor, indiferencia, la gente prefería estar lejos, ya no cerca», «no nos habíamos integrado tan profundamente. [Este trabajo] era recién, era superficial y esta debacle [Molinos] nos separa de la población».

Pese a ello, tiempo después lograron formar otra columna:

Estuvimos como un mes o mes y medio. Volvió otro grupo [...] salieron también, volvió otra vez otro grupo y más o menos como casi un año estuvieron así, en volver y salir, volver y salir. Era algo quijotesco en ese momento. Fue muy duro, no sólo por el temor que se había generado, sino también por la ineficacia política del asunto [...] estás como esos personajes de Juan Rulfo, eres una especie de fantasma: Todos te ven, te sienten, te hablan pero nadie cree que eres real, eres un fantasma... (Ex dirigente del MRTA).

Mientras tanto, en la región, el PCP-SL intensificó sus acciones no sólo en las zonas donde habitualmente actuaba, sino que se proyectó con intensidad en los espacios que el MRTA había abandonado como consecuencia de la pérdida de sus militantes en Molinos. Así, por ejemplo, la paridad de fuerzas que mantenía en la UNCP fue superada por el PCP-SL con el asesinato de algunos militantes emerretistas y el retiro consecuente de otros tantos.

A ello se sumó, la labor cada vez más eficaz de las fuerzas del orden, que facilitó la desarticulación del MRTA en la ciudad de Huancayo.

También en la zona urbana el MRTA ha sido golpeado fuertemente, hay muchos desaparecidos, desapariciones simultáneas, incluso en los años del '91, '92, '93 han desaparecido muchos estudiantes, integrantes del MRTA. Más aún cuando sale esta Ley de Arrepentimiento, ahí es donde muchos buenos cuadros de la zona urbana han sido desaparecidos. Y entre ellos también hay gente sobreviviente de Molinos, que caen después. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P179, Huancayo (Junín), 20 de junio de 2002. Mujer, militante del MRTA).

Ante el retroceso del MRTA, el PCP-SL avanzó rápidamente en el campo. Muchos testimonios dan cuenta de esta situación:

[...] después de que había el enfrentamiento, creo que hasta hoy, ya no se le ha visto a los MRTA, pero había habladurías de que andan dos, tres, así nomás dijeron, pero yo, francamente desde esa fecha no he visto a nadie ya, después del enfrentamiento, se han desaparecido total.... hasta hoy. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P201, Curimarca, 6 de junio de 2002. Varón, testigo de la presencia del MRTA en Curimarca).

[...] el MRTA, desaparece, ya no tuvo presencia ni en Curimarca ni en ninguna parte. En cambio, éstos [los militantes del PCP-SL] si continuaron [...] inclusive llegaban al colegio de Yauli, le hacían marchar a todos los alumnos, a los padres de familia que estaban trabajando, ahí les hacían marchar por todas las calles, viviendo al camarada Gonzalo. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P214, Huancayo (Junín). Mujer).

Un año después de los sucesos de Molinos y habiendo logrado reorganizar sus fuerzas, el MRTA ejecutó su última acción de envergadura en el valle del Mantaro: el 27 de abril de 1990, aproximadamente sesenta miembros del MRTA atacaron el puesto policial del distrito de Chupaca, ubicado a 12 Km. al oeste de la ciudad de Huancayo, y ocuparon la capital del distrito. Luego del ataque, que duró dos horas, se retiraron sufriendo dos bajas.

A mediados de 1991, los subversivos habían logrado formar algunos destacamentos armados en Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba, los que operaron hasta 1993. Ese año, como consecuencia de la ofensiva del Ejército, se replegaron a la Selva Central. El repliegue hacia la provincia de Chanchamayo, la recomposición de sus filas en ella, le permitió sobrevivir hasta 1998, desarrollando constantes enfrentamientos con patrullas militares donde se registraban muertes de ambos lados; paulatinamente el Ejército fue diezmándolos y reduciendo el espacio donde se movían hasta desaparecerlos casi por completo.

En suma, para el MRTA, Molinos constituyó un punto de inflexión en el conflicto armado interno en la región central. En ese sentido, el Ejército apareció como un organismo eficaz en su lucha contra la subversión; en tanto, el MRTA, duramente golpeado, se replegó tiempo después

hacia la selva central, aislándose, y dejando el terreno libre al PCP-SL, que ocupó gran parte de los espacios donde el MRTA se había asentado desde años atrás.

2.7.8. Conclusiones

Este caso ilustra tanto la estrategia equivocada del MRTA, como a una tropa del ejército peruano con capacidad de reacción inmediata, que se defiende ante el ataque directo del MRTA, pero que carece de una estrategia contra subversiva con un plan de inteligencia más certero. El equipo de investigaciones especiales de la CVR ha encontrado múltiples indicios que lo lleva a concluir que el ejército ultimó también a un grupo de emerretistas que se había rendido finalmente. Igualmente ha quedado demostrado por la información recogida, que el ejército asesina extrajudicialmente y desaparece a pobladores inocentes, en su desesperación por solucionar el conflicto armado interno, aniquilando y borrando del mapa cualquier indicio y sospecha de subversión sin miramiento alguno, manejando poca o nula información, a lo que se suma una gran arbitrariedad.

Es cierto que el encuentro fatídico entre el ejército y el MRTA en pampa Puyhuan, marcó un punto de quiebre en la historia del MRTA que quedó derrotado en la región del centro, pero también no debemos negarnos el hecho que esta acción se llevó a cabo con un alto riesgo y costo para pobladores inocentes que nunca pensaron tener la pésima suerte de encontrarse físicamente próximos a un hecho que terminó en un enfrentamiento de guerra, al cual se vieron directamente afectados también.

2.8. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CASO DE LOS ASHÁNINKAS

«Para nosotros dónde vamos a ir, si es nuestro. Sabemos que los colonos en la ciudad tienen su chacra, pero nosotros dónde vamos a ir. Luchar, bien morir o recuperar nuestro terreno».¹

Este estudio tiene como objetivo principal reconstruir los procesos del conflicto armado interno y sus efectos entre la población indígena de la Selva Central.²

A diferencia de otras regiones del país, el componente cultural constituye un elemento clave para comprender los procesos de violencia política vividos por estos pueblos indígenas. Esta marca especial se puede apreciar en las condiciones que posibilitaron el inicio de la violencia en la región, los factores que la mantuvieron y el proceso de reconstrucción.

La Selva Central del Perú es el territorio tradicional de los pueblos Asháninka, Yánesha y Nomatsiguenga. Estos pueblos indígenas —principalmente los Asháninka— fueron muy golpeados por el conflicto armado interno debido al alto número de víctimas directas, situación que ha exacerbado la exclusión y marginación que han sufrido durante siglos. No existen datos precisos, pero la mayoría de especialistas e instituciones calculan que de 55 mil Asháninkas, cerca de 10 mil Asháninkas fueron desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené, 6 mil personas fallecieron y cerca de 5 mil personas estuvieron cautivas por PCP-SL Luminoso, y se calcula que durante los años del conflicto desaparecieron entre 30 y 40 comunidades Asháninka³.

2.8.1. Preguntas e hipótesis centrales

¿Qué tipo de relación se desarrolló entre la población asháninka y los grupos subversivos? Dado el carácter autoritario de los proyectos de PCP-SL como del MRTA, la relación entre ellos y los asháninkas reprodujo el mismo tipo de relación discriminatoria que existe entre los colonos mestizos y los pueblos indígenas amazónicos.

¹ Varón, 36 años, autoridad comunal. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

² La región del país conocida como «Selva Central» comprende las provincias de Satipo y Chanchamayo del departamento de Junín, y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. También se suele incluir en esta región a zonas fronterizas con el departamento de Ucayali, en particular al Gran Pajonal. La mayor parte de este territorio está ubicado en la selva alta, razón por la cual esta región ha sido conocida tradicionalmente como «la montaña».

³ En 1995, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Francis Deng, visitó esta zona para dar a conocer la situación de los Asháninka. En 1995, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre la desaparición de estas comunidades Asháninka.

En segundo lugar, hemos constatado que durante los años de violencia los Asháninka hicieron uso de recursos culturales y psicológicos para enfrentar el impacto del conflicto armado interno; sin embargo muchos de estos recursos socioculturales no les son siempre útiles para manejar las secuelas del conflicto armado interno. La serie de tensiones al interior de las comunidades Asháninka, y entre las distintas comunidades fue funcional a los planes de PCP-SL para asentarse en la zona y ganar adeptos. Estas tensiones son herencia de la desigual participación en el conflicto armado interno, en particular, el acercamiento o rechazo a PCP-SL durante la violencia, así como la convivencia actual entre víctimas y victimarios.

2.8.1.1. Importancia del estudio

Esclarecer y dar a conocer el conflicto armado interno en la Selva Central, largamente ignorado por la opinión pública nacional, se convierte en una tarea indispensable de la CVR. Denunciar estos hechos de destrucción masiva de una parte importante de las comunidades Asháninka, se torna en una acción perentoria si queremos contribuir a su reconstrucción y al NUNCA MÁS.

El estudio de estos hechos nos permitirá proporcionar nuevas dimensiones al objetivo de la reconciliación y convivencia justa y democrática en nuestro país. Al mismo tiempo, nos permitirá identificar cuáles son los desafíos que tienen enfrentar el Estado y la sociedad civil para alcanzar este objetivo. Ninguna de estas preguntas ni el estudio del proceso en su conjunto han merecido la atención nacional que merece por su trascendencia. Esta tarea constituye, precisamente, una de los desafíos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación no puede dejar de afrontar.

2.8.1.2. Trabajo de campo y Estrategia de recolección de datos

La investigación discute el proceso del conflicto armado interno en Selva Central. Sin embargo, dada la amplitud y la complejidad social de esta región, el estudio se enfocó en las zonas que concentran la mayor parte de la población asháninka⁴ en la región de la Selva Central y que fueron afectados de manera directa por el conflicto armado interno.

Con el objetivo de entrevistar a pobladores y autoridades de las comunidades Asháninka y discutir con ellos los resultados de los informes se realizaron cuatro visitas a la zona en tres fechas espaciadas: 16 al 29 de septiembre, el segundo del 10-29 de octubre y el tercero del 19 de

noviembre al 9 de diciembre. Del 15 al 25 de enero se entrevistó a representantes de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI), y la Comisión de Emergencia Asháninka (CEA) en la ciudad de Satipo.

Inicialmente se propuso realizar el estudio en profundidad en tres zonas: los distritos del Río Tambo y Pangoa en la provincia de Satipo, y la región de Puerto Bermúdez en la provincia de Oxapampa. Asimismo se previó seleccionar en cada una de ellas dos comunidades nativas. Los criterios de selección consideraron los temas e hipótesis de la investigación, identificando aquellas comunidades que permitan visibilizar problemáticas específicas. Asimismo se tomaron en cuenta las sugerencias de las organizaciones indígenas, ONGs y oficinas de la CVR en la zona⁵.

Debido a las difíciles condiciones de acceso y a la presencia de PCP-SL cerca de las comunidades previstas en el distrito de Pangoa, se decidió elegir, como alternativa, la zona de la carretera Marginal, cercana a ciudades importantes en la provincia de Satipo. Aquí se seleccionó dos comunidades: Tahuantinsuyo, en el distrito de Mazamari, víctima de una matanza en 1993; y Cushiviani, en el distrito Río Negro, donde conflictos interfamiliares e intracomunales se agudizaron durante la violencia.

En cuanto a la provincia de Oxapampa, no se pudo llevar a cabo el estudio en profundidad, pues la organización indígena regional de la zona señaló que habían acordado no hablar sobre temas relacionados del conflicto armado interno. Además, la coyuntura de elecciones municipales había generado algunos conflictos entre las comunidades indígenas y las comunidades colonas. Por ello, la información sobre esta zona se basa en publicaciones y algunos testimonios recogidos en la zona por la oficina de enlace de la CVR de La Merced.

En el distrito Río Tambo se eligieron tres comunidades. La comunidad de Quempiri, en la margen derecha del río Ene, era relativamente accesible y era un caso emblemático para conocer el proceso de inserción de PCP-SL desde el Apurímac, las condiciones de vida en cautiverio con PCP-SL, y el rescate por el Ejército y rondas. Para conocer el proceso de inserción en las comunidades del río Tambo, se eligió a Puerto Ocopa, ubicada en la entrada a este distrito desde Satipo y al río Tambo, así como a Otica, ubicada en el Medio Tambo, una de las comunidades cerca de la «Frontera». Puerto Ocopa permitía también conocer el proceso de sujeción de la población por los mandos senderistas y la formación de rondas nativas por propia iniciativa. Otica, además, permitía describir las formas de resistencia de la población frente a PCP-SL, su escape y desplazamiento hacia comunidades en busca de seguridad.

⁴ El resto de la población Asháninka que vive en otros departamentos constituye una minoría al interior del pueblo Asháninka.

Asimismo se incluyó el caso de dos organizaciones indígenas para conocer su visión sobre el conflicto armado interno y sus respuestas frente a ella: La Central Asháninka del Río Tambo, organización representativa de esta cuenca; y la Comisión de Emergencia Asháninka, cuya sede se encuentra en la ciudad Satipo y tiene como bases a diferentes comunidades de los distritos de Satipo.

2.8.2. Escenarios del conflicto armado interno en selva central

El origen del conflicto armado llegó a la Selva Central a principios de la década del 80, cuando un importante contingente de PCP-SL Luminoso (PCP-SL) ingresó a la región por los ríos Apurímac y Ene, huyendo de la contraofensiva militar de Ayacucho. En un principio, ésta fue una zona de tránsito, de aprovisionamiento y de refugio para los grupos alzados en armas que actuaban en las zonas andinas de Junín y Ayacucho, hasta que finalmente lograron afincarse en la zona.

Los primeros senderistas en llegar al Ene lo hicieron junto con grupos de colonos que se dedicaron al cultivo de la coca y que se habían asentado en la margen izquierda del río Ene. Este «Comité de Colonización del río Ene» sirvió como «punta de lanza» para insertarse en esta región e iniciar sus actividades proselitistas.

Hacia mediados de los 80, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), comenzó a expandirse también hacia la región amazónica colindante con la sierra central, huyendo del valle del Mantaro y de las serranías de Pasco.

El MRTA desarrolló sus actividades en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo, mientras que PCP-SL se ubicó, principalmente, en la provincia de Satipo. La zona fronteriza, en las inmediaciones de la ciudad de Pichanaki, sobre el valle del Perené, constituyó una zona que fue peleada por ambos grupos subversivos.

En la región de Selva Central podríamos distinguir cuatro grandes zonas, ya que en cada una de éstas se ha vivido la violencia de una manera diferente. Cada una corresponde, de manera general, a una provincia diferente:

La primera incluye el valle del Perené y forma parte de la provincia de Chanchamayo. En esta zona cohabitan colonos de origen serrano, y nativos Asháninka y Llaneza y fue donde estuvo más activo el MRTA, cuyos militantes eran llamados «los negros» por la población local, llegando a desplazar a PCP-SL Luminoso, que limitó su presencia a acciones esporádicas.

⁵ Las oficinas descentralizadas y los equipos de recojo de testimonios, en algunos casos ya habían ingresado a la zona. Por lo cual, contaban con información importante para la selección de las comunidades de acuerdo a los objetivos de la investigación.

La segunda zona corresponde a la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco. Es una zona habitada por colonos y Asháninkas (principalmente en el valle del Pichis), y cuenta con la mayor concentración de población Yánesha. En esta zona también tuvo una fuerte presencia el MRTA, pero fueron expulsados de las zonas indígenas a principios de 1990, limitándose luego a acciones aisladas en las ciudades o ataques a los cuarteles del Ejército. Un contingente del PCP-SL también actuó en la zona de manera esporádica.

La tercera zona corresponde a la provincia de Satipo. El grupo subversivo con mayor presencia en la provincia de Satipo fue (y sigue siendo todavía) PCP-SL Luminoso. En 1988 la provincia de Satipo fue declarada en Estado de Emergencia. En 1989, PCP-SL Luminoso intensificó sus acciones llegando en 1990 a tener un control absoluto en todo el río Ene y en el Alto Tambo (hasta el codo de Poyeni). Existe una base de los Sinchis en Mazamari desde los 60, y un cuartel del Ejército (Natalio Sánchez) en Satipo, además de otras guarniciones y destacamentos que se fueron creando como parte de la lucha contrasubversiva en los valles del Tambo y del Ene, y en el distrito de Pangoa.

Satipo también ha sido la única zona en la Selva Central en la que se llegaron a crear Rondas y Comités de Autodefensa. La mayoría de estas rondas fueron promovidas por el Ejército para enfrentarse y detener el avance de PCP-SL Luminoso, aunque también muchas otras fueron creadas por iniciativa propia.

En esta tercera zona podemos distinguir tres grandes sub-zonas: (a) La primera incluye las principales ciudades de la provincia conectadas por la carretera Marginal así como las zonas rurales aledañas a estas ciudades. Esta zona corresponde, en gran medida, al territorio de los distritos de Río Negro, Satipo y Mazamari. Es la región existen numerosas comunidades Asháninka y Nomatsiguenga, así como asentamientos de colonos mestizos. (b) El distrito de San Martín de Pangoa, limítrofe con el distrito de Río Tambo a través de la zona alta de la cuenca del río Ene. En esta zona se concentra la mayor parte de las comunidades Nomatsiguenga. (c) La última subzona corresponde al distrito del Río Tambo, donde la mayoría de la población es Asháninka y una minoría colona.⁶ La vía de comunicación por excelencia son los ríos Ene y Tambo, que vinculan a todas las comunidades. La comunidad de Puerto Ocopa, la puerta de ingreso al distrito, se conecta a través de una carretera afirmada con la ciudad de Satipo.

El río Ene constituye un corredor fluvial que se relaciona con Ayacucho al ser continuación del río Apurímac. Fue precisamente a través de este río por donde llegaron muchas familias Asháninka huyendo de la presión de la colonización sobre sus tierras en la selva de Ayacucho, durante la década del 60, y posteriormente senderistas y narcotraficantes. El río Tambo se intercepta con el río

⁶ El distrito del Río Tambo concentra el mayor número de población Asháninka de la provincia de Satipo. Este distrito fue creado el 27 de enero de 1943. De acuerdo al censo de 1993, la población total del distrito se calculaba en 10,704

Ucayali, permitiendo el acceso a la ciudad de Pucallpa, y luego a través de la carretera con Aguaytía, Tingo María y el Alto Huallaga, o por río hacia Iquitos. Por otro lado, desde Satipo se puede tener acceso por carretera a la sierra central (Tarma, La Oroya, y el valle del Mantaro). Esta también fue la misma ruta que emplearon las familias campesinas provenientes de la sierra sur, y luego los senderistas.

La cuarta y última zona principal la constituye la meseta del Gran Pajonal habitada por el pueblo Ashéninka, que pertenece administrativamente al departamento de Ucayali. PCP-SL Luminoso pretendió ingresar a este territorio pero fue rechazado de manera categórica por este pueblo.

2.8.3. Primeras acciones del PCP-SL

Entre los años 1985 y 1988, los mandos senderistas realizaron asesinatos selectivos a supuestos delincuentes o «soplones» en los poblados de colonos. Ante el avance de PCP-SL y los primeros ajusticiamientos en la zona, los colonos que no simpatizaban con el partido huyeron fuera del valle del Ene desplazándose a sus comunidades de origen o migrando hacia Satipo y a otras ciudades de la región. Por su parte, la población Asháninka sentía temor al enterarse de estas ejecuciones, pero al mismo tiempo reconocía un aspecto positivo en estos hechos, ya que la mayoría de colonos eran considerados como invasores de su territorio o como gente de «mal vivir» que había traído consigo el narcotráfico, la prostitución, y el abuso. Por estos años, PCP-SL también expulsa a las firmas de narcotraficantes de la zona.

Las acciones del PCP-SL en la zona han seguido un patrón similar en casi todas las comunidades, que también ha sido empleado en otras regiones del país. Inicialmente, los mandos senderistas ayacuchanos convocaron clandestinamente a algunos profesores y promotores Asháninkas. Estos últimos se caracterizaban por tener mayor nivel de instrucción, contacto con la ciudad y movilidad por la zona. Debido a estas características, eran más proclives de aprehender el proceso de adoctrinamiento senderista.

Alrededor de 1988, el PCP-SL comenzó una campaña más agresiva de acciones en la zona, incrementando su presencia a través de la visita más regular a las comunidades nativas. Para ello, utiliza como intermediarios a aquellos Asháninka adoctrinados. Estos últimos cumplían un papel de enlace entre los mandos andinos y las comunidades Asháninka. Para 1989, la presencia del PCP-SL en la zona era generalizada y abierta. Los mandos «colonos» llegaban cada fin de semana para

personas, de las cuales el 97 % son Asháninka (10,338) y el resto es población colona proveniente de los departamentos de Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica entre otros.

coordinar y «concientizar» (adoctrinar) a las autoridades de la comunidad. Un caso típico para conocer la estrategia de inserción en una comunidad nativa es el caso de Puerto Ocopa:

Para PCP-SL, tomar el control de la comunidad de puerto Ocopa era clave, al ser la entrada al distrito y al río Tambo desde Satipo.

Un elemento importante en la estrategia utilizada por PCP-SL para el reclutamiento y adoctrinamiento de Asháninkas, fue la oferta persistente de promesas que se podrían calificar de «utópicas». Según los testimonios recogidos, PCP-SL les ofrecía de todo: carros, dinero, y todo tipo de bienes venidos de fuera.

El caso de Otica ilustra cómo los líderes Asháninka jugaron un rol importante en convencer al resto de la comunidad para aceptar las promesas «utópicas» de PCP-SL.

Otica, el rol de los líderes en la simpatía inicial hacia el PCP-SL

HP, líder de Otica, había destacado como promotor de salud y como laboratorista. Por ello, viajaba frecuentemente a distintas comunidades de los ríos Tambo y Ene. A mediados de la década del 80, HP había sido captado por la base de PCP-SL en Puerto Prado.

La «política» de PCP-SL ingresa poco a poco a la comunidad a través de la difusión que realiza HP. Gracias a su credibilidad y aceptación en la comunidad, gana la simpatía de los comuneros hacia PCP-SL. «*HP nos hablaba que había esa política para los pobres, que todo podía ser diferente...*»⁷.

Dentro de este contexto, se produjo la primera incursión de PCP-SL en Otica. El 29 de octubre de 1987, saquean la posta y la casa de los trabajadores de las dos ONGs presentes en la comunidad (el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP y «Save the Children»). Estos tuvieron que abandonar la zona por seguridad.

Inicialmente, la comunidad había expresado un contundente rechazo a PCP-SL. Sin embargo, la labor de convencimiento de HP hizo que la comunidad asumiera estas acciones como un «error» de los senderistas.

El mismo año de la incursión, HP fue elegido presidente de la comunidad. A partir de entonces, Javier, el mando político de PCP-SL en Puerto Prado y compadre de HP, comenzó a visitar Otica de manera periódica. Ambos realizaban un trabajo de «politización» en cada clan familiar. Cada familia extensa vivía en una sola vivienda y tenía como jefe de familia a la persona mayor, padre, abuelo o bisabuelo.

Luego, comenzaron a llegar periódicamente dos mandos colonos. Realizaban charlas, con discursos similares a los de Poyentima. Después de unos meses, éste informó a las familias que PCP-SL iba a crear un «nuevo estado» y que la comunidad tenía que aceptarlo. «*Él era el jefe, él decía, uno tenía que aceptar. ¡Cómo no vas a aceptar si es el jefe!*»⁸.

⁷ Carlos. Otica, Septiembre del 2002.

⁸ Reunión con mujeres. Otica, Noviembre del 2002.

Evidentemente, no todos los Asháninkas aceptaron la presencia del PCP-SL. Muchos no entendían exactamente en qué consistía la ideología senderista. Otros, que habían tenido contacto con las ciudades, dudaban seriamente si las promesas podían cumplirse:

Decían que iban a luchar contra el ejército... que iban a tomar el poder. Yo le decía a la gente, cómo va a ser posible? Eso no es así. Pero no entendían. Como les ofrecían cosas, tiendas, carros... pero yo no creía, ¿cómo van a vencer al Ejército? Si son un montón, están en Lima, están en todas partes... Por eso me fui.⁹

Otros se habían enterado de los daños y asesinatos cometidos por el PCP-SL en Ayacucho. Un comunero de Quempiri cuenta que en Chichireni había escuchado sobre el PCP-SL, e intenta huir, pero es capturado y llevado con el resto de la gente.¹⁰ Otro caso es el de un pastor evangélico de Quempiri, quien aprovechando un viaje a Satipo para un curso de capacitación del ILV, decidió refugiarse en dicha ciudad. Como estos casos, hubo otros que rechazaron las propuestas del PCP-SL. Algunos lograron escapar a tiempo del control del PCP-SL, otros huyeron a esconderse en el monte, y unos pocos se desplazaron a las ciudades cercanas, como Satipo. Para entonces, la mayoría de colonos que no simpatizaban con el PCP-SL ya habían abandonado el valle del Ene y se habían desplazado hacia Satipo o hacia otras ciudades. A diferencia de los colonos, el desplazamiento hacia la ciudad no era una opción real para las comunidades Asháninka. En primer lugar, porque no podían huir ya que el PCP-SL había cercado la zona y controlaba todos los ingresos y salidas del lugar. En segundo lugar, porque no tenían a dónde ir. Pero, sobre todo, porque tradicionalmente los Asháninka prefieren buscar refugio en «el monte» o bosques tropicales de la región, antes que vivir en la ciudad.

Para lograr el control de las comunidades, PCP-SL hizo uso de diversos mecanismos de dominación y disuasión. Uno de los principales medios utilizados fue el miedo. Los Asháninka eran amenazados constantemente con castigos, torturas y la muerte, si no cumplían con lo que se les indicaba o incluso si alguien manifestaba su descontento o desconfianza frente al partido.

En Puerto Ocopa, por ejemplo, los mandos amedrentaban y amenazaban a quienes se rehusaban a comprometerse:

Se paseaban de día con bolsitas de arena haciendo creer que era munición, y granadas de juguete. Amenazaban en la chacra. Cada semana hacían reuniones¹¹; «...Vas a tu casa, cuando escuchen que hay reunión vienen, si no los mato»¹²; «El que no quiere estar con el partido le vamos a matar».¹³

⁹ Matías Antúnez. Otica, Septiembre del 2002.

¹⁰ Chichireni es una comunidad situada en el distrito de Pangoa, en la margen derecha del río Ene.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Ernestina, 30 años aproximadamente. Puerto Ocopa, Noviembre del 2002.

El PCP-SL fomentaba la vigilancia y las acusaciones mutuas. Los «mandos» y los simpatizantes actuaban como los *«mil ojos y mil oídos del partido»*:

Las gentes que iban infiltrando en los grupos que tomaban, lo que escuchaban iban a informarle. Mientras que el pueblo no sabía ya estaban contactados. A veces decían, no vas a hablar porque hay mil ojos, mil oídos. Mentira. Ese palo, ese árbol era mil ojos, mil oídos. Era mentira, ese no era, eran personas.¹⁴

Igualmente se expande un clima de desconfianza al interior de las comunidades, e incluso al interior de las familias. También se tenía temor hacia las fuerzas del orden. PCP-SL logró convencer a los Asháninka que los militares iban a matarlos o violarlos. De esta manera colocó a la población civil en contra de los militares y, además, militarizó a la comunidad:

(PCP-SL) ha hecho trincheras para que estén cuidando de los militares... Te ha dicho que no te vayas, te (va a) matar, te va a quitar a tu señora o te va a violar (los militares) y por eso se ha asustado... Ha dibujado PCP-SL (a) una persona que estaba ahí en papel, una persona que estaba violando... PCP-SL le ha enseñado y le ha dicho, si sales, si vas con militares, así le van a violar a tu mujer y a ti mismo. (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P737. Varón, poblador de Quempiri)¹⁵

El PCP-SL logró aislar física y psicológicamente a los Asháninka. Mantenía un control estricto sobre el territorio «liberado»: había cerrado todos los aeropuertos y restringido el acceso fluvial. Sólo podían navegar por el río quienes tenían previa autorización del partido.

En esta época, PCP-SL comenzó a llevarse a los niños Asháninka entre 10 y 15 años para ser adoctrinados y entrenados militarmente. Un joven, llevado por PCP-SL cuando tenía 10 años, contó que PCP-SL

[...] enseñaba cómo matar, saquear, cómo traumar a la gente, asustar para que huyan y quedarse con las cosas. Nos llevaban para saquear, mataban a las gentes (Asháninkas). A las mujeres les enseñaban a trabajar. Una mujer era comando. Mataban a la gente que flojeaba, (que) estaban pensativa, o por traición a tu patria.

El mismo joven relató cómo PCP-SL los llevó a Tacna, Ayacucho, Cerro de Pasco, donde se escapó. Muchas familias se resistían, escondían a sus hijos o los enviaban al monte para evitar que PCP-SL se los llevase. El adoctrinamiento de los niños y jóvenes incluía el entrenamiento militar y la «concientización».

¹⁴ Varón, 45 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

¹⁵ Informante varón. Quempiri, Setiembre del 2002.

Hacia 1989, PCP-SL ya había conformando dos comités populares en Otica. Para reforzar esta nueva situación, PCP-SL cambiaba los nombres de la gente por otros nuevos, y eliminaba cualquier referencia a lazos previos:

La gente no se trataban «nosháninka»¹⁶, sino como «compañero». Cuando a mí me llamaron compañero, me enojé, pero la gente se acostumbraba a decirle así. Uno dijo así: estamos en el nuevo estado.¹⁷

Durante 1989, PCP-SL incrementó sus acciones en la zona. Realizaban incursiones para saquear las comunidades, sobre todo si había misiones, proyectos de desarrollo o comerciantes. Estos saqueos iban acompañados del adoctrinamiento inicial de la población a través de reuniones que llegaban a durar varias horas.

El 13 de febrero de este año, PCP-SL asesinó a Isaías Charete, presidente de OCARE, en la comunidad nativa Tzomaveni, en el Ene¹⁸. Ese mismo año la comunidad Cutivireni, también ubicada en el Ene, fue atacada varias veces¹⁹. La comunidad de Cutivireni y las comunidades del bajo Tambo fueron las que mostraron una mayor resistencia al avance de PCP-SL, y por ello sufrieron ataques reiterativos.

¹⁶ «Nosháninka» significa amigo, hermano Asháninka.

¹⁷ Varón 36 años. Comunidad Nativa Puerto Ocopa, 2000. Testimonio recogido por el CAAAP.

¹⁸ OCARE es la Organización Central Asháninka del Río Ene, la federación que agrupa a todas las comunidades ubicadas en el valle del Ene.

¹⁹ En uno de estos ataques, el 14 de noviembre, PCP-SL asesinó a seis personas.

Cutivireni, una comunidad desplazada por vía aérea

Desde 1988, PCP-SL incursionó en Cutivireni, donde adoctrinaba a la población y reclutaba a jóvenes. Desde entonces, las incursiones, saqueos, secuestros de jóvenes y asesinato de opositores se fueron multiplicando. Después de sufrir varios ataques, los Asháninka de la comunidad que no se habían plegado a PCP-SL huyeron al monte, a una parte alta del valle llamada Tzibokiroato. Sin embargo, aquí también fueron atacados por PCP-SL en varias ocasiones.

Finalmente, en setiembre de 1991, un grupo de 169 Asháninkas de Cutivireni, con el apoyo del padre franciscano Mariano Gagnon, párroco de la misión, fueron trasladados por vía aérea al otro lado de la cordillera, al valle del Urubamba, que corresponde al territorio tradicional del pueblo Matsiguenga²⁰. Aquí encontraron refugio en la comunidad Matsiguenga de Kiriketi (o Kirigueti), y posteriormente crearon una nueva comunidad autónoma en dicho valle. Actualmente, un grupo sigue viviendo allí, mientras que otros se han reubicado en el río Tambo.

En 1991, el Ejército peruano instaló en Cutivireni una base militar y se formó una Ronda o Comité de Autodefensa Asháninka. Cutivireni se convirtió en un lugar de refugio o «núcleo poblacional», llegando a recibir a más de dos mil Asháninkas desplazados que provenían de otras comunidades del Ene, como Kamantavishi, Kachingari, Tinkareni, Potoshi, y Shaboroshari.

Hacia fines de 1990, PCP-SL tenía el control de todo el Ene y la parte alta del Tambo (hasta el codo que forma el río frente a la comunidad de Poyeni). A esta zona se le comenzó a llamar «la frontera».

2.8.4. El «Nuevo Estado» En El Monte: La Vida De Las «Masas»

Entre 1990 e inicios de 1992, el Ejército peruano realizó varios operativos en las cuencas del Tambo y el Ene, atacando varias comunidades controladas por PCP-SL. Sin embargo, PCP-SL y las comunidades ya se habían preparado ante esta posibilidad. Así, la población de estas comunidades huyó compulsivamente al monte. En Quempiri, por ejemplo, el 13 de mayo de 1990, luego de escuchar a tres helicópteros del Ejército, la comunidad huyó hacia sus chacras. En el Alto Tambo, en Puerto Ocopa, un grupo de docentes que había escapado en meses previos de la comunidad, coordinó con los Sinchis la expulsión de PCP-SL de la comunidad. Teniendo a tres de estos profesores como guías, el 14 de mayo de 1991 los Sinchis ingresaron a Gloriabamba, una comunidad ubicada a media hora de Puerto Ocopa. Al escuchar las bombas en Gloriabamba, la población de Puerto Ocopa huyó hacia el monte.

²⁰ Este dramático suceso adquirió gran notoriedad mundial gracias al excelente reportaje del periodista peruano Gustavo Gorriti, quien ganó un premio internacional precisamente por este trabajo. Posteriormente, el franciscano canadiense, padre Mariano Gagnon, párroco de Cutivireni durante muchos años, y protagonista principal en esta huida ha publicado un libro contando con detalle esta experiencia.

Mientras tanto, en el río Tambo, el asesinato del líder Asháninka Pablo Santoma fue determinante para que las comunidades del Bajo Tambo, bajo el liderazgo de Poyeni, formaran el «Ejército Asháninka» o ronda de Poyeni.

Los mártires Asháninka del Tambo

Desde fines de 1989, un grupo de dirigentes de la CART tenía la idea de formar un «Ejército Asháninka» para oponerse a PCP-SL. Pero no lograron implementarlo debido a que HP, también dirigente de la CART, era mando senderista.

En 1990, el VI Congreso CART expresó oficialmente su rechazo a PCP-SL. En pleno congreso, un contingente de 60 senderistas, entre colonos y Asháninkas, al mando de HP, ingresó a la comunidad de Mayapo, donde se realizaba el evento. La mayoría de delegados logró escapar, con la excepción de Pablo Santoma y de dos dirigentes invitados: Oscar Chimanca (de CONOAP²¹) y Dante Martínez (de CONAP²²). PCP-SL los capturó y llevó río arriba, a la comunidad Anapati, donde luego fueron ejecutados. Cuentan que: «Pablo Santoma estaba tranquilo, tomaba masato y cantaba, mi suegro Andrés Torres le dice “por que no te escapas, nadie te vigila”. Pablo le responde: si me escapo te culparán a ti de haberme dejado escapar y te podrían matar a ti y a tu familia. Si voy a morir, debo hacerlo solo, por mi pueblo»²³. Así, Santoma, Chimanca y Martínez se convirtieron en los «mártires» Asháninka de la lucha contra PCP-SL.²⁴

Frente a estos, Emilio Ríos, jefe de Poyeni, junto con Jaime Velásquez, convocó a una Asamblea Extraordinaria de la CART, en la que se confirmó la decisión de formar un ejército Asháninka. Se eligió como nuevo presidente de la federación al alcalde del distrito, el líder Asháninka Pedro Tomón. Poyeni, además, se convirtió en comunidad de refugio para los Asháninka que buscaban protección.

El 23 de setiembre de 1990 se creó formalmente el Comité Central de Autodefensa y Desarrollo Asháninka No. 25; oficialmente reconocido por la jefatura del Ejército en Huancayo²⁵. El primer presidente del Comité Central fue Emilio Ríos, quien adoptó el nombre de combate «Kitóniro»²⁶. El Alcalde de la municipalidad del Río Tambo y a la vez presidente de la CART se hizo cargo del aspecto logístico. Durante 4 años, el Comité asumió un rol importante en la organización y liderazgo de la comunidades del Bajo Tambo, mientras que la CART adquiría un perfil bajo, ya que el principal tema de preocupación de los Asháninka era su defensa frente al PCP-SL.

El «Ejército Asháninka» pidió apoyo a la Marina, pero ésta se la negó. Durante 1990, el Ejército Asháninka comenzó a patrullar la zona. El mismo año se produjeron varios ataques contra la Fuerza Principal de PCP-SL, sobre todo en Cheni y Anapati, comunidades vecinas a Otica. Estos

²¹ CONOAP, Confederación Nomatsiguenga y Asháninka del Pangoa.

²² CONAP, Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana. Organización indígena nacional.

²³ Isabel Oliviano de la comunidad de Cheni y actual regidora de la Municipalidad. En el bote a Betania, 18- 11-02.

²⁴ En todos los congresos son recordados estos dirigentes. En la pancarta de cada congreso son consignados sus nombres.

²⁵ Los presidentes del Comité Central posteriores a Emilio Ríos, fueron Pablo Zumaeta, José Antúnez, Avelino Portero. Actualmente lo preside César Domínguez de Poyeni, vicepresidente Joel Santillán de Betania.

²⁶ Kitóniro, en Asháninka significa alacrán.

continuos ataques de parte de la Marina, si bien no causaron muertes, obligaron a la población, ya agrupada en Comités de Base senderistas, a desplazarse hacia otros lugares.

Como resultado, desaparecieron 14 comunidades Asháninkas de la zona del alto Tambo²⁷ y todas las comunidades del río Ene (30 en total). Cerca de 10 mil Asháninkas fueron conducidas por PCP-SL al monte o huyeron.

En el monte, PCP-SL reagrupó a los Asháninka en lugares preparados anteriormente, retirándose progresivamente hasta llegar a la zona de Alto Tsikireni, en la cuenca del Ene²⁸, o a otros lugares que no habían sido ocupados tradicionalmente por las comunidades. Generalmente, se trataba de lugares que proporcionaban escondite y protección frente a posibles ataques aéreos de parte de las Fuerzas Armadas. Por ello, los comités populares se encontraban en medio del bosque, algo alejadas de los ríos, y muchas veces en lugares elevados, para así poder tener una mejor posición de vigilancia. Aquí, PCP-SL dividía a las comunidades en grupos más pequeños llamados «pelotones». Dos o tres pelotones conformaban un Comité Popular. Los pelotones eran ubicados en zonas estratégicas de tal manera que siempre pudieran tener acceso a las chacras, así como a rutas de escape. En principio, cada familia tenía una choza, y el conjunto de éstas formaba una especie de círculo. Los pelotones también contaban con un ambiente para centralizar los alimentos que se distribuían luego, y una especie de cancha donde se ejercitaba a la población y realizaban las reuniones. A unos quince minutos de camino, se ubicaba un puesto de vigilancia, donde hacían guardia dos varones. Cada semana se cambiaban las claves de identificación que permitían el ingreso o salida del pelotón

Un día normal en el pelotón comenzaba a las 3:00 a.m. Primero se levantaban los mandos y despertaban a la masa. La primera orden de los mandos era acicalarse y arreglar las pertenencias en canastas «listos para escapar si venían los miserables (Ejército)». Luego, por turnos, las mujeres preparaban la comida. Estaba prohibido hacer fuego durante el día, para evitar ser detectados por los militares o ronderos. La comida era servida a las 5:00 a.m. Primero comían los mandos:

Quando (los mandos) comen una cucharada, dicen «¡viva Gonzalo!» y recién vienen los demás (la masa) a servirse». (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P737 .Varón, poblador de Quempiri)

Los mandos, además, se servían la mejor comida, mientras que la masa tenía que comer, en muchos casos, cosas que eran consideradas como desperdicios o impropias para seres humanos: «sopa aguada nomás, hoja de chalanca nomás comían, tierra, hasta culebra». Después de comer, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. la masa trabajaba en las chacras y regresaba cerca de las

²⁷ En todo el río Tambo existen 35 comunidades.

²⁸ Testimonio recogido por Leslie Villapolo de Asháninkas refugiados en Puerto Ocopa, entre los años 1993 y 1995.

5:00 p.m. Aquellos que no podían con el trabajo agrícola, como los enfermos y ancianos, se les asignaba tareas apropiadas, como fabricar púas o armas. Los productos de la jornada, como la yuca y el pescado, eran entregados a los mandos logísticos para ser *centralizados* y posteriormente distribuidos.

La Escuela Popular funcionaba para los niños de 8 a 10 años, quienes asistían una hora diaria. Los niños «no jugaban, les decía(n) que tenían que cuidar porque van a venir los militares y les van a matar»²⁹. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P763, Quempiri. Mujer de aproximadamente 38 años, con quinto de primaria .Su esposo es el presidente de la Comunidad)

En la escuela les enseñaban «la sujeción y respetar al Presidente Gonzalo, (la) autocrítica y sujetarse al partido y Presidente Gonzalo, osheki (bastante) canciones». Los niños más grandes, los «niños pioneros», tenían más responsabilidades, tanto en el trabajo diario como en la actividad militar. El entrenamiento militar también era de una hora diaria. El entrenamiento de las milicias era muy duro y había poca comida. Muchas veces los Asháninka sólo se podían alimentar de raíces y gusanos.

Las milicias tenían armas rudimentarias, generalmente arcos y flechas. En el mejor de los casos, tenían escopetas viejas. Sólo los "mandos" poseían armas más sofisticadas como revólveres, fusiles FAL y ametralladoras AKM, obtenidas como botín de guerra luego del asesinato de policías o militares.

Al terminar la jornada, comían y se «bañaban un poco, porque no hay jabón». A las mujeres les obligaban a trenzarse el cabello. Todos debía usar ropas limpias: «harapientas, no importa, pero limpio». En los primeros meses, el día terminaba con la reunión de los miembros de la familia para conversar sobre los hechos del día. A veces cantaban huaynos con letras que PCP-SL les había enseñado y en castellano. Sin embargo, posteriormente, se restringieron todo tipo de reuniones familiares y de visitas, con la finalidad de ir minando todo tipo de relación afectiva que no se base en la disciplina y en el cumplimiento de las órdenes recibidas. En estas reuniones no podían expresarse libremente:

[...] no podía decir cosas malas del partido, no va a decir es difícil trabajar, sino mil ojos y mil oídos les avisan a los mandos. (CRV. BDI .Entrevista en profundidad P737. Varón poblador de Quempiri)

Las manifestaciones de tristeza, así como la falta de apetito, también estaban prohibidas. Eran vistas por los mandos como sospechosas:

²⁹ Informante mujer de Quempiri, 35 años aproximadamente.

[...] cuando están pensativo ((triste), te dice (el mando) ¿en qué estás pensando, seguro piensas escapar!³⁰

La desconfianza y el temor a incumplir las normas establecidas se acentuaron en esta época. En cualquier momento podían ser denunciados por la más mínima infracción. Durante las reuniones semanales convocadas por la Fuerza Local, los que estaban presentes «acusaban» las faltas cometidas por otros miembros del pelotón. Las acusaciones podían recaer incluso sobre miembros de la propia familia. Por ello, un comunero afirma sin dudar: «ahí no hay cariño»³¹. Cuando una persona cometía una falta, hablaba mal del Partido, o demostraba tristeza, todos sabían que debían disculparse a través de la «autocrítica». Esta consistía en «sujetarse» al Partido y al presidente Gonzalo, reconocer ante los demás los errores cometidos y prometer no repetirlos.

Aprendimos a la fuerza. Hacía saludar a su presidente, haber sujeción única al presidente Gonzalo... «Pido la palabra, compañeros. Partiendo con mi más alta sujeción al maestro y guía, querido y respetado presidente Gonzalo, que es le jefe de nuestro partido y revolución». Si no cumples (las tareas o normas dictadas por PCP-SL) , hablas de lo que piensas y sientes, uno mismo se critica: soy vago, ocioso, ¿que diablos a veces pienso!. «Eso es toda mi palabra». Tres veces nomás puedes hacerlo, a la tercera aplican violencia (asesinato).³²

Todos conocían esta regla, y fue aplicada frecuentemente y sin distinciones, no se libraban de ella ni los menores de edad.

Según el testimonio de los Asháninkas que lograron escapar o fueron rescatados, los Comités Populares funcionaban como una especie de «campos de concentración», donde el trabajo forzado, los horarios estrictos, las normas de conducta rigurosas, el incumplimiento de las promesas hechas, y la pérdida de la libertad individual, condujeron a los Asháninka a rechazar a PCP-SL. A partir del uso de recursos psicológicos personales o culturales, cada persona o familia desarrolló distintas formas de resistir interiormente la dominación de PCP-SL³³. Algunos recurrieron al sentido del humor y la risa como forma de lidiar con el sufrimiento. En Otica, por ejemplo, un comunero relató: «No podíamos ni estar tristes. Uno sufría solo en el monte sin que lo vieran, para evitar los castigos»³⁴. Cuando podían, se las ingeniaban para buscar alimento para sí mismos. Una mujer de Quempiri contó cómo en una ocasión, cuando los mandos la habían enviado a pescar:

³⁰ Testimonio recogido por el CAAAP. Puerto Ocopa, 1994.

³¹ Informante varón de Quempiri, 40 años aproximadamente.

³² Informante mujer de Puerto Ocopa, 48 años. Testimonio recogido por Leslie Villapolo (CAAAP). Puerto Ocopa, 1995.

³³ Lo que Scott (1985) denomina «las armas de los débiles». (Scott, J. 1985 *Weapons of the Weak. Everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press)

³⁴ Carlos. Otica, Septiembre del 2002.

[...] escondió el pescado, no le enseñaba, (el mando logístico) llamaba a todos para ver cuánto ha pescado. Y luego comía en la noche con su familia.³⁵ (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P. Mujer, pobladora de Quempiri)

En Otica, algunas familias ocultaron a sus hijos en el monte para evitar que PCP-SL se los lleve a «guerrear». Cuando iban a cumplir con sus tareas aprovechaban para ver a sus hijos. Este tipo de ardides implicaba un gran riesgo, y podía conducir al castigo físico (se le podía amputar la mano, por ejemplo), o incluso a la muerte.

Cuando PCP-SL iba a «aplicar violencia», los infractores, soplones o «individualistas» eran llevados ante la Fuerza Principal.³⁶

Un ex-mando de Quempiri recuerda que a los infractores se les colocaba al interior de un círculo, y se elegía a algún miembro de la Fuerza Principal para asesinarlo con una soga o con un cuchillo por la espalda. Aunque la mayoría de estos asesinatos no eran presenciados por la masa, los mandos obligaban al pelotón, y especialmente a la familia, a festejar la muerte, a reír, tomar masato, y hacer vivas al partido y al presidente Gonzalo.

Durante este tiempo fueron varios los asesinatos selectivos y ajusticiamientos debidos a la desobediencia. El número de muertes debido a la anemia, la desnutrición y enfermedades también fue alto:

Dice, que cuando ya no había que comer, los niños ya era... con anemia, ya comían tierra, ya no comían ni sal, iba a sacar su... de palmera, su... chonta. (...) A veces comían tierra los niños y bastantes morían.³⁷ (CVR. VDI .Entrevista en profundidad P737. Varón poblador de Quempiri)

Sólo sobrevivían los más fuertes:

[...] su hijo, a uno lo ha dejado porque no podía andar, tenía anemia. Le ha dejado porque ella no tenía fuerza, no podía cargarlo, ni su papá. Por eso le ha dejado... se ha muerto»³⁸. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P763. Quempiri. Mujer de aproximadamente 38 años, con quinto de primaria, comunera, su esposo es dirigente de la Comunidad)

En algunos casos, los familiares enterraban a sus familiares difuntos, pero en otros casos eran tirados en fosas comunes:

³⁵ Informante mujer. Quempiri, Setiembre del 2002

³⁶ PCP-SL denominó «individualistas» a los que no cumplían con la norma de «centralizar» todo el fruto de su trabajo en la chacra, pesca u otras actividades de recolección. Es decir, que no entregaba todo el producto de su trabajo al mando logístico para luego ser redistribuido a la masa. También era considerado «individualista» aquel que no quería participar en las faenas grupales encomendadas por los mandos.

³⁷ Informante varón, 40 años aproximadamente. Quempiri, Setiembre del 2002.

³⁸ Informante mujer. Quempiri, setiembre del 2002.

Los niños murieron por anemia. Hacían hueco hondo, o roca con hueco, ahí los tiraban los PCP-SLs [...] Mi hijo mayor, de 7 años, se murió por anemia, pero nosotros sí lo enterramos.³⁹

También hubo casos en que los enfermos fueron enterrados vivos.

Los Asháninkas recuerdan la vida con PCP-SL como una etapa deshumanizante:

Como chanchos, escondidos bajo el monte, durmiendo en el barro y comiendo sopa aguada... Ya no sentimos alegre. Sí sentíamos triste, ya no comías, pensábamos en la familia, pensábamos en la chacra, no teníamos para comer, ya no dejaban libertad para comer para nuestros hijos, esclavizados. Ya no hacía masato en la vida.⁴⁰

Estas prácticas y castigos, la fuerte presión para acusarse mutuamente, el clima cada vez más generalizado de desconfianza y temor, y la experiencia traumática de ver a seres queridos sufriendo o asesinados, o incluso de tener que matarlos uno mismo, contribuyeron no sólo al debilitamiento y destrucción de los lazos de parentesco y de comunidad, sino sobre todo al sometimiento total del espíritu de cada Asháninka frente al partido.

Eras como un animal, ya no hay familia, a veces te hace matar a tu familia, a tu hijo, porque ya no es tu familia. Esa es orden del pueblo, mentira, esa es orden de él mismo (mando senderista).⁴¹

Por ello, entre 1992 y 1993 el número de Asháninkas que intentaban o lograban huir de PCP-SL se incrementó. Sin embargo, la huida al monte tenía un alto costo. Algunas personas tuvieron que dejar atrás a sus familiares más débiles o pequeños. Además, existía el temor de ser encontrados por los comandos de aniquilamiento de PCP-SL.

Finalmente, tenían que superar el temor al Ejército y los ronderos que les había inculcado PCP-SL durante años de adoctrinamiento, y poder así acudir a las comunidades refugio o «núcleos poblacionales». Un comunero relató cómo escapó de PCP-SL gracias a una radio que logró mantener escondida donde escuchaba los mensajes del Ejército invitando a los Asháninka a regresar a sus comunidades (o hacia las comunidades de refugio) sin temor a represalias. Además, para poder lidiar con el peligro que implicaba escapar, los Asháninka apelaron a recursos culturales tradicionales como el conocimiento del medio ambiente para sobrevivir en el monte o a la interpretación de sueños para decidir cuándo escapar, cuándo callar, qué decir. Los escapes masivos fueron menos frecuentes.

³⁹ Ernestina, 32 años aproximadamente. Puerto Ocopa, Noviembre del 2002.

⁴⁰ Mujer, 28 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

⁴¹ Varón, 41 años. C.N. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000

Escape de los Comités Populares Wacapú y Vista Alegre de Otica

En febrero de 1993, los mandos de los comités de base «Wacapú» y «Vista Alegre», Máximo y Javier, se reunieron para coordinar la huida de ambos grupos. «Yo hice el plan para fugarnos. Conversé con Máximo, estaba de acuerdo. Había miedo. Como todos se acusaban, no le contamos a nadie. Sólo le dijimos a los hombres que hagan las balsas y que las oculten en el monte. No se les dijo nada más, y les dijimos que no cuenten ni a sus mujeres ni a los niños, a nadie...así lo hicimos hasta que llegó el día...»⁴².

Estos mandos esperaban que la Fuerza Local realizara su vigilancia habitual, pero no lo hicieron el día acostumbrado. Entonces, decidieron realizar la fuga un sábado por la noche. Esa noche llegó la Fuerza Local. Jesús, hermano de Javier, vino acompañado por una mujer ayacuchana de 17 años de edad. Jesús se dio cuenta de las intenciones de su hermano y lo quiso acusar. Ante este peligro, Javier ató a la mujer ayacuchana mientras otro grupo se llevaba a Jesús. Cuando Javier llegó a la playa encontró a su hermano ya muerto: «No tuve qué sentir, lo miré, y tuve que seguir adelante nomás... Nos escapamos y ya no pensé hasta después»⁴³.

La comunidad recuerda este hecho de una manera diferente. La mayoría dice que Javier mató a su hermano para poder escapar, resaltando así su sacrificio. Por ello es visto como el «salvador» del grupo que escapó: «... Jesús llegó a la playa, y Javier tuvo que matarlo para que no nos delate, para poder escaparnos...»⁴⁴.

El escape se realizó el domingo a las 3 de la mañana. La noche anterior habían soñado con el color blanco, era una buena señal. Escaparon aproximadamente 187 personas, entre mujeres, hombres y niños(as), hacia Poyeni. «Navegamos toda una noche y todo un día. No sabíamos si llegaríamos vivos. Tuvimos suerte porque ese día corrió viento y empujó las balsas. Por las playas habían algunos senderistas que nos llamaban y nos querían disparar, pero pasamos rápido todas las balsas. Tuvimos suerte. Llegamos a Poyeni...»⁴⁵. Algunos no quisieron ir con Javier y Máximo por temor a morir. Otros decidieron ir a buscar a sus familiares que estaban ocultos en el monte. Se calcula que los que no huyeron fueron unos 147, entre adultos y niños(as).

Frente al número creciente de fugas, los mandos senderistas incrementaron el terror con el objetivo de lograr la «dominación total» y disuadir las fugas. Una de las nuevas estrategias fue separar a los miembros de las familias. De esta manera, si alguno intentaba escapar, se tomaban represalias contra los que quedaban. Otro mecanismo fue el ajusticiamiento ejemplar. También se intensificó el adoctrinamiento y se recordaba las promesas iniciales que motivaron la adhesión de la población al proyecto de PCP-SL. Sin embargo, el deseo de escapar era más fuerte

⁴² Javier. Conversación camino Puerto Ocopa a Satipo. Diciembre del 2002.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Carmen. Otica, Septiembre del 2002. Reunión grupal con mujeres, noviembre del mismo año.

⁴⁵ Máximo. Otica, Septiembre del 2002.

2.8.5. *Contraofensiva Militar (1991-1994)*

El año 1991 constituye el punto de quiebre en la ofensiva senderista en la región. A partir de este año, las Fuerzas Armadas, junto con la población Asháninka organizada en Rondas o Comités de Autodefensa, inició una importante contraofensiva, golpeando duramente a PCP-SL, sobre todo en la zona del río Ene.

Si bien es cierto que las Rondas o Comités de Autodefensa Asháninka han tenido una organización y funcionamiento similares, podemos distinguir dos tipos diferentes, de acuerdo a sus orígenes y a su relación con las Fuerzas Armadas. Existe una notable diferencia entre las que dependían directamente del Ejército —como las del valle del Ene— y las que fueron creadas de manera autónoma por los Asháninka —como las rondas del río Tambo—.

Cada comunidad organizó su propia ronda, pero además todas contribuían al comité central de autodefensa. Por ello, PCP-SL no pudo avanzar más en su desplazamiento por el río Tambo, y Poyeni pasó entonces a ser la "*frontera*" entre la zona del río controlada por PCP-SL y la zona donde vivían con libertad los Asháninka.

La creación de «Ejércitos Asháninka» no es algo nuevo. Constituye una práctica tradicional a la que los Asháninka se han visto obligados a recurrir en distintos momentos de la historia, cuando han tenido que defender sus tierras o sus vidas⁴⁶. Esta tradición fue reactivada frente a la situación de violencia terrorista. Así, todos los varones adultos pasaron a conformar las «Rondas Nativas», «Comités de Autodefensa» u «*Ovayeriite*»⁴⁷. Las rondas se crearon «*con un sólo* objetivo, recuperar la familia, trabajar por la tradición Asháninka»⁴⁸. Para ello, los ronderos nativos apelaron a la tradición de guerreros de sus abuelos.

Antes, en la época de mis abuelos habían guerreros. [...] No sabían cómo era la vivencia, no le orientaba nadie. Si una persona venía a fastidiar, iban a guerrear, esa era su estrategia.⁴⁹ Los Asháninka tenían una sola visión de lograr la pacificación a costa de su sangre, de su sacrificio, de su esfuerzo, entre otros esfuerzos que unen la unidad del pueblo Asháninka guerrero.⁵⁰

Los años 1991 y 1992 son años de fuertes y continuos enfrentamientos entre PCP-SL y las rondas. Poyeni fue atacada por PCP-SL en diferentes ocasiones, falleciendo varios asháninkas. En 1991, la comunidad nativa Puerto Ocopa crea también, por propia iniciativa la ronda nativa

⁴⁶ Espinosa, Oscar. 1993. Op.cit.; Espinosa, Oscar. 1995. Rondas Campesinas y Nativas en la Amazonía Peruana. Lima: CAAAP.

⁴⁷ Nombre dado a las rondas en el Pangoa por la organización indígena Kanuja.

⁴⁸ Varón, 36 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

⁴⁹ Mujer, 28 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

⁵⁰ Memorias escritas por un comunero de Puerto Ocopa, 2000.

En el caso del río Ene, las comunidades nativas también formaron Comités de Autodefensa, pero se crearon bajo la dependencia directa del Ejército y las rondas de colonos, ocasionando conflictos entre ambos. Este fue el caso de Quempiri. Cuando esta comunidad se encontraba refugiada en la base Natalio Sánchez, contribuyó con la cuota obligatoria de varones para los patrullajes realizados por el Ejército y las rondas colonas. Cuando retornaron a sus tierras, el Ejército apoyó la organización de la ronda en la comunidad, al principio armados con arcos y flechas, y luego con armas donadas durante el gobierno de Fujimori. Para 1995, esta ronda, que hasta entonces había estado bajo el comando de la ronda colona de Natalio Sánchez, buscó su independencia. Finalmente lograron ser reconocidos como Comité de Autodefensa autónomo según consta en los documentos de la comunidad.

Entre los años 1991 y 1993, se intensificó la lucha contrasubversiva, y se multiplicaron los operativos conjuntos entre el Ejército y los ronderos en los valles de los ríos Tambo y Ene. A través de estos operativos se fue recuperando, de manera paulatina, algunas zonas que estaban bajo control senderista, logrando liberar a numerosos indígenas que se hallaban secuestrados y bajo el control de PCP-SL. A principios de 1991 se calculaba que éstos eran cerca de 10 mil. Ese mismo año, sólo en la zona del río Ene, fueron rescatados cerca de tres mil Asháninkas. La recuperación de los Asháninka «secuestrados» no fue fácil. Tal como se ha descrito, PCP-SL les había dicho que si eran «recuperados» por los ronderos o por el Ejército iban a sufrir torturas terribles. Por eso, cuando los ronderos o los militares se les acercaban en el bosque, huían despavoridos, a pesar de que tampoco deseaban continuar bajo el mando de los subversivos. Al mismo tiempo, los senderistas se defendían militarmente y seguían hostigando a las poblaciones desplazadas a través de tiroteos periódicos y por medio de la destrucción de sus chacras y sembríos.

2.8.6. Los «Núcleos Poblacionales»

Entre 1993 y 1995, el número de Asháninkas rescatados de PCP-SL va creciendo. Las personas «recuperadas» eran llevadas a las «comunidades de refugio» o «núcleos poblacionales»⁵¹, donde eran vigiladas de cerca. En muchos casos, los «recuperados» fueron sometidos a intensos interrogatorios por parte de los militares. Durante estos años, Puerto Ocopa, Poyeni y Betania en la cuenca del Tambo, y Cutivireni y Valle Esmeralda en el río Ene se convirtieron en comunidades que recibieron a cientos de familias que escaparon de PCP-SL o que fueron rescatadas en patrullajes.

Las condiciones de hacinamiento, aislamiento y escasez de recursos hicieron difícil la supervivencia en las comunidades de refugio. Los niveles de morbilidad y mortalidad eran altos

⁵¹ El término «núcleo poblacional» fue acuñado por algunos estudiosos debido a que la legislación internacional no reconoce la existencia de «refugiados internos» sino tan solo de «desplazados».

debido a las condiciones de desnutrición o malnutrición con que llegaban los Asháninkas refugiados. El hacinamiento aceleraba la propagación de enfermedades infecto-contagiosas como tuberculosis, cólera y malaria. Esta situación se agudizó por la escasez de recursos, el aislamiento debido a la destrucción de vías de acceso, y la presencia constante de PCP-SL en la región. Como consecuencia, los espacios para la producción (chacras) y para la vivienda eran reducidos. Los servicios de salud y educación eran insuficientes, así como el acceso al soporte de instituciones de las ciudades más cercanas. El deterioro en las condiciones de vida en estos centros poblados hizo que se requirieran con urgencia ayuda alimentaria y asistencia médica⁵². Sin embargo, muchos Asháninka no deseaban recibir alimentos a los que no estaban acostumbrados (como harina de soya, leche o trigo). La desnutrición se acentuaba en la medida en que faltaba una alimentación adecuada. La dieta básica de una familia nativa se compone usualmente de carbohidratos (yuca, plátano) y proteínas (maní, frejol, carne de monte y pescado). Pero dadas las condiciones de violencia, en las que era prácticamente imposible cultivar, cazar o pescar con tranquilidad, las fuentes proteínicas se redujeron considerablemente. Las condiciones de salud de los recién llegados era la peor, sobre todo entre los niños.

Para la mayoría de los Asháninka, fueran desplazados o «anfitriones», esta experiencia fue muy dura. En general, sentían un gran malestar al tener que someterse a la convivencia común y al tener que adquirir costumbres nuevas. Para algunos, el trabajo en común, las formaciones y prácticas paramilitares, las ollas comunes y otras costumbres les hacía recordar, además, las obligaciones impuestas por los senderistas, y por ello las rechazaban con firmeza. Los ancianos y ancianas eran los que menos toleraban los cambios y la disciplina, y muchos fallecieron deprimidos por este motivo, mientras que varias parejas y familias jóvenes huyeron al monte buscando su libertad. Muchos niños no querían ir a la escuela, sino que preferían jugar todo el día o acompañar a sus padres en sus tareas. En sus juegos, los niños hacían referencia constante a la realidad de violencia a la que fueron sometidos y que no llegaban a comprender del todo. A esta situación se sumaba el constante temor ante posibles ataques o represalias de parte de PCP-SL. Por ello, se construyeron trincheras debajo las casas para refugiarse en caso de ataques⁵³. Estos temores no eran infundados, ya que grupos de PCP-SL «hostigaban» constantemente a estas comunidades, es decir, disparaban frecuentemente en dirección de las casas, o destruían, durante la noche, las chacras y cultivos. Ningún comunero podía alejarse de las casas sin protección, y las actividades usuales para conseguir alimentos, como la pesca, caza o agricultura, se vieron restringidas y tenían que realizarse siempre bajo la protección de las rondas. Sin

⁵² La iglesia católica, a través del CAAAP, implementó un proyecto de emergencia para los Asháninkas desplazados. Este proyecto incluía programas de alimentación, salud, organización y asesoría legal. Asimismo el gobierno central apoyó con ropa, frazadas, armamento, entre otros. El municipio apoyó con combustible para el desplazamiento de los ronderos por río.

embargo, estas medidas de precaución no pudieron evitar la muerte de varios Asháninka que fueron emboscados mientras iban a sus chacras o a pescar en el río. También se multiplicaron las tensiones y conflictos, solapados o explícitos, entre familias provenientes de diferentes comunidades, o debido al grado de simpatía o de rechazo que se tuvo hacia PCP-SL⁵⁴. Tal fue el caso de los refugiados de Otica en Poyeni.

La marginación de Otica en Poyeni

Cuando los refugiados de Otica llegaron a Poyeni, los ronderos de Poyeni dejaron entrar al grupo. «Cuando llegamos ya estaba ahí mi compadre, él me reconoció y me defendió de los ronderos... Por eso nos dejaron entrar»⁵⁵. De no ser así, «los ronderos hubieran dado muerte a los hombres y mujeres mandos, como lo hicieron con los refugiados que llegaron de otras comunidades... nosotros veíamos pasar después los cuerpos flotando en el río...»⁵⁶.

La base de la Marina en la ciudad de Atalaya envió un destacamento para instalarse en Poyeni. La Marina interrogó a todo el grupo de Otica y los ubicó en diferentes «sectores» de la comunidad. Al finalizar las interrogaciones, se le asignó un sector para los de Otica, pero algunas personas eran rotadas periódicamente. Esto es, varias familias eran sacadas del «sector Otica» y eran colocados en medio del «sector Poyeni» para ser vigiladas. Los huérfanos fueron repartidos en diferentes casas, y muchas veces fueron maltratados, presentándose incluso casos de violación sexual. El caso más grave fue la violación de un bebe de meses de nacido, que murió a causa de dicha violación⁵⁷.

La gente de Poyeni estigmatizaba a la de Otica como terroristas, generando rencillas y discusiones. A pesar que se apoyó a la comunidad de Otica con algo de alimentación, ropa y cultivos, las familias de Otica recibían un trato discriminatorio en el reparto del apoyo recibido de instituciones públicas o privadas.

Otica, como las demás comunidades refugiadas, tenía un jefe, pero éste no tenía poder. Sus funciones se restringían principalmente a la organización del trabajo comunal de su grupo. Los jefes de las comunidades refugiadas estaban bajo el mando del jefe de Poyeni. Los hombres refugiados de todas las comunidades formaban parte de la ronda de Poyeni. En el caso de Otica, realizaron diversos patrullajes para recoger al grupo que no escapó con ellos. «Todos los hombres participamos en la ronda, después de que nos interrogaron y que nos observaron. Nosotros (de Otica) fuimos con los ronderos de Poyeni a buscar a nuestra gente que se quedó (oculta) en el monte»⁵⁸.

La gente de Poyeni sentía temor de que Otica se organizara para atacarlos, debido a que sospechaban que éstos seguían con PCP-SL. Este temor persistió aún después de que Otica retornó a sus propias tierras.

⁵³ La mayoría de casas Asháninkas en la zona se hallan construidas a cierta altura del suelo. Esta es una práctica común en la Amazonía para evitar que el suelo húmedo perjudique la salud de sus habitantes. Por ello resultaba posible construir trincheras debajo de la casa.

⁵⁴ Espinosa, Oscar. 1995. Op.cit.; Vásquez. Norma y Leslie Villapolo. 1993. «Las consecuencias psicológicas y socioculturales del conflicto armado interno en la población infantil Asháninka», en *América Indígena*, 53 (4): 103-124; Villapolo, Leslie. 2003. PCP-SLs del Desengaño: Construcción de memorias, identidades colectivas y proyectos de futuro en una comunidad Asháninka. Lima, en prensa.

⁵⁵ Testimonio del mando político del Comité de Base Wacapú. Otica, Noviembre del 2002.

⁵⁶ Información proporcionada por una profesional que trabajó en la comunidad en la década del noventa. Lima, noviembre del 2002.

⁵⁷ Información proporcionada por una profesional que trabajó en la comunidad en la década del año 90 cuando los otikeños vivieron como refugiados. Lima, noviembre del 2002.

⁵⁸ Máximo. Otica, Septiembre del 2002.

Otra consecuencia de la violencia ha sido el cambio en las características demográficas del distrito. Se ha elevado el número de mujeres y niños, pero no de varones jóvenes o adultos, ya que muchos de ellos murieron en las incursiones o en los enfrentamientos armados. Tampoco existen muchas personas mayores, ya que muchos ancianos y ancianas murieron cuando estuvieron en los Comités de Apoyo o en los «núcleos poblacionales», además de la poca expectativa de vida que comparte la mayoría de los pobladores de la región. Estos cambios demográficos obligaron a redefinir muchos aspectos de la vida cotidiana Asháninka. Así, algunas de las tareas agrícolas que realizaban los varones adultos tuvieron que ser asumidas por las mujeres, recargando aún más sus tareas en la familia y en la comunidad. Los pocos varones adultos, también vieron su trabajo recargado durante los años de violencia, al tener que dedicarse a sus tareas de ronderos.

Debido a la cantidad relativamente baja de varones, el número de ronderos era bastante reducido, aun en el caso de los «núcleos» que agrupan a diversas comunidades. Se calcula que en el valle del Ene había unos quinientos ronderos, mientras que en el valle del Tambo superaban los mil, que para una población de aproximadamente veinte mil personas, constituía un número relativamente pequeño. Sin embargo, toda la comunidad colaboraba con las Rondas en las tareas de autodefensa, bajo la dirección de sus respectivas autoridades. Así, algunos «ancianos», por ejemplo, apoyaban en tareas de vigilancia, aunque solamente durante las horas de luz y en los lugares menos peligrosos. Las mujeres también colaboraban con los ronderos, principalmente a través de las ollas comunes, y al asumir tareas que tradicionalmente correspondían a los varones Asháninka.

Debido a la existencia de guarniciones militares dentro de algunos de los «núcleos poblacionales», los límites entre la vida civil y la vida militar se volvieron más tenues, «militarizándose» en muchos aspectos la rutina de las comunidades. Así, por ejemplo, los ronderos tenían que formarse, izar la bandera y cantar el Himno Nacional, antes de pasar lista, todos los días, antes y después de volver de sus labores habituales, a las seis de la mañana y a las cinco de la tarde. También se puede apreciar esta militarización en el lenguaje utilizado por los ronderos, docentes y autoridades así como en la formas de resolver conflictos. Esta influencia militar es tan fuerte, que incluso en lugares como Poyeni, después que la Marina de Guerra retiró su base, los ronderos continuaron realizando dichas prácticas. Como es de esperarse, también se produjeron tensiones entre los Asháninka y los militares. Si bien es cierto que esta relación dependía fundamentalmente de las actitudes individuales de los oficiales responsables de las guarniciones militares o por decisiones provenientes del Comando Político Militar, hay que señalar que en muchos casos la población civil tuvo que pagar un alto precio por el apoyo militar. La mayoría de los militares provenían de la costa o sierra y desconocían las costumbres de vida en la selva. Debido a este desconocimiento de la realidad y costumbres locales, se cometieron muchos abusos por razones de

intolerancia cultural. Nunca faltaba, además, algún militar que se aprovechaba de las mujeres o de los recursos y bienes de la comunidad. También existían discrepancias para definir quiénes eran los protagonistas de las victorias locales.

Hacia 1995, PCP-SL se replegó hacia el Ene. En el Tambo, se comenzó a sentir un clima de tranquilidad. Se inició el proceso de retorno de las comunidades que habían permanecido en los «núcleos poblacionales». Sin embargo, los ronderos eran concientes de que la amenaza de PCP-SL no había desaparecido. Hasta la actualidad continúan realizando rondas de vigilancia en la comunidad.

2.8.7. El conflicto armado interno en la zona de la carretera marginal

La carretera Marginal es la vía que une las ciudades de La Merced y Satipo, y articula, además, los distritos de Río Negro, Satipo y Mazamari y las zonas rurales alrededor de a ciudades principales. Una característica de esta zona es la fuerte presión de la penetración colonizadora que ha sufrido este territorio tradicional de los pueblos Asháninka y Nomatsiguenga, desde fines del siglo XIX. A mediados del siglo pasado, ante las olas de colonización de Satipo, Chanchamayo y Oxapampa, los Asháninka fueron forzados a retirarse a las partes periféricas, y durante el siglo XX, estos pueblos han visto fragmentado y reducido su territorio. Actualmente sus comunidades se encuentran cercadas por anexos o parcelas de colonos. Este es el caso de una de Cushiviani, comunidad que fue parte de este estudio. En esta zona conviven, pues, Asháninka, Nomatsiguenga y colonos mestizos.

En esta zona, PCP-SL tuvo una fuerte presencia a través de ataques, saqueos, secuestros de niños y jóvenes y asesinatos selectivos, generando el desplazamiento masivo de muchas comunidades nativas y colonas hacia las ciudades. Los senderistas principalmente llegaron utilizando los corredores o quebradas desde la cuenca del río Ene, desde mediados de la década del 80. Asimismo hubo cierta presencia del MRTA, aunque fueron desplazados por PCP-SL

2.8.7.1. El control de Satipo por parte del PCP-SL (1987-1990)

En 1987, PCP-SL cometió los primeros asesinatos selectivos de autoridades en las comunidades colonas. A partir de ese año se comenzaron a producir incursiones esporádicas de parte de PCP-SL en la zona de la carretera marginal. En el distrito Río Negro, por ejemplo, los comuneros escucharon del tránsito de senderistas armados desde 1988. PCP-SL ingresaba a las asambleas de las comunidades más lejanas. Estas incursiones eran acompañadas de saqueos. Lo mismo ocurría en el distrito de San Martín de Pangoa. Durante 1989, PCP-SL intensificó el reclutamiento de jóvenes y niños, tanto en las ciudades como las zonas rurales vecinas a la carretera. PCP-SL incursionó en repetidas oportunidades a los centros educativos, realizando charlas de adoctrinamiento e identificando a aquellos estudiantes que tuvieran las notas más altas. Luego, pedía adeptos voluntarios, ofreciendo riquezas, mientras que en otros casos secuestraba a los y las jóvenes.⁵⁹

Entre 1989 y 1990, PCP-SL inició también aquí el proceso de adoctrinamiento clandestino de líderes y autoridades de las comunidades colonas. También continuó con el asesinato selectivo de colonos. Debido a su estrategia de terror, para 1990 llegó a controlar gran parte de la provincia de Satipo.

Ante las acciones de PCP-SL, las comunidades reactivaron sus sistemas tradicionales de vigilancia con personas ajenas a la comunidad. Esta especie de «ronda secreta» trataba de determinar quiénes y cuándo personas extrañas transitaban por la comunidad, para estar alertas ante cualquier posible ataque. En varias comunidades, los comuneros pernoctaban en sus casas o escondites del monte, y bajaban al poblado durante el día para asistir a la escuela y realizar otras actividades.

Por esos mismos años, el MRTA también recorría esta zona. En 1990, en el valle de Tsiriari, distrito de Mazamari, algunas comunidades colonas tenían cierta simpatía hacia el MRTA, dado que les ofrecían protección frente a PCP-SL. En la comunidad colona Dos de Mayo, MC, quien había simpatizado previamente con PCP-SL, decidió apoyar al MRTA después de regresar de Huancayo en 1990. Al regresar a Dos de Mayo comprometió a toda su comunidad con el MRTA para protegerse de PCP-SL: «Lo buscaban los rojos por haberle traicionado»⁶⁰.

El mismo año, tres varones de Dos de Mayo fueron acusados por su comunidad de senderistas ya que no tenían documentos. Un grupo de ronderos sacó a los tres comuneros y con el pretexto de llevarlos a la Comandancia de Mazamari, los asesinaron y desaparecieron⁶¹. Luego,

⁵⁹ Un caso emblemático de esta práctica fue el secuestro de Juan Beto Umaña Chiricente, segundo hijo de Luzmila Chiricente, conocida dirigente Asháninka, que presentó su testimonio en la Audiencia Pública realizada por la CVR en Huancayo.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ El asesinato de uno de los comuneros habría saldado un problema familiar interno en la comunidad de Dos de Mayo. Apuntes de campo. Entrevista con comunera de Dos de Mayo, Diciembre del 2002.

regresaron a la comunidad obligándola a organizarse en rondas aduciendo que los «rojos» (PCP-SL) se vengarían pues los tres hombres capturados habían escapado y les avisarían:

[...] el día del asesinato se organizan en comunidad en ronda porque ellos dijeron que se escapó, que en los rojos se ha ido, que él puede buscar la venganza entonces [...] se ha ido a los rojos y en cualquier momento puede venir a matar a nuestras casas, así ha hecho creer.⁶²

La ronda campesina de Dos de Mayo comenzó a presionar a las demás comunidades colonas y nativas del valle de Tsiriari para que se organicen también en rondas:

[...] la ronda Dos de Mayo de ahí empezaron a golpearnos acá a la gente acá de cada anexo, de ahí obligatoriamente cada noche teníamos que organizarnos porque había, contradicciones, comunidad que no están organizados «¡Por qué, por qué no quieren organizarse ellos, tal vez ellos están juntos con ellos, tal vez, tal vez ellos estaban de acuerdo con PCP-SL!». Entonces para evitar problemas todos las comunidades teníamos que organizarnos en las rondas campesinas.⁶³

En 1990, PCP-SL cometió asesinatos selectivos en las comunidades colonas Unión, Santa Isabel, Dos de Mayo y San Francisco de Cubaro. En la comunidad colona Monterrico llevó a cabo una primera matanza.⁶⁴

Después de la matanza de quince ronderos en Dos de Mayo, las condiciones de inseguridad se hicieron intolerables. Las comunidades del valle de Tsiriari se desplazaron masivamente a la ciudad de Mazamari. El rechazo hacia PCP-SL se generalizó. El 17 de febrero de 1990, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), publicó un comunicado denunciando la violencia en Selva Central, demandando una exhaustiva investigación y sanción de responsables, y exigiendo que el Estado asuma su papel en la pacificación. Ese mismo año, la comunidad de Cushiviani marchó hacia Satipo, gritando consignas contra la subversión y por la pacificación. El 25 de setiembre de 1990, se produjo un enfrentamiento entre los ronderos y PCP-SL en la zona conocida como la «Roca»⁶⁵. Este enfrentamiento fue interpretado por los desplazados como una derrota de PCP-SL. Por ello, muchos pobladores del valle de Tsiriari decidieron regresar a sus respectivas comunidades a partir de junio de 1991.

2.8.8. *Contraofensiva militar*

⁶² Informante mujer, 35 años aproximadamente.

⁶³ Asamblea Comunal, Octubre del 2002.

⁶⁴ En esta comunidad ocurren tres matanzas en 1990, 1993 y 1994.

⁶⁵ Lugar situado cerca del Km. 14 de la carretera Mazamari - Puerto Ocopa.

La provincia de Satipo dependía militarmente del Comando Político Militar (CPM) del Frente Mantaro. Cuando el General Pérez Documet estuvo a cargo del CPM, en Huancayo, el Ejército le dio gran importancia a la formación de Rondas en todo el territorio bajo su mando, incluyendo la provincia de Satipo. Fue acá en la Selva Central, donde el Estado comenzó a fomentar de una manera más sistemática estas organizaciones de la población civil y a darle armas como parte de una estrategia contrasubversiva más decidida contra PCP-SL Luminoso. El mismo presidente Fujimori fue en varias ocasiones a Satipo a entregar armas a los ronderos. Por su parte, desde 1990, algunas de las organizaciones indígenas de la región, como la CECONSEC o la FECONACA, también promovieron la organización de Rondas o Comités de Autodefensa Asháninka. Se calcula que en estos años había entre diez y catorce mil ronderos, entre colonos y Asháninkas, en la provincia de Satipo.

Tanto la estrategia de PCP-SL de tomar represalias contra aquellas comunidades que formaban rondas, como la estrategia de considerar como posibles senderistas a aquellas comunidades que se oponían a formar rondas, polarizó a la población civil y colocó a aquellos que no querían participar activamente entre dos fuegos.⁶⁶

Un caso emblemático fue el de la comunidad de Cushiviani ubicada a 3 km. de la carretera Marginal, a unos 20 minutos en auto de la ciudad de Satipo.

Conflictos internos en Cushiviani

El 3 de enero del año 1991, se produjo la única incursión de PCP-SL en Cushiviani. Luzmila Chiricente, presidenta de la comunidad en ese entonces, recuerda lo que ocurrió esa mañana: «Vino PCP-SL a querernos matar porque yo era “motivadora de rondas?”. Tomaron el local comunal. Primero vinieron dos mandos, era muy temprano, buscaban al jefe. Se presentaron como compañeros y les encañonaron con metralletas. (Luzmila les preguntó) ¿Quién les ha dado permiso que tomen el local? (Le contestaron) Tú motivas a formar la ronda. (Ella refutó) Yo no voy a ir al local, yo quiero conversar de jefe a jefe. (Esos senderistas) fueron al local comunal a traer al jefe. Apareció un pequeño, detrás venían hombres y mujeres armados. Ahí me asusté, mandé esconder a los chicos con el número de CAAAP y CIPA para que avisen si algo me pasa. Acorralaron mi casa. Entre los senderistas estaba mi sobrino (también llevado por PCP-SL desde su escuela)... Después vino Pepe Campos y David Fernández, nos defendieron. Alguien que había visto desde arriba les avisó. Les dijeron a los senderistas de qué iban adoctrinar. Fue como un debate que duró hasta las dos de la tarde. Los senderistas (les) dijeron como no están convencidos de nuestro trabajo van a regresar otras personas, en 15 días, que no van a ser tan compasivos como nosotros. (Ella les dijo) Tú devuélveme a mi hijo. (Le contestaron) Tu hijo va a regresar a matarte, él te llevará al cielo o al infierno»⁶⁷.

Mientras que la familia Chiricente recuerda estos hechos como una forma valiente de oponerse a PCP-SL, para la familia de AC era un hecho que demostraba la simpatía de los Chiricente hacia PCP-SL. Desde fines de 1989, habían surgido tensiones entre Luzmila y AC, y entre sus

⁶⁶ Ver capítulo sobre Rondas en este mismo informe.

⁶⁷ Testimonio de Luzmila Chiricente. Lima, mayo del 2002.

respectivas familias, debido a problemas administrativos dentro de FECONACA, organización regional a la cual pertenecían⁶⁸. Los conflictos se agudizaron debido a que la familia AC y asumió rápidamente la propuesta del Ejército de formar Comités de Autodefensa, conformando la ronda en Yavirironi. Mientras que la familia Chiricente consideraba que debían mantenerse al margen: «Como en la Constitución dice bien claro que zonas (de emergencia) más bien los militares deben asegurar a los ciudadanos... Y nosotros la vamos agarrar la Constitución cada vez que venía militares, para evitar que nos diga que (somos de) PCP-SL. Y hasta el último le hemos dicho, dime esa Constitución Política quién ha elaborado¿ el Gobierno o PCP-SL?, queremos saber»⁶⁹.

Hacia 1992, el distanciamiento entre ambas familias se había agudizado. Las personas afines a Luzmila Chiricente eran sindicadas por las rondas de Yavirironi como supuestos senderistas. Soldados de la base de Satipo, bajo el mando del Capitán Carlos Méndez, ingresaban a la comunidad ante cualquier acto sospechoso, incluyendo reuniones donde se coordinaban las tareas de construcción de una posta y una escuela con FONCODES. Realizaban revisiones domiciliarias, les recriminaban y castigaban por no organizarse en rondas. Su relación con el CAAAP y CIPA fue un recurso para evitar que estos operativos se convirtieran en «excesos».

Finalmente, la comunidad aceptó organizar su ronda: «(Cushiviani estaba considerado zona roja) porque solamente éramos la comunidad sobreviviente que no aceptaba la ronda... Comenzamos a decir en asamblea qué vamos hacer, ¿no?. Y la gente ya nos viene (a presionar) y hasta la Federación nos manda ronderos diciendo si no hacemos, cualquier momento vienen los ronderos y ya veremos qué es lo que va a pasar. Entonces ya pues acatamos crear la ronda campesina, al final es la misma cosa»⁷⁰. Pero esto no significó la reconciliación entre ambas familias.

En 1992 Luzmila fue invitada por el Capitán Méndez para despedirse. «Este convenio (mediante el cual las rondas daban información sobre probables senderistas al Ejército) voy a romper delante de ti... porque crea problemas internos. El Ejército ha perdido tiempo». Poco tiempo después, en 1993, el Ejército se retiró de la zona.

En esta época se presentaron varias denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército o los ronderos contra la población civil. Por ejemplo, una noticia periodística daba cuenta que el 28 de octubre de 1991, los ronderos de la comunidad de Pitatos secuestraron a la dirigente Lidia López y otros seis miembros de su familia, entre los que se encontraban varios niños. Según esta información, los ronderos obedecían las órdenes de jefes militares (DESCO, 28 de noviembre de 1991). Sin embargo, la noticia que puso a los pueblos indígenas de Selva Central en la escena nacional e internacional fue la matanza realizada por PCP-SL el 18 de agosto de 1993, en ocho comunidades (seis colonas y dos Asháninka) del valle de Tsiriari.

La tarde del 18 de Agosto de 1993, tres columnas senderistas⁷¹, integrada cada una por unos 70 colonos y nativos aproximadamente, ingresaron a ocho comunidades del valle de Tsiriari. Seis de las cuales eran colonas (Monterrico, San Isidro, Sol de Oro, Unión Cubaro, San Francisco

⁶⁸ Ver el anexo del informe de la Comunidad Nativa Kushiviani.

⁶⁹ Luzmila Chiricente. Cushiviani, Octubre del 2002.

⁷⁰ *Ibid.*

de Cubaro y Santa Isabel) y una nativa (Pueblo Libre y Tahuantinsuyo). Se presentaron como ronderos y asesinaron cruelmente a muchos colonos y nativos y luego saquearon las casas, llevándose enseres domésticos, medicinas y animales menores.

Matanza en Tahuantinsuyo

Alrededor de las 4 de la tarde, un grupo de senderistas llegó a la comunidad Nomatsiguenga Tahuantinsuyo. Algunas familias se encontraban en sus chacras (monte) y otras en el pueblo. Rodearon la casa del presidente de la comunidad y convocaron a toda la gente que estaba en el pueblo a una asamblea, sacando por la fuerza a aquellos que se encontraban en sus casas. El grupo se identificó a sí mismo como grupo de ronderos.

«Cuando estábamos... nosotros trabajando en la chacra, mi esposo estaba cortando plátano el día miércoles, estaba cortando... y le digo a mi esposo, yo me voy para la casa, no tengo ganas de trabajar... Váyate, cócinate, me dijo... y ahí ya estaba cocinándole y primero ha llegado el mayor de mis hijos y dice, mamá ha venido rondero. ¡Qué rondero va a venir acá, si rondero nunca ha venido hijito! (Uno de estos supuestos ronderos) de frente me apuntó cuando estaba ahí en cocina, me apuntó y le dije ¡qué cosa, si tu eres rondero debes venir bonito!... Yo no te hecho nada para que me apunte(s). ¡Tu marido!, me dice, ¡tu marido! No está mi marido, se ha ido a trabajar a la chacra. ¡Avísale rápido! me ha dicho, ¡si no te mato!, y me dice y ya me dejó, y ya mi esposo había venido de la chacra y ahí nomás le han agarrado... Agarrando su mano y le ha llevado y yo... por seguir a mis hijos también he seguido en su atrás y para llegar a la plaza había bastantes... Conocido había ido enmascarado, debe ser de vecino...»⁷².

Reunieron a las familias en el local comunal. Allí les reclamaron por haberse organizado en rondas. Uno a uno, hombres y mujeres fueron sacados del local comunal y eran entregados a dos senderistas para que éstos les dieran muerte: «cuando he escuchado, cuando se han gritado las mujeres, cuando le han matado, ¡ay, me está matando!, ¡de PCP-SL es, no es rondero! Ahí recién la gente se ha dado cuenta...»⁷³. Los niños fueron macheteados en el local comunal «vamos al local (a su tía) le dijeron, y yo quise escaparme, y yo tenía mi primo y como éramos chibolos, nos hemos ido juntos y hemos llegado a la plaza (en el local comunal) y a uno de mis tíos les han llevado afuera ¿Qué le habrán hecho? Nos han empezado a machetear a nosotros (los niños), nos han cortado con machete, nos han caído al suelo... y nos hemos quedado ahí. Parece que me he bañado con agua... los demás estaban tirado ahí, no sentía nada de dolor»⁷⁴.

Al oír los gritos de sus paisanos, el resto de la población que se encontraba en sus chacras se escondió en el monte y pasó la noche allí. Al día siguiente, algunos bajaron y encontraron los cuerpos dispersos en la carretera, la plaza del pueblo y la posta. Otros pobladores se quedaron tres días en el monte. Fueron veintiuno los muertos entre niños, varones y mujeres.

Los asesinatos habrían sido cometidos con arma blanca: flechas, machetes y otros ahorcados con pitas. De las cinco mujeres asesinadas, dos tenían aspecto de haber sido violadas. A dos de ellas les habían cercenado uno de los senos, y a la quinta se le extrajo el feto del vientre. «Sí, después que le han matado le habrán violado así pues, todo calata le han dejado, todo su ropa todo le han llevado, no tiene ropa, visible cuando esta botado ahí, no hay ropa...»⁷⁵.

El jueves 19 de agosto, los pobladores que bajaron del monte dieron aviso al Ejército de la base de Mazamari. Éste dispuso un helicóptero para el traslado de los 11 sobrevivientes a las ciudades de Lima y Satipo. Uno de ellos murió en el hospital de Satipo. El Ejército ayudó a cavar la fosa donde posteriormente fueron enterrados los cadáveres. El entierro no se pudo concluir: «(El Ejército) se fueron y

⁷¹ No se cuenta con el dato de la cantidad exacta, sin embargo los testigos calculan que fueron entre cien y trescientos hombres, mujeres y niños, colonos y paisanos.

⁷² Sobreviviente de la matanza, mujer de 38 años aproximadamente.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Sobreviviente varón, 18 años de edad.

⁷⁵ *Ibid.*

han aparecido (PCP-SL), al toque cuando estábamos enterrando... Ya nos hemos escapado para el monte ya, al rincón. Eran las cinco de la tarde, escapamos, y ahí nos camuflamos en el monte y toda la noche han pasado (PCP-SL) por acá, o sea toda la noche se pasaron con su gallina, chancho, pollo, plato, olla, no sé cuánto han pasado... Hemos estado escuchando...»⁷⁶.

El viernes 20 de agosto terminaron de enterrar a los muertos con la ayuda de cuatro comuneros que llegaron de Mazamari. La exposición de los cadáveres durante un tiempo prolongado ocasionó su rápida descomposición, acelerada además a causa del calor y la lluvia. El olor y el estado de putrefacción de los cuerpos es una de las cosas que los pobladores recuerdan hoy en día de los días posteriores a la matanza: «Ya no se podía ni comer, ni ganas, ni comida, ni hambre, el olor está en el cuerpo, todo su estómago esta como líquido, está cortado. Por acá lo alzamos, se le había hinchado la barriga y la pestilencia. Nos pusimos a vomitar, ya no se podía aguantar, vómito, vómito, así hemos tenido que acabar de enterrar, así hemos acabado de enterrar, triste...»⁷⁷.

Varios medios de comunicación difundieron la noticia como la «masacre Asháninka» ocurrida en la comunidad de Tsiriari (Mazamari) el 19 de agosto de 1993, con un total de 65 Asháninkas muertos⁷⁸. La información fue equivocada tanto en el lugar, fecha y víctimas. La matanza fue en el valle de Tsiriari, el miércoles 18 de agosto. Del total de víctimas sólo 21 eran Nomatsiguenga, el resto eran colonos. Sin embargo, debido a la mala información, en más de una ocasión el apoyo llegó a la comunidad de Tsiriari. En varias oportunidades, los desplazados que se encontraban en San Cristóbal tuvieron que caminar hasta la comunidad de Tsiriari con la finalidad de poder recibir las donaciones de frazadas, alimentos y ropa. Muchos de los pobladores afectados no recibieron nada. La noticia tuvo trascendencia internacional. El 20 de setiembre el gobierno denunció ante la ONU la masacre cometida por el PCP-SL Luminoso en el valle de Tsiriari. El Congreso de la República pidió realizar una investigación e identificar a los culpables.

La crueldad de los hechos sangrientos de agosto de 1993 podía haberse debido a uno o a varios motivos. Una posible causa podía haber sido la venganza de parte del PCP-SL ante la muerte de dos de sus principales mandos en manos de los ronderos de la zona. Otra posible explicación era la reacción del PCP-SL ante el anuncio reiterado del Gobierno y del Comando de las Fuerzas Armadas de la derrota militar de PCP-SL. En este sentido, esta acción tan sangrienta buscaba mostrar a la población que dichos anuncios resultaban excesivamente triunfalistas, y al mismo tiempo enviaba un mensaje a la opinión pública nacional e internacional sobre su poderío militar. La proximidad al 12 de setiembre, fecha en que se capturó a Abimael Guzmán, refuerza esta última hipótesis. No podemos olvidar, además, que «Feliciano», el sucesor de Guzmán en la conducción de PCP-SL actuaba en esta región. Finalmente, se ha argumentado, que los conflictos entre Asháninkas y colonos también ha podido jugar un rol en estos hechos. Los comuneros de Tahuantinsuyo no tienen un discurso homogéneo sobre el motivo de la matanza. Niegan haber

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Informante varón 45 años aproximadamente.

tenido contacto con PCP-SL. Algunos piensan que la masacre fue una represalia de PCP-SL porque el expresidente Fernando Quintimari, captado por PCP-SL, no había cumplido con el compromiso, asumido poco antes de la matanza, de entregar a tres jóvenes.

2.8.9. *El difícil camino de retorno*

En la Selva Central el proceso del retorno de las familias desplazadas se inició oficialmente el 17 de septiembre de 1994, como parte de una campaña impulsada por el gobierno y las Fuerzas Armadas. En esta fecha se dio inicio a lo que los medios de comunicación denominaron «la gran marcha Asháninka», que llegó a congregar a más de 500 personas aproximadamente. Sin embargo, fue recién a partir de 1995 que la mayoría de familias desplazadas comenzó a retornar a los lugares donde quedaban sus comunidades originales. En muchos casos, los que volvían no eran los mismos que vivieron allí antes de las incursiones senderistas. Muchos habían muerto, otros habían preferido huir al monte o hacia otras comunidades más lejanas. Algunos decidieron quedarse en las comunidades que los habían refugiado, y otros, en fin, decidieron seguir a sus nuevas parejas o familias.

El retorno de las comunidades Asháninka desplazadas tampoco ha constituido un proceso homogéneo. Por el contrario, cada comunidad ha seguido un patrón distinto de retorno. Esto nos indica claramente que no ha existido un plan o estrategia de parte del gobierno para facilitar este proceso, a pesar de la información que algunos medios de comunicación transmitieron al respecto. Así, hemos podido detectar diversas estrategias de retorno utilizadas por las comunidades: en algunos casos se trasladaron comunidades enteras sin contar con recursos adecuados para su subsistencia y su reasentamiento; en otros casos, se produjo un retorno gradual o progresivo, asegurando condiciones mínimas para el reasentamiento; finalmente, otras comunidades contaron con el apoyo de instituciones de fuera de la comunidad. De estas modalidades, la que mejor resultado ha tenido ha sido el retorno gradual y progresivo liderado por la misma comunidad retornante. Mientras que ha fracasado el reasentamiento de aquellas comunidades que han sido forzadas a acelerar su retorno sin las condiciones adecuadas, llegando, en muchos casos, a tener que volver a las comunidades donde se encontraban refugiadas o incluso, teniendo que buscar refugio en otras comunidades. Este fracaso, además de su costo psicológico (expectativas frustradas, dificultades para insertarse de nuevo en otra comunidad anfitriona, etc.) ha supuesto también la muerte de algunas personas más débiles de la comunidad, en particular de niños y ancianos.

⁷⁸ Véase: La Nación, 23 de agosto; La República, 3 de Setiembre; EL Comercio, 21 de Setiembre; Expreso, 21 de Setiembre; La República, 21 de Setiembre (1993).

Luego del retorno, las actividades familiares y comunales fueron recuperándose paulatinamente, y los roles, la comunicación y las relaciones familiares se fueron regularizando, aunque también son evidentes los traumas y secuelas de la violencia hasta el día de hoy⁷⁹. También han existido problemas con las condiciones materiales necesarias para normalizar la vida de los Asháninka. Las casas y chacras de las comunidades originales habían sido destruidas por PCP-SL o por el tiempo. En muchos lugares el bosque había devorado las zonas de cultivo. Volver a la propia tierra significó un esfuerzo muy grande. Para muchos también el regreso significaba reabrir heridas que habían sido ocultadas por el olvido. El recuerdo de la violencia sufrida, de las pérdidas y separaciones, se hizo más patente. A partir de 1995 se comienza a regularizar el tránsito por vía terrestre y fluvial interrumpido por varios años. En 1994 ya se había reactivado la CART, que organizó su VII Congreso. En esta época las rondas de Poyeni y Puerto Ocopa recién se conocen y se unifican. Hacia fines de la década del 90, algunas familias también pudieron retomar sus cultivos orientados hacia el mercado (el café, por ejemplo), así como actividades de comercialización, aunque todavía de forma incipiente. En estos años retornan o ingresan organizaciones no gubernamentales para trabajar con las comunidades del Tambo, ayudando a afrontar las secuelas del conflicto armado interno. Pero también han llegado empresas madereras y petroleras nacionales e internacionales, y grupos de colonos de origen andino. La aparición de estos últimos ha significado, en muchos casos, la reapertura de tensiones y conflictos en torno a la propiedad de las tierras, así como el recuerdo de la llegada de PCP-SL y del narcotráfico asociados con ellos.

2.8.10. El «ejército asháninka» y el MRTA en oxapampa (1989-1990)

La provincia de Oxapampa constituye un corredor hacia el nororiente, en particular hacia Ucayali (a través de los ríos Pichis y Palcazu). Al mismo tiempo constituye una vía de acceso hacia Cerro de Pasco, y de ahí hacia Huánuco y el Alto Huallaga, o bien hacia Aguaytía y el Ucayali.

A fines de 1989 una columna del MRTA asesinó a tres dirigentes Asháninkas, entre ellos a Alejandro Calderón, *pinkátzari* (gran jefe) y presidente de la ANAP (*Apatyawaka Nampitsi Asháninka*), la federación que agrupa a 52 comunidades nativas del río Pichis y afluentes. Esto motivó un "levantamiento" y la conformación de un "ejército" propio para combatir al MRTA.

El origen de este conflicto entre el MRTA y los Asháninkas del Pichis, se remonta a la época de las guerrillas que actuaron en la zona en los años sesentas. En dicha época se creó el

⁷⁹ Villapolo, 1994«Informe 94: Trabajo de apoyo psicológico y sociocultural a la población Asháninka de Puerto Ocopa» CAAAP: Documento interno (inédito)

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de varios partidos políticos que, inspirados en la revolución cubana, optaban por la lucha armada «foquista»⁸⁰.

En ese entonces, la columna liderada por Lobatón y Velandó, contando ya con varias bajas y heridos, se vio obligada a replegarse hacia la Selva Central en busca de refugio, donde entraron en contacto con los Asháninka. A pesar de no simpatizar mucho con los indígenas, los guerrilleros encontraron cierto apoyo entre ellos, pero también encontraron resistencia y rechazo de otros. Conforme los guerrilleros se iban replegando hacia la selva, el Ejército iba acercándose más, reprimiendo también a la población civil sospechosa de apoyar a la guerrilla. Por ello, muchos Asháninka se vieron obligados a abandonar sus casas y huir hacia el monte para protegerse. Finalmente, a principios de 1966, el Ejército detuvo a los últimos guerrilleros con la colaboración de algunos Asháninka. La mayoría de los combatientes y los Asháninka que los acompañaban fueron muertos, ya sea en combate o ajusticiados extrajudicialmente. Los pocos sobrevivientes fueron encarcelados. Al parecer, uno de los Asháninka que colaboró con el Ejército en la captura de los guerrilleros había sido Alejandro Calderón, que ya entonces era un importante líder de las comunidades ubicadas en el valle del río Pichis. Por ello, veinticinco años después, el MRTA asesinó a Calderón. Sin embargo, unos días después, algunos de los principales dirigentes del MRTA reconocieron el error táctico de este «ajusticiamiento».

Los Asháninka reaccionaron rápidamente ante el asesinato de su líder. Decidieron organizar un «ejército Asháninka» para expulsar al MRTA y a cualquier grupo armado de su territorio. Como se ha descrito, la conformación de «ejércitos» temporales constituye una práctica tradicional de los Asháninka. En este caso, los Asháninkas del Pichis y afluentes no sólo reaccionaban ante el asesinato alevoso de sus dirigentes, sino también sentían que ya no toleraban más abusos. Según los indígenas de la zona, bajo el pretexto de ayudar a los pobres, lo único que hacía el MRTA (y también PCP-SL) era destruir y matar, llevarse a los jóvenes y quitarles sus tierras. Por ello decidieron poner un alto a la violencia.

La decisión de los líderes Asháninka fue imponer su autoridad dentro de la provincia de Oxapampa. Así, tomaron las ciudades de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución, y colocaron puestos de vigilancia para controlar el tránsito por las principales vías y carreteras. También empadronaron y carnetizaron a los nativos y colonos. En algunos casos se produjeron abusos contra colonos en manos de indígenas. A pesar de todas estas acciones, no se llegó a producir ningún enfrentamiento militar con el MRTA como se temía, ya que justamente en diciembre el Ejército peruano tomó el campamento de El Chaparral, la base más importante del MRTA en la zona, dispersándose sus miembros por distintos lugares. Durante todo este tiempo el Ejército y las

⁸⁰ El MIR, al igual que el MRTA después, tenían sus orígenes en el partido aprista. Un grupo de jóvenes disidentes del PAP, bajo el liderazgo de Luis de la Puente Uceda formó el PAP-Rebelde, que luego se convertiría en el MIR.

Fuerzas Armadas no intervinieron contra el ejército Asháninka, llegando incluso a realizar coordinaciones entre ellos. Finalmente, en marzo de 1990, el «ejército Asháninka» dio por concluida su labor al haber expulsado al MRTA de su territorio. Sin embargo, ésta expulsión no significó la desaparición de la violencia en la provincia. A fines de 1991 apareció una columna de PCP-SL que estuvo realizando incursiones en las comunidades y anexos campesinos, «ajusticiando» y asesinando cruelmente a numerosos campesinos. En esta misma época el MRTA comenzó una fuerte campaña, esta vez contra objetivos militares, realizando ataques frecuentes a la base militar de Villa Rica.

2.8.10.1. Zona de la provincia de Chanchamayo

Esta zona constituye la puerta de entrada a la región amazónica desde la sierra central (La Oroya/Huancayo-Tarma), y posee, por lo tanto, un gran valor estratégico. Esta zona cuenta con dos ciudades importantes (La Merced y San Ramón) con muy poca distancia entre ambas, constituyendo así el centro urbano más importante de toda la región.

En esta provincia se produjeron numerosos atentados y asesinatos, sobre todo ajustes de cuentas entre miembros de los grupos subversivos, así como detenciones y abusos por parte de las fuerzas del orden. La presencia subversiva también trajo consecuencias negativas para la economía de la región, afectando la producción agrícola, la comercialización, la industria (pago de cupos), así como otros ámbitos de la vida social, como la educación (deserción escolar y ausentismo de profesores), la salud (saqueo de botiquines comunales y secuestro de promotores de salud), etc. La población nativa o campesina, en muchos lugares, decidió organizarse para defender sus vidas y sus tierras. Algunas organizaciones nativas presentes en la zona, como la CECONSEC (Central de Comunidades Nativas de la Selva Central) y la FECONACA (Federación de Comunidades Nativas Campa), promovieron, desde 1990, la formación de Rondas Nativas. La Iglesia Católica, ante la situación de violencia, creó la oficina vicarial de pastoral social (COVIPAS) del Vicariato de San Ramón, siendo una de sus principales funciones la defensa de los derechos humanos.

Chanchamayo tuvo una fuerte presencia del PCP-SL Luminoso y del MRTA, y los pobladores locales distinguían entre ambos grupos subversivos llamándolos por colores: «negros» a los del MRTA y «rojos» a los del PCP-SL Luminoso. En algunas zonas se produjo una lucha entre el PCP-SL Luminoso y el MRTA por el control político y militar. La principal zona de acción del MRTA se ubicaba en los alrededores de la ciudad de Pichanaki, y a lo largo de la carretera que atraviesa el valle del Perené con dirección a Satipo. El MRTA detenía frecuentemente a los vehículos que se desplazaban por la carretera, cobraban «cupos» (muchas veces en especies) y

reunían a los pasajeros por espacio de dos o tres horas para adoctrinarlos. El centro urbano de Pichanaki creció mucho durante los años de la violencia debido a la migración de campesinos desplazados. Hacia fines de los años ochenta, el PCP-SL Luminoso quiso intensificar su presencia en esta zona, para consolidar el control territorial que ya incluía la provincia de Satipo. Hacia 1989, el PCP-SL incursionó en diversas comunidades nativas y anexos campesinos, realizando «juicios populares» y asesinando autoridades y pobladores. Uno de los casos más conocidos fue el de La Florida, en el que asesinaron a una familia juntamente con una religiosa de la congregación del Buen Pastor, en 1989. Sin embargo, la relación relativamente menos violenta que estableció el MRTA con la población civil de la zona, logró consolidar su presencia, mientras que se reducía la del PCP-SL Luminoso. Muchas comunidades que fueron controladas por el PCP-SL pasaron bajo control del MRTA. El conflicto entre «rojos» (PCP-SL) y «negros» (MRTA) fue muy violento, y hacia principios de los años noventa fueron frecuentes los asesinatos y ajusticiamientos en manos del bando enemigo. Este conflicto logró crear un ambiente de mucho temor y desconfianza entre la población civil, ya que la gente no sabía a quiénes tenía delante suyo: si «rojos» o «negros».

La contraofensiva contrasubversiva se intensificó hacia principios de los años noventa. El principal cuartel militar de la zona es el del Batallón de Ingeniería «Ollantaytambo» (Base de La Merced), pero éste tenía como especialidad la construcción y mantenimiento de carreteras y no la lucha contrasubversiva. Por ello tuvieron que solicitar apoyo de cuarteles militares ubicados en la sierra central (Jauja), que también asumieron el control de la base de Satipo. En varios casos el Ejército cometió serios abusos, como realizar patrullajes protegiéndose con campesinos como escudos, además de numerosas desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, etc. También se sabe que el Ejército bombardeó más de una vez la zona desde helicópteros.

2.8.11. Recursos culturales de supervivencia

Los estudios antropológicos sobre los Asháninka han destacado su cosmovisión, el grado de elasticidad y flexibilidad de su organización social⁸¹, su idioma, la fidelidad étnica a su territorio⁸² como elementos que les han permitido mantener su cohesión e identidad cultural⁸³. Varios autores

⁸¹ Ver: Varese, S. 1973. *La sal de los cerros. Una aproximación al mundo Asháninka*. Lima: Retablo de papel; y Weiss, G. 1975 «Campa cosmology: the world of a forest tribe in south america» *En: Anthropological papers of the american museum of natural history*. Vol 52 (5). New York.

⁸² Tradicionalmente, las movilizaciones se daban por razones culturales (matrimonio, desgaste de la tierra) sin sobrepasar las fronteras étnicas del grupo.

⁸³ Barclay, F. 1989. *La colonia del Perené*. Iquitos: Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA); Brown, M. y Fernández, E. 1991. *War of Shadows; The struggle for Utopia in the Peruvian Amazon*. California: University of California Press; Fernández, E. 1986. *Para que nuestra historia no se pierda: Testimonios de los Asháninka y Nomatsiguenga sobre la colonización de la región Satipo-Pangoa*. Lima: CIPA; Chirif, A. 1996 «Identidad y movimiento organizativo en la Amazonía peruana» *En: Horizontes Antropológicos: Sociedades indígenas*. Vol. 6, Año 3, No. 6, Oct. (p. 135-159); Santos,

describen a los Asháninka como "enamorados y orgullosos de su libertad"⁸⁴. A lo largo de la historia, los Asháninka han debido apelar a su tradición de guerreros para defender su territorio y su libertad⁸⁵. Predominan entre ellos los valores de vida, relacionados con la actividad, movimiento, autonomía y utilidad⁸⁶. La cosmovisión Asháninka expresa y sustenta los nexos íntimos que mantiene con su sistema ecológico e ideológico. Así por ejemplo, a través del mito de *Pachakamaite*, los Asháninkas expresan sus expectativas de acceso a los bienes foráneos. Esperan el retorno de un ser divino, enviado por el Sol (Pavá, Tasoréntsi o Dios), para devolverles el acceso a los bienes y prosperidad que los foráneos les habrían arrebatado a través de los siglos⁸⁷.

Los Asháninka han demostrado a lo largo del conflicto armado interno y después de éste una serie de recursos culturales importantes que deberían ser fortalecidos. Entre los más importantes habría que mencionar:

- Aquellos que fueron más efectivos para lidiar con el trauma de la violencia: los lazos de parentesco extenso, la medicina tradicional para procesar secuelas psicosomáticas, la tradición de guerreros, la identidad cultural que tiene como eje la defensa de la tierra y la comunidad, la educación informal que fomenta la autonomía.
- Estrategias de protección, resistencia y rechazo frente a la dominación de PCP-SL: obediencia aparente a las normas, engaño, uso del idioma, sentido del humor, ocultar sentimientos y pensamientos, sus conocimientos sobre el medio ambiente y del bosque, entre otros.
- Los que no fueron efectivos: ritos para procesar duelo, culpas, procesos de reconciliación, administración de justicia, medicina tradicional para afrontar enfermedades psicosomáticas. En algunos casos se acuden a ritos cristianos para purgar culpas, pero la población sigue desconfiando de ellos.

F. «Integración económica, identidad y estrategias indígenas en la Amazonía». En: *Perú: Problema agrario en debate*. Chirif, A., Marique, N., y Quijandria, A.(Ed.) Lima: SEPIA.

⁸⁴ Padre Gridilla, citado por Brown, M. y Fernández, E. 1991 Op. Cit.

⁸⁵ Varese, S. 1973 Op. Cit.; Weiss, G. 1975 Op. Cit.; Espinosa, O. 1993, «Los Asháninka: Guerreros en una historia de violencia». En: *América Indígena*, Vol. 53, No.4, (p.45-60).

⁸⁶ Villapolo, Leslie. 1993. Diagnóstico psicológico y sociocultural de la población infantil Asháninka de Puerto Ocopa - Río Tambo. CAAAP: Documento interno (inédito)

- La flexibilidad de las mujeres para desarrollar mecanismos de supervivencia grupal y protección de la familia. Frente al olvido, la mujer se presenta como portadora de la memoria.
- Las organizaciones indígenas que comienzan a funcionar hacia fines de los 80, se reestructuran hacia 1992 o 1993, y se convierten en interlocutores importantes frente al Estado y otras instituciones. Estas organizaciones articulan demandas alrededor de la defensa territorial, rescate de población en manos de PCP-SL y atención de población refugiada en emergencia. Se convierten también en espacios de formación dirigencial para aquellos líderes ronderos que ganaron legitimidad durante el conflicto armado.
- La alianza estratégica con instituciones privadas, principalmente de las iglesias católica y evangélica, algunas ONGs y los municipios, y que funcionan como redes de soporte para algunas comunidades principalmente en recursos para la supervivencia y control frente a amenazas del Ejército y las rondas.

⁸⁷ Esta creencia es similar al mito Inkarrí andino, y quizás también mezcle elementos indígenas y occidentales. Brown y Fernández, 1991. Ibid.

2.9. EL PCP-SL DURANTE EL AUGE DE LA DROGA EN EL ALTO HUALLAGA

Mi pregunta es: ¿cómo se puede separar a la
persona de mal vivir de la gente de buen
vivir, si todos están juntos?

Ex mando militar de pelotón

El propósito de este informe es examinar la manera cómo el PCP-SL, en su aspiración de proyecto de estado alternativo, intervino en los puntos vitales del mercado de los derivados de la hoja de coca y reguló las relaciones sociales que se formaron alrededor del mismo durante el auge de la droga en el Alto Huallaga. El PCP-SL no fue el único grupo que sostuvo una relación estrecha con el narcotráfico en el Huallaga. También lo hicieron, aunque de forma no declarada, las instituciones armadas, policiales y judiciales del Estado peruano. Sin embargo el PCP-SL fue la única fuerza que pretendió colocarse como «administrador» tanto del mercado como de la población en general en el contexto del «boom».

Los años del apogeo del mercado de la droga fueron tiempos de exuberancia, desborde y experiencias límite donde el anhelo personal era vivir lo más intensamente posible pero dentro de un ambiente social donde la vida humana se cotizaba cada vez a un menor precio. Encontrar un cadáver en cada esquina dejó de causar sorpresa e indignación. «Habrás sido por algo», era la explicación más frecuente que se daba ante estos hechos, sugiriendo que la propia persona se habría buscado aquel destino fatal. Ahora en el Alto Huallaga no hay apogeo pero el narcotráfico sigue. Por eso es importante señalar que «boom» o apogeo no es sinónimo de narcotráfico y que la diferencia radica en *un cambio de magnitud* de las dimensiones sociales de la empresa de la droga.

Los cambios bruscos en los flujos de comercio y dinero liberados por el acontecimiento del «boom» produjeron fuertes repercusiones para la gobernabilidad de la zona. La actividad económica de toda la región del Alto Huallaga dependía y se organizaba alrededor del narcotráfico, lo cual resultó en la generalización y normalización de esta actividad a tal punto que se alteró el carácter ilegal de la droga, convirtiéndose —en términos prácticos— en un producto «lícito». Esta transformación tuvo consecuencias desastrosas para la legitimidad del Estado peruano y a la par creó oportunidades inimaginables para el naciente proyecto senderista. Tales oportunidades liberaron a su vez otras fuerzas independientes, si no contrarias, que fueron perjudiciales para los fines declarados de su revolución.

La influencia del PCP-SL en el Alto Huallaga sigue un vector temporal que se inicia a principios de la década de los ochenta y comienza, a partir de 1993, rápidamente a perder fuerza sin llegar a desaparecer por completo hasta la actualidad. Sin embargo, la dinámica del PCP-SL como organización a lo largo del apogeo del mercado de la droga en el Alto Huallaga es una historia relativamente mal entendida. La importancia de este estudio radica en que no sólo nos ubica en una de las dimensiones temporales más complejas de la guerra en la que confluyeron una serie de intereses individuales e institucionales, sino porque también nos proporciona mayores elementos

para entender el relativo «éxito» del PCP-SL y el descalabro de la presencia del Estado en el Alto Huallaga durante ese período.

¿Cuál fue la relación entre el proyecto político-militar que se conoce como el PCP-SL y el apogeo del narcotráfico en el Alto Huallaga?

¿Qué hizo el PCP-SL para convertirse, a los ojos de la población del Alto Huallaga, más eficaz y «sensato» que el Estado peruano? ¿Cómo se convirtió el PCP-SL, con el transcurso del tiempo, en un obstáculo no sólo para las aspiraciones de las personas que llegaron al Alto Huallaga sino para el desarrollo del apogeo mismo?

El espíritu del proyecto senderista fue altamente moralista. Es esencial, pues, considerar que el Alto Huallaga debió haber ejercido una fuerza de atracción para el PCP-SL, como un centro de desorden social fuera del control estatal que «exigía» o «reclamaba» su intervención. ¿En qué medida la vida desenfadada del apogeo creó las condiciones a través de las cuales el mensaje justiciero del PCP-SL encontraría eco? ¿Es posible ver entre el PCP-SL y el apogeo, por lo tanto, una atracción ineludible de los extremos? ¿Una afinidad de opuestos que no se redujo a un interés meramente utilitario por parte del movimiento peruano maoísta en el sentido de sólo acaparar beneficios económicos del narcotráfico? Y finalmente ¿en qué forma intentó el PCP-SL regular el gasto «irracional» que produjo el apogeo y progresivamente acopiarlo para sus propios fines?

Esta línea de preguntas es relevante para la discusión sobre las diferentes expresiones que tuvo el senderismo en el país. Es particularmente importante para determinar si, como se ha afirmado muchas veces, el PCP-SL en el Huallaga constituyó una desviación o degeneración de la organización que se forjó en Ayacucho o del proyecto tal como fue concebido por el mismo Guzmán.¹ Dichas apreciaciones tienen sus fundamentos, pero habría que examinar la realidad que el PCP-SL encontró en el Huallaga y las maneras específicas en que su proyecto político-militar se acopló a la economía del narcotráfico. Sobre todo es importante entender como el PCP-SL, a través de la imposición de una estructura de prohibiciones y sus correspondientes mecanismos de aplicación, buscó generar una legalidad propia —es decir, un sistema de reglas y sanciones alternativo al del Estado peruano— que incorporara la producción y comercialización de los derivados de la coca en el Alto Huallaga como actividades «lícitas».

Por último es esencial reconocer, especialmente en lo que se refiere al Alto Huallaga (y su «fuerza corruptora»), que la zona marcó tanto a el PCP-SL como el PCP-SL marcó a la zona. Por lo tanto hay que tener presente, aunque sólo sea en forma de pregunta, la suerte que corrieron sus cuadros, dentro del mismo ambiente frenético e impredecible del apogeo y en qué medida éste llegó a abrumar o corroer las estructuras y la disciplina interna de la organización senderista.

¹ Incluso la idea de que los militantes no fueron del mismo talle que los de Ayacucho. Véase, por ejemplo, Juan de la Puente Mejía, «En el Huallaga aún es noche» en *QueHacer* (Lima) No. 87 (Enero - Febrero 1994), p. 41: «El senderista del Alto Huallaga es más cosmopolita y frívolo, y menos ideologizado. A diferencia del militante maoísta ayacuchano, el del Huallaga tiene pocas motivaciones políticas e ideológicas».

2.9.1. La figura del policía corrupto como precursor del PCP-SL

Integrantes del PCP-SL llegaron al Alto Huallaga en un momento en que se había acumulado un resentimiento generalizado hacia las fuerzas policiales.² Los operativos anti-narcóticos que se inauguraron con el Verde Mar I y II (ejecutados por los comandos de los Sinchis a lo largo de la margen derecha del río Huallaga en 1979 y 1980, respectivamente) son muy conocidos.³ Menos se ha comentado de las maneras en que la corrupción de los cuerpos regulares de la policía —que estaban en contacto más continuo y cotidiano con la población— constituyó un antecedente importante al ingreso de el PCP-SL.

Es común escuchar decir que el PCP-SL apareció por «culpa de la policía». Si bien dicha aseveración es simplista cuando no engañosa, apunta a un sentir popular muy arraigado. Resulta evidente para cualquiera que la imagen abominable de la policía ha quedado ampliamente registrada en las memorias de grandes sectores del Alto Huallaga.⁴ Se le critica sobre todo por su viveza: el usar la Ley y el uniforme para el lucro personal haciendo degenerar su labor en una rapiña abierta y descarada. En estas versiones se hablan de las coimas, presiones y asaltos a las que fueron expuestos los productores de la hoja de coca o «campesinos» durante los primeros años del apogeo. Se comenta como «los rayas» (agentes de la PIP) entraban a las chacras en ambos lados de la Carretera Marginal para exigir cupos bajo amenaza de detención. Cuando no había dinero, los policías incautaban bienes, violaban mujeres, o mataban animales. Las confiscaciones —se cuenta— se justificaban bajo la presunción de que todo dinero y artículo de valor (sea artefacto electrodoméstico, automóvil o motocicleta) provenía del narcotráfico. Era una acusación que se podía aplicar a todos con mucha facilidad, ya que, directa o indirectamente, todos se beneficiaban del movimiento económico de la droga, lo cual daba a la policía licencia para decomisar a su antojo y a criterio propio.

La corrupción de los policías se dio de modo generalizado y sistemático. Y según lo que se asegura ahora había pocos policías que no se dejaran comprar. Las detenciones se practicaban menos para combatir al narcotráfico que como pretexto para «sacar plata». El subterfugio se hizo evidente al ver que el detenido siempre salía libre después de un pago fuerte; en el caso que faltara

² En el sur del Alto Huallaga (Tulumayo hasta la Morada), las fuerzas policiales incluían a la Policía de Investigaciones Peruana (PIP), la Guardia Civil, los Sinchis y posteriormente, la UMOPAR (a comienzos del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry). La Guardia Republicana tuvo una intervención mayormente a partir de la provincia de Tocache, entre Nuevo Progreso y Pólvora.

³ Si bien en las memorias locales, se destacan los operativos Verde Mar, según José González, las interdicciones de gran envergadura comenzaron con el Operativo Cerrojo (1976), seguido por Verde Mar I (1979), Verde Mar II (1980), Bronco (antes de julio 1984), Cóndor (1985 a 1989 en siete etapas) y *Snowcap* (1988 a 1990).

⁴ Es evidente que «la policía» como término general esconde la complejidad de las estructuras y divisiones internas de la institución policial. Para explorar el tema con referencia al narcotráfico se requeriría rastrear la historia de cada unidad o cuerpo por separado, entender su función particular, su cultura institucional y relación con los otros cuerpos policiales; tomando en cuenta que el actuar de cuerpo a cuerpo puede resultar muy divergente. Además habría que explorar la continua necesidad de reorganizar unidades, la interdicción que se realizaba con unidades que llegaron desde fuera de la zona, y su relación con los cuerpos que permanecían día a día en las zonas cocaleras.

dinero podría entregar las llaves de su carro o cuánto otro bien tuviera.⁵ En una zona donde la instancia más cercana del poder judicial estaba a varias docenas de kilómetros en Tingo María, la mayoría de los casos «se resolvieron» antes de que se abriera expediente alguno. La lógica económica y legal enseñaba que convenía llegar a un trato lo más rápido posible, porque cuanto más se acercara a Huánuco o a Lima el costo de ser liberado se multiplicaba por las manos que reclamaran su parte.

En una zona donde la economía se sostenía en una actividad ilícita era de esperar que los encargados de hacer valer la ley fueran mal vistos, considerados de alguna manera enemigos del «pueblo». De hecho en el Alto Huallaga sería difícil encontrar una institución vista con mayor menosprecio por la población local. Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, el hastío e incluso la repugnancia que se expresa hasta la actualidad hacia las fuerzas policiales no se originan en su labor oficial de entorpecer el mercado de la droga. Curiosamente las críticas a las fuerzas policiales se basan no tanto en haber reprimido al narcotráfico como en haber sido excesivamente abusivos y desleales. No los critican por la simple corrupción, es decir, aceptar dinero o sobornos, sino por ser demasiado exigentes y prestarse al juego sucio: no respetar los «tratos» o arreglos a los cuales se llegaban.

La desconfianza y recelo se extendían también a la lucha contra insurgente. En la zona de Aucayacu se cuenta que durante los ochenta era peligroso pasar información a la policía, porque ellos no garantizaban una seguridad mínima para sus informantes. Incluso se asegura que hubo un tiempo en que los policías hasta vendían los nombres de sus fuentes a los mismos senderistas. La rutina era así: con los datos que había dado el informante, la policía detenía personas. Para mostrar que sabían que los detenidos pertenecían o colaboraban con el PCP-SL, les revelaban el nombre de quién los había señalado. Delatar al informante serviría como medida de presión para que los detenidos accedieran a pagar el monto que quería la policía. Luego estas personas, quienes saldrían libres después de recolectado el pago, buscaban su venganza contra quien los hubiera delatado.⁶ Este tipo de sucesos daba a pensar que para la policía aplicar la Ley no era más que un alegato, que la Ley en el fondo servía para traficar con ella y nada más.⁷

⁵ Considerar las aseveraciones de un ex autoridad municipal (provincia de Leoncio Prado): «Esta UMOPAR y la PIP eran los más extorsionadores de estos policías muchos de estos miembros, sus Comandantes, Mayores, Capitanes, se han hecho millonarios. Yo recuerdo que hubo un Comandante Cano. Ese pata sacaba como cuatro volvos cargados de artefactos que le regalaban los narcotraficantes cuando le salió su cambio de Tingo María a Lima. Imagínate la cantidad y además el dinero que les daban. Tú sabes, tú eres narcotraficante. Bueno no tengo plata acá está mi carro llévelo, mi ahorro, llévelo señor Comandante. Acá está le hago la transferencia porque a veces los narcotraficantes no tenían plata a la mano. Entonces para no llevarte preso, para no entregarte, jefe aquí está mi carrito, llévelo, mi auto tiene tres meses, imagínate, así. O sea la policía también se ha hecho millonaria».

⁶ Si se dan crédito a las versiones que circulan como verdad social en el Alto Huallaga, la práctica de pagar para conseguir la «excarcelación» fue una constante de la lucha contra insurgente tanto de parte de la policía como luego del ejército: una suma de varios miles de dólares entregada al puesto policial cuando no a la base militar bastaba para soltar al detenido. Así que la detención por fuerzas del estado no se distinguía fácilmente de un secuestro que se resolvía por medio del rescate. Lo que se escuchan menos son casos en que el mismo ejército vendiera los nombres de informantes al PCP-SL.

⁷ Considera la siguiente historia recopilada en la zona de Nuevo Progreso - Paraíso. Los hechos ocurrieron a mediados de los años noventa: «Había un señor llamado de apodo Veloz. Vivía en el mismo del Puerto [Megote] más acá. El un día

2.9.2. La manera como llegó el PCP-SL

Si bien la historia del apogeo de la droga data desde 1974 o 1975 en los pueblos inmediatamente al norte de Tingo María, su centro inicial siendo el caserío de Anda,⁸ la presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga no comienza a notarse hasta unos seis años después, hasta 1980-81. Se barajan distintas versiones sobre el lugar preciso y el por qué de la aparición de el PCP-SL en el valle⁹ pero muchas personas en la zona de Aucayacu coinciden en que, poco después de los operativos anti-narcóticos Verde Mar I y II una comitiva de cocaleros¹⁰ fue a Ayacucho para conseguir la ayuda del movimiento maoísta peruano. Buscando quien defendiera a los cocaleros de la represión estatal, la comitiva regresó trayendo a varios dirigentes del PCP-SL. Estos cuadros senderistas habrían iniciado el trabajo político de su partido en el campo tomando como causa la defensa de la coca; incorporándose clandestinamente en las organizaciones cocaleras e incentivando cada vez más que los campesinos recurrieran a medios violentos en sus manifestaciones y marchas.

Si para esta versión todo comienza con los operativos de los Sinchis, otra historia busca el hilo por la extorsión de los policías. Al norte de Aucayacu entre los caseríos de La Victoria y Siete de Octubre vivía una familia bien conocida en la zona que había sufrido especialmente los maltratos de la PIP y la Guardia Civil. De «pura cólera» se plegaron al PCP-SL, los cuatro hijos, hermanos varones llegando a ser combatientes del ejército guerrillero. Una variante señala que uno de los hermanos, un tal Leonidas, había estudiado en la universidad de Huamanga, lugar donde se incorporó al grupo de Abimael Guzmán. Sabiendo de los abusos que sufría su familia en su chacra regresó al Huallaga para iniciar la lucha armada, acompañado por tres personas más: un tal Gabriel, Richard alias «el Manco»¹¹, y Artemio, persona que hoy en día se presume ser el dirigente máximo del Comité Regional del Huallaga.

sale a Progreso, sacaba plátano, casi 15 toneladas de plátano. Se va a Progreso y en Progreso ve a un grupo de personas caminando por Progreso que eran de la guerrilla. Y éste se va, este señor, señor de edad, se va a la policía capitán y le dice ¿sabe qué mi capitán? esos señores que están andando por ahí son de la guerrilla. La policía va, lo interviene, lo lleva a la comisaría, investigan y era cierto. Entonces ¡cómo se traficó con la vida de este hombre!... O sea la policía le traicionó a él. ¿Por qué le digo esto? Mire ve cuando... ya estaba en celda, en calabozo, el capitán le dice a uno de ellos, bueno muchacho si tú me das tanto, yo te digo quién te ha vendido. Así de frente. Entonces qué sucede, llegan a un acuerdo. Entre la guerrilla y la policía llegan a un acuerdo. No sé de cuánto de dinero han hablado en ese momento. Le dice «¿sabes quién te ha vendido? quien te ha denunciado, fue el tal señor Veloz»... Entonces ese tal señor Veloz no sabía nada. Salen ellos [de la guerrilla y] a los dos días un tal Bigotes, un tal Pucallpa, después no sé quien mas, vienen, lo intervienen al pata y lo matan a hachazos al señor. Lo han cortado su cabeza, lo han decapitado al hombre delante de su señora, sus hijos y lo han dejado así entre las 6 y media de la tarde 7 de la noche».

⁸ Los focos tempranos de apogeo a mediados de los años setenta fueron relativamente discretos. La droga se elaboraba en lugares escondidos en el monte y una vez procesada no circulaba de modo abierto en los caseríos o pueblos. El apogeo se manifestaba más bien en el consumo suntuario de la población local, en las fiestas alborotadas y la aparición de artículos de lujo: carros, motocicletas, ropa ostentosa, joyas y relojes.

⁹ Tanto José González, *op. cit.*, como Raúl González, «Coca y subversión en el Huallaga», *Quehacer* (Lima) señalan que los primeros senderistas habrían entrado por el sur y norte del valle, por Aucayacu y Puerto Pizana, respectivamente. Las informaciones recopiladas durante el trabajo de campo de esta investigación indican que la organización senderista se habría iniciado únicamente en la zona de Aucayacu a eso de 1980, llegando a la zona norte de Tocache (Pizana) entre cuatro y seis años más tarde.

¹⁰ En otra versión, se habla de «narcotraficantes posiblemente colombianos» y no cocaleros.

¹¹ Le faltaban dos dedos.

Pobladores de Aucayacu, como también autoridades municipales de ese entonces, apuntan a una huelga de cocaleros en el 81 como el acontecimiento en que se voceaba y sentía una presencia oculta del PCP-SL por primera vez. Aunque no se sabe a ciencia cierta a qué sitio entró primero, serían tres las zonas donde el PCP-SL se asentó y empezó a organizar el campo. Dos estaban en la margen izquierda del río Huallaga: el puerto Venenillo y caseríos de La Merced de Locro, Corvina, los Cedros entre otros que luego conformaría el llamado «Bolsón Cuchara»; y en los caseríos de San José de Pucate,¹² San Martín de Pucate y Primavera frente a Aucayacu. La tercera zona fue el sector Gocen-Nueva Esperanza, situado en la margen derecha del río Huallaga al norte de Pucayacu cerca al caserío de Consuelo.¹³

A principios de 1982 «grupos de avanzada» ya estaban visitando comunidades a lo largo de la margen izquierda del Huallaga desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco, donde reunían a los pobladores, pregonaba su política y anunciaban las nuevas reglas que los pobladores tendrían que acatar si querían quedarse. Vistiendo polos negros, pasamontañas y portando escopetas, tramperos y revólveres estos primeros grupos predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado para reivindicar la coca, en vista de que las huelgas pacíficas —aseguraron— no lograrían concesiones significativas.

A la par con el creciente control senderista sobre el campo se vio el surgimiento de Ramal de Aspuzana como centro abierto de la droga.¹⁴ En ese caserío, que debió su existencia y nombre a un pequeño camino de desviación que los trabajadores de la Marginal habían abierto al río Huallaga menos de veinte años atrás, tomaron residencia poderosos empresarios, entre ellos varios colombianos, quienes compraban base de cocaína para su posterior envío a Colombia. En las calles de Ramal se produjo una actividad comercial bulliciosa donde el dólar había apartado a la moneda nacional, aunque el movimiento más importante se encontraba al otro lado del río en el sector de Magdalena donde operaban una serie de aeropuertos clandestinos desde los cuales se embarcaba la droga. Las primeras relaciones entre narcotraficantes importantes y senderistas datarían de esa

¹² Un antiguo colono de la zona de Azul de Magdalena aseguró que San José de Pucate fue el primer caserío organizado por el PCP-SL.

¹³ En una conversación realizada en Aucayacu en julio 2002 un agricultor de Nueva Esperanza insistió en que la primera zona del PCP-SL fue Gocen-Nueva Esperanza. Afirmó también haber conocido a los primeros jefes locales, Artemio incluido y haber sido un colaborador activo de ellos debido a que tenía su chacra en el mismo sector. Que una si no la primera acción armada del grupo en el Huallaga fuera un ataque al puesto de la policía forestal de Pucayacu en el 82 —un blanco a pocos kilómetros de la zona de Gocen— quizá no sea fortuito y apoyaría la hipótesis que Gocen-Nueva Esperanza fuera el primer núcleo de el PCP-SL en el Alto Huallaga. Sin embargo las fuentes recopiladas para este trabajo son insuficientes para constatar fehacientemente en favor o contra.

¹⁴ «Centro abierto» de la droga se refiere a la etapa de apogeo cuando se comerciaba la PBC e insumos libremente en las calles de los pueblos. Ramal de Aspuzana brotó como mercado importante los primeros dos años de los 80, casi paralelo al surgimiento del poblado de Paraíso y a los pueblos más grandes de Uchiza y Tocache. El grado de clandestinidad que gozaba el negocio de la droga dependía del accionar de la policía. El narcotráfico se ejercía abierta o libremente sólo en la ausencia de una represión policial: si bien debida a la falta de una delegación policial o al no accionar de las fuerzas policiales (gracias al soborno o a la amenaza de violencia en su contra). En ese sentido el primer momento de apogeo que se vivió en la zona de Anda y Pueblo Nuevo a mediados de los setenta era mayormente clandestino. Allí se dedicaban a la producción y comercialización de la PBC pero de modo discreto por temor a la represión policial. El apogeo no llegaría a su expresión plena y más vertiginosa hasta los años ochenta sobre todo en los lugares ya mencionados de Ramal, Paraíso, Uchiza y Tocache. Estos sitios serían seguidos posteriormente por Puerto Pizana y Sión aunque nada impedía que un

época: primero referente al control de las pistas, es decir la concesión de permisos de uso a cambio de los pagos de derecho, y segundo a la protección que los senderistas proveerían contra los operativos que venía efectuado la UMOPAR en la zona.

En términos globales la expansión senderista dentro del Alto Huallaga siguió una tendencia de sur a norte por toda la zona rural del valle, donde buscó organizar el campo y acercarse poco a poco a la «ciudad» o centros urbanos más importantes de cada sector. Siguiendo ese patrón los dos atentados de gran envergadura en el pueblo de Aucayacu —contra los puestos de la Guardia Civil¹⁵— se dieron sólo después de la consolidación del control senderista en las zonas aledañas al pueblo en sí. No obstante antes de estas incursiones hubo una serie de acciones menores. Entre ellos podrían citarse: 1) el atentado no mortal contra el ex alcalde Augusto Tovar Tovar a fines del 82; 2) en 1983 el intento de asesinato al gobernador en la puerta de su casa; 3) a principios de 84 una carta firmada por el grupo de izquierda Pucallacta¹⁶ exigiendo la renuncia de todas las autoridades municipales, seguido por el atentado (incendio) contra la casa del entonces alcalde Enrique Bruckman Falcón. Todas estas acciones tuvieron como propósito principal obligar a las autoridades locales a abandonar sus puestos pero simultáneamente ejercer una presión constante sobre la zona urbana desde el campo.

Entre 83 y 85 el PCP-SL procedió a instalar sus propias autoridades, con distintos grados de clandestinidad en la mayoría de los caseríos de la zona rural desde Tulumayo hasta Yanajanca. Su presencia abierta se concentraba en las comunidades ubicadas a la derecha de la Carretera Marginal (pero retiradas varios kilómetros de la misma) y en la margen izquierda del río Huallaga —sobre todo en la zona Cuchara, frente a los pueblos de Aucayacu y Ramal de Aspuzana, y los sectores de la Morada y Huamuco. Dentro de estos lugares los comités populares del PCP-SL controlaban el cultivo de la hoja de coca, regulaban la compra/venta de PBC y, en los sitios en que había aeropuertos clandestinos, resguardaban la salida de vuelos de la droga.¹⁷

pueblo que dependía del narcotráfico oscilaba múltiples veces entre centro abierto y centro «cerrado» o clandestino de la droga, siempre y cuando produjeran momentos en que las fuerzas policiales dejaban de reprimir el negocio.

¹⁵ Según las versiones que se pudieron recopilar, el primer ataque se dio el 31 de enero de 1984 contra el Banco de la Nación y el primer puesto de la Guardia Civil, ambos en el Jirón Tupac Amaru. El Banco sólo sufrió daños de infraestructura pero el GC perdió entre seis y siete de su delegación. Los senderistas liberaron a personas que estaban detenidas en el calabozo y sacaron fardos de coca del depósito del puesto, a los cuales prendió fuego juntamente con los policías muertos. El segundo ataque vino cinco meses después, el 4 de julio de 1984. Esa vez la Guardia Civil había trasladado su puesto al mercado principal del pueblo al lado de dos colegios. Integrantes del PCP-SL, entre mujeres y hombres, varios vestidos en ropa distintiva de gente de la sierra, dentro de la cual escondían sus armas, dominaron rápidamente a los policías y les dio la muerte. Una unidad de la UMOPAR llegó varias horas después del ataque, cuando los senderistas ya se habían retirado, y tomó represalias contra toda persona que encontraba deambulando por la calle. Al día siguiente la gente se asomó desde sus casas para encontrar pedazos de carne humana esparcidos por las calles colindantes con el mercado, en los techos y en las paredes de las escuelas. Después del segundo ataque se declaró al Alto Huallaga una zona de emergencia por primera vez.

¹⁶ Según un ex-autoridad municipal la policía en ese entonces sindicaba a Pucallacta de organización senderista.

2.9.2.1. Desplazamiento del PCP-SL hacia el norte: Uchiza, Paraíso y Tocache

Fue recién a la mitad de la década, que el PCP-SL comenzó a desplazarse hacia el norte a lo que para ese entonces había emergido como la zona más importante del mercado de la droga: Uchiza, Paraíso y Tocache. A diferencia de la parte sur,¹⁸ donde en los primeros años del apogeo el narcotráfico no se ejercía con una extrema violencia, en esa zona del Huallaga era mucho más común ver a patrones o narcos andar con pequeños ejércitos de sicarios que les servían de «seguridad» pero también como un instrumento de poder tanto en las zonas urbanas como rurales. La llegada de el PCP-SL significó que paulatinamente a los narcos grandes les sería más difícil cuando no imposible operar a su capricho en el campo, y que los campesinos cocaleros hipotéticamente tendrían quien represente sus intereses no solamente frente a las agresiones del Estado peruano sino también ante las presiones de los otros actores del mercado de la droga.

2.9.2.1.1. Un infierno llamado Paraíso

El PCP-SL entró primero a Paraíso, al principio de modo clandestino y luego de modo abierto, con una incursión armada que inició su dominio sobre el pueblo; éste duraría hasta fines de los noventa.¹⁹ Paraíso resultó ser un lugar estratégico por ser un enclave de narcotraficantes donde no había presencia de las fuerzas policiales debido a su relativo alejamiento de una vía de acceso rápido y a sus fuertes nexos con los mercados y firmas de Uchiza y Tocache. El PCP-SL encontró en Paraíso un pueblo diverso con un movimiento económico impresionante. El estallido inesperado del apogeo en 1980 había transformado un paraje netamente rural en un pueblo bullicioso y acaudalado, atrayendo personas no sólo de todas partes del país sino de México, Bolivia y Brasil, si bien el grueso de la colonia extranjera lo formaban los colombianos.²⁰ En muy pocos años Paraíso

¹⁷ Principalmente en Bolognesi y Pavayacu (Aucayacu); Magdalena; La Morada y Huamuco; Nueva Esperanza (Consuelo).

¹⁸ En la parte sur (desde Anda a Ramal) los primeros narcotraficantes locales no tenían fama de hombres violentos al estilo de Catalino Escalante (Uchiza) o Edwin Castillo Pinedo alias «el Vampiro» (Tocache). Eran colonos, «oreros» y plataneros que gracias al auge de la coca lograban convertirse en empresarios importantes en calidad de «encargados» o proveedores para los carteles colombianos. A algunos se les recuerda con cariño diciendo que se portaban como «caballeros». Hacían su negocio discretamente, no andaba visiblemente armados y no maltrataban a la población. Todo lo contrario lo representarían firmas como las de Cristal y Champa, cuyas bandas de matones serían el terror de la zona de Aucayacu a mediados de los años noventa.

¹⁹ El 26 de agosto de 1986 reunieron a la población del caserío y varios de los sectores aledaños para ajusticiar a dos hombres desconocidos pero que según los senderistas eran ladrones y por lo tanto merecían morir.

²⁰ Una comunidad muy joven, Paraíso fue colonizado entre 1969 y 1973, primero por un grupo de piuranos y luego por familias de anchashinos afectadas por el terremoto Yungay, según la versión del actual alcalde Artemio Miranda y otros pobladores. Estos dos intentos de radicar en el sitio fueron poco exitosos. Los colonos piuranos que se habían instalado en Megote, el puerto de Paraíso, sufrieron la inundación de su campamento después de una fuerte lluvia y decidieron desplazarse al norte al otro lado del Huallaga, para fundar «Nueva Piura». Los damnificados del terremoto, mientras tanto llegaron después con la ayuda del gobierno militar de Velasco que les brindó asistencia en vivienda, alimentos, medicinas y ganado. Durante tres años los nuevos colonos recibieron un subsidio casi total de parte del estado; sin embargo cuando el gobierno vio que no producían nada con la ayuda entregada, cortó la asistencia. Poco después la mayoría decidió abandonar Paraíso, quedándose sólo un 20% del grupo original. Los que permanecían, junto con otros que llegaron de zonas aledañas como Uchiza, se dedicaron a la agricultura y ganadería. Fue recién en 1978 que apareció el cultivo de coca y sólo dos años después se convirtió en un centro de narcotráfico. Paraíso le antecedió a Uchiza como un centro

se convirtió en un eje de producción, comercialización y transporte para el narcotráfico. Abarcaba entre 18 y 20 caseríos, cada uno con sus respectivas zonas de cultivo, contando además con ocho pistas de aterrizaje —en realidad simples caminos vecinales que comunicaban a los distintos sectores y funcionaban a su vez para despachar cargamentos de pasta básica al extranjero—.

Por su potencia económica, ambiente cosmopolita y población que en los años ochenta creció a varios miles de habitantes, Paraíso desarrolló una atmósfera de «ciudad». Ostentaba los mejores restaurantes, discotecas y hoteles que se acostumbra ver en el Alto Huallaga. Los narcotraficantes principales tenían su propio barrio donde vivían en casas de madera amachimbrada que provocaban la admiración del pueblo. De un día para otro Paraíso se había levantado como pueblo grande, testigo de la fuerza urbanizadora del auge de la droga, pero a la vez sufría de un cierto aislamiento de los otros pueblos grandes de la zona. El único acceso a la Carretera Marginal era por pequeños botes o deslizadoras al puerto de Nuevo Progreso, y los caminos que lo comunicaban con Uchiza, eran rústicos. La ausencia del reconocimiento oficial del Estado²¹ acentuaba su situación de pueblo más que olvidado, escondido. Si bien esa condición recóndita lo hacía más atractivo como centro de operaciones para los narcotraficantes posteriormente le facilitaría la entrada del PCP-SL y su eventual dominio sobre el pueblo.

Entre los grupos de narcotraficantes que operaban desde Paraíso, las organizaciones locales que destacaron más eran las de Braulio Tafur, Antonio «Tío» Ríos y Marcelo Ramírez,²² más conocido como «Machi». Desde un principio reinó una convivencia entre el PCP-SL y las firmas y sin excepción los jefes aceptaron las obligaciones que les imponían los senderistas como la mejor manera de evitar problemas²³ —aunque fue con Machi²⁴ que el PCP-SL parece haber establecido la relación más importante²⁵—. No era del todo extraño que muchachos del pueblo de Paraíso pertenecieran a la guerrilla y a la vez trabajaran para las organizaciones de Tío Ríos, Machi, o incluso Catalino Escalante en Uchiza. Al nivel de la gente «común y corriente» estar con la revolución no impedía que uno en sus momentos libres hiciera pases de droga o proveyera seguridad a uno de los patrones. Existía una comunicación muy fluida entre ambas corrientes.

totalmente abierto al comercio de la droga por dos o tres años y según versiones netamente anecdóticas la superó en volumen de negocio hasta que Uchiza emergió como el mercado más activo del Huallaga a partir del 84-85, posición que «defendería» hasta 1990. A diferencia de Paraíso, Uchiza era un pueblo antiguo, habiendo sido una zona cocalera al menos desde el siglo XIX; conocía la producción de la pasta básica de cocaína desde los años cuarenta cuando una «fábrica de cocaína» operaba en el mismo pueblo como concesión del estado. Los vuelos clandestinos de la droga habrían comenzado a salir del aeropuerto municipal de Uchiza recién a fines de los años setenta, con el narcotráfico manteniendo cierta clandestinidad hasta los primeros años de los ochenta.

²¹ Recién en abril 2002 se designa a Paraíso como poblado menor.

²² Los narcotraficantes colombianos incluían a un tal Diablo, Toyota, Ministro, JR, Rambo entre otros; aunque operaban en Paraíso solían ser más transitorios y menos identificados con un lugar específico.

²³ O como describió la situación un poblador: «Así ellos (los narcos) se sentían felices, más tranquilos y podían dormir tranquilamente, porque si no pues era un temor de que si venía el PCP-SL y no me ponía de acuerdo, me mataban, así era».

²⁴ Acerca de los términos exactos de su relación no los puedo constatar. Al menos hubo un acuerdo de convivencia, que lo permitió tanto a Machi como a los demás narcotraficantes del lugar dedicarse a su negocio.

²⁵ Machi no fue el único en tener una relación estrecha: según cuenta un señor que durante los ochenta era dueño de un hotel en Nuevo Progreso el Tío Ríos fue nombrado el primer delegado en Paraíso con la responsabilidad de recaudar dinero del narcotráfico.

2.9.2.1.2 Entrada paulatina a Tocache y Uchiza

A partir de su llegada al caserío de Paraíso todo marchó muy rápido. El PCP-SL iba organizando todos los sectores de Paraíso pero también las zonas de cultivos alrededor de Nuevo Progreso, Tocache y Uchiza, poco a poco tomando el campo. Los patrones que antes tenían carta abierta para presionar a los campesinos con sus bandas de sicarios se vieron obligados a arrimarse más hacia las zonas urbanas por miedo a que los agricultores informaran a los delegados de los comités populares.

Una noche un grupo armado de senderistas ingresó al pueblo de Nuevo Progreso y reunió a toda la población en la plaza de armas. Decían que venían «a poner orden» a causa de las muchas quejas que habían recibido: que los traqueteros estafaban a los agricultores en la compra de la droga y que las firmas recibían droga fiada pero no cancelaban sus deudas. Dieron un plazo de 24 horas para que todos remediaran sus problemas de pago. «Y los hombres al ver que las cosas eran serias», cuenta un testigo, «se han puesto a derecho, creo que desde esa fecha la gente empezó a valorar su vida y a no deber».²⁶ Poco después se formó un comité dentro de Nuevo Progreso y desde ese entonces para cualquiera que tuviera problemas de cobranzas podía ir al delegado y presentar su denuncia, sabiendo que allí «harían justicia».²⁷

«Ciudad»

«Pucha hermano, no sé, doy gracias a Dios. Creo por milagro he vivido, porque todo era quién podía más, quién demostraba que podía mas. Y también venían otros, que eran más más, chambones se les decía, más bacanes se querían dar. Venían... «¡se me cierra el bar!» y todo el mundo afuera. Caballero tenías que salir. Caballero. Verdad, yo estuve en una oportunidad ahí en las Brisas, el burdel. Estábamos tomando y ahí también estaban pues los grandes, estaba el Vampiro. El loco mismo... con su metralleta así de collar normal, oi pero para ellos como si nosotros no existiéramos ¿no? Buscaban a las mejores chicas para ellos. Nosotros a veces de hombres, no podíamos hacer nada. Y ¿qué habrá pasado con este Vampiro el loco? Agarró una silla así y la destrozó en la cabeza de la chica. No contento con eso, le agarró como pelota. Y pobre del que diga algo. Nadies. Mudo todos. Lo que no te interesa, no es tu problema. Pucha compadre era una época ¿cómo te puedo decir? en que vivías por voluntad de Dios creo verdad, porque yo no tenía miedo, yo no sabía tener miedo, más bien ahora me da miedo salir hasta la esquina, me da miedo. Quizás he tomado más conciencia de lo que es la vida ¿no? porque en esa época nada, al contrario me divertía mirando la violencia».

—Alcides, joven traquetero

El menor de los hijos, Alcides, se crió escuchando hablar de los pichicateros²⁸ y se hizo grande viendo el estallido del «boom» del narcotráfico. Recuerda cómo llegaron los colombianos, primero clandestinamente, a internarse en el monte sin acercarse al pueblo, y cómo luego se iban apareciendo poco a poco hasta que anduvieron abiertamente ya por las calles de Tocache —claro, previo pago a las autoridades de turno— cada uno con su grupo de hombres armados. Así empezó el apogeo: de la noche a la mañana. Recuerda también como al poco tiempo comenzó el pandillaje y como entre las distintas firmas surgió una rivalidad tan implacable que «entre ellos ni se podían ver», tanto así que los encuentros repentinos casi siempre terminaban a balazos. El Vampiro era uno de ellos, sólo que él era «neto» tocachino: el primer peruano en Tocache en armar su propio grupo, el primero y más sanguinario. Él les hizo la guerra a los colombianos.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ La misma fuente informa que en ese momento no existía presencia policial en Nuevo Progreso. La primera delegación se instalaría el año siguiente (1987/1988) después del Operativo Relámpago.

²⁸ Regionalismo de la época pre-apogeo que se usaba para referirse al contrabandista que producía y comercializaba la pasta básica de cocaína.

La llegada del PCP-SL a Tocache sería más sutil al principio, quizás por tratarse de un pueblo más grande, vinculado al resto del país por vías de comunicación, y con una presencia nominal del Estado peruano. Según relata un ex sicario que trabajó para una de las firmas principales, una persona de confianza de Machi fue a Tocache para presentar a un emisario del PCP-SL a los narcos más importantes.²⁹ El representante senderista anunció que su organización iba a entrar al pueblo, pero no para enfrentarse con los narcos sino para ayudarlos a ordenar la ciudad, tanto para poner en jaque a la policía como para acabar con la delincuencia que azotaba la zona urbana. Fue un ofrecimiento que la mayoría de los narcotraficantes recibió con agrado.³⁰ A raíz de ese primer contacto el PCP-SL consiguió autorización para colocar tres o cuatro de sus cuadros en cada una de las firmas. Estos no portaban armas, tenían la misión más bien de acompañar a los grupos de narcotraficantes: acompañar y observar.

Con la complacencia y ayuda de los narcotraficantes lo primero que hizo el PCP-SL fue organizar una ronda dentro del pueblo. La ronda consistía de grupos de diez o doce sicarios de las firmas con uno o dos representantes del PCP-SL. Los sicarios estaban armados pero los senderistas dirigían. Juntos vigilaban las calles, recibían quejas de asaltos o abusos y administraban penas.

Fue ese mismo año (1986) que los vuelos con droga comenzaron a salir del aeropuerto municipal de Tocache «con fuerza», a veces hasta cuatro o cinco veces al día. El narcotráfico estaba en pleno apogeo y la droga circulaba abiertamente. De pronto el PCP-SL les habría sugerido a los jefes de firma que el apoyo de su organización al ordenamiento del pueblo sería más eficiente si ellos, los narcotraficantes, invertían en el trabajo de los senderistas, trayéndoles armamento de guerra de Colombia.³¹

Para los primeros meses de 1987 ya había cientos de combatientes concentrados en Tocache y el PCP-SL controlaba el pueblo. Nombró delegados en cada manzana y organizó a los varones en una ronda nueva, esta vez formada sin la presencia de los sicarios. La llamada «ronda de cuadra» vigilaba las calles de la ciudad pero sólo durante las horas nocturnas. Pequeños grupos armados sólo con bastones de madera caminaban por sectores de tres manzanas, reportando cualquier situación que no podían resolver en el Club Obrero donde elementos armados del PCP-SL había establecido un «Comité de Justicia Popular».³²

Paralelamente, es decir, a fines del 86 y a principios del 87 el PCP-SL avanzó hacia el norte organizando a los pueblos y caseríos al norte de Tocache: Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo entre otros. Sería una zona de expansión rápida e intensiva para el

²⁹ Entre ellos Vampiro, Mashico, Aníbal, Shushupe, Aureo, el gato Gerber.

³⁰ Los jefes de las firmas estaban «emocionados» con el ofrecimiento y aceptaron que el PCP-SL enviara personal para ser integrado a sus organizaciones. Más tarde llegarían a considerar su acogida al PCP-SL un grave error.

³¹ Fue aproximadamente entre 1987 y 1988 que se notó una transformación en el armamento que utilizaban los grupos senderistas en sus acciones de guerra. Si antes se portaban revólveres y escopetas, luego llevarían ametralladoras, AKM, FAL y RPG.

³² Entrevista del investigador. También *Revista Sí*, 20 de julio de 1987.

PCP-SL, alimentada por el fuerte movimiento de la droga en Puerto Pizana que surgiría como mercado importante de la droga a fines de los ochenta. La expansión de sus tareas organizativas llegaría hasta Punta Arenas/Campanilla, viéndose frustrada a partir de Juanjuí por la presencia fuerte del MRTA.³³ Igualmente fue durante esta época que el PCP-SL habría comenzado a organizar los «comités de poder popular paralelo» (CPPP) en pueblos que tenían presencia de fuerzas del Estado peruano³⁴, conocido en el habla popular del Huallaga, como «las Urbanas». La función de las Urbanas era mantener una red de espionaje, dedicarse al cobro de impuestos o colaboraciones de comerciantes y al asesinato selectivo de «malos elementos».

A fines de mayo el PCP-SL atacaría el puesto policial de Uchiza y en junio declararía un paro armado a nivel del Alto Huallaga. Entre Tulumayo y Nuevo Progreso obligaría a la población rural a participar en el bloque de la carretera, la destrucción de asfalto y la pintura de fachadas de viviendas a lo largo de la Carretera Marginal. Estos primeros paros serían una medida de fuerza poderosa, con la cual el PCP-SL no sólo lograba cortar la comunicación de vehículos entre Tingo María y el resto del Alto Huallaga, sino también demostraba su control, a todas luces total sobre el campo que «vacía» para cerrar el tráfico. Poco después comenzaría la destrucción de puentes³⁵ y luego la instalación de garitas de control por toda la Marginal.

Parecía que el Alto Huallaga ya estaba bajo dominio senderista cuando un 15 de julio de 1987 paracaidistas de unidades especializadas de la policía tomaron el pueblo de Tocache en un gran operativo denominado «Relámpago».³⁶ Aparentemente el PCP-SL y los narcotraficantes tenían conocimiento del contraataque policial porque ambos grupos se retiraron de la zona urbana antes del arribo de los primeros efectivos. Unidades especiales de la policía se instalaron tanto en Tocache como en Nuevo Progreso y en estos centros urbanos la presencia del PCP-SL se hizo clandestina; y si bien el abandono de Tocache debía de haber parecido en el momento sólo una retirada estratégica, el PCP-SL nunca volvería a intentar una ocupación abierta de un centro urbano dentro del Huallaga. En ese sentido la toma y ocupación de Tocache, por ser la primera y última vez que el PCP-SL detentara un control abierto sobre la «ciudad», fue un caso límite. La regla fue más bien hostigar y presionar a la zona urbana desde el campo y en ocasiones muy especiales acumular fuerzas de todos sus bolsones para lanzar un ataque; en estos casos entraban por un máximo de unas horas y salían con prisa antes que llegaran refuerzos de las fuerzas policiales o castrenses.

³³ Sobre la zona norte de Tocache el PCP-SL mantendría un dominio hasta la mitad de la década de los noventa y una influencia palpable hasta el año 1999. A mediados de los ochenta grupos pequeños del MRTA operaban e incluso llevaban a cabo atentados en la zona urbana de Tocache, pero su peso fue mínimo en comparación con el del PCP-SL.

³⁴ Aucayacu sería un caso singular, pero más tarde se sumaría a la lista Uchiza y Tocache y a una serie de caseríos pequeños a lo largo de la Carretera Marginal. Tuvo una presencia fuerte en Aucayacu de 1986 a 1989, hasta que fue totalmente eliminado en 1992. En Tocache «la Urbana» duraría, según afirman algunos, hasta 1995. No tengo datos precisos sobre su actuar en Uchiza.

³⁵ Sobre los ríos Pendencia, Pacae y Angashyacu. Con la destrucción de pistas y puentes el viaje de 40 kilómetros entre Tingo María y Aucayacu que antes se hacía en 45 minutos, se extendía a dos horas y media sobre todo durante la estación lluviosa.

³⁶ *Revista Sí*. 20 julio 1987.

A raíz del Operativo «Relámpago» y la fuga al campo de las firmas principales, Tocache decae como centro abierto de la droga, surgiendo Sión como nuevo foco del mercado de la droga. Tocache, sin embargo, seguirá siendo importante dentro del circuito del narcotráfico³⁷. Continuarían saliendo los vuelos del aeropuerto municipal pero ya con menos frecuencia y de modo menos atrevido. Tocache tomaría un lugar muy secundario a Uchiza donde el narcotráfico se mantendría en pleno apogeo y con una fuerza creciente hasta fines de la década de los ochenta.

2.9.3. Segunda etapa: primeros conflictos entre narcotraficantes y el PCP-SL

Para mediados del 87 comenzarían a presentarse los primeros conflictos con los narcotraficantes cuando se enfrió la relación entre Machi y el PCP-SL. Hay versiones diversas sobre la causa detonante. Algunos dicen que mientras Machi estaba de viaje en Colombia, el PCP-SL habría matado a su hija o a toda su familia. Otros afirman más bien que los muertos eran de un grupo de once trabajadores de Machi que el personal de el PCP-SL vio hablando por radio con su jefe y pensaron equivocadamente que se estaban comunicando con el ejército; los senderista dieron muerte a siete en la Plaza de Armas de Paraíso, perdonando a los cuatro restantes bajo la condición de incorporarse a las filas de su movimiento. También se recopiló una tercera interpretación: que Machi había ordenado que un grupo de seis de sus hombres secuestraran a un ganadero de Paraíso. Por fortuna la víctima conocía a sus captores y logró convencerlos para que lo soltaran. Poco después el PCP-SL se enteró del secuestro y decidió enfrentarse con Machi.

Fuere cual fuere el inicio del conflicto Machi llegó a «declarar la guerra» al PCP-SL y con la ayuda de la policía armó un «ejército» de cien hombres. Vistiendo uniforme policial «con rango de mayor o comandante» fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba senderista. El momento decisivo del conflicto vendría el mes de noviembre de 1987 cuando, en un episodio que ya ha tomado matices de leyenda, las fuerzas del PCP-SL le tenderían una emboscada en la entrada de Paraíso. La emboscada fracasa, sólo logrando herirlo de bala, y Machi se atrincheró en el enorme «fortín» de concreto armado que había construido en el pueblo. Allí se inicia una batalla que dura unas 24 horas, dejando entre docenas y cientos de víctimas según la versión. Atrapado en su reducto Machi sufre numerosas bajas entre su gente, pero al final logra salvarse gracias a dos helicópteros de la policía peruana que llegan a extraerlo de su refugio. Lo que pasó con Machi luego es menos claro. Algunos dicen que se fue a Colombia, otros que se fue a Panamá, mientras que para otros, lo mató la misma policía porque sabía demasiado.

El caso de Machi es significativo en varios aspectos: por la estrecha relación y colaboración que mantuvo al principio con los senderistas, por ser el primer narco que se levantó en armas contra el PCP-SL, por el alto grado de apoyo que recibió de la policía, y finalmente por el

³⁷ Tocache les servirá a Sión, por medio del río Huallaga, y a Uchiza por medio de la Carretera, como un centro de abastecimiento de insumos para la elaboración de la droga y productos de consumo como la cerveza y gaseosa.

total misterio que encubre los detalles y la naturaleza cambiante de sus alianzas. Quizá más significativo aún, la batalla con el PCP-SL no sólo vino a anunciar el fin de Machi en Paraíso, sino el comienzo del fin de Paraíso como centro importante de apogeo, ya que al año siguiente el movimiento social de la droga se iría desvaneciendo poco a poco y los narcotraficantes importantes se irían a otros sitios, dejando Paraíso a la sujeción, cada vez más totalitaria, de los senderistas.

2.9.3.1. Asalto al pueblo de Uchiza

Para el año 88 el PCP-SL comenzaría una serie de intentos para ganar influencias entre las firmas que operaban desde la zona urbana de Uchiza. Los particulares de esa iniciativa tampoco son claros pero el siguiente caso puede ser ilustrativo. Según cuenta un señor quien antes fue un narco independiente³⁸ el PCP-SL ejercía una influencia progresiva sobre el campo alrededor de Uchiza desde su ingreso a Paraíso en el 86, sin embargo enfrentaba dificultades para implantarse en el pueblo mismo. Las firmas que se concentraban allí eran grandes, estaban bien armadas y dispuestas a pelear entre sí. Sin embargo sucedió que el grupo de un tal Tío Carachupa venía perdiendo un conflicto con tres firmas más y buscó la intervención del PCP-SL a fin de proteger sus intereses económicos y, se supone, su vida. A raíz de esa invitación, una comitiva liderada por el camarada «Mancini» viajó desde Aucayacu a Uchiza para reunirse con ese patrón.³⁹ Es factible que con esa primera reunión se iniciara una serie de conversaciones con las firmas de Uchiza, entre las cuales figuraría la de Bombonaje⁴⁰ al año siguiente donde Mancini pactó quizá el primer documento estipulando las condiciones a las que las firmas tendrían que sujetarse para seguir participando en el mercado de la droga.⁴¹ Si bien dicho convenio estableció las tarifas de cupos que se debían pagar para operar «legalmente» en la zona, en sí solo formó parte de un conjunto de condiciones que el PCP-SL quiso impulsar para mejor someter a las firmas a su control.⁴²

³⁸ Se llaman narcos «independientes» a personas que utilizan su propio dinero para acopiar y comercializar la base de cocaína. Frecuentemente trabajan a poca escala al estilo de los traqueteros, comprando en el campo para luego vender en los pueblos grandes, pero a diferencia de éstos, no están sometidos económicamente a los jefes de firmas o «patrones», sólo a las vicisitudes del mercado.

³⁹ El grupo de Mancini se hospedaba en la casa del Tío Carachupa, una estructura de cemento, de dos pisos que luego el ejército ocuparía para su base. El señor quien me contó la historia afirma haber integrado la comitiva que Mancini llevó a Uchiza.

⁴⁰ un caserío 10 kilómetros al suroeste de Uchiza. La reunión fue reportada en los medios de prensa gracias a la mención que hace Demetrio Peñaherrera «Vaticano» en su declaración policial.

⁴¹ Según la declaración de Peñaherrera, dicho documento estipulaba que «cada firma debía pagar Quince mil dólares (\$15,000.00) por matrícula... dando un plazo de ocho días para pagar dicha cantidad». El pago de dicha matrícula tenía que repetirse cada seis meses. Además cada firma debía pagar \$3.00 dólares por kilo de PBC. Vaticano afirma haber pagado la matrícula durante seis meses en 1989 y además colaborado «con medicinas, chompas, botas, prestaba vehículo pero menos con armas, explosivos ni municiones». Para fines de diciembre sería convocado por un mando conocido como «Liborio» a otra reunión, esta vez en el caserío de Pampayacu. Las firmas fueron citadas de dos en dos y Vaticano se presentó con Greco. Luego el PCP-SL asesinaría a los jefes de firma que no acudieron a su cita, entre los cuales, Vaticano menciona a Valeza, Lencho y Sardino, pero según otra fuente serían varios los jefes de firma de Uchiza que el PCP-SL mataría en esa época por haber incumplido las nuevas reglas.

⁴² Según la revista *Sí* (16 de mayo de 1994), un compromiso «más orgánico e integral» se firmaría el 9 de abril de 1990, tratándose de un conjunto de «siete puntos: (1) precio, (2) peso, (3) negociación directa, (4) intermediarios, (5) acuerdos y normas, (6) delegaciones, y (7) sanciones.» El punto 4 de este convenio, de acuerdo a la revista, «[l]egaliza al PCP-SL como controlador del mercado e interlocutor único con las firmas. Norma también el control y uso de aeropuertos y hasta fija pautas sobre el tipo de cambio: en Uchiza, Huánuco, San Martín y Ucayali...»

No queda claro si la reunión en Bombonaje se realizó antes o después del asalto sobre el pueblo de Uchiza el 17 de marzo de 1989. Ese segundo ataque y la matanza de policías que se produjo como resultado, fue un hecho humillante para la institución policial. Humillación no sólo por subrayar una vez más el apoyo popular con que gozaban los senderistas a desmedro suyo, sino por haber hecho dolorosamente evidente que ni siquiera contaban con la solidaridad de las otras fuerzas del Estado. Que éstas no acudieron a los múltiples pedidos de socorro que hicieron los policías durante el ataque, luego crearía una situación muy incómoda para el gobierno Aprista que no encontró como explicar de modo convincente por qué la orden de enviar refuerzos no se dio a tiempo.

Si bien el asalto sobre Uchiza se interpretó desde Lima como señal de que el poder y la influencia de el PCP-SL sobre el Alto Huallaga habrían alcanzado su punto más alto,⁴³ desde otra óptica simplemente reflejaba un ejemplo más de la táctica que venía aplicando hacía varios años: copar el rencor popular contra la policía para convertirlo en una fuente de poder propio. Es posible que la trascendencia del segundo ataque a Uchiza se debió a las repercusiones que produjo a nivel nacional, a raíz de las cuales se volvería a declarar el Alto Huallaga en Zona de Emergencia y dando al ejército la autoridad máxima sobre la región. Dicho eso habría que preguntarse también cómo el acontecimiento figuró dentro de los planes de el PCP-SL que justo en esa coyuntura proyectaba no sólo una dominación cada vez mayor sobre las firmas que operaban en Uchiza⁴⁴ sino también sobre el mercado de la droga en toda la región cocalera.

Lo que no puede negarse es que el año 89 marcó un punto crítico en el despliegue del PCP-SL por el Alto Huallaga. Simultáneamente a los sucesos ya mencionados se dio una fuerte crisis en el precio de la droga que fuentes locales suelen atribuir ahora a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali en ese época. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo cual causó una acumulación de PBC y una saturación del mercado local. Como consecuencia el precio del kilo de base en el Huallaga comenzó a hundirse. De un monto que había fluctuado entre \$1,000 y \$1,200 por buena parte de los años ochenta perdió más de la mitad de su valor y seguía bajando hasta llegar a niveles en que ya no compensaba procesar la droga.

Con el desplome de precios el PCP-SL no sólo recibió las quejas de los campesinos cocaleros sino que vio gravemente afectadas las economías de sus comités populares —de las cuales dependía para las redes logísticas que abastecían a sus estructuras partidarias y militares—. Frente a esta situación el PCP-SL intentó hacer subir el valor de la droga, declarando precios

⁴³ Inclusive se comentó que el PCP-SL ya ejercía el poder con un alto grado de legitimidad entre la población del valle. Véase Raúl González, *Quehacer* 58 (Abril/Mayo 1989). No obstante es necesario distinguir entre zona urbana y zona rural cuando se trate de la autoridad que pudiera proyectar el PCP-SL en un momento dado. Con la posible excepción de la toma progresiva de Tocache entre marzo y julio de 1987, el PCP-SL nunca logró instalar una presencia totalmente pública, es decir un Comité Popular Abierto, en un pueblo grande del Huallaga. En ese sentido la zona urbana siempre constituyó un límite, un horizonte para el dominio senderista. En el campo el PCP-SL recurrió a mecanismos muy eficientes para sujetar a la población, en las comunidades más grandes y cosmopolitas donde se concentraba el capital del mercado de la droga el sistema senderista no tuvo el mismo éxito.

mínimos de compra/venta y en varias ocasiones llegando a prohibir toda transacción o salida de droga del valle. Las prohibiciones sobre la compra/venta y transporte de droga solían implementarse a través de los paros armados, cuya función principal ya no era la de impedir el ingreso de fuerzas del Estado al valle, cosa que ya era incapaz de lograr totalmente⁴⁵ y menos destruir infraestructura vial, sino la de forzar un alza en el precio de la PBC.

A partir del paro armado del 89 el PCP-SL comenzaría a matar traqueteros supuestamente por haber descatado la orden de no comprar, aunque en la práctica nunca faltaban las justificaciones para eliminar a los acopiadores: fuera por «pendejadas» —traficar en dólares falsificados, droga adulterada o cometer otro tipo de estafa— o fuera «por soplón». Fuentes ligadas al narcotráfico comentan que fue en ese entonces que empezaron los abusos de los mandos senderistas quienes mataban a narcos por la sólo razón de despojarlos del dinero o droga que llevaban o tenían almacenados. Ese tipo de malos tratos vendrían a negar la reputación justiciera y moralizadora que el PCP-SL tanto había querido crear, dejando más bien entre los que comercializaban la droga la impresión de que el grupo armado se portaba igual y de repente muchas veces peor que las autoridades de siempre. Las matanzas, los abusos y los intentos de controlar precios e interferir en las prácticas o mecanismos del mismo mercado de la droga vendrían a crear un malestar creciente entre los narcos y contribuirían a que algunos de ellos vieran al PCP-SL como su enemigo principal.⁴⁶

De modo paralelo a las presiones cada vez más violentas del PCP-SL, los narcos encontrarían un aliado inesperado. A raíz del segundo ataque a Uchiza se instaló la sede de la jefatura político-militar en ese mismo pueblo bajo el mando del General Alberto Arciniegas Huby. Sin entrar en detalle aquí sobre el período de Arciniegas y los logros que le atribuyen y que él mismo reivindica,⁴⁷ me limitaré a decir que Arciniegas determinó que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado peruano continuaba reprimiendo a la población *en general*. Su decisión de prohibir la actuación de las fuerzas policiales o la continuación de los programas de destrucción de los cultivos de la coca (tanto el roce de defoliantes como erradicación manual) en el Huallaga implícitamente reflejaba su entendimiento que dicha represión dañaba las posibilidades de exigir de la población una obediencia plena a su autoridad. Poner un alto a la interdicción policial y las labores de erradicación le disputaba a el PCP-SL una de sus bases de legitimidad entre la población local.

⁴⁴ Entre ellos Ministro, Greco, Vaticano, Zancudo, Valeza, Jíbaro, Negro Coco, Sardino, Lencho, Julius, Polaco y muchos más.

⁴⁵ Sobre todo en vista de que para 1989 tanto la policía como el ejército ya contaban con helicópteros para movilizar sus efectivos.

⁴⁶ Se podría citar a Vaticano, Shuco Claudio, Champa y Cachique Rivera entre otros que se armarían para defenderse del PCP-SL.

⁴⁷ Por ejemplo, la aseveración que, durante su tiempo en el cargo, el ejército peruano se hubiera dado un golpe casi mortal al EGP. Entrevista con el General Arciniegas, 10 diciembre 2002 (realizada por un equipo de la Comisión de la Verdad). Véase también José González, *op. cit.* 1993, sobre los aciertos de la estrategia implementada por el Gral. Arciniegas.

La expansión de las actividades del ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que a la larga afectaron más el avance del PCP-SL que sólo el hecho de haber parado de modo temporal la represión contra el narcotráfico. Estos fueron la colocación de bases militares en Uchiza, Palmas del Espino (Sta. Lucía), Tocache y Madre Mía (conjuntamente con la reorganización o refuerzo de la presencia del ejército en Aucayacu), la reanudación de trabajos de inteligencia y el mejoramiento de la Carretera Marginal, este último permitiendo restablecer una comunicación fluida con Tingo María por vía terrestre.

El 90 se consolidaría la presencia del ejército con la creación del Frente Huallaga. Retomar los pueblos principales del Huallaga y los puntos estratégicos a lo largo de la Marginal podría describir la táctica del ejército, constituyendo el primer paso en revertir el avance del PCP-SL. Ese año aparecieron bases en Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana y Punta Arenas, las cuales servirían para apartar más a los senderistas de la Carretera Marginal. A partir de ese entonces la amenaza del PCP-SL sobre los centros urbanos del Alto Huallaga empezaría a disminuir. Desde sus bases el ejército ya iba desarticulando a los comités de poder popular paralelo (CPPP) que en poco tiempo privarían al PCP-SL de su red de vigilancia, al minar su habilidad de operar en los centros urbanos y dificultar un seguimiento cabal de las actividades de las firmas. Mientras los operativos del ejército en el campo golpeaban cada vez más a su estructura rural, hasta que para fines del 90 el PCP-SL ya no se encontraría en la misma capacidad de incursionar en las zonas urbanas, aunque el hostigamiento armado y presiones diversas sobre sus poblaciones continuarían a lo largo de los años noventa.

Para el PCP-SL la ascendencia del ejército peruano significó una fuerte pérdida de influencia donde más circulaba el dinero del narcotráfico aunque el costo no sólo se medía en términos económicos sino también de seguridad. Con el ejército asentado en los pueblos principales, vigilar el flujo de personas entre las zonas urbanas y rurales volvería a ser una preocupación más apremiante. Esta podría haber sido otra de las razones por la que los traqueteros, quienes conforme con su trabajo tenían que moverse constantemente entre «ciudad» y «campo», recibieron el grueso de la violencia senderista, justo en un momento en que el Partido empezó a dictar condiciones sobre la participación en el comercio de la droga.

El PCP-SL en su afán de sujetar las firmas a su control, las había transformado en aliadas naturales del ejército. Las firmas encontrarían en éste un protector más discreto y menos intruso en lo que se refería al mercado, y con una apariencia además de ganador que el PCP-SL ya no podía proyectar.

2.9.4. El fin del apogeo

Para fines del 89 y principios del año 90 el apogeo de la droga comenzaría a perder la fuerza que lo había caracterizado durante buena parte de la década de los años ochenta. El pueblo de Uchiza que

desde 1984 figuraba como un centro abierto del narcotráfico y quizá el mercado más grande del valle empezaría a decaer frente a una confluencia de obstáculos. Entre ellos podrían mencionarse la instalación de la base de la DEA en Santa Lucía (setiembre 1989), el comienzo de la interdicción aérea por parte de la Fuerza Aérea (FAP) con apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, la destrucción de tierras de cultivos tanto por las fumigaciones «experimentales» con el SPIKE a fines de los ochenta como por la diseminación posterior del hongo *Fusarium Oxysporum* y las presiones de el PCP-SL sobre las firmas. En conjunto estos cambios combinaron para privarle a Uchiza las cualidades que la habían hecho propicia como mercado abierto del narcotráfico.

El apogeo se fugaría del Alto Huallaga en busca de mejores condiciones, volviéndose menos asentado y más nómade. Cocaleros y firmas se desplazarían hacia el Bajo Huallaga (Juanjuí, Bellavista, Picota) aunque en mayor medida hacia Aguaytía y Pichis Palcazu. Elementos del PCP-SL los seguirían con preferencia hacia el departamento de Ucayali.

El narcotráfico no abandonaría el Alto Huallaga, pero ya no tendría el volumen de negocio que experimentaba durante los ochenta. Todavía se darían fenómenos «menores» o limitados del apogeo, donde volvería por momentos breves a reinar el ambiente festivo de antaño — generalmente cuando narcos locales lograban, previo acuerdo con el jefe de la base militar, despachar cargamentos de droga desde una pista improvisada cerca al pueblo—. No obstante poco a poco el narcotráfico se haría más discreto y precavido, y los embarques menos frecuentes debido a la cada vez mayor interceptación de vuelos por la Fuerza Aérea.

El PCP-SL por su parte trataría de modo progresivo de crear de la droga su propia empresa, absorbiendo a todas las divisiones de trabajo requeridas para los ciclos de producción y embarque. Si bien ya no podía influir tanto en las firmas, que se concentraba en los pueblos grandes, operaría pequeños feudos independientes en el campo, sitios como Paraíso, la Morada o Batán desde los cuales enviaría droga a Colombia. Era un PCP-SL que estaba cada vez más involucrado con las operaciones del narcotráfico, pero sólo dentro de sus sectores de concentración, puesto que ya no estaban en condiciones de controlar el mercado a nivel del Huallaga o erguirse como estado por encima de toda la población del Huallaga. Sólo en el campo seguiría siendo una autoridad, aunque una autoridad cada vez menor por los operativos del ejército.

Campo

«A ella por ejemplo la agarraban y la obligaban a colaborar con su partido. ¿Por qué? porque ella tenía su negocio. Parece que venía eso de su familia o sea en Panao estaban acostumbrados a eso o sea a trabajar. Su papá tenía una camioneta cuatro por cuatro. Andaba sin zapatos pero tenía plata, o sea unas costumbres medias raras. Y te digo entonces que ella había puesto su tienda allí en Pacota, pero por lo bajo compraba o vendía insumos... cal, kerosene, después amoníaco, perga todas esas cosas. Entonces por el hecho que ella vendía, la habían nombrado delegada. A Pacota no entraba ni la policía, ni el ejército, como era un pueblo que estaba lejos ya. Ahí todo el pueblo era terrorista, todos, la mayoría, aunque no era porque por tu sangre corría eso, sino porque te obligaban y tenías que estar ya constante. En ese entonces ella tenía catorce años y sucede que un

día la vieron conversando con un chico Catalino. La vieron conversando y luego la buscó uno del mando político y le dijo que mañana en la mañana, al día siguiente se iba a casar con Catalino. Que los iban a hacer juntar. Entonces ella, antes que hicieran eso, la encargó su tienda a su prima y se escapó esa misma noche a Progreso. O sea se vino cruzando todos los cerros, ahí estaba ¿cómo se llama esto? Buenos Aires, Alto Colombia, Bajo Colombia no sé unos pueblos que yo tampoco ni conozco y se vino, se escapó y seguía en ese negocio, trabajando sus insumos.

—Yéssica, joven empresaria

Esa historia fue contada por «Yéssica», una mujer de Arequipa que pasó sus años de adolescencia en Nuevo Progreso, lugar donde se inició en el comercio de la cocaína. La muchacha que huye de Pacota y cuya identidad Yéssica no quiso revelar, fue su maestra, la persona que la instruyó, primero en el negocio de los insumos y luego de la droga. Contó además que la muchacha no había cursado más que la primaria pero era una persona hábil, con iniciativa. Estas cualidades sin duda habían despertado el interés de los mandos. El Partido constantemente enfrentaba dificultades para encontrar personal capaz de asumir los puestos a nivel de comité, tanto así que a veces el solo hecho de no ser analfabeto era calificación suficiente para recibir el cargo. El Partido se decía a favor de los sectores más pobres pero buscaba a sus colaboradores y militantes entre «los de tener» y los más capacitados —al menos con un mínimo de educación— y mejor si tenían propiedad, capital y cierta posición social en la comunidad.

Yéssica, a pesar de haber vivido buena parte de los años del apogeo en el Alto Huallaga, nunca conoció el caserío de Pacota. En el Huallaga ha habido muchos sitios como Pacota. Para las personas que no estaban incorporadas al Partido o que no contaban con los contactos requeridos eran sitios vedados, de los cuales se escuchaba hablar pero que no presentaban «las condiciones» para entrar. Eran caseríos alrededor de los cuales se acumulaba una atmósfera intimidante o maligna. Sitios cuyos nombres mismos parecían comunicar una amenaza. Escuchar que te iban a llevar a Manteca o a Consuelo o a Río Uchiza, llegó a ser sinónimo de muerte. Eran lugares que quedaban muy cerca físicamente, pero extremadamente remotos en la geografía social.

2.9.5. Una visita inesperada

Como un domingo cualquiera Willy había salido temprano de su chacra con sus hijos y su señora al caserío de San José de Pucate para ver el partido del fútbol. Pasaron el día divirtiéndose, conversando con la gente, cuando a eso de las cinco, seis de la tarde, cuando ya era casi hora de regresar a casa, aparecieron treinta hombres, encapuchados y armados. Willy no sabía si eran los Sinchis, o el Ejército, pero un amigo le dijo que no, que más bien serían compañeros, «terrucos».

No había forma de escapar porque los senderistas habían puesto un vigía en cada esquina. Como gritaron: «¡Que paren! Nadie sale de acá. ¡Todos al colegio! Vamos a tener reunión». A la gente de San José le tocó obedecer, no había otra. En el colegio dos de los encapuchados comenzaron a explicar razones de su visita y a conversar de su política. «¿Por qué estamos luchando, por qué estamos organizando a Uds.? Aunque sea, para que se defiendan sus derechos. Acá vienen las autoridades del Estado a hacer abusos, nos maltratan. ¿Cómo se puede defender? Uno se reclama, no nos hacen caso. Único reclamar... con sangre.»

Otro de los encapuchados anunció que iban a poner una bandera en el pueblo «y que nadie me saca. Tiene que venir el mismo Ejército. Si Uds. me sacan o van a informar a Aucayacu vamos a venir y lo vamos a matar a todos, familia completa.»

Es así que Willy resumió su contacto original con el PCP-SL —un encuentro tan sorpresivo como amenazante—.

Willy no era oriundo de San José. A los once años se había escapado de la casa de su papá en un pequeño pueblo de Huamalíes y acompañado por dos amigos de su edad, se enrumbo hacia Monzón, donde se decía que, por ser zona cocalera, siempre había trabajo. En Monzón estuvieron un año y medio cultivando terrenos, fumigando y cosechando coca. Luego dejaron Monzón, cada uno hacia un destino diferente. Uno fue para Pucallpa, otro para Tocache, pero Willy sin ir tan lejos, fue a Palo Huimba, un pueblito cerca a Tingo María. Allí siguió trabajando de peón pero no en la coca sino en la producción de plátanos, maíz y arroz. Un año después se marcharía de nuevo, esa vez para Aucayacu, porque había escuchado que allá uno ganaba más. Recién había cumplido los catorce años.

En Aucayacu no conocía a nadie pero consiguió empleo con un señor Romero, un «simple propietario» con un poco de ganado y cultivos, quien lo llevó a su chacra al otro lado del río Huallaga, más precisamente en el caserío de San José de Pucate.

Willy no se quedó mucho tiempo con Romero. A los seis meses aceptó irse con un joven del mismo San José quien lo había invitado a trabajar en su chacra. Luego el joven le presentaría a su hermana con quien Willy llegaría a comprometerse el año siguiente. Entre hermanos y primos la familia de la novia era numerosa y extensa. Habían llegado de Cañete una década atrás atraídos por la oferta de tierras gratuitas, y terminaron por radicarse en San José. Los padres de la novia tenían una chacra a un kilómetro del caserío. Era un terreno plano que producía plátanos, arroz y maíz, pero cuando Willy se casó con la hija, los suegros se lo entregaron al nuevo yerno y regresaron a Lima. Era el año 1975.

Fue poco después que el sembrío de coca comenzó a asentarse de poco a poco en la banda de Aucayacu y Willy pidió autorización a la directiva comunal de San José para abrir su propia chacra. Buscó un terreno empinado en un cerro al fondo donde puso su cocal sin saber lo que estaba por venir. Pero él no fue el único, todos los agricultores de San José se abocaron a la coca y cuando llegaba el momento de cosechar, iban uno por uno a empadronarse con la oficina de ENACO⁴⁸ en Tingo María. Una vez afiliados iban a Tingo María nuevamente a vender su hoja. Sin embargo al momento de comprar su pasaje se encontraron con la sorpresa de que los transportistas les cobraban una doble tarifa, argumentando que quien tenía coca recibía una buena remuneración. También descubrieron que ENACO no compraba toda la cosecha, sino que seleccionaba las mejores hojas a su criterio, escogiendo sólo las más verdes y sin manchas. Las demás no las querían recibir. Aparte de eso pagaban un precio tan bajo que apenas alcanzaba para cubrir los gastos del agricultor.

Como nos explicó Willy:

⁴⁸ Empresa Nacional de la Coca.

Perdíamos al llevar, ya el pasaje y encima que nos pagaban una miseria. De esa razón todos los que estaban inscritos en ENACO ya llevaban una parte [a Tingo] y otra parte lo vendían al otro (narcotraficante). El otro (narcotraficante) pagaba más y al último casi a ENACO ya no lo llevaban ya, más le daban preferencia a lo que compraban para que lo elaboren [en pequeñas bolas de droga conocida como la «bruta»].

El otro atractivo de venderle al narcotraficante era que no tenían que gastar en transporte, porque el comprador llegaba directamente a la chacra.

Poco después empezarían los operativos contra los coccaleros. De Tingo María venían los Sinchis destruyendo con dinamita a las secadoras de coca a lo largo de la Carretera Marginal. Willy observó como llegaron hasta Aucayacu a recorrer el pueblo «en sus polos blancos y con sus perros amaestrados». Permanecieron por Aucayacu cerca de una semana pero no cruzaron al otro lado del río, dejando sin tocar todos los coccales por la margen izquierda del Huallaga.

El operativo no obstante «despertó» a los coccaleros de toda la provincia de Leoncio Prado, quienes formaron un sindicato a fin de defender sus cultivos de los intentos de erradicación. Fue a través de ese sindicato, en la versión que manejaba Willy, que se propagó el senderismo:

Vienen pues, los nombrados, diciendo que son dirigentes, que vamos a defender nuestro trabajo, nuestro derecho decían ¿no? y total ahí estaba el terrorismo. Ahí nace en ese tiempo, según me contaron —que vinieron de Ayacucho, porque en Ayacucho más antes ya estaba organizado—, de ahí venían y se infiltraban en el comité [de coccaleros], se metían. ¡Vamos a hacer paro! ¡vamos a reclamar! [decían] pero estaban metiendo la subversión ya.

Una vez organizado el sindicato, los coccaleros fueron a la huelga. Llamaron a los agricultores de todos los caseríos de Pueblo Nuevo hasta Pucayacu, a bloquear la Marginal con piedras y palos. El paro duró entre veinticuatro y cuarentiocho horas, y Willy me contó como en medio de la huelga una patrulla de la UMOPAR llegó de Tingo María a encararse con un grupo de huelguistas quienes se habían reunido en el cruce de Aucayacu con la Marginal. Los policías querían saber quiénes eran los dirigentes para poder, decían ellos, recibir sus reclamos. Pero los huelguistas, que según Willy ya habían sido preparados para esa eventualidad, respondieron que nadie estaba encargado de conducir sino «que todo el pueblo somos dirigentes».

Medio año luego llegó ese domingo que un grupo de encapuchados apareció en San José por primera vez para colocar la bandera roja que nadie se atrevió a bajar. «Pucha esa bandera flameaba pues dos, tres meses ahí» recordó Willy, y dentro de las próximas semanas la gente de San José se enteró que los otros caseríos de la margen izquierda también estaban embanderados. Eventualmente no faltaría quien informara a las autoridades en Aucayacu y la policía entró a San José preguntando quién había puesto la bandera. Los moradores contestaron simplemente que *desconocidos* habían llegado a ponerla; los policías no hicieron más que sacarla y largarse. A los pocos días regresaron los encapuchados y volvieron a colocar la bandera. «Así nos tenían como casi un año».

Al poco tiempo Willy sufrió un atraco una noche en la chacra de su cuñado. Un grupo de asaltantes lo agredieron y casi lo matan. En esa época, cuando recién se fortalecía la coca los caseríos frente a Aucayacu se llenaban de malhechores que en grupos asaltaban. Había bandas de criminales en San José, San Martín, Primavera y en Pavayacu que se dedicaban a observar a quien estuviera por cosechar para luego sorprenderlo en la noche y llevar el fruto de su trabajo. Robaban coca y nada más, porque como Willy explicó, «*Otra cosa no teníamos pues*». La noche que le cayeron a Willy, logró reconocerlos a pesar de la oscuridad. Vivían por un puente de un caserío cercano pero saber quiénes eran sólo lo hizo sentir más miedo.

Yo estaba mal pues, me pegaron, me estropearon. Entonces yo desesperado, yo le digo a mi señora hay que ir a otro sitio. Voy a Pucallpa mañana a buscar terreno por ahí, como tenía plata de que vendía mi hoja, ya tenía un poquito mi platita. Entonces justo ese día en la noche estoy planeando con mi señora y en la madrugada llegan los terrucos en mi casa, llegan pues una cantidad, ya no eran ya 30, eran como 100, cantidad.

Los senderistas venían ya informados de lo que había pasado. Querían saber quiénes habían sido.

Ellos a su manera, «compañero», dicen ellos, «compañero te han asaltado». No, le digo yo. «Sí te han asaltado nos han contado. Ahora ¿tú a alguien conoces o sospechas? Eso es lo que queremos saber. A Ud. no le vamos a hacer nada. Acá lo que vamos a matar es al soplón, al violador, a asaltantes, al delincuente, al vago, al fumón. Esos sí los vamos a aniquilar. A esos los vamos a limpiar, todo ese tipo de gente. Vamos a seleccionar a la gente, eso es lo que buscamos... Díganos si conoces a alguien.

Willy no quiso decir nada y más bien contestó que quería dejar San José y buscar un terreno lejos, por otro lado. Los senderistas trataron de disuadirlo. Ofrecieron trasladarlo a otro lugar que ya tenían organizado. Allí aseguraron, nadie lo vendría a asaltar: «Vas a tener seguridad, el pueblo mismo te van a cuidar». Pero Willy no aceptó, estaba resuelto a irse por su lado y los senderistas tampoco se opusieron, diciendo más bien: «Ya compañero tú te decides, nosotros te queremos proteger llevándote a otra zona. Ud. no quieres, pero algún tiempo que tú te das cuenta, que regresas, acá está tu chacra, tu terreno y puedes trabajar viniendo cualquier tiempo».

Willy se despidió dejando a su esposa en la chacra y se fue a Pucallpa. A los pocos días había encontrado un lote por la carretera a Tornavista y regresó a Aucayacu para alistar a su familia. Apenas tres días después de su vuelta a San José llegaron nuevamente los encapuchados. Pedían saber: «¿Cómo es? ¿Vas a quedarte o irte?» pero Willy simplemente les confirmó que estaba decidido, que incluso había comprado su terreno. «Ya, pero estamos organizando acá», contestaron. «Ud. no tiene porque hablar nada de eso. A Ud. le vamos a seguir su paso. Si Ud. algo cuentas, hablas, pierdes tu vida. Si vas, vete callado, no has visto nada, no has sabido nada, trabaja tranquilo, nosotros ya acá vamos a luchar, organizar y vamos a erradicar a toditos los delincuentes».

Willy se mudó con su familia a Ucayali. En su nuevo terreno se dedicaba a la agricultura, ya que no era una zona cocalera. Durante un año y medio trabajó sin problemas y sin volver a Aucayacu. Estaba contento. Su señora sin embargo, «*no se acostumbró*», extrañaba a sus hermanos. Willy quiso regresar a Aucayacu. «*Yo le digo a qué vamos a volver le digo a mi señora, nos van a matar*». Pero ella no estaba segura y decidió ir para averiguar en qué estaba la chacra que habían dejado. Al poco tiempo regresó al Ucayali trayendo noticias de San José. Decía que ya no había los «maleantes» de antes, que el PCP-SL en su mayoría los había matado y los que no, se había fugado «a la ciudad» (Aucayacu) y que ahora uno podría «andar libre, tú dejas tus cosas nadie te quita, nadie te roba». En pocas palabras a Willy lo llegó a convencer. Encargó su terreno con un señor y regresaron juntos a Aucayacu.

Llegaron a Aucayacu a mediados o a fines del 85 y Willy se dio cuenta que muchas cosas habían pasado. Durante su ausencia el PCP-SL incursionó en el pueblo dos veces para atacar al puesto policial. Además Willy encontró al Ejército Peruano acuartelado en el segundo piso del consejo municipal. Amigos con quien hablaba le contaron entre otras cosas que el PCP-SL se había posesionado prácticamente de la zona rural y en lo que se refería al narcotráfico, ya había una nueva técnica para refinar la droga. Ya no circulaban tanto las bolas de «bruta» sino paquetes de pasta básica lavada conocida como la «base». «*Allí recién la conocí*».

En el mismo San José Willy descubrió que el caserío ya contaba con un delegado del Partido. Eso fue nuevo porque la presencia del PCP-SL anteriormente se había limitado a las llegadas de la guerrilla, siempre con sus reuniones y charlas políticas. Ahora sin embargo se había instalado una autoridad propia, un «comité popular» incipiente, que gobernaba los asuntos de la comunidad. Ya no existía la directiva comunal de antes sino un comité mucho más fuerte e intrusivo. La nueva autoridad se encargaba de «organizar» al pueblo, es decir, aplicar las instrucciones de la guerrilla y repartir las enseñanzas y tareas políticas del Partido. Si llegaba una persona nueva buscando terreno, esa persona tenía que entrevistarse con el delegado, quien antes de darle permiso para residir allí, le interrogaba exhaustivamente sobre su procedencia, su historia y sus propósitos. Sólo si conocía a alguien del caserío y venía recomendado encontraba acogida. A los forasteros les recibían con sospechas cuando no amenazas.

Pero a Willy como ya lo conocían lo felicitaron más bien por haber vuelto. O como el mismo recordó, se alegraron al verlo, diciendo: «bien venido hijo, Ud. te has ido de miedo, te han asaltado y casi te matan, has regresado. Ahí está tu terreno, hasta mientras lo hemos dado a otro señor para que se vaya manteniendo, para que pueda ir cosechando... pero ya ahora te entregamos».

Fue en ese momento que Willy se dio cuenta de que ahora uno sólo ocupaba y trabajaba la tierra con el consentimiento del Partido. Y no faltaron personas que perdieron sus terrenos con la llegada de los senderistas y tuvieron que retirarse a la zona urbana de Aucayacu.

El decomiso de tierras ocurrió sobretodo cuando los propietarios no quisieron «alinearse» —palabra de Willy— al Partido y sus reglas. El PCP-SL daba dos opciones: «te vas o te sujetas». Aquel que no aceptaba ninguna de esas dos alternativas le esperaba la muerte. Si en un principio el PCP-SL mató a la gente acusada o percibida como «maleante», ahora, en lo que era prácticamente otro nivel o etapa de «selección», las personas que no quisieron vivir bajo el régimen senderista no tuvieron otra opción que marcharse.

Como resultado de esa política, muchos terrenos, fuera por abandono o por defunción, quedaron en manos directas del Partido. Para quien decidía abandonar o irse porque lo obligaron, le estaba prohibido vender el terreno o la coca que producía. La persona y su familia no podían llevar más que lo que podían cargar.

Los terrenos y plantaciones que se confiscaban se convertían en «chacras del pueblo» que eran en verdad chacras del Partido. Toda otra pertenencia decomisada o abandonada sufría similar suerte. Los delegados estaban encargados de administrar las propiedades confiscadas, convocar asambleas y sobretodo organizar a la comunidad en las faenas comunales: labores de cultivo, siembra, fumigación y cosecha en las «chacras del pueblo». La producción que derivaba de esas actividades llegaría a constituir uno de los ingresos principales del Partido mientras que el dominio sobre la adjudicación de tierras vendría a ser quizá el primer y principal nudo del control senderista sobre el campo.

Pero estas fueron sólo algunos de los cambios que Willy descubrió al regresar a San José. Notó además que ahora cuando aparecía la guerrilla, siempre de sorpresa, ya no usaba capucha. Antes cuando el pueblo no estaba «concientizado», decían ellos, les obligaba a andar con la cara cubierta. Todavía era peligroso; abundaban los enemigos y fácilmente caerían si alguien informara. Pero con el pueblo organizado se sentían más seguros de circular «con la cara libre».

La demanda por coca había incrementado considerablemente en su ausencia y cuando Willy volvió a sembrar en su chacra, se dio con la novedad que los compradores llegaban a cada rato a pedir que les vendiera hoja. Así que Willy amplió sus cultivos, sembrando varias hectáreas. Cuando llegó el momento de cosechar, contrataba entre treinta y cuarenta peones para recoger el producto. En poco tiempo se convirtió en un cocalero relativamente próspero.

Sin embargo cuanto más afluente se hacía, mayores sus obligaciones con el Partido. Todos los cocaleros, a excepción de los agricultores más pobres, tenían que entregar un porcentaje de cada cosecha al comité. El monto variaba según la cantidad o el volumen de producción. Willy me dijo, por ejemplo, que tenía cinco hectáreas dedicadas al sembrío de coca y con la venta de la hoja ganaba alrededor de \$2,500 por cosecha. De ese monto siempre entregaba entre \$500 y \$600 al comité, es decir, entre 20 y 25%. El aporte exacto se determinaba en la asamblea o reunión de la comunidad pero por lo general solamente los que producían cincuenta arrobas para arriba estaban sujetos al impuesto. Si bien los que cosechaban menos no tenían que aportar de esa forma, el

tributo que pagaban los coccaleros sobre su producción constituía uno de los ingresos principales de los comités populares del PCP-SL.

Pero Willy, al volver a radicar en San José, se percató de otro cambio fundamental: la droga, que antes se trabajaba de forma clandestina ahora se vendía públicamente por toda la margen izquierda del río Huallaga. La compra/venta era libre, libre pero controlada. Sólo se permitía la compra en sitios designados por el Partido y bajo la vigilancia de uno de sus militantes. Para entrar a comprar los acopiadores necesitaban una recomendación, es decir, contar con alguien de la zona que los contactara con los delegados del PCP-SL y los avalara antes de recibir autorización. Una vez autorizado el acopiador podría comprar pero sólo de acuerdo a las reglas que establecía el Partido.

En la zona de Aucayacu generalmente se explica la intervención del PCP-SL en la transacción misma de la droga aludiendo a los abusos que cometían los traqueteros, quienes, según moradores del lugar, estafaban a los campesinos coccaleros al momento de comprar la droga. La estafa podía consistir en medir los kilos de PBC con una balanza adulterada o calcular mal el descuento que le aplicaban a la droga por agua o impurezas. En parte ese tipo de engaños eran de esperarse, porque el margen de ganancia del acopiador dependía íntegramente de la ventaja que obtuviera del precio a costa del campesino coccalero.⁴⁹ La «habilidad» para aprovecharse de la supuesta sencillez de «la gente de chacra» era motivo de orgullo para los traqueteros que provenían del ambiente más pillo que prevalecía en los pueblos grandes. Sin embargo, el Partido encontró una solución formal a las tretas de los traqueteros con la instalación de la balanza bajo administración del comité popular de cada comunidad.

Willy recalcó la situación de esta forma:

La mercadería circulaba ya... los traqueteros, compradores, mucho se aprovechaban pues, robaban de los paquetes que ponían pues. Ponían a la balanza como papa así pesaban y no puedes reclamar y nada. Tanto de eso ya pues como ya estaba zona, pueblo organizando... entonces han dicho pues. Viene pues una orden de Bolsón o de Regional, ¿de dónde vendría? pues dice prácticamente los compradores hacen abuso del pueblo. Acá tiene que controlar el pueblo, controlar la balanza. Entonces ni para ellos ni para uno, tienes que pagar. Ahora lo que tiene agua ese si pues ya tú tienes que ver, el que controla balanza, que cantidad más o menos agua eso tiene que descontar si es justo, a veces te falta un poco agua te descontaban pues ya un montón descontaban. Entonces pues eso han dicho... tiene que haber balanza del pueblo.

Desde antes del retorno de Willy a San José, el «control de la balanza» ya funcionaba en puntos estratégicos a lo largo de la margen izquierda del Río Huallaga. Eran sitios ubicados aproximadamente a un kilómetro de los puertos principales hacia el interior y de acceso fácil para los traqueteros que cruzaban el río en pequeños botes de Aucayacu o Ramal de Aspuzana. Willy constató que había balanzas en Cerro Alegre (frente a Aucayacu), San Martín de Pucate (frente a

Las Mercedes) y San José de Pucate (frente a Cotomono) igual que en los puertos de Moena y Muyuna. Aunque parece ser que en la margen izquierda del río la institución de la «balanza legal» se extendía desde Venenillo hasta Magdalena y la Morada.

En cada sitio de control el comité del sector designaba a una persona quien se encargaba de velar por la rectitud de cada transacción. «Ellos», explicó Willy, «controlan la balanza para que no roben, para que paguen justo, ellos están mirando cuantos gramos y lo que pesa tienen que pagar [los traqueteros]». Estos veladores (o «vigilantes») eran nombrados en asamblea, convocados por el delegado. El puesto duraba una semana y se rotaba entre todos los adultos, tanto hombres como mujeres de cada caserío. Por este «servicio» los acopiadores tenían que pagar un dólar por cada kilo pesado. El controlador recibía la plata, anotaba el monto en un cuaderno y al final de cada día sumaba la cantidad recolectada en «concepto de balanza» para su entrega o «centralización» posterior al Comité.

A través de la institución de «la balanza legal» el Partido proyectaba un mensaje o promesa de justicia y a la par mediatizaba dos grupos y dos esferas sociales. Garantizaba al campesino una transacción limpia, es decir, lo que se pesaba sería exacto y que el porcentaje de descuento que se le aplicaba a la droga no sería exorbitante. Al traquetero, el Partido le daba la seguridad de comprar sin que nadie lo sorprendiera, ni la policía, ni los asaltantes. Sólo tenía que ir directamente a una de las balanzas cuando quería negociar. En las palabras de Willy, «El pueblo pone para todos su seguridad, ellos están dando esa balanza por eso están cobrando también por dar su seguridad». Sin embargo, si el traquetero intentaba esquivar el control comprando fuera de los sitios designados, entonces el Comité le decomisaba la droga y el traquetero tenía que pagar doble por la devolución de su mercancía.

Willy era enfático cuando decía que por la zona de Aucayacu la balanza legal sólo funcionó en la margen izquierda del río Huallaga; si bien los caseríos de la margen derecha estaban organizados también por el PCP-SL, por su cercanía a la carretera Marginal, los exponía a las intervenciones constantes de las fuerzas del Estado peruano que venían de Tingo María o Aucayacu. Mientras tanto el río Huallaga constituyó una relativa barrera u obstáculo que sin impedir la entrada del ejército o la policía, al menos dificultaba el desplazamiento de sus fuerzas. Esa relativa demora daba tiempo a la red de informantes del PCP-SL para avisar tanto a los controladores como a los traqueteros y campesinos y permitirles hacer una fuga inmediata al monte. Si el operativo entraba por Aucayacu, ya había gente designada para avisar a la banda, ya sea llamando por radio o «chimbando» por bote para informar al otro lado. En ese sentido la balanza legal como institución dependía del servicio de inteligencia que se había organizado tanto en la zona rural como urbana. Dicho de otra forma por el precio de «balanza» el PCP-SL o la población sujeta a éste no sólo aseguraba una protección contra el robo *dentro y fuera* de la

⁴⁹ Sobre ese punto, véase, De la Puente, Juan F. «La Narcomodernidad: Hacia el fin del «boom de la coca», *Quehacer* (Lima) No. 89 (Mayo - Junio 1994).

transacción sino que también prevenía los actos represivos del Estado peruano tanto los operativos anti-narcóticos de la policía o los contra-insurgentes del ejército. Era su propio sistema de vigilancia puesto al servicio de los que producían y comercializaban la droga, es decir prácticamente, la mayoría.

Además de la administración de cicales confiscados y su producción, el cobro de tributo a los cocaleros y la regulación de las transacciones de la droga dentro de sus respectivos sectores, los comités también controlaban las pistas o aeropuertos clandestinos desde los cuales las empresas o firmas de narcotraficantes embarcaban sus cargamentos de PBC a Colombia. Cerca a San José de Pucate no había una pista pero sí, según Willy, en los caseríos de Sucre Alto, Pavayacu, Magdalena y la Morada. En estos sitios el comité recolectaba impuestos o «cupos» de las firmas por cada vuelo. El cobro se calculaba conforme al tamaño de la carga y podía llegar hasta los \$15,000. Una parte del dinero se destinaba al mantenimiento de la pista pero el grueso se «centralizaba» hacia arriba, por la cadena de mando senderista.

Durante los primeros dos años en que Willy se había reincorporado a San José con su familia, observaba como la guerrilla o «los cabezas», en su manera de decir, llegaban cada cinco o seis meses con el fin de exigir cuentas del delegado. Pedían un informe sobre el cumplimiento de tareas repartidas durante la última visita de la guerrilla, el estado económico del comité, y cualquier conflicto o problema de índole social que la comunidad no había podido resolver en asamblea. Willy notaba que muchas veces los delegados no cumplían a satisfacción de los mandos de la guerrilla y convocaban a toda la comunidad, entre hombres, mujeres y niños. En la reunión los dirigentes elegían un nuevo delegado «a dedo». Explicó que existía una gran presión para aceptar el cargo, porque si la persona lo rechazaba, el grupo lo comenzaría a marginar, diciendo *«tú no estás por la organización sino tú estás con dos caras»*. En muchos casos la persona aceptaba más que todo por obligación y cumplía apenas con sus responsabilidades. En otros casos la persona terminaba disfrutando del cargo y empezaba a «dirigir drásticamente», es decir de forma muy violenta.

A mediados del año 1987 el PCP-SL amplió la organización de los comités en la margen izquierda del río Huallaga, diversificando la cadena y responsabilidades de los representantes del Partido. El comité ya no dependía de un delegado sino de cinco de los cuales, tres eran principales: el mando político, mando militar y mando logístico.

El mando político coordinaba las asambleas y se responsabilizaba por impartir la enseñanza política del Partido. El militar velaba por la seguridad de la comunidad, organizaba a las milicias o «fuerza de base» y seleccionaba a los mejores combatientes para su incorporación a la fuerza local o fuerza principal del Ejército Popular Guerrillero (EGP).⁵⁰ Pero también cumplía funciones

⁵⁰ En la prensa y literatura sobre el PCP-SL el término «guerrilla» generalmente se asocia más con la «Fuerza Local» que con la «Fuerza Principal». No obstante la población del Huallaga suele usar «guerrilla» para referirse a las dos. En la estructura militar del PCP-SL, las Fuerzas Principales conforman la llamada «Red Móvil»: no tiene base fija y se moviliza de sitio en sitio. La fuerza local generalmente se desplaza dentro de la «Red Territorial» es decir las áreas ya organizadas y administradas por el Partido, y promueven acciones de menor envergadura. En el Alto Huallaga el PCP-SL

policiales de detener a personas que habían transgredido las reglas del Partido. El tesorero del comité era el mando logístico, el encargado de administrar los fondos y propiedades «del pueblo» pero también de suministrar las medicinas o provisiones que requiriese el Partido.

A estos tres les acompañaban un secretario que «archiva todos los papeles ahí» y un cargo más que Willy no podía recordar. Debajo de la directiva del comité venían los delegados que coordinaban directamente con la «masa» o población. Había delegados de mujeres, delegados de niños, delegados de ancianos, del sector norte, del sector sur. Según Willy, «Había delegados de todo».

Los tres mandos principales eran los puntos de enlace para la guerrilla cuando éstos llegaban. Willy dijo que generalmente los mandos de comité recibían el aviso con sólo dos o tres horas de antelación y tenían que apresurarse para hacer los preparativos. El mando militar escogía un sitio seguro donde acomodarlos para que no los encontrara el Ejército y reforzaba la vigilancia en los puertos y caminos para controlar el ingreso de personas a la comunidad. El político preparaba la reunión, porque «cuando llega la guerrilla tiene que haber reunión». Entretanto el logístico juntaba víveres para la alimentación de la tropa y compraba los pertrechos: «ropas, mochilas, linternas, pilas, esas cosas te piden, necesitamos eso, entonces el logístico tiene que de eso preocuparse, si no tiene fondo, aunque sea prestándose, ahí te obligan».

Willy conoció muy de cerca las responsabilidades del logístico a raíz de que a mediados del 88 lo nombraron al cargo. Durante un año le tocaba atender las necesidades «del pueblo» y mantener la contabilidad sobre propiedades, producción y finanzas del comité. Si alguien se enfermaba, tenía que buscar medicina, si se declaraba un paro armado tenía que reunir las provisiones que pedía el Partido. Y cada vez que visitaba la guerrilla había que entregarle la mayor parte del tesoro.

llegó a dividir el valle en cuatro zonas territoriales (T1, T2, T3, T4) de Monzón hasta Campanilla y se supone que cada «Fuerza Local» operaba dentro de un territorio determinado, si bien las fechas de inicio y terminación de la existencia real de estos «territorios» no están claras. Mientras tanto la Fuerza Principal son unidades más preparadas que se dedican a «romper trocha» en áreas que todavía no han sido organizadas o que se han perdido a raíz de las acciones contra-insurgentes de las Fuerzas Armadas. Aunque la Fuerza Principal desarrollaba campañas de larga duración, desplazándose entre corredores que comunican sierra y selva, solía emprender acciones con el apoyo de las zonas (o bases) ya organizadas hacia zonas colindantes o fronterizas con las mismas. Para acciones a gran escala, por ejemplo la toma de pueblos grandes donde había presencia de los cuerpos armados del Estado peruano, no actuaba sola sino reforzaba sus números con combatientes de las fuerzas locales y «de base» (éste último correspondía a las milicias que conforman la estructura militar de los comités populares).

A menudo personas en el Alto Huallaga que conocieron al PCP-SL no desde los manuales sino a través del contacto cotidiano, no tienen una concepción clara de la organización como debieron de existir y a veces mezclan las estructuras políticas con las militares. Tal es el caso de Willy. Cuando me explicó la estructura de mando del Partido, la unidad de menos rango del Partido era el «Comité». Lo seguía el «Batallón» integrado por tres o cuatro comités (cuando es claro que la organización del PCP-SL no avanza de comité a batallón, sino de pelotón a compañía y luego a batallón). Encima del «Batallón» estaba el «Bolsón», conformado por entre nueve y doce comités. En la margen izquierda del río Huallaga Willy identificó al Bolsón Cuchara (Venenillo), seguido por el Bolsón Pucayacu (Primavera, Cerro Alegre, Bolognesi, San José y San Martín de Pucaté entre otros), Bolsón Magdalena, Bolsón la Morada y Bolsón Huamuco. En orden jerárquico, después del «Bolsón» esta el Comité Regional, arriba del cual reinaba «la cabeza» o Guzmán. Como simple cocallero y luego mando logístico de comité Willy sólo tuvo acceso a dirigentes a nivel de «Batallón» y «Bolsón». A mandos del Comité Regional, como Clae o Artemio, nunca los conoció.

¿Hay fondo o no hay fondo en este comité?» era lo que siempre querían saber. Entonces tú tienes que dar tu balance y entregar. El 30% queda para el comité y el 70% se lo llevan ellos. No sé para qué llevarán, pero llevan ahí. En todos los comités hacían eso. Ellos tienen que llevar su 70% de entrada.

Pero no sólo pedían dinero sino los balances de todos los cocaleros confiscados y el estado de la producción. Si se habían apropiado una ganadería entonces «tú tienes que decir cuántas cabezas, todo». «Eso no lo puedes engañar», insistía Willy, «porque vienen, controlan y preguntan a uno y otro. “Compañero ¿cuántos ganados han confiscado?” o “cuántas hectáreas de chacra en producción has confiscado? ¿qué cantidad de producción sale todo pues?” Entonces ellos te controlan». Y se presume también, que evaluaban el desempeño del logístico y por ende su nivel de «entrega» porque nunca faltaban oportunidades para medir el consentimiento de cada persona con la política del Partido.

A pesar de la revisión constante a la que sometían los jefes de la guerrilla a los nombrados del comité, su manera y también la de sus combatientes siempre era cortés, al menos de mediados a fines de los ochenta —es decir, antes que el PCP-SL comenzara a sufrir serios reveses en el Huallaga—. «Como cualquier persona llegan... no vienen pues con prepotencia, con maltratos, nada, tranquilo llegan o si estás trabajando algo te hacían ayudar más bien, te daban apoyo». En ese entonces todavía las venidas de la guerrilla solían ser momentos de expectativa e ilusión para los moradores. Sobre todo para los jóvenes y los peones que se emocionaban al presenciar la fuerza local o fuerza principal luciendo «bien armados, bien uniformados como un ejército». Y cada vez que llegaban, ya se sabía que los jefes de la guerrilla convocarían a una asamblea de todos para dar instrucción política y luego pedir colaboraciones e incluso voluntarios para el EGP. Willy insistió, sin embargo, que el apoyo que pedían —tanto en dinero como en nuevos reclutas— siempre era libre, de voluntad propia, si bien «al último», hacia principios de los noventa, los mandos de la fuerza local y principal se volvieron muy «espesos ya», queriendo decir que presionaban mucho.

2.9.6. Conclusiones

Una de las finalidades del presente informe ha sido mostrar la complejidad de la relación del PCP-SL con el Alto Huallaga durante los años del «boom» del narcotráfico y contribuir al cuestionamiento de una identificación del PCP-SL, como movimiento político-militar, con la empresa de la pasta básica de cocaína, tal como se sugiere en el término «*narcoterrorismo*». El uso y valor de dicho concepto es principalmente de índole estratégico e ideológico y, a nuestro parecer, fusiona discursivamente a dos grupos o actores de diferente naturaleza simplemente por el hecho de operar fuera de la legalidad del Estado peruano, empleando medios de violencia prohibidos por la ley. Esto limita la discusión a un sólo nivel conceptual cuya finalidad es únicamente señalar quienes son los amigos y enemigos del Estado.

El PCP-SL sin duda desarrolló nexos muy estrechos con el mercado de la cocaína en el Perú. Sin embargo, es importante señalar que muchas instituciones del Estado peruano, cada una a su manera, también lo hicieron. Lo que distingue la actuación del PCP-SL en el Alto Huallaga fue que entabló una relación con el mercado de la droga mucho más compleja que las otras instituciones que operaban allí, fueran éstas las fuerzas policiales, el ejército o la fuerza aérea; basta advertir la intensidad con la que el grupo maoísta intervino o participó en la producción, el comercio y la distribución de la PBC para captar la naturaleza multifacética de esa relación. Además a diferencia de los distintos actores del Estado peruano, sólo el PCP-SL pretendió erigirse como autoridad reguladora por encima del mercado de la cocaína y sus participantes.

Desagregar el concepto de «narcoterrorismo» y comenzar a captar las diferentes dimensiones que esta noción oscurece o simplifica permitirá reconocer que la relación analítica más básica debería ser la que se traza entre el «Estado» (como forma institucional y proyecto moral, que incluye tanto al Estado peruano como al PCP-SL) y el capital. Asimismo permitiría destacar la manera en que los flujos de capital rebasan o corroen los vínculos que forja el Estado (nuevamente, tanto el peruano como el senderista) con los individuos que éste interpela como sujetos e incorpora como agentes o funcionarios. El concepto «narcoterrorismo» no sólo obstaculiza el tránsito a este nivel analítico sino que contribuye activamente a negar o a minimizar la complicidad del mismo Estado peruano, no sólo en el plano de los negocios ilícitos sino en las instancias en la que usó la violencia para sembrar el terror.

En cuanto al presente informe muchas preguntas y algunos temas quedan todavía en el aire, sobre todo en lo referente a la cohesión del PCP-SL como organización a lo largo del apogeo de la droga. ¿Hasta qué punto y hasta qué año sostuvo el PCP-SL acciones dirigidas desde afuera, es decir, desde la cúpula del Partido, en el Alto Huallaga, si es que alguna vez las sostuvo? ¿O más bien fue desde un principio un experimento autónomo? Muy poco se sabe a ciencia cierta de la relación entre el Comité Regional del Huallaga y el resto del Partido antes de la caída de Abimael Guzmán Reynoso y la mayor parte de la dirección del PCP-SL en setiembre 1992. Es sin duda tentador darle un orden a los acontecimientos cuando probablemente nunca lo tuvieron.

Si todo estado es en el fondo un proyecto moral y el senderismo llevó esa moralidad hasta su punto de quiebre, la ambigüedad moral que infundía el tema de la droga no pudo haber sino creado problemas que no hallaron solución a través de una política que permitía el negocio de la PBC y prohibía su consumo. Como ya se ha mostrado anteriormente el PCP-SL intentó regular el mercado del narcotráfico y estableció un sistema centralizado de tributos que captaba el dinero, capital humano y otros valores generados por el apogeo con el fin de financiar las necesidades de su guerra. Sin embargo se desconoce qué tipos de desacuerdos, conflictos, o fisuras pudieron haberse generado al interior del partido a nivel nacional por el alto grado de participación de los cuadros del Huallaga en la producción misma de la droga que incluyó el decomiso de terrenos para convertirse en «chacras del Pueblo». Cuando se agrega la imagen de una «degeneración moral»

propiciada por el auge del narcotráfico y el abultado poder económico del Comité Regional del Huallaga frente a los otros comités regionales, parecen ser suficientes las razones para suponer que Abimael Guzmán y la cúpula de su partido encontraron en el Huallaga motivos de inquietud.

Existen indicios que sugieren que desde un principio la dirección del PCP-SL en el Alto Huallaga se preocupó por los efectos que tendría una relación cotidiana con el narcotráfico sobre las lealtades de sus militantes. El PCP-SL intentó a través de sus reglas internas mantener una separación muy clara entre sus estructuras partidarias y las organizaciones de narcotraficantes, salvo con los primeros eslabones del mercado (peones y agricultores involucrados en la producción de la coca y de la PBC).⁵¹ En algún momento dicha separación se volvió más difícil de sostener. Quizá fue con la toma de Paraíso. O quizá fue una transformación gradual por el hecho de reclutar sus cuadros y combatientes año tras año de entre la población local que se había formado en el ambiente del apogeo con todos los aprendizajes que éste ofrecía y cuyo bienestar se basaba en el narcotráfico. Había muchas personas que iban del cocal a las filas de la guerrilla y luego salían para volver nuevamente al cocal. Pero también era muy común que cuando militantes o mandos eran detenidos por las fuerzas policiales o por el ejército se hicieran pasar por traqueteros o mafiosos con la esperanza de mejorar sus posibilidades de sobrevivir o salir en libertad. Había muchas otras maneras cotidianas en que el senderismo se mezcló con las expresiones sociales del apogeo lo cual complicó aún más cualquier pretensión de conservar una separación real.

Si el Alto Huallaga fue para el Estado peruano una «región renegada», no hay razón para pensar que no lo fuera también para la cúpula del PCP-SL. Aunque hay versiones que el mismo Presidente Gonzalo viajó al Huallaga en una oportunidad para celebrar su cumpleaños (algunos dicen en Venenillo, otros en Paraíso) lo que prevalece en los testimonios de los moradores es la sensación de una lejanía de la cabeza o máxima autoridad del Partido. A los comités populares del Huallaga siempre llegaban tareas y directivas que provenían —se decía— «desde arriba». Asimismo el grueso de los fondos recaudados por esos mismos comités se remitía «hacia arriba». Se suponía que toda orden venía de Lima y que Lima también era el destino final de lo que recolectaba el PCP-SL, aunque quedaba la duda. En medio de una atmósfera de narcotráfico, de fraudes, chantajes y traiciones, existía justificación para desconfiar. La incógnita ¿a qué o a dónde se fue el dinero? no estaba fuera de lugar, aunque quizá una pregunta aún más puntual hubiera sido ¿dónde queda ese «arriba» si es que en realidad existe? Esas incertidumbres se hicieron más concretas cuando altos mandos muy conocidos dentro de sus sectores se fugaron con los fondos o tesoro del Partido: llámense «Uribe», «Charles» o «Marvin». Fueron acontecimientos que le

⁵¹ Para los integrantes del EGP eran prohibidas la fraternización y la camaradería con los narcotraficantes, según el testimonio de un ex-combatiente de compañía del PCP-SL. Él cuenta un «hecho resaltante» que ocurrió en el caserío de «Nuevo Chilia» en 1988: en vez de quedarse en la casa de un campesino como hacían normalmente, se alojaron en la casa de un narcotraficante colombiano, que aún más extraño para los combatientes resultó ser muy amigo del mando de su compañía. Todos los días el narco les traía víveres de Tocache y «prácticamente [los] agasajaba allí». Los combatientes se sintieron muy nerviosos por la situación porque «si el partido se hubiera enterado de eso nos hubiera

costaron credibilidad al PCP-SL entre la población organizada, la cual justificadamente podría haberse preguntado ¿para quién es realmente esta revolución?

Menos célebres pero más frecuentes —a juzgar por su proliferación en las memorias y recuentos de moradores— fueron los casos de mandos menores que se aprovecharon de su posición para robar, acusando a cocaleros con el fin de quitarles sus chacras o matando a traqueteros supuestamente por «soplones» pero con la intención de llevarse su dinero. Pero los abusos de autoridad no se dieron sólo por razones de enriquecimiento personal, también hubo excesos en el manejo de los juicios populares. Había comités populares que buscaban cualquier oportunidad para matar y dirigentes de la fuerza local que traían a personas detenidas en otros sitios y obligaban a los delegados de un comité popular a matarlas en una asamblea sin mostrar evidencia de sus supuestos delitos.

Como siempre, es difícil saber a estas alturas cuál fue el grado de deterioro de la disciplina interna en la estructura de mando —si fue un problema constante a lo largo del apogeo o sólo se precipitó después de los reveses de la guerra: con los operativos de gran envergadura del ejército a partir del 1989, la captura de Guzmán en setiembre de 1992 o la llegada de la política de arrepentimiento al Alto Huallaga a fines de 1993—. Sería equivocado atribuir todos los desgastes y fracasos del PCP-SL a los aciertos de las campañas contra-insurgentes, dejando sin consideración la manera en que influyó el mismo apogeo en el orden interno del PCP-SL. Para citar sólo un ejemplo podría mencionarse los conflictos que surgieron entre las estructuras rurales y urbanas del PCP-SL en la zona de Aucayacu a fines de los años ochenta (pero antes de la ofensiva del ejército) y que terminaron con la eliminación de los mandos principales de la «Urbana» de ese pueblo.⁵² No fue el único caso donde militantes del PCP-SL se mataron entre sí y sugiere lo difícil que fue «mantener la cabeza» en medio del auge de la droga.

sancionado a todos los responsables de eso. Así que tuvimos que abandonar ese sitio a solicitud de todos nosotros, le agradecemos a ese narco y dijimos que no deberíamos comentar a nadie sobre eso».

⁵² En síntesis, los dirigentes del comité popular paralelo del pueblo de Aucayacu, cuyo poder se había incrementado gracias a su cercanía a las firmas locales de la droga, se negaron a plegarse a la autoridad y directivas del partido con sede en el campo. Según la versión de Willy, después de unos enfrentamientos entre militantes del centro urbano y los de la zona rural, los mandos de bolsón apelaron a la fuerza principal del EGP, que despachó a unos combatientes preparados para resolver el problema.

2.10. EL FRENTE NORORIENTAL DEL MRTA EN SAN MARTÍN

El MRTA se estableció en las zonas de mayor producción de arroz y maíz y, posteriormente, en las áreas cocaleras del departamento de San Martín. La estrategia utilizada para infiltrarse fue actuar como elemento de presión frente a la autoridad estatal, así como convertirse en una herramienta de control social. Estas acciones se realizaron en áreas donde la intervención estatal y el tipo de articulación productiva habían dado lugar, décadas atrás, al surgimiento de movimientos que se agrupaban en torno a demandas productivas, de autonomía regional y de servicios del Estado.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar cómo el MRTA capitalizó, para su causa política y militar, las reivindicaciones regionales de los diversos Frentes de Defensa de San Martín, así como de los gremios de productores agrícolas del departamento. El objetivo de esta estrategia era crear una base de apoyo social y política para la instaurar y desarrollar su Frente Nororiental.

2.10.1. El MIR-VR

2.10.1.1. Formación de Bases Políticas del MIR-VR

Durante la década del 70, el MIR-VR se había asentado en San Martín y a través de sus militantes, especialmente profesores, hacía un buen trabajo político de captación de potenciales cuadros para su proyecto armado. Luego, empezó a organizar células de militantes, en especial en las localidades de Shapaja, Shanao y Pucacaca, distritos donde algunos de sus cuadros ya trabajaban como maestros. Luego acrecentaron su radio de acción hasta alcanzar las provincias de Moyobamba y Juanjuí.

Estas células militantes hacían estudios y análisis de libros marxistas-leninistas, de la historia del MIR de Luis de la Puente Uceda, del Che Guevara y su guerra de guerrillas, sobre la guerra de Vietnam, entre otros temas.

El trabajo de concientización y captación política realizado por el MIR-VR tuvo como elemento de propaganda la elección de cuadros miristas en la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores Educativos de San Martín (SUTE-SM). A partir de este trabajo de captación, muchos profesores de caseríos, centros poblados, distritos y provincias empezaron a simpatizar con los ideales del MIR-VR. Esto ocasionó que grupos de izquierda perdieran militantes.¹

En 1981, se realizó el Congreso Regional del SUTE-SM en la localidad de Sauce, provincia de San Martín, donde se renovó la Junta Directiva del SUTE-SM por dos años. La lista ganadora estaba integrada por cuadros miristas encabezados por Lucas Cachay Huamán. Para ese entonces, el MIR-VR ya tenía mucha influencia en Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima y Cusco, y -

¹ Por ejemplo, Patria Roja pierde, a finales de la década de los 70, el control del SUTE-SM y de las organizaciones campesinas de San Martín.

manteniendo a la UDP como frente político de masas- seguía captando militantes para llevar adelante su proyecto de insurrección armada.

La consolidación del MIR-VR al frente del SUTE-SM fue fundamental para captar más cuadros. Luego de un tiempo de preparación política, todas las personas captadas tenían la misión de formar células de estudio en sus respectivos lugares de trabajo para así atraer nueva gente que integre las filas del movimiento. De esta manera, se formaron células en diferentes ciudades de San Martín: Juanjuí, Tarapoto, Juan Guerra, Picota, Lamas, Sauce, Moyobamba y Rioja:

En 1981, se realizó en Tarapoto el Congreso Departamental del MIR-VR donde se eligió la Dirección Departamental.² Esta Dirección Departamental tuvo como objetivo fortalecer el movimiento a través de una coordinación permanente con todos los cuadros militantes distribuidos en los diferentes distritos y provincias de San Martín.³

Como militantes revolucionarios disciplinados, los miristas asumieron seriamente el compromiso y la necesidad de captar más personas. Así, se infiltraron en las organizaciones campesinas, sindicales y populares. La finalidad de estas acciones era estar en el lugar «donde combaten las masas». Uno de sus mayores logros fue impulsar el FEDIP-SM. Un frente que involucró a toda la población de San Martín alrededor de discursos de autonomía regional y desarrollo agrícola pero que debía en el fondo forjar embriones de poder popular y caminos de insurrección.

2.10.1.2. Formación militar del MIR-VR

Para enero de 1982, el MIR había organizado una escuela doctrinaria político-militar en la zona del Alto Shanusi, donde asistieron un total de quince combatientes aptos, física e ideológicamente, y decididos a iniciar la lucha armada. Esta escuela estuvo dirigida por (c) Darío, quien había luchado en el Frente Sandinista en Nicaragua.

La escuela tenía la finalidad de capacitar a los futuros subversivos en el manejo teórico y práctico de armas y explosivos de guerra, estrategias de la guerra de guerrillas y del combate cuerpo a cuerpo:

A partir de esta experiencia, importante para consolidar la estrategia militar del MIR en la zona, todo cambió para los miristas que optaron por la vía militar. Ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad y memorizar un código de reconocimiento usado entre los miembros del movimiento. Los encargados

² La Dirección Departamental estaba integrada por las siguientes personas:

Secretario General: (c) Azul

Secretario de Política y Masas: Lucas Cachay

Secretario de organización: (c) Raúl

Responsable de logística y aparato militar en formación: (c) Darío.

³ Al poco tiempo, el MIR-VR organizó una convención en la localidad de Shapaja, donde eligió a un grupo de miristas, que hacía buen tiempo cumplían la función de captar nuevos militantes, para encargarles nuevas y mayores responsabilidades dentro de la organización. Así, (c) Ricardo fue elegido como miembro de la Dirección Regional en el cargo de Secretario de Asuntos Educativos.

del trabajo de masa, de organización y de política no conocían ni entablaban conversación alguna con los cuadros subversivos por motivos de seguridad.

Las personas que salían de esta escuela asumían nuevas responsabilidades y los dividían por zonas para tener una mayor área de influencia en San Martín. Cada responsable de zona tenía que presentar un informe quincenal sobre las actividades, logros y fracasos en el área. Pero, al no tener recursos económicos disponibles, los responsables asumían los gastos de viajes, útiles, libros, folletos, correo, entre otros: «Con mi sueldo de profesor solventaba los gastos de la organización. Todo lo compraba con mi plata, algo nos faltaba y nosotros éramos los responsables» (Ricardo).

Entre 1982 y 1984, los responsables de áreas tuvieron la misión de recorrer toda su zona con la finalidad de confeccionar mapas para realizar censos de población y vivienda, ubicar caseríos, caminos, senderos, trochas, etnias nativas, puentes, riachuelos, etc. Con estas herramientas, los encargados del trabajo político de masas podían realizar una labor más rápida al momento de crear bases de apoyo de campesinos.

2.10.2. Organización política y militar del Frente Nororiental

Luego de la alianza entre el MRTA y el MIR-VR, se acordó constituir una Dirección Nacional y abrir un Frente Guerrillero con treinta combatientes de cada organización. En un primer momento se pensó que el Frente Guerrillero debía asentarse en la zona central del país, sin embargo se eligió el departamento de San Martín por que el MIR-VR ya tenía, desde 1984, un destacamento subversivo con 35 combatientes, además había realizado un buen trabajo político con la población a través de la SUTE-SM.

El FNO estaba comandado por una Dirección Regional cuya misión era desarrollar la lucha política y militar. La lucha política consistía en organizar y concientizar a la población local sobre la lucha armada.

La Dirección Regional tenía una estructura con áreas que abarcaba los aspectos político, militar, logístico (vestimenta, armas, medicamentos, etc.), de comunicación, de prensa y propaganda y de economía.

El Comandante General era el responsable directo de las acciones militares que se ejecutaban en el territorio del FNO. Asimismo, junto al jefe político, el jefe de prensa y el jefe de logística, se encargaba de coordinar las acciones políticas del FNO.⁴

⁴ Entre 1987 y 1993, los comandantes del FNO fueron:

Comandante Raúl	(1987-1988)
Comandante Roberto	(1988-1990)
Comandante Ricardo	(1990)
Comandante Evaristo	(1990-1992)
Comandante Esther	(1992-1993)
Comandante Antonio	(1993)

El Jefe o Responsable político y de masas tenía un *Consejo Directivo* de seis a diez personas que coordinaba todas las acciones políticas del MRTA. Este Consejo tenía la misión de trabajar políticamente con las personas que conformaban la UDP, FEDIP-SM y la FASMA para organizar y captar a la población local según los intereses del MRTA. El jefe o responsable político y de masas y su Consejo Directivo eran personajes públicos:

El Jefe o Responsable de prensa y propaganda era el encargado de que los mensajes y las acciones del MRTA sean conocidos en el país y el extranjero. Para el MRTA esta función era importante ya que permitía mantener latente en la memoria de la gente la existencia de un grupo alzado en armas paralelo y, sobre todo, diferente al PCP-SL:

El Jefe o Responsable de comunicaciones cumplía la tarea de mantener comunicación radial con todos los destacamentos militares del FNO. Tenía todas las frecuencias y conocía los puntos de encuentro de los destacamentos, y además era responsable de transmitir los mensajes de entrega de armamento y dinero. El jefe de logística se encargaba de realizar todas las adquisiciones de materiales, equipos, indumentarias, etc. El responsable de economía tenía la misión de administrar el presupuesto del FNO. Asimismo, distribuía el dinero para las reuniones y acciones de la Dirección Regional, así como para las incursiones armadas del ET y sus destacamentos.

2.10.2.1. Organización del Ejército Tupacamarista (ET) del FNO

En primer lugar, porque sólo en la lucha se foguean los cuadros, se adecuan las estructuras, se forjan los jefes, se resuelven las necesidades materiales (economía, logística, armamento, etc.) de la fuerza militar revolucionaria. En segundo lugar, porque sólo combatiendo se infunde en las masas la confianza en la victoria, la certeza de que el enemigo puede ser derrotado, con lo cual se alimenta la voluntad de lucha. En tercer lugar, porque crear una fuerza militar revolucionaria supone contar con una retaguardia, un punto de apoyo donde concentrar tropas, para armarlas, equiparlas y adiestrarlas. Esto tiene que darse en combates encarnizados con el enemigo.⁵

El ET tenía la misión de realizar las incursiones y tomas de ciudades, *recuperar* armas y mantener el control de todas las ciudades del departamento de San Martín⁶.

El FNO recibía armas, municiones y vestimenta de la Dirección Nacional. Con sus incursiones y asaltos a los puestos policiales incautaba armamento que le permitió adquirir autonomía y abastecerse del material bélico necesario para realizar mayores acciones armadas. Asimismo, consiguieron armas a través de negocios con los traficantes de armas y, posteriormente, con la droga. Se organizaron pequeños talleres para la confección de hamacas, mochilas, ropas, etc., asimismo a través de la instalación de tiendas de abarrotes en Tarapoto abastecían con víveres

⁵ Para mayor información ver <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/mrta>

⁶ El término de «recuperar armas», utilizado por los emerretistas, era el robo de armas a los puestos policiales.

a los diferentes destacamentos militares. Posteriormente, se inició la práctica de saqueos a centros de comercio⁷, el cobro de cupos y bonos de guerra⁸, secuestros, extorsiones, etc.

La estructura del ET incluía un Comandante General era responsable de todas las acciones del ET y debía estar informado de cada movimiento que realizaban los destacamentos asentados en las *zonas de control* del MRTA⁹. Además, tenía la facultad de juntar todos los destacamentos para realizar cualquier misión militar importante (toma de ciudades, *recuperación* o robo de armas, etc.).

El Estado Mayor tenía la tarea de asistir al Comandante General en todas las decisiones y acciones que el ET debía realizar en el FNO¹⁰.

Para cumplir con el objetivo de resguardar las zonas controladas por MRTA, el ET dividió el departamento de San Martín en ocho zonas. Cada una de ellas tenía un destacamento militar. Cada destacamento tenía a su vez un Estado Mayor que estaba conformado también por un Responsable Político-Militar, Responsable Político, Responsable Logístico y Responsable de Comunicaciones.

El ET destinaba para cada una de las zonas un destacamento militar conformado por 100, 50, 40 ó 30 hombres. Estos destacamentos se dividían en formas iguales y estaban descentralizados para poder tener un mejor control de toda la región. Por ello, el destacamento militar de una zona se dividía en dos o tres partes para poder cubrir toda el área de la zona. Estas divisiones podían ser de 20 y, máximo, 30 hombres y se los denominaba sub-destacamentos. La división del destacamento militar permitía mantener un mayor control sobre las acciones y la disciplina de los combatientes del ET.

La creación de las 8 zonas y sub-zonas, producto de la ampliación del teatro de operaciones y la descentralización del ET, también permitió evadir la ofensiva de las Fuerzas armadas y policiales, y prolongar los enfrentamientos armados. Así, por ejemplo, la zona del Huallaga Central se dividía en dos sub-zonas con dos sub-destacamentos: el valle de Misquiyaku y el valle del Ponasa.

Las ocho zonas controladas por el MRTA y los nombres de los destacamentos militares fueron los siguientes:

⁷ «A partir de 1990, el MRTA ya no era el mismo, ya no traían plata ni pagaban por lo que cogía. Se veía que era otro gente, la primera vez vinieron gente educada, en ese tiempo puros muchachos y eran medios delincuentes. En mi tienda sacaron muchas cosas, incluso cada fin de semana pedían y sacaban productos que iban a necesitar para su gente. Así, nos hicieron pobres» (San José de Sisa, N.F.).

⁸ «El bono es un papel que dice una cantidad que ellos te ponían y donde estaba el símbolo del MRTA. Se acercaban y decían: tu tienes que dar 10 mil para que traslades la droga de un lugar a otro. El cupo era designado por ellos y tenían diversas formas de acopiarlo, aparte de los asaltos que hacían en las carreteras. Lucas Cachay me decía que todos los cupos se le daban al MRTA porque esa era la orden. El hecho es que todo el mundo daba, tanto así que al final fue un desastre, porque todo el mundo pedía de todo. Estoy seguro que ahí es donde mucha gente se hizo de plata, la gente aprovecho muchísimo» (Lay)

⁹ Cuando se señala zonas de control nos referimos a las áreas donde los destacamentos militares del MRTA podían transitar libremente. En cambio las zonas liberadas por SL se caracterizaban por la inexistencia de toda institución del Estado las que eran reemplazadas por la constitución de los Comités Populares Abiertos.

Zonas del MRTA	Destacamentos
Alto Mayo (Instaurado en 1990. Área de influencia: Provincia de Moyobamba y Rioja)	Wenceslao Saboya
Medio Mayo (Instaurado en 1989. Área de influencia: las riberas del río Mayo en la provincia de Lamas)	Róger López
Bajo Huallaga (Instaurado en 1990 Área de influencia: provincia de San Martín)	*
Huallaga Central (Instaurado en 1990. Área de influencia: Chazuta, Picota, Bellavista)	Alcides Reátegui
Valle del Sisa (Instaurado en 1987. Área de influencia: Provincia de El Dorado y provincia de Saposoa)	Carlos Arango
Yurimaguas (Instaurado en 1990. Área de influencia: Yurimaguas)	Roberto Pérez
Caynarachi-Shanusi (Instaurado en 1990. Área de influencia: Pongo de Caynarachi)	*
Huayabamba Instaurado en 1988 Área de influencia: Valle del Huayabamba)	Edward Cumapa

* No se ha identificado los nombres de estos destacamentos.

Para 1987, la zona de control considerada estratégica por el MRTA, fue el Valle del Sisa porque era un lugar de acceso a las zonas del Alto Mayo, Mayo Medio, el valle del Huayabamba y el Huallaga Central. Así, la zona del valle del Sisa sirvió de entrada, salida y refugio para el ET cuando realizó su primera campaña militar «*Túpac Amaru Vive*».

Las bases milicianas tenían la misión de realizar trabajos de inteligencia antes de las incursiones del ET a ciudades o puestos policiales. Sus acciones eran efectuadas previa coordinación con el destacamento militar de su zona. Según el tamaño de la zona, el MRTA podía establecer una cantidad determinada de bases milicianas hasta un máximo de cinco. Cada base miliciiana tenía de cinco a siete milicianos bajo el mando de un responsable de base, quien también se encargaba de concientizar a su personal sobre los objetivos del MRTA y prepararlos para acciones militares y de propaganda: «Aquí por ejemplo (valle del Huayabamba) habían cinco bases ubicadas en el centro de Juanjui, Juanjuicillo, San Juan, La Victoria y la Merced. Toditos tenían un responsable» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P492. Varón, ex mando emerretista)

¹⁰ El Estado Mayor estaba conformado por los responsables político-militar, responsable político, de logística, logística y comunicaciones.

El conjunto de bases milicianas de una zona tenía un responsable de base miliciano zonal que coordinaba todas las acciones que debían realizar con los responsables de base. La decisión tomada por las bases milicianas se coordinaba con los destacamentos militares de la zona¹¹.

Por cuestiones de seguridad y para evitar infiltraciones o «soplos», el MRTA estableció como táctica la compartimentación. Esta consistía en que cada organismo de dirección sólo debía conocer lo necesario para garantizar el éxito de su trabajo. Era aplicada de forma vertical y autoritaria para preservar la identidad de los responsables político-militares del movimiento.

Las Bases Milicianas se dividieron en dos, según sus áreas de influencia, las milicias urbanas y las rurales.

Los Comandos dependían del Estado Mayor del FNO y estaban constituidos por combatientes con una fuerte concientización ideológica, con una gran capacidad física y alto nivel de entrenamiento militar para realizar acciones armadas en la retaguardia del enemigo. Trabajaban en áreas rurales o urbanas. Generalmente, los Comandos eran los encargados de planificar los asaltos a puestos policiales y/o militares durante las tomas de ciudades, así como resguardar la seguridad de los mandos regionales y nacionales.

2.10.3. El impacto del trabajo político de las agrupaciones de izquierda en San Martín

Es alrededor del cultivo de tabaco, durante la década del 60, que se forman las primeras organizaciones campesinas sanmartinenses, teniendo como base central la ciudad de Tarapoto. La posterior creación del Estanco del Tabaco o la Caja de Depósitos generó el contrabando del producto. Esto originó la persecución y hostigamiento a los campesinos productores por parte de la empresa estatal, lo que motivó la formación de la Asociación de Tabacaleros de la provincia de San Martín cuya principal reivindicación fue mejorar el precio del tabaco. En esta organización todavía no se percibía un desarrollo ideológico-político, tal como lo haría el SINAMOS durante el gobierno militar de Velasco en los años 70.¹²

Entre 1975 y 1977, los partidos de izquierda empezaron a tener presencia en los movimientos populares y campesinos y consiguieron que las Ligas Agrarias de San Martín, centralizadas en la FASMA, se alejen de la influencia de SINAMOS y reivindiquen una mayor autonomía.

¹¹ Las milicias eran grupos de triadas y de compartimentación. Se denominaban triadas porque el responsable de una base miliciano captaba tres personas que eran preparadas política y militarmente. Después de un tiempo cada una de estas personas debía captar otras tres personas, así la base miliciano aumentaba en personal. Un mayor número de personas permitía una futura cantera de hombres que engrosarían las filas del ET.

¹² Posteriormente, la introducción de cultivos industriales comercializados por el Estado a través de EPSA (Empresa de Producción y Servicios Agropecuarios) permitió generar las bases de un movimiento campesino mucho más compacto en San Martín que, posteriormente, SINAMOS organizó en las Ligas Agrarias. Hacia mediados de la década del 70, la fuerte presencia de partidos de izquierda como Patria Roja, MIR-VR, UDP, PST, PC y Puka Llacta se encargaron de radicalizar las demandas de estas organizaciones agrarias.

Las luchas, que en sus inicios tuvieron un carácter local, distrital o provincial, alcanzaron resonancia nacional con las protestas masivas contra el gobierno militar de Morales Bermúdez en todo el país. El momento más crítico tuvo lugar con el paro nacional del 19 de julio de 1977.

Las movilizaciones tuvieron como principales aspectos lo siguiente: una organización centralizada, la movilización y marchas en el centro de las ciudades, huelga de empleados públicos (principalmente maestros), formación de piquetes de autodefensa, toma de decisiones en Asambleas Públicas y una dirección independiente, muy ligada a las agrupaciones políticas de izquierda. A partir de 1980 estas luchas son complementadas con la toma de carreteras y el establecimiento de barricadas por parte de las organizaciones campesinas¹³.

Para inicios de la década del 80, la mayoría de los Frentes de Defensa distritales y provinciales estaban desactivados tras el cambio de régimen y la instalación de la Asamblea Constituyente, a la vez que nuevos dirigentes comenzaban a aparecer en el espectro social¹⁴.

En Tarapoto se formó el Comando Unitario de Lucha (CUL), presidido por el profesor Lucas Cachay, que intentó llenar el vacío de dirección evidenciado durante la huelga de 1982 en Juan Guerra y Tabalosos, que dejó un saldo de 5 muertos y más de 20 heridos. El CUL promovió el primer paro departamental de los trabajadores de la ciudad y el campo en 1984.

En abril de 1986, a raíz de otro paro regional, una comitiva oficial integrada por varios ministros y funcionarios de alto rango del gobierno aprista, se vieron obligados a negociar durante 16 horas ininterrumpidas ante el CUL y 200 delegados de las bases. En este paro cabe destacar la formación de piquetes de autodefensa conformados por obreros. En la negociación el gobierno se comprometió en resolver más del 50% de las exigencias, cosa que no llegó a ser cumplida. Ese mismo año, el CUL se convirtió en el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín (FEDIP-SM). En mayo de 1987 se realizó el primer Congreso de Fundación del FEDIP-SM, con asistencia mayoritaria de las bases provinciales.

En noviembre de 1987, el MRTA hace su incursión en Juanjui, obligando al gobierno decretar el estado de emergencia y el toque de queda en San Martín. La persecución de dirigentes sindicales y populares, en particular de campesinos, el rastillaje de las Fuerzas armadas en caseríos y pueblos jóvenes, la represión a las movilizaciones y las desapariciones interrumpen por dos años el avance de las organizaciones populares. En este período, los paros decretados por el FEDIP-SM son acatados en forma parcial en Tarapoto.

2.10.3.1. La importancia del trabajo político del MIR-VR

¹³ Durante la década de los 80, el cultivo intensivo de maíz y, luego, del arroz, bajo auspicio del Estado —vía ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de Insumos), ECASA (Empresa de Comercialización de Arroz S.A.) y Banco Agrario—, crea la necesidad de organizarse para luchar contra la insuficiencia de créditos, altos intereses, precios por debajo del costo de producción, déficit de almacenes, descuentos arbitrarios y demora en los pagos. Estas reivindicaciones sensibilizaron a toda la población local y nacional que comenzaron a apoyar las luchas campesinas.

¹⁴ Los Frentes de Defensa surgieron en los años 70 como entes coordinadores y centralizadores de las organizaciones del campo y la ciudad y de las personas no organizadas de una provincia o distrito determinado.

Todo este trabajo de organización y movilización de la población sanmartinense no hubiese sido posible sin la participación de los grupos de izquierda que existían en San Martín. Pese a las evidentes discrepancias político-ideológicas entre Patria Roja, MIR-VR, PC, Pukallacta, PST y UDP, estos grupos contribuyeron en la dirección y contundencia de los paros y huelgas, y al fortalecimiento de la FEDIP-SM.

Es importante resaltar el exhaustivo trabajo de base realizado por el MIR-VR entre 1982 y 1984 que consistía básicamente en infiltrar a sus militantes en organizaciones populares y campesinas.

Para esos años, el MIR había copado la dirección del CUL. Anteriormente ya había logrado el control de la FASMA, del Comité Departamental de Productores de Maíz y Sorgo y del Arroz, del Sindicato de Comerciantes y de Trabajadores Municipales, del SUTE-SM. Para 1986, ya tenía el control absoluto de la dirección del FEDIP-SM.

Para lograr esta participación en los Comités y Frentes populares, sindicales y campesinos, el MIR-VR asumió como suyas las reivindicaciones de la población de San Martín. Ello propició que capte toda la atención de las diversas organizaciones populares que no tenía bajo su influencia, dejando sin espacio a grupos de izquierda como el PST, Puka Llacta, Patria Roja y el PC.

La iniciativa del MIR-VR fue asumida en 1987 por el MRTA bajo los mismos preceptos, pero bajo otro contexto que incluía, la maduración de una conciencia regionalista, la lucha por la descentralización, la vehemencia de luchar por reivindicaciones y los estragos de la violencia política.

Es en estas circunstancias, el MRTA inicia su primera campaña militar «*Tupac Amaru Vive*» con tomas e incursiones a diferentes ciudades de San Martín. El Estado decretó el estado de emergencia en San Martín y creó el Comando Político-Militar del Frente Huallaga.

Las subsiguientes acciones contrasubversivas del Ejército desarticulaban al FEDIP-SM, se detuvieron a dirigentes y pobladores sospechosos de ser emerretistas y se realizaron ejecuciones extrajudiciales.

Para defender los derechos del pueblo, el movimiento popular logró rearticularse nuevamente a través del FEDIP-SM en 1988, cuya representatividad y legitimidad a nivel regional era amplia. Al mismo tiempo, el MRTA inició un proceso de reorganización tras el descalabró que sufrió su ET por la arremetida militar del Ejército.

El MRTA no pretendió mantener una relación autoritaria con el FEDIP-SM, sino más bien buscó articular objetivos comunes y crear un vínculo entre su acción militar y las demandas sociales, políticas y económicas de aquél. Desde entonces, los emerretistas fueron consiguiendo el apoyo de la población y extendieron su ámbito de influencia.

Con el MRTA en la escena regional, la estrategia de infiltración y captación de cuadros que había iniciado el MIR-VR no cambió. Los actores políticos y sociales siguieron siendo los mismos: MIR-VR, Lucas Cachay, FEDIP-SM, Segundo Centurión, Frentes de Defensa, FASMA, etc. Tampoco

cambió el objetivo de desarrollar la lucha armada, ya que el MRTA añadió el componente militar activo con la creación del FNO.

A la par de la consolidación política del MRTA en las organizaciones de base, al hacer suyas las reivindicaciones de la población sanmartinense, aproximadamente a mediados de 1989¹⁵, los miembros del ET empiezan a asumir posiciones de autoridad, desconociendo el rol de los responsables de desarrollar la política de masas del movimiento¹⁶.

Estas contradicciones entre el aparato político y militar del MRTA en el FNO se evidenciaron durante la segunda huelga general indefinida de febrero y marzo de 1990 en San Martín. Esta huelga estuvo bajo la dirección del FEDIP-SM que tuvo como aspecto peculiar, además de la participación de los responsables y militantes del trabajo de masas del campesinado y del MRTA, el apoyo directo del ET. Tanto los responsables del aparato político de masas como del aparato militar del MRTA no sabían qué acciones iban a realizar. Es más el ET asumió muchas veces, sin consulta alguna, la labor política.

Como el centro de la huelga estuvo en Tarapoto, la milicia urbana hizo que casi la totalidad de la población, voluntaria o involuntariamente, cumpliera la medida de lucha. Los motivos de la huelga ya no eran económicos, sino políticos y sociales centrándose en la petición de crear la Región Autónoma de San Martín, en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la suspensión del estado de emergencia, etc.

Cuando la situación se tornó incontrolable, el gobierno aprista nombró una comisión negociadora que llegó a acuerdos importantes para la población sanmartinense: el pago de la deuda pendiente por parte de ECASA y ENCI a los productores agrarios y el aumento de presupuesto en un 100% a la CORDE-San Martín, el cual iba a ser directamente fiscalizado por el FEDIP-SM. Sin embargo, los reclamos para derogar la ley que creaba la Región II (La Libertad-San Martín), la creación de la región autónoma San Martín y la desmilitarización de la región quedaron postergados.

Cabe señalar que la huelga se suspendió también por dos razones: primero, se acercaban las elecciones generales y, según Lucas Cachay, no se quería alterar este deber cívico ni fomentar la desobediencia civil y; segundo, producto del desabastecimiento de alimentos comenzó a sentirse los estragos de los 40 días de huelga en los piquetes formados para obstruir las carreteras del departamento¹⁷. Se convocó a una Asamblea Popular donde se decidió dar una tregua al gobierno y si este no resolvía las exigencias pendientes se volvería a la huelga en el mes de abril del 1990.

Tras el fin de la huelga, el FEDIP-SM fue reconocido como el organismo principal de dirección en la región, con verdadero poder de decisión y como interlocutor entre el pueblo y las autoridades tanto regionales como nacionales, pero también evidenció los primeros conflictos internos entre los responsables de la política de masas y los responsables militares del MRTA.

¹⁵ Para 1989 ya se había reconstruido el Ejército Tupacamarista del FNO tras la represión ejercida por el EP entre diciembre de 1987 y febrero de 1988.

¹⁶ Para este tiempo, la Cámara de Comercio y la Iglesia se habían separado del FEDIP-SM por sus evidentes inclinaciones pro-MRTA.

¹⁷ Ver Semanario «Cambio» de febrero y marzo de 1990.

Después de constantes movilizaciones sociales impulsadas por el FEDIP-SM, en 1992 el gobierno de Fujimori promulgó la ley de creación de la Región San Martín, por lo cual Lucas Cachay propone elaborar un plan para fortalecer la presencia activa del MRTA en la sociedad civil. Este planteamiento no tuvo mucho eco en la máxima dirigencia del MRTA, cuya posición militarista ya era visible¹⁸. Ante posiciones diferentes y abiertamente discrepantes, el MRTA persiguió y amenazó de muerte a Lucas Cachay y a todos los dirigentes del FEDIP-SM para que se subordinen a la nueva política del movimiento:

2.10.4. Incursiones armadas del Frente Nororiental en San Martín

Según la estrategia del MRTA en su FNO, las tomas e incursiones en centros poblados tenían dos objetivos básicos:

a) Político: Se intentaba demostrar a la población local, y al país, que el MRTA no estaba debilitado frente a las acciones militares contrainsurgentes. En cada toma e incursión se ofrecía discursos a la población convocándolos a la lucha armada para que la masa asuma esta lucha como propia y los reconozca, a los emerretistas, como defensores auténticos de sus intereses y aspiraciones. Asimismo, buscaban construir bases revolucionarias y de poder popular en las ciudades donde incursionaban para así dominar todo el valle del Huallaga y ganarle la iniciativa al PCP-SL.

b) Militar: El fin era mostrarse como una guerrilla en cada toma e incursión en centros poblados. Mantenían una disciplina táctica de ataque, estaban uniformados, recuperaban armas y pertrechos de guerra, conminaban a los policías a rendirse antes de entrar en acción, atacaban las zonas que consideraban más importantes, atendían a los policías heridos, etc. En general, aducían actuar bajo los lineamientos de la Convención de Ginebra.

Las tomas e incursiones tuvieron las siguientes características:

- Las milicias recibían órdenes de los destacamentos militares, asentados en sus zonas de acción, para planificar las tomas e incursiones y conseguir información sobre cuántos puestos y efectivos policiales habían en determinada zona (dónde viven, en qué calle, que número, qué hora hacen servicio, a qué hora comen, a qué hora salen de franco, a qué hora pasan lista de todos los efectivos), la cantidad de armamento, croquis y mapas de la ubicación de los puestos policiales, así como la ubicación de las autoridades civiles.

- Para llevar a cabo las acciones militares, el ET juntaba varios destacamentos. Por ejemplo, para la toma de la provincia de Saposoa previamente se juntaron entre 300 y 400 hombres

¹⁸ Recién en 1991, Lucas Cachay reconoce que no había logrado formar una propuesta política viable para el desarrollo del MRTA. Pero también reconoce que no tenía el equipo adecuado para discutir esta propuesta, que desarrolle el trabajo político, que organice, que construya nuevas fuerzas. Su problema fue: « creerse líder, porque tenía poder. Ahí está el problema del poder: el problema de la separación del dirigente con su masa, el problema de la no-integración» (Mario Arévalo).

de los destacamentos «*Alcides Reátegui*» (Huallaga Central) y «*Roberto Pérez*» (Yurimaguas) y juntos planificaban las acciones militares a llevarse a cabo.

- Cuando se efectuaban las tomas de ciudades, los emerretistas realizaban diferentes acciones coordinadas de distracción para desconcentrar a las fuerzas policiales y militares, se reducía la resistencia policial, se destruían locales públicos y privados, se realizaban Asambleas Populares donde se exponía el por qué de la lucha armada, se repartían alimentos entre la población que eran robados a los centros de acopio del Estado como ECASA y ENCI y, finalmente, se retiraban.

- Después de las tomas o incursiones a ciudades, el ET descansaba y/o se concentraba aproximadamente 4 ó 6 meses hasta la preparación de las siguientes acciones. Tenían diferentes zonas de concentración: el Alto Sisa (provincia El Dorado), Pasarraya (provincia de Saposoa), el Pongo de Caynarachi (provincia de Lamas) y las zonas de Tres Unidos y el valle de Misquillaku (provincia de Picota). Durante este tiempo de concentración, se realizaban escuelas de preparación político-militar.

Venían instructores militares y políticos de Nicaragua, Bolivia y Colombia. Hacían congresos, charlas y escuelas. Todo eso en nuestras bases. Cada zona seleccionaba a sus miembros para asistir a estos eventos. Dentro nos dividían entre los que se adoctrinaban para la política y los que se adoctrinaban militarmente (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P499. Varón, ex miliciano de MRTA en Yurimaguas)

El año 1987 se armó un ejército de subversivos en San Martín. Este ejército fue formado por militantes del MIR-VR y del MRTA que venían de Tocache. Ambas fuerzas se unieron en la zona del Pongo de Caynarachi-Shanusi, En este lugar entrenaron, militar y políticamente, durante los meses de julio, agosto y septiembre del mismo año liderados por Víctor Polay Campos (c) Rolando, Néstor Cerpa (c) Evaristo y Miguel Rincón (c) Francisco.

El 8 de octubre inician la Campaña Militar «*Tupac Amaru Vive*», comandados por (c) Rolando, con la incursión en los poblados de Tabalosos y Macedas¹⁹. Posteriormente, realizan las siguientes incursiones y tomas:

18 de octubre toma de Soritor

6 de noviembre toma de Juanjuí

7 de noviembre toma de San José de Sisa²⁰ y ataque al puesto policial de Rioja

9 de noviembre incursión en Senami

19 de noviembre toma de Chazuta

¹⁹ Se optó por esa fecha para conmemorar el XX aniversario de la muerte del «Che» Guevara. Sin embargo, el sociólogo Raúl González plantea la hipótesis de que en realidad el MRTA buscaba recuperar presencia política a nivel nacional pues días antes varios de sus dirigentes habían sido capturados en Lima, entre ellos Alberto Gálvez Olaechea (Que Hacer, N° 50, enero-febrero de 1988).

²⁰ El registro de la incursión a este centro poblado y la entrevista a Víctor Polay (c) Rolando fue realizada por Alejandro Guerrero, reportero de Panamericana Televisión. Sin embargo, la población afirma que el MRTA escenificó su entrada a San José de Sisa sólo para la televisión.

11 de diciembre toma de Shanao

16 de diciembre incursión en Yorongos

En esta primera campaña militar la mayor acción fue la toma de la ciudad de Juanjui.

2.10.4.1. Primera toma de Juanjui

La toma de Juanjui se inició el viernes 6 de noviembre a las 2:30 a.m. cuando un grupo de emerretistas capturan el camión «*Amor de la montaña*», que es utilizado para trasladar al ET a Juanjui sin ser descubiertos. Al llegar a esta ciudad, el camión abrió sus puertas, cayendo una primera fila de sacos de cemento y detrás bajaron los emerretistas con todo su armamento. Primero, se distribuyeron en la ciudad para cercar a los tres puestos de las fuerzas policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y PIP) y sorprenderlos. Luego, cortaron la comunicación telefónica con San Martín y Lima. Cabe resaltar que burlaron fácilmente el cerco policial instalado en la ciudad, debido a que la mayor parte de efectivos policiales habían sido trasladados al norte del departamento por anteriores incursiones y tomas realizadas por el MRTA²¹.

A las 4:45 a.m., la población sintió disparos de armas automáticas y explosiones de granadas. Tras varios minutos de balas y explosiones, los emerretistas le decían a los policías a través de un megáfono portátil: «Se nos esta acabando la paciencia, les damos diez minutos para rendirse».

Cuando terminó el plazo para rendirse la ciudad fue un solo de disparos y explosiones contra los puestos policiales. Para ese momento, varios miembros de las fuerzas policiales se habían replegado y otros fueron capturados. Según la población, dos policías llegaron a Bellavista, vía el río Huallaga, y alertaron a la población. Un policía se metió en un pozo ciego y otros dos atravesaron la pista del aeropuerto y aparecieron en el barrio de la Merced.

Los emerretistas hicieron gala de todo su poderío militar para «ablandar» al enemigo. Sin embargo, la población escuchó las voces de algunos policías heridos que decían: «Mátenme, mátenme... si pueden. No vamos a salir, así decían ellos ahí adentro. No lo creía, estaban muriendo de miedo, sangrando, pero no quisieron salir» (Limderman).

A pesar de la resistencia de los policías, entre 70 y 100 subversivos del MRTA habían tomado la ciudad a las 5:45 am, casi sin resistencia, tras un ataque sincronizado a los tres puestos policiales. El siguiente paso fue invitar a toda la población a la Plaza de Armas y a las calles de la ciudad para hacer alarde del botín conseguido: granadas, armas y municiones requisadas de los puestos policiales asaltados. Después se realizó un mitin en la plaza donde se dijo: «Venimos a

²¹ Esta medida fue adoptada por la Policía tras los primeros ataques del MRTA a Tabalosos (8 de octubre: 6:00 a.m.) y a Soritor (18 de octubre: 4:30 a.m.) que, en realidad, fueron para distraer la atención de las fuerzas del orden. La táctica dio resultado y el MRTA logró incautar la mayor cantidad de armas conseguidas por movimiento subversivo alguno. La población quedó sorprendida porque todos calculaban que un ataque subversivo a Juanjui era poco probable, a pesar de haber estado anunciado (Pepe).

protegerlos, no queremos matar. No nos teman, nosotros somos diferentes a el PCP-SL. El pueblo debe apoyar nuestra lucha popular» (Limderman).

De forma paralela un grupo de subversivos compró pintura negra y empezaron a pintarrajear las paredes de los locales públicos y privados de la ciudad con los lemas de «No al voto, sí a la lucha armada», «Viva la toma de Juanjui» (también pusieron pintas del MRTA en la cola de una avioneta). «Abajo la represión y el alto costo de vida», «El pueblo al poder con el MRTA», «La justicia no se mendiga, se consigue con la lucha Tupacamarista», «Pueblo armado, jamás será oprimido», «Abajo el Estado de emergencia», etc.

Luego, llevaron a la Plaza de Armas a tres maniatados policías (dos guardias republicanos y uno de la PIP) para presentarlos a la población. Todo el pueblo pensó que iban a realizar los famosos *Juicios Populares* que practicaba el PCP-SL en la parte sur del departamento de San Martín. Sin embargo, los emerretistas conminaron a los policías a portarse bien, a no abusar de la gente, a no extorsionar al pueblo. Como castigo de su «*mal comportamiento*», los policías permanecieron crucificados y amarrados por espacio de dos horas custodiados por un grupo de subversivos. Por temor nadie intercedió por ellos. Posteriormente, fueron entregados al Padre José Álvarez para que no salgan de la parroquia hasta que los emerretistas se hayan retirado de Juanjui.

Otro grupo de subversivos quemó documentación archivada de la municipalidad, registros electorales y documentos del juzgado. Asimismo, sacaron motores fuera de borda decomisados por la PIP y los devolvieron a sus dueños, quemaron un deslizador en la Plaza de Armas y tres carros de la PIP en la pista del aeropuerto para que ningún avión o helicóptero con refuerzos policiales o militares aterrice con facilidad.

Varios grupos de emerretistas, localizados en distintos puntos de la Plaza de Armas, hablaban con personas del pueblo y éstos hablaban con ellos. Los visitantes se veían convincentes porque demostraban con hechos la crisis política, económica y moral que vivía el país. Mucha gente les daba la razón y su apoyo, porque habían sido respetuosos y actuaron sin vandalismo.

Algo que resaltar era la juventud de los subversivos, además de los uniformes recién estrenados y el moderno armamento que poseían. El MRTA había llegado con una corresponsal que, según los testigos, parecía de alguna agencia extranjera, y tomaba fotos de todo lo que ocurría. También un emerretista, con el rostro oculto, filmaba todo lo que sus compañeros realizaban.

Algo que impresionó a los pobladores de Juanjui fue que los emerretistas tenían dinero y todo lo que necesitaban lo compraban. No saquearon mercados ni tiendas comerciales, sólo los puestos policiales para conseguir armas que les servirían para posteriores incursiones y tomas de ciudades.

El saldo trágico del ataque fue la muerte del teniente GC Jorge Cieza Lachos, de 36 años²². Además, hubo siete heridos, dos de ellos civiles. Los miembros del MRTA habían sacado de los puestos policiales aparatos eléctricos decomisados los cuales fueron cogidos por los pobladores que merodeaban en la zona. Dos carros que estaban estacionados frente al puesto policial de la GC fueron desvalijados por la población: unos se llevaban el carburador, otros los faros, algunos hasta traían herramientas para llevarse los asientos y repuestos. Otras personas se llevaron los muebles de los puestos policiales, algunos caminaban por las calles con cascos antidisturbios robados. Una señora se llevaba una máquina de escribir. Al ver todo lo que habían provocado, los emerretistas dispararon al aire para poner un poco de orden porque se habían robado hasta las sábanas que el padre José Álvarez había colocado sobre el cuerpo del capitán Cieza.

Vestigios de esta toma fueron las fachadas policiales con todos los impactos de bala y algún boquete abierto por las granadas e instalasas, además de vidrios rotos, documentos esparcidos por las calles o a medio quemar, el humo negro del deslizador y los carros quemados, las pintas en las paredes de instituciones públicas y privadas, etc. Durante todo ese día las puertas del mercado, de las tiendas comerciales, de los domicilios y de las instituciones públicas y privadas permanecieron cerradas.

Los emerretistas se fueron hacia las 9:45 a.m. en cinco camionetas decomisadas a sus dueños, que luego les fueron devueltas. En ellas también transportaron las armas y municiones capturadas. Posteriormente, comenzaron una gira por la Carretera Marginal pasando por Bellavista y Sacanche (en la provincia de Saposoa). En esta última ciudad, dejan la Carretera Marginal para dirigirse a San José de Sisa donde permanecieron cerca de un día.

2.10.4.2. Incursión en San José de Sisa

El sábado 7 de noviembre, las huestes del MRTA llegaron a San José de Sisa sin disparar un solo tiro. A las 4:00 pm, 100 emerretistas entraron libremente a la plaza de armas pues los policías, al enterarse de lo sucedido en Juanjui, habían abandonado el poblado: «El MRTA entró libre y lanzando balas al aire anunciando su llegada. Todos nos metimos a nuestras casas y la gente pensaba que eran senderistas o algo así. Hasta ese momento nadie sabía del MRTA. Recién ahí nos enteramos» (ER).

Al tener el control del pueblo, los emerretistas organizaron un mitin invitando a todo el pueblo. El jefe (c) Rolando disertó sobre el MRTA, sus planes y objetivos y la acción que habían realizado horas antes en Juanjui. Además, hizo una exposición de todo el armamento recuperado: «Polay habló y nos convencía. No te imaginas, inclusive yo me la creí. Los jóvenes y los adultos se querían ir con ellos, un montón de gente. Lindo nos habló» (ER).

²² Unas horas antes le habían comunicado su ascenso a capitán y esa misma noche lo estuvo celebrando. Estaba en

Acto seguido, el MRTA compró caballos, en dólares, para transportar las armas incautadas. Igualmente, organizaron una actuación cultural donde los subversivos bailaron y disfrutaron. Al principio, la gente no participaba pero los emerretistas decidieron dar premios (cartuchos de retrocargas) para quienes participaran con ellos. Así, la gente (hombres y mujeres jóvenes) bailaron hasta altas horas de la noche. Al día siguiente se fueron con dirección al Alto Sisa. Posteriormente, el Ejército entró a San José de Sisa y rebuscó las casas preguntando a la población por dónde habían escapado los subversivos.

2.10.5. El descalabro del ejército tupacamarista del Frente Nororiental

Después de la incursión a Juanjui, el departamento de San Martín fue declarado en emergencia y en noviembre de 1987 se estableció el Comando Político-Militar del Frente Huallaga. El ET se retiró hacia el Alto Sisa para que los mandos superiores organicen destacamentos militares para los diversos Frentes que el MRTA tenía planeado abrir a nivel nacional:

En ese momento, el ET del FNO se quedó al mando de (c) Ricardo. Sin embargo, cuando el MRTA envió destacamentos y compañías a diferentes puntos del país para formar los frentes Oriente y Centro, algunos no llegaron a los lugares indicados, otros quedaron en el camino y otros más desaparecieron, mermando la capacidad militar del MRTA. Los emerretistas intentaban escapar de la persecución del Ejército dispersándose en pequeños grupos a diversas áreas:

Me encargaron un pelotón de catorce hombres, (c) Lucho tenía que trasladarse a Huayabamba con doce combatientes y (c) Puma con ocho compañeros tenían que trasladarse hasta el valle del Shanusi. Este era el acuerdo tomado por los mandos. El resto de compañeros se irían para el centro del país. Los altos mandos nacionales Víctor Polay Campos, Néstor Cerpa Cartollini y Rodolfo Kleim Samámez fueron a Lima para dirigir desde allí la organización del MRTA (Ricardo).

Esta estrategia fue utilizada debido a que el Ejército había identificado las zonas de base que el MRTA usaba para recomponer y alistar a sus hombres para futuras acciones armadas. Como después de las tomas de Tabalosos y Soritor el MRTA había vuelto al Alto Sisa, el Ejército les preparó un cerco cerrándoles todos los puntos estratégicos de escape a otras zonas. El enfrentamiento se produjo el 28 de noviembre de 1987:

Luego de la toma de Juanjui volvimos al mismo campamento que fue utilizado antes de Juanjui, entonces el Ejército nos persiguió. Ese sitio estaba en el Alto Sisa, donde nace el río. Cuando nos hicieron el cerco, la gente que conocíamos nos sacaron para el otro lado, para Saposoa que era el río Porotongo. Para Pasarraya, caminamos aproximadamente 2 días. Los soldados nos estaban ajustando, pero logramos salir del cerco que nos habían hecho por Agua Blanca» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P495. Varón ex combatiente militar de Lamas)

Juanjui desde hacía cinco meses (Pepe).

Creendo que se habían librado del Ejército, los del MRTA fueron sorprendidos en Agua Blanca el 23 de diciembre. En ese momento empezó un tiroteo que se prolongó por tres horas: «Los soldados no nos lograron detectar. Cuando ya estábamos pasando aproximadamente 40 personas, un oficial que estaba rondando ve a los últimos que se iban y en eso empezaron los disparos» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P495. Varón ex combatiente militar de Lamas)

Ante la superioridad numérica del Ejército, las huestes emerretistas decidieron separarse y tomar rumbos distintos. Algunos lograron unirse al resto del ET, otros perecieron en batalla, otros nunca aparecieron: «Nosotros si logramos aparecer, caminando bastante nos salvamos. Conocíamos algunas zonas. En nuestra niñez nuestros viejos nos hacían pasear, recordabas y te salías buscando caminos por el monte y lograbas salir» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P495. Varón ex combatiente militar de Lamas)

Los que pudieron salir del cerco militar preparado por el Ejército se fueron juntando poco a poco, mientras el MRTA buscaba refugio para los demás combatientes.

El Ejército hizo masivas detenciones de personas acusadas de colaborar con el MRTA y las sometió a torturas. Además, realizó acciones punitivas contra centros poblados con el fin de ubicar a los emerretistas²³. Con estas acciones el ET quedó diezmado. Algunos mandos regionales, como (c) Ricardo²⁴, fueron capturados y enviados a la cárcel. Luego de la desarticulación del Frente, entre fines de 1987 e inicios de 1988, se iniciaron los primeros contactos para una nueva articulación:

Comenzamos con 4 hombres al mando de (c) Puma (capturado 3 días después de habernos organizado). Luego de esto tuvimos que volver a iniciar los contactos para tener una cabeza visible en la organización. Ahí se logró contar con (c) Omar, compañero que tenía mucha experiencia militar pero con muy poco nivel político e ideológico» (Antonio).

Omar logró recomponer todo el trabajo político y militar del FNO. En ese momento ingresan una gran cantidad de personas que simpatizaban con el MRTA y se les empieza a adoctrinar: «En esta etapa ingresé al MRTA. Yo reforcé políticamente a la gente y empecé a hacer contactos con la Dirección Nacional. No había nadie más que lo haga, así que asumí esa responsabilidad, no había otra salida. Para suerte nuestra la gente empieza a integrarse a nuestras tropas y a tener relación con nosotros de manera directa e indirecta» (Antonio).

Durante esta etapa de reconstrucción del FNO también se logró reconstituir el ET, logrando tener mayor presencia en el ámbito público a través del responsable político de masas. Con la ayuda de Lucas Cachay se logró fortalecer la parte ideológica y política de los nuevos combatientes que iban a realizar las futuras acciones militares para hacer sentir la presencia activa del MRTA en

²³ En enero de 1988, el Fiscal Superior, comisionado en el distrito judicial de San Martín, Dr. Carlos Escobar Pineda, recibió denuncias por la detención ilegal de 35 personas y, posteriormente, comprobó la reaparición oficial de sólo 28 de ellas. Lamentablemente, la campaña contrasubversiva incluyó ejecuciones extrajudiciales (Para mayor información de casos ver Documento APRODEH: Peligros de la guerra contra la coca).

²⁴ Ricardo es capturado en Tarapoto el 23 de enero de 1988 y sale en libertad el 26 de enero de 1990.

la región: «Nosotros empezamos a realizar escuelas político-militares. No sólo estábamos nosotros, en ese momento se llamó a Lucas Cachay para que nos proporcione personas que nos refuercen por el lado político. Así, los militares y los políticos del MRTA lograron reflotar el Frente» (Antonio).

En las ciudades se formaron milicias urbanas que hacían los trabajos de pintado de paredes con lemas alusivos a la lucha armada y al MRTA. En el campo estaba formándose nuevamente el ET y las milicias rurales.

A inicios de 1989, el FNO comienza a manifestarse con las siguientes acciones: el 4 de marzo incursionan en Pilluana y Shapaja; el 27 de marzo toman San José de Sisa; el 3 de mayo toman Peleje y Papaplaya; el 25 de mayo toman Pacaypasa y capturan al presidente de CORDE-San Martín, Demetrio Tafúr Ruiz; el 3 de julio vuelven a incursionar en Shapaja y el 22 de noviembre toman Pacaypasa. Asimismo, apoyó los diversos paros regionales, organizados por la FEDIP-SM, que reivindicaban la autonomía regional de San Martín y mejores condiciones para los productores agrarios: «Reconstruimos todo lo que se cayó y empezamos a tener presencia a nivel de la región, tanto que el Ejército volvió a preocuparse de nosotros porque a mediados de 1989 nuevamente se retoman las acciones militares en San Martín tras las incursiones a San José de Sisa, Papaplaya, Pacayzapa, Pilluana» (Antonio).

En enero de 1990, (c) Ricardo salió libre y se dirigió a San Martín para asumir, en abril del mismo año, la Comandancia General del FNO tras la muerte del comandante (c) Roberto²⁵: «En el mes de abril de 1990, (c) Evaristo me encarga el mando del Frente, toda vez que él era dirigente nacional y estaba asumiendo la jefatura de la organización en vista que (c) Rolando estaba preso» (Ricardo).

En abril de 1990, el FNO, al mando de (c) Ricardo, ya contaba con tres destacamentos de veinticinco hombres cada uno distribuidos en las siguientes zonas: Mayo Medio, valle del Huayabamba y en el Huallaga Central. Para agosto de 1990, llegó a tener quinientos combatientes, lo cual hizo posible aumentar los destacamentos militares y consolidar las 8 zonas de control del MRTA. Además, volvieron a realizar espectaculares acciones armadas: el 9 de febrero toman la ciudad de Picota; el 14 de mayo toman Saposoa; incursionan en Bellavista, el 18 de mayo²⁶; el 25 de julio toman Yurimaguas, el 16 de agosto, el ET del FNO con 300 subversivos toma Moyabamba, el 3 de noviembre incursionan en Pacaysapa y el 5 de noviembre incursionan Nueva Cajamarca. En todas sus acciones militares, además de las arengas en pro de la lucha armada, pedían a la gente apoyar y organizarse en los Frentes de Defensa.

Como ejemplo de la realización de estas tomas se describirá la de Yurimaguas.

2.10.5.1. Toma de Yurimaguas

²⁵ Tras la muerte del (c) Roberto (cuyo nombre real era Rodrigo Gálvez), el 9 de febrero de 1990, el FNO toma su nombre en homenaje.

²⁶ El semanario CAMBIO registra que esta toma se realiza el 26 de mayo.

Para la toma de la ciudad de Yurimaguas, el MRTA concentró en Chazuta a los destacamentos ubicados en Yurimaguas, el Huallaga Central y el Alto Mayo. El objetivo central con esta toma era ampliar su radio de operaciones hacia Loreto. Los emerretistas bajaron en bote a motor por el Bajo Huallaga. Aproximadamente eran 300 combatientes debidamente armados.

En Shucshuyacu los emerretistas logran establecerse por algunas horas hasta esperar las órdenes de entrar a Yurimaguas e iniciar la toma de la ciudad. Los combatientes involucrados en las tomas no supieran dónde estaban yendo a pelear.

La permanencia en Shucshuyacu sirvió para recibir la información de las bases milicianas sobre los planos y mapas de los puestos policiales y de la base de la Marina, así como saber con qué número de personal contaban y los tipos de arma que tenían. Esta información sería distribuida al personal para no tener problemas con las fuerzas del orden.

Debido a la localización de la base de la Marina de Guerra, los emerretistas habían constituido un grupo que apoyaría en brindar los instrumentos necesarios para la entrada, la estancia y la salida del ET.

Previo consolidación de grupos que debían realizar actividades específicas (grupo logístico, grupos de asalto, grupos de contención y gente especializada en explosivos), a las 10:30 pm todo el personal del MRTA recibió las últimas indicaciones sobre las acciones que iban a realizar. Así, todos subieron a los botes que los dirigirían a Yurimaguas:

Con la ayuda de uno de los camiones Volvo, un grupo de 180 emerretistas rodearon la base de la Marina, mientras el otro Volvo se dirigió al centro de la ciudad para posicionarse sobre las áreas cercanas a los puestos policiales de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil y el CRAS (centro de reclusión). Sin embargo, la Marina se percató del movimiento de los emerretistas y empezó a atacar. Al mismo tiempo, los subversivos del MRTA empezaron el ataque a los puestos policiales y al CRAS.

Los puestos policiales fueron los primeros en caer en manos de los emerretistas que lograron capturar a varios policías quienes fueron exhibidos durante el mitin realizado en la Plaza de Armas.

Al capturar el local de la Guardia Civil y tomar a dos policías como prisioneros, me avisaron que también se había tomado el local de la Guardia Republicana con seis policías que fueron hechos prisioneros. Del CRAS fueron liberados todos los presos y diez policías fueron tomados prisioneros. Eran las ocho de la mañana y ya teníamos tres puntos estratégicos controlados, faltaba la Marina (Ricardo).

Al no poder tomar la base de la Marina, (c) Ricardo dispone enviar refuerzos y la realización de las actividades post-toma (pintas, volanteo, mitin, presentación de prisioneros, recuperación de armamento, liberación de reclusos) para después salir de la zona. «Le dije a (c) Puma (el encargado de tomar la base de la Marina) que si no podía tomar la base que todos nos

retiraríamos, previa comunicación sobre la situación. En ese momento, ordené que juntaran todas las armas²⁷ recuperadas para llevarlas a un bote motor» (Ricardo).

Durante este tiempo se aprovechó para realizar en la Plaza de Armas el mitin de presentación del MRTA, repartir volantes sobre la lucha armada y presentar sanos y a salvos a los policías que fueron tomados como prisioneros. Estos policías fueron entregados a la parroquia de la ciudad con la condición de no ser liberados hasta que el MRTA abandone Yurimaguas. Los emerretistas tuvieron algunos heridos y causaron 6 muertes a la Marina.

Un resultado negativo de esta toma fue la liberación de presos comunes del CRAS de Yurimaguas quienes junto a algunos emerretistas empezaron a saquear casas comerciales, cobrarse viejas rencillas con determinados pobladores y cometer abusos contra la población: «No los pudimos controlar porque estábamos más preocupados por lo que pasaba con nuestros compañeros en la base de la Marina y por salir de la ciudad. Esa toma nos hizo ver mal ante la población, aunque nosotros no quisimos que sucediera eso» (Antonio).

Desde Tarapoto, la Dirección Regional les informó que dos helicópteros con tropas contrasubversivas iban a Yurimaguas para reforzar a la Marina, por lo que (c) Ricardo ordenó la retirada de la zona, vía Shucshuyacu al valle del Shanusi y el Pongo de Caynarachi.

Cabe señalar que para ese entonces, el FNO estaba reforzado con los emerretistas que había escapado el 12 de julio de 1990 de la cárcel de máxima seguridad de Canto Grande, Lima, junto a (c) Rolando. Estos emerretistas habían sido colocados en el FNO como mandos políticos y organizativos de la Dirección Regional²⁸.

En septiembre de 1990, el III Comité Central de Unidad decidió nombrar a (c) Evaristo como comandante general del FNO, relegando a (c) Ricardo, quien cae preso por segunda vez en Iquitos el 12 de noviembre de 1990. Sin opositores políticos ni militares (c) Evaristo impone su visión militarista en el FNO, con lo cual las acciones militares se tornarían más violentas, incluyendo el saqueo de tiendas comerciales y el robo a entidades bancarias.

En 1991, el FNO inicia la «*Campaña Militar Fernando Valladares*», cuyo objetivo era criticar las condiciones económicas y políticas que impuso el gobierno de Alberto Fujimori. Realizan algunas acciones militares importantes: el 10 de mayo incursionaron simultáneamente en Juanjuí, Tarapoto, Saposoa, Moyobamba y Rioja.

Luego del ataque a Rioja, tomaron de rehenes a nueve policías a quienes mantuvieron cautivos durante algunos días en el campamento del Pongo de Caynarachi para llamar la atención de diversos organismos internacionales. Constantemente, (c) Evaristo se contactaba con las autoridades civiles y religiosas de Moyobamba y Rioja para concretar las reivindicaciones del MRTA y darle solución al problema de los policías rehenes. En esta tarea participaron como

²⁷ Según Ricardo y Antonio, la cantidad de armamento recuperado en Yurimaguas fue el doble de lo que se consiguió en la primera toma de Juanjuí en 1987.

intermediarios el Obispo de Moyobamba, Monseñor Venancio Orbe Uriarte, y la presidente del Frente de Defensa de Rioja, Dra. Aurora Torrejón. La participación de estas personas logró que el MRTA liberara a los policías retenidos, a cambio de que los medios de comunicación difundieran un comunicado dirigido a las fuerzas armadas donde se les exigía detener los abusos, torturas y desapariciones contra campesinos inocentes.

Durante la *Campaña Militar Fernando Valladares*, el MRTA cambió su manera de hacer la lucha armada y comenzó a ser más violento. Un ejemplo de esto fue la segunda toma de Juanjui.

2.10.5.2. Segunda Toma de Juanjui

Los integrantes del MRTA llegaron a Juanjui a las 2:00 a.m. del 24 de diciembre de 1991 al mando de (c) Rolando, quien ya había fugado de la prisión en julio de 1990, y (c) Evaristo. Distribuyeron a sus 200 efectivos en 3 grupos de asalto y de contención acompañados por gente especialista en explosivos. Los puntos estratégicos eran el puesto policial (ubicado en la plaza de armas), la base militar de Ingenieros del Ejército (ubicado en el barrio la Merced, ex-local de ENCI) y las principales instituciones públicas y privadas de la ciudad. (c) Rolando y (c) Evaristo acamparon en la casa del señor Castillo (a dos cuadras de la Plaza de Armas) desde donde controlaban las acciones de contención al Ejército y la toma del puesto policial.

A las cinco de la mañana, el MRTA controló momentáneamente Juanjui con la toma del puesto policial y la «recuperación» de armamento, con el lamentable saldo de seis policías, un civil muertos y quince heridos. También murieron alrededor de quince subversivos y varios resultaron heridos. Durante el ataque se incendiaron los locales de la Policía Nacional y la Casa Parroquial, se saquearon el comercio mayorista «Bruno Acosta» y el Banco Amazónico. También se destruyó parcialmente el Banco Interbank. De ambos bancos se robó dinero.

Con los grupos de contención deteniendo al Ejército, (c) Rolando y (c) Evaristo, con el botín en la mano, cogieron a un empleado de Córpac y lo amenazaron para que consiga una avioneta. Luego de conseguirla, pudieron salir en avioneta de Juanjui con todo el dinero. Mientras, los combatientes emerretistas fueron saliendo de la zona con dirección a Bellavista y Alto Sisa.

Para fines de 1991, las disputas internas del FNO lo resquebrajaron peligrosamente lo cual es aprovechado por el PCP-SL para consolidar territorios que había ganado en la parte sur del departamento de San Martín. En este contexto, los enfrentamientos entre ambos grupos armados se agudizaron por la posesión del territorio y las rentas económicas que producía la relación con el narcotráfico²⁹.

²⁹ Esta decisión traería muchos problemas internos y provocaría rupturas que desarticulaban tanto el movimiento político como el militar en San Martín.

2.10.6. El avance del PCP-SL y el narcotráfico hacia el norte del departamento de San Martín

Cuando el PCP-SL empieza a incursionar en las zonas controladas por el MRTA hay enfrentamientos por controlar el territorio, por tener más apoyo popular y por manejar las pistas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico³⁰.

Los enfrentamientos registrados entre MRTA y SL³¹ se realizaron en las siguientes zonas:

2.10.6.1. Enfrentamientos en el Valle del Ponaza

En 1991, el enfrentamiento entre estos dos grupos se dio porque los senderistas habían capturado a cuatro emerretistas, entre ellos una mujer. SL se acantonó y se camufló en las partes bajas del valle del Ponaza, mientras los emerretistas los perseguían para rescatar a sus compañeros.

Según (c) Gustavo, el MRTA quería arreglar las cosas de forma pacífica para evitar cualquier derramamiento de sangre. Pedían un diálogo con los cabecillas del grupo senderista pero no lograron nada: «Ellos decían, «miren tus compañeros como van a morir, así van a acabar muriendo todos»... y mataban a nuestros compañeros» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P494 .Varón, ex combatiente militar del MRTA.)

Por este hecho, los emerretistas se unieron a los destacamentos del Huallaga Central y Mayo Medio y decidieron atacar a los senderistas. El enfrentamiento duró todo el día y los emerretistas lograron desalojar al enemigo.

Para evitar futuras infiltraciones de SL, el MRTA, dispuso la instalación de puestos de control en toda la zona del Huallaga Central. Sin embargo, como el territorio controlado por el MRTA era muy extenso, SL siempre intentaba colarse a través de los ríos, ya sea por el valle del Huallabamba o por el valle del Ponaza³². A pesar de los controles, nunca evitaron las incursiones de SL. Pero un factor importante para intentar detener la arremetida de el PCP-SL fue la postura de

²⁹ Se tiene información de los choques entre el MRTA y SL desde 1987 (Que Hacer N° 50, enero-febrero de 1988, pag. 60 y 61).

³⁰ Según Ricardo, en junio de 1990 en el caserío de Dos de Mayo existían dos pistas de aterrizaje clandestinas controladas por narcotraficantes colombianos. Éstos proporcionaban alimentos y vestido al MRTA para que no se entrometan con ellos. Hasta ese entonces, el MRTA no había establecido cupos ni montos por vuelo. En cambio, los narcotraficantes pagaban a las autoridades de la localidad.

³¹ El primer enfrentamiento que se ha registrado entre ambos grupos se dio en marzo de 1987. Un grupo de 100 guerrilleros del MRTA intentó tomar la ciudad de Tocache, pero fueron atacados por una compañía de SL, quien dominaba la zona. Los del MRTA son derrotados y pierden 40 hombres. Con este acontecimiento, la intención del MRTA de abarcar todo el departamento de San Martín quedaron frustradas y terminó por asentarse en el valle del Sisa, provincia de El Dorado. A partir de 1989, el MRTA establece su frontera territorial, a la margen izquierda del río Huallaga, en el caserío de Dos de Mayo en el valle del Huallabamba, provincia de Mariscal Cáceres, afirmando su dominio en el Medio y Bajo Huallaga, y Alto Mayo.

³² Incluso, SL llegó a instalar comités populares en Colpa y Huaccha (Saposo) y en Shambuyacu (Picota).

la población de Juanjui al no aceptar la presencia de el PCP-SL por lo sanguinario que había sido con otros pueblos. Por eso, la población de Juanjui al ver movimientos senderistas, siempre avisaban a los emerretistas.³³

2.10.6.2. Enfrentamientos en el Valle del Huallabamba

En Huallabamba, los enfrentamientos entre ambos grupos subversivos fueron constantes entre 1991 y 1993. el PCP-SL quería desalojar al destacamento militar del MRTA de Dos de Mayo, por considerarla una zona potencialmente alta para el negocio de la droga:

Debido a la resistencia ofrecida por el MRTA, SL inicia trabajos de infiltración en el sector magisterial y estudiantil de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres. El trabajo de infiltración de las huestes senderistas en Juanjui buscaba conocer cuáles eran las virtudes y los defectos del MRTA, así como realizar un trabajo de base con profesores y con la sociedad organizada para inculcarles los objetivos de SL. Asimismo, como SL mandaba grupos de aniquilamiento para asesinar a los militantes emerretistas, el MRTA intervino las frecuencias de los senderistas y sabían de antemano la jerga utilizada por SL para atacar a las bases emerretistas.

En una época mi radio estaba trabajando y oía que decían: «atención, atención familia de dos letras, atención, atención familia de dos letras. Esta tarde llega la familia de dos letras a «JJ» para hacer fiesta con la familia de cuatro letras». Esta clave dice: la familia de dos letras, SL, viene a hacer fiesta (matar) a la familia de cuatro letras, MRTA» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P492 .Varón arrepentido del MRTA ,ex responsable de los milicianos en Juanjuí)

Al tener conocimiento de los planes de SL en Juanjui, el MRTA constituyó grupos armados para detener las intenciones de los senderistas:

[...] (Ante la incursión de senderistas a Juanjui, yo dispuse) váyanse al puerto del Huallaga, deben estar llegando seis hombres sucios con pantalón Jean, pelo largo y todos pálidos. Van reunirse en algún lugar. Uno de nosotros va a ir en bicicleta, mirando donde van a reunirse. Cuando estén distraídos los senderistas atacamos en la noche de sorpresa. Esa vez hubo dos muertos de sendero» (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P492 .Varón arrepentido del MRTA, ex responsable de los milicianos en Juanjuí)

El PCP-SL ha iniciado su trabajo de espionaje en 1989 designando a Wally para que entre a Juanjui y desentrañe el enigma del poder del MRTA en la zona. Wally es infiltrado como sicario de una firma de narcotraficantes.

Pese a lo cuidadoso que fueron las acciones del personal infiltrado de SL, el MRTA empezó a sospechar sobre la identidad, principalmente, de Wally. Sin embargo, el MRTA no pudo

³³ De igual forma sucedió en el poblado de Tres Unidos. SL había reunido a la población e hizo sus habituales reuniones, pero en ese momento un destacamento militar del MRTA, procedente del distrito de Sauce, entra a Tres Unidos y los senderistas se camuflaron en el pueblo. Pero como la gente estaba con el MRTA, ellos le avisaron de la presencia de extraños.

hacer nada contra él porque estaba garantizado por una firma de narcotraficantes. En esos días llega a Juanjui (c) Chester, senderista que tenía la misión de infiltrarse en Dos de Mayo, pero es detectado y asesinado. Ante este hecho, Wally se dirigió a Saposo. Tras un mes de aislamiento retorna a Juanjui donde recibe indicaciones de infiltrarse al MRTA. Para cumplir con esta tarea Wally empieza a realizar acciones (secuestros, cobro de cupos, etc.) para hacerse famoso y necesario para el movimiento. Por eso el MRTA lo capta.

Desde dentro del MRTA, los senderistas infiltrados inician las acciones de aniquilamiento de miembros emerretistas e identifican a los mandos más importantes de la zona. Cuando los planes de infiltración se cumplían, los senderistas se dieron cuenta que había un grave problema por resolver en Juanjui: la alianza del MRTA con el Ejército. Pese a ello, los senderistas continuaron con los aniquilamientos nocturnos, a la vez que salían con el MRTA a realizar batidas y vigilancias nocturnas contra SL.

Entre 1991 y 1992, SL consolidó sus nuevos comités populares en la zona de Bellavista y formó un batallón en las riberas del río Abiseo para tomar definitivamente Dos de Mayo en noviembre de 1993. También, logró constituir diferentes grupos de asalto divididos en tres: El primer grupo entró por Sión y se dirigió a Huicungo. El segundo grupo fue por Nuevo San Martín, vía río Abiseo y el río Chimbote, y salió al Valle del Huallabamba. El tercer grupo salió de Ledoy, del sector de Soledad, Bellavista.

No entramos 100 ni 200 hombres, se vino toda la gruesa de la principal, la T4. Vino gente de apoyo de Aucayacu, del Bolsón Cuchara. También vino personal de los comités populares abiertos. Eran un aproximado de 1000 hombres. Todos distribuidos en distintos flancos. Así entramos a Dos de Mayo y sacamos a patadas al MRTA y le hicimos chifa. Fue una matanza. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P484. Varón, mando militar de el PCP-SL de la compañía de ex subversivos de Uchiza).³⁴

En realidad, la caída del MRTA se produce porque ya había perdido su poderío militar en la zona, así como al desgaste y problemas internos que sufría el FNO. Esta situación obligó al MRTA a dejar lugares de antiguo control a disposición del PCP-SL.

2.10.6.3. Vaticano: el otro gran escollo para el PCP-SL

Otro actor importante en las disputas entre SL y el MRTA por el negocio de la droga y el control del territorio, fue el narcotraficante Demetrio Chávez (a) Vaticano. Su poder era tan fuerte que no permitió entrar a Campanilla, su centro de operaciones, ni a SL ni al MRTA: «Él (Vaticano) le paró macho a SL, por eso Campanilla jamás fue tocada por SL pero tampoco por el MRTA. Nuestras relaciones eran cordiales pero nunca logramos formar base miliciana en Campanilla, ese era territorio de Vaticano» (Antonio).

³⁴ La versión de Wally se contradice con la versión ofrecida por Acero quien dice que en 1993, SL llegó a tomar Dos de Mayo, pero ya no había gente ni el destacamento militar del MRTA, porque la disidencia de Ricardo había desarticulado

La relación que mantenía Vaticano con SL fue cordial hasta que los senderistas decidieron imponer precios de compra y venta de la droga, así como cupos a los narcotraficantes³⁵. Para ese entonces, Vaticano ya tenía el control de todo el negocio de la droga en el Huallaga Central. Esto motivó a que las otras firmas de narcotraficantes locales quisieran derrocarlo con ayuda de SL. En 1992, Vaticano armó a un grupo de sicarios con armamentos de corto y largo alcance para detener cualquier incursión de SL y sus rivales en su zona de influencia.

Vaticano incluso contrató a personal subversivo del ET, en ese momento sicarios, aprovechando su experiencia militar. Gracias a ello le fue más sencillo contrarrestar las arremetidas militares de SL y de las firmas de narcotraficantes rivales:

Vaticano contrató compañeros ya no como emerretistas, sino como particulares. Y como eran adiestrados en la guerra, entonces conocían todo y les servían de mucho. Vaticano ha combatido mucho a Sendero. Esa gente (que se fue con Vaticano) estaba abandonada, ya no era gente del partido. (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P492. Varón, arrepentido del MRTA , ex responsable de los milicianos de Juanjuí)

Tras afirmar militarmente su dominio, Vaticano transformó a Campanilla en la zona más importante del negocio de la coca en el Huallaga Central. Era también una zona intangible donde SL y el MRTA no pudieron entrar ni instaurar Comités Populares ni bases milicianas.

Para comprender la lógica de la lucha entre SL y el MRTA por ganar el control de los territorios del valle del Huallabamba y ganarse el apoyo de la población, se deben tomar en cuenta que ambos tenían por meta el control de las zonas de producción de coca, manteniendo una relación con las organizaciones de base y características ideológicas y políticas diferentes.

Entre 1987 y 1990, el MRTA aducía que no le interesaba «proteger» a los productores de coca como lo proclamaba Sendero, sino defender los intereses de productores agrarios asociados a la FASMA y las reivindicaciones de autonomía regional impulsadas por el FEDIP-SM.³⁶

Posteriormente, Sendero estableció una relación con los narcotraficantes a través de la imposición de cupos y tarifas para la compra y venta de hojas de coca, pasta básica bruta y clorhidrato de cocaína.

El MRTA, durante sus incursiones en varios centros poblados de San Martín amenazó a quienes tengan relación con la producción y comercialización de coca³⁷.

a la fuerza militar del movimiento. El negocio de droga se mantenía esporádicamente, pero luego se fue perdiendo: «ya no había tanto colombiano, ya no había, se había ido» (Acero).

³⁵ Cabe resaltar que la relación entre Vaticano y SL se inició en 1989 en Uchiza. En ese año, él aceptó pagar 15,000 dólares más un cupo de 3 dólares por cada kilo de PBC que saliera del Huallaga. Como Vaticano empezó a convertirse en el monopolizador del negocio de la droga rompió con SL y se traslado a Campanilla. Recién en este lugar, Vaticano hace frente a SL y al MRTA.

³⁶ Sendero buscaba destruir cualquier organización de base y construir los llamados Comités Populares, mientras el MRTA pensaba que el pueblo ya tenía una gran experiencia organizativa y lo único que tenía que hacer era infiltrar las organizaciones existentes para adecuarlas a sus lineamientos políticos e ideológicos. Es por eso que la población le temió más a Sendero por su accionar coactivo y de aniquilamiento selectivo y «apoyó» a los emerretistas porque su discurso era similar al de los frentes regionales y agrarios.

Conforme la producción de coca cobraba importancia en San Martín y la mayoría de campesinos dependía de esta actividad, el MRTA comienza a estrechar vínculos con el narcotráfico. Había visto que a través de cupos de guerra, tal cual lo hacía SL, le podía significar buenos recursos para seguir adelante con su campaña militar.

Previo conocimiento de las pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas con droga en Dos de Mayo (valle del Huallabamba), el MRTA en su III Comité Central de Unidad, realizado en septiembre de 1990, decidió cobrar cupos por cada vuelo que salía de las zonas controladas por ellos. Esta medida se empezó a ejecutar en noviembre de 1990³⁸.

Las pistas funcionaban previo trato entre los narcotraficantes y el MRTA. Cabe resaltar que el negocio de los cupos por vuelo sirvió para autoabastecer a las fuerzas militares del movimiento.

Cuando los narcotraficantes no querían cumplir con la cuota acordada eran presionados para que lo hagan o coaccionados a la fuerza: si no pagan no hay pistas. Por cada vuelo se recibía 5000 dólares que eran repartidos de la siguiente manera: 1500 dólares eran para las autoridades de los pueblos, 1500 dólares para el dueño de la pista y 2000 dólares para el MRTA.

Para algunos mandos, mientras el MRTA estuvo activo no le dio protección a los narcotraficantes, sino mas bien el cobro de cupos era porque el negocio de la droga se realizaba en la zona emerretista: «Jamás fuimos seguridad de los narcos. Nosotros sólo cogíamos una porción de su dinero para nuestro autoabastecimiento. Ellos mismos venían con sus sicarios y se encargaban de todo, nosotros sólo exigíamos nuestro derecho de pista y vuelo» (Antonio).

2.10.7. El final del Frente Nororiental

Entre 1988 y 1993, el MRTA sufrió diversos problemas de rupturas internas provocadas, en algunos casos, por diferencias políticas y/o militares y, en otros, por rivalidades personales. Asimismo, tuvo que enfrentar el avance del PCP-SL, la represión y estrategia contrasubversiva del Frente Huallaga, la puesta en vigencia de la ley de arrepentimiento, la acción en defensa de los derechos humanos de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM), la vinculación con el narcotráfico, así como la corrupción y el pillaje de sus miembros. Estos enfrentamientos y problemas internos y externos fueron, sin duda, un factor decisivo para la liquidación del MRTA en el departamento de San Martín.

Tras la fusión del MIR-VR y el MRTA en 1986, un grupo de militantes del MIR-VR quedó disconforme con la alianza. Entre los discrepantes estaban los miristas militares (c) Darío y (c)

³⁷ En marzo de 1989, durante la toma de Pilluana asesinan a 3 autoridades ediles a quienes acusó de estar comprometidas con el tráfico ilícito de drogas.

³⁸ Para 1991, se instauraron 4 pistas de aterrizaje en las siguientes zonas:

- Dos de Mayo (Valle del Huallabamba)
- Sauce (Provincia de San Martín)
- Bonilla (Pongo de Caynarachi)
- Pampa Hermosa (Yurimaguas)

Diómedes y algunos miristas políticos liderados por (c) Azul, quien tras ser la cabeza más importante del MIR-VR, fue relegado por el profesor Lucas Cachay. A partir de entonces, estas personas mantuvieron un perfil separatista frente al MRTA.

En 1988, Azul, junto a unas doce personas, se proponen romper con el MRTA y formar su propio grupo subversivo cuyo ámbito de acción sería San Martín. Para ello, convocaron a tres personas, que habían ayudado a construir política y militarmente el FNO, y les propusieron la idea separatista.

Cuando Antonio tomó conocimiento de este acuerdo, decidió informar inmediatamente a Lima sobre la disidencia de un grupo de miristas. La Dirección Nacional del MRTA envió aniquilar a todas las personas involucradas con el proyecto divisionista. Así, asesinó a José Ojeda (c) Darío y una docena de miristas disidentes se dio a la fuga. Los demás miristas permanecieron en el MRTA, contra su voluntad, por coacción de los mandos nacionales y regionales:

Con la muerte de un elemento y el escape de los disidentes miristas, se desvaneció la primera intención de dividir el MRTA.

A esto se suma las diferencias internas entre dirigentes nacionales.³⁹ A nivel militar también se produjeron problemas por la posición militarista que estaba instaurando la Dirección Nacional. Los miembros del MIR-VR pensaban que no se debía militarizar toda la actividad del MRTA y se debía continuar con la labor educativa y de concientización de la gente sobre los objetivos de la lucha armada.

La presencia de (c) Ricardo en la zona del Huallaga Central, a finales de 1991, produce un resquebrajamiento en el FNO. Había logrado convencer al destacamento de la zona del Huallaga Central apartarse del MRTA y formar su propia guerrilla, con 120 hombres, autodenominada «Alcides Reátegui». En enero de 1992, (c) Ricardo, junto a (c) Pepe, (c) Tarzán, (c) Gato y (c) Chávez, anunció su desvinculación del MRTA por diferencias de estrategia política y militar, como la «senderización del MRTA», por ejemplo al asesinar indiscriminadamente a los que discrepaban internamente.⁴⁰ La decisión de escindirse dio inicio a los primeros enfrentamientos entre el MRTA y la nueva guerrilla de (c) Ricardo.

³⁹ En septiembre de 1990 se llevó a cabo el III Comité Central de Unidad³⁹. Ahí (c) Rolando y (c) Evaristo lograron controlar la elección de la Dirección Nacional al colocar en ella a un miembro emerretista más. Esta elección se realizó fuera de los acuerdos de unidad contraídos en 1986. Así la Dirección Nacional quedó integrada por cuatro miembros del MRTA: Víctor Polay, Néstor Serpa, Miguel Rincón y Américo Gilvonio Conde, y solo dos provenientes del MIR-VR, Alberto Gálvez y Rodolfo Kleim. Con el apoderamiento de la Dirección Nacional por parte de la cúpula emerretista, la agrupación aliada, el MIR-VR, empieza a discrepar abiertamente con la posición militarista para el desarrollo de la lucha armada. Asimismo, los que ejercían la lucha política legal (Lucas Cachay, FEDIP-SM, UDP) empezaron a tener menos presencia en las decisiones internas del MRTA. A consecuencia de estas maniobras en el III Comité Central de Unidad, la alianza del MRTA y MIR-VR quedó seriamente resquebrajada. Muchos militantes del MIR-VR se desmoralizaron al ver que (c) Rolando manejaba todos los asuntos del movimiento según su propio criterio. Se empezó a criticar estas actitudes verticalistas confiando en que se actuara de otra manera para llevar al MRTA por el camino triunfal de la lucha armada. Para más información ver el capítulo sobre el MTA como actor del conflicto armado.

⁴⁰ Sobre los detalles que explican las razones de esta decisión consultar el capítulo sobre MRTA como actor del conflicto armado.

Así, el MRTA reunió a todo el ET del FNO, que sumaban unos 300 hombres, y al mando de (c) Antonio se fue en la búsqueda de (c) Ricardo. Durante la persecución, (c) Antonio divulga que (c) Ricardo había pactado con el Ejército para dividir las fuerzas militares del FNO y preparar las condiciones para que las fuerzas del orden los aniquilen.

El Ejército rescata a Ricardo de los ataques del MRTA y también mata a la mitad de los combatientes emerretistas que intervinieron en esa persecución⁴¹. Este hecho significó una merma importante de personal militar en el MRTA, así como el desvanecimiento del control político y militar en San Martín, única zona donde había logrado tener un asentamiento realmente significativo. Este hecho propició que el PCP-SL tenga una mayor presencia en la zona y se inicie una constante represión por parte del Ejército.

Entre otros factores que contribuyeron a la desarticulación del Frente Nororiental está el avance de SL hacia el norte de San Martín, la represión del Ejército Peruano, el repliegue de la fuerzas militares del MRTA a las zonas del Mayo Medio y Pongo de Caynarachi-Shanusi, la desarticulación de las organizaciones políticas, la corrupción y deserción de sus combatientes y la aplicación de la ley de arrepentimiento contribuyeron a la desarticulación del FNO.

2.10.7.1. El PCP-SL y su presencia en San Martín

La presencia del PCP-SL comenzó en 1989 con la constitución de comités populares en los caseríos y centros poblados de las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres. Pero es a partir de 1991 que el PCP-SL fortalece su trabajo en el extremo sur de San Martín y pretende desplazar al MRTA de sus zonas de influencia. el PCP-SL priorizó su ingreso al Huallaga Central, en particular a los valles del Ponaza, Tres Unidos y Miskiyacu. En algunos momentos, los desplazamientos senderistas lograron llegar hasta Juanjuí, Huicungo, Dos de Mayo y Campanilla e incluso tuvo actividad en Saposo, Bellavista, Picota y Tarapoto, zonas de predominante influencia del MRTA.

2.10.7.2. Desarticulación de la base política del Frente Nororiental

Para 1992, el frente de masas ya estaba inactivo. Lucas Cachay y Cecilia Oviedo habían sido amenazados de muerte tanto por el MRTA como por el Ejército y tuvieron que asilarse en la embajada de México. El Ejército persiguió a los dirigentes del FEDIP-SM quienes se refugiaron en diferentes países: Oscar Pinto en Bolivia, Julio Cachay y Manuel Arévalo en Brasil. Otros dirigentes como Segundo Centurión y Javier Tuanama fueron apresados.

⁴¹ Ricardo, logra irse a Lima y luego a Venezuela. En ese país estuvo asilado, aproximadamente, desde 1993 hasta 1994. En septiembre de 1994 regresa al Perú y se acoge a la ley de arrepentimiento por recomendación de un amigo empresario y abogado, Carlos Gonzáles.

Además, las diversas organizaciones políticas que apoyaban sutilmente al MRTA (UDP y FEDIP-SM) quedaron desarticuladas, con lo cual se quedó sin posibilidad de reclutar más combatientes manteniendo a sólo dos destacamentos militares del FNO: uno en la zona del valle del Mayo y otro en el Pongo de Caynarachi-Shanusi: «Lucas Cachay era el brazo político público y debía conseguir cuadros políticos para concienciar a la masa. Esta tarea era fundamental para consolidar los cimientos ideológicos del movimiento, lamentablemente no funcionó. Con su huida todo se perdió» (Antonio).

Diezmadas las dirigencias y atemorizadas las bases, las organizaciones sociales y el ET quedaron prácticamente liquidadas.

2.10.7.3. Corrupción y abusos de los milicianos

Entre 1990 y 1992, el MRTA perdió apoyo de la población local debido al abuso en los cobros de cupos con los que extorsionaban a los pocos empresarios que aún quedaban en la región y, en general, a las prácticas delincuenciales que muchos de sus milicianos, apuradamente reclutados, habían incurrido.

Entre esas prácticas delincuenciales se incluye la decisión de matar a toda persona que discrepaba con el MRTA.

Cabe mencionar que los milicianos urbanos y rurales habían sido los primeros en desertar del MRTA y arrepentirse ante el Ejército. Este hecho dejó sin capacidad de acción a los destacamentos militares del FNO para las tomas e incursiones a ciudades y centros poblados del departamento.

Asimismo, otro factor que generó la debacle del MRTA es su convivencia con el narcotráfico desde fines de 1990. Esta relación generó una descomposición al interior de la organización porque se acogía a personas que no necesariamente se comprometieron con los objetivos de la guerrilla:

2.10.7.4. La represión de Ejército Peruano

Desde que el Ejército se encargó de la lucha contrasubversiva, cometió abusos, detenciones arbitrarias, robos, sustracción de objetos y dinero a los pobladores de los caseríos y centros poblados de San Martín. Los Operativos Contrasubversivos efectuados por el Ejército con la finalidad de acabar con los emerretistas provocaron más inseguridad y miedo en la población por los constantes abusos que cometían y por involucrar innecesariamente a las personas. Así, entre 1987 y 1993 se han registrado 496 detenciones y 98 desaparecidos.⁴²

⁴² Rodríguez, 1996: 25.

A partir de agosto de 1992, el Frente Huallaga desarrolló una ofensiva militar sistemática contra el MRTA⁴³. Pese a ello, el MRTA había realizado acciones, entre los meses de abril y mayo, con ataques a Tarapoto, Picota, Tabalosos y San Miguel del Río Mayo, además de atacar los puestos policiales de San José de Sisa y Bellavista. Lo cierto es que más que éxitos estas acciones fueron reveses.

Estos reveses fueron resultado de la nueva estrategia militar adoptada por el Comando Político Militar del Frente Huallaga, al mando del general EP Eduardo Bellido Mora. Esta estrategia tenía como objetivo principal ganarse a la población con obras sociales benéficas considerando que la población civil no era el soporte de los grupos subversivos. Este tipo de acciones sirvieron para limpiar la mala imagen que tenía el accionar de las fuerzas armadas

Asimismo, el Ejército instauró rondas armadas de defensa civil en los distintos poblados del departamento de San Martín para neutralizar el accionar del MRTA. Progresivamente, logró controlar a todas las rondas autónomas creadas con anterioridad a su iniciativa.

Finalmente, el Ejército terminó con el campamento más importante que tenía el MRTA ubicado en la localidad de Pampa Hermosa, distrito de Yanayacu, provincia de Lamas, departamento de San Martín⁴⁴. En este operativo se empleó helicópteros artillados y tropas de asalto terrestres que requisaron armamento militar, pertrechos, radios, etc. Además se encontraron pozos de maceración de coca.

Todas estas acciones dejaron sin base de apoyo al MRTA, los circunscribió a espacios cerrados y, posteriormente, los empujó a la capitulación, arrepentimiento y/o rendición.

2.10.7.5. El papel de la OPASM, la Comisión de Pacificación de la Región San Martín y los efectos de la ley de arrepentimiento

Ante la violencia descarnada que se había desatado en todo el departamento de San Martín, la Iglesia Católica decidió abrir la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM), con sede en Tarapoto⁴⁵

La OPASM tuvo dos áreas prioritarias de atención: el área de asesoría legal, para el seguimiento de los casos de las víctimas de la violencia, y el área de formación cuyo objetivo fue desarrollar programas que promovieran la creatividad y generen respuestas alternativas de pacificación, así como asistir en el campo psico-afectivo a las víctimas de la violencia política.

⁴³ La labor contrasubversiva del Frente Huallaga en San Martín estuvo bajo la responsabilidad de los generales Jaime Ríos Araico y Eduardo Bellido Mora. Este último es considerado como el verdadero artífice de la pacificación en la región por la forma como actuó frente a los emerretistas y por respetar y garantizar la vida de los arrepentidos (Para mayor información ver entrevista a Lincoln Rojas).

⁴⁴ Ver: IDL N° 45. Diciembre 1992.

⁴⁵ La OPASM fue creada el 30 de agosto de 1988 tras el acuerdo de tres instituciones: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y la Prelatura de Moyobamba.

La OPASM creó espacios para que la población pueda identificar aquellos factores que habían provocado toda la vorágine de la violencia y que permitieran establecer posibles alternativas para resolverla⁴⁶. También debía estar atenta a las repuestas de la población (rondas campesinas, llamados al arrepentimiento) para potenciarlas y generar una corriente de opinión en la población rural (desde las comunidades cristianas de base) y urbana (desde las diversas entidades públicas y privadas) en favor de la pacificación regional.

Con la promoción y el afianzamiento de la pacificación promovida por la OPASM, se logró constituir instituciones importantes como las rondas campesinas en San Martín⁴⁷

En 1990, con el apoyo de la OPASM, la ronda de Shapaja se instauró legalmente. A partir de esta experiencia se fueron creando otras rondas en el valle de Misquiyacu (Tres Unidos y Pilluana), Juan Guerra, San Antonio de Cumbaza, Buenos Aires y Chazuta. Gracias a las rondas, los emerretistas fueron repelidos de estos lugares.

En 1990 el MRTA, al mando de Ricardo, ingresó a un poblado con una columna armada y demandó solicitudes que el pueblo no quiso cumplir. En ese momento, cerca de 1,500 personas con machetes en mano y un grupo de mujeres llevando la bandera del Perú, rodearon a los subversivos. Quedaban sólo dos caminos al MRTA, hacer una masacre o retirarse sin que les signifique una derrota. Optaron por realizar una asamblea. Ricardo pidió disculpas por el asesinato del profesor Julio Sánchez asumiendo que fue un error, reconocieron la formación de las rondas y se retiraron. (Rodríguez, 1996: 109)

En 1991, se realizó el I Encuentro Regional de Rondas Campesinas en Shapaja donde por decisión unánime se eligió a la OPASM como asesora de las rondas. En 1992, la OPASM y las rondas campesinas realizaron los siguientes encuentros: I Encuentro de Rondas del Bajo Huallaga (en Chazuta) y el I Encuentro de Rondas del Alto Mayo (en Buenos Aires). En 1993 se realizó el II Encuentro Regional de Rondas Campesinas (en San Antonio de Cumbaza).

Uno de los grandes logros de las rondas campesinas fue tomar la decisión de decir NO a la violencia y, por iniciativa propia, defender su seguridad ante el abandono del Estado. Luego de esta experiencia, el Ejército les dio armas a las rondas campesinas y las constituyó en rondas de defensa civil.

El 20 de abril de 1991 se creó la Comisión de Pacificación de la Región de San Martín, impulsada por la Iglesia Católica. Fue dirigida por el profesor Lincoln Rojas Salazar, Secretario Ejecutivo de la OPASM. Su comité directivo estaba integrado por las siguientes entidades: Universidad Nacional de San Martín, Coordinadora de los Partidos Políticos, Asociación de Abogados, FEDIP-Departamental, Productores Agrícolas, Cámara de Comercio, Colegio de Periodistas, Colegio de Ingenieros, Asociación de Alcaldes, Colegio de Contadores y la APEMIPE.

⁴⁶ Entre las actividades desarrolladas por la OPASM estuvieron: encuentros de jóvenes cristianos, marchas por la Paz, Encuentro de Niños por la Paz, Forum Regionales por la Paz, Encuentros de Rondas Campesinas, talleres de Educación en DD.HH., etc.

⁴⁷ El asesinato del profesor Julio Sánchez en Shapaja en 1988 por elementos del MRTA propició la creación de la primera ronda campesina en el departamento de San Martín.

Lo importante de esta Comisión de Pacificación fue dejar constancia de que las instituciones públicas y privadas del departamento de San Martín deseaban la paz. Sin embargo, no tuvo acciones relevantes.

Una acción importante realizada por la OPASM para acelerar la erradicación de la violencia política en San Martín fue el acompañamiento a familiares de mandos y militantes del MRTA para que se acogieran a la ley de arrepentimiento⁴⁸. Este eficaz trabajo aceleró la descomposición del MRTA.

A fines de 1992, los subversivos empezaron a acogerse a la ley de arrepentimiento ya sea con las fuerzas armadas o con la OPASM. Según Lincoln Rojas, los arrepentidos fueron bien tratados y durante todo el tiempo que estuvieron en el campamento militar recibieron atención médica, alimentación y posada⁴⁹.

Para hacer un trabajo integral con las personas que se acogían a la ley de arrepentimiento, la OPASM, en coordinación con la Prelatura de Moyobamba, dispuso que cada parroquia del departamento reciba a las personas que se acogían a la ley⁵⁰. Así, muchos subversivos acudieron a las parroquias de Juanjui, Bellavista, Saposoa, Picota, Moyobamba, Lamas y Tarapoto.

En mayo de 1993, la OPASM en coordinación con la familia de (c) Antonio, inician una campaña de sensibilización que consistía en el *llamado* de la madre a su hijo emerretista para que se acoja a la ley de arrepentimiento⁵¹. La OPASM coordinó con las fuerzas armadas para que decrete una tregua a fin de facilitar la entrega. Coordinó con los medios de comunicación radial y televisiva de departamento y con el fuero judicial para prepararse ante posibles resultados.⁵²

El *llamado* se difundió a través de los medios de comunicaciones locales, nacionales e internacionales. Se utilizó el siguiente cliché: Si Antonio se entrega quedará demostrado que hay casos en que el llamado de una madre puede ser mas fuerte que las balas del fusil (Rodríguez, 1996: 123). Esta misma estrategia fue empleada para convencer a los comandantes JJ. y Moico⁵³.

⁴⁸ El gobierno de Alberto Fujimori promulgó la ley 25499, el 12 de mayo de 1992. En ella se manifestaba que los miembros de SL y el MRTA que otorgaran información de importancia para las FF.AA., no sufrirían la pena máxima de ser enjuiciados por traición a la Patria.

⁴⁹ Ver entrevista a Lincoln Rojas

⁵⁰ El cambio de actitud que tuvo el Ejército con la población fue importante para que los emerretistas se arrepintieran. Las diversas acciones cívicas que realizaba el Ejército fue restándole espacio y apoyo al MRTA. Derrotados militar y políticamente, los emerretistas tuvieron que arrepentirse. Al respecto Antonio dice: «El ejército empezó a dar comida, vestido, medicinas, construían colegios, postas médicas, etc. Así empezó a ganarse a la población. Estas acciones hicieron que se rompan los esquemas del MRTA porque el Ejército ya no se podía presentar como el corrupto ni el abusivo».

⁵¹ Se ha considerado el caso de (c) Antonio porque fue el último Comandante General del FNO. Si se conseguía que Antonio se arrepintiera era factible que los emerretistas activos se acogieran en masa a la ley del arrepentimiento.

⁵² El llamado tuvo los siguientes puntos:

- Exponer el dolor que vivían los padres y familiares por la vida que lleva su hijo.
- Recordar el cuidado que recibía cuando era niño para que sea un hombre de bien.
- La espera constante de los familiares a su retorno y el sufrimiento que esto causaba.
- Deseo profundo de que lo necesitaban vivo.
- La petición de que se acoja a la ley de arrepentimiento: «Haz caso a tu madre hijo».
- Canción entonada por la madre (canción que recordaba la infancia) (Rodríguez, 1996: 122).

⁵³ Pese al cuidado que tenía la OPASM para el trabajo con los arrepentidos, se corrían cierto riesgos que pudieron costar la vida o la libertad a los emerretistas que se querían acoger a la ley de arrepentimiento. Entre estos riesgos se pueden

La estrategia resultó y con los tres mandos principales entregados la desertión de las huestes emerretistas fue inminente y rápida. Los arrepentidos proporcionaron al Frente Huallaga mayor información para la captura de armamentos y la localización de las bases emerretistas. También se empezó una campaña masiva (mencionando la entrega de los principales mandos) para que los remanentes del MRTA en la zona pudieran arrepentirse.

Según la información proporcionada por Lincoln Rojas, el Frente Huallaga no cambió de identidad a nadie pero dio beneficios económicos sólo a los mandos que se entregaron. Tampoco se preocupó por anular las requisitorias que pendían sobre los ex-cabecillas del MRTA.

En septiembre de 1992, la Dirección Nacional del MRTA ordenó que Lucero Cumpa regrese de Alemania para que asuma la Comandancia General del FNO⁵⁴. Tras su retorno, ella y (c) Antonio, mando militar del Frente, deambularon con tres pelotones de 25 hombres cada uno.

A los pocos días que Lucero Cumpa asumió el mando, el Ejército capturó a la jefe de logística y comunicaciones del FNO, Dany Cumapa Fasabi (a) Flaca. Ella había comenzado a darle información al Ejército sobre los puntos de referencias de las bases emerretistas y las frecuencias de comunicación de los destacamentos militares todavía activos en la zona. De esta manera, el EJÉRCITO al capturar a la jefe de comunicaciones y con la ayuda de los arrepentidos desbarató todos los intentos del MRTA por reestructurarse:

Al ser capturada Lucero Cumpa, en mayo de 1993, Antonio quedó como mando único del FNO y se refugió en el Pongo de Caynarachi porque el Ejército lo estaba hostigando mucho. Mientras, los destacamentos militares que aún actuaban en diversas zonas fueron incomunicados y avisados que no aceptarían ningún tipo de ayuda de (a) Flaca:

Con el arrepentimiento de Antonio, el FNO terminó por desarticularse. Sólo quedaron dos frentes a nivel nacional: el Frente Centro (Pichinaqui, Oxapampa y Junín) y el Frente Norte (Jaén, Bagua y Cajamarca) que también de a pocos se fueron extinguiendo.

Anexo 1: Glosario de términos

APRA:	Alianza Popular Revolucionaria Americana
ET:	Ejército Tupacamarista
FASMA:	Federación Agraria Selva Maestra
FEDIP-SM:	Frente de Defensa por los Intereses del Pueblo de San Martín
FRAS:	Frente Revolucionario Antiimperialista y por el Socialismo
FNO:	Frente Nororiental
MIR:	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR-EM:	Movimiento de Izquierda Revolucionaria – El Militante
MIR-VR:	Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Voz Rebelde

mencionar la intromisión de algún militar (en busca de ascensos) o civil (por la recompensa de S/. 50,000 Nuevos Soles que el Frente Huallaga ofrecía por cualquier dato que permitiese la captura de los subversivos), la infidencia de los datos recibidos y la filtración a los medios de comunicación, la desesperación de la familia por la espera y la no respuesta, etc. (Rodríguez, 1996: 124).

⁵⁴ Evaristo había asumido el mando general del MRTA tras la captura de Rolando el 14 de junio de 1992.

MRTA:	Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
OPASM:	Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba
PSR:	Partido Socialista Revolucionario
PSR-ml:	Partido Socialista Revolucionario – marxista leninista
PST:	Partido Socialista de los Trabajadores
PUM:	Partido Unificado Mariateguista
SINAMOS:	Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social
PCP-SL:	Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso
SUTE-SM:	Sindicato Único de Trabajadores Educativos de San Martín
UDP:	Unidad Democrática Popular

2.11. LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO EN LAS PROVINCIAS DE PADRE ABAD Y CORONEL PORTILLO

El presente informe tiene como finalidad analizar el impacto y reconstruir la historia del conflicto armado interno y el narcotráfico entre la población urbana, rural campesina e indígena (Cashibo y Shipibo Conibo) de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo en el departamento de Ucayali entre fines de los años 80 y mediados de los años 90.

Ambas provincias se vieron afectadas por la violencia debido a la presencia de PCP-SL y el MRTA, así como al desplazamiento del narcotráfico del valle del Huallaga hacia Ucayali, producto de acciones de control y erradicación de los cultivos ilegales de coca ejecutados por el Estado peruano en la zona del Huallaga a fines de la década del 80.

Con las firmas de narcotraficantes asentadas en Ucayali no sólo se legitimó el negocio de la droga sino que trajo consigo a PCP-SL que, en ese momento, ya tenía una estrecha relación con los narcotraficantes. Los recursos obtenidos por el narcotráfico solventaban la lucha popular pero, a la vez, evidenciaba que a los mandos senderistas más les interesaba el manejo de los recursos económicos que el desarrollo político e ideológico de los objetivos del partido en sus zonas organizadas. Cabe resaltar que estos actos ocurrieron en pleno desarrollo nacional del «equilibrio estratégico» planificado por PCP-SL para tomar el poder.

La principal zona de control de PCP-SL estuvo en la provincia de Padre Abad pero mantenía otras importantes zonas en el río Ucayali, principalmente en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo. A comparación de PCP-SL, el MRTA tuvo una presencia básicamente política mediante el copamiento de las organizaciones de Frentes de Defensa distritales y provinciales y de diversas organizaciones de base. Su presencia militar fue mínima y no tuvo zonas de control importantes. Ante

la creciente presencia subversiva, las diversas estrategias contrasubversivas de las fuerzas armadas, representadas por la Marina de Guerra y el Ejército, también contribuyeron a agudizar la violencia en Ucayali.

2.11.1. Antecedentes

En el territorio que comprende el actual departamento de Ucayali se hacen presentes dos tipos de poblaciones diferenciadas por su procedencia y por sus formas de asentamiento social, cultural, político y económico. Los pobladores más antiguos de esta región son los pueblos indígenas de la

familia etnolingüística Pano¹, principalmente Cashibo-Cacataibo y Shipibo-Conibo, cuyos lugares de asentamiento están a lo largo de las riberas de los ríos principales del departamento: Ucayali, Aguaytía y San Alejandro.

El otro tipo de población asentada en Ucayali son los miles de colonos andinos que abandonaron sus comunidades de origen acosados por la falta de tierras, la pobreza y una acentuada mercantilización de sus economías, que se asentaron en zonas aledañas a la Carretera Federico Basadre (CFB) y en las riberas del río Ucayali buscando tierras y mejores oportunidades para sus familias. Esta colonización fue incentivada por el Estado, quien a través de diversas acciones directas fomentó la ocupación e integración de la región como zona prioritariamente dedicada a la producción agropecuaria.

Este proceso de asentamiento de la población colona, sin embargo, ha terminado por desalojar a los nativos de las terrazas altas, que son las que ofrecen mayores ventajas para los asentamientos y cultivos, obligándolos a vivir en terrenos inundables o en restingas que tienen poca productividad².

Entre los años 1980 y 1990 la superficie de la hoja de coca se extendió hacia áreas dedicadas a diversos cultivos agrícolas y a zonas poco exploradas de Ucayali. Ante este crecimiento de la producción de coca, el Estado intentó, durante toda la década de los 80, varias acciones para reprimir su producción o alentar los programas de sustitución de cultivos. Ambas acciones sólo aumentaron la imagen negativa que ya tenían los productores cocaleros sobre el Estado, quienes ya habían adquirido una preponderancia social en Ucayali³.

2.11.2. Ingreso de grupos subversivos en la zona

Una de las políticas más importantes del gobierno aprista (1985-1990) fue el apoyo a los agricultores a través de créditos con tasas de interés cero y la compra de su producción. Con la explosión de la hiperinflación en 1989, sin embargo, las empresas del Estado ENCI y ECASA no pudieron cumplir con pagar los productos de los campesinos lo que llevó a la Confederación de Campesinos del Perú (CCP) a promover paros regionales de campesinos en todo el país.

En Ucayali, los campesinos, agrupados en la Federación de Campesinos del Departamento de Ucayali (FECADU) y los nativos Shipibo-Conibo mantuvieron la huelga por tres semanas hasta

¹ En el extremo sur del departamento de Ucayali también se encuentran los siguientes grupos étnicos: Yaminahua, Piro, Amahuaca y población en aislamiento voluntario. También se encuentran comunidades nativas Asháninka.

² Las restingas son terrazas medias formadas por depósitos aluviales durante las crecientes extraordinarias del Ucayali. Además, se presentan como fajas agostas y pequeñas en forma paralela al cauce de los ríos. Su fertilidad es pasajera.

³ El Estado sigue poniendo énfasis en la erradicación manual y compulsiva a través del Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH) que ha originado diversos conflictos sociales con las asociaciones de cocaleros del departamento de Ucayali y que hasta el día de hoy no son resueltas mediante un diálogo donde se planteen propuestas viables para la sustitución del cultivo de coca.

que se llegó a un acuerdo con las autoridades regionales⁴. Para celebrar este acuerdo, la CCP organizó una gran marcha de campesinos y nativos en la ciudad de Pucallpa, el 9 de febrero de 1989⁵. Ante la prohibición de la prefectura de Pucallpa de autorizar la marcha, la DOES (Dirección de Operaciones Especiales) de la Policía Nacional reprimió este evento, matando a ocho campesinos. También se detuvo a una cantidad no determinada de campesino que luego desaparecieron.

Es a partir de este hecho que PCP-SL y el MRTA empezaron a incrementar sus acciones armadas en la región. Ante estos problemas el Estado promulgó un régimen de excepción para las diferentes zonas de la Selva y el 1 de junio de 1989 se declaró a Ucayali como zona de emergencia instalando un Comando Político-Militar dirigido por la Marina.

2.11.2.1. La presencia del MIR-EM⁶ en Ucayali

Agrupaciones políticas como Patria Roja, PST⁷, PC-U⁸, Vanguardia Revolucionaria, Bandera Roja, así como también el APRA, PPC y AP⁹ se disputaban el copamiento de las organizaciones políticas y sindicales de la región en la década de los años 70. Fue el MIR-EM, sin embargo, que logró captar la mayor cantidad de adeptos y controlar los sindicatos donde la mayoría de personas eran simpatizantes de Patria Roja¹⁰.

El MIR-EM logró controlar el SUTECOP¹¹ y en 1975 se posesionó del Frente Unido de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pucallpa (FUDIPP) consolidando su presencia como una importante fuerza política. La base social y política captada le permitió tener militantes en los diferentes caseríos de la provincia de Coronel Portillo y captar nuevos cuadros a través de escuelas políticas donde se enseñaba la realidad nacional y los postulados de la izquierda peruana.

Una vez copada la dirección del SUTECOP, se puso énfasis en la captación de militantes, en su mayoría profesores, quienes tenían la misión de realizar un doble trabajo: por un lado, cumplir con sus labores de docentes en las escuelas de sus respectivas ciudades, distritos, pueblos jóvenes o caseríos y, por otro, realizar reuniones de captación de militantes entre profesores y población interesada.

⁴ Los nativos participaron porque también se veían afectados y buscaban la titulación de sus territorios. Quizá este último aspecto haya sido el principal elemento para agitar a los Shipibo-Conibo. Los nativos fueron representados por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU).

⁵ Las cifras varían entre 3000 y 5000 campesinos provenientes de todo el departamento de Ucayali.

⁶ MIR-EM: Movimiento de Izquierda Revolucionaria-El Militante

⁷ PST: Partido Socialista Troskista

⁸ PC-U: Partido Comunista Unidad

⁹ Partido Aprista, Partido Popular Cristiano, Acción Popular

¹⁰ Ver entrevista a Waldemar (cassette N° 102 - 103).

¹¹ SUTECOP: Sindicato Único de Trabajadores Educativos de Coronel Portillo. En ese momento el departamento de Ucayali no existía, por ello se hace referencia a la provincia de Coronel Portillo que pertenecía al departamento de Loreto.

Esta estrategia le permitió al MIR-EM enviar a todas las personas recién captadas a cumplir la tarea de formar células de estudio en sus respectivos lugares de trabajo que atraigan nuevos militantes. Así, se formaron células en los pueblos de San Alejandro, Aguaytía, Masisea e Iparia.

El 19 de julio de 1977, se creó el Comité de Defensa y Lucha de Coronel Portillo (CODEL-COP) donde confluyeron todas las fuerzas sindicales, campesinas, e incluso nativas. También en esa época se incluyó al Comité de Trabajadores Revolucionarios del Perú (CTRP). La dirección del CODEL-COP estuvo a cargo del MIR-EM que ya tenía consolidado su trabajo político.

Sin embargo, para el Comité Central del MIR-EM, Ucayali no estaba en los planes de inicio de la lucha armada debido a su alejada ubicación con respecto a Lima, considerada el «centro del poder». La cúpula del MIR-EM nacional ya tenía un plan de insurrección que debía empezar a cristalizarse hacia fines de los años 70 e inicios de los 80. En este sentido, el Comité Central recomendó consolidar el trabajo político realizado y esperar el momento de tomar el poder. El compromiso que se asumió fue apoyar las sedes del MIR-EM más desarrolladas en el país a través de escuelas políticas teniendo como invitados a Víctor Polay, Peter Cárdenas, Antonio Meza Bravo, Elio Portocarrero, Hugo Avellaneda, entre otros:

Con una presencia importante del MIR-EM en la vida política de la provincia de Coronel Portillo, entre 1977 y 1978, se formó un Comité Organizador para constituir el Frente de Defensa de la provincia de Coronel Portillo, cuyos integrantes fueron básicamente militantes del MIR-EM. Si bien la creación del Frente de Defensa respondía básicamente a las luchas de reivindicación popular y campesina de la población de Coronel Portillo, el objetivo del MIR-EM era constituir un Frente Político de Masas que le sirviera como catapulta a su proyecto político.

En 1978 se constituye el Frente de Defensa. En la elección para presidente del Frente, el MIR-EM logró posicionar a Manuel Vásquez y a cinco miristas más en la Dirección¹². A las pocas semanas se realizó el Primer Pucallpazo¹³, organizado desde las bases por la gente del MIR-EM.

Sin embargo, en 1980, el MIR-EM perdió la Dirección del Frente de Defensa y ganó el ingeniero Castro Vera, del Colegio de Ingenieros. En ese momento se realizó el Segundo Pucallpazo¹⁴, donde también el MIR-EM tuvo participación preponderante a nivel de las organizaciones de base.

¹² Según EM y NB, el MIR-EM tenía en cada sindicato a sus delegados. Todo estaba preparado para que Manuel Vásquez sea el Presidente del Frente de Defensa. Pero la pugna verdadera para controlar el Frente fue con el APRA, el PPC y Bandera Roja. Este último, con Renán Ochoa a la cabeza, tenía una posición anti-MIR-EM.

¹³ Se llamó «Pucallpazo» a todas las movilizaciones que reclamaban mejoras de las condiciones de vida de la población de Coronel Portillo. Con el primer Pucallpazo se logró la pavimentación de algunas calles, se inició la construcción del Hospital del IPSS, la creación del Comité de Desarrollo de Coronel Portillo (CODECOP), que es la antesala para la creación del departamento, la construcción del terminal fluvial y la ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en Pucallpa.

¹⁴ Con el Segundo «Pucallpazo» se logró la creación definitiva del departamento de Ucayali.

En 1981, el MIR-EM logró nuevamente tomar la dirección del Frente de Defensa, lo que permitió preparar el camino de la insurrección popular desde las propias bases sociales de los agricultores.

2.11.2.2. El Trabajo del MIR-EM en Pucallpa (1982-1986)

Tras controlar el Frente de Defensa, el MIR-EM consolidó su trabajo de captación política con la formación de células de estudiantes en los Pueblos Jóvenes de la ciudad de Pucallpa. Así, creó los llamados Comités de Coordinación y Lucha Barrial (CCOLUB). Los estudiantes captados eran básicamente jóvenes de bajos recursos económicos de colegios secundarios y del Instituto Pedagógico. Los estudiantes de los institutos, colegios y de la universidad conformaron la *Juventud Rebelde* del MIR-EM la cual difundía el proyecto político del partido a través de reuniones, de la radio y de volantes. Estos estudiantes realizaban permanentemente los Consejos de Estudiantes del Movimiento del Estudiante Rebelde (MER) para compartir ideas sobre la forma de realizar la lucha popular:

Consolidado el trabajo de captación política en los estudiantes, el MIR-EM inició, en 1984, su trabajo de formación de células de obreros en los sindicatos de choferes, trabajadores municipales y bancarios. Esta acción se realizó para contrarrestar las fuerzas de los otros grupos de izquierda e ir cimentando su proyecto político.

A nivel de las provincias y distritos de Ucayali, el MIR-EM ya contaba con células de militantes conformadas, en su mayoría, por profesores. Estos militantes lograron captar a los agricultores de los caseríos cercanos y formaron diversos Comités de Defensa de Reivindicación Campesina tomando como principal reivindicación mejores precios para la producción agrícola:

2.11.2.3. Consolidación del MIR-EM en Pucallpa y la presencia del MRTA

En 1984, el MIR-EM de Ucayali empezó a prepararse para la guerra pero se desalentó por la preferencia del Comité Central del MRTA (MIR-EM y PSR-ml) de abrir un Frente Guerrillero en el Cuzco y no en Ucayali. Un hecho clave para entender el posterior desenvolvimiento del MIR-EM en Ucayali es la alianza con el proyecto armado del MIR-VR en San Martín. En 1984, el MIR-VR, con Alberto Gálvez Olaechea a la cabeza, llega a Pucallpa con sus Comandos Revolucionarios del Pueblo y apoyan algunas incursiones en algunos poblados y cobro de cupos para la «revolución». Ese mismo año, la gente más preparada del MIR-EM inició su preparación militar para la lucha armada. Es así que algunos de sus miembros fueron al Batallón América y otros a Nicaragua.

El 9 de diciembre de 1986, el MIR-VR y el MRTA se fusionaron formalmente y conformaron una Dirección Nacional compuesto por tres dirigentes de cada una de las organizaciones¹⁵. El MIR-EM de Ucayali se integró a ellos.

2.11.2.4. Auge y caída del MRTA en Ucayali

En 1987 los cuadros del MRTA de los diferentes departamentos del Perú fueron destacados al departamento de San Martín para formar parte del Frente Nororiental, el primer Frente Guerrillero del MRTA. Esta experiencia debía servir como modelo a los cuadros de otros departamentos para que formen sus respectivos Frentes Guerrilleros:

Luego de la primera campaña militar del MRTA en San Martín, los cuadros del MRTA reclutados regresaron, entre febrero y marzo de 1988, a sus tierras para formar sus Frentes Guerrilleros. Los lugares elegidos fueron el Centro, el Sur y el Oriente.

Con la experiencia militar en San Martín, a Osler Panduro sólo le faltaba convencer a los miembros del MIR-EM de Ucayali que la vía armada era la única alternativa para tomar el poder y que «debía ser por creación heroica». Aprovechar el trabajo político y de captación realizado por el MIR-EM en años anteriores le permitió al MRTA asentarse con mayor facilidad en las zonas urbanas pero no tanto en el campo.

Así, como primer Comandante General del MRTA en Ucayali¹⁶, Osler Panduro inició el trabajo de preparación del Frente Oriental (FO) con la formación de una Dirección Regional (DR) y el Ejército Tupacamarista (ET) del FO¹⁷. Ambas instancias supervisadas por la Dirección Nacional del MRTA.

A pesar de que la DR del FO llegó a funcionar, no tuvo relevancia política ni militar, debido a los hechos ocurridos el 9 de febrero de 1989¹⁸ que significaron la desarticulación de los movimientos campesinos, populares y políticos en Ucayali. Es así que la DR en Ucayali pasó a la clandestinidad porque el Ejército comenzó a perseguir a todos los dirigentes políticos y sindicales de la región. Su trabajo continuó hasta 1991 y se detuvo por las constantes amenazas que recibían sus integrantes de parte de la Marina de Guerra¹⁹:

¹⁵ Por el MRTA estuvieron Víctor Polay Campos, Néstor Cerpa Cartolini y Miguel Rincón Rincón y por el MIR-VR estuvieron Alberto Gálvez Olaechea, Cecilia Oviedo y Rodolfo Kleim. Además, se creó una Dirección Central (DC), con diez miembros de cada organización.

¹⁶ Los Comandantes Generales del FO fueron los siguientes:

Comandante Mario (Osler Panduro)	(1988-1989)
Comandante Enrique	(1989-1990)
Comandante Manuel	(1990-1991)
Comandante Lucho.	(1991-1993)

¹⁷ La organización y estructura del FO y el ET fueron similares a la de San Martín. Véase el informe realizado por la CVR: *Sobre Guerrilleros, Claudicadores y Arrepentidos: el FNO del MRTA en el departamento de San Martín* (2002).

¹⁸ El 9 de febrero se realizó en Pucallpa una de las mayores movilizaciones campesinas y nativas con la finalidad de exigirle al gobierno mejoras para la agricultura. Lamentablemente esta acción fue reprimida violentamente por las fuerzas policiales resultando 8 muertos y una cantidad considerable de heridos.

¹⁹ A partir de 1991, la Marina de Guerra asumió totalmente la jefatura del Comando Político-Militar de Ucayali.

El ET del FO intentó constituir destacamentos militares en las zonas rurales de Tahuantinsuyo (San Alejandro), Contamana, Callería, Nueva Requena, Iparia y Masisea pero fracasó por la presencia activa y violenta de PCP-SL por controlar las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo debido al incremento del negocio de la droga, la precariedad y mala preparación militar de sus cuadros y porque no ofrecía a la población alternativas contrarias a las de PCP-SL, quien prácticamente se convirtió en abanderado de la defensa de los cultivos de coca.

A pesar de esto, entre 1988 y 1990, el ET del FO logró tener zonas de paso y estancias obligatorias en Nueva Requena y Shambo, comunidad nativa Shipibo-Conibo, lo cual les permitió tener un acceso directo entre el río Ucayali y el río Aguaytía, y en Puerto Inca y Tournavista, departamento de Huánuco, que les permitió el acceso directo de Pucallpa a Cerro de Pasco y viceversa.

El mayor logro del MRTA en Ucayali fue el trabajo con las milicias urbanas ubicadas específicamente en los pueblos jóvenes de la ciudad de Pucallpa. Su éxito radicó en el trabajo previo realizado por los cuadros estudiantiles del MIR-EM. Las milicias urbanas realizaban las pintas y embanderamientos de los colegios o centros comerciales que eran objetos de cobros de cupos o bonos de guerra:

El ET realizó algunas incursiones en las comunidades Shipibo-Conibo ubicadas en las quebradas del Caco y Sheshea, distrito de Iparia, y en el distrito de Tahuanía. A partir de 1988 recorrió diversas comunidades como Colonia del Caco, Curiaca, Santa Rosa de Sheshea y Nueva Alianza de Sheshea.²⁰ En estas incursiones llegaban a las comunidades y pedían a los nativos que se organicen. Pero los resultados le fueron adversos²¹. Este contingente militar emerretista fue finalmente aniquilado en la Boca del Pachitea por la Marina de Guerra. A partir de ahí, la presencia militar del MRTA en Ucayali se volvió mínima²² (véase el mapa).

La muerte del Comandante Mario en septiembre de 1989, por una peritonitis, generó en el FO una gran crisis organizacional que devino en su lenta desaparición. Este deceso coincidió con el repentino cambio del MRTA de privilegiar la vía militar antes que la política. Esta decisión trajo como consecuencia muchos problemas internos entre el MRTA y el MIR-VR y el MIR-EM de

²⁰ Algunas versiones señalan que las compañías del MRTA venían desde Puerto Inca (Pichis-Palcazú), ingresaban a Ucayali por el distrito de Tahuanía y de ahí bajaba por el río Ucayali hacia la Boca del Pachitea. En algunos casos llegaban hasta el río Tamaya aunque se desconoce cual fue su accionar militar y si tuvo enfrentamientos con PCP-SL quien ya tenía presencia en la zona por su alianza con el narcotráfico.

²¹ Ante el fracaso de convencer a los nativos de unirse a su lucha armada, el MRTA aplicó una estrategia de captación muy particular: formó una empresa maderera y anunció que buscaba nativos Shipibo para que trabajen en la extracción de la madera en el Tamaya, Abujao y Calleria. Varios jóvenes Shipibo acudieron al llamado pero en vez de llevarlos a trabajar la madera, los llevaron a los campamentos subversivos donde los entrenaron militarmente. Lamentablemente muchos de estos jóvenes han muerto en la emboscada que les hace la Marina en la Boca del Pachitea.

²² No hay una fecha exacta de esta acción, aunque pudo haberse dado en 1990. Meses antes, el MRTA sufrió un duro revés frente a PCP-SL que destruyó su destacamento militar ubicado en Tahuantinsuyo (San Alejandro). Tras esta derrota, el MRTA prácticamente desaparece de la provincia de Padre Abad.

Ucayali. Sin embargo, el MRTA impuso a sus cuadros que habían fugado del penal con Polay e impulsó la línea militarista en desmedro del trabajo político realizado por el MIR²³:

Así, el control que el MRTA pretendió ejercer sobre la población tuvo como eje campañas de moralización que implicaron en algún momento asesinatos diarios de prostitutas, homosexuales, drogadictos y hasta cónyuges infieles, crímenes bajo el rótulo de «cruzada contra el vicio».

Entre 1990 y 1993, la desconexión del ET del FO con la DR y el escaso apoyo logístico desde la ciudad causaron el abandono de los contingentes militares. Esta situación obligó a los emerretistas a cobrar cupos y bonos de guerra de manera compulsiva²⁴. Las acciones militares del MRTA se acabaron en 1993.

El MRTA, aunque lo intentó, no consiguió tener un vínculo estrecho con el narcotráfico debido a que PCP-SL ya había logrado el control de Aguaytía, lugar donde se ubicaban los narcotraficantes. Cuando el negocio de la droga se trasladó al río Ucayali, PCP-SL también llegó y desalojó al MRTA de esa zona quedándose con todos los beneficios que traía el comercio de droga.

2.11.3. La inserción de Sendero Luminoso en el Departamento de Ucayali

La presencia de PCP-SL en el departamento de Ucayali, específicamente en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, fue tardía debido a que prefirió fortalecer su presencia y afianzar su dominio en el Alto Huallaga. En un primer momento, Ucayali fue considerado básicamente como una zona de descanso y escondite para las huestes senderistas. PCP-SL incrementó su interés de penetrar en Ucayali debido a que el narcotráfico, cuyas firmas más importantes venían del Alto Huallaga, ya se había asentado en algunas zonas del departamento y constituía una actividad productiva que proporcionaba los recursos necesarios para seguir ejecutando los intereses del partido. La presencia de PCP-SL se hace efectiva en dos etapas: entre 1984-1987 y 1988-1992.

Durante la primera etapa (1984-1987), PCP-SL se estableció de manera clandestina en la provincia de Padre Abad. Comenzó a infiltrar militantes senderistas, especialmente profesores, en organizaciones de base para empezar a ganar adeptos y así expandir los objetivos de su lucha armada. Al igual que en la región andina, los militantes senderistas tenían la labor de realizar acciones proselitistas entre los profesores que se encontraban en las zonas rurales y marginales de la región²⁵.

²³ Esta situación se consolidó en el III Comité Central de Unidad, de septiembre de 1990, donde los cuadros del MRTA, encabezados por Víctor Polay, asumen la conducción del movimiento a nivel nacional e imponen una práctica militar que más adelante los llevaría al fracaso.

²⁴ «El MRTA copaba la ciudad, no se olviden que aquí mataron a un maderero, cobraban cupos y aquí más de un comerciante ó industrial pagó fuertes cupos. A mi me hicieron llegar cupos, como estaba al frente de esta institución (IIADU). Por supuesto que nunca lo pagué y eso era su peor indignación» (MV. Pucallpa. Coronel Portillo).

²⁵ La base social de Sendero Luminoso en Ucayali se basó en el profesorado (por su importancia estratégica para cimentar el accionar político e ideológico del partido y por la larga experiencia desarrollada en Ayacucho), en el campesinado cocaleros (para ganarlos más fácilmente, PCP-SL les asignó tierras en los *Comités Populares Abiertos* y en los *Comités Organizados* para que siembren coca y algunos productos de panllevar), en los productores y comercializadores de la PBC (su relación fue más económica que política) y, el último sector de interés de, en los

Estos militantes aprovechaban su condición de «profesores» para exacerbar los ánimos de los agricultores cocaleros de la provincia de Padre Abad y animarlos a iniciar una lucha irrestricta por la defensa del cultivo de la hoja de coca, que ya era su principal actividad económica. El cumplimiento de esta tarea permitió consolidar bases de apoyo logístico y de descanso del EGP del Comité Regional del Alto Huallaga (CRAH): la Fuerza Principal (FP)²⁶ y la Fuerza Local (FL)²⁷, quienes en la segunda etapa incursionan en la zona.

Este trabajo político previo se consolidó durante la segunda etapa (1988-1992) cuando PCP-SL asumió como consigna la *defensa de la coca*. La táctica utilizada por PCP-SL, en un primer momento, fue atacar a toda institución o personas involucradas en los programas de erradicación del cultivo de la hoja de coca y a los que pretendían «engañar» a los campesinos con la aplicación de los programas de sustitución de cultivos.

En un segundo momento, PCP-SL empezó sus acciones armadas realizando incursiones contra el puesto policial en Aguaytía y convocando constantemente a paros generales, obstaculizando y controlando varios tramos del trayecto entre Pucallpa y Tingo María.

El objetivo de PCP-SL de conformar una alianza con los agricultores cocaleros para controlar la venta y compra de la hoja de coca y de la pasta básica de cocaína se había concretado. Una vez fortalecida esta relación, los senderistas realizaron acciones armadas abiertas y usaron las ciudades como cajas de resonancia de sus actividades en defensa de la coca contra la erradicación impulsada por el Estado. Al mismo tiempo, comenzaron a instaurar su orden social a través de ajusticiamientos extrajudiciales para castigar los abusos cometidos contra los campesinos.

Es importante señalar que los campesinos encontraron con la presencia de PCP-SL el *orden* que no habían tenido cuando el Estado, a través de la policía o de las autoridades civiles, y luego el narcotráfico, controlaban la zona. PCP-SL impuso normas éticas y morales que sirvieron para regular el accionar cotidiano de la población y que debía cumplirse obligatoriamente²⁸. A partir de este momento, el comportamiento y los movimientos cotidianos de las personas eran controlados y juzgados por el Partido.

2.11.3.1. La imposición de la organización de PCP-SL en los caseríos de la Provincia de Padre Abad

Entre 1988 y 1989, PCP-SL inició sus incursiones en los caseríos involucrados en la defensa del cultivo de la hoja de coca. Para ello, movilizó a la FP del EGP, asentada en el Alto Huallaga, y

escolares de primaria y secundaria, pues consideraba que la lucha armada iba a ser prolongada y era imprescindible ir formando nuevos cuadros.

²⁶ Grupo militar de elite conformado por personas fuertemente armadas encargado de organizar a la población a nivel del CRAH.

²⁷ Grupo armado encargado de recorrer el campo para fortalecer la organización de la población a nivel de las áreas liberadas por el Partido.

²⁸ Véase sobre la Ley senderista (Gonzáles, 1990: 214).

tomó por asalto diversos caseríos. En cada caserío donde incursionó reunía a toda la población (hombres, mujeres y niños), y declaraba que la zona había sido organizada y liberada del *caduco sistema burgués*, procediéndose a desaparecer, si existieran, oficinas públicas, ONG's, agencias municipales y la ejecución, previo *juicio popular*, de las autoridades locales (teniente gobernador y agente municipal) sindicados como representantes del Estado *burgués semicolonial*.

Este es el inicio de una serie de asesinatos que incluyeron a dirigentes campesinos opuestos a la violencia, madres de organizaciones de base, técnicos y profesionales de proyectos de desarrollo. Luego de demostrar su fuerza y rectitud de principios, instaló el *Comité Organizado*²⁹. Para conformar este Comité si bien se obligaba a cualquier persona para que asumiera los cargos de la nueva estructura política (delegados, mando político, mando militar y mando logístico), en algunos casos se eligió a personas que mostraban simpatía por PCP-SL. Estos *Comités Organizados* se implantaron en los caseríos asentados a lo largo de la CFB.

Los senderistas también formaron *Comités Populares Abiertos* en los caseríos de Boquerón y Huipoca (ubicados en la CFB) y en Nuevo San Martín y Bellavista³⁰ (ubicados en el río Aguaytía). Estos Comités eran controlados por las siguientes autoridades³¹: un Comisario Secretario, el Comisario de Seguridad, el Comisario de las Organizaciones Populares, el Comisario de Asambleas Comunales y el Comisario de Producción.

Los *Comités Populares Abiertos* de Padre Abad eran los responsables de impartir las órdenes en la administración de los caseríos transformados en *Comité Organizado*. Es decir, imponían las reglas morales del orden social senderista³².

Es importante aclarar que PCP-SL no constituyó un Comité Regional Ucayali sino que anexó Ucayali al CRAH. Esta decisión trajo como consecuencia que PCP-SL no formará ni EGP, ni FP ni FL en Ucayali. Estos contingentes militares siempre venían del Alto Huallaga.

Pese a la forma coactiva que PCP-SL impuso esta estructura política y administrativa en Padre Abad, en la práctica la organización fue endeble y de ejercicio tan informal que actualmente la población sólo recuerda bien la organización que PCP-SL impuso sobre el negocio de la droga.

²⁹ Los *Comités Organizados* eran la primera forma de organizar a la población. Acá se preparaba a las personas para seguir escalando en las etapas que el pueblo organizado debía seguir: Comité Organizado, Comité Reorganizado, Comité Popular, Comité Popular Abierto, Comité de Lucha. Esta última nunca se dio porque PCP-SL fue derrotado por las fuerzas armadas

³⁰ A comparación de los caseríos asentados en la CFB, por cuya ubicación podían ser blancos de ataque muy fáciles por parte de las Fuerzas Armadas, los caseríos de Nuevo San Martín y Bellavista fueron claves para montar todo el aparato político y desarrollar las acciones militares del partido. Ambos caseríos estaban geográficamente aislados respecto a las ciudades y otros caseríos de la región. Es desde estos caseríos que PCP-SL planificaba y dominaba todas sus acciones, incursiones y comités de Ucayali. Por ello, PCP-SL implementó su «Nuevo Estado» en ambos caseríos con la anuencia de las poblaciones.

³¹ Es necesario resaltar que en muchos lugares el término Comisario fue reemplazado por el de delegado, sub-delegado, delegado de Producción, etc.

³² Entre ellas estaba: la vigilancia del trabajo y la producción de coca, control de la ingesta de bebidas alcohólicas, potestad para unir a parejas en matrimonio, castigar a los adúlteros, prostitutas, homosexuales, ladrones, etc. Asimismo, establecían escuelas populares e iniciaban el adoctrinamiento político de la masa y captaban de manera voluntaria o involuntaria a nuevos militantes, especialmente hombres y mujeres jóvenes, para engrosar las filas del EGP donde los preparaban para la lucha armada y, finalmente, conseguía los medios económicos y militares para el buen desempeño del partido.

Sin embargo, sí hace referencia al reclutamiento de personas aptas para servir al partido y enfrentamientos directos con las fuerzas armadas, tareas realizadas directamente por la FP del Alto Huallaga.

Entre 1988 y 1990, PCP-SL ya había logrado captar a casi todos los pequeños campesinos que creyeron estar frente a una especie de fuerza salvadora de sus cocaleros y que los defendía de los abusos que cometían los actores más fuertes, hasta ese momento, en la zona: narcotraficantes y el Estado.

Es importante señalar que PCP-SL también impuso, al igual que en otras ciudades de la Selva como Aucayacu, Tocache o Uchiza, un contingente político-militar llamado «la Urbana». Este contingente tenía una misión de inteligencia y de realizar algunas acciones de propaganda específica en la ciudad de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad.

2.11.3.2. El Ingreso de Sendero Luminoso a la Provincia de Coronel Portillo

Una vez asentados y con el control del negocio de la droga en Padre Abad, PCP-SL continuó su expansión política y militar hacia la provincia de Coronel Portillo ingresando al río Ucayali, principalmente a los distritos de Masisea e Iparia, a mediados del año 1989. La fuerza militar que incursionó en esta zona fue la FP del Alto Huallaga³³.

El ingreso de la FP a esta zona fue más difícil que a Padre Abad debido a que prácticamente la única vía de acceso a los centros poblados era el río Ucayali y sus afluentes. Para la FP implicaba mucho riesgo viajar durante varias horas por el río para formar sus *Comités* pues podrían ser víctimas de los ataques de la Marina que realizaba sus operativos contrasubversivos mayormente en helicópteros. Por esta limitación geográfica optaron por realizar incursiones esporádicas en los principales centros urbanos de la provincia y decidieron concentrar su accionar en tres zonas: la quebrada del río Abujao, distrito de Callería; en el lago Imiria, ubicado en el río Tamaya, distrito de Masisea; y en la quebrada de Pomayacu, ubicado en el río Amaquiria, distrito de Iparia (ver mapa). Es importante señalar que en estas zonas ya existían los cultivos de coca y el negocio de la droga se incrementó de forma intensiva. Además su inaccesibilidad les servía como una forma de defensa frente a posibles ataques masivos por parte de las fuerzas armadas

PCP-SL realizó una de sus primeras incursiones en el centro poblado de Iparia a mediados de 1989. Incendió locales públicos y nombró coercitivamente como delegados y mandos a algunos pobladores. Organizó a la población y les exigió que abriesen chacras para sembrar coca y que las cosechas serían repartidas en 50% para el partido y 50% para los agricultores. Pero la gente no aceptó y se retiraron. A los pocos días regresaron para supervisar el trabajo de los mandos y

³³ La compañía de la FP del Alto Huallaga primero se dirigió hasta Atalaya y desde ahí bajaba por el río Ucayali hacia el río Tamaya, donde instaló una importante zona de control. Esta compañía incursionó en centros urbanos importantes, como Iparia y Masisea, y organizaron las comunidades nativas de Santa Rosa de Dinamarca y Vista Alegre de Pachitea, ubicados en el Medio Ucayali.

encontraron su organización muy desarticulada, además la Marina y el Ejército empezaron a hacer sus operativos persiguiendo no solo a PCP-SL sino también al MRTA:

Otra acción importante se realizó el 3 de noviembre de 1989. En esa oportunidad, PCP-SL incursionó en la ciudad de Masisea con 70 hombres y mujeres armados. Quemaron el Municipio y el Centro Médico y apresaron a algunas autoridades municipales y miembros de la Microregión para someterlos a juicio popular.

Un hecho fortuito confundió a los subversivos y permitió el escape de los prisioneros y la mayoría de la gente reunida. PCP-SL no pudo nombrar a ninguna autoridad porque la mayoría de pobladores huyó hacia Pucallpa o a sus chacras e inmediatamente dieron aviso a las fuerzas armadas. Tras esta fracasada incursión se dirigieron hacia el caserío de Charasmaná, en la boca del río Tamaya. Así como en Iparia, esta fue la única vez que PCP-SL incursionó militarmente en Masisea.

Pese a estos vanos intentos, si tuvo éxito en formar *Comités Organizados* y *Comités Populares Abiertos* en los caseríos ubicados en el río Tamaya y en las riberas de los ríos Suaya, Butsaya y Noaya. Este proceso se dio entre fines de 1989 e inicios de 1990.

La organización de PCP-SL en el Ucayali fue la siguiente: El *Comité Popular Abierto* más importante de PCP-SL estuvo en el caserío de Nuevo Horizonte. Alrededor estaban los *Comités Organizados* de Noaya, Butsaya, Suaya y Vinuncuro. En el Imiria había otros *Comités Organizados* en los caseríos de 23 de Diciembre, más conocido como Rivera, y Panuco. Asimismo en el Abujao, tenían *Comités Populares Abiertos* en los caseríos de Santa Luz de Abujao, 28 de julio y 24 de setiembre, y *Comités Organizados* en el río Utiquiría. En todos estos lugares prácticamente no existía ninguna institución representativa del Estado peruano. (Ver mapa).

Los *Comités Organizados* de Panuco y Vinuncuro eran importantes porque se encargaban de controlar el ingreso hacia el Imiria y a las zonas donde se producía la droga. Ahí, PCP-SL había dejado compañías de la FP que controlaban la comercialización de la droga y supervisaban el desarrollo de los comités organizados de toda esa área.

En cada caserío nombraron mandos y delegados de forma obligatoria e implantaron un férreo control en el movimiento tanto de personas como de embarcaciones.

Asimismo, pedían cupos a los comerciantes y a los pocos madereros que quedaron. Mientras, los agricultores de todos los caseríos organizados debían de cosechar 2 hectáreas: una de coca para el partido y otra para lo que quiera sembrar el agricultor. Esta fue una medida obligatoria inclusive para quienes llegaban por primera vez de la Sierra o del Alto Huallaga para trabajar en la coca.

Podemos inferir que los ataques de PCP-SL a las principales localidades del río Ucayali no tenían la contundencia como las realizadas en Padre Abad. Esto se debe a tres razones importantes: primero, la evidente limitación geográfica para un tránsito seguro a lo largo del río Ucayali; segundo, la mayoría de poblaciones existentes en las riberas del Ucayali y afluentes son

comunidades nativas Shipibo-Conibo y, que al igual que los caseríos de los distritos de Masisea e Iparia, no se dedicaban exclusivamente al cultivo de la coca. Por último, los constantes ataques de parte de la Marina y, luego, del CAD de Puerto Alegre.

2.11.3.3. El fracaso del PCP-SL al intentar organizar las comunidades nativas de Padre Abad y Coronel Portillo

La estrategia de ingreso a las comunidades nativas Cashibo-Cacataibo de Padre Abad fue similar a la que realizó con las comunidades Shipibo-Conibo asentadas en el río Ucayali. Solo ingresaban una vez para intentar persuadir a los nativos a que formen comités y se unan a la lucha armada, pero la respuesta siempre era negativa:

Cuando llegaron a Mariscal nos pidieron formar comité como lo hicieron al frente en Bellavista, pero nosotros no quisimos porque queríamos vivir en paz, ser libres como nuestros antepasados. No queríamos eso de obligarnos a sembrar coca o a querer llevarse a nuestros jóvenes (Don Goyo. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

A Junín Pablo llegan para formar comités pero nuestras autoridades no aceptaron. Al parecer los senderos no entendían que nosotros éramos diferentes a ellos (Eloy. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Junin Pablo. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

Cuando nos dijeron para organizar (en Caimito), nosotros les dijimos que para qué si ya teníamos nuestra propia organización, teníamos nuestro jefe, nuestras autoridades, quizás les podíamos ayudar con alimentos pero eso de política no (Ancón. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Caimito. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

La FP del Alto Huallaga ya había organizado con éxito comités en todos los caseríos de colonos de Padre Abad. Para no ser sorprendidos por las fuerzas armadas cuando querían comunicar la zona de Bellavista con el caserío de Boquerón, los mandos de PCP-SL evitaban navegar por el río Aguaytía por lo que pensaron en una ruta más corta y segura: la quebrada del Shambo. Sin embargo, ello implicaba atravesar las tierras comunales de los Cashibo Cacataibo.

La primera incursión a Mariscal Cáceres, comunidad Cashibo, se dio en junio de 1989. Cuando entran a la comunidad, desde Bellavista, sólo encuentran a hombres adultos ya que por precaución habían escondido a mujeres y niños en el monte. Los reunieron en la escuela y les dijeron que la comunidad se organice y sigan sus leyes. Los nativos se negaron y los senderistas se retiraron.

Previamente a la visita de PCP-SL a Mariscal Cáceres, el clan dominante de los Bolívar y «Caretas», el mando político de Bellavista, hicieron un pacto de no agresión a los nativos. El acuerdo incluyó la entrega de 10 hectáreas de tierras comunales en Iñeca a los colonos de Bellavista por 5 años. «Caretas» puso en conocimiento de este pacto a otras zonas donde había controles senderistas, Nuevo San Martín y Progreso, para que no agredieran a los nativos.

El rechazo de los nativos hacia PCP-SL se basó en que ellos no sembraban coca y no querían que se lleven a sus jóvenes. Además, los Cashibo sabían la forma sanguinaria como PCP-SL imponía sus leyes en los caseríos colonos y aniquilaba autoridades acusándolas de «soplones». La exacerbada violencia y el énfasis en el cultivo de coca en sus territorios eran totalmente ajenos a las costumbres ancestrales de los Cashibo. Al no poder imponer la organización senderista todas las comunidades Cashibo del río Aguaytía fueron denominadas como «zonas blancas».

Aún cuando los nativos se mantuvieron fuera del ámbito de influencia de PCP-SL, hubo varios casos de jóvenes Cashibo que trabajaron como peones en las zonas cocaleras de Bellavista, Colorado y Shambo. Con ese trabajo obtenían buenos ingresos y podían usarlo para comprar cosas a sus familias, así como para la diversión. Además algunas familias nativas, apremiadas por la crisis económica, se dedicaron a sembrar coca, en no más de 1 hectárea, pero fuera de los territorios comunales.

Los jóvenes nativos abandonaron este trabajo cuando el Ejército y la Marina comenzaron a ejercer mayor represión en las zonas controladas por PCP-SL y aumentó la violencia producto del narcotráfico. Si bien el dinero del narcotráfico fue aprovechado por los mandos para atraer a los jóvenes Cashibo, lo que los asustó fue la inflexible aplicación de las leyes senderistas:

Si te veían conversando mucho con una chica te obligaban a casarte con ella o si a alguna señora casada la veían con un hombre ahí no más la ajusticiaban y la mataban. Peor si te acusaban de soplón, así le han dado vuelta a varios (Soldadito. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Es decir, los jóvenes nativos trabajaron en el cultivo de la coca cuando estaba bajo el control de los mestizos. Pero cuando PCP-SL llegó, a partir de 1988, e impuso sus condiciones, la mayoría decidió dejar la actividad. Además, sus familias ya los persuadían para que dejen esos lugares organizados porque se volvían cada vez más peligrosos.

Podemos afirmar que las razones por la que PCP-SL no ingresó a las comunidades Cashibo Cacataibos son de índole económica y cultural. De un lado, los nativos no sembraban coca, aunque sí conocían la actividad a través de la experiencia de los jóvenes. Su principal actividad era el cultivo de plátano, yuca y maíz. De otro lado y lo más importante, PCP-SL ignoró la dinámica de la simbología de la cultura nativa. Esto se expresó en el desconocimiento del idioma y en un temor implícito frente a una legendaria imagen que los Cashibo habían sido antropófagos y muy buenos guerreros.

Nosotros no necesitamos sembrar coca porque es una cosa mala, las cosas buenas son para comer y vender. Sembrar coca es ganarte problemas y vivir como esclavos y no libremente como siempre lo hemos hecho (Raúl. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Algo similar pasó con las comunidades nativas Shipibo-Conibo del río Ucayali. PCP-SL incursionó, principalmente, en las comunidades ubicadas en la quebrada del Caco y en el lago Imiria.

En la quebrada del Caco incursionó varias veces en la comunidad de Amaquiria. La razón era sencilla: Amaquiria era una especie de salida de la quebrada de Pomayacu, zona altamente cocalera, hacia el río Ucayali. La primera vez PCP-SL llegó desde la comunidad Asháninka de Selva pidiendo organizar el pueblo pero las autoridades afirmaron que no entendían su política. La segunda vez llegaron poco antes de las elecciones de 1990. Venían desde Tahuanía, donde quemaron el local municipal y de ahí se dirigieron hacia Iparia. La tercera vez llegaron con varios guías Asháninka y Shipibo, pidieron alimentos y se fueron hacia la boca del Pachitea, donde fueron emboscados por la Marina³⁴.

Hacia fines de 1989, PCP-SL llegó a las comunidades Shipibo-Conibo asentadas en el lago Imiria. Primero lo hacen a Junín Pablo, en el mes de noviembre, provenientes de Panuco. El objetivo senderista era organizarlos y les preguntaron cómo se comportaban sus autoridades y les explicaron las leyes que querían imponer: no a la poligamia, no al robo y no a los homosexuales. Los nativos se negaron y pidieron que los respetaran:

No tenían que imponernos sus leyes porque nosotros sabemos cómo comportarnos. Tenemos una sola mujer y no robamos. Acá los que tienen malas costumbres y roban son los mestizos (Valeriano. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Junín Pablo. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

Otra acción que generó el rechazo de los nativos fue que PCP-SL les pidió que sus jóvenes se incorporen a la «guerrilla». Al negarse rotundamente, los senderistas se fueron de la comunidad hacia Vinuncuro. A partir de ese momento ya no ingresaron a la comunidad sólo pasaban con sus botes.

Una importante comunidad nativa donde incursionaron fue Caimito. En este lugar también pidieron a los dirigentes que se unan a la lucha armada y que se dediquen a los cultivos de coca, como lo hacían en los caseríos aledaños. Nuevamente la respuesta de la población fue negativa. Posteriormente, en 1991, los nativos decidieron unirse al CAD del caserío de Puerto Alegre, como una sub-base para combatir a la subversión (Ver mapa).

Al igual que los Cashibo- Cacataibo, los Shipibo-Conibo tampoco sembraban coca pero sí estaban incorporados en la actividad del narcotráfico a través de la venta de su mano de obra:

Los Shipibo nunca hemos sembrado coca pero hemos tenido que trabajar como peones para los narcos por una necesidad. Ganábamos 20 soles diarios por kilo de hoja recolectada. La droga procesada por los mestizos se sacaba hacia Pucallpa (Valeriano. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Junín Pablo. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

³⁴ Los nativos afirman que al llegar a la boca del Pachitea, quisieron asaltar una embarcación de una compañía maderera pero que en realidad llevaba a personal de la Marina que estaban camuflados. Matan a todos los subversivos, entre los que se encontraban los guías nativos y Renán Ochoa, uno de los principales líderes senderistas en Ucayali.

Además estaban los choques culturales: no podían comunicarse en el idioma nativo y no conocían la cultura Shipibo. A partir de estas experiencias PCP-SL no consideró ni a los Cashibo ni a los Shipibo como una base social. Sin embargo, sí recibieron el apoyo de los Asháninka asentados en las comunidades de Selva y Pijuayal, distrito de Iparia. Esto se debe a que los Asháninka les servían de guías y eran la masa trabajadora de extensas zonas cocaleras.

2.11.3.4. El PCP-SL y su alianza con el Narcotráfico

Entre 1988 y 1990, las fuerzas armadas y las Fuerzas Policiales realizaron operativos antidrogas y contrasubversivos en Tocache, San Martín, obligando a las firmas de narcotraficantes asentadas ahí a instalarse en otras zonas del país. Así, el grupo de Demetrio Chávez Peñaherrera, «Vaticano», se instaló en Campanilla, San Martín, mientras que otros como los hermanos Cachique Rivera y Cristal se fueron hacia el Ucayali, principalmente a la provincia de Padre Abad y Coronel Portillo.

Este reacomodo geográfico de las firmas de narcotraficantes locales tuvo un efecto determinante en la distribución de las fuerzas políticas y militares de PCP-SL. El objetivo principal de PCP-SL ya no era instaurar el «Nuevo Estado» sino fue asegurar el control del narcotráfico para asegurar la manutención de la lucha armada a nivel nacional. Sin embargo, la estrecha colaboración que PCP-SL y el narcotráfico habían establecido en el Alto Huallaga ya había corrompido a varios de sus militantes, al grado de hurtar dinero por la venta de la droga para usos particulares.

Durante este período, PCP-SL y las firmas de narcotraficantes aprovecharon favorablemente la imagen adversa del gobierno por la aplicación de políticas de erradicación compulsiva de los cultivos de coca en Padre Abad. Así, PCP-SL volvió a imponerse, como sucedió en el Alto Huallaga, y estableció un *estado de convivencia* con los productores de hoja de coca y con los narcotraficantes³⁵.

Esto propició que PCP-SL asuma el control sobre el negocio de la coca, lo que causó malestar entre los narcotraficantes que querían mantener su dominio en la zona. Aunque no se registraron enfrentamientos entre ambas fuerzas, al final todas las firmas locales se resignaron al control senderista. PCP-SL empieza de esta manera a ser mediador entre las firmas de narcotraficantes y los agricultores e imponer nuevas reglas de juego en las relaciones de explotación impuestas por los narcotraficantes anteriormente.

Los caseríos de Boquerón y Huipoca fueron organizados en *Comités Populares Abiertos* para controlar el negocio de la droga. Igualmente se establecieron aeropuertos clandestinos debido a que en estos lugares la CFB presentaba tramos propicios para el aterrizaje y/o despegue de avionetas cargadas de droga³⁶.

³⁵ Ver capítulo correspondiente en este mismo tomo.

³⁶ Para mayor información ver la entrevistas a «Anita» (casette N° 40).

PCP-SL se había dado cuenta del auge del narcotráfico en la zona y empezó a definir la estrategia para tener un mayor control sobre la población y el negocio. El problema ya no era imponer orden en el negocio de la coca, ahora era construir una base social para fortalecer las acciones del partido en la zona. PCP-SL impuso un dilema a la población: estaban con el partido o dejaban todas sus propiedades. Mucha gente aceptó las condiciones de PCP-SL, otras retornaron a sus territorios de origen. Sus nuevos *compañeros* mantenían su interés en los cicales y no necesariamente en la causa política que el maoísmo ortodoxo les ofrecía.

Con el control del negocio y la captación de nuevos militantes, PCP-SL empezó a cobrar cupos a los narcotraficantes por los cargamentos de hoja de coca seca y por la pasta básica bruta, asimismo impusieron balanzas populares de medición que permitió tener el peso exacto de la producción comprada y calcular el cupo que le tocaba el partido. Los cupos se imponían a quienes compraban la coca³⁷.

Además del cupo que pedía a los compradores de pasta básica o hoja de coca, PCP-SL empezó a recaudar más dinero a través del cobro de *cupos o colaboraciones* a los mismos agricultores cocaleros, transgrediendo la relación, hasta ese momento cordial, entre ambos actores sociales. A quienes se oponían pagar los cupos se les aplicaba el *corte económico*, actividad que significaba dejar de trabajar en sus chacras y ponerse al servicio de las tierras y de los cicales del partido.

PCP-SL aprovechó la huida de las personas que no querían someterse a sus órdenes y confiscó las tierras abandonadas para su propio beneficio, haciendo trabajar a los agricultores cocaleros en esos cultivos de exclusividad del partido.

Durante casi dos años PCP-SL tuvo el control casi absoluto de la zona subordinando a sus intereses a los agricultores cocaleros, a los narcotraficantes y burlando todos los operativos contrasubversivos de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. En todo ese tiempo PCP-SL logró recaudar gran cantidad de dinero del narcotráfico para, supuestamente, mantener toda la lucha armada del país e instaurar su enclave económico y político en Ucayali.

A pesar de todo el dominio y poder adquirido en la zona, en 1991 debido al paulatino cambio de la estrategia contrasubversiva de parte de la Marina, PCP-SL empezó a retirarse hacía algunas zonas del río Ucayali y pierde el control de los caseríos de la CFB, aunque no deja de realizar incursiones para recordarles a los pobladores «el poder oculto pero activo del partido»³⁸. Además, muchos mandos senderistas se dedicaron exclusivamente al negocio de la droga y dejaron de lado el trabajo político y militar del partido. Su táctica era cobrar los cupos y no rendir cuentas de lo recabado. Muchos de ellos mueren por problemas directos con los narcotraficantes.

³⁷ PCP-SL cobraba cupos a los narcotraficantes ya sea en dinero o en ropa, víveres y armas.

³⁸ Este cambio de estrategia implicó que la Marina deje de realizar sangrientos operativos en los caseríos con presencia subversiva y, por el contrario, realice un trabajo más de inteligencia para capturar a los mandos y delegados de la CFB y del Aguaytía. Asimismo, usó a los nativos como guías para atacar los comités senderistas más inexpugnables.

En este contexto, y a partir de 1991, la Marina asume el Comando Político Militar de Ucayali e incentiva la formación de CAD's en los caseríos de la región. Junto con los operativos antidrogas realizados en el Huallaga, la propia dinámica expansionista del narcotráfico obligó a las firmas nacionales a buscar nuevas zonas de producción y comercialización de la droga. Una de ellas fue la provincia de Coronel Portillo.

En la provincia de Coronel Portillo, a comienzos de la década del 80, el procesamiento de la droga se realizaba de forma camuflada. Pero a partir de 1985 la droga se comenzó a producir y comercializar abiertamente en el río Tamaya, el lago Imiría y el río Abujao. Para fines de los 80, varias firmas venidas del Alto Huallaga se habían instalado en el Imiría y en las quebradas de los ríos Suaya, Noaya y Butsayá (ver mapa). Entre ellas se encontraban Cachique Rivera, Cristal, Gustavo, el colombiano Lucio y, en menor medida, Vaticano.

Una consecuencia del auge del narcotráfico fue la formación de varios caseríos producto de las migraciones desde el Huallaga, Ayacucho y Apurímac. Este hecho cambió drásticamente la estructura demográfica y poblacional del Imiría. El caso más famoso fue el caserío de 23 de Diciembre, el cual se convirtió en el centro de producción de droga más importante del río Ucayali. En «homenaje» a este logro se le colocó el nombre de Rivera porque el narcotraficante que tenía la mayor influencia en toda la zona era Cachique Rivera³⁹.

Este auge del narcotráfico incentivó a que PCP-SL realice incursiones a lo largo del río Ucayali, principalmente en el río Tamaya. En este lugar formó varios *Comités Populares Abiertos* y *Comités Organizados* que protegían a las firmas de los ataques de las fuerzas armadas y de la resistencia del CAD de Puerto Alegre.⁴⁰ En algunos casos estos *Comités* también eran centros de producción de droga y se caracterizaban por su inaccesibilidad geográfica. Este fue el caso de Butsayá, Noaya y Nuevo Horizonte.

El auge de la coca dolarizó de un momento a otro la economía de la región, que hasta hace unos años era una de las más pobres de la región amazónica. Este auge benefició en parte la producción de productos agrícolas tradicionales⁴¹.

La relación del narcotráfico con los nativos se hizo más evidente en el caso de los Shipibo. Si bien no tienen dentro de sus pautas culturales ni en su simbología el sembrío de coca, sí aprovecharon muy bien el auge económico producto del narcotráfico. Uno de los casos más significativos fue el de la comunidad Shipibo de Amaquirá. Esta comunidad tenía una ubicación estratégica por estar ubicada muy cerca al río Ucayali y permitía a los narcotraficantes, asentados en las comunidades Asháninka de Selva y Pijayal, tener una salida para comercializar la droga y comprar diversos productos.

39 A partir de ese momento, y hasta el día de hoy la gente lo conoce como Rivera y no como 23 de diciembre que es su nombre oficial.

40 Una de esos Comités fue el caserío de Panuco porque estaba muy cerca a Puerto Alegre. Fue como una «zona de aguarante» a las acciones armadas de las rondas.

41 Por ejemplo, los agricultores de plátano llegaron a vender un racimo de 10 unidades a 8 o 10 soles. Asimismo, una gallina llegaba a costar 40 soles.

En Amaquiria, existía desde 1975 una pequeña pista de aterrizaje para vuelos de ayuda social que, tras el boom del narcotráfico, la comunidad alquiló a las firmas. Los nativos inmediatamente formaron diversos negocios como restaurantes, tiendas de abarrotes y bares que eran visitados constantemente por los coccaleros. Al enterarse la Marina de estos vuelos clandestinos, amenazó con bombardear la pista de aterrizaje, lo cual no hizo, sin embargo, sí bombardeó las comunidades Asháninka de Pijuayal y Selva.

El incremento de las acciones represivas de la Marina y la política antidrogas impulsada por el gobierno generaron que, a partir de 1993, los cárteles de la droga disminuyan su influencia en el Tamaya y el Imiria. Es importante resaltar que para esta época la presencia militar y política de PCP-SL era mínima debido a sus constantes derrotas militares a manos de la Marina, que bombardeó varios *Comités Organizados y Comités Populares Abiertos*, y la férrea resistencia que hizo el CAD de Puerto Alegre.

2.11.4. Lucha contrasubversiva en el Ucayali

El gobierno declaró a Ucayali en «estado de emergencia» el 01 de junio de 1989 y creó un Comando Político-Militar a cargo de la Marina de Guerra. Por la gran extensión del departamento, la Marina y el Ejército se repartieron el terreno: el Ejército cubrió la zona comprendida entre el caserío Divisoria hasta el km. 86 (Von Humboldt), de la provincia de Padre Abad, mientras la Marina asumió la vigilancia de la ciudad de Pucallpa y de todos los caseríos asentados a la largo del río Ucayali y afluentes. En 1991, la Marina de Guerra asumió la conducción total del Comando Político-Militar.

2.11.4.1. El accionar contrasubversivo del Ejército

Ante la presencia de PCP-SL y del narcotráfico en la provincia de Padre Abad, el Ejército dispuso la creación en 1989 de una base militar en Aguaytía, donde se estableció el «Batallón Contrasubversivo 28» que vino desde la base «Los Laureles» en Tingo María. Esta base tenía la misión de combatir a las fuerzas senderistas que ya habían logrado instalarse en toda la zona. Sin embargo, su tarea no fue realizada a cabalidad por el desconocimiento del territorio y por la mala estrategia para prevenir ataques y emboscadas subversivas, que cobraron muchas vidas en las filas militares.

En su afán de erradicar a PCP-SL, el Ejército nunca tuvo la capacidad de diferenciar quien era agricultor y quien era senderista. Esto trajo como consecuencia que el Ejército muestre poco respeto por la población civil. Sus acciones contrasubversivas se basaron específicamente en *operativos militares* a lo largo de la CFB para sorprender a los narcotraficantes y a la organización senderista.

El Ejército tuvo dos tipos de estrategias para enfrentar a PCP-SL, según el lugar donde éste se asentaba. En la CFB sus operativos los hacían vía portatropas que muchas veces eran fácilmente emboscados por los senderistas. En el río Aguaytía, el Ejército aplicó la estrategia de «tierra arrasada», es decir, bombardeos indiscriminados con helicópteros artillados contra caseríos ubicados en las riberas del río, luego de los cuales enviaba patrullas militares terrestres para realizar repastos de cuerpos y destrucción de bienes. Estas acciones militares incluían asesinatos extrajudiciales. Los casos más ilustrativos de esta táctica militar fueron los caseríos de Nuevo San Martín y Bellavista, ambos *Comités Populares Abiertos* y zonas de producción de droga. Por su importancia y ubicación estratégica, PCP-SL siempre volvía a organizar Bellavista, motivo por el cual fue bombardeado por el Ejército hasta en 3 oportunidades.

Yo estaba sirviendo en el Ejército cuando una vez bombardearon Bellavista. Luego, entramos una patrulla y quemamos las casas que se salvaron del ataque. En una de esas casas habían 3 personas que no querían salir, así que los quemamos adentro nomás (Tercero. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Los más afectados eran los agricultores que no tenían hacia dónde ir. En cambio los mandos senderistas huían de los ataques y, luego de algún tiempo, regresaban a reorganizar el caserío. Fue tanta la violencia ejercida por PCP-SL y la represión por parte del Ejército que en los años posteriores a la violencia, la población de Bellavista se redujo prácticamente a menos de la mitad de lo que tenía en 1990.⁴²

En consecuencia, podemos afirmar que los operativos contrasubversivos no lograron resultados positivos debido a las siguientes razones:

- El Ejército desconocía qué tipo de población iba a encontrar en la zona ni a quién combatir. Además, la geografía impedía un fácil desplazamiento de sus destacamentos.
- PCP-SL brindó protección armada para cultivar la hoja de coca y consiguió ordenar el negocio de la droga. Por ello, la población los apoyó, más por intereses económicos que políticos
- La mimetización de PCP-SL y los narcotraficantes en la población civil.
- La absoluta desconfianza de la población debido a los excesos cometidos en las operaciones militares.

Los operativos del Ejército se desarrollaban en base a la información proporcionada por las personas que huían de las zonas controladas por PCP-SL o de personas sindicadas como senderistas

⁴² Actualmente tiene aproximadamente 25 familias y muchas de ellas son gente que ha llegado recientemente. De los pobladores que vivieron la violencia política sólo quedan tres familias.

que eran capturadas y torturadas para que den información. No se tiene conocimiento si el Ejército tuvo personal infiltrado en las filas senderistas.

Esta violenta e indiscriminada acción militar del Ejército sólo generó el aumento de las acciones violentas por parte del narcotráfico y PCP-SL, con lo cual el negocio de la coca siguió teniendo el espacio necesario para su mayor desarrollo. Pero a inicios de la década de los 90 las fuerzas armadas elaboran una nueva estrategia de lucha contrasubversiva, la cual fue aplicada en Ucayali por la Marina, ya que el Ejército retiró sus contingentes militares a Tingo María.

2.11.4.2. La presencia de la Marina en el Ucayali

Entre 1989 y 1990, la Marina aplicó una estrategia contrasubversiva basada en implantar el terror sobre las poblaciones asentadas en las riberas del río Ucayali y sus afluentes. Al igual que el Ejército en Padre Abad, sus operativos militares consistían en atacar poblados enteros sin saber exactamente si las huestes senderistas estaban presentes en la zona. Otras veces también utilizaron helicópteros artillados para bombardear distintos caseríos por considerarlos, a priori, como «zonas rojas».

Una terrible táctica para amedrentar a la población fueron los llamados «vuelos de la muerte». Estos consistían en llevar a sospechosos de subversivos a helicópteros que sobrevolaban algunas zonas y desde donde los arrojaban en costales o amarrados. De este modo los aguajales de Pucallpa se convirtieron en cementerios ambulantes de decenas de personas que fueron secuestradas o detenidas por las fuerzas de seguridad en operaciones de rastrillaje:

El hallazgo de fosas comunes, las denuncias de desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, según el Vicariato de Pucallpa, tenía como principal responsable a la Marina de Guerra⁴³.

Para 1991, el cambio de estrategia contrasubversiva mejoró la imagen de las fuerzas armadas en las zonas de emergencia de Ucayali. Esta nueva estrategia tenía como objetivo básico utilizar a las fuerzas armadas para recuperar la presencia del Estado en las zonas ocupadas por la subversión, ganarse a la población civil a través de acciones de apoyo y, principalmente, dejar sin base social ni espacio de maniobra a PCP-SL. Luego de esto recién se entregaría el control a las autoridades civiles.

Así, la Marina logró el control de todo el departamento de Ucayali y estableció diferentes bases contrasubversivas en caseríos y ciudades que las consideraba estratégicas. Algunas de estas bases estuvieron ubicadas a lo largo de la CFB, principalmente en la ciudad de Aguaytía y en los caseríos de Libertad, Huipoca y San Alejandro. Mientras que a lo largo del río Ucayali realizó constantes operativos contrasubversivos y fomentó la formación de CAD's (Comités de

⁴³ La represión militar a través de helicópteros artillados, tanto propios como los de la DEA, de todas maneras causó graves bajas a PCP-SL y lo obligó a desplazarse a otras zonas de la región.

Autodefensa) en Puerto Alegre y Caimito y algunas rondas de autodefensa en caseríos y comunidades nativas.

Este cambio de estrategia revirtió la imagen negativa que la población tenía sobre la forma de actuar de las fuerzas armadas. Las acciones militares en la CFB cambiaron: ya no había operativos militares sorpresivos ni se forzaba a la gente a asistir a reuniones para delatar a mandos senderistas sino más bien se puso énfasis en tratar mejor a la población civil y en un efectivo trabajo de inteligencia para detectar a los mandos senderistas. La muestra de respeto por la población civil hizo que la población de la CFB identificase a la Marina como un cuerpo respetuoso en comparación del Ejército:

Con la Marina fue otra cosa. Eran hombres altos y serios. Ellos han puesto paz en el pueblo (Aguaytía), con ellos volvió la calma y la confianza. Actuaban correctamente, no eran abusivos sólo agarraban a los mandos senderistas y los llevaban a la base. Así acabó el terror (Johana. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

El éxito de la misión implicó la ampliación de las facultades y garantías legales para el accionar de la Marina fortaleciendo su papel como actor político en el espacio regional, así como la búsqueda de apoyo de la población fundamentalmente a través de acciones cívicas se concretizó con la aceptación de organizar los CAD's.

A la organización de CAD's, y la realización de acciones cívicas se suman las y acciones militares basadas en los datos de inteligencia proporcionados por informantes claves y por subversivos arrepentidos que proporcionaban datos importantes para detectar campamentos y mandos subversivos.

En Padre Abad, uno de los lugares donde la Marina logró formar exitosamente un CAD fue en el caserío de Huipoca en 1992. Además, fue la primera vez que la Marina entregó armas a un comité de la zona porque gozaban de su entera confianza.

En Coronel Portillo, la formación de rondas de autodefensa y CAD's, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades nativas, tuvieron una limitada vigencia o en algunos casos ni se formaron, debido a las pocas incursiones militares hechas por PCP-SL, que había decidido fortalecer su dominio en el río Tamaya y el Abujao.

Una de las razones para que los CAD's no tuvieran éxito fue que la Marina se negaba a armar a la población y sólo los motivaban para que «se defiendan». En otros casos, la propia población desistió de formar las rondas de autodefensa por temor a represalias de PCP-SL que aún tenía presencia en la zona, lo cual los llevaba a «estar entre dos fuegos».

Sin embargo, en 1991 la población del caserío de Puerto Alegre decidió formar un CAD el cual tuvo un rol fundamental en la lucha contrasubversiva y en la derrota de PCP-SL en el lago Imiria y en algunas zonas del río Tamaya. Este CAD tuvo una sub-base en la comunidad nativa de Caimito. Una Ronda de Autodefensa impulsada por la Marina con relativo éxito, y que después se

transformó en CAD, tuvo lugar en la comunidad nativa de Colonia del Caco, la cual controlaba embarcaciones que transitaban por el Ucayali e inclusive combatió a los narcotraficantes.

Muchos de los CAD's fueron acusados de ser nuevos agentes de violencia al haber sido arrastrados por algunos sectores de la Marina a practicar actos de tortura, desapariciones, robos, detención y otros delitos directamente derivados de la delegación de facultades para mantener el orden interno y de operativos de rastillaje desarrollados en las «zonas rojas».

Una vez agarramos a 6 senderistas importantes cerca de Panuco. Entonces llamamos por radio a la Marina en Pucallpa y les informamos del hecho. Ellos nos dijeron que para qué los van a traer a Pucallpa, que por las puras íbamos a gastar gasolina y que mejor nos deshiciéramos de ellos. Así pues los llevamos a una explanada del río y les dimos vuelta (Pablito. Caserío de Puerto Alegre. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

La acción concertada entre los CAD's y la Marina logró frenar la expansión y la capacidad de movilidad de PCP-SL en Ucayali. El éxito de los CAD's radicó en que la población conocía mejor su territorio, dominaba los corredores de tránsito y tenía conocimiento de los lugares de descanso que utilizaba PCP-SL. Estos aspectos fueron importantes para acorralar y derrotar a los senderistas, principalmente en el río Tamaya y el Imiria.

Para el trabajo de inteligencia, la Marina utilizó a los nativos Shipibo-Conibo porque tenían un excelente conocimiento de la zona y de la gente asentada en los diferentes caseríos y comunidades nativas. Ellos hicieron un trabajo importante para detectar los comités senderistas y bases emerretistas asentadas a lo largo del río Ucayali y afluentes. Asimismo, muchos trabajaron como guías de la Marina para explorar áreas donde estaban ubicados los campamentos o comités de los subversivos:

Yo he servido a mi patria y lo volvería a hacer para derrotar a PCP-SL. Yo como Shipibo he ayudado a la patria y ahora estoy tranquilo porque cumplí con todos. Nuestras labores eran difíciles porque debíamos meternos como civiles y teníamos que ver como ellos mataban a la gente de la nada y nosotros callados nomás (Medardo. Pucallpa. Coronel Portillo).

Los Cashibo-Cacataibo también cumplieron una función importante al brindar su apoyo a la Marina como guías en las zonas inhóspitas del Aguaytía. Gracias a esta labor, se pudieron detectar los *Comités Populares Abiertos* y *Comités Organizados* establecidos a lo largo del río Aguaytía, así como los caminos utilizados por los subversivos para trasladarse desde el río Aguaytía a la CFB y a Pucallpa. Asimismo, informaron quienes eran los mandos y delegados más importantes, con lo cual la Marina incursionaba en esos lugares sólo para atraparlos. Este rol cumplido por los Cashibo-Cacataibo les ha traído muchos problemas hasta el día de hoy. Algunos cocaleros los acusan de soplones y estrechos colaboradores de las fuerzas armadas, motivo por el cual han sufrido amenazas y vejámenes.

Otra de las acciones de la Marina fue la implementación de programas de acciones cívicas que cumplieron un rol importante porque era la forma de desterrar de la memoria de la población su anterior accionar. El énfasis en las acciones cívicas llevó a las fuerzas armadas a desarrollar campañas de reparto de alimentos y servicios médicos gratuitos en los caseríos y «zonas rojas». Asimismo, consiguió que se realice el pintado de paredes donde había pintas subversivas, brindado charlas de planificación familiar y, en muchos casos, ha llevado bandas de músicos y presentaciones artísticas.

A pesar de toda esta estrategia desplegada, PCP-SL tuvo la capacidad de movilizar sus disminuidos contingentes militares logrando mantener una red de apoyo que le permitió operar, aunque de forma desordenada, en los territorios donde había organizaciones de autodefensa y bases militares de la Marina. Sin embargo, paulatinamente fueron cayendo sus mandos y militantes, hasta desaparecer de la zona⁴⁴.

2.11.5. Respuestas de la Ciudadanía a la Violencia Política en Ucayali

2.11.5.1. Los Cashibo-Cacataibo: El uso del mito y la cultura como mecanismos de defensa

A mediados de 1989, PCP-SL incursionó en la comunidad Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres⁴⁵. En esa oportunidad reunieron a la población en el local de la escuela y les hablaron sobre la lucha de clases, el «Nuevo Estado» que querían implantar y pedirles que se organicen en comité. La respuesta de la población fue unánime: rechazar la propuesta senderista:

No podíamos formar comité, porque si lo hacíamos ellos van a comenzar a obligarnos a hacer cosas que no queremos, nos van a matar como perros, así que mejor le dijimos que no. Pero sí podíamos ayudarles con comida o algo así (Don Goyo. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Ante la respuesta de los nativos PCP-SL optó por retirarse de la comunidad pero dejando en claro que podían regresar en cualquier momento, y sobretodo, ya no de manera tan amigable. Sin embargo, PCP-SL nunca más volvió a entrar a la fuerza a la comunidad, aunque usaban su pequeño puerto como estancia temporal o en algunos casos rodeaban la comunidad y evitaban ingresar a ella.

Estos hechos nos dejan la interrogante de por qué las huestes senderistas no actuaron de una forma violenta con los Cashibo-Cacataibo, si ese era su natural accionar en los diferentes caseríos en donde habían implantado sus comités. Estas dudas se acrecientan más cuando se sabe que el objetivo de PCP-SL era buscar un puente de comunicación entre sus *Comités Populares*

⁴⁴ Ver entrevista a Lurem: Cassette N° 74-75.

⁴⁵ Mariscal Cáceres es la comunidad Cashibo-Cacataibo más importante del río Aguaytía. Fue fundada por Simón Bolívar Odicio, líder nativo que fue el canal comunicante entre los Cashibo y la sociedad nacional en la década del 40 del siglo XX.

Abiertos de Bellavista, en el río Aguaytía y Boquerón, en la CFB, y así evitar navegar por el río y ser emboscados fácilmente por las fuerzas armadas. La única opción para abrir este puente era atravesando la quebrada del río Shambo, zona que estaba dentro del territorio de los Cashibo-Cacataibo.

La respuesta a esta interrogante tiene connotaciones políticas y, sobretudo, culturales. En lo concerniente a la estrategia política asumida por los nativos existió un acuerdo entre el clan Bolívar, muy influyente en la comunidad de Mariscal Cáceres, y PCP-SL. Esto evitó la presencia de elementos senderistas en los territorios Cashibo.

El clan Bolívar se entrevistó con el mando político de Bellavista, conocido como «Caretas», para señalar las acciones que debían de ejecutarse después de concretarse el pacto. El acuerdo alcanzado tuvo varios puntos: se hizo entrega de 10 hectáreas de tierras comunales a los senderistas en una zona denominada Iñeca, cerca de Bellavista, por un lapso de 5 años a condición de que no sembraran coca sino productos para su alimentación⁴⁶; que se respete el tránsito terrestre y fluvial de los nativos y, finalmente, que no se lleven de forma obligatoria a los jóvenes Cashibo para integrarlos a la «guerrilla».

Este acuerdo garantizó, en parte, la seguridad de los nativos en una zona absolutamente dominada por PCP-SL y el narcotráfico.

Decimos que este acuerdo garantizó «en parte» la integridad de los nativos porque sólo era vigente para los senderistas ubicados en los *Comités Populares Abiertos* del río Aguaytía mas no para los otros Comités de Padre Abad ni para la Fuerza Principal que venía del Alto Huallaga⁴⁷. ¿Cómo se explica que quienes desconocían el pacto no actuaran violentamente contra los nativos? Aquí entran a tallar las connotaciones míticas y culturales.

Si bien la población Cashibo-Cacataibo es mucho menor en comparación con otros grupos étnicos de la región, ellos han sabido aprovechar diversas imágenes construidas a partir de viejas tradiciones y mitos, lo cual les sirvió para defenderse de los ataques senderistas.

Diversos trabajos etnográficos y fuentes históricas nos hablan del espíritu aguerrido de los Cashibo-Cacataibo. Sin lugar a dudas, esto era de conocimiento de PCP-SL, lo cual lo obligaba a mantener cierto «respeto» hacia los nativos. Esta percepción de los senderistas era alimentada por el excelente conocimiento de los Cashibo del territorio y el efectivo manejo del arco y la flecha a la cual se le ponía varios tipos de venenos. Con todo esto, PCP-SL temía ser emboscado durante sus caminatas nocturnas en lugares que no eran de su absoluto dominio y, lo peor de todo, ser muertos por armas silenciosas y mortales:

⁴⁶ Se desconoce si realmente los senderistas acataron esta condición sabiendo que las chacras circundantes a Bellavista se dedicaban absolutamente al cultivo de coca.

⁴⁷ Además, por el lado de los nativos la existencia de conflictos clánicos tradicionales también podía hacer peligrar el acuerdo.

Nosotros tenemos armas que no se ven, no suenan. Por eso nos tenían miedo y no nos molestaban (Chino. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Sendero sabía que nosotros usábamos un veneno que cuando toca algo, muere, no hay doctor que lo cure. Ellos decían: si un Cacataibo te manda un flechazo, la flecha te sigue y te agarra y eso es peor (Don Goyo. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Luego de la incursión de PCP-SL a la comunidad de Mariscal Cáceres, los nativos comienzan a formar grupos de defensa ante cualquier posible incursión de PCP-SL. Para ello, se colocaban sus trajes de guerreros, se pintaban el rostro y cogían sus flechas. Así, cuando los senderistas pretendían pasar por la comunidad, ya sea a Bellavista o al Shambo, la evitaban o la rodeaban de noche:

Cuando andábamos de Huipoca a Nuevo San Martín o Bellavista debíamos de ir por las trochas, pero el único camino era por los territorios de los Cacataibo. Cuando pasábamos por ahí teníamos que pasar sin linterna y agarrados de las ropas porque al mínimo ruido podían soplar y ahí nomás quedábamos... (Luren. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Asimismo, existe una peculiar y tergiversada imagen del Cashibo. La gente de otras etnias y agricultores mestizos afirman que antiguamente los Cashibo eran caníbales y devoraban a sus enemigos y a todo aquél extraño que pase por sus territorios. Esta imagen idealizada de antropofagia también fue asumida por los senderistas quienes mostraban un temor intrínseco al momento de entablar relaciones con los nativos y que, de cierta forma, les impulsaba a tenerles respeto o mucha desconfianza. Pero, los nativos usaron esta imagen para acrecentar el temor entre los senderistas. A pesar de ello, la imagen de caníbal es un estigma que hasta el día de hoy los persigue:

Si pues dicen que comíamos gente, pero cuando nuestros antepasados mataban a los enemigos no se los comían, sino más bien usaban sus huesos para hacer armas. Por eso los mestizos nos dicen que comíamos gente. Nunca hemos comido gente (Chino. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Es importante señalar que el espíritu guerrero de los Cashibo también les sirvió para crear fronteras étnico-culturales entre ellos y los mestizos de los caseríos. Como ellos se consideraban valientes y guerreros, a los mestizos los consideraban unos cobardes por el hecho de dejar que PCP-SL les imponga su organización y no tener ninguna capacidad de reacción ni defensa.

Del mismo modo, el hecho de no sembrar coca era asociado a su condición natural de hombre libre, lo cual defendían en extremo, y denotaba una vinculación con las tradiciones de sus ancestros. En cambio, los mestizos que sí cosechaban coca eran relacionados con la esclavitud, la debilidad y los vicios. Esta frontera entre los Cashibo y los «otros» era impulsada mayormente por los nativos adultos. Sin embargo, los jóvenes no lo reproducían ya que muchos de ellos ya conocían las costumbres de los «mestizos» a través de su experiencia en la actividad del sembrío de coca.

Esto generó un tipo especial de ruptura generacional que será desarrollado en el capítulo sobre las secuelas de la violencia.

Como hemos señalado, los Cashibo-Cacataibo son una etnia en proceso de extinción debido a un decrecimiento demográfico en los últimos 20 años, a su organización comunal cerrada y al uso cada vez menor de su idioma. Otra estrategia cultural para defenderse de PCP-SL fue justamente el uso de su idioma y gracias a ello no se involucraron directamente en el proceso de violencia. A ello se añade el total desconocimiento de PCP-SL no sólo de la lengua de los Cashibo, sino de las diversas etnias asentadas en la Amazonía:

Pero el uso del idioma no significó su revitalización, sino por el contrario se restringió a la comunidad sin la posibilidad de compartirlo con gente foránea. Es paradójico que los nativos enfatizen el uso del idioma para mantener la cohesión de la comunidad en un contexto de violencia, pero que esto, posteriormente, no se refleje en una revitalización del mismo y, por lo tanto, revierta esa tendencia hacia la extinción.

Finalmente, podemos considerar como otra estrategia de supervivencia de los Cashibo su cooperación con la Marina en la lucha contrasubversiva. Uno de los motivos para cooperar fue que ésta restauró, en parte, la tranquilidad en la zona al ejercer una táctica menos violenta que la que efectuó el Ejército⁴⁸. A ello se añade una peculiar imagen dicotómica por parte de los nativos: la «rectitud» de los infantes de Marina en comparación con la «irresponsabilidad» de los soldados del Ejército:

Los soldados eran unos irresponsables, se ponían a tomar con mujeres. Nadie los respetaba. En cambio cuando vino la Marina fue diferente, eran hombres más serios, más altos, su presencia nomás te daba miedo (Johana. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Este nuevo accionar recuperó la confianza de la población, nativos y mestizos, hacia las fuerzas del orden. Así, muchos jóvenes Cashibo sirvieron de guías a los infantes de Marina en sus operativos contrasubversivos, les mostraban los caminos por dónde transitaban los senderistas, la ubicación de sus bases más escondidas y les proporcionaban alimentos. A su vez, la Marina les incentivaba a fortalecer las rondas de autodefensa que los nativos ya habían formado para defenderse de posibles ataques senderistas. Pero, en ningún momento les proporcionó armas.

Esta cooperación con la Marina fue asumida por los nativos como una forma de protección y garantía de seguridad brindadas por un actor más fuerte y confiable que los subversivos. Estas primeras relaciones que los involucraban con instituciones formales, se reprodujeron, posteriormente, con organismos sectoriales que trabajan activamente en el desarrollo de la región. Una de ellas es DEVIDA y el CORAH. Los Cashibo también sirven de guías y de mano de obra. Sin embargo, esta cooperación con el Estado les ha traído varios problemas con los cocaleros y los

⁴⁸ Véase el capítulo de Lucha Contrasubversiva donde se describe el cambio de estrategia que realizó la Marina en Ucayali.

rezagos de las huestes senderistas aún presentes en la zona. Las constantes amenazas que les hacen a los Cashibo los obligan a estar permanentemente alertas ante cualquier agresión. En este sentido, su milenario «espíritu guerrero» los sigue impulsando a sobrevivir.

2.11.5.2. Los Shipibo-Conibo: El rechazo y el aprovechamiento para sobrevivir a la violencia

El grupo étnico Shipibo-Conibo se encuentra asentado a lo largo del río Ucayali, específicamente en la provincia de Coronel Portillo. Durante la época de violencia, ellos también sufrieron las incursiones de PCP-SL pero, al igual que los Cashibo, no fueron obligados a formar comités.

La presencia de la subversión se dio desde 1988 con las incursiones del MRTA en las quebradas del Caco y Sheshea. Sin embargo, su accionar tuvo un corto período y no pudo convencer a los nativos que se unieran a su lucha armada. La presencia de PCP-SL en el río Ucayali se da entre fines de 1989 e inicio de 1990. Ellos tampoco pudieron convencer a los nativos para que se organicen.

El fracaso de los subversivos para organizar las comunidades Shipibo-Conibo también tuvo elementos culturales usados por los nativos como formas de supervivencia que vamos a explicar a continuación.

Cuando los subversivos llegan a las comunidades y piden que se «organicen», la respuesta de los nativos es singular: ¿para qué «organizarnos» si tenemos nuestras propias formas de organización? Es decir, no aceptaban una organización foránea que erradique la dinámica de su organización comunal, menos aún cuando esa organización tenía connotaciones violentas, pretendía obligarlos a sembrar coca y quitarles a sus jóvenes para que se incorporen a la guerrilla.

Nosotros no quisimos aceptarlos en Curiaca porque no entendíamos su política y querían llevarse a nuestros jóvenes. Además tenemos nuestra propia organización y estamos afiliados a la FECONAU (Roger. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Curiaca del Caco. Distrito de Iparia. Coronel Portillo).

En Macaya querían nombrar delegados pero nosotros nos negamos porque ya teníamos nuestros jefes. Le preguntábamos por qué venían con armas si sólo querían conversar. Les exigimos respeto por nuestras autoridades y a nuestro pueblo (Saúl. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Caco Macaya. Distrito de Iparia. Coronel Portillo).

Cuando nos explicaron sus leyes de no tener muchas mujeres, no robar, el jefe de la comunidad (de Junín Pablo) les dijo que ellos no tenían mujeres y que el robo lo habían traído los mestizos de los caseríos (Valeriano. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Junín Pablo. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

En efecto, los Shipibo tenían toda una estructura comunal y una dinámica cultural totalmente distinta a la organización que pretendía imponer PCP-SL. Por ejemplo, los senderistas desconocían su idioma nativo, su filiación matrilineal y su histórica habilidad comercial.

Sin embargo, el hecho que dentro de las costumbres y cosmovisión de los Shipibo no esté el uso de la hoja de coca, si tenían experiencia en su cultivo a través de su trabajo como peones en los cocalos de los caseríos en el Imiria. Así, la estrategia de supervivencia fue involucrarse en la estructura económica creada por el narcotráfico mediante el alquiler de su fuerza de trabajo. Fue un comportamiento derivado de las carencias y necesidades económicas existentes entre los nativos y el aprovechamiento de la bonanza económica que ofreció el narcotráfico.

El aprovechamiento de estos beneficios económicos también se puede apreciar en dos situaciones concretas: Primero, durante el auge del narcotráfico, la capacidad adquisitiva de la población vinculada al narcotráfico aumentó como consecuencia del incremento de los precios de los productos que vendían en el mercado y el aumento de sus salarios como mano de obra en los sembríos de coca. Este drástico cambio en la estructura de precios y salarios fomentó una mayor demanda de mejores bienes y servicios. Esta demanda fue atendida, en parte, por los nativos al instalar pequeños negocios que abastecían a los narcotraficantes:

Llegó un momento en que un racimo de plátano (5 unidades) podía venderse a 10 soles y una gallina hasta en 40 soles. Todo tenía precios altos e incluso se pagaban en dólares (Valeriano. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Junín Pablo. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

De alguna manera esta nueva estructura de precios incentivó a los nativos a que continúen sembrando sus productos agrícolas tradicionales y dejar paulatinamente su trabajo en el cultivo de la hoja de coca.

La segunda situación tuvo que ver con el alquiler de pistas de aterrizaje para los vuelos de narcotraficantes. Esto se dio en dos comunidades Shipibo-Conibo: Amaquiria y Nuevo Loreto. En Amaquiria, existía una pista de aterrizaje construida en 1975 por Adra-Ofasa para vuelos de ayuda social. El aumento de la violencia hizo que esta y otras entidades se retiraran de la zona. Con el auge del narcotráfico, las firmas le alquilaron a la comunidad la pista de aterrizaje. Los nativos y algunos colonos pusieron diversos negocios como restaurantes, tiendas de abarrotes y bares. La Marina enterada de esto amenazó a la comunidad con bombardear la pista de aterrizaje. La oportuna intervención de Adra-Ofasa impidió tal acción.

En el caso de Nuevo Loreto, la calle principal fue utilizada varias veces como pista de aterrizaje por los narcotraficantes los cuales pagaban un dinero a los dirigentes de la comunidad. Al tener conocimiento de esta actividad, la Marina también amenazó con destruirla si seguían permitiendo vuelos ilegales. Se desconoce cual fue el uso del dinero que le dieron los nativos por el alquiler de esas pistas y quienes fueron los reales beneficiados.

En conclusión, si los Cashibo tenían ese «espíritu guerrero» para enfrentar a PCP-SL, los Shipibo tenían como principal elemento su «espíritu comercial» que les permitió «acomodarse» de manera flexible a una coyuntura política y económica dominada por el auge de PCP-SL y el narcotráfico.

Finalmente, otra estrategia usada por los Shipibo fue que también decidieron formar CAD's para defenderse de las incursiones de PCP-SL. Sin embargo, no fue una actitud preponderante aunque hubo excepciones muy importantes.

El caso más significativo fue la comunidad nativa de Caimito. PCP-SL incursionó en el mes de noviembre de 1989 y obligó a la gente a organizarse. La población se negó porque no sembraban coca y no quería que se lleven a sus jóvenes. La intervención del antropólogo alemán Bruno Illius, residente en ese momento en la comunidad, fue importante para que los senderistas no insistieran.

Quando llegaron los senderistas y reunieron a la población, estaba Bruno trabajando varios días con nosotros. Él tenía miedo que le rompan sus documentos. Por eso habló con los jefes senderistas y les dijo que él comprendía lo que ellos estaban haciendo, que él había estado en China durante la época de Mao y que esa no era la forma de ir del campo a la ciudad, ni tratar a la masa. Los senderistas se quedaron escuchándolo y los respetaron (Ancón. Comunidad Nativa Shipibo-Conibo de Caimito. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

A partir de ese momento, la comunidad decidió defenderse ante cualquier nueva incursión senderista y formaron una ronda que, posteriormente, entabló contacto con la ronda de Puerto Alegre.

En 1991 tras la formación del CAD de Puerto Alegre, Caimito se convirtió en sub-base cuyo objetivo era vigilar y combatir la presencia de PCP-SL en el lago Imiria. También brindar apoyo a la Marina en operativos contrasubversivos en el río Tamaya y afluentes. Cuando se derrotó a PCP-SL en la zona, el CAD de Caimito se dedicó a combatir la delincuencia común, secuela no sólo de la subversión sino también de la violencia generada por el narcotráfico.

Al igual que otros CAD's, el de Caimito se convirtió en una especie de fuerza garante de la seguridad y el orden, aunque varias veces su accionar no estuviera enmarcado dentro de la ley. En el año 1993, el CAD llegó a un acuerdo con los narcotraficantes para brindarles seguridad ante el incremento de la delincuencia y el caos imperante en el Imiria. En ese momento PCP-SL prácticamente ya no tenía presencia en la zona. A cambio de seguridad, los narcotraficantes le dieron al CAD un bote y su respectivo motor y la entrega de municiones. Este convenio duró menos de 1 año porque el negocio de la droga comenzó a decaer.

Asimismo, hubo otras experiencias de autodefensa por propia iniciativa de los nativos aunque muchas veces sin apoyo logístico de la Marina. Por ejemplo está la Policía Comunal de Caco Macaya y el CAD de Colonia del Caco. Pero también hubo negativa de los Shipibo de formar

rondas o cualquier entidad que les brinde protección por el temor de estar entre dos fuegos: la Marina y PCP-SL.

2.11.5.3. El CAD de Puerto Alegre: Actor estratégico para la derrota de PCP-SL

En el río Tamaya existió una de las respuestas civiles a la violencia mejor organizadas y efectivas de todo el departamento de Ucayali. El caserío de Puerto Alegre organizó un Comité de Autodefensa que, por su ubicación estratégica, fue un elemento fundamental para que PCP-SL no domine absolutamente el lago Imiria⁴⁹ (Ver mapa).

PCP-SL apareció en el río Tamaya y en el Imiria a finales de 1989. En esa oportunidad, la FP del Alto Huallaga incursionó en todos los caseríos imponiendo su organización y estableciendo Comités Populares Abiertos y Comités Organizados. El objetivo de PCP-SL fue dominar esta zona porque ello le permitía controlar el negocio del narcotráfico, que para esa época, ya tenía una presencia importante. Así, todos los caseríos fueron obligados por PCP-SL a cosechar 1 hectárea de coca, cuyo producto sería de exclusividad para el partido, y 1 hectárea de uso propio para los agricultores.

Además, los senderistas ejercieron un férreo control de tránsito terrestre y fluvial a los pobladores del río Tamaya y el lago Imiria. Instalaron varias garitas de control y en caso de alguna irregularidad ejecutaban a los sospechosos. Asimismo, cobraban cupos a los comerciantes y a los pocos madereros que quedaron en la zona.

El ingreso de PCP-SL a Puerto Alegre fue el 4 de noviembre de 1989, un día después de la incursión a Masisea. En esa oportunidad reunieron a la población y nombraron coercitivamente a mandos y delegados. Uno de ellos no quiso aceptar el cargo y PCP-SL lo apresó para hacerle un juicio popular. Sin embargo, la propia población se opuso tenazmente a su ejecución. Durante casi 9 meses la población de Puerto Alegre soportó la presencia senderista aunque ya daba muestras de indignación frente al excesivo control sobre la población.

Durante las elecciones de 1990, los senderistas se apostaron en una explanada cerca de Puerto Alegre para impedir, bajo amenaza de muerte, que los habitantes del Tamaya y el Imiria fueran a Masisea a votar⁵⁰. Pero algunos pobladores lograron salir y buscaron a la Marina para informarles de lo que pasaba en el Tamaya. Inmediatamente helicópteros sobrevolaron la zona y bombardearon las principales garitas de control de los subversivos.

⁴⁹ Si bien algunos centros poblados organizaron CAD's, no lograron sobrevivir mucho tiempo. Uno de ellos fue el de Masisea, que se formó en 1991, con asesoramiento de la Marina. No fueron armados por expreso pedido de la población para evitar estar entre dos fuegos, pero cometieron varios excesos contra la población y los comerciantes: «Este CAD existió sólo 6 meses y más se dedicó al decomiso arbitrario de bienes de la gente y de los comerciantes. Incluso el jefe del CAD en ese tiempo se quedaba con la mayor parte de lo incautado y eso generaba peleas con los demás. Así que el pueblo decidió no tener CAD» (Profe Aroldo. Distrito de Masisea. Coronel Portillo).

⁵⁰ Es importante señalar que Puerto Alegre es el primer caserío en la ruta del río Tamaya hacia el Imiria. Por lo tanto, cualquier embarcación que transite por el río debe pasar necesariamente por su puerto.

Fue el momento en que los pobladores solicitaron apoyo a la Marina para fortalecer a la ronda de autodefensa que, de forma incipiente, ya existía⁵¹. Así, se les brindó varias retrocargas y municiones. A partir de ese momento, los pobladores de Puerto Alegre establecieron una estrecha colaboración con la Marina y una lucha frontal contra PCP-SL. Su excelente conocimiento de la red hidrográfica del río Tamaya y sus afluentes, varaderos y trochas que comunicaban con los escondidos comités de PCP-SL fueron fundamentales para la paulatina derrota senderista en la zona.

El Comité de Autodefensa se formó el 21 de marzo de 1991, con asesoramiento logístico y técnico de la Marina. Llegaron a tener hasta 50 miembros todos residentes de Puerto Alegre y el servicio en el CAD se volvió obligatorio para los hombres desde los 17 años. Una vez establecidos, tuvieron enfrentamientos directos con los senderistas, derrotándolos en la mayoría de veces. Por su estratégica ubicación geográfica y la bravura del CAD Puerto Alegre, PCP-SL intentó contrarrestar esta situación instalando un Comité Popular Abierto en el caserío de Panuco, que contaba con un contingente militar. Este comité tuvo la misión de detener las acciones contrasubversivas del CAD de Puerto Alegre, lo cual no lograron.

Asimismo, el CAD Puerto Alegre guió a los helicópteros de la Marina hacia los comités senderistas cuya ubicación por río o trocha era prácticamente imposible. Así, la Marina llegó a bombardear los Comités de Vinuncuro, Suaya y Butsaya. En este último estaban refugiados las últimas fuerzas militares senderistas. La derrota total de PCP-SL en la zona y, prácticamente, en la provincia de Coronel Portillo se logró en 1994⁵².

Actualmente, el CAD de Puerto Alegre tiene una garita de control obligatorio para las embarcaciones que surcan por el río Tamaya hacia el Imiria y viceversa. La inexistencia de fuerzas policiales que resguarden y controlen el orden público en los distritos de Masisea y de Iparia, los convierten en una institución informal que garantiza la seguridad de la zona ante el incremento de la delincuencia y los rezagos de violencia por parte del narcotráfico y la subversión. A partir de 1998, la Marina les quitó el apoyo debido a que los CAD's han pasado a depender directamente de la Prefectura.

Esta situación ha devenido en el resurgimiento del narcotráfico en la zona. Según la Gobernación de Masisea mucho tiene que ver la coima que les pagan los narcotraficantes al CAD de Puerto Alegre para que puedan pasar los elementos químicos para la elaboración de droga en los laboratorios que existen en Noaya, Nuevo Horizonte y Rivera.

⁵¹ Entre marzo y abril de 1990, la Marina realizó algunos operativos contrasubversivos en el río Ucayali, para prevenir acciones armadas de PCP-SL durante el proceso de elecciones. Visitó caseríos cuya ubicación era estratégica y los animaba a formar rondas de autodefensa. Su recorrido por el río Tamaya sólo llegó hasta el caserío de Panuco y no llegaron a ingresar al Imiria. Muy pocas poblaciones lograron formar rondas por temor a las represalias de PCP-SL.

⁵² Cabe señalar que, paralelamente, el negocio del narcotráfico había decaído notablemente. La debilidad militar de PCP-SL se debió a que la FP del Alto Huallaga prácticamente ya no incursionaba en la zona y porque los mandos senderistas se habían corrompido en demasía por su relación con el narcotráfico.

Si bien hay que resaltar la iniciativa de los pobladores para reaccionar y organizarse frente al abuso generado por PCP-SL, también hay que señalar que el CAD de Puerto Alegre respondió con la misma violencia en sus operativos. En varios casos emboscaban a patrullas de senderistas o apresaban a mandos de PCP-SL en sus controles por el río y los eliminaban.

Finalmente, es importante señalar el rol cumplido por varios pobladores de nacionalidad brasilera quienes motivaron a la población a defenderse de la agresión senderista. Esta influencia se corrobora con el hecho de que al formarse el CAD en 1991, se nombró como primer presidente a uno de los colonos brasileiros.

Los colonos brasileiros se habían instalado en el río Tamaya desde los años 30. Posteriormente, la mayor parte de ellos se reunió en el caserío de Puerto Alegre que fue fundado el 24 de junio de 1940. Desde entonces han tenido mucha injerencia en la organización y el desarrollo económico y político del caserío.

2.11.5.4. La respuesta de la población urbano-rural campesina asentada en la CFB

Antes de la llegada de PCP-SL, los narcotraficantes tenían el control del comercio de la droga a través de traqueteros y sicarios, quienes abusaban de los campesinos quitándoles la droga procesada, las arrobos de hoja de coca o engañándolos con el peso de la droga o de la hoja. Además, se incrementaron la delincuencia y las muertes producto de ajustes de cuentas relacionadas con la droga.

Cuando PCP-SL llegó a la zona, se convierte en el mediador entre los agricultores y las firmas de narcotraficantes modificando las relaciones de explotación que éstos habían impuesto. Incursionó en los diversos caseríos de la CFB convocando a la población para realizar asambleas donde los adoctrinaban y los estimulaban para luchar contra el «Viejo Estado» e imponer el «Nuevo Estado» a través de la constitución de *Comités Populares Abiertos* y *Comités Organizados*. Estos Comités además de tener la tarea de imponer el «Nuevo Estado» buscaban reordenar el negocio de la droga. Así, al igual que en el Alto Huallaga, impuso balanzas populares en algunos lugares importantes y colocó personas dedicadas exclusivamente a controlar el peso de la droga.

A partir de este momento, PCP-SL empezó a mostrar sus verdaderos objetivos: controlar totalmente a la población y el negocio de la droga.

La población asentada en la CFB, de la provincia de Padre Abad, asumió dos actitudes distintas para responder a la presencia de PCP-SL que a continuación vamos a detallar

Una parte de la población asentada en la CFB optó por una respuesta pasiva frente a PCP-SL fundamentaba en los siguientes aspectos:

a.- La existencia de un pacto de convivencia que tácitamente la población había firmado con PCP-SL y con las firmas de narcotraficantes para seguir cosechando la hoja de coca y procesar la droga.

Para la población la presencia de PCP-SL significó el salvoconducto que les permitió seguir lucrando con la ilegal producción de droga, así como tener a un fiscalizador «justo» del negocio:

Nosotros agradecemos a los senderistas pues ellos impusieron el orden. Antes no se podía andar tranquilo, no había seguridad (en referencia al negocio de la droga) los narcos abusaban de los agricultores y hasta te mataban (Miedo. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres. Distrito de Aguaytía. Padre Abad).

Con esta nueva «protección» la población accedió, sin ningún convencimiento político y más que todo por un interés económico, a organizarse en *Comités Organizados y Comités Populares Abiertos*. Pero habían los riesgos: romper este pacto significaba abandonar las chacras, los beneficios económicos que traía consigo la comercialización de droga y, principalmente, ser sindicado por PCP-SL como «soplón» lo cual significaba una muerte segura.

b.- El temor que generó PCP-SL a través de la aplicación de «juicios populares» fue su mejor estrategia para tener el control total de los caseríos de la CFB. Cada cierto tiempo PCP-SL tenía que ejecutar a alguna persona que haya o no transgredido las normas éticas y morales que el partido impartía. Muchas personas fueron asesinadas frente a sus hijos, familiares y amigos, infundiendo un gran temor en la población.

A este actuar de PCP-SL se añade el accionar represivo y sangriento de las fuerzas armadas, especialmente del Ejército lo que denotaba un total desconocimiento del real problema en el que se encontraba la población civil: vivir entre los fuegos de PCP-SL y el Ejército. Además, esta actitud llevó a que la población construya una imagen negativa de las fuerzas armadas y que junto a los abusos cometidos por el Ejército contra la gente y el negocio de droga contribuyeran a que las personas aceptaran la propuesta de PCP-SL.

c.- Hubieron muchos pobladores que no aceptaron las condiciones impuestas por PCP-SL y optaron por retirarse a los principales centros urbanos de la región, dejando atrás sus chacras, sus hectáreas de hoja de coca y los posibles beneficios económicos de la comercialización de la droga. PCP-SL confiscaba estas tierras abandonadas y las repartía a los peones cocaleros interesados en poseer chacras. Estas personas estaban sujetas siempre a los designios del partido.

El desplazamiento forzado por la violencia en los caseríos de la CFB incremento el número de asentamientos humanos en la ciudad de Pucallpa.

Otra parte de la población respondió activamente contra la presencia del PCP-SL, sobre todo, a partir de 1992 y se relaciona con dos acontecimientos importantes dentro de la lucha contrasubversiva en la región: por un lado, la Marina de Guerra del Perú asumía la Jefatura del Comando Político-Militar de Ucayali y, por otro, el cambio de la estrategia contrasubversiva que se basó en ganarle la base social a PCP-SL, con acciones cívicas que demuestren a la población civil que las fuerzas armadas respetan la vida de las personas y participan activamente en el desarrollo de las poblaciones.

Esta nueva estrategia de la Marina también incentivaba la organización de Comités de Autodefensa en los diferentes caseríos de la CFB. Sin embargo, los resultados no fueron del todo satisfactorios ya que los caseríos evitaron conformar CAD's debido al temor que todavía infundía PCP-SL y, principalmente, a la posibilidad de quedarse sin ingresos económicos porque estar ligados a la Marina significaba espantar a los traqueteros y a las firmas de narcotraficantes.

Sólo dos caseríos aceptaron constituir sus CAD's: Boquerón y Huipoca. Lamentablemente la población de Boquerón desistió rápidamente de seguir constituyendo su CAD básicamente porque era el centro de producción y comercialización de droga más importante de Padre Abad y no quería arriesgar perder esa condición que les significaba beneficios económicos. En cambio, Huipoca si constituyó exitosamente su CAD. Coincidentemente ambos habían sido constituidos por PCP-SL como *Comités Populares Abiertos*.

Para defenderse de las incursiones senderistas. Este CAD tenía 20 integrantes de los cuales 10 hacían vigilia en el día y diez en la noche. En sus inicios este CAD no contaba con armas ya que la Marina instaló una base patrulla en el caserío. Además, se situaba a pocos kilómetros de la Base Contrasubversiva de Aguaytía.

Para desactivar el *Comité Popular Abierto* formado por PCP-SL e impedir las emboscadas contra sus patrullas, la Marina optó por darle armas al CAD y apoyar a la población con herramientas para el desarrollo de su vida cotidiana:

Yo fui a entregar, fuimos en el helicóptero, aterrizamos en la cancha de fútbol, nuestra base estaba en el colegio y le regale a la gente cocinas, y otras cosas. Desfilaron muy bonito. Hacíamos todo tipo de actividades, hasta deportes hacíamos. Tratábamos de que las bases se integren con esta gente. Incluso cuando tenían alguna fiesta se le regalaba a veces cerveza, se les mandaba cocinas, todo lo que nos mandaba el Comando Conjunto (Almirante. Pucallpa. Coronel Portillo).

Si bien no realizaron capturas de mandos senderistas, el CAD de Huipoca cumplió un papel importante para detener el avance y la presencia de PCP-SL en la CFB. Su estrecha relación con la Marina no sólo impidió que PCP-SL no vuelva más a Huipoca sino que también el negocio de droga disminuya su presencia.

2.11.6. La Iglesia católica y su defensa de los Derechos Humanos en Ucayali

Ante la violencia que se desató en el departamento de Ucayali, la Iglesia Católica, a través de la Vicaria de Pucallpa, estableció en 1988 la Oficina de Derechos Humanos de la Vicaria con sede en Pucallpa. Esta Oficina tuvo dos áreas prioritarias de atención: el Área de denuncias de violaciones a los DDHH, con una asesoría legal para las víctimas de la violencia, y el Área de formación cuyo objetivo fue desarrollar programas de acompañamiento afectivo-racional a fin de promover la

creatividad y generar respuestas alternativas de pacificación y el tratamiento psico-afectivo a las víctimas de la violencia política.

Las acciones desarrolladas por el personal de la Vicaria se centraron específicamente en la ciudad de Pucallpa. Por la magnitud de la violencia no lograron articular una red de comunicación directa con la población afectada. Quizá por ello, no se involucró en el posterior proceso de arrepentimiento de mandos del PCP-SL o del MRTA ni tuvo un papel preponderante para incentivar a la población a organizar su autodefensa contra PCP-SL.

Sin embargo, fue la propia población afectada la que se trasladaba desde sus caseríos hasta Pucallpa para denunciar hechos de desapariciones, abusos o asesinatos perpetrados por los grupos alzados en armas o por las fuerzas armadas. A partir de estas denuncias los abogados de la Oficina de DDHH indagaban sobre los hechos e inclusive, cuando el causante era el Ejército o la Marina, se lograba tener acceso a información directa de parte de las bases militares.

La Iglesia, a través de la Oficina de DDHH, denunció la masacre de los 8 campesinos en la movilización del 09 de febrero de 1989 y constató el asesinato de gente que era arrojada viva desde helicópteros en los aguajales de Pucallpa. Estas personas fueron conocidas como los «caídos del cielo».

Recién en 1993, la oficina de DDHH logró conformar una red de apoyo nombrando agentes pastorales que tenía la misión de difundir el apoyo de la Iglesia a las víctimas de la violencia política, así como informar a la Oficina sobre los movimientos o acontecimientos ligados a la violación de derechos humanos. Con esta estrategia, la oficina de DDHH de la Vicaria logró crear nuevos espacios para que la población pueda identificar aquellos factores que habían provocado la violencia y consiguió que la gente identifique las posibles alternativas para resolver este problema⁵³. También debía estar atenta a generar una corriente de opinión en la población rural (desde las comunidades cristianas de base) y urbana (desde las diversas entidades públicas y privadas) a favor de la pacificación regional.

En la actualidad, es la organización que maneja la base de datos más importantes sobre la magnitud y el grado de afectación a los derechos humanos en la región de Ucayali.

2.11.7. Conclusiones

1. El departamento de Ucayali no estuvo ajeno al proceso de violencia que se dio en nuestro país debido, principalmente, al accionar militar de PCP-SL y el MRTA. Sin embargo, la expansión y asentamiento de los grupos subversivos en estas lejanas tierras amazónicas tuvo connotaciones muy particulares. En primer lugar, la difícil geografía de Ucayali fue un factor para que PCP-SL y el MRTA no logren articular su trabajo político con acciones militares contundentes, como sí lo

⁵³ Entre las actividades desarrolladas por la Oficina de DDHH se pueden mencionar los encuentros de jóvenes cristianos, Marchas por la Paz, Encuentro de niños por la Paz, Forum Regionales por la Paz, Talleres de Educación en DDHH, etc.

hicieron en otros lugares del país. Si bien PCP-SL logró establecer una serie de *Comités Organizados* y *Comités Populares Abiertos* en las riberas de los ríos Aguaytia y Tamaya, así como en la CFB, estos comités no tuvieron la consistencia organizativa suficiente sino más bien tuvieron poco trabajo político y militar para que derivasen en Comités de Lucha y se ejecuten los planes del «equilibrio estratégico» que se venía desarrollando a nivel nacional. Esto se ve claramente en la forma de administrar los comités organizados de la CFB y el río Aguaytia. Cuando PCP-SL entró a los caseríos a organizarlos, nombró como delegados y mandos a gente del lugar pero en ningún momento dejó un contingente de la FP o formó una FL. Es por eso que en la mayoría de casos el funcionamiento efectivo de los Comités Organizados solo se hacía cuando estaba presente la fuerza coercitiva de la FP del Alto Huallaga, pero cuando estaba ausente la población seguía con su vida comunal cotidiana. Esto no significó que la población haya dejado de sufrir violencia, porque cuando no estaba la FP, entraban las fuerzas armadas a buscar a los mandos senderistas o efectuaba detenciones ilegales.

La limitación geográfica como un factor importante para que PCP-SL no organice los caseríos como lo hacía en otras partes del país, es mucho más evidente en la provincia de Coronel Portillo.

Terminaremos señalando que, a pesar de la derrota militar de PCP-SL y el MRTA, un paso decisivo para enfrentar legalmente a la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es de carácter económico y debe estar dirigido a enfrentar frontalmente la situación de miseria en la que vive la población (urbana-campesina mestiza e indígena) en la región Ucayali, de tal manera que puedan encontrarse respuestas concretas a las necesidades reales de la población. Esta aguda crisis puede convertirse en condición favorable para el desarrollo de nuevas experiencias subversivas. En la investigación se ha señalado que el MRTA y PCP-SL instituyeron su base social en aquellos sectores sociales marginados por el Estado y que se hallaban en un creciente proceso de deterioro y marginación.

El Estado debe modificar sustancialmente su política de asignación de recursos y toma de decisiones en este rubro. Aún cuando la crisis económica por la que atravesamos impide contar con los recursos suficientes para invertirlos en el desarrollo regional, es necesario tomar la decisión política de apoyar a estas poblaciones afectadas duramente por la violencia y el narcotráfico. Es posible reemplazar esta actividad del cultivo de la hoja de coca con verdaderos programas de desarrollo agrícola alternativos, mas aún si hay disponibilidad entre los agricultores de cultivar otros productos legales bajo condiciones de mercado favorables y de apoyo estatal incondicional.

Bibliografía

Estrella, Gregorio

- 1973 Cuentos del Hombre Cacataibo (Cashibo) y la obra civilizadora de Bolívar. Colección Literaria de los grupos idiomáticos de la selva. Programa de Educación Bilingüe de la Selva. Ministerio de Educación. Lima.
- Frank, Ervin
 1994 «Los Uni». En: Guía Etnográfica de la Alta Amazonía. V.II. 131-237p. Edición FLACSO e IFEA. Quito.
 1990 «Pacificar al hombre malo o escenas de la historia aculturativa Uni desde la perspectiva de la víctimas». En: Amazonía Indígena. Año 10 (16). Edición COPAL. Lima.
- Gallo, Mario; Tello, Luis y Rivera, Lelis
 1994 El Impacto Económico del Cultivo de la Coca. Monografía de Investigación de CEDRO N° 11. Lima.
- GEF/PNUD/UNOPS
 1997 Amazonía Peruana. Comunidades Indígenas, Conocimientos y Tierras Tituladas. Atlas y Base de Datos. Lima.
- Gonzáles, José
 1990 Perú: Sendero Luminoso en el Valle de la Coca. En: Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes. Editor Diego García Sayán. Ed Comisión Andina de Juristas. («da. Edición).
- IDL
 1990 Perú 1990. La Oportunidad Perdida. Edición IDL. 1990.
- Morín, Francoise
 1998 «Los Shipibo-Conibo». En: Guía Etnográfica de la Alta Amazonía. V. III. 275-438p. Edición FLACSO e IFEA. Quito.
- Rumrill, Roger
 1982 Amazonía Hoy. Crónicas de Emergencia. Serie Debate Amazónico. Ediciones CAAAP, CETA. Iquitos.
- Santos, Fernando
 1992 Etnohistoria de la Alta Amazonía. Edición Abya-Yala. Quito.
- Santos, Fernando y Frederica Barclay
 1995 Ordenes y Desordenes en la selva central. Edición IEP. Lima.
- Soberón, Ricardo
 1998 «Violencia, Contraviolencia y Derechos Humanos». En: I Seminario de Investigaciones Sociales en la Amazonía. Edición CAAAP, CETA, CIPA. 237-248p. Iquitos.

2.12. LA ESTRATEGIA DE PACIFICACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUALLAGA

Desde 1980, el valle del Huallaga fue un espacio atravesado por el conflicto armado interno, en un escenario complejo donde paralelamente actuaban el PCP-SL, el narcotráfico y las fuerzas armadas. Cada uno de estos actores sociales fueron componentes importantes para la agudización de la violencia en la zona creando situaciones de convivencia, de impunidad, de confusión, de ilegalidad y de corrupción.

Como resultado de este contexto se produjeron múltiples violaciones de los derechos humanos, muchos de los cuales nunca fueron denunciados a las autoridades competentes por el temor a los agentes de seguridad del Estado o también porque las víctimas no pudieron ser identificadas, al tratarse de emigrantes temporales para las cosechas de coca. Ello se complica por la imposición senderista de llamar a las personas por sus seudónimos, haciendo igualmente difícil la identificación de las víctimas. Similares casos ocultos e impunes sucedieron con los propios aniquilamientos del PCP-SL y militares, creando temor entre la población y familiares de las víctimas por lo que muchos hechos nunca fueron de conocimiento de las autoridades competentes ni de la opinión pública. La década de los 90 estuvo signada en esta parte del país por detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas al debido proceso, arrasamiento de comunidades enteras por considerarlas subversivas y los arrepentimientos masivos relacionados al diseño de un marco legal antiterrorista.

El presente estudio tiene como finalidad analizar cómo y cuál fue el impacto y la repercusión de las estrategias contrasubversivas vinculadas estrechamente a los intereses políticos del gobierno de turno en el Perú, en las zonas conocidas como Bolsón Cuchara y Bolsón Primavera, poniendo especial énfasis en la Operación Aries. Resulta sorprendente que las fuerzas armadas realicen una operación militar de gran magnitud en una zona donde, supuestamente, ya imperaba el orden impuesto por ellos, manteniendo arrinconados a los desarticulados contingentes senderistas en la margen izquierda del Huallaga. Este es uno de los dilemas que tratamos de explicar.

2.12.1. Una zona convulsionada

La zona del Alto Huallaga fue ocupada con mayor intensidad desde inicios de los años 50 del s. XX por colonos y migrantes provenientes principalmente de la sierra de Huánuco, Huancayo, Junín y Cerro de Pasco, incentivados, la mayoría de veces, por el Estado a través de proyectos de colonización (como el de Tingo María-Tocache-Campanilla), y otras veces por iniciativa propia, obligados a desplazamientos masivos por la aguda escasez de tierras en la zona andina.

La construcción de la Carretera Marginal fue la vía que propició la colonización dirigida y espontánea y migración andina hacia la selva alta desde la década de los sesenta. A partir del primer gobierno de Belaunde, el Estado se convierte en el principal promotor de la colonización en la selva. El gobierno de Belaunde puso gran énfasis en la construcción de carreteras, pues el objetivo era fomentar la colonización para ampliar los mercados nacionales y acceder a los internacionales con una producción diversificada, para que la economía nacional no dependiera sólo de la minería. Al fomentar tales colonizaciones su preocupación se centró en el estímulo a la producción individual (Aramburú, 1990; Barclay, 1990; Martínez, 1988). Para consolidar la colonización espontánea, Belaunde asumió que el Estado debía de desarrollar la infraestructura necesaria para la población, así como generar los mecanismos para facilitar la producción agrícola y crear nuevos mercados regionales que consuman la oferta producida por los colonos. Estas condiciones lograron incentivar a buen número de colonos, que se establecieron en el Alto Huallaga, no completamente exenta de algunos conflictos debido a la heterogeneidad poblacional de los colonos y a los distintos roles que éstos asumían (Belaunde, 1953; Villanueva, 1990).

En 1964, se oficializó el primer programa de colonización dirigida. Se identificaron 456,800 hectáreas libres en el valle del Huallaga, específicamente en las provincias de Leoncio Prado y Marañón (Huánuco), así como en Tocache y Mariscal Cáceres (San Martín). De esta cantidad, 180,000 hectáreas fueron clasificadas como aptas para el uso agrícola del proyecto colonizador Tingo María-Tocache-Campanilla (Aramburú, 1982, 1987; Belaunde, 1959; Martínez, 1988).

El proyecto de Belaunde entregó títulos a 3794 campesinos en 122,685 hectáreas, habiendo cumplido más del 90% de sus metas. Muchos de los campesinos que obtuvieron sus títulos de propiedad se habían asentado en las zonas de Tingo María, Tocache y Campanilla años antes del proyecto colonizador del Estado (Fundación para el Desarrollo Nacional, 1981).

A pesar del esfuerzo y la inversión realizada por el Estado, el proyecto estatal de colonización fracasó debido a la falta de planificación en el uso racional de las tierras de aptitud agrícola (producto del conocimiento insuficiente de los suelos, que en el mejor de los casos se basaba en aproximaciones acerca de su disponibilidad y capacidad de uso mayor), así como en el uso de las tierras de protección, y el progresivo reemplazo de la producción agrícola de policultivo por cultivos comerciales (café y cacao) dirigidos al mercado internacional. Entre otros errores se pueden mencionar: el virtual desconocimiento de prácticas agrícolas adecuadas para los ambientes amazónicos, el lento establecimiento de la infraestructura de servicios y de comunicación, la introducción de la actividad agraria donde antes se desarrollaba básicamente la actividad forestal y la no creación de mercados regionales que pudieran consumir los productos agrícolas de los colonos (Aramburú, 1989; Villanueva, 1989).

El incremento de la nueva población colona originó: a) conflictos entre los *nuevos colonos* y los colonos asentados con anterioridad al proyecto estatal de colonización; b) un severo deterioro

ambiental (la degradación de los suelos y la consiguiente baja productividad de los sembríos); c) la inseguridad en la tenencia de la tierra y; d) la fragmentación de las parcelas. Además, la creciente demanda internacional por pasta básica y clorhidrato de cocaína, provocó en su momento la masiva sustitución de los cultivos legales por los cultivos de hoja de coca (Aramburú, 1989; Gallo, Rivera, Tello, 1994; Villanueva, 1989). Sólo en el Alto Huallaga durante 1940 se albergaba a 11,623 habitantes. El 35.2% de esta población era urbana, y el 64.8% rural. En 1981 alcanza los 134,600 habitantes y en 1988 contó con una población de 200,000 personas (INEI, 1981; 1988). Es decir, en el lapso de cuarenta años la población crece más de diecisiete veces, algo que no ocurrió ni en Lima. La razón de este incremento es un proceso de migraciones generado por el estímulo de la Carretera Marginal y el supuesto apoyo del Estado, que permitió la movilización de grandes contingentes de pobladores. Por esta razón surgieron nuevos poblados como Venenillo, Santa Martha, los Cedros, Moena, Primavera, Moyuna, San José de Pucate, Santa Lucía, Sión, etc.

En estas circunstancias, el narcotráfico ingresa al Alto Huallaga originando un verdadero boom económico y exhibiendo públicamente la enorme incapacidad del Estado para enfrentarlo, así como hace evidente las contradicciones en el ámbito internacional que, por un lado, paga grandes cantidades de dólares pero que, por otro lado, fuerza a los Estados a reprimir el cultivo de la hoja de coca de una forma inadecuada.

Hasta 1975 la producción de la hoja de coca estuvo principalmente destinada a abastecer la demanda tradicional, siendo sus consumidores principales los campesinos de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y los migrantes andinos en Lima y en otros departamentos de la costa norte (Aramburu, 1989). Aparte de circular a través de un sistema de trueque bastante extendido entre las regiones altas y bajas, la producción de la hoja de coca ingresó al mercado nacional controlado por el Estado a través del Estanco de la Coca, que luego se convirtió en la Empresa Nacional de la Coca (ENACO¹). El negocio debió ser muy rentable, pues muchos comerciantes costeños y serranos del Alto Huallaga se convirtieron en un grupo de poder que, aparte de controlar el mercado de la coca, tuvo injerencia en los abarrotes y productos de primera necesidad y se transformaron, además, en los dueños de los medios de transporte (Aramburu, 1981; Bedoya, 1982; Gonzáles, 1989). En este contexto, se da inició a la más grande transformación económica del Alto Huallaga por el estímulo de un grupo de colombianos que ven en la región un gran potencial para desarrollar la industrialización de la hoja de coca.

El negocio comenzó a rendir dividendos paulatinamente y se va imponiendo el imperio de la hoja de coca. Fondos que antes compartían el cultivo de la coca con el de frutales se vuelcan al monocultivo de la primera. El nuevo mercado que se abrió a los campesinos de la región fue mucho

¹ ENACO realizó un registro indiscriminado de productores autorizados a cultivar la hoja de coca y se encargó de diferentes aspectos del acopio y comercialización de la hoja de coca: monopolio del acopio de la hoja de coca, determinación de precios de compra-venta de la hoja y la imposición de reglas para la comercialización interna y externa de la hoja de coca. El poder que acumuló ENACO perjudicó económicamente al productor y al consumidor tradicional (Aramburú, 1989; Gallo y Rivera 1994).

mejor que el que tenían antes. Aparte de los altos costos que demandaban la producción de frutales y de otros productos legales, la comercialización fue bastante insegura por la inestabilidad de los precios y por todo el sistema de intermediarios, enganchadores y asaltantes que copaban la oferta y la demanda de los productos. A esto se sumaba las eternas barreras burocráticas del Estado para la adquisición de insumos, el otorgamiento de préstamos y el control de precios.

Frente a tales inconvenientes, el negocio de la coca y la droga ofrecía mercado seguro, precios estables, bajos costos de producción y eliminación de trabas burocráticas. Que la ilegalidad traía también riesgos nadie lo dudaba, pero la experiencia enseñaba que en esas regiones apartadas, si las autoridades no cuentan con un respaldo popular sucumben ante otros más poderosos. Poco a poco la precaria autoridad del Estado en la zona se fue mermando y comenzó a imperar la ley del más fuerte. En este caso, los más fuertes eran los colombianos que traían el capital para promover el negocio e introdujeron la pena de muerte para quien se les resistiese. Frente a semejante agresividad los antiguos comerciantes de hoja de coca les dejaron el terreno libre, pues no había a quién acudir para solicitar protección (Villanueva, 1989; Barclay, 1990).

Conforme empezó el incremento de la demanda de la coca, aumentó la tasa migratoria a la selva y la presencia de traficantes dispuestos a pagar mejores precios que el Estado o los antiguos compradores particulares. De esta manera, en el Alto Huallaga surgen las *firmas de narcotraficantes locales* (Vampiro, Machi, Tío Ríos, Vaticano, el cholo Claudio, Champa, Cristal) que se distribuyeron entre sí el control de la región, sometiendo bajo su jurisdicción unidades que comprendían poblados de acopio y aldeas de producción. En esta distribución hubo una especie de pacto de caballeros donde cada jefe local se comprometió a operar en su área correspondiente, además de pagar el precio señalado por los colombianos. Pero muchos compromisos no se cumplieron y, pronto, se suscitaron enfrentamientos entre firmas locales. En tales circunstancias se produjeron una serie de asaltos y asesinatos entre los compradores de droga, mientras los productores de hoja de coca eran engañados, explotados por las firmas de narcotraficantes locales, así como muchos productores fueron asesinados por los *sicarios* de las firmas locales al negarse a soportar sus abusos y ordenes.

En este contexto de caos y violencia, en agosto de 1990, el precio de la hoja de coca sufrió una severa disminución como resultado de la guerra desatada por el gobierno colombiano (Gallo, Rivera y Tello, 1994). Esta situación produjo una reducción en los ingresos del campesino produciendo severos trastornos en la economía de los caseríos del Alto Huallaga. Por ello se debe tomar en cuenta que aunque el cultivo de la hoja de coca significó el aumento de ingresos económicos para las familias campesinas, los productores de la hoja nunca tuvieron el control de la comercialización de su cosecha, siempre la compra-venta y los precios de la hoja de coca y de la pasta básica bruta estuvo supeditada al mercado internacional.

Entre las profundas modificaciones provocadas por la creciente extensión de los cocaleros y la influencia del narcotráfico figuran:

- a.- La mayor permanencia del colono en su parcela. Por ser la hoja de coca un cultivo que exige una extremada limpieza y el recojo continuo de sus hojas, interviniendo toda la familia, incluyendo a los hijos pequeños y peones contratados;
- b.- la mayor utilización de tierras marginales, aumentando peligrosa e irremediablemente la erosión por el uso de bosques de protección;
- c.- la reducción de áreas que se destinaban a producir café, cacao, frutas y alimentos de demanda fundamentalmente local (plátano y yuca);
- d.- la creciente utilización de mano de obra asalariada con montos imposibles de competir con los que se ofrecían por otros cultivos, la inserción de personas de lugares lejanos y que jamás antes incursionaron en la selva, incitados unos por los buenos salarios y, otros, por una relativamente fácil y pronta obtención de riqueza al conducir una parcela propia, materializó extrañamente el anhelo de los viejos colonizadores.²
- e.- la evidente corrupción de funcionarios y el prevaricato de magistrados en asociación con el narcotráfico.
- f.- A pesar de percibir grandes cantidades de dinero por la venta de hoja de coca y pasta básica bruta, la situación económica del campesino no fue boyante. Su ganancia estuvo sujeta a muchos riesgos: las variaciones del precio, las presiones de los intermediarios de las firmas de narcotraficantes locales, los operativos policiales y militares, las extorsiones que sufrían por parte de policías y militares.
- g.- El uso ilegal de la hoja de coca para la preparación del estupefaciente alcanzó tales magnitudes en la zona del Alto Huallaga que ha dejado en serio peligro su ecosistema. Sólo en el Alto Huallaga durante 1940 se albergaba a 11,623 habitantes. El 35.2% de esta población era urbana, y el 64.8% rural. En 1981 alcanza los 134,600 habitantes y en 1988 contó con una población de 200,000 personas (INEI, 1981; 1988). Es decir, en el lapso de cuarenta años la población crece más de diecisiete veces, algo que no ocurrió ni en Lima. La razón de este incremento es un proceso de migraciones generado por el estímulo de la Carretera Marginal y el supuesto apoyo del Estado, que permitió la movilización de grandes contingentes de pobladores. Por esta razón surgieron nuevos poblados como Venenillo, Santa Martha, los Cedros, Moena, Primavera, Moyuna, San José de Pucate, Santa Lucía, Sión, etc.

Además de todos los efectos negativos que esta actividad acarrea al medio ambiente, sus repercusiones para el conjunto de la sociedad han sido fatales. El más grave de todos es haber desatado una violencia generalizada de la cual son principales protagonistas, por un lado, la población civil, el narcotráfico y el PCP-SL y, por otro, las fuerzas policiales y militares. Pero tan grave como esta violencia es haber puesto a prueba, en uno de los momentos más graves de la historia del Perú, la moral de las autoridades estatales, policiales y militares y comprobar que

² Véase los estudios sobre narcotráfico.

fueron tan débiles frente a la coima y a la corrupción, lo cual impidió que asumieran realmente el reto de enfrentar a PCP-SL y a los narcotraficantes.

Este clima de caos social creado por el narcotráfico es aprovechado por PCP-SL para presentarse en 1981 como verdugo de un estado burocrático corrupto e ineficiente y asumir la supuesta defensa de los intereses de los agricultores cocaleros, agredidos por los abusos de los narcotraficantes y la represión del Estado contra el cultivo de la hoja de coca.

[El PCP-SL] Aprovecha este resentimiento de un problema social que teníamos sobre la cosecha de la coca, allí pone sus bases,... ellos haciendo ver al pueblo que ha llegado el momento también de que el pueblo deba defenderse de esta presión que hace el Estado, indiscriminadamente erradicando, quemando sus chacras de coca, todo eso pe, entonces Sendero aprovecha ese momento para que forma sus bases, en distintos caseríos, pero empieza en 7 de Octubre (Junio 2002, Huanuco, M. A, varón, empleado en empresa minera, en la época de la violencia era campesino).

La paulatina desaparición de las instituciones estatales significó que la población no encuentre el amparo necesario para su seguridad y supervivencia, más aún cuando las acciones violentas de parte del narcotráfico y los senderistas aumentaron al no modificarse el diagnóstico que el gobierno tenía sobre el problema. De cuya concepción emanan las decisiones para tratar de solucionarlo mediante la represión policial y militar en la zona, la sustitución de cultivos que sean rentables frente a la coca, e incluso la aplicación indiscriminada de biocidas como el SPIKE (1989) que afectaron la ecología regional. Por ello, el ciclo de la coca siguió teniendo el espacio necesario para su mayor desarrollo y con él la violencia que en su entorno generó.

2.12.2. El PCP-SL irrumpe en la zona

El PCP-SL se encontró no solamente con la necesidad económica de los campesinos por la tierra y por el cultivo de la hoja de coca, sino también con la insuficiencia de seguridad y orden. Estas carencias empataron con la necesidad del PCP-SL de ganar adeptos. Por ello, el PCP-SL instaló sus cuadros en aquellos lugares con cierto prestigio de ser comunidades combativas por la hoja de coca, a ambos márgenes del río Huallaga. De esta manera, el PCP-SL escogió, en la margen derecha del Huallaga, el caserío de Campo Grande (según una comunicación personal con JM. Caserío de Pueblo Nuevo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado) que tenía fama de haberse formado por la invasión de tierras de colonos y peones del complejo agroindustrial SAIPAI.

La influencia del PCP-SL también llegó a los caseríos de Pampa Hermosa, Pueblo Nuevo, La Esperanza, El Árabe, 7 de octubre, Pucayacu, Pacae, Alto Pacae, la Roca, Riofrio, entre otros, ubicados en la margen derecha del río Huallaga. En todos estos caseríos, el PCP-SL formó Comités de Defensa de los Campesinos, con la misión de luchar contra los abusos de los compradores de PBC y contra la represión del Estado.

En la margen izquierda del Huallaga, en el Bolsón Cuchara, el PCP-SL se concentró en el caserío de Corvina, de ahí nació el Frente de Defensa de los Intereses de Corvina y, luego, pasaron caserío por caserío hasta controlar todo el bolsón, dominio aprovechado por el PCP-SL para dominar también el Bolsón Primavera.

La presencia del PCP-SL tuvo como consigna la *defensa de la coca*. La táctica que utilizó PCP-SL fue realizar incursiones armadas contra toda institución o persona involucrada en los programas de erradicación de la hoja de coca y a los que querían *engañar* a los campesinos con estos programas. La primera acción subversiva registrada ocurrió, en 1983, contra las instalaciones del proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), ubicada en Tingo María. En 1984, el PCP-SL asesinó a un grupo de trabajadores de este proyecto y destruyó el puesto policial de Aucayacu (DESCO, 1990). Además, el PCP-SL convocó constantemente a paros generales, obstaculizando y controlando un amplio tramo del trayecto entre Tingo María y Aucayacu. Con estas acciones, el PCP-SL pretendió alcanzar la hegemonía política, «encauzando» las luchas regionales y las de los comités de productores dentro de su propio calendario político.

La estrategia del PCP-SL fue establecer una alianza con los agricultores cocaleros, que luego fueron incorporados como la *fuerza de base* del partido, y controlar el negocio de la venta y compra de la hoja de coca y pasta básica de cocaína. A partir de este pacto de convivencia, los productores de hoja de coca y los narcotraficantes tuvieron protección armada del PCP-SL para seguir con el cultivo y el comercio de la coca. Asimismo, el PCP-SL se benefició de esta convivencia porque encontró efectivas bases de apoyo, no necesariamente con un real compromiso ideológico, que le facilitó su trabajo político, el accionar militar y la consecución de una provechosa fuente de financiamiento a través del narcotráfico. Los subversivos empezaron sus acciones armadas y usaron a las ciudades como cajas de resonancia de sus actividades en defensa de la coca y contra la acción de los erradicadores, así como iniciaron la instauración de su orden social a través de asesinatos para *castigar* los abusos cometidos contra los campesinos. Este comportamiento originó que se les designe como *narcoterroristas*, por las evidencias de control y alianza que el PCP-SL asumió en las transacciones de la hoja de coca.

Asimismo, los campesinos encontraron con la presencia del PCP Sendero Luminoso el *orden* que no habían tenido cuando los narcotraficantes controlaban la zona. El orden impuesto por el PCP-SL se basó en un catálogo de leyes que sirvieron para regular el accionar cotidiano de la población.

La posición senderista de controlar el negocio local y regional de la compra-venta de hoja de coca y droga causó malestar entre los narcotraficantes que querían mantener su dominio en la zona. Debido a esto, se realizaron muchos enfrentamientos entre ambas fuerzas (el PCP-SL y las *firmas de narcotraficantes locales*), al final todas las *firmas locales* se resistieron al control

senderista. En ese momento, EL PCP-SL había conseguido el apoyo incondicional de parte de los agricultores cocaleros de la zona.

Con la imposición del PCP-SL en la zona, éstos, en 1988, liberan las áreas conocidas como bolsón Cuchara y bolsón Primavera instaurando su «Nuevo Estado»³. Asimismo empezó a ser el mediador entre las firmas de narcotraficantes locales y los agricultores e imponen un nuevo orden a las relaciones impuestas por los narcotraficantes. A partir de este momento, EL PCP-SL se da cuenta del gran negocio que existía en la zona y empieza a definir la estrategia de tener un mayor control sobre él.

El problema ya no era imponer orden en el negocio de la coca, ahora era tener verdaderos cuadros potenciales para fortalecer las acciones del partido en la zona. Ahí EL PCP-SL optó por la coacción de la población: estaban con el partido o dejaban todas sus propiedades. Mucha gente aceptó las condiciones del PCP-SL, otras retornaron a sus territorios de origen.

[El PCP-SL] a veces les amenazaban (a los propietarios de las chacras), ¡el que no quiere estar con nosotros que se vaya!... algunos por sus tierras nomás aguantaban, pero muchas personas se fueron... yo trabajaba como peón con mi familia en Venenillo y nos quedarnos. De ahí yo estoy más o menos como propietario; y de ahí a un año o año y medio nos obligaban a ir a las reuniones, que vamos a hacer pues, nos obligaban (Mayo 2002, Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado. J. O, varón, 41 años, campesino, en la época de la violencia era peón)

Con el control del negocio y la captación de la masa, EL PCP-SL empezó a cobrar cupos a los narcotraficantes por los cargamentos de hoja de coca seca y por pasta básica bruta, así como impusieron *balanzas de medición popular* que le permitió tener el peso *exacto* de la producción que estaban comprando, y calcular la cantidad (cupos) que le tocaba al partido.

Así, EL PCP-SL canalizó los reclamos de la población referidos al precio justo, al peso justo y a la negociación directa del campesino productor de la hoja de coca con el comprador (firmas extranjeras y nacionales). Asimismo, EL PCP-SL determinó que el precio de la hoja de coca debía ser establecido por la delegación (los delegados de los Comités Populares Abiertos) y que antes de todo vuelo se debe hacer la contra-entrega de *apoyo* por hoja de coca y la no aceptación de *vuelos fiados*.

El PCP-EL PCP-SL aprovechó la huida de las personas que no querían someterse a sus órdenes y confiscó las tierras abandonadas para su propio beneficio, haciendo trabajar a los agricultores cocaleros en esos cultivos de exclusividad del partido, a semejanza de las tierras del inca o del sol.

[...] (¿hacían faenas?) si, solo para los rojos. (¿Ellos quitaban chacras a la gente?), solamente a los que tenían grandes platanales, cacahuales, y a los que mataban como Carlos Fernández que dejó 20 hectáreas de cacao, cuya cosecha fue para el bolsillo de los mandos... (¿Quién cosechaba eso?) La gente cosechaba todo, los que se oponían eran castigados, si no venían a la faena mandaban a dos o tres y los traían amarrados (y eran

³ Véase Estudio sobre Aucayacu y el comportamiento del PCP-SL.

castigados),... (El PCP-EL PCP-SL) decía vas a obedecer o sino la puerta esta libre, vete nomás decían. Como vamos ir dejando nuestras chacras, teníamos que obedecer, sujetarnos a ellos (mayo 2002. Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón. 61 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

Desde 1986 hasta 1992, EL PCP-SL tuvo el control de la zona subordinando a sus intereses a los agricultores cocaleros, a los narcotraficantes y superando todos los operativos contrasubversivos de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales.

Esta relación denotó un proceso de «narcotización» de las huestes subversivas. Esta idea se comprueba no sólo con este estrecho vínculo sino también porque los mandos senderistas dejan de lado los objetivos de la lucha popular y el impulso del «equilibrio estratégico» para dedicarse a controlar el negocio de la droga.

Aquí encontramos otro de los factores determinantes para afirmar que el PCP-SL creó una estructura política que era solo una fachada, ya que el objetivo principal era un mejor manejo y control del negocio de la droga. Por ejemplo, en el bolsón Cuchara, la población afirmó que si bien EL PCP-SL llegó a organizarlos; lo primero que les exigió fue abrir en forma obligatoria una hectárea de coca exclusivamente para el partido. Además, los campesinos sostienen que la violencia en la zona fue más producto del accionar de los sicarios del narcotráfico que de los senderistas.

A pesar del dominio y poder adquirido en la zona, en 1992 debido a diversas acciones contrasubversivas de las fuerzas armadas, EL PCP-SL empezó a retirarse hacia la margen izquierda del río Huallaga perdiendo el control de los caseríos de la margen derecha, aunque no dejó de realizar incursiones en todos los poblados haciendo recordar el poder oculto, pero activo, del partido. En este contexto, y a partir de 1994, las fuerzas armadas asumieron el control de la zona.

2.12.3. *Combatiendo al narcotráfico y a la violencia*

2.12.3.1. Los operativos relámpagos (1984-1990)

Desde 1984 hasta 1990, el Ejército peruano empezó a realizar sucesivos *operativos relámpagos* en ambos márgenes del río Huallaga con la finalidad de sorprender narcotraficantes y a la organización senderista que actuaban en la zona. Estos eran operativos terrestres de entrada y salida a la zona donde se consideraba que existían compañías subversivas. Se realizaban con aproximadamente entre 30 y 50 soldados. Al no tener una buena estrategia *contrasubversiva* no lograron resultados positivos, principalmente porque:

- a.- El PCP-SL y los narcotraficantes se habían mimetizado con la población. No fue fácil identificar quién era campesino y quién senderista.
- b.- La población, al tener protección armada para cultivar la hoja de coca y ordenar el negocio de su venta, apoyó al PCP-SL.

c.- El Ejército peruano no sabía qué tipo de población iba a encontrar en la zona ni a quién combatir en una geografía de difícil desplazamiento, lo cual dificultó muchas veces su accionar y fueron presa fácil de las emboscadas senderistas.

Los *operativos relámpagos* del Ejército peruano se efectuaron según las informaciones que se conseguían de la ubicación de contingentes militares del PCP-SL en ambas márgenes del Alto Huallaga. Llevaron en algunos enfrentamientos con compañías del PCP-SL que actuaban en ambas márgenes del río Huallaga: muchos muertos de ambas partes, pero también mucha gente inocente que murió por permanecer en la zona cuidando sus chacras o esperando que todo acabe para seguir sembrando y viviendo como antes de la violencia.

[...] tanta gente que fue muerta por los morocos luego los cumpas. Todos pasaban, aquí Juan, ese Juan no me recuerdo su nombre, lo mató el Ejército porque estaba mirando como venían al pueblo... (EL PCP-SL en 1987)... había matado como ocho, diez personas, Manuel Asiento, su yerno Lucho, después su hermano de Lucho como se llama... ¡Ángel!, después a otro Teodoro, Herminio Yanac, después Samuel Romero, Deodoro no sé que, ¡ah! Deodoro Calderón ha sido ese, es lo que correteaba, después le mataron a Gamanie, le mataron con orden de X., ahora ese hombre estaba adentro por Pucayacu (mayo 2002. Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón. 61 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

2.12.3.2. El viraje de la estrategia *contrasubversiva* (1990-1994)

Podemos resumir la batalla militar en cuatro etapas: la primera se refiere a los meses de enero y agosto de 1990 en el marco de las elecciones generales. La segunda, de agosto de 1990 al 31 de julio de 1992, se basó en recuperar las zonas liberadas por EL PCP-SL. La tercera, del 1 de agosto de 1992 a 1994, centrada en operaciones de limpieza y la cuarta en 1995 donde se desarrollarían acciones complementarias.⁴

En 1991, el cambio de estrategia *contrasubversiva* mejoró la imagen de las fuerzas armadas en las zonas de emergencia del Alto Huallaga. Esta nueva estrategia tuvo como objetivo básico utilizar a las fuerzas armadas para recuperar la presencia del Estado en las zonas ocupadas por la subversión, ganarse a la población civil a través de acciones de apoyo y, principalmente, dejar sin base social ni espacio de maniobra al PCP- SL.

Este cambio de estrategia revirtió la imagen negativa que la población tenía sobre la forma de actuar de las fuerzas armadas. Las acciones militares en los caseríos asentados en la margen derecha del Huallaga cambiaron: ya no había operativos militares sorpresivos ni se forzaba a la gente a asistir a reuniones para delatar a mandos senderistas sino más bien se puso énfasis en tratar mejor a la población civil y en un efectivo trabajo de inteligencia para detectar a los mandos subversivos.

⁴ Para mayor información véase Obando, 1991: 46-50pp.

El éxito de la misión implicó la ampliación de las facultades y garantías legales para el accionar del Ejército fortaleciendo su papel como actor político en el espacio regional, así como la búsqueda de apoyo de la población fundamentalmente a través de acciones cívicas, implementación de CAD's (que finalmente no logró hacer) y con el establecimiento de Comités de Desarrollo.

Si bien es cierto que los lineamientos de ésta se aplicaron en las zonas de emergencia, toda acción dependía de las prioridades y de la evaluación de la situación de la región por parte de cada Jefe Político-Militar. De esta manera, el énfasis de la nueva estrategia *contrasubversiva* estuvo puesto en los siguientes puntos de agenda:

a.- No a los Comités de Autodefensa (CAD's) pero si a los Comités de Desarrollo

El objetivo de querer establecer CAD's se sostuvo en la premisa que la población debía interactuar con el Ejército para que ambos luchen contra un enemigo común: EL PCP-SL. Esta adhesión se lograría gracias a la estrategia combinada de acción militar con obras de desarrollo económico local.

Lamentablemente, el Ejército nunca pudo organizar un CAD en el Alto Huallaga. Una de las razones para que los CAD's no tuvieran éxito fue que el Ejército se negaba a armar a la población y sólo la motivaba para que «se defienda». En otros casos, la propia población desistió de formar las rondas de autodefensa por temor a represalias del PCP-SL que aún tenía presencia en la zona, lo cual los llevaba a «estar entre dos fuegos».

Después del fracaso de los CAD's, el Ejército logró constituir en cada caserío una organización llamada Comité de Desarrollo.

La acción concertada entre los Comités de Desarrollo y el Ejército logró frenar la expansión y la capacidad de movilidad del PCP-SL en el Alto Huallaga. El éxito de los Comités de Desarrollo radicó en que la población proporcionó mucha información sobre la ubicación de mandos senderistas. El Ejército aprovechó que la gente conocía mejor su territorio, dominaba los corredores de tránsito y tenía conocimiento de los lugares de descanso que utilizaba EL PCP-SL.

b.- Realización de acciones cívicas

Otra de las acciones del Ejército fue la implementación de programas de acciones cívicas que cumplieron un rol importante porque era la forma de desterrar de la memoria de la población su anterior accionar desarrollando campañas de reparto de alimentos y servicios médicos gratuitos en los caseríos y «zonas rojas». Asimismo, consiguió que se realice el pintado de paredes donde había pintas subversivas, brindado charlas de planificación familiar y, en muchos casos, ha llevado bandas de músicos y presentaciones artísticas. Ese instante era aprovechado para empadronar a la población y recoger información sobre las organizaciones existentes en esas zonas.

c.- Acciones de inteligencia

Estas acciones se sostenían en agentes encubiertos vestidos de civil que patrullaban los alrededores de sus bases. Los campesinos de la zona no sabían si se trata de militares o de *compañeros*; situación que ha producido muchas desapariciones y muertes de gente inocente. Esta misma táctica fue empleada por EL PCP-SL para comprobar que los pobladores donde operaban estaban realmente de su parte.

Si, también mucha gente,... le decían compañero, y ellos decían: ¿cuál compañero?, yo no soy compañero, y los mataban; así habían muertos varios en Primavera, todos de esa zona han muerto... (¿y podían identificarlos) no, si paraban iguales y decían ¡hola compañeros! Te dabas cuenta (por su forma de hablar), no eran compañeros, eran soldados... En cada comunidad iban disfrazados de soldados, engañando, iban y decían ¿tu conoces a tal fulano?, y decían: sí, conozco, ¿dónde viven, qué cargo tiene tal fulano?, arribita vive, muy bien, yo no soy soldado y lo sacaban (lo mataban) (Mayo 2002, Aucayacu. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón, 33 años, campesino. También era campesino en la época de la violencia)

También, se aprovechó la información proporcionada por subversivos arrepentidos para detectar campamentos y mandos subversivos. Entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 1994, en poco más de un mes, y sólo ante el cuartel de Tingo María, se presentaron más de dos mil arrepentidos. El número de combatientes, de otra parte, habría disminuido de 1050 a 360 cuadros militares, entre enero de 1992 y octubre de 1993, según la apreciación de fuerzas subversivas, graficadas en sus correspondientes mapas, elaborados por el Frente Huallaga (Revista Sí Abril-Mayo 1994: 74). Cabe resaltar que muy pocos mandos y gente inocente de la margen izquierda del río Huallaga se arrepintió porque SL tenía un control muy fuerte sobre el territorio y las personas. Según el Jefe Militar del Frente Huallaga en el mes de enero de 1994, tras operaciones de inteligencia, se capturó a los mandos senderistas *Viajero*, *Rayo* y *Pescador*, cuyos testimonios fueron sumamente importantes para emprender la ofensiva total contra la subversión que tuvo amenazada a la población (La República, Abril de 1994).

Asimismo, el Ejército empezó a realizar operativos con mayor estancia en zonas liberadas por EL PCP-SL con la ayuda de helicópteros artillados que, supuestamente, ocasionaban muertes de senderistas y de la población que involuntariamente vivía parte de esta guerra.

[...] (1992) el Ejército venía primero con helicópteros y bombardeaba, ahorita como estábamos sentados, el helicóptero metían cohetes, misil, mandaban, la gente se escapaban, Sendero se metían al monte, y a los que viajaban con bote les mataba, sean chico, grande o mujer (mayo 2002. Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón. 61 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

El Ejército también perdió mucho personal y por ello toma venganza a través de ataques aéreos con cohetes y ráfagas de bala. Esta versión se pudo encontrar en ambos bolsones donde se efectuó la Operación Aries.

[En 1991] en el Puerto de Mantaro hubo un enfrentamiento entre Sendero y el Ejército. De [PCP-SL] no murió nadie, a los del Ejército si los mataron, los atacaron en este mismo río, donde cruzan para Mantaro, ahí esperaron en el cerro, de eso es lo que empezaron a disparar y ahí han muerto los capitanes, tenientes... (mayo 2002. Caserío de Primavera. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, mujer 28 años, campesina, en la época de la violencia también lo era)

Las constantes operaciones militares realizadas por el Ejército produjeron que la población esté vigilante a las arremetidas y abusos que el Ejército hacía por creerlos subversivos. La vida cobró un ritmo inusitado y fue parte de la vida diaria, estar constantemente alerta para salvar la vida propia y la de su familia.

Cuando el Ejército entraba, no encontraba a nadie, todos paraban escondidos... si ves, te mandas a mudar, porque si te encontraban era muerte fija... aquí toda la gente ha sido senderistas porque venían a obligar y alguna gente que tenía que estar sujetas a ellos por no querer dejar sus chacras... (Mayo 2002. Caserío de Primavera. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón 28 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

A partir del uso de estas estrategias, el Ejército logró, según los pobladores, un relativo repliegue del PCP-SL de sus zonas de control en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco. Así, el Ejército retomó el control de Venenillo, en la margen izquierda del río Huallaga, estableciendo una base militar en la entrada al Bolsón Cuchara en 1993 y controlando los caseríos ubicados a lo largo de la Carretera Marginal, sobre la margen derecha del río Huallaga.

En suma, desde aproximadamente 1990 hasta los dos primeros meses de 1994, las poblaciones asentadas en la margen izquierda del río Huallaga fueron sufriendo constantemente incursiones y operativos por parte del Ejército y EL PCP-SL. Estas acciones violentistas vulneraron y atentaron contra los derechos más elementales de la población como el derecho a la vida, el derecho a libre tránsito en el territorio nacional, su derecho a la defensa, su derecho a ser considerado ciudadano peruano, etc.

[...] todos nos escondíamos en el monte, ahí muy raro que nos tiren (el Ejército), ellos no entraban por miedo pero nosotros conocíamos cuando todo acababa recién salíamos, nada podíamos salir, si lo hacíamos Sendero no lo quería, si salíamos el Ejército nos perseguí y hasta nos desaparecía (Mayo 2002. Caserío de Santa Martha. Distrito de José Crespo y Castillo. Tingo María, varón, 37 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

2.12.4. Los objetivos de la Operación Aries (abril-mayo 1994)

A pesar de los operativos del Ejército, el PCP-SL tenía en 1993 tuvo una fuerte presencia en la margen izquierda del río Huallaga en dos áreas a las que denominó Bolsón Cuchara y Bolsón Primavera y donde impuso su organización de manera forzada. Las operaciones militares en la zona del Bolsón Cuchara y Bolsón Primavera ya eran muy frecuentes, complementadas con mensajes disuasivos transmitidos a través de volantes: *Arrepiéntanse porque están sufriendo en el monte y tu familia llora en tu casa* (Extracto del mensaje que contenían los volantes que invitaban al arrepentimiento a los subversivos, Canal 2. Luis Iberico. 19/04/94). Un poblador de Santa Martha (Bolsón Cuchara) manifiesta: «No sé cuando fue, pero caían del avión muchos papeles, algunos le hacían caso, otros no, pocos saben leer acá, eran esas cosas del arrepentido pero si hacías eso luego no podías volver, ya Sendero estaba para exterminarte» (Pedro Andrade. Caserío de Santa Martha. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado). Muchas personas quisieron acogerse a la oportunidad que ofrecía el gobierno, pero EL PCP-SL, que controlaba los puertos existentes en la zona, les prohibió la salida.

En 1994 el gobierno de Alberto Fujimori, al golpear duramente la organización senderista con la captura de Abimael Guzmán y la implementación de la ley de arrepentimiento para mandos del PCP-SL decide coordinar con las fuerzas armadas (el Ejército, las fuerzas armadas y la Marina) un plan definitivo para terminar con EL PCP-SL en el Alto Huallaga. El plan era la aplicación de una operación a gran escala que fue llamada *Operación Aries* cuyo objetivo fue imponer la *pacificación* en el país. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) también intervino en la implementación del plan.

Las justificaciones de las fuerzas armadas para realizar la operación fueron principalmente dos:

- a.- El proceso de arrepentimiento no había producido la deserción de mandos del PCP-SL en la margen izquierda del Huallaga, por ello se suponía que todos los asentados en la zona formaban parte del PCP-SL.
- b.- En ambos bolsones estaban establecidas huestes senderistas que mantenían la organización del partido.

Con la aceptación política del gobierno y la decisión de realizar una actividad militar conjunta y de largo alcance para la destrucción total del PCP-SL, el Ejército, la Marina y la fuerzas armadas empezaron a preparar a los comandos especiales que intervinieron en toda la margen izquierda del Huallaga, así como se utilizó información de mandos senderistas arrepentidos, como ya habíamos mencionado, para reconocer las áreas por combatir y a planear la estrategia a implementar en el *teatro de operaciones*.

El gobierno apoyó además la realización de la Operación Aries como medida para consolidar la figura mediática de vencedor del terrorismo que el presidente Alberto Fujimori había creado para postular con éxito a su primera re-elección (1995).

Según el testimonio de Juan Pérez, testigo que participó en la Operación Aries, las fuerzas armadas prepararon compañías especiales en estrategias *contrasubversivas* procedentes de Lima (compañía de comando N° 19), Tarapoto (compañía de Comandos), Tingo María (compañía contrasubversiva N° 33) y Ayacucho (compañía Pachacútec).⁵

Era una preparación especial por medio de un curso avanzado donde se seleccionaba a la gente, entraban 500 al curso y quedaban 200, o sea los mejores siempre quedaban porque como te decía sabíamos a qué íbamos, sabíamos del enemigo oculto, (lo que) que no sabíamos (era) en qué momento nos iban a disparar, no sabíamos en qué momento iban a salir y no sabíamos dónde estaban porque ellos dominaban bien la zona (Junio 2002, varón 30 años, comerciante, en la época de la violencia participó en la Operación Aries)

Para la preparación de estos comandos especiales hubo un especial apoyo del gobierno, facilitándole armamento sofisticado, municiones y alimentos especiales (hubo 2 refrigerios aparte de los desayunos y las cenas). Además, contaron con un experto de nacionalidad israelita.

Para el tipo de operación que se tenía que realizar, que era fuera de lo normal, nos enseñaron las operaciones militares de guerra, reales operaciones de combate con un israelí y las estrategias de cómo entrar a la zona y enfrentar al enemigo: ejecutivo⁶ o selectivo⁷

Del número de comandos especiales se sabe que

La primera promoción fue de 250 hombres que se traen de Tarapoto, en Tingo María había como 200 personas, 300 comandos que habían preparado para hacer esta operación y en Lima se preparó casi 1000 hombres que estaban listos, primero vino un grupo de 500 hombres, más tarde 400 y de ahí entramos 1000... a hacer esta operación y unas 20 o 40 patrullas

La preparación de los comandos fue supervisada por el general Nicolás Hermoza Ríos, Jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, y por el presidente de la República, Alberto Fujimori. Inclusive horas antes de embarcarse, los comandos fueron visitados por el presidente, quien les pidió que hicieran el máximo esfuerzo por el bien de la Patria y de todas las familias del país.

[...] de quien tuvimos apoyo moral (fue del general Hermoza) para todos los comandos que se estaban preparando para realizar este tipo de operación y cuando llegó la hora cero para empezar la operación estuvimos con el Presidente de la República que muchas veces fue a visitarnos anticipadamente en los entrenamientos. Al final nos dijo que quería hablar con nosotros sobre la importancia de la misión y la importancia que tenía este trabajo por el

⁵ Juan Pérez participó en la Operación Aries. Por medida de seguridad el nombre que aparece en el presente informe no es el real.

⁶ Se refiere a que cualquier persona encontrada en la zona debe ser ejecutada por considerarla peligrosa a los fines de la operación.

⁷ Se refiere a que los comandos debieron hacer una selección de quien era el enemigo y quién no.

bien del país, de nuestra familia y de nuestro futuro mismo, habló con nosotros bastante, fue como una antesala antes de salir al campo

[...] (los comandos terrestres) *como ya teníamos las coordenadas, teníamos los planos, en sí teníamos objetivos específicos contra las columnas de Sendero, agarrar mandos, a sus cabezas*

2.12.5. Desarrollo de la Operación Aries

La operación Aries se ejecutó en dos fases: la primera, entre los meses de abril y mayo de 1994, y la segunda a mediados del mes de junio hasta julio de 1994, desarrollándose en la margen izquierda del río Huallaga, en las zonas conocidas como Bolsón Cuchara⁸ y Bolsón Primavera⁹ (distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco) donde, según la evaluación del gobierno, los desarticulados contingentes senderistas trataban de reagruparse luego de las consistentes acciones que habían determinado su derrota militar a partir de la captura de Abimael Guzmán (setiembre de 1992). El tiempo de duración fue de un mes y medio.

En la primera fase se utilizó como información primordial la versión de los arrepentidos de la zona por considerar que era una acción estrictamente militar, mientras que en la segunda etapa los comandos fueron acompañados por los propios arrepentidos, lo que les otorgó mucha más confianza porque los arrepentidos empezaron a señalar la localización de los comités, los armamentos, etc.¹⁰ En este segundo momento, de acuerdo a un informante, las fuerzas armadas volvieron a arrojar volantes de difusión sobre la Operación Aries, dando oportunidad a que la población asentada en la zona de combate pueda salir. De acuerdo con las declaraciones de JP, en este momento también se modificó la estrategia haciéndola más violenta con la finalidad de hacer sentir al enemigo que existía una fuerza mucho más poderosa que ellos y que tenía presencia en la zona. La particularidad de esta segunda fase, si es que efectivamente se llegó a dar, es que los medios de comunicación no registran ningún tipo de hechos graves en la zona durante estos meses. Es por esta razón que muchos incluso dudan que se haya llevado a cabo efectivamente.

La fecha de inicio de la operación Aries fue 5 de abril. Las fuerzas armadas utilizaron, según versión oficial del Frente Huallaga, 200 efectivos para realizar el cerco, y 150 en la persecución de los objetivos (Revista Sí, 1994)¹¹. Sin embargo, la versión del combatiente Juan

⁸ Área geográfica ubicada en la margen izquierda del río Huallaga y cuyos límites se encuentran entre el río Monzón y el río Cuchara. Uno de los accesos principales a este bolsón es el caserío de Venenillo, frente al puerto del caserío de la Roca, que es la vía de tránsito obligada para visitar a los otros caseríos que conforman el bolsón Cuchara.

⁹ Área geográfica ubicada en la margen izquierda del río Huallaga y cuyos límites se encuentran entre el río Cuchara y el puerto de Magdalena. Uno de los accesos principales a este bolsón es el caserío de San Isidro, frente al puerto del distrito de Aucayacu, que es una de las vías de tránsito obligadas para visitar los otros caseríos que conforman el bolsón Primavera.

¹⁰ La presencia de los arrepentidos durante la Operación Aries es corroborada por el reportaje de Luis Ibérico (Canal 2. 19/04/94) donde se muestra la participación activa de los arrepentidos en señalar los lugares claves donde SL había establecido sus Comités Populares Abiertos y sus recursos logísticos.

¹¹ La cantidad proporcionada por el Jefe Militar del Frente Huallaga, difiere de la estimada por el entrevistado Juan Pérez, quien asegura que las patrullas ingresaron a los bolsones Cuchara y Primavera por cuatro frentes para atacar a las fuerzas senderistas (Junio 2002, varón 30 años, comerciante, en la época de la violencia participó en la Operación Aries)

Pérez es que fueron 2000 distribuidos en cinco grupos de comandos terrestres (cada grupo tenía aproximadamente 400 comandos).

Un grupo entró por Venenillo, otro entró por el sur en este caso Palo de Acero, Cachicoto, otro entró hacía el lado extremo de Huacrachuco, así todo se centralizó en Tingo María y los comandos también entraron por la parte central (del Bolsón Cuchara) Santa Martha, Ochurumayo, pero ante el ablandamiento todos teníamos de una forma que irnos encontrando, ¿no?, ir cerrando el cerco para que no puedan escapar, al menos tratar de lograr el objetivo que se había propuesto (Junio 2002, varón 30 años, comerciante, en la época de la violencia participó en la Operación Aries)

El inicio de la Operación Aries fue una sorpresa porque era considerada una misión secreta: no se sabía cuándo se iba a realizar la operación, ni a qué hora, ni qué día; *simplemente la hora llegó de arriba y se dio inicio a la operación.*

Asimismo, cuando los comandos llegaban al monte y se encontraban con población *supuestamente* civil, ellos no podían identificar ¿quién era quién? En ese momento, los comandos optaron por utilizar la táctica ejecutiva (arrasar), aprendida en su preparación para desarrollar la operación. La lógica de estos actos violentos se basó en la idea preconcebida de que toda la población era senderista y en demostrar la ferocidad de las fuerzas armadas frente al enemigo.

[...] tu no podías decir quién es quién ahí, por eso tenías que actuar de cierta forma, ó sea hubo muchos casos de muertes porque si tu dejabas a un grupo, estabas dejando un futuro terrorista porque ese hombre ha visto morir a su gente e íbamos (el Ejército) y encontrábamos ese resentimiento en la zona. Así, tuvimos que eliminar, tratar de eliminar todo lo que es malo y durante el transcurso de la Operación hubo muchas cosas, muchas muertes

Durante la Operación, los comandos tuvieron que soportar el resentimiento de la gente por matar a pobladores inocentes, las emboscadas del PCP-SL e, incluso el envenenamiento de los alimentos de la chacra. Debido a esto último, los comandos tuvieron que comer cualquier cosa: tallos, vegetales, etc.

No podíamos coger nada de esos lugares por miedo a estar envenenado. Las frutas eran envenenadas con jeringa porque por dentro estaban todas negras, eso no se podía comer. Nosotros teníamos que llevar nuestro rancho pero se acababa rápido porque solo era para una semana, y era mucho peso además de los armamentos. Los comandos tuvieron que subsistir comiendo tallos o algún vegetal que se encontraba en el monte o cazar algo para poder comer, tampoco podíamos hacer mucho humo porque si no seríamos blanco fácil para Sendero. A veces el apoyo aéreo nos abastecía con comida pero no eran todos los días porque si no estaríamos entregando nuestra posición al enemigo.

Si se revisa el mapa diseñado por las fuerzas armadas puede constatarse el desplazamiento de los comandos de la siguiente manera (ver mapa adjunto):

- La primera entrada fue por Bolsón Cuchara a través de Venenillo y el río Monzón donde se encontraban los Comités Populares Abiertos de Santa Martha y Corvina;

- la segunda entrada se realizó por el extremo sur del Bolsón Primavera a través de Moena donde se encontraban los Comités Populares Abiertos de Salvador y Bijao (en este último lugar se identificó una Fuerza Principal),
- la tercera entrada fue efectuada por el centro del Bolsón Primavera a través de San Isidro donde se encontraban los Comités Populares Abiertos de Bolognesi, Blanquillo (aquí se ubicó una Fuerza Local) y San Isidro; y
- la cuarta entrada se realizó en el extremo norte del Bolsón Primavera, vía Alto Pucate, donde se identificaron Comités Populares Abiertos en San José de Pucate y Primavera, aquí se ubicaron los Comités Populares Abiertos y el Comité Regional del Huallaga.

El recorrido de los comandos especiales terrestres de la Operación Aries fue apoyado por helicópteros artillados que lanzaron «rockets» y balas a las casas según la comunicación de los comandos terrestres. Las ordenes que tenían los comandos militares era arrasar con todo contingente del PCP-SL sea hombre, mujer o niño.

Mucha gente murió y otra logró sobrevivir a estos ataques. La población sobreviviente no recuerda la fecha de cuando sucedió, pero sí cómo los soldados del Ejército hacían todo lo que querían con las personas aduciendo que eran terroristas.

[Ese año 1994] la gente también escapaba, y ahí metían su balazo... le dejaban, a veces le cortaban... lo cortaban sí y le dejaban, a veces cuando agarraban vivos lo llevaban pero siempre lo mataban, porque desaparecían... En ese tiempo, nosotros no estábamos acá vivíamos más al fondo en mi chacra, a veces teníamos cuidado porque mataban, en ese tiempo desaparecían (Mayo, 2002. Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón 41 años, campesino, en la época de la violencia era peón)

[...] pasaban por las chacras también, destruyendo todo un área grande completamente,... destruyeron toda la cosecha, todo eso, más bien alguna gente se les escapo obviamente (Mayo 2002, Lima, varón 50 años, sacerdote, en la época de la violencia era miembro externo de la comisión del CCD que investigó la Operación Aries)

Asimismo, en las operaciones realizadas por los comandos del Ejército también se incautó armamento de corto y largo alcance, así como volantes que apoyaban las actividades senderista y,

[...] libros de contenido ideológico como las obras de Mao Tse Tung, cuadernos con simbología que utilizaban para comunicarse y hasta las famosas cartas de sucesión (La República... Abril, 1994: 14).

El día 20 de abril de 1994 el Coronel Jano, Jefe del Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, mencionó que el éxito de la Operación Aries se medía por la efectividad al controlar todas las salidas existentes de la margen izquierda del río Huallaga para no dejar escapar a ningún subversivo que operaba en la zona.

Se les ha bloqueado todas las salidas, prácticamente encerrados porque hemos taponeado todas las salidas de Moena, Moyuna, Aucayacu, Pucate, Bijao, Bolognesi y Blanquillo. No tienen escapatoria. Sus jefes, de un momento a otro, caerán y así lograremos la tan ansiada meta de la pacificación en esta golpeada región del Perú (La República, 20 de Abril, 1994: 2).

El Coronel Jano aseguró que por los feroces ataques propinados por los comandos del Ejército las huestes senderistas habían huido hacia diferentes zonas del Huallaga,

[...] se reveló que las dos columnas subversivas, integradas por 180 hombres y mujeres, no soportaron el sistemático ataque en los últimos días y por esa razón se han visto obligados a huir a la frontera con San Martín de Pucate. Mientras que la otra, compuesta por unos 40 combatientes se ha desplazado hacia Huánuco (La República, 20 de Abril, 1994: 2).

Confirmando esta versión, el general Alfredo Rodríguez, Jefe Militar del Frente Huallaga, también resaltaba el avance de los comandos militares sobre el teatro de operaciones de la margen izquierda del Huallaga,

[...] el operativo Aries es un éxito porque se ha avanzado en un 60 % en la lucha contra los últimos bastiones de Sendero Luminoso, que aquí dominaba a la población a través del accionar de la compañía Mar Rojo y la fuerza local, comando de elite dotados de gran armamento (La República, 25 de abril, 1994: 3)

Sin embargo, un informante clave nos indica que los enfrentamientos fueron encarnizados y los senderistas recurrieron a muchas tretas gracias a su conocimiento de la zona. Eso propició que los soldados retrocedieran. Por esta razón hubo muchas bajas también entre los efectivos de las fuerzas del orden:

[Hubo] muchos muertos,...muchas bajas de compañeros de las compañías que se quedaban inválidos y no pensábamos ya en que tanto terreno había conseguido controlar Sendero en esta zona. A nosotros nos hostigaban cada 10 o 15 minutos, hostigar era ráfagas de balas o detonaban explosivos y de repente paraba todo y nunca más oías ni veías nada y ya tenías 2 o 3 bajas y tú no sabías de dónde te habían disparado

Por ahí el mismo bosque te confundía porque el eco de las balas te confundía, tú pensabas que era del frente o pensabas que era de atrás, ó sea te aturdías y te mandaban más. No teníamos contacto directo con el enemigo pero ya teníamos bajas y es como un poco traumático y así se decide sacar a la gente de esta operación y meter otra gente para que esa gente tome un poco de aire porque en sí fue muy duro

Con los avances de la Operación Aries también aparecieron denuncias sobre abusos de parte de las fuerzas armadas sobre la población civil. Ante estas denuncias intervino la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que al visitar la zona y entrevistar a sobrevivientes, constató que las fuerzas armadas habían cometido violaciones a los derechos humanos de las poblaciones civiles asentadas en la zona de la operación. Debido a ello, la CNDDHH hizo público a nivel nacional los atropellos que cometieron en el Alto Huallaga y el Jefe Militar del Frente Huallaga arguyó en diferentes conferencias de prensa que las zonas donde los

comandos estaban combatiendo no son poblados sino conjuntos de casas aisladas y desperdigadas en las áreas conocidas como Bolsón Cuchara y Bolsón Primavera. El día 21 de abril de 1994, el Comando Político Militar del Frente Huallaga en comunicado entregado a la prensa el día 20 de abril desmiente *supuestos bombardeos a la población civil en las operaciones antiterroristas que las fuerzas del orden ejecutan en toda la zona del Huallaga* (Ver: La República, 21/04/94). Asimismo, el Coronel Jano el día 21 de abril de 1994 declaró que las fuerzas armadas no habían realizado bombardeos sino *rocketeos*, cuyo armamento no alcanza grandes extensiones.

Según las fuentes militares de la Operación Aries, ante la inminente caída de los últimos bastiones del PCP-SL en el Huallaga, el Comando Político Militar del Frente Huallaga incluyó una estrategia psicosocial a través de volantes, arrojados desde helicópteros, que recomendaban a los mandos subversivos, que intentaban escapar de las fuerzas del orden, acogerse a la ley de arrepentimiento.

[...] en las próximas horas emitirá (el Comando Político Militar del Frente Huallaga) un comunicado oficial invocando a los mencionados senderistas a que se acojan a la ley de arrepentimiento. Esta mañana y con el objetivo de lograr que los extremistas en fuga del asedio militar depongan las armas, varios helicópteros sobrevolaron la extensa zona donde se encontrarían dispersos los sediciosos y arrojó unos cien mil volantes invocándoles acogerse a la ley de arrepentimiento (La República, 21 de abril, 1994: 5).

La Operación Aries tuvo que detenerse definitivamente el 26 de mayo de 1994 por las graves denuncias de violación de los derechos humanos acogidas por la CND, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático (CCD).

Tras cincuenta días de operaciones envolventes y capturas, que se iniciaron el 5 de abril, finalizó hoy la operación antiterrorista «Aries», que se efectuó en el ámbito del Frente Huallaga, especialmente en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco), según informó el jefe de esa circunscripción, general de brigada EP Alfredo Rodríguez Riveros. Prestó declaraciones, luego de presentar a 23 de los 30 terroristas capturados, en las últimas operaciones y de mostrar gran cantidad de armamento, municiones, medicinas y documentación requisada a los subversivos (El Comercio, 26 de mayo, 1994, CNDDHH, 1994: 81).

2.12.6. La versión oficial transmitida por algunos medios de prensa

El diario Expreso encarnó la versión oficial de la Operación Aries difundiendo información en grandes titulares y amplio despliegue en las páginas interiores que transmitían a la opinión pública la importancia de su prosecución como parte de la pacificación del país en que estaba empeñada el gobierno.¹² Además tuvo una posición privilegiada, como el mismo diario lo reconocía, ya que su *corresponsal de guerra* recibía datos de primera mano del vocero militar del Frente Huallaga.

¹² Uno de ellos era, por ejemplo, *En contundente ofensiva. EJÉRCITO LIBERA EL HUALLAGA*.

El diario Expreso transmitió información contradictoria y variada, sosteniendo de un lado que el PCP-SL estaba desarticulado y de otro que su eliminación era un tema prioritario para el gobierno de Alberto Fujimori, pero que la paralización de las operaciones militares, ocasionada por la visita de los defensores de los derechos humanos (cuando se hicieron las denuncias sobre el alcance del operativo), alentaba peligrosamente su reorganización.

Igualmente, el número de los supuestos integrantes del PCP-SL se sobredimensionó según el criterio de los voceros militares:

El general Rodríguez informó que, según datos de inteligencia, el batallón «Mar Rojo» estaba integrado por alrededor de un centenar de combatientes altamente fanatizados. Esa división militar está jefaturada por los dirigentes «Rayo» y «Pescadito». (Expreso, 22 de abril, 1994).

Dos días después, en la revista *Caretas* n.º 1298 y 1309 aparece un informe de inteligencia del Frente Huallaga, donde se indica que el PCP-SL contaba, en el Alto Huallaga, con 180 hombres, divididos en cuatro compañías, una de las cuales, Mar Rojo, tenía unos 40 efectivos. El general Nicolás Hermosa Ríos, Comandante de las fuerzas armadas, daría otra versión:

El comandante General del Ejército, general Nicolás Hermosa Ríos, dijo anteayer que el batallón Mar Rojo, que tenía 450 hombres en enero, se redujo a 150 hombres hace tres días y a menos de 50 ahora... explicó que la reducción se debió a... bajas y rendiciones (Expreso, 24 de abril, 1994).

Algunos días después, el diario Expreso señaló:

Del batallón, integrado por no menos de 300 hombres, quedan unos 50, de los cuales una parte huye hacia el noroeste y la provincia de Marañón, dentro del departamento de Huánuco, dirigiéndose hacia el nuevo cerco tendido por el Ejército (Expreso, 26 de abril, 1994).

Y al día siguiente:

Se conoce, por ejemplo, que las fuerzas militares son comparativamente iguales o ligeramente superiores a las de los subversivos (Expreso, 27 de abril, 1994).

En los párrafos iniciales de la misma noticia el general Alfredo Rodríguez mencionaba:

El nuevo bolsón (cerco militar) impedirá que lo que queda del derrotado batallón (Mar Rojo) que huye hacia donde está el Ejército, no pueda reunirse con otros pelotones senderistas que operan en San Martín (Expreso, 27 de abril, 1994).

Sobre el armamento que poseía EL PCP-SL hay también variaciones sustantivas que se fueron modificando en el curso de los días. Según Expreso: «(El Ejército Guerrillero Popular) Son unos 250 hombres, armados con fusiles automáticos de fabricación checa y ametralladoras

norcoreanas AKM» (Expreso 20 de abril, 1994). Mientras que el ejército combatía con: «Armamento... ligero: metralletas FAL y granadas» (Expreso, 27 de abril, 1994).

El mensaje que transmiten ambas noticias es que el ejército enfrenta a un enemigo en desiguales condiciones, cuando la verdad es que tenía apoyo aéreo y estaba dotado de armas de mayor capacidad ofensiva (además de fusiles FAL, ametralladoras, bazookas, morteros, instalaza, etc.), mientras Sendero, según lo reconocían los analistas, no poseía ametralladoras, sino fusiles de asalto AKM calibre 7.62, en su mayoría robados de la Policía o adquiridos con el dinero que obtenía del narcotráfico.

Una contradicción más notoria es la que publica Expreso el día 29, en la que los senderistas aparentemente se encontraban desarmados pero al mismo tiempo habían incrementado el número de sus integrantes: «Fuentes confiables indicaron que la columna subversiva cuenta con unos 150 hombres que se hallarían carentes de alimentos y material bélico» (Expreso 29 de abril, 1994).

Al parecer, este sería el mismo contingente militar del PCP-SL que, de acuerdo a la información obtenida por Expreso, tenía en el mes de enero 450 hombres, 50 el 27 de abril, y 150 el día 29.

2.13.6. La versión no oficial de los hechos

Poco antes de que se diera inicio a la Operación Aries, según Juan Pérez, las fuerzas armadas alertaron a la población de las acciones armadas de gran alcance que se iban a realizar, a través de volantes arrojados por helicópteros, en los que se recomendaba a los que no eran senderistas salir de la zona, en caso contrario debían atenerse a las consecuencias¹³.

[...] ya se había anticipado a la población civil que tenían que salir, que se aproximaba un operativo con mucha fuerza, se les había anticipado... faltando 15 días se volanteó toda la zona desde... las alturas de Cachicoto hasta la Morada, Madre Mía, la gente de Progreso y se volvió a volantear 3 veces...

Pero esta difusión no tuvo el impacto esperado sobre la población por tres motivos:

a.- La alta tasa de analfabetismo existente en la zona, lo que impidió que los mensajes fuesen entendidos por la mayoría.

Sí, por ahí debe estar metido, fui andando siempre con ese papelito... hasta que tuve que salir de mi casa para salir por otro lado caminando 5 días al sur (Monzón) (Didario Alvarado. Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado).

(¿Qué fue del operativo Aries?) ¿Arias? (vinieron los lagartos) ¡Ah!, ya, ya, ah esos lagartos vinieron acá bombardeaban (Mayo 2002. Caserío de Primavera. Distrito de José

¹³ Comunicación personal con Gloria Helfer.

Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón, 38 años, campesino, en la época de la violencia lo era también)

b.- Aquellas personas que tenían conocimiento de la realización de la Operación Aries no pudieron abandonar las zonas de los Bolsones Cuchara y Primavera, debido a presiones del PCP-SL.

El problema era que cuando había un aviso de que salga la gente, ya nos cerraban el paso (SL), por donde salíamos, éramos o no éramos (de ellos) teníamos que morir, así era (Grupo Focal. Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado).

c.- Por las condiciones geográficas y climatológicas los volantes no llegaron a sus remitentes y se destruían.

[...] nos dijeron (el Ejército a la Comisión del CCD) que habían arrojado desde helicópteros volantes anunciando la operación, ¿dónde habrán caído esos volantes? Quizá en las chacras o en los cicales y ahí se destruyeron por la humedad. Tal vez ese fue uno de los motivos de que mucha gente no estuviera enterada de la operación, además mucha gente era analfabeta¹⁴

Una vez que el comando estimó que la población estaba enterada del operativo Aries, dio inicio a las acciones con la intervención de helicópteros artillados que lanzaron «rockets» y ráfagas de metralla contra las ubicaciones del PCP-SL el 5 de abril de 1994, luego de lo cual ingresaron las fuerzas terrestres disparando de manera indiscriminada, según la versión que recogiera la población de los mismos militares.

[...] según que va corriendo la gente adelante tiran la bomba, por detrás está también el Ejército, a veces hasta dos helicópteros, yo estoy seguro que la totalidad de esa ya no vive (Melquíades Penadillo. CNDDHH, 1994: 119).

(Un capitán de los comandos se comunicó a la base de Tingo María y preguntó) qué debemos hacer con los niños y ancianos, porque hay niños y ancianos y le dijeron barre con todo, así le contestaron de la base de Tingo (María Rivera, Cerro Cóndor. CNDDHH, 1994: 130)

No es posible conocer el número de subversivos y de pobladores que murieron a causa de las acciones, en cambio hay testimonios de la forma en que los soldados practicaban las capturas, o ingresaban a las propiedades y sembríos.

Ante estos acontecimientos, muchas familias optaron por escapar, refugiándose en el bosque o separándose en pequeños grupos o individualmente para no ser detectados por los comandos terrestres o los helicópteros que estaban alertas a cualquier movimiento para intervenir. Sólo cuando salieron de la zona de influencia (aproximadamente 60 metros a ambas márgenes de las trochas) trataron de indagar por la suerte corrida por el resto de la familia, vecinos o amigos.

Corriendo íbamos para salvar la vida, unos en los árboles calladitos para que no nos escuchen, ya después ahí nos encontrábamos por ahí, por arriba... ¿quién va a esperar a otro? Nadie, porque saben que lo matan (Mayo 2002, Caserío de Santa Martha. Distrito de

¹⁴ Comunicación personal con Gloria Helfer.

José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón 59 años, campesino en la época de la violencia también lo era)

[...] cuando corría me encontré con un grupo grande de personas que venía de otros sitios, eran 50, así eran, yo felizmente no me le junté porque tenían un chanco que se les escapó y lo perseguían, a ellos nunca más los vi... el Ejército los llevó, no sé... (Mayo 2002. Caserío de Santa Martha. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón 37 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

Después de 10 o 15 días, cuando estimaron que la presión militar había disminuido, la población retornó a su propiedad, encontrando que todo estaba en escombros o inutilizado, ya que uno de los objetivos militares era la destrucción total de las supuestas bases del PCP-SL, lo que incluyó las fincas y sembríos de la población civil, en el entendido de que sus propietarios eran colaboradores de la subversión.

[...] han quemado tres cuartos (se refiere a una casa de chacra), todo (quedó) deshecho,... tenían víveres, frazadas, arroz, fideos; todo lo han deshecho... El Ejército quemó todo... entrando a pie le han incendiado... (Mayo 2002, Caserío de Venenillo. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón, 61 años, campesino en la época de la violencia también lo era)

Asimismo, según estos testimonios, el camino que conecta a los diferentes caseríos del bolsón Cuchara estaba lleno de cadáveres, de hombres, mujeres y niños, que presentaban extremos maltratos y violaciones de derechos humanos (torturas, degollamientos, trozaduras, violación sexual, etc.).

[...] muchas personas las vimos cortadas con hacha, tiradas en el suelo, toda una fila era de gentes arrojadas en el camino. Otras estaban con cuchillo, tapada la cara, siempre lo hacían así seguro para que no le vean. Hasta miedo nos daba ir por ahí con tanto muerto... (Mayo 2002. Caserío de Santa Martha. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón 37 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

Una señora hace poco iba a dar a luz, la han descuartizado, le han sacado el bebe y lo han botado al agua. A los niños le cortan su cuellito (Luisa de Espinoza. CNDDHH, 1994: 118).

A una niña de 6 años la han violado y la han dejado calatita. (Otra voz dice: A dos señoritas también las han dejado calatas. Boca abajo) (Delia Falcón de Julcarima. CNDDHH, 1994: 124).

En el bolsón Primavera también se registraron atropellos que presentaban similares características a los del Bolsón Cuchara. Las evidencias y testimonios de estos actos violentos fueron difundidos a la opinión pública, primero, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y periodistas, y, después, por la Comisión de Derechos Humanos del CCD. Cecilia Valenzuela, Oscar Medrano de Caretas y Gilberto Hume y Josefina Townsend, reporteros de la cadena norteamericana CNN y de Canal 9, estuvieron en la zona del conflicto armado el último fin de semana, con la finalidad de entrevistar a testigos que hablaron de los bombardeos y ametrallamientos a caseríos ubicados en el bolsón Cuchara y bolsón Primavera. A partir de sus informes periodísticos se puede ver que la percepción de los periodistas sobre los hechos registrados se refiere a acciones militares que buscan la liquidación de un fuerte contingente

senderista, pero que desgraciadamente sólo han costado víctimas civiles (Caretas, 21 de abril, 1994: 13).

El 21 de abril de 1994, el semanario Caretas presentó un artículo en el que se describe el hallazgo del cadáver de una joven y cinco cuerpos irreconocibles en Moyuna.

Un cráneo desprendido del cuerpo asomaba entre las hojas de un cocal... Un campesino había encontrado los restos de su hija y trataba de meterlos en una bolsa. Los demás miembros del grupo (periodistas y campesinos) avanzaron bordeando una pequeña colina -cada uno de ellos buscaba por lo menos a un familiar desaparecido- y de pronto empezaron los alaridos: cinco cuerpos picoteados por las aves de rapiña, prácticamente irreconocibles, yacían desparramados en un sembrío (Caretas, 1994: 12).

Con el desesperado afán de salvar su vida, los agricultores de Bolsón Primavera se desplazaron en dos direcciones: unos (alrededor de 500 personas) se dirigieron al sur, hacia las orillas del río Magdalena, pero lamentablemente fueron detectados y confundidos por las patrullas militares, las que iniciaron su persecución.

Al otro lado, Moena, Salvador... Allí era la balacera, el bombardeo. Por donde yo vivo, no ha habido ningún enfrentamiento, escuchamos lo que la gente gritaba pidiendo auxilio. Por eso más nos hemos escapado... toda la gente nos reunimos, sesenta, setenta, para subir para el monte, para escondernos, para sobrevivir. Hemos tenido que subir, cuanto más nos concentramos (formando un grupo que llegó a tener 500 personas), nos perseguían los militares y más y más, por último nos hemos metido al monte, nos hemos extraviado y hemos salido al río Magdalena... los niños lloraban, se han agusanado sus cabecitas, los insectos les han penetrado. Y de hambre... Yo he salido, como sé manejar balsa he tenido que hacer una balsita... (así) tomando el río Magdalena hemos llegado sin novedad... la gente me suplicaba que encuentre la salida, vas a regresar don... para que nos trates de sacar de acá... como comisionado tengo que cumplir este trabajo. Por eso he venido a buscar esa protección (Gregorio Asca, Moyuna. CCDDHH, 1994: 137-140).

Otro grupo de campesinos se dirigió al este del bolsón Primavera llegando a una de las orillas del río Huallaga donde quedó atrapado porque la creciente de las aguas le impidió cruzarla. Entonces los agricultores decidieron esconderse en los alrededores. Desafortunadamente no todos lograron ese propósito, siendo alcanzados por las patrullas. Entre éstos ni los agentes encubiertos del Ejército pudieron sortear el peligro, como fue el caso de Jesús Vera Vigilio¹⁵, cuya esposa, la señora Amalia Tolentino, reconoció que era un agente de inteligencia del Ejército destacado en el bolsón Cuchara.

(Luego de escapar de los comandos militares, Amalia fue en busca de Jesús y lo encontró muerto) ... Jesús tenía las manos atadas en la espalda, con su camisa negra... Aparte le colocaron un polo amarillo en la cabeza... Cuando le saqué el polo, vi espantada que le habían cortado el cuello. Habían matado a mi Jesús. ¡Y él era inocente! (en esta oportunidad fueron 8 los varones muertos) (Amalia Tolentino. CNDDHH, 1994: 160; La República, 2 de mayo, 1994).

¹⁵ En casi todo el Alto Huallaga, el EP tenía gran cantidad de agentes encubiertos que trabajaban como comerciantes o choferes para obtener información sobre el PCP-SL, sus movimientos, sus mandos políticos, logísticos y militares. Jesús Vera Vigilio fue uno de ellos.

En casi todos los testimonios hay un acto constante que se repite: los actos de violación sexual a las mujeres. Cuando las personas eran capturadas por los comandos militares, éstos los agrupaban por sexo. El grupo de los hombres siempre era el primero en ser asesinado, bajo el supuesto de que podían rebelarse ante el maltrato sexual a sus esposas, hijas o vecinas. Luego los soldados se distribuían a las mujeres para violarlas y matarlas.

Entraron los del Ejército y nos correataron, a los que huían los abaleaban y a los que encontraban por la playa los cortaban con cuchillo... Grandes, chiquitos y viejos eran despedazados. Por miedo a ellos es que nos hemos escapado al monte. Yo he salido después de 21 días con otros 10 vecinos... Otros... (dicen) que han detenido a muchas personas y los separaban a hombres y mujeres. Primero han matado a los hombres y después han violado y matado a las mujeres (Alfonso Ponce. CNDDHH, 1994: 164).

... A mi lado estaba una chica de trece años que se llamaba Lourdes... Estaba muy nerviosa y no quería separarse de mi lado... (pero) varios soldados se la llevaron. Entonces Lourdes comenzó a gritar y a llorar. Después no la volví a ver más... Hasta que se calló. Más tarde me vinieron a buscar a mí. Los soldados decían «¡Qué rica que estaba Lourdes!». Entonces supe que la habían violado y que me tocaba a mí. Los soldados empezaron a manosearme las piernas, distintas partes del cuerpo. Cuando ya me estaban arrastrando, mi bebe Cinthya se puso a llorar. Sólo así se fueron (Al día siguiente fue utilizada como guía de los soldados pero se escapó y encontró muerto a su esposo) (Amalia Tolentino. CNDDHH 1994: 160).

... contó también que en otras casas escuchó que tenían algunas mujeres, casi toda la noche violándolas, porque los muchachos (soldados) decían «ahora me toca a mí, ahora entre el otro, el otro» y después decían: «yo le hice esto, yo hice esto, vanagloriándose... (Un testigo que habló con Daniel Le Blanc. CNDDHH, 1994: 134).

Después de las violaciones sexuales, los comandos militares dejaban a una mujer con vida para que les sirviera de guía. Ese fue el caso de Amalia Tolentino, quien con bebé en brazos escapó de los comandos militares, aunque es posible que ella se salvara porque manifestó a sus captores que su esposo era colaborador del ejército.

[En Moyuna] A mí no me mataron porque yo debía servir de guía, según ellos yo sabía donde estaban los «tucos»... (Amalia Tolentino. CNDDHH, 1994: 114-115)

Sobre el número de muertos y desaparecidos, no hay una cifra aproximada, debido a que los parlamentarios de la CCD, que visitaron la zona después de las denuncias que hiciera la CNDDHH, no constituyeron una comisión investigadora. Pero según los testimonios brindados a la CNDDHH, los entrevistados mencionaron un número muy alto, remarcando la extrema violencia con que actuaron los militares.¹⁶

Ellos hablan de 60, 80, porque ha pasado el helicóptero barriendo con toda la gente... (Hugo Oliva, párroco de Aucayacu. CNDDHH, 1994: 122).

En todo el camino dicen que hay muertos, hay niños, hay adultos. O sea, donde uno choca con ellos, ya es muerto. Ya no puedes salvarte ni con nada (María Campa. CNDDHH, 1994: 127).

¹⁶ A pesar de todos atropellos cometidos por el PCP-SL, los pobladores mencionan que cuando el PCP-SL encontraba a alguna persona que había trasgredido las normas y el orden impuesto por el partido, ésta tenía opción a un juicio popular, cosa que no pasaba con el Ejército que mataba sin preguntar. Si bien muchas personas han muerto en los juicios populares, otras pudieron salvarse por decisión de la población.

(Delia Falcón preguntó a una señora que venía de la margen izquierda del Huallaga) ¿De dónde sale?, De allá de la otra banda, me dice: señora hay muertos bastante, de los 30 hemos escapado dos, los 28 son desaparecidos, los demás hemos visto que han matado con machete, le han sacado su ropa (CNDDHH, 1994: 145).

A otro le han sacado de acá (señala la parte de la garganta), hasta acá (señalando a la altura del vientre), el corazón le han sacado y hace días lo han dejado (María Rivera, Cerro Cóndor. CNDDHH, 1994: 130).

... (Los del Ejército) le cortaban la cabeza, hacían desaparecer la cabeza, le sacaban el intestino, les cruzaba las piernas, los pies y lo dejaban ahí tirado como para no reconocerlo nada... (Mayo 2002. Caserío de Primavera. Distrito de José Crespo y Castillo. Provincia de Leoncio Prado, varón, 75 años, campesino, en la época de la violencia también lo era)

2.12.7. El Papel de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Las primeras informaciones que tuvo la CNDDHH sobre las violaciones de derechos humanos, procedieron de personas que lograron escapar de los iniciales bombardeos y acciones de la Operación Aries. Eso facilitó la tarea la alerta a la opinión pública sobre el objetivo que parecía buscar la campaña militar en la margen izquierda del río Huallaga, donde poblaciones civiles, con alta densidad de niños, jóvenes, mujeres y ancianos, habían sido consideradas objetivos militares como si se tratase de bases del PCP-SL. Según las noticias recibidas por la CNDDHH, los caseríos más afectados por las operaciones militares eran Moena y Moyuna (ubicados frente al caserío de Anda, margen derecha del Huallaga), donde se encontraron 13 cadáveres.

Ante la magnitud de las denuncias, el 16 de abril de 1994 viajó al Alto Huallaga una comitiva de la CNDDHH conformada por Pablo Rojas, Roger Niego, Ivonne Montoya, José Nalvarte y Ernesto de la Jara, además del congresista Roger Cáceres Velásquez y el sacerdote Daniel Le Blanc, responsable del Servicio de Justicia y Paz para América Latina de la Orden de los Oblatos de María Inmaculada, congregación religiosa que se encuentra en el Huallaga desde 1962. La comitiva recogió numerosos testimonios de personas que lograron escapar de las operaciones militares, como se puede constatar en las grabaciones magnetofónicas y video que presentó la CNDDHH a la Fiscal de la Nación¹⁷ y a la ciudadanía en general, a través de diversos medios de comunicación, como el siguiente, en el que se relata la violación y asesinato de una menor de edad:

¹⁷ Después de sobrevolar la zona donde se desarrolló la Operación Aries, Blanca Nélida Colán, Fiscal de la Nación, consideró que las denuncias formuladas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas no eran ciertas: «He podido verificar que son inexactas las afirmaciones que se están diciendo en algunos medios de comunicación como ustedes han sido testigos, hemos visitado Venenillo una serie de pueblos que se dice habrían sido bombardeados y cometido una masacre» (El Comercio, 24 de abril, 1994). Sin embargo, Colán nombró a un fiscal ad-hoc, Carlos González Ortiz, quien realizó las primeras investigaciones en Moyuna y Moena. Este fiscal manifestó inicialmente que en Moyuna, donde realizó una visita de inspección, no había muertos, pero el 29 de abril volvió al lugar, acompañado de una patrulla militar y dos médicos legistas; en esa oportunidad afirmó haber realizado la necropsia de cinco personas (cuatro hombres y una mujer), quienes según su evaluación habían fallecido hacía seis meses. «Estos cuerpos fueron enterrados porque eran osamentas y no había necesidad de traerlos, por eso llevé a los médicos legistas para que les hicieran las necropsias y los enterré. Sobre los otros dos cuerpos encontrados afirmó que sí los trajo porque estaban más cerca» (Caretas, 19 de mayo, 1994). Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la Operación Aries fueron posteriormente archivadas.

Yo conté 150, uno, dos, tres, cuatro... (eran) 150 soldados. Nosotros estábamos ahí toda la noche, esa noche con lluvia, es la que matan a la Lourdes, gritaba... ahí más abajito había una casita, ahí ellos se habían hospedado y nosotros nos habíamos subido más arriba. Ellos (los comandos militares) en esa casa han estado durmiendo, ellos dijeron nosotros acá no más, nos quedaremos (Junio 2002, mujer campesina, en la época de la violencia también lo era)

Asimismo, la CCNDHH mencionó que estos actos de violación a los derechos humanos de la población no sólo se habrían efectuado en Moena y Moyuna, sino que pudieron extenderse al resto de caseríos de los bolsones Cuchara y Primavera.

[...] el número de muertos podía ser «alarmantemente alto», y que «se tenía documentación y testimonios directos de la matanza de por lo menos 10 campesinos en Moyuna y 13 en Moena, además de indicios del exterminio de 40 personas más, cuyos cadáveres habían sido vistos en el paraje de Ganadería» (Rosa Mujica. CNDDHH, 1994: 46).

El 19 de abril de 1994, la CNDDHH dio a conocer, a través de su primer comunicado titulado *Que no vuelva el horror*, su preocupación porque la Operación Aries continuara sin tomar en cuenta las denuncias de civiles muertos, haciendo un llamado a las autoridades pertinentes y a la Fiscal de la Nación para poner fin de inmediato a estas prácticas, porque en su opinión reinstalaba la *guerra sucia* que el país sufriera desde 1980; al mismo tiempo, exigía garantías para que los familiares de las víctimas pudieran dar su versión de los hechos y se permitiera el ingreso de los representantes de la Cruz Roja Internacional¹⁸ a la zona de conflicto.

[...] los peruanos habíamos empezado a creer que lo peor de la tragedia de violencia y muerte había acabado en nuestro país... (pero) recientes informaciones... nos indican que los horrores de la «guerra sucia» estarían regresando, tanto por la práctica criminal del senderismo como por determinadas acciones de las Fuerzas Armadas (CNDDHH, 1994: 46).

Como una respuesta a estas declaraciones, el 20 de abril de 1994, el Comando Político Militar del Frente Huallaga emitió un comunicado oficial (N° 019/RRPP/F-H) donde especificó que las versiones de la CNDDHH estaban equivocadas resaltando que las fuerzas armadas respetaban los derechos humanos de las poblaciones asentadas en la margen izquierda del Huallaga.

Este comando aclara que las operaciones que se producen desde el 05 de abril a la fecha (no el 01 de abril como menciona la CNDDHH), en el área rural de los distritos de José Crespo y Castillo y Rupa Rupa, de la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, se realizan sin afectar en los absoluto a los pobladores que viven en las colinas conocidas

¹⁸ Durante el tiempo que duro la Operación Aries, la Cruz Roja Internacional (CiCR) no logró ingresar a la zona de conflicto. Infructuosamente, esperó tener acceso a las zonas en las que se venían produciendo enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el PCP-SL. El 23 de abril de 1994, el Comandante General de las fuerzas armadas, Nicolás de Bari Hermosa, invitó a los representantes de la Cruz Roja a inspeccionar la zona en conflicto, pero siempre acompañados por una patrulla de comandos del EP (La República, 23 de abril, 1994: 2). Mientras que el 27 de abril, George Comninos, representante de la Cruz Roja en el Perú, responde a dicha invitación incidiendo que en el Perú como en todas las situaciones de conflicto en el mundo donde actúa, la Cruz Roja tiene por principio desplazarse sola, bajo la única protección del emblema de la Cruz Roja (La República, 27 de abril, 1994).

como Moyuna, Moena, Salvador, Bijao, Venenillo y otras. Y en ningún momento han sido o están siendo bombardeadas o atacadas por las fuerzas del orden, como algunos elementos (como la CNDDHH) están propalando a la opinión pública (CNDDHH, 1994: 230; La República, 21 de abril, 1994).

Uno de los miembros de la CNDDHH, el sacerdote Daniel Le Blanc, quien participó en las entrevistas a los pobladores, replicó que la posición del Ejército pretendía ocultar las bajas civiles ocurridas en lugares donde no se habían producido enfrentamientos entre fuerzas del orden y elementos subversivos.

Puedo decir que los lugares donde encontramos los cadáveres no mostraban ninguna señal de que ahí hubiera existido algún tipo de enfrentamiento. Por otro lado, todos los testigos responsabilizan a los militares (Daniel Le Blanc. Caretas, 02 de abril de 1994: 74).

Ante el cruce de comunicados y conferencias de prensa entre la CNDDHH y las fuerzas armadas, tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático (CCD).

2.12.8. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático (CCD)

La delegación de la Comisión de Derechos Humanos del CCD viajó a Tingo María el 23 de abril para investigar las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos. Estuvo conformada por cuatro congresistas oficialistas (Carlos Blanco de Oropeza¹⁹, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gilberto Siura, Hugo Zamata y Demetrio Patsías), y por dos congresistas de la oposición (Róger Cáceres y Gloria Helfer), además de Róger Niego y José Jhon Nalvarte como representantes de la CNDDHH, el padre Daniel Le Blanc y Francisco Diez Canseco, representante del Consejo por la Paz, en calidad de invitados.

Por espacio de tres días (23, 24, y 25 de abril) la Comisión del CCD recibió los testimonios de las personas afectadas por la Operación Aries en Tingo María, Aucayacu y Anda, y no obstante que encontraron algunas dificultades para desempeñar sus funciones logró visitar los caseríos de Moyuna y Moena, donde comprobó la existencia de personas muertas.

La delegación del CCD, conducida por pobladores, identificó un paraje de Moyuna, conocido como Shipingo, en el que, en presencia del Fiscal provincial, fueron desenterrados dos cadáveres; uno de ellos fue identificado por un poblador de la zona: eran los restos de Félix Loyola. Los dos cadáveres fueron trasladados a Tingo María por disposición del Fiscal Provincial (CNDDHH, 1994: 58).

La composición de la Comisión de la CCD, de congresistas oficialistas y de oposición, dio como resultado dos versiones contrapuestas sobre lo sucedido en la Operación Aries. Por un lado,

¹⁹ Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD, Carlos Blanco Oropeza estuvo en Huánuco desde el 11 de abril de 1994. Su temprana presencia en la zona fue para investigar los sucesos de violaciones de los derechos humanos cometidos por el EP en Cayumba Chico.

los oficialistas manifestaron que no era posible adelantar juicios sobre las características de la campaña militar ni tampoco sobre el número de muertos, identidad y la forma en que habrían fallecido.

El congresista fujimorista Carlos Blanco Oropesa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD, reconoce que) Se ha comprobado que no existen los cien cadáveres de pobladores civiles masacrados por elementos del Ejército Peruano ni los bombardeos sobre poblados de la zona del Alto Huallaga, como lo denunciaron días atrás algunos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos en el país (CNDDHH, 1994: 65; Gestión, 27 de abril de 1994).

Por otro lado, los congresistas de oposición afirmaron que los testimonios recogidos en la zona señalaban al Ejército como el autor de las muertes.

Por lo que escuché, el Ejército fue el responsable directo de las muertes ocurridas en el Huallaga, no había cómo entender lo que hicieron, eran personas como nosotros. Eso no importó cuando torturaban, violaban y degollaban a las mujeres y a los hombres (Gloria Helfer, comunicación personal).

El oficialismo replicó en los medios, asumiendo una posición de *versión verdadera*, según la cual, las acciones militares contra el PCP-SL no habían afectado a la población civil.

[Dice el congresista Carlos Blanco Oropesa]... Las fuerzas contrasubversivas en el Frente Huallaga no incurren en excesos contra la población civil, sus acciones están focalizadas contra los grupos subversivos ubicados en bolsones, en la selva norte del río Monzón.. (CNDDHH, 1994: 65; La República, 27 de abril, 1994).

Además, a su regreso a Lima, el congresista fujimorista Oswaldo Sandoval presentó una moción de condena contra la CNDDHH por haber difundido, «sin pruebas objetivas y reales», las denuncias contra las fuerzas armadas, la misma que fue aprobada por la mayoría gobiernista del CCD.

[El Congreso Constituyente Democrático acuerda] Condenar la forma irresponsable en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha difundido versiones negativas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la zona del Huallaga, en su lucha contra los últimos reductos del terrorismo; versiones que ha comprobado no se ajustan a la realidad, pero que lamentablemente han dañado la imagen y el prestigio del Perú (La República, 29 de abril, 1994).

La moción de condena a la CNDDHH fue refrendada incluso por los congresistas fujimoristas que presenciaron los hallazgos de cuerpos mutilados y degollados, y habían escuchado los testimonios de los sobrevivientes, en cuya ocasión reconocieron verbalmente la magnitud de los hechos, como lo recuerda el sacerdote Daniel Le Blanc.

Al escuchar los testimonios de varias personas de Moena me causaron un gran impacto que busqué a los congresistas oficialistas (Blanco y Siura no recuerdan quién más) más recalcitrantes, que no creían en lo sucedido. Después camino al helicóptero que nos llevaría a Mohna, el señor Siura me dijo, en alusión a la Operación Aries, «esta vez sí se han

pasado»... (Daniel Le Blanc,, 50 años, en la época del a violencia era miembro externo de la comision del CCD que investigó la Operación Aries)

Frente a la moción de censura de la mayoría parlamentaria gobiernista, la CNDDHH presentó a la CCD mayor documentación advirtiéndole que

Nos preocupa también [...] que ya se haya aprobado con su voto (del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD, Carlos Blanco Oropesa) en el CCD una moción de «condena» a la Coordinadora por haber «exagerado» los hechos. En el mismo sentido nos sorprenden las declaraciones que usted ha hecho públicas, reiteradas veces, con el mismo propósito sin haber siquiera escuchado completamente, como su carta indica, los testimonios de la población, ni menos aun tenido oportunidad para evaluarlos (CCDDHH, 1994: 82).

Es suma, el caso fue archivado y nunca más vuelto a tratar.

2.12.9. Conclusiones

El narcotráfico inauguró una etapa de insólita prosperidad en el Alto Huallaga, pero también de una violencia inusitada donde compitieron varios grupos de poder. Incapacitado el Estado para hacer frente a esta situación, comenzó a imperar la ley del más fuerte. Dada la composición social de la zona y el flujo constante de migrantes andinos atraídos por el botín de la hoja de coca y la droga, los conflictos sociales se vuelven endémicos. A esta población sólo los unía un absoluto rechazo al Estado, moralmente debilitado, pero capaz de realizar graves daños a determinados productores a través de las acciones represivas de erradicación de los cultivos de coca.

A pesar de los esfuerzos del Estado (a través de sus instituciones civiles y militares) por corregir sus errores en el tema de la colonización y la fallida erradicación de la hoja de coca, éste no pudo interpretar correctamente el problema y la dimensión del mismo (ya no era sólo la coca, los productores, los narcotraficantes, sino había un actor mucho más violento que deseaba instaurar su «Nuevo Estado»: EL PCP-SL), y al ensayar medidas aisladas e infructuosas que no afectaron las causas del problema, perdió autoridad y credibilidad. Más aún cuando se tuvo como antecedentes los fracasos de los Operativos Verde Mar I (1979) y Verde Mar II (1981) y, luego, otros operativos de erradicación forzada que alejaron al productor cocalero del Estado.

Es en estas circunstancias que aparece EL PCP-SL (1982), que luego de un lento trabajo de captación y adoctrinamiento al campesinado, por un lado, y de intentar la eliminación del Estado, por otro, impone sus propias formas de regulación social. El establecimiento de alianzas con el campesinado y con los narcotraficantes permite que EL PCP-SL se fortalezca en la zona, entre 1986 y 1992, convirtiéndola en enclave político y su principal fuente de recursos para sostener el conflicto armado interno.

2.12.10. ¿De por qué se desarrollo la Operación Aries, si la nueva estrategia contrasubversiva estaba dando buenos resultados?

Para entender por qué se realizó la Operación Aries se deben relacionar dos hechos estrechamente relacionados:

a.- La llegada de Fujimori al poder inició una nueva manera de enfrentar el problema de la violencia e incorporar una estrategia efectiva para derrotar al PCP-SL. La estrategia se planteó como una batalla política y militar. La batalla política se basó en la participación conjunta del Estado con los gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones sociales de base. Se concibió que la unidad de todas las instituciones a nivel local, regional y nacional posibilitara una mayor resistencia a la presencia del PCP-SL. Esta batalla debía de estar relacionada íntimamente con las acciones militares.

b.- Es quizá pensando en este plan que el presidente Alberto Fujimori habló con mucha seguridad que la subversión sería derrotada antes de que concluya su primer gobierno. Esta estrategia contrasubversiva fue coordinada entre el gobierno y las fuerzas armadas para efectivamente derrotar al PCP- SL pero, a la vez, para consolidar una memoria salvadora que identifique a Alberto Fujimori como el vencedor del terrorismo y poder fortalecer su postulación a su primera reelección a la presidencia del Perú.

No es extraño que luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, Fujimori haya autodenominado a su gobierno como el *Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional* que tenía una misión a largo plazo que era enmendar los graves errores político y económicos cometidos por sus antecesores y poder sacar de la crisis económica, política, social y moral que sufría el Perú.

Vincular ambos hechos nos lleva a comprender que la Operación Aries formó parte de la tercera etapa de la estrategia contrasubversiva aplicada por las fuerzas armadas y el Estado. Esta tercera etapa se refirió a la realización de operaciones de limpieza en las zonas donde EL PCP-SL todavía tenía presencia, especialmente en la margen izquierda del Huallaga. Pero también esta estrategia y, especialmente, la Operación Aries se transformaron en uno de los principales argumentos políticos que un gobernante y su cúpula de poder podía presentar al país para conseguir su primera reelección.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) cumplió un papel importante para descubrir los horrores (torturas, muertes violaciones sexuales, etc.) de la Operación Aries. Las personas todavía recuerdan como los comandos militares torturaron, degollaron y descuartizaron a sus paisanos. La denuncia hecha por este organismo para develar las matanzas de población civil llevaron al gobierno, al CCD, a la prensa oficialista (Expreso, canal 2) y a las fuerzas armadas a sindicarlos como *personas no patrióticas* porque, supuestamente, habían dañado

la imagen y el prestigio del país, así como entorpecido la pacificación nacional. Igualmente es importante, porque les da voz a las personas que salvaron su vida de los ataques militares. Por ello, los testimonios de estos pobladores refrendan la afirmación de que las fuerzas armadas cometieron matanzas contra la población civil, a través de acciones militares reiteradas e indiscriminadas donde se utilizó helicópteros artillados que bombardeaban y baleaban a cualquier persona. Asimismo, se identificó la presencia de comandos terrestres del Ejército que procedían a incendiar viviendas, abusar sexualmente de mujeres, torturar y matar a la población. Estas acciones registradas no sólo se efectuaron en Moena y Moyuna, sino constituyeron una secuencia de hechos en todos los caseríos de los bolsones Cuchara y Primavera.

El gobierno consiguió que la denuncia sobre los graves atropellos a los derechos humanos cometidos en el Alto Huallaga sea silenciada y olvidada por la opinión pública. Además, se logró que uno de los más execrables crímenes cometidos en el país permanezca oculto en la impunidad y en aquellos sectores de la memoria que no quieren ser recordados. Así, se logró consolidar en Alberto Fujimori una *memoria salvadora* que lo señala como el vencedor de la subversión, imponiendo el terror al terror.

El control de los medios de comunicación jugó un rol importante para fortalecer el recuerdo del conflicto armado interno. Esta situación hizo posible la construcción de una *memoria salvadora* donde el presidente, su asesor y las fuerzas armadas aparecían como los vencedores de la subversión, y la forma en que triunfó la única posible. Con ello se transmitía que Alberto Fujimori era indispensable al igual que su cúpula de poder para el desarrollo y la pacificación del país.

Bibliografía

Aramburú, Carlos

1989 «Cambios Poblacionales y económicos en la Amazonía Peruana: Notas para discutir». En: Comunidades Campesinas y Nativas. Normatividad y Desarrollo. Comp. Laureano del castillo. Edición SER. Lima

1982 «Expansión de la frontera agraria y demográfica en la selva alta peruana». En: Colonización en la Amazonía peruana. Aramburu, Carlos y Eduardo Bedoya (compiladores). Edición CIPA. Lima.

Aramburú, Carlos y Eduardo Bedoya

1987 «Poblamiento y uso de los recursos en la amazonía alta: El caso del Alto Huallaga». En: Desarrollo amazónico: Una perspectiva latinoamericana. Edición CIPA-INANDEP. Lima.

Barclay, Frederica

1990 «Protagonismo del Estado en el proceso de incorporación de la Amazonía». En: Amazonía 1940-1990. El Extravío de una Ilusión. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

Bedoya, Eduardo

1982 «Expansión de la frontera agraria y demográfica en la selva alta peruana». En: Colonización en la Amazonía peruana. Aramburu, Carlos y Eduardo Bedoya (compiladores). Edición CIPA. Lima.

Belaunde, Fernando

1959 La conquista del Perú por los peruanos. Editorial Minerva. Lima.

Chirif, Alberto

1983 «El colonialismo interno en un país colonizado». En: Saqueo Amazónico. Alberto Chirif. Edición CETA. Iquitos.

Chirif, Alberto y Carlos Mora

1977 Atlas de Comunidades Nativas. SINAMOS. Lima.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

1994 Los sucesos del Alto Huallaga. Lima.

Degregori, Carlos Iván

2000 La Década de la Antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Edición Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

DESCO

1994 Resumen Semanal. Abril-Mayo. Lima

1989 Violencia y Pacificación. Comisión Especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú. Edición DESCO / Comisión Andina de Juristas. Lima.

Dourojeanni, Marc

1988 Deterioro ambiental y conservación en el Perú. En: AMIDEP, N° 57. Lima.

USAID

1981 Fundación para el Desarrollo Nacional. Perú.

Gallo, Tello y Rivera

1994 El impacto del cultivo de la coca. Valle del Huallaga y la Convención. Monografía de Investigación. Cedro. Lima.

Gonzáles, José

1990 «Perú: Sendero Luminoso en el Valle de la Coca». En: Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes. Editor Diego García Sayán. Edición Comisión Andina de Juristas. (2da. Edición).

Gonzáles, Raúl

1994 «El itinerario de Sendero». En: Perú en el fin del milenio. Heraclio Bonilla (Compilador). Edición Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.

1988 «El Huallaga un año después: El retorno de lo reprimido». En: Quehacer N° 54. DESCO, Lima.

Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria y Pecuaria XIV.

1968-1988 Informe costo de producción agrícola: Tingo María. Lima.

Juscamaita, Enrique

1983 «La economía cocalera y su impacto en la dinámica regional: el caso del valle del río Apurímac-Ayacucho». En: Socialismo y Participación N° 24. Diciembre. Lima.

Martínez, Héctor

1976 Las colonizaciones selváticas dirigidas en el Perú. Antecedentes, actualidad y perspectiva. CEDEP. Mimeo. Lima.

Obando, Enrique

1991 «Diez años de guerra Antisubversiva: Una pequeña historia». 46-50 pp. En: Revista Quehacer N° 72. Lima.

Saignes, Thierry

1981 «Continuités et discontinuités dans la colonisation du piedmont Amazonien des Andes». En: Les Phénomènes de frontiere dans les pays tropicaux. Travaux et memoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. N° 34, París.

Santos, Fernando

1992 Etnohistoria de la Alta Amazonía. Edición Abya Yala. Ecuador.

1985 «Crónica breve de un etnocidio o génesis del mito del vacío amazónico». En: Amazonía Peruana, N° 11. Lima.

Soberón, Ricardo

1989 Violencia, contraviolencia y Derechos Humanos. En: I Seminario de Investigaciones Sociales en la Amazonía. Edición CAAAP, CETA, CIAAP/UNAP, CONCYTEC, IIAP, INC. Iquitos.

Tantahuilca, César

1990 «Economía cocalera y violencia social». En: SEPIA III. Lima.

Villanueva, César

1989 «Problemática de la violencia y el narcotráfico en la región de la selva». En: Comunidades Campesinas y Nativas. Normatividad y Desarrollo. Laureano del Castillo (Compilador). Edición SER. Lima

Diarios

El Comercio, 24/04/1994.

El Comercio, 26/05/1994.

El Comercio, 27/04/1994

Expreso 20/04/1994.

Expreso, 22/04/1994.

Expreso, 23/04/1994.

Expreso, 24/04/1994.

Expreso, 26/04/1994.

Expreso, 27/04/1994.

Expreso, 28/04/1994.

Expreso 29/04/1994.

Gestión, 27/04/1994

La República,... abril de 1994.

La República, 20/04/1994.

La República, 21/04/94.

La República, 23/04/1994.

La República, 25/04/1994.

La República, 26/04/1994

La República, 27/04/1994.

La República, 29/04/1994.

La República, 2/05/1994.

Revistas

Revista Sí, Abril-Mayo 1994.

Caretas, 19/05/1994.

Caretas, 02/04/1994.

Oiga, 25/04/1994.

Oiga, 2/05/1994.

Oiga, 9/05/1994.

Informes periodísticos

Canal 2. Luis Iberico. 19/04/1994.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CAD : Comité de Autodefensa.

CORAH: Control y Reducción del cultivo de la coca en el Alto Huallaga

CRAH : Comité Regional Alto Huallaga

CNDDHH: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

DEA: Drug Enforcement Administration, Servicio de Lucha Antidroga de los EE.UU.

ENACO: Empresa Nacional de la Coca

EGP : Ejército Guerrillero Popular

FL : Fuerza Local.

FP : Fuerza Principal

PNP : Policía Nacional del Perú

PCP-SL: Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso

UMOPAR: Unidad Móvil de Patrullaje Rural

2.13. LA VIOLENCIA EN HUAYCÁN

El cono este de Lima Metropolitana fue el principal escenario de la violencia política en la capital. En primer lugar, por las consideraciones estratégicas en el ámbito urbano que identificó el PCP-SL en el marco de su denominado «equilibrio estratégico», entre las que destacaban el hecho de ser una zona donde se localizaban sectores obreros con larga tradición organizativa, un considerable número de asentamientos humanos de reciente creación y una vía importante de abastecimiento para la ciudad.

En segundo lugar, porque dada la importancia de la presencia subversiva en esta zona de Lima, la política contrasubversiva llevada a cabo desde 1988 la consideró como prioritaria para sus objetivos. De esta manera, se instalaron dos bases militares y fue el lugar donde se iniciaron los operativos de rastrillajes.

Entre los diversos escenarios locales que compuso la violencia política en el cono este de Lima destacan, sin lugar a dudas, dos de ellos: la Comunidad Autogestionaria de Huaycán y la Asociación de Vivienda Jorge Félix Raucana.

Los asentamientos humanos de Huaycán (1984) y Raucana (1990) fueron creados en distintos momentos, pero comparten una característica: existieron en la imaginación de sus promotores políticos antes de hacerse realidad. Huaycán fue un proyecto concebido por la Izquierda Unida, desde la Municipalidad de Lima. Raucana fue, por otro lado, un asentamiento humano concebido y organizado por el PCP-SL en función a sus objetivos políticos.

En los dos casos la idea política debió confrontarse con las expectativas de los pobladores en un marco de consensos y disensiones bajo una situación de violencia política generalizada en el país. Las dificultades fueron entendidas por la opinión pública como una mera manifestación de la acción de los grupos subversivos, especialmente del PCP-SL. Sin embargo, detrás de esa interpretación podemos encontrar la respuesta de una serie de estrategias de supervivencia en situaciones extremas, de las cuales del PCP Sendero Luminoso fue un referente pero no el único.

En la historia de los Asentamientos Humanos, que aparecieron en Lima desde 1950, Huaycán ocupa un lugar importante por la forma en que la Municipalidad de Lima, administrada entonces por Izquierda Unida, intentó concretar un ambicioso proyecto de vivienda comunitario y autogestionario, aunque debe señalarse que la idea de poblar la zona ya formaba parte de la iniciativa de pobladores de Ate-Vitarte.

El PCP-SL también tendría presencia en el desarrollo de la nueva comunidad, inscribiendo ésta en su denominado «Plan de conquistar bases de apoyo» (incluido en el cuarto hito estratégico llamado «desarrollo de la guerra de guerrillas», que se había iniciado en mayo de 1983 y se prolongaría hasta septiembre de 1986).¹ Según la evaluación del PCP-SL había llegado el momento de expandir la

¹ Para mayor información sobre los tres niveles de la lucha armada -hitos, planes y campañas- y la diferencia entre «estrategias» y «tácticas» en el PCP-SL consultar «www.maoism.org/misc/peru/docs_sp/elecc1.htm»

«guerra popular», incorporando por primera vez la ciudad de Lima entre sus prioridades y presionando en espacios claves, como Ate-Vitarte y la carretera Central, para establecer sus denominadas «bases de apoyo».²

Sin embargo, nunca pudo enraizarse por la tradición organizativa previa y la experiencia política de sus dirigentes que zanjó claramente con la infiltración subversiva. En buena cuenta, podría afirmarse que no fue la política *contrasubversiva* la que derrotó en Huaycán al PCP-SL, sino la firme voluntad de sus pobladores, aun al precio de muchas vidas sacrificadas.

A inicios de los años 90, las características que hasta entonces mostraba Huaycán empezaron a variar. El lugar empezará a recibir grupos de pobladores con características socio-económicas diferentes a los que ya residían allí, originando una caótica lotización del terreno, incluyendo las laderas, destinadas originalmente a la forestación y no a la residencia. Entre los nuevos afincados se encontraban los desplazados generalizando erróneamente la sospecha de que el PCP-SL estaba detrás de ellos.

A partir de entonces, uno de los efectos más nítidos del proceso de violencia fue el quiebre del sistema de organización que a pesar de haber resistido exitosamente a la subversión debilitó a una generación de hábiles dirigentes sin que tuviera tiempo de formar un grupo de recambio; a esta situación se añadió la comprobación de casos de corrupción, dañando ostensiblemente su legitimidad, y la burocratización que los fue alejando de una práctica de relaciones dinámicas con la población.

La experiencia política autoritaria que estableció el gobierno del presidente Alberto Fujimori, durante los años 90, agudizó aún más estos problemas, instalando en Huaycán una base del ejército peruano que ejecutó un plan combinado de operaciones clandestinas (rastrillajes, detenciones arbitrarias, etc.) y acciones cívicas (reparto de alimentos, construcción de obras públicas, corte de pelo). Paralelamente, las rondas urbanas, que habían surgido como un mecanismo de defensa contra la delincuencia, son cooptadas por el aparato militar con aceptación de algunos dirigentes.

Asimismo, la incondicionalidad y el bajo perfil produjeron un vacío que alentó la aparición de un nuevo grupo de dirigentes dúctiles al clientelismo pragmático. La expansión de la asistencia social financiada con dinero público fue apreciada por los beneficiarios como una concesión y no como un derecho adquirido. Todo esto se realizó renunciando a la autonomía frente al Estado que actuaba según la lógica de sus fines políticos y no de la organización popular.

Entre las últimas estaban la Cooperativa de Vivienda del Instituto Nacional de Cultura, la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Municipalidad de Lima, la Asociación Pro-Vivienda del Concejo Distrital de Ate-Vitarte, la Asociación Pro-Vivienda del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning y la Cooperativa de Vivienda del Colegio de Arquitectos del Perú.

² Había varias razones para esta elección: primera, Ate-Vitarte es un distrito con una antigua e importante zona industrial donde residen numerosos contingentes de obreros con larga tradición de lucha y organización sindical; segunda, el crecimiento demográfico explosivo debido a un desplazamiento acelerado de migrantes y a la proliferación consecuente de asentamientos humanos de reciente creación, muy pobres y sin gran capacidad de organización; tercera, el control del abastecimiento a Lima, lo que para el PCP-SL era de gran valor estratégico político-militar.

En la actualidad, a pesar de lo vigoroso y dinámico que fue el sentido participativo y autogestionario de Huaycán, la organización comunal no ha podido restablecerse y los liderazgos carecen ostensiblemente de legitimidad. Por un lado, existen dos juntas directivas que reclaman para sí la representatividad de la comunidad, revelando en sus conflictos la importancia que han adquirido el caudillismo y el clientelismo como formas políticas. Asimismo, las organizaciones naturales, como los comedores populares, los comités de vaso de leche y otros, no tienen canales de coordinación con las otras instancias de gobierno y administración local.

Pero, las consecuencias de la violencia política en Huaycán no se reducen a la destrucción de la organización y la extrema debilidad que muestran ahora los criterios de participación que hizo del lugar un ejemplo de desarrollo democrático. Una secuela evidente de esta experiencia es el arraigo del miedo y el temor entre los pobladores, un factor que genera muy altos niveles de desconfianza y obstruye la debida socialización entre ellos y con el entorno externo.

A pesar de estas circunstancias, la investigación de campo realizada por la CVR pudo comprobar que entre los pobladores aún es fuerte el recuerdo positivo de la experiencia participativa y, por lo mismo, es un elemento que debería potencializarse para la aplicación de proyectos de desarrollo en la zona. De igual manera, a pesar de que la organización social presenta un panorama complicado, hay instituciones que durante la etapa de violencia política desempeñaron un rol decisivo de contención y que aún ahora son una referencia de identidad para los residentes y eje para proyectos de desarrollo local. Entre ellas desataca la Iglesia católica, a través de la parroquia San Andrés, conducida por la orden montfortiana.

2.13.1. *Los antecedentes*

El Programa de Rehabilitación Urbana del Área de Huaycán (PEHUH) fue creado el 3 de mayo de 1984 por resolución de Alcaldía No. 40 de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MLM). La Municipalidad de Lima definió su papel como promotora de la gestión popular, buscando la consolidación de organizaciones vecinales, apoyando la autoconstrucción y desarrollando tecnologías urbanas apropiadas. Para ello designó un Equipo Técnico (ET) estable en la zona que propiciara una gestión democrática de los pobladores y la aplicación de innovaciones técnicas, lo que en la práctica significaba la voluntad de que los pobladores tomaran parte en el diseño.

Los principales aspectos considerados en el proyecto Huaycán fueron:

a) El ET debería discutir las propuestas urbanísticas con la totalidad de las familias en asambleas generales. Las Unidades Comunales de Vivienda (UCV) ocuparían un área de aproximadamente una

hectárea con una densidad neta que oscilaría entre 420 y 550 habitantes por hectárea³. La intención era que la (UCV) reforzara los lazos de vecindad e identidad entre sus miembros, diseñando los lotes de manera tal que confluyeran hacia espacios abiertos y evitando así que los vecinos se aislaran. Esto favorecía, además de una utilización óptima del espacio, el uso de las calles como puntos de encuentro más que de circulación.

b) La forma de propiedad, a través de la cual se ofrecía un sistema que combinaba los lotes unifamiliares y el aspecto colectivo de las áreas comunes, así como de algunos servicios como parques y núcleos sanitarios, entre otros.

c) Se planteó que la población misma construyera un conjunto de núcleos con el propósito de satisfacer colectivamente las necesidades y luego su reutilización de acuerdo al desarrollo del asentamiento. Entre esas obras se consideraba:

- Construcción de locales comunales de uso múltiple
- Construcción de un reservorio en una esquina de la UCV, que sirviera a 4 pilones y a una lavandería en el local comunal.
- Construcción de 4 letrinas múltiples con 6 cabinas en cada UCV
- Construcción de micro-rellenos sanitarios por cada UCV
- Electrificación: en la medida que cada UCV contaba con un medidor, debía utilizar postes de madera y lámparas de fluorescentes para el alumbrado público y redes aéreas, con la finalidad de bajar los costos y optimizar el servicio.
- Apoyo a la autoconstrucción: orientación legal y financiera, asistencia técnica, capacitación y creación de la Unidad de Abastecimientos y Servicios.

2.13.2. El otro lado del proyecto: los pobladores

³ La forma de organización que tiene Huaycán, se denomina COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA, lo cual significa una organización estructurada en forma de pirámide, donde las bases son la Unidades Comunales de Vivienda, más conocidas como UCV. Cada UCV agrupa a 60 lotes, es decir, a 60 casas, entre las cuales eligen a un presidente que los va a representar ante la dirigencia central. Una zona, identificada por una letra del alfabeto representa una cantidad variable de UCVs. En cada zona se elige una secretaría zonal que representa las bases de la organización vecinal. Dichos secretarios zonales coordinan sus esfuerzos con la dirigencia central de la comunidad denominado CONSEJO EJECUTIVO CENTRAL (CEC) de la Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán. Inicialmente se proyectaron 200 UCVs (hoy son 235 sólo en las zonas, sin incluir las ampliaciones) y cada una de ellas tiene una extensión de una hectárea (10,000 metros cuadrados) y acogen 60 lotes unifamiliares. Cada lote tiene un área de 90 metros cuadrados lo que permite optimizar el espacio, en vez de los 120 metros que tienen las viviendas tradicionales. La reducción del espacio en cada lote se debe a que las áreas verdes son consideradas fuera de las casas. Si multiplicamos 60 familias por 90 metros cuadrados, tendremos que las viviendas solo ocupan el 56% del área total de la UCV. Las casas se disponen al borde del perímetro de la Unidad Comunal de Vivienda, dejando un área libre en el centro. El espacio libre restante es de propiedad común, por allí pasan dos calles que obligatoriamente deben cruzar cada UCV, y se ubican las áreas verdes y comunales. Con este diseño el espacio se organiza más eficiente, se agrupan los servicios, quedando un espacio para un local comunal de la misma extensión de un lote, en donde se pueden hacer reuniones, y funcionan un comedor y un botiquín comunal.

La ocupación de Huaycán no fue producto solamente de la iniciativa municipal. Desde 1982, en Ate-Vitarte y otros distritos populares de Lima se dieron diversas acciones para dotar de vivienda a la población, estimulando la formación de asociaciones de pobladores que incluso intentaron invadir Huaycán infructuosamente, como ocurrió en 1982 por parte de la Asociación Las Malvinas (Chaclacayo).

Luego vendría la experiencia de la Asociación Andrés Avelino Cáceres cuyo origen se remonta a 1983 y aglutinó a residentes de Ate-Vitarte, aunque en su caso sus integrantes se contactaron casi de inmediato con la Municipalidad de ese distrito. En estas circunstancias empieza a esbozarse lo que luego sería el Proyecto Huaycán nutrido por la concurrencia de las asociaciones José Carlos Mariátegui (El Agustino), José Carlos Mariátegui (Ate-Vitarte), Julio C. Tello, y otras agrupaciones formadas esencialmente por empleados y trabajadores del sector público⁴. En total fueron 23 las asociaciones que estuvieron comprometidas inicialmente, entre las cuales predominaba Andrés Avelino Cáceres (AAC) porque representaba a más de la mitad de los futuros pobladores. Por otro lado, la cercanía política de sus dirigentes con los miembros del equipo técnico de la MLM hizo que las coordinaciones fuesen más fluidas⁵.

2.13.3. *Los hijos de los migrantes*

Los primeros pobladores de Huaycán eran, en su mayoría, hijos de migrantes cuya socialización primaria ocurrió en la ciudad. Habían participado en los procesos electorales, en la renovación de sus dirigencias vecinales, en acciones sindicales, en los paros nacionales y en las luchas barriales por terrenos y servicios. De acuerdo con un censo (1985) realizado por los propios pobladores inmediatamente después de la ocupación del terreno, un 48% de los jefes de familia nació en Lima; la población estaba compuesta por jóvenes familias que habitaban anteriormente en barriadas del propio distrito de Ate-Vitarte (38%) o de distritos aledaños tales como El Agustino, Chaclacayo y Lurigancho, en condición de alojadas o inquilinas; un 49% era menor de 18 años y un 35% se encontraba entre los 19 y 35 años.

El 5 de julio de 1984 se llevó a cabo una reunión en la MLM, en la que participaron los representantes de 18 de las 23 organizaciones, comprometiéndose a respetar el Plan Integral de la MLM y ésta a su vez a respaldar legalmente la ocupación. Diez días después, 2,000 de las 12,000 familias inscritas procedieron a ocupar el terreno en una acción que no estuvo liberada de grandes tensiones: las obras de habilitación demoraban más de lo previsto y, por otro lado, circulaban los rumores de que la asociación Horacio Zevallos pretendía invadir la zona.

⁴ Entre las últimas estaban la Cooperativa de Vivienda del Instituto Nacional de Cultura, la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Municipalidad de Lima, la Asociación Pro-Vivienda del Concejo Distrital de Ate-Vitarte, la Asociación Pro-Vivienda del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning y la Cooperativa de Vivienda del Colegio de Arquitectos del Perú.

⁵ Eduardo Figari, director del equipo técnico y líder de VR-PC, era muy amigo del líder de AAC, Alfonso Gutiérrez, y esto le permitía obtener información que no tenían los otros dirigentes.

El 23 de julio de 1984 el diario La República afirmaba que en Huaycán una columna de 5 mil personas, armada con palos y piedras, había rechazado a los 4 mil integrantes del asentamiento humano Horacio Zevallos que trataba de ocupar terrenos en dicha quebrada⁶. Los enfrentamientos -continuaba la nota- fueron detenidos por la mediación de los principales dirigentes de los sectores en pugna. La Asociación Horacio Zevallos, controlada por el Partido Comunista del Perú-Patria Roja, había participado inicialmente en el proyecto pero decidió retirarse de las coordinaciones con la Municipalidad y continuar su proceso de inscripciones por cuenta propia.

Los proyectos de la MLM y el de Patria Roja tenían diferencias sustanciales, que iban más allá de los propios intereses de Huaycán y transparentaban los tensos reacomodos del frente Izquierda Unida, por entonces la segunda fuerza política del país. Los diarios reconocieron al concejal César Rojas Huaroto y al senador Ángel Castro Lavarello, dirigentes nacionales del UNIR, la alianza de la que formaba parte Patria Roja, entre quienes arengaban a los invasores. Como respuesta, las asociaciones Andrés Avelino Cáceres y José Carlos Mariátegui emitieron un comunicado conjunto afirmando que el Proyecto Huaycán no era una invasión sino una acción debidamente aprobada por el Municipio de Lima y las únicas inscripciones válidas eran aquellas que habían sido registradas por este organismo.

Horacio Zevallos había abierto inscripciones en plazas y otros lugares públicos sin preocuparse de que los interesados reunieran los requisitos exigidos (por ejemplo, constancia de no tener vivienda en otro lugar de Lima). Su objetivo era tener la mayor cantidad de afiliados para negociar en mejores condiciones y esto fue advertido por los dirigentes de Huaycán quienes estaban muy presionados por sus miles de afiliados que veían escapar su última esperanza de obtener un lote. En otras palabras, los dirigentes tuvieron que acceder al reclamo de las bases para no verse rebasados, como sostiene «Arturo», ex secretario general de Huaycán.

Las disputas entre Huaycán y Horacio Zevallos pronto alcanzaron un clima de exasperación que culminó con el asesinato de Jaime Zubieta, un dirigente de la Asociación Horacio Zevallos (noviembre de 1984). La autoría del crimen se desconoce hasta ahora, pero según una actual residente nadie duda que fue el PCP-SL, aunque en el asentamiento Horacio Zevallos hay muchos pobladores que sospechan que el crimen fue meditado por los dirigentes de Huaycán. Finalmente, la asociación conducida por Patria Roja logró posesionarse de unos terrenos aledaños, en la parte derecha, creando un nuevo asentamiento que, según estimaban, podía beneficiarse de las obras y servicios que se le proporcionaría a Huaycán.

2.13.4. Organizándose para vivir

⁶ Diario La República, edición del 23 de julio de 1984. Banco de datos DESCO.

Apenas ocupado el terreno, los dirigentes procedieron a organizar las estructuras de gestión y de seguridad. Un primer grupo actuaba en el perímetro de la ocupación, que estaba situado en lo que ahora es la zona A. Otro grupo, muy numeroso, se colocó en las cercanías de la zona arqueológica, donde estaban las ruinas de Huaycán de Pariachi. Un tercer grupo fue instalado en la parte central, por donde llegaba la pista que atravesaba las tierras de Poppe y El Descanso. Era el sector por donde transitaban los que llegaban y salían solo los ocupantes que tenía credenciales de sus organizaciones. Dos grupos de defensa más estaban en la zona de la arenera, en el extremo derecho del perímetro, a unos 400 metros el uno del otro, pues se temía que por este lugar podría llegar cualquier invasión. De esta manera se cerraba el acceso hacia las partes altas que se iban a ocupar, conforme se fuera desarrollando el plano urbano y se formaran los barrios, las llamadas UCVs. La estructura de seguridad incluía tres niveles: la denominada seguridad externa que debía prevenir cualquier eventualidad surgida contra la comunidad en el ámbito externo; la seguridad interna que aseguraba un mínimo de control y orden entre los pobladores, conformada por patrullas que circulaban entre los campamentos para evitar cualquier tipo de robo, escándalo o trasgresión a la ley seca; y la seguridad especial que dependía de la dirigencia de la asociación Andrés Avelino Cáceres.

Luego de la ocupación era necesario solucionar los requerimientos de necesidades básicas de la población, para lo cual los dirigentes buscaron en Lima el apoyo de algunas instituciones, en Santa Clara, convenciendo a una línea de buses que ampliara su recorrido hasta Huaycán, y a unos propietarios de camiones cisternas para que llevaran agua hasta la quebrada.

La escasez de agua, energía eléctrica y saneamiento, convertía la salud de los pobladores en uno de los problemas más urgentes. Por eso el mismo día de la ocupación se instaló una posta médica convocando a los paramédicos y enfermeras que se encontraban para organizar turnos de atención. Luego llegaron varios médicos a ofrecer sus servicios gratuitamente, pertenecientes al hospital Hermilio Valdizán y al Centro de Salud de Vitarte, quienes se habían enterado de las necesidades de Huaycán por los diarios.

También las necesidades educativas surgieron desde el primer momento y trataron de ser atendidas con la participación de 80 profesores de Vitarte, organizados en el Comité de Apoyo Magisterial, formando parte de los primeros pobladores en busca de lotes. Ellos elaboraron un primer censo educativo descubriendo que había 150 niños a los que se tenía que atender prioritariamente, e hicieron un llamado general a través de radio bocinas a los maestros titulados, bachilleres y estudiantes de educación que estaban entre los ocupantes, proponiéndoles trabajar voluntariamente y sin pago en el colegio que pensaban fundar. Resultó que había casi tantos maestros como alumnos, por eso se seleccionó a los más preparados. Las asociaciones, por su parte, se comprometieron a facilitarles la manutención mientras el reconocimiento oficial del colegio se tramitaba⁷. Acto seguido entre todos se construyó el local escolar un domingo de faena comunal. Tenía siete aulas, servicios higiénicos y hasta

⁷ ADELH: Diagnóstico socioeconómico de Huaycán. Lima, 1998.

una oficina para el director. Los vecinos aportaron palos, maderas, una que otra pizarra, motas, tizas e hicieron las primeras carpetas. De esta manera muchos niños pudieron estudiar ese año. El 15 de agosto de 1984, al mes exacto de la ocupación, comenzaron las clases en Huaycán. Dos meses después, la Dirección de Educación de Lima daba reconocimiento oficial al Centro Educativo 1236 que hasta hoy funciona en la zona A.

2.13.5. Una experiencia novedosa

Superada la etapa de ocupación, Huaycán debía prepararse para su asentamiento definitivo y previsiblemente la distribución de los sectores tampoco estuvo libre de problemas. La quebrada de Huaycán es un espacio de características físicas desiguales: compuesta de un sector bajo, predominantemente horizontal y adecuado para el uso urbano, presenta también zonas verticales y pedregosas, por lo que debió emplearse gran esfuerzo para habilitarlos como zonas de residencia.

Naturalmente todos los pobladores deseaban ubicarse en la mejor zona, pero el hecho de que la Asociación Andrés Avelino Cáceres reuniera casi la mitad del total de los beneficiados le dio prioridad. Aun así hubo al menos tres enfrentamientos generados por la extensión que ocupaba cada asociación⁸. Paradójicamente el más grave de ellos culminó con la conciliación entre Andrés Avelino Cáceres y José Carlos Mariátegui, logrando el acuerdo de crear un frente de defensa que actuase como interlocutor ante la MLM.

En agosto de 1984 ya vivían en Huaycán 4,000 familias. En noviembre ellas iniciaron la ocupación del área que les correspondía como UCV. El retraso se debió, como hemos visto, a las diferencias de intereses, lo que llevó a constituir el Comité de Gestión -denominada «la tripartita»-, con el propósito de regular la participación organizada de la población⁹.

En octubre del mismo año se inició el proceso de ubicación de los beneficiarios en las denominadas UCVs. Buscando un criterio justo, se dispuso que las prioridades se ajustasen a las necesidades familiares. Así, por ejemplo, una madre sola con más de dos hijos menores de edad tenía preferencia frente a una pareja sin hijos y esta última sobre una persona joven y soltera. Se estableció además un sistema de puntajes sobre la participación en faenas comunales, en su presencia en las guardias nocturnas y otros compromisos que resaltasen la solidaridad y los aportes a la organización. En suma, la oportunidad de obtener lotes mejor ubicados dependía del registro de cada afiliado en esas tareas.

⁸ De estos tres enfrentamientos, el más importante se produjo a los quince días de la llegada a Huaycán. La Asociación José Carlos Mariátegui de Vitarte consideró que el espacio que le habían asignado no cubría sus expectativas y, de esa manera, los dirigentes convocaron a sus afiliados, que se hicieron presentes en un número entre 300 y 500 para tomar otros terrenos.

⁹ En este Comité estaban representados cada asociación, la MLM y la Municipalidad de Ate-Vitarte y su misión se focalizó en las tareas de habilitación urbana, y el diseño que terminó por darle a Huaycán su fisonomía peculiar fue producto de la debida relación establecidas entre estas instancias, lo que fue facilitado en gran medida por la identificación política existente entre ellas, es decir, su pertenencia a IU.

Los dirigentes de esa época pasaban la jornada calificando a cada familia y visitando cada campamento para determinar si los socios efectivamente vivían allí. Las familias elegidas llegaban hacia la zona señalada llevando a cuestas sus enseres. Una vez ubicados, se realizaba una asamblea entre todos los socios de la UCV, declarándose oficialmente su creación e inmediatamente después se elegía una junta directiva que debía organizar los trabajos de limpieza.

Poca diferencia había entonces entre las UCVs y los campamentos: se mantenían instituciones de solidaridad como las ollas comunes -fueron el germen de los comedores populares- y la rotación de las mujeres en la atención de los niños. Casi siempre comenzaban construyendo precariamente el local comunal en donde realizaban esas actividades y en las márgenes de la UCV levantaban las primeras chozas, dejando un espacio en el centro para el futuro local comunal¹⁰.

Según el criterio comunitario del proyecto pensaron en un esquema de servicios compartidos que aparentemente era apropiado en un ambiente de recursos tan escasos. Por ejemplo, cada UCV había previsto la construcción de cuatro silos; asimismo, acordaron que solo hubiese un medidor de luz por cada unidad y que el pago de la energía fuese compartido por todos los vecinos, de acuerdo a la forma que ellos decidieran. Sin embargo, estos criterios no eran compartidos por amplios sectores de la población.

Nos querían hacer vivir comunitariamente y pensábamos qué era lo que tenían ellos en su cabeza. Seguramente pensaban que ellos son tan pobres que nunca van a tener carro ¿Para qué necesitan garaje? Van a ser tan pobres que van a vivir sin baño. Cómo no puede tener medidor cada uno, van a pagar ahí según lo que gasta. O sea, en su cabeza estaba pues esa idea. Esas ideas de ellos, pero nosotros veíamos que eso era irreal, ¿no? Porque esos baños, ¿quién los limpia, quién los administra? La luz, tampoco ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? (profesor «Miguel», 04/05/2002)

En poco tiempo estos servicios se abandonaron reemplazándolos por los unifamiliares.

Con el tiempo anulamos esa costumbre de la luz, anulamos esa costumbre de los baños en cuatro partes, no era funcional, no daba resultados, pues, hacemos el baño ahí, ¿quién lo usaba? Nadie lo limpiaba, las cosas se desaparecían ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a cerrar? (Ibid).

A esto se agregó el asunto de los espacios públicos. El Proyecto había estimado que la vida social más importante debía realizarse en las UCVs y, por lo mismo, no le otorgó mucha importancia a los espacios más amplios de los modelos urbanos tradicionales, como una Plaza de Armas.

Al respecto, un poblador se preguntaba

Cuando queremos reunimos por ejemplo, para hacer nuestros mítines, para celebrar algo, o bueno pues, ¿dónde está la plaza de armas? Se olvidaron de la plaza de armas... no estaba el concejo parroquial, no (había) áreas grandes para hacer un parque recreacional o un estadio, no había. Todo era chiquito, chiquito, chiquito, locitas, locitas, o sea, espacios pequeños, pero no había áreas verdes grandes (ibid).

¹⁰ ADELH: *idem*.

Surgen entonces los primeros desencuentros entre la dirigencia y el equipo técnico de la MLM, lo que se interpretó como una imposición que fue contrarrestado con la creación del Frente de Defensa de Huaycán, presidido por Guillermo Castro, de breve trayectoria, siendo luego reemplazado por una Asociación de Pobladores.

Respecto a la figura legal sobre la propiedad, que era el condominio (no lo era en sentido estricto), hubo también problemas. El condominio implicaba que cada cierto periodo los propietarios debían comprometerse a no ejecutar una acción de partición, procedimiento poco operativo entre sectores pobres, que además podía alimentar malentendidos o comportamientos disgregadores.

2.13.6. Hacia el primer Congreso

Los desencuentros de la administración municipal de Alfonso Barrantes, que aspiraba a plasmar en Huaycán un proyecto urbano socialista, contra la voluntad de muchos pobladores, podrían ser materia de otro análisis que bien puede explicar la posterior desarticulación de IU. Lo que interesa en el presente trabajo es que este signo bautismal arrastró a Huaycán a las vicisitudes de la política peruana siendo considerado desde entonces como un asentamiento «rojo», en el contexto del conflicto armado interno. Esa fue la consideración del APRA, rival de IU, cuando ganó las elecciones generales (1985), y no era muy forzado anticipar el orden de prioridades que le adjudicaría a Huaycán, lo que reactualizó en la población viejos comportamientos clientelistas para aproximarse al poder, no siendo coincidente que tampoco se abrieran locales de ese partido. *María* nos refiere lo siguiente:

Aquí había dos... varias posiciones políticas, ¿no?, que eran de izquierda y el APRA, que en ese momento estaba Alan García. Creo que la gente no quería pues dirigentes sin puestos. Sino lo que querían era el voto popular. La gente quería, nosotros mismos poner nuestros dirigentes. Le guste o no le guste al otro grupo. No que por haber sido primero dirigentes, pues a veces, muchas veces se creen dueños de Huaycán. Alcaldes, como ahora también está sucediendo, que ahora todo el mundo quiere ser cabeza y al final de cuenta han descabezado Huaycán y ahora no tienen dirigentes. No se sabe ni quién es dirigente. Hay unas elecciones, gana las elecciones un dirigente, hay otro grupo, dicen no, no me gusta. Así entonces, yo digo, ¿a quién respetamos, la voluntad del pueblo o respetamos al grupo de dirigentes que toda la vida quiere manejar el destino de Huaycán? Entonces, ese es el problema. Y siempre ha habido ese problema. Sino que esa vez, con mayor fuerza, ganó Raúl Rodríguez y eso lo que han tenido simple y llanamente es respetar el voto popular ¿no?, porque, eso yo pienso que cuando hay elecciones, hay unas votaciones de por medio que son pues este, votaciones este secretas, en ánforas. Eso habla por sí solo. El pueblo cuando hay veces se te dice elecciones directas. El dirigente voltea, le ve a una persona, a veces no quiere levantar la mano, no quiere emitir su voto. Pero si yo voy a un ánfora y emito mi voto, nadie me ve y mi voto es secreto y eso es mi deseo. Y el deseo de esa vez fue pues que realmente salga Raúl Rodríguez (23/05/2002).

El distanciamiento de los dirigentes de Huaycán, mayoritariamente de IU, se vio claramente cuando se convocó el primer congreso para elegir a la junta directiva de la Asociación de Pobladores cuyo tema central era el tamaño de los lotes. Las posiciones se radicalizaron y mientras la IU intentaba respetar los criterios técnicos (90 metros cuadrados), los apristas adoptaron el deseo de los pobladores

(120 metros cuadrados). Durante las elecciones los delegados representantes ante el Congreso aprobaron por mayoría la posición de IU, pero este fue un triunfo pírrico. El segundo tema de la agenda -la modalidad de voto para elegir a la primera junta directiva de Huaycán- reveló que las simpatías de ese momento se inclinaban por los apristas. El asombro de los socialistas no era comprensible: el APRA venía promoviendo el Programa de Asistencia para el Ingreso Temporal (PAIT), que ofrecía trabajo eventual a pobladores y además podía ejecutar algunas obras necesarias en Huaycán. Por último, los dirigentes apristas mostraban ante los pobladores más capacidad de gestión por su cercanía con el gobierno.

2.13.7. La presencia del PCP-SL

Aun así, la vigencia momentánea del APRA no socavó la legitimidad de los dirigentes de IU, pero contribuyó al radicalismo de algunos sectores ya identificados con el PCP-SL, iniciando una campaña intensa y persistente de desprestigio a través de supuestas «denuncias» de corrupción. El PCP-SL, que nunca había aportado una alternativa al Proyecto Huaycán, se hacía presente ofreciendo a los pobladores el argumento de que las necesidades cotidianas debían ser resueltas apelando al recurso de la violencia. Pero en la práctica sus acciones fueron contrarias a los intereses de la población, como la quema de ómnibus de la ENATRU, imprescindibles para desplazarse en busca de trabajo y abastecimiento. Por otra parte, la autogestión era según el PCP-SL un mecanismo del sistema al que tenía que destruirse cediendo paso a un elemental y nunca bien explicado «autosostenimiento», de la misma manera como lo habían impuesto en las comunidades campesinas de la sierra.

No cabe duda que el PCP-SL tuvo influencia y eventualmente legitimidad en algunas zonas, como la E. Asimismo, era evidente que su objetivo desde el inicio era converger los objetivos de su partido con los de la organización vecinal. Pero a pesar de sus incontables acciones de propaganda, como marchas relámpagos, volanteos y, esporádicamente, captura y uso de los altoparlantes para propagar sus consignas, siempre tuvo grandes dificultades para enraizarse:

Aquí en Huaycán las posiciones que Sendero participó a través de las organizaciones con propuestas, ¿no?, como combatir, resistir... lo difundían libremente a partir de las cuatro de la mañana a todo volumen. Fue digamos, un poco, marcando la distancia entre nosotros. (Ibid)

Otra cuestión crucial que impidió su desarrollo fue el rápido y tajante deslinde de los dirigentes identificados con IU, a quienes no pudo rebasar, pese a emplear tácticas de amedrentamiento, como presentarse en los congresos con cuadros armados y, en algunos casos, ejerciendo la amenaza directa contra algunos de ellos.

Hoy algunos militantes del PCP-SL de base consideran que el aislamiento bajo el cual se produce su derrota militar se debió precisamente a una mala lectura de las necesidades locales. Su problema, lo reconocen, no fue táctico sino de concepción misma: era imposible desarrollar una

legitimidad sostenida bajo premisas doctrinarias e ideológicas que rechazaba la población. El profesor *Miguel*, que ha recogido algunas de esas opiniones, nos dice:

Eso era uno de sus anhelos de ellos (los subversivos), lograr sobre todo la dirigencia central, que era en ese caso, podríamos decirlo, era el punto crítico ... Ahora que se infiltraban en muchos de los eventos que el pueblo organizaba para reclamar, sí es cierto. Eso no lo podemos negar... siempre lograban ingresar uno o dos, pero el consenso de la dirigencia siempre... lograba manifestarse como pueblo. Huaycán se expresaba como un pueblo organizado ¿no? que no iba a permitir ni por un lado, que en este caso la violencia tomara el control, ni por otro lado, tampoco dejar. Decíamos nosotros queremos construir ¿Por qué Sendero no decía construir? Sino simplemente ellos tenían bueno pues combatir, resistir, la toma del poder. A ellos no les interesaba que se organicen las UCVs, a ellos no les interesaba, qué te puedo decir, que se haga la pista, ¿no? A ellos lo que les interesaba era el objetivo político, el poder, el poder. En cambio nosotros hemos desestimado el poder. Nosotros éramos demócratas, íbamos a las elecciones con la burguesía, como se le llamaba y se le llama, pero nosotros nunca hemos dejado la visión de querer seguir trabajando por el desarrollo de la comunidad. Entonces yo sí soy claro en el sentido de que si hubiera sido la política del PCP-SL, Huaycán no hubiera sido lo que es, definitivamente, estaríamos en esteras de repente (04/05/2002).

Nadie recuerda una movilización multitudinaria del PCP-SL en Huaycán. A modo de comparación, los pobladores afirman hoy que «los senderistas eran como los partidos de ahora que arriba, con toda la publicidad, parecen grandes, y abajo no son nada» (AC 04/05/2002). En otras palabras, nunca pudo mostrarse como un partido estructurado, de manera contraria a lo que sucedió con los partidos de izquierda antes que se debilitaran.

2.13.8. Las movilizaciones

Cuando Alfonso Barrantes fue reemplazado en la alcaldía de Lima por el dirigente aprista Jorge Del Castillo (1987), el proyecto Huaycán empezó a desmontarse y eso se reflejó en el hecho de que la oficina técnica fue retirada del asentamiento y reubicada en Lima con cada vez menos personal. Lo mismo se hizo con el proceso de titulación, la habilitación de caminos y la ampliación de las zonas urbanizables que se ejecutaron abandonando su diseño original, es decir, dejando de lado el criterio técnico y participativo. Paulatinamente, las organizaciones políticas de izquierda fueron entrando en un proceso de deterioro. Los cambios fueron muy difíciles de procesar por los dirigentes que se encontraron solos repentinamente y tuvieron que actuar con un alto grado de autonomía con los organismos de base.

Previamente, se había efectuado el primer congreso ordinario, considerado el más importante de la historia de Huaycán, entre el 19 al 21 de Julio de 1985 y al que asistieron entre 600 y 700 delegados. Los dirigentes de izquierda, confiados en la legitimidad de sus posiciones políticas, decidieron que la Junta Directiva sea elegida por votación universal y no por delegados, como querían las facciones radicales, y no consideraron lo determinante que podía ser la expectativa formada en torno al recientemente elegido presidente Alan García. De esta manera, sorprendentemente, la primera

directiva de Huaycán fue aprista, iniciándose así una etapa muy conflictiva entre dirigentes que respondían a criterios políticos opuestos a los delegados de base.

Al siguiente año esta situación se recompuso con el triunfo de la lista de izquierda. Dada la polarización muy acentuada, y para evitar situaciones irresolubles, se decidió integrar la Junta Directiva con representantes zonales prescindiendo de elecciones universales. Esta fue una de las últimas oportunidades en que la izquierda mostró su fuerza, desplazando al APRA que poco después desapareció como fuerza política porque no tenía representatividad a nivel zonal; pero no pudo remontar la crisis política que tenía visos de irreversible. Estos dirigentes debieron soportar una pérdida de legitimidad muy grande y rápida, ante denuncias de corrupción y de negociar con el gobierno aprista, sin considerar la pérdida de independencia que eso significaba, volviéndose su posición muy complicada.

Todo esto ocurría mientras las demandas de las bases eran cada vez mayores. Un hecho grave ocurrió entonces. El 25 de julio de 1986, el dirigente aprista de Huaycán, Andrés Tapia, responsable del PAIT, fue asesinado en las puertas del comedor popular Víctor Raúl Haya de la Torre. Según los testigos, tres hombres y una mujer le dispararon tres balazos en la cabeza. Los diarios de la época adjudicaron este crimen al PCP-SL ya que otros atentados, que tenían como objetivos a militantes y locales apristas, se sucedieron en respuesta a los eventos sangrientos del 18 y 19 de junio donde 244 subversivos, presuntos subversivos e inocentes murieron en tres penales limeños (Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres del Callao) por la intervención militar que ordenó el gobierno del presidente Alan García.

Huaycán resintió la pérdida de Tapia, pues era uno de los dirigentes apristas de mayor reconocimiento. Este hecho coincidió con la necesidad de llevar a cabo acciones para exigir a las autoridades el cumplimiento de las reivindicaciones de la comunidad. Así, se planificaron varias movilizaciones masivas en el centro de la capital que tenían un doble mensaje: rechazar al PCP-SL y al veto aprista cuyas suspicacias contra la población iban en aumento. La primera de ellas fue el 17 de febrero de 1987 con una participación total. En cada UCV apenas quedaron tres personas encargadas de la vigilancia porque la población entera se volcó a la Plaza San Martín donde un grupo de autoridades los esperaba. Según el informante Luis, fueron recibidos «con mariachis, con todo, nos hicieron bailar... (pero fue un) saludo a la bandera, nos prometieron y nunca volvieron con nada» (Luis, 03/05/2002). Durante la marcha el PCP-SL intentó actos de violencia y los dirigentes debieron multiplicar sus esfuerzos para neutralizarlos. Sus aprehensiones no eran gratuitas. El comité de lucha formado para llevar a cabo esta jornada tenía entre sus miembros a «Arturo», líder visible del PCP-SL, quien vanamente intentó radicalizar las acciones apartando a la dirigencia.

Los resultados de esta marcha fueron nulos, Huaycán no consiguió que se le atendiera, de modo que los vecinos quisieron volver a las calles el 19 de junio de 1987 sin recordar que esa fecha era el primer aniversario de la matanza de los penales y que el PCP-SL conmemoraba denominándola el «día de la heroicidad». Otra vez «Arturo» pretendió forzar la coincidencia pero la movilización se

postergó hasta el 27 de marzo de 1988. El Comité de Lucha la conduciría centralizando los acuerdos adoptados por los comités que se habían formado en cada zona.

Llegada la ocasión, fue notable la organización mostrada en las calles, poniéndose un cuidado especial en la identificación de los asistentes, en la conformación de los contingentes (que fueran de una misma zona) y en la confidencialidad de la trayectoria. La movilización fue duramente repelida por la policía con gases lacrimógenos y vehículos contramanifestaciones, uno de los cuales atropelló a dos vecinos, matando a Rafael Flores Echevarría y dejando minusválido a «Luis». Además de estas pérdidas, la policía detuvo entre 200 y 300 manifestantes. La jornada obtuvo el éxito esperado. A los pocos días el presidente Alan García convocó al alcalde Jorge Del Castillo para dar luz verde a las peticiones de Huaycán, licitando las obras requeridas, incluso sin proyectos correspondientes, y agilizando los trámites de titulación. Sobre la presencia del PCP-SL en esta movilización, comenta «Luis»:

En el comité de lucha del ochentaiocho Sendero tuvo presencia fuerte. Claro, eso sí no lo vamos a negar... Creo que ellos son los que más trabajaron. Pero, ¿la movilización de qué tipo fue?, de tipo reivindicativo que a todo el mundo le convenía. No fue digamos una movilización en función a la toma de poder del Palacio de Gobierno, sino a exigir que nos resuelvan el problema de todas las necesidades. Entonces en eso, ¿quién no coincidía? ¿Cómo le podías decir a una posición senderista, tú no?; definitivamente, yo no podía. Porque había una necesidad fundamental de poder aunar fuerzas, con el contrario, tenían pues aparatos, tenían seguramente, tan igual que nosotros, parlantes sembrados en todas las avenidas. Se difundía a todo lo ancho. O sea, había capacidad de organización. La necesidad de la gente era tan urgente de contar y además de eso, la gente se movilizaba porque no contaba con título de propiedad, no contaba con nada, era una inseguridad y los propietarios necesitaban pues su saneamiento físico legal. ¿Ahora la gente por qué no se moviliza? Tiene luz, tiene agua, tiene cable, tiene teléfono, tiene, tiene todo pues. Vivimos bien, lo único que no tenemos es el dinero de repente para hacer una linda vivienda pues, muy elegante, pero al menos hemos hecho (03/05/2002).

Huaycán nunca más pudo realizar movilizaciones de esta magnitud.

2.13.9. El PCP-SL en la educación

Todas las versiones coinciden en señalar que fue en el colegio Manuel González Prada (empezó a funcionar a inicios de los 90) donde el PCP-SL realizó su trabajo más visible¹¹. Sin embargo, el profesor «Juan» asegura que del primer contingente de docentes nadie podía sospechar de filiación subversiva:

¹¹ El PCP-SL tuvo más actuación en el SUTE-Huaycán que no era parte de la estructura del SUTEP, aprovechando que un director de la USE 06, por influencia de otros profesores radicales enquistados en el SUTE noveno sector, les otorgara un cupo en el nombramiento de profesores.

Yo me siento muy orgulloso de haber sido cuasi fundador del colegio González Prada. Entonces, yo puedo dar fe firme que en el primer grupo de docentes que llegaron estaban limpios y puros de todo. Primero, porque eran todos jóvenes. Segundo, porque si bien es cierto algunos venían de la universidad Cantuta, como en mi caso, un gran grupo venía de otras universidades de Lima, ¿no? De San Marcos, por ejemplo, nadie. Unos de Villarreal, que para nada tenían comunión con la expresión comunista y de la San Martín ¿no?, de la Católica. O sea, un grupo realmente, creo yo con toda certeza, excelente (24/05/2002).

Durante los primeros meses del gobierno del presidente Alberto Fujimori Fujimori, vendrían otros grupos de profesores, algunos de los cuales se habían formado en las universidades de Huamanga y del Centro, e hicieron gestiones para ser reasignados a Huaycán. Este dato no deja de ser interesante, puesto que, como advierte el profesor «Juan», el nuevo colegio González Prada no era precisamente una plaza atractiva: «al comienzo nadie quería trabajar aquí. ... Uno por la zona ¿no?, zona roja, zona peligrosa, zona de terrorismo y otra porque el colegio estaba en esteras, estaba en tierra » (24/05/2002).

Estos profesores, según «Juan», tenían un discurso crítico radical que no solo lo exponían entre sus colegas, sino en las aulas, de manera especial en los cursos de filosofía, y contaban con alguna audiencia del alumnado. Por eso los profesores que no estaban de acuerdo con ellos asumieron que debían actuar frontalmente, debatiendo con sus colegas radicales y desarrollando un espíritu plural entre los estudiantes. La acción magisterial del senderismo sorprendentemente fue más persuasiva y aunque era conocido que estos profesores conducían algunas *Escuelas Populares* en Huaycán, a la que asistían alumnos del González Prada, no utilizaron los ambientes del colegio para estos fines ni, por suerte, fueron escenario de algún acto violento.

Cuando se impuso la política gubernamental *contrasubversiva*, un profesor y un auxiliar de este colegio serían detenidos y se incluyó en la currícula el curso de Instrucción Premilitar asignando a dos militares como profesores.

2.13.10. La nueva población y los nuevos problemas

Desde fines de los 80 ingresaron a Huaycán nuevos contingentes que cubrieron rápidamente las áreas destinadas a viviendas, asentándose en lugares improvisados, sin condiciones mínimas para ser habilitados (las zonas altas, a diferencia de los pobladores originarios que se ubicaban en las partes baja y media).

Esta circunstancia modificaría la fisonomía de Huaycán y desarrollaría nuevas maneras en la autopercepción de sus habitantes. Tras la división geográfica otros factores profundizarían los contrastes. Los recién llegados eran pobres o extremadamente pobres, a diferencia de los que ya estaban allí, que habían logrado cierta estabilidad. A ellos se añadiría el excedente juvenil de los invasores

originales que también se desplazaba buscando un lugar donde vivir. El resultado fue un mayor deterioro de las condiciones de vida. Hasta hoy el grado de pobreza en la zona alta de Huaycán es crítico, llegando en conjunto a tener casi el 70% de hogares con tres o más necesidades básicas insatisfechas¹². La señora «Chávez» nos relata lo siguiente:

Mire ... eso de las ampliaciones: yo sé que hay mucha necesidad para un hogar, pero tampoco estoy de acuerdo con las ampliaciones porque traen mucha delincuencia, gente de mal vivir, cosa que no ha pasado en la zona, ha entrado gente registrada con documentos y no es así cómo entran a las ampliaciones, entra cualquiera y ahí es donde vienen todos estos problemas; anteriormente, aquí no había delincuencia, me acuerdo que un grupo entró a mi casa y la gente los agarraron y los hicieron trabajar ... hasta que vinieran sus familiares a recogerlos(14/05/2002 ET).

Otro aspecto importante que abrió un nuevo conflicto fue la aparición de los comités de autosubsistencia, como los comedores autogestionarios, vaso de leche y comedores populares. Inicialmente, en Huaycán las mujeres se habían organizado garantizando la alimentación de la población en su conjunto y la distribución de tareas siempre fue muy clara.

Tanto el vaso de leche como los comedores populares funcionaban por zonas, en cada una de las cuales había una junta directiva encargada de organizar la preparación de los alimentos. Pero en 1990, con el ingreso de Fujimori al gobierno, los comedores populares comenzaron a adquirir mayor notoriedad. Si durante el gobierno del APRA el acaparamiento de los puestos se hizo a través del PAIT, durante el de Fujimori fue a través de estas organizaciones de apoyo a la extrema pobreza, incrementándose exponencialmente y con ellos los problemas por el intento de manipularlas. La presión hacia las dirigentas fue tanto del PCP-SL como del gobierno. El primero exigía la relación de las personas, para hacerles seguimiento, y el segundo las desplazaba de los cargos bajo la amenaza de recortarles las raciones de alimentos y de negarles el ingreso a los centros acopiadores. «María» nos cuenta:

La gente del gobierno me invitó para que yo trabaje inclusive en Pronaa, pero que les dejé trabajar porque yo era la piedra en su zapato en los club de madres. Yo nunca dejé que se manoseen los clubes de madres. Tampoco quería la injerencia política ¿no? Hubo resistencia de mi parte y es por eso que tuve muchos problemas con el gobierno, ¿no?, bastantes problemas, muchísimos. Hubo ensañamiento terrible y al ver que ya no pudo con los clubes de madres, no pudo con los comedores, optaron por... buscar gente de confianza, aliados, diría yo, de lo que fueron. Más que gente de confianza fueron aliados y fraccionaron en varios centros de acopio... empezaron a dividir, a fraccionar... en vez de trabajar con nosotros y de repente esto (nos ayudó a) reforzar nuestra organización y asociación de clubes de madres. Lo único que hicieron era dividir para que ellos puedan manosear lo que es la organización de los clubes de madres y utilizarlas, ¿no? Es lo que han hecho durante tanto tiempo. Y a veces para opacarnos a nosotros, lo primero que decían, si van a la asociación de los clubes de madres, les quitó el subsidio, les cortó los víveres. Y era en complicidad con un grupo de personas de los centros de acopio, ¿no? (23/05/2002).

¹² Para mayor información consultar: Instituto de Promoción de la Economía Social IPES: Diagnóstico socio económico del distrito de Ate-Vitarte. S/E. Lima, mayo de 1997

Los diez años que permaneció Fujimori en el gobierno fueron muy complicados para las dirigentas que defendieron la autonomía de sus organizaciones. En algunos casos se recurrió a la incursión sistemática en sus domicilios en horas de la madrugada; en otros a la detención de sus hijos sin motivo justificado; finalmente al divisionismo que debilitó seriamente a la organización.

2.13.11. Imaginando al otro: el PCP-SL en las partes altas

A fines de los 80, la falta de relaciones fluidas entre las zonas alta y baja de Huaycán, con una dirigencia parcializada que no se predisponía a ampliarlas, generaba una sensación de inseguridad y vacío de autoridad que el PCP-SL aspiraba a cubrir. Ambos lo habían combatido, pero los antiguos conocían un PCP-SL «más político», mientras en la experiencia descarnada de los nuevos su fantasma seguía siendo presencia activa, más aún cuando detrás de ellos había quienes simpatizaban o eran abiertos militantes que utilizaban las partes altas como zona de refugio. Los desplazamientos de algunas columnas tampoco eran inusuales.

En febrero de 1989, el *Ejército Guerrillero Popular* estimó que era necesario dar un «escarmiento» a un propietario de apellido italiano (Pope) forzando la adhesión de las «masas» aprovechando de sus necesidades. De acuerdo a un documento del PCP-SL estos fueron los hechos¹³:

Entre Huaycán y Horacio Zevallos existe un área agrícola de 5 hectáreas perteneciente al explotador italiano llamado Poppe. Allí se cultivan papas, maíz y otros vegetales. Estos cultivos son trabajados por las masas recibiendo el jornal mísero de un sol y una porción de la cosecha... El Partido organizó el levantamiento de la cosecha de papas, movilizandolos a las masas de Huaycán, Horacio Zevallos y otros lugares...

El plan fue desarrollado entre las 11 y 12 del mediodía, cuando los sacos llenos de papas estaban listos para ser enviados a Poppe, un contingente capturaría el tractor, los dos camiones y el carro del supervisor (un individuo enviado por Poppe). Los miembros del Ejército Guerrillero Popular tomaron el control de la plaza... las armas del EGP aseguraron que el levantamiento de cosecha se cumpla hasta el final...

El partido realizó acciones de agitación con slogans, banderas y las masas expresaron su profunda felicidad: ¡Larga Vida al Partido! Y luego se retiraron con sus productos. La noticia se difundió y mayores masas acudieron al lugar... al comienzo de la acción, los empleados de Poppe intentaron oponerse y uno de ellos fue liquidado, un miserable... Su muerte fue celebrada con júbilo por las masas.

Mientras tanto, otro contingente del EGP bloqueó la carretera Central a la altura del Km. 17. En Huaycán otras acciones rápidas de agitación y propaganda llamando al pueblo para que acuda a la cosecha... la acción de levantamiento de cosecha en Huaycán fue culminada con éxito. Hubo una amplia participación de las masas, organizadas bajo el liderazgo del Partido, a través del EGP. Fue una justa y correcta acción. Y las masas mostraron su adhesión a la Guerra Popular completamente, para siempre, y su decisión de luchar por el comunismo...

«María», dirigente por muchos años de los comedores populares de Huaycán, recuerda este evento de la siguiente manera:

La gente fue porque por los parlantes alguien les dijo vayan, que van a regalar papa. Entonces, la gente por el regalo fue, pero a nadie sacaron de las casas para ir, vamos a hacer esto, no. Fue así, simple y llanamente, por el parlante invitaron que van a regalar papas, y el pueblo se volcó pues donde van a regalar papas a la chacra. Pero sin imaginar que realmente iba a ocurrir una tragedia, que iba a haber muertos ahí... Iban a aparecer personas y prácticamente pues iban a

¹³ PCP: Reporte desde el campo de batalla. S/E. S/F circa 1995.

matar a uno, disparar, abrir los costales y decir, llévense la papa y la gente, bueno pues. El tiempo también apremiaba porque la misma necesidad obligó a coger lo que estaban dando, ¿no? Pero no fue que Sendero sacó a las casas, no, no, no fue así (23/05/2002).

Esta acción de propaganda con el epílogo de una ejecución nos permite anticipar que, contra lo que muchos suponen, el mayor número de asesinatos no ocurrió en los 80, sino la década siguiente, incluso después de la captura de Abimael Guzmán: el promotor de la ONG Ideas, Zacarías Magallanes (31 de marzo de 1992), los ronderos urbanos José Galindo y Erasmo Rojas (1993) y los dirigentes David Chacaliza (20 de junio de 1994) y Pascuala Rosado (6 de marzo de 1996). No debemos dejar de mencionar que ya en Huaycán se habían creado Rondas Urbanas y que, por las gestiones personales de Pascuala Rosado ante los generales Ketín Vidal (PNP) y Luis Pérez Documet (Ejército), se instaló la primera comisaría y finalmente una base militar.

2.13.12. *Entran los militares*

En lo sucesivo Huaycán tendría que convivir con un huésped atemorizante y los dirigentes se vieron forzados a coordinar con los mandos castrenses, de manera especial los del sistema de autodefensa, cuyos integrantes fueron reclutados tomando en cuenta sus antecedentes, principalmente los licenciados del servicio militar quienes luego de ser trasladados a los cuarteles de Chorrillos, recibían instrucción durante unos 20 días y eran abastecidos con escopetas de retrocarga, como a las rondas campesinas.

En cuanto a militares, hubo una combinación de actividades cívicas —como obras comunales, servicios médico y dental, corte de pelo, reparto de alimentos— con operaciones represivas, especialmente rastrillajes para ubicar y capturar a posibles subversivos y también a cualquiera que se oponía al gobierno, tildándolo de «subversivo».

Cuando los pobladores de Huaycán rememoran esa época opinan que el sistema del cual formaban parte provocó más inseguridad. Sostienen que ni siquiera el PCP-SL produjo tanto temor como cuando llegaron las fuerzas del orden. Por eso, no dudan en afirmar que el gobierno de Fujimori hizo más daño.

2.13.13. *Una heroína*

El nombre de Pascuala Rosado trascendió de Huaycán porque fue una de sus víctimas más notables¹⁴. Arequipeña de origen y casada con un trujillano, vivía en Santa Clara compartiendo el hogar con su madre, cuando Huaycán apareció en su destino con la ilusión de la casa propia. Eso fue lo que hizo, trasladándose con sus hijos, destacando muy pronto entre la legión de mujeres que tomaron decisivamente la función de la ayuda social.

Consciente de que necesitaba de mayores conocimientos -tenía solo instrucción primaria- decidió capacitarse convirtiéndose en promotora de salud. El dinamismo que impuso pronto la haría

¹⁴ Ver testimonio 102143 y 101865.

sobresalir llegando a ser elegida secretaria general de la Zona A, en reemplazo nada menos que de «Arturo», el conocido dirigente visible que el PCP-SL tenía en Huaycán.

Pascuala Rosado era una persona muy enérgica, pero a diferencia de los dirigentes de su generación, que contaban con una amplia experiencia partidaria, su visión política se reducía a las vicisitudes de Huaycán, a cuyo destino le otorgó todas sus fuerzas siendo por esta razón elegida como secretaria general de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. Era el máximo cargo al que podía aspirar y paradójicamente fue el que más problemas le ocasionó hasta provocarle la muerte en 1966.

2.13.14. *El rol de la Iglesia Católica*

El papel que le tocó cumplir a los sacerdotes y agentes pastorales de la Iglesia católica en el proceso del conflicto armado interno en Huaycán fue muy importante para que la violencia no se expandiera en niveles mayores a los vistos. Desde el día mismo de la ocupación de los terrenos, el 15 de julio de 1984, Tadeo Passini, un sacerdote italiano perteneciente a la orden de los monfortianos, fue un asiduo visitante de Huaycán. La parroquia a la que pertenecía, ubicada en Ñaña, tenía un área bastante grande que asistir —Ate y Chaclacayo— y logró convencer a los otros sacerdotes de la necesidad de tener presencia en el recién nacido poblado.

Además de los trabajos concernientes a su oficio, el padre Passini pronto se involucró de manera muy activa en los trabajos comunales y se convirtió en un personaje popular entre los que acababan de llegar. Fue así que algunos dirigentes le sugirieron que se establezca entre ellos y le acondicionaron un ambiente en el colegio 1236, aprovechando que los estudiantes estaban en esos momentos de vacaciones. El 11 de febrero de 1985 se termina de construir la primera capilla, en un lugar que luego sería la sede definitiva del centro parroquial. El padre Passini solicita un lote en la UCV 86 y se vuelve socio de Huaycán participando en todas las actividades. Incluso, fue un entusiasta participante de las grandes movilizaciones hacia Lima de los años 1987 y 1988.

El 25 de noviembre de 1992 se funda la parroquia San Andrés, nombre sugerido por el padre y aceptado por el cardenal Augusto Vargas Alzamora, entonces arzobispo de Lima. Sobre esta base se construye el complejo parroquial que se puede ver en la actualidad, que incluye una serie de servicios, biblioteca y una estación de radio. Ese mismo año y preocupados por las secuelas evidentes que había dejado el conflicto armado interno, la parroquia decide llevar a cabo un plan quinquenal que buscó formar lo que se llamó comunidades eclesiales de base (CEBs). Esta idea tenía sus antecedentes en una experiencia realizada en Comas y tenía como objetivo descentralizar la labor pastoral e incrementar la participación de los feligreses.

De esta manera, la primera responsabilidad de las CEBs fue la evangelización en sus respectivas UCVs, con la esperanza de que ellas, con el transcurso del tiempo, administraran la mayor parte del programa pastoral en esos sitios. Inicialmente estos objetivos no se cumplían -se habían establecido sólo 22 CEBs- y el progreso hacia las metas se hacía de manera lenta.

Al evaluar la situación, los promotores pudieron notar que la participación y dinamismo de las CEBs eran afectados por la creciente crisis económica, sobre todo porque los pobladores necesitaban mucho tiempo para emplearlo en actividades informales para así generar ingresos a sus respectivas familias y esto disminuía el tiempo y las energías de aquellos que potencialmente podían participar en las actividades de los grupos.

A fines de 1996 algunas CEBs estaban bien establecidas, pero al poco tiempo la mayoría de ellas funcionaban muy débilmente o simplemente dejaron de existir. En 1997 se relanza el programa reafirmando el objetivo de formar CEBs en cada UCV. El nuevo sentido que se le imprimió a este esfuerzo fue acercarse más a la vida cotidiana de los pobladores enfatizando la reconstrucción del tejido social básico, es decir, la familia.

Los sacerdotes subrayaron este aspecto en sus homilías y gran parte de los debates al interior de la CEBs se focalizó sobre estos puntos. En parte, el renovado interés que mostraron los pobladores allí donde las CEBs pudieron funcionar bien, se debió a los cambios en su situación socioeconómica. Los que habitaban en las zonas bajas y medias ya habían consolidado su situación a estas alturas y si bien habían podido acceder a infraestructura y servicios, no tenían medios adecuados para desenvolverse con las situaciones más agudas de pobreza, desempleo, delincuencia violenta, nutrición y desajustes morales.

Es por ello que la estrategia desde ese momento fue que las familias mejor estructuradas sean el primer paso en el proceso de incorporación y así multiplique el ejemplo mediante un efecto demostración. Sin lugar a dudas, esta labor de carácter celular fue una contención importante a la actividad subversiva y, posteriormente, un mecanismo eficaz para contrarrestar los efectos de la violencia.

2.14. RAUCANA: UN INTENTO DE COMITÉ POLÍTICO ABIERTO

El PCP-SL otorgó suma importancia al proselitismo político entre los asentamientos humanos de Lima, luego de haber concluido su primer Congreso partidario, en 1988, en el que estableció las pautas para trasladar su «guerra popular» hacia las ciudades. De esta manera, dado que el cono este limeño fue una zona que priorizó en términos de presencia política, inició su penetración en torno a la carretera Central por el asentamiento humano San Antonio, ubicado muy cerca de la municipalidad de Ate-Vitarte. Seguidamente, extendió sus células, por un lado, hacia San Gregorio, la Asociación de Vivienda Ricardo Palma y la Cooperativa de Vivienda MANILSA. Asimismo, logró infiltrarse en la Asociación de Vivienda Santa Cruz, Bardillo, Cooperativa de Vivienda Alfa y Omega, el asentamiento humano Micaela Bastidas I y II, Amauta I y II y Los Ángeles. En otras palabras, el PCP-SL ya estaba arraigado en el cono este cuando decide formar el asentamiento humano Jorge Félix Raucana.

El proyecto Raucana tuvo dos diferencias sustanciales importantes de contrastar con Huaycán. En primer lugar fue pensado desde sus orígenes como un proyecto senderista y «Comité Popular Abierto» en medio del distrito de Ate-Vitarte. Otra diferencia destacable es que Raucana no contó con la solidez organizativa de Huaycán y que fue un factor importante para la derrota del PCP-SL en este último lugar.

Inicialmente se tenía la percepción equivocada de que Huaycán y Raucana obedecían al mismo esquema ideado por el PCP-SL. El equipo de campo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha comprobado que se trató de dos experiencias radicalmente distintas, surgidas en momentos diferentes¹. De otro lado, Raucana tampoco era un «asentamiento humano relativamente joven» elegido por el PCP-SL, tal como se pensaba, sino que fue formado deliberadamente por esta organización en 1990 para convertirlo, hasta donde se sabe, en el único Comité Popular Abierto que existió en Lima.

Se ha constatado también que si bien Raucana fue un proyecto imaginado por el PCP-SL, esto no significó automáticamente que los pobladores se convirtieran en militantes acérrimos de esta organización con todas las consecuencias que ello implica. Raucana es el punto culminante de todo un trabajo previo que realizó el PCP-SL entre los asentamientos humanos que lo rodean y estaba conducida al fracaso desde el inicio. Sin embargo, este fracaso no se materializó. Antes que empezaran a madurar las contradicciones sobrevino la intervención militar.

¹ El trabajo de campo fue llevado a cabo entre julio y septiembre del 2002. En total se realizaron quince entrevistas grabadas y tres que se registraron a mano.

2.14.1. Antecedentes

El 28 de julio de 1990 —el día en que Alberto Fujimori juramentaba por primera vez como Presidente de la República— un numeroso grupo de personas invadió un pequeño terreno cercado cuya propietaria era la familia Isola, ubicado en Ate-Vitarte. En ese momento el hecho no mereció mayor atención de la prensa, por lo que tuvo que pasar algún tiempo para saberse que lo que había sucedido allí era una acción de gran envergadura realizada por el PCP-SL, buscando consolidar su protagonismo político en Lima.²

Ni el momento ni el lugar fueron arbitrariamente escogidos, empezando por la fecha: no sólo era feriado patrio sino ocasión de un dramático cambio de gobierno, por lo que las fuerzas del orden no darían una respuesta inmediata a la invasión. Como ya se ha mencionado, los alrededores del futuro Raucana ya habían sido previamente infiltrados por el PCP-SL y la nueva invasión se ubicaba casi al centro del área que controlaba:

El Partido, sujetándose a lo que el Presidente Gonzalo ha establecido, nos plantea desarrollar más profundamente el trabajo en los barrios y barriadas movilizand o a las masas y organizándolas armadamente sujetos al Marxismo-Leninismo-Maoísmo, pensamiento Gonzalo.

Luego de un reconocimiento minucioso, la dirección determina confiscar la tierra siguiendo la política del Partido. El lugar estaba ubicado en Vitarte y estaba en venta para una zona turística; era una regular extensión de tierras, de propiedad de un italiano de apellido Isola.³

Según los documentos senderistas, habían reclutado a personas provenientes de El Agustino y Yerbateros además de lugares cercanos, pertenecientes al distrito de Ate-Vitarte, como Granja Azul, San Gregorio, Vitarte, Nueva Esperanza y Vista Alegre. Existen indicios, a partir de nuestras conversaciones con los pobladores, de desplazamientos desde otras zonas de Lima que los documentos de Raucana no consignan; por ejemplo, la llegada de un grupo desde Villa El Salvador en el que estuvo incluido Miguel Cuno, actualmente preso en el penal de Challapalca (Tacna), ex dirigente barrial en ese distrito del cono sur y sindicalista en el Ministerio de Agricultura.

La mayoría de personas que llegó a Raucana residía en Lima y una fracción era desplazada provenientes de las zonas rurales huyendo de la violencia.

De acuerdo al censo nacional de 1993, la principal ocupación de los pobladores del distrito de Ate era la de obrero. Más de la mitad de ellos —sumados vendedores ambulantes, trabajadores

² En un recuadro —«Raucana roja»— que acompaña a la nota firmada por Antonio Morales, en el suplemento Domingo del diario La República, en su edición del 1ro. de setiembre de 1991, se afirma: «La prensa la descubrió [a Raucana] tres semanas atrás a ocho kilómetros de Lima, en Vitarte». La mayor parte de referencias han sido tomadas del archivo de Desco y no consignan número de página.

³ PCP: «Un Mundo Que Ganar». No. 21, 1995 www.csrp.org/espanol/e_batalla.htm

no calificados y «otros»— declaran una situación laboral precaria, casi de supervivencia.⁴ En suma, lo que podemos apreciar es que se trataba de una población con una situación laboral inestable, además de ser marginal y, como otros casos en Lima, no había concluido de procesar el desalojo de sus zonas de origen y tampoco empezaba su asimilación en el contexto urbano. Este hecho fomenta un ambiente cultural muy débil donde se hace difícil impulsar solidaridades capaces de cristalizar formas organizativas dinámicas, participativas y autónomas.

Terminada la inscripción durante la noche del 27 de julio, los invasores fueron movilizados de sus respectivos sitios de origen. El grupo más numeroso procedía de la Cooperativa de Vivienda Andahuaylas. Según el declarante PJ de allí vinieron 150 personas. El dirigente CS confirma este dato, aunque estimó en 300 la cantidad de personas provenientes de Andahuaylas. Esta importancia cuantitativa se tradujo, según CS, en una cualitativa, pues los dirigentes de Andahuaylas habían sido los conductores de la invasión, instalándose en lo que hasta ese momento era la caballeriza de los Isola de Lavalle.

La amenaza de desalojo de un sitio que legalmente no les pertenecía era un peligro siempre presente. A través de los dirigentes, sin embargo, se difundió el argumento de que lo realizado, en términos estrictos, no estaba fuera de la ley. Ellos se movilizaron por diversas instancias del aparato público, incluyendo el Congreso, bajo el principio de que el Estado debía velar por los derechos de sus ciudadanos, y simultáneamente recurrieron a la municipalidad de Ate-Vitarte logrando que difundiera comunicados de apoyo contra la acción policial. Además, como forma de legitimar su acción, el PCP-SL compuso una interpretación histórica sobre quienes eran en realidad los verdaderos dueños de esa propiedad:

Durante muchos años llegaron al Perú japoneses e italianos, que se apoderaron de todas las tierras de la costa. Nosotros, que somos los descendientes de los verdaderos dueños de este país, lo único que hacemos es recuperar lo que nos pertenece y que alguna vez nos quitaron los extranjeros.⁵

Subrayar la condición de «italianos» de los Isola fue importante para lograr el consentimiento de la población, ya que daba respuesta a la incertidumbre que generaba un hecho ilegal. El mismo argumento se constató en Huaycán donde se resaltó el origen europeo de la familia Poppe.

Luego de apoderarse del terreno, los medios de comunicación destacaron el supuesto de que los invasores se habían organizado inmediatamente en comités de defensa, cuyas primeras tareas fueron «levantar barricadas, abrir zanjas para impedir el tránsito de vehículos y formar los piquetes de lucha». No era algo novedoso en este tipo de eventos, pero otras distorsiones noticiosas empezaron a formarse sobre Raucana. Al sobredimensionar las acciones de defensa, los

⁴ Para mayor información consultar: INEI: «Asentamientos humanos. Características socio-demográficas». Tomo II, Lima Metropolitana. Lima, 1996

⁵ Entrevista no grabada a poblador anónimo.

medios de comunicación omitieron que el PCP-SL se esforzaba en llevar adelante un rápido, amplio y profundo trabajo político con la población. Este será un tema que saldrá a la luz algún tiempo después, promovido además por la autopropaganda subversiva y no por iniciativa de la prensa.

Otra apreciación errónea que difundió la prensa fueron los criterios urbanísticos que aparentemente el PCP-SL utilizó para organizar el espacio invadido, enfatizando que había renunciado a la construcción habitual de una «plaza de armas» rodeada de mercados, iglesia, escuelas y otros servicios públicos. En realidad, el PCP-SL no aplicó una distribución espacial alternativa a las que estilaban las invasiones: su fundamento principal era una división transitoria, mientras no se asegurara la permanencia definitiva en el terreno. Por eso, como se verá luego, durante el tiempo que duró su influencia el panorama de Raucana era de un conjunto abigarrado de chozas, dando la impresión de la ausencia de algún orden que sí existió en otros aspectos.

El PCP-SL no sólo se preocupó de las acciones defensivas contra el desalojo, sino que organizó casi todos los aspectos de la vida diaria de los pobladores y respondió a sus expectativas para desenvolverse frente a los retos cotidianos con relativo éxito. Más aún, a diferencia de las habituales invasiones y de los traficantes de terrenos, los senderistas establecieron relaciones de confianza con los pobladores. Así, desde el inicio de la invasión los preparó para un eventual enfrentamiento con las Fuerzas del Orden. Según los relatos de los testigos, la primera aparición de la policía ocurrió alrededor de las tres de la madrugada del 28 de julio de 1990, cuando los grupos no terminaban aún de ingresar el recinto escogido. Un grupo de efectivos, no muy numeroso, se concentró en la esquina de la avenida La Esperanza y desde allí empezó a desplazarse hacia Raucana, disparando sus armas, lo que produjo la muerte de Jorge Félix Raucana. PJ recuerda que él

Vivía acá abajo, era vecino de San Antonio, como era 28 estaba también un poquito tomado. Había niños que gritaban porque disparaban bombas lacrimógenas, seguro que su hijo lo despertó, salió y se fue primero, todos estábamos corriendo normal pero se cayó, lo volteamos, botó un poco de sangre nomás y allí quedó.

Raucana muere por torpe, este pata no era para que muera, le dijeron que no se meta muy adelante y él se metió nomás y se amarró con trapo, estaba medio ebrio y se metió nomás dijo 'no, qué me van a hacer a mí, soy de la clase trabajadora, estoy por defender un techo', no le interesó que la policía le apuntara con un arma. El pata Raucana se aventó, le dije '¡retrocede, retrocede, no avances más!', él dijo 'qué me van a hacer esos traidores malditos' y le dispararon al cuerpo porque a un policía le cayó una molotov encendiendo su uniforme. Se amargaron más (los policías), comenzaron a decir '¡son malditos estos desgraciados, hay que matarlos!' y metieron bala al cuerpo con perdigones, a una señora le hicieron hueco en sus piernas, en el estómago. Ese día murieron como 3, el que murió primero fue Raucana. Toda la gente decía que ese es un hombre valeroso que defendió nuestro terreno, lo trajimos acá, hicimos su misa y pusimos el nombre de Raucana. Este es el hombre héroe de la invasión y de aquí en adelante se llamará la tierra Félix Raucana. (PJ, 17/07/2002).

La represión policial creó un héroe local que fue perennizado cuando los invasores utilizaron su nombre para bautizar a su asentamiento al que inicialmente pensaban llamarlo La Estrella o La Esperanza,. No era la primera vez que el PCP-SL promovía mártires populares para legitimar la lucha armada. El caso de Jorge Félix Raucana es un buen ejemplo, aunque la construcción del icono fue a la larga defectuosa. La población valoraba el sacrificio de esta persona, pero no terminó idealizándola. El recuerdo que se tiene de él es de una persona que murió para que otros pudieran obtener un lote de terreno, pero fue una muerte que pudo evitarse si no hubiera estado bajo los estragos de alcohol. En pocas palabras, un hecho ocasional impidió su transformación en «héroe popular».

2.14.2. ¿Un pueblo pasivo?

Alcanzado exitosamente el objetivo de ingresar al lugar escogido y «resistir» el embate policial, los dirigentes se dedicaron a organizar los aspectos vitales de la población, mientras su maquinaria publicitaria proclamaba ante el mundo este logro político:

La dirección cohesionó firmemente al Ejército Guerrillero Popular (EGP) con el programa del Partido y las citas del Presidente Mao. La misma situación determinó realizar [sic.] en las masas previamente organizadas en sectores, cada uno de los sectores con su propio responsable; se organizó el Movimiento Clasista Barrial, y se realizó una remoción en toda la masa reafirmando en la violencia revolucionaria, en la disciplina proletaria y sujeción a la dirección del Partido...⁶

Según la estimación senderista, «las masas» invasoras estaban firmemente cohesionadas bajo sus consignas políticas, conscientes de movilizarse para y por el partido. Entendido así, en Raucana no existía otro interés aparte del partido y para ello debió hacerse un previo «trabajo de remoción [sic]». Sin duda, para los senderistas Raucana era un comité base del Movimiento Clasista Barrial.

Para la versión periodística, el PCP-SL era un grupo dentro de Raucana que a través del miedo subordinó al resto de la población. Sus dirigentes naturales habían sido defenestrados y los subversivos se impusieron convirtiendo a los invasores en colaboradores pasivos a quienes había que justificar porque vivían amenazados y al terreno invadido en un campo de entrenamiento y refugio. Inversamente, los senderistas eran «febriles», «sanguinarios», «violentos» y «feroces», ante lo cual la población no podía negarse a participar en futuros enfrentamientos con las fuerzas del orden. Nadie intentó averiguar cuál era la opinión del poblador común y corriente de Raucana.

Los pobladores crean una dirigencia transitoria conformada por una junta directiva, delegados por cada sector (eran siete al comienzo y luego se aumentó a ocho) y subdelegados que apoyaban a los anteriores. Sobre esta red visible actuaba un núcleo de dirigentes que eran cuadros

⁶ PCP: «Un Mundo Que Ganar». No. 21, 1995 www.csrp.org/espanol/e_batalla-hm

senderistas, denominado el *Comité Central*, o como refieren habitualmente los pobladores de Raucana, la *central*. Era un organismo paralelo, clandestino desde donde se generaban las decisiones más importantes y se determinaba qué debía hacerse. Asimismo, desde este nivel emanaban y se transmitían las iniciativas para las faenas comunales.

Existen varias versiones acerca de cómo se formaban las decisiones. Para algunos pobladores eran mandatos verticales originados por la *central* y dados a conocer a través de sus dirigentes; para otros, los delegados efectivamente transmitían las órdenes de arriba hacia abajo pero los delegados también servían para elevar sugerencias de la población; para un tercer grupo, las acciones se acordaban en asambleas, aun cuando, hay que anotar, algunos de los que reconocían cierta voluntad democrática habían sido anteriormente dirigentes de base, delegados o subdelegados.

Por otro lado, estaban las organizaciones de supervivencia (comedores, minigranjas) y de seguridad que, a diferencia de otros lugares, no se desarrollaron como organismos naturales sino dependientes de la estructura dirigenal.

Puede afirmarse entonces que la concepción organizativa era de naturaleza vertical y centralizada, aunque cabe preguntarse cuáles eran sus límites y hasta qué punto los líderes podían imponer sus determinaciones. La información recogida apunta a señalar que era decisión de cada dirigente definir su vinculación con el PCP-SL. Un actual dirigente comenta que:

Hubo casos en que la gente del partido estaba infiltrada, pero ellos decían que no habían venido a obligarnos, eso depende de cada persona que quiera incluirse. A mí me dijeron, como estaba puntual en mis aportaciones, que asuma un cargo: fui subdelegado de un sector, dirigía los trabajos de picar la tierra, trabajar en el local. Yo asumí esa responsabilidad no por el partido sino por el bienestar del sector, por ganarme el terreno. Yo no me inclino por ningún partido político, yo vine por el terreno». (CS, 18/07/2002)

La señora CA, líder femenina, es sumamente clara al enfatizar que los dirigentes controlados por el PCP-SL no empleaban métodos coercitivos y, por ello, los recuerda con respeto:

Yo veía que lo que hablaban y lo que decían (los dirigentes de la «central») era para bien de nosotros. No era cosa de que ellos te decían vas a hacer esto, vamos a hacer lo otro y a nosotros nos parecía que estaba mal. No. La manera de organizar era cómo hacer la guardia, los elementos que teníamos, por ejemplo, ese día para bloquear la Carretera Central. Nos decían tienen que llevar vinagre para la vista y, más que todo, nos dijeron deben llevar piedras chicas para las hondas, era para defensa. Ellos dijeron que si nos agreden hay que responder de esa manera, si había personas, por eso yo los respeto, porque no nos obligaban a hacer cosas... Yo llegué y no sabía cómo organizarse para hacer el rancho que le llamábamos esa vez. Como ellos ya sabían nosotros nos agrupábamos en grupos de 10 que le tocaba la cocina, cuando llegué yo me acuerdo que eran por sector; éramos 7 sectores, yo estaba en el 5; cada sector tenía su delegado... era el que tenía reuniones con esas personas y llevaba lo que nosotros sugeríamos, luego bajaban a los sectores, si estaba bien aceptábamos y si estaba mal no, decíamos esto no debe ser así, debe ser así. Así trabajábamos... (18/07/2002).

¿Cómo evalúan los entonces invasores su experiencia con este tipo de organización? P1 afirma que:

La organización sí estaba magnífica porque a través del esfuerzo de ellos se hizo todo, un año más o menos duró el trabajo. Como le vuelvo a decir, el objetivo era cuidar el terreno, en eso nos exigíamos todo, no solo ellos, nosotros concientemente sabiendo nuestros objetivos, nuestra necesidad teníamos que asumir a conciencia, no esperar tampoco que nos obliguen. Los que no querían se han ido. Hemos entrado muchos, un montón, los que realmente no necesitábamos a los traficantes de terreno, acostumbrados a buscar terrenos por acá, por allá. Los otros se fueron, más de la mitad se ha ido. (No hubo tráfico de terrenos) en ese aspecto, éramos concientes que ... estábamos apoyados por el PCP-SL, éramos concientes de que no se podía estar jugando en ese aspecto, de hecho tampoco ellos no nos obligaban que vayamos a asumir en otro sitio, vayamos asumir de acá para afuera ... (17/07/2002)

PJ resalta que en relativamente poco tiempo fue evidente la presencia del PCP-SL por la información desproporcionada de los medios de comunicación:

Eso ha sido poco tiempo, hasta que llegó el Ejército. Claro que venían (los senderistas) pero no como salía en la televisión: «Raucana es zona roja, base número 2 de el PCP-SL», así salía en los medios de comunicación, Huaycán decían era zona uno, no sé cada uno con su zona. No era así, acá venían nuestros familiares a visitarnos también... (17/07/2002).

El sobredimensionamiento de la presencia senderista en Raucana también fue resultado de la acción propagandística de este grupo.

Ya se decía que en provincias el terrorismo estaba aumentando, acá también había. Eran pocos, no eran todos o a veces uno por temor de que nos iban a botar se inclinaba, pero no eran todos. Ellos también hacían mucha publicidad, comenzaban a votar globos con la hoz y el martillo en el aniversario de la asociación, eso vio la gente y dijo que era el foco de el PCP-SL Luminoso, pero no era verdad, era un grupito nomás (CS (18/07/2002).

Cuando se le preguntó si la población alguna vez consideró perjudicial la presencia del PCP-SL, manifestó:

Nos decían más bien los compañeros que el partido era para el bienestar del pueblo, para que progrese y no se deje engañar por los yankis y los partidos democráticos. Ellos lo que querían era luchar con la verdad, no dejarse engañar porque sabemos que en las empresas a los trabajadores los explotan, no les pagan el sueldo como debe ser, los explotan y les pagan mal, como sucede ahora, por ejemplo, eres un buen trabajador y la empresa no sabe valorar la calidad humana del trabajo, igualito te paga una miseria, eso está mal... (CS 18/07/2002).

En suma, el sentido que la gente de Raucana le dio a su relación con los senderistas fue muy diferente a los que estimaba la prensa y, lo que es peor aún, a las evaluaciones de los servicios de inteligencia. No era por los férreos combatientes comunistas, como se les pretendía presentar (y que el PCP-SL hubiera deseado), ni por el temor de las personas subyugadas por los actos que supuestamente le imponían los subversivos.

A diferencia de lo que ocurrió en zonas rurales al inicio del conflicto armado, el comportamiento de los mandos senderistas no tenía como base la imposición del terror sino la utilización de mecanismos legitimadores, ideológicos y políticos, tratando de fundir en un discurso las necesidades de la gente con sus objetivos políticos. La percepción general en Raucana sobre ellos es de consideración y respeto.

2.14.3. Venciendo obstáculos

Los dirigentes organizaron a los invasores por sectores de acuerdo a su lugar de inscripción, tomando en cuenta su ubicación durante la defensa, es decir privilegiando su aspecto combativo. Apenas instalados, los invasores debían ver la forma de cobijarse ante el húmedo frío del invierno limeño, agravado por el hecho de que el terreno (era una caballeriza) tenía sectores inundados que facilitaba el crecimiento del forraje para la alimentación de los animales. Otro problema fueron los parásitos. La presencia de caballos los atraía, especialmente a las pulgas. Sobre este ambiente instalaron sus campamentos en tortuga o U. La señora CA recuerda: «Justo era el mes de julio, con un frío atroz, con la llovizna imagínate dormir bajo esas chozitas, nosotros le decíamos nuestro nicho, como nichos de cementerio. Lo que más no hacían sufrir eran las pulgas, esto era una caballeriza y había pulgas, pero así teníamos que estar...» (18/07/2002).

Según el dirigente CS: «(A mí) que vivía en Lince me chocó, pero qué voy a hacer, así es la vida para luchar por el terreno, incluso cuando dormía en esteritas en U me picaban las pulgas...» (18/07/200)

Esta situación duró año y medio. Durante la época que predominó el PCP-SL, los antiguos dueños entablaron un juicio y el desalojo era una posibilidad siempre presente entre los pobladores, convirtiéndose en un tema central de sus vidas. Por eso, fue relativamente largo el periodo en que tuvieron que vivir en lotes asignados de manera provisional, donde no podían levantar construcciones. Según los testimonios, en Raucana hubo dos y hasta tres procesos de lotización, en cada uno de los cuales salía gente e ingresaba otra, lo que dio motivo a sospechas de tráfico de tierra.

Una de las cuestiones a resolver inmediatamente fue el abastecimiento de agua. En Raucana no pudo utilizarse la forma tradicional que empleaban las invasiones para esta provisión. Los camiones cisternas no podían ingresar al lugar por las profundas zanjas que habían cavado para evitar la entrada de los vehículos de las fuerzas del orden. La solución momentánea fue salir a las poblaciones vecinas, como San Antonio y San Gregorio, con baldes y tinas para abastecerse diariamente.

Buscábamos agua en San Antonio, la gente de allá nos negaba, sufríamos bastante. No había a veces qué comer... comíamos camote sancochado y su agüita nos tomábamos. La gente de San Antonio no nos quería dar, nos negaba, a veces sacábamos a la media noche,

a las 3 de la mañana para poder siquiera cocinar algo ... los primeros días no teníamos ni para lavar ropa, andábamos todo sucios ... (Señora V1,19/07/2002)

El otro problema era del agua, no tenía agua, nos íbamos a San Gregorio por un poronguito de agua, me acuerdo mucho de la higiene de mis hijos, los traje porque no tenía con quién dejarlo, siempre tuve en la mente que vivir pobre no es vivir sucio, con dos tazas de agua los bañaba. ¿Cómo hacía?, con una taza mojaba un trapo, lo jabonaba bien y con eso les pasaba todo el cuerpecito y con otra taza lo enjuagaba, siempre me acuerdo de eso (...) Para lavar la ropa, como no había agua, nos teníamos que ir al río, de acá saliendo por la avenida Esperanza de frente salías al río... (CA, líder femenina, 18/07/2002)

Estas tribulaciones acabaron cuando decidieron explorar el subsuelo de Raucana. Procedieron a realizar sondeos y para suerte suya encontraron depósitos de agua a una profundidad de 17 a 18 metros, cuyas pruebas llevaron a los laboratorios para asegurar si era apta para el consumo humano. Los exámenes también salieron positivos.

A partir de ese momento se diseñó un plan de faenas comunales que tenía como objetivo abrir ocho pozos, uno por cada sector, con la sola fuerza humana disponible en el asentamiento. Todos los domingos se armaban las cuadrillas de trabajadores, por sectores, controlados mediante una relación previamente elaborada. Las jornadas individuales eran aproximadamente de tres horas semanales —otras versiones hablan de dos horas—. Se excavaba con *lampa*, *pico* y *barreta*, extrayendo la tierra en baldes y evitando los derrumbes mediante la técnica del «chicoteo» con cemento.

De igual manera, los servicios higiénicos se construyeron inicialmente mediante faenas comunales y eran usados colectivamente por sector. «Por sector también hacíamos silos grandes y para prevenir las enfermedades le echábamos cal a los pozos», afirma la señora CA. A medida que se iba asentando la población en el lugar, los grandes silos comunales se abandonaron y los pobladores construyeron uno propio en sus respectivos lotes. La proliferación de silos pronto contaminó las corrientes de agua del subsuelo e intentaron resolverlo mediante el uso de cloro. La medida resultó inútil. Luego se usó el sistema de tanques de rebote. Hay que señalar aquí que recién en el 2002 se instalaron redes de agua y desagüe en Raucana, y todavía no están en pleno uso. Esto quiere decir que vivieron durante una década bajo severas condiciones de insalubridad.

De otro lado, la *central* senderista había organizado un botiquín que controlaba directamente. Según un grupo de informantes, las medicinas eran abastecidas por *los que salían a trabajar*. También buscaban las donaciones. Otras versiones afirman que SL contaba con un *stock* para la población señalando que el botiquín era atendido por personas desconocidas que llegaban a la comunidad, pero dejó de funcionar cuando los senderistas abandonaron Raucana, en 1991. Once años después, 15 de agosto de 2002, se inauguró un local especializado en enfermedades infantiles con el apoyo de la cooperación internacional.

La *central* tomó igualmente la iniciativa de crear huertos familiares y minigranjas colectivas en donde se criaban animales menores. Esto era factible porque mientras los pobladores

se encontraban en una situación legal incierta, que los desalentaba a levantar construcciones, dejaron espacios disponibles en cada lote. La decisión fue importante en el contexto del *fujishock* que descalabró las economías familiares bajo un ambiente, como se recuerda, de completa desorganización del aparato estatal que debía socorrer a los más afectados.

Comíamos lo que había, pero fue tan doloroso y justo en esos días fue el paquetazo, el shock, no había de dónde comer, las tiendas se cerraron, los mercados también se cerraron y lo único que podíamos conseguir era el atún y el arroz... no había nada, así lo pasamos ...La central ordenó, vio que había tanta gente pobre, dijimos que la tierra era productiva, dijimos vamos a probar, todos trabajamos en común porque había personas que sabían de siembra y otros, como yo, que no sabíamos y entre vecinos nos ayudábamos; para qué, dio buenos frutos; lo más bonito era que yo tenía habas otro vecino tenía alverjas, la mayoría tenía camotes. (CA, líder femenina, 18/07/2002).

El trabajo en estos espacios productivos también se realizaba por turnos controlados a través de padrones levantados en cada sector. La *central* había planificado incluso lo que debía sembrarse. La etapa de las ollas comunes fue quedando atrás y empezaron a organizarse los comedores comunales, uno por cada sector, donde se destinaba todo lo producido en las áreas agrícolas. Nada se vendía, sino que iba a los comedores. Al inicio, se usaban latas de aceite vacías para que las mujeres cocinaran y los hombres recolectaban leña para los fogones; poco a poco cada sector empezó a organizar actividades para la implementación de los comedores y cocinas.

Pese a lograr altos niveles de autosubsistencia, Raucana no podía satisfacerse de otros productos de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite). Además, no siempre lo sembrado pudo ser cosechado de manera exitosa.

Todos aportábamos, pero era un mínimo de 50 céntimos o un sol, pero era lo mínimo que se daba, por aportación salía para cada persona, en caso de mi sector, era para 4 menús entre sopa y segundo, pero si veíamos que la familia era más grande le dábamos más, teníamos que ser justo. Tratábamos de ayudar a las madres solteras y a los ancianos, en eso fue como se han hecho las ayudas. (CS, Dirigente, 18/07/2002)

A medida que las familias fueron integrándose y organizando sus vidas, los comedores cayeron en desuso y las huertas también tuvieron el mismo destino, desapareciendo definitivamente cuando sobrevino la lotización, luego de asegurar la propiedad del terreno.

2.14.4. ¿Hubo escuelas populares en Raucana?

Siempre se sostuvo que las escuelas en Raucana fueron aprovechadas por el PCP-SL convirtiéndolas en «escuelas populares» donde se adoctrinaba políticamente a los niños. Sin embargo, entonces no había centros educativos (tampoco ahora), lo cual no quiere decir que no se establecieran ciertas pautas y normas de conducta para la convivencia entre vecinos:

Lo primordial era cambiar un poco en cuanto al respeto, por lo menos los niños ya sabían saludar hoy en día ya se han olvidado no saludan ya. Esos niños, lo primero que se ha incentivado era el respeto de los niños hacia los adultos, eso era lo más lindo que debería haber. Lamentablemente no hay, de cualquier idea política y cualquier persona que tenga deseo de mejorar algo debe quedar algo bueno o malo, así que lamentablemente no hay respeto ni siquiera de los niños. (P1, 17/07/2002)

En cuanto a seguridad interna, los dirigentes senderistas tuvieron un cuidado especial empleando un sistema que respondiese a las necesidades de su organización política. Fue un aspecto crucial para la vida de los pobladores. El muro perimétrico se dejó como mecanismo de defensa, cavaron zanjas en el entorno exterior y levantaron torres de vigías en las esquinas del recinto, «para que puedan avisarnos cuando venía la policía». Todo se hizo mediante faenas comunales, como asevera CS, «se hacía por faena comunal para que todos se mojen la mano, todos tenían que trabajar...».

Además del servicio en las torres se implementaron rondas internas y piquetes de control en cada una de las entradas, organizadas por cuadrillas de vecinos en turnos diurnos y nocturnos. Mientras que la vigilancia de las torres servía para prevenir la llegada de las fuerzas (sean policías, militares o matones) que podían desalojarlos, las rondas internas mantenían el orden y la disciplina entre los pobladores, evitando la comisión de delitos entre ellos. Al parecer, inicialmente existió una especie de «toque de queda» impuesto por los dirigentes. Un poblador afirmó que: «Había hora de entrada y de salida. Para los que salen a trabajar, era solamente hasta las 11 de la noche. Después de las 11 cada uno debía estar en su lote. No se podía circular por el interior...» (CS, 18/07/2002)

La señora CA también admite que hubo restricciones: «Los primeros días cuando llegué no nos dejaban salir, nos habíamos quedado por miedo a que nos desalojaran, si te ibas tenías que dejar a tu reemplazo, un familiar, era así, eso si nos obligaban...» (ibid).

En efecto, hubo la obligación de dejar a algún familiar dentro del asentamiento cuando alguien salía para evitar momentos del día en los que solo estuvieran los ancianos y los niños, haciendo vulnerable la resistencia frente a la posibilidad del desalojo. En todo caso, este sistema no es algo circunscrito a las prácticas senderistas sino que está generalizado a las invasiones urbanas.

El riguroso control en las puertas de acceso no duró mucho. La opinión general de los pobladores es que no hubo mayores impedimentos: «bajo la condición de que dejemos nuestras aportaciones para la comida, porque ellos sabían que teníamos que salir a trabajar». (PJ, 17/07/2002). Los extraños tenían prohibido el paso y los familiares de los pobladores solo podían visitarlos los días domingos.

Los piquetes para cada una de estas labores —puerta, torres y rondas internas— eran integrados por diez vecinos que, como hemos dicho, se turnaban de acuerdo a los padrones que

existían en cada sector⁷. Asimismo, la totalidad de la población era continuamente adiestrada para cuando se acercaran las fuerzas del orden. Esto incluía entrenamiento permanente (también sobre la base de grupos formados por 10 personas) y ejercicios de alerta.

Los pobladores eran instruidos en la elaboración y uso adecuado de bombas molotov, desplazamiento en las marchas, quema de llantas, selección y uso de piedras, y en cómo enfrentar a las fuerzas del orden. Es importante anotar, como indicó un poblador, el hecho de que cuando se disponía la orden de una marcha, movilización o «jornada de lucha», en los días previos llegaban a Raucana personas que no vivían en el sitio. Ellos los denominaban «los universitarios» (probablemente eran estudiantes de La Cantuta, San Marcos pero también pobladores de otros lugares).

La transmisión de estos conocimientos no fue percibida como obligatoria. Gran parte de los invasores de Raucana no sabía cómo defenderse ante el desalojo y guarda mucha estima a quienes «les enseñaron a defenderse». En algún momento del día o la noche los dirigentes ordenaban la movilización del poblado. Ante esa señal, los delegados y subdelegados tocaban un silbato y la población procedía a hacer lo que previamente se le había indicado. Al grito de «¡desalojo!, ¡desalojo!», hombres y mujeres se agrupaban en piquetes desplazándose hacia los lugares acordados, guardaban sus pertenencias y utensilios y los niños eran conducidos a un ambiente donde una persona (al parecer, senderista) debía cuidarlos⁸. Esta «policía» interna tampoco duró mucho. Según Sánchez: La guardia duró algo de dos años hasta que se hizo trato directo con Isola, allí se cortó la guardia.». (18/07/2002)

Un correlato de las actividades para mantener el orden fueron los castigos impuestos a aquellos que lo violaban. En Raucana, como en otros sitios donde el PCP-SL tuvo presencia, se estableció una suerte de código muy simple, rígido y con castigos ejecutados mediante procedimientos sumarísimos. Este rol sancionador, por un lado, sirvió para engrosar los atestados acusatorios de algunos de los dirigentes, cuando fueron apresados; pero, por otro lado, fue visto por la población como algo muy positivo -por su eficacia- dado el contexto de altísima inseguridad en que tenían que desenvolverse. No solo eso: el éxito del PCP-SL en este sentido tuvo relación directa con la percepción de inoperancia de las instancias públicas que debían prevenir y sancionar los delitos.

La justificación para aquellos que me detuvieron es que acá no permitíamos las enfermedades sociales, porque las enfermedades sociales no conducen al desarrollo de un pueblo, donde haya enfermedades sociales, directa o indirectamente, nuestro pueblo se corrompe. Cuando digo enfermedades sociales, ¿a qué me estoy refiriendo? Las discotecas, los bares, los pandilleros, los alcohólicos, las prostitutas, etc., etc., etc. Esas enfermedades a nada bueno conducen a nuestro pueblo. Solamente lo destruye. Eso es lo que no queríamos. No es otra cosa, señores. Después, todo fue trabajado de acuerdo a ley. (FC, dirigente, 18/09/2002)

⁷ Esta organización sobre una base decimal era la que se utilizaba en todas las faenas (huertos, granjas, pozos, etc.).

⁸ La existencia de este espacio infantil fue referido por una joven que debió tener unos 6 años de edad en 1990-1991. Comentó que allí había «una señorita» que no conocía.

¿Cuáles eran las faltas castigadas, además de las mencionadas por FC? Citemos algunas, a partir de las versiones dadas por los pobladores: robo, maltrato familiar, bigamia, drogadicción, entre otras. Por otro lado, los castigos siempre se realizaban en la noche, y de acuerdo a las referencias recogidas, no eran decididos necesariamente por los senderistas:

Eso no fue imposición de la directiva directamente sino sabiendo que esos actos que hacían mal era proveniente de los mismos pobladores, qué castigo merece su mal comportamiento. La directiva misma no decía hacemos esto, aquí no ha sucedido eso especialmente en Raucana que la directiva imponga un castigo. Cómo debemos castigar nacía de la asamblea de nosotros mismos, hay que darle chicote y le dábamos chicote... (Dirigente, 17/07/2002)

Los castigos eran públicos y se utilizaban diversas formas. Una de ellas era el empleo del «chicote», también el «callejón oscuro», el rapado de cabellera, el paseo por los poblados vecinos con un cartel acusador, etc. En algunos casos, especialmente de infidelidad, al parecer primero se recriminaba públicamente a los implicados y si reincidían se les sometía a las penas descritas.

Agarrábamos a los rateros, hasta de Ceres venían trayendo su queja aquí porque sabíamos cómo agarrar y castigar. De Ceres nos llamaban por teléfono, el dirigente contestaba ‘a tal hora íbamos a mandar milicos’, así les decíamos, eran entre 10 personas bien campeones para agarrar, mandábamos y lo traían desde Ceres. Hacíamos un callejón oscuro con todos los pobladores, a las 9 o 10 de la noche y los botamos, les cortaban el pelo al choro, poníamos un letrero en su espalda y su pecho y lo llevábamos a San Gregorio, lo amarramos al bosque, le poníamos el letrero ‘está cortado su pelo por delincuente’, así hacíamos (risas), para risa también eran». (señora V2, 19/07/2002)

Una constante de los relatos contruidos por los pobladores sobre este punto es que casi siempre terminaban haciendo una comparación entre ese pasado ordenado, que promovía la seguridad y la confianza, con un presente de características contrarias.

En cuanto a la necesidad de poner orden todos participábamos, era casi similar a que hoy en día se han formado las juntas vecinales, lo mismo por entonces había robos, rateros por este sector. Cuando hemos ingresado no hubo nada de eso, ... por el contrario, cuando hubo represión del gobierno y la base militar viene allí nuevamente empezó, los soldados en vez de apoyarnos cuándo íbamos, al contrario nos ha implicado, tratamos de detener a los rateros, tratamos de quejarnos a la base y ellos nos decían cualquier cosa, pero al final los soltaban y más bien después nos han implicado de que el PCP-SL nuevamente está empezando, no era justo decir que el PCP-SL estaba regresando, ahora como ya se han ido nuevamente hemos formado las juntas vecinales con el alcalde que nos está apoyando ... (P1, 17/07/2002)

Prácticamente en ese sentido yo he visto que la disciplina era buena, se nos prohibía tomar cerveza, podíamos tomar chicha nada más, esa era su disciplina, nos dijeron «compañeros, acá nadie puede tomar cerveza, puede tomar chicha, coman sus alimentos normales y trabajar por su terreno que es un derecho para sus hijos», así nos aconsejaban, no nos decían «van a entrar al partido». (Cipriano Sánchez, 18/07/2002).

Existió también un sistema «especial» de seguridad. La prueba es lo que ocurrió el 21 de agosto de 1991: semanas después de una movilización violenta de los pobladores de Raucana, para evitar que se ejecutara la orden judicial de desalojo, los dirigentes localizaron y capturaron a tres agentes de inteligencia infiltrados en el poblado, el capitán PNP César Basauri García, el capitán EP Luis Vílchez Vera y el suboficial EP Richard Carles Talledo⁹. Los retuvieron dos días y luego fueron presentados a la prensa. El diario La República publicó un recuadro en el que describía este suceso:

El rostro del General Jorge Torres Aciego, ministro de Defensa, palideció la noche en que tres de sus hombres aparecieron vendados y atados de manos en la pantalla de su televisor. Eran agentes de inteligencia con más torpeza que astucia. Debían haber profundizado las pesquisas sobre la presencia senderista en un asentamiento humano de la Carretera Central (Raucana), al final cayeron en poder de una turba. Dos días después, la prensa era llamada de urgencia por los presuntos dirigentes del poblado. Detrás de los detenidos aparecía un grupo de niños y, a un lado, un puñado de madres. Un cuadro de candor e inocencia que pintaba a los intrusos como los malos de la película y a sus captores como gente indefensa, víctima de la satanización...¹⁰

2.14.5. La reacción del PCP-SL frente al desalojo

Mientras los invasores organizaban un sistema de defensa asistidos por los dirigentes senderistas, la familia Isola de Lavalle, propietaria del terreno, dispuso que sus abogados organizaran una acción judicial. El proceso fue lento. El juez Rubén Mansilla debió dar curso a maniobras dilatorias de los asesores legales de los invasores, además de amenazas veladas y luego directas que llegaban anónimamente. La decisión judicial fue la previsible y ante la inminencia de desalojo Raucana entró en alerta roja.

El 7 de agosto de 1991, un año después de la invasión, y enterados de la orden de desalojo, los dirigentes de Raucana movilizaron a los pobladores. Un grupo, estimado en 2,000 personas, integrado por vecinos de otros poblados además de los de Raucana, marchó hacia la Municipalidad de Vitarte exigiéndole a la alcaldesa Asurza su intercesión; y otros grupos bloquearon la carretera Central, en un tramo que se calcula de cuatro kilómetros, con árboles, piedras y llantas quemadas.

Cuando la policía intentó despejar la vía fue atacada por encapuchados armados de piedras y hondas, haciéndola retroceder, y cuando pretendieron reiniciar el contraataque fueron disuadidos por la firmeza con que dispusieron al frente a mujeres y niños. La situación se tornó delicada cuando menudearon los tiroteos y las explosiones; solo la intervención de refuerzos combinados, de la Policía Nacional y el Ejército, logró finalmente el control.

⁹ ¿Este suboficial de inteligencia EP Richard Carles Talledo es el suboficial de inteligencia EP Mesmer Carles Talledo? Como se recuerda, Mesmer Carles Talledo fue recluido en el penal de Yanamayo acusado, «por equivocación», de colaborar con la subversión. En 1998 denunció desde su prisión la comisión de delitos por parte del grupo Colina y afirmó que se le encarceló por no estar de acuerdo con malos manejos que había detectado en el SIN. Hasta diciembre de 1992, Mesmer Carles Talledo se desempeñaba como enlace entre el grupo Colina y los agentes infiltrados en el PCP-SL Luminoso.

¹⁰ Antonio Morales: «La tenaza senderista». La República, Suplemento Domingo; 1ro. de setiembre de 1991

Cuatro horas después, rodeados de algunos pobladores, los dirigentes organizaron una conferencia de prensa justificando su acción. Esta ocasión fue crucial para la historia de Raucana. Por primera vez, después de un año de existencia, la opinión pública pudo conocer lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, eso no fue todo. A las 7.50 pm, de esa noche, en un lugar alejado de Raucana (cuadra 20 de la Av. Argentina), un coche bomba que contenía 30 kilos de dinamita y anfo fue lanzado contra la fábrica textil Perteger S. A., propiedad de los Isola de Lavalle y dedicada a la elaboración de tejidos de punto, dejando como resultado a cuatro obreros heridos, dos de ellos en estado agónico. El hecho trajo como consecuencia la renuncia de los Isola a seguir con la causa judicial. Para el gobierno, además, una ofensiva inmediata podía crear nuevos mártires y la concentración de importantes recursos que necesitaba en otras partes de Lima.

2.14.6. Conviviendo con una base militar

Las Fuerzas Armadas ya tenían un diagnóstico sobre la presencia subversiva en Lima y habían decidido ejecutar un plan para neutralizarla. Dividieron la capital en cuatro sectores -norte, sur, este y oeste- encargando al general EP César Ramal Pesantes y, luego, al general EP Luis Pérez Documet, el sur y el este; y al general EP Rojas las zonas norte y oeste¹¹. La táctica era atraer a los sectores de la población dispuestos a colaborar ubicando y combatiendo a los núcleos senderistas. Para ello, se contaba con la totalidad de efectivos acantonados en Lima, los que deberían movilizarse llevando a cabo «acciones cívicas». Por otro lado, se debía afinar los mecanismos de información e inteligencia, organizar comités de autodefensa, y apoyar e intentar conseguir acuerdos con los dirigentes locales que se enfrentaban al PCP-SL.

Sin embargo, la gravedad de lo que venía ocurriendo en Raucana condujo a otra decisión. El 6 de setiembre de 1991, el Ejército colocó una base dentro de Raucana. Sorpresivamente, un numeroso contingente de soldados anilló el poblado, estrechando paulatinamente el cerco, mientras anunciaban por altoparlantes que no se alarmaran porque llegaban a hacer una acción cívica. Para la prensa, ese día miles de pobladores de Raucana exclamaron «Basta de violencia y muertes absurdas. El terrorismo no pasará. El Perú es nuestro y lo será siempre...», mientras dos niños, un anciano y una mujer, en representación del pueblo, izaron el pabellón nacional en la plaza principal del complejo poblado¹².

La tropa fue dirigida por el jefe de la primera división de las Fuerzas Especiales del Ejército, General de División EP César Ramal Pesantes. Durante su discurso exhortó a la población a defender y hacer respetar el emblema nacional. Además, refirió que con la colaboración de los vecinos las tropas habían conseguido descubrir una fábrica clandestina de

¹¹ Antonio Morales: «Soldados de barrio». La República. Suplemento Domingo. Lima, 19 de julio de 1992.

¹² Antonio Morales: «Soldados de barrio». La República. Suplemento Domingo. Lima, 19 de julio de 1992.

explosivos, dirigidos por el estudiante de la facultad de Química, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Gregorio Pedro Rivera Lapa y su conviviente, quienes se encontraban prófugos.¹³

Los días siguientes el PCP-SL dejó sentir su presencia. En zonas cercanas a Raucana, en el kilómetro 7 de la carretera Central, estallaron cinco artefactos explosivos motivando que los efectivos militares respondieran con disparos al aire como medida disuasiva ante un eventual ataque terrorista.¹⁴

La llegada de los soldados tomó por sorpresa a la población. La señora CA relata el acontecimiento con mayores detalles:

No me acuerdo la fecha exacta, llegó una mañana, las que más se deben recordar son las viudas porque ese día hubo 6 muertos, ese día entraron los militares¹⁵. Nosotros nos cuidábamos más que entren por la avenida Esperanza, por San Antonio o por San Gregorio, pero nunca nos imaginábamos que iban a entrar por Amauta. Me acuerdo que era las 9 de la mañana, yo había mandado a mi hijo a la escuela porque estudiaban cerca, estaba en mi casa preparando el almuerzo y en eso los vecinos gritan '¡alerta!, ¡alerta!', salimos y nos dicen 'miren vecinos', miramos al frente en el cerro y vimos sobre un asentamiento que se llama Fátima, sobre Fátima había bastantes soldaditos, todito estábamos rodeado de militares, todos nos asustamos, había rumores de que Raucana tenía que desaparecer. Entraron hablando con megáfonos que se iba a hacer acción cívica, no se asusten (18/07/2002).

Sobre la hora, no hay precisión acerca de ella. Para unos «llegaron a las 6 de la mañana, toditos», para otros fue a las 9 o 10 a.m. hay quienes dicen que fue «de noche, en la madrugada». Sobre la cantidad de soldados que llegaron entonces tampoco pudieron dar una versión uniforme. La cifra varía entre 150 y 300 pero en algo coinciden todas las versiones: a medida que pasaron los años fue disminuyendo. La Base permaneció hasta el año 2000, cuando una decisión del gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua dio por finalizada sus labores.

¿Por qué estuvo tanto tiempo la Base, si era conocido que por lo menos desde 1994 la subversión ya no era un peligro? Eso mismo se preguntaba la gente de Raucana y a modo de explicación -bastante certera, por cierto- se propagó la afirmación siguiente, que nos alcanzó el dirigente CS:

Se prolongó más porque como vinieron los periodistas extranjeros y dijeron que acá había terroristas, comenzaban a tomar fotos, se dijo que Raucana era el foco del PCP-SL Luminoso, se hizo una propaganda a nivel mundial. La base se quedó permanente, porque Fujimori estaba luchando contra el terrorismo. Nosotros ya habíamos comprado el terrenos al dueño pero la base se quedó hasta esa época.

La decisión de dejar la Base militar tanto tiempo se refleja en una conversación que tuvo Vladimiro Montesinos con Alex Kouri Boumachar, alcalde del Callao, el año 1998 donde asume

¹³ DESCO: Banco de datos. Ficha 013013 Fecha 08/09/1991 Fuente: La República

¹⁴ DESCO: Banco de datos. Ficha 013058 Fecha 10/09/1991 .Fuente: El Comercio.

¹⁵ La señora Astucuri está condensando dos momentos en uno. Refiere a un evento en el que hubo «6 muertos» que, en realidad, ocurrió el 28 de abril de 1992, cuando los pobladores de Raucana tuvieron un enfrentamiento con los efectivos de la base militar.

que «Raucana era zona liberada, no se podía entrar (...) la gente tenía una actitud de zozobra, pasaban las tanquetas y al toque sacaban el trapito rojo con la hoz y el martillo, ponían (ininteligible) están haciendo las escuelas de entrenamiento de Raucana, que son (ininteligible) un cáncer que (ininteligible) empieza».¹⁶

2.14.7. La acción cívica

La tropa ingresó repartiendo víveres, cortando el pelo a los niños y realizando exámenes médicos y bucales. Era la manera de presentar la nueva táctica de acercamiento a la población que realizaban las Fuerzas Armadas. En efecto, luego de intentar aplacar los temores de la población, mediante el uso de altoparlantes, el ingreso del Ejército a Raucana se realizó en medio de un ambiente que se esforzaba por ser festivo. Regalos, discursos y la banda de músicos sin dejar de tocar. Por supuesto, la prensa había sido convocada al evento para que diera constancia de las novedosas formas que se habían adoptado para combatir el terrorismo, «ganando los corazones y mentes de la población civil».

Todo transcurrió dentro de lo previsto. Se izó el pabellón nacional, se dieron hurras por el Perú y se explicaron los motivos de la medida adoptada. Luego los jefes militares se retiraron y tras de ellos los periodistas, pero los soldados no hicieron lo mismo. Por el contrario, instalaron al caer la noche sus carpas de campaña.

La señora CA asumió, como todos, que debía estar serena y se dijo, «ya pues, acción cívica». En ese momento, «todos los recibimos tranquilos, les dimos pasos para que entren los camiones, trajeron carpas, dieron atención médica, repartieron víveres y después ropa, ese día estuvo bonito porque incluso trajeron su banda, todo estuvo bonito...» (18/07/2002).

Pero lo serio llegó después:

Llegaba la noche y no se retiraban, nosotros nos preocupábamos por qué no se van, la acción cívica ya terminó deben irse, pero nada. Llegó la noche y, justo aquí en el sector 5, había un sitio desocupado para hacer un parque, los militares empezaron a armar sus carpas, ante de eso, en la zona donde ahora es hospital, era un sitio bien lindo, había grass, era el estadio de San Gregorio, y allí empezaron los militares también a armar sus carpas. Los camiones abrieron una entrada y allí se quedaron y en la puerta donde hacíamos guardia también se apostaron, lo mismo que en los torreones, quedamos bajo el mando de los militares. (18/07/2002).

A partir de ese momento la vida en Raucana era un asunto que debían resolver la población, sus dirigentes y los militares. Nadie esperaba que estos últimos se quedaran, tampoco los senderistas. Éstos habían evaluado que Raucana, su propagandizado «comité popular abierto», sería invadido violentamente y prepararon a sus «masas organizadas en función al equilibrio

¹⁶ Congreso de la República: Código: 873 / Tipo de información: vídeo / Fecha de recepción: 26/02/2001 / Fecha del evento: 28/01/98 / Fecha de exhibición: 28/02/2001. Título: DR. ALEX KOURI BUMACHAR - DR. MONTESINOS TORRES.

estratégico» anticipando que al «Estado reaccionario» no le quedaba otra salida que el «genocidio».

Los cuadros senderistas alojados en el asentamiento pudieron burlar el cerco tendido y escaparon. Sólo quedaron los dirigentes visibles, aquellos que habían expuesto su identidad, para hacer frente a la eventualidad presentada. Así, el secretario general Valentín Capcha, FC y «Santiago» cargaron con la responsabilidad de representar a la población y de formar una nueva estrategia para enfrentar a los militares.

Las acciones cívicas, reducidas luego a repartos de alimentos y eventuales asistencias médicas en el local de la base, tuvieron una corta vigencia. No contamos con información precisa, pero todo parece indicar que el reparto de alimentos se reanudó luego de un periodo de alta actividad represiva. Cuando esto se produjo, paulatinamente se fueron expresando resistencias y críticas que terminaron siendo airadas al comprobarse que los alimentos donados no eran aptos para el consumo humano.

Un enojado señor P1 recuerda:

Nosotros hemos pedido siempre que haya acción cívica, que nos apoyaran pero lo que nos indignaba era que nos manden alimentos podridos, eso era un abuso, dañaron nuestra moral, cómo se juegan así. Porque ni nuestros animalitos, ni el pollo quería el trigo que nos traían. Eso era una burla... Todos los alimentos estaban vencidos...

Casi lo mismo afirma la señora CA:

Incluso una vez no les quisimos recibir, daban cosas en mal estado. Más también no les querían recibir porque se habían llevado a la gente, se habían muerto, nos sentíamos impotentes, no era igual enfrentarse con una persona que estaba desarmada y una persona que estaba armada y que podía involucrarte en lo que le daba la gana, no le podías decir nada, si le decías algo ya te acusaba...

Aun así, para los más pobres entre los pobres de Raucana parece que no había alternativa, como nos lo comunicó la señora V2, cuando refirió que «daban alimentos pasados, gorgojeados, otros comieron así nomás, lavando, los pobres que no tenían nada...».

2.14.8. La tropa y la población

La tropa se estableció en un espacio que hasta ese momento estaba parcialmente desocupado: las antiguas caballerizas. Los pobladores habían levantado allí sus minigranjas comunales.

Durante los nueve años que permaneció la base circularon muchos jefes y oficiales cuyas conductas no son valoradas en idéntica forma. El de más ingrato recuerdo resulta ser el primer capitán que comandó la base en Raucana, «un gordo, ya de edad». Debemos remarcar que ningún poblador o dirigente quiso decir los nombres de los oficiales que habían estado destacados en este

lugar.¹⁷ Un ex secretario general fue el único que lo identificó. Era «el capitán EP Manolo [Manuel?] Gonzáles Calderón, más conocido como el comandante Pedro». Si con los jefes y oficiales se entablaron relaciones tensas, algo diferente, pero igualmente difícil, sucedió entre la tropa y la población. «Daban pena los soldaditos», manifestó la señora CA.

No parecían de Lima, eran de provincias y se morían de hambre, a veces pasaban por detrás de mi choza, otros me decían «tía (o mami) dame un pancito». Un día estábamos haciendo mazamorra, y me pidieron pancito, en ese momento no tenía un pan, saqué un plato de mazamorra y veo que los pobres se lo comían caliente, en eso viene su jefe y se los llevaron a la plaza, les castigaron fuerte, pero ellos(los oficiales) sí estaban bien comidos, los soldaditos también han sufrido bastante con el frío... (18/07/2002).

Lo primero que hicieron los militares fue elaborar un censo en donde «se tomó nota de tu nombre, dónde vives, de dónde vienes, todo se tomó nota, nada se escapaba, todo fue analizado...». Esta práctica se realizaba periódicamente. Luego de identificar a los pobladores, los militares empezaron a realizar algunas acciones que serían constantes durante los nueve años de su permanencia, como las redadas capturando a los indocumentados para luego conducirlos al local de la Base donde efectuaban una primera *selección*.

CS aseveró que las redadas empezaron apenas llegaron los militares:

Ese día comenzaron a rodearnos, nos pidieron documentos, ellos al toque se organizaron e hicieron su base, se pararon en cada esquina donde nosotros hacíamos guardia, entraron de frente, se cuadraron y decían «documentos señores, de acá nadie va a salir, terroristas desgraciados», al que no tenía documentos se lo levantaban, algunos lloraban y decían «¿qué pasa?, ¿cree que somos terroristas?» (18/07/2002).

El indocumentado o el sospechoso tenía que soportar un primer *ablandamiento* en la Base. Los que sufrieron esta experiencia cuentan que no solo los tenían toda la noche amarrados y vendados sino que: «Con el Ejército no se podía caminar después de las 7 de la noche, te agarraban y te llevaban al fondo, te metían al pozo de agua, como antes esto era caballeriza al fondo tenía pozos, allí te castigaban a veces, decían ‘¿quiénes son?’, pero como uno no sabe nada no puede decir nada...» (CS, 18/07/2002)

Luego eran trasladados a la División de las Fuerzas Especiales (DIFE), en Chorrillos, donde volvían a sufrir otra sesión de torturas. Si allí consideraban que un detenido era sospechoso lo trasladaban a la DINCOTE; si el detenido no demostraba su inocencia o no pagaba una «cuota» en dinero (como sostienen algunas fuentes) era pasado a Canto Grande en condición de inculpado. Ya recluido, debía ver la forma de pagar a las autoridades y al abogado que lo defendería en el juicio de acuerdo al atestado remitido. Por las referencias recogidas, la lógica de estas detenciones parecía ser que los habitantes de Raucana eran culpables mientras no demostraran su inocencia. Una experiencia por el estilo tuvo el señor P1.

¹⁷ Cuando les pedíamos que los identifiquen por su nombre, nos manifestaban su miedo de que se llegara a saber que los habían señalado y temían las represalias que podían tomar contra ellos.

Me decían que era terrorista, de frente a uno le decían. Por ejemplo, en mi caso me decían que ‘usted ha participado en un acto, te han llamado por tu nombre pero lo único que te salva es el último apellido’, dijo. Así me amedrentaban, era maltrato psicológico. No hubo juicio han aprovechado esos 15 días que estaban incomunicado para amedrentar a la familia que estaba desesperada y sacarle plata diciendo ‘tenemos pruebas, le hemos encontrado con muchas pruebas’. Fue también tanta coima a pesar de que no hubo ninguna prueba. Lo único que en DINCOTE para salir, a pesar de que no tenían por qué detenerme, tenía que pedir coimas haciendo chantaje a tu familia que no conoce nada de esos procedimientos, diciendo que él se va a quedar 20 años, 30 años, acusándoles con otras pruebas. Como no te comunicabas, estabas incomunicado 15 días, esos días aprovechaban a todo dar de una u otra manera para asustar a tu familia, que no conoce el procedimiento, cae en la desesperación, incluso tuvieron que darle algo de 500 soles a esos de la DINCOTE y recién se pudieron comunicar conmigo. Al último se comprueba uno tranquilamente en su conciencia sabe que nada tiene que ver. Hubo muchos (que estaban comprometidos), no se puede negar pero los que realmente estamos acá somos lo que realmente necesitamos techo... (17/07/2002)

Otra práctica reiterativa de los militares fueron los rastrillajes. Hacia 1990, estos operativos ya eran corrientes en los barrios marginales de Lima, pero en Raucana empezaron con la llegada de los soldados; estos normalmente estaban encapuchados, aunque tampoco era inusual que lo hicieran con el rostro descubierto, e ingresaban a los domicilios siempre después de la medianoche; prácticamente la totalidad de los habitantes de Raucana vivió esta experiencia en más de una oportunidad: «A cada rato entraban, a mi casa varias veces han entrado, toda la cama lo volteaban, las frazadas y hasta la tierra con un fierro chancaban, yo le decía ‘no sé nada’ (PJ, 17/07/2002)

El temor mayor era que encontraran algún objeto que las particulares consideraciones de los militares pudieran considerar sospechoso. La señora V1 ilustra bien lo que sentían en esos momentos:

Teníamos miedo porque en la noche entraban y podías desaparecer, el que no ha hecho nada no teme nada, pero de todas maneras la gente comentaba que a los inocentes se los estaban llevando, que esto, que el otro, teníamos miedo de que en la noche podían entrar y nos podían desaparecer cuando empezaron a llevar a otros vecinos, a los vecinos los llevaban, ya no amanecían, nosotros con temor dormíamos también. De allí poco a poco ya no actuaban ya... (19/07/2002).

Hubo otras formas de infundir miedo a la población. La CA comenta que «lo que más nos asustaba era lo que hacían en la noche, disparaban al aire...». Constantemente, los soldados eran formados en horas de la madrugada y se les ordenaba realizar masivas descargas de fusilería. Los vecinos que residían en los alrededores de la base recuerdan cómo sus casas se llenaban de humo de pólvora y a esas horas debían salir a la intemperie para no ahogarse. Una variante de esta modalidad era utilizar explosivos en lugar de disparos de fusil: una seguidilla de detonaciones fue una característica habitual del paisaje nocturno en este rincón de Ate-Vitarte.

Otra manera utilizada era sacar a correr a los soldados por las callejuelas de Raucana, haciéndolos entonar cánticos amenazadores contra los pobladores. Incluso hubo prácticas que resultan más difíciles de explicar que las anteriores, como refirió el ex secretario general FC:

Muchos de los comedores criaban a sus animalitos, porque no podíamos vivir con animales mayores y menores, entonces le dimos un lugar allá (parte de la caballeriza). Ojalá se encuentre acá un vecino que se hizo presente en el momento oportuno cuando se le hizo el llamado. Al vecino Marcelino Morante. Ese vecino se quejó del corte de los vientres de los chanchos, otro vecino, Perales, también... (18/09/2002).

2.14.9. La desarticulación del PCP-SL

El 11 de septiembre de 1991, sólo días después del ingreso de los militares a Raucana, se presentó una denuncia contra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército, acusándolos de cometer una serie de abusos en este asentamiento humano. Paralelamente, se había interpuesto un recurso de Hábeas Corpus ante el noveno juzgado de instrucción de Lima -por los mismos cargos- que rápidamente fue declarado improcedente. El firmante de estos papeles era el Secretario General de Raucana, Valentín Capcha Espíritu, respaldado con las rúbricas de varios «abogados democráticos»¹⁸. Las exigencias algo descabelladas de Capcha, el apoyo de conocidos abogados pro-senderistas y la absurda posición de negar la presencia del PCP-SL en Raucana, solo dio motivo para que la policía preparara un plan de seguimiento a su persona.

Capcha era cargador en el mercado mayorista. El 21 de octubre de 1991, un patrullero que estaba realizando un operativo de saturación por los alrededores del mercado intercepta un taxi que llevaba como pasajeros a Capcha y su esposa, Bertha Rivera Ordóñez. La revista Caretas, cubrió dicha situación como sigue:

En la revisión, que los policías llamaron «de rutina», apareció repentinamente el entripado: dos bolsas y dos mochilas. El contenido no dejaba lugar a dudas: toda una gama de productos que iban desde municiones, granadas y fulminantes, hasta pólvora, dinamita y polvo de aluminio, pasando por planos de ataque a diversos lugares, folletos senderistas y una relación de supuestos miembros o vinculados a SL.¹⁹

En realidad, Capcha ya había empezado a ser materia de interés para la inteligencia policial desde el momento que se presentó en el Congreso de la República para tratar de conseguir apoyo entre los legisladores. Su captura fue un primer e importante golpe al PCP-SL en Raucana. Capcha era supuestamente uno de los dirigentes más importantes y su captura, además de revelar las dificultades que le provocaba la presencia de la Base, también demostraba que el PCP-SL ya no poseía los reflejos para reaccionar rápida y adecuadamente, tal como en años anteriores. Capcha sería reemplazado por FC en la conducción del asentamiento.

¹⁸ Así eran conocidos los abogados del PCP-SL Luminoso porque estaban agrupados en la Asociación de Abogados Democráticos.

Si bien los dirigentes senderistas más importantes, aquellos que integraban la «central» y otros que tal vez permanecían refugiados en este lugar, salieron apenas llegaron los militares, las «cabezas visibles» tenían ahora la misión de conducir la situación hacia un terreno más adecuado a los intereses del partido. De alguna manera FC siguió el mismo esquema de Capcha, pero aparentemente estaba mejor preparado que éste, impulsando reclamos ante las autoridades y a la vez denunciando en los medios a los oficiales encargados de la base. Como él mismo afirmó:

(Días después del ingreso de la base) ha sido la detención de nuestro secretario general, que actualmente se encuentra preso, señor Valentín Capcha Espíritu. A raíz de esto muchos temían tomar responsabilidades dentro de la población, pero el que no debe no teme. Era delegado de un sector, el sector cuatro y una asamblea de delegados me nombran como secretario general de emergencia, interino. Luego fue ratificado en una asamblea general, en presencia de los señores miembros del ejército, comandados por el señor Manolo (¿Manuel?) Gonzales Calderón, más conocido como el comandante Pedro.

Siendo secretario general, FC debió manejar un caso sumamente delicado: el asesinato de Johnny Acha Rafael:

En el mes de noviembre, el 7 de noviembre [de 1991], ocurre un caso en otro asentamiento humano. El poblador Johnny Acha Rafael fue asesinado y botado en un costal en un lugar llamado Jardín Azul, que está a unas cuadras de aquí. Esto no quedó allí, se hizo público, se denunció a nivel internacional por los medios de comunicación, CNN, se denunció por la prensa ECO, entre otras más, France Presse, y también se hizo una denuncia pública a través de una revista, El Ayllu, cuya fecha es 21 de noviembre del 91, que pongo en manos de ustedes (CVR) esta copia. En ese entonces, le reclamamos (a los militares) por la pérdida de un vecino, los dirigentes y la población. Sin embargo, a raíz de esa denuncia los dirigentes sufrimos persecución, humillación, sufrimos el terror en esta población. Nosotros teníamos que ingresar como si estuviéramos en una base militar. No respetaron a nuestras madres, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Yo reclamé eso. (18/09/2002)

Efectivamente, Acha Rafael apareció muerto en un acequia de Huanchihuaylas. Se le recuerda como un muchacho alegre, que le gustaba jugar vóley. Según los vecinos, los militares lo sacaron de su choza de noche y al día siguiente encontraron su cuerpo envuelto en un costalillo de harina de pan, con una herida de bala en la cabeza. Los motivos de su asesinato nunca quedaron claros, pero un dato que puede ser importante es que el hermano de Acha Rafael estuvo recluido en Canto Grande, junto a un actual poblador del asentamiento, bajo cargo de terrorismo. Ambos salieron por falta de pruebas.

A continuación, FC relata las consecuencias de su reclamo:

Yo tuve muchas conversaciones con el comandante, capitán, encargado de este lugar. Pero, sin embargo, lo único que he podido conseguir es una persecución, y al final, el 27 de abril del año 1992, fui secuestrado, aproximadamente a la 1.30, 2 de la tarde. No tengo miedo en decirlo... No tengo por qué temer. Ese día fui vilmente torturado en la caballeriza del fondo. Me amordazaron, me pusieron grilletes, entre otras cosas más. Sólo la valentía y el coraje de querer estar con mi pueblo, voy a hablar... Me detienen, entonces, desde el 27 de abril, me llevan a una base militar después de torturarme así. Antes de llevarme a la

¹⁹ Caretas: «Desenmascarado». 28 de octubre de 1991.

base militar, antes de salir, en la puerta de atrás, logré quitarme la mordaza y pedí auxilio. Escucharon muchos de los pobladores, el compañero Pedro Heredia Torres... (18/09/2002).

Enterada la población de su detención y temerosos de que lo desaparecieran, como a otros dirigentes (aunque es preciso decir que en ningún caso se dieron datos específicos sobre esta afirmación), optaron por movilizarse para impedir la salida de FC, quien ya estaba en un vehículo listo a ser trasladado fuera de Raucana. Las versiones recogidas aseguran que se apostaron en una de las puertas de entrada y en determinado momento, al ponerse tensa la situación, el capitán Gonzales ordenó disparar a la multitud. El resultado fue un civil muerto y no menos de once heridos -dos de ellos miembros del Ejército-.

La señora CA recuerda así aquel día:

Le dije al delegado ‘vecinos un ratito voy y vengo, voy a ver mi lenteja no se vaya a quemar y se incendia mi choza, me vengo corriendo’. En eso cuando voy a llegar a mi choza comienzan los disparos fuertes de ametralladora. Yo me quedé paralizada, me di media vuelta y regresé, el tiroteo ya había parado, regresé y en el camino vi a una vecina que venía con los brazos alzados, le habían disparado, le habían hecho un hueco así como una papa sancochada cuando se revienta, así. Sigo caminando no rápido sino asustada y veo a otra vecina que decía ‘¡a mi esposo lo han matado!’, no lo habían matado sino le dieron un balazo, le volaron toda la pierna, en el tobillo, la señora fue a su casa trajo una carretilla y con eso lo llevaron. Seguí caminando y veía a otros vecinos que se arrastraban, estaban heridos. Volví a ayudar a la vecina. Ese día hubo 6 muertos [la versión oficial dice que fue uno].

La misma señora CA explica los motivos de este hecho:

Esa vez el problema fue por FC, más me acuerdo que fue por él, del otro me acuerdo de vista [Heredia], pero era por FC que queríamos que lo suelten. A Valentín no se lo llevaron de aquí, Valentín se iba a trabajar con su esposa al mercado de frutas, acompañaba a su esposa a trabajar, a él lo detuvieron en un taxi rojo, eso salió en primera plana de los periódicos al día siguiente. Decían que lo habían agarrado con volantes, con estatuas de Mao o de Abimael, algo así, de allí se lo llevaron. También hubo un grupo de 3 hermanos que se los llevaron, pero ¿qué habría pasado? ellos eran de Cañete, los vinieron a visitar, al día siguiente como hubo requisa en su huertito encontraron tirado mechas, por eso se lo llevaron a los 3, eran los hermanos Zárate. Salieron hace poco.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, publicado por la mayoría de los diarios,²⁰ los hechos se desencadenaron cuando aproximadamente 300 pobladores, dirigidos por *elementos terroristas infiltrados*, atacaron la base del Ejército en esa zona. Ese portafolio informó que el civil fallecido era Ernesto Romero Osorio. De acuerdo con esta fuente, la noche del 27 de abril, efectivos del Ejército apostados a un costado de dicho asentamiento humano detuvieron a FC y a otro sospechoso, quienes fueron llevados a la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército para ser investigados. Esta intervención habría provocado la reacción de los pobladores de Raucana.

²⁰ DESCO: Banco de datos. Ficha: 018261, Fecha: 29/04/1992, Fuente: La mayoría de los diarios.

El 28 de abril al mediodía, la trifulca se desencadenó según *La República*, fruto de la tensión reinante entre los pobladores, desde que en horas de la madrugada los efectivos del Ejército acantonados en ese lugar realizaron un operativo y sacaron de sus domicilios a los dirigentes²¹. Los militares justificaron la intervención y detención de los dirigentes comunales, aduciendo que

Les encontraron en su poder un plano del asentamiento Raucana y detalles sobre la ubicación y compartimientos del campamento de la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército, que se encuentra en ese lugar desde el año pasado realizando acción cívica a favor de la población, pero también con la misión de efectuar una férrea vigilancia para evitar la infiltración del grupo extremista el PCP-SL Luminoso (ibid).

Desde las primeras horas de la mañana -continuó *La República*- los pobladores, en su mayoría mujeres y ancianos, habían planeado movilizarse masivamente hacia la Prefectura de Lima, en la avenida España, para reclamar la inmediata libertad de sus detenidos. La marcha no llegó a realizarse porque los efectivos del Ejército, con apoyo de la policía, cercaron todo el perímetro del asentamiento humano, principalmente las entradas anterior y posterior, impidiendo la salida de los moradores. Se obstaculizó, asimismo, el ingreso de periodistas. Cuando una brigada militar retornó al asentamiento humano, un oficial informó que los detenidos habían pasado a la DIRCOTE, porque se les había encontrado documentos comprometedores. Los pobladores siguieron reclamando la libertad de los dirigentes. «Vivos los llevaron, vivos los queremos», «No al genocidio», gritaban a viva voz.

Según el diario *Expreso*, medio millar de pobladores con palos y piedras avanzaron hacia la zona rígida gritando que no les importaba morir por reclamar justicia. Trataron de atravesar el muro de casi 40 centímetros de alto que delimita el poblado de la zona militar. De pronto un soldado recibió una pedrada en el cuerpo. Esta fue la señal. Aunque ningún jefe dio la orden de disparar, el soldado, nervioso y sorprendido, hizo varios disparos y entonces el pelotón lo imitó. Entre los heridos que fueron trasladados al hospital del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) de Vitarte, figuraban Mario Flores Ríos (25), Silverio Quispe Pandos (33), Olga Vivas Nahuripa (28), Leodoro Conchalla Morales (60), Pedro Paulín Miranda (39), Julia Cuya Huiza (23), Hernán Gómez Quispe (23) y Luis Ferro Chavarría (39)²².

Finalmente, FC fue sacado de Raucana:

¿Qué hicieron los señores miembros del ejército? Nos acusaron de terroristas, nos acusaron de muchas cosas. Me llevaron a una base militar, a un cuartel militar, según..., era el Pentagonito. Allí sufrí la tortura, señores. Esa noche no dormí, esa noche sufrí la tortura, lo más terrible que puede sufrir un ser humano. Me golpearon, me dieron vuelta los brazos, me aventaron a un cuarto de un metro que a la justa daba vuelta mi cuerpo, había ratas muertas, orines podridos y otras cosas más. Volvieron a pasar y me obligaban a decir cosas, ¿qué cosas podía decir si yo no sé? Al final, ¿saben lo que hicieron señores?

²¹ *Idem.*

²² *Idem.*

²³ Amnesty International. EXTERNAL AI INDEX: AMR 46/11/94

Me metieron ahí a los ojos, a los miembros inferiores, me metieron ahí al ano, no tengo vergüenza de decirlo, no tengo miedo, señor...

A la captura de FC sucedió la de «Santiago» y a esas alturas era casi imposible que la dirigencia supuestamente ligada al PCP-SL pudiera remontar la situación a su favor. El esquema organizativo se desarticuló. Los vecinos, temerosos, evitaban asumir cargos. Así, por ejemplo, la señora NH era, por entonces, una vigorosa lideresa de los comedores populares de Raucana. Bastante dinámica, en más de una ocasión tuvo roces con los oficiales de la base y por este motivo no tardaron de señalarla como «terruca». A pesar de las amenazas, la señora NH continuó con sus labores hasta que ocurrió lo previsible. Una madrugada, un grupo de soldados irrumpió en su choza, rompiendo la puerta, gritando groserías, y después de ingresar al cuarto donde dormía con sus hijos intentaron maniatarla mientras los hijos se escondían debajo de las camas. El escándalo alertó a sus vecinos quienes llegaron en su ayuda. De esa manera, la señora Hilario se salvó de ser secuestrada. Posteriormente hubo un segundo intento que tuvo el mismo desenlace. El resultado fue que esta lideresa natural, que muestra aún muchos recursos para la conducción y la organización, se deprimiera y optara por no asumir nunca más ninguna responsabilidad en la comunidad. Actualmente integra un grupo católico de base y desde esta instancia trata de reordenar su vida.

Bajo estas circunstancias, seguramente Raucana no habría tenido una junta directiva. Pero había un asunto todavía pendiente. En medio de la convulsión la familia Isola no se había inhibido de reclamar sus derechos sobre el terreno, a pesar de su retiro momentáneo del juicio que mencionáramos antes. Controlada la situación, volvieron a la carga, ahora teniendo la iniciativa de su lado. Los vecinos ya no podían organizarse para el enfrentamiento y debieron aceptar las negociaciones bajo la amenaza de perder el terreno. La única opción razonable en este sentido fue la compra, pero para realizarla Raucana debería dejar de ser asentamiento humano y formalizarse como una asociación de vivienda.

Así, Raucana pasó a ser una asociación de vivienda cuando en los hechos era y sigue siendo un asentamiento humano, y esto que parece un asunto formal en realidad tuvo consecuencias profundas. El terreno se valorizó en 280 mil dólares americanos y esta suma debía ser pagada por las 530 personas que se inscribieron como socios, en partes iguales y mediante cuotas mensuales. Con la lotización definitiva se le asignó a cada socio un terreno de 120 metros cuadrados. Incluso, los Isola incluyeron una cláusula en el contrato, en el que comprometía a la asociación de Raucana a otorgar lotes de terreno a los antiguos trabajadores de su caballeriza. Estas personas formaron el asentamiento humano Fátima, contiguo a Raucana.

La debilidad organizativa fomentada por la presencia militar hizo que todo este proceso estuviera colmado de dudas y sospechas por parte de los socios. Entre gente que se iba y otros que llegaban sin haber participado en las «jornadas de lucha», acusaciones de tráfico de terrenos, colusión con los militares y sospechas de infidencia, además de exigencias para que se rindan

cuentas del dinero de las cuotas, fue formándose un ambiente que los vecinos califican de irregular, frente al cual no existían canales para controlar la actuación de los dirigentes.

Para entonces, un grupo de personas había decidido tomar las riendas de Raucana. Liderados por Máximo Cahuana, vecinos como Agustín Huamán y Carlos Lavalle fueron elegidos como miembros de la junta directiva y los cuestionamientos recayeron sobre ellos, especialmente sobre el último de los nombrados.

Lavalle era secretario de economía y, además, boxeador —dicen que llegó a ser campeón nacional de peso medio—. Una de sus tareas era recoger las cuotas de los socios y realizar el depósito en la cuenta bancaria correspondiente. Esto le acarreó un problema de consecuencias funestas para su persona. Según una pobladora, Lavalle

Se agarró una buena cantidad de dinero, como hicimos el trance con el dueño comenzamos a pagar mensualmente cada socio 20 dólares y entonces se dijo, por comentarios, yo no lo vi personalmente, que el señor Huamán y el finado Lavalle se daban la gran vida, tomaban, cuando iban al bar sacaban los dólares y gastaban, entonces los vecinos comenzaron a decir eso.

Para otro vecino:

Chocolate (así le decían a Lavalle) necesitaba dinero para ir a un campeonato de box en Cuba. Como no lo tenía sacó de la caja. Cuando lo denunciemos él dijo que había sacado pero no todo lo que faltaba allí. Como algunos vecinos siguieron acusándolo el agarró y empezó a pegarles. Era boxeador pues...

En la mañana del 15 de abril de 1994, los vecinos de Raucana escucharon disparos seguidos de una explosión. Habitados a este tipo de ruidos, el ambiente no se alteró hasta que empezó a correr el grito de que habían asesinado a Lavalle, en las inmediaciones de uno de los pozos de agua.

Dos jóvenes que habían venido... le dispararon, cuando ya estaba herido en el piso le pusieron encima una dinamita, él se inclina un poco, vio que su hija venía llorando, no se sabe de dónde sacó fuerza, la agarró y logró tirarle al pozo de agua, luego estalló la dinamita».

El asesinato de Lavalle tuvo otras explicaciones. Para Amnistía Internacional el motivo fue que Lavalle era un dirigente que había hecho público su oposición a los esfuerzos hechos por el PCP para controlar el poblado en donde residía con su familia». Agrega luego: «Se dice que su asesinato es parte de una campaña de amenazas e intimidación realizada por miembros del PCP contra dirigentes vecinales que intentan resolver pacíficamente los problemas de posesión del terreno.²³

La afirmación de Amnistía Internacional está apoyada por lo que manifestó una vecina:

En ese momento (asesinato de Lavalle) estábamos en tratos con el dueño para hacer negocio. Antes esto era asentamiento humano. Para que se haga el trato debía ser

asociación, pero algunos vecinos no estaban de acuerdo en comprarlo, pero muchos sí estábamos de acuerdo porque ya queríamos salir de este problema del desalojo, de los militares y todo, nosotros pensamos que siendo asociación y ya comprando los militares se iban a ir pero no fue así, se quedaron por varios años.

Para los vecinos el autor del asesinato fue el PCP-SL y esta reaparición en Raucana, a través de un acto de «justicia popular», quería dejar la impresión de que nunca se había retirado. Los responsables nunca fueron ubicados y apresados. Sin embargo, a esas alturas muchos consideraban que el lote ya no podía conseguirse *combatiendo y resistiendo*, sino comprándolo. Si al inicio de la experiencia el PCP-SL buscó sintonizar políticamente con las necesidades de los vecinos, ahora manifestaba precisamente lo contrario. En todo caso, en 1994 la derrota militar de esta organización era palpable en todo el país.

2.14.10. Los héroes silenciosos

Luego de su violento nacimiento, Raucana debió dirigirse hacia una vida «normal» en los términos que esto se entiende en los asentamientos humanos, es decir, enfrentando la pobreza y precariedad circundante mediante la organización comunal; formando redes de solidaridad con el exterior y aplicando diversas estrategias con las dependencias públicas para ser abastecidos de servicios básicos. En todo caso, se decía que el objetivo primordial de la política de pacificación tenía este sentido. Sin embargo, no fue así. Ocho años después, algunos periodistas se acercaron al lugar y quedaron impresionados con lo que vieron. Los muros y torreones de vigilancia se mantenían en pie sin que nadie pudiera explicar su utilidad en esos momentos²⁴. Al ingresar se encontraron con un cuadro «desgarrador». *El Comercio* publica un informe, prestando mucho interés a la gran cantidad de niños con minusvalías que vivían en este lugar²⁵. *La República*, por su lado, publicó igualmente una crónica:

Y es que este recóndito poblado sobrevive al mal tiempo. (Las miles de personas) que habitan el asentamiento humano están, desde hace años, en la absoluta miseria. No tienen trabajo fijo, la mayoría apenas mastica el castellano, la ropa que visten da pena, se pelan de frío, carecen de agua potable, desagüe y, literalmente, comen cuando hay suerte. Ni hablar de una posta médica o una capilla donde rezar.²⁶

La crónica incluye las declaraciones del dirigente Valeriano Francia, el único hombre serio que encontramos en Raucana pues los otros o estaban borrachos o son delincuentes, quien resumió la situación de esta manera: si es verdad que el infierno existe, no puede ser peor que Raucana. Los periodistas asociaron estas manifestaciones con el clima de violencia provocado por el PCP-SL. Llama la atención, sin embargo, que en ninguna de las dos crónicas se haya mencionado algo

²⁴ Posteriormente, estas construcciones fueron derruidas.

²⁵ *El Comercio*: «Desgarrador drama viven niños especiales de Raucana». Martes, 28 de julio de 1998.

²⁶ Adriana León: «Esta gente se muere de hambre». *La República*, suplemento Domingo. Domingo, 9 de agosto de 1998.

evidente: la presencia de la base militar en Raucana. Es seguro que los pobladores evitaron hablar sobre este asunto, pero eso no debió ser motivo para dejar de averiguar qué roles desempeñaba allí, más aún cuando hacía mucho tiempo que el terrorismo había dejado de ser una amenaza. En suma, parecía una ausencia sintomática.

En la actualidad, Raucana, cuenta con energía eléctrica y redes de agua y desagüe, además de una posta médica que también brinda servicios a la zona circundante. Nada esto evita que el extraño sienta la extrema pobreza de sus habitantes.

Raucana sólo tiene un título de propiedad colectivo -que no ha terminado de sanearse legalmente- y aún espera la titulación individual. Esta realidad muestra la colisión del proyecto senderista. El precio emocional que los vecinos debieron pagar para obtener un lugar donde vivir fue mucho más alto que en otros asentamientos humanos. Pero el «comité popular abierto», organizado por el PCP-SL no fue, según lo reconocen quienes vivieron bajo su influencia, algo impuesto por amenazas o intimidaciones, ni por asesinatos a los dirigentes o por su desplazamiento forzado. La población se movilizó tras del comité conciente de lo que era y aceptando sus condiciones por el interés de conseguir un terreno. Esta apuesta tuvo resultados inesperados.

Desde el momento mismo que se instaló la Base Militar la situación varió sustancialmente en el asentamiento, según la percepción de los pobladores. Durante nueve años debieron sufrir una sistemática acción del Estado, a través de sus fuerzas armadas, cuya finalidad era, además de diluir la influencia senderista, sustituirla por un régimen disciplinario que evitara cualquier expresión diferente a la manifestada por la autoridad militar.

En ese sentido, lo que debió ser una actitud de ganar «corazones y mentes» terminó convertida en una acción que se dirigió a destruirlos, con todas las funestas consecuencias que esto acarreó a la vida social, la vida familiar y la integridad del individuo.

La intervención militar no fomentó tampoco el desarrollo comunal sino que, de alguna manera, lo inhibió al impedir cualquier intento de organización.

Como afirma FA:

La instalación de una base militar, del ejército peruano lamentablemente ha sido para nosotros un retraso general, realmente no nos dejaban avanzar, no nos dejaban organizarnos. Todos nosotros los pobladores (hemos recibido) un trato humillante, con un trato de sobra, un trato de amordazamiento, ¿no? Y hasta ha habido torturas, detenciones, rastillajes a cada momento, tenían que empadronar injustamente a mucha gente. Empadronar cada cierto tiempo y después de anotar los nombres, no pasaba ni una semana, creo que 5, 10 vecinos ya no estaban, desaparecían se los llevaban tal vez a Las Palmas, tal vez a alguna base militar o algún lugar, y algunos que salían, salían pues totalmente golpeados, totalmente con torturas y hasta ahorita se están viendo algunas secuelas ...

La pregunta que durante estos años siguen haciéndose los habitantes es ¿por qué la necesidad de lograr la propiedad de un terreno terminó estigmatizándolos de «senderistas»? No hay una respuesta concluyente.

2.15. LOS SINDICATOS DE LA CARRETERA CENTRAL: ENTRE EL RADICALISMO O LA RESIGNACIÓN

Durante los últimos años de la década del 80 y los primeros del 90, al ritmo de una intensa presencia en Lima Metropolitana, el PCP-SL y, en menor medida, el MRTA, parecían expandirse de manera vertiginosa entre los sindicatos. Era previsible que así sucediera. A estas alturas el fenómeno subversivo empezaba a afectar a casi todas las dimensiones de la vida nacional y el sector laboral no podía quedar de lado, más aún cuando Abimael Guzmán y otros dirigentes de su partido habían trazado ya las líneas matrices que debían conducir la guerra popular a partir de 1988, cuando las urbes adquirirían importancia y, en consecuencia, el movimiento sindical debía ser un mecanismo crucial para sus acciones.

No era un esquema novedoso: había sido habitual que la izquierda legal utilizara a los sindicatos como correas de transmisión de sus objetivos políticos, cuestión importante para entender el desarrollo de una concepción clasista en el sindicalismo peruano que, en la medida que estos partidos empezaron a mostrar inequívocos síntomas de desestructuración, adquirió altos grados de autonomía que en muchas oportunidades actuaba en contraposición a las consignas partidarias; en cambio el PCP-SL, que trató de arraigar apelando precisamente a esta tradición, trató de reproducir escenarios anteriores, pretendiendo subordinar la actividad gremial exclusivamente a sus propios fines, conduciéndola a un extremismo inédito, aprovechando la coyuntura singular de la crisis industrial que a fines de los 80 había afectado la organización de los sindicatos más combativos y radicales, y las graves dificultades que tenían las organizaciones de izquierda para crear mecanismos de contención —y de manera amplia— articular un proyecto nacional.

El sindicalismo clasista había nacido y crecido bajo un patrón de acumulación económica determinado por las políticas de sustitución de importaciones que hacia los años 80 manifestaba claros signos de agotamiento, facilitando el cambio hacia una economía más abierta y, finalmente, la implantación de un modelo neo-liberal. Esta circunstancia trajo como consecuencia la descapitalización del sector industrial, la reducción de personal, el cierre de turnos y la paralización de la producción, mientras el Estado se retraía de intervenir en los conflictos laborales alentando los mecanismos de consenso que podían construir entre sí los sectores laboral y empresarial. En este escenario no era muy fácil que las organizaciones gremiales negociasen exitosamente sus demandas para atenuar los altos índices de inflación y la pérdida de poder adquisitivo, como demuestran los modestos resultados de sus protestas masivas. Por lo demás, se mantenía el enfrentamiento entre las diversas federaciones, pese a los esfuerzos centralizadores.

Otro factor importante fue que los partidos de izquierda, después de incrementar apreciablemente su espacio político, con las luchas sindicales de los años 70 y su protagonismo en la caída del régimen militar (1968-1980), trasladó su atención hacia los ámbitos barrial y municipal, algo que los dirigentes obreros interpretaron como un «abandono» a los trabajadores, aunque, como contraparte, ya lo señalamos, aumentó su autonomía funcional y las tendencias caudillistas encontraron terrenos más propicios para su reproducción (en realidad nunca dejaron de manifestarse).

En segundo lugar, y como correlato de lo anterior, si bien se esperaba que los partidos de la izquierda se convirtieran en voceros políticos del movimiento sindical, lo cierto es que esto no fue todo lo eficaz que se esperaba y las limitaciones de los partidos hizo inexistente una adecuada intermediación política que, dada la naturaleza de los conflictos, resultaba indispensable.

En suma, el PCP-SL intentó radicalizar las luchas de los sindicatos ubicados a lo largo de la carretera Central, justificando sus acciones mediante el supuesto «abandono» del clasismo que hicieron los dirigentes identificados con los partidos de la izquierda legal y, bajo estas premisas, llevaron a cabo acciones de destrucción de infraestructura, como fue el caso de Nissan, influyeron en las manifestaciones más violentas de protesta sindical –como fueron los casos de Papelera Atlas, Manylsa, COPE, Carbolán, entre otros-, intentaron organizar un organismo de centralización sindical local (la Coordinadora de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central —CLOTCC—), asesinaron dirigentes sindicales (como Enrique Castilla de Tejidos La Unión) y una serie de funcionarios, así como el impulso dado a diversos «paros armados». Los resultados fueron catastróficos para un movimiento obrero que estaba en una situación de reflujo, ocasionando la formación de una resistencia muy grande a los intentos de penetración del senderismo, aunque en perspectiva sirvió al PCP-SL para entrenar a algunos cuadros partidarios que luego veremos participando en el movimiento barrial de Ate-Vitarte.

2.15.1. Entre el colapso económico y la violencia política

Pasados los efectos de una recuperación intentada por el lado heterodoxo, durante el gobierno de Alan García (1985-1990), el reajuste económico sobrevino en 1990 demoliendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las posibilidades de empleo medianamente remunerado. Sus efectos durarían hasta 1993. Entre 1984 y 1993 el sector informal del empleo urbano aumentó del 35% al 45%. En el mismo periodo el desempleo abierto aumentó del 8.9% al 9.9%, lo que significó que el «índice de precariedad laboral»(personas con problemas de empleo) aumentara del 50.5% al 58.7% y que el subempleo se constituyera en la actividad mayor (70.7%) entre los asalariados¹.

1 Ricardo Infante: «Perú. Ajuste del mercado laboral urbano y sus efectos sociales: evolución y políticas». Oficina Regional de la OIT para América Latina y El Caribe. Lima, 1995.

Eso no fue todo. Como afirma Infante (1995), la intensificación de contratos de trabajo, que pasaron de permanentes a eventuales, como resultado de las modificaciones en la legislación laboral, afectó enormemente el poder adquisitivo de los trabajadores. A su vez, entre los años en mención hubo un crecimiento persistente de la oferta laboral, pero el sector moderno de la economía no generó empleo suficiente, debido en gran parte al comportamiento de las grandes empresas (con más de cien trabajadores), que se contrajeron al ritmo del 1.6% anual entre 1984 y 1990, con lo cual su participación en el empleo privado se redujo del 37.1% al 26.2%.

Esto contrastaba con el comportamiento de las empresas pequeñas (10 a 19 trabajadores) y medianas (20 a 100 trabajadores), cuyos niveles de ocupación se expandieron entre un 8.3% y un 7.1% en el periodo mencionado, pasando a sustentar la generación de empleos en el sector moderno privado, lo que además de afectar a los trabajadores también disminuía las utilidades de las empresas. Por otro lado, la poca flexibilidad de los niveles de empleo en el sector moderno condujo a una disminución de la productividad del trabajo, pero fue contrarrestada con creces por la fuerte reducción de los salarios reales, el deterioro del tipo de cambio, las bajas tarifas de los servicios públicos y los subsidios arancelarios. Se puede afirmar, con un alto grado de probabilidad, de que el margen total de ganancias en el sector moderno no solo se mantuvo, sino que aumentó hacia finales del periodo en mención, mientras que su participación en la ocupación urbana total se redujo del 38.8% en 1984 al 36.7% en 1990.

Una situación tan crítica determinó que los trabajadores volvieran a convocar paros nacionales, algo que no se presentaba desde 1984. El primero de ellos fue 19 de mayo de 1987 y su éxito en buena cuenta dependió de la coincidencia de un paro policial. El siguiente se llevaría a cabo el 28 de enero de 1988, esta vez convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),² y la Asamblea Nacional Popular (ANP), durante el cual las direcciones sindicales y políticas de izquierda deslindaron y se enfrentaron con el PCP-SL. El mismo año se convocaron dos paros más (19-20 de julio y 13 de octubre), y en ellos también se volvieron a expresar tajantes diferencias con el senderismo.

El PCP-SL no era un actor reciente en el movimiento laboral. Ya en los 70 había generado el Movimiento Obrero de Trabajadores Clasistas (MOTC), cuyo objetivo era articular al *Partido* con los trabajadores urbanos, aunque en la práctica no tuvo presencia entre las masas sindicalizadas, sino más bien entre ambulantes e informales. Quizá por eso se oponía a los paros, tildándolos de «revisionistas», por el solo hecho de que su conducción estaba en manos de la

2 La CGTP se había refundado en 1968, luego de una larga lucha para reorientar el movimiento obrero hacia posiciones clasistas. Los años inmediatamente posteriores, hasta 1975, sobrevino la mejor etapa para el sindicalismo peruano bajo la vigencia del Decreto Ley 18471 de estabilidad laboral, que permitió la aparición de una cantidad de sindicatos nunca vista hasta el momento. Esto fue acompañado por el uso generalizado de medidas radicales, como la huelga y las tomas de instalaciones como formas de lucha con los sectores empresariales y el Estado. Esta tradición sindical prolongó su vigencia hasta los años 80, cuando debido a la crisis económica y los canales de negociación abiertos muy tenuemente por el régimen democrático, hizo que los dirigentes consideraran otras formas de negociación, menos confrontacional. Aún así, cuando las conversaciones fracasaron y los convenios no fueron cumplidos, las centrales obreras, especialmente la CGTP, consideró que volver a las convocatorias de paros nacionales podían ser eficaces como formas de presión.

-

CGTP. En los años siguientes organizó una escuela sindical entre los mineros de Cerro de Pasco, con la intención de captar y formar cuadros, pero aparentemente no le fue bien, perdiendo notoriedad en ese ámbito hasta mediados de los 80 cuando reaparece empleando otras modalidades tácticas. Es probable que desde esta época fueran integrando y educando a los trabajadores que años después dirigirían los atentados perpetrados en este sector.

2.15.2. Incendiando la ciudad

El paro nacional de mayo de 1987 se realizó cuando aún la reactivación económica se reflejaba en sorprendentes tasas de crecimiento en el sector industrial y en una significativa recuperación del salario real (24.2% para 1986 y 45% para 1987). Podría parecer contradictorio que frente a esa situación los trabajadores reaccionasen protestando, pero el establecimiento de topes salariales, en momentos que se daba un crecimiento de las utilidades de las empresas, los hacía sentirse excluidos del modelo político y económico. Por lo demás, hacia fines del mismo año ya era evidente que la política económica, implementada durante los dos primeros años de gobierno aprista, era insostenible. En diciembre se inicia una serie de devaluaciones que inciden sobre el costo de vida de la población y motiva la convocatoria de otro paro nacional, en enero de 1988.

Lo peor aún estaba por venir. A mediados de ese año se pone fin al control de cambios y se acelera la devaluación, generando mayor inflación y la caída de los ingresos reales. El sindicalismo reaccionó convocando otro paro (el 19 de julio), a sólo seis meses del anterior, aunque no logró repetir sus resultados. En setiembre sobrevino el *paquetazo* que llevó la inflación al 114%, haciendo que los salarios reales vuelvan al nivel de 1985, con lo cual la población perdió todo lo que había recuperado en los años anteriores.

La CGTP volvió a llamar a un paro nacional en octubre y otro más en diciembre. El primero resultó bastante débil y el segundo fue un fracaso. La recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la hiperinflación minaban la voluntad de lucha de los trabajadores conduciéndolos a una actitud conservadora, contra las previsiones de la dirigencia que creía que iba a impulsarlos a una mayor protesta. Temerosos de perderlo todo, los trabajadores preferían garantizar sus ingresos antes que arriesgarlo en una medida que solo manifestaba su descontento. Era innegable, por otra parte, que el ambiente se enturbiaba y las acusaciones de «terrorismo» estaban a la orden del día ante cualquier manifestación de protesta.

En este contexto ocurrió un hecho importante durante el paro de octubre. La policía allanó el local de la Federación de Luz y Fuerza, llevándose detenidos a tres dirigentes y un trabajador — el Secretario General, el Secretario General de la sección norte, el Secretario de Relaciones Exteriores y el portero del local— a quienes acusó de terroristas. Como pruebas, la policía mostró volantes del PCP-SL, cartuchos de dinamita, llantas y explosivos que, según su versión, había encontrado en el referido lugar. El secretario de defensa de la Federación, Noé Rospigliosi, reveló

que esas pruebas habían sido *sembradas* por los efectivos policiales, denunciando además que su organización había sido objeto de un robo de 400 mil intis y destrucción de computadoras, equipos telefónicos, máquinas de escribir, equipos de amplificación y calculadoras.

Desde hacía un tiempo la Federación de Luz y Fuerza estaba en la mira de las fuerzas del orden debido a los constantes sabotajes en las líneas de tendido eléctrico, atribuyéndole que algunos de sus agremiados proporcionaban información para que el PCP-SL, que al parecer había infiltrado Electro Lima y Electro Perú, realizara sus atentados.³ Esta sospecha se reforzaba además porque la dirigencia mantenía una línea crítica a la dirección de la CGTP.⁴

Durante 1989 este cuadro se agudizó, aunque algunos cambios de actitud se manifestaban entre los dirigentes obreros. Hasta ese momento las respuestas obedecían a un uso intensivo del único recurso con que contaban, es decir las huelgas y tomas de instalaciones, pero cada vez se mostraban más ineficaces. Frente a la recesión, la reducción de las jornadas de trabajo o los cierres temporales de las plantas de producción sólo quedaba la negociación pragmática, confiando en el diálogo antes que en la confrontación. El despido y cese masivo de sindicalizados, su reemplazo por eventuales y personal acogidos en el PROEM, así como la sistemática reducción de los salarios reales, no vislumbraban otra alternativa.

Tampoco era ya apropiado, como lo fue en el primer quinquenio de los 80, promover la centralización sindical, buscando movilizar la solidaridad de clase para darle mayor fuerza a las reivindicaciones. Lo que se impuso fue más bien la negociación en cada empresa que dependía de la capacidad que tuvieran los sindicatos.

La prioridad que adquirió la lucha salarial fortaleció la vida sindical. 1988 fue el año de la más violenta caída salarial que registró la historia (hasta ese momento), pero también el de mayor intensidad huelguística. Lo que se buscaba era eliminar los topes salariales y presionar para que los ingresos se recuperasen frente al proceso inflacionario. La movilización de sectores íntegros, como bancarios y textiles, exigiendo la anulación del D.S. 041⁵: una gran cantidad de paros y huelgas buscó preservar los niveles de los salarios, algo que fue visto como un derecho adquirido.

3 Desde 1985 hasta mayo de 1989 fueron derribadas 592 torres de alta tensión. En esos cuatro años, Electro Perú tuvo una pérdida de 68 millones de dólares por acciones terroristas.

4 Casi un año después, en agosto de 1989, cuando los sindicatos de Electro Lima y Electro Perú presentaban su pliego de reclamos, el director de la PT, Gral. Fernando Reyes, reiteró estas afirmaciones.

LA DÉCADA DE LOS 80 EN CIFRAS⁶

Sueldos

Años	Nominal (Mensual)	Real (Mensual)	Índice de sueldo real
1980	68.24	42.87	107.4
1981	121.74	43.60	109.2
1982	216.02	47.05	117.8
1983	391.12	40.34	101.0
1984	758.03	37.20	93.2
1985	1,840.89	34.29	85.9
1986	4,766.96	49.91	125.0
1987	9,272.99	52.24	130.8
1988	49,419.63	36.19	90.6
1989	1'083,541.83	22.68	56.8

Fuente: MTPS-DGE

Salarios

Años	Nominal (diario)	Real (diario)	Índice de salario real
1980	1.51	0.95	105.8
1981	2.59	0.93	103.6
1982	4.32	0.94	105.0
1983	7.56	0.78	86.8
1984	13.55	0.67	74.1
1985	30.82	0.57	64.0
1986	80.00	0.84	82.8
1987	161.37	0.91	101.0
1988	814.35	0.60	66.3
1989	18,593.76	0.39	43.2

Fuente: MTPS-DGE

Emilio Calla, secretario de Prensa y Propaganda de la FETIMP, señalaba lo siguiente:

La recesión nos ha afectado desde septiembre. En este momento la empresa no está produciendo nada; desde el 24 de abril ya no se produce ni una pila. La empresa tiene además una cantidad de stock, y en este momento no tiene mucha demanda.⁸

2.15.3. *El pez que se toma el agua*

Este título fue propuesto por Carmen Vildoso y Denis Sulmont para graficar la acción del PCP-SL en los sindicatos.⁹ En efecto, luego del primer congreso senderista, en 1987, las directivas sobre

5 El decreto supremo 041 anulaba lo dispuesto por el decreto legislativo 025, de agosto de 1988, que establecía indexaciones salariales aunque con topes.

6 José Reyes: «La década en cifras». En *Cuadernos Laborales* 57. Adec-Atec. Lima, febrero - marzo 1990

7 «Entrevista con Enrique Castilla». *Quehacer* 59. DESCO. Lima, junio-julio 1989.

8 Carmen Rosa Balbi: «La recesión silenciosa. Estrategias obreras». En *Quehacer* 59. DESCO. Lima, junio-julio 1989.

9 Carmen Vildoso y Denis Sulmont: «Sendero Luminoso y la clase trabajadora: el pez que se toma el agua». En Denis Sulmont y otros: «Violencia y movimiento sindical». Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo. Lima, 1989.

qué hacer en las ciudades eran claras. Bajo la premisa de «conquistar bases» Sendero definió la necesidad de crear en las ciudades: «El Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), con centros de resistencia que hacen la guerra popular y preparan la futura insurrección, que se dará cuando las fuerzas del campo asalten las ciudades en combinación con la insurrección desde dentro».¹⁰

El MRDP estaría conformado por «organismos autogenerados», semiclandestinos, que ligarían el partido con las masas y realizarían su trabajo frontal en sindicatos, federaciones, asociaciones de comedores populares, barrios, universidades, etc. En el caso de los sindicatos, se asignaba al MOTC la responsabilidad de las tareas descritas.

Hacia 1987 era común que los senderistas realizaran una intensa labor de volanteo en las puertas de las fábricas lanzando arengas a favor de su organización. Pero el desarrollo del «gran plan de conquistar bases de apoyo» en las ciudades implicaba algo más que estas tareas de propaganda como la destrucción de la infraestructura de las fábricas que se encontraban en conflictos laborales, tal el caso de Nylon, Bata-Rímac, Nissan y otras. Asimismo, procedieron a ejecutar a funcionarios de empresas. En marzo de 1988, mientras el sindicato de la empresa COPE, ubicada en la carretera Central, se aprestaba a discutir su pliego de reclamos, una mujer asesinó al gerente de relaciones industriales¹¹. Luego, al lograr el control de la situación mediante amenazas, los senderistas decretaron una huelga general indefinida con toma de las instalaciones¹². Después de cincuenta días, hubo un violento desalojo, los dirigentes fueron despedidos, el sindicato descabezado y los trabajadores no consiguieron que se les atendiera en alguno de sus reclamos.

De igual manera, en abril de 1988 un grupo de senderistas que se hallaba confundido entre los trabajadores en huelga, hiere mortalmente al gerente de la fábrica Hilados S.A. Los trabajadores los rechazarlos auxiliando a la persona herida. Sin embargo, pocos días después (12 de abril), el vocero senderista, El Diario, señalaba lo «correcto» de la acción.

El PCP-SL no sólo seleccionaba a sus enemigos según un *criterio de clase*, sino también según la resistencia que le ofrecían otras agrupaciones políticas de izquierda que le disputaban espacio en los sindicatos, apostrofándolas de «revisionistas». El paro nacional de enero de 1988, convocado por la CGTP, fue la ocasión escogida para forzar su radicalización, intentando aislar a los dirigentes y conducir al movimiento sindical de la capital. Más grave aún: el día del paro (28 de enero), algunos de sus militantes se infiltraron encapuchados en la marcha, que se realizaba en la plaza Dos de Mayo, y luego pretendieron dinamitar el local de la CGTP y asesinar al líder del

10 Luis Arce Borja (ed.): «Guerra popular en el Perú: el pensamiento Gonzalo». Luis Arce Borja. Bruselas, 1989.

11 COPE producía tubos colapsibles para pasta dental, envases para productos alimenticios y envases de plástico y hojalata para lubricantes. Era una fábrica única en su género en el país y su rentabilidad era tan alta como en las cervecerías Cristal y Pilsen.

12 Los trabajadores de COPE tomaron la fábrica en lucha por su pliego de reclamos y por el nombramiento de los contratados. Como podrá notarse, el planteamiento era similar al propuesto por la CLOTCCC (Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central)

-

Partido Comunista, Jorge del Prado, lo que desencadenó una balacera que terminó con la huida de los provocadores.

Desde ese momento modificará su táctica creando *bases propias* que respondieran a situaciones específicas. Por ejemplo, en mayo de 1988, luego de un trabajo de infiltración, convocó a unos 100 «delegados» de diversas bases gremiales del cono este de Lima, reuniéndolos en Ñaña para participar en el denominado «Primer Plenario de Trabajadores Clasistas de la Carretera Central» y conformando el Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC). Paralelamente, apareció en la zona una base del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), utilizándola como aparato para lanzar una lucha frontal en sindicatos que se encontraban en conflicto con las empresas, como las ya mencionadas Nylon, COPE y Bata, además de FAM, Atlas, Tabacalera Nacional, Tejidos La Unión, Carbolán (Pelikan), entre otras.

Según *El Diario*, la constitución del CLOTCCC fue un «hito histórico... que se diferenció marcadamente de las [organizaciones] que acostumbran organizar los revisionistas, oportunistas de Izquierda Unida y el Apra fascista».¹³ Goyo Moscoso, de Papelera Atlas y presidente de la Comisión Organizadora, afirmó que «nuestro objetivo es centralizar a las masas trabajadoras dotándolas de una organización de nuevo tipo acorde a la coyuntura actual, en otras palabras poner lo organizativo en función de la toma del poder». Al finalizar el evento, Moscoso sería ratificado como presidente de la mesa directiva.

El manifiesto de fundación del CLOTCCC, publicado a toda página por *El Diario*, en su edición del 29 de mayo de 1988, fue muy claro sobre las intenciones del PCP-SL en el sindicalismo. El texto se abre con una cita de Marx: «La clase obrera es revolucionaria o no es nada. La conquista del poder político ha devenido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera». Su plataforma consistía de nueve puntos, entre los que resaltaban exigencias al gobierno aprista, «fascista y corporativo encabezado por el demagogo García», de pliegos renovables en lugar de los anuales, con lo cual el PCP-SL estimaba que podía garantizar una situación de enfrentamiento permanente, «teniendo en cuenta que sólo se conquistan derechos y beneficios con lucha y se defienden con lucha, ya que el problema se reduce a las fuerzas respectivas de los contendientes». En segundo lugar, presentaron otras demandas como aumento de salario de 500 intis diarios, reducción de la jornada de trabajo, mejores condiciones laborales, mayor atención médica y el cumplimiento de pactos y convenios colectivos. Finalmente, establecieron como bandera de lucha la estabilidad laboral para los eventuales y personal de PROEM, así como «la defensa de los sindicatos de clase, contra el paralelismo corporativo». También incluían mejores condiciones de trabajo para las mujeres y niños.

13 «Preparar a las masas para la toma del poder». En *El Diario*, domingo, 27 de marzo de 1988.

Según se deduce de este texto, el PCP-SL aspiraba a desarrollar entre los obreros la idea de que sus reivindicaciones no podían ser atendidas bajo la situación imperante y que la única salida era la *guerra popular* que estaba impulsando. De otra forma, parece ilógico asumir, por ejemplo, que la demanda de darle estabilidad a los eventuales pudiera ser escuchada por las autoridades de trabajo.

Hubo, al parecer, varios motivos para que el PCP-SL realice estos ajustes organizativos. En primer lugar, como se afirmó en los estudios elaborados sobre Huaycán y Raucana,¹⁴ la carretera Central fue considerada por el PCP-SL como prioritaria para su trabajo político, debido a sus características socio-económicas. En segundo lugar, al ser una zona eminentemente industrial era razonable pensar que la crisis del sector impactaría allí de manera importante; como tercer punto, en Ate-Vitarte existía una fuerte tradición del sindicalismo radical; por último, se suponía que no había mayores distancias entre trabajadores y pobladores —los residentes en la zona eran mayoritariamente los obreros que laboraban en las fábricas allí asentadas— y, en teoría, esto facilitaría la articulación del movimiento sindical con el barrial. Si ese fue el razonamiento senderista, entonces tuvo un clamoroso error de apreciación. Por todas las consideraciones que hemos venido exponiendo, la acción sindical no podía ejercerse con el simple expediente de la confrontación y muchos de los dirigentes de esta zona así lo entendieron.

Al procesar el sector industrial una profunda crisis terminal, los dirigentes de izquierda estimaron que mucho mejor provecho tendrían las negociaciones con los empresarios que las confrontaciones directas que sólo acelerarían una situación en las que los obreros podrían salir muy perjudicados.

Por otro lado, las nuevas modalidades de reclutamiento laboral afectaron de manera decisiva la organización sindical. La masa de trabajadores residente en el distrito, paulatinamente se fue diversificando con obreros que provenían de otros lugares, como los conos sur y norte, que difícilmente se integraban a la dinámica de los pobladores del lugar¹⁵. Las dificultades para el senderismo no se hicieron esperar. Al hecho de que veía a los sindicatos como parte de un engranaje que reforzaba los objetivos del partido, se sumó una clamorosa ausencia de representación. Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y presidente del CLOTCCC, se quejaba en 1991 de que

[...] el Comité de Lucha de la Carretera Central no funciona hasta el momento. Hace ya tres años se hizo el plenario. Aquí en la carretera Central lo formaron los compañeros que se llaman del Partido Comunista Peruano bajo el lema de SL, pero desde ese día hasta hoy, ni un comunicado, ni una reunión, ni una coordinación. ¿Quiénes son? ... Solamente son voces que hablan, pero al final desaparecen, no se les conoce de qué base son.¹⁶

14 Véanse capítulos sobre Huaycán y Raucana.

15 Marina Irigoyen: «Ate-Vitarte, industria y movimiento sindical: 1975-1984». *Ideas*. Lima, 1985.

-

Un ejemplo palpable de cómo conducía el senderismo los asuntos sindicales fue Nylon S.A. Era una empresa relativamente antigua —fundada en 1961—, cuyo principal accionista era Benjamín Sabal. Entre 1974 y 1975 él decidió ampliar el negocio, haciendo una cuantiosa inversión, pero el proyecto se truncó por algunos problemas entre los accionistas dejando como pasivo una deuda de ocho millones de dólares avalados por el Banco Industrial del Perú (BIP). Ante la insolvencia, el BIP asumió el control de la empresa, comprando el 67% del capital social. Esta entidad se comprometió a reflotar la empresa y poner en marcha el proyecto inconcluso, pero una pésima gestión impidió el objetivo. Hacia fines de los 80, Nylon se encontraba desfinanciada y su reflotamiento era imposible. El remate público pendía sobre su destino.

Alertados de lo que denominaron «*sabotaje a la producción por parte de los funcionarios*», los trabajadores acordaron el traslado de la propiedad de la fábrica. En mayo de 1988 se dirigieron al presidente García manifestándole su deseo de comprar la planta y su rotundo rechazo al remate. Esta posición no era consensual y un grupo de trabajadores opinaba que el reflotamiento podía garantizarse con una «*pronta gestión privada*», tal como expresaron en un comunicado publicado en El Comercio el 29 de septiembre de 1988. En el centro mismo de las diferencias estaba el asunto de la estabilidad laboral. La vía propuesta por el sindicato implicaba su defensa, algo que no se garantizaba si la empresa pasaba a manos privadas.

¿Cuál fue la posición de los trabajadores senderistas? Según Carmen Vildoso, oscilaron entre

La indiferencia frente a la posible venta de MANYLSA, asumiendo que son los empresarios privados y no los trabajadores quienes deben preocuparse de los problemas de la empresa, y la propuesta de luchar por la administración del centro de trabajo, ‘siguiendo el ejemplo de los compañeros de COPE, que han tomado la fábrica.’¹⁷

COPE fue otro ejemplo muy claro. Al igual que Nylon, la Compañía Peruana de Envases era una empresa antigua -tenía 37 años de existencia- donde trabajaban más de 300 personas y cuyos principales accionistas eran las familias Rodríguez-Mariátegui y Ratto Divinich. El conflicto empezó a agudizarse cuando los propietarios decidieron dar vacaciones al personal ante la falta de demanda de sus productos y con la esperanza de que éstos recuperaran sus precios en un plazo indeterminado. Entonces la Comunidad Industrial y los sindicatos de obreros y empleados conformaron un Frente Único, tomando la fábrica el 11 de abril de 1988. Entre tanto, el PCP-SL asesinó al gerente de relaciones industriales.

Los dirigentes laborales denunciaron que los propietarios de COPE estaban trasladando la materia prima de los depósitos a otra empresa que habían formado bajo la razón social de Envases

16 «En el filo de la navaja; habla Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas». En *Quehacer* 68. DESCO. Lima diciembre 1990-enero 1991.

17 Carmen Vildoso: «Manufacturas Nylon, un desafío a la cogestión». *EDAPROSPO*. Lima, 1991.

Varios, ubicada en Chorrillos, incorporando su cartera de clientes y canalizando las utilidades hacia las empresas de servicios ARASA, MOSA y ATUR, de su propiedad, con lo cual obviamente descapitalizaban a COPE.

El punto de vista de los empresarios era diferente. En un aviso pagado, publicado en el diario *El Comercio* el domingo 17 de abril de 1988 (y reproducido luego por los semanarios *Caretas* y *Sí*), argumentaban que la toma de la fábrica, manejada por grupos extremistas, era la causa del incumplimiento a los clientes. Un mes después, el 23 de mayo de 1988, durante una reunión convocada por la Comisión de Pacificación del Senado de la República, el señor Luis Rodríguez-Mariátegui, quien asistía como representante de la CONFIEP, manifestaba que el tema de COPE era ilustrativo para evaluar la situación de la subversión en ese momento:

Esta ha sido una toma de fábrica cantada, publicada con anticipación en un plenario de trabajadores de la carretera Central [se refiere al plenario del CLOTCCC], en el cual presenta una moción el sindicato de esta misma compañía, calificando al Apra de gobierno genocida y corporativo, Izquierda Unida de capitulacionista y revisionista, con frases como: «una clase trabajadora que no aprende el manejo de las armas, sólo merece que se les llame esclavos» ... Yo diría que el problema básico es de desconcierto, no se sabe cómo actuar ... cuando se produce el día viernes la diligencia judicial para constatar la inspección ocular, la toma de la fábrica, aparecen 70 personas y son 330 los trabajadores; es decir, hay exactamente el 20% adentro. Sobre la pregunta de la capacidad de reacción de los trabajadores, yo no diría que ese 20% sean senderistas, de ninguna manera, yo creo que hay muchos que están intimidados. Se sabe que hay gente que ha sido amenazada, como entran y salen le dicen: «si tú no regresas vas a ver lo que te pasa a ti, a tu familia». O sea, se está empleando por medio de esta gente infiltrada dentro de cada uno de los sindicatos, tácticas realmente de intimidación y de presión.

Y en cuanto a la zona, yo creo que la carretera Central es la más álgida, indiscutiblemente, porque lo que hemos visto de las minas y de las mismas industrias, este comité de trabajadores clasistas tienen bases en casi todas las fábricas de la zona, funcionan al margen de los sindicatos, al margen de las propias directivas que responden a las confederaciones que actúan democrática y legítimamente, hay gente que está infiltrada por dentro y que está tratando de crecer, y creo que el momento de evitar que esto se produzca.¹⁹

Los trabajadores rechazaron cualquier relación con el PCP-SL²⁰ en un comunicado firmado por los sindicatos y la comunidad industrial, proponiendo a las autoridades que le entregasen la conducción de la empresa, dadas las dificultades de sus propietarios. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada y los senderistas aprovecharon políticamente esta circunstancia perjudicando a los sindicalistas. Como dijimos líneas arriba, cincuenta días después de la toma serían violentamente desalojados sin lograr la atención de un solo punto de sus reclamos.

18 COPE producía tubos colapsibles para pasta dental, envases para productos alimenticios y envases de plástico y hojalata para lubricantes. Era una fábrica única en su género en el país y su rentabilidad era tan lata como en de las cervecerías Cristal y Pilsen.

19 Senado de la República: op.cit.

El resultado de este conflicto no interesó al PCP-SL sino acrecentar su presencia potenciando el CLOTCC, o creando el Comité de Lucha de Obreros Clasistas de la Avenida Argentina (CLOCAA), para utilizarlos en paros armados que entre 1988 y 1992 fueron escalando según sus planes de guerra:

1988

27,28 y 29 de septiembre. Paro de 72 horas en la carretera central, que coincidieron con el inicio de las acciones armadas en esa zona.

1989

19 de enero. Segundo «paro clasista» en la Av. Argentina.

20 de julio. Primer «paro armado clasista» en Lima.

03 de noviembre. Segundo «paro armado», convocado por el MRDP contra las elecciones municipales de ese mes.

1990

28 de marzo. Tercer «paro armado» en Lima. Por primera vez, el transporte público suspendió sus actividades.

28 de agosto. Cuarto «paro armado», contra el «fujishock» y que lo hicieron coincidir con el de la CGTP.

24 de octubre. Quinto «paro armado». Fue de 48 horas y no hubo ni transporte ni energía eléctrica.

1991

29 de mayo. Sexto «paro armado».

1992

14 de febrero. Séptimo «paro armado».

29 de mayo. Octavo «paro armado», en Canto Grande.

23 de julio. Noveno «paro armado»

Una evaluación en perspectiva nos permite afirmar que estos paros no alcanzaron los objetivos deseados por sus promotores. Los «paros armados clasistas» del 20 de julio de 1989 y del 3 de noviembre del mismo año (este último perseguía boicotear las elecciones municipales) mostraron sus escasos avances entre los gremios laborales limeños, pese a que realizaron una agresiva campaña psicológica e ideológica, especialmente contra los dirigentes de los microbuseros (envío de cartas amenazantes y presiones personales).

20 «En forma indignante algunos medios de comunicación distorsionan lucha de trabajadores de COPE». En *Kausachum* 312. Lima, 30 de mayo de 1988.

Dos días antes del paro de noviembre, sus militantes efectuaron una «marcha armada» como forma de propaganda y agitación. Aparentando formar parte de una manifestación de evangelistas que se había reunido en la plaza Manco Cápac, para dirigirse al cementerio El Ángel, fueron descubiertos por una patrulla policial que custodiaba el lugar -cerca de allí se hallaba el local de RBC televisión y el cuartel de Radio Patrulla-. Uno de los efectivos realizó un disparo al aire que originó el enfrentamiento con el resultado de tres sediciosos muertos, 24 personas heridas y más de 140 detenidos.²¹ Ante este hecho el gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas se encargasen del orden interno en Lima y Callao, en el marco del Estado de Emergencia.

En las siguientes convocatorias, el PCP-SL afinó sus mecanismos de presión logrando que en varias oportunidades los transportistas prefirieran dejar de laborar ante la eventualidad de ser asesinados, por no «acatar» la medida, o destruidos sus vehículos. Asimismo, lograron incorporarlas en sus periódicas «campanas» que desataban sobre Lima, como ocurrió con el paro de febrero de 1992. Programado con una semana de anticipación, fue acompañado de acciones muy violentas que empezaron el día 7, cuando hicieron explotar una potente bomba en el local de la SUNAT, un coche bomba en la embajada norteamericana y luego de este «ablandamiento» asesinaron brutalmente a la dirigente barrial María Elena Moyano (se dice que por orden expresa de Abimael Guzmán) por la firme resistencia que les había opuesto en Villa El Salvador.

Singularmente, el vocero del PCP-SL, *El Diario*, resumió estos eventos el 21 de febrero afirmando que «la inmensa masa (casi 8 millones de habitantes en Lima), vivió la fuerza del nuevo poder a través del MRDP, la existencia del nuevo Estado, y el cuestionamiento y la negativa del viejo Estado». Luego agregaría, «los mercados, bodegas, ambulantes, universidades... permanecieron cerrados, se sujetaron a la autoridad del nuevo poder, a la convocatoria del MRDP...».

En julio repitieron el mismo esquema. Las acciones comenzaron el día 16, con el coche bomba que estalló en el jirón Tarata, de Miraflores y hostigamientos en diferentes comisarías, manteniendo la intensidad —muy superior a la de febrero— hasta el día mismo del paro. Ya en agosto, culminaría estas acciones con los asesinatos de diversos dirigentes barriales.

Dirigentes y pobladores barriales asesinados

AÑO	CANTIDAD
1984	1
1985	1
1987	4
1989	11
1990	7
1991	14
1992	24

Fuente: banco de datos, DESCO

21 «Sangriento enfrentamiento de policías y terroristas». En *Expreso*, Lima 2 de noviembre de 1989.

Otro de sus objetivos militares preferidos, tal como sucedió al inicio de su presencia en las plantas fabriles, eran los funcionarios que tenían a su cargo las relaciones laborales con los sindicatos. Aunque no fue muy frecuente entre 1987 y 1989, a partir de 1990 intensifica los asesinatos de manera impresionante.

1987

1ro. de octubre. Gerente de relaciones industriales de Rayón, Nelson Pozo.

1988

17 de marzo. Gerente de relaciones industriales de COPE

12 de abril. Gerente general de Hilados S.A., Brankco Pejnovil Baigm.

1990

20 de febrero. Dos funcionarios de FAMESA (Fábrica de Mechas S.A.), Juan Chacaltana y su asistente.

20 de marzo. Gerente de relaciones industriales de La Unión, Joel Podestá. En la carretera Central.

24 de marzo. Roberto Barriga, gerente de CORSA, cuando salía de su casa.

17 de abril. Pedro Muller, jefe de seguridad de Hilos Cadena S.A.

18 de abril. Manuel Sumaria, director de producción de Constructora ISSSA

02 de junio. Tomás Irigoyen, gerente de CITECIL, fábrica que se encontraba en huelga desde hacía un mes.

20 de julio. Antonio Rosales, presidente ejecutivo de Lima caucho S.A.

20 de agosto. Edmundo Aguilar, propietario de pequeña empresa Confecciones Eagle, por no pagar cupos.

27 de agosto. Jaime Navarro, gerente de relaciones industriales de FAM (Récord).

02 de noviembre. Segundo Álvarez, jefe de personal de fábrica de calzado El Diamante.

1991

28 de enero. Intento de asesinato a ejecutivo de Paramonga. Queda herido.

31 de enero. Gabriel Bonifaz, gerente de INOXA, al ingresar a la fábrica.

01 de febrero. Hernán Marco Mauricio, gerente general de procesadora de café Garci.

24 de abril. Julio Zevallos Ruiz, gerente de producción de Pesa Perú.

25 de abril. Intentan a asesinar a Alberto Nakangawa, gerente de FAMESA. Lo dejan gravemente herido.

28 de mayo. Dante Obregón, gerente de Bata Rímac. Fue emboscado y ametrallado en Chosica.

03 de junio. Galina Ivanova, funcionaria de Tejidos La Unión.

17 de junio. Armando Díaz, ejecutivo de Tejidos La Unión. Lo asesinan en la puerta de la fábrica.

1992

13 de febrero. Gonzalo García, asesor de la empresa Candados Peruanos S.A.

13 de febrero. Asesinan a subgerente de ENCI.

2.15.4. Un héroe sindical: Enrique Castilla

La misma solución aplicó contra los dirigentes sindicales que se le oponían. Sin duda, el más importante, por las connotaciones que tuvo, fue el del textil Enrique Castilla Linares. El 31 de octubre de 1989, el PCP-SL dio el mayor ejemplo de lo que era su estrategia contra el «revisonismo» (es decir, contra todos aquellos que osaran interponerse en sus planes), asesinándolo de tres balazos. Tenía entonces 48 años y representaba al típico sindicalista forjado en la tradición del clasismo. Sus adversarios le reconocían habilidad en las negociaciones y en la creación de redes de contacto, pero también le criticaban que no superase la práctica caudillista que caracterizaba a su generación. Desde 1962 trabajaba en el complejo La Unión (de lejos, la más importante en el sector textil²²), que agrupaba a doce fábricas de propiedad de la familia Brescia. Vinculado tempranamente al sindicalismo clasista, desde 1963 ya formaba parte de su dirigencia, mientras políticamente se acercó al MIR. Tres años después asumía la Secretaría General de su sindicato y como tal fue delegado ante la Federación donde tuvo que lidiar con los dirigentes apristas.

Las reformas del gobierno militar (1968-1980) lo entusiasmaron promoviendo la comunidad industrial en su planta. Fue entonces cuando sufrió el primer atentado contra su vida. Mientras trabajaba un perfil de lo que pretendía ser la Ley de Comunidades, alguien llamó a su casa y cuando él abrió la puerta los anónimos visitantes le arrojaron una botella con ácido. Aunque la investigación quedó trunca, las sospechas mayores recayeron en los propietarios de la fábrica. Luego sufriría intentos de secuestro y atropello automovilístico.

En 1970, cuando se organiza la Unión Sindical que centralizaba a todos los sindicatos del complejo La Unión, Castilla fue designado como su Secretario General, y luego sería Presidente de la Comunidad Industrial. Después del periodo de reformas se integró al Comité de Unificación y Reorganización de la FTTP, desde donde el clasismo esperaba aislar a los apristas de la dirección de la Federación. Asimismo, fundó la Unidad Democrática Popular y participó en el memorable paro de 1977 (que obligó al gobierno de Morales Bermúdez a convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente al año siguiente), siendo uno de los gestores del Comité de Lucha de la Carretera Central.

22 Los datos biográficos han sido extraídos de Juan Rodríguez C.: «Enrique Castilla: nervio y corazón de dirigente». EDAPROSPO. Lima, 1990

-

Durante los 80 lo vemos nuevamente intentando sacar a los apristas de la federación pero el sindicalismo pasaba por tiempos muy duros y la necesidad de agrupar esfuerzos lo empujó a formar parte de una dirigencia compartida. Desde allí logró crear la Unión Sindical, instancia que no era reconocida por la empresa y por eso propuso transformarla en Federación de Empresa, logrando así el aval oficial, el 23 de mayo de 1986. Como era de esperar, la empresa tampoco quiso reconocer a FEDEUNION, iniciándose una huelga que forzó a los propietarios a firmar un acta de reconocimiento, lo que los trabajadores asumieron como un gran triunfo. De poco les valdría. Dos años después (abril de 1988) la FEDEUNION iría de nuevo a la huelga, esta vez durante 84 días, porque su pliego de reclamos fue rechazado por los propietarios. Castilla demostró en este proceso la habilidad que lo caracterizaba al lograr sorprendentemente que las autoridades de trabajo reconocieran como legales los días de la paralización, sentando jurisprudencia en materia laboral.

Sin embargo, su gestión exitosa en nombre del sindicalismo era vista con sumo desagrado por el PCP-SL que tomó la decisión de asesinarlo. Eligió el «paro armado» del 3 de noviembre de 1989. Después del VIII Congreso de la Federación de Trabajadores Textiles del Perú (5-7 de octubre de 1989), durante la cual la delegación aprista tuvo que retirarse, siendo elegida una directiva clasista, con el apoyo de Castilla, él se reincorporó a su centro de trabajo siendo permanentemente amenazado con pintas en las paredes («¡Muerte al traidor Castilla!»).

La multitud que asistió a su sepelio expresó el impacto negativo de este asesinato dando inicio a un rápido y profundo desprestigio del PCP-SL, lo que, por supuesto, no pareció interesarle demasiado. Un año después, *El Diario* admitía que su muerte había sido un *error* por una mala evaluación de los plazos. En su consideración la oportunidad del asesinato debió coincidir *cuando las masas aún lo querían*.

Al eliminarlo, el PCP-SL salvó momentáneamente el principal escollo que tenía para seguir avanzando en Tejidos La Unión, la fábrica más grande del país en su sector (tenía aproximadamente 3,800 trabajadores) y, consecuentemente, un objetivo muy apreciado para sus planes. Castilla no era su único objetivo. Tal como consignamos en la lista de funcionarios asesinados, en marzo de 1990 balearon al gerente de relaciones industriales de La Unión, Joel Podestá, y en junio de 1991 corrieron la misma suerte otros dos funcionarios. Días después aparecería la siguiente pinta en una de las paredes de la planta: «muerte a los explotadores, no hay revolución sin sangre, la injusticia no quedará sin venganza y mataremos a todos los soplones».

Según el semanario *Caretas*:

David [Armando] Díaz Hinostroza ya había sido secuestrado y mantenido en calidad de rehén hasta en dos oportunidades por miembros del sindicato, en circunstancias que se discutía el pliego de reclamos; por esa razón es que —al ser puesto en libertad— despidió a dos dirigentes involucrados en el asunto. Su principal función administrativa era, precisamente, servir de intermediario entre los directivos de la empresa y los 12 sindicatos que conforman la Federación Textil de Tejidos La Unión...²³

23 «Asedio textil, lo que está pasando en Tejidos La Unión». En *Caretas* 1165, Lima, 24 de junio de 1991.

Pero, ¿cuál fue el motivo para asesinar a la ciudadana soviética, Galina Ivanova, encargada de diseño de la misma empresa? Esta es la versión de un dirigente sindical senderista, entrevistado por Carmen Rosa Balbi en 1992.²⁴

Voy a dar un ejemplo concreto: la gerente que mataron en Textil La Unión, una mujer, una rusa. La aniquilaron porque antes, una semana antes un trabajador dirigente clasista había venido siendo hostilizado, adrede, como en todos sitios y luego, como no había producción, detuvieron la producción de la máquina y le dieron trabajos menores, de limpieza, y él barría; hay que pintar, y él pintaba; hay que lavar el baño, y un poco que ya... Él tenía 54 años de edad. Entonces los otros vieron que lo estaban degradando a un técnico, que un ayudante de limpieza podía haber hecho eso. Entonces él se unió con algunos y dijo que no iba a limpiar el baño.

La cuestión era que lo botaban del trabajo, con esta nueva ley. Entonces la cuestión era que se enfrente. Entonces fue a pedir su tarjeta, y pedir permiso para ir al Seguro. Pero como no había limpiado el baño, el gerente de Relaciones Industriales no le dio la tarjeta, y le cerró la puerta.

Tanta fue la impresión que tuvo, que le afectó, le dio una especie de convulsiones al corazón, y salió afuera y se cayó. Dijeron que él se estaba haciendo el mañoso. Veinte minutos después murió. ¿Se merece o no se merece que se le haga justicia a esa mujer? Por eso se le mató.

El informante no parece haber estado en el teatro de los acontecimientos, pues ha condensado en un solo hecho los asesinatos de Joel Podestá (gerente de relaciones industriales) y de Galina Ivanova (directora de diseños). Aún así, su testimonio contiene pasajes interesantes para comprender la opinión que tenía el PCP-SL del sindicalismo y el dilema que enfrentaba frente al conflicto armado interno. En términos generales, él consideraba que «el movimiento obrero no está debilitado. Al contrario, vemos más bien cómo se potencian con beligerancia sus reclamos... el problema es qué línea le aplicas ... para que avance más, o para que lo contengas ... Esa es toda la cuestión».

Sobre los dirigentes sindicales señalaba:

Los mejores cuadros, los hombres que de alguna u otra manera a finales del 60 o del 70 asumieron una posición revolucionaria, en la práctica se han vuelto reformistas, negadores de su propio discurso en los sindicatos, de tal manera que ahora hasta se atornillan en el Parlamento ... Los dirigentes de la CGTP son vende-obreros. Lo demuestran los hechos: juegan con las necesidades de la clase. Tal sindicato en huelga, pliego, solución, por un salario justo. Algo así plantean y esa no es una posición marxista. No podemos exigir un salario justo en un sistema capitalista, porque su ley de ellos te da para que sobrevivas y la ganancia ellos lo van a manejar. Entonces, no podemos pedir un salario justo.

¿Qué hacer, entonces? El entrevistado creía firmemente en la aplicación de los puntos contenidos en el manifiesto del CLOTCCC:

La jornada de trabajo debe ser de ocho horas; hay que estar en contra del sobre tiempo ¿Por qué no planteamos que todos los contratados se sindicalicen? Deben entrar en el sindicato porque el sindicato es una escuela de socialismo. Los sindicalizados somos minoría. Y si no

24 «Habla dirigente senderista». Entrevista de Carmen Rosa Balbi. En *Quehacer* 77. Lima, mayo-junio 1992.

-

levantamos como bandera aglutinar a esa gran mayoría, entonces no estamos haciendo nada por la clase. Otra cuestión es eso de la jubilación... hay que jubilarse por años de servicio...

Para lograr estos objetivos debían realizar algunas acciones, por ejemplo, los «paros armados», que en su opinión eran más eficaces que los paros convocados por la CGTP, los «paros cívicos»:

Los paros armados son más eficaces. Es algo que te educa. Tú ves quién es tu enemigo. ¿Quiénes son los que convocan a que ataquen a la ciudadanía? Todo el gobierno, pero ¿quiénes salen a las calles a patrullar? ¿No son las fuerzas armadas, las fuerzas reaccionarias las que apalean a los maestros, las que van y nos sacan de las casas de los pueblos jóvenes? Entonces, ese es nuestro enemigo.

Respecto a las tomas de fábricas, hace una importante aclaración:

Eran las formas en que el obrero expresaba ese odio fiero que tiene contra los explotadores. No había otra forma. Pero ahora en esta década tenemos partidos políticos que sí te cubren esas necesidades y tú das el salto del sindicato a ese partido y lo asumes con el costo que requiere. Por eso ahorita una toma de fábrica no corresponde al movimiento obrero; es llevar al inmovilismo a la masa... En el caso de la fábrica COPE hubo un análisis de eso en Carretera Central y los obreros entendemos que se saca lecciones...

De igual manera, los aniquilamientos selectivos, en su opinión, que partían de ciertas consideraciones:

No se aplican indiscriminadamente... eso es porque cubren una necesidad de justicia: como mataron al búfalo Pacheco, como mataron a ese que estafaba a los jubilados, Salaverry... la gente ve en esto una actitud justiciera. En esos casos en que ha habido aniquilamientos de gente de empresas, han sido casos en que ha habido conflictos en que maltrataban... No solamente a ellos: también mataron a Cantoral y a otros dirigentes. Yo me acuerdo de Diamante, en concreto el Diamante es de mi zona, de la avenida Argentina. Pinasco, que es el dueño de Diamante, hizo una defensa de Chiara. Yo creo que cuando me muera, el patrón nunca me va a defender, porque él pertenece a otra clase. Los perros defienden a los perros...

En conclusión, la lucha sindical, como parte de la inevitable revolución, tenía que ser permanente:

Es en la lucha diaria del sindicato que tú vas entendiendo, pues. Por más sensible, mano blanda o guante blanco que use el patrón, siempre hay oportunidad de desenmascararlo, siempre. Stalin decía por ejemplo en las lecciones para el sindicalismo, decía que cuando un dirigente quiere poner en movimiento a la clase, al sindicato, tiene que analizar todos los problemas, y si todos están solucionados, vaya al baño y rompa el vidrio y reclame por el vidrio. Eso es cierto, pues; tú no puedes estar con las aguas quietas, ese inmovilismo hace mucho daño...

Es difícil creer que esta posición concitara la mínima simpatía entre algunos obreros. Sin embargo, así fue, al menos cuando las acciones del PCP-SL parecían encaminadas a ejercer «justicia», allí donde la intransigencia de los empresarios y la inoperatividad del Estado para canalizar e institucionalizar adecuadamente los conflictos, «taponeaba» cualquier posibilidad de

-

negociar las demandas de los trabajadores. Como confesó una obrera textil de la fábrica BOMOSA, perteneciente al complejo La Unión, cuando mataron a Joel Podestá, gerente de relaciones industriales:

Cuando lo mataron hacía meses que no me sentía tan contenta, porque ese gerente era un explotador... Los empresarios creían que los trabajadores eran de Sendero Luminoso y ya nos empezaron a mirar con temor y respeto... Cuando la compañera que estaba vinculada a SL renunció, nos sentimos como huérfanas.

Asimismo, Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y presidente del congreso fundacional del CLOTCC fue enfático al señalar la imposibilidad de cualquier concertación:

¿En qué forma podemos concertar? ¿A más hambre más concertación? ¿A más golpiza del gobierno, más concertación? Creemos que no... Con los empresarios no es posible coincidir, ni para enfrentar la recesión... No, no, no podemos nosotros estar transando con el capitalismo en el sentido de conciliar, de concertar. ¿En qué forma nosotros vamos a concertar?...²⁶

El PCP-SL pudo verse favorecido por otros factores subjetivos, como la admiración que probablemente despertaban ciertas actitudes, y acaso calificadas de «heroicas»; así como la identidad, en la medida que los trabajadores seguían reconociendo que los subversivos podían estar equivocados, pero tenían el mismo origen étnico y clasista.

Vicente Otta manifestaba

En discusiones con compañeros dirigentes obreros de acá, de la carretera Central, ellos me dicen: «bueno pues, los compañeros dan la vida, se la están jugando, hacen la lucha armada ... Si no se hace esto, uno está fregado»; y en segundo lugar, Sendero es el hombre del pueblo, es el trabajador, es el cholo, el mestizo como él ... Entonces, cuando tú no tienes claro que este es un proyecto político, antagónico al tuyo, los lazos sociales de comunidad laboral, de identidad racial son más fuertes y no puedes enfrentarlo. Eso es lo que he encontrado con compañeros dirigentes.²⁷

Esta ausencia de claridad y fuerza para deslindar con un proyecto que significaba la destrucción de los sindicatos, tuvo profundas consecuencias no sólo por lo que correspondía a su debilitamiento y a su creciente incapacidad de negociación, sino también por la confusa posición de los trabajadores sobre el origen de las agresiones que sufrían. Al asumir que los senderistas, por muy equivocados que estuviesen, eran parte de ellos, les fue muy difícil interiorizar la opción del crimen contra aquellos que se oponían a sus planes. Por ese motivo, asesinatos como el de Enrique Castilla siempre estuvieron rodeados de dudas sobre sus verdaderos autores. Lo más sorprendente es que implícitamente se aceptaba la violencia.

25 Balbi, *idem*.

26 Balbi, *idem*.

27 Vicente Otta: «violencia y movimiento sindical». En Denis Sulmont y otros: *Violencia y movimiento sindical*. Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo. Lima, 1989.

2.15.5. Conclusiones

La violencia en el ámbito sindical no fue un factor circunscrito al periodo del conflicto armado interno. En términos generales, siempre estuvo presente y fue un componente importante en la vida de los organismos sindicales y en las relaciones que mantenían con las empresas y el Estado. La cultura radical que ellos generaron puede explicarse por su vinculación con los partidos de izquierda, pero otros factores también contribuyeron como el comportamiento autoritario del empresariado, verticalista y excluyente frente a las decisiones adoptadas en el proceso productivo.

A su vez, el Estado no sólo fue ineficaz en su papel de mediador en los conflictos laborales sino que, muchas veces, dado el desorden imperante en la administración pública, el alto grado de corrupción y la ausencia de un mínimo criterio organizativo, fomentó aún más el desacuerdo y las actitudes extremas.

A pesar de esta dimensión estructural, debe reconocerse sin duda alguna que la violencia impulsada por la subversión adquirió contornos nunca antes visto: el asesinato sistemático de dirigentes y funcionarios de las empresas, la convocatoria de «paros armados», las virulentas tomas de fábricas, eran expresiones inéditas que desbordaban la tradición radical enraizada desde los 70. Algunos analistas señalan que la estrategia del PCP-SL fue introducir en los sindicatos la «lógica de la guerra», rezagando cualquier otra demanda reivindicativa o subordinándola para alimentar los objetivos políticos de la «guerra popular». El resultado fue catastrófico e incluso allí donde el PCP-SL no logró imponer una presencia significativa los trabajadores se vieron envueltos en situaciones extremas sin obtener a cambio ningún tipo de beneficio.

Por otro lado, la violencia no era una variable desconocida en la relación empresas-sindicatos, ni siquiera en su expresión más extrema (los asesinatos). La probable actuación de grupos irregulares, los mecanismos de información así como prácticas de intimidación, que en su momento no fueron investigadas, son materias pendientes y surge la necesidad de conocer este recurso antidemocrático desde el lado de los propietarios. No es un secreto que muchas de estas actividades intimidatorias fueron realizadas mediante organismos de seguridad privada. La ausencia y la falta de efectividad del Estado para proveer la necesaria seguridad a las unidades productivas, fue cubierta por este sistema, así como ocurrió en las minas donde ante la presencia subversiva se respondió con el retiro paulatino de las unidades policiales. Por eso se impone también la necesidad de conocer exactamente cuáles fueron las actividades desarrolladas por la seguridad privada.

Finalmente, no puede excluirse al Estado, y no nos referimos a su legítimo derecho de recurrir a la violencia para defender el país contra la subversión, sino a la actuación parcializada de sus agentes o a su incapacidad de encontrar fórmulas eficaces que canalizaran y resolvieran adecuadamente los conflictos laborales. Estos factores legitimarían el supuesto de los trabajadores, según el cual el Estado, a través de mecanismos legales, hacía recaer sobre sus hombros el peso de la crisis económica o reducía sus posibilidades de beneficios en los periodos de recuperación.

La formalización de las relaciones laborales, bajo un marco de fomento institucional democrático, con reglas claras y generadoras de obligaciones entre las partes comprometidas, está por construirse y deviene en indispensable para no correr el peligro de que vuelvan a expresarse tendencias extremas y opuestas a la negociación y al diálogo.

2.16. LA BATALLA POR LAS BARRIADAS DE LIMA: EL CASO DE VILLA EL SALVADOR

Lima y los pueblos jóvenes son el escenario en el cual la batalla final de la guerra popular será definida.¹

La historia reciente del distrito popular de Villa El Salvador (VES) representa uno de los capítulos más importantes del período del conflicto armado interno vivido en el Perú entre los años 1980 y 2000. VES es un distrito reconocido por su nivel organizativo, su capacidad de autogestión y la participación de sus pobladores en la toma de decisiones locales. Fue, además, desde su fundación en 1971, un bastión de los principales partidos de izquierda, por lo cual representó para los grupos alzados en armas una suerte de trofeo bastante ansiado.

Para el PCP-SL, el proyecto de autogestión impulsado por la izquierda en VES, representaba el «revisionismo» a destruir como parte de su plan de establecimiento de un «nuevo Estado». En ese sentido, VES representaba un objetivo político más que militar, aunque el PCP-SL también buscó reclutar jóvenes e imponer su presencia entre las distintas organizaciones y zonas territoriales del distrito.

El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) también tuvo presencia en VES. Sin embargo, su accionar se distinguía del PCP-SL tanto por su forma de relacionarse con las organizaciones populares y la Izquierda Unida (IU) como por su metodología de guerra. Por un lado, el MRTA concebía su accionar como el brazo armado de IU (aunque ésta no hubiera apoyado tal tesis) y por lo tanto buscaba generar simpatías entre los sectores organizados de la población, en particular con aquellos directamente vinculados con la izquierda. Por otro lado, mientras que el PCP-SL atacó frontalmente a la IU —a quien concebía como un enemigo, tanto como las autoridades del Estado y las Fuerzas Armadas y Policiales— el MRTA se imaginaba como el defensor y representante armado de ésta.

Para las fuerzas del orden, VES fue tempranamente designado como «zona roja». Como consecuencia de esto, los pobladores soportaron operativos de rastrillaje que frecuentemente significaban la detención arbitraria de decenas, sino cientos de personas. Cuando la presencia del PCP-SL se hizo más evidente, las Fuerzas Armadas establecieron una Base Militar en la zona e intentaron establecer alianzas con las autoridades del distrito y con ciertos dirigentes amenazados por los senderistas, con el supuesto fin de protegerlos. Varios dirigentes nos han señalado, sin embargo, que en lugar de sentirse protegidos, sentían temor de ser motivo de represalia de parte del

¹ *El Diario*, julio de 1992.

PCP-SL. Esto evidencia la fuerte presencia que tuvo el PCP-SL en la zona y la sensación de absoluta desprotección que sentían los pobladores y sobre todo los dirigentes.

El panorama cambió radicalmente en los meses que siguieron a la captura de Abimael Guzmán. El PCP-SL se retrae y las fuerzas de seguridad toman la ofensiva. En ese contexto, se registran nuevamente detenciones arbitrarias, como parte de la estrategia estatal de desarticular lo que quedaba de la organización senderista. Hacia finales de los 90 la violencia política dejó de ser tema de importancia; sin embargo, las secuelas de la violencia se evidenciaron de distintas formas: se generalizó el miedo a participar en la política, así como la debilidad organizativa y la fragmentación social.

La combinación de una devastadora crisis económica y el colapso de los principales canales de mediación entre Estado y sociedad fue el telón de fondo sobre el cual el PCP-SL incrementó su accionar en Lima después de 1988. La crisis fiscal del Estado a partir de 1988 erosionó la capacidad del gobierno de responder a las crecientes demandas por vivienda e infraestructura. El debilitamiento de los mecanismos tradicionales de representación de intereses, tales como los partidos políticos y los sindicatos (por débiles que fueran), significó que los sectores con menos recursos tuvieran menos posibilidades de encontrar solución a sus problemas básicos. La combinación de estos factores constituyó las variables contextuales que ayudan a entender por qué el PCP-SL pudo asentar su presencia en las barriadas de la capital con más facilidad de lo que se imaginaba.

A su vez, factores como el desmoronamiento del Estado, la fuerte crisis de los partidos políticos que empezó a experimentar la sociedad peruana hacia finales de los años ochenta, y el efecto debilitador que esto tuvo sobre la sociedad civil, contribuyeron a reducir las capacidades locales de resistencia frente a la arremetida del PCP-SL. La violencia política también jugó un papel importantísimo en ese sentido, ya que el miedo y el terror contribuyeron a disuadir a los pobladores de participar en la política y/o en las organizaciones sociales. El Estado tuvo también una responsabilidad particular en el desarrollo de este proceso, al no poder asegurar condiciones mínimas de seguridad ciudadana.

Esta investigación confirma la tesis de que el debilitamiento de la autoridad del Estado y su repliegue en importantes zonas del país, sumado al debilitamiento de la sociedad política y civil organizada, contribuyeron a abrir espacios políticos y sociales para que PCP-SL logre infiltrarse y actuar en terrenos que no se imaginaban que fueran posibles. Sin embargo, aunque es indudable que las condiciones estructurales favorecieron el ingreso de PCP-SL a la capital y su avance en las barriadas limeñas, un análisis estructural no resulta suficiente para entender a cabalidad estos hechos. Tampoco ayuda a comprender las dinámicas de acomodo y de resistencia de parte de la sociedad civil local frente al avance senderista. Por ello, este informe busca analizar, primero, la estrategia política y militar de PCP-SL, y segundo, las respuestas populares a su creciente presencia en la capital, al examinar el caso de VES. Nuestro principal argumento es que PCP-SL desarrolló

estrategias para insertarse en los intersticios de la sociedad y agitar sobre las contradicciones y conflictos existentes para ganar simpatía, apoyo, o simplemente establecer alianzas contra quienes consideraban sus principales enemigos.

2.16.1. VES: de los orígenes a la violencia política

2.16.1.1. Los orígenes de VES: la época velasquista

VES fue fundada en 1971, como respuesta del gobierno militar reformista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) a una invasión de tierras organizada por migrantes de origen rural y pobladores de los tugurios y callejones de Lima.² La invasión original de terrenos estatales fue organizada por unas 200 familias, pero en sólo unos días unas 9,000 familias más se juntaron a la invasión, que ya desbordaba a la propiedad estatal y afectaba a terrenos de propiedad privada. El presidente Juan Velasco Alvarado, presionado para que demostrara su compromiso con los sectores pobres que su régimen prometía beneficiar, decidió reubicar a los invasores a un extenso arenal árido y desierto ubicado a 26 kilómetros al sur de Lima. Miles de familias pobres recibieron tierras en este nuevo asentamiento, que los pobladores dieron el nombre de Villa El Salvador, y que se convertiría en la vitrina urbana de la «revolución» velasquista. Los funcionarios del Estado tuvieron la tarea de convertir esta invasión en la primera comunidad urbana planificada en el Perú, para lo cual idearon un diseño espacial compuesto por la agrupación de lotes en manzanas, de manzanas en Grupos Residenciales y de Grupos Residenciales en los llamados Sectores. Este modelo arquitectónico facilitó la formación de una estructura organizativa compuesta por dirigencias de manzanas, Grupos Residenciales y Sectores, agrupados a su vez en una dirigencia central de toda la comunidad. El conjunto del territorio de la localidad, a su vez, fue dividido en tres espacios o zonas claramente diferenciadas, dedicadas al uso residencial, industrial y agrícola.³

Mientras los funcionarios estatales supervisaban las iniciativas comunales a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), el modelo autogestionario promovido por el régimen velasquista ayudó a nutrir una red dinámica de organizaciones sociales que movilizaron la participación vecinal en beneficio de la comunidad. El más importante fue la Comunidad Urbana Autogestionaria de VES (CUAVES), la organización vecinal central del distrito, que supervisaría el desarrollo de la comunidad y la representaría ante el gobierno y los demás agencias externas.

² Para una historia más detallada de la creación y trayectoria de Villa El Salvador, véase Zapata (1996) y Azcueta (s.f.). Sobre las mujeres en Villa, véase Blondett (1991).

³ Ver mapa. Asimismo, sobre el diseño arquitectónico original de VES ver: Romero (1992).

2.16.1.2. El repliegue del Estado y la crisis de la CUAVES

El derrocamiento de Velasco en 1975 marcó un viraje del gobierno militar hacia la derecha y un endurecimiento que se mostraba en una creciente actitud represiva hacia los sectores populares. La implementación de medidas de austeridad dio lugar a masivas manifestaciones populares y dos importantes paros nacionales. En el caso de VES, el gobierno central abandonó su programa de ayuda, lo cual significó la pérdida de recursos estatales para los proyectos diseñados. Aunque VES dependía administrativamente del distrito de Villa María del Triunfo, tampoco recibió los recursos necesarios del gobierno municipal para proporcionar la infraestructura básica a su creciente población.⁴

Frente al abandono del Estado, los pobladores de VES participaron en movilizaciones masivas hacia el Estado para demandar la provisión de necesidades básicas. Igualmente participaron en la creación de organizaciones populares para enfrentar los desafíos locales. Por ejemplo, con ayuda de la Iglesia, las mujeres comenzaron a organizarse después de 1979 para satisfacer las necesidades alimentarias de sus familias a través de los comedores populares. En ese contexto, los emergentes partidos de la llamada nueva izquierda florecieron en el distrito.

Pero la retirada del apoyo estatal tuvo consecuencias negativas a largo plazo para la organización más importante de VES, la CUAVES. Al perder su principal fuente de recursos, muchos de sus proyectos comunales se desmoronaron, aunque también hubo acusaciones de corrupción en el manejo de tales proyectos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la caja comunal, donde muchas familias, creyendo en el proyecto de VES y la CUAVES, depositaron —y luego perdieron— sus ahorros. Otro factor de desconcierto fueron las disputas faccionales entre los partidos de izquierda al interior de la CUAVES.⁵

A pesar del cambio a un gobierno democrático en 1980 con la elección de Fernando Belaunde Terry (1980-1985), la crisis económica continuaba y las necesidades de la población seguían sin solución. En ese contexto, surgió un movimiento amplio por establecer a VES como un distrito municipal independiente, lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional en 1983.

2.16.1.3. La Izquierda Unida en VES: una hegemonía en disputa

Desde que se formó en 1983, La IU fue el actor dominante en la política de Villa El Salvador. Michel Azcueta, quien lideró la campaña para establecer a VES como una municipalidad independiente, fue elegido alcalde en la lista de IU por dos periodos sucesivos, entre 1983 y 1989. Su administración tuvo varios logros importantes. Partiendo de cero, construyó la administración municipal, inicialmente con apoyo voluntario. A su vez, buscó promover el modelo izquierdista de

⁴ De 105,000 residentes en 1973, la población de Villa creció a 168,000 habitantes en 1984.

⁵ Véase Burt y Espejo (1995).

participación popular, promoviendo la formación de nuevas organizaciones sociales como la Asociación de Pequeños y Micro Empresarios de VES (APEMIVES), una asociación de vendedores ambulantes (FUCOMIVES), y devolviendo el control de los programas municipales a las organizaciones populares. Tal fue el caso, por ejemplo, del programa del Vaso de Leche, iniciado durante la administración municipal de Alfonso Barrantes, que pasó a ser administrado por la Federación Popular de Mujeres de VES (FEPOMUVES), lo cual lo sigue ocurriendo hasta ahora.

Azcqueta también consiguió financiamiento de la cooperación internacional para diversos proyectos locales de desarrollo en el distrito. En colaboración con ONGs que desarrollaban diversos proyectos —varias de las cuales promovieron pequeños talleres productivos, y brindaban asistencia a organizaciones populares como los comedores populares y los comités del vaso de leche— el gobierno municipal diseñó un Plan Integral de Desarrollo que formuló una serie de propuestas para el distrito, en ámbitos distintos como el de la vivienda, la industria y la educación.⁶ El alcalde también obtuvo asistencia estatal e internacional para desarrollar el Parque Industrial, que para 1990 albergó los talleres productivos de unos 200 pequeños empresarios.

Estos logros ayudaron a fortalecer la hegemonía de la IU en VES, que de ese modo continuó siendo un importante bastión de izquierda, y una de las principales bases de apoyo para las elecciones presidenciales de 1990. La gestión de la IU en el municipio de VES demostró tanto su capacidad de gobernar eficazmente y de ofrecer soluciones concretas a los problemas estructurales de pobreza y desempleo, como su compromiso con los ideales de participación popular.

Sin embargo, la hegemonía de la IU en VES fue disputada a varios niveles, lo cual es importante entender para poder comprender cabalmente el desarrollo posterior de la violencia política en el distrito. Por un lado, existía un grupo de dirigentes dentro de la CUAVES —los llamados cuavistas— que se opusieron a la creación del municipio desde un inicio. Estos dirigentes se consideraban de la izquierda pero muchos no participaron en la IU, y existían fricciones entre la CUAVES y el municipio, tanto por recelos institucionales como por motivos políticos. Existían también conflictos dentro de las otras organizaciones importantes de VES, como la FEPOMUVES y APEMIVES, de parte de ciertos grupos que se sentían aislados o marginados de las tomas de decisiones y el manejo de recursos. También habían niveles de competencia política y rivalidades personales en juego en este contexto, que luego serían aprovechados por el PCP-SL.

Otro nivel de conflicto incluía a los diferentes grupos de izquierda dentro de la IU. Había competencia entre los distintos grupos por establecer hegemonía entre las diferentes organizaciones de base, a pesar de ser miembros de la misma coalición electoral. Estos conflictos se agudizaron después de las divisiones que sufrió la izquierda entre 1988 y 1989. De particular importancia para VES fue la división inicial del Partido Unido Mariateguista (PUM), el partido más grande de IU.

⁶ Véase el Plan integral de desarrollo de Villa El Salvador, Lima: DESCO/Municipalidad de Villa El Salvador, 1986.

Un grupo que salió del PUM formó el Partido Mariateguista Revolucionario (PMR), incluyendo al ex-alcalde, Michel Azcueta, y a Johnny Rodríguez, quien fue elegido alcalde de IU en VES en 1989. María Elena Moyano, ex-presidenta de la FEPOMUVES, también salió del PUM para formar parte de la dirección de un pequeño partido de la izquierda cristiana, el Movimiento de Afirmación Socialista (MAS). Tanto el PMR como el MAS se quedaron dentro de la IU, pero la realidad en distritos populares como VES fue de fragmentación política y divisiones que luego serían aprovechadas por el PCP-SL.

Durante la administración municipal de Johnny Rodríguez y María Elena Moyano, que fue elegida teniente alcalde, la situación a nivel nacional se había deteriorado seriamente. Aunque los gobiernos municipales siempre operaron bajo serias limitaciones, debido a la aguda centralización de la política peruana, la crisis económica y la crisis fiscal del Estado; hacia finales de los años ochenta se agravó aún más la situación. La hiperinflación de 1988-90 diezmó los presupuestos estatales y municipales. A su vez, Villa El Salvador seguía creciendo, pero la organización social ya no resultaba suficiente para resolver los problemas de los habitantes de las nuevas invasiones en la periferia del distrito, y el gobierno municipal carecía de recursos para responder a las demandas de infraestructura básica en esas zonas⁷.

Fue en este contexto que el PCP-SL y el MRTA comenzaron a actuar más políticamente en el distrito. El MRTA buscó generar simpatía entre los grupos de izquierda más radicales, particularmente luego de la división de IU en 1989, y se consideraba como el «brazo armado» de tales grupos. Por su parte, el PCP-SL se enfrentó a la IU a la vez que intentó construir alianzas con otros grupos que tenían conflictos con la izquierda. En ese sentido, el PCP-SL manipuló rivalidades con astucia, forjando alianzas con dirigentes de la CUAVES, la FEPOMUVES, y la APIMIVES, así como con otros sectores que veían a los grupos de izquierda y a los sectores vinculados al municipio con mucho recelo. Establecer alianzas con esos grupos contra un enemigo común —los llamados «revisionistas» de la municipalidad— le permitió al PCP-SL «agudizar» las «contradicciones principales» dentro del distrito, deslegimar a IU y destruir el modelo de ciudad alternativa que Villa representaba para la izquierda legal peruana. El enfrentamiento con la Municipalidad y los representantes de izquierda tuvo un caldo de cultivo ideal en los reclamos de los nuevos asentamientos por servicios como agua, desagüe, luz, pistas, veredas y recojo de basura. Estas demandas, así como los conflictos que generaban, fueron utilizadas hábilmente por el PCP-SL, que logró desarrollar su presencia sobre todo en las zonas nuevas del distrito, originadas mediante invasiones recientes o mediante la ejecución de planes gubernamentales, como fue el caso de la zona de Pachacámac (ver mapa).

⁷ Ver los mapas de VES, en los que se refleja este crecimiento explosivo, que desbordó completamente las previsiones de servicios urbanos y la planificación del uso territorial del diseño original.

2.16.2 Sembrando el terreno: la organización subterránea de PCP-SL en VES

Mientras el accionar del PCP-SL se concentró en las zonas rurales del país durante buena parte de los años 80, hacia finales de esa década, la organización maoista realizó un viraje en su estrategia, incorporando a las ciudades -principalmente a la capital- como un complemento a su estrategia rural. Según documentos del PCP-SL, la «guerra popular prolongada» en el campo se había desarrollado a tal punto que ya era hora de preparar el terreno para la insurrección urbana, que los llevaría a la toma del poder. Un elemento clave para establecer una cabeza de puente en Lima sería controlar los enormes «pueblos jóvenes» que rodean la capital y albergan a casi la mitad de su población.

Estratégica y geopolíticamente, VES era un objetivo importante para el PCP-SL. Era el distrito popular más grande del cono sur limeño, una zona estratégica en el plan mayor de cercar a Lima y establecer el «equilibrio estratégico». Pero VES era tal vez más importante para el PCP-SL en términos políticos. Era una comunidad donde la izquierda democrática estuvo fuertemente arraigada, y que fuera reconocida internacionalmente por su nivel organizativo, por lo cual representaba una alternativa política y un obstáculo al desarrollo de la «guerra popular». En la lógica senderista, la organización pacífica entorpecía la revolución, al ofrecer nada más que «paliativos» para la población; en cambio, solamente la guerra revolucionaria produciría cambios reales para los peruanos pobres y marginados. Ganar influencia en zonas como VES permitiría a el PCP-SL «desenmascarar» el «revisionismo» de la izquierda legal y probar que su «guerra popular» representaba la única vía verdadera de cambio social.

El PCP-SL comenzó su actuación en VES a inicios de los años ochenta, de manera clandestina y subterránea. En efecto, registramos un número relativamente pequeño de incursiones armadas en VES entre 1981 y 1986, dirigidos a entidades gubernamentales, la única comisaría del distrito, los bancos y las torres de electricidad. También se realizaron actividades ocasionales de agitación y propaganda, como la iluminación de inmensas fogatas con el símbolo de la hoz y el martillo en los cerros que rodean al distrito.

El PCP-SL buscó ganar influencia en el magisterio en barriadas como VES; maestros de escuelas, como fue el caso de Nelly Evans, fueron reclutadas a la causa senderista y de ahí buscaron reclutar jóvenes. A su vez, un pequeño núcleo de estudiantes sanmarquinos organizó grupos de estudio en VES (y otros pueblos jóvenes) para así reclutar nuevos militantes. Desde los colegios, buscaban ganar jóvenes estudiantes para su causa. Cómo señala un dirigente político de VES:

En el caso de los universitarios, es un trabajo bien interesante porque lo hacían en los barrios, en su propio barrio hacían su trabajo de captación, hacían amigos, haciendo deportes, yendo a las polladas, emborrachándose, así hacen política. No era la clásica, era el contacto uno a uno. Hacían su lista de posibles y cogían ahí y seleccionaban y empezaban así conversando, conversando este discurso bastante coherente de la revolución mundial donde ellos son la vanguardia, y que la situación, el cambio radical, fácil de

legitimar además en un contexto donde hay crisis fuerte, crisis también de los partidos políticos, de la división de la izquierda. Hay todo un contexto muy favorable para ello. Ellos crecieron mucho por el lado de los barrios y otro fue los colegios, los docentes con su alumnos, ahí hay una relación de autoridad, cierta generación que trabajan los profesores senderistas (diciembre 2002)

De 1987 hacia adelante, hubo ciertas evidencias de la intención senderista de establecer una presencia más orgánica en VES. Mientras que las actividades de sabotaje proseguían, había señales de un activismo político más intenso a nivel de base. Por ejemplo, se crearon grupos de estudio y asociaciones culturales que servían como para reclutar militantes. También se establecieron academias técnicas, un lugar propicio para reclutar a jóvenes recién egresados del colegio, que tenían pocas posibilidades de ingresar a la universidad y buscaban prepararse para un mercado laboral poco prometedor.

A partir de 1988, las actividades senderistas de agitación y propaganda se hicieron más visibles. Por ejemplo, pequeños contingentes senderistas participaron en actividades y marchas de protesta organizadas por grupos vinculados a la IU en VES. Tales actividades y movilizaciones fueron dirigidas a cuestionar las medidas económicas del gobierno, o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Como señala un dirigente de IU:

En 1986 organizamos una serie de actos culturales en la Plaza de la Solidaridad para concientizar la población sobre la violación a los derechos humanos de parte de los militares. Una vez armamos una cadena humana por la paz con jóvenes de Villa. Otra vez pusimos carteles con fotos y historias de personas desaparecidas por los militares en Ayacucho y otras zonas rurales. Un par de senderistas estuvieron ahí dando vueltas durante el día, conversando con la gente y hablando a favor de la guerra popular.⁸

2.16.3. Destruyendo el mito: la política del enfrentamiento

En el marco del anuncio de la llegada al «equilibrio estratégico» en el año 1989, la estrategia del PCP-SL en VES cambió de perfil, buscando disputar la hegemonía de la izquierda y así «desenmascarar» la supuesta inutilidad de su opción pacífica de cambio social. Esto se unía con su estrategia -ya probada en el campo- de crear «vacíos de poder» para así asentar su presencia. De esta manera, el PCP-SL libró una frontal confrontación con la izquierda legal en el distrito, buscando desprestigiar el liderazgo político y social del distrito, amenazando y en algunos casos asesinando a quienes se opusieron a su ‘guerra popular’.

Para ello, el PCP-SL buscó agitar sobre una serie de conflictos ya existentes entre diferentes grupos sociales y políticos de VES y las estructuras del poder local, dominadas desde mediados de los ochenta por la IU. De esta manera buscaban desprestigiar a la IU mientras avanzaba su presencia e influencia en el distrito. A su vez, levantaban ciertas reivindicaciones

populares y buscaban radicalizarlas con el fin de demostrar la supuesta inviabilidad del modelo autogestionario y de cambio social por la vía pacífica, por tratarse de una vía estrechamente relacionado con el Estado «burgues» que, en el proyecto senderista, habría que destruir.

Al radicalizar y exacerbar los conflictos sociales existentes en el distrito, el PCP-SL también buscó provocar la represión militar —una estrategia que había seguido en el campo y en otras zonas de la capital como Raucana— creyendo que una intensificación de la polarización obligaría a la población a tomar posiciones y que entre ellos y las fuerzas de seguridad la población se uniría a la guerra popular.⁹ Las entrevistas revelan que entre algunos sectores de la población el PCP-SL logró generar cierto nivel de simpatía y hasta apoyo, sobre todo —como ya hemos señalado— en aquellas zonas de reciente creación donde resultaban cruciales las demandas por servicios urbanos. Sin embargo, el grueso de la población miraba a esta organización a la distancia y con cierto temor. El PCP-SL buscó imponer violentamente sus propios métodos y liderazgo, pero su autoritarismo extremo finalmente minó su posibilidad de construir un verdadero apoyo popular.

2.16.3.1. La escalada de violencia en VES

Antes no teníamos claro lo que el PCP-SL quería en Villa. Pensamos que pudimos de alguna manera coexistir. Pero pronto nos dimos cuenta que el PCP-SL no quería coexistir con nosotros, quería desaparecernos, desaparecer a Villa.¹⁰

A lo largo de los años 1989 y 1990, el PCP-SL incrementó su accionar en el distrito con actos de sabotaje y propaganda, como la quema de buses, atentados contra infraestructura como las instalaciones de luz y agua, la comisaría y el local del partido de gobierno, Cambio 90. También se registraron asaltos a hospitales en el distrito, presumiblemente para llevar medicinas y otros bienes para atender a sus heridos. Otras acciones se puedan definir como actos de agitación y propaganda, tales como la distribución de volantes en mercados y colegios, la intercepción de camiones y la repartición de los comestibles que llevaban.¹¹

A mediados de 1991, se puede reconocer una escalada de los actos de violencia e intimidación, en el marco de la estrategia de crear vacíos de poder. El PCP-SL parece haber decidido iniciar una campaña para intimidar y eliminar a las autoridades locales en el distrito. El primer acto en ese sentido se registra el 23 de junio de 1991, cuando asesinaron a Alejandro Magno Gómez, prefecto del distrito y miembro de Cambio 90, el partido de gobierno.¹² Las autoridades

⁸ Entrevista, agosto de 1993.

⁹ Ver el estudio en profundidad sobre el caso de Raucana.

¹⁰ Entrevista con «Gerardo» en VES, abril de 1994.

¹¹ El 24 de enero de 1991 una columna de el PCP-SL interceptó a un camión cargado con más de 300 cajas de aceite vegetal que las repartieron en un mercado en VES. *Banco de datos de DESCO ficha 006623*. El 10 de abril, miembros de el PCP-SL intentaron incitar a la población a saquear un camión que distribuía bebidas gaseosas. *Banco de datos de DESCO ficha 013584*.

¹² *La República*, 23 de junio de 1991.

locales, particularmente el alcalde, Johny Rodríguez, la teniente alcalde, María Elena Moyano, y el ex-alcalde, Michel Azcueta, comenzaron a recibir amenazas de muerte.

En septiembre de 1991, una bomba explotó y destrozó uno de los centros de acopio de la FEPOMUVES, donde la organización almacenó alimentos que distribuían a los comedores populares. El vocero senderista, *El Diario*, frecuentemente denunciaba al proyecto izquierdista de VES como «una farsa» que «*castr[a] la combatividad y el potencial revolucionario de las masas*»; en ese contexto, María Elena Moyano acusó públicamente a el PCP-SL del atentado. En volantes que distribuyeron en Villa El Salvador, el PCP-SL negó responsabilidad y acusó a Moyano de haber orquestado el atentado para encubrir el mal uso de los recursos de la FEPOMUVES. Moyano respondió inmediatamente, negando participación alguna en el atentado y reiterando la acusación de que el responsable del mismo era PCP-SL.

Al preguntar a las dirigentas de la FEPOMUVES qué había pasado y si creían que efectivamente el PCP-SL era el responsable del atentado contra el centro de acopio, queda evidente que no hay certeza de la autoría del atentado. Normalmente el PCP-SL nunca rehuyó la responsabilidad de sus actos y atentados (por ejemplo, publicaron artículos reconociendo la autoría del asesinato de María Elena Moyano). Sin embargo, algunos observadores señalan que un grupo vinculado al PCP-SL del Sexto Sector llevó a cabo el atentado sin autorización de sus superiores. Según una dirigente: «Para mi personalmente que haya sido el PCP-SL me queda la duda porque el PCP-SL no lo hubiera hecho, no tenía necesidad de hacerlo, pero...si ha sido el PCP-SL han sido los empíricos, los locales que han querido fregar a alguien de la FEPOMUVES como es a [***] que le tenían bronca...»¹³

Otra posibilidad es que los miembros locales del PCP-SL habrían exigido una colaboración de las dirigentas de tal centro de acopio, y debido a que éstos se rehusaron colocaron una bomba como represalia y como amenaza para obligarles a colaborar en el futuro. Pero otros entrevistados afirman que el PCP-SL no fue responsable del atentado y que, efectivamente, en ese centro había malos manejos de los recursos de parte de las dirigentas.

El PCP-SL tuvo la habilidad de explotar los conflictos y problemas a nivel local, a su vez que azuzaba la suspicacia entre los activistas de base hacia los malos manejos de los dirigentes. La supuesta corrupción —nunca confirmada ni probada— frecuentemente fue aceptada como un hecho entre un buen sector de la población. Se podría tratar, al fin y a cabo, de parte de una campaña senderista por desprestigiar a la FEPOMUVES y, más concretamente, a María Elena Moyano para que, luego de haberla asesinado, pudiesen «justificar» su muerte al señalar su supuesta corrupción.

Un grupo de dirigentes importantes del PMR y MAS, los dos partidos que gobernaban el municipio, se iban dando cuenta de que el PCP-SL no sólo sólo buscaba infiltrar al distrito y así

¹³ Entrevista, diciembre de 2002.

incrementar su presencia, sino que tenía claras intenciones políticas de descabezar las organizaciones sociales más importantes y destruir el proyecto autogestionario de VES. El atentado contra el centro de acopio de la FEPOMUVES fue importante en ese sentido, como lo señalan las palabras de la desaparecida dirigente, María Elena Moyano:

Hasta hace un tiempo yo pensaba que el PCP-SL era un grupo equivocado y que, de alguna manera, intentaba luchar por alguna justicia. Pero cuando mataron al dirigente obrero [Enrique] Castillo [en octubre de 1989], tuvieron todo mi repudio, sin embargo yo no me atrevía a condenar esta actitud terrorista de el PCP-SL. Ahora han tocado las organizaciones de base, donde están los más pobres. ... Pretenden socavar este tipo de organizaciones. ... [Y]o ya no considero a el PCP-SL un grupo revolucionario, es solamente un grupo terrorista.¹⁴

A inicios de 1992, se registran una serie de atentados, asesinatos e intentos de asesinato, supuestamente cometidos por PCP-SL, lo cual correspondería a la creciente presencia del PCP-SL en VES y a su trabajo de base en ciertos sectores del distrito.

El 13 de enero de 1992, una columna de once senderistas atacó a tres suboficiales de la Policía Nacional que hacían vigilancia cerca al mercado central del distrito. Un policía murió en el atentado, y a pesar de que los medios de comunicación reportaron la captura de los responsables del atentado, el hecho de realizarse un atentado así en el corazón de la vida pública local —el mercado central conocido como la «Chanchería»— difundió mucho temor en la población.¹⁵

El mismo 13 de enero, un obrero del Primer Sector fue baleado en la puerta de su domicilio.¹⁶ El 10 de febrero, un anciano vigilante fue asesinado y un cartel fue colocado sobre su cuerpo que decía: «Así mueren los soplones» con el símbolo de la hoz y el martillo.¹⁷ Dos días después, Juan Huamán Valle, un dirigente vecinal de 52 años, fue baleado por supuestos senderistas en la puerta de su casa.¹⁸ La escalada de violencia política era cada vez más evidente. Frente a ello, algunos sectores de la dirigencia izquierdista tomaron la decisión de que tendrían que armarse para proteger sus vidas. De hecho, varios dirigentes comienzan a dormir fuera de sus casas y a tomar otras precauciones.

2.16.4. La resistencia local: una lucha desigual

Luego del atentado contra el centro de acopio, en una entrevista en *La República*, María Elena Moyano afirmó que las organizaciones de mujeres de VES resistirían al PCP-SL y que ella

¹⁴ *La República*, 22 de septiembre de 1991. El primer asesinato registrado de un dirigente del programa del vaso de leche o de los comedores populares fue el de Juana López, dirigente de un comedor popular en Callao, quien fue asesinada por el PCP-SL el 31 de agosto de 1991. El 31 de diciembre de 1991 hubo un atentado contra la dirigente de los comedores populares, Emma Hilario, de San Juan de Miraflores. María Elena Moyano fue asesinada por el PCP-SL el 15 de febrero de 1992.

¹⁵ *Banco de Datos de DESCO*, ficha 015851.

¹⁶ *Banco de Datos de DESCO*, ficha 015855.

¹⁷ *Banco de Datos de DESCO*, ficha 016477.

promovería la creación de rondas urbanas para combatir su presencia. Moyano explicó que serían rondas autónomas, sin relación alguna con las fuerzas armadas y policiales, pues el pueblo no confiaba en estas instituciones. Sin embargo, los esfuerzos nacientes por organizar rondas se desarmaron luego de que el PCP-SL visitara a los organizadores, casa por casa, amenazándoles y advirtiéndoles que desistan de organizarlas, pues ellos se encargarían de los problemas de la delincuencia y la droga. Según un activista de derechos humanos del distrito:

Yo me enteré sobre las amenazas a las rondas por casualidad. Estaba tratando de organizar comités de derechos humanos en los grupos residenciales y en las conversaciones que iba teniendo con los dirigentes me di cuenta de que el PCP-SL había visitado a los líderes de las rondas y les decía que no se preocupen, que ellos se iban a responsabilizar por el problema de la delincuencia.¹⁹

A finales de 1991, el alcalde, Johny Rodríguez, intentó crear un frente amplio contra el PCP-SL desde municipio. Se fundó la Mesa por la Paz y el Desarrollo, que pretendió ser un espacio de concertación entre las organizaciones populares, grupos de derechos humanos, la Iglesia Católica y el gobierno municipal. El objetivo de la Mesa por la Paz y el Desarrollo era desarrollar alternativas para responder a los problemas sociales de VES y detener la creciente influencia senderista en la comunidad. A pesar de sus buenas intenciones, las estrategias de la Mesa no resultaron suficientes para enfrentar un enemigo dispuesto a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos.

2.16.5. La lucha por el Parque Industrial

El 9 de febrero de 1992 marcó un momento decisivo en VES. Se llevaron a cabo elecciones en la APEMIVES, y un microempresario de la zona, Máximo Huarcaya, fue elegido presidente, supuestamente con el respaldo del PCP-SL. Varios miembros de la Mesa por la Paz y Desarrollo, incluyendo a María Elena Moyano, intentaron prevenir su elección al tratar de convencer a los distintos partidos de izquierda de respaldar a un candidato único en las elecciones. Sin embargo, la reciente historia de las divisiones había marcado profundamente las relaciones entre los distintos partidos de izquierda en Villa El Salvador, y no llegaron a un acuerdo para apoyar un candidato único. Con la izquierda dividida, Huarcaya pudo ganar la elección.

La APEMIVES era una de las instituciones que conformaban la Autoridad Autónoma (AA), el cuerpo rector del Parque Industrial de Villa El Salvador. Los otros actores que participaban en la AA eran el alcalde distrital, un representante del gobierno central, uno de la industria privada y el presidente de la CUAVES. Se desataron los conflictos dentro del Parque Industrial con respecto a su administración, lo que fueron utilizados por el PCP-SL como modo de

¹⁸ Banco de Datos de DESCO, ficha 016514.

¹⁹ Interview, «Arturo», 28 de diciembre de 2002.

agitar a los pequeños empresarios y movilizarlos en contra de la AA, y en particular en contra del alcalde. Algunos de estos conflictos tenían un trasfondo personal y político.

En primer lugar, la AA había cedido terrenos a los microempresarios bajo el acuerdo de que tenían que construir sus talleres dentro de un plazo fijo. El anuncio de la AA que exigiría la devolución de los lotes cedidos a los microempresarios que no habían construido sus talleres dentro del plazo establecido, generó fuertes críticas entre los pequeños empresarios. Varios de ellos habían sido duramente golpeados por la crisis económica y carecían de recursos para construir sus talleres.

Huarcaya lideró un grupo de pequeños empresarios que exigían que nadie fuese expulsado del Parque Industrial. Acusó a la AA de utilizar su poder para asignar los lotes a pequeños empresarios ligados al ex-alcalde Michel Azcueta y su partido, el PMR. A su vez, acusó a la AA de falta de transparencia en el manejo de las donaciones internacionales y de un programa de préstamos para microempresarios creado con el apoyo de la cooperación internacional. La AA se defendió argumentando que los libros contables estaban en orden y abiertos para quien quería revisarlos. Sin embargo, las acusaciones de corrupción persistían.

Huarcaya exigió que el control de los recursos del Parque Industrial fuera transferido exclusivamente a la APEMIVES. Sostuvo que los beneficiarios de las donaciones eran los pequeños empresarios, y por lo tanto la asociación que los representaba debería manejarlas sin interferencia de las demás instituciones. Este discurso alcanzó cierta resonancia entre los pequeños empresarios, sobre todo al agudizarse la crisis económica, pero también mostró la cultura de desconfianza que se iba generando en un contexto de crisis económica aguda.²⁰ PCP-SL, a su vez, recogió estos argumentos y los manipuló para sus fines,²¹ logrando articular la desconfianza de muchos pequeños empresarios ante la AA encargada de administrar el Parque Industrial.

El testimonio de un dirigente del municipio, recordando un encuentro que tuvo con un pequeño empresario del Parque Industrial y dirigente de APEMIVES, quien fue señalado como ‘filo-senderista’, muestra no sólo el nivel de trabajo político de el PCP-SL al buscar captar adeptos, sino también cómo algunos dirigentes, que se sentían marginados de la estructura de poder local, utilizaban una supuesta afiliación con el PCP-SL para afirmar su persona y su poder:

Me dijo: «mira, nosotros los ayacuchanos, los huancavelicanos somos los más pobres y el partido nos ha unido, nos ha organizado y nosotros tenemos que ser leales con el partido no, porque al final Michel Azcueta nunca nos ha defendido, el único que nos puede defender es el partido y yo tengo que ser leal al partido, hay otros que se están enriqueciendo, hay otros capitalistas que tienen plata y pueden construir sus terrenos. Nosotros no tenemos plata, yo más bien he venido de una quiebra, yo he tenido mi taller artesanal y de pronto me puse a vender hierbas en los mercados, la situación empeoró para mí y en medio de esa situación así de pobreza en la que había caído vino el partido y me rescató y el partido hizo algo por mí, y ahora tu vienes a buscarme. Tu no vinistes a buscarme, tu no vinistes a verme cuando yo estaba jodido, y ahora tu vienes a verme y yo te hablo de igual a igual porque yo soy del partido»... [A]sí fue la cosa en el Parque Industrial como así fue la cosa en todo creo yo con el PCP-SL. El PCP-SL ubicaba bien a las personas, ubicaba como pensaba, ubicaba su compromiso hacía determinadas causas,

²⁰ Delpino (1991) refiere a este discurso como «la ideología del asistido».

²¹ Véase SASE-Instituto APOYO (1993).

ubicaba también sus grados de pobreza y se presentaba a través de una persona, a través de un cuadro como el que los podía ayudar.²²

Cuatro días después de la victoria de Huarcaya hubo una reunión de emergencia en el Parque Industrial para discutir la situación. María Elena Moyano exigió a Huarcaya y a Filadelfo Roa, presidente de la CUAVES que apoyó la candidatura de Huarcaya, que firmaran un documento de deslinde con el PCP-SL. Ambos se rehusaron. Según Huarcaya, consultó con las bases de la APEMIVES, quienes votaron en contra de firmar el documento; además, se basó en el miedo a las represalias senderistas como motivo para no firmar el documento.²³

2.16.5.1. El asesinato de María Elena Moyano

Para los dirigentes cercanos al municipio, esto fue la evidencia de una relación de ambos dirigentes de APEMIVES y CUAVES con PCP-SL. María Elena Moyano decidió que había llegado el momento de desafiarlos abiertamente. PCP-SL había decretado un «paro armado» en Lima para el día siguiente, 14 de febrero de 1992, y Moyano planteó que Villa y sus organizaciones debían protestar contra dicho paro mediante una manifestación pública denominada la ‘Marcha por la Paz’. Muchos activistas declinaron participar por temor ante PCP-SL. A su vez, otros grupos de izquierda también se rehusaron a participar, citando la necesidad de mantener sus propios «perfiles» en el distrito, reflejando otra vez el legado de la división de la izquierda.²⁴ La marcha se realizó, pero sólo participaron unas 50 personas, portando banderas blancas como símbolo de la paz.

Ese mismo día, 14 de febrero de 1992, un paquete de 500 gramos de dinamita fue colocado en la puerta de la casa del ex-alcalde del distrito, Michel Azcueta²⁵. No hubieron heridos ni muertos pero el mensaje era claro: el PCP-SL tenía a la dirigencia de VES en la mira. Efectivamente, al día siguiente, 15 de febrero de 1992, un comando de aniquilamiento senderista asesinó a María Elena Moyano a balazos en una pollada en el primer sector del distrito. Después de matarla, llevaron su cuerpo a la puerta del local comunal y le colocaron una carga explosiva de unos cinco kilos de dinamita que destrozó su cuerpo.

²² Entrevista, diciembre de 2002.

²³ Entrevista, diciembre de 2002.

²⁴ Citando las palabras de Michel Azcueta en una carta abierta publicada a dos días de la muerte de María Elena Moyano: «Llevamos más de una semana María Elena [Moyano], Yoni [Rodríguez], [José] Polo y yo hablando claro sobre sus intenciones de el PCP-SL en Villa El Salvador y sobre las amenazas continuas —lamentablemente confirmadas— contra nuestras vidas. Lo hemos hecho público una y otra vez por todos los medios posibles. Nadie dijo nada. Al contrario, y lo digo sin ningún tipo de odio personal sino pensando en el futuro, el mismo domingo, a la mañana María Elena pidió al PUM que apoyara una acción unitaria en el Parque Industrial, ante la evaluación de los planes de el PCP-SL. ¿Cuál fue la evaluación del PUM? «No, pues tenemos que fortalecer nuestro perfil propio». Respuesta textual dicha a la propia María Elena. Los resultados ya se conocen. [N]i el PUM, ni el PC, ni mucho menos, la UDP o el Bloque [Revolucionario] apoyaron la «Marcha por la Paz», importante acto simbólico en el mismo día del paro». Publicada en *Última Hora*, 17 de febrero de 1992.

²⁵ Banco de Datos de DESCO, ficha 016599.

María Elena Moyano había sido invitada a la pollada varios días antes del 15 de febrero; según el recuerdo de sus amigos y colegas, la señora que le hizo llegar la invitación insistía repetidamente que no dejara de asistir a la pollada, que tuvo lugar en el Grupo 23 del primer sector del distrito. El día del asesinato había ido a la playa con sus dos hijos y un sobrino, y antes de regresar a casa decidió asistir brevemente a la pollada. Delante de sus hijos, el comando de aniquilamiento senderista baleó a su guarda espaldas (un policía) y luego la emprendió contra ella.

Durante los días siguientes, circularon por todo el distrito volantes del PCP-SL que reivindicaban la autoría del atentado, justificando la muerte de María Elena Moyano al acusarla de «corrupción», «favoritismo» y de ser una «soplona», por lo cual merecía morir.

Al hablar de la muerte de María Elena Moyano, muchos hacen alusión a una muerte «anunciada». Efectivamente, enfrentar de modo directo al PCP-SL cuando sus acciones estaban en pleno auge en toda Lima, resultaba muy peligroso. ¿Cómo se llegó a tal situación?

A partir del atentado contra el centro de acopio a mediados de 1991, María Elena Moyano libró una batalla directa y abierta en contra de PCP-SL. Ella demostró su indignación por los atentados contra dos dirigentes populares -el asesinato de una dirigente del vaso de leche del Callao, Juana López, el 31 de agosto de 1991, y un atentado contra Emma Hilario, una dirigente de los comedores populares en San Juan de Miraflores-, y en particular en contra de la organización que ayudó a construir, la FEPOMUVES.

Moyano comenzó a denunciar a el PCP-SL publicamente en los medios de comunicación masivos. Había respondido a los ataques hacia su persona publicados en el periódico senderista, *El Diario*, hacia finales de 1990, pero el atentado contra el centro de acopio -y la acusación de parte de el PCP-SL de que ella misma fuese la responsable- la llevó a asumir cada vez más una actitud confrontacional hacia el PCP-SL. En las mismas palabras de María Elena Moyano:

Hace un año, El Diario atacó a la Federación de Mujeres y también a mí. Decían que somos un colchón del sistema y que no reivindicamos ni revaloramos a la mujer, porque ésta se emancipa sólo con la guerra. Que somos asistencialistas. Que yo soy una 'revisionista' y estoy manipulando a las mujeres. Han tomado fotos de La Casa de la Mujer [el local de la FEPOMUVES] y las han publicado. Es una amenaza permanente. Me parece que su primer objetivo ha sido desprestigiar a la Federación de Mujeres, para luego golpear. Creo que es parte de su táctica. Nosotros les respondimos hace un año... Si yo tengo el coraje es porque las mujeres de la Federación me lo han dado. El mismo día que pusieron la bomba en nuestro local, nos reunimos. Reaccionamos rápidamente. A mí eso me dio fuerza y valor. Ahí las mujeres acordaron rechazar y repudiar al PCP-SL. La asamblea metropolitana de comedores también ha acordado una movilización, tomando el ejemplo de Villa El Salvador han decidido levantar dos consignas: contra el hambre y contra el terror.²⁶

Ella comenzó a aparecer frecuentemente en los noticieros y programas de televisión, donde hizo declaraciones muy fuertes contra el PCP-SL.

Después del atentado [al centro de acopio de la FEPOMUVES] las cámaras ya comienzan a poncharla, entonces ella era un personaje de la sociedad civil que comenzaba a enfrentarse ya no solamente era el ejército sino también era la sociedad, quien se ponía enfrente de el PCP-SL entonces ahí la televisaban... María Elena se vio envuelta en un remolino que ya no sabía como controlarlo.²⁷

La prensa escrita la señaló como un modelo ejemplar de una dirigente popular que combatía al PCP-SL; a finales de 1991, el periódico *La República* la nombró «Personaje del año», mientras la revista semanal, *Caretas*, la declaró «Madre Coraje» en el número de fin de año. Pero María Elena Moyano estaba peligrosamente sólo frente a la fuerza de un grupo armado obsesionado por aparentar una situación de «equilibrio estratégico» en su lucha contra el Estado, y de imponer su control sobre las organizaciones sociales de VES.

2.16.5.2. Ejemplo de fortaleza

Otro elemento importante es cómo la propia María Elena Moyano interpretó su situación. Como dirigente, ella sentía la necesidad de actuar como ejemplo de fortaleza y liderazgo, a fin de que las demás dirigentes de la FEPOMUVES no se retraigan por el miedo. El telón de fondo de esta situación fue la creciente presencia del PCP-SL en VES, y en particular entre los comedores populares y comites de vaso de leche que formaban la base social de la FEPOMUVES. El PCP-SL había comenzado a actuar como un «fiscalizador» de las dirigentes de la organización, algo visto con buenos ojos por muchas activistas de base debido a la debilidad de los mecanismos de control de los recursos y las donaciones dentro de las organizaciones femininas. Como comentó una dirigente de la FEPOMUVES que coordinaba una de las centrales del vaso de leche: «Yo era dirigente de la central y encapuchados [los senderistas] iban a los Comités del Vaso de Leche a destaparles las ollas, ‘¿Esto es lo que sirven? ¿Esto es lo que dan? ¿Cuánto dan?’, o sea un carácter de fiscalización».²⁸

A su vez, María Elena Moyano estaba convencida de que como conocía a los cuadros locales del PCP-SL, no estaba en peligro de que la maten. Esto está íntimamente vinculado con su certeza de que habría que pelearle al PCP-SL en el terreno político, no el militar. Esto lo señaló con sus propias palabras:

[L]a derrota de el PCP-SL tiene que ser política e ideológica. Ellos no hacen solamente una lucha militar. Frente a una propuesta política del PCP-SL, tiene que nacer una alternativa distinta. Por eso yo digo que hay que exigir a las fuerzas de izquierda. Así lo hicimos las mujeres: antes de que se rompa la izquierda nos acercamos, inútilmente, a [Alfonso] Barrantes, a [Javier] Diez Canseco [del PUM], y a [Manuel] Dammert [del PCR]. Los tres

²⁶ Entrevista a María Elena Moyano publicada en *La República* el 22 de septiembre de 1991. Una valiosa colección de entrevistas a y las palabras escritas y poemas de María Elena Moyano fue hecha por Diana Miloslavich Tupac (1993).

²⁷ Entrevista, diciembre de 2002.

²⁸ Entrevista, diciembre de 2002.

nos trataron mal. Se dividió la izquierda y ahí están las consecuencias. El país necesita esa unidad.²⁹

Otro aspecto de su comportamiento poco señalado por los medios de comunicación y otros observadores es que era una mujer involucrada íntimamente en la política, y que tenía claras responsabilidades y anhelos de liderazgo. Cuando se integró al MAS, pasó a formar parte de su concejo directivo, y lo hizo pensando que era uno de los partidos mejor situados para volver a construir la unidad de la izquierda.³⁰ Había sido elegida teniente alcaldesa de VES en 1989, y aspiraba a la alcaldía en 1992. Según varios entrevistados cercanos a ella, su actuación frente al PCP-SL tenía mucho que ver con la campaña electoral que se acercaba. Uno de sus íntimos amigos ligados al gobierno municipal relata que:

Ella estaba ya haciendo campaña para levantar su perfil para las elecciones municipales (de 1992). La lucha contra el PCP-SL le permitía levantar su perfil... Pensó que la lucha [con el PCP-SL] era sólo política. Le dijimos que no, que también se trataba de una lucha de otro nivel, de un nivel militar, y que no se podía enfrentarlos sólo a nivel político... Ella todavía estaba confundida que cosa era PCP-SL, era guerrilla revolucionaria o qué, y eso la llevó a la respuesta equivocada. El PCP-SL era un grupo terrorista. Lo más lógico era una alianza con la policía.³¹

2.16.5.3.¿Aliarse con el Estado en contra del PCP-SL?

Existían pues ciertas tensiones entre los dirigentes más importantes de VES sobre la necesidad de construir una alianza con la policía para poder hacer frente al PCP-SL en el distrito. Según un entrevistado que era un dirigente importante a nivel nacional del MAS, Moyano tenía cierto recelos frente a la estrategia que venían desarrollando desde el municipio, a pesar de ser ella también autoridad municipal. No estaba de acuerdo con la idea de una alianza con la policía. Según aquél dirigente, en una reunión Moyano les dijo:

Uds. pueden recurrir al sistema de seguridad del Estado, pero eso es mal visto por la población. No es que sea del PCP-SL, pero el PCP-SL está en la base y se habla de otra manera. Una cosa así sería para que nos acusan de que preferimos los de arriba, los militares. Uds. en el poder ponen en riesgo nuestro trabajo en la base, y a nosotros mismos.³²

Estas tensiones y discusiones políticas acerca de la posibilidad y/o necesidad de una alianza con el Estado frente a la violencia del PCP-SL ilustran que las cosas en VES habían llegado a una situación límite. Dirigentas como María Elena Moyano se encontraban solas frente a un grupo dispuesto a utilizar la violencia en contra de quienes consideraban sus enemigos.

²⁹ Entrevista a María Elena Moyano publicada en *La República* el 22 de septiembre de 1991.

³⁰ Entrevista con Rolando Ames, diciembre de 2002.

³¹ Entrevista, diciembre de 2002.

³² Entrevista, diciembre de 2002.

Sin embargo, Moyano seguía denunciando al PCP-SL públicamente. A su vez, había comenzado la presión de parte del Ejército para coordinar sus acciones en el distrito con el municipio y con dirigentes populares como Moyano, que se oponían al PCP-SL. El alcalde en ese entonces, Johny Rodríguez, menciona que cuando el Ejército empezó a trabajar con más fuerza en el distrito a partir de 1991, le buscaron para coordinar acciones. Oficiales del Ejército también se habían acercado a Moyano, buscando que ella les acompañe en sus acciones cívicas en las zonas más pobres de VES, aparentemente para darles mayor legitimidad, pero ella se negó a participar.³³ Cómo señaló un colega de Villa El Salvador del MAS:

[E]l ejército estaba haciendo en esos tiempos campaña de repartición de alimento, queriendo cambiar su imagen, ya no iban a reprimir sino iban a los asentamientos humanos y repartían alimentos, entonces le pedían a María Elena que vaya y acompañe esas caravanas, esas campañas de apoyo hacia las personas pobres y ahí ella se resistió, no lo aceptó.³⁴

María Elena Moyano trató de trazar una línea muy fina, tanto en contra del PCP-SL como de una forma de presencia estatal que violaba los derechos humanos y no respondía cabalmente a las necesidades básicas de la población. Pero en esa época resultaba muy difícil mantenerse en esa línea, manteniendo la neutralidad y a su vez denunciando a ambos lados.

2.16.5.4. Respuestas a la muerte de María Elena Moyano: entre la indignación y el miedo

En tiempos tan difíciles como esos, la gente cree que todos roban—todos, incluso dirigentes populares como María Elena. (dirigenta de la FEPOMUVES, marzo de 1994).

Luego de la muerte de María Elena Moyano, hubo una procesión funeraria masiva en VES que fue señalado por muchos como muestra del rechazo popular al PCP-SL. Ciertamente numerosos dirigentes indignados por el brutal asesinato de Moyano participaron en el acto a pesar del clima de miedo y terror que se acrecentaba en VES.

Sin embargo, numerosos observadores señalaron también que la participación de dirigentes y pobladores de VES fue reducida, y que la mayoría de los que participaron en el evento llegaron de fuera; de hecho varias personalidades y dirigentes nacionales se hicieron presentes, incluyendo el ex-presidente Fernando Belaunde Terry. Durante los días y semanas posteriores, se hizo más que evidente que el objetivo principal de el PCP-SL al asesinar a Moyano había sido logrado: generar

³³ «Si el pueblo no ha respondido hasta ahora [a el PCP-SL] es porque no hay confianza. ¡Se han violado tantos derechos humanos! Se ha asesinado a jóvenes, se hecho desaparecer a jóvenes. Ahí tenemos el caso ocurrido en Villa El Salvador, el de la desaparición de un joven estudiante [Ernesto Castillo Páez, estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, quien desapareció luego de ser detenido por un patrullero de la policía en el segundo sector de Villa El Salvador el 27 de octubre de 1990]. Entonces el pueblo no ha podido responder porque adónde va a ir, si no hay confianza en este Estado ni en sus fuerzas armadas». María Elena Moyano citada en Miloslavich Tupac (1993), p. 59.

³⁴ Entrevista, diciembre de 2002.

miedo e inhibir cualquier acto de resistencia en VES (y en el país en general) ante su supuesto «equilibrio estratégico». Las dirigentas de FEPOMUVES se replegaron por presión de sus familias y por miedo de ser las próximas víctimas. Y frente a ese repliegue, dirigentes aparentemente cercanas al PCP-SL tomaron las riendas de la organización femenina.

Los testimonios recogidos sugieren dos interpretaciones y reacciones que no son necesariamente contradictorias, sino que muestran la complejidad de la situación. Por un lado, el asesinato de María Elena Moyano generó rechazo a nivel de los dirigentes nacionales y locales que ya habían definido una posición en contra del PCP-SL y sus actos violentos. También hizo que algunos dirigentes y pobladores que vieron al PCP-SL con cierta simpatía cambiaran de opinión. Un entrevistado afirma, por ejemplo, cómo su padre, un dirigente sindical de construcción civil que mostraba una actitud de simpatía con PCP-SL, cambia de opinión al enterarse del asesinato de María Elena Moyano: ‘Eso está mal’, dijo. ‘Se han equivocado... No es posible que maten al pueblo’.³⁵

A su vez; sin embargo, ciertos sectores vieron con cierto nivel de aprobación el «castigo» que María Elena Moyano había recibido por parte del PCP-SL. Las acusaciones de favoritismo político, de corrupción, y de haberse alejado de las bases fueron citadas como elementos que «justificaron» el atentado en contra de ella. En ese contexto, el trabajo que el PCP-SL venía realizando a nivel de base dentro de la FEPOMUVES se hizo evidente. Como lo señala una alta dirigente de la FEPOMUVES en aquella época:

Sentía una desarticulación [en la organización]. Sentía una especie de malestar en algunas bases, de cuestionamiento de María Elena, y que ese cuestionamiento después de la muerte de María Elena sale justificado en los panfletos [de el PCP-SL] como corrupta, entonces una base cuando hace cuestionamiento de esa manera que ella es corrupta y está haciendo una corrupción, entonces no puedo pensar que fue, que ellos [el PCP-SL] estaban infiltrados en nuestra organización, sería una desestabilidad por ese lado y por otro lado pues creaba un desconcierto entre unas y otras, se creaba un clima de desconcierto de querer alejarse de las cosas. ...En ese momento no sentí que esas personas estaban infiltradas y yo pensé que era el miedo, el temor que nos hace sentir y por eso accionamos así, pero no era miedo. Bueno las dirigentes comenzaron a dudar, de tener desconfianza las unas a las otras porque sentíamos de que cualquiera podía ser [senderista] y esto llevaba a que nos separáramos. A veces sentíamos una frustración, una impotencia y en nuestras bases se sentía bastante temor, cerraban los comedores, los comités del vaso de leche, ya no querían apoyar o a veces la dirigente simplemente renunciaba porque sus esposos les decían que no.³⁶

A su vez, el PCP-SL buscó aprovechar la situación de tensión y conflicto en el manejo de las donaciones, colocándose como defensor y agente fiscalizador:

Yo era dirigente de la central [del vaso de leche] y encapuchados [los senderistas] iban a los Comités del Vaso de Leche a destaparles las ollas, «esto es lo que sirven, esto es lo que dan, cuánto dan», o sea un carácter de fiscalización. Yo a mis dirigentas de mi central...

³⁵ Entrevista realizada en junio de 1994.

³⁶ Entrevista realizada en diciembre de 2002.

acordamos poner un papelógrafo grande y digan «cuánto reciben, cuanto reparten a cada grupo y en los comités de base en los que preparan, cuánta avena, cuanta leche diaria», yo les decía «no les cierren [a los senderistas] la puerta, ábranles la puerta y díganle que revisen todas las ollas, que no hay problema, que no tenemos miedo de decir la verdad y de recibir lo que recibimos» y preguntaban por las dirigentes... bueno si dicen que luchan por el pueblo que nos van a hacer a nosotras, si se creen los fiscalizadores aquí está, démosle las cuentas, ábranles las puertas, enséñenles las ollas, enséñenles los víveres, dónde están.³⁷

A nivel local, las acusaciones de corrupción eran aceptadas como verdad aunque no existía prueba alguna. Para muchos, cuando el PCP-SL decía que «sancionaba» a dirigentes supuestamente corruptos, era aceptado como una suerte de justicia. El contexto de extrema pobreza alimentaba la desconfianza y la suspicacia hacia los líderes y a quienes tienen acceso a recursos y niveles de poder. El PCP-SL buscó exacerbar tal clima de sospecha y desconfianza para quebrar la relación entre los dirigentes y sus bases, fragmentado de esa forma la organización autónoma de los pobladores.

Poco después de la muerte de María Elena Moyano, la presidenta de la FEPOMUVES, Ester Flores, sufrió un colapso nervioso y salió del país. Según ella, parte de su decisión de alejarse tuvo que ver con la forma en que los medios de comunicación buscaron levantarle una imagen de sucesora de María Elena Moyano, identificándola como la que seguiría liderando la resistencia al PCP-SL:

Yo estuve muy desconcertada, muy dolida por la muerte de María Elena por la forma como se llevó y yo sentía que a pesar de eso yo continuaba trabajando con mucha dificultad pero continuaba pero que había una presión muy, muy fuerte de parte de mi familia, psicológicamente mis hijos se traumatizaron. Los periódicos sensacionalistas tomaron mi nombre y dijeron que yo era la futura [dirigenta] que se iba a enfrentar a el PCP-SL y que sería la próxima víctima y sacaron un reportaje diciendo que yo públicamente denunciaba a el PCP-SL, cosa que nunca lo había hecho, cosa que no lo había hablado con ningún periodista y que yo pedía que se me apoye con seguridad y tales cosas porque ellos me estaban acechando.³⁸

Flores también señaló cómo las fuerzas de seguridad —lejos de prestarle seguridad como se pretendía— fueron un factor de mayor inseguridad para ella y contribuyeron a su decisión de retirarse del país:

Un día cuando bajé de una reunión hacia mi casa encontré un tanque y dos policías en mi casa y yo no entendía porqué y me dijeron que era simplemente la seguridad, que el Estado había mandado. Mis hijos estaban desesperados y al ver eso, y creo que el PCP-SL optó por explotar una bomba un poco más allá de mi casa, entonces seguramente ellos creyeron que yo los iba a denunciar o había pedido [protección del Estado] pero no, yo no he pedido, simplemente me lo mandaron y por eso mi padre dijo, «qué están haciendo acá, están haciendo crear más problemas en mi casa», y ellos le respondieron que «no tenemos nada que ver» y se plantaron ahí. Entonces cuando vi en el periódico...mi cara y mis [supuestas]

³⁷ Entrevista, diciembre de 2002.

³⁸ Entrevista personal a Ester Flores, 14 de diciembre de 2002.

declaraciones [en contra del PCP-SL] me quedé paralizada... Fueron esos motivos, más que mi crisis emocional, [que me llevó a optar] por salir del país al Uruguay.³⁹

Muchas otras dirigentes renunciaron a sus cargos, mientras otras seguían trabajando pero evitaban todo discurso político. En ese sentido, el PCP-SL había logrado un objetivo clave para sus fines: el descabezamiento y la desarticulación de la FEPOMUVES.

En ese contexto de vacío dirigencial, la vice-presidenta, Pilar Anchita, asumió el cargo de presidenta de la organización. Anchita ya había sido señalada públicamente como «filo-senderista», como una persona que tenía simpatía por el PCP-SL pero que no necesariamente era un militante de dicha organización. Según una dirigente de la Federación de Mujeres, a pesar de la cercanía y amistad que antes compartían María Elena Moyano y Pilar Anchita:

Cuando empieza la violencia y María Elena todavía estaba viva, ella [Anchita] la cuestionaba, ella la cuestionaba completamente y yo no entendía por qué, pensé que eran celos. María Elena me decía que no le hiciera caso, María Elena nunca me dijo, ella me decía simplemente ella lo sabe porque. Ella [Anchita] actuó un tiempo acá como una fiscalizadora muy radical y cuando ya María Elena estuvo muy amenazada ella se alejó de nosotras pero sin embargo accionaba, infundiendo temor, infundiendo una cosa y lo que he visto en ella es el desprestigio constante contra María Elena, así sin piedad.⁴⁰

Anchita niega toda afiliación con el grupo maoísta, y explica que debido a su origen ayacuchano y su cuestionamiento a María Elena Moyano y a otras dirigentes por actos de corrupción y clientelismo político fue acusada de terrorista.⁴¹ (Estas acusaciones fueron hechas públicas en varios medios de comunicación durante 1992 y 1993.) Anchita fue detenida en 1997 y liberada por falta de pruebas pocos meses después.

2.16.5.5. Los comedores populares: ¿amortiguadores del sistema o potenciales bases de apoyo?

Para esa época hubo un cambio importante en el discurso senderista acerca del papel de los comedores populares. A finales de los años ochenta, *El Diario* criticaba tajantemente a los comedores populares y al programa del vaso de leche como los «amortiguadores» del sistema dominante, que inhibían la «conciencia revolucionaria» del pueblo. Según declaró el propio Abimael Guzmán en la llamada «entrevista del siglo» publicada en *El Diario* en 1988, estas organizaciones «venderí[an] la revolución por un plato de frejoles».⁴² Ya para inicio de los años noventa, el PCP-SL dijo que no estaba en contra de estas organizaciones sino de los «dirigentes corruptos» que se habían «vendido». Resulta instructivo comparar dos citas de *El Diario*, una de

³⁹ Entrevista personal a Ester Flores, 14 de diciembre de 2002.

⁴⁰ Entrevista personal, diciembre de 2002.

⁴¹ Entrevista personal, diciembre de 2002.

⁴² *El Diario*, 1988.

1989 y la segunda de 1992, que ilustran este giro en la actitud senderista hacia los comedores populares:

[L]a denominada autogestión, tesis del más recalcitrante revisionismo, aplicado en nuestro país, específicamente por la IU con el propósito de hacer que las masas no combatan a este Estado terrateniente burocrático y más bien se conformen con paliativos dentro del sistema para dizque, solucionar sus problemas. ...Lo mismo ocurre con los «comedores populares» y «vasos de leche», es decir, hacer que la masa, realizando trabajo gratuito, se conforme con recibir dádivas del «centro de ayuda», [sic. las ONGDs] verdaderas agencias del imperialismo y no luche por sus derechos.⁴³

El PCP no está en contra de los «comedores populares», el «vaso de leche» y los «clubes de madres», como malignamente vociferan el genocida vendepatria Fujimori, AP, APRA, IU, MAS, PUM, IS, UDP, MRTA y toda la prensa reaccionaria. Pero sí estamos en contra de aquellos contrarrevolucionarios que salen en defensa del viejo Estado y su orden de explotación y opresión... Estamos en contra de aquellos que trafican con las reivindicaciones populares... Estamos en contra de aquellos que quieren hacernos eternamente pobres para eternamente recibir «caridad», «lástima», «ayuda» y «filantropía» de los ricos del país y el extranjero a través del [sic] ONGs los que sólo entregan migajas y deshechos de las grandes riquezas que extraen de la sangre y sudor de nuestro pueblo.⁴⁴

De este modo, el PCP-SL no sólo buscaba controlar a la Federación a nivel de la dirigencia, sino también ganar simpatizantes entre las bases, aprovechando los conflictos existentes dentro de la organización. El PCP-SL buscaba aprovechar los conflictos existentes y agitar sobre ellos para ganar espacio y copar las dirigencias. Temas tales como los estilos de liderazgo —mayor o menor nivel de autoritarismo, de marginalización a otros dirigentes, de manipulación y clientelismo política, de favoritismo— y el manejo de los recursos y de las donaciones recibidas fueron utilizados para esos fines. En particular, explotaba el tema del manejo de los recursos y la corrupción en organizaciones como la FEPOMUVES, ya que en general carecían de mecanismo claros de control de los recursos y la administración. En general, la literatura sobre comedores populares y otras organizaciones populares tiende a no reconocer estos problemas, pero algunos estudios sugieren que en el caso de las organizaciones femeninas existía una debilidad institucional que creaba la oportunidad para que las prácticas de corrupción, favoritismo y clientelismo florecieran.⁴⁵ Esto fue indudablemente exacerbado por el contexto de crisis económica, que incrementó las sospechas de aquellos que, como los dirigentes populares, miembros de los gobiernos locales y activistas de las ONGs, contaban con acceso a recursos.⁴⁶

2.16.5.6. Las repercusiones de la muerte de María Elena Moyano en VES

⁴³ *El Diario*, No. 551, 1989.

⁴⁴ *El Diario*, No. 620, 1992.

⁴⁵ Véase, por ejemplo, a Delpino (1991).

⁴⁶ Véase a López Ricci (1993) y Burt y Espejo (1995).

La muerte de María Elena Moyano tuvo fuertes repercusiones en todo el distrito. La Mesa por la Paz y Desarrollo se desarticuló, aunque Johnny Rodríguez y sus aliados cercanos continuaron denunciando al PCP-SL y a los grupos dentro de VES cercanos a ellos. Criticaban en particular a la dirigencia de la CUAVES por su supuesta «complicidad» con el PCP-SL y por su negativa en denunciar el asesinato de María Elena Moyano.

En una entrevista a la revista *Sí*, el entonces secretario general de la CUAVES, Filadelfo Roa, acusó a Michel Azcueta de ser el responsable de la muerte de María Elena Moyano por haberla «manipulado».⁴⁷ Esta declaración y otras de la dirigencia de la CUAVES, que criticaban a la autoridad municipal en términos sumamente parecidos a los utilizados por PCP-SL, hizo a muchos sospechar una suerte de alianza entre algunos sectores ligados a la CUAVES y el PCP-SL para enfrentar a la IU y el gobierno municipal.

Esta alianza táctica parecía evidente poco después de la muerte de María Elena Moyano. En marzo de 1992, el comité ejecutivo de la CUAVES y el «Comité de Lucha Distrital» -un grupo de fachada senderista- movilizaron a cientos de personas en una protesta contra el gobierno municipal. Exigieron la destitución de Johnny Rodríguez como alcalde «por promover la militarización de Villa El Salvador» (en referencia a la base militar establecida en Pachacamac luego del asesinato de Moyano); también demandaron que se declarara *persona no grata* a Michel Azcueta. El contingente más grande era de Pachacamac, donde el PCP-SL había sentado su presencia al agitar sobre otro conflicto pre-existente: la tenencia de terrenos. Desde Pachacamac, PCP-SL no sólo buscó establecer una suerte de «zona liberada», sino también buscó copar cargos dirigenciales en los distintos grupos residenciales, sobre todo en las zonas periféricas del distrito, para luego poder infiltrar a la CUAVES y, en general, consolidar su presencia en VES.

2.16.6. Pachacamac: levantando las reivindicaciones de la población

Pachacamac era el cuarto sector de VES (ver mapa). Parte del sector había sido tomado por el gobierno de Fernando Belaunde (1980-85) para crear una zona urbana distinta al patrón urbano del resto de VES. El gobierno construyó varios conjuntos habitacionales, pero nunca fueron adjudicados y se quedaron abandonados hasta 1989, cuando diferentes grupos movilizaron invasiones para apropiarse de los terrenos.

Según varios observadores y participantes en este proceso, militantes del PCP-SL estuvieron presentes en estas invasiones, sobre todo en ciertas zonas nuevas y muy pobres de Pachacamac, donde lograron copar dirigencias y crear «comités de apoyo». Pachacamac fue visto por el PCP-SL como una zona de refugio y entrenamiento. Según varios entrevistados, los

⁴⁷ *Sí*, 6 de abril de 1992.

senderistas llegaron a realizar marchas y ejercicios militares en esta zona en la madrugada o hacia el anochecer.

Para extender sus bases de apoyo, el PCP-SL buscó canalizar las reivindicaciones de la población, específicamente el reclamo de los invasores recientes por títulos de propiedad de los terrenos que habían invadido. Utilizando el tema de los títulos de propiedad, el PCP-SL no sólo ganó simpatía entre los pobladores, sino también logró establecer un nivel importante de control sobre los mismos, como señala un dirigente político y ex-regidor de VES:

Hay un mecanismo de coacción. El que no va a las reuniones y no cumple le declaran en blanco el lote y se van, entonces ahí hay un mecanismo de coacción que es muy eficaz, por ejemplo en las marchas toman listas, dos o tres faltas y lo sacan del lote, entonces ellos [el PCP-SL] llegan a mantener ese control.⁴⁸

El nivel de control ejercido por el PCP-SL en Pachacamac se hizo evidente unos meses más tarde, cuando, a través del nivel de influencia que ejercían sobre los dirigentes de Pachacamac, y haciendo alianzas con grupos de dirigentes dentro de la CUAVES, el PCP-SL logró copar la Sexta Convención de la CUAVES en agosto de 1992.

La situación sobre la adjudicación de los lotes seguía sin solucionarse cuando ocurrió el asesinato de María Elena Moyano el 15 de febrero de 1992. A raíz de ello, el Ejército Peruano estableció una base militar en Pachacamac. Esto despertó el miedo de los pobladores a una represión indiscriminada en su contra; miedo aprovechado y azuzado por PCP-SL. Lograron convencer a muchos en la zona de que el alcalde habría invitado al Ejército a Pachacamac para expulsarlos de sus terrenos, y logró movilizar una marcha masiva a la sede del gobierno municipal, denunciando al alcalde y la supuesta «militarización» de VES. Esta marcha hizo evidente el trabajo político de base realizado por el PCP-SL en Pachacamac. Ante ello, los dirigentes municipales intentaron ir a Pachacamac para sentar su presencia y retar a PCP-SL, pero fueron atacados a balazos y tuvieron que huir de la zona.

La presencia del Ejército en VES y el mayor despliegue de agentes de seguridad y de inteligencia, así como el incremento del avance senderista y su violencia contra dirigentes de la zona, acrecentó el temor entre la población. Muchos activistas de base comenzaron a alejarse de la vida pública y evitaron participar en cualquier actividad que pudiera comprometerlos. A eso contribuyó también el golpe del 5 de abril de 1992, mediante el cual el presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso y suspendió la Constitución con el apoyo de las fuerzas militares.

Unos días después del 5 de abril, PCP-SL lanzó una fuerte ofensiva en Lima. Un potente ómnibus-bomba fue lanzado contra la fachada de la municipalidad de VES, destruyendo parte de ella, así como la comisaría, el Centro de Comunicación Popular —una ONG creada por Azcueta

⁴⁸ Entrevista, diciembre de 2002.

para promover la educación popular— y decenas de casas colindantes. Un oficial de la policía murió en el atentado y varios otros resultaron heridos.

2.16.7. La batalla por la CUAVES

El nivel de influencia que había logrado tener PCP-SL en VES era cada vez más evidente, pero el control que ejerció sobre la VI Convención de la CUAVES, realizada a finales de agosto de 1992, sorprendió a todos los observadores.

Tanto PCP-SL como el MRTA habían realizado actos «de presencia» durante reuniones de la Asamblea General de la CUAVES entre 1989 y 1991, según confirman varios entrevistados. Pero el nivel de influencia del PCP-SL dentro de la CUAVES no se hizo evidente sino hasta 1991, cuando un sector de dirigentes —muchos de ellos simpatizantes con el MRTA— forjaron una alianza táctica con los dirigentes simpatizantes con el PCP-SL para remover al secretario general de la organización, Roque Quispe.

Quispe, un militante de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), había sido elegido secretario general de la CUAVES con el respaldo de los dirigentes vinculados al PMR, el partido de Azcueta y el alcalde en aquel entonces, Johny Rodríguez. A pesar de que el MRTA y el PCP-SL disputaban el control de la CUAVES entre sí, primero buscaron sacar a Quispe de su cargo.

La manera cómo lograron remover a Quispe es bastante instructiva, ya que muestra cómo el PCP-SL buscó montarse sobre las reivindicaciones populares para lograr sus propios fines. En una asamblea de la CUAVES en 1991, el gobierno municipal presentó una propuesta sobre las prioridades de inversión del impuesto predial, o autovalúo, que se cobraría en aquel año. En esta reunión, los grupos radicales —los «cuavistas», con el apoyo implícito de los dirigentes del MRTA y del PCP-SL— presentaron una moción afirmando que dada la situación económica el municipio no debería cobrar el impuesto. Los dirigentes del UNIR y PMR argumentaron que una ley nacional amparaba el cobro del impuesto y que la reunión trataba únicamente de decidir las prioridades de inversión de los impuestos recaudados. Además, argumentaron, que el impuesto sería escalonado según el tipo de vivienda, lo cual significaba que las familias más pobres pagarían menos impuestos que las familias mejor situadas. Sin embargo, en un contexto de hiperinflación, estancamiento económico y caída real de los salarios, la propuesta de los grupos radicales de no cobrar el impuesto predial se hizo popular entre muchos dirigentes que participaban en la asamblea, muchos de los cuales no tenían vínculo alguno con los grupos radicales ni con los grupos alzados en armas. La propuesta del no pago al autovalúo fue aprobada. Los grupos radicales habían logrado

cambiar la agenda de la reunión —discutir las prioridades de inversión del autovalúo— a una que efectivamente desconocía el poder del municipio.

El alcalde, Johny Rodríguez, se reunió con Quispe, y se acordó volver a llevar a consulta la propuesta municipal. En la nueva votación, se desconoció el voto anterior, y se aprobó una escala de pagos mínima. Una semana después, los sectores que encabezaron la propuesta del no pago al autovalúo, liderados por Filadelfo Roa, subsecretario de la CUAVES, convocaron a una asamblea de dirigentes para destituir a Quispe por haber desconocido una votación de la asamblea. Lograron su fin: mediante votación se destituyó a Quispe de su cargo, y Roa asumió el cargo de secretario general de la CUAVES.

Para los dirigentes cercanos al municipio, este episodio demostró la colusión de Roa y sus aliados con el PCP-SL. Cuando, luego del asesinato a María Elena Moyano, Roa se rehusó a firmar un documento denunciando su muerte, confirmó para aquellos que había establecido una alianza con el PCP-SL para sus propios fines.

2.16.7.1. El conflicto CUAVES-Municipio

Para entender cómo la violencia política se sobrepuso a conflictos ya existentes dentro de VES, es importante comprender el trasfondo de esta situación; principalmente, el conflicto entre el municipio y la CUAVES, así como entre los grupos de izquierda vinculados con cada institución. Efectivamente, algunos grupos aprovecharon el contexto de miedo y consternación por la violencia para avanzar sus intereses políticos y personales, estableciendo alianzas con el MRTA y con el PCP-SL para enfrentar al municipio.

Desde el momento de la creación del gobierno municipal, existían fuertes tensiones entre los dirigentes de izquierda conocidos como la «corriente cuavista» y el sector de izquierda articulado en torno a la figura de Michel Azcueta, que participaba en la IU y que buscó asentar su poder a través del municipio.⁴⁹

Cuando se formó el gobierno municipal, los cuavistas temían que éste no respetara la autonomía de la CUAVES y su papel como la principal organización comunal de Villa El Salvador. El primer acto de gobierno de Michel Azcueta al asumir la alcaldía en 1984, fue firmar el «Acta de Compromiso» entre el municipio y la CUAVES, el cual estableció el principio de que «ley comunal es ley municipal», estableciendo así —al menos en teoría— que el municipio no sólo respetaría la autonomía de la CUAVES sino que reconocería los acuerdos tomados por esta organización.

Sin embargo, los dirigentes vinculados con el sector cuavista sintieron pronto que el gobierno municipal no respetó tal acuerdo y que buscó hegemonizar el poder en el distrito a costa

⁴⁹ Véase a Tuesta (1989) para una detallada descripción de la rivalidad entre la CUAVES y el gobierno municipal.

de la organización comunal. Este conflicto tuvo sus raíces en la misma creación del municipio, el cual fue apoyado por la mayoría de los grupos de izquierda aglutinados en IU, pero rechazado por algunos dirigentes de la CUAVES. Como señalara un dirigente alto de la CUAVES:

Nosotros en la CUAVES nos opusimos a la distritalización de Villa, los cuavistas nunca estuvieron de acuerdo a que Villa El Salvador fuera un distrito... por que no queríamos que parte de la estructura del estado estuviera en nuestras propias casas, porque irrumpía y entorpecía el proceso de desarrollo político. ...Nosotros el temor que teníamos [al formarse el gobierno municipal] es que nos vaya a sobrepasar, que nos vaya a imponer, que nos vaya dominar. Entonces nosotros qué queríamos... considerábamos que la comunidad en su conjunto con su sabiduría, como la madre de familia tiene dos hijos y a cada hijo le da una diferente especialización para hacer la misma cosa, velar por sus intereses de madre, entonces elige una autoridad municipal para que maneje el eje, para que maneje el presupuesto, pero también elige un dirigente vecinal para que custodie intereses y para que se de una democracia y para que haya una dinámica constante, pero que esos dos son para que pasen igual, para que se pongan de acuerdo. Uno va poniendo lo legal, lo formal; el otro va poniendo lo popular y todo es fuerza popular... [N]inguno de los dos pudiera estar al margen del otro, tomando decisiones de cualquier naturaleza, de cualquier proyecto o programas que hayan acuerdos, no?, para aprovechar los pocos recursos que se puedan tener, aprovechar lo mejor... Entonces ese es el primer acto que se hace con el acta de compromiso [entre el gobierno municipal y la CUAVES]. Lamentablemente el compañero Michel [Azcueta] no la respetó acá. Sin embargo fue una carta de presentación para fuera. La publicitó enormemente «Yo tengo muchos documentos que me han hecho llegar un amigo de afuera donde habla maravillas; sin embargo, acá nunca respetó esa acta y nunca concertó con los dirigentes». Entonces vino de ahí un enfrentamiento lamentablemente porque la Izquierda se cerró mucho en parte de la estructura del Estado, de la municipalidad, quiso potenciar mucho al municipio y eso debilitó [a la CUAVES].

Había una diferencia conceptual entre quienes que se alinearon con la visión de los dirigentes «cuavistas», que se opusieron a que la izquierda trabaje desde el Estado buscando trabajar únicamente desde las organizaciones sociales, y quienes optaron por trabajar «dentro» del sistema, participando en elecciones y en el gobierno municipal. Pero había también una disputa política por el poder en el distrito, que a través del tiempo se convirtió en una pelea personal entre los dirigentes máximos de cada sector. Efectivamente, desde mediados de los años ochenta, los «cuavistas» consideraban que los dirigentes de IU en el municipio buscaban hegemonizar el espacio político en el distrito a costa de la autonomía de las organizaciones.

Por su lado, los militantes y líderes de IU comenzaron a ver a la CUAVES como una organización congelada en el tiempo. Desde el municipio, la IU apoyó la formación de nuevas organizaciones sociales en VES como la FEPOMUVES, la APEMIVES y la Coordinadora Juvenil. Sus esfuerzos de integrarlos a la CUAVES exacerbaron las tensiones con las cuavistas, para quienes tal propuesta representaba una desfiguración de la organización comunal dirigida a usurpar su espacio político. Para los dirigentes de la IU, la negativa de estos sectores de la CUAVES de incorporar las nuevas organizaciones sociales evidenciaba la poca disposición de esta organización de abrirse a las nuevas demandas de la sociedad.

De esa manera, los conflictos entre la CUAVES y el gobierno municipal sobre cuestiones de poder, proyectos sociales y políticos, manejo de recursos, así como rivalidades políticas y personales, fueron acrecentándose a lo largo de los años ochenta.

2.16.7.2. El MRTA y PCP-SL disputan el control de la CUAVES

En la medida que el poder de la IU se iba consolidando en el distrito desde el municipio, la brecha entre los dos grupos políticos —los izquierdistas independientes agrupados en la CUAVES y los izquierdistas de la IU— así como entre las dos instituciones —la CUAVES y el municipio— se fue acrecentando. Utilizando esa brecha, los grupos alzados en armas buscaron establecer alianzas con los sectores radicalizados de la CUAVES, para formar un frente común contra la IU y el municipio.

Según un dirigente del sector cuavista que simpatizaba con el MRTA, los dirigentes de izquierda no vinculados a los partidos políticos se sentían aislados, y cuando tanto el MRTA como el PCP-SL comienzan a buscarlos, vieron la posibilidad de ganar aliados poderosos en su antigua lucha en contra de la IU y el gobierno municipal; otros sintieron que podían avanzar sus objetivos personales y políticos con una alianza con esos grupos. Como manifiesta este dirigente:

Los otros dirigentes, los que no tienen partidos entonces ¿que hacen allí? Te encuentras con el PCP-SL o te encuentras con el MRTA, son los únicos que te pueden respaldar, te pueden apoyar, que te escuchan, pero sabes que tu en algún momento eres un tonto útil por que a lo mejor te están aprovechando al acercarte pero no para impulsarte a ti como líder salvo que te conquisten y te capten, si no te están utilizando y en esos momentos comienza la lucha entre esos dos por querer copar la CUAVES.⁵⁰

A su vez, sin embargo, hubo dirigentes que efectivamente simpatizaron con el MRTA, tal como afirmó uno de ellos:

Yo mostraba siempre una simpatía por el MRTA, con quien nunca he tenido confrontaciones muy fuertes... [Y]o conozco mucha gente que abiertamente podía decir, «bueno pues, yo respaldo esto, por esto». Son frustraciones históricas que al final en un momento dado con un grupo tal, dices, «con esos puede haber soluciones».⁵¹

Una joven que trabajaba cerca a la CUAVES y que militó en el Bloque Popular Revolucionario también contó de su simpatía hacia el MRTA:

Por supuesto, la CUAVES nace como un proyecto socialista en sí, y yo creo que a diferencia de PCP-SL, el MRTA hizo suyo el proyecto de la CUAVES, el de poder popular, a diferencia del PCP-SL que quiso hegemonizar la CUAVES como un punto de referencia de repente a su trabajo. A el PCP-SL no le importaba si la CUAVES como proyecto seguía, a diferencia del MRTA que si apostaba por ejercer la CUAVES como el proyecto mismo de ellos y ellos si participaban en el quehacer diario de la CUAVES como

⁵⁰ Entrevista, diciembre de 2002.

⁵¹ Entrevista, diciembre de 2002.

también lo hacía la gente de Izquierda Unida con el mismo proyecto también, pero de repente las formas que utilizaron fueron distintas porque ya en los años 90 tanto el MRTA como el PCP-SL hacían presencia en las asambleas, ellos entraban a las asambleas encapuchados, repartían, daban su mensaje y yo pienso que fue así que el MRTA respetó la organización siempre, a diferencia de el PCP-SL que sí el PCP-SL atropellaba y pienso que ellos apostaban al proyecto de la CUAVES a diferencia de el PCP-SL que no.

Sobre todo yo he admirado el respeto que tuvieron [el MRTA] a la organización, el respeto que tuvieron al espacio vecinal y el apostar también por el proyecto de CUAVES es lo que de repente me ganó la admiración. Porque conocí también mucha gente y compartí de repente en algunos momentos que era gente preparada, no era gente común, no era gente cegada, era gente con la cual tu podías conversar y te abrían de repente la visión de las cosas, no era gente que te imponía su idea, era gente que te escuchaba y que a la vez tu podías compartir un momento de conversación, por eso de repente y como repito la manera como actuaron, si bien es cierto después en el distrito hubo algunos atentados que se les atribuyeron y que no fueron de mi agrado, recuerdo que en esa época en el 1991 mataron a un dirigente que se apellidaba ... Sosa creo que era, con esas cosas claro yo nunca compartí.⁵²

Efectivamente, algunos dirigentes dentro de la CUAVES optaron por formar una suerte de alianza táctica con el PCP-SL y con el MRTA para hacer un frente «unido» contra un enemigo que tenían en común: la izquierda legal que venía manejando el gobierno municipal desde hace una década. Algunos por pragmatismo, y otros por convencimiento, establecieron una alianza bajo la noción de que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». El PCP-SL fue hábil —y sumamente pragmático— en canalizar el resentimiento de algunos grupos descontentos que podrían promover sus objetivos de largo plazo

2.16.7.3. La toma de la CUAVES

La Sexta Convención de la CUAVES, realizada en agosto de 1992, fue esencialmente copada por el PCP-SL, tal como se demuestra al leer el documento final de esa reunión.⁵³ Este documento ataca abiertamente a la municipalidad como parte del «Estado podrido y caduco», exigiendo su desactivación. Exige además el retiro de las Fuerzas Armadas de VES, y de las rondas urbanas, las ONGs y ciertas empresas privadas, así como la derogación del impuesto predial. Demanda también que toda asistencia técnica y financiera de la cooperación internacional fuese canalizada a través de la CUAVES, por ser la organización más representativa de la comunidad. De acuerdo a algunos entrevistados, el borrador inicial incluía una lista de nombres de varios dirigentes a ser «liquidados», pero esta lista no fue incluida en el documento final. Menos de la mitad de los 500 delegados que normalmente participan en las convenciones de la CUAVES participaron; algunos no lo hicieron por miedo, mientras que los delegados ligados al PMR, el MAS y el PUM se abstuvieron de participar para no darle legitimidad, argumentando que el PCP-SL había tomado control de la CUAVES y que la Convención estaba siendo manipulada por ellos.

⁵² Entrevista, diciembre de 2002. Se refiere al asesinato a Andrés Sosa, dirigente del Bloque Pouplar Revolucionario, supuestamente asesinado por un comando del MRTA el 24 de enero de 1992 en VES.

⁵³ «Acuerdos de la VI Convención de la CUAVES», mimeo, 30 de agosto de 1992.

Concluida la Sexta Convención, el gobierno municipal denunció públicamente a la dirigencia de la CUAVES acusándola de estar coludida con el PCP-SL, y rehusó reconocer la legitimidad de la Convención y de la dirigencia de la CUAVES.⁵⁴ A su vez, unos cuarenta miembros de base de la CUAVES emitieron un comunicado conjunto, señalando su negativa de reconocer la dirigencia de la organización comunal y su intención de renovar la organización desde las bases. Eso fue un acto de resistencia importante, ya que el PCP-SL había demostrado, con el asesinato de María Elena Moyano, que estaba dispuesta a matar a quienes se le oponían.

A pesar de este cuestionamiento a Sexta Convención, y de que la CUAVES había perdido el rol central que alguna vez jugó en VES, seguía siendo una referencia simbólicamente importante para el distrito. Por ello el copamiento de la CUAVES y de la Sexta Convención era una victoria significativa para el PCP-SL, la cual evidenciaba que había logrado un nivel importante de influencia dentro de VES y sus organizaciones. Esto repercutía no sólo dentro de VES sino también a nivel nacional, ya que demostraba cómo el PCP-SL iba extendiendo su influencia en las barriadas de Lima, y cómo lograba arrebatarle espacio político a la izquierda legal. También demostró que el PCP-SL no buscó liderar a organizaciones como la CUAVES, sino simplemente coparlas y destruirlas. Luego de la Sexta Convención, muchos dirigentes se replegaron por miedo a las represalias, no sólo de parte del PCP-SL sino también de las fuerzas del orden.

La Sexta Convención sucedió paralelamente al auge senderista en el Parque Industrial. Luego de la elección de Huarcaya como presidente de la APEMIVES, la cooperación internacional cortó sus programas de asistencia técnica y financiera con el Parque. El gobierno también se retiró, dejando que todo el proyecto colapsara. Sin embargo, PCP-SL había alcanzado sus objetivos en ambos casos. Demostraron que eran más hábiles en el nivel de la política de lo que se imaginaba, ya que lograron forjar alianzas con ciertos grupos, lo que les permitía ejercitar influencia en ambas organizaciones. Pero tanto en el caso de la CUAVES como la APEMIVES (y la FEPOMUVES), el objetivo de el PCP-SL no era tomar el control directo de estas organizaciones, sino infiltrarlas y utilizarlas para sus propios fines: destruir el proyecto izquierdista de autogestión que estas organizaciones representaban, ampliar su influencia en el distrito y, finalmente, provocar la represión militar para obligar a la población a tomar posición en su favor. En su lógica de «profundizar las contradicciones», el PCP-SL buscó agudizar los conflictos sociales y así generar mayor polarización para acelerar el supuesto triunfo de su «guerra popular».

2.16.8. Captura de Abimael Guzmán y repliegue de PCP-SL en VES

El 12 de septiembre de 1992, el líder principal del PCP-SL, Abimael Guzmán, fue arrestado junto con otros altos dirigentes de la organización maoista. La sorpresiva captura de la dirigencia

⁵⁴ Véase el comunicado de prensa emitido por el gobierno municipal publicado en *Expreso* el 31 de agosto de 1992.

principal del PCP-SL produjo un cambio radical en el equilibrio de fuerzas, tanto a nivel nacional como en los contextos locales. En el caso de VES, PCP-SL siguió activo por varios meses luego de la captura de Guzmán. Pero luego de que éste llamara a sus seguidores a desistir de la lucha armada y buscar un acuerdo de paz, las actividades violentistas se redujeron drásticamente. El último acto de violencia política registrada en el distrito tuvo lugar el 4 de febrero de 1997, cuando tres supuestos senderistas dispararon contra un efectivo de la PNP, que fue herido pero no murió.

Durante septiembre de 1992 y finales de 1993, sin embargo, el PCP-SL siguió actuando bajo los mismos patrones que antes de la captura de Guzmán. En particular, en el contexto de las elecciones locales de 1993, continuó con su estrategia de crear «vacíos de poder», al asesinar a dos candidatos a la alcaldía, Rolando Galindo y A. Pantigoso, el 11 y 28 de enero, respectivamente.

Galindo, miembro del PCP-Unidad, reemplazó a María Elena Moyano como teniente alcalde de VES luego de su muerte. Un cartel encontrado junto a su cuerpo decía: «¡Abajo las elecciones! Viva el PCP!», lo cual llevó a muchos a sindicarlo a el PCP-SL como autor de su muerte. Sin embargo, algunos entrevistados mostraron dudas de que el PCP-SL haya sido el responsable de esta muerte. En el caso de Pantigoso, que fue acibillado en su domicilio junto a su esposa, G. León, podría haberse tratado de un «ajuste de cuentas» por parte del PCP-SL. Como recuerda un dirigente de VES:

[Pantigoso] era presidente de la Apafa [Asociación de padres de familia] del colegio República de Nicaragua y ahí parece que habían profesores de el PCP-SL... Él después comienza a criticar a los profesores, a cuestionar, no medía las consecuencias y en una ocasión le colgaron un perro muerto en la puerta del colegio... A mi no me quedó claro si era por candidato o por lo de la Apafa, a mí me parece que era lo segundo porque de ser candidato no se enteraba nadie. Además no era la primera vez que las cosas la solucionan así.⁵⁵

El asesinato de dos candidatos al gobierno municipal enrareció el clima político en VES. A ello contribuyeron dos ataques a la policía por parte del PCP-SL. El 29 de enero tres senderistas dispararon a un patrullero de la Policía Nacional; el 27 de febrero decenas de senderistas atacaron a la comisaría de VES con ráfagas de ametralladoras y explosivos.

El 17 de junio, el ex alcalde de VES, Michel Azcueta, resultó herido cuando un grupo de aniquilamiento del PCP-SL trató de asesinarlo en la puerta del colegio Fe y Alegría, donde era profesor. Resultaron heridos un policía miembro de su escolta, un amigo de Azcueta y cuatro escolares. Ocurrieron, asimismo, al menos cuatro intentos de asesinato a dirigentes vecinales y autoridades locales por parte de PCP-SL (incluyendo el intento de asesinar al teniente alcalde, César Soplín, el 26 de julio) pero todos fracasaron, una muestra quizá de la creciente dificultad que enfrentaba el grupo maoísta al actuar con su liderazgo principal en la cárcel, con el Estado a la ofensiva con el aura de invencibilidad destrozada.

⁵⁵ Entrevista, diciembre de 2002.

De igual importancia es la creciente evidencia de la poca durabilidad de la presencia senderista en VES. Con Guzmán en la cárcel y sus cuadros en repliegue, la naturaleza tentativa y superficial de las alianzas políticas senderistas en VES se hicieron evidentes. Al centrar su actuación política en VES en la radicalización de los reclamos populares (como la revindicación de los títulos de propiedad en Pachacamac, por ejemplo, o el no-pago al autovaluo), y la promoción de la confrontación y la polarización, el PCP-SL efectivamente pudo ganar espacios a nivel local, identificando los puntos débiles dentro de los contextos específicos y explotándolos en provecho suyo, para establecer alianzas con grupos descontentos, generar simpatía al apoyar revindicaciones locales, y agudizar los conflictos pre-existentes.

2.16.9. Las secuelas de la violencia de origen político en VES

Unos nos trataban de terroristas, otros nos trataron como traidores. El dirigente se refugió en el silencio. [Dirigente de la CUAVES, diciembre de 2004]

Entre 1994 y 2000 la violencia política en VES disminuyó casi totalmente, registrándose sólo unos cuantos episodios de menor importancia (véase la cronología). Sin embargo, reflejando las tendencias a nivel nacional, se registra la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el distrito, a través de rastrillajes y las llamadas «acciones cívicas». A su vez, se registra la detención de varios dirigentes y pobladores por sus presuntos vínculos con la subversión.

Muchos de los entrevistados señalaron que una de las secuelas más importantes de la violencia política entre 1980 y 2000 fue el efecto desintegrador que tuvo la detención de decenas —o quizá cientos de personas y dirigentes— por supuestos vínculos con los grupos alzados en armas, lo cual afectó la organización social y política en el distrito. Los testimonios indican varios casos de dirigentes de izquierda que a pesar de no tener filiación con los grupos subversivos fueron detenidos, sufriendo largos años de prisión por haber sido falsamente acusados de terrorismo. De hecho hay varios casos de personas detenidas y convictas bajo la legislación antiterrorista que luego fueron liberadas por la Comisión Ad Hoc, la cual revisó los casos de supuestos inocentes. Durante estos años, la sensación compartida por casi todos fue que el miedo vivido durante esa época permanecía; a su vez, mucha gente decidió no participar en las organizaciones sociales. Según un dirigente y ex-regidor del municipio:

Yo creo que ha sido, no sé como explicártelo pero ha sido extenuante porque ha terminado agotando a muchos sectores de mi país, no solamente por el accionar de el PCP-SL sino muy claramente por lo menos visto del campo popular, quien ha tenido mucha responsabilidad han sido los gobiernos de turno, en el caso de Fujimori mas claramente, el interés muy claro de desarticular las organizaciones sociales, de corporativizar, de desarticular las organizaciones políticas y de parte de el PCP-SL también muy evidente el hecho de atacar a los dirigentes y buscar que copar las organizaciones para involucrarlas en sus actividades, me parece que para los sectores populares ha sido bastante extenuante, tanto así que bueno, primero que las organizaciones se han desarticulado en su

gran mayoría, ha habido un buen periodo y todavía se está en esto de ausencia de liderazgo y también de ausencia de participación. [diciembre de 2002]

Finalmente los entrevistados señalan cómo la violencia se ha vuelto un método comunmente aceptado por los pobladores para solucionar problemas, y que se ha ido manifestando en la creciente ola de violencia social (delincuencia común, asaltos, homicidios, etc.). Como señala una dirigente de la FEPOMUVES:

Creo que después de 10 años la gente se ha vuelto violenta. Los jóvenes se han vuelto sin esperanzas, violentos, donde todo es solamente crisis para ellos o para la gente. Se ha perdido los valores; antes VES era solidario. Todos los vecinos nos reuníamos para celebrar la navidad, nos apreciábamos entre los vecinos, nos dábamos la mano entre los vecinos. Ahora no, no les interesa, si tiene que hacerte daño por algo que necesitan simplemente te lo hacen y esta solidaridad de hace 10 años atrás ya se está perdiendo. [diciembre de 2002]

2.16.10. Conclusiones

El PCP-SL logró generar cierta simpatía, sobre todo en las zonas más marginales de VES, y especialmente donde el tejido social y político era relativamente débil, las necesidades básicas muy grandes y los pobladores no encontraban a quién acudir para solucionarlas. Como ocurrió en otras zonas del país, tanto urbanas como rurales, el PCP-SL se presentó como un justiciero local que castigaba a delincuentes, drogadictos y dirigentes corruptos, y dada la débil presencia del Estado y su incapacidad de asegurar la seguridad ciudadana en las barriadas, esto generó ciertos niveles simpatía con el PCP-SL.

Sin embargo, el PCP-SL no pudo consolidar esta simpatía. La violencia utilizado por los senderistas empezó a infundir mucho temor entre la población, debido a su agresividad y autoritarismo. El punto de tensión más grave fue la forma cobarde y brutal en que asesinaron a Maria Elena Moyano, el 15 de febrero de 1992. A su vez, el PCP-SL nunca buscó ofrecer al pueblo alternativas viables a sus problemas y necesidades. De hecho, no mostraba interés en la construcción de un movimiento popular de masas, o en encabezar a las organizaciones locales. Al contrario, el PCP-SL operaba bajo su propia lógica político-militar, la cual establecía que al provocar enfrentamientos y polarizaciones extremas se aceleraría el colapso del orden estatal vigente. Esta incapacidad para forjar bases sociales más duraderas significó que con la captura de la alta dirigencia senderista y la subsiguiente retirada de sus cuadros más preparados, la presencia senderista en el distrito de Villa El Salvador se desarticulaba casi completamente.

Esto último significó también que los grupos que se oponían al PCP-SL dentro de las organizaciones recobraran fuerza y capacidad para enfrentarse nuevamente con dirigentes que se habían aliado y/o vinculado con las organizaciones subversivas anteriormente. Este fue el caso, en especial, de la FEPOMUVES y la Coordinadora Juvenil. El 10 de septiembre de 1993, la

FEPOMUVES llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria en medio de gran tensión y temor. Los jóvenes de la Coordinadora Juvenil brindaban seguridad. Algunas dirigentas, lideradas por Donatilda Gamarra, criticaron a la presidenta, Pilar Anchita, acusándole de estar coludida con el PCP-SL. Cuando ella se negó a firmar un documento de deslinde con el PCP-SL, los participantes de la Asamblea votaron para destituirla del cargo. Gamarra fue elegida como la nueva presidenta de la FEPOMUVES. Con el repliegue del PCP-SL los problemas anteriores comenzaron a desaparecer. Habían nuevos retos para la organización - incluyendo los intentos de cerrarla por parte del alcalde elegido en 1993, Jorge Vásquez, quien luego fue arrestado y destituido de su cargo por abuso de autoridad y manipulación política de las donaciones canalizadas a través del gobierno fujimorista- pero la época de violencia política parecía haber llegado a su fin.

En el caso del Parque Industrial, la ayuda internacional retiró su apoyo luego de que los conflictos se exacerbaron. Pero a partir de 1996, cuando Michel Azcueta asume la alcaldía nuevamente, el Parque Industrial comienza a retomar fuerza, y hoy en día es un centro de producción y venta importante a nivel de toda Lima.

La CUAVES, sin embargo, aún no supera su desarticulación y pérdida de influencia, hecho reflejado en su deteriorada imagen, así como en la dificultad de reconstrucción de las dirigencias a nivel de manzanas, Grupos Residenciales y Sectores. A la extrema politización y la infiltración de las organizaciones subversivas, se sumó la ofensiva por parte de las fuerzas del orden, que tomó fuerza sobre todo después de la captura de Guzmán, mediante rastillajes, detenciones arbitrarias de dirigentes y las llamadas «acciones cívicas». Importantes dirigentes de la CUAVES, tal como fue el caso de Juan Pecho, anterior secretario general de la organización comunal, fueron arrestados por supuesta vinculación con los grupos alzados en armas. Eso contribuyó a la desarticulación de la CUAVES y aumentó el miedo de los dirigentes a participar en la vida pública. En el caso de Pecho, como muchos otros, posteriormente fue declarado «inocente» de los cargos imputados en su contra; pero el efecto desintegrador que su detención y la de muchos otros dirigentes tuvo sobre la organización social fue inmenso.

Bibliografía

Arendt, Hannah. *On Violence*. New York: Harcourt Bruce Jovanovich, 1970

Azcqueta, Michel. «Historia de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES): problemas y perspectivas,» (Lima), mimeo.

Blondett, Cecilia. *Las mujeres y el poder: Una historia de Villa El Salvador*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1991.

Burt, Jo-Marie. «PCP-SL y la «batalla decisiva» en las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador», en Steve Stern (editor), *Los senderos insólitos del Perú*. Lima, IEP, 1999.

Burt, Jo-Marie. «Shining Path and the ‘Decisive Battle’ for Lima’s Barriadas: The Case of Villa El Salvador,» in Steve Stern, ed. *Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995*. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1998, pp. 267-306.

Burt, Jo-Marie. «Political Violence and the Grassroots in Lima, Peru.» In Douglas Chalmers et.al, *The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation*. London: Oxford University Press, 1997, pp. 281-309.

Burt, Jo-Marie and César Espejo. «The Struggles of a Self-Built Community,» *NACLA Report on the Americas* 28:4, January/February 1995.

Delpino, Nena. «Las organizaciones femeninas por la alimentación: un menú sazonado,» in Pásara, Luis et al. *La Otra Cara de la Luna: Nuevos Actores Sociales en el Perú*. Lima: CEDYS, 1991, pp. 29-72.

López Ricci, José. «Las Organizaciones Populares en San Martín de Porres.» Informe de Investigación (manuscrito no publicado). Lima: Centro Alternativa, 1993.

Miloslavich Tupac, Diana, compiladora. *María Elena Moyano: En busca de una esperanza* Lima: Ediciones Flora Tristán, 1993.

Plan integral de desarrollo de Villa El Salvador. Lima: DESCO/Municipalidad de Villa El Salvador, 1986.

Romero Sotelo, Miguel. *Hábitat popular: un camino propio*. Lima, 1992.

SASE-INSTITUTO APOYO. *El Desarrollo Institucional de las Organizaciones No-Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) en el Perú*. Lima: SASE/Instituto APOYO, 1993.

Tuesta, Fernando. *Villa El Salvador: Izquierda, Gestión Municipal y Organización Popular* (manuscrito no publicado). Lima: CEDYS, 1989.

Zapata, Antonio. *Sociedad y poder local: la comunidad de Villa El Salvador, 1971-1996*. Lima: DESCO, 1996.

Hechos de Violencia en Villa El Salvador, 1980-2000 (seleccionado)

Anexo 1: Cronología⁵⁶

⁵⁶ Elaborado en base a la base de datos de DESCO, y periódicos y revistas nacionales.

1981-1989

Se registran varios atentados principalmente por PCP-SL contra comisarias, entidades gubernamentales (Sedepal, centro telefónico, Electrolima, Juzgado de Paz, etc), hospitales, torres de alta tensión, y bancos.

1985 se registra la primera iluminación de la hoz y martillo en un cerro de VES. A su vez se registra el primer asesinato en el distrito, de un efectivo policial el 15 de mayo, por presuntos miembros de PCP-SL.

A partir de 1990 se registra un incremento notable de la violencia en Villa El Salvador.

1990

En 1990, presuntos miembros de PCP-SL incendian algunos ómnibus (Enatru), colocaron banderas en diversas oportunidades, y realizan marchas en algunos mercados del distrito. Algunos atentados fueron repelidos y/o prevenidos por la policía del distrito. En junio, presuntos miembros de PCP-SL atentan contra el local de Cambio 90. Hay además algunos embanderamientos y distribución de volantes (especialmente en mercados y colegios). Un intento, presumiblemente de parte de miembros de PCP-SL, de dinamitar el colegio César Vallejo durante el acto de sufragio el 9 de abril fue repelido y los autores capturados por la policía.

Un estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, Ernesto Castillo Páez, desapareció luego de ser detenido por un patrullero de la policía en el segundo sector de Villa El Salvador el 27 de octubre de 1990.

1991

En 1991, se registra asaltos a camiones que reparten víveres (como aciete, gaseosa) y la repartición de la mercadería a los pobladores por parte de miembros de PCP-SL. Hay algunos intentos de transmitir sus mensajes por radio, a veces con éxito. El 22 de junio supuestos miembros de PCP-SL mataron al gobernador de VES, Alejandro Magno Gómez, quien pertenecía a Cambio 90 (él habría sufrido un ataque anterior, el 14 de mayo, que sobrevivió).

En julio, mas de 300 miembros de los clubes de madres y comedores populares salen a marchar para respaldar al alcalde Johnny Rodríguez y a dirigentes vecinales amenazadas por PCP-SL. Jóvenes del distrito se organizan para borrar las pintas senderistas del distrito. El alcalde, Johnny Rodríguez, anuncia la creación de la Mesa para la Paz y el Desarrollo, institución multisectorial para asentar las bases para la pacificación y el desarrollo del distrito.

El 11 de setiembre se registra un atentado contra uno de los centros de acopio de víveres (del segundo sector) que pertenecía a la FEPOMUVES; SL niega su participación en el atentado y echan la culpa a María Elena Moyano, a quien acusan de corrupción y de «traficar» con las organizaciones populares. Moyano, por su cuenta, rechaza tal acusación y afirma que los

responsables son PCP-SL. El 13, la FEPOMUVES convoca una marcha para rechazar la violencia. Hacia finales de mes aparecen volantes, suscritos por el PCP y el Movimiento Clasista Barrial, amenazando a Moyano.

En setiembre y octubre se registra asaltos a camiones y repartos de víveres; en octubre saquean un mercado. También se registra la aparición de volantes firmados por el PCP (PCP-SL) amenazando a los Clubes de Madres, los comedores populares, y unas 30 ONGs que operan en VES.

1992

En los primeros meses de 1992, hay una serie de asesinatos (intentos y culminados) en VES. El 9 de enero presuntos senderistas asesinan a un joven obrero, Jorge Campos R., en la puerta de su domicilio en el primer sector del distrito. El mismo día se registra un atentado en un mercado del distrito en el cual muere un policía. El 26 de enero, el ex-secretario general de la CCP y ex dirigente del PCP (Unidad), Andrés Sosa, es asesinado por presuntos miembros del MRTA. Habría pertenecido a dicha organización del cual se alejó.

En el mes de febrero se registran varios asesinatos, intentos de asesinato, y atentados, todos por presuntos miembros de PCP-SL. El 9 de febrero se registra el asesinato de un vigilante de mercado, Braulio Mungia, a quien el PCP-SL acusó de «soplón» mediante un cartel dejado sobre el cuerpo del muerto. El día 11 matan a Juan Huaman Yalle (52), un dirigente vecinal, quien fue baleado en la puerta de su casa. El 13 presuntos senderistas atacan contra un banco. El 14, día declarado como «paro armado» por PCP-SL, atacan contra la casa de Michel Azcueta, ex-alcalde del distrito. El mismo día activistas del distrito, liderados por María Elena Moyano, llevan a cabo una «Marcha por la Paz» en el Parque Industrial del distrito. El día siguiente, el 15 de febrero, matan a la dirigente popular y teniente alcaldesa del distrito, María Elena Moyano, quien asistía a una pollada en el primer sector. Colocan un cartucho de dinamita sobre el cuerpo de la dirigente que destruye su cuerpo.

El 21 de marzo se registra el asesinato de un estudiante universitario, Miguel Angel Castillo.

Pocos días después del autogolpe del 5 de abril de 1992, (el 10 de abril), SL hizo estallar un «bus-bomba» contra la comisaría de VES, destruyendo parte del Centro de Comunicación Popular, la municipalidad, y la comisaría. Varias casas alrededor también son destruidas.

El 6 de junio, un comerciante, Juan Fajardo, es asesinado en VES. Se registra un segundo atentado el 18 de julio contra la comisaría del distrito. Se siguen registrando incursiones en hospitales (donde se apoderan de medicamentos), y repartición de víveres. Durante el «paro armado» declarado por PCP-SL el 23 de julio, presuntos miembros de SL incendiaron un carro, y bloquearon las avenidas principales de VES.

La VI Convención de la CUAVES se lleva a cabo en agosto 1992 con abierta presencia e influencia senderista. Varios dirigentes de la CUAVES firman un documento denunciando la presencia senderista en la Convención y rehusan reconocer la validez de la misma.

El 19 de septiembre, el alcalde, Johnny Rodríguez, va al sector Pachacamac, donde se registra un alto nivel de presencia senderista, para investigar el tema del empadronamiento de terrenos. Su carro es atacado y muere un poblador.

[A nivel nacional Abimael Guzmán y otros líderes importantes de la organización senderista son arrestados el 12 de septiembre.]

El 19 de septiembre, presuntos senderistas atacan contra el alcalde Johnny Rodríguez, mientras éste lleva a cabo el empadronamiento de los lotes en la cuarta etapa de Pachacamac (donde hay fuerte presencia de SL); él queda ileso pero un poblador, David Velásquez, muere. El municipio publica un comunicado acusando a dos pobladores de Pachacamac de pertenecer a SL. Se sigue registrando agitaciones sobre todo en las nuevas ampliaciones de VES. El 12 de noviembre atacan contra un taxista, aparentemente por no acatar el «paro armado».

Se comienza a registrar acciones de rastillaje de parte de las fuerzas armadas en distintas partes del distrito como fue el caso el 15 de septiembre, en el cual fueron arrestados supuestos miembros del Comité Central de Lucha, organización fachada de SL, y en Pachacamac el 26 de septiembre, en el cual detienen a 50 presuntos miembros de SL.

El 20 de septiembre se realiza una gran marcha por la paz liderada por los alcaldes de Miraflores y Villa El Salvador, ambos asediados por la violencia terrorista.

1993

En el marco de las elecciones municipales de 1993, el teniente alcalde de VES, Rolando Galindo, es asesinado el 11 de enero al interior de su vivienda en el segundo sector del distrito. Galindo fue también candidato a la alcaldía de VES. Un cartel firmado por el PCP sugiere que el acto fue cometido por PCP-SL (pero algunos entrevistados cuestionan su autoría). Poco después, el 28 de enero, otro candidato independiente a la alcaldía, A. Pantigoso, es asesinado junto con su esposa, G. León, dejando 11 niños huérfanos, por presuntos senderistas. Él también fue miembro de la APAFA de un colegio en el sexto sector del distrito.

En enero y febrero se registra hostigamiento de parte de SL contra la comisaría del distrito. El 29 de enero, tres presuntos senderistas atacaron con disparos de fusilería a un patrullero del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional, dejando gravemente herido a un suboficial que viajaba en el vehículo. El 27 de febrero, a las tres de la madrugada, decenas de senderistas atacaron con ráfagas de ametralladoras y explosivos la comisaría de Villa El Salvador. Ante la intervención de los policías, los atacantes huyeron; dos fueron arrestados. El ejército sigue realizando rastillajes en VES; el 17 de enero se realizó una operación «rastillo» y de apoyo social en VES y San Juan de Lurigancho bajo la dirección del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,

Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Cuarenta y siete supuestos miembros de SL y el MRTA son detenidos.

El 15 de febrero se realizan varios actos de homenaje a María Elena Moyano, quien fue asesinado por un comando senderista hace un año.

Presuntos senderistas matan a un joven albañil el dos de abril, supuestamente por negarse a participar en sus filas. El 15 de mayo incendiaron un omnibus, el 24 atentaron contra una botica; y el 16 de junio atentan nuevamente contra la vida de Michel Azcueta frente al Colegio Fe y Alegría, donde el ex-alcalde trabaja. Azcueta resultó herido del atentado, como también lo fue un policía miembro de su escolta, un amigo del ex-burgomaestre, y cuatro escolares.

El 21 de junio presuntos senderistas atentan contra la tumba de María Elena Moyano. El primero de julio, atentaron contra la casa de un dirigente vecinal, Nilton Flores, pero no se registra muertos. El 26 de julio, presuntos senderistas intentan asesinar al teniente alcalde, Cesar Soplín, de Obras; el sobrevive el atentado pero muere un miembro de su seguridad. El día siguiente se registra un atentado contra un banco en VES.

El 10 de septiembre, se realiza una reunión extraordinaria de la Federación Popular de Mujeres. En votación, las mujeres deciden quitar el cargo de presidenta a Pilar Anchita, por no querer esclarecer su presunta vinculación con PCP-SL.

El mismo día, el alcalde, Jorque Vásquez, del grupo independiente Obras, intenta cerrar la radio y TV comunitaria de VES, aduciendo que eran utilizados para vender drogas, prostitución, y porque eran usados por la subversión. Por ello y otros atropellos, el 16 de septiembre, en una marcha masiva, pobladores y dirigentes de VES piden la destitución del alcalde de VES, quien además de ser acusado de abusar su autoridad, sería culpable de corrupción. La Contraloría de la República abre una investigación dos días después y eventualmente es arrestado por malversión de fondos y otros cargos, y es destituido como alcalde de VES. Soplín asume el cargo.

El 19 de noviembre, un grupo de presuntos senderistas hicieron explotar 500 gramos de dinamita en las intersecciones de las avenidas César Vallejo y Las Gardenias, y robaron a un combi. El 28 de diciembre presuntos senderistas hirieron de bala a un regidor de Lima 2000, José María Sosa.

1994-2000

Con más de un año del arresto de Abimael Guzmán y el alto liderazgo de PCP-SL, y después de que tales dirigentes desde la prisión llaman a un «acuerdo de paz», se registra cada vez menos acciones de violencia política de parte de PCP-SL, pero si de mayor presencia de las fuerzas armadas a través de rastrillajes y las llamadas «acciones cívicas». A su vez, se registra la detención de varios dirigentes y pobladores de VES por presuntos vínculos con la subversión. Se ha preferido no incluir tales nombres en ese cronología por no disponer de una lista completa, y por las serias irregularidades en la legislación antiterrorista que llevó a la detención de cientos de personas

inocentes, tal ha sido demostrado por la liberación, por la Comisión Ad Hoc durante el gobierno de Alberto Fujimori, de mas de 500 encarcelados por ser inocente de los cargos por los cuales fueron convictos y sentenciados.

Aquí se presenta algunos actos de violencia ocurridos entre 1994-2000 para señalar que a pesar del declive en la violencia política, y de la «derrota estratégica» de PCP-SL, sigue habiendo hechos de violencia política. Y nuevas formas de violencia, sobre todo criminalidad y pandillaje, comienzan a surgir en el distrito.

El 18 de mayo de 1994, día del «paro armado» de SL, se registra que el local de la CUAVES amaneció con un trapo rojo a favor de un acuerdo de paz (línea Guzmán); también arrojaron volantes en varios paraderos de VES.

El dos de abril de 1995, se registra un enfrentamiento entre una patrulla policial y un grupo de presuntos senderistas en el sexto sector. El choque ocurrió en uno de los cerros de ese sector. Un presunto senderista fue detenido, y otros cinco fueron arrestados luego de un rastillaje llevado a cabo por la policía en la zona. El 2 de julio de 1995, una carga explosiva es detonada en la casa del suboficial de la Policía Nacional, Juan Navarro Miranda. El policía era encargado de la custodia personal del general Antonio Ketín Vidal.

El 11 de enero de 1996, en VES, se halla una carga explosiva en el vehículo de un suboficial PNP que trabaja en el Ministerio de la Presidencia.

En febrero de 1996, el ex-alcalde de VES, Michel Azcueta, denuncia que se encuentra en el distrito ex miembros de PCP-SL que tras alentar al llamado «acuerdo de paz», ahora apoyan a Nueva Mayoría-Cambio 90, el partido oficialista. El 21 de marzo, la denuncia es archivada por la titular de la 13 Fiscalía de Lima por no encontrar pruebas de irregularidades.

Se comienza a registrar lo que serían ataques selectivos entre las distintas facciones de PCP-SL; uno ocurre en VES el 2 de mayo de 1996, cuando seguidores de «Feliciano» habrían ejecutado el mando de logística de la facción pro-Guzmán, Víctor Hernández (a) «Negro José», encargado de captar nuevos militantes para su organización. Tres sujetos vestidos de terno que se identificaron como policías dispararon contra él para luego hacer explotar una granada en su cuerpo. Un manuscrito fue dejado al lado del cuerpo: «Viva el proletariado internacional, superar el recodo desarrollando la guerra popular aplastando a los revisionistas y capitulacionistas. PCP Base Lima».

En el mismo mes, el 26 de mayo, se registra una batalla campal en la zona conocida como el Lomo de Corvina por pobladores que se disputan terreno agrícola en la zona. El saldo es diez personas gravemente heridos y el incendio de una veintena de chozas. El enfrentamiento empezó cuando un grupo de residentes destruyó las chozas de los invasores. Acusan a miembros de PCP-SL de estar involucrado en el conflicto. O sería un caso de violencia social que se adjudica erróneamente a la violencia política?

El 10 de agosto de 1996, una carta de dinamita es detonada en las inmediaciones de la Municipalidad de VES; se sospecha el involucramiento de PCP-SL. El 4 de febrero de 1997, tres supuestos subversivos dispararon contra un efectivo de la PNP, hiriéndolo. A partir de ese hecho no se registra hechos de violencia política en el distrito, lo cual da testimonio al término del ciclo de violencia política a nivel nacional. Los testimonios afirman la presencia de miembros de PCP-SL realizando un trabajo político de bajo perfil pero difícilmente se puede confirmar tales afirmaciones sin mayor acceso a los archivos de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

2.17. EL PCP-SL Y LA BATALLA POR PUNO

2.17.1. *La reestructuración de las empresas agrarias*

En la visión de la «revolución alanista» Puno aparecía como el caso piloto de la recuperación de la sierra para la democracia. No más «mancha india», en el «trapecio andino» —el gran bolsón de atraso y pobreza del sur andino— el Perú daría la batalla contra la subversión. El propio mandatario, personalmente, pretendía asumir el liderazgo contra los alzados.

Pero no era un asunto sencillo. Asiduo visitante de la región, pues entre el inicio de su campaña electoral a comienzos de 1984 y noviembre de 1986, Alan García visitó Puno en dieciocho ocasiones. García Pérez conocía bien las complejidades del problema: la red de intereses creados en torno a las empresas asociativas (EEAA); el intrincado trasfondo de las demandas de comunidades y parcialidades; el dinamismo de los gremios campesinos, la presencia de la izquierda marxista; el compromiso de la iglesia con la lucha comunal. El mismo día en que el régimen se inauguraba, la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP) había presentado un proyecto de ley de reestructuración. Autoridades eclesiásticas del sur habían hecho conocer al gobierno su preocupación por la situación puneña. La comisión parlamentaria encargada de investigar las denuncias de corrupción en la EEAA de Puno seguía sin mostrar resultados. A comienzos de diciembre, las tomas de Kunurana habían evidenciado la ansiedad reinante.

Sobre este tenso panorama la temporada de lluvias 85-86 devino en diluvio. Tras él, los desbordes, la desesperación y, como en 1983, el hambre de tierra, la profusión de eventos y asambleas, los debates sobre el futuro regional. En 1985-86, por si fuera poco, cayeron los precios de la fibra de alpaca cuya producción estaba, fundamentalmente, en manos de productores campesinos. Una avalancha de «pliegos, solicitudes y memoriales» —reportó la FDCP— descendía sobre «las oficinas estatales de Puno y Lima.»¹

Había llegado la hora de enfrentar el asunto de la reestructuración pues de otro modo peligraba el futuro del plan para la sierra sur. Así lo comprendió el Presidente de la República que, a fines de enero de 1986, convocó a Palacio de Gobierno a un grupo de autoridades y profesionales puneños con el fin de discutir los posibles escenarios de afectación de las empresas altiplánicas. Menudearon las objeciones de carácter técnico. Al mandatario le preocupaban más los aspectos políticos. Desde esta perspectiva, no quedaba sino intervenir. Las opiniones se dividieron. Unos, optimistas, pensaban que era el verdadero inicio de la transformación del «trapecio andino». Otros, sin negar la urgencia de tomar una decisión, temían que una medida apresurada diese lugar a la destrucción de una rica acumulación empresarial.²

¹ FDCP, «Acuerdos del 3er. Congreso.» Agosto 1986.

² Entrevista con Walter Aguirre. Puno, 14 de junio de 1993.

El 7 de febrero de 1986, los Decretos Supremos 005 y 006 que daban inicio a la reestructuración fueron finalmente promulgados. En un plazo de 120 días una comisión determinaría los montos de tierra que debían revertir al estado para su posterior adjudicación a las comunidades. Al día siguiente, Alan García se presentó en Puno donde fustigó a los dirigentes de la Asamblea Popular Regional —acusándolos de agitar irresponsablemente la necesidad campesina— tanto como a los miembros de su propio partido, insensibles —dijo— ante la grave situación que se vivía en la región.³ No aclaró, sin embargo, qué porcentaje del 1'741,743 has. bajo control empresarial habría de pasar a manos comuneras y si las parcialidades o las comunidades no reconocidas tenían también derecho a tierra.

La incertidumbre acrecentó la exasperación. La Empresa Rural de Propiedad Social (ERPS) Kunurana, nuevamente, fue escenario de confrontación entre los grupos en pugna. Ahí, acatando los decretos del 7 de febrero —que dictaminaban que tanto parcelaciones privadas como ocupaciones ilegales no serían válidas en términos de futuras adjudicaciones— las comunidades que habían invadido en diciembre del año anterior habían decidido replegarse. Esto no impidió que la vecina comunidad de Macarí fuera objeto de agresión.

La comunidad —relató el párroco de la localidad— había desalojado las tierras de la Empresa como también su campamento sobre esas tierras. Estaba pasteando su ganado en sus propias tierras cerca del pueblo y del Salón Comunal. A la 1 p.m llegaron a pie desde la central Kunurana unos 120 hombres, 15 a 20 mujeres y 15 a 20 jinetes todos con casco blanco o rojo, caras pintadas de negro o blanco, camuflados con chalinas y pasamontañas, en las manos, hondas, palos, fierros. En primer lugar fueron a quemar las chozas de paja que habían hecho los comuneros en el rincón ocupado. Después [...] los jinetes se lanzaron pasando a las tierras de la comunidad atropellando y arreando el ganado de los comuneros mientras los otros se acercaban en grupo compacto lanzando piedras contra los comuneros que defendían su ganado. Fue una batalla atroz entre esa gente y los comuneros que se encontraban en menor número y sin nada entre las manos la mayoría. Entonces los comuneros tuvieron que refugiarse en el Salón Comunal que fue totalmente rodeado por los asaltantes y «bombardeado» furiosamente con piedras.⁴

¿Quiénes eran los agresores? ¿Acaso una versión moderna de las bandas gamonales de los años 20? ¿O se trataba, más bien, de feudatarios en defensa desesperada de su patrimonio? El hilo de los acontecimientos se pierde en un mar de acusaciones mutuas. Sobre los puntos de vista de los supuestos atacantes algo revelan los volantes que la Federación Nacional de Trabajadores de Propiedad Social (FENATEPS) —la entidad representativa de los trabajadores de las ERPS— distribuyó por aquellos días en Ayaviri: ellos eran las verdaderas víctimas; y defensores de la reforma agraria velasquista, «el triunfo histórico más importante y justiciero en toda la vida del país». Contra lo que afirmaban sus calumniadores, a pesar de las adversidades, las empresas —decían— habían hecho progresos importantes: no habían dejado de colaborar con las comunidades

³ «Tomas de tierras en Puno» en *Sur* no. 92, pp. 8-28.

⁴ «Relato de los hechos ocurridos en Macarí los días 28 de febrero y 4 de marzo de 1986 tales como los conoce el P. René, párroco» y «Comunicado de Solidaridad con la Iglesia de Ayaviri» firmado por los Agentes Pastorales de la Diócesis de Puno y la Prelatura de Juli. Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de Puno (AVSP de aquí en adelante).

y estaban dispuestas al «diálogo fraterno» con miras a ceder «tierras ociosas para los campesinos sin tierra,» para que fuesen explotadas en «forma comunal» —insistían— no para que las parcelen y terminen sirviendo «ambiciones personales».

No eran los «verdaderos comuneros», entonces, los que estaban contra ellos —continuaba la argumentación— sino los politiqueros, los «curas extranjeros» y su red de «mercenarios a sueldo» que, financiados por «los dólares de las agencias de los socialdemócratas franceses», pretendían destruir sus centros de trabajo. Con sus «sociólogos, ingenieros, pensadores» estos autotitulados «defensores de las comunidades» buscaban enfrentar a los campesinos de la provincia de Melgar. Llamaban, por ello, a los comuneros melgarinos a buscar un entendimiento al margen de estos «grupos financiados desde el exterior que solo buscan copar la región de Puno». «Estamos en pie de lucha —afirmaron— no frente a las comunidades campesinas sino en contra de los agitadores oportunistas y electoreros de la gente de izquierda que, después de salir electos son nuestros enemigos No. 1».

Solicitaban, por lo tanto: (1) una «reestructuración concertada» que no implicara desmembramiento o parcelación de la tierra asociativa; (2) la presencia de las Fuerzas Armadas en «las provincias asoladas por el terrorismo y el clima de violencia» y, finalmente, (3) la intervención de la Fiscalía de la Nación y del Servicio de Inteligencia Nacional para investigar

...los orígenes de los millonarios fondos que manejan los «Centros de Investigación Social» de procedencia foránea, como el TECIRA que financia toda la propaganda y movilización disociadora y sediciosa, para boicotear los buenos propósitos del «gobierno burgués».⁵

Unas semanas después, no obstante, la directiva de la Central de Empresas Campesinas (CENECAMP) se ofreció a colaborar.⁶ Su nuevo portavoz —el ingeniero Juan Carlos Málaga Arce— procuró reemplazar el tono aguerrido y politizado con uno de corte técnico. «Que ha habido malos manejos —declaró Málaga— totalmente de acuerdo» pero no por ello podía satanizarse al conjunto del sector; las denuncias debían hacerse «con nombre propio» ante el Poder Judicial, buscar una sanción legal antes que amenazar o recurrir a la violencia. Con la asesoría de Málaga, varias empresas elaborarían sus propias propuestas de reestructuración. Estas, sin desatender el problema social, impedirían la destrucción de aquello que «se había levantado a través de años de esfuerzo y sacrificio».⁷

Recién a comienzos de mayo de 1986 la comisión reestructuradora designada por el Ejecutivo arribó a Puno encabezada por Gonzalo Bravo Mejía —un funcionario de carrera del Ministerio de Agricultura. Su labor se realizaría bajo grandes presiones. Las del propio Presidente

⁵ Central de Empresas Campesinas «Puno» *A la conciencia nacional*, marzo de 1986.

⁶ «Entrevista» en *Hojas Escritas*, no. 7, pp. 40-43. Véase también los comunicados de la CENECAMP-Puno, «No! al derramamiento de sangre» (Abril 26, 1986) y «¿Puede la democracia permitir un derramamiento de sangre, pudiendo evitarlo?» (Mayo 30, 1986).

⁷ *Ibid.*, p. 42

de la República, las de las autoridades agrarias locales que, «como eran ex-hacendados tenían contra nosotros una oposición total»— y, por supuesto, las de la FDCP y las comunidades que exigían tierras a cualquier costo.⁸ La carencia de medios logísticos, su desconocimiento personal de la realidad puneña y falta de información confiable —catastros comunales casi no existían y muchas empresas se resistían a abrir sus archivos a los interventores— complicarían su tarea aún más. A la larga —habría de confesar Bravo Mejía años después— «no nos fue posible realizar un proceso realmente técnico, había demasiada impaciencia para aceptar procedimientos inevitablemente prolongados, teníamos que concentrarnos en repartir».⁹

La extrema lentitud con que el proceso de reestructuración venía desenvolviéndose, no obstante, así como la débil respuesta del gobierno a los desastres naturales que castigaban a Puno crearon condiciones para actuar. En efecto, cuando el plazo de 120 días dado para completar los estudios de base se cumplía la comisión Bravo Mejía estaba recién llegando a Puno. En mayo, tras cuatro meses de lluvias intensas, entre el 30% y el 40% de la superficie cultivada del departamento estaba prácticamente perdida. Las inundaciones habían afectado importantes vías de comunicación así como a los barrios populares de la capital departamental. Los damnificados sumaban miles. Faltaban alimentos, viviendas, maquinaria para rehabilitar las carreteras. Peor aún, la situación económica comenzaba a dar señales de deterioro. Las posibilidades de migrar, entretanto, se estrechaban, obligando al poblador rural —como declaró un asistente al *Rimanakuy* de Puno— «a mirar hacia el campo» como única alternativa.¹⁰

2.17.2. Ande Rojo versus Trapecio Andino

La Asamblea Popular Regional de Puno, era un «poder popular en ciernes», en tanto que, en las demandas de regionalización, se vislumbraban las «semillas del autogobierno.»¹¹ En ella el Partido Unificado Mariateguista (PUM) cifraba sus mayores esperanzas. Para apoyar su conducción, de tal suerte, la dirección del partido creó una instancia coordinadora integrada por dirigentes de todo el sur andino. «Ande Rojo» la denominaron como respuesta al «Trapecio Andino» aprista. La táctica a seguir era «desenmascarar» las intenciones «autoritarias» y «centralistas» del plan aprista; «profundizar el desgaste» del régimen, «jaqueándolo» y «emplazándolo» sin tregua, buscando en base a ello «determinadas conquistas y reformas políticas» que permitieran «acumular fuerzas en perspectiva estratégica.» ¿La alternativa? Un vagamente definido «autogobierno de masas» a construirse «desde la comunidad campesina hacia arriba», sin latifundios y sin poderes locales

⁸ Entrevista. Lima, 29 de julio de 1992. Véase también, Gonzalo Bravo Mejía Muñoz, «La reestructuración revolucionaria y democrática de las Empresas Campesinas iniciada en Puno» (manuscrito) en Centro de Documentación del CEPES.

⁹ Entrevista con Gonzalo Bravo Mejía. Lima, junio 1989.

¹⁰ «Rimanakuy Puno: Tierra y Paz, el pedido de los campesinos» en *ibid.* no. 100, Octubre 1986, pp. 15-24.

¹¹ PUM, Frente Regional de Puno. «Documento del Partido,» abril, 1986.

gamonales; con una estructura productiva basada en empresas comunales que, con el apoyo técnico necesario, señalarían un «nuevo camino para el desarrollo del agro puneño y nacional».¹²

Las luchas puneñas, ciertamente, no eran producto de la imaginación. Las tomas de Kunurana de diciembre de 1985 fueron seguidas por nuevas movilizaciones. A inicios de abril, se produjo un paro departamental. Con el alcalde Paca Pantigoso a la cabeza, un grupo de dirigentes populares se mantuvo en huelga de hambre por varios días. El gobierno se vio obligado a enviar una comisión negociadora. La oficialización de Puno como región piloto, la reestructuración con participación campesina y el rechazo a la militarización aparecían como demandas principales al lado de los reclamos salariales y las demandas «históricas» de la región: construcción de la hidroeléctrica de San Gabán, inicio de la explotación de los yacimientos auríferos de San Antonio de Poto y asfaltado de la carretera Puno-Moquegua

Lo que hacía del remoto Puno una noticia nacional, sin embargo, era la combinación de lucha social, desastre natural y repunte subversivo que ahí tenía lugar. Solamente durante 1986, en efecto, hubo en Puno tantas acciones subversivas como durante los cinco años previos. Era, básicamente, una profundización de la campaña del PCP-SL de 1985, enfocada en erradicar la autoridad del campo y desbaratar la propiedad asociativa, «eliminación» de los dirigentes apristas y de los símbolos de la «revolución alanista».¹³ A mediados de junio, el ataque del PCP-SL a la ERPS Kunurana marcaría un hito en la vida de la provincia de Melgar.

Todo comenzó con la detención, cerca de la sede administrativa de esa empresa, de varios camiones repletos de pasajeros que se trasladaban de Macarí al mercado de Ayaviri. Eran alrededor de 200 personas las que, según los testimonios, fueron obligadas por el PCP-SL a participar en el saqueo de sus instalaciones. Mientras la masa recibía un discurso, siete trabajadores apristas eran asesinados. A la frialdad prosiguió la vesanía: a las víctimas les cortaron las orejas, la lengua, a uno le sacaron los ojos, según contaron los que habían visto los cadáveres. Puesta sobre aviso, la policía de Ayaviri dio alcance al destacamento senderista en el puente de Chuquibambilla. Se produjo el enfrentamiento. Los subversivos huyeron dejando dos bajas.

En respuesta, fuerzas policiales y militares ingresaron a varias comunidades de Azángaro y Melgar dejando tras de sí innumerables denuncias de abusos y atropellos. Evitar la implantación del modelo de emergencia aplicado en Ayacucho se convirtió, entonces, en preocupación prioritaria del movimiento regional puneño a través de la consigna «paz con justicia social». Regionalización y reestructuración debían ocurrir sin militarización. Era la mejor garantía para cerrar el paso a los alzados en armas.¹⁴

¹² Ibid.; «Reunión del Ande Rojo» Boletín interno de la Comisión Nacional Campesina del PUM, no. 3, Noviembre 1985; PUM, «Acuerdos del Ande Rojo» (2da. reunión plenaria), Octubre 1986 y PUM, Comisión Política, «La ley de bases de la regionalización y las tareas de la lucha descentralista» Marzo 1987.

¹³ El comunicado de CORPUNO «Puno: Alto al Pro-senderismo» del 7-7-1986 listaba siete «mártires apristas víctimas del terrorismo.»

¹⁴ Asamblea Popular Regional de Puno, «Manifiesto al Pueblo Peruano». 27-6-1986.

En julio de 1986, se produjo un nuevo paro departamental. En Ayaviri, entretanto, un gigantesco mitin organizado por la Federación Unica de Campesinos de Melgar (FUCAM) volvió a demandar la aceleración de la reestructuración. Con el renovado apoyo de la iglesia y organizaciones gremiales y profesionales de la capital departamental, el movimiento por la tierra alcanzó un grado apreciable de legitimidad.¹⁵ A la defensiva, el gobierno suspendió la realización del *Rimanakuy* puneño en dos ocasiones.

En abril, Rómulo León Alegría —el enviado del gobierno a negociar con la Asamblea Regional Popular— aprovechó su presencia en Puno para acusar al PUM de valerse de instituciones como el TECIRA para acceder a fondos de la cooperación internacional. Son 72 centros de investigación —manifestó León Alegría— los que el PUM «utiliza como fachada» para subvencionar «un proselitismo político que ensalza la lucha armada».¹⁶ Otras figuras apristas, simultáneamente, adoptaban un tono conciliador.¹⁷ Javier Tantaleán Arbulú —y otros en la dirección del INP— principalmente, quién, en el *Rimanakuy* puneño invitaría a «mariateguistas y hayistas» a luchar «por la paz y la vida», a resolver el problema de la tierra y construir conjuntamente «una democracia revolucionaria».¹⁸

«Hayistas» y «mariateguistas», estaban en Puno unos frente a los otros, conformando redes partidarias rivales orientadas, respectivamente, a colocar bajo su liderazgo las múltiples dinámicas desatadas por los diversos desastres —naturales, sociales y económicos— que sobre Puno se habían abatido a lo largo del último lustro. Del conflicto de Kunurana a las demandas de los clubes de madres de la capital departamental emergían las fragmentadas fuerzas que el APRA y la izquierda pretendían conducir. Sin embargo, la reestructuración de las empresas asociativas seguía siendo, a mediados de 1986, la principal arena de disputa.

La realización, entre agosto y septiembre de 1986, de los mayores eventos campesinos en la historia reciente de Puno —el 3er. Congreso de la FDCP y el *Rimanakuy* gobiernista— sirvieron para subrayar las diferencias entre lo que los pumistas denominaban las vías «burocrática» y «democrática» de la reestructuración.

Con el anuncio —en el mensaje a la nación de Fiestas Patrias en Julio 28 de 1986— de que 1'100,000 has. serían distribuidas entre las comunidades de Puno se había creado una situación nueva. Por segunda vez la intervención presidencial rompía el trance. Las 744,000 has. que la comisión Bravo Mejía había recomendado reestructurar quedaban largamente sobrepasadas.

Con el PCP-SL amenazando en Azángaro y Melgar y en vista de la inesperada capacidad que gerentes y burócratas mostraban para manipular la reestructuración, la táctica de «conquistar espacios legales» no bastaba, pensaban los dirigentes pumistas. Se requería «generar movimientos

¹⁵ Sobre la posición de la iglesia sur andina sobre el problema de la tierra y la militarización, véase los documentos: «Urgidos por nuestra fidelidad» en *Sur* no. 92, Febrero 1986, pp. 27-28; «La tierra, don de Dios - Derecho del Pueblo» en *ibid.*, no. 94, Abril 1986, pp. 31-41 y «Puno quiere la paz» en *ibid.*, no. 101, Noviembre 1986, pp. 34-36.

¹⁶ DESCO, *Violencia política en el Perú*, pp. 460-61.

¹⁷ Entrevista con Jaime Johnson, Lima, Agosto 3, 1992.

¹⁸ «Rimanakuy Puno: crónica del evento» en *Sur* no. 100, Octubre 1986, pp. 7-24.

de masas» con «la fuerza suficiente para alcanzar los objetivos trazados.» Volver, en otras palabras al camino señalado por las tomas de Kunurana de diciembre de 1985.¹⁹

Las evaluaciones partidarias de la FDCP realizadas en mayo de 1986 llamaban la atención sobre tres aspectos críticos:

- (1) El gremio no había estado a la cabeza de la lucha de los damnificados por las inundaciones, unificándola con su reivindicación por la tierra;
- (2) No existía «una propuesta de reestructuración departamental» que unificara las expectativas de comuneros y feudatarios;»
- (3) Se había fracasado en «extender el movimiento de tomas de tierras» de Santa Rosa y Macarí al resto del departamento. La falta de «un equipo de dirigentes a nivel departamental» era, asimismo, un problema central. En la práctica había solamente dos. Tal ausencia había llevado al debilitamiento de las «direcciones provinciales intermedias». La FUCAM era la única que mantenía continuidad, sobre todo en Azángaro, Puno, Lampa, Melgar y Huancané. En el resto del departamento, la FDCP era prácticamente inexistente.

Frente al anuncio de la reestructuración de 1'100,000 has., sintiendo que podían arrebatárles la conducción de su base más importante, los pumistas optaron por radicalizar la lucha. Frente a la cautela de los cuadros locales, fueron los dirigentes nacionales del PUM quienes empujaron la consigna de liquidación de las EEAA. Poco tiempo después, sin mayor dilación y con grandes muestras de entusiasmo, el congreso de la FDCP se pronunciaba en favor del acuerdo aprobado en el «Ande Rojo». El anuncio del 28 de julio de 1986 había creado la expectativa y el envalentonamiento que, ahora, la izquierda parecía capitalizar.

El congreso de la FDCP, al cual asistieron 850 delegados de todo el departamento, aprobó que las EEAA fueran intervenidas de inmediato con participación de representantes comunales y de la FDCP. Habría sanción para los gerentes. Toda la propiedad asociativa —1'750,000 has. aproximadamente— pasaría a un fondo departamental de tierras a partir del cual se realizarían las adjudicaciones a comunidades y parcialidades. A continuación, con apoyo del estado, se promovería empresas comunales. La inversión pública se concentraría en el agro. Las políticas de precios, crédito, comercialización, transferencia de tecnología se ajustarían a las necesidades comunales.

Poco tiempo después se celebró el Rimanacuy con representantes de 473 comunidades y 230 parcialidades puneñas que asistieron a la convocatoria del gobierno. Varias decenas más procedían de los vecinos departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Reunidos en 19 comisiones de trabajo, los asistentes discutieron los diversos aspectos de la problemática comunera. En las conclusiones quedó registrado el amplio repertorio de sus aspiraciones.

¹⁹ PUM-PUNO, «Propuesta Agraria». Mayo de 1986.

Entre las críticas a la verticalidad de los organismos de gobierno y los abusos cometidos por sus funcionarios se insinuaba un reclamo de fondo: «las autoridades distritales y provinciales nos amenazan y nos desprecian» marginándonos por completo de las decisiones que toman, incluso «en contra de nuestras propiedades».²⁰ Los funcionarios de micro regiones y del Ministerio de Agricultura, en particular, «planifican y programan sin la participación de los comuneros y a espaldas de la realidad campesina,» por eso, mientras de un lado realizan «obras inservibles» y «gastos insulsos», de otro, exigen a las comunidades que paguen por «largos y costosos» trámites de reconocimiento.²¹

Demandaban, de otro lado, el reconocimiento de su autonomía dentro del marco general del sistema político nacional. El derecho a nombrar sus propios jueces, exoneración de todos los impuestos, asignación de funciones municipales, harían de la comunidad, la célula básica del estado de que el propio Presidente García hablaba.

Pero la reestructuración fue, sin duda, el tema que concitó mayor interés. En sus diversos ángulos, la crítica a las empresas y la meticulosa sustentación del derecho comunal a la tierra aparece en las conclusiones de casi todas las comisiones.

Palabras más, palabras menos, eran los mismos acuerdos del 3er. Congreso de la FDCP.²² En las conclusiones del evento gobiernista la visión comunera quedaba desplegada en toda su contradictoria dimensión: el anhelo de protección y reconocimiento al lado de las demandas de participación y autonomía; las apelaciones a la tradición y las actitudes pragmáticas. Sin mencionarlo, de otro lado, los miembros de la comisión de «Participación e Integración Comunal», por su parte, dejaron constancia de sus críticas al PUM, al referirse, al «divisionismo y politización de los organismos representativos del campesinado» y al «control» que de estos ejercían «determinados partidos políticos». No existía, como consecuencia, «una verdadera y efectiva representatividad campesina» por lo que se subrayaba la necesidad de «que las organizaciones sean netamente gremiales».²³

Sorprendido por la contundencia de las críticas, el Presidente García intentó —en la ceremonia de clausura— despejar las dudas que siete meses de inefectiva reestructuración habían dejado. «Me adelanto —dijo— a las objeciones de “los vendedores de la duda”, esos “políticos ambulantes que van a cada comunidad repartiendo odio”, desacreditando un proceso que avanza, que se realiza sin propiciar la “guerra social” que algunos querían». «Si creen en mí —concluyó— no me cobren altos intereses por ese crédito, hagan lo mismo que yo».

Se refería a los préstamos con «crédito cero» establecidos a través del Banco Agrario. De hecho, problemas con el reparto de «préstamos directos» a las comunidades asistentes había estado a punto de provocar el retiro de los representantes de parcialidades, quiénes al enterarse que la

²⁰ «Rimanakuy '86: Hablan los campesinos del Perú» p. 255.

²¹ Ibid. p. 260.

²² FDCP, «Acuerdos del III Congreso de la FDCP presentados al Rimanakuy». Septiembre de 1986.

²³ Ibid., p. 261

entrega de fondos prometidos sólo favorecerían a las comunidades, optaron por retirarse parcialmente del evento. Al día siguiente se reintegraron, luego de conversaciones con una comisión que se formó para atender este problema. Las parcialidades no podían acceder a los fondos comunales mencionados por los Jefes del INP al no tener un status legal similar al de las comunidades. Los numerosos tenientes gobernadores y presidentes de parcialidades consideraron, sin embargo, que éste no era argumento suficiente para no recibir el dinero.²⁴

Al concluir su discurso, el Presidente de la República abandonó el evento, sin participar — como lo estipulaba el programa— en la sesión plenaria final. Sin su presencia, como manifestó el relator de una de las comisiones, «no tenía sentido leer las conclusiones porque no había nadie que los escuchara y les diera alguna solución o planteamiento».²⁵ El diálogo «entre presidentes» se había frustrado. Medio millón de has. habían sido repartidas al concluir el evento, pero no quedaba claro cuánto serían repartidas las restantes 600,000.

Un sentimiento de enorme impaciencia, más bien, embargó a muchos de los flamantes beneficiarios cuando, con sus resoluciones de entrega de tierra en la mano, se percataron del rosario de problemas que los reestructuradores habían dejado tras de sí: un mismo lote había sido adjudicado a varios beneficiarios; abundaban los errores en la delimitación de linderos. En muchos casos los terrenos asignados se ubicaban en zonas alejadas al domicilio de los adjudicatarios. No había claridad sobre el destino de los bienes empresariales; proliferaban las denuncias de saca ilegal de ganado y en general, la tierra distribuida era la de peor calidad. Se estaba reconociendo comunidades «fantasma» con el fin de legalizar adjudicaciones fraudulentas. Era el caso de las seis «comunidades en formación» que, en representación de los 682 trabajadores de la CAP Gigante, habían recibido 203,391 has. de las 222,837 has. originalmente controladas por esa empresa. Las autoridades no habían tomado tampoco en cuenta los títulos de los antepasados.

La realidad era que, el limitado control que el Ejecutivo tenía de los operadores locales no aseguraba la llegada de la pretendida «revolución aprista» a los confines del país. Menos aún en Puno, donde, frente a las exigencias comunales que el propio Presidente de la República alentaba, se erigía una maraña de poderes locales con probada capacidad para «subordinar a sus intereses las inversiones públicas y el poder normativo, judicial y coercitivo del Estado».²⁶

Discursos de lado, la responsabilidad de decidir «todo el destino de la tierra en Puno» quedaba en manos de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Dirección de Reforma Agraria. En alianza explícita o implícita con los gerentes y los llamados «grupos de poder» empresarial serían aquellos quienes quedaban a cargo de bregar con la presión comunal. Más que una estrategia clara los cohesionaba un objetivo inmediato: evitar el completo desmantelamiento de ERPS, SAIS y CAPs, protegiendo los intereses de sus aliados. Sabían que no podían enfrentar

²⁴ Fuente: «Rimanakuy Puno: Crónica del evento» en *Sur* no. 100, octubre 1986, pp. 7-24.

²⁵ *Ibid.*, p. 282.

²⁶ Telmo Rojas Alcalde, «Límites y posibilidades del desarrollo microregional» (Notas de una experiencia en la región sur)

abiertamente a la reestructuración pues equivalía a ponerse en contra del Presidente. Intentaron ganar tiempo: embrollando a los adjudicatarios, dilatando procedimientos, usando sus influencias para movilizar en su apoyo a las autoridades policiales y militares. Acaso confiando en que si lograban resistir lo suficiente, algún giro en la inestable situación política nacional podría permitirles recobrar la iniciativa. Paradójicamente, la presencia del PCP-SL en Puno hacía factible pensar en que una «militarización» de las provincias conflictivas traería el fin de la «agitación» comunal.

Si con los decretos supremos 005 y 006 se había abierto una intensa disputa por influir el curso del proceso de reestructuración, el anuncio del 28 de julio y la entrega de las primeras 600,000 has. terminaron de abrir la caja de Pandora. Ahora, a los procedimientos de afectación y adjudicación se añadían los reclamos de los beneficiarios insatisfechos y la desesperada movilización por obtener reconocimiento comunal; de ello dependía obtener algo del 1'100,000 has. a repartirse.

Seguir los detalles de las intrincadas dinámicas locales no era tarea fácil en aquellos días agitados. Bastaba, sin embargo, visitar las oficinas del sector Agricultura en la ciudad de Puno para percibir el conflicto que se maceraba. La indolencia de los funcionarios. Los delegados comunales merodeando los despachos. Los memoriales —redactados al instante por un mecanógrafo callejero— en sus manos encallecidas buscando cómo penetrar el cerco burocrático. No menos complicada aparecía la situación desde la otra ribera. La influencia de ex-hacendados y propietarios agrarios —reconocería un funcionario de la Región Agraria XXI— no era el único factor que entorpecía el proceso. Los medios eran mínimos, los procedimientos a emprender complejos y las presiones enormes.²⁷

Sobre este trasfondo los comicios municipales aparecían como un capítulo decisivo de la lucha por la primacía política en la región. «Las próximas elecciones municipales —rezaba una declaración del Ande Rojo— son una batalla política».²⁸

Confirmando la tendencia establecida en las elecciones del año anterior, el PAP absorbió el voto de AP —que no presentó candidatos en esta oportunidad— y del FNTC —más interesado, esta vez, en ganar la alcaldía de la ciudad de Arequipa— para obtener un 53% del voto departamental, resultado que le significaba tener mayoría en 7 de las 10 provincias altiplánicas y, con ello, un control masivo de la instancia municipal a nivel departamental. Era la votación más elevada obtenida por el PAP en Puno en toda su historia electoral.

El éxito del APRA —afirmaría un dirigente pumista— había sido lograr «alejarnos de los sectores medios y atrasados».²⁹ No era que la IU hubiese hecho una gran labor municipal en los tres

²⁷ Véase al respecto, J.L. Rénique, «Estado, partidos políticos y lucha por la tierra en Puno» en *Debate Agrario* 1, octubre 1987, pp. 1-27.

²⁸ PUM, «Acuerdos del Ande Rojo» (Segunda Sesión Plenaria), Puno, Mayo de 1986, p. 7

años previos. La verdad era, sin embargo, que las cifras reflejaban en parte un uso clientelístico de los recursos estatales como, por supuesto, el magnetismo que el líder aprista seguía ejerciendo sobre la población. Hasta en tres oportunidades, el Presidente de la República se había hecho presente en Puno para apoyar a los candidatos de su partido, en especial a Luis Dueñas, candidato a la alcaldía provincial de la capital altiplánica, quien había llegado a Puno en agosto de 1985 identificándose rápidamente como el vocero local de la «revolución alanista». García lo impuso como candidato a pesar de las resistencias que suscitaba en el medio local.³⁰ Denunciar la cercanía del PUM con los insurgentes y atacar a la Iglesia progresista estuvieron entre sus temas de campaña favoritos. Increpaba al APRA y a la burocracia local, asimismo, por haber sido el freno a las transformaciones impulsadas por el mandatario. «Yo critico a la gente del PAP —decía— por no acelerar la reestructuración para evitar que otros aprovecharan de esto».

Los efectos de la derrota izquierdista no se limitaban a Puno, y no sólo se reavivaban las críticas al liderazgo del frente IU sino que obligaba a plantearse la cuestión de su agotamiento definitivo. El debate sobre el futuro de IU causaba división incluso dentro de los propios partidos integrantes del frente. En el PUM, mientras unos enfatizaban en la necesidad de acelerar la construcción del «partido revolucionario de masas» otros se inclinaban por convocar a un «acuerdo nacional» teniendo a la IU como eje fundamental.

Mientras el PUM mostraba todas las intenciones de pasar a la acción y en el PAP la tendencia más dialogante entraba en repliegue, el intento de concertación encabezado por Juan Carlos Málaga desde la CENECAMP daba señales de colapso. Moviendo influencias, empresas como Sollocota y Aricoma consiguieron la instalación en sus predios de fuerzas policiales y militares. Era la oportunidad de asestar a la reestructuración un golpe contundente. El conflicto entre la comunidad campesina de Chapioco y la CAP Parina es ilustrativo del problema que estaba generándose.³¹

²⁹ Entrevista con Víctor Torres.

³⁰ El discurso de Dueñas capturó el ánimo de los votantes en la capital departamental. En el norte del departamento, sin embargo, donde la FDCP tenía influencia mayor, la votación izquierdista se incrementó con respecto a las elecciones municipales anteriores: 4% en Azángaro, 24% en Carabaya, 10% en Melgar, 17% en Sandia y 25% en Lampa. En la primera de estas provincias, la izquierda había logrado retener la alcaldía provincial. En los distritos de Asillo, San Juan de Salinas, San Antón, José Domingo Choquehuanca, Chupa y Potoni, los representantes izquierdistas no habían tenido competidor puesto que el APRA se abstuvo de presentar candidatos. En Muñani el candidato de IU derrotó al del partido del gobierno. Lo contrario ocurrió en Arapa y Huatasani. En Chupa, el FNTC fue el vencedor en lo que sería uno de los escasos cuatro municipios distritales que el «cacerismo» ganaría en todo el departamento. Por 54% contra 42% el triunfo fue para el APRA en la provincia de Melgar. En Ayaviri, la capital provincial la izquierda perdió esta vez por una diferencia inapelable. Retuvo, sin embargo, sus bases locales más importantes —Macarí, Nuñoa, Umachiri, Cupi—, perdiendo, por escasísimo margen, en Santa Rosa y Orurillo. En Lampa y Huancané, por el contrario, el PAP alcanzó hegemonía casi completa incluso en distritos en que la FDCP reclamaba tener algunas de sus bases más combativas. En esta última provincia así como en Puno y San Román —las más urbanas del departamento— fue donde la izquierda perdió votación: -10%, -23% y -17% respectivamente. Las cifras electorales departamentales y provinciales han sido tomadas de Fernando Tuesta Soldevilla, «Perú Político en Cifras», Lima: Fundación F.Ebert, 1994.

³¹ «...en el RIMANACUY 86 fue entregado el título de propiedad No. 308-86 por el Señor Presidente de la República, según la resolución directoral No. 817-86 DCGR/AR de fecha 12 de setiembre de 1986, en donde a la comunidad de Chapioco le fue adjudicada una parte de la Cooperativa Agraria de Parina [...] Hasta la fecha no recibimos el terreno; solamente tenemos papel y no el terreno, porque los señores de la Cooperativa se resisten a entregarnos de dicho fundo y dicen que ellos no quieren saber nada de las leyes ni de la reestructuración [...] el jefe de la reestructuración de la Región

La CAP Parina, según la denuncia, estaba gestionando su reconocimiento como «comunidad empresarial», uno de cuyos gestores era un directivo de la cooperativa que es «empleado desde el tiempo de la Sociedad Ganadera del Sur». Por tal motivo: «...ya que el Ministerio no nos atiende ni los de Parina, la comunidad ha decidido tomar el terreno adjudicado en cualquier momento; porque tenemos el título de propiedad y un acta de entrega de la misma cooperativa de Parina en la fecha de 14 de octubre de 1986 por los señores de la comisión de reestructuración».³²

Definitivamente, el anuncio de la entrega del 1'100,000 has. y su desmentido en la práctica había azuzado la tensión rural.

De inicios de diciembre en adelante, una serie de marchas y tomas de tierras espontáneas comenzaron a producirse en las provincias de Azángaro y Melgar. La policía respondió con aspereza. De pronto, todos en el campo eran sospechosos y con la misma tenacidad con que solicitaban la tierra, las comunidades se veían obligadas a «pedir garantías» y demostrar que sus miembros no estaban involucrados en ningún acto de subversión.³³

A inicios de abril el IV Consejo Directivo de la FDCP convocó a una jornada de movilización a cumplirse el 19 de mayo fecha fijada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para realizar un paro nacional. Tomar la tierra para establecer empresas comunales, tal sería el objetivo del movimiento.

A fin de cuentas, por sus propios medios, sobrepasando la indolencia de los funcionarios locales, las comunidades darían cumplimiento a las medidas promulgadas por el Presidente de la República. Así, sobre los hombros de campesinos como los de Chapioco y Punta Jallapisi —con el respaldo de los parlamentarios del PUM, una serie de ONG y el de la iglesia local— la FDCP se convirtió en la instancia coordinadora de la más amplia movilización rural que la sierra había visto en décadas.

2.17.3. El 19 de mayo de 1987

En las primeras horas del 19 de mayo todo está dispuesto para la movilización. Como ríos humanos, los comuneros discurrirán hacia los terrenos sobre los que reclaman —a veces por generaciones— derecho a propiedad. A través de las actas redactadas al culminar la jornada

Agraria de Puno dice que Parina no les puede entregar porque ellos son dueños, eso nos hace pensar que hay un convenio o soborno por parte de la Cooperativa.»

³² Memorial de la Federación Unitaria de Campesinos de Aricoma al Presidente de la República Dr. Alan García Pérez. Archivo de la FDCP (AFDCP de aquí en adelante).

³³ Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Campesina de San Miguel (Asillo). Diciembre 19, 1986.

podemos explorar el sentido que los propios campesinos atribuían a los hechos que protagonizaron.³⁴

Justificar de manera exhaustiva por qué están recurriendo a una acción de fuerza es su preocupación mayor. La unanimidad de la decisión, la tradición comunal, el derecho legítimo a la justicia, son algunas de los argumentos justificativos. El incumplimiento de las leyes dictadas «en favor de las comunidades» por autoridades locales «corruptas y abusivas» surge como el argumento central. Ante estas, la comunidad aparece como organismo «natural» de la sociedad campesina, como instancia local del sistema político, moralmente capacitada para actuar en contra de quienes —al desoír las órdenes del Supremo Gobierno— incurren en una acción ilegal. Según los personeros de la comunidad Señor de Huanca del distrito José Domingo Choquehuanca:

Después de recorrer las nueve horas de marcha de sacrificio con todos los padres, madres e hijos y ancianos, dentro de los cuales se incluye minusválidos, haciéndole prevalecer nuestra solicitud interpuesta al Ministerio acatando los Decretos Supremos 005 y 006 en vista de que nos encontramos en unas parcelas de no más de 2 has., que no alcanzan para trabajar en agrícola y crianza de ganados, visto que no tenemos solución en el Ministerio, decidimos nuestra marcha a los fundos solicitados...

En algunos casos hay un énfasis más directo en la responsabilidad que cabe al Ejecutivo. Los comuneros de Jilla Cajamarca, en el distrito de Potoni, por ejemplo, afirman que su decisión de actuar tiene su origen en el hecho que: «el gobierno central de la república hizo caso omiso a la reestructuración de tierra para los campesinos». De una mayor beligerancia da muestras el memorial de los comuneros de Catuyo del mismo distrito de Potoni. Son «las falsas promesas y engaños del doctor Alan García Pérez y su gobierno aprista, sus «demagogias y corrupciones» lo que los impulsa a reivindicar «nuestras tierras que ha sido quitado de nuestros antepasados» y a rechazar «todas las violencias militares que hace este gobierno». El alza del costo de vida, la inflación, los bajos precios de «nuestros productos pecuarios» y una serie de servicios desatendidos completan la larga lista de quejas y demandas.

Unos se movilizan en protesta por el incumplimiento de los decretos de febrero otros buscando corregir los desaciertos del proceso de reestructuración. Son «los malos funcionarios de Reforma Agraria» coludidos con «el grupo de poder de la SAIS Huayna Capac» —alega la comunidad Choquechambi-Carpani del distrito de Muñani— quienes «nos han postergado nuevamente» de los beneficios de la reestructuración.

Igualmente insatisfechas, varias comunidades de los distritos de Paratía y Santa Lucía, provincia de Lampa —Caluta, anexo Chullunquiani, Ipocate y Chingani— suscriben un memorial colectivo en que exponen un conjunto de quejas. A Ipocate —la más poblada— se le ha adjudicado el fundo Cerrillos que adolece de limitaciones diversas: «se encuentra a un día de camino y nos

³⁴ Copias de los documentos que se citan a continuación fueron obtenidas en la propia sede de la FDCP en la ciudad de Puno durante los días que prosiguieron a las tomas, por razones de espacio omitimos la referencia específica a cada documento.

separa el caudaloso río Verde» además que «es seco de reducida extensión de 1,050 has.» por lo que no sirve «para poder realizar trabajos y producir». Reclaman, por lo tanto, la entrega de «la Unidad Andamarca por ser cerca y colindancia y de más hectáreas». La comunidad de Caluta, de otro lado, solicita el fundo Pocomoro «ya que necesita pastos por ser año seco». La Resolución Directoral adjudicándoselo fue expedida en junio. Esta no se ha efectivizado aún, sin embargo, debido a «la apelación interpuesta por parte de la CAT Santa Lucía» mediante un expediente «firmado por el Gerente y empleados, compadres y ahijados, sin participación de los directos trabajadores». De todas maneras, siendo Pocomoro insuficiente para «trabajar y producir como Empresa Comunal, por ser rocoso, seco y mayor parte es de ichus o pajas», se solicita la adjudicación de otros terrenos adicionales que, para prevenir que sean tomados por otras comunidades, son linderados y señalizados en la jornada del 19 de mayo.

El relato que los comuneros de Cancolly hacen de la toma de las 3,000 has. que reclaman como propias describe un patrón generalizado:

Se procedió a tomar y posesionar las tierras de los fundos arriba mencionados con las costumbres que se realizan a nivel del campo: orando al señor creador y luego se entonó las sagradas notas de nuestro Himno Nacional y luego se procedió a dar abrazos de fraternidad entre comuneros como signo de posesión de las tierras de Pachachaca, Cayconi, Sapapugio y el anexo Chejollohuata, y la recuperación de las tierras de nuestros antepasados, una vez hecho todo de acuerdo a las costumbres se procedió a instalar las chositas y toldos con sus banderas.

Siendo como es una movilización con escasos niveles de coordinación se presentan casos en que varios grupos aspiran al mismo terreno. Así, al amanecer del 19 de mayo, en circunstancias en que se encuentran abocados a la colocación de los hitos que demarcan la propiedad bajo reclamo, los comuneros de Unión Antauta encuentran: «...a nuestros compañeros comuneros de Chimpachuquisani y Killca Vilacollo, haciendo un intercambio de ideas y buena amistad recíprocamente y luego se procedió [a firmar] un acta con el feudatario Cipriano Vilca Quispe con fines de trabajar unánimemente.»

De hecho, fue en los alrededores de la SAIS Aricoma donde se produjeron las más duras disputas de la jornada.

La existencia de la Federación Unitaria de Campesinos de Aricoma (FUCA) —una cohesionada federación local que reunía a 35 comunidades de 11 distritos de las provincias de Carabaya, Sandía y Azángaro— explica las medidas defensivas a que recurrieron empresas como Aricoma o Sollocota. La FUCA había sido creada a inicios de 1986 con el fin de «hacer frente al no cumplimiento de las leyes del Gobierno para la reestructuración». A fines de abril de 1987, la FUCA organiza una marcha de sacrificio que moviliza a cerca de 8,000 campesinos —según los organizadores— respaldados por «los señores alcaldes de los consejos municipales de Crucero, Potoni y Usicayos», más el apoyo de «el Señor Gobernador del distrito de Crucero, los Tenientes

Gobernadores, Comisarios y Agentes Municipales». Se comprometen entonces a «jamás aceptar tierras de mala calidad» como lo «están haciendo las demás comunidades campesinas» exigiendo asimismo «un mínimo de 2,000 has. por comunidad ya que hay tierra sin trabajar por demás en estas empresas». Para el 19 de mayo, la FUCA acuerda que las comunidades demarcarán con «un cercado de champas o terrones, pacíficamente» la tierra que se reclama construyendo además chozas en las cuales permanecerán por 48 horas. El objetivo es lograr el envío inmediato de una «comisión reestructuradora democrática» que, con el aval del Presidente de la República, termine con la «inoperancia» de los funcionarios locales y el «despotismo de los gerentes». La SAIS Aricoma, sin embargo, se ha preparado para hacer frente al desafío.

Desde las primeras horas de la mañana del día 19, grupos compuestos por «sinchis», soldados y feudatarios hostilizan a los manifestantes. Así, mientras colocan sus hitos «de piedra y champas» en el «lugar denominado Tayquicunca,» comuneros de Potoni Cangalli son interceptados:

...por la patrulla de la Fuerza Armada solicitada por la SAIS Aricoma [...] movilizando en los vehículos de la Empresa 24 soldados y un Teniente, el conductor de un volquete llamado Don Marcos Apaza y el camión fue conducido por Don Martín López Pacha y acompañado de un guiador Don Martín Condori Huayaca y otros [...] el jefe del comando nos obligó a destruir los hitos, y también fuimos arrebatados de una Bandera Nacional de tamaño un metro y treinta aproximadamente y para cumplir con la destrucción de los hitos nos hemos visto custodiados por cinco soldados y más un representante de la SAIS Aricoma.

Los invasores, sin embargo, no se rinden. Se repliegan temporalmente, esperan la noche para retornar. Al día siguiente, los vigilantes de la SAIS inician el desalojo. Se busca identificar a los dirigentes. En algunos casos, feudatarios encapuchados los señalan. Se les interroga con aspereza. «Como no le hemos dado razón —denuncia el memorial de la comunidad Ccancolly— nos reprimió a todos los varones y como es una decisión de la Comunidad, también las mujeres se subieron al camión».

Por la tarde del 20, la central Cayacachi de la SAIS Aricoma comienza a llenarse de detenidos. La gente de Condoriri Suchini, Nueva Esperanza de Bajo Chilluma, Yaurefina Catuyo Chico y Ajoyani es la que lleva la peor parte. Los enfrenta un grupo de «sinchis» reforzado por «los señores feudatarios y comunidades socias de la empresa» que llegan de improviso a bordo de varios camiones. «Quemaron nuestras chozas y derramaron nuestros alimentos y apachurraron nuestra Bandera Peruana muy prepotentemente» asevera el testimonio. «Eramos como 70 -afirma otro- entre hombres, mujeres, niños, niñas, madres gestantes, madres con bebés, ancianos y ancianas que han sido llevados presos de una manera vilenta».

En la Central Cayacachi, mientras tanto, los detenidos han sido depositados en la sala de esquila de ganado:

...con hambre y frío, porque hemos dormido sobre el cemento, sin frazadas ni cueros, vigilados noche y día por los sinchis. Y en la noche a horas 7 p.m. del 20, los sinchis llamaron a las chicas, diciendo que esta noche, van a dormir con ellas, y nosotros no hemos permitido y al mismo tiempo amenazándonos de muerte a todos los presentes, que fuimos en número de 75 entre hombres y mujeres.

Al mediodía del 21, los detenidos llegan a 300. «Defendiéndose como leones», para ese entonces, la mayoría de sus bases comunales ha completado las 48 horas de ocupación acordadas y comienzan a confluir al pueblo de Crucero. Ahí, Porfirio Suni —secretario general de la FUCA— organiza el traslado de unos 2,500 campesinos —«en más de 10 camiones colaborados por el pueblo»— hasta la propia central Cayacachi con el fin de reclamar la libertad de los detenidos. «Después de un diálogo amplio con los feudatarios y el capitán de las fuerzas del orden», todos los detenidos menos uno —«por encontrársele una frase de senderista»— son liberados de su precaria prisión. Al día siguiente, un paro de 24 horas convocado por la FUCA y el SUTEP culmina con un mitin en la plaza de Crucero. Las fuerzas del orden se hacen nuevamente presentes, «armados hasta los dientes, como si fueran a la guerra entre el Perú y Chile». Un capitán se dirige a la audiencia: reconoce la legitimidad del reclamo de tierras y ofrece volver con Harold Rafael Chávez para realizar un diálogo directo sobre la cuestión de la tierra: «toda la masa estuvo esperando hasta la noche —relata el informe de la FUCA— y no se hizo presente ni el gerente ni el capitán con sus sinchis, el pueblo y el campesinado comprendió que esto era una burla.»

Mayor aún sería la irritación cuando al día siguiente «los sinchis en cantidad de 30 y feudatarios en más de 200 rodearon a la comunidad de Sallaconi» armados y encapuchados «como verdaderos sediciosos» con el fin de desalojarlos. La violencia se extiende entonces a otras zonas produciéndose redadas en las comunidades vecinas a San Antón. Acusándolos de senderistas —denunciará un portavoz de la federación de San Antón— los militares inquietan por los dirigentes. Cuentan con una lista de nombres. Un chofer de la SAIS Kenamari —dicen— actúa como guía. En Muñani —según un informe de la parroquia local— una familia de gamonales consigue el envío de tropas de la ciudad de Puno. Al llegar, «les regalaron corderos y ofrecieron una pachamanca para ganarles», indicándoles luego quiénes eran «los cabecillas de los terroristas». De la confrontación que se produce resulta el único muerto de la jornada: Pedro Laura Ochochoque de la comunidad.

En rigor, la movilización se había limitado al ámbito tradicional de influencia pumista. El gran peso de la lucha había recaído en el puñado de federaciones distritales que a través de Melgar, Azángaro y Carabaya constituían el verdadero sostén de la FDCP; San Antón, Asillo y Aricoma principalmente el 70% de las movilizaciones se produjo en Melgar, Azángaro y Carabaya. En Huancané como en Chucuito se produjo tan solo una acción, respectivamente. En Lampa y San Román, de la misma manera, la acción fue bastante limitada. Las de Melgar tenían la ventaja de contar con el apoyo de la FUCAM la única federación provincial con existencia real en todo el departamento. El anuncio de las tomas, sin embargo, había provocado una ola de invasiones que iba más allá de lo que la FDCP era capaz de controlar. Tal como decía la enviada por la comunidad

Pantipantini de Arapa —dando cuenta de la toma del fundo Rancho Chico de la SAIS Makaya— «le hacemos presente a la federación para que ellos defiendan a nivel provincial y departamental».

Inclusive en el caso de la FUCA —la federación distrital que había llevado sobre sus hombros el peso mayor del combate del 19 de mayo— la presencia del gremio departamental había sido nula. De ahí que su informe a la FDCP —fechado el 24 de mayo y firmado por Porfirio Suni— culminara con la exhortación siguiente:

Compañero Secretario General esperamos su denuncia, apoyo y defensa a esta organización del FUCA que integra a más de 35 comunidades que durante estos días está sufriendo atropellos por demás deplorables en la historia de Carabaya, Sandía y Azángaro. Hasta el momento no contamos con ningún apoyo ni de la FDCP, Derechos Humanos, ni de los compañeros parlamentarios por Puno. Nos sentimos muy solos y esperamos que venga algún representante a alentarnos y apoyarnos, pero si nuestra lucha es fuerte nunca retrocederemos, seguiremos con más fuerza hasta el triunfo.

A todas estas flaquezas se sumaba un hecho fundamental: que la movilización no había resultado en una ocupación efectiva de la tierra. Muchas de las marchas —como los protagonistas lo especificaban en sus actas— se habían limitado a «señalar» los territorios bajo reclamo. Una vez concluida la colocación de hitos habían procedido a retirarse con la esperanza de que —debido a las tomas— el gobierno enviaría «comisionados» con autoridad para proceder a la transferencia y titulación de la tierra. Básicamente lo que los comuneros requerían en ese punto era que la FDCP obtuviera sanción legal para sus reclamos.

De ahí entonces que una de las demandas presentadas en el diálogo del 5 de junio con el Ministro de Agricultura fuese: «el reconocimiento de la FDCP como central máxima del campesinado puneño».³⁵

De Lima la comisión de la FDCP no volvió con las manos vacías. El gobierno había aceptado formar una comisión con capacidad resolutive con participación de comunidades y feudatarios y con expresa exclusión de los gerentes. Había aceptado, además, legalizar las tomas y adoptar medidas para prevenir el saqueo del ganado. La Región Agraria XXI, asimismo, sería prontamente reorganizada. Poco era, no obstante, lo que la federación podía hacer para fiscalizar el cumplimiento de estos acuerdos. Los representantes de las EEAA, por su parte, no permanecieron inmóviles. Lograron que se convocara a una reunión con el fin de exponer ante los representantes del gobierno sus propios puntos de vista sobre los acontecimientos altiplánicos. A saber, que las tomas estaban provocando la destrucción de la industria ganadera puneña. Así, el 18 de junio de 1987, en la sala de reuniones de la CENECAMP en el centro de Lima, un grupo de gerentes y trabajadores se entrevistó con el viceministro de Agricultura. Entre los puntos que los representantes empresariales tocaron estaban: la superficialidad de los estudios de la comisión reestructuradora, las acciones ilegales contra propiedades tituladas, los desmanes de los agitadores.

³⁵ FDCP, «Planteamientos para el diálogo con el Ministro de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez.» Junio de 1987.

«Nosotros no tenemos administradores, soy un trabajador» aseveró el representante de la SAIS Huayna Cápac en cuyos terrenos se había producido la única baja fatal del 19 de mayo:

...nuestra empresa ha sido invadida por comuneros de Choquechambi-Carpani del distrito de Muñani, quienes dirigidos por el gobernador, alcalde, párroco, han invadido 300 has. de la mejor tierra de la empresa. Han introducido animales indiscriminadamente, extremadamente parasitados, lo que hace peligrar nuestro ganado. Han destruido los cercos de alambre, se han apoderado de ganado ovino. Los daños superan los 4 millones de intis. Los invasores han violado la Constitución. Desconocen nuestros derechos como vecinos, han negado nuestras peticiones para inscribir partidas, pagar autoavalúo. El párroco se niega a celebrar misas. Nos encontramos totalmente discriminados, sin amparo de ninguna clase, podemos sufrir nuevos atropellos.

A la comunidad Choquechambi-Carpani —continuó— se le han adjudicado 1,675 has. de los fundos Callatomasa y Puquini, invaden, sin embargo, el fundo Muñani Chico en el que «trabajamos 453 jefes de familia entre socios y trabajadores eventuales, con una población de 1,200 habitantes.»

De manera similar, Harold Rafael Chávez —gerente de la SAIS Aricoma, centro de la lucha del 19 de mayo— luego de justificar la presencia de las tropas en las instalaciones de su empresa advirtió del desastre productivo que el «avasallamiento» de las empresas habría de significar:

Se trata -dijo- de más de un millón de has. y de cerca de un millón de unidades ovinas. Todo un potencial ganadero muy importante para el país. Puno es un importante abastecedor de lana. La base de esto es el ganado seleccionado. ¿Qué va a ocurrir con ese ganado? ¿En manos de quién va a caer? No desprecio a los comuneros, ellos son pobres y tienen sus necesidades, pero nunca han manejado una ganadería de la forma como lo hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos profesionales, gente de experiencia, ellos nada. En este proceso de reestructuración no se está beneficiando el campesinado pobre, este no tiene ganado y no puede entrar al área de tomas. La empresa comunal puede resultar, aunque tengo mis dudas porque la comunidad no existe en la práctica. Son grupos de parceleros acostumbrados a la propiedad privada. Va a ser muy difícil integrarlos empresarialmente.

Al final de la tarde, el viceministro aseguró a los asistentes que, en ningún caso, el gobierno accedería a las demandas de liquidación de las empresas. Que, por el contrario, una vez redimensionadas, estas recibirían el apoyo necesario para su desarrollo. El 24 de junio —«día del campesino»—, más aún, se daría por concluido el proceso reestructurador procediéndose a la entrega de títulos de propiedad a las empresas que todavía no contaban con ellos.

En tales circunstancias, los asesores de la FDCP decidieron programar una nueva oleada de tomas para el mismo 24 de junio cuyos objetivo era: (1) convertir las «marchas en tomas», es decir, pasar ha ocupar directamente la tierra «señalizada» en la movilización anterior; (2) ocupar tierras fraudulentamente adjudicadas a «comunidades en formación» ficticias; (3) fortalecer o establecer federaciones distritales que refuerzan la capacidad de la FDCP de dar conducción local a los procesos de desmantelamiento de la propiedad asociativa; (4) avanzar en la ocupación —

estableciendo pactos entre comuneros y feudatarios— de empresas que —como las SAIS Makaya, San José e Illary— estaban «sin mando gerencial» y al borde de la liquidación; (5) expandir la oleada de tomas a la zona sur del departamento y (6) avanzar, «en la medida de lo posible» en la toma de las propiedades de autoridades como: el jefe de la Región Agraria XXI y los directores de Reforma Agraria y CORPUNO.³⁶

2.17.4. La aplicación del pensamiento Gonzalo

Sorpresivamente del «virtual autismo» con que venía actuando el PCP-SL pasó al «desesperado esfuerzo por explicar sus propuestas».³⁷ Respondía así a las nuevas condiciones en que se desenvolvía su alzamiento: su expansión fuera del escenario ayacuchano, la entrada a zonas nuevas con cuadros procedentes de otras regiones, la necesidad de dar coherencia a una lucha cada vez más descentralizada así como la creciente competencia con otras fuerzas políticas como el PUM en Puno. A través de referencias a las acciones pumistas en documentos partidarios o en artículos publicados en «El Diario», la dirección del PCP-SL dio inicio a una suerte de polémica no declarada con los antiguos «vanguardistas».

Tres temas sobresaldrían en este hipotético intercambio: (1) «política agraria»; (2) la naturaleza del partido y (3) la construcción del «nuevo poder».

Con respecto al primer punto, el tema central era la crítica que el PCP-SL hacía del enfoque gremialista del PUM y sobre todo a su recurso a la táctica de tomas de tierra. En el altiplano, sostenía Guzmán, la rebelión campesina no podía detenerse. En circunstancias en que los campesinos tomaban la tierra por decisión propia, no obstante, la CCP se interponía como instancia negociadora. Ellos —continuaba el argumento— están buscando arreglos, en tanto que las masas «por si solas, pueden pasar a realizar las acciones que les ha enseñado el partido».³⁸

Sin lucha armada las tomas de tierras, simplemente, derivaban «en evolución dentro de las leyes agrarias.» Invasiones, cosechas colectivas, repartos de ganado, confiscación de terrenos —«apuntando a la propiedad asociativa y conjurando la no asociativa»— todo «bajo la dirección del partido» y «estableciendo bases de apoyo con lucha armada» eran la única garantía de triunfo.³⁹ La tierra —señalaría a inicios del 86 el líder maoísta— «la defienden los campesinos, no nosotros». Son ellos:

...quienes tienen que aprender que la tierra se conquista con las armas y que con las armas se defiende [...] En esta línea tenemos que poner a miles de campesinos y que los demás vean lo que hacemos para que también lo hagan ellos. Con energía endiablada tenemos que organizar y organizar todo lo que podamos.⁴⁰

³⁶ Anónimo, «Conclusiones de las tomas del 19 de mayo y directivas para el 24 de junio.»

³⁷ Raúl Wiener, editor, «Guerra e Ideología» (Debate entre el PUM y el PCP-SL), Lima: Ediciones Amauta, 1990, 9.

³⁸ PCP, «Reunión Nacional de Dirigentes y Cuadros.» Abril 7, 1986. AGC

³⁹ «Conclusiones del proceso de la lucha armada.» Marzo, 1984, AGC.

⁴⁰ «Intervención de la dirección» en Ibid. 04.

Algunas semanas después, el PCP-SL reclamaría para sí la conducción real del movimiento altiplánico:

En el sur, sobretodo en el convulsionado Puno, se han llevado adelante asaltos a puestos policiales como el de San Antón, toma de pueblos como en San José y Chupa, arrasamientos y sabotajes a SAIS, así como la invasión armada de tierras movilizand o a 10,000 campesinos contra las EEAA que concentran inmensamente la tierra en su poder, lo cual ha llevado a las FFPP a declarar zonas rojas a las provincias de San Román, Azángaro, Melgar y que crezca el clamor reaccionario pidiendo se declare el estado de emergencia e intervengan las fuerzas armadas; así la miseria, las catástrofes naturales y la acción armada están haciendo de Puno un volcán altamente explosivo.⁴¹

A mediados de 1988, Guzmán reiteró el tema en la llamada «entrevista del siglo». «Somos nosotros —afirmó— los que empezamos las invasiones de tierras en Puno mientras que el PUM discutía con el APRA sobre cómo hacerlo.» Más que conducir un movimiento de ruptura - sostendría el líder senderista- el APRA y el PUM se habían dado la mano para «bajar la presión de las aguas» en tanto que «la simple consecución de la tierra» desligada de «una lucha por la conquista del poder» lo único que generaba era «un mayor acoplamiento al sistema». En Puno, por lo tanto, el PUM había reeditado «lo que hicieron el 74 cuando eran VR»: negociar, tranzar, liquidar el movimiento. «Hagan acto de contrición —les demandaba Guzmán— y vean si no han servido incluso delatando para que sean golpeadas nuestras fuerzas».⁴²

Sin embargo, —reconocía Guzmán— lo hecho en Puno por el PUM demostraba el nivel de «explosividad de las masas» en esa región del país.⁴³ Demostraba, más aún, cuán importante era no descuidar las reivindicaciones de la población. «Se nos imputa no tener línea específica para la lucha económica y política de las masas», afirmó, pero no es así, lo que sucede es que tenemos otra manera —«contraria a la oportunista y revisionista, nueva y distinta a la tradicional»— de acoger las demandas concretas de la población. «Desarrollar la lucha reivindicativa en función del Poder» ese era, según el PCP-SL, «el principio político incommovible del trabajo de masas».⁴⁴ Tal era la distinción última entre el campesinismo pumista y la «guerra popular»: la mera agitación sin perspectiva revolucionaria versus la construcción del «nuevo poder».

«Descoyuntar al poder gamonal» tomando al «trabajo campesino como base» y al «trabajo militar como guía». Así definía Abimael Guzmán el trabajo de su organización en el campo.⁴⁵ Tal objetivo implicaba «ir a lo hondo y profundo de las masas» y buscar levantarlas contra esa «costra» dirigencial «que sirve a la reacción».⁴⁶ La acción de sus columnas generaría una polarización de los

⁴¹ «Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial» (agosto de 1986) en L. Arce Borja, *Guerra Popular en el Perú*, pp. 217-3 04.

⁴² «Entrevista del siglo», p. 37.

⁴³ PCP, «Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso» (Primera parte). Enero 1988.

⁴⁴ «Bases de Discusión», p. 387.

⁴⁵ «Conclusiones del proceso de la lucha armada»

⁴⁶ «Bases de Discusión», p. 387.

conflictos locales que iría socavando el edificio organizativo que el revisionismo había levantado con el fin de «aherrojar» a las masas para desviarlas de su camino de rebeldía. Los «paros armados» eran, en tal sentido, el instrumento más adecuado para traerse abajo dicha organización revisionista ya que estos, aparte de enfrentar al Estado, cuestionaban los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) y otras «formas gremiales y asociativas caducas» que «la reacción necesita como patitas para apoyarse, y el revisionismo y el oportunismo para cabalgar sobre las masas».⁴⁷

La creación de Comités Populares Abiertos era el objetivo hacia el cual el PCP-SL debía orientarse promediando el año 1988.⁴⁸ Hacerlo requería apurar el paso, dejar la «defensa pasiva,» prestando «cada vez mayor atención a golpear autoridades. Es bueno. Se acerca al medio centenar de alcaldes aniquilados. En Vietnam del Sur se aniquiló trece mil autoridades para generar vacío de poder.»⁴⁹ Para ser efectivos, sin embargo, los aniquilamientos selectivos debían ser adecuadamente preparados. Debía escogerse a «los más recalcitrantes y odiados»; «cuanto más cargo y nivel tengan mejor». Los alcaldes, jueces, y «toda la variopinta de gamonales» no eran, a fin de cuentas, sino «felipillos locales», quiénes: «aunque con tez y apariencia de humildes campesinos, sirvieron y sirven a los explotadores y traicionan a su clase; lo hicieron en la época de la Conquista y lo hacen ahora en la República. Estos felipillos ya están condenados por el pueblo».⁵⁰

Al respecto, los documentos senderistas aconsejaban no cometer el error de creer que la masa entendería espontáneamente estas verdades históricas. Los aniquilamientos, por lo tanto, debían ser explicados con el mayor cuidado. No hacerlo producía graves malentendidos. De ello un buen ejemplo era lo ocurrido con el dirigente textil pumista Enrique Castilla, asesinado por un comando senderista en las afueras de Lima a fines de octubre de 1989:

En el caso del vendeobrero del PUM, el problema que se presentó fue ejecutarlo sin haberlo desenmascarado ante el proletariado y el pueblo; debieron difundirse todas sus maldades, cómo traicionaba las luchas, cómo se vendía a la empresa, cómo suspendía el congreso textil cada vez que nosotros actuábamos, revelando temor al debate y delatándonos como ‘infiltrados.’ Si todo esto no se difunde, si no se hace campaña para desenmascararlo, entonces la masa no conoce sino un solo aspecto y tergiversado de su comportamiento.⁵¹

Frente a la impotencia pumista y el fracaso del «trapezio andino» aprista, en medio de lo que se comenzaba a denominar como «la más profunda crisis del país desde la Guerra del Pacífico», el PCP-SL podía reclamar haber convertido a la sierra en su conjunto en el «gran teatro de la guerra popular».⁵² Como aseveraría la dirección senderista algunos años más tarde: «queda

⁴⁷ «Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso» (Primera parte), p. 16

⁴⁸ Véase al respecto, «Los Comités Populares Abiertos: En una base guerrillera. Reportaje a Mando Político» en *El Diario Internacional* no. 11, Bruselas, febrero de 1992, pp. 10-12.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 5.

⁵⁰ *Causa Proletaria* 5, s/f. AGG.

⁵¹ PCP, «Sobre el balance de la aplicación de la primera campaña del plan para impulsar el desarrollo de las bases de apoyo». Febrero 1990.

⁵² *El Diario*, Julio 24, 1988, p. 27.

claro que estamos desenvolviéndonos en la Sierra del país», en el área que había sido «históricamente» el «eje de vertebración» del país, donde «cuando los incas, en la guerra con Chile fue la parte que más se defendió y es donde pueden replegarse fuerzas ante un ataque extranjero.»⁵³

1986, como ya se ha explicado, fue un punto de quiebre en la intensidad de la «guerra popular» en el norte del altiplano. Sistemáticamente las principales empresas del área son objeto de «arrasamientos». Al incendio de las instalaciones prosigue el saqueo y el robo de ganado habitualmente. Son grupos pequeños los que actúan. En otras ocasiones, como en los asaltos a la SAIS Macaya en marzo o a la ERPS Kunurana en junio, decenas de pobladores son convocados a participar.

No es fácil saber con exactitud el mensaje que los cuadros senderistas portan. En todas partes se refieren, por supuesto, al problema de la tierra. En los fundos Altagracia y San Miguel de la SAIS San José —según un testimonio— prometen «asesorar en diversos problemas, incluso técnicos». En otra incursión anunciarían «estar organizando una fuerza de base del ejército popular, una organización que salga del pueblo, que no pertenezca ni al APRA ni a IU», cuyo objetivo será saldar, definitivamente, el problema de la tierra.

Imparten, asimismo, una justicia cruda y elemental: ajustician abigeos, amonestan a choferes abusivos, conminan a profesores a cumplir sus labores con responsabilidad. Los policías que actúan contra el pueblo son los que llevan la peor parte. Afirman —en diversas oportunidades— no tener nada contra la Iglesia, que ya más adelante «vendrá la lucha ideológica». «No son ustedes sino el Estado —habría manifestado un cuadro senderista a un sacerdote local— nuestro enemigo principal». Impresiona también su dinamismo y movilidad en un extenso territorio. Manejan al detalle el movimiento de vehículos cuya captura les permite breves e intensas campañas al cabo de las cuales los integrantes de la columna armada se camuflan en los barrios juliaqueños o puneños.

La toma de pueblos y el ajusticiamiento de autoridades complementa el «arrasamiento» empresarial. La toma de Chupa, por ejemplo, que Guzmán exhibirá en su documento de agosto de 1986 como prueba de la primacía de su partido en el altiplano. Son 20 individuos los que entran a esa localidad el 16 de febrero de 1986. Las principales autoridades del pueblo son de inmediato capturadas, las tiendas principales saqueadas, los víveres que almacenan repartidos. Comienza el «juicio popular» y el infortunado gobernador es el primero en caer, la población ruega a los senderistas que paren la matanza, a lo cual acceden. La advertencia ha sido hecha y todas las autoridades de Chupa renunciarán poco después.

Los 2 asesinatos de 1985 habrán de convertirse en 32 al año siguiente. Entre mayo y junio de 1986 y, nuevamente, en diciembre y enero del año siguiente se producen operativos policiales que suscitan múltiples protestas. Debido a que la participación de varios profesores en acciones

⁵³ PCP, Comité Central, «¡Elecciones no! ¡Guerra Popular Sí! Balance y Perspectiva de la Guerra Popular en el Perú» (1990), *El Diario*, Febrero 8, 1991, p. 4.

subversivas es ya un hecho comprobado, escuelas y personal docente son blancos habituales de la acción represiva. Los memoriales denunciando robos, vejámenes, detenciones injustificadas, se acumulan en los archivos del CODEH-Puno y las Vicarías de la Solidaridad. A comienzos de enero, la noticia de que una lista de supuestos colaboradores ha caído en manos de la policía, acrecienta el miedo a la presencia subversiva. 37 personas son detenidas en Asillo entre el 14 y el 16 de ese mes. El 21 de enero, la asamblea de alcaldes distritales de la provincia de Azángaro se pronuncia: «...las fuerzas combinadas de seguridad del Ejército, PIP, GC y GR, desarrollan acciones de violencia deteniendo en las carreteras y comunidades campesinas en forma discriminada. Como autoridades, hemos recibido las quejas de los agraviados quienes manifiestan que sufren maltratos, despojos de enseres e inclusive dinero en efectivo».

Los datos revelados por la población permiten a la policía reconstruir el andamiaje de células y bases de apoyo. Los integrantes de la «fuerza principal» —veteranos de otras regiones, y con más de un ingreso a prisión, en su mayoría— son rápidamente identificados.

El 15 de diciembre tuvo lugar una incursión a la mina San Rafael en el distrito de Antauta, Carabaya. Unos 800 millones de intis y más de 200 cajas de dinamita fueron sustraídos. Un médico y dos ingenieros son asesinados. Es el mayor robo de explosivos ocurrido en la región. Un par de días después, en la localidad de Chacocunca, dos de los atacantes son intervenidos por la policía en una acción de rutina. Se les encuentra una ametralladora, bombas caseras y municiones. Son obligados a revelar el paradero de sus cómplices. Se produce un enfrentamiento y dos policías quedan heridos, mientras una miembro de la «fuerza local» es muerta y los otros son apresados, pero la «fuerza principal» completa logra abrirse paso a balazos.

Las declaraciones de los detenidos proporcionan algunas pistas sobre la composición de la fuerza guerrillera senderista.⁵⁴ Son seis hombres y una mujer, todos ellos oriundos de Puno.

Luego que realizan los ataques al Municipio de Chupas y a la SAIS Illary, donde mueren los guardias Fuentes y Sulluca. En todas estas acciones los miembros de la «fuerza local» actúan como personal de apoyo.

«Teófilo» es un agricultor de veinte años. Afirma ser miembro del PCP-SL desde julio de 1986 en que participa en el ataque contra una EEAA azangarina: «Posteriormente —continúa— me retiré de las acciones subversivas por motivos de trabajo ya que tenía que realizar gestiones con el Banco Agrario sobre préstamos de dinero para labrar mis tierras ubicadas en la comunidad de San Miguel (Asillo)».

No es sino hasta el mes de noviembre en que «Rubén» lo recluta nuevamente —«bajo amenazas» según su declaración— con el fin de atacar la SAIS Illary. Con respecto a las muertes ahí ocurridas, «Teófilo» afirma que «los autores de tales hechos han sido los de la fuerza principal ya que yo siempre iba más atrás, con los demás compañeros, cuidando las espaldas». Como

⁵⁴ La información que prosigue ha sido tomada de copias de atestados policiales depositadas en el archivo del Comité de Derechos Humanos de Puno (CODEH-Puno)

«Pedro» en el ataque a la mina de San Rafael recibe granadas caseras «para que las utilizara en caso de que vengan extraños, ubicándome fuera de la mina». Los dirigentes «fueron los que entraron a la mina y después de un rato me llamaron para cargar las cajas de dinamita.»

Como en los casos anteriores, «Alberto» (21 años), «Juana» (16) —estudiante de primero de secundaria— y «Esteban» (13), de la localidad de Curayllo, Azángaro, reconocen haber actuado bajo amenazas, en el asalto de la mina San Rafael. Una foto de estos últimos tomada al momento de su detención muestra a dos jovencitos atemorizados. «Juana» —con polleras y descalza— parece estar a punto de llorar.

«Esteban» revela haber participado en siete «escuelas populares» dirigidas por «Anselmo» y «Ricardo». En una de ellas han estado presentes «toda la célula y los padres de familia de la escuela primaria de Huaraypata, habiendo asistido algo más de 40 personas». En vísperas del asalto a la mina los miembros de la «fuerza local» habían sido reunidos en Progreso, cerca de Asillo, donde uno de los «principales» les había mostrado un plano de la mina, instruyéndoles de la siguiente manera: «Por nuestro Presidente Gonzalo, saludando al PCP, su sujeción plena e incondicional, les voy a bajar la tarea de atacar la mina de San Rafael.»

«Horacio» y «Pascual» —que no habían participado en esa acción— son detenidos algunos meses después. Sus declaraciones guardan coincidencia con las anteriores. De 28 años y domiciliado en la parcialidad de Urpy-Jallapisi, «Horacio» declara ser operador de tractor en el fundo San Martín, a 3 kilómetros de la ciudad de Azángaro. Su historia es la siguiente: el 2 de diciembre dos sujetos llegan al fundo en que trabaja «preguntando por el nombre de mi patrón». Al contestarles que no se encontraba indican que están ahí para pasar la noche. Minutos después, hace su aparición un grupo de 13 personas. Mientras unos duermen —manifiesta «Horacio»— «otros vigilaban por turnos los alrededores de la casa». Al día siguiente «me llamaron para matar carnero para que comieran», para luego celebrar una fiesta por el «día del onomástico del Camarada Gonzalo». No es sino hasta el día 18 en que «Horacio» vuelve a tener contacto con los subversivos. Es entonces cuando «Anselmo»: «...me hizo entrega de un millón de Intis para que los guardara y si fuera posible los cambiara en dólares, ya que la policía lo estaba persiguiendo, ya que habían tenido un enfrentamiento con ellos en la comunidad de Chacocunca».

Siguiendo las instrucciones «Horacio» obtiene los dólares en un establecimiento comercial de los alrededores del mercado de Juliaca. En las semanas siguientes dos enviados de «Anselmo» llegan a solicitarle determinadas sumas de dinero. En abril, finalmente, el propio «Anselmo» retorna para recoger el dinero restante. Fue la última vez que supo de él.

Agricultor y estudiante del Instituto Superior Pedagógico de Azángaro «Pascual» reconoce haber participado por lo menos en dos acciones. Reside con sus padres en el fundo Balsapata de Azángaro. La noche del 3 de diciembre fue intervenido por dos individuos armados que le pidieron que los lleve en su moto a un lugar que resultó siendo el mencionado fundo San Martín. Ahí se encontró a un grupo que «bebía licor y bailaba»: «Siendo las tres de la mañana —continúa

«Pascual»— y encontrándome en estado de ebriedad me retiré. Hago presente que cuando me encontraba con los terroristas celebrando el día del Presidente Gonzalo todos nosotros dábamos vivas a la lucha armada».

Días después «Pascual» recibe la visita de «Alfredo» quien le comunica que «todos los componentes del PCP-SL íbamos a tener una reunión en el campo y nos dirigimos a un cerro llamado Punta Sahuacasi.» Tres días después, caminando de noche y ocultándose de día, llegan a Tirapata. Es entonces que «Anselmo nos dice a todos que vamos a cumplir una tarea o sea golpear el Puesto del Destacamento de la GRP.» «Pascual» recibe una pistola ametralladora y dos granadas de mano. En un volquete robado, luego de ocasionar dos bajas y apoderarse de armamento, los subversivos huyen con dirección a Ayaviri. Al llegar a la ciudad sostienen un nuevo enfrentamiento con tres miembros de la GR. Herido en el ataque de Tirapata, «Juan», entretanto, agoniza en la tolva del vehículo. De ahí:

Nos dirigimos a la comunidad de Huamanruro lugar donde llega cadáver el (c) «Juan» y con la ayuda de varias personas de la referida comunidad, enterramos al (c) «Juan» y «Anselmo» tomó la palabra y dijo que era un compañero que había luchado por los intereses del pueblo, y hoy se nos vá y comenzó a llorar, ya que dijo que ambos se conocieron cuando iniciaron la lucha armada, envolviéndolo con una frazada lo enterramos.

Luego del sepelio «nos dirigimos a la comunidad en donde nos invitaron comida y nos quedamos toda la noche» para caminar al día siguiente hasta Santa Rosa. Una vez ahí, relata «Pascual»:

...al Anselmo le dije que me diera permiso para que me matriculara en el Instituto y me negó el permiso y al insistir, accedió a mi petición y luego me retiré hacia Azángaro y en el mes de mayo [1987] me enteré que mis compañeros habían muerto en un enfrentamiento [...] Yo no participé en el asalto a la mina de San Rafael, enterándome por información periodística de lo sucedido, presumiendo que los autores son los mismos que atacamos los puestos de la Guardia Republicana de Tirapata y Ayaviri.

Impulsada por una singular combinación de voluntarismo y tenacidad, en doce escasos meses, la columna dirigida por «Anselmo» había colocado a Puno en el mapa nacional de la violencia. Precaria y audaz, su sobrevivencia dependía, en última instancia, de la colaboración de una población que acaso la respetaba porque la temía; pero que no parece dispuesta a desistir ni de la lucha legal ni de la movilización a través de los gremios «revisionistas». Será en San Juan de Salinas donde este delicado equilibrio se rompa por primera vez.

Debido a su ubicación estratégica —como uno de los puntos que, con Asillo y San José definen el triángulo de acción guerrillera en el norte de Puno— el control de San Juan de Salinas reviste para PCP-SL una importancia especial. Es ahí donde nació la FDCP en 1979. A mediados de 1986, Zenobio Huarsaya —fundador de la FDCP— era uno de los colaboradores con que los insurgentes contaban en dicha población. Segundino Machaca Quispe era el otro. A mediados de

octubre Machaca es ajusticiado por «soplón». Su cadáver es arrojado en las afueras del pueblo «con orden de que no lo toquen», su tío, Juez de paz, desobedece y corre por ello la misma suerte.

La columna había ingresado a San Juan de Salinas en varias oportunidades, incendiando la empresa municipal de la sal —el recurso económico más importante del pueblo— buscando zanjar los problemas que enfrentan a los trabajadores con el concesionario de los saladeros. La sede municipal enfrentó similar destino en dos oportunidades. La posta médica fue despojada de equipo y medicamentos. Los comerciantes del pueblo se encontraban amenazados y bajo pagos de cupos. «Anselmo» entró al pueblo en cierta ocasión «con unas 25 cabezas de ganado indicando que las maten para comerlas». La gente «no le hizo caso». La policía llegó poco después, recuperándolas. A raíz de este incidente —concluye el testimonio— varios residentes serían tildados de «soplones».⁵⁵

Hacia fines de octubre de 1986, San Juan de Salinas era un pueblo sin autoridades ni representantes, intimidado y expuesto a las furias de policías y subversivos. Es en esas circunstancias que, en cabildo abierto, los vecinos piden a Zenobio Huarsaya lanzar su postulación a la alcaldía. Huarsaya obtiene 303 de los 552 votos emitidos. Los «ayacuchanos» —afirma el testimonio— no podían permitirlo y el 8 de abril de 1987 «el hippie» enfrentó su destino. Siete hombres y dos mujeres lo arrastran de su domicilio hasta la plaza una mañana de miércoles. Su mujer y sus hijos miran desesperados: «Lo arrodillaron ante 200 personas, preguntaron si lo mataban y la gente clamó que no lo hicieran pidiendo que le den tiempo para que renunciara a lo que los terroristas indicaron que estaban en guerra y que de todas maneras Huarsaya trabajaba para el gobierno. La gente estaba enardecida».⁵⁶

No lo suficiente como para animarse a avasallar al puñado de encapuchados —solo uno tenía la cara destapada— que conducían a Huarsaya a su fin. La venganza vendrá más tarde bajo la forma de una colaboración con la policía. Días después del crimen, en efecto, la columna armada comandada por «Anselmo» es diezmada cerca de San Juan de Salinas, los que sobreviven huyen hacia el Cuzco.

2.17.5. *Lucha Armada versus Tercera Vía*

Los acontecimientos puneños de abril/mayo de 1987 eran motivo de optimismo para aquellos que seguían creyendo en una «tercera vía». Al demostrar que un sólido movimiento social podía ser capaz de contener la polarización, el norte puneño aparecía como modelo de pacificación sin «militarización». Según el Instituto de Defensa Legal, en Puno, «como quizá en ningún otro lugar del país, se configura un tipo de sociedad civil en la que convergen una importante organización campesina, partidos de izquierda de significativa influencia en la vida gremial, una Iglesia con

⁵⁵ Guardia Civil del Perú, Jefatura Provincial de San Román, «Atestado 21-SSE-JP»

⁵⁶ Ibid.

fuerte asentamiento campesino, ONGs legitimadas y con propuestas de desarrollo para la región y organismos de DDHH con cierto nivel de desarrollo. Todo ello había convertido a Puno en un referente nacional, de una forma relativamente exitosa de enfrentar el problema de la violencia, no basada principalmente en la represión y en el contraterror, sino asentada en la movilización y la organización de la población». En Puno —aseveró el diputado pumista Alberto Quintanilla Chacón— el PCP-SL «ha sido derrotado política y militarmente, pueden reconstituirse, pero no podrán afirmarse en esta tierra que ya los ha rechazado».⁵⁷

En lo inmediato, la contención del PCP-SL podía permitir: (1) un fortalecimiento de la FDCP a nivel local: canalizando el espíritu combativo desplegado durante las tomas de tierras del 19 de mayo hacia la creación de organismos que —como las federaciones de Aricoma o San Antón— centralizaran las luchas de un conjunto de comunidades en una determinada extensión territorial y (2) consolidar a la FDCP como portavoz indiscutido del movimiento campesino departamental. De obtener para los campesinos la titulación de la tierra tomada —observó un trabajador del IER Waqrani— «las federaciones crecerían como la espuma».⁵⁸ De ser así, quizás el PUM podría llegar a ser para la sierra sur, lo que el APRA para la costa norte: la fuerza hegemónica, el gran agente de reivindicación social y cambio político.

Acaso conociendo las debilidades del movimiento encabezado por el PUM el gobierno no mostraba mayor interés en cumplir con los acuerdos pactados en el diálogo entre el Ministro de Agricultura y la FDCP. Un mes y medio después ninguno de los puntos acordados había sido cumplido.⁵⁹ Solo en septiembre la Región Agraria XXI fue finalmente reorganizada. Con su nuevo director, la FDCP pactó un nuevo acuerdo. Se estipularon medidas para poner en funcionamiento la «comisión paritaria» —sin gerentes y con participación de feudatarios y comunidades— acordada cuatro meses atrás. Desconociendo acuerdos previos, sin embargo, no se le reconocía «capacidad resolutive». Se limitaría a «tratar los problemas irresueltos referentes al proceso de reestructuración».⁶⁰

El problema de fondo, no obstante, seguía en pie: el gobierno pretendía dar por concluida la reestructuración de las EEAA habiendo repartido menos de la mitad de las 1'100,000 has. prometidas; negándose, de otro lado, a titular otras 364,000 has. tomadas directamente por los campesinos del 19 de mayo en adelante. Desafiante, en el mes de octubre, la FDCP anunció que estas últimas serían tituladas por el propio gremio campesino.

El gremio y las autoridades llegaron a nuevos acuerdos que serían, nuevamente, mayormente incumplidos. La «guerra de comunicados» continuaría por varios meses más. De hecho, se produjeron nuevas movilizaciones. La del 24 de junio, por ejemplo, que transfirió a las comunidades varios miles de hectáreas más o la toma de la central Moro que abrió paso a la

⁵⁷ *La República*, Julio 26, 19987, p. 19.

⁵⁸ Entrevista con Fortunato Alegría. Ayaviri, Mayo 14, 1987.

⁵⁹ FDCP, «Nuevo plan aprista: Cerrar la reestructuración y reprimir al campesinado» en *La República*, Julio 24, 1987.

⁶⁰ «CCP, «Puno: un paso adelante en la lucha por la tierra y la paz» en *La Voz*, Abril 10, 1987.

liquidación de la SAIS Buenavista. Pero, la FDCP tenía un papel cada vez menor. Fueron tres oleadas de tomas las que se produjeron entre 1985 y 1987 recordaría Alberto Quintanilla Chacón años después. De ellas, la primera —Kunurana, diciembre de 1985— había sido bien organizada. La siguiente —19 de mayo de 1987— «no tuvo el mismo nivel de preparación, fue en realidad, un desborde».⁶¹ Menos planificada todavía fue la tercera oleada de junio/julio ocurrida cuando las empresas habían recobrado algo de iniciativa.

En julio de 1989, de visita en Puno, el Ministro del Interior planteó la posibilidad de armar a los feudatarios convirtiendo a las EEAA en una suerte de bases contrasubversivas. Objetada por «diversas instituciones y personalidades,» la propuesta fue dejada de lado. Este hecho, sumado a las incursiones de la recientemente creada Unidad Táctica Contrasubversiva (UTA) contra las comunidades «conflictivas,» complicaba la posibilidad de fortalecer a las federaciones locales como la federación del distrito de Aricoma (FUCA), provincia de Carabaya, que resultaría, una vez más, poco menos que paradigmático.

A fines de septiembre, cinco asistentes a un «cursillo de fertilización y siembra de papas» organizado por esa federación en la localidad de Crucero son detenidos por la policía que, «a patadas y culatazos y sin ninguna explicación» los conduce en una camioneta de la empresa Aricoma «a los calabozos de la Central Cayacachi.»⁶² Como había ocurrido en mayo, al día siguiente, 250 «delegados de las comunidades» se dirigen a ese lugar —sede de la SAIS Aricoma— con el fin de demandar la libertad de los detenidos. De pronto:

...nos alcanzaron los policías de la Central Cayacachi en número de 20, acompañados de civiles, soltando balas a diestra y siniestra, hiriéndonos a 7 comuneros de gravedad en diferentes partes del cuerpo, contra todos nosotros indefensos, sin armas de ninguna naturaleza, cuando íbamos a conversar y hacer nuestros reclamos, en forma tranquila y pacífica.

En las horas que prosiguen al choque —según sostiene el testimonio de Porfirio Suni, su secretario general— las comunidades de Usicayos y Coaza son intervenidas por las «fuerzas del orden», las que:

...quemaron ropas, chozas, salón comunal, llevándose sogas, *llikllas*, frazadas, radiograbadoras, dinero, relojes, gallinas y diciéndonos que los vamos a matar haciendo parrilladas y que Alan nos manda que estemos contra el campesino, golpeando a las mujeres como les venía en gana y a algunos varones les han metido guano de caballo a la boca diciendo hablen ahora.⁶³

La violencia policial se había convertido en un problema endémico. «Sin ruidos ni grandes despliegues» —observó la Vicaría de la Solidaridad— Puno se militariza»: «Llegan a los pueblos y

⁶¹ Entrevista con Alberto Quintanilla Chacón, Agosto 12, 1992.

⁶² FUCA, «Sucesos ocurridos los días 24 y 25 de septiembre en Crucero-Carabaya», 25-9-1987. Las citas que prosiguen provienen de este documento.

⁶³ Ibid.

levantan su cuartel en locales comunales o en centros de servicio como centros de salud o escuelas. Nadie protesta, ni denuncia, ni condena. Se van aceptando las cosas así, por miedo a los unos y a los otros. Imponiéndose, poco a poco, la ley del terror, de la resignación y de la muerte.»⁶⁴

El 30 de marzo de 1988, finalmente, el gobierno anunció la conclusión del proceso de reestructuración. La «fase de transferencia de tierra» quedaba «definitivamente» cerrada. A partir de entonces, la tierra «en poder de las empresas reestructuradas» adquiriría la condición de «intangible».⁶⁵

Cinco semanas después —al cabo de casi un año de silencio tras el aniquilamiento de su columna en Cututuni, Azángaro— el PCP-SL reaparecía en el norte del departamento con un devastador ataque al puesto policial de Crucero. Seis efectivos y el juez de paz de la localidad fueron victimados en la acción. «No está confirmado —informó la Vicaría de la Solidaridad de Puno— si sus cuerpos fueron quemados antes o después de muertos.»⁶⁶ A continuación, los subversivos se apoderaron de dos camionetas de la Misión Luterana a bordo de las cuáles se dirigieron a la central Cambría de la SAIS Picotani «donde causan destrozos en un camión, volquete, almacén, oficinas y otras instalaciones». El 19 de mayo, finalmente, entran al fundo Caluyo de la SAIS Cerro Grande —en la frontera de las provincias de Azángaro y Huancané— donde causan similar destrucción y realizan «repartos de ganado ovino y vacuno a las comunidades campesinas cercanas al fundo». Un mes después, Jaime Centeno Jove, sucesor de Zenobio Huarsaya en la alcaldía de San Juan de Salinas, es asesinado en la plaza principal de la ciudad de Azángaro.

Inmediatamente después del ataque al puesto de Crucero, policías de la Central Cayacachi detienen a Porfirio Suni —secretario general de la FUCA— quien, esa misma noche, «con violencia y malos tratos es conducido a Ayaviri en el mismo camión que transportaba los cadáveres de los policías muertos el día anterior». Bajo tortura, Suni declara de manera forzada haber colaborado en el ataque al puesto policial, implicando, asimismo, al párroco de Crucero, Bertho Muriel Pino.

En las semanas siguientes, la UTA realiza un operativo de rastrillaje en las provincias de Melgar, Ayaviri y Azángaro. Dirigentes gremiales como Julián Paucar y Timoteo Huanaco Manani de la federación distrital de Santa Rosa; líderes comunales como Martina Tapara Quispe y Evaristo German Huaytara de Ñuñoa, Melgar, así como misioneros laicos y animadores cristianos como Brígida Chevallay y Vladimiro Sotomayor Estrada son objeto de la acción represiva. «Banderolas

⁶⁴ «¿Qué pasa en Puno? Mensaje de la Vicaría de la Solidaridad», Septiembre-Octubre, 1987. En AVSP pueden encontrarse numerosos testimonios de denuncias de abusos policiales como, por ejemplo, los ocurridos en Fiestas Patrias de 1987 en la comunidad de Kenamari Bajo y Llali en la provincia de Melgar; el asesinato de la niña Juana Choque Miranda, el 5 de octubre del mismo año, por un policía en estado de ebriedad del puesto de Arapa, y la muerte del joven Juan Gutiérrez Mamani, en un baile social realizado en Pucará, a manos de un miembro de la Guardia Civil también en estado de ebriedad.

⁶⁵ Ministerio de Agricultura, «Comunicado A los Productores Agrarios de Puno» en *La República*, Abril 2, 1988.

⁶⁶ A menos que se indique lo contrario, la información que a continuación se incluye procede de la cronología sobre la violencia en Puno preparada por la Vicaría de la Solidaridad de Puno.

usadas en marchas, folletos sobre la reestructuración, libros de lectura popular» y propaganda del PUM (en los casos de Páucar y Huanaco) son exhibidos como «pruebas» de sus vínculos con la subversión.

La conexión entre el PCP-SL y el PUM es la tesis que la CENECAMP intenta reafirmar aprovechando la coincidencia de la reaparición senderista con la publicación de un polémico artículo de Ricardo Letts, en el cual, según la CENECAMP, el dirigente pumista proponía la necesidad de integrar la lucha legal de los partidos revolucionarios (PUM); el accionar legal e ilegal del movimiento campesino (CCP) y la guerra que desarrollan los grupos alzados en armas (PCP-SL y MRTA).⁶⁷ Lo que el «desclasado latifundista Letts» y su «movimiento capitaneado por rabiosos burgueses mirafloresinos entre los cuales no hay un solo campesino auténtico» pretenden — sostiene la CENECAMP— es destruir las «empresas socializadas» para reemplazarlas por «minifundios individuales en los que es imposible aplicar cualquier forma de organización socialista y producción tecnificada.»⁶⁸

La violencia, sin embargo, no es solo verbal. En junio, Marcial Couderc, párroco de Ayaviri, es detenido por feudatarios de la ERPS Sora cerca de la localidad de Macarí. Tildado de «cura extranjero agitador de comuneros», Couderc es retenido por varias horas para luego ser canjeado por un grupo de feudatarios que, a su vez, había sido apresado por comuneros de la zona.⁶⁹ Casas parroquiales son allanadas por la policía. El propio alcalde de Puno encabeza una implacable campaña denunciando la alianza de los «curas extranjeros» con la subversión. Se sabe, además que el Ejército los mira con considerable sospecha.⁷⁰ La iglesia puneña se encuentra a la defensiva. La prelatura de Ayaviri se ve obligada a demostrar que las acusaciones que vinculan al párroco Muriel con el asalto al puesto policial son absurdas.⁷¹

Con relativa frecuencia los representantes de la Iglesia deben acudir a los despachos de la autoridad militar con el fin de esclarecer sospechas o demandar sanción para los abusos que el personal policial comete. Para evitar confusiones riesgosas, la Vicaría de la Solidaridad acordará que, aunque seguirá preocupándose por «la vida e integridad» de todos los detenidos, no defenderá a «los comprometidos o integrantes de grupos terroristas» en los juicios propiamente dichos.⁷²

Mientras tanto el PCP-SL actúa con eficiencia. El 30 de junio, interrumpiendo su participación en acciones rurales, «David» y «Silver» «bajan» a la ciudad de Puno con el fin de perpetrar el «aniquilamiento» del alcalde Luis Dueñas. Un par de días después, el Obispo de Puno celebra una misa por el eterno descanso de quien, durante sus últimos dos años de vida, se había dedicado a satanizar a los curas progresistas. Dos días después del funeral, la antena de Radio Onda

⁶⁷ Se refiere al artículo «La Trenza» en *La República*, Junio 8, 1988.

⁶⁸ CENECAMP, «Basta de agresiones y calumnias contra el campesinado puneño» en *La República*, Septiembre 9, 1988.

⁶⁹ «Testimonio del P. Marcial Couderc, Párroco de Ayaviri, sobre los hechos ocurridos en Sora,» Junio 25, 1987, en AVSP.

⁷⁰ DIGIMIN, «Apreciación general por área y establecimiento de la subversión.» Lima 1987.

⁷¹ «Comunicado de la Prelatura de Ayaviri.» Ayaviri, Junio 19, 1988.

⁷² «Reunión de Vicarías de Solidaridad de los días 19 y 20 de diciembre de 1988» en AVSP.

Azul, de propiedad del Obispado, era inutilizada mediante el uso de un artefacto explosivo. Hubo consenso en atribuir al Comando Rodrigo Franco la autoría del ataque. Del asalto al puesto de Crucero al asesinato del alcalde Dueñas, en tan solo tres meses, la frágil paz de 1987 había estallado en pedazos.

Para el PCP-SL la acción de Crucero conlleva un mensaje contundente: (a) reiterar su presencia en Puno llevando la «guerra popular» ahí donde la masa había sido más agredida y mostrado mayor combatividad; (b) contraponer a la futilidad de la negociación la efectividad de la lucha armada, evidenciando la ausencia de dirección política pumista «abajo,» en el nivel en que la lucha por la tierra y el acoso policial eran hechos de la vida cotidiana, ese era el objetivo (c) enmendar un grave error: el hecho que, si bien a partir del año 82 ellos habían encabezado la liquidación de las empresas no habían hecho lo suficiente para aprovechar políticamente un indudable éxito militar. Así, con toda la importancia que Puno tenía dentro de la marcha de la «guerra popular» el trabajo ahí adolecía de serias debilidades:

Rubén Muelle Góngora, «Lino», —integrante de la Primera Compañía del PCP-SL, veterano del ataque a la Cárcel de Ayacucho de marzo de 1982— había sido el designado para recomponer la «fuerza principal» del norte altiplánico a inicios de 1988. Había fugado de la cárcel de Puno en diciembre del 87. En las provincias altas del Cuzco se reúne con los sobrevivientes de la columna de «Anselmo». Son ocho efectivos cuando retornan a Puno que luego de un par de acciones menores en el área de Melgar comienzan en Crucero una campaña que —después del aniquilamiento del alcalde Dueñas— continúa con acciones contra elementos policiales, en la SAIS Sollocota y en Ayaviri, y las tomas de Paratía y Calapuja hacia fines de año.

Es la fase preparatoria de un Plan Estratégico Operativo (PEO) que, busca ampliar el «ámbito» de acción de la columna, «desperdigar» al enemigo, abriéndole varios frentes, obligándolo a «asentarse pasivamente».⁷³ En términos senderistas, el objetivo es «especificar la base de apoyo, la red territorial y la red móvil», restableciendo contactos y determinando «líneas de movimiento.»⁷⁴ Efectuando, en suma, el mejor «reconocimiento» posible puesto que, como ha manifestado la dirección, «sin un buen reconocimiento no hay plan porque es el punto de partida. De otra manera, sería como entrar en una casa a ciegas. No conviene.»⁷⁵

A «Adrián», nuevo jefe del Comando Regional del Sur le corresponderá recuperar la iniciativa en Puno.⁷⁶ No sólo tendrá que vérselas con un PUM fortalecido por su papel en las tomas sino que las llamadas Unidades Tácticas Contrasubversivas han dotado a las fuerzas del gobierno con mayor movilidad y poder de fuego en las áreas rurales. En noviembre, «Lino» y «David» son reconocidos en una calle de Juliaca. Logran fugar después de una breve balacera. «Adrián» ordena,

⁷³ Ibid., p. 21

⁷⁴ PCP, Información sobre el plan de la Tercera Campaña (Segunda parte).

⁷⁵ PCP, «Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso» (Primera parte)

⁷⁶ Según un reporte senderista, este comité regional consiste de tres comités zonales —Puno, Arequipa y Cuzco— que reclaman un número aproximado de 5,000, 2,000 y 3,000.

poco después, que elementos de la «fuerza principal» puneña apoyen la fase preparatoria del PEO del comité zonal del Cuzco. «Lino» marcha a la cabeza. Perderá la vida en un enfrentamiento en la localidad de Viluyo, en las alturas de Sicuani. Dos de sus compañeros son detenidos mientras que los sobrevivientes retornan a su base de origen. El comité cuzqueño queda desactivado. En manos del comité zonal de Puno queda, entonces, la responsabilidad de mantener viva la «guerra popular» en toda la región sur. La tarea queda en manos de un joven arequipeño de 22 años, ex-alumno del colegio jesuita de Arequipa, Juan Carlos Olivares del Carpio «Daniel», es más conocido como «Gringo» por su complexión clara y su estatura por encima del promedio local. Sobreviviente de la columna de «Anselmo», «Daniel» asume la tarea de completar el plan iniciado por el desaparecido «Lino». Requiere, para tal efecto, reconstruir la «fuerza principal». Eran 8 al momento de atacar Crucero. Se redujeron a 5 después de la incursión en el Cuzco. Para el mes de diciembre, con refuerzos llegados de Arequipa, suman no menos de 18. Herido por una esquirla de granada en el ataque al puesto de la Guardia Republicana de Calapuja, Olivares se recupera, por ese entonces, en una casa de la zona céntrica de la capital departamental a pocas cuadras de comisarias y cuarteles. Se cumple, mientras tanto, la «primera ofensiva» del PEO consistente en: acciones de agitación y propaganda; «aniquilamiento» del gobernador de Acora; «sabotaje» a la sub-prefectura de Azángaro y la Zona de Educación en Puno y una acción de «sabotaje y aniquilamiento» contra el Proyecto Pampa en las afueras de Juliaca. Recién en enero Olivares estará en condiciones de internarse en las alturas de Azángaro para dar inicio a la «primera ofensiva» del PEO.

El asalto a la mina «Los Rosales» de Lampa —el 14 de febrero de 1989— es una de las primeras acciones encabezadas por el «Gringo» Olivares tras su recuperación. Sustraen alrededor de 200 cajas de dinamita que luego transportan a diversos puntos del departamento. Con parte del botín en las manos, tres elementos de apoyo son detenidos una semana después en las inmediaciones de Juliaca. El hecho da lugar al desmantelamiento de buena parte de la red urbana constituida en el segundo semestre del año anterior. Las declaraciones de los detenidos permiten una mirada a la dinámica interna del mecanismo subversivo.

A los 20 años, «Rosa» es una veterana de la «guerra popular». Su militancia data de 1986 en que conoce a «Adrián» cuando visitaba a un pariente en el CRAS Luriganchu. A instancias de éste se vincula a actividades con los familiares de los presos senderistas. Se involucra, en algún momento, en acciones armadas. Acusada de participar en el asesinato de Rodrigo Franco cumple condena en el CRAS Canto Grande.⁷⁷ En octubre de 1987 recobra su libertad. Durante 1988 viaja en dos oportunidades a Arequipa donde cumple tareas varias: «reglaje» del Alcalde de Socabaya, reconocimiento para un atentado contra un comandante de la PIP y ataque al Puesto GC de Porongochu y otras. A fines de año está en Puno designada para intervenir en el «aniquilamiento»

⁷⁷ Rodrigo Franco era un funcionario del gobierno aprista asesinado por integrantes del PCP-SL en las afueras de Lima en 1987. Al año siguiente su nombre fue adoptado por un comando paramilitar auspiciado, al parecer, por el Ministerio del Interior.

—al lado de «Silver» y «Tomás»— del oficial de la Armada Peruana Juan Vega Llona, agregado naval en La Paz, Bolivia. Permanece en casa de «María» entre el 27 de noviembre y 31 de diciembre. Cumplida la tarea retorna a Arequipa donde permanece hasta febrero de 1989 en que viaja a Juliaca para servir bajo las órdenes de un viejo conocido: «Adrián».

Luego de cumplir sentencia en la cárcel de Lurigancho, «Tomás» permanece por algún tiempo en Arequipa donde, al menos en dos ocasiones, es nuevamente detenido por la policía. A mediados de 1988 está en Puno como parte de la columna de «Lino». Participa en las acciones de Paratía y Calapuja, en el atentado contra el Proyecto PAMPA y en el asesinato de Vega Llona. Realiza un viaje previo a Bolivia con el fin de efectuar contactos con elementos de apoyo en ese país.

El 3 de diciembre de 1988, éstos y otros integrantes de la «red urbana» senderista se reúnen en casa de «María» para celebrar el onomástico de «Gonzalo» y despedir a quienes viajan a La Paz con el propósito de vengar a sus camaradas caídos en junio de 1986 en la prisión de El Frontón, isla frente al puerto de El Callao. Vega Llona —al mando de un escuadrón de helicópteros— había participado en el sangriento aplacamiento del motín subversivo.

«David» es otro de los veteranos del grupo. Ha pasado cuatro años en Lurigancho. A Puno llega también vía Arequipa. Se instala en Juliaca y comienza su actividad subversiva en la región con ocasión del ataque a Crucero.

Los otros detenidos son jóvenes oriundos de Puno que se han ido sumando de diversas maneras al núcleo de la casa de «María». «Laura» ha conocido a ésta última a través de su cuñada «Amalia»: la reclutan para atender la herida del «Gringo» Olivares. Admite su asistencia a la fiesta del 3 de diciembre pero alega no tener mayor conexión con el PCP-SL. «Juan Carlos» —que aportará información vital para planear ataques a Radio Nacional y el Ministerio de Transportes— se conecta a través de «Amalia» quien es «conviviente de su tío». Esta, a su vez, inicia su vinculación con el grupo cuando accede al pedido de «María» de alojar a un miembro de la «fuerza principal».

«Nélida», «Alicia» y «Juan Carlos» —cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 21— han conocido al «Gringo» en casa de «María» y su participación se ha limitado —según dicen— a dar información y a colaborar en el transporte de la dinamita. «Tatiana», 22 años, se ha incorporado recién en 1988 pero ha participado ya en acciones armadas como la incursión a Paratía. Luego «se retira a Puno», donde «María» le ordena participar en un Congreso del Instituto Superior Pedagógico de Juliaca. «Manuel», un economista de la universidad de Puno, ex-empleado de CORPUNO y del proyecto Pampa, colabora en la planificación del atentado contra este último. «María», finalmente, con 21 años, es sindicada por la policía como la responsable del PCP-SL en Puno. Militaba —según declaró— desde mayo de 1988. Su experiencia de combate se reducía al ataque al Proyecto Pampa donde fue victimado un empleado de dicha entidad.

Colocar al «trabajo militar como guía» apostando a que la autoridad que «emanaba del fusil» se tradujese en condiciones favorables para la construcción del nuevo poder era la clave del accionar senderista. El «gringo» Olivares, en ese sentido, era un jefe capaz de sorprender a sus adversarios desplegando una capacidad militar inesperada teniendo en cuenta los limitados recursos de que disponía y los sucesivos golpes que su organización había experimentado.

Bajo su mando, la primera semana de enero de 1989, la «fuerza principal» penetra al «triángulo guerrillero» dando comienzo así a la «segunda ofensiva» del PEO. Su incursión reaviva a las masas atraídas en campañas anteriores. El ataque a San José, en la madrugada del 29 de enero, establece con claridad la decisión del PCP-SL de librar al campo de todo tipo de «felipillos». Son —según el reporte de la Vicaría de la Solidaridad de Puno— alrededor de 100 personas las que participan en la acción. Se reparten por el pueblo con el fin de detectar a quienes deberán ser sometidos a juicio popular. «Después de conducirlos a la plaza donde los amenazaron y cantaron sus consignas los llevaron al Consejo Municipal y siendo las 3 a.m. los ejecutaron». Entre autoridades, un dirigente de la SAIS San José y dos civiles más de filiación desconocida, son 7 los ajusticiados. Saquean, a continuación, las oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y algunas tiendas. Se marchan dejando una advertencia a autoridades y dirigentes para que renuncien a sus cargos.

Los recuentos internos del PCP-SL revelan algunos datos de la campaña política que antecede y prosigue a la incursión en San José. Se habían realizado 13 «asambleas populares», 6 acciones de corte de carreteras, 2 acciones de sabotaje y 3 de agitación y propaganda.⁷⁸ Según otro documento, la ofensiva de enero resulta en: 13 comités populares en Azángaro, 663 personas de «masa directamente movilizada», 2,650 «indirectamente» movilizadas y 142 integrantes de la «fuerza de base». A fines de febrero, la detención de varios miembros de la red urbana constituye un golpe significativo para el PCP-SL. Entre los documentos que la policía logra capturar se encuentra listas de alumnos de colegios de Juliaca y de «contactos» en la Universidad Nacional del Altiplano. La columna guerrillera se mantiene intacta pero la ausencia de apoyo efectivo en la ciudad, sin embargo, afecta inevitablemente su accionar.

En el Cuarto Congreso de la FDCP —celebrado en enero de 1989 en el distrito de Coata, provincia de Puno— más de 1,000 delegados de todo el departamento se pronuncian en favor de una huelga campesina regional demandando reabrir la reestructuración y medidas de emergencia para el sector agropecuario. De su Segundo Congreso Nacional (junio, 1988), de otro lado, el PUM ha emergido dispuesto a disputar con PCP-SL el control del sur andino vía la constitución de organismos de autodefensa y otras medidas de preparación militar.

A fines de febrero de 1989, el PCP-SL decreta tres días de «paro armado» en Azángaro. Una serie de explosiones en diversos puntos de la capital provincial reafirman la seriedad de la

⁷⁸ PCP, «Información sobre el Plan de la Tercera Campaña» (segunda parte)

convocatoria. Nada se mueve en la provincia. La vital comunicación con Juliaca queda interrumpida. Tres días después se inicia la huelga de la FDCP. Se prolonga por veintiún días. Se producen algunas tomas de tierras, bloqueos de carreteras y marchas a la capital departamental que culminan con un paro de 48 horas convocado por el recientemente formado Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Puno. La medida concluye con la firma de una nutrida acta de compromiso formándose una «comisión mixta paritaria» encargada de supervigilar los múltiples y numerosos acuerdos.⁷⁹

A mediados de abril la réplica senderista a la supuesta victoria del bloque FDCP-PUM comienza a tomar forma. Fuerzas locales emprenden acciones de arrasamiento y reparto de ganados en la provincia de Azángaro. Un mes después la «fuerza principal» retoma su campaña contra las autoridades locales. El 13 de mayo ataca Muñani e incursiona en el Municipio en medio de una celebración popular. Entre decenas de pobladores tendidos en el suelo los atacantes buscan infructuosamente al alcalde y al teniente-gobernador. Terminan ajusticiando al secretario del municipio y al ex-gerente de la SAIS Huayna Cápac. Queman posteriormente el Municipio, la Biblioteca Municipal y el local de ENTEL-PERU. Seis días después, mientras dirigía la reconstrucción de un puente dinamitado durante el paro armado de febrero, el alcalde de Azángaro Marcelino Pachari es abatido a balazos: «se había advertido que nadie tocara ese puente y él, embriagado, se jactó de que no le temía al partido y lo desafió», explicaría años después un líder senderista.⁸⁰

Al lado de su cuerpo, un letrado advierte: «Así mueren las autoridades burócratas, servidoras del viejo orden». La noche del 21 de mayo los subversivos se presentan en el local del IER «Waqrani», propiedad de la Iglesia Católica en las afueras de Ayaviri. En un par de horas destruyen las instalaciones educativas y administrativas así como vehículos, generador, maquinaria.

En la estación experimental de la Universidad del Altiplano de Chuquibambilla se observa destrucción similar a la del IER. Solo que ahí, varios ejemplares de ganado seleccionado también ha sido aniquilada.

En Macarí el dolor se arremolina alrededor de los cuerpos del Juez César Vera y el teniente gobernador Toribio Chalco, dos autoridades que, paradójicamente, habían apoyado las tomas de tierra.

Alguien despliega el letrado dejado cerca de los cuerpos: «Así morirán los alcaldes, regidores, prefectos, gobernadores, teniente-gobernadores, funcionarios de CORDES, micro regiones, proyecto Pampa y todo representante del gobierno aprista fascista.»

⁷⁹ CCP, «Movilización Campesina: Respuesta Democrática», pp. 36 y ss. Los acuerdos negociados con las autoridades establecían procedimientos sumamente específicos cuyo cumplimiento iba a ser muy difícil de supervigilar. Con respecto a la actividad minera en la provincia de Sandia, por ejemplo, se estipuló lo siguiente: «...inicialmente el Distrito de Yanahuaya recibirá todos los domingos desde el primer domingo de mayo una brigada de rescate de oro de la posta de Sandia, para determinar el volumen de oro producido mensualmente y posteriormente de acuerdo a lo captado establecer los precios.»

⁸⁰ Entrevista con Osmán Morote. Prisión de Yanamayo, Junio 2002.

Hasta marzo de 1986, según Ricardo Vega, el PCP-SL no había reivindicado la lucha por la tierra y lejos de enfocarse en las EEAA se había dedicado a atacar puestos policiales, a asesinar autoridades políticas y hostilizar a líderes gremiales, sin decir del tema agrario.

Fue solamente después del decreto de reestructuración en marzo de 1986 que comenzó a escucharse en Azángaro de incursiones a las empresas y en Melgar comenzó con el ataque a la central Huacauta en junio de 1986.

Luego de incursionar en Langui-Layo (Canas) en el vecino departamento del Cuzco, el destacamento senderista enfila nuevamente hacia Puno. Ataca en La Raya a otras dos estaciones experimentales universitarias. El 26 de mayo, en Nuñoa asesina a dos técnicos en la ERPS Alianza. Se dirige de ahí hacia la zona de Azángaro donde, el día 29 de mayo, asesina al alcalde de Ayrampuni. «Acto seguido —relata el informe de la Vicaría— amenazaron a la población para que no recogiera el cadáver, bajo pena de muerte por lo que este permaneció botado por tres días hasta que fue recogido por una patrulla militar». En 16 días, la columna guerrillera ha recorrido 700 kilómetros, promediando un ataque diario y asesinando a 7 personas.

Nunca antes en la historia de la guerra, la Iglesia había sido blanco del PCP- SL de manera similar. Los voceros eclesiásticos aprovechan la oportunidad para marcar diferencias entre la lucha justa de los campesinos y la acción subversiva. Para recordar al país, asimismo, que su solidaridad con los primeros era acaso la mejor manera de confrontar al PCP- SL en lugares como el altiplano puneño donde la injusticia ofrecía condiciones favorables para su expansión. «Nuestra mística es mayor que la de el PCP-SL» declara el Obispo de Puno a la prensa de Lima.⁸¹ A finales de junio, la celebración de un cuarto de siglo de fundación del IER «Waqrani» dio lugar a una amplia demostración de solidaridad y de cohesión de las fuerzas comprometidas con la «tercera vía».

Nada volvería a ser como antes, sin embargo, después de la campaña senderista de mayo de 1989.

En los meses siguientes la violencia alcanzó nuevas cotas de intensidad. A inicios de julio una emboscada a un vehículo de la SAIS Sollocota que transportaba personal policial resulta en la muerte de seis oficiales. Ocho de los atacantes son más tarde eliminados en un enfrentamiento con policías que acudieron al rescate de sus compañeros. El PCP-SL aparecía más decidido que nunca, sin embargo, a no ceder en su empeño de afirmarse en la región, alanzando en su momento de auge en casi una década de presencia en Puno. Al compás de estas acciones audaces, la fama del «Gringo» Olivares crecía a niveles míticos. «Con una mezcla de temor y respeto se habla de su frialdad para enfrentarse a la muerte. La distinción entre «senderistas buenos» y «senderistas malos» se diluye ante el comportamiento sanguinario del nuevo jefe.

⁸¹ Entrevista con el Monseñor Jesús Mateo Calderón en *La República*, Julio 30, 1989. Véase también «No hay relación entre lucha por la tierra y el terrorismo en Puno» (Obispo de Ayaviri protesta por documental de Panorama) en *La República*, Junio 2, 1989.

A mediados de año, un periodista capitalino que visita la región se hace eco de una de las muchas historias que se tejen —ficción en su mayor parte— en torno a la columna encabezada por el «Gringo». En Huancané -asevera su reporte- los senderistas visitan las comunidades haciendo uso de un helicóptero. Se habla, además, de una posible alianza con narcotraficantes que proveen a la columna de Olivares del armamento sofisticado que explicaría su aparente superioridad militar.⁸² Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL causó 23 bajas en las fuerzas policiales y asesinó a 14 autoridades. Al menos un par de docenas más suman las víctimas no reconocidas que mueren por «robar a nombre del partido,» incurrir en abigeato, «soplonaje» o desertión. Sus cuerpos son arrojados en caminos transitados como símbolos inermes del poder desafiante, apresurado y contundente que el PCP-SL está construyendo en Puno. La iglesia, las organizaciones campesinas, el conjunto del bloque regional de apoyo a la lucha por la tierra siente el impacto de la presión senderista. Las evaluaciones internas de los miembros de las vicarías comienzan a transmitir preocupación, miedo y sorpresa, esta vez en proporciones mayores a la mística y al coraje.

Ante esta situación, los integrantes de las vicarías de Ayaviri, Sicuani, Juli y Puno subrayan la «necesidad de conocer datos, proyecto y caminar de SL por la zona» y de desarrollar un «código de claves para la comunicación interna y de radios».⁸³ En el mes de agosto realizan una constatación angustiante: «la infiltración de SL y las fuerzas armadas en todo tipo de organización popular, principalmente juvenil». Atravesamos —concuerdan— «por un momento difícil donde nuestro análisis debe ser mucho más claro y no debemos dejarnos confundir con informaciones falsas y especulativas».⁸⁴ Al mes siguiente se verifica un agravamiento de esta situación. Frente a la infiltración del PCP- SL —sostienen los miembros de las vicarías— «no debemos ser ingenuos» debiendo ser particularmente cuidadosos en los casos de cursos de Derechos Humanos dictados a grupos amplios.

Se reafirma, asimismo, que se ha detectado presencia senderista en sectores juveniles, en los Institutos Pedagógicos, Tecnológicos e inclusive en movimientos cristianos así como en el SUTE y la llamada Coordinadora Clasista. Se sugiere que cada vicaría realice un «pequeño estudio sobre el SUTE y la Coordinadora Clasista,» vista por muchos como organismo de fachada del PCP-SL.⁸⁵

Evaluaciones de tono similar provienen de otros sectores del «movimiento democrático» pro-campesino. En septiembre, Santiago Aragón, militante del PUM que asume la alcaldía de Azángaro en reemplazo de Marcelino Pachari declara:

En muchas comunidades han renunciado las autoridades por temor de ser asesinadas por SL. Azángaro era a nivel de la FDCP una de las bases más fuertes, pero en estos últimos meses se ha resquebrajado ese nivel de organización. Operamos en condiciones muy

⁸² Mario Munive, «Iglesia y la IU jaquean a el PCP-SL» en *La República*, Julio 7, 1989.

⁸³ Acta de la reunión de Vicarías. Ayaviri, 28-29 de junio de 1989. En AVSP.

⁸⁴ Acta de la reunión de Vicarías. Ayaviri, agosto 13, 1989. En AVSP.

⁸⁵ Ibid.

difíciles, inclusive no nos permiten como antes salir a distritos ni a sitios alejados para apoyar las demandas de las comunidades. Antes desfilaban en fiestas patrias hasta 90 tenientes gobernadores, en 1989 desfilaron menos de 20. Casi las tres cuartas partes han renunciado por amenazas y el subprefecto se ha visto obligado a recibir estas denuncias sin ofrecer alternativa alguna.⁸⁶

El PCP-SL, sin embargo, no era la única fuente de violencia en el campo; ésta provenía también de la acción represiva. A lo largo de 1989 y 1990 -aún antes de que se pusiera al norte del departamento bajo estado de emergencia en octubre de 1990- varias provincias altiplánicas vivían bajo una militarización *de facto*. Una característica de la acción represiva era su incapacidad para establecer diferencias entre las acciones legales y de fuerza de los gremios campesinos y la acción subversiva. Un informe de «inteligencia militar» de aquellos días aseveraba inequívocamente que: «... existen organismos de fachada, que en forma indirecta estarían apoyando a elementos sediciosos, tal es así los denominados “clubes de madres”, Movimiento de Obreros Clasistas y otras organizaciones gremiales y laborales y organizaciones estudiantiles existentes en Puno que son controladas por líderes identificados con la ideología y doctrina del PCP-SL».

En consecuencia, decenas de dirigentes fueron hostilizados, cuando no torturados y retenidos ilegalmente en condiciones inhumanas. En setiembre de 1990 se produjo el acontecimiento más dramático de aquella sombría ola de violencia oficial: en la comunidad de Chillutira una incursión de la DOES culminó con la desaparición de varios dirigentes comunales que aparecerán posteriormente muertos, entre ellos, Dionisio Cantani Hanco, secretario general de la federación distrital de Orurillo. A las primeras denuncias de desapariciones surgieron los temores de que Puno deviniera en «otro Ayacucho». Un factor de optimismo era que, a pesar de su relativo debilitamiento, existía en Puno una iglesia sumamente activa que a través de una red de «vicarías de la solidaridad» que con el apoyo de comités locales de derechos humanos se encargaba de seguir al detalle los sucesos ocurridos en las zonas más alejadas, estableciendo una suerte de fiscalización que, vía la denuncia rápida y amplia, ponía algunos límites a la violencia represiva que, al ahondar la desconfianza de la masa rural en las autoridades terminaba favoreciendo a la insurgencia.

El infortunado profesor de Crucero, Porfirio Suni sobrevivió para contar ante una cámara de video las torturas a que había sido sometido en el afán policial por culparlo del ataque al puesto policial de Crucero en mayo de 1988.

Como vimos, en setiembre de 1989, la FDCP conservaba todavía fuerzas para convocar a una segunda huelga campesina del sur como antesala a las elecciones municipales y regionales de noviembre. Como había ocurrido en marzo se producen bloqueos, movilizaciones y algunas tomas aisladas. Catorce días después se levantó la medida y se estableció un nuevo diálogo con las autoridades que llevó a la formación de nuevas comisiones encargadas de hacer cumplir el pliego

⁸⁶ «Azángaro en estado de emergencia no declarado» en *Sur* no. 125, septiembre 1989, p. 17.

campesino. La respuesta del PCP- SL, sin embargo, es inmediata: «golpea los mandos comunales para afirmar sus comités populares y realizar acciones de aniquilamiento». De tal suerte: «Frente a las limitaciones que tiene el partido para encarar el plan de el PCP-SL sólo nos queda la táctica del vacío y el repliegue de nuestros cuadros». Mientras la táctica pumista de «huelgas de masas» parece empantanarse, la columna armada senderista afina sus fuerzas con miras a perturbar las elecciones municipales de noviembre.

La campaña se inicia a comienzos de ese mes con una serie de ataques a autoridades locales.⁸⁷ El 13 de octubre incursionan en Muñani donde asesinan al encargado de la alcaldía, a un regidor y al secretario de la federación distrital de campesinos. Días después, una fuerza de aproximadamente cien individuos asalta el asiento minero de San Antonio de Poto. Nueve policías, un gobernador y los alcaldes de Ananea y San Juan del Oro son asesinados ahí. Solamente en Azángaro, entre el 3 y el 11 de noviembre, una veintena de personas, entre autoridades, candidatos y campesinos comunes y corrientes son asesinadas por los insurgentes, en un esfuerzo por contener con sangre la voluntad de votar. El sufragio tuvo lugar al día siguiente y solamente en 5 distritos azangarinos, el PCP-SL consiguió impedir la realización de los comicios. En los otros 5, como en el resto del departamento, la votación siguió su curso con relativa normalidad.

El ataque contra autoridades locales no se detiene tras los comicios. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, doce personas —miembros de IU en su mayoría— son victimadas en distritos de Azángaro y Melgar. De candidatos y autoridades electas, la persecución se extiende a autoridades comunales. Ocurre así en la comunidad de Choquepiñas que pierde a tres de ellas además de su gobernador. Son los sucesos de Orurillo del 3 de diciembre, sin embargo, los que mayor indignación provocarían en el núcleo pumista de Melgar y entre los activistas de la FUCAM.

La noche del 3 de diciembre -según un informe- una columna ingresó a Orurillo, en las alturas de Melgar, y asesinó a ocho personas, entre las cuales estaba el alcalde electo de IU Tomás Quispesayhua, secretario general de la federación campesina distrital; Godofredo Marrón, secretario general del SUTEP; Pedro Pablo Tito Limache, profesor primario; Julio Céspedes, director del Colegio Agropecuario; Víctor Quispesayhua, gobernador; Nicolás Cahuata, juez de paz; Mario Lizardo Lopez Quispe, campesino; Benito Isidro Mamani Condori, chofer. Luego de la matanza, los senderistas dinamitaron el municipio, la posta médica y prendieron fuego a las viviendas de sus víctimas.⁸⁸

Los hechos ocurren en la más absoluta soledad. «En el distrito de Orurillo —manifiesta la viuda de Víctor Quispesayhua— había mucho miedo y su esposo, desde la fecha que quemaron el puesto de la Policial ya no era igual». Cuando tomaba —revela— lloraba y tenía miedo «dice me van matar, me van matar decía mi esposo». Para ese entonces, salvo su esposo, «ninguna autoridad había, ellos vivían en otras partes, no teníamos a donde quejarnos». La viuda de don Mario

⁸⁷ Aparte de las antes citados informes de la Vicaría de la Solidaridad de Puno, información contenida en los párrafos siguientes ha sido tomada de Instituto de Defensa Legal, *Perú 1989: En la espiral de la violencia*, pp. 41-42.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 42.

Lizandro, presidente de la CAP Quisuni, quiso defender a su esposo recibiendo por ello un disparo en la pierna izquierda. Vinieron luego los tres tiros que terminaron con su cónyuge. Uno le dio en la cabeza, «por eso todos sus sesos estaban por todo el cuarto, y los huecos de las tres balas están hasta ahora en el cuarto». Y tras ello la sentencia final: «¡así van a morir todas las malas hierbas del campo!, que no haya autoridades, para que todos tengan todo por igual, nosotros buscamos la igualdad para todos». Al despedirse, una mujer a quien llamaban «Nancy» le dice «vamos a ganar, todo esto lo hacemos por ustedes, me abrazó y lloró.»

Tomás Quispesayhua Aguilar de 32 años era el menor del grupo de victimados cuya edad promedio sobrepasaba los 40. Todos estaban casados. Tomás Quispesayhua —cuyo hermano es el gobernador de la localidad— se había vinculado con el PUM del que era considerado como uno de los más destacados «militantes campesinos.» Su prestigio provenía de su participación en la lucha por la reestructuración de las EEAA al frente de la federación de Orurillo que reúne a unas 40 comunidades. Parte de esa lucha fue centralizar la venta de lana de alpaca y ovino. «Gracias a ello, Orurillo fue el primer distrito —según un informe del CODEH-Puno— que negoció directamente, y con buenos precios, la producción de lana frente a los monopolios». El ajusticiamiento masivo del 3 de diciembre deja a Orurillo ya no sólo sin autoridades sino sin dirigentes, también con 8 viudas y 31 niños huérfanos.

Con 82 víctimas que superaban largamente a las 23 del año anterior culminaba lo que acaso había sido el año de mayor violencia en la historia reciente de Puno. A pesar de no haber conseguido su objetivo de frustrar la campaña electoral, en doce meses, el PCP-SL había conseguido inclinar a su favor el balance del poder en las zonas rurales del norte del departamento siendo sus logros de mayor relevancia: (1) haber copado el conjunto del «triángulo guerrillero» convirtiéndolo en base de lanzamiento para desplazamientos que cubrían un extenso abanico territorial: de San Juan del Oro (Sandia) y Cojata (Huancané) —sobre la línea fronteriza con Bolivia— hasta Calapuja (Lampa), Ñuñoa (Melgar) —cerca del límite con el Cuzco— y Crucero (Carabaya) al norte; (2) establecer dos pelotones o columnas guerrilleras con sus respectivas fuerzas de apoyo miliciano y una amplia red de contactos: moviéndose entre Azángaro, Melgar y Carabaya la primera y limitándose a la provincia de Huancané la segunda. De unos 40 efectivos la primera y unos 20 la segunda; (3) desplazar al PUM de su bastión azangarino a través de su presencia militar en la localidad, intimidación de dirigentes y destrucción del IER Waqrani.

Eran estas, en el esquema senderista, las condiciones adecuadas para impulsar sin dilaciones la construcción del nuevo poder. «Si no se organiza a toda la masa —era lo que al respecto estipulaba el “pensamiento Gonzalo”— el nuevo Poder no podrá sostenerse por mucho tiempo. No cabe masas amorfas ni Poder sin masas organizadas bajo la dirección del Partido.»⁸⁹

⁸⁹ PCP, «Bases de Discusión», p. 391.

Acaso ensoberbecido por sus éxitos del año anterior, en la madrugada del 20 de enero de 1990, Olivares se lanza sobre la SAIS Sollocota encabezando una columna de unos 30 insurgentes. El destacamento de la Policía Nacional ahí instalado logra repeler el asalto. Los atacantes inician el repliegue dividiéndose por grupos. Las fuerzas del orden emprenden la persecución. Hacia el mediodía alcanzan al grupo encabezado por el «Gringo» quien muere acompañado de cuatro de sus camaradas. El mito Olivares había terminado. «Lo calificaban —comentó la prensa capitalina— como el terrorista más sanguinario del que se haya tenido noticia en el Altiplano».⁹⁰ Cinco días después de la muerte de Olivares, en la ciudad de Huancané, Romeo Paca Pantigoso —militante del PUM, por ese entonces— encabezaba la instalación del nuevo gobierno regional de la región José Carlos Mariátegui integrada por los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua. Era, sin duda, el paradójico desenlace de un año por demás trágico.

2.17.6. Adiós a la tercera vía

Al PUM, la presidencia de la región no podía llegarle en peor momento. Prácticamente toda su breve historia, se había ido en concebir una alternativa frente al «corporativismo» aprista y el «proyecto dictatorial pequeño-burgués» del PCP-SL. Hacia noviembre de 1989 —cuando los votos puneños emigraron nuevamente hacia la izquierda— ese proceso había llegado a un punto muerto. Era una verdadera paradoja —observó un militante pumista— cuando el partido «se sumía en su más grande crisis, éste y la agonizante IU alcanzaban una importante victoria electoral.»⁹¹ Más que por los votos, a lo largo del último año, los sectores más radicales del partido habían estado preocupados por encontrar la manera hacer frente al desafío senderista en el campo.

La campaña de la columna encabezada por Olivares, en efecto, había prácticamente cercenado la capacidad del partido para actuar en el campo. A los golpes senderistas el PUM respondería con la llamada «táctica del vacío», que no era otra cosa que aprovechar la capacidad informativa de la red de la iglesia con el fin de replegar a cuadros y dirigentes en situación de peligro. El dispositivo dejaba un cierto margen de acción durante períodos de descenso de la actividad subversiva. De la destrucción del IER Waqrani, sin embargo, no había recuperación posible. El hecho, obligaba al partido a crear sus «propias estructuras». Había que imaginar proyectos «invisibles» —recomendó la dirección del partido— que nosotros podamos seguir utilizando enmascarando más estrictamente nuestra presencia.»⁹² Las consecuencias del «arrasamiento» del IER, sin embargo, iban más allá de los aspectos logísticos: habían significado un duro golpe para la red institucional en que el PUM basaba su presencia departamental.

⁹⁰ *La República*, Enero 28, 1990, p. 3

⁹¹ PUM, «El Camino a lo Nuevo» (Informe y Balance de dos años del «Plan Piloto Ande Rojo y de los esfuerzos por llevar a cabo los acuerdos del II Congreso Nacional». Noviembre 1, 1991, p. 8.

⁹² PUM, «Evaluación del Partido,» febrero 1990, p. 4.

Tras los bandazos dirigenciales y el desconcierto de la militancia —que observaba, desmoralizada, «la nula respuesta del partido frente a las agresiones sufridas por parte del PCP-SL»⁹³—, los datos implacables de una nueva y efervescente realidad rural terminarían de convencer a los estrategas pumistas de que la era del Ande Rojo había llegado a su fin.

Nos encerramos en la defensa de supuestos «intereses comunales» y en alternativas de corte «colectivista,» sin apreciar que el proceso de diferenciación campesina en curso y la recomposición de poderes locales venía redefiniendo las relaciones entre comuneros, entre éstos y los feudatarios y entre los diversos sectores de la sociedad rural, impactada, además, por una prolongada crisis económica, por políticos populistas (Alan García) y asistencialistas (ONG, Iglesia), por una década de desastres naturales y por la creciente violencia que actuaba como factor desestructurador y desestabilizador.⁹⁴

A través de las áreas tocadas por las tomas, en efecto, un complejo panorama que se resistía a cualquier tipo de ordenamiento «desde arriba» comenzaba a prevalecer. A la par con amedrentamientos e intentos de desalojo se sucedían los acuerdos entre comunidades y cooperativas -ambas de reciente formación- mientras antiguas parcialidades volvían a quedar marginadas. Surgían —observó Víctor Caballero Martín—, «nuevas contradicciones» que escapaban al control de la FDCP, enfrentamientos entre comuneros y feudatarios; entre comuneros y comuneros; entre feudatarios y familias no campesinas que recibieron tierras, etc. Una verdadera eclosión de «negociaciones, luchas, acuerdos, actas, compromisos» conducida «por los propios comuneros y feudatarios.» Procesos que culminaban en «acuerdos informales» que los funcionarios estatales se limitaban a consagrar.⁹⁵

En circunstancias tales —y con el PCP-SL plenamente embarcado en su fase post-«Gringo» Olivares— la presidencia de la flamante región José Carlos Mariátegui, más que una oportunidad para avanzar era un lugar para sobrevivir. Su fuerza electoral en el campo había llevado a la izquierda a ser mayoría en la asamblea regional. En la formación del primer Consejo Regional, más aún, el PUM apareció como la primera fuerza. Un análisis posterior del propio partido reconocería lo poco preparados que para aquella responsabilidad estaban sus cuadros: «A pesar del importante papel desempeñado por nuestro partido en el debate parlamentario sobre la regionalización y de la participación de nuestros cuadros en las luchas regionalistas, lo cierto es que no se realizó el cálculo ni se tomó las previsiones para un eventual ejercicio de gobierno en alguna región»⁹⁶

En efecto, a pesar de que el PUM había conducido por varios años la lucha por la regionalización nunca había dejado de verla como un «espacio de acumulación», como un mero terreno de conflicto aprovechable en la perspectiva de generar un movimiento de masas poderoso.

⁹³ PUM, «Balance de la situación del partido,» (VII Comité Central), junio 1990, p. 4.

⁹⁴ PUM, «El Camino a lo Nuevo,» p. 7.

⁹⁵ Víctor Caballero Martín, «La Realidad de las Reestructuración de las Empresas Asociativas en Puno» en *Puno, Tierra y Alternativa Comunal (Experiencias y propuestas de política agraria)*, Lima 1991, pp. 133-157.

⁹⁶ «Región José Carlos Mariátegui: organización para un gobierno de izquierda (logros y limitaciones)» (ms).

En otras palabras, la cuestión de ejercer el gobierno no revestía importancia estratégica. De ahí entonces que mientras sus militantes se esforzaban por asumir las tareas de gobierno su partido emitía la directiva de que había que impulsar un «gobierno de confrontación y no de concertación».

Sobre estas inciertas bases se formó, en enero de 1990, un gobierno conformado por una alianza de agrupaciones de la IU encabezadas por el PUM que sobreviviría ocho meses. En octubre, el UNIR y el PCP se asociaban al PAP y al FREDEMO para constituir un nuevo gobierno, manteniendo al ingeniero Romeo Paca como presidente quien, de esta manera, hacía abandono de su militancia pumista para presidir un ejecutivo regional plural. El PUM quedaba así aislado y en camino de la marginalidad: «Habíamos soñado con una sierra poblada de empresas comunales - recuerda otro dirigente mariateguista- olvidando que se trataba de un campesinado pobre». Se hubiesen necesitado subsidios ingentes para poner en marcha a las decenas de empresas comunales que esperábamos formar. «¿Cómo protegerlas sin violentar el mercado?»⁹⁷ El gran error había sido:

No apreciar procesos económicos que tienen muchos años. Creer que podíamos derrotar al mercado en base a transferir recursos de programas de desarrollo. Mantener la tensión comunero-feudatario había sido absurdo. Pretender establecer cualquier forma colectivista o estatista era contrario a la historia. En todos los sitios en que habíamos tenido esa experiencia se había manifestado así.⁹⁸

A través de las áreas tocadas por las tomas, en efecto, un complejo panorama que se resistía a cualquier tipo de ordenamiento «desde arriba» comenzaba a prevalecer. A la par con amedrentamientos e intentos de desalojo se sucedían los acuerdos entre comunidades y cooperativas de reciente formación mientras parcialidades de antiguo origen volvían a quedar marginadas. Surgían — según observó Víctor Caballero Martín—, «nuevas contradicciones que escapaban al control de la FDCP», enfrentamientos entre comuneros y feudatarios; entre comuneros y comuneros; entre feudatarios y familias no campesinas que recibieron tierras, etc. Una verdadera eclosión de «negociaciones, luchas, acuerdos, actas, compromisos» conducida «por los propios comuneros y feudatarios». Procesos que culminaban en «acuerdos informales» que los funcionarios estatales se limitaban a refrendar.⁹⁹ Ante el fracaso del partido para organizarla, la «autodefensa» campesina tomaba un curso similar.

En algunos casos, los pueblos parecían aceptar las condiciones impuestas por el PCP-SL, estableciendo, al mismo tiempo, «mecanismos de protección de la autoridad local».¹⁰⁰ Asumir rotativamente los cargos directivos era otra opción. La organización comunal se camuflaba, en ciertos casos, bajo el comité popular senderista desde el cual —a pesar de la oposición de sus mandos— se mantuvieron vínculos con las contadas entidades de desarrollo que actuaban en la «zona roja» del

⁹⁷ Entrevista con Víctor Torres Lozada.

⁹⁸ Entrevista con Dante Vera Miller. Lima, agosto 19, 1993.

⁹⁹ Víctor Caballero Martín, «La Realidad de la Reestructuración de las Empresas Asociativas en Puno» en *Puno: tierra y alternativa comunal*, pp. 133-157.

¹⁰⁰ Yolanda Rodríguez, «Los actores sociales y la violencia política en Puno» en *Allpanchis* no. 39, 1992, pp. 131-154.

departamento. Núcleos de feudatarios cerraron filas con gerentes de EEAA en defensa de lo que quedaba de sus propiedades. Se arman, gestionan la instalación en sus predios de guarniciones militares o negocian algún tipo de pacto con la columna senderista.

Ante la guerra y las nuevas realidades económicas, el campesino responde con un «cálculo realista de sus propias capacidades».¹⁰¹ Obtiene la tierra, busca la manera de protegerla; opta tal vez por parcelarla. Si los riesgos se incrementan, la deja encargada y migra, retornando apenas las condiciones lo permiten. «Sobre esta situación política y militar concreta, es que el campesinado comunero actúa, ordena su vida, la producción y sus festividades; calcula, resiste y aprende sin comprometerse; calla, oculta, apoya, denuncia; hasta que decide castigar con sus propias manos y organizarse para autoprotegerse.»¹⁰²

Un trágico incidente ocurrido en la CAT Quisuni es ilustrativo de las tensiones que atravesaban al «movimiento democrático» pro-campesino. Bajo la dirección de la FDCP varias comunidades toman tierras de dicha cooperativa en julio de 1990. Sorpresivamente, se hace presente la columna senderista y asesina a seis trabajadores de esa entidad reiterando, una vez más, su consigna de que el único camino para conseguir la tierra es «con las armas en la mano». Los días subsiguientes llueven las acusaciones contra el PUM, la FDCP y los «curas comunistas» de la prelatura de Ayaviri. ¿Era sensato seguir alentado la lucha por la tierra si no se podía proteger a los implicados? Bajo presión, en un comunicado bastante firme, la propia Prelatura de Ayaviri se distancia de las tomas, afirmando su rechazo a cualquier tipo de acto de violencia e invocando a que el problema de la tierra se solucione por la vía del diálogo y la democracia. Por último, deslinda responsabilidades señalando, con nombre propio, a quienes por varios años han dirigido el IER Waqrani como personas que «actúan a título personal».¹⁰³ La radicalización del movimiento — reconocería un dirigente mariateguista— tendría sobre el bloque pro-comunero un «efecto disolvente».¹⁰⁴ De ahí, entonces que, frente a la declaración, en octubre de 1990, de varias provincias altiplánicas en estado de emergencia, no se produjese una movilización similar a la mediados de los 80. La medida parecía ser el final de la ya debilitada «tercera vía» a la vez que reavivaba los temores de que Puno se convirtiese en «otro Ayacucho».

2.17.7. Los caminos de la contrainsurgencia

¹⁰¹ Consejo de Desarrollo Alternativo de Puno, *Situación y Perspectivas del proceso político-social y de la guerra interna en Puno. Propuestas y Alternativas de Pacificación*. Puno, noviembre de 1992, p. 7.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ «Comunicado de la prelatura de Ayaviri», 31 de julio de 1990.

¹⁰⁴ Entrevista con Víctor Torres Lozada.

Desde su entrada a fines de 1982 a Ayacucho, hasta fines de 1990, se habían producido cambios significativos en la visión contrainsurgente de los militares peruanos, incidiéndose más, por ejemplo y poniendo énfasis en ganar el respaldo de la población.¹⁰⁵

Al cabo de una década de experimentación, más aún, acaso podría decirse que las fuerzas armadas avanzaron en el camino de una estrategia propia, con «notorio carácter autoritario» aunque sin los visos «genocidas» de, por ejemplo, la seguida años antes por los militares guatemaltecos.¹⁰⁶ Su aplicación coloca al régimen civil ante la disyuntiva de, asumir la conducción directa de la guerra subordinando a cualquier costo a las fuerzas armadas o promulgar el marco legal demandado por los militares como condición imprescindible para terminar con la subversión. El «autogolpe» del 5 de abril de 1992 será la respuesta a dicho dilema.

En Puno, como en otros departamentos serranos, los policías tradicionales habían constituido la primera línea de contención frente al PCP-SL. Sin entrenamiento y pobremente armados fueron obligados a replegarse. En una segunda etapa se introdujeron fuerzas especializadas y se intentaron nuevas fórmulas de acción conjunta policial-militar (Unidades Tácticas Contrasubversivas y Destacamentos de Operaciones Especiales). Emplazados en EEAA y centros mineros, su presencia significó una recuperación parcial de la iniciativa en las zonas rurales. Su actuación, sin embargo, creó controversia. «No queremos que Puno viva los momentos dramáticos que vive el pueblo de Ayacucho —sostuvo una declaración de las vicarías de solidaridad, pocas semanas después del inicio de la emergencia— como producto de una “guerra sucia” donde la principal víctima ha sido y sigue siendo el pueblo pobre». Los temores, sin embargo, irían diluyéndose con el correr de los meses. Un año más tarde, un representante de la vicaría de Juli declaraba:

Nuestra relación con las fuerzas armadas era en un principio tirante. Pero cuando como Vicarías de la Solidaridad les llevamos denuncias de violaciones de derechos humanos y de abusos contra la población civil, reaccionaron diferente. Investigaban y sancionaban rápidamente. La relación se ha modificado. No hay desapariciones y salvo el caso de Chillutira, tampoco ejecuciones extrajudiciales. Ellos llegaron con la consigna de armar a las rondas campesinas y como hubo una fuerte oposición canalizada por el gobierno regional desistieron de eso. Son permeables entonces.¹⁰⁷

El Ejército, en suma, muestra un sorprendente autocontrol y tras la aparente pasividad, sin embargo, se despliega una nueva estrategia en el que muchos ven una sospechosa pasividad para

¹⁰⁵ Además de los trabajos de Gorriti y Obando sobre la evolución de la estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Armadas peruanas, véase: Philip Mauceri, *Militares: insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988*, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1990 y Carlos I. Degregori y Carlos Rivera, *FFAA, Subversión y Democracia: 1980-1993*, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo no. 53, 1993.

¹⁰⁶ Ibid., p. 14. Sobre el caso guatemalteco véase, Robert M. Carmack, editor, *Harvest of Violence. The Maya Indian and the Guatemalan Crisis*, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988 y Ricardo Fall, *Massacres in the Jungle. Ixcán, Guatemala 1975-1982*, Boulder, Colorado: Westview Press, 1992.

¹⁰⁷ Guido Gallegos, «El PCP-SL nos ve como sus enemigos políticos» en *Ideéle* no. 32-33, Diciembre 1991, p. 31. Los cambios en la percepción de la situación puneña pueden seguirse a través de los siguientes artículos publicados por *Ideéle* a lo largo de 1991: «Estado de emergencia en el sur, persistiendo en el error» (no. 24); «Qué pasa en las nuevas zonas en «emergencia»?» (no. 25); «Puno: Entre la emergencia y la pacificación» (no. 28); «Puno y San Martín: la paz busca un camino» (nos. 32-33) y «La batalla por Puno» (no. 39).

actuar contra el PCP-SL. Se llega a sostener que la estrategia militar consiste en esperar que el PCP-SL y el movimiento campesino, «se enfrenten y se desgasten solos».¹⁰⁸ Los propios militares explican de otra forma su cauteloso accionar: «Fácil sería ordenar un ataque masivo a una comunidad presuntamente terrorista, pero eso sería perder todo lo que se ha avanzado hasta ahora en apoyo a la población»: «Sabíamos que después de su derrota en Ayacucho, Puno iba a ser su teatro de operaciones más importante. Aquí, el problema era que la subversión había penetrado en todas las esferas sociales. Se requería, por lo tanto una estrategia global».¹⁰⁹

Ganar al mundo de las ONGs, los proyectos de desarrollo y la Iglesia, del lado de la contrainsurgencia era, en tal sentido, un paso crucial que los militares acometieron mediante la adopción de una política que combinaba las presiones, el diálogo y una relativa apertura.

La instalación, a inicios de 1990, de la Región José Carlos Mariátegui (RJCM) —que reunía a los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua— permitiría a la izquierda reactivar el planteamiento de una pacificación bajo conducción civil y con participación de la población. Aunque reconocía «el hartazgo con la persistencia de la violencia y la muerte» prevaleciente en amplios sectores de la población regional, el PUM —cuyos militantes ocupaban las más altas posiciones del nuevo gobierno regional— reafirmaba la necesidad de impedir que «el gobierno, las fuerzas armadas y la reacción», capitalicen este «pacifismo elemental e instintivo» para convertirlo en «respaldo a la guerra contrasubversiva.» Reafirmaba, por lo tanto, su posición de «denunciar al gobierno como factor contrario a una paz verdadera, duradera y justiciera» acordando una «plataforma mínima» para crear las condiciones para «una salida política y democrática a la guerra» que incluiría, «el diálogo con los grupos alzados en armas».¹¹⁰

Para ese entonces, no obstante, muchos en la «izquierda legal» creían en la necesidad de tender puentes a las fuerzas armadas como condición para derrotar al PCP-SL. Desacuerdos en torno a este tema distanciaron a Romeo Paca Pantigoso del PUM. En un inicio, Paca Pantigoso había subrayado el compromiso de su Gobierno a culminar el proceso de reestructuración, «terminando con los gerentes antidemocráticos y corruptos» e incluyendo en la afectación «a la totalidad de las maquinarias y el capital» de las EEAA. Había incidido, asimismo, en buscar «paz con justicia social» llegando inclusive a apelar a los senderistas, llamándolos a dejar el camino «absolutamente equivocado» de su «jefe regional» que hoy se encuentra muerto (Olivares) y a integrarse a comunidades campesinas, sindicatos, organizaciones gremiales, en la lucha anticentralista.

Los intentos de incluir al Ejército en el debate de la estrategia regional de pacificación serían vistos desde el PUM como intentos de conformar un «gobierno regional cívico-militar». Inicialmente, el Gobierno Regional había explorado la posibilidad de formar grupos de autodefensa. Al menos en un caso, sin embargo, dicho experimento había suscitado duras represalias senderistas y el plan abortó

¹⁰⁸ Romeo Paca, «Política de Pacificación en la Región José Carlos Mariátegui» en *Una ruta posible* (Propuestas de la I Conferencia por la Paz), Lima: IDS, 1991, pp. 81-91.

¹⁰⁹ Entrevista con el Coronel EP Alberto Pinto Cárdenas. Puno, febrero 24, 1995.

¹¹⁰ PUM, «Lineamientos de táctica sobre la pacificación». Mayo 24, 1991.

tempranamente. Desde mayo de 1991, en que el PCP-SL había ingresado a Macusani arrasando el local municipal, el Alcalde de Carabaya, Justo Pastor Luque Quico (IU), encargado de Derechos Humanos del Gobierno Regional, se veía obligado a residir en Puno. «La crisis de la fibra de alpaca ha favorecido mucho la penetración de el PCP-SL en esa zona» nos dijo. «Los jóvenes sin tierra —añadió—, los sectores más inestables, acosados por el Ejército, son los que se van con SL.» Por la misma época en que el Alcalde Luque se refugiaba en Puno, el PCP-SL asesinó en una calle de Juliaca a otro miembro de la Asamblea Regional: Porfirio Suni, víctima un par de años antes de la violencia del otro lado, como vimos.

Ante los hechos, la posición del Presidente Regional con respecto a la pacificación es para ese entonces bastante definida, proponiendo que el Gobierno Regional juegue un papel en ayudar a que las fuerzas armadas se conviertan en aliados del movimiento popular.

De manera similar, el núcleo partidario del PUM de la provincia de Melgar se había declarado en rebeldía contra la dirección nacional. El origen de esta pugna con la dirección nacional del partido se remontaba a los tiempos del ataque al IER Waqrani cuando, según Ricardo Vega, el PUM había abandonado a su gente en Ayaviri a su propia suerte.

En los meses siguientes, la división se trasladó al seno de la FDCP. A comienzos de 1991, con ocasión del IV Congreso de la FDCP quedó en evidencia que las diferencias habían llegado a un punto irreconciliable. Casi en su totalidad, el evento fue consumido por la pugna entre dos facciones por el control de la federación. A la división partidaria proseguía la división del gremio y con ello la quiebra del bloque pro-comunero gestado en torno al respaldo de la lucha por la tierra. El propio presidente del Gobierno Regional adoptó una actitud crítica hacia la FDCP cuestionando su representatividad. En ese contexto, un grupo de ex-asesores de la FDCP —incluido Ricardo Vega Posadas— optó por trabajar en la formación de un Consejo Unitario de Productores Agrarios, entendido como una representación más acorde con los múltiples intereses del campo puneño. A este nuevo espacio se sumó CENECAMP y la organización de los trabajadores de las empresas asociativas (FENATEPS) que, favorecidas por el nuevo clima político, encontraría las condiciones para salvar parte de su patrimonio, las ERPS sobretodo que no tenían la presión comunal que las SAIS confrontaban. Paca —según otro vocero del sector asociativo— había prometido que «en menos de 30 días él liquidaba todas las empresas campesinas» no pudiéndolo hacer porque CENECAMP «ya no era la antigua fuerza de los gerentes» sino que ahora «había fuerzas y participación de los trabajadores» que le habían hecho retroceder.¹¹¹ En tales condiciones, a mediados de 1991, el Obispo de Puno —Jesús Calderón— fustigó de la siguiente manera a sus antiguos amigos: «Aquí en Puno la propia Federación está dividida a raíz de la ruptura del PUM, esto es escandaloso. ¿Cómo entonces se puede hacer causa común contra la violencia? A la región le

¹¹¹ Entrevista con Luis Ortiz (Presidente de la CENECAMP de Puno). Puno, agosto de 1992.

corresponde abrazar el pluralismo, no estoy de acuerdo en que sea hegemonizado por un sólo partido. Esto es lo que la está haciendo fracasar».¹¹²

El PUM, la FDCP, el movimiento democrático, que había sido soporte de la ‘tercera vía,’ habían entrado en la etapa final de su disgregación.

De hecho, para muchos dentro de la Iglesia, la lucha por la paz no implicaba los niveles de confrontación con el gobierno de los 80. A inicios de 1992, la Iglesia había asumido la organización del semi-oficial Consejo por la Paz y la Vida. En los días que prosiguieron al «fujigolpe» del 5 de abril de 1992, algunos de sus integrantes propusieron hacer público un pronunciamiento sobre los acontecimientos. Fue imposible, no obstante, lograr un acuerdo sobre el significado de los mismos. Uno de sus miembros sostuvo que este debía pronunciarse en contra del «golpe» en coordinación «con todos los partidos políticos y dirigentes de las diferentes organizaciones». Otro propuso dirigirse al Presidente de la República para «expresarle el amplio apoyo y respaldo a las medidas tomadas por el Supremo Gobierno para moralizar el Parlamento y Poder Judicial» y pedirle «que se tomen las medidas necesarias para que la Pacificación Nacional no se vea envuelta en situaciones de violencia». Finalmente, un tercer miembro se opuso a hacer un pronunciamiento porque sería visto como una «cuestión política» mientras que, «la organización que instalamos el 24 de marzo pasado en la ciudad lacustre solo persigue lograr la pacificación en el Perú teniendo como esencia los principios cristianos.» El desacuerdo era el punto final de un breve e intenso proceso en el cual, uno tras otro, el PAP, la izquierda, la regionalización y el PCP-SL colapsarían dejando el terreno libre al señoreamiento del fujimorismo.

2.17.8. A manera de conclusión

La crisis del Puno ganadero de las grandes haciendas y la ruta de la lana —de las alturas de Melgar a Manchester, Inglaterra—, las nuevas contradicciones creadas por la reforma agraria, la debilidad de las propuestas regionales creó el contexto en que diversas prácticas y discursos intentaron encabezar la transición hacia un nuevo orden. Proyectos políticos nacionales que veían en Puno una valiosa frontera de expansión: Puno como cabeza de un «ande rojo»; Puno como capital del «trapezio andino»; Puno como «trincherita de combate del sur». Todos, de diversas maneras, buscaron captar las energías que las demandas campesinas generaban. Los diversos enfoques ideológicos que en ese afán pusieron en juego asignaban a la protesta rural diversos grados de potencial transformador. Los apristas retrataron viejos ideales agraristas y recuperaron antiguas visiones más bien románticas de la comunidad. Otro tanto hicieron sus adversarios del PUM que, a su vez, pretendían crear un nuevo tipo de movimiento regional impulsado por la «fuerza histórica» del campesinado. SL por su parte llegó a la región con un esquema maoísta que colocaba al campesinado pobre como protagonista central de la revolución.

¹¹² En *Ideéle* no. 28, agosto 1991, p. 12.

Todas estas fuerzas, en diverso grado, llegaban dispuestas al uso de la violencia. La política puneña, entonces, tomó la forma de una compleja batalla regional. ¿Logró SL afirmarse en Puno? ¿Fue la «tercera vía» una posibilidad real? ¿Quién ganó?

Más allá de las interpretaciones que de los acontecimientos regionales hacen los activistas partidarios o del posible uso que buscan dar al capital político acumulado en los confines del sistema político, son los propios campesinos quienes —en consecuencia con su particular visión de los acontecimientos regionales y nacionales— toman las decisiones claves que determinan la evolución de la «batalla por Puno.» Toleran, respaldan o sancionan a la guerrilla, se alían con los agentes pastorales y los militantes izquierdistas en busca de realizar su propia agenda o toman la palabra al Presidente, encargándose de velar por el cumplimiento de sus ofertas, llevando hasta su conclusión última la lógica pro-comunera de su discurso. Su aceptación condicionada del programa militar termina siendo, asimismo, el factor esencial del desenlace de la contienda. Son ellos, a fin de cuentas, quiénes con sus acciones hacen de la «tercera vía» una posibilidad alcanzable y quienes sancionan su posterior irrelevancia.

Es en el contexto comunal —con todas sus contradicciones y diferenciaciones internas— en que se toman las decisiones que determinan el sentido de la acción campesina. Frente a las propuestas —revolucionarias, reformistas o modernizantes— de los intelectuales partidarios, eclesiásticos o estatales, los intelectuales campesinos articulan visiones políticas sustentadas en tradiciones locales de larga data. El sentido de continuidad de tales visiones, sin embargo, no suprime la actualidad y pragmatismo de las decisiones contemporáneas.

En el caso del campesinado del norte puneño, tal requisito obliga a referirse a las primeras décadas del siglo, cuando el proyecto comunal fue derrotado por las haciendas en el contexto de una expansión de la actividad exportadora lanera. El triunfo de las haciendas no significó la proletarianización masiva de los campesinos ni, mucho menos, la desaparición de la comunidad. Fue el inicio, más bien, de una sorda lucha que, a lo largo de varias décadas, implicó la incorporación de nuevos actores y nuevos esquemas de dominación que aseguraran la continuidad del esquema definido hacia 1920. Es a través de la prolongada brega con proyectos de desarrollo, organismos internacionales, misiones adventistas y congregaciones católicas, agencias estatales y ONGs, que se va forjando la cultura política del campesinado altiplánico. A través de múltiples alianzas y coaliciones, en otras palabras, efímeras o más o menos duraderas; genuinas o engañosas; acaso cruciales para garantizar su supervivencia, no así para asegurar el fin de su marginación.

2.18. LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Luego de haber sido clausurada a raíz de la Guerra del Pacífico, el 24 de abril de 1957, el gobierno de Manuel Prado el 24 de abril de 1957 promulga la ley 12828, que reabre la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), el 3 de julio de 1959 la UNSCH reinicia sus actividades con 228 alumnos. La reapertura de la UNSCH se produjo en el contexto del proceso de modernización del Estado, en este sentido fue concebida como una entidad promotora del desarrollo local.

La presencia de la universidad generaría un cambio en el mapa político en la región y la ciudad de Ayacucho, permitiendo el surgimiento y expansión de nuevos grupos políticos de tendencia opuesta a los poderes tradicionales encarnados en la jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Aprista.

Una de las preguntas centrales que atraviesa esta investigación, es desentrañar en qué medida los profesores y estudiantes de centro de estudios fueron efectivamente, promotores de la violencia política o a lo largo del conflicto armado primó una visión estigmatizada de los mismos, visión alimentada por el hecho de que parte de la dirigencia del PCP-SL pertenecieron a la UNSCH.

2.18.1. *La UNSCH retorna al escenario ayacuchano*

En 1961, cuando la universidad todavía tenía menos de cuatrocientos alumnos, se forma el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), impulsado por la Juventud del Partido Comunista que integraba a un conjunto de vertientes izquierdistas e independientes.

En 1962 el FER apoya la elección de Efraín Morote Best como rector de la UNSCH. A partir de ese momento, la hegemonía de las corrientes marxistas sobre el APRA y los social cristianos, se impone con mayor claridad. La hegemonía del FER puede ser entendida en función de su trabajo político en el ciclo básico o estudios generales, concebido como un espacio en el que el alumno universitario pudiera subsanar las carencias de la educación secundaria, el control de este espacio era fundamental, ya que en él confluían los alumnos que luego se integrarían a las diversas facultades.

En esta época, la UNSCH se convierte en un polo de atracción para docentes provenientes de diversas universidades del país. Uno de los nuevos profesores en integrarse es Abimael Guzmán, el cual pronto será uno de los principales promotores del trabajo político del FER y del Partido Comunista en la universidad y la región¹.

¹ En 1962 Abimael Guzmán se incorpora a la UNSCH, en 1964 Guzmán es nombrado Director del Ciclo Básico (Estudios Generales), posteriormente ocupa la jefatura de personal y durante su permanencia en Huamanga registra una

Paralelamente la universidad recibirá a docentes de la Escuela Normal Enrique Guzmán y Valle conocida como 'La Cantuta', institución que había sido relanzada a inicios de los '50 dentro de la misma ola modernizadora que inspirara la reapertura de la UNSCH. Serán precisamente estos docentes conocidos como 'cantuteros' los que impulsarán en 1964, la creación de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. La apertura de los planteles de aplicación permitiría ampliar el trabajo del FER hacia los estudiantes secundarios, en esta labor era fundamental el trabajo político de los estudiantes de Educación que hacían allí sus prácticas docentes, el fruto de esta labor proselitista fue la formación del Frente Revolucionario Estudiantil Secundario (FRES), que posteriormente permite la articulación de una federación de estudiantes secundarios denominada FUESA, que posteriormente tendría una importante participación en los sucesos de Huanta en junio de 1969.

Este primer contacto inicia una larga relación entre la Universidad de Huamanga y la Cantuta, que permitirá el flujo de docentes entre los '60 y '70, relación que sea utilizada más tarde por el PCP-SL para su expansión política en Lima. Entre el grupo de 'cantuteros' que llega a Huamanga se encuentra el profesor de teatro Víctor Zavala Cataño, el cual se integraría a la organización del PCP-SL en la Universidad La Cantuta y posteriormente en la década de los ochenta sería uno de los principales dirigentes de Socorro Popular en Lima, organismo de apoyo al trabajo político - militar del PCP-SL.

A inicios de la década del '60 también se formaría la Federación Universitaria de San Cristóbal de Huamanga, FUSCH, la cual pronto sería controlada por el FER, que indiscutiblemente era la organización con mayor presencia en los claustros huamanguinos.

Justamente en el momento que el FER comienza a lograr mayor presencia en diversas universidades del país, se producen las pugnas entre las tendencias pro chinas y pro soviéticas del Partido Comunista. Es en este contexto, que en 1964, luego de una conferencia nacional, el Partido Comunista se divide surgiendo el PC Unidad, que asume la línea oficial de la Unión Soviética de Nikita Kruchev y el PC Bandera Roja, identificado con la China de Mao Tse Tung. La mayor parte de las bases campesinas y juveniles comunistas se integran a Bandera Roja, mientras que los sectores obreros mayoritariamente optan por el PC Unidad. El FER en Huamanga también se ve afectado por esta división y si bien mayoritariamente sus dirigentes se integran a Bandera Roja, sin embargo, un sector disidente forma su propio frente estudiantil denominado Movimiento Universitario Revolucionario (MUR), grupo que se identificará con el PC Unidad y tendrá poca influencia en la vida universitaria. De este modo, a mediados de los '60, había tres movimientos importantes en la UNSCH, de los cuales sin lugar a dudas el que tenía mayor apoyo estudiantil era el FER cada día más claramente identificado con el pensamiento de Mao.

gran influencia en la Facultad de Educación. Fuente: JIMENEZ, Benedicto. *Inicio, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú*. Lima 2000.

En 1966, el país vivía convulsionado por diversos problemas políticos y sociales que terminarían con el derrocamiento del gobierno de Fernando Belaunde en 1968 por un sector de generales del ejército. Un año antes, en 1965, se habían producido movimiento guerrilleros y la insatisfacción social frente al gobierno era creciente². Es en este contexto que la Universidad resulta siendo percibida como «peligrosa» y subversiva, lo cual explicaría que el gobierno central intente recortar su presupuesto. Este hecho generó el rechazo no solamente de la comunidad universitaria sino del conjunto del pueblo ayacuchano, lo cual demostraba la enorme influencia en la vida social, cultural y económica que tenía la Universidad sobre la ciudad y su entorno.

En este contexto el rector Efraín Morote considera que es necesario que el pueblo de Ayacucho defienda a su Universidad, obteniendo el apoyo de organizaciones como la Federación de Barrios. Esta coyuntura genera el surgimiento del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que toma como una bandera central la lucha por la «*defensa de la universidad*» y luego de masivas movilizaciones el gobierno es obligado a rectificar su decisión. El surgimiento del Frente de Defensa permitirá a Bandera Roja ampliar su influencia desde la Universidad hacia los barrios y las organizaciones sociales.

En 1967, el APRA en ese entonces aliada de los sectores oligárquicos y el clero huamanguino, deciden crear la Universidad Católica de Ayacucho, la cual luego tomaría el nombre de Universidad Particular de Ayacucho «Víctor Andrés Belaunde» (UPA). Con el fin de lograr este objetivo, piden el apoyo de Luis Alberto Sánchez, en ese entonces rector de la Universidad San Marcos. La colaboración de Luis Alberto Sánchez permite que la UPA reciba presupuesto público para su fundación pero pese al apoyo recibido, el APRA y la Iglesia local no pudieron mantener el control en dicha universidad, que pronto fue hegemonizada por Patria Roja, una de las facciones desprendidas de Bandera Roja a finales de los '60.

En 1968 en medio de una profunda crisis política se produce un golpe militar y asume la presidencia el Gral. Juan Velasco Alvarado que impulsaría diversas reformas sociales entre 1968 y 1975, estas reformas terminaron por liquidar el régimen oligárquico en crisis, para el caso de Ayacucho afectaron seriamente los poderes locales de los latifundistas y gamonales, en este proceso cobraría mayor importancia la intelectualidad local formada en la Universidad de Huamanga que ocupa los espacios generados por el vacío de poder, en este proceso es importante no perder de vista la relación entre la Universidad y el frente de Defensa del Pueblo³.

Las reformas del gobierno militar fueron evaluadas por la mayor parte de la izquierda como medidas que buscaban frenar el avance del movimiento social en ascenso a finales de los sesenta; sin embargo al interior de la izquierda hubieron posiciones divergentes, desde las posturas maoístas

² En 1965 hubo actividades guerrilleras del MIR y ELN en la provincia ayacuchana de La Mar, pese a que no repercutieron en la vida universitaria, sin embargo si aumentaron los temores del gobierno central sobre la posibilidad de que desde la Universidad de Huamanga se alentarán actividades subversivas. (Degregori: 1986)

³ DEGREGORI, Carlos Iván. *El Surgimiento De SL*. Ed: IEP. Lima 1990

radicales que vieron en el gobierno militar la encarnación del fascismo hasta el «apoyo crítico» brindado por el PCP-Unidad⁴.

En este contexto, al interior del PCP-Bandera Roja, se producen las lecturas más ortodoxas y singulares del proceso. La afirmación del carácter semi feudal de la sociedad y la calificación del régimen como fascista, generan innumerables debates al interior del partido y de su filial en Huamanga, denominada Comité Regional José Carlos Mariátegui, ya para esta fecha era claro el liderazgo que ejercía Abimael.

El poder de PCP-Bandera Roja en la Universidad aumentaría en 1968 cuando finaliza la gestión de Efraín Morote en el rectorado⁵. En 1969 el gobierno militar promulga la ley 17437 que buscaba reordenar y despolitizar a las universidades públicas, sustituyendo los consejos universitarios legalmente elegidos, por consejos ejecutivos que podían manejar verticalmente la vida universitaria. Lo paradójico de la medida es que en muchos casos permitió que justamente los sectores más radicalizados de la universidad llegaran a los consejos. Es en estas circunstancias, Abimael Guzmán logra tener presencia en el Consejo Ejecutivo y ocupar las importantes jefaturas de Personal y Bienestar Estudiantil.

La presencia de Abimael Guzmán así como la de Antonio Díaz Martínez, en las jefaturas de Personal y Bienestar, respectivamente, no solamente obedecía a la fuerza política del sector que lo respaldaba, sino fundamentalmente al prestigio que ambos se habían ganado en la comunidad universitaria. Sin embargo una vez ocupados estos puestos, el manejo que se ejerció desde ellos fue fundamentalmente partidario. Luego de la ruptura del PCP-Bandera Roja, el PCP-SL heredaría su poder e influencia al interior de la Universidad de Huamanga.

Para fines de los '60 el entonces profesor Abimael Guzmán ya había ocupado varios cargos de importancia como director del ciclo básico y miembro del consejo universitario.

En junio de 1969 el Gobierno Militar promulga el decreto 006 que recortaba la cobertura de la educación gratuita. Esta medida generó una importante movilización social de rechazo en la que se destacó la presencia de la Asociación de Pequeños Propietarios y las organizaciones ligadas al partido Bandera Roja. En Ayacucho la lucha fue dirigida por el Frente de Defensa, pero en Huanta el movimiento se tornó mucho más violento con presencia de campesinos. El gobierno reaccionó con extremada dureza, reprimiendo la protesta y encarcelando a los dirigentes de la misma. A pesar de este esfuerzo del gobierno, finalmente derogó el cuestionado decreto 006. Este suceso ha perdurado en la memoria de la población como «la lucha por la gratuidad de la enseñanza», incluso inspiró la letra de la canción popular «Flor de Retama», en la cual se relata la

⁴ Los debates de la época estarían centrados en la caracterización del régimen militar y sus reformas, en este contexto debemos entender las múltiples rupturas al interior de las organizaciones de izquierda, cuyas distintas vertientes ensayaron diversas interpretaciones sobre el proceso que vivía el Perú; lo que generó un conjunto de organizaciones políticas de siglas muy parecidas, que periódicamente experimentaban procesos de división.

⁵ Fuente: DEGREGORI, Carlos Iván. Op. cit.

entrada de las fuerzas del orden a la ciudad de Huanta y la represión hacia campesinos y estudiantes movilizados.

Los sucesos de Huanta marcarán un hito importante en el inicio del proceso de reconstitución del Partido Comunista. Cuando sucede el movimiento de Huanta, el PCP-Bandera Roja estaba en franco proceso de desintegración. En 1965 el PCP-Bandera Roja se divide por primera vez surgiendo de su interior el Partido Comunista Marxista Leninista. Posteriormente en 1967 la Juventud de Bandera Roja muestra discrepancias contra su dirección nacional pidiéndole a Abimael Guzmán que encabece una nueva división. Guzmán no acepta y finalmente las bases juveniles y magisteriales impulsan en 1968, la formación de un nuevo partido conocido como PC del P Patria Roja.

Pese a la represión hacia el movimiento de Huanta, los sucesos de junio del '69 fueron la prueba de fuego que convenció al sector de Bandera Roja liderado por Guzmán, de iniciar un camino propio hacia lo que ellos denominaron la reconstitución del Partido Comunista⁶. La lucha de Huanta marca un punto de inflexión en la historia regional ayacuchana y la formación del PCP-SL ya que significa una victoria parcial que posteriormente sería aprovechada políticamente:

Así, en la primera política estratégica de la Reconstitución se desenvuelven los inicios del trabajo de masas del Partido [...] dirigiendo las históricas luchas del 20, 21, 22 de junio de 1969 de Ayacucho y Huanta, movilizando a las masas de estudiantes secundarios y padres de familia contra el decreto 006 de Velasco consiguiendo su derogación; organizó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, reorganizó el Frente Estudiantil Revolucionario, creó el Movimiento Femenino Popular, el Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui, el Frente Revolucionario de Estudiantes Secundarios y el principal de todos el Movimiento de Campesinos Pobres. Así sentó nuevas políticas de trabajo de masas, nuevas formas de lucha y formas orgánicas.⁷

2.18.2. Masificación sin proyecto universitario (1970- 1978)

A inicios de la década del '70 la UNSCH experimenta una expansión, llegando a contar con aproximadamente tres mil estudiantes como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Incremento de la población estudiantil de la UNSCH entre 1969 y 1977

⁶ El propio Guzmán, ya parece entonces dirigente del Comité Regional José Carlos Mariátegui de Bandera Roja, fue encarcelado debido a los sucesos de Huanta.

⁷ Fuente: Página Web: www.solrojo.org

Año	1969	1971	1974	1977
Población	2,241	3,319	4,467	7,610

Fuente: UNSCH. Dirección Universitaria de Planificación.

Esto se produce en un contexto en el cual a nivel nacional se masifica la educación universitaria. Estos procesos de expansión de la matrícula estudiantil se realizan careciendo de proyecto concreto sobre la función que la universidad debería cumplir en el marco de los procesos de desarrollo regional y nacional. La expansión educativa permitió que la composición social de los estudiantes se torne más heterogénea. A la par que aumenta el número de alumnos ‘foráneos’ (provenientes de distintas zonas del país), también lo hacen aquellos originarios de zonas del interior del departamento de Ayacucho.

Como podemos apreciar en los cuadros, a medida que aumentaba la población estudiantil en la UNSCH, se reducía el porcentaje de estudiantes provenientes de Huamanga y se incrementaba el número de los estudiantes provenientes de las otras provincias del departamento, muchos de ellos provenientes de pequeños poblados o ciudades intermedias.

Cuadro 2

Porcentaje de alumnado ayacuchano según provincia de procedencia: UNSCH

Provincia	1968	1973	1976
Huamanga	66,4	52,8	45,9
Cangallo - Víctor Fajardo	12,8	17,0	28,8
Huanta	10,7	11,1	8,3
La Mar	7,2	7,4	6,3
Lucanas	2,0	8,1	7,9
	100,0 (789)	100,0 (1754)	100,0 (2309)

Fuente: UNSCH. Dirección Universitaria de Planificación.

También observamos que entre 1965 y 1976 la composición del programa de Educación siempre fue más ayacuchana y con mayor presencia de estudiantes provenientes de zonas distintas a la capital departamental. Otro dato adicional importante a tener en cuenta, es que en el programa de Educación durante los ‘70 hay un incremento de los estudiantes provenientes de Cangallo y Víctor Fajardo, provincias donde el PCP-SL tenía un intenso trabajo con maestros y escolares⁸.

A fines de la década de los sesenta paulatinamente se incrementa el porcentaje de alumnos no ayacuchanos en la UNSCH, hasta llegar a ser dos tercios en 1976. Como podemos apreciar en el

cuadro 4, un proceso distinto se vivirá en la facultad de Educación, donde pese al incremento de alumnos foráneos, esta facultad mantendrá un perfil más ayacuchano.

Cuadro 4

Porcentaje de alumnos ayacuchanos y no ayacuchanos en la especialidad de Educación -

Año	% de alumnos ayacuchanos en Educación	% de alumnos No ayacuchanos en Educación
1965	69,4	30,6
1968	60,9	39,1
1973	63,0	37,0
1976	61,6	38,4

Fuente: UNSCH. Dirección Universitaria de Planificación.

La diversificación de la procedencia de los estudiantes hizo que el FER pusiera mucho interés en realizar trabajo de concientización en la denominada Serie 100 o Ciclo Básico (Estudios Generales), donde se implementa un trabajo mediante la presencia de algunos docentes en cursos claves. De manera paralela, también se aprovecha la presencia de estudiantes egresados del Guamán Poma de Ayala, los cuales contaban ya con un nivel de politización previa.

A inicios de los '70, el sector dirigido por Abimael Guzmán, aprovechando su influencia sobre el Consejo Ejecutivo de la UNSCH, presiona para introducir un conjunto de cambios curriculares, lo que significa la proliferación de cursos basados en los manuales sobre el marxismo leninismo. La introducción de estos nuevos cursos promovió posiciones teóricas dogmáticas que descalificaban a todo aquel que pensara distinto o tuviera una actitud crítica:

La reivindicación de la «actitud crítica» es una típica idea burguesa. En cuanto al dogmatismo: es cierto que es anticientífico pretender copiar soluciones mecánicamente o a la «libertad de crítica» no es sino un repique burgués. Hoy, cuando precisamente la teoría científica tiene que enfrentar a los desbordes ideológicos de la burguesía, el antidogmatismo tiene un profundo sabor antimarxista.⁹

La justificación para estos cambios curriculares apeló a que se debería desarrollar una posición científica (el marxismo leninismo), aporte teórico que recogería el aporte práctico de las luchas durante la década del 60, por lo cual consideraban que el aspecto académico en ningún momento se debería desligar de la política, entendida como proselitismo.

La influencia de los cambios curriculares se percibe con mayor intensidad en facultades como Educación, Sociales y Agronomía, donde había mayor presencia de alumnos provenientes del

⁸ Para mayor información, ver en especial el estudio sobre Comité Zonal Fundamental de la CVR.

⁹ «Investigaciones», *Revista de Ciencias Históricas-Sociales*, UNSCH. Vol. 2, Tomo II. Ayacucho, 1979. pp.154.

ámbito rural, de pequeños poblados y ciudades intermedias. En estas facultades es donde precisamente el FER concentra sus mayores fuerzas. También hay importante presencia del FER en especialidades con mayor presencia femenina como Servicio Social, Obstetricia y Enfermería. La presencia femenina luego será importante en el trabajo político del PCP-SL.

Debemos precisar que la introducción de los nuevos cursos encontró resistencias en las especialidades de ingeniería, en las cuales el FER tenía menor presencia y había un bloque más consolidado de oposición.

La presencia de Guzmán como director de Personal permitirá también el nombramiento de profesores no tanto por méritos académicos sino por clientelas partidarias:

Todo docente que no estaba dentro de la orientación ideológica de Sendero se le buscaba cualquier motivo [...] un error pequeño era agrandado y calificado como incapacidad académica, eso era motivo de tacha, y en ese entonces el director de personal era Abimael Guzmán. (Ex dirigente del sindicato docente)

De igual manera la presencia de Antonio Díaz Martínez en Bienestar Estudiantil permitirá que se tejan relaciones clientelares con los estudiantes, muchos de ellos provenientes de las provincias del departamento de Ayacucho y para los cuales el comedor y la vivienda eran indispensables para su permanencia en la Universidad.

Era evidente que si bien en el FER existía presencia de militantes provenientes de los sectores provenientes de ciudades intermedias, pequeños poblados y zonas rurales, alrededor de Abimael Guzmán se había formado un entorno de dirección que era de otra extracción social, que tenían lazos familiares en común y que a la larga se convertirían en la dirección del partido:

El vínculo era el hijo del campesino que estaba estudiando aquí en la universidad y que los acompañaba, pero no incorporaron a estos como dirigentes políticos, ya fueron los Guzmán, los Cárdenas, los Morote, los Durand, los Casanova, este fue el tipo de dirigente que tuvieron, eso era porque los otros llegaron siempre siendo los de logística a segundo orden, porque al final sendero empezó a funcionar como grupo cerrado. (Ex militante de Vanguardia Revolucionaria)

A medida que el grupo de Guzmán iba adquiriendo mayor poder en la Universidad, las discrepancias con la dirección del PCP-Bandera Roja conducida por Saturnino Paredes¹⁰, se fueron acrecentando, hasta llegar a un punto en que el grupo de Guzmán decide romper definitivamente con el grupo de Paredes e iniciar el proceso de reconstitución del Partido Comunista:

En lucha de dos líneas lidió (Guzmán) contra el revisionismo que llevaba a las masas al electorismo (en referencia al PCP-Unidad) [...] combatió a Patria Roja forma de revisionismo que traficaba como hasta hoy con el lema el 'Poder nace del fusil' [...] derrotó al liquidacionismo de derecha (PCP-Bandera Roja de Saturnino Paredes) que diluía la

¹⁰ Saturnino Paredes era el principal dirigente de Bandera Roja y de una de las facciones de la Confederación Campesina del Perú (CCP)

dirección del Partido en las masas, pregonaba el legalismo y se expresaba a través de la Confederación Campesina del Perú.¹¹

La división del PCP-Bandera Roja también produciría la división del FER entre el denominado FER de la Montañas, ligado inicialmente al PCP-Bandera Roja, y el FER «*por el Luminoso Sendero de Mariátegui*», formado por los seguidores de Guzmán y por cuyo lema se le conocería popularmente al nuevo partido recién creado.

En Ayacucho al interior del Comité Regional Mariátegui, la mayor parte de las bases estudiantiles y magisteriales seguirán a Guzmán, mientras que las bases campesinas se mantendrán fieles al grupo de Paredes. Al poco tiempo, sin embargo, Bandera Roja vuelve a procesar una división, esta vez sus comités de Lima, Cuzco, Huanta se apartan y forman el sector conocido en los medios universitarios como FER - Antifascista:

El FER llamado de Los Cerros que era de la dirección de Bandera Roja con Saturnino Paredes, luego se configura en dos facciones: el FER Bandera y el FER Antifascista entre los setentas precisamente hasta los ochenta, desarrollándose relativamente más el FER Antifascista. (Ex militante del FER Antifascista)

El FER Antifascista, como su similar de Lima, en realidad no expresaría a un partido en especial, sino a un conjunto de tendencias maoístas y pro albanesas. Su composición social sería similar al FER del PCP-SL y ambas organizaciones mantendrán una fuerte rivalidad al interior de la UNSCH. A inicios de los '70 será clara la hegemonía del PCP-SL en la federación de estudiantes (FUSCH) y el sindicato docente (SUTE UNSCH).

A diferencia de la diáspora producida al interior en la facción dirigida por Saturnino Paredes¹², el sector liderado por Abimael Guzmán se concentrará desde la UNSCH en un febril trabajo político por la reconstitución del Partido Comunista. Para ello se basan en la exacerbación de la ortodoxia ideológica y la lectura exegética de los escritos de José Carlos Mariátegui, manteniendo pese a todos los indicios empíricos la tesis de la semifeudalidad y semicolonialidad del Perú tal como lo expresa la siguiente cita:

El Perú es un país semifeudal y semicolonial y lo prueba y lo demuestra en su esquema del proceso económico de nuestro país. Mariátegui nos hace un esbozo de las clases en el Perú y de su evolución histórica, nos habla con otras palabras lo que hoy día el pensamiento marxista en el Perú sigue desarrollando bajo el pensamiento de Mao.¹³

¹¹ Fuente: página web: www.solrojo.org

¹² Las sucesivas divisiones llevan en la práctica a la desaparición del PCP-Bandera Roja, la última presencia pública importante de Saturnino Paredes fue su elección como constituyente en 1978 por el FOCEP, frente electoral integrado por sectores troskistas liderados por Hugo Blanco, el abogado izquierdista Genaro Ledesma y lo que quedaba del antiguo PCP-Bandera Roja.

¹³ GUZMÁN, Abimael. «Para entender a Mariátegui». Conferencia pública en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, publicada en la página web: www.geocities.com/comunismo_peru.

La presencia del PCP-SL en la UNSCH no solamente se basaba en la ortodoxia de sus argumentos y la descalificación a sus oponentes, sino también al uso de la fuerza como medio para mantener su control sobre la Universidad esto en medio de un clima de intolerancia:

En esa época, ya hay un terrorismo ideológico porque asisto a una asamblea universitaria que era en el paraninfo universitario, y Sendero dirigía el sindicato, allí observé que asistían porque tenían la obligación de asistir y el que se oponía o discrepábamos eran totalmente apabullados. (Ex dirigente del sindicato docente)

En estos años se introducen cambios curriculares que permiten el dictado de cursos en base a los denominados manuales del marxismo leninismo, producidos mayoritariamente por la Academia de Ciencias de la URSS.¹⁴ Pronto surge, sin embargo, una corriente crítica de docentes que plantean una mayor reflexión académica sobre los procesos sociales, esto permite que surjan corrientes opuestas al PCP-SL, muchas de ellas conformadas por docentes ligados a los denominados partidos de la nueva izquierda, en especial del MIR, que si bien tenían ciertas influencias del pensamiento maoísta, comenzaban a producir reflexiones teóricas más flexibles que cuestionaban las visiones dogmáticas impuestas por el senderismo¹⁵.

El MIR era un grupo lo que podríamos decir ahora de intelectuales, gente que podía argumentar mejor, los otros (Sendero) eran gente que repetían mecánicamente todo igualito, y desde el primer hasta el último te repetían la misma cosa, no había alguien que le pusiera particularidad, entre los MIR la gente podía y notaba algunas cosas nuevas que aparecían. (Ex militante de Vanguardia Revolucionaria)

La presencia del MIR generará que el PCP-SL pierda su hegemonía en el sindicato docente. Es en este contexto que los docentes ligados al grupo de Guzmán ven obligados a formar un sindicato docente paralelo. Este sindicato ligado al PCP-SL será claramente minoritario para 1974.

El PCP-SL pasa a la ofensiva para revertir sus retrocesos en el movimiento docente, convocando en 1974 a un congreso nacional de la FENDUP¹⁶. En este congreso termina siendo derrotados por los grupos opositores, lo cual implicará al mismo tiempo, una dura derrota al interior del movimiento docente. La práctica de crear organizaciones paralelas o intentar copar las existentes fue una característica muy arraigada en el accionar de los seguidores de Guzmán. Debemos recordar que en el intento de formar una CCP¹⁷ paralela a la dirigida por Saturnino

¹⁴ DEGREGORI, Carlos Iván. «La revolución de los manuales: la expansión del marxismo leninismo en las ciencias sociales y la génesis de Sendero Luminoso». En: *Revista Peruana de Ciencias Sociales*. Vol 2, Nro. 3. Lima 1990.

¹⁵ La presencia de la nueva izquierda en la San Cristóbal fue fundamentalmente a través del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en menor medida de Vanguardia Revolucionaria. También se difundía la revista teórica *Crítica marxista leninista*, publicación del Partido Comunista Revolucionario.

¹⁶ La FENDUP es el gremio que agrupaba a los docentes universitarios a nivel nacional.

¹⁷ La CCP es la Confederación Campesina del Perú, durante los '70 funcionó una CCP mayoritaria controlada por Vanguardia Revolucionaria y otra minoritaria dirigida por Bandera Roja; Sendero intentó sin éxito formar una tercera CCP.

Paredes y a la dirigida por Vanguardia Revolucionaria, el PCP-SL organiza un congreso ‘campesino’ en la que la mayoría de sus asistentes eran estudiantes universitarios huamanguinos.

A nivel de estudiantes pronto también crecería la oposición hacia el PCP-SL. Es de este modo que en 1973 se conforma la alianza denominada Frente Único de Estudiantes (FUE), conformado por el FER Antifascista, el MIR, Vanguardia Revolucionaria, Bandera Roja, apristas, demócratas cristiano, entre otros. Pese a la heterogeneidad del FUE a su interior había una clara hegemonía de los sectores de izquierda, entre los cuales destacaba el MIR.

Pese a su enorme heterogeneidad el FUE logra capitalizar el sentimiento anti-Sendero. El 17 de julio de 1973 el FUE logra derrotar al FER, en las elecciones para renovar la junta directiva de la FUSCH¹⁸. En este mismo contexto, las fuerzas del FUE también logran desplazar al FER de la residencia universitaria luego de una batalla campal como lo manifiesta la siguiente entrevista:

Siendo el ‘enemigo común’ este grupo del FER de Sendero Luminoso, hay una alianza entre MIR, Vanguardia, grupo de Huanta¹⁹, Patria Roja y que se plasma en una pelea abierta física aquí en la residencia. El FER estaba dentro de la residencia controlando el proceso electoral y los otros están en afuera [...] logran prácticamente dominarlos físicamente, porque fue una pelea con piedras, con waracas, con palos etc, ha habido contusos, cabezas rotas y tomaron la residencia finalmente.» (Docente ex militante Puca Llaqta)

Sin embargo dos años después de la derrota del FER, la FUSCH queda ácefa y se convoca a nuevas elecciones en las cuales gana el FER por un pequeño margen. Es de este modo que el PCP-SL retoma la federación en 1976 con Guillermo Durand a la cabeza. Dos años después, los dirigentes estudiantiles senderistas abandonan paulatinamente sus cargos para dedicarse a las tareas de preparación del inicio de la guerra popular²⁰.

En 1974 el grupo de Guzmán pierde su presencia en el Consejo Ejecutivo. Un año después, el PCP-SL desarrollaría la toma de los planteles de Aplicación del Guamán Poma de Ayala, en un intento por mantener su influencia en estos planteles que estaban en proceso de reorganización²¹. La toma de los planteles dura casi un año y medio, pese a que logran que se reconozca el año cursado por los escolares durante la toma, al final se ve obligado a abandonar uno de sus principales espacios de reproducción ideológica.

En 1975 se produce el cese definitivo de Abimael Guzmán como docente de la Facultad de Educación. Dicha facultad, que había sido utilizada de manera partidaria por el grupo de Guzmán comienza a ser reorganizada, lo cual debilita enormemente la presencia del PCP-SL al interior de la

¹⁸ El FUE encabezado por el estudiante Aníbal Pérez, logra mayor apoyo en aquellas facultades que como Ingeniería Química, Minas y Biología; tenían mayor presencia de estudiantes provenientes de sectores urbanos.

¹⁹ El grupo de Huanta también era conocido como el Comité Lenin y era uno de los desprendimientos de Bandera Roja, que en su conjunto conformaban el sector denominado ‘antifascista’.

²⁰ La última aparición pública de la Junta Directiva de la FUSCH se produce a finales de 1978 durante el XVI congreso de la FEP en el Cuzco, donde Sendero aliado del grupo Pukallaqta y los Antifascistas, protagoniza una batalla campal contra Patria Roja, donde finalmente son derrotados y se ven obligados a retirarse de dicho evento.

UNSCH. En los años siguientes los principales dirigentes del PCP-SL seguirían el mismo camino de su líder, saliendo paulatinamente de la Universidad a la par que anunciaban que la reconstitución del Partido Comunista del Perú estaba llegando a su última etapa.

El año de 1977 fue particularmente importante para la UNSCH, no solamente por el conjunto de actividades organizadas en el marco de su tricentenario, sino también por la incorporación de los alumnos de la UPA a sus aulas. La UPA pese a su denominación como universidad privada sin embargo dependía del presupuesto público lo cual había generado diversas discusiones sobre la pertinencia de su funcionamiento. En 1977 luego de un período de inestabilidad la Universidad Particular de Ayacucho es disuelta y sus facultades se integran a la Universidad de Huamanga²². Es en este año que la UNSCH aumenta su matrícula en más de dos mil alumnos, llegando a tener una población de 7,610²³ estudiantes. Esto permitirá que la UNSCH integre nuevas especialidades como Derecho, Economía y Ciencias Administrativas. Este hecho también tiene una importancia política, ya que la UPA estaba hegemonizada por Patria Roja y por tanto con su integración se ampliaba el conjunto de fuerzas opuestas al PCP-SL.

Para finales de la década del '70, la UNSCH había diversificado la procedencia de su alumnado, ya que solamente la mitad de ellos eran provenientes de Ayacucho, la otra mitad del estudiantado provenía fundamentalmente de departamentos como Junín, Lima e Ica, entre otros (Granados: 1992). Para ese entonces, la UNSCH ya había perdido en gran parte el horizonte como polo de desarrollo regional que fue fundamental en los momentos de su reapertura. Su calidad académica se había deteriorado. Una muestra de ello es que luego de tres décadas de funcionamiento, solamente 2,289 de sus alumnos habían alcanzado el grado profesional (Granados: 1992).

2.18.3. Inicio de la violencia (1978-1982)

Con el convencimiento de que estaban dadas las condiciones para iniciar la lucha armada, el PCP-SL prepara su salida de la UNSCH para realizar un intenso trabajo hacia otros espacios de la sociedad ayacuchana.

²¹ En el contexto de la toma de los planteles de aplicación, Sendero publica el folleto, 'No basta tener la razón', en el que intenta explicar las motivaciones de la medida de fuerza asumida.

²² GRANADOS, Manuel Jesús. *El PCP Sendero Luminoso y su ideología*. Lima 1992.

²³ Esta cantidad de alumnado es elevado teniendo en cuenta que la población de la ciudad de Ayacucho a fines de los '70 bordeaba los 70,000 habitantes, esto puede ser corroborado con el dato censal de 1981 donde los distritos de Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista sumaban los 73,699 habitantes.

Ellos tenían un trabajo, hacían las escuelas populares, ellos controlaban los barrios a través de la federación de barrios, gremios, había hecho un buen trabajo con estudiantes de secundaria, a nivel de SUTE.» (Ex dirigente del sindicato docente)

Para mi ese trabajo básicamente fue cerrado, trabajo clandestino ya para armar cuadros ya para la lucha armada, a través de contactos de profesores, algunos ex-alumnos de la universidad ya en su condición de profesores o a nivel de otra profesión.» (Docente ex militante Puca Llaqta)

Incluso la poca influencia que tenía el PCP-SL entre los campesinos se intenta superar con el retorno de ex alumnos sancristobalinos a sus comunidades de origen o con el trabajo de profesores en las escuelas rurales

Entre los años 77, 78, y 79 es bastante notorio que (los militantes senderistas) viajaban específicamente a las provincias de Víctor Fajardo y Cangallo a formar escuelas populares y captar estudiantes; al mismo tiempo que trabajaban en estas zonas seguían consiguiendo militantes en la universidad, específicamente de las facultades de Educación, Sociales y Agronomía. (Ponencias del taller Universidad y violencia política)

Mientras que en el país, el Gobierno Militar anunciaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la entrega del poder a los civiles en medio de un clima de intensa agitación popular, el PCP-SL mantuvo una constante actitud de boicot y abstención frente a las movilizaciones populares y los procesos electorales convocados. Su perfil básicamente era de un partido localista arraigado en Ayacucho y las posiciones que expresaba mediante su periódico Voz Popular generaban la burla de las otras formaciones de izquierda, que los ubicaban como uno más de la constelación de grupos denominados como «infantiles de izquierda»²⁴.

A fines de los '70 las acciones del PCP-SL se vuelven más beligerantes contra las agrupaciones de izquierda que deciden participar en los procesos electorales. Un ejemplo de ello es que en el marco de la llegada a Ayacucho de una delegación de dirigentes nacionales de la UDP²⁵ (grupo que participaba en la Asamblea Constituyente y las elecciones generales de 1980), El PCP-SL se niega a polemizar al interior de la universidad y atacan a uno de los dirigentes.

En el contexto de la constituyente [...] un grupo de políticos de Lima viajan hacia allá (Ayacucho), entre ellos Carlos Malpica y Javier Diez Canseco, para hacer proselitismo político y en esas mismas circunstancias convocan a debate a Julio Casanova, ahí se produce un conato, unas peleas bajo el hecho de que Sendero no acepta el debate y cuestiona el oportunismo de estas personas a las que califica de electoreras. (Ponencias del taller Universidad y violencia política)

Incluso por la noche una treintena de senderistas atacó con petardos al mitin organizado por la UDP, luego durante la campaña electoral de 1980. Se realizaron pintas con inscripciones que

²⁴ Ver estudio sobre la violencia en la Universidad La Cantuta.

²⁵ La UDP era un frente conformado por diversas facciones del MIR, Vanguardia Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario, tanto el MIR como VR tenían una importante presencia en la UNSCH y se habían caracterizado por su fuerte oposición hacia el PCP Sendero Luminoso.

decían ¡APRA. UDP y CIA la misma porquería! Pese a estas hostilidades, la lista de la UDP obtuvo la mayor votación entre las cinco listas de izquierda que se presentaron a las elecciones de 1980²⁶.

Paralelamente los cuadros senderistas habían abandonado progresivamente la UNSCH. La despedida definitiva fue el Día Internacional del Trabajo. El primero de mayo de 1980 realizarían un último mitin en la UNSCH en la cual bajo un bosque de banderas rojas, los militantes senderistas vestidos con chaquetas y gorros similares a los usados por los *guardias rojos* en la Revolución Cultural China, anunciaron el inicio de la guerra popular.

Pusieron banderas en las esquinas, en el tercer piso estaba Biología, no sé si tu has visto todavía hay unos laboratorios de biología, estaba iluminadito, estilo chino [...] me quedé llegó más gente y empezaron los discursos bélicos, ‘vamos a reconstruir la historia’, discursos proféticos, me dicen que Edith Lagos habló allí [...] Casanova, Zorrilla, Durand, hablaban del futuro que había que construir, recuerdo las palabras de Durand que digo algo parecido a esto, ‘nuestros hijos cosecharan lo que hagamos, aunque muramos, ellos verán nuevo futuro’, un discurso para irse a luchar, luego de esa reunión desaparecieron. (Ex estudiante y actual trabajador no docente)

Despidiendo a Mezzich que se iba al campo con toda la parafernalia de China, de la guerra popular, con imágenes de Mao Tse Tung, banderas, estrellas, bosque de banderas, ya sabíamos que estaban iniciando su guerra» (ex militante del FER Antifascista)

En mayo de 1980 en momentos que se organizaban las elecciones presidenciales que permitirían transferir el poder hacia los civiles, un grupo armado del PCP-SL quema las ánforas y padrones electorales del poblado de Chuschi. El hecho pudo pasar de anecdótico sino fuera porque fue el punto de inicio de un conjunto de acciones violentas que pronto pondrían en alerta a todo el país.

El hecho que connotados líderes del PCP-SL hubieran ocupados importantes cargos en la UNSCH, puso a la Universidad en la mira de los informes policíacos y periodísticos, conocidos los primeros actos subversivos en Ayacucho. La prensa comenzó a informar sobre los supuestos nexos entre la UNSCH y el PCP-SL. Este hecho obligó a que el 18 de septiembre de 1980 las autoridades de la Universidad convoquen a una conferencia de prensa para negar que la institución se encontrara comprometida en actos terroristas. Las fuerzas políticas que se encontraban al interior de la Universidad en un primer momento tendieron a subestimar las posibilidades del PCP-SL, sin embargo, a medida que fueron aumentando las acciones subversivas, el senderismo logra inicialmente obtener la simpatía de un sector de la población que sentía que esta era una respuesta al abandono que vivía Ayacucho. En este tipo de respuestas, encontramos una amalgama de suerte de regionalismo ayacuchano con la apuesta por la revolución nacional y mundial.

Estas reacciones generan debates en ciertas organizaciones como los Antifascistas o Puka Llaqta, que tenían mayores cercanías ideológicas con el PCP-SL. Incluso sectores de sus

²⁶ Par las elecciones a diputados por el departamento de Ayacucho en 1980 las fuerzas de izquierda en conjunto lograron el 27% de los votos, obteniendo la votación más alta entre ellas la lista conformada por la UDP. Fuente: Quehacer # 5 -

militancias solicitan integrarse al proyecto armado. Sin embargo, el PCP-SL no acepta que se integren como organizaciones sino a título personal e incluso nos le brinda el apoyo necesario y finalmente son rápidamente desarticulados.

Sectores de Patria Roja, Puca Llaqta se enrolan a la lucha armada pidiendo a Sendero que se les reconozca niveles de diálogo pero Sendero no acepta, igual a los grupos de las facciones que quedaban de Bandera en el FER Antifascista, entre otros también se incorporan a la lucha pero como militantes de base y no en un nivel de alianza [...] se van a la lucha armada pero como dije son abandonados a su suerte. (Ex militante del FER Antifascista)

El enorme sectarismo del PCP-SL no les permite hacer alianzas con estos sectores que se consideraban ideológicamente cercanos y que apostaban también por la estrategia de guerra popular. El considerar que había culminado la reconstitución del Partido Comunista permitía justificar la exclusión de otros sectores políticos. Esta actitud a la larga iría minando la expectativa inicial generada en cierto sector radicalizado que podía ver en el PCP-SL la solución a los problemas de postergación que vivía el departamento de Ayacucho. Sin embargo es bueno puntualizar, que en este primer momento las acciones senderistas se concentrarán en una incesante campaña propagandística en escuelas, para lo cual les fue muy útil la red de profesores formados en los '70. Por otro lado también hay acciones de propaganda al interior de la UNSCH, sin embargo hay que apuntar que los cuadros senderistas ya se han retirado de ella y las acciones de difusión son realizadas por su periferia. En esta perspectiva se colocan pizarras con las siglas PCP, en las cuales se realiza proselitismo político y se informa sobre las primeras acciones armadas realizadas en Ayacucho. En la Universidad, el PCP-SL mantiene un mural señalando sus «victoriosas» acciones.

En junio de 1981, las fuerzas policiales anuncian la captura de dos células senderistas señalando que sus integrantes son estudiantes de la UNSCH. Este hecho es utilizado para reforzar la hipótesis sobre la existencia de nexos entre la universidad y el senderismo. El estigma sobre la universidad convertida en «una jauría de comunistas» (*docente ex militante Puca Llaqta*) potenciales terroristas comienza a tornarse más fuerte.

Otra idea que se difundió en diversos medios era que la Universidad como institución protegía a los terroristas. Esta afirmación era compartida por las autoridades gubernamentales; frente al aumento de las dificultades para el desarrollo normal de las actividades académicas y el incremento de la violencia política, la comunidad universitaria y la ciudadanía de Ayacucho se afirmaron en la necesidad de defender su Universidad para evitar que sea intervenida o recesada.

El 14 de octubre de 1981 se declara el estado de emergencia en cinco provincias del departamento de Ayacucho. Declarado el estado de emergencia, las fuerzas policiales procedieron a allanar la residencia universitaria y detener a medio centenar de estudiantes. En este allanamiento

no se encontraron armas ni ningún tipo de indicio que relacionara a la Universidad con actos de terrorismo²⁷:

Esa intervención a la residencia fue con presencia del rector y presencia de la fiscalía y no encontraron ningún arma que decían había en el pabellón Stalin y en el pabellón Marx de la Universidad de Huamanga. (Ex militante del FER Antifascista)

El 16 de octubre dos días después de ser declarado el estado de emergencia, la UNSCH suspende temporalmente sus clases, esta medida sumada al allanamiento de la residencia anunciaban el inicio de tiempos difíciles para la Universidad.

El dos de marzo de 1982 un comando senderista ataca el penal de Ayacucho liberando a 247 reclusos. Este hecho impactó en la comunidad huamanguina, ya que fue una demostración de fuerza política y militar del PCP-SL sobre los representantes estatales. Este hecho sin lugar a dudas aumenta las iniciales simpatías de un sector que veía en el PCP-SL la respuesta al abandono que vivía Ayacucho.

La primera semana de agosto de 1982 se produce el ataque al fundo Allpachaca, el cual era propiedad de la UNSCH y funcionaba como centro experimental para el cultivo y manejo de pastos de altura, así como para la promoción de otras modernas tecnologías agropecuarias en la perspectiva de lograr la mejora de la productividad en las comunidades rurales. El PCP-SL arrasa este fundo ya que consideraba que desde allí se servía al imperialismo y se traficaba con los bienes producidos, para la acción utilizó a campesinos que vivían en las zonas aledañas:

Esta incursión de sendero en Allpachaca, al fundo de la universidad, con un contingente de campesinos de los alrededores del fundo se calcula que fueron por lo menos 300 a 400 campesinos [...] que destruyen la infraestructura, matan el ganado destruyen los tractores, porque la tecnología no era una cosa que estaba en sus esquemas y representaba a la burguesía, además de ello se justifican diciendo que el queso y el vino que se maceraba en este fundo beneficiaban a un pequeño grupo y no al campesinado entonces reparten los quesos y la carne a los campesinos que habían ido. (Ponencias del taller Universidad y violencia política)

El hecho causa la protesta del conjunto de la comunidad universitaria huamanguina, sin embargo, a fines de agosto un comando senderista incursiona en las instalaciones de la UNSCH y reparte propaganda llamando a los estudiantes a sumarse a la lucha armada.

En septiembre de 1982 muere la líder senderista Edith Lagos en un enfrentamiento con la policía. Su entierro genera una de las mayores concentraciones públicas de la década de los '80, en la cual participan una buena cantidad de miembros de la comunidad universitaria. La muerte de Edith Lagos es capitalizada por el PCP-SL, ya que, muchos ven en ella la representación de la rebeldía ayacuchana:

²⁷ «La policía allanó en la madrugada de ayer las instalaciones de la residencia de estudiantes, deteniendo a medio centenar de ellos [...] los estudiantes detenidos, fueron interrogados sobre la procedencia del material impreso que

El perfil de Edith, una chica de una familia acomodada con rasgos mestizos, típicos ayacuchanos ya tenía toda la aureola previa de perseguida, encarcelada, liberada de la prisión, y trabajo en el campo y aparece ejecutada entonces se convierte en un símbolo de las jóvenes mestizas de Ayacucho y de un ideal, la personificación del ideal y la entrega por una causa en la que ella es víctima, cosa que después va a revertirse totalmente por las acciones de Sendero. (Ex militante del FER Antifascista)

Sin embargo, pronto esa aureola de rebeldía y heroicidad se irá desvaneciendo por los propios actos del PCP-SL. El 14 de noviembre de 1982 un comando senderista ataca de nuevo el fundo Allpachaca, esta vez el ataque es sumamente violento y mueren dos mujeres no identificadas²⁸.

A fines del '82 la violencia se tornará más aguda, es en este contexto que el gobierno central autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho y se inicia un escenario de la militarización.

2.18.4. La UNSCH en el proceso de militarización: 1983 a 1988

El ingreso de las fuerzas armadas a fines del '82 y la instalación del comando político militar, cambiarán radicalmente la vida en Huamanga. El recrudecimiento de la violencia política y la militarización de la sociedad generarán condiciones en las cuales cada día se torna más difícil el funcionamiento de la Universidad.

El 4 de febrero de 1983, un comando senderista asesina a un estudiante acusándolo de haber tomado el nombre de la organización subversiva para ejercer la extorsión, de allí para adelante se sucederán sucesivos asesinatos de estudiantes y las amenazas contra las autoridades de la UNSCH serán cada día más frecuentes. Desde las propias esferas gubernamentales también se originarían una serie de presiones. Es de este modo que se origina una acusación fiscal contra las autoridades y ex-autoridades universitarias, producto de la misma fueron detenidos un conjunto de personalidades, entre las cuales estaba el ex-rector Enrique Moya en 1983.

En medio de este clima de incertidumbre, los grupos políticos comienzan a reducir sus actividades. El temor hacia el PCP-SL, la presencia de las fuerzas armadas y la lenta pero efectiva infiltración de los agentes del servicio de inteligencia, irían haciendo cada día más peligrosa cualquier actividad política:

Yo mismo que estaba vinculado a uno de los grupos del FER Antifascista me retiro en el 84-85 porque a inicios del 84 la cosa se hace muy difícil para salidas mínimas al campo o para el desarrollo regular de tus actividades académicas, porque ya no sabes con quien estás dialogando en el aula, tanto presiones de Sendero por un discurso como el asunto de vigilancia del Servicio de Inteligencia. (Ex militante del FER Antifascista)

Por otro lado en la vida institucional, la vida política en términos de organizaciones, centros federados, centros de estudiantes estaban en picada, o sea nadie quería asumir por lo que recuerdo, nadie quería asumir cargos de ese tipo, la desconfianza en general terminó por un lado desestructurando estos espacios estudiantiles organizativos de Centros federados. (Ex dirigente estudiantil de los '80)

poseían. No se encontró ningún tipo de armas ni explosivos.» Fuente: Panorama Ayacuchano, 15 de octubre de 1981.

²⁸ Fuente: *Cifras y Cronología de la Violencia Política: 1980-1991*. SERPAR, Huancayo 1992.

Durante esta época, eran frecuentes en la ciudad de Ayacucho las intervenciones a las viviendas y la posesión de cualquier tipo de bibliografía relacionada al marxismo podía significar que a las personas se les acusara de pertenecer a los grupos subversivos, es por ello que algunos lugares públicos de Ayacucho amanecían con libros arrojados por sus dueños para evitar ser detenidos:

La ciudad terminó amaneciendo con ciertos lugares como la Alameda por ejemplo, con las rumas de libros sobre Marx, Lenin, Mariátegui porque cualquier indicio o cualquier título de libro que dijera socialismo o que estuviera vinculado a la URSS o China, vinculado a Marx, Lenin, Mao automáticamente era evidencia con algún vínculo que podías tener con la subversión, entonces profesores y estudiantes terminaron arrojando u ocultándolos. (Ex rector de la UNSCH)

A medida que se agrava la situación en la UNSCH, las autoridades comienzan a tomar medidas para desvirtuar cualquier tipo de vinculación con el terrorismo como, por ejemplo, cambiar los nombres a los pabellones de la residencia de estudiantes, que hasta ese entonces ostentaban los nombres de los clásicos del marxismo. Igualmente, en 1983 se iniciaron cambios en los contenidos curriculares, modificando aquellos cursos que se inspiraban en el denominado marxismo de manual, los cuales habían sido introducidos en la reforma de inicios de los '70. Muchos de estos cursos, tanto por su contenido como por la bibliografía utilizada, ponían en peligro a los alumnos frente a la ola represiva que se extendía por Huamanga. Para 1986 ya existían nuevos planes curriculares, solamente en la facultad de Educación se mantuvieron hasta finales de los '80 algunos cursos de marxismo esquemáticos, de manual.

En 1984 después de un período de rectorado interino y la redacción de un nuevo estatuto para la UNSCH que incorpora la participación estudiantil plena en la asamblea universitaria, se elige a José Castañeda como nuevo rector, el cual ejercerá su cargo hasta 1987, año en el cual se produce su renuncia, siendo sustituido por el ingeniero Alberto Morote, hasta ese entonces vicerrector administrativo.

El 11 de abril de 1985, un comando senderista incursiona en el comedor universitario anunciando un paro armado para los días 13, 14 y 15 de abril, del mismo modo hacen un llamado a los estudiantes para que apoyen el boicot a las elecciones presidenciales. Pese a este tipo de apariciones públicas, en esta etapa la presencia del PCP-SL en la Universidad se tornará menos intensa y más discreta. La razón de ello fue la prioridad que tuvo para ellos el trabajo en las zonas rurales, elegido como escenario para desarrollar la guerra popular. A esto se suma, la adopción de un perfil bajo ante el grado de infiltración existente por parte de los servicios de inteligencia al interior de la universidad. A pesar de ello, sin embargo, el PCP-SL mantuvo cierta presencia en algunos espacios universitarios como la facultad de Educación y la residencia de estudiantes, lugares en que la presencia de militantes de senderistas era importante.

Otro espacio en el cual el PCP-SL tuvo presencia por intermedio de sectores cercanos a su discurso, fue el Sindicato de Trabajadores No Docentes. Su influencia se limitó a determinados grados de persuasión o presión en los trabajadores administrativos, como también sobre la distribución de los recursos que dependían de la Dirección de Bienestar Estudiantil.

En marzo de 1988 un grupo de desconocidos detonan bombas al interior de la Universidad; en julio del mismo año la Universidad aparece embanderada con estandartes en los que se leía «Comando Rodrigo Franco» (CRF). En octubre durante una fiesta estudiantil estallan cargas explosivas produciendo que veintiséis estudiantes resulten heridos. Nunca se supo quienes cometieron estos actos. Estos hechos marcarán el inicio de las de una creciente actividad de comandos paramilitares contra la Universidad, actividad que se tornará más agresiva entre 1988 y 1991. Es importante tener en cuenta que en la década del '80 existía un fuerte consenso sobre la necesidad del respeto a la autonomía de la institución universitaria, en este sentido a finales de los años '80 en la medida que era muy difícil una intervención abierta contra la universidad, agentes estatales empiezan a realizar acciones encubiertas al interior de la universidad, las mismas que van desde la infiltración hasta los actos de sabotaje e incluso los asesinatos.

2.18.5. *La UNSCH cercada por la violencia: 1989-1991*

Entre los años 1989, 1990 y 1991 sin lugar a dudas la UNSCH tuvo que vivir sus momentos más difíciles como institución ya que no solamente tuvo que sufrir la infiltración de los servicios de inteligencia y fuerzas armadas, sino también la agresión de agentes estatales, comandos paramilitares y del PCP-SL. En este sentido es importante tener en cuenta que en el mismo período también se produjo una serie de asesinatos en la Universidad del Centro, crímenes que en muchos casos tuvieron patrones similares a los ocurridos en Huamanga, lo que nos habla de una práctica sistemática de violación de los DDHH.

Este período es el que presenta el saldo más alto víctimas de los tres estamentos universitarios; estudiantes, docentes y trabajadores. En este sentido la tendencia a la despolitización y apatía se acentuará en los claustros universitarios, sin embargo se mantendrá la organización estudiantil vía los centros federados, los cuales formarán una coordinadora centrada en la atención de los problemas académicos o administrativos.

En este difícil contexto, el 3 de julio de 1988 es nombrado como obispo auxiliar de Ayacucho el monseñor Juan Luis Cipriani y con ello surgirá un nuevo actor político, el cual tendrá paulatinamente una mayor influencia en la vida política de la UNSCH.

En diciembre de 1988, el Gral. José Valdivia jefe del Comando Político Militar, solicitó al rector Morote permiso para intervenir la vivienda universitaria. El permiso fue denegado por la

autoridad universitaria, lo que al parecer ahondó las diferencias entre el Gral. Valdivia y las autoridades de la UNSCH. A los pocos días de la negación de este pedido, el 3 de enero son atacados los locales de la UNSCH con cargas explosivas. En la acción es herido un trabajador no docente. Testimonios recogidos entre los ex-rectores de la UNSCH apuntan a la hipótesis que el Gral. José Valdivia fue el autor intelectual de los atentados contra las instalaciones universitarias, esta acción al parecer fue una represalia frente a la actitud asumida por el rector de ese entonces²⁹.

El 29 de mayo de 1989 a plena luz del día personas no identificadas asesinan al profesor Marcial Capeletti, mientras dicho docente se encontraba dictando clases.

Pidió un alumno que borrara la pizarra, el alumno borró la pizarra... y mi padre les dijo, bueno, alumnos, el examen consta de cinco preguntas, volteó para escribir las cinco preguntas y en lo que está escribiendo la segunda pregunta, empujan la puerta y... y entra el asesino, ¿no?... con un tiro certero que le da el primero en la sien, el segundo en el cuello y el tercero en el hombro... y... los asesinos salieron de la Universidad.³⁰

Marcial Capeletti no solamente habido sido docente de la UNSCH, sino que era uno de los dirigentes del entonces gobernante Partido Aprista, además había presidido la Corporación Departamental de Desarrollo (CORDE Ayacucho), uno de los organismo del gobierno central más importantes en el departamento. Durante su gestión se habían producido diversos problemas y denuncias que habían surgido incluso al interior de su propio partido. Para ese entonces el APRA vivía una profunda división en Ayacucho, su juventud había asumido discursos radicales denominándose «ARE Rojo» y en general dicho partido vivía un conjunto de pugnas internas entre las que se destacaba la rivalidad entre dos tendencias muy definidas.

Indudablemente estuvimos divididos en dos grupos lo que en Ayacucho se llamaba el Capelitismo y Valencismo. Los capelitistas eran los alanistas y los valencistas eramos de los alvistas y llegaba momentos en que no podíamos ni vernos. (Ex docente aprista)

Es por estos motivos que un ex-rector de la UNSCH afirmó que es muy probable que el asesinato de Marcial Capeletti no estuviera tanto relacionado con su condición de docente universitario sino con su actuación pública en el gobierno, dentro de esta hipótesis el crimen sería un producto de las propias pugnas al interior del Partido Aprista. Sin embargo es importante anotar que sobre la autoría del crimen la versión más difundida es que esta acción fue desarrollada por el PCP-SL.

En junio de 1989 termina el período de Alberto Morote como rector de la UNSCH, el ingeniero Morote es sustituido por un rector interino, el cual se encarga de convocar a la asamblea

²⁹ Debemos tener en cuenta que el Gral. José Valdivia aparece relacionado a diversos casos de violación a los derechos humanos, entre los cuales se incluye la masacre de campesinos de Cayara en mayo de 1988. Fuente: Perú Debate Network.

³⁰ Testimonio presentado por los familiares de Marcial Capeletti en la Audiencia Pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Ayacucho, 11 de abril del 2002.

universitaria para la elección del nuevo rector, después de una serie de problemas al interior de la Universidad, es elegido Pedro Villena como nuevo rector.

El 26 de junio las fuerzas del orden detienen y posteriormente desaparecen a los estudiantes José Carlos Mansilla (Ingeniería de Minas) y Alexander Mansilla (Educación). Ambos estudiantes eran hijos de un docente de la UNSCH, el hecho ocurrió en el propio domicilio de los jóvenes, como relata su propia madre:

Bueno el hecho ocurrió en la mañana... a las nueve de la mañana del veintiséis de junio de 1989... mi... yo y mi hijo José Carlos realizábamos la limpieza de la tienda de mi casa... Yo entré, un momento, hacia el fondo de la casa [...] En ese momento, habían entrado cuatro hombres, me dijeron. Lo agarraron, lo golpearon y casi desmayado lo sacaban a la calle. [...] a una cuadra venía su hermano mayor Alexander y al ver el hecho se acercó para preguntar. Inmediatamente, él también fue golpeado. Lo metieron a un carro y se lo llevaron a la comandancia.³¹

Octubre de 1989 fue sin lugar a dudas uno de los meses más duros para la UNSCH. El 19 de octubre, un comando senderista asesina a un estudiante de la facultad de Educación que pertenecía al MRTA.

El 28 de octubre, la Universidad sufre otro de los peores atentados que causa daños a la residencia, el comedor universitario, el tópico de salud universitario, once unidades de transporte y la imprenta. El ataque es realizado por grupos de uniformados, probablemente paramilitares o agentes estatales realizando operaciones encubiertas. El ataque dejó pérdidas incalculables para la Universidad.

El mismo día por la tarde, se llevó a cabo el allanamiento de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía a las instalaciones de la residencia universitaria, en las cuales detuvieron a más de treinta estudiantes. Anteriormente a esta acción, se produjo un atentado contra una comandancia policial, el cual produjo la muerte de dos efectivos policiales.

Las fuerzas del orden señalaron que en la imprenta de la universidad se reproducía material subversivo y que los miembros del PCP-SL utilizaban los servicios de bienestar universitario para su provecho. Sin embargo, después de estos atentados quedaba claro que resultaba imposible para los militantes senderistas utilizar como refugio las instalaciones universitarias, es por ello que los estudiantes vinculados al PCP-SL abandonan definitivamente el espacio de la residencia universitaria.

El 11 de noviembre la Junta de Vigilancia de Comedor y la Coordinadora de Centros Federados, realizan una movilización pidiendo la ampliación de rentas para la universidad y denunciando los planes del gobierno para cerrar la misma. En esta marcha muere atropellado el estudiante Cayo Yupanqui y durante su entierro se produce otra movilización de protesta en contra fundamentalmente del gobierno aprista. El 27 de noviembre desconocidos asesinan en su domicilio

al abogado Hugo Luna Ballón, ex asesor legal y docente de la UNSCH. Tampoco se han determinado los autores de dicho crimen.

El 28 de enero de 1990 es asesinado el trabajador no docente Tomás Evangelista Carranza, el cual pertenecía a las filas del Partido Aprista y al igual que Marcial Capeletti había ejercido un cargo de confianza en la Corde - Ayacucho.

Debemos tener en cuenta que el año de 1990 será particularmente importante porque se producen las elecciones presidenciales, las cuales se realizan en medio de una serie de amenazas y paros armados organizados por el PCP-SL en su intento por boicotear el proceso electoral. El clima de incertidumbre se generaliza y la violencia contra la Universidad se acrecienta. En julio de este año, personas no identificadas ametrallan los laboratorios de Arqueología ocasionando cuantiosos daños materiales. Existe la sospecha que esta acción pudo haber sido cometida por grupos paramilitares.

El 21 de julio de 1990 un comando paramilitar asesina a Fernando Colonio, abogado que trabajaba para la Universidad, el cual había realizado una serie de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que venían cometiendo las fuerzas del orden:

Las fuerzas de contrasubversivas, tuvieron una estrategia militar en la universidad para lograr hacer un seguimiento de militantes de simpatizantes y lograr coger la «madeja» de Sendero, dentro de esa estrategia ellos también generan un conjunto de muertes de profesores, del asesor legal de la universidad, un joven Fernando Colonio que horas antes había denunciado en la municipalidad de Ayacucho la violación de DDHH a nombre de la universidad y por la noche es liquidado con un tiro con silenciador.»(Ponencias del taller Universidad y violencia política)

Tres días después, el 24 de julio es asesinado, en circunstancias similares, Ciro Aramburú, jefe de Bienestar Universitario, dependencia que había sido blanco de los peores ataques por parte de los grupos paramilitares y las fuerzas del orden.

Ciro Aramburú fue asesinado en su propio domicilio, el comando que lo asesinó utilizó silenciadores, accionar característico de los comandos de las fuerzas del orden que realizaban operaciones contra subversivas encubiertas³². Un mes después de estos asesinatos, sujetos desconocidos dinamitan el local de la facultad de Agronomía, causando graves pérdidas económicas a la Universidad.

1990 había sido un año duro. Para 1991 las cosas tampoco mejorarían, y aunque el PCP-SL había sufrido derrotas producto del accionar de las comités de autodefensa en Huanta, sin embargo todavía mantenía una intensa actividad en Huamanga. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden seguían realizando operaciones encubiertas para eliminar a los presuntos colaboradores de la

³¹ Testimonio presentado por los padres de los estudiantes Mansilla en la Audiencia Pública de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Ayacucho, 11 de abril del 2002.

³² El uso de armas de fuego con silenciadores es una modalidad utilizada en casi todos los asesinatos cometidos entre 1989 y 1991 por perpetradores contrarios a las fuerzas subversivas.

subversión, la ciudad vivía en una constante zozobra y era generalizada la idea que en cualquier momento se ordenaba el cierre de la Universidad.

En este difícil contexto el 19 de julio de 1991, un comando militar realiza una operación encubierta en el domicilio del docente universitario Francisco Solier García, que termina siendo asesinado junto con su esposa y su hijo. Para el crimen se utilizaron armas con silenciadores. Algunos testimonios plantean que el móvil del asesinato fue que el Ejército identificaba al ingeniero Solier como un presunto colaborador de los grupos subversivos.

Otras versiones afirman que el móvil del asesinato también pudo haber sido que su esposa había presenciado el asesinato del periodista Luis Morales, el cual fue asesinado a plena luz del día y a 100 metros de la plaza central, por un comando conformado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército. A los pocos días del asesinato del ingeniero Solier aparecen en la UNSCH volantes presuntamente elaborados por el PCP-SL, en los cuales se denunciaba la muerte de Francisco Solier y se culpaba de la misma a los grupos paramilitares. A los dos días del asesinato de Solier, aparecen sin vida los cuerpos de Mariscote Santa Cruz y Leoncio Espinoza, ambos estudiantes de la especialidad de Obstetricia, dichos estudiantes habían sido secuestrados una semana antes.

Octubre de 1991 fue un mes particularmente violento para los miembros de la comunidad universitaria. El 12 de ese mes desconocidos asesinan al estudiante Antonio Huacache Chávez, en momentos que retornaba a su domicilio. En similares circunstancias, el 19 de octubre es asesinado Camilo Fernández Flores, estudiante de la Facultad de Educación. El día 23 se produce un atentado contra el Dr. Juan Luis Pérez Coronado profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor se salva de morir al ser defendido por un enorme perro que tenía en su domicilio.

El 21 de diciembre de 1991 es asesinada en la puerta de un centro educativo la Ex-Alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha, quien laboraba como docente en la especialidad de Servicio Social de la UNSCH. Leonor Zamora había asumido la alcaldía de Huamanga en un período particularmente complicado (1984). Eran conocidos sus sucesivos conflictos con el Comando Político Militar, dichos conflictos se habían originado por las denuncias que realizaba sobre las violaciones a los derechos humanos, las cuales se habían incrementado con la permanencia de los militares en la ciudad. Según diversas investigaciones periodísticas este asesinato pudo haber sido cometido por el mismo comando del SIE que asesinó a Francisco Solier. Ambos casos están siendo actualmente investigados dentro de un conjunto mayor de acciones atribuidas al autodenominado grupo Colina. Testimonios de ex-docentes de la UNSCH señalan que por aquella época vivían en Huamanga el sub oficial Sosa, el cual posteriormente fue identificado por uno de los ex-docentes entrevistados, como uno de los integrantes del denominado grupo Colina.

2.18.6. La post guerra: 1992 - 2000

Para inicios del '90 la ciudad de Huanta estaba relativamente pacificada gracias a la acción de los comités de autodefensa. Esta situación genera que entre los años 1990 y 1991, tanto las acciones de Sendero como del Ejército se concentraran en Huamanga, especialmente en la UNSCH, que había sido estigmatizada por casi una década como semillero de terroristas. Sin embargo para 1992 la actividad subversiva comienza a decaer, los paros armados paulatinamente dejan de ser acatados y en septiembre de 1992 es capturado Abimael Guzmán y los principales dirigentes de Sendero Luminoso. Posteriormente parte de la dirección de la organización subversiva se compromete a un «acuerdo de paz» con el gobierno de Alberto Fujimori y se produce la división interna en Sendero Luminoso. Todos estos hechos explican la significativa reducción de la violencia política en Huamanga.

La UNSCH entre 1989 y 1991 había estado al punto del colapso producto de la violencia política que experimentaba Huamanga. Con la llegada de Pedro Villena al rectorado se produce un proceso que busca mejorar las relaciones entre la institución universitaria y los poderes de facto en Ayacucho: el Ejército y la cúpula de la Iglesia Católica.

Para entender este proceso es necesario remitirnos al rectorado de Pedro Villena, su elección se produce a inicios de los '90 en momentos en que la Universidad vivía una enorme crisis y se pensaba en la posibilidad de una intervención o receso:

Villena era un ingeniero con una actitud más democrática, más abierta y con capacidad e imaginación para salir de ese atolladero que estaba la universidad porque nosotros esperábamos en cualquier momento una intervención. (Ex militante del FER Antifascista)

En los momentos que asume Pedro Villena el rectorado, las organizaciones universitarias estaban totalmente desestructuradas, incluso desaparece la Junta de Vigilancia de Comedores, organismo que había protagonizado las movilizaciones de la segunda mitad de los '80. Muchos docentes habían abandonado la Universidad huyendo de la violencia o de las amenazas de los paramilitares³³. Es entonces que el Ingeniero Villena busca un apoyo externo para mantener la continuidad de la UNSCH, este apoyo lo encuentra en el sector más conservador de la Iglesia, liderado por monseñor Cipriani y de esta manera logra contactos con el gobierno central³⁴ y la cúpula del Ejército. Para ese entonces era conocida la posición contraria a la defensa de los derechos humanos por parte de Monseñor Cipriani, pero además era pública su enemistad con la UNSCH a la cual consideraba un refugio de comunistas. Para ese entonces, el Obispo Auxiliar de Ayacucho había acumulado bastante poder, lo cual lo hacía explícito en sus homilías que eran utilizadas para influir en las decisiones de las autoridades locales e incluso nacionales:

³³ En 1990 un supuesto comando paramilitar denominado Movimiento Anti Terrorista de Ayacucho (MATA) publicó una lista de docentes que estaban condenados a morir, la mayoría de ellos tuvo que salir de Ayacucho.

³⁴ Debemos tener en cuenta que existía una gran cercanía política entre monseñor Cipriani y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.

Porque evidentemente las autoridades nacionales le preguntaban a él (Monseñor Cipriani) sobre el futuro del funcionamiento, no solamente de la universidad sino probablemente de muchas de las actividades de la ciudad. Y tener una opinión favorable de él era sumamente importante para la gestión administrativa de la universidad. Además los sermones de Cipriani en aquella época se convirtieron en un discurso político, todo sermón de Cipriani durante el tiempo del terrorismo, era el termómetro para entender qué cosas estaba pasando. (Ex-Rector UNSCH)

Es de esta manera, el rector de la UNSCH se vincula personalmente con el Obispo Auxiliar de Ayacucho, con lo que logra ganar la confianza de los sectores militares hasta ese entonces adversarios de la Universidad y lo más importante tener acceso a Alberto Fujimori con lo cual podía asegurarse apoyo del gobierno central, en especial frente al importante tema de las rentas.

Este conjunto de alianzas determinan que surja una relación en la cual la institución universitaria mantiene silencio frente al accionar de los militares y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. A la par que los claustros universitarios se veían envueltos en la apatía y la pérdida de capacidad. Pese a la oposición de un sector de los docentes el rector Villena nombra profesor honorario a Monseñor Cipriani y firma una carta que avalaba su elección como Arzobispo de Ayacucho³⁵:

Finalmente las buenas relaciones del ingeniero Villena con el gobierno de Alberto Fujimori le permitieron que posteriormente ocupar el cargo de Ministro de Estado. Al finalizar el período de Pedro Villena, la Asamblea Universitaria elige a Enrique Gonzáles Carré como nuevo rector, en esta nueva gestión se inicia una suerte de recuperación de la Universidad manteniendo una relación pragmática de armonía con el monseñor Cipriani y el Comando Político Militar; además con la reducción de la violencia política se abre la posibilidad de restablecer vínculos de cooperación entre la UNSCH y otras instituciones académicas y culturales.

2.18.7. Conclusiones

En la década de los '60 y '70 la presencia de la UNSCH generará una enorme influencia en Ayacucho, una pequeña ciudad capital de un departamento con un pobre desarrollo económico, social y cultural; el cual además verá acentuadas sus carencias y postergación en la medida que avanzaba el proceso de modernización, fundamentalmente en las zonas urbanas de la costa del país. En este sentido no es raro que al interior de esta Universidad, eje dinamizador de su entorno, un pequeño grupo de docentes, en su mayoría procedentes de una intelectualidad provinciana, pudieran construir una estructura partidaria vertical, que alimentaría «sus bases» fundamentalmente de los jóvenes provenientes de ciudades intermedias y pequeños poblados de las provincias pobres

³⁵ Finalmente Monseñor Cipriani es nombrado Arzobispo de Ayacucho el 13 de mayo de 1995, con lo cual su poder se hace mayor, este cargo lo ejercerá hasta enero de 1999 cuando asume el Arzobispado de Lima.

del departamento de Ayacucho y su zona de influencia, que llegaban a la Universidad con grandes expectativas, pero que a la larga iban comprendiendo que era muy pocas sus posibilidades de movilidad social por la estructura centralista y desigual del país. Las incertidumbres generadas en estos jóvenes fueron llenadas por una propuesta política basada en el fundamentalismo político, la cultura de la confrontación y una lectura ideologizada de los procesos sociales que experimentaba el Perú.

La experiencia en la UNSCH convenció al PCP-SL que le era imperativo el control de los estratégicos servicios de bienestar universitario, con los cuales podían tejer relaciones clientelistas con los estudiantes más pauperizados o con menos redes sociales. Su posicionamiento en la facultad de Educación le permitía controlar una red de docentes jóvenes los cuales al ejercer la docencia en las escuelas rurales y urbanomarginales, desde donde podían lograr la inserción del partido en sectores sociales en los que no tenían influencia. En este sentido, el PCP-SL apela al paternalismo, la verticalidad y relaciones de corte patrimonialista, mostrando de este modo características de continuidad con los rasgos de la política más tradicional, los cuales intenta ocultar tras un discurso revolucionario y radical. Esta suerte de aprendizaje «piloto» en la UNSCH luego serviría de modelo para el accionar del PCP-SL en otras universidades públicas del país y explicaría la priorización de las facultades de educación, en el desarrollo de su trabajo político y de reproducción ideológica.

En la primera mitad de los '70, el proceso de diversificación y expansión de la UNSCH, sumado a la práctica política excluyente del PCP-SL generó un conjunto de resistencias al interior de la Universidad, en especial dentro de los sectores procedentes de medios más urbanos, lo que permitió que el PCP-SL fuera desplazado de importantes espacios de poder y de la conducción de los gremios de docentes y estudiantes. Cuando el PCP-SL comienza a perder fuerza en el movimiento social entonces para mantenerse políticamente apela a la confrontación y la búsqueda de una suerte de pureza ideológica en una lectura dogmática de Mariátegui y el desarrollo de lo que denominaron el marxismo- leninismo- maoísmo. Estos elementos los combina con una apuesta mesiánica basada en considerarse el grupo 'elegido' para encabezar la «revolución» que todos los otros estaban de una u otra manera traicionando. Esta lectura ideologizada era compartida por otros grupos radicales fundamentalmente derivados de la vertiente maoísta, sin embargo, el PCP-SL marca la diferencia al llevar este razonamiento hasta sus consecuencias más extremas dando inicio a su proyecto armado.

El hecho que importantes líderes del PCP-SL hubieran ocupado cargos significativos en la conducción institucional de la UNSCH a inicios de los '70, generó que desde el inicio de la violencia en 1980, esta institución fuera blanco de diversos ataques. Desde el primer momento, las autoridades del gobierno central pensaron erróneamente que desde el espacio universitario se dirigía la lucha armada. Esta suposición partía de desconocer el hecho que en la segunda mitad de los setenta los militantes del PCP-SL paulatinamente habían abandonado la Universidad, para insertarse en el campo escenario que concebían como fundamental para el desarrollo de su proyecto armado.

Con el ingreso del Comando Político Militar a fines de 1982, la UNSCH quedó bajo la mira de las Fuerzas Armadas, las cuales se infiltraron masivamente en la universidad y detuvieron a muchos de sus integrantes bajo la acusación de apoyar las acciones subversivas. Posteriormente hacia finales de la década de los ochenta, el convencimiento de que la UNSCH albergaba a integrantes del PCP-SL, llevó a que miembros de la Fuerzas Armadas desarrollaran acciones de represalia que se materializaron en la destrucción de instalaciones físicas de la Universidad y el asesinato selectivo de determinados miembros de la comunidad universitaria, a los cuales se les acusaba de tener vinculaciones con los grupos subversivos. Para 1989 era claro que para un sector de las Fuerzas Armadas la estrategia contra subversiva pasaba por la eliminación de la institución universitaria por considerarla un nido de subversivos.

La Universidad también fue blanco de los ataques del PCP-SL, que desde 1982 en adelante destruyó instalaciones, amenazó y asesinó a miembros de la comunidad universitaria. Es de este modo que la UNSCH quedó atrapada entre dos fuegos que originaron un clima de inestabilidad que afectó su funcionamiento institucional. Este contexto fue utilizado por algunos sectores para desarrollar un conjunto de acciones de venganza política contra personas que consideraban sus adversarios. En este sentido, durante la segunda mitad de los ochenta se produjeron un conjunto de crímenes políticos en los que estuvieron involucrados agentes estatales, grupos paramilitares y el PCP-SL.

El incremento de la violencia generó hacia 1983 en adelante, la desmovilización y el miedo de los actores políticos al interior de la Universidad. En este contexto se ensayaron estrategias para asegurar la sobre vivencia de la institución universitaria para evitar su receso o intervención. En este sentido se aplicaron medidas de autocensura que pasaron por diversos cambios curriculares que tuvieron como un eje central la eliminación de los cursos y bibliografía que pudieran servir de pretexto para la detención de los miembros de la comunidad universitaria, este proceso se desarrolló entre 1983 y 1989.

Para 1990 desde el rectorado de la Universidad se tejería una suerte de alianza con el sector conservador de la Iglesia Católica, liderado por monseñor Cipriani, lo cual les permitió a las autoridades universitarias de ese entonces iniciar una relación de proximidad hacia la Fuerzas Armadas y al gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Esta alianza que tuvo una alta dosis de pragmatismo nos puede ayudar a comprender las razones por las cuales la UNSCH no fue intervenida ni militar ni administrativamente, como si lo fueron otras universidades públicas entre 1991 y el año 2000.

Como saldo del proceso de violencia política, la Universidad perdió el liderazgo regional con el que surgió. Su imagen quedó seriamente resquebrajada al relacionarla equivocadamente con la subversión. Los miembros de la comunidad universitaria fueron estigmatizados y en muchos casos tuvieron que optar por el silencio o emigrar.

Con la ello, la Universidad perdió capacidad académica, pues la nueva plana docente que en algunos casos no tenía las calificaciones académicas suficientes. La violencia también aisló a la

Universidad frente a otras instituciones académicas y en muchos casos la institución universitaria se limitó a sobrevivir en medio de la precariedad; además de esto debemos agregar las enormes pérdidas económicas causadas por los atentados del PCP-SL, las fuerzas del orden y los grupos paramilitares. La pérdida de capacidades y perspectivas dentro de la UNSCH fueron el resultado final de veinte años de conflicto armado en la región..

Anexo 1: Cronología sobre la UNSCH y el Proceso de Violencia Política.

FECHA	SUCESO
18/09/1980	Autoridades de la UNSCH convocan a una conferencia de prensa para negar que la universidad esté vinculada a grupos subversivos.
15/06/1981	La Policía anuncia la detención de integrantes de dos células senderistas conformadas por estudiantes de la UNSCH.
14/10/1981	Al amparo de la declaración del estado de emergencia, la Policía allana la residencia universitaria deteniendo a medio centenar de estudiantes.
16/10/1981	La UNSCH anuncia la suspensión temporal de sus actividades académicas debido al clima de violencia.
02-06/08/1982	Un comando senderista ataca la hacienda Allpachaca de propiedad de la UNSCH.
14/11/1982	Segundo ataque del PCP-SL a la hacienda Allpachaca.
11/04/1985	Senderistas toman el comedor universitario convocando a un paro armado y el boicot a las elecciones.
08/06/1986	Estalla una bomba cerca del Hotel de Turistas, donde se reunían autoridades de la UNSCH con congresistas.
16/03/1988	Detonan bombas en los locales de la UNSCH, no se identifica a los autores del atentado.
20/08/1988	Aparecen en la UNSCH banderas del grupo paramilitar Rodrigo Franco - CRF.
30/10/1988	Durante una fiesta universitaria estallan explosivos, 26 estudiantes resultan heridos.
03/01/1989	Paramilitares atacan los locales de la UNSCH, resulta herido un trabajador no docente.
29/05/1989	Desconocidos asesinan Marcial Capeletti mientras dictaba clases. El profesor Capeletti era de las filas del Partido Aprista y había ocupado la presidencia de la CORDE-Ayacucho.
26/06/1989	Fuerzas del orden detienen y posteriormente desaparecen a los estudiantes José Carlos Mansilla (Minas) y Alexander Mansilla (Educación).
19/10/1989	Senderistas asesinan a un estudiante de la Facultad de Educación acusándolo de pertenecer al MRTA.
28/10/1989	Paramilitares atacan y destruyen la imprenta, el comedor, el tópico de salud y unidades de transporte de la UNSCH.
28/10/1989	Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía allanan la residencia estudiantil deteniendo a 30 estudiantes.
11/11/1989	Durante una manifestación estudiantil muere el estudiante Cayo Yupanqui.
27/11/1989	Es asesinado en su domicilio el abogado Hugo Luna Ballón, ex-asesor legal de la UNSCH.
28/01/1990	Es asesinado Tomás Evangelista, trabajador de la UNSCH y ex-funcionario público aprista.
05/07/1990	Desconocidos ametrallan los laboratorios de Arqueología de la UNSCH.
21/07/1990	Paramilitares asesinan al abogado Fernando Colonio, asesor legal de la UNSCH.
24/07/1990	Paramilitares asesinan a Ciro Aramburú, director de Bienestar Universitario de la UNSCH.
15/08/1990	Desconocidos dinamitan el local de la Facultad de Agronomía de la UNSCH.
19/07/1991	Un comando paramilitar asesina al docente de la UNSCH Francisco Cirilo Solier.
28/08/1991	Aparecen los cadáveres de los estudiantes de Obstetricia, Mariscote Santa Cruz y Leoncio Espinoza, dichos estudiantes habían sido detenidos una semana antes.
12/10/1991	Antonio Huacache Chávez estudiante de la UNSCH es asesinado mientras regresaba a su domicilio.
23/10/1991	Atentado contra el Dr. Juan Luis Pérez Coronado profesor de la Facultad de CCSS, el docente se salva de morir.

19/10/1991	Desconocidos asesinan a Camilo Fernández Flores, estudiante de la Facultad de Educación.
21/12/1991	Paramilitares asesinan a la profesora de Servicio Social, Leonor Zamora Concha, ex-alcaldesa de Huamanga.

2.19. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE «LA CANTUTA»

Emergiendo como parte de un proceso de modernización educativa dirigida desde el Estado, proyecto que terminó frustrándose, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE), también conocida como «La Cantuta», devino en una de las principales referencias para las juventudes de provincias, que vieron en la universidad una posibilidad de integrarse a un sistema cada vez más cambiante como excluyente.

Cuando La Cantuta fue reabierta en agosto de 1980, se iniciaba una etapa institucional, que culminó con una mayor radicalización de la izquierda, y con el deterioro de la gestión universitaria, espacio que aprovechó el PCP-SL para consolidar su propuesta y asentamiento.

El objetivo central de esta investigación es explicar dentro del proceso de violencia, la progresiva inserción y arraigo del PCP-SL en la universidad La Cantuta, que tuvo como desenlace la intervención militar de 1991 y su expresión represiva más contundente con la ejecución de nueve estudiantes y el profesor Hugo Muñoz en julio de 1992.

La intervención administrativa de 1995, y su posterior derogación el año 2000, constituyen una etapa abierta, por las lógicas de los actores políticos al interior de la universidad y las secuelas de la guerra interna en la imagen y el desarrollo de la Universidad.

Para el PCP-SL las facultades de educación constituyeron la principal fuente de reclutamiento y bastión de transmisión de su ideología, planes y estrategia. En este contexto, La Cantuta representó para este grupo subversivo, un lugar central donde captar adeptos y difundir sus principios ideológicos.

Cabe preguntarse por las circunstancias que permitieron el arraigo del PCP-SL en La Cantuta, así como por el significado que adquirió el haber podido erigirse como mecanismo de control de esta entidad educativa dentro del marco de la estrategia subversiva. Igualmente interesa preguntarse por la respuesta del Estado ante estos hechos.

Desde un inicio consideramos importante interpretar la violencia política en La Cantuta como parte de un proceso que manifiesta tres peculiaridades que hicieron atractivo para PCP-SL su inserción y establecimiento en la universidad:

- a) La ubicación geográfica del campus universitario, conectado con el interior del país a través de la Carretera Central;
- b) La estrecha relación de esta universidad con el magisterio público, principalmente de provincias; y

c) Su posición respecto a la cultura política predominante radical en el movimiento estudiantil de las últimas décadas.

Sin embargo, PCP-SL no fue el único actor presente. Entendemos que el mosaico político e ideológico presente al interior de la Universidad de la Cantuta en los ochenta, era la expresión de tendencias existentes décadas previas al interior de la izquierda peruana.

2.19.1. Antecedentes: breve recuento histórico (1951-1980)

Fecha	Proceso de implementación
1822	Creación Escuela de Preceptores
1951	Traslado al distrito de Chosica y despegue institucional
6/7/1953	Inauguración de Escuela Normal Superior de Varones
31/7/1955	Escuela Normal Superior «Enrique Guzmán y Valle» adquiere rango universitario y autonomía administrativa y académica por Ley 12502
1960	Se deroga Ley 12502
1965	Se convierte en Universidad Nacional de Educación (UNE) por Ley 15519
23/5/1967	Entra en vigencia el Estatuto de la universidad con las facultades de Pedagogía, Ciencias Humanas y Estudios Tecnológicos. ¹
20/2/1977	Fue recesada durante el gobierno Militar ²
8/1980	Fue reabierto presión del magisterio nacional

La Cantuta tuvo como precedente la Escuela Normal Superior de Varones, como parte de un proyecto que buscaba modernizar la enseñanza, así como la formación docente. Entre 1951 y 1960, La Cantuta experimentó profundas innovaciones en la formación de los maestros, bajo la dirección de Walter Peñalosa Ramella; experiencia que culminó intempestivamente con la derogación, por parte de la bancada apro-pradista, de la Ley 12502, que disponía el cese de Peñalosa y otros profesores considerados comunistas, y el paso de la Escuela Normal a manos del Ministerio Público. Esto provocó uno de los mayores movimientos de protesta estudiantil, que involucró a la totalidad del magisterio nacional. Se instaló una comisión interventora, mientras los estudiantes realizaron una marcha de sacrificio a Lima. Ya desde esos años se percibía a La Cantuta también como un espacio de subversión, por la influencia de los grupos de izquierda, cuyas acciones en contra de la legislación universitaria originaron varios conflictos entre la Escuela Normal Superior y el gobierno de Prado.

¹ Cuenta actualmente con siete Facultades de Educación: Ciencias; Ciencias Sociales y Humanidades; Tecnología; Pedagogía y Cultura Física; Agropecuaria y Nutrición; Ciencias Administrativas, Económicas y Turismo; y una Facultad de Educación Inicial en proceso de implementación.

² El 20 de febrero de 1977, durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, la Universidad Nacional de Educación fue recesada, en un contexto de intensa politización y radicalización de los estamentos universitarios, bajo la hegemonía del PCP Patria Roja, que logra desplazar a Vanguardia Revolucionaria y al PCP Bandera Roja de las federaciones de estudiantes y de los gremios magisteriales.

En 1960, frente a la intervención estatal, se produjo una masiva huelga de universitarios y docentes. En 1964 la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) organiza una segunda huelga universitaria, logrando la aprobación de la ley 15519, por la cual la Escuela Normal Superior se convierte en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle(UNE) el 23 de mayo de 1967.

Para entonces, el Movimiento Estudiantil Cantuteño (MOVEC) y Vanguardia Revolucionaria eran los grupos de mayor influencia en la UNE. Tras restablecerse las funciones de La Cantuta, a partir de 1967, las protestas estudiantiles se concentraron en boicotear los procesos electorales, para deslegitimar la legislación vigente. Fue entonces que, mientras en San Marcos se suspendían las elecciones, en La Cantuta y la UNI se tomaban los locales, entre noviembre y diciembre de 1969.

Por otra parte, tras viajar a China (1965-1966), Abimael Guzmán, organizó con un grupo de profesores de la UNE, el Grupo de Trabajo Intelectual Mariátegui. A partir de esta experiencia, Víctor Zavala Cataño y Nilda Atanasio iniciarían posteriormente un trabajo de selección y adoctrinamiento de cuadros senderistas en la UNE.³

En febrero de 1969, a cuatro meses de tomar el poder mediante un golpe de estado, el gobierno de las fuerzas armadas promulgaba el decreto ley 17437, a partir del cual se eliminaron temporalmente las instituciones estudiantiles, creando el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), que centralizaba la gestión y el control universitario. Rúa señala que un documento suscrito por Abimael Guzmán en 1969, donde éste se manifestaba en contra del DL 17437 del gobierno militar, fue acompañado por las firmas de destacados docentes de las universidades de San Marcos, Cantuta y Huamanga (Rúa, 1996: 44). Esto significaba que durante gran parte de los setenta, el discurso de Sendero coincidía con la línea de oposición al gobierno militar de distintos gremios docentes, aunque posteriormente las diferencias y adhesiones con el proyecto senderista adquirirían caminos insospechados. En la UNE, el 25 de mayo de 1970 se modificó el sistema de Facultades, estableciéndose un sistema departamental.

El PCP Patria Roja, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación (FEUNE), combatió radicalmente al gobierno militar y a la Ley General de Educación promulgada en 1972 (DL 19326). Mediante dicha ley se recuperaba la autonomía universitaria, pero seguía vigente el Estatuto de la ley de 1969, pues no se aprobó el reglamento de la nueva ley. Ya desde entonces se construyó la imagen que percibía a los estudiantes de esta universidad como revoltosos peligrosos. El gobierno militar acusaba constantemente a los estudiantes cantuteños de

³ A inicios de los ochenta, Víctor Zavala y Nilda Atanasio, tras el período de receso institucional, causaron un gran impacto en la población estudiantil que retornaba a las aulas, o entre quienes recién ingresaban a la vida universitaria. El profesor Víctor Zavala Cataño abandonó su puesto en la UNE en 1983 y se convirtió en dirigente del Comité Metropolitano de Lima de SL. Por su parte, Nilda Atanasio abandonó el país en 1986, separándose de su esposo, el

realizar actividades de agitación política, como el izamiento de banderas rojas, guardar armas dentro de la universidad y bloquear la línea del ferrocarril que conectaba a Lima con las zonas mineras del centro del país.⁴

El 20 de febrero de 1977, el CONUP, por resolución 4661-77, recesó las actividades académicas en La Cantuta, deteniéndose 651 estudiantes y conformándose un comité interventor de administración. Durante la intervención falleció el estudiante Walter Bravo Trinidad. En esos momentos, la UNE contaba con más de seis mil alumnos matriculados. La universidad fue cerrada por 41 meses. Este hecho no produjo movilizaciones entre la población estudiantil y docente, debido a las pugnas internas entre los estudiantes.

Durante los meses de receso, el PCP Patria Roja sufrió una ruptura interna, y los dirigentes de la FEUNE tomaron partido por la facción denominada Puka Llaqta. Pese a que la universidad estaba cerrada, esta junta directiva del FEUNE representó a La Cantuta en diversos eventos, hasta 1980. En todas estas oportunidades defendieron abiertamente las posiciones de Puka Llaqta, que preconizaba la guerra popular del campo a la ciudad y boicoteaba los paros nacionales por considerarlos paros revisionistas. A nivel administrativo, la UNE ofreció a los alumnos la posibilidad de trasladarse a otras universidades. A los alumnos de últimos ciclos se les brindó facilidades para que mediante un ciclo acelerado accedieran a la titulación. Paralelamente, los ciclos de verano de actualización docente fueron impartidos en el colegio Ricardo Palma ubicado en el distrito de Surquillo.

Puka Llaqta, escindido de Patria Roja en 1978, fue desplazándose hacia posiciones más radicalizadas. Por otra parte, incluso el Partido Comunista Unidad, que era el representante de la facción moscovita legalizada, pasó por un período de escisiones. Casi al margen quedaron las corrientes trotskistas y heterodoxas de la izquierda, como Vanguardia Revolucionaria, que tendrían un papel fundamental en los ochenta, en el marco del nuevo escenario que inauguraba el gobierno de Belaunde y la aprobación de la Ley Universitaria 23733 de 1984⁵.

2.19.2. Reapertura de la Universidad y los distintos actores en escena

El 10 de agosto de 1980, el electo Presidente Belaunde levantó el receso impuesto a la UNE por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana en 1977. Así, luego de tres años y ocho meses, se

profesor Hugo Muñoz, y de sus vínculos con SL. Hay que anotar que Hugo Muñoz, el profesor asesinado en 1992, participó en diversas movilizaciones estudiantiles en Huanta y Lima, como integrante del MOVEC.

⁴ «Golpe de gracia a la Cantuta». En: *Marka* N° 144, 1980.

⁵ Vanguardia Revolucionaria aparece luego de la escisión del MIR-Histórico. En 1977 conformó, con otras agrupaciones de izquierda, la Unidad Democrática Popular (UDP), y en 1980 participó en la conformación de Izquierda Unida (IU).

reiniciaban las labores académicas con la instalación de la Comisión de Gobierno de la Universidad.

Los grupos políticos que tuvieron presencia en La Cantuta durante los ochenta, se organizaron a través de los siguientes frentes de estudiantes:

GRUPO	FRENTE POLITICO
Puka Llaqta	Frente Estudiantil Unidad y Lucha (FEUL)
Patria Roja UNIR	Frente Estudiantil Revolucionario del Perú (FER del Perú)
Partido Comunista-Unidad	Juventud Comunista Peruana (JCP)/ Movimiento Universitario Revolucionario (MUR)
UNIR Combatiente	FER Bolchevique/Izquierda Combatiente Revolucionaria (ICR)
Unidad Democrática Popular (UDP)-Pueblo en Marcha	Frente Estudiantil Democrático Revolucionario (FEDR)
Vanguardia Comunista Marxista Leninista (ML)	Vanguardia Estudiantil Revolucionaria (VER-ML)
Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso	Movimiento Juvenil Popular
APRA	Comando Universitario Aprista/Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE)
Partido Socialista de los Trabajadores (PST)	Juventud Socialista
Partido Unificado Mariateguista (PUM)	Juventud Mariateguista

Es evidente la fragmentación de los grupos de izquierda y la tendencia a sectorizar el espacio universitario. Tanto el PCP-SL así como el MRTA irrumpían boicoteando las actividades de la izquierda legal, a medida que adquiría mayor presencia en diferentes espacios de la universidad. En otras palabras, ante el proceso de quiebre y disolución de las izquierdas que culminó en 1987, opciones radicales como el PCP-SL y el MRTA, buscaron absorber las bases de los partidos de izquierda legal.

En 1984, el movimiento estudiantil de la Cantuta, al igual que el de las otras universidades públicas, se movilizó masivamente contra la denominada ley Alayza-Sánchez (ley 23733). Posteriormente, con la implementación de la ley, se disolvieron los programas académicos, se instalaron las facultades y se eligieron nuevas autoridades. En 1985, resultó elegido como rector el profesor Milciades Hidalgo, un candidato propuesto por el PC-Unidad y apoyado por el PUM y

Patria Roja.⁶ Con la llegada del nuevo rector y de los nuevos decanos, los partidos políticos se repartieron las facultades, teniendo injerencia en el nombramiento de profesores.

En este proceso, se consolidó la presencia de Patria Roja en el sindicato de docentes (SUDUNE). También se produjo la elección de las nuevas directivas para la FEUNE y los Centros Federados, que también son ganados por Patria Roja, desplazando a la antigua dirigencia de Puka Llaqta, que formó el frente denominado FEUL.

En el marco de las elecciones de septiembre de 1987, se constituyeron tres listas para la FEUNE y cuatro para los Centros Federados, ganando la lista de Izquierda Unida constituida por la alianza entre el VER, PUM y el MUR, que desplazó a las listas constituidas por el UNIR de Patria Roja (que también se presentó como Izquierda Unida) y a la alianza del Frente Estudiantil Democrático Revolucionario (FEDR), integrado por la Unidad Democrático Popular, el Movimiento Pueblo en Marcha y el UNIR Combatiente. Estas elecciones se realizaron en un clima de inestabilidad y violencia, ya que el PCP-SL llamaba a boicotearlo. Por su parte, el PC Unidad lleva a gente del sindicato de Construcción Civil para garantizar las elecciones. El MRTA participó en las elecciones estudiantiles por intermedio del FEDR, lista que quedó en último lugar y que recurrió a UDP Pueblo en Marcha sino también al FER Bolchevique, el cual posteriormente pierde sus militantes que se integran al PCP-SL.

Meses antes de este proceso electoral se produjo una intervención policial en diversas universidades de Lima, incluyendo a la UNE. Este hecho, si bien no era el primero en la larga tradición de represión al movimiento universitario, inauguraba un nuevo ciclo de represión estatal en las universidades de la capital, que ya se intensificaba en la sierra central, particularmente en la Universidad del Centro del Perú. A su vez, la directiva del PCP-SL propiciaba el enfrentamiento con el Estado, hecho que repercutió gravemente en la imagen de universidades públicas como San Marcos y La Cantuta, que terminaron siendo consideradas como *nidos de terroristas*, por lo tanto, devaluadas como institución y literalmente, convertidas en *tierras de nadie*.

En este escenario de disputas, que se extiende hasta el noventa, encontramos dos líneas de tensión. Por un lado, el proceso electoral y el sistema democrático en su conjunto, que fueron el referente a partir del cual se articularon las demandas de la izquierda legal. Esta perdió legitimidad estudiantil por sus prácticas *clientelistas* y su ineficacia en resolver la crisis de la universidad. Por otro lado, irrumpía la *lucha armada*, encabezada por los grupos subversivos que, tras ubicarse en el mismo proceso de radicalización de la izquierda, se presentaron ante los estudiantes como la realización de las promesas incumplidas del sector legal de la izquierda, pero principalmente como una herramienta para el cambio violento de sus precarias condiciones de vida.

⁶ Es importante anotar que en 1984 se forma el PUM no solamente en base a la UDP, sino también con participación de troskistas del PRT, que luego se integran con su base al PUM. Esto convierte al PUM en la principal fuerza de izquierda

En suma, para el caso particular de la UNE, la endeble organización ante la falta de consensos, la carencia de objetivos, planes institucionales claros y corrupción existente, se produjo un vacío que fue cubierto por el proyecto organizativo e ideológico del PCP-SL en un clima de abierto enfrentamiento a partir de 1987, con una izquierda fragmentada y con el MRTA por obtener el control total de La Cantuta:

Si había un profesor que era del APRA, o del PUM, no lo dejábamos entrar en Administración y de la misma manera lo hacían en otras facultades, era política parcelaria, sectaria que se hacía en la universidad, sin ningún fin, no había un objetivo político y menos proyectos ¡obviamente!, era repartija de cargos nada mas y tener el poder [...] (teníamos) una idea de crear el poder y una de las cosas que nosotros decíamos era: «el poder popular se crea integrando todos los elementos de una sociedad, el discurso político, el programa educativo». Pero solamente en eso quedó, no llegamos a discutir grandes cosas porque todo estaba en función del control administrativo, de la universidad, el copamiento a nivel de docentes, nada más que eso [...] no tuvimos la suficiente capacidad para poder, primero, plantear (un) proyecto de universidad, en función de una alternativa para la sociedad. Nunca lo hicimos, y a la vez permitimos con eso que SL tuviera gran presencia en la universidad (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P340, varón miembro juventud comunista, 1983-1987)

2.19.3. Presencia del MRTA en la UNE

El MRTA, surgido de la alianza entre el MIR-El Militante y el Partido Socialista Revolucionario-Marxista Leninista, comienza a operar en forma más activa desde 1984. Ese año se instaló en la Facultad de Educación Física de la UNE una célula del MRTA, que fue desbaratada posteriormente por la policía.

En esta fase, el MRTA recurría a actividades propagandísticas y al alarde de fuerza, participando en enfrentamientos con el PCP-SL por el control de los internados, que eran objeto de una disputa permanente por su papel estratégico en la generación de clientelas partidarias.

La residencia estaba dividida. Patria Roja era muy fuerte, tenía un control Bolchevique, Pabellón «A» y Pabellón «B», y Pabellón «A» Patria Roja. Pabellón «B» ya estaba repartido, Bolcheviques, VER, PUM también había en el «A», gente del VER en el último piso. Pero sigilosamente fueron entrando gente de SL y del MRTA, pero no tenían el control del pabellón en ese entonces. Como anécdota por ejemplo de que el control lo tenía Patria Roja, el FER del Perú (el año 85 ingresa con) cachiporras, puñete, y haciendo uso de todo instrumento de agresión, se repartieron los bienes, los oficios que les llamaban, los oficiales y los bolcheviques. Fue una guerra, una batalla campal. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P 335, miembro del PUM, 1986-1992).

logrando arrebatarle la hegemonía a Patria Roja en la FEUNE y los CFs, Debemos tener en cuenta que a inicios de los 90 el rector fue Ramos Geldres, de las filas del PUM.

El MRTA comienza a incrementarse a partir del apoyo de agrupaciones como Pueblo en Marcha y su alianza con el FER Bolchevique, que tuvo un papel importante en las disputas por la vivienda universitaria. El MRTA finalmente se instaló en una de los pabellones, abriéndose a partir de entonces un espacio de enfrentamientos con el PCP-SL.

Cuando el PUM pierde, nuestra ruptura, va apareciendo en el año 84 el MRTA en la zona, en el área, en la universidad, y ellos son los que después dan el golpe al interior de una de las residencias, porque había dos y después ya lo tiene UDP, de Pueblo en Marcha pero que después pasan todos a ser MRTA. Otro pabellón porque eran dos, en el año 87-86, pasa a ser controlado por UNIR-Combatiente que fue una ruptura que se produjo en el 85-86. Pero era una ruptura de tránsito hacia SL, ya incluso con una suerte de fusiles de madera hicieron una marcha, pero SL se reía porque estaba haciendo trabajo interno» (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P329.Miembro juventud mariateguista, 1982-1987)

En este período el MRTA mantiene un perfil bajo, principalmente porque su función en el claustro no tenía un carácter estratégico sino táctico, a lo que se añade que, a pesar de que contaban con la simpatía de algunos sectores estudiantiles, no tenían la organización ni la capacidad operativa que SL desplegaba, aunque se mantenía firme en sus espacios, como Humanidades y un pabellón del internado de varones. Cuando en 1991 fueron dinamitados los pabellones, el MRTA prácticamente había desalojado este espacio.

2.19.4. El PCP-SL en el escenario

El hecho que La Cantuta sea una universidad relativamente poco comunicada con el resto de la ciudad, a unos 40 Kms. de Lima, con un alumnado en su mayoría proveniente de provincias o de las periferias de Lima Metropolitana (generalmente pertenecientes a familias con economías precarias), y con una antigua tradición de lucha (sintetizada en la conocida frase del maestro Ricardo Dolorier «ser maestro en el Perú es una forma muy peligrosa de vivir», ayudó mucho al tipo de labor ideológica realizada por el PCP-SL en su primera fase. Este trabajo fue apoyado por algunos alumnos provenientes de provincias que se trasladaron a la UNE.

A inicios de 1980, el PCP-SL tiene una discreta presencia en la UNE, mediante la labor del Movimiento Juvenil y el apoyo de algunos docentes, destacando los profesores Nilda Atanasio y Víctor Zavala como ya habíamos mencionado inicialmente, quienes lograron formar una importante escuela maoísta al interior de la universidad, debatiendo frontalmente con militantes de Puka Llaqta.

Como señala el siguiente testimonio, la función de Atanasio era preparar el terreno al PCP-SL, a través del debate ideológico con los sectores más radicalizados de la universidad:

(Nilda Atanasio) decía «traigamos a fulano de tal» que era un hombre fuerte de Puka Llaqta y el poder de la universidad y (decía para) traerlo acá (al debate en Filosofía), «y lo desnudamos y le demostramos que no sabe nada, porque no saben nada, solamente son fraseros, puro cliché, el marxismo no es solamente mencionar marxismo o repetir alguna frase, alguna cita». No le gustaba ninguna cita, ni ninguna apología, ninguna alusión a la autoridad del genio, entonces ella nunca formó un estudiante para gritar, formó gente, o sea con ella germinó el primer núcleo senderista en la universidad. Y su misión no era otra, no era para la guerra sino era para ir construyendo un tejido que podía dominar a la universidad, en función de la guerra, para los años siguientes probablemente» (CVR.BDI Entrevista en profundidad P329 Miembro juventud mariateguista, 1982-1987)

A medida que transcurrieron los años, los militantes de Puka Llaqta fueron absorbidos por PCP-SL hasta desaparecer como grupo alrededor de 1987. Así, desde el primer cisma de Patria Roja, la mayoría de los sectores radicalizados de Puka Llaqta, y que tenían un trabajo político en sindicatos y en el campesinado, pasaron a militar a las filas del PCP-SL, mientras al interior de la Universidad iban siendo incorporados ideológicamente, con mayor impulso desde 1984, quedando reducidos a un frente estudiantil con pocos cuadros activos.

Así, la penetración ideológica inicial fue encabezada por Nilda Atanasio y otros cuadros intelectuales que, fogueados en el debate de ideas, abriendo el terreno para la consolidación del PCP-SL en la UNE, particularmente manifestada a través del dominio de espacios estratégicos de la vida estudiantil como el manejo del comedor y el control de la vivienda universitaria y el transporte.

Nilda Atanasio, huantina y destacada ex alumna de Abimael Guzmán en la Universidad de Huamanga, llegó a Lima en los setenta, postulando a la cátedra de Ciencias Sociales en la UNE. Desde su llegada forma círculos de estudio, pasando a formar parte del PCP-SL, hasta que se ordena el receso de la UNE en 1977. Hugo Muñoz, entonces esposo de Atanasio, fue destacado a provincias. Ambos terminaron viajando a China. A su regreso, Atanasio se incorpora a la docencia en la UNE, manifestando claramente su trabajo de proselitismo senderista, de forma abierta en un primer momento, aunque luego tuviera que tomar sus precauciones, a medida que los estragos de la guerra evidenciaron la necesidad de realizar un trabajo político más clandestino:

[...] las pocas veces o la única vez que yo tuve oportunidad de escucharla hablar de Guzmán fue cuando dijo «el Dr. Guzmán tiene un esquema de evolución que es científico y de altísima calidad», o sea ella tenía una alta reverencia a Guzmán, ninguno de sus cuadros podrían haberlo aludido a él en términos de tu. Ahí es donde me di cuenta que su labor era ésa (adoctrinar) y ella sabía quiénes eran los designados del aula para compartir con ella todas sus conversaciones en el café (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P329. Miembro juventud mariateguista, 1982-1987)

En 1982, el PCP-SL era todavía una fuerza políticamente minoritaria en la UNE, mientras que el bloque de la Izquierda Unida constituyó el proyecto *Nueva Universidad*, que involucró a docentes, autoridades y estudiantes. En este primer momento, el PCP-SL articuló su trabajo en el MOTC (Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas) de la Carretera Central. Posteriormente, el PCP-SL llegó a controlar la USE de Ate Vitarte, en coordinación con Puka Llaqta y el UNIR-Bolchevique, lo que le permitió en 1989 impulsar el Comité de Lucha de los obreros y trabajadores clasistas de la Carretera Central.⁷

Sendero no tenía la capacidad de llegar a la Federación, por eso es que no le dieron mucho interés a eso, ellos estaban más enmarcados en hacer un desarrollo de trabajo de la carretera central. Por eso es que ellos crean, si no me equivoco, el Movimiento de Trabajadores Clasistas de la Carretera Central. Todo era en función de eso, el trabajo era eso. Por eso entendíamos que el trabajo no era llegar a la Federación, hacían trabajos a nivel estudiantil para ganar militantes a nivel de estudiantes, de aulas, etc. Pero después empiezan una etapa más agresiva (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P340. Miembro juventud comunista, 1983-1987)

El proceso de captación de cuadros fue definido como una etapa progresiva del accionar del PCP-SL, sintiéndose la izquierda legal impotente para frenar este avance, particularmente entre 1982 y 1986. En ese intervalo, el PCP-SL comienza a desarrollar un trabajo de expansión gradual en diversas facultades, combinándose las escuelas populares con las acciones de propaganda (los denominados petardistas). Fue a partir de 1984, cuando el PCP-SL comienza a absorber a Puka Llaqta y a fuerzas con escasa presencia política como el VRPC (Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista), que experimentó un crecimiento exponencial obteniendo el control de espacios considerados vitales.

2.19.4.1. El PCP-SL y su revolución radical

En general, el recurso a la violencia sería un componente importante del discurso radical, que se alimentó de varias fuentes y tradiciones políticas y que es luego re-elaborado en los años 60 y una parte de los ochenta, especialmente en el espacio de la universidad. Junto con esto, predominaría una actitud de confrontación política, que privilegió los conflictos, a la búsqueda de consensos y la formación de una voluntad colectiva.

Los cursos que se impartían jugaron un papel central en la difusión y transmisión de estas ideas revolucionarias y actitudes de ofensiva, así como las prácticas institucionalizadas que definieron una concepción homogeneizadora y una perspectiva instrumental de la violencia.

⁷ Véase capítulo sobre los sindicatos en la carretera Central.

A través de los cursos de materialismo histórico y dialéctico y desde diferentes espacios de interlocución y debate ideológico, los diferentes grupos políticos sostuvieron un discurso y visión crítica de la sociedad peruana que jugaron un papel fundamental (aunque no determinante) en la reproducción de este imaginario violento, como lo revela el testimonio de una estudiante, que posteriormente se convirtió en militante del PCP- SL:

[...] cuando ya ingresé a la Universidad, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico te abre los ojos [...] Comprendí más el proceso, el proceso de la lucha, que el pueblo siempre ha luchado y luchará y esa lucha misma sirve para transformar. Se estudió la revolución francesa, que ha sido sangrienta, que ha habido excesos, que ha sido violenta, sí, pero eso de qué sirvió, de transformar a la sociedad y eso es lo que pesa y ahora pues, sino se hubiera dado esa situación ¿cuántos años más hubieran pasado para que pueda devenir todo lo que es el capitalismo ahora?, hubiera demorado más, ellos han tenido trescientos años para tomar el poder y consolidarse en el poder (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P343. Estudiante UNE 1985-1990, integrante del PCP-SL recluida en Santa Mónica).

El aprendizaje de textos y su exégesis mecanismo de persuasión para efectivizar el trabajo político. Por otra parte, las disputas internas expresadas en las luchas por las pizarras, en las pintas y debates efectuados en aulas y el comedor, expresaban la estrategia de inserción del PCP-SL en la población estudiantil, como parte de un «proyecto pedagógico» que presentaba una visión esquemática del mundo y de la historia y que justificaba la violencia.

En la percepción de uno de nuestros entrevistados, lo que diferenciaba al militante senderista de aquellos años precisamente, era una propensión al estudio y al diálogo, que con el paso de los años se fue haciendo menor, quedando simplemente la intolerancia y la coerción:

Sendero llega a esa etapa (digamos 81-82), vivió una etapa ideológica, básicamente una labor de construir en el ámbito académico. No eran malos eh, eran de lo mejor que había en la universidad, en las aulas, tipos muy estudiosos. Libro en mano, siguiendo la tradición de Guzmán, con el libro en el sobaco [...] conmigo por lo menos y con mucha gente eran muy receptivos pero (también) muy duros, implacables en el plano académico, no aceptaban a la gente superficial (CVR. BDI Entrevista en profundidad P329. Miembro juventud mariateguista, 1983-1988)

Recapitulando, podemos decir que la oposición al gobierno militar en los setenta, y la fragmentación y división de la izquierda frente a la participación en el gobierno a partir de los procesos electorales de 1978 y 1980, propiciaron el debate y las disputas al interior de los grupos universitarios. A esto se añadió la dramática reducción del presupuesto asignado a las universidades, en contraste con el incremento explosivo de su población estudiantil, que con el contexto de agudización de la crisis económica a mediados de los ochenta, fueron determinantes

del vacío de poder que se generó en la UNE. Las sensibilidades radicales terminaron por desplazarse hacia PCP-SL y en menor medida el MRTA.

2.19.5. El PCP-SL se posesiona del espacio

Desde la segunda mitad de los ochenta, el PCP-SL cambiaba su estrategia en la ciudad, pasando de los sabotajes y asesinatos selectivos, a la infiltración de organizaciones y movimientos sindicales y barriales. Para 1987, el PCP-SL había reunido las condiciones para desplazar a los otros actores políticos de la UNE, proceso que se profundiza hacia finales de los ochenta, con la sustitución de los gremios estudiantiles por una nueva forma de organización, que permitía a PCP-SL controlar la vida cotidiana en la Universidad.

La mirada vigilante del retrato de Abimael Guzmán, dibujado en las paredes del comedor universitario poco después de la matanza de los penales en 1986, representaba simbólicamente el dominio del PCP-SL sobre la universidad. Todo esto se extremó, pues había una línea militar definida en la capital, que correspondía al inicio del *Gran plan de desarrollar bases en función de la conquista del poder*, cuya primera campaña *Impulsar el desarrollo de las bases de apoyo* (agosto 1989-febrero 1990) debía ser preparatoria para alcanzar el equilibrio estratégico.

Entre 1987 y 1991 empiezan a desaparecer los Centros Federados y los estudiantes cercanos al PCP-SL comienzan a ocupar las dirigencias estudiantiles, en la mayoría de los casos impuestos en asambleas donde era evidente la presión del PCP-SL, mientras el CIUNE controlaba las viviendas. Los estudiantes perciben que ser maestro en el Perú seguía siendo una vocación comprometida, pero que no tenía que reducirse a los intereses de un grupo por el poder, sino a la recuperación del país, como parte de un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad:

Teníamos mucho interés [...] en hacer un estudio, a dedicarse uno a estudiar en la universidad para ser un profesional, para ser un profesor. Porque queríamos ser maestros, un maestro pero con una visión bien amplia de las cosas, no con las restricciones, no con la metafísica, las cosas idealistas, no iba eso. Y lo otro era que había demasiadas injusticias [...] se hablaba de tanta opresión, de tanta miseria y de que la participación, de que el estudiante debía, tenía que tener en esa guerra interna, pero como parte de movimiento revolucionario o sea la guerra popular de esa época. Entonces, no todos, como yo, han ido a la guerra. Sin embargo, simpatizábamos mucho con todas las posiciones y las ideas del Partido Comunista, y hasta el día de hoy pienso que si no hubiese sido por circunstancias históricas y otra cosa la situación hubiera sido diferente y muy buena para las grandes mayorías (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P333. Estudiante UNE, 1990-1991)

En este contexto, la situación de la Universidad era crítica. Por un lado, las marchas convocadas en 1987 por la Federación fueron apropiadas por el PCP-SL, en un momento que

coincide con la crisis de la FEUNE, crisis que se acentuaba por la división al interior de la Izquierda Unida entre el PUM y Patria Roja que se disputaban la dirección de la FEP:⁸

Hicimos la gran marcha de sacrificio, desde Milcíades Hidalgo y todas las autoridades a la cabeza, pero Sendero nos robó todas las consignas de toda la marcha, eran más de 3000, a 4000 alumnos que veníamos hacia Lima y ya no podíamos nosotros con Sendero, ya no podíamos o sea Sendero te comía todas las marchas, todas las marchas, (a) todas las consignas de «combatir, resistir, consigna popular», (replicaba) «combatir, resistir, guerra popular» estábamos cagados, disculpe pero estábamos cagados porque ya nos disgregábamos [...] Toda esta promoción que éramos los que todavía tuvimos el control de la última federación universitaria, éramos gente que veníamos del 82 pero nos dividíamos, y qué dejábamos si no quedaba nadie (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P329. Miembro juventud mariateguista, 1982-1987)

Como señala un militante del PCP-SL que participó en aquella marcha, el objetivo político implicaba un costo, que debía pagarse con una cuota de sacrificio:

Se produce una protesta, si no me equivoco era por el medio pasaje, hicimos una manifestación, una movilización, en marcha de sacrificio, bajamos de Chosica a Lima si no me equivoco es el 87, una de las primeras grandes movilizaciones cantuteñas después del receso. Llegamos a Lima, hicimos nuestra movilización, llegamos al ministerio de Educación. La Asamblea nacional de Rectores (ANR) quería eliminar el medio pasaje y eso nos costó mantenerlo, nos costó también represión de la policía. Muchos estudiantes llegaron mal a Lima, con las plantas sangrantes y eso no es más que consecuencia de un estudiantado consecuente con sus ideas (CVR BDI. Entrevista en profundidad P337. Miembro del PCP-SL recluido en Castro Castro)

La apelación a una mística consecuente como una ética del compromiso de clase fue apropiada por el PCP-SL, logrando atraer a sus filas incluso a los militantes descontentos con los partidos de la izquierda legal. Este avance en La Cantuta fue reforzado por la instalación de una coordinadora clasista en la Carretera Central, zona estrechamente ligada a la universidad, cuya infraestructura era usada como zona de refugio y almacenamiento de materiales, en abierta disputa con los otros grupos partidarios.⁹

En líneas generales, a fines de los ochenta los estudiantes de La Cantuta tenían la sensación de estar viviendo en el borde de una situación insostenible:

[...] cuando el APRA asume el gobierno en 1985 a La Cantuta le da epilepsia, mas aún Sendero arremete, peor [...] A la universidad le comienza a llegar poco presupuesto,

⁸ Esto se puede evidenciar en el comunicado de la FEUNE publicado el 16 de agosto de 1987, en donde la dirigencia de la FEUNE ligada al PUM y al PC Unidad expresaban lo siguiente: «Rechazar y desconocer a la falsa comisión organizadora del congreso de la FEP que encabeza Edgar Coa, que en la práctica representa sólo a su grupo partidario: Patria Roja «Oficial»».

⁹ Nos referimos al Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC), conformado en abril de 1988, cuya dirigencia sería copada por SL, convocando a una serie de *paros combativos*, en abierta confrontación con la CGTP. Véase capítulo sobre los sindicatos en la carretera Central.

Bienestar Universitario comienza a hacer lo que pueda [...] en los internados [...] se caían las paredes y todo, era un pabellón así en completo abandono, y después [...] lo toma el MRTA [...], tenía presencia en el internado de varones y se comienza a pelear con Sendero por la hegemonía de ese espacio y esa era una lucha permanente (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P329. Secretaria general ARE, 1985-1990)

Desde 1988, el PCP-SL logró el control del Comité Lucha de Comensales, desplazando a Patria Roja y a lo que quedaba del FEUL. Previamente, luego de la masacre de los penales en 1986, el PCP-SL inició un fuerte presencia simbólica en la UNE, instalando una serie de murales con temas y lemas alusivos a la lucha armada, como forma de expresar su poder al interior de dicho espacio, en una fase en que monopolizan los debates ideológicos. Este avance político se concretó en 1988, cuando SL logra expulsar al VER-ML de la vivienda universitaria. En repetidas ocasiones, PCP-SL utilizaba la violencia física, y una campaña de acoso y amenazas para expulsar a sus oponentes, al igual que el MRTA. Así llegan a apoderarse del Comité de Comensales, disputándoselo al PUM:

[...] su dominio primero fue del comedor, vivienda, ciertos eslabones importantes de las facultades sobre todo de ciencias sociales y humanidades. Después se fue trasladando a otras facultades pero ya era un aparatazo, era un partido enorme, ya no podíamos hacer nada, nosotros no crecíamos, nos disgregábamos, no había el contrapeso interno, Sendero queda sólo en el 88, los amigos que quedaron no pudieron hacer nada (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P329. Miembro juventud mariateguista, 1982-1987)

Con el poder adquirido, el PCP-SL comenzó a presionar a las autoridades para tener control sobre el manejo administrativo. Logra que se autorice la utilización de los sótanos de la biblioteca para el desarrollo de sus *escuelas populares* e incluso gestiona la donación de un horno para los presos procesados por terrorismo:

Ese horno con el carro de la propia universidad fue trasladado al pabellón Británico de Luriganchu, no sé si te enteraste de esto. Esto fue un apoyo administrativo que dio como institución la Universidad a los presos políticos de Sendero, a sus prisioneros de guerra, con esto te doy a entender cual era la presión y la presencia de Sendero en los años 87, 88 mas o menos (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P340. Miembro juventud comunista, 1983-1987)

El proyecto pedagógico original del PCP-SL fue progresivamente desplazado por un proyecto mucho más pragmático, en función al avance de la *guerra popular*, cuyo contenido deslegitimaba reivindicaciones de otras formas de discriminación y opresión. El «odio de clase» tenía un gran efecto en un sector de las juventudes cantuteñas, manifestándose como una revelación y una posibilidad de revertir las condiciones estructurales mediante la violencia.

En síntesis, junto con el clima de terror, el PCP-SL tenía la capacidad de apelar a motivaciones, presentes en las capas juveniles que terminaban siendo atraídos por el PCP-SL frente a la evidencia objetiva de la desigualdad económica:

(El PCP-SL apelaba a)... rabias... no sé si ocultas, rabias directas, abiertas y creo ese fue un poco el mensaje que fue jalando a muchos estudiantes cantuteños a Sendero Luminoso. Ese odio de clase, esa gran diferencia social que había: gente con tanto dinero y gente que no tiene, porque todos estábamos en esa misma situación. (CVR.BDI. Entrevista en profundidad P334 .Ex –estudiante dirigente, 1989-1992).

En términos de una militante senderista recluida en el penal Santa Mónica, se trata de una lucha de dos líneas, donde lo viejo será finalmente desplazado por lo nuevo, y donde lo principal es la opresión de clase, deslegitimando cualquier otro tipo de demanda centrada en especificidades de género, étnicas o raciales:

No es problema de luchar contra tu otro sexo, (eso) llama a desunir, y no pueden luchar juntos por sus derechos, porque además de luchar contra quien me explota también lucho contra el que no es de mi sexo [...] esas ideas de machismo, son ideas feudales [...] como el racismo, que con el tiempo van a desaparecer [...] (El profesor Campos) decía que luchaba contra el racismo pero él era racista, ¿por qué? Porque solamente los negros tenían que dominar, los negros, negros; eso no es así, igual la mujer, solamente la mujer. O sea: como el negro está explotado, que el negro domine, como la mujer está explotada, que la mujer domine. (CVR.BDI. Entrevista en profundidad 343. Estudiante UNE, 1985-1990, integrante del PCP-SL recluida en Santa Mónica)

En efecto, para 1989 la presencia de PCP-SL se tornó más agresiva, logrando controlar diversos gremios (Pedagogía, Ciencias Naturales, Matemáticas, Sociales). En la práctica desapareció la FEUNE, así como todos los partidos que se oponían al PCP-SL. A su vez, los sectores pro-senderistas *reorganizaron* la FEUNE, pero en adelante los estudiantes ya no elegirían su federación mediante elecciones, como tradicionalmente se había realizado. En el internado, el poder del PCP-SL era total. El discurso senderista se centraba en mejorar las raciones del comedor y el servicio de transporte, ambos servicios vitales por el aislamiento geográfico que tiene la universidad. Este será un mecanismo clave en su control del campus a inicios de los noventa. Al mismo tiempo, se hicieron presentes agentes infiltrados del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en la academia Amauta, con el objetivo de ubicar a los principales activistas del PCP-SL en la UNE.

Los centros federados fueron remplazados por cuatro comisiones o comités: Comedor, Transporte, Internos (Vivienda) y Cultura. Esta última estuvo ligada a los grupos de teatro y música popular que se presentaban en los asentamientos humanos ubicados en el eje de la carretera central

(Chosica, Vitarte), lo cual estaba ligado con las prioridades del trabajo del PCP-SL pues la carretera Central era concebida como la «puerta de entrada al corazón del estado burocrático».

Un espacio crucial donde se expresaban todos los símbolos senderistas fueron los actos político-culturales, que se iniciaban cantando el Himno de La Internacional. Dentro del programa se incluían actos musicales, recitales poéticos y representaciones teatrales, llegando a tener gran poder de convocatoria, sin que ello necesariamente significara una adhesión masiva al proyecto del PCP-SL:

Íbamos alumnos internos, alumnos externos y creo que alguna vez me mostraron un vídeo ahí nomás el año 91 cuando hicieron las capturas, y eran una gran cantidad de gente: 300 ó 400 personas. Y no creo porque todos hayan tenido... tal vez ni siquiera una afinidad con Sendero Luminoso. Será, [...] la participación misma, a mí me gustaba ir, no creo que haya faltado a ninguno de ellos, estaba allí dentro de la universidad, a veces no tenía nada que hacer, iba a los actos culturales. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad 334. Ex estudiante, ex dirigente de la residencia de mujeres, 1989-1992)

Dichos actos eran posibles por la existencia de talleres internos, compuestos en su mayoría por estudiantes de Humanidades, los cuales realizaban el *teatro popular* en la tradición del *teatro campesino* del profesor Zavala Cataño.

En 1990, al finalizar el período de Milciades Hidalgo, los partidos que lo habían sostenido en el rectorado (PC Unidad y Patria Roja) no lograron acordar la elección de su sucesor. De este modo la UNE ingresa a un período de transitoriedad, en el cual el rectorado es ocupado por Octavio Rojas, un docente antiguo pero sin apoyo de ninguna fuerza política importante. El vacío que se genera es aprovechado por el PCP-SL, que logra controlar la administración de Bienestar Universitario, y mediante la presión a las autoridades, influye en el manejo administrativo de la universidad. Como ocurrió en Raucana, el PCP-SL intentó organizar la vida de los residentes, por medio del control de los servicios básicos. Así, cuando se realizaron las obras de alcantarillado de la universidad, la licencia fue ganada por la empresa Electrocol, a la que se acusaba de ser fachada del senderismo.

Por otra parte, cada día se hacía más evidente que se sustraían insumos de Bienestar Universitario para ser donados a los presos senderistas del penal de Canto Grande. En dichas acciones se halló involucrado Hugo Muñoz, a cargo de la oficina de Bienestar durante 1991, lo cual le valió ser sindicado de terrorista por el SIN.

2.19.6. La crisis del espacio universitario y la respuesta represiva del Estado (1987-1991)

En la UNE, la crisis institucional estalló el año 1987, con el fracaso del proyecto Nueva Universidad de Izquierda Unida. La gestión universitaria entró en una etapa de franco deterioro que generaba redes de corrupción.

Las pugnas entre Patria Roja, el PUM y el PC-Unidad trajeron como consecuencia que en los procesos electorales surgieran varias listas que reclamaban para sí el membrete de «IU». Por otra parte, Patria Roja se divide, surgiendo la facción denominada UNIR-bolchevique que pronto sería asimilada por el PCP-SL, que logró incrementar su presencia en la Cantuta, a través del control del pabellón de internos y otros espacios como ya hemos visto. Mediante el discurso del «independiente consecuente» que luchaba por la causa del pueblo, oponiéndose a la corrupción de los partidos de izquierda, que trabajaban por sus intereses particulares y no demostraban una práctica coherente con sus doctrinas, el PCP-SL e incluso el MRTA fueron copando espacios, recurriendo cada vez más a la fuerza, en medio de la crisis y rupturas de la izquierda legal:

El año 87 hubo la incursión en las universidades y Sendero no se vio afectado en lo mas mínimo porque ellos no tenían presencia en la vivienda. Una de ellas era nuestra, en la que estaba mucha gente que también no era del PUM y la otra era de Patria Roja, [...] en el 87 cambia el primer pabellón a manos del MRTA. El MRTA, también surgió como Pueblo en Marcha [...] después UDP y MRTA subió su presencia hacia el año 85-86, se divide en Patria Roja, Bolcheviques y son ellos recién en el año 87 que van a lograr sacar a Patria Roja de ahí a balazos, y nosotros tuvimos también que controlar a balazo,. Teníamos ciertos tubos para defendernos porque había que tomar el control y lo hemos defendido de Sendero, cuando UNIR Combatiente, mucha de esta gente se pasa ya definitivamente a Sendero. Tuvimos que defender lo nuestro, y eso fueron abiertos enfrentamientos dentro de la universidad (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P329. Miembro juventud mariateguista, 1982-1987)

El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y en medio del toque de queda impuesto en Lima, alrededor de cuatro mil policías ingresaron en horas de la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: San Marcos, Ingeniería y La Cantuta. El ministro del Interior señaló que esto se hizo para cerciorarse de la existencia de centros de preparación de grupos subversivos en el interior de las universidades, e informó sobre 793 estudiantes detenidos, la mayoría por indocumentados, y otros por poseer antecedentes como subversivos. Hubo cuantiosos daños y varios heridos. Los rectores protestaron por la medida, que violaba el principio de autonomía universitaria.

Posteriormente, la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas del ejército y la política ingresaron meramente a las universidades de San Marcos y La Cantuta, deteniendo a más de 500 personas. Durante el proceso que conllevó a la intervención militar (1991-2000), el gobierno procedió a realizar un manual de lucha contra subversiva, en donde se terminó calificando a San Marcos como centro de captación, y a la UNE como un centro de preparación militar. Estos

operativos no impidieron el avance del PCP-SL al interior de la universidad, por el contrario, generaron el rechazo de la comunidad universitaria, porque a los cantuteños se les estigmatizaba como terroristas. El incremento de las medidas represivas exacerbó las posiciones y pasiones de las facciones partidarias:

(Cuando) la universidad es allanada por la policía, varios de nuestros amigos cayeron detenidos, nosotros estábamos afuera y en ese entonces la reacción fue de rechazo unánime, a pesar de que se sabía que muchos de ellos estaban iniciándose en organizaciones que hoy llamaríamos subversivas. En ese entonces la intromisión de las fuerzas policiales evidentemente sólo podría provocar rechazo e indignación. Recuerdo la detención de algunos compañeros que por primera vez visitaban un calabozo en Seguridad del Estado, pero eso para muchos fue considerado como un mérito, [...] regresaron la mayoría de ellos fortalecidos y convencidos de la inoperancia del operativo policial. [...] Los estudiantes vieron que eso no iba a mellar su estado de ánimo y continuaron adelante. Lo que sí tengo la impresión, es que ya había gente que había tomado el camino de las armas, y que había armas en la universidad. Más tarde me enteraría que había ciertos lugares donde escondían las armas. (CVR. BDI .Entrevista en profundidad P335 .Miembro PUM, 1986-1992)

En enero de 1991, grupos lanzando consignas senderistas se movilizaron por la carretera central protestando contra la intervención militar de EEUU en Irak. La violencia y el hostigamiento entre estudiantes se generalizan al extremo. El 26 de enero, una estación local de televisión proyectaba un video que mostraba un acto político cultural efectuado al interior de la UNE, donde se apreciaba que, con la participación de mandos senderistas, universitarios y estudiantes de un centro escolar desfilaban enarbolando banderas del PCP-SL y cantando himnos a Abimael Guzmán. Daba la impresión de que la UNE se había convertido en una *zona liberada*. A partir de entonces, los estudiantes fueron sometidos a vigilancia por parte de agentes especiales de inteligencia infiltrados en el campus. Ese fue el caso particular de la mayoría de quienes posteriormente serían asesinados por el grupo Colina, en 1992.

En efecto, el SIN comenzó a destacar agentes de inteligencia en diferentes universidades y academias, que informaban semanalmente sobre las actividades estudiantiles y sus orientaciones políticas. En ese contexto, es que nueve estudiantes y un profesor, en julio de 1992, serían asesinados por el Grupo Paramilitar Colina.

A raíz de la difusión de un vídeo por la televisión local en enero de 1991, que mostraba una actividad cultural senderista en la UNE, empezó a crecer la certeza de una inminente intervención policial.

Previamente a la intervención militarizada de 1991, el comité de lucha de comensales tomó como rehenes a dos autoridades, ante la denuncia que hiciera el rector Geldres a la UDEX sobre un supuesto artefacto explosivo en la universidad. En esta coyuntura, la violencia ejercida por los estudiantes no dejaba de tener un referente inmediato, el «castigo ejemplar», propio del PCP- SL:

Ahí, aparte de haberlos insultado, y dicho lo que piensan, la pregunta era clara: ¿Cuál es el objetivo de las autoridades? ¿Qué cosa es lo que están buscando, una intervención militar, qué es lo que quieren? Y yo me acuerdo que alguien —no sé quién— propuso que les raparan la cabeza y que los sacaran amarrados con su letrero, algo como traidores. Eso ya no me pareció correcto porque no sé si realmente el objetivo de ellos era ir creando las bases para una intervención, pero sí me daba pena que les hiciéramos eso. Entonces yo me opuse, no sé ni cuantos estudiantes estaban en el comedor porque era ya casi la hora de la cena, más o menos las 7 de la noche. Yo dije que no, que no estaba de acuerdo porque eso me parecía demasiado. Y que, al final de cuentas, que cada uno quede con su conciencia de lo que había hecho. Y salieron de la universidad, los acompañamos hasta la puerta, hasta la calle y luego volvimos a cenar. Ya como para la semana, o ahí mismo empezó a salir información —creo que fue en Expreso— que La Cantuta es un nido de terroristas y no sé que tanto, y que en los internados se esconden los mandos políticos-militares y (etc.). (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P334. Dirigente de comité de internos mujeres, 1989-1992)

La Cantuta fue intervenida militarmente, tras una visita del entonces presidente Fujimori al campus. Las tropas militares irrumpieron en la universidad a las tres de la mañana del 22 de mayo de 1991. Para entonces, la mayoría de los 300 residentes estaba enterado de la situación, y había logrado abandonar el local previamente. Entre los estudiantes intervenidos se encontraban Armando Amaro Córdor, Marcelino Rosales y Felipe Flores Chipana, quienes al año siguiente serían asesinados por el Grupo Colina.

2.19.7. Militarización de la vida estudiantil (1991-1995)

La UNE fue intervenida militarmente desde mayo de 1991, al día siguiente de la accidentada visita de Fujimori, quien se vio impedido de ingresar al campus por el rechazo masivo que generó su presencia entre los jóvenes universitarios. Este hecho apareció ante la opinión pública como el detonante que produjo la instalación de una base militar al interior de la universidad, siendo las pintas borradas y el Comedor tomado por la tropa, instalándose un severo control militar, que incluía el toque de queda. Los senderistas pensaron, inicialmente, que se agudizarían las contradicciones pero, poco a poco, se empezó a manifestar un nuevo escenario, en el cual los militantes senderistas, así como los simpatizantes, fueron percibiendo que las cosas iban tomando un rumbo que no esperaban. En realidad, la intervención de las universidades públicas formaba parte de la estrategia contrasubversiva encaminada a liquidar de manera selectiva a las principales dirigencias del PCP-SL y el MRTA. En ese contexto, la Cantuta aparecía, nuevamente, como un foco subversivo y se detectaba una predominancia del PCP-SL absoluta en Pedagogía, facultad bajo la responsabilidad de Hugo Muñoz, sindicado como responsable del Movimiento Intelectual Popular, organismo fachada de SL. A su vez, los agentes de inteligencia señalaron a Bertila Lozano como un mando senderista, que hacía proselitismo político en Raucana. El documento, dirigido

durante los primeros meses de 1992 al Comandante de la 1ra. División de Fuerzas Especiales, general Luis Pérez Documet, identificaba hasta medio centenar de miembros del PCP-SL, con influencia en las facultades de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y, en menor medida, Electromecánica.

A pesar de la instalación de una base militar en el campus de La Cantuta, las tensiones continuaron en un clima represivo que progresivamente comenzó a controlar los espacios y mecanismos de intermediación y representación estudiantil, con el evidente malestar de gran parte del alumnado. Mientras tanto, en Lima, un mes después de dicha intervención militar, la policía detenía el 23 de junio de 1991 a Víctor Zavala Cataño, sindicado como el jefe del Comité de Planeamiento y Aniquilamiento del PCP-SL a nivel nacional. Esta acción formaba parte de una serie de capturas de los principales dirigentes del PCP-SL (como Tito Valle Travesano y Yovanka Pardavé de Socorro Popular), que conllevaron a la posterior captura de Abimael Guzmán, en septiembre de 1992.

El secuestro de nueve estudiantes y el profesor Hugo Muñoz ocurrió la madrugada del 18 de julio. Fueron extraídos de la residencia universitaria de la UNE y fueron asesinados horas después integrantes del denominado Grupo Colina.¹⁰

Los alumnos sufrieron una serie de vejaciones por parte de la tropa acantonada en el campus, frente a lo cual debían recurrir a tácticas de protección solidaria:

Quando tú ingresabas a la universidad estaban siempre como cinco del ejército, de los cuales te revisaban, incluso había hasta personas... mañosas podría decirse, que te lo hacían... con el fin de revisarte te llevaban a un lado y te comenzaban a revisar. A veces, ya por ejemplo... habíamos quedado que si a una la revisaban, si decían que se pongan a un lado, todas teníamos que ir, y había también detenciones de esa manera, porque cuando tú ingresabas, enseñabas tu carné y si tú estabas en una lista que ellos tenían, ahí te apartaban y de allí ya no sabían qué había pasado con esas personas; nosotros no supimos de varias personas que así se las habían llevado, así que siempre nosotros como estudiantes decíamos, «Si a ti te dicen que te pongas a un lado, todas vamos y si te quieren llevarte a ti sola, no, vamos todas». (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P342. Estudiante UNE, 1989-1992 senderista recluida en Santa Mónica).

Los años iniciales de la militarización fueron de gran incertidumbre para la población estudiantil, muchos de los cuales se vieron en la necesidad de dejar los estudios. Se hablaba de torturas y desapariciones de manera frecuente, y en medio del toque de queda corrieron rumores de violaciones sexuales contra las alumnas que no acataban la medida. A su vez, se daba inicio a un proceso de *profilaxis ideológica*, con las tropas dedicándose al pintado de paredes, borrando las pintas, y a menudo colocando lemas a favor del gobierno, afirmando la autoridad de Fujimori por encima de la del *presidente Gonzalo* («El presidente de la República del Perú es Fujimori») o

afirmando la autoridad de las armas («¿quién le va a ayudar al estudiante? ¿Quién es la fuerza más valiente? Las Fuerzas Armadas, el Ejército Peruano»).

Esta situación era muy difícil de sobrellevar, pues implicaba, de modo similar a lo que hizo el PCP-SL, un control progresivo de los espacios públicos y privados.

A pesar de lo duro de las condiciones, durante la militarización también se produjo la interacción entre estudiantes y soldados, a menudo con el objeto de hacerles «entender» que formaban parte del mismo bando, esto es, de los desposeídos. Sin embargo, a fin de cuentas, las brechas entre estudiantes y soldados imposibilitaban cualquier acercamiento:

Veíamos por ejemplo que entre el soldado y el oficial era un trato bien distinto, al oficial tú lo podía ver así, comiendo cosas ricas, en cambio a los soldados...[...] Hablábamos con ellos y nos decían que ellos no querían estar acá, pero bueno, qué iban a hacer, incluso nos contaban que ellos venían de otros lugares y... entonces nosotros allí hicimos una movilización, una gran movilización hicimos [...] En contra de que ellos entraran allí al Comedor y comenzaran a racionarnos nuestra ración alimenticia, inclusive nosotros ya para entrar al Comedor íbamos a tener que enseñar siempre nuestro carné, el que no tenía carné no comía, una situación así, entonces todos nos movilizamos [...] en un momento por ahí comenzaron a decir «al suelo, al suelo» y todos nos tiramos al suelo y nos dimos cuenta que ellos en realidad estaban disparando al aire para asustarnos [...] hemos avanzado, logrando entrar a donde estaba el rector, y le hemos dicho que él no puede violar la (autonomía), (el rector) no quiso ir... Pero sería una constante de que los soldados nos sirvan a nosotros nuestros almuerzos y se llevaban a la mayoría de trabajadores que estaban en contra de esa situación, se los llevaban y decían que eran subversivos, terroristas. A varios han detenido, a varios comensales los han detenido como senderistas, como terroristas, inclusive los que han muerto en La Cantuta, yo los he conocido, ellos también eran comensales (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P342. Estudiante UNE 1989-1992, miembro del PCP-SL recluida en Santa Mónica).

Mientras los cuadros senderistas abandonaron los claustros universitarios, los estudiantes fueron los más afectados por estas medidas.

Con la instalación de la base militar, a cargo de la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE), se impuso un riguroso toque de queda de 10 p.m. a 6 a.m. En este período, fueron detenidos y amedrentados muchos estudiantes, docentes y trabajadores, siendo acusados de desarrollar actividades terroristas, y prácticamente se militarizó la vida estudiantil alrededor del control y la vigilancia, los prejuicios y el miedo. En efecto, se estableció todo un régimen de vigilancia y de prohibiciones, donde primero estaba prohibido todo tipo de movilización o de agrupamientos. Las pocas movilizaciones que se lograron conformar eran dispersadas a balazos. También se hizo habitual la presencia de agentes de inteligencia, tomando fotos o filmando en los interiores de la universidad. Se reguló además los horarios de los estudiantes residentes en la vivienda, quiénes sólo podían circular libremente hasta las ocho de la noche; asimismo, se bloqueó

¹⁰ Algunos agentes del SIE estaban infiltrados en la Academia pre universitaria César Vallejo, controlada por el PCP-SL, y que tenía su local en la residencia universitaria. Se presume que el SIE tenía informantes también entre profesores.

las comunicaciones entre los internados de hombres y mujeres. Además, eran constantes los ataques y agravios de contenido sexual, por parte de los soldados:

Cuando pasábamos al internado de damas, por ejemplo, como allí en la capilla era su base, siempre había 30, 40 ó 50 sentados o comiendo. No sólo te piropeaban –fuera bueno-, sino te insultaban, te decían: prostituta, perra, terruca, de todo. Al menos a mí me incomodaba eso enormemente. Yo he ido a quejarme dos o tres veces pero a la oficina de bienestar. Primero cuando estaba Hugo Muñoz y luego cuando lo cambiaron, que estaba no se quién. Porque cada que pasaban nos insultaban y yo dije: bueno, estos tipos que se creen. Yo les he dicho varias veces: oye, si eres hombre ven y dime en mi cara, pero no te escondas en la multitud, porque se escondían dentro de su batallón y de allí salían los gritos. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P 334. Dirigente de comité de internos mujeres, 1989-1992)

En líneas generales, las reacciones frente a la intervención fueron diversas; así, aunque incómodos, muchos estudiantes se sintieron liberados de la saturación ideológica del PCP-SL, mientras los grupos subversivos se veían obligados a refugiarse en la clandestinidad. Algunos de sus militantes abandonaron por entonces la Residencia, e incluso la Universidad, principalmente sus cuadros prominentes, aunque el PCP-SL continuó su trabajo en la Academia Pre Universitaria, y en las comisiones que habían formado en la UNE, en medio de la presencia de los servicios de inteligencia que actuaban en la UNE.

Al igual que en otras universidades públicas, como en Huamanga y la Universidad del Centro, también la Universidad La Cantuta sufrió el deterioro de sus ambientes y de su infraestructura. En junio de 1991, el diputado César Barreda Bazán denunció que los soldados encargados de pintar en La Cantuta quemaron una gran cantidad de libros de la Biblioteca Central, bajo la excusa de que alentaban la subversión. Se corría el rumor de que en los sótanos de la Biblioteca llegó a funcionar una *escuela popular*. Según el actual jefe de la Biblioteca, lo que ocurrió fue un *secuestro de libros*, escondidos y calificados de *intocables*, pues durante 10 años no fueron tocados. Así, las obras de Mao Tse Tung, Marx, Engels y Lenin y diversos manuales de materialismo dialéctico, automáticamente iban al sótano.

Asimismo, fueron demolidos los pabellones del internado de varones, considerados nidos de terroristas, es decir, centros de formación política e ideológica:

(Los militares) agarran y deciden eliminar las dos residencias para estudiantes ¿no? Y las hacen volar, y es allí donde ellos advierten, que ahí abajo habían escuelas o centros de preparación, pero ese era un edificio abandonado con anticipación por qué, porque el terremoto... no lo hacía optimo para nada [...] Que yo recuerde no reaccionaron los estudiantes [...] No había ningún docente viviendo ahí, es más, no había estudiantes viviendo ahí, y qué se yo, no hubo reacción en ese momento, será porque estuvo los militares acá adentro ¿no?, que era la época de Ramos. (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P331 .Docente UNE).

Este fue un golpe contundente para la preponderante presencia del PCP-SL en La Cantuta, puesto que ponía en evidencia la diferencia de poderes existentes entre el PCP-SL y las fuerzas armadas:

En el tiempo que se da la intervención no se podía (colocar profesores contratados); prácticamente como el rector estaba, como quien dice se amparaba en las Fuerzas Armadas [...] Allí se da esa situación, ese enfrentamiento dentro del estudiantado y las fuerzas armadas, después de eso ya se da que un día [...] la destruyeron, entonces los estudiantes que vivían allí, en la vivienda universitaria tenían que ir a dormir en la vivienda de mujeres» [...] Estuvimos en contra cuando la derribaron, nos movilizamos. No querían que haya ningún tipo de movilización, tampoco querían que haya ningún tipo de reunión, cuando había una reunión allí se ponían y empezaban a rastrillar sus armas diciendo que no debía haber. Y siempre cuando tú ibas a tu clase estaban allí, en la universidad, allí en el salón estaban presentes. Prácticamente si tú hablabas algo, tenías posición de que el sistema debía cambiar, que sólo así se podrían solucionar los problemas, si decías así, ya tú era senderista, subversivo, eras terrorista y así pasó con varios. Y así pasó con varios, varios que decían que la situación, que el problema es del sistema, mas no de qué presidente está en el país, prácticamente esas personas las han desaparecido o las han detenido diciéndoles que eran subversivos, senderistas (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P 342. Estudiante UNE, 1989-1992, integrante del PCP-SL recluida en Santa Mónica).

Debemos anotar que meses antes de la muerte de los estudiantes y el profesor, el 4 de septiembre de 1991, fue asesinada la supervisora del Internado de mujeres de la UNE, Rosa Pretell. El crimen fue reivindicado por el PCP-SL, alegando que Rosa Pretell colaboraba brindando información de los internos al Ejército:

También denunciemos la actitud de soplónaje de la supervisora del internado y otros reaccionarios que cumplen su negro papel en contra de los hijos del pueblo, negros sueños que el PCP y la guerra popular los aplastará. (*El Nacional*, 6 de septiembre de 1991).

Yo escuché que esta señora era soplona, pero no sé si era esa señora Rosa que se dice, que era soplona, que era la que daba información a las Fuerzas Armadas para que detuvieran a varios y es ahí cuando nosotros nos enteramos que la habían asesinado, y los que la conocían directamente, los de la vivienda universitaria, decían que estaba bien porque esa señora era prácticamente una soplona que daba información a las Fuerzas Armadas. Inclusive por la situación de que ella individualmente, si ella se lleva mal... por ejemplo una de las chicas que vivía allí en la vivienda universitaria decía «yo estoy tratando que esa señora no vea algo malo en mí, porque si ve algo en mí, inclusive individualmente, si ve un rechazo en mí, hasta me puede culpar a mí de senderista y ser luego desaparecida». Yo sé que se daba esa situación (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P342. Estudiante UNE, 1989-1992, integrante del PCP-SL recluida en Santa Mónica)

La madrugada del 18 de julio de 1992, nueve estudiantes (Juan Gabriel Mariño, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Heráclides Pablo Meza) y el profesor Hugo Muñoz Sánchez, fueron secuestrados de la Vivienda Universitaria, y posteriormente asesinados por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército dirigidos por el

mayor EP Santiago Martín Rivas, líder del denominado Grupo Colina. Investigaciones posteriores demostraron que los secuestrados habían sido objeto de seguimiento por personal de inteligencia. Según el Informe 140 Dinto-Dincote, por lo menos Bertila Lozano era objeto de constante seguimiento por parte de los agentes de inteligencia asignados a la Cantuta.

Con respecto a los actores involucrados en el «Caso de la Cantuta», según opinión de Benedicto Jiménez, Pedro Ruiz Canales, trabajador de la dirección de transportes de la UNE, era responsable de un destacamento de la zonal de Chosica de SL. Pedro Ruiz formaba parte del Movimiento de Artistas Populares (MAP) que actuaba dentro de la UNE, conformado en su mayoría por músicos folclóricos. El día de la matanza, Ruiz no se encontraba en la residencia. El Grupo Colina ignoraba la presencia de este destacamento, y creyeron o hicieron creer a su comando que los universitarios que tocaban en el MAP fueron los autores del atentado a Tarata. Ello involucraba directamente a Armando Amaro, Flores Chipana, Pablo Meza y Robert Teodoro, que tocaban música folclórica, aunque no pertenecían a dicho movimiento. En realidad, todo parece indicar que los estudiantes asesinados no fueron seleccionados al azar, y que de alguna manera pertenecían o estaban influenciados por el radicalismo que impregnaba la vida universitaria. ¿Militaban en Sendero Luminoso? Tal vez como simpatizantes periféricos, aunque sí destacaban al frente de las luchas de los grupos estudiantiles. Otro factor que los integra es el hecho de que la mayoría tenían en común procedencias regionales y padres provincianos. Con respecto al profesor Hugo Muñoz, su trayectoria política y personal demuestra que estuvo muy cercano a SL, aunque ello no es una prueba concluyente de su responsabilidad en los atentados de Tarata.

Luego de este secuestro, se desencadenó un sentimiento de temor generalizado en la Universidad. Los frentes y comisiones promovidos por el PCP-SL se debilitaron, los estudiantes se replegaron en el silencio y los familiares de los desaparecidos iniciaron una intensa campaña de búsqueda de las víctimas. Tras el descubrimiento de sus restos y el impacto que produjo en la opinión pública el modo en que se intentó encubrir la matanza, desde 1994 se comenzó a rendir homenajes, cada 18 de julio, a los estudiantes y el profesor asesinados. El primer homenaje fue organizado por el denominado Centro de Estudiantes Democráticos (CEDEUNE) que mantenía una actividad reivindicativa en torno a temas coyunturales y el servicio del Comedor, en septiembre del mismo año aparece un comunicado clandestino firmado por el Movimiento Estudiantil Cantuteño (MOVEC), siglas de un antiguo frente maoísta, el comunicado tenía un lenguaje cercano al PCP-SL, en el mismo se reivindicaba a los nueve estudiantes y el profesor asesinados como los mejores hijos del pueblo.

Como producto de la militarización del espacio universitario, se registra en la actualidad que, solamente en el penal de Canto Grande, hay treinta y cinco estudiantes cantuteños condenados por delito de terrorismo o traición a la patria, la mayoría procedente de las facultades de Humanidades, Ciencias y Tecnología.

En 1995, el Congreso aprobó una Ley que amnistía a los militares, exonerándolos de las múltiples violaciones de derechos humanos efectuadas en el transcurso de la guerra interna. Este hecho, conjuntamente con la intervención administrativa de la UNE, abrió un nuevo período del proceso de la violencia en la universidad que desembocó en un silencio institucionalizado:

Yo me acuerdo, que en el 92, 91, voy a la universidad a ver mis papeles porque ya estaba por sacarlos y cuando, veo pues a las tropas metidas fue algo bien impactante [...] tú caminabas y ni bien caminabas había tres soldados, en la biblioteca había tres soldados, en todos lados había tres soldados, en todo sitio había tres soldados, ya parecía un lugar, parecía un cuerpo militar, un cuartel parecía La Cantuta y lo curioso ahí (es) que los FEULES, los del UNIR, Patria Roja, ahí, nada, ni gritaban «muere gobierno genocida, fascista» que por aquí, «¡fuera Fujimori!» Nada, calladitos, así estaban, pucha, metidos bajo su cama, baja la carpeta y unos de esos, yo me encuentro con un antiguo dirigente que todavía estaba ahí y le digo: «oye y cuando te vas a ir de acá?» le digo «¿cuándo te vas a titular?», no que todavía tengo cursos, «¿pero cuándo te vas a titular?», «no, que todavía debo cursos», «ya ves eso pasa porque no estudias» le digo, entonces que pasa que ahí... y yo le digo «que hacen esos soldados porque no los botas», «no, la represión esta fuerte», decía, pero eran cosa así anecdóticas, era un miserable (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P339. Secretaria general ARE, 1985-1990)

Con respecto al PCP-SL, probablemente, el factor central que repercutió en el abandono de los cuadros senderistas de La Cantuta fue la captura de Guzmán y de casi todo su Comité Central.

2.19.8. Intervención administrativa y cambio generacional (segunda mitad de los noventa)

El 25 de mayo de 1995, entró en vigencia la Ley 26457 que declaró en reorganización las universidades públicas del país y la destitución de sus autoridades. Entre los antecedentes de la dación de la ley, trascendió la existencia de un pronunciamiento que señalaba el supuesto resurgimiento de la actividad terrorista al interior de los claustros universitarios. Como ocurrió con la matanza de 1992, en que se secuestró y asesinó a estudiantes sindicados como terroristas poco después del atentado en Tarata; en esta oportunidad el gobierno expuso como argumento justificatorio de la ley un atentado explosivo en el Hotel María Angola. Se declaró una Comisión Reorganizadora en la UNE (COREUNE) que culminó sus funciones el 28 de noviembre del 2000, según la Ley N° 27366, fecha en que se instaló el Comité Transitorio de Gobierno presidido por Rolando Vizarraga y Guillermo Vargas.

Durante este período se produjo el cese de profesores vinculados a los antiguos partidos de Izquierda. Posteriormente la COREUNE facilitó, mediante la reducción del número de créditos, la graduación de los estudiantes antiguos. En 1996 no hubo examen de admisión, con el objeto de lograr que salga la mayor parte de estudiantes antiguos; adicionalmente, se prohibió todo tipo de reunión política. Las nuevas juventudes que ingresaron en 1997, empezaron a organizarse,

formando el Centro de Estudiantes (CEUNE), organismo que se liga con otras universidades en la lucha contra el fujimorismo y por recuperar la autonomía universitaria.

A seis años de instalada la comisión interventora en la UNE, los alumnos denunciaron ante la prensa ser víctimas constantes de abusos a sus derechos por parte de las autoridades. Señalaron que las represalias fueron realizadas contra profesores, a quienes se intimidaba con amenazas de expulsión. Afirmaron que incluso se llegó a expulsar a profesores que criticaban al gobierno, mientras otros optaron por retirarse al llegar la Comisión. Los alumnos manifestaron temer a las represalias, pero ya no tener miedo a la dictadura. Algunos, que no quisieron identificarse, manifestaron que las autoridades habían negado el ingreso a diez alumnos, por repartir volantes anunciando una conferencia de Gloria Helfer, conocida opositora del fujimorismo que formó parte de la comisión investigadora del caso La Cantuta en el Congreso. Los estudiantes denunciaron entonces que, casos como estos, eran vigilados por el servicio de Inteligencia, que se hallaba infiltrado en las universidades para detectar el menor rebrote de subversión.

Distinguir a los nuevos actores surgidos en los últimos años en la UNE, requiere situar los significados que fue adquiriendo la matanza de los estudiantes durante el proceso de cuestionamiento al régimen fujimorista. Las actuales memorias de la violencia de los docentes manifiestan un bloqueo que impide una evaluación crítica de parte de los propios docentes. Esto se expresa en la evaluación que uno de los profesores más antiguos hace de la política universitaria:

La Cantuta no ha sido una excepción, que la Cantuta lo hayan señalado como un foco de rebeldía eso es hasta «interesado». Por ejemplo, me llama la atención que usted me pregunte de Patria Roja, porque ahorita esta el gobierno en una campaña contra Patria Roja, además todos los días en su programa cualquier cosa menciona a Patria Roja, en los periódicos sale que Patria Roja esta moviendo los comités regionales y cosas, no, cosa que no hay acá si usted ve, y observa bien, no hay ninguna actividad de tipo político [...] Es bien difícil que uno tenga en la memoria lo que ha sucedido desde 1970, son mas de treinta años, lo único que yo puedo decir es que esa universidad, guiada por su doctrina, trató de formar hombres pensantes, hombres que nunca estuvieron callados y que siempre han objetado lo bueno y lo malo de los sucesivos gobiernos. Entonces, era una institución contestataria simple y llanamente, pero de ahí a la violencia que se produjo en la guerra interna es otra cosa. Eso es diferente, eso no tiene nada que ver con la universidad. Es un movimiento nacional que infiltró a todas las instituciones del país, hasta el Ejército estaba metido y estaba metido también el Servicio de Inteligencia, estaba metido por todas partes y hasta ahora creo que está en la universidad. (CVR. BDI Entrevista en profundidad P341. Docente UNE)

Cabe añadir que en la actualidad existe una brecha generacional entre docentes y alumnos, que impide una mejor apreciación de la nueva heterogeneidad juvenil por parte de los profesores, prescindiendo de los viejos esquemas de interpretación de la política. De esta manera evalúa a la juventud cantuteña actual un docente que tuvo como maestros a Nilda Atanasio y a Zavala Cataño:

El ochenta es una situación caótica dentro de la universidad, de esta universidad en particular, en San Marcos también, porque yo estudiaba en el ochenta en San Marcos era un caos, una pérdida de tiempo [...] hay mucha (gente) que se ha ido o mucha que esta muerta por A o B motivos, hay gente nueva que ha venido, muchos sin saber y otros sabían. Hay gente que sabe demasiado y hay gente que no sabe nada, absolutamente nada, entonces no saben como es el robo o la destrucción [...] yo creo que ahora (los estudiantes son) casi mas de Lima (que de provincias) y es un estudiantado menos político, más... más afectista, o sea toman decisiones por afecto, por cariño y no por cuestiones políticas (sino por algo) estrictamente personal (CVR. BDI. Entrevista en profundidad P341. Docente UNE)

2.19.9. Conclusiones

Casi desde el inicio de la guerra, pero principalmente a partir de mediados de los ochenta, el interés de PCP-SL en La Cantuta fue derivando de un trabajo pedagógico y formativo hacia una actitud proselitista e instrumental, a través del progresivo control de diferentes espacios estratégicos de la ciudad Universitaria como el comedor, la vivienda universitaria y el servicio de transporte, como también del reemplazo de las instancias representativas, que perdieron legitimidad mientras la crisis económica y universitaria se profundizaba.

No cabe duda que con el control del magisterio y presencia de los diferentes gremios de trabajadores y dirigencias barriales ubicadas a lo largo de la carretera Central, la UNE fue considerada espacio estratégico dentro de los planes militares del PCP-SL. Por ello, la UNE, concebida inicialmente como un espacio de reclutamiento y captación de cuadros, pasó a convertirse en una plataforma para el asalto a la capital.

El PCP-SL nunca dominó la FEUNE, ya que no creía en los cargos electos. Más bien, siempre buscó destruir la federación lo que finalmente logró. En el mismo sentido, siempre atacó a los representantes del tercio como «vendidos a las autoridades».

Surge entonces la pregunta sobre cómo logro el PCP-SL montarse sobre las organizaciones de estudiantes y docentes, y finalmente controlar el espacio universitario a inicios de los noventa.

Podemos destacar hasta tres ideas que surgen del análisis del caso: primero, la apropiación de lo que se conoce como un «discurso radical economicista» para la captación de cuadros, que se reduce a reivindicar medidas económicas básicas. Podemos percibir que el trabajo político del PCP-SL en la UNE siguió etapas definidas, enfrentando ideológicamente a las facciones que manifestaban una mayor afinidad ideológica con la lucha armada (es el caso de Puka Llaqta o los Bolches), para seguidamente realizar un trabajo de copamiento simbólico del espacio universitario (como expresión del «nuevo poder»), hasta finalmente tener una presencia más activa en la administración de los bienes y recursos de la UNE, favorecida por la mala gestión de las autoridades elegidas democráticamente, cuyas prácticas clientelares terminaron provocando un mayor distanciamiento del estudiantado y una mayor aceptación del discurso senderista.

La otra idea crucial es la creencia en el equilibrio estratégico, que dotó a los militantes del PCP-SL de una convicción firme con objetivos a mediano plazo, agudizando los conflictos existentes en el desarticulado movimiento estudiantil.

La tercera idea tiene que ver con el pragmatismo que adopta el PCP-SL durante los noventa y que define una línea de acción común a su desarrollo.

El PCP-SL supo ubicarse como fuerza opositora. El uso de la fuerza y la amenaza que encarnaba implicó para alumnos y profesores estar entre la espada y la pared o mejor dicho entre la vida y la muerte, ya que el PCP-SL representó una fuerza a la cual nadie se podía enfrentar sin arriesgar su integridad física.

En síntesis, mientras la debilidad interna de los actores políticos y las autoridades universitarias permitieron el progresivo crecimiento del PCP- SL, tanto mediante una primera fase de persuasión (Nilda Atanasio), como mediante la absorción de militantes de izquierda radicalizados (el proceso de desaparición de Puka Llaqta fue el primer precedente de este desplazamiento) o a través del hostigamiento y la amenaza directa (principalmente a la dirigencia del FEUNE); en los noventa la intervención del Estado en la gestión universitaria buscó recuperar la institución.

La tradición radical y la mística de la Cantuta en cierta manera fueron reafirmadas con el asesinato de los 9 estudiantes y el profesor que finalmente alimentarían una suerte de radicalismo contestatario en cuyo imaginario, estas víctimas son mártires que recuerdan la larga tradición de agresiones estatales al alma mater de la educación. Esta tradición de lucha es sentida como un valor positivo, pero externamente es más bien una razón de estigmatización. Por ello, una de las secuelas del proceso de violencia política es el silencio de la universidad como institución, silencio que convive con el sentimiento radical de una institución que siente que es agredida desde el exterior. Esto en perspectiva puede ser sumamente peligroso en la medida que puede terminar abonando un discurso que justifique nuevamente la violencia política.

2.20. LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no solamente es una de las universidades públicas más antiguas de América del Sur, sino también la más grande e importante del Perú. Dada la centralidad de la UNMSM, su evolución como centro educativo refleja claramente los cambios abismales vividos en el país, donde una vertiginosa demanda educativa irrumpe en el escenario en los últimos cuarenta años. Al mismo tiempo, los procesos seguidos por esta universidad, refleja la compleja dinámica del diverso panorama político y educativo peruano.

La UNMSM ha sido durante la época de la violencia, una de las universidades que albergaba la mayor cantidad de estudiantes. Igualmente, a comparación de otras universidades siempre se ha caracterizado por su complejidad y pluralidad.

Resulta indispensable entender en este contexto, que el PCP-SL no fue el único actor en la dinámica de la violencia desarrollada en la UNMSM, como que también es importante saber que el PCP-SL no fue apoyado por toda la comunidad universitaria.

La extendido y pernicioso idea de pensar que todo sanmarquino es terrorista, fue precisamente la falsa convicción que justificó que la opinión pública apoyara en gran medida y viera con buenos ojos las cruentas y represivas acciones del Estado y la instalación de una base militar en esta como en otras universidades sindicadas como bases terroristas.

La principal interrogante que recorre este estudio es indagar por los factores que facilitaron la entrada y presencia de la propuesta senderista. Igualmente interesa comprender el accionar del estado dentro de este panorama.

La UNMSM no ha constituido un mundo aparte en el desarrollo y evolución de la violencia. Esta guerra no declarada se ha limitado o generado en su interior. Por el contrario, la dinámica universitaria, ha interactuado con procesos externos que han influido en la exacerbación de contradicciones, calando hondo en las coyunturas más frágiles.

El PCP-SL representa además una postura vertical y autoritaria, donde predominan los personajes masculinos en la toma de decisiones. De esta manera, la adhesión y aceptación de estudiantes, docentes y administrativos hacia el PCP-SL se mezcló con la generación de un ambiente de coerción y terror. A pesar de estas características, sin embargo, la idea central que cruza el estudio y que luego corroboramos es que, al igual que en otros casos, el PCP-SL aparece como un ente ordenador ante la corrupción de autoridades y funcionarios que aparecen en la escena universitaria.

2.20.1. Contexto sociodemográfico

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos contaba para 1970 con 19,461 estudiantes matriculados¹, si bien no existen registros sobre la procedencia de los mismos, sin embargo estudios de corte cualitativo²; afirman que la mayoría de ellos eran migrantes, este dato es corroborado por el hecho que para dicha época solamente existían 17 universidades fuera de Lima³, muchas de ellas con menos de cinco años de funcionamiento, por tanto la oferta profesional para el estudiante provinciano era bastante limitada y San Marcos se presentaba como una alternativa por su prestigio y la diversidad de carreras que ofrecía. Estos estudiantes provincianos que accedían a la universidad como un medio de movilidad social, fueron la base social para el radicalismo político sanmarquino, el cual los organizó en base a demandas inmediatas como la ampliación de los servicios de bienestar universitario, postergando temas relevantes como la mejora de la calidad académica, cada día más deteriorada.

Para 1980 la población estudiantil sanmarquina se había incrementado notablemente llegando a tener 32,916 estudiantes, esta cifra se incrementaría de manera sostenida anualmente hasta llegar a 45,354 estudiantes en 1987; para este año también había crecido la oferta de universidades provincianas que llegaban a sumar 31 universidades, este hecho entre otros producirían que se incrementara la proporción de los estudiantes limeños frente a los provincianos⁴. Es importante anotar que el inicio de la década del '80 no solamente se caracteriza por el incremento acelerado del número de estudiantes, sino también por la crisis del radicalismo universitario que poco a poco pierde su base social y es sustituido por agrupaciones políticas de la izquierda legal.

Entre 1987 y 1988 la crisis económica y social se profundizará este hecho tendrá un impacto sobre la matrícula universitaria que en el lapso de un año cae a 26,028 estudiantes, luego de esta fecha el número de estudiantes se mantendrá en ese promedio incluso hasta el final de la década de los '90. El impacto de la crisis sin lugar a dudas obligó a un importante porcentaje de los estudiantes ha abandonar sus estudios, afectando ello especialmente a los estudiantes más pobres, es importante anotar que por estos años también se incrementa la violencia al interior de la universidad, la reducción de las posibilidades de desarrollo y la desesperanza frente al futuro, arrojaron a un sector de los estudiantes hacia posiciones violentistas, lo cual fue aprovechado por los grupos subversivos. Es importante anotar que sin embargo la tendencia mayoritaria en el estudiantado fue de apatía e indiferencia frente al convulsionado escenario político y social, además, los diversos testimonios recogidos nos

¹ Todos los datos demográficos sobre la Universidad de San Marcos fueron obtenidos de la Dirección de Estadística e Informática de la Asamblea Nacional de Rectores.

² LYNCH, Nicolás. Los jóvenes rojos de San Marcos. El radicalismo universitario de los años setenta. El Zorro de Abajo Ediciones, Lima 1990.

³ GRADE. *Educación superior en el Perú. Datos para el análisis*. Documento de Trabajo 9. Lima 1990.

⁴ GRADE, op. cit.

permiten afirmar que producto de la crisis de finales de los '80 el perfil del sanmarquino se volvió progresivamente más mesocrático⁵.

Por otro lado es bueno tomar nota que San Marcos es una universidad bastante heterogénea, ya que la composición social de su alumnado varía notablemente según facultades y en su seno contiene diversos micro climas sociales y políticos. Las facultades en general muestran dinámicas diversas tanto las ubicadas en la Ciudad Universitaria de la Av. Universitaria, como aquellas ubicadas fuera, me refiero a la facultad de Medicina de San Fernando y anexos en la Av. Grau, la facultad de Veterinaria en la Av. Circunvalación o Educación Física en la Av. 28 de Julio; también debemos tener en cuenta las dinámicas propias de las residencias universitarias (en la Ciudad Universitaria y la Av. Grau) o de los comedores (en el Jr. Cangallo y la Ciudad Universitaria); es por ello que en algunas partes del estudio nos referiremos a la dinámica de un espacio específico, pero por lo general el foco de nuestra atención estará en procesos asociados a la dinámica de la Ciudad Universitaria.

2.20.2. El complicado panorama de los grupos de izquierda

La salida del PAP de la conducción de la universidad en 1969, al ser Luis Alberto Sánchez forzado a renunciar al rectorado de San Marcos generó las condiciones para que las corrientes políticas de Izquierda sentaran las bases para su hegemonía.

En los años setentas, pese al intento del gobierno militar por despolitizar las universidades, en San Marcos se consolida la hegemonía de los grupos de inspiración marxista, siendo mayoritarios los grupos influenciados por la vertiente ideológica denominada maoísta. La diferencia entre estas organizaciones estaba en relación a la caracterización que hacían del gobierno militar y la sociedad peruana.

La mayor parte de estos partidos de izquierda reivindican para sí la representación del auténtico Frente Estudiantil Revolucionario (FER)⁶. Es por ello que durante la década del '70 más de cinco grupos políticos distintos utilizaban las siglas del FER y luchaban entre sí por lograr el control de la federación de estudiantes (FUSM) y los principales espacios universitarios. Entre estas organizaciones, las que tenían sin duda la mayor fuerza política y estructura partidaria eran los Antifascistas, Patria Roja y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), todas ellas en distinta medida reivindicaban la vigencia del «Pensamiento de Mao Tse Tung».

⁵ Debemos recordar que para esta fecha no existía ningún registro sobre el perfil socioeconómico del estudiante de San Marcos, la universidad hace su primer estudio censal recién en el año 2001.

⁶ El FER se había formado veinte años antes como un frente de diversas fuerzas progresistas enfrentadas al PAP, estas fuerzas estaban hegemonizadas por el Partido Comunista. Posteriormente, en 1964, el PC se divide entre sus facciones pro-chinas y pro-soviéticas, iniciándose un proceso de sucesivas divisiones que terminan fraccionando al FER.

La cultura política de los grupos sanmarquinos más radicales⁷, generalmente, estaba fundamentada en la descalificación del opositor y para ello se acudía a la cita textual lo cual implicaba el aprendizaje memorístico de los textos y manuales como lo manifiesta la siguiente entrevista:⁸

Kawata nos decía; este es un libro (el Manifiesto Comunista), del que debemos tener por lo menos 5 o 6 ejemplares, porque la primera vez que lo lean, van a hacer sus comentarios, porque hay que leer línea por línea, párrafo por párrafo, hay que interpretar bien cada párrafo y después ver la relación párrafo con párrafo porque ahí está la esencia. Entonces su idea era que cada vez que uno lo leía, los comentarios o apreciaciones o las ideas fuerzas que nos producía el libro iban a ir cambiando, superándose, como uno tenía la obligación de garabatear o escribir en el libro entonces en la quinta o sexta vez, la calidad de lo que podías comentar era superior. « (ex dirigente estudiantil del PCR).

Además existía un grupo con características distintas llamado Unión Estudiantil, (UE) que había sido fundado por iniciativa de un núcleo de militantes de un pequeño partido surgido de las múltiples divisiones del PC Bandera Roja. El perfil de UE era más reformista y menos opositora al gobierno militar y con una preocupación más centrada en los asuntos académicos, lo cual le valió mantener una influencia en el denominado ciclo básico y posteriormente en las especialidades de ciencias e ingenierías.

Durante la década del setenta los departamentos académicos designaban a los profesores, es por ello que se convierten en el centro de la presión estudiantil. Generalmente los jefes de los departamentos designaban como docentes a aquellos profesores que eran propuestos por los grupos estudiantiles que mantenían la hegemonía en cada programa académico. Esta práctica evitaba la generación de conflictos entre los beligerantes grupos estudiantiles y las autoridades, pero promovió que la universidad quedara dividida en cuotas impuestas por los frentes políticos antes mencionados. Igual sistema de cuotas se impusieron en los servicios universitarios que dependían de Bienestar Estudiantil, como la Residencia y el Comedor:

El comedor si era uno de sus feudos para decirlo de algún modo y era defendido a capa y espada, incluso estoy recordando, conversaciones que decían que eso era una táctica general de Bandera Roja, es decir, controlar comedores no solo en San Marcos, también los controlaban en la Agraria [...] esto más allá del plan anecdótico tenía un por qué: controlando comedores podían controlar proveedores, podían generar clientes.» (Ex dirigente estudiantil de Historia).

A inicios de los ochentas, hay una debilitada presencia de sectores ultra izquierdistas provenientes del maoísmo, los cuales son denominados por los partidos de la izquierda legal

⁷ En especial entre los seguidores más radicales del denominado «Pensamiento Mao Tse Tung».

⁸ Durante la década del '70, hay una notable difusión de manuales sobre el marxismo, la mayoría de ellos producidos por la Academia de Ciencias de la URSS, los cuales paradójicamente fueron utilizados por los grupos maoístas. (Degregori:1990).

como sectores «infantiles de izquierda»⁹, por su apelación constante a un discurso ideologizado combinado con un reivindicacionismo en torno a demandas economicistas en los tres estamentos universitarios (estudiantes, docentes y no docentes). Dichos sectores, en el nuevo escenario político de los ochentas, intentarán ocupar un espacio intermedio entre la Izquierda Unida que participaba en los espacios legales y los grupos subversivos que habían iniciado un camino insurreccional.

El grupo más representativo de estos sectores fue el denominado FER Antifascista. Su discurso combinaba y se limitaba al radicalismo ideológico con el pragmatismo de la reivindicación, que se expresaba en demandas como el no pago de matrículas, más raciones en el comedor, más unidades de transporte, por ejemplo. Con estas acciones esperaban mantenerse vigentes dentro de la Universidad, el único espacio político en el que tenían algo de presencia.

En 1973 y 1976, las elecciones a la FUSM (Federación Universitaria de San Marcos), son ganadas sucesivamente por el denominado FER Antifascista, que tuvo una gran influencia en los estudiantes provincianos, defensores del ala radical de la revolución cultural china, seducidos por el discurso de reivindicación del campesino. En las elecciones de 1976 también participa el FER Luminoso, pero queda en último lugar con una votación realmente marginal. Era común que en este período ninguno de los grupos políticos tomara en serio las posiciones del PCP-SL y mucho menos podían creer que estaban a punto de iniciar su proyecto de guerra popular, prolongada del campo a la ciudad. Es más, cuando a finales de los setentas desaparecen de San Marcos, se pensaba que se había disuelto como grupo, proceso muy frecuente entre los grupos de izquierda que constantemente se iban dividiendo.

Hacia finales de los setentas, el FER Antifascista sufrió un proceso de desprestigio por los límites de su discurso centrado en reivindicaciones de corto plazo traducido en su abstencionismo frente al cogobierno estudiantil (que era una forma de no asumir la necesidad de formular un proyecto para la universidad) y su práctica aislacionista en relación al conjunto del movimiento popular.

El período iniciado en 1979, está marcado por el impulso de corrientes renovadoras al interior de la universidad, que presionan por una mayor democratización y la superación de la crisis acentuada durante el gobierno militar. Estas corrientes intentarán marcar una ruptura con los discursos «economicistas» centrados en reivindicaciones de supervivencia y aislacionistas que caracterizaron la hegemonía de los Antifascistas.¹⁰

⁹ Se recoge el término «infantiles» de la tradición leninista que califica como tales a aquellos sectores que consideran que tienen una desviación ultraizquierdista.

¹⁰ El punto culminante de este proceso es la elección de Antonio Cornejo Polar como rector y el impulso de un proyecto que buscaba recuperar a San Marcos, como universidad democrática, concebida dentro de un proyecto nacional. La falta de apoyo del Estado y las contradicciones internas de las fuerzas que llevaron a Cornejo Polar al rectorado, abonaron para el fracaso del proyecto. Es bueno apuntar que desde el Estado tampoco hubo la respuesta que la universidad pública necesitaba ya que la nueva ley universitaria no estuvo a la altura de la crisis que afrontaba la universidad y la reducción paulatina de rentas marcó el divorcio definitivo entre Estado y universidad pública. En

En 1979, en el contexto de un plebiscito sobre la participación de los estudiantes en el cogobierno, se forma una alianza entre Patria Roja, PCR y otros grupos de la izquierda legal¹¹; que logra derrotar a la corriente liderada por los Antifascista y otros grupos radicales.¹² Posteriormente, esta misma alianza derrotará a los Antifascistas en las elecciones de la FUSM y del importante Centro Federado de Letras como lo afirman los testigos:

La gran derrota (del FER Antifascista). fue no tanto haber perdido la Federación Universitaria de San Marcos sino haber perdido el centro federado de Letras y esto fue motivo hasta donde yo sé de un gran debate interno, un gran debate de criterios internos que terminaron por expulsar a sus dirigentes principales.»(Ex dirigente estudiantil de Historia).

«Había un grupo de estudiantes antifascistas radical y al año le ganó el otro grupo Izquierda Unida, se quedó un tiempazo [...] a San Marcos ya no he vuelto salvo para hacer reportajes. « (Periodista sanmarquino recluso en el Penal de Canto Grande).

En efecto, en 1979 se producen las elecciones para la FUSM que son ganadas por Enrique Jacoby (PCR), apoyado en alianza conformada por Patria Roja, PCR y UE. Estos partidos formarían en 1980, juntos con otras agrupaciones de izquierda, la Izquierda Unida. Este hecho significó la puesta en escena de una propuesta estudiantil de corte político pero también académico y cultural:

Fue una época en la que se promovieron un montón de cosas por el lado cultural, fue la mejor época, se volvieron a restaurar los juegos florales que después de 15 años no se hacían en San Marcos, empezaron a publicar varias revistas en diversas facultades pero por supuesto Letras fue donde se congregaron más iniciativas, después hubo una preocupación por la Promoción Social. (Ex dirigente estudiantil del PCR).

Luego de la gestión de Jacoby, la Izquierda Unida ganaría la mayoría de los procesos electorales hasta las últimas elecciones de la FUSM en 1989, sin embargo, las gestiones posteriores perderán paulatinamente el espíritu renovador inicial y la tendencia será que se acentúe una práctica política mercantilista, autoritaria e instrumental. Si bien la IU es conformada por diversos grupos, es claro que a su interior Patria Roja logra la hegemonía, lo cual se evidencia cuando militantes de Patria Roja ocupan la presidencia de la FUSM en las tres juntas directivas que le sucedieron a la de Jacoby:

En IU San Marcos nos gana Patria Roja, impone su candidato que fue Mendieta [...] Mientras la legitimidad de Jacoby o la tendencia política que estaba detrás de él era de mucha simpatía y a pesar de que como PCR nos multiplicamos cinco veces en ese periodo. Patria pudo tener más capacidad en movilizar, de convocar.» (ex dirigente estudiantil del PCR).

este período también se registra un lento pero persistente trabajo político del PCP-SL entre los estudiantes más golpeados por la crisis, lo que luego le permitirá tener una presencia más pública en la universidad.

¹¹ Para 1979 la alianza se denominó Frente Democrático Popular, posteriormente con la fundación de Izquierda Unida en 1980, tomaría el nombre de IU- San Marcos.

¹² Esta corriente propiciaba que los estudiantes no participaran en ninguna forma de cogobierno o tercio estudiantil.

Hubieron otros líderes que ahora se le reconoce, uno de ellos fue de la facultad de Economía apellidado Mendieta, él fue considerado como un buen líder estudiantil [...] creo que de Patria.»(Ex militante de la UDP).

La década del setenta se cierra a nivel nacional con el fin del gobierno militar y en San Marcos con la crisis del radicalismo maoísta y la nueva hegemonía de sectores de Izquierda que progresivamente, entre 1978 y 1980, se integrarán a la legalidad y a los espacios que les ofrecía el regreso a la institucionalidad democrática. Paralelamente ya desde la clandestinidad el PCP-SL se encuentra preparando el inicio de la lucha armada, evento que marcará definitivamente los procesos políticos tanto a nivel nacional como a nivel universitario.

A finales de la década de los '70, una de las consecuencias del fin del gobierno militar y el inicio de la transición democrática fue la integración de gran parte de la izquierda a la legalidad, es entonces que la tensión central de la izquierda legal, siempre fluctuará entre un discurso que apelaba a la acumulación política para la toma violenta del poder, y la práctica cotidiana de inserción al aparato estatal, y posteriormente a la conducción institucional de la Universidad. Las expectativas que generaron la articulación de la izquierda legal a finales de 1979, pronto será afectada con el inicio de la lucha armada en 1980 y el desconcierto y ambigüedad que la misma produce entre su militancia, en cuya formación política adquiría centralidad el discurso de la violencia revolucionaria.

A finales de los ochentas, en medio de la crisis política y el avance de los grupos subversivos, la izquierda legal en alianza con las comunidades cristianas y grupos independientes, logran articular algunas estrategias de contención contra el PCP-SL. Estas estrategias no logran continuidad, ya que pronto la propia división de la izquierda, los juegos internos de poder y la propia crisis del pensamiento marxista, llevan a la práctica desaparición de las agrupaciones políticas. Luego de la intervención militar y frente al golpe de estado de 1992, se articulan nuevos referentes que manteniendo algunas tradiciones de la antigua izquierda, intentan darle un contenido ético y democrático a su accionar político.

2.20.3. Las etapas de la violencia en la UNMSM

La primera mitad de la década de los '80, está caracterizada por un reordenamiento general de la sociedad, en torno al proceso de retorno a la institucionalidad democrática; el cual también es vivido al interior de la universidad. La universidad elabora su propio estatuto, elige democráticamente sus nuevas autoridades y se institucionaliza el cogobierno estudiantil. Esto producirá cambios al interior de la propia institución educativa:

De la misma manera, el sistema universitario recupera su autonomía con la disolución del CONUP (institución interventora), y la instalación de la Asamblea Nacional de Rectores.

Otro proceso importante, es la incorporación a la legalidad de gran parte de la Izquierda, con lo cual, accede a espacios de representación democrática, lo que generará cambios en su discurso y práctica política.

Desde la instalación del gobierno democrático de Fernando Belaunde, en 1980, los estudiantes empezaron una serie de movilizaciones para lograr la derogatoria de las leyes impuestas durante el gobierno militar, exigiendo la ampliación del presupuesto para las universidades. El lema central de las movilizaciones encabezadas por la FUSM era: «Por rentas y autonomía»; paralelamente se sucedieron diversas luchas para mantener la vigencia del medio pasaje universitario, muchas de ellas acababan con el bloqueo de la Av. Universitaria y la retención de unidades de transporte público al interior del campus universitario. Este tipo de acciones en cierta medida fueron consolidando en opinión pública la imagen del sanmarquino como un estudiante vandálico y con una dirigencia devaluada, cuyo discurso no podía generar una opinión pública favorable.

En 1983 la Comisión de Educación del Senado comenzó la discusión de la nueva ley universitaria, en la cual no se tomó en cuenta las reivindicaciones de la comunidad universitaria, es en este sentido que la FUSM encabeza las protestas en Lima, las cuales muchas veces terminan en violentos enfrentamientos con estudiantes apristas de la Universidad Federico Villarreal. Finalmente, la ley 23733, inspirada por los senadores Ernesto Alayza (PPC) y Luis Alberto Sánchez (PAP), es aprobada por la mayoría de los senadores. Es en este contexto que en los primeros meses de 1984, se reaniman las movilizaciones. Las protestas contra la denominada ley Alayza-Sánchez, serían las últimas movilizaciones masivas en San Marcos durante la década del '80, las cuales tenían un carácter triestamental (estudiantes, docentes, trabajadores). Estas fueron conducidas por la FUSM y los partidos integrantes de Izquierda Unida, logrando controlar a los sectores más radicalizados como el FER Antifascista y el FEUL Puka Llaqta. En estas movilizaciones, en contraposición a lo que podríamos pensar, a pesar que en muchos casos tomarán un giro violento, no hubo presencia significativa del PCP-SL

De esas movilizaciones siempre recuerdo el especial cuidado que tuvo la dirigencia de la FUSM para evitar que algún grupo empiece a utilizar la movilización con propósitos políticos, se cuidó bastante, y esto porque el PCP-SL ya empezaba a tener cierta presencia. (Ex dirigente estudiantil de Historia).

Las movilizaciones no logran su objetivo de variar el sentido de la ley, pero internamente si consolidan el liderazgo de los partidos de la Izquierda legal al interior de San Marcos, lo cual se aprecia en los resultados de las elecciones para la Asamblea Estatutaria, donde quedan derrotadas tanto la lista apoyada por los Antifascistas como la lista apoyada por el PAP.

En 1984, promulgada la nueva ley universitaria, se produce la salida del Rector Ponz Musso y se convoca a una asamblea estatutaria y posteriormente se elige como nuevo rector a Antonio Cornejo Polar (apoyado por las fuerzas de izquierda). La elección de Cornejo Polar sería complicada, ya que tiene que enfrentar al Movimiento Académico (último esfuerzo del PAP al interior de la universidad), el cual tenía mayoría entre los docentes. El apoyo a Cornejo Polar provenía del Movimiento Renovación (minoritario en docentes) y la Izquierda Unida (mayoría en los estudiantes). Al no contar con los votos suficientes en la Asamblea, Cornejo Polar tiene que aliarse con el FDR (Antifascistas y UDP) y aceptar que Alfredo Torero, de la UDP, asuma como vicerrector administrativo (9 de marzo de 1985).

Cornejo Polar encarna una aspiración modernizadora para la universidad, que implicaba superar las condiciones de pauperización debido al bajo presupuesto, asumir cambios académicos y recuperar el sentido de la autoridad. Desde el primer momento, sin embargo, tendrá que afrontar discrepancias con el grupo que el vicerrector Alfredo Torero representó, la indisciplina de los docentes que se negaban a la evaluación de los servicios académicos, las largas huelgas de trabajadores que dejaban sin servicios a la Universidad y la beligerancia estudiantil del FER Antifascista que tomó más de 10 locales universitarios. Por su parte, el gobierno central presidido por el PAP, tampoco cumplió con las promesas de mayores partidas presupuestarias para superar la crisis que vivía San Marcos. Presionado, Cornejo Polar se ve obligado a renunciar a mediados de 1986. Este momento marca la derrota del proyecto renovador de un sector de Izquierda en San Marcos, profundizando la crisis y la pérdida de la autoridad al interior de la Universidad.

En la segunda mitad de los '80, el país comienza a vivir un paulatino deterioro con la profundización de la crisis económica y el avance de la violencia política. Con respecto a la violencia política esta se traslada a las ciudades, y frente a la acción del PCP-SL y el MRTA se produce violentas respuestas desde el propio Estado. El patrón de violaciones de derechos humanos, se ve agravado con la aparición del grupo paramilitar Rodrigo Franco.

Las universidades serán cada día más estigmatizadas como lugares de adoctrinamiento de terroristas. Las intervenciones policiales, desde 1987, se harán cada día más frecuentes, generando detenciones masivas de estudiantes. Ante la opinión pública muchas veces el hecho de ser sanmarquino se convirtió en sinónimo de terrorista. Es por este tiempo que comienza a pegar la consigna: «Somos estudiantes y no terroristas, terroristas son los búfalos apristas».

Paralelamente, las movilizaciones estudiantiles se volverán menos masivas, pero más violentas, siendo cada día más frecuente la infiltración de elementos subversivos en las mismas.

Para mediados de 1986, ya era evidente el fracaso del proyecto renovador que en algún momento encabezaron los partidos integrantes de Izquierda Unida, lo que se traduce en un creciente proceso de pérdida de legitimidad. La administración de la Universidad, hegemonizada por Patria Roja, se dedica a administrar la crisis y sacar las mayores ventajas de

la misma para sí misma. Es ahí que el PCP-SL encuentra las condiciones para crecer entre un sector radicalizado del estudiantado, que comienza a relacionar a los partidos de Izquierda legal con la corrupción. La respuesta del Estado, frente a la presencia del PCP-SL, fue típicamente represiva e indiscriminada afectando en su mayor medida a los militantes de la Izquierda legal, que internamente enfrentaban al PCP-SL.

A finales de la década de los '80, todo el sistema político entra en crisis, proceso que afecta con más fuerza a los partidos de la Izquierda legal que se encuentran entre la violencia irracional del PCP-SL y la respuesta desmedida del Estado. Todo ello en el contexto de la crisis del paradigma marxista, del cual era depositario el pensamiento de Izquierda. En términos generales, todos los demás grupos políticos entran también en crisis fraccionándose y pierden paulatinamente militantes.

La propia FUSM termina siendo identificada como un espacio de dirigentes eternos y sin representación, producto de un estilo de conducción que confundió el espacio gremial con el espacio partidario. Esto se agravaría aún más cuando, producto de la pugna por la conducción de la Federación de Estudiantes del Perú, se divide la ya deslegitimada junta directiva de la FUSM y la coalición de partidos que la sustentaban. Al final del período, lo que quedaba de la Izquierda legal, con el apoyo de las comunidades cristianas, recomponen de manera efímera a la Izquierda Unida; para hacerle frente a la violencia política, generada por la presencia de los grupos subversivos al interior de la universidad.

Posteriormente a la renuncia de Cornejo Polar, es elegido como rector Jorge Campos Rey de Castro, que fue una autoridad con perfil bajo al igual que su sucesor Wilson Reátegui, este último vinculado a Patria Roja. Durante esta última gestión se profundiza la corrupción dentro de la Universidad, por lo que el partido utiliza a la universidad como su caja chica.

En 1987, Patria Roja vuelve a procesar una división, surgiendo una ala disidente denominada Bolchevique y que forma luego el FER Bolchevique, que llega a controlar bases importantes como Derecho y Educación, donde se producen violentos enfrentamientos contra los defensores de la línea oficial de Patria Roja. En ese momento la alianza de partidos que conformaban la Izquierda Unida en San Marcos, estaba totalmente fraccionada y frente a la pérdida de prestigio del conjunto de organizaciones políticas, en muchos casos se recurría a la violencia o al fraude para mantener el control de los gremios. Además, frente al avance de la violencia política en Lima (Estado de Emergencia, presencia y rastillajes de las fuerzas armadas e incremento de la cantidad y violencia de los atentados del PCP-SL y el MRTA), las diversas agrupaciones de la izquierda legal comienzan a debatir sobre el uso de la violencia para enfrentar tanto al PCP-SL como a las fuerzas armadas. En este contexto también se realizan interminables debates sobre la caracterización del PCP-SL y el MRTA, generando a la larga desconcierto entre la militancia de los partidos, en especial entre sus juventudes universitarias que viven un proceso de radicalización y aislamiento del resto de los estudiantes. Los partidos

se reciclan con sus mismos militantes y se fraccionan. Un ejemplo de ello es el PUM que termina dividido en tres grupos en 1989.

En la madrugada del 13 de febrero de 1987, las fuerzas policiales intervienen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la intervención muere un trabajador no docente sanmarquino, detienen a un gran número de estudiantes. Pese a la magnitud del operativo, sus logros concretos no son significativos. Sin embargo, dicha intervención marcó el fin de una manera de entender la autonomía universitaria. En adelante las fuerzas policiales penetrarían en la universidad en sucesivas ocasiones, generando la protesta de la comunidad universitaria y diversas movilizaciones estudiantiles, en las cuales comienza a notarse una mayor presencia de grupos subversivos mediante volantes o consignas. Las movilizaciones son fuertemente reprimidas y poco a poco pierden intensidad. El movimiento estudiantil evidenciaba, de este modo, un enorme desgaste.

Entre 1987 y 1989, se producirán sucesivas incursiones policiales al campus universitario, las cuales generalmente terminarán con la detención masiva de estudiantes, en especial residentes de la vivienda universitaria. Estas sucesivas intervenciones policiales, no tendrán ningún efecto positivo en relación a la detención de elementos subversivos, aunque a nivel de la opinión pública se iría consolidando una imagen cada día más deteriorada de la Universidad San Marcos.

El año de 1988 se caracterizó, particularmente, por la desproporcionada represión policial a las movilizaciones estudiantiles, lo cual causó entre mayo y octubre de 1988 la muerte de tres estudiantes: Javier Arrasco Catpo, Carlos Barnet y Hernán Pozo Barrientos. En los tres casos, las muertes ocurrieron en situaciones donde la policía disparó sus armas de fuego de manera irresponsable, durante manifestaciones estudiantiles.

La muerte de Javier Arrasco se produjo el 31 de mayo de 1988, en circunstancias que el Comité de Lucha de Comensales de Cangallo¹³ realizaba una manifestación de protesta contra la masacre de campesinos en Cayara¹⁴. Luego del asesinato de Javier Arrasco, la junta directiva de comensales publicó un pronunciamiento de protesta por la represión policial, en el cual también se criticaba la actitud provocadora del PCP-SL:

Rechazamos enérgicamente el intento de desvirtuar los hechos y nuestra justa protesta por parte del gobierno aprista mediante el comunicado de la fuerzas policiales, así como de la prensa reaccionaria. De igual manera rechazamos el aprovechamiento político de una instancia gremial por parte de una organización que llamándose revolucionaria pone a las masas entre dos fuegos y que con sus acciones no hace sino juego a la derecha dando pie para que justifique este alevoso asesinato.¹⁵

¹³ El Comedor de Cangallo se ubica en el jirón del mismo nombre, al costado de la facultad de Medicina de San Fernando.

¹⁴ La movilización se desarrolló en la céntrica Av. Grau.

Era claro, que sin atreverse a mencionar el nombre de la organización, la junta directiva de los comensales del Comedor del Jirón Cangallo, se referían al PCP-SL, organización que tuvo como uno de sus más ansiados objetivos, controlar espacios como el comedor, donde logró cierta hegemonía y que le permitía inclusive contar con raciones para militantes senderistas que no pertenecían a la universidad.

En la perspectiva de lograr mayor apoyo entre algunos estudiantes radicalizados, el PCP-SL intentaba llevar las protestas al extremo y luego presentarse como los únicos consecuentes frente a las reivindicaciones estudiantiles:

Los militantes y simpatizantes senderistas, implementaron una estrategia que buscaba provocar a los efectivos policiales para que actuaran de manera violenta y se generara una gran cantidad de heridos, detenidos e incluso saldos mortales. Con ello el PCP-SL esperaba polarizar el escenario político universitario atrayendo para sí a los sectores más radicalizados del estudiantado: «Yo me sentía a gusto de participar en esas movilizaciones pero luego empiezo a sentir miedo, porque en esas movilizaciones siempre había gente del PCP-SL y empiezan a detonar bombas [...] en el año 86 me llevaron, pase tres días en seguridad del estado.» (Ex militante de la UDP).

La estrategia senderista, de provocar el mayor enfrentamiento con las fuerzas policiales, al parecer tuvo éxito ya que meses después en otra movilización muere baleado, por la Policía, el estudiante Carlos Barnett (octubre de 1988) Durante una nueva movilización muere, también, Hernán Pozo Barrientos, estudiante de Antropología que se encontraba en el Patio de Letras, cuando las fuerzas policiales empezaron a disparar al interior del campus universitario.

Las responsabilidades por estas muertes se debieron, básicamente, a una predeterminada provocación de los grupos subversivos, que se infiltraban en las movilizaciones estudiantiles, a lo que se sumaba una irresponsable y abusiva acción de las fuerzas policiales que disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes y al propio campus universitario. Evidentemente la muerte de los tres estudiantes y el incremento de heridos durante las movilizaciones, causó su efecto entre los sectores más radicalizados, lo cual tuvo como consecuencia el avance del PCP-SL en determinados espacios como el Comedor de Cangallo, la vivienda universitaria, el sindicato de trabajadores (SUTUSM) y algunos sectores de docentes.

2.20.4. Resistencias al PCP-SL y la última elección a la FUSM

En agosto de 1987, debido a la pugna por desplazar a Patria Roja de la dirección de la Federación de Estudiantes del Perú, la FUSM se divide. La Asamblea de Secretarios Generales,

¹⁵ «Comunicado del Comité de Lucha de Comensales 01/06/88»; publicado en el periódico *Cambio* (subrayado nuestro).

de ese entonces, destituía al presidente de la FUSM, Miguel Cruzado (militante de Patria Roja), siendo luego reemplazado por Víctor Andrés Ponce (militante del PUM).

Los partidos de la Izquierda legal, que habían intentado conducir la reorientación de la FUSM, estaban totalmente divididos, estaban enfrentados y sus militantes se habían convertido en dirigentes eternos sin ninguna representatividad. Como dato adicional, tenemos que la junta directiva presidida por Miguel Cruzado se mantuvo más de seis años sin realizar elecciones, lo cual significó que la federación de estudiantes entrara en una crisis que terminaría con su desaparición.

En abril de 1988 se realizaron las elecciones para renovar los tercios estudiantiles, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. En dichas elecciones participaron cuatro listas:

- El Frente Democrático de Bases, que agrupaba a los sectores más radicalizados de la Izquierda (UDP, FER Antifascista y FER Bolchevique).
- IU-Frente Amplio Sanmarquino, alianza de un sector de la Izquierda Unida (PUM, PC Unidad, Unión Estudiantil).
- IU-San Marcos, en la que participaba solitariamente Patria Roja.
- El ARE, frente de la Juventud Aprista.

En dicha elección ganó la lista de los sectores más radicales de la Izquierda (FDB). Las dos listas de Izquierda Unida quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Después de casi diez años, los sectores que conformaban la Izquierda legal, eran por primera vez derrotados por una lista que agrupaba a los sectores que mantenían posiciones muy cercanas a la de los movimientos subversivos (en especial al MRTA).

En este escenario de avance de los grupos de la Izquierda más radical y frente a la presencia cada día más agresiva del PCP-SL, se comienzan a ensayar diversas estrategias estudiantiles de contención frente a los grupos subversivos, las cuales van desde el enfrentamiento simbólico a su discurso, hasta el enfrentamiento violento. Una de las experiencias más interesantes fue la formación de la Coordinadora de Defensa de San Marcos, en la cual participaban las comunidades cristianas y los partidos de la Izquierda legal, como lo relata uno de nuestros entrevistados:

En esta suerte de coordinadora se agruparon alguna gente de izquierda, militantes de partidos políticos inclusive, básicamente de Izquierda Unida y sobre todo recuerdo que había un buen contingente de grupos de Católicos de base; bueno a partir de ellos apareció un referente de gente que claramente deslindaba con el PCP-SL y por lo mismo ese núcleo empezó a ser una suerte de blanco de las amenazas. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda).

Desde 1988, la Coordinadora animó un conjunto de actividades, de las cuales, la más importante era cambiar el sentido de las pintas del PCP-SL, intentando crear un nuevo sentido común frente al problema de la paz:

Entonces eso mismo es lo que hubo en Letras y en otras partes, la pinta estaba tal cual sino que se le daba aditamentos y después terminaba completamente diferente, desaparecía o incluso terminaba diciendo lo contrario si es que ese era el caso.»(Ex militante de los Cristianos de Izquierda).

Esta iniciativa logró bastante nivel de organización, consenso y apoyo; por lo cual el PCP-SL no pudo actuar contra sus impulsores, pese a que en muchos casos los intentó intimidar sin mucho éxito.

Los partidos de la Izquierda legal también comenzaron a generar mayores habilidades para confrontar violentamente y resistir la estrategia senderista, e incluso disputarles espacios como el Comedor. Esta estrategia fue posible en la medida que dichos partidos adoptaron una actitud de clara condena al PCP-SL: «Una voluntad política en términos concretos para defender ese espacio (la Universidad), incluso en términos físicos y de enfrentamiento bastante fuerte [...] eso es parte de la historia que deberíamos investigar un poco más.» (ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

Este es el caso de algunos partidos como Patria Roja, partido que, mientras contaba con una estructura orgánica fuerte, logra mantener al PCP-SL fuera de su bastión: la Facultad de Economía. Hay otros partidos que de una manera u otra también realizaron demostraciones de fuerza para frenar al senderismo, en este sentido cabe resaltar el papel del Partido Comunista Peruano (PCP-Unidad) y el Partido Unificado Mariateguista (PUM)¹⁶.

A finales de 1989, las diversas estrategias que desde la Izquierda legal estaban enfrentando la lógica de los grupos subversivos, recuperan su unidad y se presentan en la lista de Izquierda Unida para la FUSM (federación de estudiantes).

Efectivamente, se realizan las elecciones, la cual es ganada por Luis Hoces, militante de Patria Roja que postula con la bandera de la IU, y que le permite superar a la lista del FDB, integrada por sectores radicalizados de la Izquierda. Este triunfo es un hecho significativo, con el cual la Izquierda legal intenta frenar el avance del PCP-SL en la universidad, pero sin embargo, este exitoso logro pronto se desdibuja ante la poca cohesión interna de la izquierda: «Claro pero después, cuando Hoces es elegido, hay una ruptura al interior de esa directiva (directiva de la FUSM). y Hoces, conforma una comisión de trabajo de la federación en la universidad de San Marcos.» (Ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

La división de la junta directiva de la FUSM motivó la renuncia de casi la totalidad de su junta directiva. El presidente de la FUSM que totalmente aislado y nombra a dedo una

¹⁶ El PCP-Unidad, el PUM y Patria Roja en ese entonces eran integrantes de la Izquierda Unida.

comisión hegemonizada por los militantes de Patria Roja. Este hecho marcará, en la práctica, la desaparición de la FUSM. Solamente los centros federados y centros de estudiantes, continuarían funcionando.

2.20.4.1. Abriendo trocha en la UNMSM

Durante el inicio de los '80, la presencia del PCP-SL es mínima al interior de la Universidad, sus actividades estarán centradas en algunas acciones de difusión mediante las pizarras del Movimiento Juvenil, la distribución de volantes y ocasionales colectas de los familiares de los presos procesados por terrorismo y el denominado Socorro Popular¹⁷.

La violencia política inicialmente se percibirá como un fenómeno rural y andino, alejada de las grandes ciudades. La universidad San Marcos no será ajena a esta percepción, solamente a mediados de la década se empezará a tomar conciencia de la paulatina expansión de la violencia. En ese mismo sentido, en la primera mitad de los ochentas, la presencia del PCP-SL se percibe como externa ya que, generalmente, sus actividades la realizan militantes que no pertenecen a la UNMSM. En estas acciones se menciona la presencia de estudiantes cantuteños, de la UNI y la Universidad del Callao.

Hacia 1984, la presencia del PCP-SL se hará notar mediante la presencia de pequeños grupos en algunos programas académicos como Historia, Educación, Psicología, Química e Ingeniería Electrónica:

La presencia (del PCP-SL) ha sido desde el año 84, 85, 86, 87 donde se ha sentido más la captación y su presencia porque habían estudiantes que aparecían en los cursos de practica, generalmente en los que tienen afinidad con ciencias sociales. (Ex militante de la UDP en Psicología).

La aparición de algunos núcleos de activistas en el comedor, en Derecho, en Ciencias Sociales y a partir de estos pequeños núcleos de activistas aumenta su presencia física en la universidad vía la multiplicación de pintas, periódicos murales, pronunciamientos en las paredes y también de actividades que comienzan a desarrollar como; conferencias, actos culturales, que era una suerte de mitin que mezclaba lo de arte." (Ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

En la mayoría de los casos, para lograr esta presencia orgánica, contarán con el apoyo de militantes radicalizados que abandonan el FER Antifascista y el FEUL¹⁸ (frente dirigido por Puka Llaqta) y algunos docentes de Historia, Educación, Psicología. Caso aparte es el de Derecho, donde realizan un intenso trabajo político mediante la denominada Asociación de

¹⁷ Este organismo generado de SL, será de vital importancia para la explicación de la violencia en Lima Metropolitana. Incluso llega a desplazar al Comité Metropolitano de Lima.

¹⁸ FEUL significaba Frente estudiantil Unificación y Lucha. En algunos facultades Puka Llaqta aparecía como FEUL, en otros como FER-FEUL.

Abogados Democráticos¹⁹. La penetración del PCP-SL, será más intensa en el sindicato de trabajadores no docentes, para ello utiliza al movimiento FUC-MUB²⁰: «Pero sendero llegó a controlar el sindicato no docente, ellos pensaban que el rectorado era el gobierno y para no permitir que funcionara normalmente llegaban con martillo y destruían las puertas del rectorado». (Ex dirigente de Patria Roja en Economía).

Durante este período, también el PCP-SL intenta lograr una presencia política en el Comedor y la Residencia. El motivo de concentrarse en estos espacios, no era el lograr el control del conjunto de la universidad, sino, el de tener acceso a los estudiantes más pobres, en su mayoría provenientes del interior del país y que por tanto dependían de los servicios ligados a bienestar estudiantil. En este sentido, para el logro de sus objetivos, el PCP-SL pelea estos espacios con un discurso moral acusando a los partidos como los promotores de la corrupción en los gremios, los tercios y la conducción de la universidad.

Es así que para 1983, el PCP-SL comienza a tener una presencia más agresiva al interior del campus universitario:

Porque sería un mitin fácil de 2,000 mil personas (mitin de Izquierda Unida), estaba repleto el patio de Letras [...] entonces llega el PCP-SL con 100, 150 personas y logra dispersarlo [...] Ellos (los senderistas) después de hacernos correr por todos lados se organizaron en columnas, en este pasaje que va desde el Patio de Letras hasta el Muro de la Vergüenza, los alineó pues ahí una profesora de Psicología, que era una de las profesoras que sin haber sido inicialmente del PCP-SL, sino mas bien del FER Antifascista; acabó integrada al PCP-SL. (Ex dirigente estudiantil del PCR).

En la segunda mitad de los ochentas, la presencia del PCP-SL ya no sería solamente en base a militantes de otras organizaciones, sino también, de ingresantes provenientes de las academias «Cesar Vallejo» y «ADUNI», donde el PCP-SL había articulado un trabajo político.

Pero, pese a su intenso trabajo, el PCP-SL no logra imponerse en la Residencia, donde había la presencia de diversos, grupos al interior la Asociación de Residentes de la Vivienda Universitaria – ARVU: «La residencia tenía mucho que ver con quien finalmente estaba en la federación universitaria, más aún la residencia siempre fue un espacio en el que todos los grupos políticos iban a tener cuotas». (Ex dirigente de Historia).

En donde si logra tener una mayor presencia, es en el Comité de Lucha de Comensales, y para afirmar simbólicamente esta presencia elabora un conjunto de murales en el comedor, que inicialmente solamente funcionaba en el local del jirón Cangallo, al costado de la Facultad de Medicina:

¹⁹ A finales de los '70 la Asociación de Abogados Democráticos al parecer era una organización que agrupaba a abogados de distintas corrientes de Izquierda; posteriormente es hegemonizada por el PCP-SL, en este proceso es importante la presencia de la abogada sanmarquina Martha Huatay, que años después sería la encargada principal de Socorro Popular.

[] las pintas eran bien bonitas (en el comedor), con mensajes alusivos al PCP-SL y me sorprendía, por momentos lo veía muy bien, y por momentos discrepaba, ahí se veía ya pues la fuerza el poder más alucinante del PCP-SL considerando a Abimael como el más grande marxista viviente en la tierra. (Ex militante de la UDP).

Lo que si me acuerdo clarito es del Diario, incluso a la salida del comedor ahí estaba a manera de periódico mural, El Diario, eso lo he observado (Estudiante de Medicina recluido en el penal de Cantogrande).

Durante el reparto de los alimentos, militantes senderistas de manera abierta se dirigían discursos alusivos a la lucha armada: «Yo asistía al comedor e ingresaban quienes decían pertenecer al Partido Comunista del Perú y nos exponían sus ideas» (Militante senderista ex estudiante de Derecho).

Sin embargo, el PCP-SL no controlaba totalmente a los comensales, ya que pese a la enorme presión que los senderistas ejercían sobre ellos, incluso el radicalizado Comité de Lucha de Comensales, se atrevió a denunciar el aprovechamiento político que hacia el PCP-SL de las luchas estudiantiles. En efecto, las movilizaciones y marchas tendieron a ser más violentas por la presión de los estudiantes vinculados al PCP-SL: «Ya nos empezamos a dar cuenta que era gente del PCP-SL y no podíamos hacer nada porque empezaban a explotar bombas en las movilizaciones» (Ex dirigente del Centro Federado de Psicología).

Otro de los espacios donde el PCP-SL trabajó, fue al interior de los grupos de danza, teatro y música popular; planteando la necesidad de ligar el arte con una posición de clase y la lucha armada:

Ellos (los senderistas) todo lo enfocaban en relación a la lucha de clases, por ejemplo le daban ese sentido a una danza que se baila a la margen derecha del río Mantaro, en la que se representa el proceso de la cosecha de maíz, y se baila con la hoz.” (Ex dirigente de la Juventud Aprista en Derecho).

Igualmente, el PCP-SL lograba infiltrarse en los actos políticos culturales, donde junto con la presentación de grupos culturales, difundían mensajes de apoyo a la lucha armada: «Yo si he asistido a los eventos políticos culturales a veces ellos ingresaban a exponer sus ideas, pero que estuvieran controlando quien entra o quien no entra eso es parte de una campaña negra como muchas que han montado contra el Partido Comunista del Perú» (Militante senderista ex estudiante de Derecho).

En la facultad de Derecho se articula también un núcleo senderista, donde predominarán las actividades que realizan con la denominada Asociación de Abogados Democráticos, que agrupaba a los abogados especializados en la defensa de los presos senderistas. Posteriormente, el trabajo del PCP-SL se vio reforzado con la formación del FER Bolchevique que, surgido de una facción de Patria Roja, se convierte en el grupo más importante de Derecho. Los militantes

²⁰ FUC-MUB es el Frente Único Clasista del Movimiento Unitario de Bases, desde el interior del FUC-MUB el senderismo realizará una intensa labor política en el sindicato de trabajadores (SUTUSM).

de este grupo, inician un proceso de radicalización que termina con la incorporación de muchos de ellos al PCP-SL. Todo este trabajo, posibilita que exista una presencia significativa del PCP-SL en diversas bases o promociones: «A nivel de mi facultad (Derecho) habían mas compañeros que llegaron a integrar el PCP-SL, que participaban activamente (en las actividades estudiantiles)., pero tu te enterabas cuando ellos caían» (Ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

El PCP-SL comienza también a trabajar fuertemente en la facultad de Ciencias Sociales, en la cual aprovecha las tensiones existentes en torno a las demandas por la construcción de su propio pabellón. En este sentido, encuentra posibilidades de alianzas con docentes provenientes de Bandera Roja y del FER Antifascista, los cuales ven en el PCP-SL la posibilidad de reforzar su hegemonía frente a Patria Roja. Más adelante, por estas mismas razones, posteriormente este mismo grupo de docentes termina aliándose con la Comisión Reorganizadora, nombrada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un caso importante para analizar la presencia del PCP-SL en la Facultad de Sociales, es el trabajo que realiza en la especialidad de Historia, en la cual desplaza inicialmente a los militantes de la izquierda legal en alianza con otros grupos políticos, luego termina desplazando a sus propios aliados: « Al dirigente del FER Antifascista, un buen día le dijeron ya no hay torta para ti, fuera, lo botaron y así hasta que se quedaron solamente ellos (los senderistas)». (Ex dirigente estudiantil de Historia).

En otras facultades como Educación, Ingeniería Electrónica y Psicología el PCP-SL aprovecha la estructura del FER-Antifascista para desarrollar su trabajo político. En ese contexto, la estrategia que el PCP-SL utiliza para desplazar o destruir a los otros grupos, es mediante la figura de los independientes radicales o estudiantes de base que criticaban la corrupción de los partidos. Con esta estrategia, el PCP-SL sin ser mayoritario entre los estudiantes o docentes, logra bloquear el accionar de los partidos, en especial los de la izquierda legal. Algo importante en el trabajo que realiza el PCP-SL, es su participación en los denominados comités de lucha pro facultad y los comités de lucha por el traslado interno.

La izquierda legal frente al incremento de la presencia del PCP-SL y el surgimiento del MRTA, no logran articular un discurso coherente frente al proceso de la violencia política. Es más, comienzan a sentir internamente la presión de los presencia de los grupos alzados en armas.

Otros grupos, como Puka Llaqta, intentaron mantener un discurso que compitiera con la guerra iniciada por el PCP-SL. Por ello comenzaron a realizar pintas al interior de la universidad con el lema «Desarrollar la guerra de guerrillas» y lo firmaba como PC del P, poniendo un ligero acento de diferenciación con las siglas PCP usadas por el PCP-SL. Lo que en apariencia era una sutil diferencia de letras, en realidad expresaba la tensión en un sector político cada día más cuestionado por el hecho de que el PCP-SL estaba desarrollando la esperada guerra popular, que exigía definiciones concretas por parte de su dirección (las cuales nunca llegaron).

A la larga, frente a la indecisión de la dirigencia, los militantes se decidieron por aquello que consideraban más coherente con su discurso: la guerra popular. Este proceso brindó al PCP-SL un contingente de cuadros entrenados en la política universitaria sanmarquina, que hasta ese momento carecían.

Entre 1987 y 1989, el PCP-SL introduce varios cambios en su estrategia urbana, dando un mayor énfasis a su trabajo con jóvenes y maestros. En este período, la presencia del PCP-SL aumenta considerablemente al interior de la Universidad, mientras que el resto de grupos se iban debilitando producto de la propia división de la izquierda legal. Hacia finales de 1990 e inicios de 1991, ya no había partidos realmente organizados en San Marcos. Es en este contexto que el PCP-SL inicia un accionar más agresivo, empezando a castigar físicamente a los estudiantes que retiraban o malograban propaganda. Este tipo de acciones a la larga le resultará contraproducente. Un ejemplo de ello es la Facultad de Psicología, donde producto de la arbitrariedad senderista, se organiza un movimiento estudiantil en respuesta.

Para fines de los ochentas, el PCP-SL había logrado una importante presencia pública, sin embargo, no tenía un organismo o frente de fachada permanente. En algunos casos utilizaban nombres como Movimiento de Estudiantes Clasistas o Movimiento Democrático de Bases, en la perspectiva de articular demandas de carácter cortoplacistas:

Mira el PCP-SL en San Marcos apuntó a lo que se llamaba la política de frente, pero habían dos matices dentro de la política de frente, uno que era abiertamente pro sendero y otro de un discurso más amplio de reivindicación estudiantil, este es el caso del MDB. Los del MDB eran los únicos que apoyaban las marchas sobre el derecho a la gratuidad. (Ex estudiante de Derecho recluido en el Penal de Cantogrande).

En cambio, para expresar posiciones a favor de la lucha armada, pegaba pronunciamientos en las paredes, caracterizados por ser escritos con letras rojas algunas veces sin firma o firmados por el denominado Partido Comunista del Perú. Otra característica importante, es que entre sus militantes adquiere enorme centralidad la figura de Abimael Guzmán (el Presidente Gonzalo), al que se le atribuía un aporte fundamental en el desarrollo del pensamiento marxista:

Pero Mariátegui fue del 30 y de ahí pasaron muchas cosas, por eso se tenía que reestructurar a Mariátegui [...] entonces se necesitaba que todo eso sea especificado y se necesitaba alguien que tenga una comprensión clara de la historia, de la realidad social peruana y esa persona es Abimael Guzmán. (Militante senderista ex estudiante de Educación Física).

Estudiar y principalmente aplicar el pensamiento Gonzalo es decisivo para servir más y mejor al partido, desarrollo de la guerra popular y a la revolución proletaria mundial; así como aprender del presidente Gonzalo es decisivo para servir de todo corazón al pueblo.²¹

²¹ Documentos Fundamentales del Partido Comunista del Perú (el PCP-SL). Suplemento especial de El Diario, domingo 7 de febrero de 1988.

El PCP-SL trabaja preferentemente con estudiantes provenientes de los estratos sociales económicamente más deprimidos, fundamentalmente de los conos periféricos de la ciudad o migrantes para los cuales centra su discurso en necesidades concretas e inmediatas para articular políticamente aun grupo de estudiantes:

Un nuevo grupo de estudiantes nos juntamos para luchar por nuestras propias reivindicaciones como mayor renta, mejores condiciones de estudio, contra el alza de pasajes [...] Recuerdo que peleábamos por que comenzaban a cobrar las matriculas [...] Un papel muy importante allí cumplió la facultad de Educación, sinceramente Educación, Sociales y Derecho fueron tres facultades que se han destacado y siempre han estado en la vanguardia de todo este trabajo. (Militante senderista ex estudiante de Educación Física).

El PCP-SL aprovecha de esta manera, los elementos de frustración de sectores juveniles, que pese a su inserción en la educación superior, tenían limitadas posibilidades de movilidad social. Este patrón se presenta de manera muy fuerte en especialidades como Historia, Educación y las de Ciencias Básicas. Los estudiantes que ingresan a estas facultades, que requieren un menor puntaje para su ingreso, llegan con la expectativa de, luego de ingresar, trasladarse a otras especialidades. Es por ello que uno de los espacios claves para el PCP-SL, en este período, fueron los denominados Comités de Lucha por el Traslado Interno.

De acuerdo a las percepciones de nuestros entrevistados, los estudiantes que visiblemente eran reconocidos como senderistas, mostraban ciertas actitudes de aislamiento, resentimiento y confrontación, que los comenzaba a diferenciar de sus demás compañeros de estudio.

Por ejemplo en términos físicos era gente con el prototipo del provinciano pobre y además era algo que de hecho ellos no solo no disfrazaban, sino afirmaban yo creo que intencionalmente [...] eran muy reacios de juntarse con otra gente, solo entre ellos se juntaban lo cual los hacía identificables [...] mucha gente que se pasó al PCP-SL manejaban un lenguaje confrontacional que creo no deja de ser atractivo para mucha gente. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda).

Yo veía de ellos tenían un radicalismo, pero no un radicalismo político sino un radicalismo emocional, es decir eran chicos con mucha rabia contenida. (ex dirigente estudiantil de Historia).

De acuerdo a las entrevistas, los militantes del PCP-SL tenían una percepción excluyente y sectaria, incluso de aquellos grupos que se encontraban ideológicamente cercano a ellos, como el FER Antifascista: «Al FER yo nunca lo vi que se pronunciara a favor de los estudiantes, muy por el contrario ellos discriminaban, jalaban gente para su molino, pero del conjunto de las necesidades de los estudiantes nunca se ha preocupado» (Militante senderista de ex estudiante de Derecho).

Como el PCP-SL nunca logró el consenso necesario en los espacios estudiantiles, entonces para hacer sentir su presencia, cotidianamente ingresaban a los salones a dar sus consignas e incluso llegaron a realizar algunas detonaciones con fines más propagandísticos. En términos generales, el PCP-SL no realizaba acciones militares dentro de la Universidad. La estrategia senderista buscaba fundamentalmente, realizar un trabajo político de captación y tener al interior de la universidad un lugar de refugio y almacenamiento de materiales. La capacidad de movilización del PCP-SL, al interior de la universidad, era limitada. No garantizaban movilizaciones masivas, pero sí desfilaban muy ordenados, organizados y con apoyo de militantes externos, pudiendo ser identificados por el tipo de consignas que usaban.

Esta orfandad y carencia de apoyo estudiantil, se mostró claramente en las elecciones para tercios estudiantiles que se realizaron luego de la intervención militar. En dichas elecciones la lista denominada FADE, que estaba conformada por estudiantes pro senderistas, quedó en el último lugar: «el PCP-SL se presenta a través del FADE Frente Amplio Democrático Estudiantil, creo que se llamaba así, recuerdo que es la primera oportunidad en que el PCP-SL se presenta así en elecciones, porque por lo general ellos no participaban en elecciones [...] Esa vez tiene el tercer o cuarto lugar.» (Militante de Voz Comunista)

Esta es la única vez que se registra la participación del PCP-SL en una elección al cogobierno estudiantil. Teniendo en cuenta su tradición abstencionista, frente a la reducción de margen para realizar sus actividades políticas debido a la presencia militar, el PCP-SL intentó utilizar su participación electoral como un medio para realizar actividades de propaganda en una forma más abierta.

Durante la permanencia de los militares en la universidad, el único incidente grave fue el ataque a un camión militar al interior de la ciudad universitaria en agosto de 1991. La resistencia senderista a la intervención militar no fue violenta, sin embargo, sino más bien política, mediante la realización de marchas de protestas, en las cuales se buscaba aprovechar el rechazo que causaban algunas conductas arbitrarias de los militares, al interior de la universidad.

La captura de Guzmán y los principales cuadros senderistas, entre 1992 y 1994, desarticuló la estructura senderista, que por ser extremadamente jerarquizada tenía pocas posibilidades de articulación al perder a sus principales dirigentes. Muchos de los militantes senderistas fueron apresados o se vieron forzados a dejar la universidad. Algunos sectores que simpatizaron o colaboraron con el PCP-SL, posteriormente terminaron articulados a la Comisión Reorganizadora nombrada por el gobierno de Alberto Fujimori.

Al inicio de los '90, el PCP-SL parece instalarse frente al vacío de poder y caos reinante en la Universidad. Sin embargo, tiene que afrontar la resistencia de determinados grupos estudiantiles, como la Unión de Estudiantes de Psicología (UNEP), es en este contexto, el Estado ingresa a la Universidad, pero no para responder a las carencias que originaron la crisis,

sino dentro de la lógica de la guerra contrasubversiva. La militarización de la vida universitaria, no logra desplazar al PCP-SL. La posterior intervención administrativa, se realizará en momentos en los que la presencia de los grupos subversivos es casi nula al interior de la universidad. Es más, esta solución agravó los problemas de fondo que originaron la crisis universitaria y que permitieron el surgimiento de lógicas de actuación basadas en la violencia.

La presencia de SL, luego de la llegada de los militares, se hace más discreta pero sigue activa. Esto cambiará luego de la captura de Abimael Guzmán (en septiembre de 1992) y la posterior carta del líder senderista pidiendo un Acuerdo de Paz. Este último hecho genera la división del PCP-SL que entra en crisis y comienza a perder militantes. En esa coyuntura, el PCP-SL tiene entonces que reemplazar sus cuadros con gente nueva, que son rápidamente capturados, produciéndose la paulatina desaparición del PCP-SL en San Marcos:

La estructura que tenía el PCP-SL lo hacía depender demasiado de Abimael Guzmán, entonces la detención afecta a toda su estructura y una de ellas, la universitaria. Entonces, no es tanto porque ingresó el ejército en la universidad que el PCP-SL se fue retirando, hubieron otras cosas de carácter interno que debilitaron un poco la presencia senderista. (Ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

2.20.5. La intervención militar

En mayo de 1991, Fujimori y una comitiva presidencial, ingresan a la universidad provocando que alrededor de trescientos estudiantes lo apedreen. Por la mañana de ese mismo día, Fujimori, había estado en la universidad La Cantuta recibiendo similar acogida. En este grupo había gente de diversas tendencias de Izquierda y en menor medida simpatizantes del PCP-SL: «El tipo entró (Fujimori). y hubo un sector pequeño que reaccionó en contra, yo estuve en ese sector. Pero la gran mayoría no lo hizo. Y ese fue uno de los momentos en los cuales yo particularmente me di cuenta que la crisis de representatividad tenía profundidades» (ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

Este hecho es el pretexto para instalar una base militar en la universidad. Cuando los militares ingresan al campus realizan requisas, intervenciones en las facultades, borran las pintas de la universidad. Estas acciones militares no tienen mayor impacto en el PCP-SL, que más bien pensaba que se agudizaban las contradicciones y estaban más cerca del equilibrio estratégico.

La intervención militar fue apoyada por un sector mayoritario de los estudiantes, ya que sentían que se recuperaba a San Marcos del caos, como lo expresa una revista sanmarquina de la época:

Cuando los militares ingresan a San Marcos y son recibidos en distintas facultades con aplausos y claras muestras de simpatía, los estudiantes que habían apostado por resolver los problemas de la universidad - incluido el de la violencia y la actividad senderista - sin participación foránea se sintieron de una manera u otra, derrotados.²²

²² Herejes y Renegados. Año II, número 9. Noviembre - Diciembre 1992. P. 17.

Cuando Fujimori da el golpe de estado el 5 de abril y disuelve el Congreso, gana popularidad entre los estudiantes más cercanos al discurso centrado en la demanda de orden frente al aumento de la violencia, a la crisis del sistema político de representación y al deterioro de la situación económica. Por otro lado, ya se comienzan a nuclear pequeños grupos de estudiantes opuestos, tanto a la dictadura de Fujimori como al accionar cada vez más violento del PCP-SL. Sin embargo, entre estos grupos hay un creciente temor por los métodos represivos que se comienzan a implementar contra los opositores al régimen fujimorista:

Qué cosas cambian, lo que si obviamente comienzan a ocurrir, son detenciones de pronto, o sea en cualquier momento, de pronto cerraban la puerta, más de una vez cerraban la puerta y todo el que salía tenía que identificarse y se quedaban con alguna gente. Hay un temor generalizado en el sentido de que aún la gente de la Izquierda Legal ya no se anima a activar abiertamente por temor a ser confundido con el PCP-SL. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda).

2.20.6. Desaparición de estudiantes

El 11 de junio de 1991, cuando Alberto Fujimori ingresaba en medio de disturbios a la Universidad San Marcos, efectivos policiales detenían en la puerta de la facultad de Odontología, al estudiante Juan Gregorio Felipe Maquera de 19 años de edad. Nunca más se volvió a saber del paradero de ese estudiante. Año y medio después, en diciembre de 1992, cuando las fuerzas militares ya habían instalado una base en la universidad, es detenido y desaparecido el estudiante Juan Vargas Vallejo, residente de la vivienda universitaria, cuyo paradero hasta hoy es desconocido²³.

Estos casos no fueron aislados, porque debemos recordar que por la misma época fueron detenidos y desaparecidos dos estudiantes de la Universidad Católica²⁴; al parecer el objetivo de esta práctica era generar terror entre los simpatizantes y potenciales militantes de las organizaciones subversivas. La presencia de la base militar también implicó que se organizaran operaciones de rastillaje durante las horas de clases. En estas operaciones se detenía a diversos estudiantes, y para ello los militares contaban con listados en los cuales se consignaba los nombres de los estudiantes supuestamente involucrados en actividades subversivas.

2.20.7. Intervención administrativa de la UNMSM

²³ El caso de Juan Gregorio Felipe Maquera fue asumido por APRODEH, mientras que el caso de Juan Vargas Vallejo fue asumido por COMISIDEH.

²⁴ Nos referimos a los casos de los estudiantes de la Universidad Católica Ernesto Castillo (desaparecido en octubre de 1990) y Miguel Crispín (desaparecido en agosto de 1991).

En mayo de 1995, el gobierno de Fujimori interviene administrativamente la UNMSM y forma una Comisión Reorganizadora (CORE) que destituye a las autoridades universitarias y a los tercios estudiantiles, tomando diversas medidas arbitrarias. El pretexto para esta intervención es la anulación de los resultados de las elecciones del nuevo rector:

Ahora hay condiciones coyunturales que posibilitan que sectores de profesores con determinados vínculos al gobierno se sienten marginados de la conducción de la universidad [...] Porque se anula una elección que ellos habían ganado (MUSA) y los perdedores (vinculados a Patria Roja) organizan una nueva elección sin la participación del MUSA y reeligen a Wilson Reátegui. (Docentes de CCSS)

En este contexto, con la crisis interna y división que experimenta el PCP-SL, es claro que la intervención administrativa tenía la finalidad de entregar el control de San Marcos a docentes cercanos al fujimorismo y de esta manera implementar una reorganización que evite que desde la universidad se articulen movimientos opositores al régimen autoritario. Un aspecto relevante es que un importante sector de docentes que habían simpatizado inicialmente con el PCP-SL, terminaron colaborando con las autoridades interventoras e incluso ocupando cargos de importancia.²⁵ En este sentido, debemos tener en cuenta que ya en 1993, durante el referéndum para aprobar la constitución fujimorista, un importante número de estudiantes se movilizaron a favor del NO.

La instalación de la comisión reorganizadora, significó la introducción de medidas más represivas contra cualquier expresión opositora: «Primero te vigilaban de manera encubierta, porque tu notabas miradas, notabas seguimientos. Pero después la vigilancia fue de manera descarada, con cámaras [...] En todos lados, a toda hora, permanentemente» (Ex dirigente de Patria Roja en Derecho).

Frente a la arbitrariedad mostrada por el gobierno y el autoritarismo de la Comisión Reorganizadora, se comienzan a impulsar nuevos grupos estudiantiles como el Colectivo Amauta, Integración Estudiantil y Juventud Popular, los cuales logran articular la protesta contra el gobierno de Fujimori y el rechazo a la Comisión Reorganizadora. Finalmente, estos grupos tendrán una importante participación en el movimiento inter-universitario, que se articula para lograr la caída del gobierno de Alberto Fujimori.

San Marcos, de nuevo protagonizará movilizaciones, pero esta vez de carácter pacífico y masivo. Un elemento importante de este proceso es que se visibiliza a la comunidad universitaria (en especial los estudiantes) como un actor clave en el camino de retorno a la democracia.

Con respecto al accionar del MRTA, la Universidad fue concebida como un espacio, fundamentalmente, de propaganda político-militar, es por ello característico, que su presencia

²⁵ Un caso bastante representativo es el de un conocido docente que luego de apoyar activamente al PCP-SL durante los '80, terminó ocupando una importante ubicación en la lista parlamentaria fujimorista, denominada 'Perú 2000'.

esté asociada a desfiles con armas y ropa militar. La diferencia sustancialmente entre el PCP-SL y el MRTA, esto se debe a que este último no tuvo la necesidad de articular una estrategia política al interior de la universidad. El hecho de contar con el apoyo de grupos políticos como Pueblo en Marcha, UDP y posteriormente el BPR, le permite tener acceso a las dirigencias estudiantiles, e incluso, poder tener determinados niveles de alianza con algunos partidos de la izquierda legal, lo cual será fundamental para su estrategia de captar nuevos cuadros e integrarlos a sus milicias. El MRTA no apela a la confrontación frente a los otros, porque percibe en los otros grupos estudiantiles un espacio potencial para su crecimiento; producto de ello experimentará su mayor crecimiento político en San Marcos entre 1986 y 1987, cuando el MIR, grupo con trabajo político en la universidad, se integra a la estructura del MRTA.

Sin embargo, el MRTA termina siendo desplazado por el PCP-SL, organización que logra monopolizar para sí el discurso de la guerra. Además debemos tener en cuenta que parte de los brazos políticos del MRTA, comienzan a tomar distancia del mismo, por la denominada «senderización del MRTA». Al final, esta organización política queda aislada y poco a poco pierde militantes, y lo que se quedan en esa organización finalmente son capturados por las fuerzas del orden.

2.20.8 Conclusiones

El accionar del Estado está caracterizado por cuatro etapas que definidas en tiempos políticos distintos. Inicialmente se muestra indiferente a los problemas de la universidad. En un segundo momento la presencia estatal es vía la represión policial, que tiende a ser indiscriminada y desproporcionada. El tercer momento está caracterizado por la militarización de la vida universitaria, en la cual encuadra a la universidad en los objetivos de la lucha contra subversiva. En un cuarto momento cuando la subversión está totalmente controlada, el Estado interviene administrativamente la universidad, para subordinarla de acuerdo a los intereses del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, es importante tener en cuenta que en este cuarto momento las autoridades interventoras contaron con la colaboración de un sector de docentes que durante los ochentas habían apoyado la expansión del PCP-SL.

La estrategia del Estado giró alrededor de demandas de la opinión pública que se alimenta de imágenes, tal como hemos visto totalmente tergiversadas, que se han tejido a través del tiempo. A inicios de los ochentas predomina el perfil del universitario vándalo (que

corresponde con la etapa de la indiferencia estatal). Posteriormente toma cuerpo la idea de relacionar al estudiante universitario sanmarquino con terrorista, cuya consecuencia, es la militarización de la vida universitaria. Esta estrategia en el fondo es la continuidad de la indiferencia estatal ya que ignora la capacidad interna de la universidad para controlar el accionar de los grupos subversivos, e incluso, termina frenando las posibilidades de acción de las diversas iniciativas universitarias, contra la violencia política.

El espacio de los grupos políticos universitarios es marcadamente masculino, no solamente por la presencia mayoritaria de hombres en la dirigencias, sino fundamentalmente por la subordinación de la mujer en el mundo de la política, el cual se ligada a características relacionadas con la fuerza y la dominación (roles que socialmente se le atribuyen a lo masculino). Es por ello, que si bien existe presencia de mujeres en este mundo de la política, su presencia aparece masculinizada o subordinada. Un ejemplo de esta afirmación la encontramos en dos testimonios recogidos, el primero alude a la presencia de una docente de Psicología que encabeza con gran autoritarismo y verticalidad una movilización senderista y el segundo se refiere a la alusión de un ex dirigente estudiantil del término ‘política húmeda’, al referirse a la utilización de la mujer como señuelo para la captación de militantes varones.

Para fines de los ochentas, la universidad tuvo que enfrentar la violencia generada por los grupos subversivos y por el mismo Estado, y en ese contexto se ensayaron, desde la propia universidad, estrategias para contener las lógicas basadas en la violencia. Sin embargo, estas no fueron suficientemente relevadas.

Frente a la presencia de manifestaciones de grupos subversivos, el Estado respondió con una estrategia de represión policial indiscriminada en la segunda mitad de los ochentas y la militarización de la vida universitaria en los noventas. La identificación de la universidad con la violencia y la estigmatización de los sanmarquinos como terroristas, producirá que las respuestas represivas del Estado fueran cada día más violentas.

La respuesta estatal, basada en el sentido común de la necesidad de poner orden al interior de una universidad, supuestamente caótica, creó el clima necesario para que el PCP-SL pudiera crecer en el sector de los estudiantes radicalizados que, al sentirse entre dos fuegos, se vieron empujados hacia su estrategia militar.

A inicios de los noventas, pese a que indudablemente existía presencia subversiva al interior de la universidad, esta no era mayoritaria y había sido sobredimensionada a nivel de la opinión pública. Cuando la educación superior es incorporada a la lógica de la lucha contrasubversiva, la universidad es intervenida y a su interior se instala una base militar. Este hecho no produce la derrota del PCP-SL y serán, más bien, eventos como la captura de los principales militantes del MRTA y el senderismo, entre ellos Abimael Guzmán en 1992, la posterior firma del denominado acuerdo de paz entre los líderes senderistas y el fujimorismo; la

división interna del PCP-SL, los que a la larga marcarán el desgaste y desaparición de las organizaciones subversivas.

2.21. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) tuvo sus orígenes en los esfuerzos que las comunidades campesinas del valle del Mantaro desplegaron a finales de los años ´50, es así que en 1959 se funda la Universidad Comunal del Centro, «...su acta de fundación se firmó el 11 de Julio de 1959, suscribiendo la Escritura Pública de Constitución de la Universidad con fecha 30 de Agosto del mismo año, como Asociación Comunal del Centro». El 16 de Diciembre del mismo año es reconocida oficialmente mediante «D.S. N° 46 con fecha 16 de diciembre de 1959, rubricado por el Presidente de la Republica Dr. Manuel Prado Ugarteche, y se autoriza su funcionamiento con carácter de Universidad Particular con sede en la ciudad de Huancayo, iniciando sus actividades un 02 de abril de 1960». Posteriormente, con fecha 02.01.62, Mediante Ley N° 13827, se convierte en Universidad Nacional del Centro de Perú. Este inicio es demostrativo de la importancia que en el imaginario popular de la región ocupa la educación.

Su Estatuto fue aprobado el 18.04.84, normatividad que democratizó la gestión institucional, restableciendo los tercios estudiantiles en los Consejos de Facultad, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, la elección universal y secreta a estos órganos de gobierno; lo peculiar de la UNCP es que se concibió que cada especialidad fuera una facultad, por ello actualmente existen 22 facultades.

Son miles los jóvenes que han pasado por esta universidad (7,289 en 1980 y 10,189 el año 2000), una amplia proporción procedentes del entorno inmediato de la ciudad de Huancayo y del Valle del Mantaro, con un significativo 10% proveniente de Huancavelica. Mientras que de los estudiantes del propio departamento, los 2/3 pertenecen al Valle del Mantaro (Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca) y un contingente importante llegaba de la provincia de Yauli, especialmente de la ciudad de la Oroya, que en los últimos años ha ido disminuyendo, debido a la retracción de sueldos y empleos en la actividad minero metalúrgica. En la región central, gran parte de profesionales que prestan servicios en las instituciones de gestión pública o privada se han formado en la UNCP, ingenieros, economistas, agrónomos, zootecnistas, arquitectos, docentes de primaria y secundaria, enfermeras y, últimamente, están egresando médicos. Estas razones convierten a esta institución en factor gravitante para el desarrollo de la región central.

2.21.1. *Preludio: década del 70*

2.21.1.1. El discurso de la violencia

La idea del uso de la violencia fue parte del discurso de los partidos de izquierda que actuaban en las universidades, formando el sentido común de los jóvenes que reflexionaban y debatían los problemas sobre la sociedad peruana y la propia universidad. Al decir de un docente «...para esa

época era una discusión como ahora se discute la calidad total, la eficiencia, [...] la mayor productividad, la mayor rentabilidad...» (Efraín, profesor de economía) La izquierda, sin ponderar en el largo plazo las consecuencias de sus mensajes, restringía el debate político en la universidad a este: «mensaje central, [...] quien plantea con más seriedad o mayor convicción el tema de la lucha armada, la guerra popular del campo a la ciudad, incluso se acusaba a los que de alguna forma mostraban ciertas tesis o algunos puntos de vista diferentes como que eran reformistas...» (Gabriel, ex alumno de Ing. Química).

Esta «idea fuerza» tuvo vigencia casi incuestionada hasta mediados de los 80 «...porque hasta aquel entonces obviamente nosotros teníamos nuestro lema también: “El poder nace del fusil”...» (Manolo), aforismo que diferenciaba a los «revolucionarios» de los «reformistas».

Otro aspecto era la conducta irreverente y agresiva que los estudiantes, especialmente de dirigentes que se respaldaban en la posición dominante que sus grupos políticos adquirían en los gremios estudiantiles como relata una profesora:

«... llamaron a una reunión de profesores...nos sentaron a los profesores en sillas y... en el auditorio estaban los estudiantes, empezaron los estudiantes a insultar a los profesores ¿no?, les decían corruptos, en fin una serie de insultos...», desconcertada ella —que recién se había incorporado a la universidad— preguntó a un colega sobre la conducta de los estudiantes «...me dijeron pues que en ese momento estaba en la dirección del centro federado, un movimiento que está muy fuerte...» (Alicia).

2.21.1.2. Los partidos políticos y sus expresiones estudiantiles

Durante la década del 70 el movimiento estudiantil estuvo fuertemente influido por los partidos de izquierda, mientras el PAP fue paulatinamente desplazada; se encontraban el Partido Comunista Peruano «Unidad» (PCP«U»), el partido Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista del Perú «Patria Roja» (PC«PR»), el Partido Comunista Peruano «Bandera Roja» (PC «BR»)¹. El PCP «U» era el único partido legal, debido a su declarado apoyo a la Junta Militar de Gobierno, los restantes eran clandestinos con formas y mecanismos semi legales para influir en el movimiento gremial y social. Uno de estos mecanismos, dentro de la universidad, era la organización de «Frentes» que servían como «correas de transmisión» de sus propuestas doctrinarias y programáticas, y medios para cooptar militantes.

¹ Como es conocido, estos partidos se diferenciaban por la posición asumida frente al Gobierno Militar vigente entonces —el PC «U» lo consideraba revolucionario, mientras que los restantes, contrarrevolucionario y fascista o fascizante—, por la caracterización que hacían de la sociedad peruana —capitalista, PC «U» y VR, o semifeudal, PC «PR» y PC «BR»—, por la apreciación que se tenía de la relación del Perú con los países desarrollados —semicolonial, PC «U», VR y PC «BR», o neocolonial, PC «PR»—, por la opción elegida en el conflicto existente del llamado «bloque socialista» —los que se alineaban con la Unión Soviética, PC «U», los defensores de la República Popular China, PC «PR» y PC «BR», y los que no alineaban con ninguno, VR— y, finalmente, por la orientación ideológica adoptada —«marxismo leninismo», PC «U» y VR, «marxismo, leninismo, maoísmo», PC «PR» y PC «BR»—, como se nota, el elemento en común constituía el «marxismo leninismo», asumido con estilos particulares por cada uno.

El PCP «U», organizó la Juventud Comunista Peruana (JCP), mientras que los otros partidos tuvieron que organizar «frentes» como el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) o Vanguardia Estudiantil Revolucionaria (VER). El FER fue ganando mayor influencia y notoriedad desde la década anterior y grupos como «PR» o «BR» se disputaban el nombre, agregándole un apéndice: FER del Perú, FER Antifascista, etc. Si bien en otras universidades (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga o Universidad Nacional Mayor de San Marcos) existía el FER «por el Luminoso el PCP-SL de Mariátegui», en Huancayo éste no llegó a formarse. En la UNCP existieron otros grupos pequeños como el Partido Comunista Revolucionario (PCR), derivado de VR en 1974; el Partido Comunista del Perú «Puka Llacta», derivado del PC del P «PR» en 1978. Este mismo año surgirá VR «Proletario Comunista»². El PAP actuaba bajo la denominación de Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE).

Los partidos buscaban dos objetivos centrales en la Universidad: ganar influencia en contingentes juveniles universitarios controlando los gremios universitarios (federaciones, centros federados, tercios estudiantiles) y tamizar militantes pues militar en «...una organización política...era algo así como el ciclo de preparación y capacitación y luego de ello pasar a una responsabilidad mayor» (Manolo, profesor de Antropología).

De este período destacan hechos que luego redundarían directamente en el crecimiento del PCP-SL. Al final de la década, el intenso debate sobre la participación electoral de la izquierda, devino en rompimientos internos, debilitando la presencia de estos partidos que influían en la Federación de estudiantes y la mayoría de Centros Federados y luego su ruptura no volverían a recuperar esos espacios mientras que las facciones disidentes radicalizadas y dogmáticamente maoístas, opuestas a la participación electoral, terminarían integrándose al PCP- SL.

De otro lado, «Bandera Roja», desde 1975-76 empezó a controlar el comedor universitario, experiencia que luego heredaría el PCP- SL Bandera Roja.

fue creciendo a través del comedor, nosotros logramos tener células del partido en cada una de las facultades...porque al comedor van de todas las facultades; en segundo lugar...son la gente más pobre, en tercer lugar, con los estudiantes del comedor los sábados y domingos era un encuentro de solidaridad ...los alumnos por grupos de amistades se organizaban, ...trascendía las aulas...el comedor era de lunes a viernes y, sábado y domingo, de dónde se comía?, entonces se hacía una especie de ollas comunes informales...Entonces ahí encontrabas ...amigos de antropología, sociología, eléctrica, mecánica y obviamente ese escenario era importantísimo para el mensaje político...nosotros como partido le poníamos esa idea, los chicos venían sanos para reunirse y ayudarse, nosotros ...realizábamos labor política y se identificaba cuadros...en las elecciones casi todos los candidatos que presentamos para los centros federados eran del comedor y con decisión ¿no? Gente pobre, decidida a luchar, a cambiar. (Gabriel, ex alumno de Ing. Química)

² El PC del P «PLL» y VR «PC», serían los primeros síntomas de la radicalización campesinista que venían experimentando algunos sectores estudiantiles, muchos de estos militantes posteriormente engrosarían las filas del PCP-SL.

2.21.1.3. El gobierno militar y las universidades públicas

Otro elemento que marcó la naturaleza del movimiento estudiantil en este período fue el contradictorio intento modernizador de las universidades por el Gobierno Militar³; que buscó despolitizar a los estudiantes quitándoles el derecho de participar en el co-gobierno de la universidad y creando una estructura administrativa vertical con los departamentos académicos, pero a la vez levantó el veto existente para la literatura marxista, viéndose, por consiguiente, las universidades inundadas por manuales y tratados marxistas de toda índole. El resultado fue un movimiento estudiantil altamente politizado y radicalizado en su enfrentamiento con lo que consideraban la «dictadura militar».

Por otro lado, en la conducción de la UNCP se encontraba una Comisión de Gobierno encabezada por tres personas muy desprestigiadas debido a los grados de corrupción que habían generado en la institución: Renán Ruiz, Jesús Véliz y Carlos Carvo.

Este estado de cosas generó voces de protesta y el movimiento estudiantil emergió con fuerza en contra de esta Comisión, realizando en 1980 una toma del local central de la universidad que duraría algo más de dos meses, «ahí se formó un movimiento estudiantil por querer que eso cambie y que su punto culminante fue el '80, en el cual tomamos el local central,... y que trajo como consecuencia un proceso de reorganización de la universidad» (Gabriel, ex alumno de Antropología).

El éxito del movimiento provocó la redefinición de fuerzas entre los docentes, porque hasta entonces, la gran mayoría de ellos se alineaban detrás de las autoridades consideradas corruptas, y empezó a perfilarse un movimiento llamado «Renovación», que buscaba la reorientación de los destinos de la universidad. «Entonces organizamos un movimiento en contra de esa comisión de gobierno, empezamos a pelear..., al final ganamos, el CONUP en esa época mandó una resolución de cambio de autoridades, se eligió un rector encargado, entonces empezamos a trabajar mas tranquilos» (Alicia, profesora de Pedagogía)

2.21.1.4. Planes de estudios y contenidos curriculares

En los Planes de Estudios de los '70, especialmente en ciencias sociales, se constata una orientación fundamentalmente marxista: «creo que era muy coherente con el escenario,... la presencia de asignaturas de filosofía, de Historia, etc., todas ellas con un contenido materialista, de cambio, crítica, esa era la característica, se buscaba formar un profesional crítico, revolucionario...» (Efraín, profesor de Economía).

³ DEGREGORI, Carlos Iván; «LA REVOLUCIÓN DE LOS MANUALES: La expansión de marxismo leninismo en las ciencias sociales y la génesis de el PCP-SL». En *Revista Peruana de Ciencias Sociales*, Vol. 2, N° 3, Sep.-Nov. 1990.

Los planes se caracterizaban por su simplicidad y muchas veces constituían meros listados de asignaturas con breves descripciones

...en el caso de economía era un simple listado de cursos, ...cerca del 80 o 70% tenía un sesgo político, en el plan de estudios del '70, '76; el '85 inclusive se refuerza ese sesgo,...que no tenía razón de ser porque [el marxismo] es una escuela económica, pero no es la única y, la universidad...debe tener una diversidad de escuelas, para que el profesional salga formado multidisciplinariamente y no sesgado a un solo lado» (Jesús, decano de Economía)

Algunos profesores consideran que fue un marxismo mal asimilado y peor dictado en las aulas

Se hacen marxistas de última hora muchos profesores. Y el marxismo ...en vez de ayudar a la creatividad, ...más bien las aplanan, las anula porque los contenidos curriculares...se basaban más bien en el marxismo más simplón...en uno como el de Marta Harnecker, o el que hacían algunos estudiosos soviéticos, con el materialismo dialéctico, histórico.. el problema estaba resuelto y no había nada más que hacer, tan solo incorporar algunas frases, algunas verdades o semi verdades y ya... eso hacía que la formación universitaria, sobretudo en el área de ciencias sociales, carezca de profundidad o de creatividad para poder resolver o tratar de analizar los problemas sociales... la tendencia general es al análisis macro o estructural, la vida cotidiana, los problemas personales, aparentemente menos gravitantes, eran dejados de lado» (Lucas)

2.21.2. El PCP-SL en la Universidad

La UNCP, para el PCP-SL, fue un espacio importante desde los inicios de su guerra, si bien en los primeros momentos realizó un trabajo silencioso y soterrado para realizar proselitismo y captar militantes entre cientos de jóvenes, muchos de ellos provenientes de sectores rurales y urbano marginales, tributarios de la secular pobreza de la sierra peruana, ávidos de salidas inmediatas a sus limitaciones personales y familiares; víctimas de un proceso educativo mediocre, de un ambiente de estrechez material e inopia intelectual deprimentes; estos jóvenes, en el paisaje social de donde provenían, poseían mayor nivel de preparación, eran «gente preparada», y el PCP-SL buscaba estas calificaciones para luego enviarlos a desarrollar trabajo político fuera de la universidad. Este hecho no pasó desapercibido para las fuerzas del orden, por lo que consideraron a la universidad como foco subversivo.

Además la universidad fue percibida por el PCP-SL como fuente de recursos, teniendo papel clave el comedor universitario. Es probable que el comedor haya cobijado a muchos militantes que no eran estudiantes, alimentándolos cotidianamente.

2.1. Antecedentes

Un primer indicio de la presencia del PCP-SL en la universidad fue la llegada del antropólogo Osmán Morote Barrionuevo quien venía de participar, conjuntamente con Luis Kawata

Makabe, en la II Reunión Nacional de Organismos Generados, donde se trató la cuestión de la construcción partidaria del PCP-SL en marzo de 1977. Contratado como profesor auxiliar entre el 01.05.77 y el 28.02.78, por el Programa de Ciencias Sociales, Departamento Académico de Antropología, dictó cursos como Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de las Ideas Políticas y Antropología General.

...era un personaje más o menos serio, pero que mantenía una postura un poco aislada o de distanciamiento con otros profesores» (Lucas, profesor de Sociología). Mencionan que causaba «...muy buena impresión, como una persona lúcida, muy clara y se le notaba con mucho bagaje intelectual, académico. O sea no era aquella persona que entraba y de lleno te daba un discurso político... (Manolo, profesor de Antropología)

Otro dirigente del PCP-SL que llegó fue Luis Kawata Makabe quien, no fue contratado en la UNCP pero se dedicaba a dictar conferencias en ella. Kawata fue expulsado del PCP-SL a mediados de 1979.

Morote dejó la ciudad de Huancayo en 1978, mientras que Kawata se quedó dictando clases en una academia pre-universitaria: «Acá en Huancayo, el '88 o el '89, el PCP-SL hizo la academia «Euclides», por eso que ahí vino a dictar Luis Kawata los cursos de materialismo dialéctico, materialismo histórico y dialéctica de la naturaleza...Euclides tiene cierta cercanía de el PCP-SL porque era regentado por un ex alumno de la UNI» (Gabriel, ex alumno de Ing. Química))

Otro fenómeno que abonó para el posterior desarrollo del PCP-SL en la Universidad, fueron las derivaciones de «PR» y «VR», PC del P «PLI» y VR «PC», BR «CP» que consideraban llegado el momento de iniciar la insurrección del campo a la ciudad y, muchos de cuyos militantes, terminaron enrolándose en el PCP-SL.

2.2. Los Inicios: 1980 - 1986,

«Feliciano» mando político del Comité Regional del Centro entre 1981 y 1985, escribió una carta a Abimael Guzmán, 03.12.81, donde se nota la organización primigenia en la universidad «En cuanto a la Universidad del Centro de Huancayo, informaba que se había formado un destacamento con varios estudiantes de dicho centro superior de estudios (Jiménez Baca). Lentamente se fue formando la primera hornada de militantes del PCP-SL especialmente en la facultad de Pedagogía, quienes a mediados de la década salieron de la Universidad para actuar en diferentes frentes, el magisterio principalmente. Los senderistas se limitaban al proselitismo individual, a actuar en el interior de gremios estudiantiles para captar simpatizantes, y difundir sus propuestas de manera bastante reservada. Su presencia y prédica se notaban débiles y esporádicas, sin embargo ya causaba ciertas confusiones: «...al inicio todo el mundo lo ha confundido, como un grupo más. Porque había tantos grupos, de izquierda, de derecha que, en el fondo, todo el mundo aceptaba...que pueda haber otros. Y ninguno, bueno, asoció eso, a la idea de que, realmente estaba

[por la vía de la lucha armada]. Algunos probablemente aceptaban, inclusive, esa propuesta.» (Jesús, decano de Economía)

Esta fue la etapa en la que sectores radicalizados y con fuertes sesgos campesinistas de organizaciones como «PLP», VR «PC» y BR «CP», fueron incorporándose paulatinamente al proyecto senderista. El primer salto cuantitativo que da al PCP-SL lo hace

... a costa de aglutinar a la gente que ya existía en la universidad, de influir, en todo caso, a estos grupos que existían, no había una construcción propia entiendo acá adentro, sino que mucha gente en ese momento tal vez optó por nuclearse, simpatizar con la prédica de [esta organización] que luego se fue desarrollando a tal punto que cuando yo ya dejo de trabajar en la universidad [1988] su presencia ya es muy fuerte acá. (Efraín, profesor de Economía)

Pese a que Ayacucho y Huancavelica estaban en abierto conflicto, en Huancayo no se mostraban muy radicales. Manolo, regidor provincial por IU a la sazón, recuerda las advertencias que recibía de jóvenes recién egresados de la Universidad: «... tuve la visita de algunos ex compañeros el año '81, '82 y me dijeron «nosotros te apreciamos a ti, pero... quisiéramos que no sigas en estas salsas, que dentro de poco revienta cosas y el centro va ser el aparato del Estado y este es el aparato del Estado ¿no?, entonces, te anticipamos que las cosas van a ser más difíciles» (Manolo, profesor de Antropología)

Hacia 1984 llegó a Huancayo Herminio Parra, quien se presentaba como integrante de un taller de investigaciones dirigido por Pablo Macera, y cuya labor consistía en desarrollar conferencias dentro de la Universidad y fuera de ella, además de reuniones de círculos reducidos en viviendas particulares; su mensaje era radical y nítidamente orientado a generar simpatías por el PCP-SL. Fue asesinado en Octubre de 1988

En este quinquenio, el PCP-SL desarrollaba intermitentes acciones en la ciudad de Huancayo y sus alrededores, pintas, amenazas a autoridades, ingresos para agitación en colegios, toma de emisoras de radio, atentados a locales públicos y de importantes empresas, ataques a policías para robarles sus armas, y frecuente derribamiento de torres de alta tensión.

El 20 de enero de 1983, cuatro hombres y una mujer senderistas toman el comedor de la universidad, distribuyen folletos sobre la «guerra de guerrillas» y solicitan apoyo económico. Horas después efectivos de la Guardia Republicana (G.C.) y de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) penetraron a la ciudad universitaria. El 25 de abril de 1984, mientras los estudiantes realizaban una masiva marcha de protesta por el alza de pasajes, la policía incursiona nuevamente en la universidad y mata al estudiante Isaías Bravo Flores, de Agronomía. El 04 de junio de 1984, mientras se realizaban las elecciones estudiantiles, el acto es boicoteado por el FER «PL1» enfrentándose con el FURE, en una batalla campal, en la cual salieron a relucir armas de fuego, resultando varios estudiantes heridos. En Julio de 1984 el PCP-SL asesina al alcalde provincial Saúl Muñoz. El 27 de mayo de 1985 es izada una bandera roja en lo alto de la biblioteca, donde

permanece varios días; el 8 de noviembre de 1985 amanece el campus universitario con banderas de PCP-SL, cuando se iban a realizar elecciones estudiantiles.

Recordemos que los estudiantes, poseían importante peso en las decisiones que se tomaban en las facultades y la universidad en general gracias a la restitución de los tercios estudiantiles y el reconocimiento al derecho de tacha: «...encuentro a los estudiantes con mucha autoridad para decidir quién ingresaba a la universidad y quién no, [...] los profesores habían perdido la autoridad frente a los estudiantes, tanto la autoridad académica y la autoridad personal...» (Jorge, profesor de Pedagogía)

La izquierda recibía advertencias sobre el peligro senderista

...la gente de Ayacucho nos alertaba, nos decían «compañeros la gente de la izquierda tenemos que consolidarnos, tenemos que trabajar bajo otros métodos, bajo otros criterios para que el PCP-SL no llegue. Porque si llega se jodieron (sic)». Entonces aquí en la Región Central no había un nivel de conciencia respecto a el PCP-SL en la misma gente de la izquierda. (Manolo, profesor de Antropología)

2.21.2.1. 1987 – 1989: consolidación

La presencia senderista se fue haciendo notoria y en 1986 aparecieron las primeras pintas, rojas y referidas a la guerra popular y el «presidente» Gonzalo.

[...] pero ya por el año '86 fue donde se notó la presencia por lo menos a nivel de propaganda, de publicidad, del activismo de organizaciones como MRTA o el PCP-SL ya empezó a aparecer aquí en la universidad (Efraín, profesor de Economía).

[...] los mismos alumnos empezaban a manifestar que en las noches ...encontraban ciertos grupos de personas que no eran de las características de la universidad, ...era muy evidente que ...había la presencia de ciertas personas que no eran parte del sector de estudiantes, ni de los profesores, eran personas mas bien extrañas. (Ana, profesora de Trabajo Social)

Los dirigentes estudiantiles eran amedrentados, como sucedió en la facultad de sociología, cuando estudiantes senderistas tacharon a una profesora, militante de Izquierda Unida, dirigente del sindicato de docentes y opositora al PCP-SL; los estudiantes debían firmar obligatoriamente el memorial pidiendo su salida de la Universidad, pero, un grupo de estudiantes de IU se opuso:

Les dijeron «por qué vamos a tachar a la profesora, a nosotros nos parece que está bien» [replicando los otros] «pero es una incapaz, una inepta, y además friega el trabajo del partido»... «a nosotros no nos interesa que friegue el trabajo de su partido, y no vamos a firmar». Y a los 6 los han encerrado en el salón [...] y... pintado de amarillo... Pero a la mayoría los sometían, la mayoría tenía mucho miedo, había mucho pánico. La gente no quería exponerse. (Iskra, profesora de Sociología).

Contribuía también el caos que vivía la Universidad con la suspensión de clases por diversos motivos: paros y huelgas de docentes y trabajadores, movilizaciones de estudiantes, fiestas

de cachimbos o de promoción, festivales y bailes folklóricos (cortamontes o yunzas). En este contexto, el PCP-SL encontró motivos adecuados para actuar:

...de un momento a otro desapareció, [los juegos de dados] qué había pasado, que estos grupos armados los habían cogido,... cortado el pelo y les habían quitado todo el dinero que en ese momento había estado jugándose y les dijeron que si los volvían a sorprender les castigarían más drásticamente, [...] después se eliminaron los cortamontes [...] con la presencia de estos grupos [armados] se eliminó toda esta cuestión, en ese sentido fue bastante positivo. (Oscar, ex alumno, miembro del grupo de Teatro «Movimientos»)

La conducta de los profesores también estuvo en cuestión

... desapareció, y fue muy positivo dentro de la universidad, el chantaje sexual por parte de los profesores, desapareció el cobro para aprobar a un alumno, había cierto temor, cierto respeto porque estos grupos en las incursiones señalaban que estas acciones negativas no tenían por qué estar sucediendo y que los castigarían... (Ibid.)

Constatamos así una modalidad de legitimación que el PCP-SL desarrolló en diferentes espacios sociales, urbanos o rurales, inconductas crónicas, advirtiéndolo a los implicados y finalmente sancionándolos.

Comienza así el espejismo que luego se trocaría en pesadilla, las acciones iniciales le granjearían la simpatía de sectores estudiantiles. Pues junto con un intenso trabajo de proselitismo en círculos de estudios, estas acciones prácticas, usaban como principal argumento, que ellos impulsaban «...luchas estudiantiles por sacar a profesores ineptos, corruptos, inmorales, chantajistas sexuales, traficantes y vendedores de notas» (Percy).

2.21.2.1.1. Militantes

Un primer rasgo destacado era el origen rural o urbano marginal de los militantes del PCP-SL. Muchos de ellos vivían solos en la ciudad, lo cual representaba ventajas para el partido, estaban fuera del control cotidiano de sus padres, sus habitaciones podían convertirse en almacén, lugar de reunión o reposo para los militantes, etc.

Otro elemento común de estos militantes de origen rural es la pobreza: «eran chicos así un poco que no tienen nivel cultural, venían de casas humildes, [...] Generalmente los padres eran gente de campo...y ellos venían solamente para estudiar a la ciudad [...], eran de escasos recursos, eran pensionados, aparte de eso ellos tenían que vérselas de mil formas para subsistir ,recurrían al comedor para comer» (Judith, ex alumna de Antropología)

Otro aspecto importante era la preparación militar, un estudiante que participó del comedor universitario, recuerda que: «nos dijeron que primero había que hacer trabajo de base,... poner banderas, pintas; luego otro paso ya era hacer trabajo de contención, de campana, era un poco mas

estratégico, de mayor responsabilidad...y así, poco a poco, te daban mayor responsabilidad; después ...ya entrabas a hacer trabajo de campo, lo que llamaban ellos acciones, dinamitar, matar...» (Héctor Paul, ex alumno de Pedagogía).

La siguiente fase era la integración a una célula propiamente militar, para lo cual había que eliminar cualquier sensibilidad del militante frente a la muerte, «un chico me contaba que tenían que prepararse matando perros, primero pequeños, después más grandes, diversas formas de matarlos, entonces se endurecían y cuando estaban ya endurecidos y preparados, listos, entonces entraban ya a formar parte de los equipos» (Alicia, profesora de Pedagogía).

2.21.2.1.2. El comedor universitario

Al igual que en otras Universidades, un elemento clave para entender el crecimiento del PCP-SL en la UNCP fue el comedor universitario al cual llegaban los estudiantes de familias pobres que, generalmente, vivían solos en la ciudad; para ellos, el comedor, constituía una condición necesaria para su permanencia en la Universidad. El comensal, por estas circunstancias, desarrollaba sentimientos de gratitud hacia el partido.

El comedor atendía de lunes a viernes un número considerable de estudiantes, «Mil doscientos estudiantes...en el almuerzo y en el desayuno habría pues un promedio de 600 a 500 estudiantes, de igual manera en la cena»

Durante los años de predominio del PCP-SL (1988 - 1993) gozar del beneficio del comedor suponía pasar por su criba política, con mayor razón para integrar el Comité de Lucha de Comensales (CLC). El control que ejercía el CLC no era solamente político.

Considerando este control absoluto del comedor, no es exagerado suponer que el PCP-SL se sirvió del mismo para facilitar alimentación a sus cuadros y militantes que no eran estudiantes de la Universidad.

Los mismos militantes reconocen el papel jugado por esta instancia: «...en el comedor generalmente se hacían las charlas, se agrupaban gente del partido... Allí... era el cuartel del partido. Allí era donde se organizaba toda la gente y salían ya a las facultades» (Pablo, simpatizante PCP SL, preso). Se puede afirmar que toda acción desarrollada en la universidad se planificaba y realizaba a partir del comedor:

...ahí se gestaba todo,... las protestas universitarias, ...una movilización, los dirigentes organizaban, nos retenían...a la hora del almuerzo [...] y ahí ellos se manifestaban, hacían escuchar su ideología y abiertamente hacían vivas por SL, por el presidente Gonzalo, por la lucha armada, [...] y de ahí nos sacaban a bloquear las pistas... (Héctor Paúl, ex alumno de Pedagogía).

El comedor era visto por la comunidad universitaria con mucha desconfianza y temor, pues corrían rumores de que en él sucedían cosas siniestras, especialmente en las noches. Un empleado cuenta que los trabajadores del comedor le «decían, que... escuchaban gritos, hay lamentos, seguramente castigaban, torturaban a alguien...» (Juan, trabajador comedor universitario) De allí emergían grupos para realizar acciones

del comedor salían los terroristas, los encapuchados [¿y ellos detenían a algún estudiante a la fuerza?] sí a la fuerza se los llevaban y los ponían debajo del tanque cisterna y allí los golpeaban, llamábamos a la policía que le estaban pegando, que los están matando y no venían, cómo gritaba el chico, de susto nomás nos íbamos nosotros y al día siguiente el cadáver botado, ...otro estudiante se agarró de la malla que estaba al frente y gritaba ¡auxilio, sálvenme, me van a matar! pero ellos con sus armas, encapuchados se lo llevaron y al día siguiente muerto». (Ibid)

Por todo ello, cuando las fuerzas del orden incursionaban en la Universidad, centraban su atención en este espacio.

2.21.2.1.3. Docentes

Crucial para entender el crecimiento del PCP-SL es el papel jugado por los docentes en este proceso. Analizando sus conductas identificamos tres actitudes: Una de oposición activa, que caracterizó a un reducido grupo de docentes y que, rápidamente, fue neutralizada por el PCP-SL. Cuando los dirigentes del sindicato plantearon la necesidad de un «frente de defensa», surgieron amenazas directas: «en primer lugar con el presidente de la asociación, socióloga Dora Gómez, entonces ella renunció, íbamos quedando vicepresidente... optó por salir del país... Gustavo Gómez, y bueno el resto ya optó por renunciar, hicimos todos una renuncia pública con una especie de informe y balance a los docentes» (Felipe, profesor de Zootecnia), corría el año '89.

La segunda actitud fue de indiferencia o neutralidad, imperantes en el ánimo de la mayoría de docentes, quienes dejaron hacer y pasar, llegando incluso a ensayar justificaciones como que «no se podía ir en contra del carro de la historia»; evidentemente, detrás de ella se agazapaba el temor, que el PCP-SL había logrado instalar en la institución «el temor nos había vencido, el temor era generalizado» (Tomás), la preocupación, en esos momentos, era preservar el puesto de trabajo y, también, la vida.

La tercera actitud resume la adhesión de un grupo nada despreciable de docentes que se comprometieron, directa o indirectamente con el proyecto senderista.

No debemos olvidar que si los senderistas querían expulsar a un docente incómodo, lo hacían sin remordimientos; visto de otro ángulo se podría tomar como «una falta de fortaleza

intelectual incluso, en algunos casos, una falta de honestidad intelectual» (Efraín). Lo cierto es que a muchos docentes no les importó arrimarse a esta fuerza, incluidas las autoridades

Decanos, nosotros tuvimos uno en la Facultad,... no tenía nada que ver con el PCP-SL, pero se aliaron ¿no?...no por principios, sino por sobrevivencia...Por conveniencia mutua, no querían que los tocaran como autoridades. Entonces miraban, dejaban, daban facilidades y se hacían los locos. [...]Unos que no tenían nada que ver con la ideología, pero que se acomodaron muy bien ¿no? por preservar sus puestos» (Iskra, profesora de Sociología)

Otros docentes sí se adhirieron porque coincidían ideológicamente con el PCP-SL:

[...] habían profesores que simpatizaban mucho con el PCP-SL, porque eran selectivos. Entonces, uno sabía a que atenerse, es decir, si el PCP-SL entraba y uno sabía que era honesto no tenía problemas..., se sentía relativamente seguro, en cambio los que eran deshonestos, corruptos entonces estaban temblando porque podía llegarles el juzgamiento (Alicia, profesora de Pedagogía).

Todo esto permitía al PCP-SL, desarrollar convocatorias que encontraban eco «...iban profesores, por lo menos a la reunión que yo fui, había una buena cantidad..., habría unos 30 profesores...»

Habían algunos docentes que sí ya realmente empezaron a mostrar ese nivel de simpatía y se veía que ya ellos tenían pues unas reuniones casi permanentes... no era una buena cantidad, pero era suficiente como para poder convencer a las masas estudiantiles (Felipe, profesor de zootecnia)

[...] profesores que estaban incorporados a el PCP-SL. En una ocasión me invitaron a una reunión... Al principio se presentaron como que no eran, o sea era un grupo de profesores intelectuales que querían luchar por la moralización y el mayor desarrollo académico...los que se presentaron empezaron a dar una serie de consignas que ya identifiqué porque, los había escuchado hablar a mis alumnos y algunos colegas [...] en esas reuniones captaban profesores [...] de toda la universidad... (Alicia, profesora de Pedagogía)

2.21.2.1.4. Amenazas e incursiones del PCP-SL

Habiendo generado simpatías por sus actos de «moralización», el PCP-SL pasó a una siguiente etapa, de imposición de sus intereses al conjunto de la Universidad, a través de amenazas y amedrentamientos.

Se planteó un nuevo plan y ahí vinieron los famosos volantes,...hasta incendiaron mi departamento, mi escritorio, todo... y apareció un cartelón amenazando que si no me iba me mataban. Sin embargo, yo me quedé en la facultad porque yo pensaba que no estaba haciendo nada malo, nada fuera de lo que era favorable para la carrera. (Jesús, decano de Economía).

Otro ejemplo es la denuncia presentada en sesión del Consejo Universitario, el 9 de febrero de 1989, por el decano de química, profesor Romero, «...hay estudiantes de esta universidad que están asumiendo posiciones matonescas y de intimidación mediante agresiones verbales en unos casos, físicas en otros,... han dejado de asistir muchos alumnos por la intimidación antedicha». Era el año 1989 y el PCP-SL presionaba en los concursos de cátedra para imponer personas allegadas, golpeando, amenazando y pintando a los pocos dirigentes estudiantiles que se resistían, cortando el cabello a los(as) «inmorales».

Otra práctica común del PCP-SL fueron las incursiones, en los salones cuando se desarrollaban las clases, en los paraninfos durante eventos que reunían gran número de estudiantes o profesores o docentes, incursiones para sacar a los estudiantes de las aulas y concentrarlos en el campo deportivo y, aunque parezca paradójico, incursiones en el comedor universitario. Era habitual que en cualquier momento interrumpieran las clases para arengar a los estudiantes y pintar los salones.

2.21.2.1.5. Los crímenes

El PCP-SL empezó a combatir todo resquicio de cuestionamiento u oposición, sea del MRTA o de algunos militantes aislados de partidos legales o de la policía que hacía labores de inteligencia. En 1989 se inicia una secuela de crímenes del PCP-SL; el 12 de marzo «De dos tiros en la cabeza y luego degollado salvajemente fue asesinado un joven efectivo de la Policía Nacional, en el interior de la Ciudad Universitaria, el hecho sucedió en horas de la tarde» (ver cronología); se trataba del cabo PNP Néstor Landeo Lozano. El 27 de Abril, en horas de la tarde, capturaron dentro de la universidad a los estudiantes Héctor Pérez Morales, Alcides Velásquez Castellares y Juan Vitor Rivera, de las facultades de zootecnia los dos primeros y de economía el tercero; al día siguiente fueron hallados muertos con huellas de tortura; eran militantes del PAP. Sobre cuyos cadáveres colocaron el cartel «! Así mueren los miserables del Rodrigo Franco! ¡Viva el PCP! ¡Viva el EGP!»,

Jorge Munguía Crisóstomo, dirigente de la JCP e integrante de la federación de estudiantes, activo opositor del PCP-SL; en la sesión del 28 de Febrero del Consejo Universitario denunció que fue agredido y amenazado de muerte por gente del PCP-SL; en sesión del 02 de Marzo Jorge Munguía pidió a Jorge Huaroc, conocido estudiante senderista, «que deje de estar amedrentando a los estudiantes a través de quienes conforman los comensales» (Acta de sesión del CU, 02.03.89) El 25 de Mayo, cuando viajaba a Satipo, Jorge Murguía fue asesinado por una columna senderista que lo bajó del carro, el Consejo Universitario en ningún momento trató el tema ni se pronunció.

El 18 de Julio es atacado el profesor de la Facultad de Pedagogía, Luis Aguilar Romaní, de simpatías explícitas con el MRTA, por tres elementos que lo ubican en la oficina del decano Jaime Cerrón Palomino, testigo directo, cuando descerrajan varios tiros dejándolo agonizante, días

después fallecería. En sesión del CU del 21 de Julio se trata sobre este crimen, todos se muestran compungidos y se refieren al hecho como un «accidente», las preocupaciones se centran en la forma de ayuda económica a los familiares de la víctima (aportes, descuentos, seguro social, etc.) Nadie señala la naturaleza política del hecho, tampoco la necesidad de investigarlo.

Indagando sobre las razones de estas muertes, encontramos entre los militantes del PCP-SL explicaciones que pretenden justificarlas:

...había que comprender las razones de porqué había muerto... pienso de que si alguien lo reivindicaba y decía las razones tú podías hacer una evaluación y decir, bueno pues, desde tu punto de vista,...estuvo bien o estuvo mal; pero si vemos el aspecto estrictamente humano yo pienso que quitar la vida...es doloroso. [Doloroso... ¿pero hasta qué punto había justificación para quitar la vida a las personas?] Pienso que sí debe haber habido, porque no creo que se haya tratado de dementes, de locos o de simples excesos, yo pienso que ha habido justificación y habría que investigar más bien las causales, el por qué murió fulano, zutano, perencejo o qué es lo que hizo para merecer semejante cosa. (Percy, militante PCP SL, preso)

Es decir, existían razones para matar al oponente y no eran «meros excesos». Este es el razonamiento que se impuso en la Universidad.

2.21.2.2. 1990 – 1992: control de la universidad

Entonces me dijo «usted no sabe - me recuerdo mucho sus palabras - que ésta universidad es territorio liberado». Yo me quedé con la boca abierta... «ésta universidad, para que sepa usted profesora, es territorio liberado. Acá está el partido, acá está la revolución. (Iskra, profesora de Pedagogía)

Tres años duró el dominio de la UNCP por el PCP-SL en muchos casos con la complicidad de autoridades y docentes, y contra los deseos de amplios sectores pasmados por el terror: «Los alumnos hacían y deshacían dentro de la universidad. Dictaban que nota debía ser, que profesores deberían ascender, que profesores debían ser autoridades, en fin, quienes debían ingresar. Entonces se desata pues...el oportunismo mas descarado...» (Lucas, profesor de Sociología).

En 1989 los estudiantes presionaron para cambiar el reglamento de elecciones a gremios estudiantiles, y lograron que en sesión del Consejo Universitario (CU) del 20 de Diciembre se apruebe la modificación sin mayores resistencias.

En marzo de 1990 se convoca a elecciones con los cambios que erradicaban la elección universal y secreta y consagraban la elección directa en cada salón e indirecta entre los delegados así designados; los representantes al tercio estudiantil, los Centros Federados y la Federación eran elegidos por y entre los delegados de salones, mecanismo que se ajustaba como anillo al dedo a los estilos de trabajo del PCP-SL. El 23 de Abril se incorporan al CU once representantes estudiantiles, entre los cuales encontramos a Alcides Ccopa Taipe, Eliseo Alberto Romero, Francisco Fernández, Jhon Raymundo y otros notorios dirigentes de este grupo.

Mientras la gran mayoría de estudiantes establecía distancias con estos dirigentes, una profesora que los observaba con atención llega a la siguiente conclusión:

No considero de que hubo un apoyo de masas en la UNCP... No hubo un apoyo... conciente, militante de la gente ¿no? pero sí el éxito de ellos es que armaron una buena estructura partidaria, lograron hacer un buen aparato, ...con sus estructuras bien definidas, su militancia, su mística, su vehemencia, su consecuencia en las tonterías que planteaban...con una metodología de terror salió todo aparentemente muy bien. Entonces eso fue el «éxito» de sendero en realidad» (Iskra, profesora de Pedagogía)

Aquí radica la razón por la cual muchos simpatizantes, sin pertenecer al aparato partidario del PCP-SL, fueron ejecutados o desaparecidos.

También se eligen las nuevas autoridades universitarias en abril de 1990,

...en la asamblea universitaria que eligen a Vizcardo, el movimiento estudiantil estaba muy influido por este grupo. Los profesores, mucho oportunismo, dejar hacer, dejar pasar, cuadrarse, no hacer nada. Y se dan el lujo ellos de conversar quien iba a ser el rector, y ellos deciden que a quien mejor podían manipular y acercarse era a Vizcardo. Vizcardo nunca había sido senderista, pero dentro de todas las posibilidades era el hueso menos duro de roer...y ponen como vice rector académico a Cerrón. Ese fue el momento, el pico más alto que tuvo el PCP-SL (Iskra, profesora de Pedagogía).

Es opinión generalizada que el PCPL decidía la elección de autoridades en todo nivel, notándose una especie de transacción entre estudiantes, profesores y autoridades, donde cada estamento obtenía alguna ventaja.

Abril de 1990 marca el inicio de la influencia casi total del PCP-SL en la Universidad, gracias a la elección de autoridades universitarias y del tercio impuesto como representación estudiantil reconocida oficialmente en el CU. Seguidamente se trataba de remover todas las instancias de la institución, para ello, optó, por señalar que ninguna se libraba de la corrupción, por lo tanto, había que investigar cada dependencia y propuso la formación de comisiones investigadoras. Sacaron en burros a cuatro trabajadores de la unidad de transporte, pintaron de amarillo al secretario general del sindicato y a varios trabajadores. En sesión de CU del 17.05.90, el alumno Eliseo Alberto dijo: «hay desgobierno en la universidad, el presupuesto se va por un forado gracias a la mala administración...No vamos a dar garantías a nadie porque no nos corresponde hacerlo, el movimiento estudiantil ha reaccionado contra los malos empleados» (Actas de sesión de CU, 17.05.90), de igual manera se pronunció el alumno Alcides Ccopa: «las versiones de los trabajadores no reflejan la realidad,...hablan de intervención del gobierno a la universidad y con eso le hacen el juego a la reacción...,a los empleados los acusamos de inmorales... Nos han tratado de delincuentes, esa palabra la usa la reacción a todo aquel que dice la verdad» (Ibid.)

Los representantes de los trabajadores se oponían tímidamente a esta arremetida contra ellos; el sindicato convocó una asamblea y propusieron un paro de 72 horas, sin encontrar eco. Rodolfo Bernedo, también dirigente, dijo en ese momento: «parece que las autoridades están maniatadas por los estudiantes que el día de ayer pintaron de amarillo al secretario general, se nos

amenaza de muerte por teléfono, y si estas cosas las dejamos pasar se estarán dando funestos antecedentes y no permitiremos más vejaciones» (Ibid).

Las opiniones entre trabajadores no eran homogéneas, se escuchaban voces que contemporizaban con los estudiantes, «reconoció que en la universidad hay podredumbre, para evitar excesos sugiere que a las personas que se les juzguen se haga en el Consejo Universitario, no en los centros de producción y oficinas» (Ibid)

Entre las autoridades se notaba una posición aquiescente, permisiva, sin voluntad firme para oponerse a esta arremetida,

[...] parece que se ha iniciado en la UNCP un proceso de moralización y eso está bien, debemos buscar canales de solución, pero no vamos a cortar cabeza por gusto, para eso hay reglamentos (Ibid), desde que soy decano, en el Consejo Universitario he escuchado muchos discursos pero nada en concreto, debemos ser prácticos, opino que la moralización es justa y necesaria, ya no se puede tolerar tanto desorden...los estudiantes ya no pueden seguir contemplando tanto desorden, por eso actúan así. (Ibid)

Es decir, se descubría que todo estaba mal en la universidad, y «en vista de que se ha tomado conciencia de los problemas de la universidad» (Ibid.) se acuerda formar nueve Comisiones Investigadoras (de las oficinas de personal, economía, bienestar universitario, obras, transportes, mantenimiento y servicios, estación experimental agropecuaria, planificación y asuntos académicos) integradas por decanos y estudiantes, con un plazo de treinta días para entregar sus informes. Llama la atención que en estas sesiones del CU, en ningún momento se trataron los crímenes que el PCP-SL venía cometiendo, dentro y fuera de la Universidad, contra estudiantes, desde hacía un año.

Sin embargo, el aprovechamiento por el PCP-SL de los recursos de la universidad continuaba al igual que la gran influencia que ejercía para colocar profesores y trabajadores administrativos.

El control se tornaba asfixiante, inclusive durante las calificaciones para contratar empleados: «...participaba en los concursos [...] al extremo que entraban a la reunión de comisiones del concurso con armas, encañonaban al vicerrector, al Secretario General del Sindicato y decían “estas personas son las que tienen que ganar el concurso” ya tenían o sea una lista...» (Rodolfo)

Esta presencia empezó a ser frenada a mediados del año con el secuestro, el 8 de junio de 1990 y posterior ejecución arbitraria del vicerrector académico, Jaime Cerrón Palomino, conjuntamente con su chofer. Aunque no existen evidencias de que haya pertenecido al aparato del PCP-SL, la impresión de gran parte de la comunidad universitaria es que pertenecía o simpatizaba con él: «cuando lo asesinan a Cerrón se supone que lo asesinan porque fue puesto y respondía a los intereses de el PCP-SL» (Efraín) En sesión del CU del 12 de junio de 1990 se informó de este

hecho y sobre las acciones que las autoridades universitarias realizaban indagando por el paradero de los secuestrados; los estudiantes acusaron «...a ciertos decanos de su indiferencia, también acusó al rector y al vicerrector administrativo por su insensibilidad» (Actas de sesión de CU, 12.06.90), exigiendo que el CU se pronuncie; durante la sesión el estudiante Alcides Ccopa «dijo que habían personas extrañas e invitó que salgan de la sala de sesiones» (Ibid), uno de los asesores legales señaló que: «los estudiantes quizá tienen razón, el trato que recibimos de la policía no es igual que otros años, porque se manifiestan muy duros con nosotros, hay mucha actividad de espionaje dentro y fuera de la universidad y sería bueno que este tipo de sesiones sean reservadas» (Ibid.)

La sesión terminó siendo secreta y en ella se acordó formar una comisión para dialogar con las autoridades políticas y militares, la publicación de un pronunciamiento y el otorgamiento de diez millones de intis a la esposa del profesor Cerrón.

A este asesinato le seguirían desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias de varios estudiantes: en junio, dos estudiantes y, entre setiembre y octubre, seis más, entre ellos Alcides Ccopa Taípe, Francisco Fernández Gálvez y Dora Marín Aire, conocidos dirigentes. Comenzaría con ello una secuela de ejecuciones y desapariciones de estudiantes por parte de las fuerzas del orden.

Al año siguiente, el gobierno decidió un control más riguroso de las universidades, con intervenciones militares más constantes, pese a lo cual, los estudiantes en abierto desafío queman en noviembre de 1991, dos camionetas y gran cantidad de alimentos que el gobierno había enviado para la Universidad. A mediados de ese año 1991 había llegado a Huancayo Angélica Salas de la Cruz, nombrada responsable del Comité Subzonal del Valle del Mantaro del PCP-SL, bajo cuyas órdenes trabajó un tal «Henry», estudiante universitario. Angélica Salas es capturada el 18 de agosto de 1993 en la casa de una profesora de la facultad de Trabajo Social⁴.

2.21.3. *Movimiento Revolucionario Túpac Amaru*

Como vimos a inicios de la década del 80 existían en la UNCP partidos pequeños con un sesgo militarista en su estrategia, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus diversas vertientes⁵, el Partido Socialista Revolucionario - marxista leninista (PSR-ml) y el Partido Comunista Peruano «Mayoría»⁶. Ellos se desenvolvían cautelosamente y no formaron una organización específicamente estudiantil para actuar dentro de la Universidad. Consideraban que el

⁴ JIMÉNEZ, Benedicto; Ob. Cit.

⁵ El MIR de Luis De la Puente Uceda y Guillermo Lobatón sufrió sucesivas rupturas: MIR Voz Rebelde, MIR El Militante, MIR Yahuarina, MIR Centro, MIR El Rebelde, MIR 9 de Junio, etc. Todos ellos reivindicaban, el legado y la vigencia de la insurgencia guerrillera del '65 y el «guevarismo», compartiendo también su no adscripción a tendencias pro soviéticas, pro chinas o, finalmente, trotskistas.

⁶ El PCP «Mayoría» fue una escisión del PCP «U», muy crítica por la conducta adoptada por el PC frente al Gobierno Militar en su segunda etapa, posteriormente se comprometería en el surgimiento del MRTA.

Perú vivía una situación pre-revolucionaria y, por lo tanto, debía prepararse la insurgencia armada. Otro pequeño grupo fue el Movimiento Revolucionario Socialista (MRS).

En la UNCP algunos militantes del MIR y el PSR-ML empezaron a compartir preocupaciones bajo el genérico nombre de «La ORGA». Bautista⁷, entonces joven estudiante de la Facultad de Pedagogía, relata: «Yo no sabía nada de esto, llego yo a la Universidad en el año 1980, más o menos entre los meses de julio, agosto y septiembre se está preparando una toma de local de la Universidad. Entonces, ahí conozco a alguien que venía, que ya estaba en esto, que no tenía el nombre del MRTA, sino que era la ORGA» (Bautista)

Recuérdese la toma del local central de la Universidad, para expulsar a la «camarilla corrupta» que la gobernaba. En estas semanas, «al calor de la lucha» «conversamos y siento que hay un discurso mucho más orgánico, más doctrinario» (Ibid.)

Huancayo, el Valle del Mantaro y su amplio hinterland, fueron espacios considerados estratégicos por el MRTA. Continuando el trabajo del MIR-EM en la región central, a partir de la ciudad de Huancayo, a donde llegaron Peter Cárdenas Schutlz y Víctor Polay Campos:

...ellos llegan en los años 1977, 1978 —más o menos—, incluso Polay Campos vive acá casi un año o año y medio [...] Claro, desarrollando actividades políticas [...] Yo después lo conozco acá también a Peter Cárdenas [...] Entonces, ellos incluso vivían en una casa, ya estarían procesando probablemente la unidad. Luego estaba Pastor Anaya, que era un investigador, dirigente en Jicamarca y como dirigente lo habían mandado aquí y que vivía aquí, llegué a conocer incluso su casa. (Bautista)

En 1982, estos grupos emergentes organizan el Frente Único Estudiantil (FUE), que reunió estudiantes del MIR-EM, PSR-ML, MRS, cuyas afinidades ideológicas se van perfilando. Mientras la izquierda de los partidos comunistas semi-legales se iba debilitando y sufriendo procesos de escisión, el FUE adquiere fuerza en facultades como Economía, Pedagogía, Agronomía; al decir de ellos «...la mejor gente que había en las Facultades se acercaba [al FUE]. Y se acercaba por la actitud, la consecuencia, eran gente joven y encima el discurso. Un discurso nuevo, distinto que preludiaba no una guerra estrictamente campesinista...» (Bautista)

Paulatinamente fueron ganando adeptos y en 1983 «habían dos grupitos...un grupito en la provincia de Jauja que empezaba...» (Bautista). José Porta Solano, activo militante, decidió ingresar a la universidad en 1985, al regresar de la fallida experiencia emerretista en el Cuzco para ganar militantes en la universidad, y desde ella proyectarse hacia la región «Ya había gente en las provincias Concepción, Jauja, incluso en Pampas había gente ya desde acá. El grupo universitario era el que estaba dirigiendo toda esta situación» (Bautista) Moverse entre la universidad y los sectores populares, entre el campo y la ciudad, ya era una constante en ellos, no solo en la región central, sino también en Cuzco y el oriente.

⁷ Bautista llegaría a participar de la fundación del MRTA, formar parte de la Dirección Nacional y responsable político de la región central, hasta 1990.

Este grupo de iniciadores, muy activo, en la región central, estuvo presente en 1983 en el acto fundacional del movimiento, «...vamos a la ciudad de Lima a la fundación del MRTA. Somos los únicos que vamos, sólo están la Dirección. La Dirección eran tres de cada uno, tres integrantes del MIR y tres integrantes del PSR - ML y entramos nosotros» (Ibid.)

Empiezan con algunas acciones para agenciarse de dinero y cubrir sus necesidades personales y políticas:

...no teníamos nada, incluso el primer revólver es del papá de uno, el papá era policía...nos metemos a un par de farmacias, a unas tiendas comerciales y vamos sacando dinero y empezamos a comprar algunas armas. Incluso alquilamos un cuarto para tener un sitio donde reunirnos, donde recibir la propaganda Voz Rebelde, el Venceremos,...ahí habíamos llevado nuestro mimeógrafo manual,...nuestras pinturas ahí llegaban. La primera base que hubo aquí en Huancayo, estaba a la espalda del Hotel de Turistas en la calle de Huamanmarca, en esa callecita estaba el cuarto... Esto fue como producto de eso, de las recuperaciones que se hacían.

Hacia 1984, en la Universidad, se da el primer intento de unificar a las fuerzas de izquierda en una alianza que hiciera frente a los sectores radicalizados agrupados en el FER «Puka Llacta» y a la ARE aprista. Se forma así el Frente Único Revolucionario Estudiantil (FURE), que gana en diciembre de 1983 las elecciones estudiantiles para la Asamblea Estatutaria, encargada de elaborar los nuevos estatutos de la UNCP, donde se reinstauran las Facultades Académicas y el co-Gobierno en la universidad con los Tercios Estudiantiles.

Paralelamente a esta experiencia, surge la Unidad Democrática Popular, UDP, como instancia legal y de convocatoria de masas impulsada por el MRTA, ya oficialmente creado en 1984. Un poco más adelante aparecería Pueblo en Marcha, otra instancia legal del MRTA y luego se unificarían en un solo proyecto.

En la UNCP actuarían en este período importantes dirigentes de estos grupos que posteriormente acabarían muertos o encarcelados: Alberto Chavarría (Facultad Pedagogía, especialidad Lengua y Literatura), del PSR-ml, actualmente encarcelado; Juan Ramos Cahuana (Facultad de Economía), del MIR-EM, hoy en cárcel; Melby Zacarías (Pedagogía), vice presidenta de la Federación de Estudiantes, representante de Pueblo en Marcha, actualmente asilada; José Gamarra Ramos, dirigente de Pedagogía y reconocido poeta huancaíno, desaparecido en 1988 en la ciudad de Pucallpa; Sócrates y José Porta Solano, hermanos, de la vertiente de MIR-EM, el primero secretario general del Centro Federado de Agronomía, el segundo dirigente en la facultad de Pedagogía, ambos activos militantes emerretistas en la universidad, muertos en acciones armadas: en el secuestro del Gral.(r) Jerí y en el enfrentamiento MRTA - Ejército Peruano en Molinos, respectivamente.

A partir de 1984 el MRTA empezó a desarrollar trabajos de propaganda al interior de la Universidad con pintas y distribución de volantes, José Porta sería detenido en 1985 cuando

repartía volantes en un encuentro nacional universitario de folklore, que se realizaba en el coliseo Huanca

Es bueno recordar que durante este año el MRTA inició también su propaganda armada en el Valle del Mantaro, con pintas, embanderamientos e iluminaciones en Huancayo y Jauja; al año siguiente, 1986, intensificó su propaganda, organizando un primer ataque a una comisaría, en el distrito de San Agustín de Cajas.

Aunque, el objetivo del MRTA era expandirse al conjunto de la Universidad, su presencia era más notoria en algunas facultades como Pedagogía, Agronomía, Economía y Trabajo Social. Varios estudiantes de estas facultades, militantes del MRTA, murieron o desaparecieron posteriormente: de Agronomía, Sócrates Porta Solano, José Velásquez Urcohuaranga, Zenón Yarasca Huamaní, David Churampi Buendía, Luis Cerrón Acosta⁸; de Pedagogía, José Porta Solano, Yolanda Yauri Arias, José Gamarra Ramos, Griselda Palomino Fuentes; de Economía, César Vélchez Simeón, y otros. Todos ellos jugaron importantes roles de mando político y militar fuera de la universidad. Es lógico suponer que muchos más estudiantes estaban organizados en los círculos de estudios formados, con la finalidad de cooptar y adoctrinar nuevos militantes.

Cuando en 1985 el partido aprista asume el gobierno del país, la dirección nacional del MRTA declara una tregua en sus acciones militares por un año, decisión inconsulta que causó desconcierto entre sus militantes

Durante esta tregua el MRTA envió militantes a Colombia a formar parte del publicitado «Batallón América» conjuntamente con el Movimiento «19 de Abril» de Colombia y «Alfaro Vive» de Ecuador. De la UNCP viajaron seis u ocho estudiantes, «el núcleo central de ese grupo que va allá éramos de acá» (Bautista), entre ellos Sócrates Porta y Alberto Chavarría.

En 1986 se procesa la unidad entre UDP y Pueblo en Marcha, y el espacio de cooptación de militantes se amplía para el MRTA «la gente que llegaba a nivel medio, por ejemplo en «Pueblo en marcha» ya sabía que esto, iba para ese lado [es decir, hacia el MRTA]» (Juan B.) Durante este año, gran parte de los gremios estudiantiles estaban dirigidos por activistas de Pueblo en Marcha, bajo el nombre de FURE, entre ellos la Vice Presidenta de la Federación de estudiantes, Melvi Zacarías Espinoza, «Amelia», de la facultad de pedagogía. Esta importante presencia en la Universidad se ve seriamente afectada por el desplazamiento de militantes «para llevarlos al Frente Nor Oriental sacamos la gente... los cuadros más importantes de la Universidad y se quedaron los cuadros más pequeños», y porque en enero de 1987, Melvi Zacarías es detenida junto con otros estudiantes marcando el inicio de la debacle de Pueblo en Marcha, del cual era la principal animadora, mientras que el PCP-SL empieza a expresarse abiertamente.

⁸ Sobre Luis Cerrón existen dos versiones contradictorias: la primera que niega su militancia en el MRTA y reivindica su papel cristiano en agrupaciones juveniles y CÁRITAS; la otra se deriva del testimonio de un ex militante emerretista (Miguel), quien señala que Luis era sub responsable del trabajo universitario, y que personalmente trató con él.

Pero el MRTA experimenta un «baño» de popularidad con su emergencia militar pública en el nor-orienté, que impacta a muchos jóvenes que se integran a sus filas, «En el año '87 que ellos hicieron la toma de San José de Sisa, y todas esas zonas, me impactó, fue una forma, bastante, como podríamos decir, una influencia fuerte» (Miguel).

Este crecimiento del MRTA compite con el del PCP-SL. Las pugnas por los espacios universitarios son constantes; pintura roja, el PCP-SL; negra, MRTA; lo que una noche pintaba uno, la siguiente lo borraba el otro.

[...] el MRTA ... no generó mayores simpatías o no atrajo gran cantidad de adherentes, pero no generó rechazo. Y en muchos casos sirvió como contención a SL dentro de la universidad...generó cierta, no diría simpatía, cierta expectativa, porque su comportamiento era distinto, cualitativamente distinto al de SL [...]Y muchos profesores que estábamos al margen del violentismo de esos años, percibimos cierto alivio cuando el MRTA empezó a manifestar su presencia dentro de la universidad. (Lucas).

Algunos profesores mostraron simpatías por el MRTA, aunque no se tiene noticia de alguno que haya sido un reconocido ideólogo o vocero político.

Mientras el MRTA se enfrascaba en el enfrentamiento con el PCP-SL, sufrió un golpe demoledor: Una columna guerrillera es aniquilada en Jauja, Molinos, el 28 de abril de 1989⁹.

Un gran golpe, es como si, pucha, nos hubieran dado un golpe bien fuerte ¿no? Un gran desaliento por parte de la gente. No solo entre nosotros, sino también en sectores populares que simpatizaban [...] Hubo algunos que se desanimaron, porque hubo un buen grupo de compañeros que estaban trabajando, [...] gente que como tú sabes, habían salido de la universidad... (Miguel)

Las repercusiones del enfrentamiento de Molinos para el trabajo del MRTA en la universidad fueron graves pues desarticuló el trabajo organizativo y creó desconcierto político entre sus militantes

El PCP-SL aprovechó la coyuntura para golpear y desplazar al MRTA, y presentarlos como inviábiles, «se creían amos y señores de la universidad, especialmente cuando cayeron la gente de Molinos» (Ibid.). El MRTA se vio obligado a desplazar militantes para reconstruir la columna del sub frente Pariahuanca y, también, recomponer sus fuerzas en el Valle del Mantaro. La universidad pasó a un segundo plano y el PCP-SL aprovechó el momento de debilidad y asestó un duro golpe al MRTA dentro de la universidad, asesinando al profesor Luis Aguilar, muy cercano al MRTA e importante líder del movimiento barrial, presidente del AA.HH. Justicia, Paz y Vida; la tarde del 25 de julio de 1989.

⁹ Ver: Estudio sobre «Molinos»

Recién luego de un año el MRTA se encuentra en mejores condiciones y decide una contraofensiva contra el PCP-SL:

[...] se dio una respuesta,...y el MRTA lo asumió, la muerte del otro catedrático, Aguirre Palomino [15.10.90] Esa fue una de las respuestas [¿Eso lo hizo el MRTA?] Eso lo hizo el MRTA. ...también se buscaba a varios otros catedráticos ¿no?, que estaban vinculados directamente a SL,...que el partido sabía que eran ellos. ...pero, no se logró ubicar, o sea, ya prácticamente se habían enterado de la noticia..., y se ocultaron ¿no? porque si los hubieran encontrado hubieran sido más los muertos (Miguel). (El 19.10.90) publican en las paredes de la universidad una «lista negra» «Varios carteles fueron colocados con la firma del MRTA,...reivindican el asesinato del profesor Roberto Aguirre, para luego apuntar los nombres de otras 44 personas entre profesores y alumnos, de quienes indican ser senderistas y correrán la misma suerte del antecesor. «Por cada atentado criminal que cometan dentro de la universidad los “saco largos” morirán diez de estos miserables» «la sangre se paga con creces». Al medio día un grupo de estudiantes provistos de agua y piedras procedieron a borrar los carteles (Diario Correo)

Esta es una de las últimas noticias que se tiene del accionar emerretista en la UNCP. En 1991 y 1992 el MRTA sufrió duros golpes de parte de las fuerzas del orden, varios de sus militantes fueron muertos o desaparecidos y la promulgación de la Ley de arrepentimiento causó estragos en sus filas. Con ello, nunca más tendrían presencia en la UNCP.

2.21.4. El accionar contrasubversivo

...nosotros estábamos a salvo fuera de la universidad, se puede decir que podíamos respirar y decir me salvé (Gisella, ex alumna de la Facultad de Antropología, miembro del tercio estudiantil en 1990)

Entre 1989 y 1993 fueron más de 100 los estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional del Centro del Perú que desaparecieron o fueron asesinados. De ellos, alrededor de 40 desapariciones forzadas y otras tantas ejecuciones arbitrarias corresponden a violaciones perpetradas por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Igualmente entre estos años, fueron más de 15 veces que la Policía, el Ejército, o ambos en operación combinada, ingresaron a la Universidad, registraron el campus, ficharon a los alumnos, profesores y trabajadores allí presentes, hicieron destrozos, y finalmente detuvieron a decenas de jóvenes estudiantes, docentes y personal por sospecha de terrorismo, muchos de ellos posteriormente desaparecidos o ejecutados arbitrariamente.

Avanzando la década de 1980, las movilizaciones estudiantiles dentro y fuera de la universidad se hacían cada vez más frecuentes, siendo igualmente mayor la frecuencia que en ellas aparecían consignas del PCP-SL o el MRTA. En la medida que esto sucedía, la represión ejercida por la policía se hacía más brutal, al extremo de llegar, en dos oportunidades, a provocar la muerte de estudiantes, pero por lo general, las intervenciones policiales se quedaban en los extramuros de la Universidad debido a la tenaz resistencia de estudiantes, al reclamo de las autoridades

universitarias y la condena de la opinión pública por la violación a la «Autonomía universitaria», derecho que esgrimido en primer lugar por los grupos subversivos quienes comenzaban a consolidar su presencia dentro de la Universidad.

Asimismo, en este período se registran las primeras detenciones de militantes y allanamientos de locales subversivos por parte de las fuerzas del orden, como muestra de la eficacia que iban teniendo sus investigaciones. Sin embargo, ningún mando de importancia fue detenido dentro de la Universidad, o tenía estrecha vinculación con ella.

El 30 de Diciembre de 1988 (D.S. 049-88-IN) se declaró el Estado de Emergencia en el departamento de Junín y el Comando Político Militar asumió el control político. En esta época, la DIRCOTE es convertida en Dirección Nacional Contra el Terrorismo. Asimismo, en el primer semestre de 1990 se produce un importante cambio en el accionar contrasubversivo de las fuerzas armadas, mediante la creación de «Frentes». En la región se constituyó el Frente Mantaro, cuyos responsables fueron los generales Manuel Delgado Rojas (enero 1989 – diciembre 1990), Luis Pérez Documet (enero 1991 – diciembre 1991), Carlos Torres Rodríguez (enero 1992 – diciembre 1992), David Jaime Sobrevilla (enero 1993 – diciembre 1994). El responsable de la 8va región policial fue el general Federico Hurtado E.

2.21.4.1. Estrategia contrasubversiva en la UNCP

En la medida que las acciones de violencia y proselitismo ejercido por los grupos subversivos en armas al interior de la Universidad —a la par que en la región— se intensificó, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pasaron a constituirse en actores protagónicos con el objetivo de desbaratar el accionar subversivo en la Universidad del Centro, que a vista de todos, se había convertido no sólo en espacio de adoctrinamiento de nuevos militantes, sino también de propaganda y de obtención de recursos para la «lucha armada».

El 8 de marzo de 1989 se realiza la primera incursión de fuerzas combinadas (Ejército y Policía) en la UNCP. El 10 de marzo de 1989 es asesinado el primer integrante de las fuerzas del orden dentro de la ciudad universitaria, luego de ser cruelmente torturado fue asesinado.

Las acciones de intervención militar-policial a la UNCP, tenían también como objetivo, impactar en el aspecto psicosocial, ya que provocaban gran pánico en la comunidad universitaria por la forma violenta con la que hacían, y las humillaciones y maltratos contra estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de forma indiscriminada y arbitraria.

Ante las muertes causadas al interior de la Universidad por los subversivos, las intervenciones llegaron a ser más frecuentes. Con ello también, los responsables de llevar a cabo estas acciones y los operativos de inteligencia, comenzaron a ser fuerzas especiales del Ejército o la Policía.

...en estas intervenciones quiero puntualizar que han participado grupos especializados, por ejemplo tenemos a los del departamento contra el terrorismo, que estaban agrupados en Alfa 1, en Alfa 2, ellos eran los que venían a hacer la intervención. De igual manera los agentes de inteligencia, de la Oficina Regional de Inteligencia. Del ejército, del servicio de inteligencia nacional, habían grupos especializados. Están agrupados en la G-1, en la G-2, y [...] se debería agregar la acción de grupos paramilitares, en su momento Rodrigo Franco, o el Grupo Colina que posteriormente adoptó en el valle del Mantaro como grupo Escorpión ¿no?. Aparte que hay indicios de la existencia del denominado Gato ¿no? Grupo Antiterrorista Operativo que era del ejército. (Percy, preso senderista)

El principal signo de sospecha era la pertenencia al comedor universitario, lugar donde se iniciaban las acciones represivas; así como con poseer libros de materialismo dialéctico o materialismo histórico, tener tickets del comedor universitario al momento de la inspección era arriesgarse a ser detenido.

A mediados de 1989, en una de las más grandes incursiones realizadas por las fuerzas combinadas y cuando la mayor cantidad de alumnado se encontraba en la ciudad universitaria, se cercó la Universidad, reteniendo a cientos de estudiantes, docentes y empleados administrativos, con el objetivo de realizar un «censo». Se les asignó un número y fotografío a cada uno. A partir de este «censo» y las labores de inteligencia en la Universidad, se podría afirmar que fueron en aumento las desapariciones forzadas sistemáticas y posterior ubicación de cadáveres en diversas zonas del valle del Mantaro.

Otra de las tácticas fue utilizar encapuchados, estudiantes previamente detenidos, para que identificasen a «presuntos subversivos» durante los operativos de revisión del campus universitario.

Uno de los momentos más recordados por la comunidad universitaria, y que fue particular porque después de ocurrido, se pudo deducir cómo trabajaba el servicio de inteligencia en la Universidad, fue la presentación en el campus de la cantante Martina Portocarrero, en agosto o setiembre de 1990:

Me acuerdo vino Martina Portocarrero, la trajeron los chicos de la federación [...] ella estaba cantando, detrás de ella había muchos alumnos dirigentes [...] si más no recuerdo fue un viernes esa presentación. El mismo viernes y el martes comenzaron a buscar a todos los alumnos dirigentes, y estos a desaparecer. Pareciera que la presencia de Martina fue un momento como para enfocar a estos chicos. (Edith, trabajadora UNCP).

Según cómo manifiesta esta informante, Alcides Ccopa Taipe y Juan Francisco Fernández Gálvez, ambos estudiantes de antropología y dirigentes estudiantiles, estuvieron presentes en este evento; dos meses después desaparecerían sin dejar rastro, como dijimos anteriormente.

Hacia mediados de 1991, se debatía en el país por primera vez una legislación acorde para la «pacificación» que proponía la aprobación de varios Decretos Legislativos, entre ellos los Ns. 726 y 749 que posibilitaba el ingreso de las fuerzas armadas o la PNP a los recintos universitarios.

Al mismo tiempo que se iniciaba ese debate, en junio de 1991, llegó en visita de inspección a la Universidad del Centro, el presidente de la República Alberto Fujimori quien en compañía de

los Ministros de Defensa, Transporte, el Jefe Político Militar del Frente Mantaro, el Rector de la UNCP y periodistas nacionales y extranjeros, se dirigió a la Biblioteca Central, donde dijo:

frente a la inacción de las autoridades universitarias en los últimos años, creo que es necesario que les digamos basta ya y pongamos orden en las universidades, y que los grupos terroristas no deben aquí dominar [...] Creemos que por parte de los mismos grupos terroristas ha habido violación de la autonomía universitaria, y que las autoridades de estos centros de estudios poco han hecho para recobrar precisamente esta autonomía, probablemente por los métodos de terror que han venido utilizando. (Diario Correo, Huancayo, 9 de julio de 1991).

Las críticas del Presidente hacia la conducta de las autoridades con respecto al control de sus instituciones, tenían el objetivo claro de aprobar bajo cualquier medio el ya famoso Decreto Legislativo 726. «Prevía autorización del Ministerio de Defensa o del Interior, o de los Comandos Militares o Policiales en su caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, podrán ingresar a los locales universitarios, cuando tomen conocimiento que elementos o grupos terroristas perturben la paz y el orden interno...»

De esta manera, quedaba sin efecto la «autonomía universitaria», hecho que provocaría la reacción de la comunidad universitaria nacional. La militarización de las universidades estaba en ciernes, sin embargo el accionar del PCP-SL al interior de ellas, y en este caso específico de la región, no se detuvo.

En la UNCP, al igual que en otros centros superiores de estudio, la intervención militar se realizó de manera pacífica, procediendo de inmediato los efectivos militares a la limpieza de las instalaciones y el pintado de paredes. Su trabajo se vio facilitado por el apoyo de la opinión pública y de un sector mayoritario de la comunidad universitaria.

La base militar quedó instalada en el comedor universitario, a la entrada del campus universitario y permaneció allí por muchos años, llegando a percibirse su presencia como algo cotidiano y normal. Fue recién cuando Javier Valle Riestra asumió como Primer Ministro del gobierno de Fujimori, que se decretó su retiro.

Las cifras revelan que, a pesar del aparente clima de tranquilidad que se vivía, fue precisamente en 1992 cuando se sucedieron con mayor profusión las desapariciones forzadas selectivas de los estudiantes. Las labores de inteligencia realizadas dentro de la universidad estaban dando resultados en operativos realizados fuera de ella.

- **Ejecuciones arbitrarias**

Éstas fueron una modalidad desarrollada, previa labor de inteligencia y planificación para combatir a los subversivos. El primer paso era la detención de la víctima, en la vía pública o en su domicilio; luego se la mantenía detenida, según indicios, en los cuarteles militares durante varios días, donde

era interrogada y maltratada, con el propósito de lograr un autoreconocimiento de militancia o señalar nuevos nombres. Finalmente, ejecutada y tirada en algún lugar del Valle del Mantaro.

Así sucedió con el profesor Jaime Cerrón Palomino, vicerrector académico de la Universidad, secuestrado al salir de su domicilio el 9 de junio de 1990, junto con su chofer Armando Tapia Gutiérrez; sus cuerpos fueron hallados el 17 del mismo mes, en el distrito de Sincos, en la margen derecha del Valle del Mantaro, aproximadamente 20 Km al norte de Huancayo. Un diario local describe cómo fue encontrado: «Con las extremidades cercenadas, una bala en la cabeza y signos de haber sido fuertemente maltratado, fue hallado el cadáver del que fuera vicerrector académico de la UNCP, Jaime Cerrón Palomino. Junto a él se encontraba el chofer de la camioneta Armando Tapia» (Diario Correo, Huancayo, 10 de junio de 1990).

O el caso del estudiante de Pedagogía, Ángel Luis Huaynate, cuyo cadáver fue encontrado por sus familiares con signos de tortura, en octubre de 1990. En una de sus mejillas presentaba quemaduras, sus manos estaban maniatadas detrás de la espalda y según sus familiares, sus ojos estaban cubiertos con una venda de color verde *«del mismo color de la camisa de los policías»*; tenía una herida de bala a la altura del corazón y dos heridas más en la cabeza. No se le encontró ningún documento de identidad ni sus efectos personales. El mismo día que encontraron el cuerpo de Ángel Luis Huaynate en la morgue, los familiares fueron a la Policía para sentar la denuncia del asesinato: «la venda, la mecha y los casquillos de bala los metí en una bolsa negra y se los llevé a los de la PIP para que investiguen. Un policía me recibió la bolsa y me dijo: “pero si ya se murió, qué vamos hacer, si ya está muerto... ahorita no se va a poder poner la denuncia, estas muy alterada, ve entierra a tu hermano y vuelves después”. Así me dijo... sólo recibió la bolsa y no me dijo nada más» (Testimonio 304010).

Junto con Ángel Luis, Huaynate murió Edson Espinoza Tueros, estudiante del 5to año de la Facultad de Pedagogía. Según el diario «Correo» de Huancayo, ambos hechos fueron atribuidos al MRTA, pero era sabido que el Ejército solía inculpar de sus acciones a uno de los grupos subversivos aduciendo «ajuste de cuentas» entre ambos grupos subversivos. Esta fue la misma estrategia que utilizaron con Dante Edgar Granados Gómez, estudiante de Ingeniería de minas. El 7 de octubre de 1992, Adrián Granados Espinosa recogió el cuerpo de su hijo y encontró un cartel en su pecho que decía *«Así mueren los soplones»*, con un dibujo de la hoz y el martillo. Sin embargo, algunas personas que trabajaban cerca del lugar, observaron que los «morocos» cuidaban el lugar donde estuvo arrojado el cadáver de Edgar Granados. Su cuerpo tenía huellas de tortura, quemaduras en la cara, en las manos y en el brazo (Testimonio 300544).

Un ejecutado arbitrariamente podía ser reconocido no sólo por la forma como era asesinado (torturado previamente, enmarrocado, y con disparos de bala, uno de ellos entre los ojos a manera de tiro de gracia) sino también porque sus restos, al cabo de unos días de la desaparición, aparecía «botados» en algún lugar del valle, como Justiniano Fredy Vicente Rivera, que a los 20 días de su desaparición, ocurrida el 7 de septiembre de 1992 apareció muerto flotando en el canal de

irrigación a la altura del Grifo «Cahuide», cerca de la ciudad universitaria. Su cuerpo presentaba cortada la yugular y las rodillas maltratadas. La madre de Ever Lijarza Carrillo, estudiante de Pedagogía desaparecido el 4 de junio de 1990, señala:

En una oportunidad nos dijeron que a orillas del río Mantaro, a la altura de Huamanmarca, ubicado en el distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo..., tiraban a los muertos, y fuimos con mi hijo tempranito [...] Cuando nos acercábamos vimos que llegaba el carro del Ejército, y nos escondimos para que no nos vean, miramos como botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron, nos acercamos y eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados (Testimonio 300038).

- **Desapariciones forzadas**

Otra modalidad utilizada por las fuerzas del orden fueron las desapariciones forzadas. Aquí ocurría lo mismo que en el caso anterior, la única diferencia era que sus cuerpos nunca fueron encontrados. Es el caso del profesor de la Facultad de Economía, Víctor Raúl Lavado Olivera, quien radicaba en la ciudad de Jauja, detenido junto con su hermano en su domicilio, por un grupo de soldados encapuchados el 06 de abril de 1990. O el caso de la estudiante de Trabajo Social, Milagro Flor Túpac Gonzáles, sacada de su domicilio la madrugada del 12 de febrero de 1993 también por un grupo de encapuchados y de quien nunca más se supo su paradero, pese a los esfuerzos del padre por ubicarla.

Las desapariciones y asesinatos de estudiantes y docentes universitarios fueron continuos en la región, como lo señaló un diario local el 9 de setiembre de 1992

Unos 20 estudiantes de la UNCP han desaparecido en un lapso de seis meses y tanto los padres de familia, como las autoridades universitarias han presentado la denuncia respectiva a la fiscalía de los derechos humanos. Los asesores legales de la casa superior de estudios se encuentran abocados en la investigación y búsqueda de los estudiantes que han desaparecido. Todos lo efectúan en completa reserva, para así evitar cualquier represalia contra lo que investigan el caso, o contra las denuncias de los padres de familia. De otro lado, se supo que las personas que aparecen baleadas en diferentes lugares de la zona serían estudiantes universitarios venidos de lejos y es por ello que muchos no son reconocidos. Asesoría jurídica de la universidad está en las investigaciones para saber quiénes son los asesinos de estos jóvenes que aparecen con disparos en la cabeza después de ser torturados» (Diario Correo, Huancayo 9 de setiembre de 1992).

Otra nota periodística del 10 de octubre de 1992 dice que la policía:

...viene manejando la hipótesis que los autores de los secuestros y posteriores asesinatos de jóvenes estudiantes universitarios de la UNCP, podrían ser integrantes de un movimiento clandestino antisubversivo, similar al movimiento antisubversivo ayacuchano (MATA) que en ese departamento ha reivindicado varios atentados. Como se sabe, en los últimos meses se han registrado 26 desapariciones de estudiantes de la referida casa de estudios. Catorce de ellos fueron encontrados luego sin vida en distintos puntos de la ciudad. Hasta la fecha, sin embargo, las autoridades policiales no han podido dar con los responsables de esta

matanza de estudiantes. Según informó ayer a Correo, el Coronel Néstor Castañeda, de la Oficina de Pacificación y Derechos Humanos de la Octava Región Policial, existen algunos indicios de que ello podría estar ocurriendo, empero, aclaró que no había que olvidarse que dada la rivalidad existente entre senderistas y emerretistas, no sería raro que se trate de un ajuste de cuentas entre los grupos sediciosos» (Diario Correo, Huancayo 5 de octubre).

Como vimos, éste fue un argumento utilizado con frecuencia por las fuerzas del orden para encubrir sus acciones.

Además de estos asesinatos y desapariciones de estudiantes, tuvo también impacto la promulgación de la «Ley de Arrepentimiento», en mayo de 1992 inmediatamente después del autogolpe, aunque reglamentada un año después. Por medio de las presiones a las que se les sometía, muchos estudiantes detenidos, dieron muchos nombres, muchos de ellos quizás inocentes, como sucedió en agosto de 1993 cuando:

Capturan a 15 estudiantes de la UNCP acusados de pertenecer a grupos subversivos. Se supo que estas detenciones son a raíz de que hace 15 días capturaron a varios estudiantes y éstos acogidos a la ley de arrepentimiento y por congraciarse con la policía, están dando nombres de universitarios, profesores o trabajadores, involucrándolos inocentemente» (Diario Correo, Huancayo 9 de agosto de 1993).

2.21.5. Los años de la impunidad

En 1993, las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias continuaban, aunque en menor grado que en 1992, y las denuncias contra las Fuerzas Armadas como perpetradores de estos hechos causaban preocupación entre los círculos castrenses. Al respecto, al asumir el mando como Jefe Político Militar del Frente Mantaro, el general David Jaime Sobrevilla, se vio en la obligación de señalar lo siguiente:

Los derechos humanos en Huancayo no han sido violados por el ejército como se intenta hacer creer según versiones y deducciones antojadizas. Lo que ocurre es que al interior de la subversión existe una guerra, una pugna que trae como consecuencia las violaciones de los derechos humanos entre uno y otro bando. Para el general Sobrevilla, de acuerdo a sus apreciaciones hechas en la reunión con miembros de derechos humanos, el ejército en esta lucha pretende ser desprestigiado. La guerra psicológica que aplica la subversión es la de poner en tela de juicio el papel importante que desarrollan los militares en el proceso de pacificación en nuestro país (Diario Correo, Huancayo 13 de febrero de 1993).

El miedo a denunciar la pasividad de la sociedad civil, la renuencia de abogados a tomar casos por temor a ser considerados como subversivos, la lenidad de los fiscales de Derechos Humanos, y los impedimentos con los que se tropezaban las iglesias y los organismos de derechos humanos en sus indagaciones, vinieron a institucionalizar la impunidad.

La única institución que se preocupó – aunque de manera peculiar como se explicará más adelante – por apoyar a los desesperados familiares, fue la UNCP a través de su oficina de Bienestar Universitario. El ánimo de los familiares de los jóvenes estudiantes detenidos se mantuvo

firme durante mucho tiempo... muchos de ellos continúan sus indagaciones hasta el día de hoy. «En otra oportunidad la Sra. María logró entrar al cuartel 9 de Diciembre, suplicó de rodillas que le digan o muestren dónde estaba su hijo, la respuesta del personal de esa dependencia fue: “Se va o le disparo”, amenazándola con el arma». (Testimonio 300544)

Esta escena se repitió en la puerta de los diferentes cuarteles donde presumiblemente tenían detenidos a los estudiantes, 9 de Diciembre de Huancayo, Fuerte Cáceres de Jauja, Cuartel de Pampas (Tayacaja, Huancavelica), DINCOTE, etc. Ningún civil se encontraba autorizado a ingresar a los cuarteles y recién en 1996 la Defensoría del Pueblo ingresa a ellos.

Los estudiantes que reaparecieron con vida señalan que fueron conducidos a un establecimiento militar donde permanecieron incomunicados varios días. Es el caso de Miguel Angel Cieza Galván, hijo de un policía quien reapareció el 7 de octubre de 1992 luego de ser detenido en Huancayo y haber permanecido 13 días en el Fuerte Cáceres de Jauja¹⁰.

Las acciones de Hábeas Hábeas no lograron el registro de cuarteles y comisarías en busca de detenidos.

El Poder Judicial, a través de las cuatro fiscalías penales que actuaban en Huancayo en esos años, recibió las denuncias sobre desapariciones. Las diligencias más comunes actuadas a nivel fiscal fueron:

- Pedido de información al Ejército y la Policía sobre si habían intervenido a estas personas, si habían realizado algún operativo en la fecha y lugar indicado o si estaban detenidos.
- Pedido de información a los centros de salud y morgue, por si habían atendido a estas personas o había Acta de Defunción.
- Pedido de información al entonces Registro Electoral, para obtener informe sobre datos personales referidos al desaparecido (documento de identidad, dirección domiciliaria, etc.).
- Pedido de información a la UNCP, para confirmar la situación de estudiante.

Sin mayor información (sindicación de responsables, claridad en la ocurrencia del hecho, etc), las investigaciones -que podrían durar hasta 5 años o más – eran cerradas o finalmente elevadas al Fiscal Decano, quien a su vez las derivaba a la fiscalía de turno, las cuales las observaban como delito común. En todo caso, y por tratarse de una violación de Derechos Humanos, se derivaba a la Fiscalía Especializada de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, si es que antes la denuncia no era interpuesta a su dependencia.

El caso de Régulo Túpac Alan, padre de Milagro Flor Tupac estudiante de Trabajo social desaparecida en febrero de 1993, es representativo. Acompañado de la madre de Rony Guerra (estudiante de antropología, desaparecido en la misma fecha), recorrieron todas las dependencias policiales y militares de Huancayo y provincias cercanas, pusieron su denuncia y viajaron a Lima para denunciar la desaparición de sus hijos. El día 24 de marzo, ambos presentaron un documento

¹⁰ Veco, Mónica, «No hay pista alguna de 26 estudiantes», En *La República*, jueves 20 de enero de 1994, p. 16.

ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático, Róger Cáceres Velásquez, logrando entrevistarse algún tiempo después con los integrantes de dicha Comisión. Los congresistas fujimoristas, en particular —como manifiesta el propio señor Tupac— Martha Chavez, no les prestaron mayor atención a su denuncia. Más bien otro congresista, Miguel Velit trató de convencerlo para que desista «para qué estas haciendo tanta denuncia». Por último, en su intento de entrevistarse con Lourdes Flores Nano, don Régulo le mostró su carné de militante del PPC, a lo que ésta le respondió: «Por favor, un momentito y ya regreso», y nunca más volvió. Una de las personas que apoyó a don Régulo Tupac y a la Sra. Blancas en sus gestiones en Lima fue la congresista Gloria Helfer Palacios quien concertó una entrevista con la Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. La fiscal atendió personalmente la denuncia de don Régulo. En ese mismo momento, y en su presencia, llamó al General del Ejército y al Jefe de la Policía Federico Hurtado Ezquerre. La Fiscal conversó con ambos efectivos. Al final de la conversación le manifestó a don Régulo que: «ellos no han detenido a nadie, por lo tanto no tienen nada que hacer... entonces si ellos no han detenido a tu hija... son los terroristas que la han secuestrado»

Por último, acudió a APRODEH para denunciar la desaparición de su hija y del hijo de la Sra. Blancas de Guerra.

Algún tiempo después se nombró un Fiscal Ad Hoc para que investigue las denuncias sobre la detención y desaparición de los estudiantes universitarios, el Dr. Enrique Miranda Palma quien asume las investigaciones en abril de 1993 ante el pedido de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente a la Fiscal de la Nación de entonces Blanca Nélida Colan Maguiño, para investigar la desaparición masiva de estudiantes de la UNCP, que en 1992 superaba los 50 casos, y en 1993 pasaba de diez¹¹.

Justificando su ineficiencia, aduciendo falta de apoyo de parte del Ministerio Público para realizar sus pesquisas, apoyo presupuestal primordialmente, el Dr. Miranda no abrió proceso penal en ninguno de los casos, según él «porque no se ha logrado identificar a los responsables»¹².

2.21.5.1. La reacción universitaria

La actitud asumida por la comunidad universitaria de la UNCP fue, por lo general, de indiferencia ante las violaciones perpetradas, incluso dentro de su institución; la única excepción fue la Oficina de Bienestar Universitario, que por medio de sus asistentes sociales, ayudó, económicamente sobretodo, a los familiares de los estudiantes muertos o desaparecidos y junto con el asesor legal de la Universidad realizó averiguaciones sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Entre los estudiantes, uno de los pocos esfuerzos frente a la situación que se vivía provino de grupos cristianos católicos que deciden organizar un equipo de estudiantes católicos de la

¹¹ *La República*, Op. Cit.

¹² *Ibid.*

UNCP, denominándolo equipo de Pastoral Universitaria, entre 1988 y 1989, luego de una reunión organizada por el Arzobispado de Huancayo, y La Comisión de Juventud del Arzobispado: «se trataba el aspecto del terror, de la violencia en el país y se presentaba testimonios de personas desplazadas etc, etc., y en ese momento con todos los participantes ahí miembros de muchos grupos juveniles [...] nos encontramos en esa reunión y nos dimos cuenta que había que hacer algo, cada uno de ellos en su ámbito» (Miembro del equipo Pastoral).

2.21.6. La decadencia académica

A partir de la segunda mitad de la década del '80, la UNCP fue perdiendo su imagen de centro de estudios académico para constituirse en un referente de politización aguda y lugar de riesgos permanentes. La cantidad de postulantes fue disminuyendo paulatinamente como se nota en el gráfico N° 05 y la composición socio económica de los estudiantes de la UNCP cambiaría considerablemente.

Los contenidos curriculares, las calidades pedagógicas, las instalaciones académicas, el espíritu crítico y las inquietudes científicas se fueron deteriorando irremediabilmente, llegando al extremo de querer instaurarse un curso referido al «pensamiento Gonzalo» como lo atestigua una estudiante de la facultad de pedagogía entonces,

incluso le diría que llegó un año en que querían legalizar la doctrina de Abimael Guzmán ...Sí, querían enseñarnos toda la doctrina de Abimael, querían legalizarlo llevarlo como un curso ¿no?, y eso es lo que muchos de nosotros por debajo empezamos a pelear para que no suceda... había rumores de que hay que llevar esa doctrina que es muy buena...[pero no prosperó] Es que había mucha gente que no querían,...tenían miedo...en mi facultad y mi salón especialmente era gente que no todos eran de el PCP-SL y del MRTA» (Pastoral universitaria).

Como se lee en el syllabus de la asignatura de «Materialismo Histórico», dictado por el profesor Víctor Lavado Olivera detenido y desaparecido el 6 de junio de 1990 por presuntos miembros del Ejército, en la facultad de economía, la bibliografía consigna: Documentos fundamentales del 1er. Congreso del PCP: Suplementos especiales del «Diario», «Línea internacional del PCP», «El PCP y los instrumentos de la revolución», «El PCP y la revolución democrática» y un suplemento especial del «Diario», todos publicados en 1988 (ver documento 03).

El activismo político predominó en desmedro del estudio:

había un desprecio completamente a lo académico, lo académico era un buen pretexto para seguir funcionando la universidad, yo creo que se perdió autoridad por parte de las mismas autoridades, se perdió autoridad por parte de los entes, y comenzó a ser una influencia ...de los grupos levantados en armas y ...la universidad se convirtió, en conjunto como institución, en un espacio digamos donde se captaban gente para los movimientos subversivos en conjunto» (Jorge Montoya, profesor de Pedagogía).

La investigación prácticamente desapareció y ocurrieron atentados contra centros de investigación locales

eliminó diversos centros experimentales, de varias universidades públicas. Rechazó la vocación por la investigación por ejemplo ¿no? El profesor era [considerado] servil pues a las ciencias burguesas,...y otras tonterías ¿no? Aquí en Huancayo destruyeron algunos centros experimentales, no necesariamente de la universidad, pero sí el Centro Internacional de la Papa, los que hubieron en las zonas altinas, en las zonas ganaderas. Inculcaron el desprecio hacia la investigación y las ciencias para privilegiar una supuesta investigación marxista ¿no?...la universidad no se ha recuperado, ...pese al esfuerzo de muchos docentes universitarios, de algunas autoridades, porque el Estado no atiende a la universidad (Lucas).

Surgió entonces la imagen de universidad subversiva, foco de la subversión afectando las posibilidades de prácticas profesionales de los estudiantes y restringiendo los espacios de ejercicio profesional de sus egresados:

el efecto mas negativo que hemos tenido...es que hemos perdido esos mercados [laborales], los mas importantes, las empresas mas grandes. Porque anteriormente, por ejemplo, venía la Cerro de Pasco...y asimilaba una gran cantidad de profesionales de economía. Y cuando se dio ese contexto, prácticamente, nos aislaron, no? Eso era en la parte de la minería. Y de repente en el Estado, igual sucedió. El Estado en ese momento se estaba achicando y... salimos excluidos. Y el estigma más fuerte que teníamos era eso, no?. O sea, de ser violentistas... así tú no seas simpatizante, estabas con ese estigma. (Sánchez Marín).

Estar en la Universidad se convirtió no sólo en un peligro constante, sino también en una pérdida de tiempo. Muchos optaron por dejar los estudios y dedicarse a subsistir. Otros desertaron de la Universidad para ir al campo y sumarse a la «lucha armada», otros fueron desaparecidos y asesinados: «hubo mucha deserción, bastante deserción, hubieron (sic) muchos que dejaron la universidad y hay otros que permanecieron pero, cuando me encuentro con ellos me dicen: “señorita no hemos aprendido nada en esos años” ¿no?, porque mas era el tiempo de escapar que de concentrarse en los estudios, esos años fueron muy, muy flojos y fueron de terror constante». (Alicia Véliz).

2.21.7. Expectativas

Algunos de los testigos del conflicto armado interno alrededor de la Universidad Nacional del Centro manifestaron sus comentarios sobre su experiencia, y esbozaron algunas ideas de lo que se anhelan para el futuro de este centro de estudios.

hemos vivido una época o sea...de bastante zozobra, inestabilidad pero que a la vez nos ha enriquecido porque de todas maneras hemos aprendido en el sentido de que como se comportan estos grupos, como se comporta el estado, el gobierno y esto nos ha permitido también crecer profesionalmente como personas y...un poco valorar lo que ahora tenemos

¿no?, ahora tenemos por ejemplo como usted verá una universidad más tranquila, en donde...la vida académica es preponderante ahora. (Laily Maravi)

Un militante del PCP-SL, hoy preso, reflexiona sobre las condiciones que se dieron durante la guerra, y a pesar que él si obtuvo un juicio (justo o no, no lo sabemos), considera que la justicia no se dio por igual para todos los miembros de la UNCP.

si doy este testimonio es para contribuir a ellos ¿no? por ejemplo, que se sepa, cuantos estudiantes universitarios pasaron en las celdas del cuartel 9 de Diciembre. Cuántos fueron detenidos, torturados, masacrados, y cuántos de ellos desaparecieron. O sus cadáveres ejecutados extrajudicialmente y regados en el valle del mantaro, para generar una psicosis colectiva, una psicosis social, del terror... terror de estado diría yo. Y cuántos estudiantes no aparecieron, y hoy continúan desaparecidos, dónde están, a dónde los llevaron. [...] considero de que si habían sospechas que estudiantes universitarios tenían simpatías o estaban en cierto modo vinculados, o con cierto grado de organización en los grupos alzados en armas, yo pienso que debieron darle el derecho a un juicio justo, equitativo e imparcial. Un juicio en el cual pudieran demostrar hasta su inocencia, porque yo estoy seguro que muchos de los estudiantes universitarios desaparecidos han sido confundidos y asesinados, o mínimo su culpabilidad en el conflicto interno. Que se sancione, que se investigue en primer lugar, que se investigue a los responsables, y de aquellos estudiantes que pudiesen estar en alguna fosa, se les entregue sus restos mortales a sus familiares para que se les de cristiana sepultura. Pienso que esto sería una de las cosas que llevarían a poner las primeras piedras, dar los primeros pasos para alcanzar una reconciliación nacional, que la sociedad peruana la requiere. (Percy)

Para otros, ante la ineficiencia del Poder Judicial, la impotencia y la desidia de la sociedad, lo único que queda finalmente es reclamar la justicia divina, como dice un trabajador de la UNCP «Dios quiera que algún día se llegue a la verdad, para mí la mejor justicia la va a hacer Dios, porque un mal todo se termina, yo he visto a muchos padres llorar acá buscando a sus hijos, yo los he consolado» (Vallejo)

En ese sentido, las mayores exigencias son investigar el grado de responsabilidad de los actores de la guerra (PCP-SL, MRTA, Ejército, fuerzas armadas, agentes infiltrados del SIE en la Universidad, grupos paramilitares). Sin embargo, muchos consideran que la institución universitaria tiene mucho que responder sobre su responsabilidad, tanto en relación a la complacencia y sumisión a los grupos subversivos hacia la represión.

Las palabras de la madre de un joven estudiante asesinado, resumen los deseos y expectativas de todos los que sufrieron el conflicto armado interno en la UNCP

[...] me da pena la forma en que ha pasado esos años de terror, he vivido una desesperación...entonces esto yo quisiera que las autoridades, el gobierno vean mejor, que nunca más vuelva a suceder estas cosas...no quisiera recordarme de esos tiempos que nosotros vivíamos desesperados, temblando, ya aparecía un muerto aquí, otro muerto allá, en la misma universidad por costado [...] pero gracias a Dios que no ha pasado nada con nosotros... lamento la muerte de mi hijo porque el podría ser otra clase de hombre, otra clase de persona...con tantas profesiones que hubiera podido vivir y no solo una...tanto nos hemos desesperado que ingrese a la universidad, que ingrese a la universidad y el ingreso a la universidad lo ha llevado a la muerte... (Rogelia)

2.21.8. Conclusiones

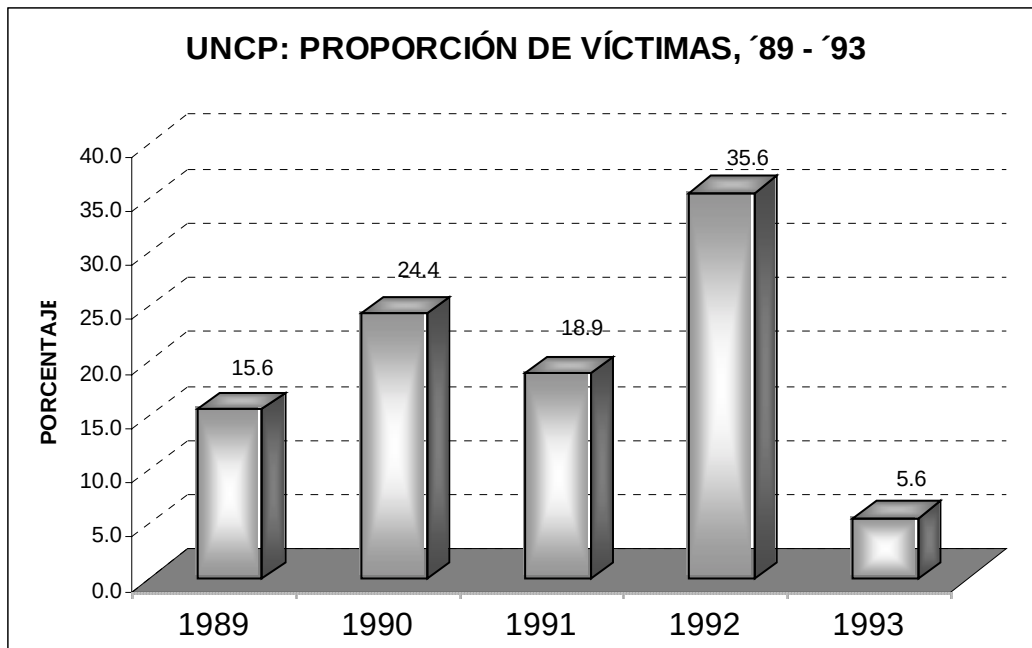
1. Durante la segunda mitad de la década del '80 y los primeros años de los '90, la Universidad Nacional del Centro fue escenario del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los grupos subversivos (PCP-SL y Movimiento Revolucionario «Túpac Amaru»-MRTA). Las violaciones de derechos humanos fueron cotidianas generando un clima de inseguridad y miedo. Los contenidos curriculares, las calidades pedagógicas, las instalaciones académicas, el espíritu crítico y las inquietudes científicas se fueron deteriorando irremediablemente.
2. La Universidad Nacional del Centro fue considerada como un espacio importante por el PCP-SL que realizó un trabajo inicial silencioso y soterrado para irrumpir violentamente. La Universidad se convirtió en escenario de mortales enfrentamientos por el PCP-SL, controló los aspectos administrativos y académicos; condicionó la elección de dirigentes estudiantiles, autoridades universitarias y el acceso a la docencia; liquidó los sindicatos de trabajadores y de docentes, y controló el comedor universitario.
3. Para lograr el control de la Universidad, principalmente entre 1989 y 1992, el PCP-SL no dudó en asesinar a quienes consideraba sus «enemigos», sean miembros de las fuerzas del orden (Policía y Ejército) o estudiantes y catedráticos que mostraran oposición, o militantes del MRTA, o quienes habían desertado del PCP-SL.
4. Aún cuando el accionar del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru- MRTA fue menor y más breve, algunos de los episodios más sangrientos se debieron a sus enfrentamientos con el PCP-SL.
5. Respondiendo a una nueva estrategia sobre «pacificación», el 30 de diciembre de 1988, mediante Decreto Supremo N° 049-88-IN, el gobierno declaró el estado de emergencia en el departamento de Junín y el Comando Político- Militar asumió el control político.
6. El momento culminante de la intervención de las fuerzas del orden en la Universidad Nacional del Centro ocurrió en 1992, cuando el Ejército estableció una base en su interior mientras aumentaron considerablemente las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas de estudiantes, catedráticos y trabajadores universitarios en operativos militares realizados fuera de la universidad.
7. Las cifras reunidas por la CVR indican: 28 estudiantes asesinados, 36 ejecutados extrajudicialmente, 29 desaparecidos, 8 profesores y 4 trabajadores muertos y varios casos más por esclarecer.
8. La fuente más común que originaba la detención y la desaparición de alguna persona era la información recabada por miembros del servicio de inteligencia, o por estudiantes

detenidos encapuchados para identificar a posibles subversivos, información cruzada con los censos que se realizaron en el campus.

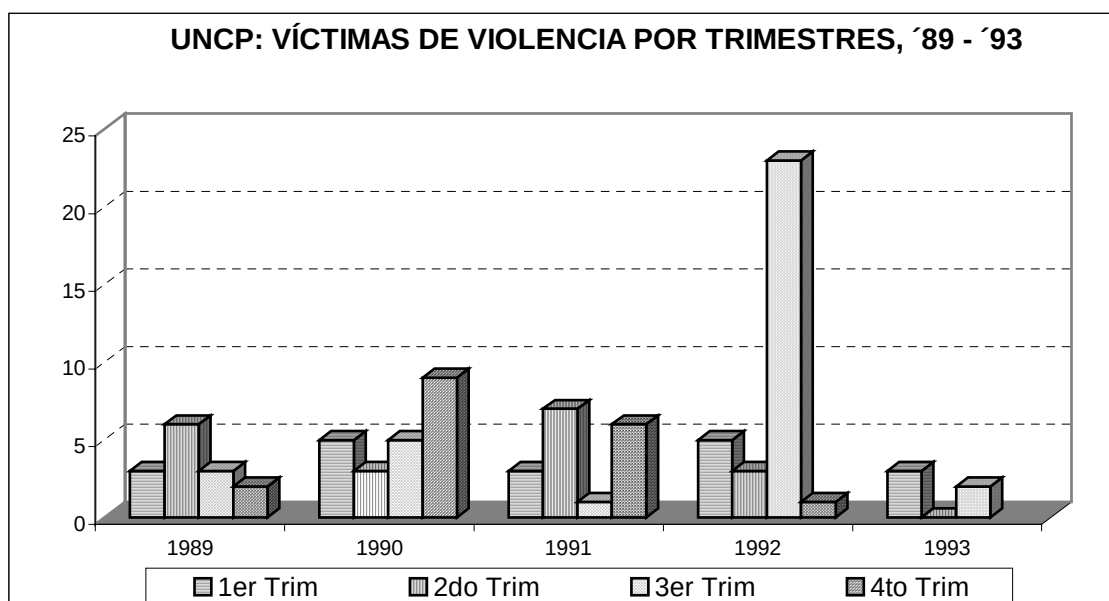
9. Motivo de sospecha resultaba ser beneficiario del Comedor Universitario, dirigente del Tercio Estudiantil o Consejo Universitaria, o simplemente pertenecer a algunas facultades como Pedagogía, Sociología o Agronomía.
10. Las detenciones y posteriores desapariciones de estudiantes siguieron un patrón característico: la detención de las víctimas por agentes militares en uniforme o vestidos de civil, identificables por las armas que portaban y otras características; una posición oficial de negación de responsabilidad por tales desapariciones; falta de investigación de las autoridades públicas sobre la situación de las víctimas; ineficacia de los recursos interpuestos, tortura y posible ejecución arbitraria de las víctimas; y la impunidad absoluta, reforzada por la subsiguiente amnistía.

Anexo 1: Glosario

PAP	: Partido Aprista Peruano
ARE	: Alianza Revolucionaria Estudiantil
CLC	: Comité de Lucha de Comensales
FER	: Frente Estudiantil Revolucionario
FUE	: Frente Único Estudiantil
FURE	: Frente Único Revolucionario Estudiantil
JCP	: Juventud Comunista Peruana
MIR	: Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR-EM	: Movimiento de Izquierda Revolucionaria – El Militante
MRS	: Movimiento Revolucionario Socialista
MRTA	: Movimiento Revolucionario «Túpac Amaru»
PC «BR»	: Partido Comunista «Bandera Roja»
PCP «M»	: Partido Comunista Peruano «Mayoría»
PCP «PL1»	: Partido Comunista Peruano «Puka Llacta»
PCP «PR»	: Partido Comunista Peruano «Patria Roja»
PCP «U»	: Partido Comunista Peruano «Unidad»
PCP-SL	: Partido Comunista Peruano «el PCP-SL»
PCR	: Partido Comunista Revolucionario
PSR-ml	: Partido Socialista Revolucionario – Marxista Leninista
UDP	: Unidad Democrática Popular
UNCP	: Universidad Nacional del Centro del Perú
VER	: Vanguardia Estudiantil Revolucionaria
VR	: Vanguardia Revolucionaria
VR «PC»	: Vanguardia Revolucionaria «Proletario Comunista»



FUENTE: Elaboración propia



FUENTE: Elaboración propia

2.22. CÁRCELES

Las cárceles durante los años de violencia política no sólo fueron espacios de detención de procesados o condenados por delitos de terrorismo sino escenarios en los que el Partido Comunista del Perú, el PCP-SL y en menor medida el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, extendieron el conflicto armado. La guerra desatada, principalmente por el PCP-SL, tuvo una dimensión nacional evidenciada en el desarrollo de sus planes militares y su capacidad de organizar atentados; y, ciertamente, en la respuesta del Estado a través de la policía, las fuerzas armadas y los comandos políticos-militares. Esta situación tuvo sus réplicas en espacios regionales en los que el conflicto se desarrolló con sus propias particularidades geográficas, étnicas o socioeconómicas. Al lado de lo nacional y de lo regional se ubica como una dimensión de características especiales, las cárceles. A medida que las capturas y detenciones aumentaban, aumentaba también la importancia de lo que ocurría en ellas. De modo que las cárceles no fueron ni en los ochenta ni en los noventa, pequeños islotes ajenos al curso de la guerra sino que influían y eran influenciados por ella.

Se calcula que por las cárceles han pasado a lo largo de veinte años, aproximadamente 20,000 personas, cuya situación jurídica tardaba en definirse. Los traslados de internos se volvieron frecuentes en la medida que se iban construyendo nuevos penales. A fines de los noventa habían internos por terrorismo en más de veinte penales del país. A lo largo de todo el conflicto armado el PCP-SL actuó en las cárceles bajo las directivas de sus líderes, reproduciendo su organización partidaria y guiados por su ideología. De ahí la sincronización de sus acciones propagandísticas o la simultaneidad de sus protestas que les servían para proyectar una imagen de disciplina y de fuerza militante. Las cárceles fueron una especie de altavoz orientado hacia la prensa nacional y extranjera, pero también hacia sus propios cuadros de combate de cuyo éxito revolucionario dependía su futura libertad.

El Estado demoró en comprender que en las cárceles también se jugaba el curso de la guerra, es decir, que el sistema penitenciario era un componente clave en la estrategia contrasubversiva. Durante los primeros años, el desconcierto no sólo era de los políticos en la reestrenada democracia sino que alcanzó también a los jueces y al personal penitenciario. Era notorio que la administración de justicia y el sistema penitenciario no estaban en capacidad de enfrentar a un fenómeno que iba en aumento y cuyos actos, de una criminalidad cada vez más decidida, infundían temor e inseguridad entre sus miembros. En los veinte años de violencia política los penales fueron el reflejo de la debilidad institucional del Estado en la que incluimos aunque parezca paradójico el uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas, y, desde luego, el aprovechamiento de los movimientos subversivos de esa debilidad; pero, también, en los noventa, reflejó la severidad de un régimen que propició numerosas violaciones a los derechos humanos. El Estado demoró también en comprender que la población penitenciaria no era homogénea y que cabían percepciones diferenciadas de su situación y sus expectativas. En las

cárceles se encuentran los llamados «acuerdistas», que son un grupo de internos que mantiene su pertenencia al Partido Comunista del Perú, el PCP-SL y que se adhirieron en su momento al acuerdo de paz propuesto por Abimael Guzmán; los miembros de «Proseguir», que es un grupo pequeño que expresa su voluntad de continuar la guerra popular; están, igualmente, los «emerretistas», que son miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; los llamados «desvinculados» que son internos que han abandonado la militancia en el PCP-SL o el MRTA; los llamados «independientes», que son aquellos que afirman no haber pertenecido nunca a el PCP-SL o el MRTA; y, los «arrepentidos», que son los internos que se acogieron a la ley de arrepentimiento.

Siendo los internos actores centrales del conflicto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación organizó, en coordinación con las autoridades penitenciarias, visitas a los penales para recibir de ellos sus testimonios. Del mismo modo, se les dio a conocer los avances del trabajo de las diversas áreas de la Comisión y, especialmente, se inició una reflexión conjunta sobre el sentido y las posibilidades que la reconciliación tiene para ellos y para el país. Las actividades desplegadas permitieron comprobar que el Partido Comunista del Perú el PCP-SL es una organización existente y actuante dentro de las cárceles, que nos recuerda la vigencia de problemas no completamente superados y la necesidad de diseñar una estrategia que en el marco de la democracia y los derechos humanos contribuya a asegurar la paz en el Perú.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación recibió 1158 testimonios en veintidós penales del país, de los cuales 60.2 % corresponden a el PCP-SL, 10.4 % al MRTA, 27.5 % a internos que no tienen filiación política y, 2 % a otros. La presencia de hombres (82.1 %) es largamente mayor que la de mujeres (17.8 %) y si consideramos el tiempo de condena diríamos que alrededor del 80% eran jóvenes en los años de la violencia. Los hispano hablantes son mayoría: 71.1 % en el caso de el PCP-SL, subiendo a 85.8 % en el caso del MRTA. En general, hablan quechua el 24.7 % y otras lenguas nativas el 1.9 %. Un importante dato que arroja la base de la Comisión es que el nivel educativo de los internos de el PCP-SL es —entre educación superior y secundaria completa— de 65.1 %, siendo los de primaria o secundaria incompleta 32.4 % y los analfabetos sólo el 2.5 %. Estas cifras no difieren substancialmente en el caso del MRTA. Además, las actividades de donde provenían eran principalmente, los estudios universitarios (el PCP-SL: 24.9 %; MRTA: 15.3 %) luego se ubican los vendedores y comerciantes con un 16.3 % y 31.4 %, respectivamente, otras actividades, 38.3 % y 34.7 %, siendo campesinos sólo un 20.5 % en el caso de el PCP-SL y 26.5 % en el MRTA. Llama la atención igualmente que en ambas organizaciones subversivas de raíz marxista, el 76.16% sean católicos, el 10.7 % evangélicos y el 4.6 % profesen otras religiones, mientras que los que no profesan ninguna sean sólo 8.5 %, bajando a 0.98 en el caso del MRTA. Finalmente, destaca el dato del lugar de nacimiento, sobre todo en el caso de el PCP-SL, cuyos internos son en un 28.2 % limeños, quedando los ayacuchanos a cierta distancia con el 11 % y los demás, de otros departamentos, con porcentajes menores. Si hubiera que trazar un

perfil general de ambos alzamientos armados por el tipo de internos, diríamos que fueron alzamientos llevados adelante principalmente por varones, jóvenes, ciudadanos, hispanohablantes, con buen nivel educativo, estudiantes, comerciantes o trabajadores independientes en su mayoría y que, desde entonces o en reclusión, abrazaron el catolicismo como fe religiosa.

La opinión pública, en general, no muestra un interés positivo por la suerte de los internos en las cárceles. Hay una idea muy extendida de la pena como castigo, que suele exacerbarse cuando se trata de delitos muy graves. A menudo se oyen expresiones extremadamente duras que revelan poca disposición para comprender un fenómeno complejo como éste. En el caso de los internos por terrorismo, los crímenes en los que han participado y la zozobra sembrada en el país, están presentes en la memoria de la gente al punto de mirar con complacencia las severas restricciones a los derechos a las que fueron sometidos. Pese a esto, es obligación del Estado de derecho restituir derechos fundamentales compatibles con la reclusión y transmitir a la ciudadanía una idea más exacta de la vida en las cárceles, especialmente de la que vivieron y aún viven alrededor de dos mil presos por terrorismo.

2.22.1. Cárceles: la guerra que no cesa

2.22.1.1. Tierra de nadie

Cuando la violencia estalló en las alturas de Chuschi en mayo de 1980, sorprendió al país y a la democracia, que se aprestaban a elegir a un gobierno constitucional luego de doce años de dictadura militar. El sistema carcelario, tras las primeras detenciones de miembros del Partido Comunista del Perú, el PCP-SL, mostró serias limitaciones para garantizar la reclusión de internos que traían un componente nuevo y substancial: su fuerte ideologización. Venían de cometer delitos horribles pero a la vez mostraban rasgos de disciplina partidaria que resultaban ajenos a la historia habitual de los presidios en el Perú. Al poco tiempo hicieron de las cárceles una extensión de la guerra a la que llamaron «luminosas trincheras de combate». Abimael Guzmán, lo dice claramente, «Nosotros los comunistas del Perú siempre hemos demostrado ante el mundo que los comunistas siguen luchando en cualquier condición, por eso, convertimos las prisiones en luminosas trincheras de combate sirviendo a nuestra causa, no importa lo que nos pase como individuos, «[...] Así te encuentres en la soledad más fría hallarás el calor de la luz del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo y contarás con un plan de trabajo resultado de una política, de una ideología y combatirás aplastando negros objetivos de capitulación, de aislamiento o de arrepentimiento».¹

El episodio del CRAS de Huamanga grafica exactamente esta situación. Era marzo de 1982 y decenas de subversivos del comité regional principal del PCP-SL, habían caído presos. Desde

¹ www.geocities.com/comunismo_peru/asumir93.htm

fuera se organizaba un operativo de rescate. Un contingente de senderistas atacó la cárcel consiguiendo la fuga de 78 miembros del PCP-SL y 169 internos por delitos comunes. Los guardias republicanos resistieron la embestida varias horas pero fueron abatidos. En represalia, algunos de sus compañeros, se dirigieron al Hospital de Ayacucho en busca de tres subversivos internados, los llevaron a una calle aledaña y les dieron muerte.

La verdad es que antes de Huamanga, ya habían ocurrido dos casos de fuga, uno de catorce internos del PCP-SL del CRAS de Pasco que dejó varios policías republicanos heridos y, otro, del CRAS de Arequipa del que lograron evadirse con ayuda externa, dos reclusas, resultando muerto un cabo de la Guardia Republicana. El PCP-SL consideró estas operaciones como parte de su estrategia de recuperación de cuadros y las elevó al rango de hito histórico.

Luego de estos hechos, el gobierno tomó la decisión de centralizar la reclusión de subversivos en los penales de máxima seguridad de Lima: El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Tres años después se construyó el penal de régimen cerrado especial Miguel Castro Castro, y dos penales más durante los ochenta, en Chiclayo y Trujillo. Es en los noventa que se construyen nueve penales más entre los que se cuentan los cuestionados Yanamayo en Puno y Challapalca en la sierra de Tacna así como el penal de la base naval del Callao.

No obstante estas precauciones, a medida que avanzaba el conflicto y el PCP-SL mostraba la entraña brutal de su proyecto, era fácilmente observable la debilidad de la autoridad policial y penitenciaria en las cárceles. Los subversivos habían llegado demasiado lejos y el control de los penales se le escapaba de las manos a la autoridad. En la cárcel de El Callao las mujeres desfilaban vestidas de rojo y negro conmemorando el día del socorro popular, y en la rotonda de Castro Castro internos, hombres y mujeres, en una ocasión marcharon durante una hora portando una gigantesca pancarta con el rostro de Abimael Guzmán, ante la mirada atónita y distante de la policía.

Para entonces, Guzmán había ganado terreno en la mente de sus militantes exigiendo en nombre de la revolución, sacrificios mayores. La muerte era un costo de la guerra que había que asumir pero, además, una contribución al fortalecimiento de la causa. Guzmán había tasado el valor político de la muerte y en adelante sus planes incluirían este componente. Las acciones de el PCP-SL ganaban, pues, en temeridad y en frenesí.

La debilidad del Estado en los penales no tardaría en traer consecuencias peores. El 4 de octubre de 1985, los internos del penal de Lurigancho se amotinaron para evitar una requisa. La guardia republicana develó el motín con un saldo de 30 internos muertos. El ministro de justicia de entonces, Luis González Posada, sustentó ante la cámara de diputados que los internos fueron quemados por sus propios compañeros, comprometiéndose a una exhaustiva investigación. Esa investigación nunca llegó a conclusiones. Testimonios² ofrecidos a la comisión de la verdad dan cuenta del uso de dinamita y bombas incendiarias con fósforo líquido y de disparos al cuerpo de los

² CVR, testimonios 700145 y 700149.

reclusos por parte de la guardia republicana. Veintitrés días después el alcaide de ese penal, Miguel Castro Castro, fue emboscado y asesinado. Guzmán declaró el 4 de octubre como «día del prisionero de guerra».

En ese caldeado escenario, el PCP-SL asesinó al contralmirante Ponce Canessa, oficial del estado mayor de la marina. Es de conocimiento público que en su sepelio se oyó decir al comandante general de la marina, Víctor Nicolini del Castillo, «sepan los subversivos que han despertado al león».

Ocho meses después del primer motín, ocurriría la más grande masacre en la historia penitenciaria del Perú. Luego de resistirse a ser trasladados al penal de Castro Castro, los internos tomaron rehenes en El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho iniciando en simultáneo un violento motín. El presidente Alan García fungía en esos días de anfitrión del XVII Congreso de la Internacional Socialista sobre el que la prensa internacional había volteado los ojos. A las ocho de la mañana, hora del «descierro», se inició el develamiento. Luego de dos días terminaría con cifras horribles de muertos. En el Frontón mueren 118, en Lurigancho 124 y en Santa Bárbara, dos. Como toda explicación, García dijo al país que el gobierno había cumplido con restituir el principio de autoridad y que los excesos serían investigados. La comisión parlamentaria que indagó en los hechos, dio detalles sobre el tipo de armamento usado por los efectivos del ejército y del momento en que los internos del pabellón industrial de Lurigancho se rindieron y fueron forzados a echarse en el piso y eliminados uno a uno. Varios testimonios coinciden con esta versión. (Ver caso ilustrativo)

El fuero militar encontró responsabilidad penal por homicidio calificado en el coronel Rolando Cabezas y en ocho republicanos, de un total de 177 efectivos de la guardia republicana y 19 del ejército, procesados por lo ocurrido en Lurigancho. En noviembre del 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano que proceda a investigar, procesar y sancionar a los responsables. De este modo la justicia peruana tuvo que volver una vez más por sus pasos para cumplir con juicios ajustados a ley. El proceso penal a los responsables de los hechos de El Frontón y Santa Bárbara, fue sobreseído en la justicia militar.

El uso ilegal y desproporcionado de la fuerza debilitó al Estado peruano en su capacidad moral de enfrentar a la subversión, haciéndolo blanco de la condena internacional por las graves violaciones a los derechos humanos y provocando en las organizaciones alzadas en armas un reforzamiento de sus convicciones y de su organización. Guzmán había conseguido darle al concepto de «prisionero de guerra» una connotación actuante y a los trágicos sucesos de los penales un barniz de heroicidad que le abría el camino para seguir exigiendo de sus militantes una mayor «cuota de sangre». La revolución se alimentaba de muertes con una indisimulable voracidad. En su lógica, el «baño de sangre» convertía en genocida al gobierno y en heroico al PCP-SL. No tardó Guzmán en declarar al 18 de junio como «día de la heroicidad».

Luego de estas masacres, el orden no sobrevino a los penales. El PCP-SL mantuvo el control territorial y cada cierto tiempo transmitía a los medios de comunicación sus acciones de adoctrinamiento político. En Castro Castro el control policial era mínimo. A los pabellones del PCP-SL, ubicados en la zona de la rotonda, no entraba nadie, ni siquiera la policía que, además, había suspendido las requisas. Por su parte, el MRTA construyó un enorme túnel por el que el 9 de julio de 1990, 48 internos de esa organización se fugaron del penal Castro Castro en lo que fue considerado el colmo de la negligencia policial o de la complicidad.

2.22.1.2. Cambio de régimen

Luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el «Gobierno de reconstrucción nacional», mediante decreto ley, Nro. 25421, le encarga a la Policía Nacional la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios. De esta manera limitó las funciones del INPE y satisfizo la campaña iniciada por algunos medios de comunicación que denunciaban que los penales y en especial el penal de Castro Castro era una zona liberada por los terroristas. Estas medidas tuvieron aceptación popular, entre otras razones, por el desorden y la debilidad preexistentes y el desprestigio de la clase política cuyos intentos de oposición ya no tenían eco entre la población. El Presidente Alberto Fujimori había logrado encaramarse en el poder a partir de una alianza con las fuerzas armadas y policiales e iniciado un proceso de copamiento de los poderes públicos. La mano dura era bien vista y más aún si era aplicada contra los subversivos, causantes de tantas muertes.

En esa circunstancia de ascenso de un poder autoritario, ocurrió la masacre de mayo de 1992. Los internos del Partido Comunista del Perú, el PCP-SL, ante la orden de trasladar a las mujeres desde Castro Castro a la cárcel de máxima seguridad de mujeres en Chorrillos -todavía no totalmente acondicionada- se amotinaron. Aprovechando la gran tolerancia del régimen penitenciario de aquel entonces, los presos del PCP-SL habían habilitado una comunicación subterránea entre los pabellones 4-B y 1-A a través de los ductos. La madrugada del 6 de mayo, la policía al observar que se negaban a salir, intenta abrir un boquete, tras descartar cualquier negociación. Numerosos efectivos se posicionaron en los techos del pabellón A y del venustero. Al cabo de unas horas el penal estaba sitiado por policías. Los internos pidieron garantías así como la presencia de la Cruz Roja Internacional, del Ministerio Público, de sus abogados y sus familiares. Su pedido no fue atendido. Entonces se atrincheraron y hubo un enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos. Un estudiante de medicina que brindó apoyo a los heridos relata en su testimonio: «A eso de las 10 del mañana del día 6 comenzaron los disparos contra el pabellón 4-B. Posteriormente comenzaron a llegar más heridos pero era sobre el pabellón 1-A donde agentes de la policía disparaban mayor cantidad de fuego mediante instalazas y fusilería»³.

³ CVR, testimonio No. 700072

El mismo testimoniante narra que atendió, con los escasos medios con los que contaba, entre disparos y bombas lacrimógenas, a los siguientes heridos: Elio Quispe, con herida de bala en el cráneo; Jorge Muñoz, con un impacto de bala en el abdomen; Marco Camargo Callocunto, quien murió al no poder brindarle la atención adecuada ese mismo día 6; Richard Cahuana, con una bala en los glúteos; un tal Rolando cuyo apellido no recuerda y Víctor Olivos Peña, con una herida en el abdomen y el pie sangrante.

Había francotiradores que apuntaban sobre los que intentaban pasar de un pabellón a otro. En el pabellón 4-B de varones se encontraban unos 400 internos y en el 1-A, 135 mujeres. Otro testimoniante relata:

El 7 u 8 de mayo salieron de los pabellones los supervivientes y varios de ellos fueron asesinados con ráfagas de metralletas y morteros: «Tuvimos que caminar por encima de los muertos. Muertos por acá, muertos por allá, pedazos de cabezas por allá, pedazos de brazos por acá... te detenías un poco y un balazo, te detenías, por ejemplo, a recoger un amigo que habías vivido juntos, tu amigo estaba allí mal herido diciendo “llévame, llévame, estoy herido, llévame”, te detenías y pum, otro balazo...». Dice que allí murieron Tito Valle Travesaño y su esposa.⁴

El día 7 de mayo hubo un relevo de las fuerzas de la policía y de efectivos de la DINOES. Lanzaron bombas lacrimógenas. Hubo un llamado a las autoridades para solicitar que los heridos fueran evacuados pero fue desoído. En la noche hicieron salir a los heridos y a las mujeres embarazadas a la rotonda pero no los evacuaron porque se exigió que antes salieran todas las mujeres para el traslado. Fue el día 8, a las 6 de la tarde, cuando les dijeron que los heridos iban a ser evacuados. Uno de ellos afirma en su testimonio que alrededor de 30 heridos, incluido él, fueron evacuados por la ventana del mirador y que había mujeres en estado, gestantes, y el resto, la mayoría, eran heridos de bala.

El mismo testimonio revela que la evacuación fue nuevamente denegada y que los heridos pasaron toda la noche a la intemperie. El 9 de mayo salió un sol abrasador, los policías les prohibieron moverse. Los heridos no recibieron ninguna atención porque no permitían que nadie se acercase. El día 9 se realizó un operativo policial-militar denominado «Mudanza Uno». A las 3 p.m. se intensificó el ataque mediante instalazas y ráfagas de fusil. El ataque atronador duró hasta las 5 p.m. en que se escuchó que se abría la puerta frontal del Pabellón 4-B. Se oyó por un momento el canto de la Internacional y en seguida ráfagas de fusil y explosiones de granadas. Los heridos que iban llegando decían entre quejidos: «han asesinado a prisioneros».

Cuando salían rendidos –relata un testimoniante- varios internos fueron ejecutados, entre ellos los miembros del comité central del PCP-SL Deodato Juárez Cruzat, Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia Sanabria Pacheco y Tito Valle Travesaño⁵. En esto coinciden los testimonios de

⁴ CVR, testimonio No. 100146

⁵ CVR, testimonio No. 700072

cuatro internas mujeres que estuvieron en el pabellón 1-A. Coinciden también en que los heridos no fueron atendidos a pesar de los insistentes requerimientos.

En algunos testimonios se afirma que varios cadáveres fueron enterrados en el propio penal.

Algunos compañeros cuando nos van a ayudar a pasar del 1-A al 4-B mueren en el trayecto y algunos llegan agonizando y no sabíamos qué íbamos a hacer con los cadáveres [...] se propone que mejor enterrarlos y los enterramos en lo que ellos llamaban «tierra de nadie», eran cinco: Vilma Aguilar, Rosa Ponte, Carlos Aguilar, eran dos mujeres y tres hombres.⁶

Había muertos que tuvimos que enterrarlos, sus cuerpos se empezaban a descomponer... en el jardín del pabellón. Después dijeron que entre nosotros mismos nos habíamos matado, a los que querían rendirse. Falso, totalmente falso.⁷

De acuerdo a la versión oficial fueron 35 los reclusos que resultaron muertos pero en los registros de la Morgue Central de Lima la cifra es de 42 cadáveres de internos ingresados en esos días. Los sobrevivientes hablan hasta de 80 muertos.

No se permitió la mediación de un alto funcionario de la Comisión Interamericana de DD.HH. presente en Lima por esas fechas, ni de la Cruz Roja Internacional, tampoco de la Iglesia, ni de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La ausencia de un reporte oficial del operativo despertó sospechas fundadas de que se hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales.

El Presidente Fujimori, lejos de ocultar los hechos, los exhibió como una muestra de la eficacia de la nueva estrategia que estaba decidido a llevar adelante. En una conferencia de prensa, cuestionó la democracia pusilánime que dejó sin protección a 22 millones de peruanos para favorecer a los terroristas, y, a renglón seguido, advirtió que «vamos a restablecer el orden, el respeto y el principio de autoridad en los penales. El Estado no puede permitir que funcionen como escuela de formación política o lugares de descanso de los delincuentes terroristas»⁸. Era, evidentemente, el inicio de una nueva estrategia contra el terrorismo que, legislativamente, se materializaría en la dación de los decretos ley Nros. 25475 y 25744, que establecieron el régimen de máxima seguridad, el aislamiento celular, la reducción de las visitas y de los beneficios penitenciarios, entre otras medidas. El 12 de septiembre de ese mismo año, Abimael Guzmán, líder del PCP-SL fue capturado.

Con el resultado del motín de mayo de 1992 en Castro Castro, el presidente Alberto Fujimori, había lanzado un claro mensaje respecto de su idea de la autoridad. El motín no sólo fue debelado tan sangrientamente como los anteriores (murieron 52 internos) sino que marcaría el inicio de un sistema penitenciario destinado a poner contra la pared al interno, minar su moral y hacerle sentir a cada momento que estaba derrotado. El aislamiento celular fue la mayor expresión de la dureza del régimen. Los internos pasaban 23 horas y media al día dentro de una celda,

⁶ CVR, testimonio No. 700088

⁷ CVR, testimonio No. 700191

⁸ Diario El Comercio del 9 de mayo de 1992

generalmente de dos por tres metros, que albergaba a tres personas, dos dormían en camas y una en el suelo. Las comidas eran pasadas por debajo de la puerta y a la menor protesta por su mala calidad les limitaban la salida al patio a sólo unos minutos, cada quince días o un mes.

Las prisiones de máxima seguridad fueron construidas dando prioridad al factor seguridad y no al tratamiento penitenciario al que todo interno tiene derecho. Muchas de las celdas carecían de servicios higiénicos y las pequeñas ventanas, en forma de persianas, impedían la iluminación natural y la ventilación. Un interno recuerda que en esos años del fenómeno del niño, la celda era un horno: «Por intervención de la Cruz Roja logramos que al menos la ventanita de 15 centímetros se quede abierta para que ventile»⁹.

Se bloqueó toda comunicación con el exterior en procura de desconectarlos con la vida del país y de ese modo cancelar cualquier posibilidad de influir sobre los acontecimientos o enviar mensajes a los miembros de sus organizaciones. Sólo los familiares directos, previa carnetización, podían verlos. Para hacerlo, pasaban por registros corporales claramente vejatorios que incluían, en el caso de las mujeres, revisiones vaginales.

La visita discurría por locutorio, una vez al mes y por media hora: «Ocho años por el locutorio, no poder tocar a nuestros familiares, el sufrimiento era también castigo para ellos. La malla era de un centímetro cuadrado y era doble, ni nuestros dedos entraban»¹⁰.

Así como para el trabajo se les negó todo material, para la escritura igual. No podían contar con lápiz y papel, y menos luz eléctrica para la lectura. Dos internas lo cuentan de este modo, «no querían que trabajemos, estaba prohibido hasta el punto que si nos encontraban algo, una aguja, algo que sirva para trabajar, nos castigaban quitándonos el patio 15 días¹¹»; «estuvimos aisladas y prohibidas de todo y nos fue negado el derecho a trabajar, pensar, escribir, leer y comunicarse»¹².

La alimentación era muy deficiente. Varios testimoniantes coinciden en señalar que venía con heces de ratones, virutas de metal, vidrios molidos y que incluso escupían y orinaban sobre ella. A estas agraviantes prácticas se sumaba la limitación de acceso a comidas complementarias que los familiares sí podían traer a otros internos en los días de visita. Esta deficiencia se extendía a las atenciones legales, sociales y de salud. Casi no había medicinas para el tratamiento y se incrementaron enfermedades como la tuberculosis.

Estas condiciones de total incomunicación le dieron a la autoridad penitenciaria facultades ilimitadas. Su poder dentro del penal no era fiscalizado por nadie lo que facilitó la multiplicación de los maltratos. Las requisas eran sinónimo de golpes. Si encontraban los alimentos del día, los arrojan al baño o los dejaban regados por el piso. Las pocas cosas que tenían eran destruidas, quemadas. En algunos casos las lesiones eran graves como este interno que en su testimonio cuenta que un día:

⁹ CVR, testimonio No. 700400

¹⁰ CVR, testimonio No. 700136

¹¹ CVR, testimonio No. 700136

¹² CVR, testimonio No. 700184

[...] un señor me pasa una nota que decía, amigo, estamos aquí presos y cualquier cosa que necesites estamos aquí para ayudarte. Sabía que no tenía visita. Esa nota la encuentra el policía, me pregunta quién te la ha dado, me saca de la celda, me lleva al frente y me comienza a pegar. Cada uno debe vivir por su cuenta así se mueran, me dijo. Me pegaba con una manguera envuelta con alambre. Yo estaba allí tirado en el piso y él apretando mi rodilla me daba con las dos manos en la planta de los pies. Me dejó bien enfermo. Recuerdo que no podía andar. Quince días estuve echado, no podía moverme. No me llevaron al tópico.¹³

Era frecuente también que en los traslados externos, conocidos como «lanchadas», los internos pasaran por un callejón oscuro donde recibían una golpiza y, enmarcados, los arrojaban al carro sin saber cual era el penal de destino. El trato dispensado no tenía, obviamente, ningún objetivo rehabilitador. Según los mentores del régimen, no bastaba con la supresión de la libertad sino que además había que castigarlos hasta el límite de su resistencia. Este sistema, violó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos dadas por la Organización de las Naciones Unidas.

2.22.2. Detenidos y torturados

Los maltratos y violaciones a los derechos humanos en contra de personas detenidas ocurrieron a lo largo de los veinte años de violencia subversiva. La dureza de la cárcel sólo es comparable por su gravedad con los hechos ocurridos en otras dependencias del Estado en los días que seguían a las detenciones. Estamos hablando de inadecuadas condiciones en las que se cumplió la detención, así como de los métodos de «investigación» a los que fueron sometidos los detenidos, que en buen romance implicaban torturas, y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos hechos se produjeron en ambientes de la DIVICOTE, JECOTE, DIRCOTE, DINCOTE, bases y cuarteles militares, comisarías, jefaturas policiales y centros de detención provisional. Casi la totalidad de los testimoniantes revela haber sido objeto de alguna forma de tortura, lo que convierte a esta violación del derecho a la integridad física y psicológica en sistemático y generalizado, rasgos propios de los delitos de lesa humanidad. Se incluye en esta parte los hechos ocurridos en dependencias policiales y militares por ser lugares de detención referidos constantemente en los testimonios de los internos.

2.22.2.1. Graves violaciones a derechos humanos en dependencias policiales (DINCOTE, DIRCOTE, comisarías y jefaturas)

Los detenidos cuentan a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que fueron ubicados en celdas pequeñas sin cama ni colchón. Se les privó de sus alimentos y en muchos casos no se les permitía

¹³ CVR, testimonio No. 700461

utilizar los servicios higiénicos. Los mantenían durante varias horas con las manos hacia arriba o de cuclillas, o de pie vendados contra la pared, con la finalidad de causarles una extenuación física. A esto se le llamaba «el ablandamiento», paso previo a la tortura. Una declarante señala que al ser detenida y trasladada a la DINCOTE de Lima, fue ubicada en la celda número 8: «Yo estaba aislada, sólo había una rendija de 10 por 10 para que entrara el aire. Por varios días no me dejaron ir al baño, dormía con un periódico y una frazada que me llevó mi familia después»¹⁴.

Otro declarante refiere que durante su detención en la DINCOTE de la ciudad de Abancay, fue ubicado en una celda de un metro cuadrado, «Yo estaba solo en la celda, era de un metro cuadrado, no puedes estirar ni el pie; (era) chico y era oscuro, no tenía colchón, en el rinconcito era su baño.»¹⁵

Otros testimonios dan cuenta que sumergían a los detenidos en una tina de agua o los llevaban al mar e intentaban ahogarlos. Luego los devolvían a sus celdas completamente mojados, sin posibilidad de mudar de ropas y sin que se les proporcione frazadas u otro tipo de abrigo.

En la DINCOTE de Lima un declarante recuerda que,

Al tercer día me metían a un cilindro con Ace, luego me golpeaban en las yemas de las manos, luego me dijeron que me iban a hacer «el peluquero», me arrodillaban y con el zapato me golpeaban en el cuerpo cabelludo [...] sentía un dolor horrible [...] en dos momentos perdí el conocimiento [...] me ponían una frazada mojada y hacía frío.¹⁶

El fenómeno de la tortura se fue intensificando a medida que avanzaba el conflicto armado. Examinadas las modalidades empleadas, se advierte la forma rudimentaria de esta práctica en la década del 80, sofisticándose en los 90, al punto de casi no dejar huellas gracias a los envoltorios de jebes, sogas o frazadas que amortiguaban el impacto de los golpes,

me llegaron a romper la costilla del lado izquierdo [...] colgaduras, fue después de dos días, primero eran golpes y después nos decían que todo lo que habían oído eran tonterías y que querían cosas más fuertes [...] no les satisfacía con lo que le decía [...] nos comenzaron a atar de las manos y a levantarnos, (las manos) hacia atrás, nos pusieron una especie de un material un plástico, como jebe y nos comenzaron a amarrar y nos levantaron, pensé que me habían roto los brazos, nos tenían en eso y jugaban con corriente, nos pasaban corriente en el cuerpo (...) nos tenían un rato ahí en el piso después de golpearlos y nos despertaban con corriente.¹⁷

Numerosos testimonios contienen los detalles de la aplicación de estas modalidades:

¹⁴ CVR, testimonio No. 700228

¹⁵ CVR, testimonio No. 700340

¹⁶ CVR, testimonio No. 700473

¹⁷ CVR, testimonio No. 700568

2.22.2.1.1. La «tineada»

Esta forma de tortura consistía en sumergir a la persona detenida en una tina llena de agua. Se la ataba de los pies con una cuerda sujeta en el techo. Luego la persona era bajada a la tina de agua y subida, sucesivamente. Una variante de esta modalidad agregaba el uso de una tabla a la que se ataba al detenido, desnudo y vendado, y se le echaba enseguida a la tina para sumergirlo una y otra vez en el agua.

En abril de 1993, cuenta un testigo detenido en Puerto Maldonado, que al tercer día, cuando llegaron efectivos policiales del Cuzco, empezaron a torturarlo,

ellos nos hicieron todo...de lo peor...primero la colgada con las manos atrás amarradas, con la finalidad que aceptaras lo que te estaban diciendo...muchos tenían que reconocer por la tortura...detergente disuelto...lo que le llaman la tiniada...y cargas eléctricas en los genitales...también quemaduras de cigarrillo que aún tengo las marcas...y golpes ...las secuelas ahora se van sintiendo...ellos nos dijeron que nos íbamos a pudrir en la cárcel y por eso no temían que sepamos sus nombres, hasta se sacaron la capucha, y nos decían conózcanme...nos pegaban con libros, con varas...unos se hacían lo buenos, y otros los malos.¹⁸

En la estación de la policía de investigaciones de Chíncha, relata una declarante que fue desnudada,

[...] luego que me sacan, escucho que le dice uno al otro, sácale la ropa [...] me sacaron la ropa, me enmarcaron los pies, pensé que me iban a matar [...] me han levantado y me hundieron al agua ahogándome, me metieron totalmente en algo lleno como colgándome de manos atrás, he sentido que me han metido todo al agua sentí ahogarme no aguantaba más luego me sacaban y me decían que sí, que tú has hablado en la radio¹⁹.

Y agrega,

[...] yo sentía, (que) me sumergían toda la cabeza dentro para que me ahogara, y como se daban cuenta de que yo no respiraba, me sacaron y me decían que me pasaba de viva y otra vez hasta que me atoraba.²⁰

Al agua de la tina le solían agregar detergente, ají y hasta excrementos, lo que provocaba fuerte ardor en los ojos y la garganta cuando este líquido era tragado.

Efectivos policiales de la PIP de Huaraz, en una ocasión, narra el declarante, lo condujeron a dicha dependencia en donde fue torturado de varias maneras. En una de ellas fue echado sobre una tabla de tal forma que su espalda tocaba la madera y su cabeza sobrepasaba el borde de la tabla, luego lo vendaron, envolvieron con jebes y atado con una soga: «se supone me pusieron al borde de

¹⁸ CVR, testimonio No. 700562

¹⁹ CVR, testimonio No. 700567

²⁰ CVR, testimonio No. 700012

la tina, y levantaban la tabla y mi cabeza entraba al agua y al sentir el agua uno siente, tenía sabor a podredumbre, heces, con ace».²¹

2.22.2.1.2. «Palanqueada» o «pollo broster»

El detenido era colocado en posición decúbito ventral sobre el piso. Uno de los torturadores se sentaba sobre su cintura y le empujaba ambas manos hacia adelante; el otro, colocaba la cabeza del detenido entre sus piernas, tomaba sus manos y terminaba de jalarlas hacia adelante a modo de palanca. Un testimoniante, detenido en 1990 y llevado a las instalaciones de la Policía Técnica de Caraz describe la forma en que fue golpeado y torturado,

me tiraron al piso y me quitaron toda la ropa [...] con los brazos hacia atrás comenzaron a torcérme los para adelante y en la planta de los pies uno con una vara comenzó a golpear [...] en el suelo, lo que le llaman la palanqueda o pollo broster, porque te ponen los brazos para atrás, uno se arrodilla pone sus piernas entre tu cabeza y agarra los brazos y otro se sienta en tu espalda y empuja los brazos entre dos [...] uno jala y el otro empuja y otro me golpeaba en la planta de los pies.²²

2.22.2.1.3. «La colgada» o «la pita»

Fue la forma de tortura más generalizada. Una de sus variantes consistía en colocar a la persona detenida, generalmente desnuda o envuelta en jebe, sogas o frazadas, con las manos atadas hacia arriba. La soga pasaba por una especie de polea ubicada en el techo que servía para levantar y bajar constantemente al detenido. Esta tortura se complementaba con golpes, manoseos, varazos e intentos de violación en el caso tanto de mujeres como de varones. Al respecto, un declarante cuenta que en la PIP de Huaraz, una de las noches en que lo torturaban, fue trasladado a un ambiente en donde los desnudaron, le ataron las manos hacia atrás y le envolvieron el cuerpo al parecer con un jebe: «tenían, creo, algo en el techo porque yo no veía, me amarraron con hilo y estuve colgado con las manos hacía atrás [...] me preguntaban una y otra cosa que ni siquiera recuerdo, cada vez que venían y no hablaba simplemente daban un pequeño jalón al pie y te hacían gritar»²³.

Otro testimoniante le contó a la Comisión de la Verdad, este escalofriante relato,

[...] me llevaron a otro ambiente donde había una cuerda amarrada al techo, me pusieron los brazos atrás, me vendaron, parecía cuero o jebe, los brazos cruzados hacia atrás, tenía enmarcados los pies, los cuales con la culata del fusil chancaron las marrocas para que se ajuste lo máximo, yo sentía como si las marrocas me estuviera rompiendo los tobillos.²⁴

²¹ CVR, testimonio No. 700493

²² CVR, testimonio No. 700563

²³ CVR, testimonio No. 700493

²⁴ CVR, testimonio No. 700563

2.22.2.1.4. Descargas eléctricas sobre el cuerpo

Las descargas eléctricas eran aplicadas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los genitales, los senos, dedos de manos o plantas de los pies. Otros detenidos eran previamente desnudados y mojados. Y en ocasiones se envolvía a la persona en jebes, plásticos o frazadas y luego se pasaban las descargas eléctricas.

En la JECOTE de Huaraz, un declarante relata que en, «una oportunidad me han pasado como electricidad, con cable, me echaban agua, me parecía que era una toalla una frazada, algo así yo estaba desnudo ellos me sacaban la ropa después me han golpeado con esos cables que estaba con electricidad»²⁵.

Otra declarante refiere que fue detenida en julio de 1986 en la ciudad de Tarma por efectivos del Ejército Peruano del Cuartel de la Oroya y trasladada a la DINCOTE en Lima. En esta dependencia fue maltratada, la introdujeron en una tina con agua sucia y le pasaron corriente eléctrica, «te meten en el agua y después descargas eléctricas, en la vagina, en las manos y en la espalda»²⁶.

Y otra recuerda que, «el dolor es terrible y la descarga no es nada en comparación de las secuelas; se abren rojas las zonas afectadas, los pezones se te abren y sangran, uno no puede ponerse el brasier por el dolor, ni caminar bien»²⁷.

2.22.2.1.5. Intentos de ahogamiento en el mar

En la DINCOTE de Lima, en 1993, un declarante fue torturado en repetidas ocasiones. Lo llevaban a la playa para interrogarlo e intentaban ahogarlo, «nos ataron los pies con las manos y nos pusieron la frazada y nos soltaron al agua [...] ellos agarraban las frazada y nos soltaban y cuando ya estábamos casi ahogados nos sacaban y nos decían: “bueno van a hablar o no”, teníamos que auto inculparnos, [...] tenía miedo de morir»²⁸.

2.22.2.1.6. Violación como forma de tortura

La violación sexual y la violencia sexual, han sido utilizadas como formas de tortura, tanto contra varones como contra mujeres. Un testigo detenido en la DINCOTE de Lima, contó este pasaje particularmente dramático,

²⁵ CVR, testimonio No. 700238

²⁶ CVR, testimonio No. 700041

²⁷ CVR, testimonio No. 700184

²⁸ CVR, testimonio No. 700568

[...] después de eso, (de tomar una taza de café que le dieron los efectivos policiales) no podía contenerme, se me caían las lágrimas y luego me dijeron «te crees machito», ellos me sacaron la ropa y por el ano me metieron un palo, no sé que más. Mientras eso sucedía me decían que era terrorista, yo acepté todo, firmé papeles, me dijeron que iban a traer a mi madre y hermanos.²⁹

Y una mujer narró que cuando se encontraba detenida en la DINCOTE, fue trasladada a la playa en un vehículo junto con otros detenidos, la colocaron en el asiento delantero del vehículo y la desvistieron a la fuerza. Luego la bajaron y en la arena fue violada, «me violaron ellos y con sus armas. Estaba desesperada pensando que iba a morir, me senté en la arena con las piernas abiertas y los brazos doblados. Me insultaban todo el tiempo, y sentía en todo momento el contacto de cuerpos. Estaban arrodillados sobre mí»³⁰.

Luego la arrojaron al mar amenazándola con ahogarla sino confesaba, hasta que perdió el conocimiento. En otras ocasiones las amenazaban con violarlas, como lo ocurrido en la DINCOTE en julio de 1989,

[...] me amenazaban con violarme, me metían la mano en mis partes genitales y no uno, varios, no podía defenderme y como no podían violarme me vejaban y puso su pene por la cara, querían que abra la boca, es humillante y eso era cada vez que me interrogaban, yo tenía 18 años [...] me decían terruca; no abres, con cuántos te habrás acostado [...] me decían que me iban a probar y que iba a probar lo que era rico y me cacheteaban, puñetes en el estomago y en la espalda, golpes contra la pared y enmarrocada, tanto eran los golpes que arrojé sangre por la boca y la nariz.³¹

Otras formas de tortura practicadas fueron la del «teléfono» y «el potro». Muchas veces estas torturas se llevaron a cabo en ambientes especialmente preparados para ello, lo que demuestra que respondía a un patrón de comportamiento. Otras se cometieron también en jefaturas policiales y comisarías como la de San Martín de Porres.

2.22.2.2. Violaciones a derechos humanos en dependencias militares (bases, cuarteles)

2.22.2.2.1. Inadecuadas condiciones de detención

Los detenidos en la Base Militar de Chorrillos (DIFE) declararon haber sido ubicados en ambientes que anteriormente habían sido usados como establo para los caballos. En Juanjui, los detenidos en el cuartel del ejército fueron metidos en una especie de reservorio pequeño, «me pusieron en un hueco de cemento, era como un reservorio pequeño, estaba solo; en la noche me echaban agua, era puro cemento y como tenía mi cuerpo pegado a la pared me agarraban del cabello y me golpeaban

²⁹ CVR, testimonio No. 700334

³⁰ CVR, testimonio No. 700008

³¹ CVR, testimonio No. 700056

contra el muro. Era un cuadrado, una especie de depósito donde se guardaba agua o algo. Estaba sentado no podía estar parado»³².

Y en el cuartel de Huánuco ocurría lo siguiente: «me depositan en el calabozo que se llama el bote, es un hueco con tapa tipo buzón [...] era pequeño, cuando estás sentado no podías estirarte tus pies, no lo puedes estirar en cuclillas nomás puedes estar»³³.

Con relación a los alimentos, a diferencia de la DINCOTE y/o dependencias policiales, las bases militares tenían asignadas raciones para los detenidos, sin embargo, los alimentos eran de mala calidad, «la comida (era) de la tropa, una comida de porquería que uno tenía que comer, pero en fin horrible, [...] venía cuatro cinco pescaditos, cabecita con espinas, como los que los traían eran los perros [...] ellos se lo comían todo»³⁴.

En las bases y cuarteles militares, al igual que en las dependencias policiales, no hubo una fiscalización de parte de alguna autoridad sobre las condiciones en las que permanecían los detenidos.

2.22.2.2.2. Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

Varios de los declarantes que permanecieron detenidos en alguna dependencia del Ministerio de Defensa, señalaron que eran trasladados de una base o cuartel a otro, generalmente en helicópteros. En el trayecto fueron objeto de intentos de lanzamiento de la nave. Otros aseguran haber sido lanzados atados de una cuerda. Al respecto una declarante refiere que cuando fue detenida junto con varias personas en mayo de 1982, fue trasladada a un cuartel acantonado en la localidad de Vizchongo, Cangallo, Ayacucho. Durante el traslado en el helicóptero hacia la base la empujaban y la jalaban preguntándole dónde estaba la guerrilla y las armas.

Un declarante, detenido a los 19 años de edad, en junio de 1992, cuenta que en el cuartel del ejército de Juanjui, fue torturado y arrojado a un río. Lo metieron a un costal de polietileno, atado con las manos hacia atrás y luego lo tiraron al agua,

[...] yo sentía que flotaba, como el costal era de polietileno que demora en meterse al agua; claro que había oxígeno dentro, habrá demorado unos diez o quince minutos adentro del agua y sentía que flotaba, cada vez entraba el agua y se hacía pequeñito el ambiente del oxígeno [...] no tenía las fuerzas para mover los brazos y comencé a agitarme cada vez más y era momento de votar pura agua, habré demorado en el agua no sé porque pierdo el conocimiento.³⁵

Las secuelas de las detenciones y del encierro se manifiestan en la salud física de los internos. Paden con frecuencia dolores a la columna, a los músculos, adormecimientos de las

³² CVR, testimonio No. 700488

³³ CVR, testimonio No. 700329

³⁴ CVR, testimonio No. 700569

³⁵ CVR, testimonio No. 700448

extremidades, tuberculosis, úlceras. Otros muestran los tabiques rotos, la visión debilitada y severos problemas bronquiales. Hay, igualmente, problemas de salud mental y otros de tipo familiar y social.

2.22.2.2.3. Tortura psicológica

Además de las torturas físicas, los detenidos también fueron sometidos a torturas psicológicas.

2.22.2.2.3.1. Detención de familiares (esposa, hijos, padres, hermanos)

El testificante dio la dirección donde vivía, pero al llegar la policía encontraron el cuarto sin sus cosas, porque la dueña de casa lo había retirado al enterarse que estaba detenido, por lo que la policía detuvo al dueño de la casa a su esposa y a su hija de 15 años, llevándoles a la comisaría de Jaén, donde le amenazaron con violar a su hija, si acaso no declaraban como ellos querían.³⁶

Me amenazaban con que mi hijo iba a ir a parar al grupo Rodrigo Franco, y que si llegaba allí ya no lo iban a encontrar e inclusive yo iba a ir a parar a manos de ellos, y si llegaba a allí, ya nadie me iba a encontrar».³⁷

El año de 1990, detienen a mi hermana Haydee Gómez Paquiyaury, 11 días en la DINCOTE, esto para presionar a su hermano para que se auto inculpe».³⁸

Ante mi rehusamiento, los policías pasaron a usar otro método del chantaje y la tortura psicológica amenazando detener a toda mi familia y meter en prisión a mi esposa y a mi hijo a un albergue infantil, lo cual también rechacé, nos reunieron en un local acondicionado donde había en todos los alrededores micrófonos escondidos, a mi esposa y mi hijo de apenas 3 años para que conversáramos sobre nuestra situación, y para que recapacitemos sobre nuestros hijos y familiares. Pero su treta tampoco les dio resultados porque lo que oían eran los reproches y las imputaciones e infamias que estaban cometiendo con nosotros, sin embargo, mi esposa y mi hijo seguían detenidos 10 días en la misma celda.³⁹

2.22.2.2.3.2. Amenazas de tortura contra familiares

la policía me detiene cuando vivía en Comas en el Km. 18 y medio, primero han detenido a mi esposa <R. I. T. C>, a mis dos hermanos <A. L. R.> de 22 años y <F. L. R.> de 24 años, a mi padre <H. L. R.> para chantajearme, el pretexto era que me auto inculpara»⁴⁰.

Allí los maltratos y torturas combinaron golpes físicos, desde patadas en todo el cuerpo, ser colgados de los brazos, y algunos sometidos a electricidad, así como maltratos psicológicos, chantajes como afectarlos y detenerlos a sus padres. El declarante manifiesta «muchos declararon y afirmaron lo que la policía quería escuchar».⁴¹

³⁶ CVR, testimonio No. 700608

³⁷ CVR, testimonio No. 700398

³⁸ CVR, testimonio No. 700212

³⁹ CVR, testimonio No. 750095

⁴⁰ CVR, testimonio No. 700219

⁴¹ CVR, testimonio No. 510195

Ingresaron a mi domicilio con armas de largo alcance y lo detuvieron junto con su hermano menor, los golpearon, no les permitían hablar, ni explicaban el motivo de detención. Asimismo le golpearon a su madre por interceder en la detención de sus hijos». Un efectivo dijo, refiriéndose a su esposa: «A esa chola también hay que llevarla. Son terroristas. Si hablan hay que matarlos. Si no siguen hay que desaparecerlos».⁴²

2.22.2.2.3.3. Mostrar a familiares desnudos o en momentos en que eran torturados

Fue conducido junto a su esposa al mar, donde fue desnudado y duramente torturado, al igual que su esposa con los ojos vendados y las manos amarradas a la espalda. Le hicieron escuchar cuando interrogaban a su esposa y le decían, «Habla terruca de mierda, porque tu esposo ya nos dijo la verdad,

Alcanzo a oír que le respondía, «yo no sé nada, no sé nada, si mi esposo ha hablado, el problema háganlo con él, yo quiero ver a mis hijos», y después le quitaron la venda de los ojos y vio que su esposa y él estaban completamente desnudos, boca abajo y con las manos atadas hacia atrás, sobre la arena. Uno de los policías le dijo, «mira compadre no queremos hacerte daño, solamente quiero que nos digas dos cosas... y te vamos a dar libertad a ti a tu señora»⁴³, y al ver que no tenía nada que decir violaron sexualmente a su esposa y a él lo golpearon duramente hasta que perdió el conocimiento.

A su esposa la ponen en libertad, luego de 11 días, después de haber sido ultrajada en presencia del declarante.

Otro testimoniante narra que, «un día en mi presencia violaron sexualmente a tres chicas, a cada una la violaron más de 30 soldados, luego las mataron cortándoles con una motosierra sus miembros y desaparecieron sus cuerpos»⁴⁴.

El declarante fue enseguida amenazado con ser asesinado de la misma forma.

2.22.2.2.3.4. Escuchar los gritos de otros torturados

[...] en la JECOTE le torturaron, le torcieron los brazos por encima de la cabeza, le colgaron, le trataron de ahogar y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Escuchaba ruidos y gritos, por lo que cree que a otros detenidos también se les torturaba.⁴⁵

2.22.2.2.3.5. Escuchar el llanto de sus hijos menores

Un declarante precisa que, además de la tortura física, le aplicaron tortura psicológica, haciéndole escuchar grabaciones en las que sus hijos lloraban y le pedían que diga la verdad: Han sido 5 días de tortura física, después viene la presión psicológica, me decían «“si tú no reconoces,

⁴² CVR, testimonio No. 700823

⁴³ CVR, testimonio No. 700593

⁴⁴ CVR, testimonio No. 700596

⁴⁵ CVR, testimonio No. 700808

se va a joder tu padre y tus hermanos y el carro se lo vamos a quitar”, es allí cuando me auto inculpo, y acepto que apoyaba»⁴⁶.

Otra detenida, declara,

[...] (En DINCOTE), le dijeron que le habían hecho seguimiento, le mostraban fotos entrando a la clínica con su papá, otra foto en Zárate en una capilla, pero igual la detuvieron, durante un mes, no tuvo maltrato físico, pero sí maltrato psicológico, la amenazaban con llevar detenido a su padre quien se encontraba internado en la clínica Internacional, y su padre murió cuando estaba aun en la DINCOTE.

El maltrato psicológico consistía en hacerme escuchar el llanto de mi hijo a quien todavía estaba lactando y cuando solicitaba que me llevaran donde mi hijo me decían que no estaba allí, insistiendo siempre para que diga dónde estaba.⁴⁷

2.22.2.2.3. Condiciones de salubridad en los penales

El hacinamiento, la estrechez de las celdas y la poca atención que la autoridad penitenciaria ponía en los servicios, hizo que las condiciones de salubridad de las cárceles fueran las peores. Una detenida en la base militar de La Joya manifiesta con rabia que «hubo condiciones siniestras», y señala que en su celda de detención debía llamar a un custodio para que jalara la palanca del inodoro luego de hacer sus necesidades fisiológicas, pues ésta no se encontraba al alcance de sus manos; igualmente tuvo que depender de él hasta para que le alcanzaran su toalla higiénica.

En algunos casos la cohabitación de dos personas se tornó problemática, por decir lo menos. En Chorrillos, una testimoniante relata que ella y su compañera de celda se vieron en apuros cuando les privaron del agua teniendo a un bebé en la celda. Situaciones como éstas se presentaban tanto en penales acondicionados como en los que fueron construidos para internos por terrorismo. Las celdas no consideraban la necesidad de servicios higiénicos.

A continuación algunos testimonios que revelan esta situación:

- **Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Miguel Castro Castro (Canto Grande)**

La colocaron en una celda con dos personas en un primer momento y después de algunos días con cinco. Además de la incomodidad de la que sufrían, no les permitieron tener agua en la celda.⁴⁸

Estaban en celdas bipersonales pero era compartida por tres personas en un espacio de un metro y medio por tres. El baño estaba en la misma celda.⁴⁹

Estuve reducido, a tres internos por celda, en una celda pequeñísima que habían hecho de 2 metros cuadrados. Allí dormías, allí comías, allí te bañabas, allí defecabas, hacías todas tus necesidades allí, allí trabajabas.⁵⁰

⁴⁶ CVR, testimonio No. 700619

⁴⁷ CVR, testimonio No. 700021

⁴⁸ CVR, testimonio No. 700003

⁴⁹ CVR, testimonio No. 700756

- **Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial de Mujeres de Chorrillos**

Había habido una interna que había dado a luz, tenía una bebita y la ponen a vivir conmigo. ¡Imagínese! si ya era difícil acostumbrarnos a vivir en un espacio tan reducido, encerradas 23 horas y media. Mucho más difícil se nos hizo vivir con una criatura, con una recién nacida. A veces, a la bebita le daba cólico de gases. No teníamos nada, absolutamente nada que darle, porque la chica no tenía ni termo, porque no nos permitían ni termo. En la jarra recibíamos agua hervida, porque venía la jarra del medio día, nos daban una jarra de agua.⁵¹

Cuenta una interna que en una celda diseñada para dos personas vivían seis. Eran celdas oscuras y húmedas y tenían incorporado el baño. «También son muy frías porque las ventanas que se encuentran enfrente de cada una, han sido diseñadas de tal forma que el aire ingresa por el suelo, sólo le daban dos frazadas a cada interna en el invierno.»⁵²

Totalmente oprobioso... Comienza a funcionar el año celular... Metida en un cuartito chiquitito para dos personas... Después me van hacinado con tres personas más, una dormía en el suelo, así rotábamos. No había ningún tipo de aseo... totalmente represivo, terrible, no podíamos dar un paso más acá o más allá... La cárcel de Chorrillos era la más represiva y retrógrada en el trato. Dice que era como una especie de venganza.⁵³

Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Ica (Cachiche)

Durante 15 días no les fue dada agua ni ropa; las presas que se encontraban en dicho penal, compadeciéndose, ayudaron a las recién llegadas brindándoles comida, agua y sus propias ropas.

En el mes de setiembre llega al penal, en calidad de director, un capitán llamado Canchesto Vargas quien... nos restringía el agua, la comida y las visitas, tapió todas las ventanas y, cuando producto de ello se desató una epidemia entre las internas...⁵⁴

- **Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Trujillo (El Milagro)**

Allí no había penal de máxima seguridad, pero había un pabellón adecuado, era el tercer piso y cada celda que era para cinco, habíamos quince... me tocó dormir cerca al baño». «Refiere que la celda era aproximadamente de dos metros y medio por tres, había cinco camas, dormían dos internos en cada cama y 5 dormían en el piso. Dentro de la misma celda estaba el baño.»⁵⁵

- **Penal de Chiclayo**

Refiere un testificante que este penal, ubicado a 3 cuadras de la plaza de armas, había sido anteriormente una hacienda y que sus caballerizas habían sido acondicionadas para los sentenciados a penas altas: «Eran de este tamaño, donde cabía una cama. Era la cama y un pedacito

⁵⁰ CVR, testimonio No. 700069

⁵¹ CVR, testimonio No. 700020

⁵² CVR, testimonio No. 700124

⁵³ CVR, testimonio No. 700748

⁵⁴ CVR, testimonio No. 700098

⁵⁵ CVR, testimonio No. 700784

así, donde solamente se podía parar. Lo único que habían hecho nada más era ponerle piso, cemento y tenían la forma de una tumba, no tenían ni baño, nada, o sea una no se podía parar dentro de la celda, no se podía caminar dentro de la celda»⁵⁶.

En estas celdas permanecía 23 horas y media del día, «Nos sacaban en la mañana, media hora solamente para bañarme, hacer nuestras necesidades, lavar nuestra ropa y media hora de patio que nos correspondía. En la celda teníamos que tener un bacín. En ese lugar estábamos todo el día, comíamos, dormíamos y hacíamos nuestras necesidades. ¡Era terrible!»⁵⁷.

- **Establecimiento Penitenciario de Pícsi (Chiclayo)**

Estuvo detenida bajo «duras condiciones de carcelería». Todos permanecían en celdas bipersonales oscuras que estaban en el sótano y no se le permitió salir a tomar sol durante tres meses. No tuvo visitas porque estaban prohibidas, tampoco se les permitía leer ni desenvolverse en ningún trabajo. «Los alimentos eran pésimos y no había atención médica»⁵⁸.

Respecto al trato y condiciones carcelarias una testimoniante dice que estaba en una celda bipersonal, «Teníamos media hora de patio, no teníamos luz en el día y era un lugar oscuro... No teníamos agua... uno tenía que buscar su envase para recoger el agua, un envase de 5 galones o sea que equivale a 30 litros... para demorar dos o tres días para utilizar para bañar, tomar...»⁵⁹.

- **Establecimiento Penitenciario de Sentenciados Régimen Cerrado de Máxima Seguridad de Yanamayo (Puno)**

No había agua. Venía de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pero había veces que no había agua, por ejemplo, en tiempos de heladas. Se congelaban las cañerías y no llegaba agua. A veces nos pasábamos con 2 baldecitos. Poníamos los bidones, se cerraba, por donde desaguaba el patio, cerraba y se acumulaba ahí en el patio. De eso se recogía con los bidones para echar en los baños y era vivir con 2 baldecitos de agua, hasta 6 días.⁶⁰

Vivíamos dos personas en una celda... para asearnos. Lo usábamos para lavar los utensilios que usábamos para comer y después para echar en el baño, porque ahí mismo nos ocupábamos en el baño y peor usábamos el agua para lavar las cosas o para hacernos un lavado, así ligero y echábamos con las justas unas tacitas de aguas y el olor del baño era horrible. Era insoportable el olor, le decíamos 'sáquennos, porque el olor del baño es insoportable, mire que no hay agua, aunque sea al pasadizo. Eso era lo más terrible, estar encerrados ahí con el frío y el olor del baño.⁶¹

Si llovía había agua, si no, nada. Poníamos nuestro balde esperando a Dios que nos de agua para lavarnos la cara.⁶²

⁵⁶ CVR, testimonio No. 700084

⁵⁷ CVR, testimonio No. 700084

⁵⁸ CVR, testimonio No. 700755

⁵⁹ CVR, testimonio No. 700767

⁶⁰ CVR, testimonio No. 700020

⁶¹ CVR, testimonio No. 700020

⁶² CVR, testimonio No. 700748

- **Base Aérea de La Joya (Arequipa)**

En la base militar hubo condiciones siniestras, el principio de que no viéramos, no escucháramos, que no habláramos, es decir de eliminar los sentidos y toda la capacidad para trabajar, para pensar, era el mismo objetivo que tienen en Guantánamo; no poder jalar la palanca del excusado cuando lo necesitaba, que no pudiera hacer uso del agua cuando me fue necesario, de poder echarme cuando tenía ganas, sino actuar como un animalito, dependiendo de otro, del que recluye, incluso para usar una toalla higiénica...⁶³

2.22.3. Intramuros

2.22.3.1. La cárcel como escenario del conflicto armado

Como era previsible, los senderistas, a medida que fueron cayendo presos, procuraron trasladar el partido a la cárcel. Lo que no estaba en los cálculos de nadie es el valor político que Abimael Guzmán le asignaría a la permanencia de sus partidarios tras las rejas. No solamente instrumentalizaría la vida exigiendo cuotas de sangre sino también la libertad. La cárcel era una línea más de batalla, quizá privilegiada por su visibilidad y contacto con el Estado; en ella el partido debía demostrar su consecuencia, resistiendo los rigores del régimen y mitificando el encierro. Pese a los altos muros que rodean las prisiones, los senderistas se las ingeniaron para estar continuamente en el ojo de la prensa y de la opinión pública. No fueron pocos los gestos de disciplina y de superioridad mostrados con el fin de no ser vistos como presos comunes. Pero también como forma de enviar mensajes de sacrificio hacia los que combatían fuera.

La estructura del partido se mantenía de una forma tan jerarquizada que incluso en El Frontón los miembros del ejército guerrillero popular recibían una mejor alimentación para estar más fuertes en caso de que hubiera enfrentamiento. Pero de toda su rutina carcelaria fue la educación la expresión más fuerte. Las «escuelas populares» que se habían constituido desde años antes en la ciudad y en el campo como mecanismos de concientización y de integración de militantes a partir del análisis de sus problemas locales, y como instrumento de distribución de cuadros en los organismos autogenerados y en el propio ejército guerrillero popular, les sirvió en la cárcel como eje de irradiación de su ideología y de captación de nuevos militantes. Le dedicaban muchas horas a la lectura y al adoctrinamiento procurando sobre todo nivelar políticamente a la gente que ingresaba con una formación muy pobre. Rendían exámenes en muchos casos con una inconfundible letra de imprenta, sobre materias propias de su ideología. El marxismo, en versiones rudimentarias, era impartido con la certeza con que se transmiten dogmas pétreos en un escenario acrítico. En Castro Castro, los llamados «jueves culturales», hombres y mujeres se reunían en uno de los pabellones y representaban escenas muy realistas de asesinato de policías, derribamiento de

⁶³ CVR, testimonio No. 700183

torres, coronadas por discursos políticos de aleccionamiento, en una especie de escalofriante teatro pedagógico.

Sobre la forma de vida de los senderistas en El Frontón durante los primeros años de la guerra, cuenta W. Zabarburú, ex interno: «SL organizaba su vida como partido y tenía un férrea disciplina y bastante eficaz, al interior» «Diariamente se podían ver grupitos pequeños que se encerraban y hacían escuelas, escuelas de militantes, que leían, discutían, y tercero, SL desarrolló lo que ellos llamaban “formas de lucha”, pues ellos consideraron la prisión como la “luminosa trinchera de combate”, pues así como había combatientes que luchan en el campo, en la ciudad, ellos luchaban dentro de la prisión y desarrollaban la guerra en condiciones de prisión, contra el Estado. Consistió en desarrollar una permanente sistemática y cotidiana acción de agitación» [...] «SL andaba en permanente guerra con el Estado».

En la cárcel el partido era la estructura que los cobijaba a todos y la escuela el medio de generar cohesión ideológica, autoafirmación en la presunta justicia de su causa y lealtad a los líderes, especialmente a Abimael Guzmán, considerado depositario de la última palabra en todos los aspectos de la vida. Fundidos en el partido e indiferenciados por la ideología, casi no quedaba espacio para la vida privada y, por consiguiente, para ensayar alguna duda razonable sobre su pasado o su presente.

2.22.3.2. La doble cárcel

La extrema intolerancia mostrada desde sus inicios se reprodujo en las relaciones con los otros internos. Un interno cuenta que desde que llegó fue presionado para organizarse internamente, en una oportunidad lo amenazaron con golpearlo físicamente si no lo hacía y tuvo que pedir cambio al pabellón piloto. Este testimonio coincide con el de dos internas que en un penal distinto relatan el infierno que ha sido soportar las discusiones entre «acuerdistas» y «felicianistas» y resistir el trato hostil por no ser parte de sus grupos. Porque no piensas como nosotras, eres una renegada, una arrepentida. Hay personas en los otros pabellones que están sometidas por el temor a que las traten de arrepentidas. No les dejan desenvolverse por sí mismas, relatan. El penal, además de privar de la libertad al procesado o sentenciado y someterlo a partir del año 1992 a reglas extremadamente duras, se convirtió en un escenario de doble carcelería para muchos de los internos. No sólo había que soportar el encierro sino, además, los actos continuos de hostilización que los presos por delitos de terrorismo y traición a la patria del Partido Comunista del Perú, el PCP-SL, realizaban en contra de los que no pensaban como ellos.

Aproximadamente unos sesenta presos provenientes de partidos de izquierda como Patria Roja, Bandera Roja o MIR fueron, a partir de 1981, en El Frontón y Lurigancho, hostigados de diversas maneras dada la proximidad física y la ausencia de control, a lo que los internos denominaron «la doble cárcel», en vista que se trataba de un castigo adicional.

Después de El Frontón llegamos a diferenciarnos físicamente de ellos, separándonos y dividiéndonos en un lugar que decíamos «El chaparral». Eso significaba salir del pabellón azul porque éramos sometidos a cierta coacción de parte del PCP-SL. Había mucha presión psicológica por imponer su móvil y género de vida, cuando en realidad no se condecía con como debía ser la practica de los detenidos políticos. Pero eso yo estoy hablando del 82, 83.⁶⁴

En otro testimonio se agrega, «Los senderistas tenían un delegado de sus filas que dirigía el pabellón y que algunas veces llamaban a todos los reclusos a gritar, cantar o reunirse».⁶⁵

Señala que, si bien algunas veces participaba de dichas actividades, en otras ocasiones había formas de evitarlas argumentando que estaba enfermo a causa de la comida. Cuenta además que, «todos hacían limpieza, todos cocinábamos, todos cargábamos agua para vivir, nadie se exceptuaba salvo algunos dirigentes como por ejemplo Morote, a ellos prácticamente había que atenderlos como a patrón».

La hostilización sistemática tenía como objetivo aplicar presión sobre los internos para que cierren filas con el PCP-SL. En algunos casos la intolerancia tenía forma de agitación y propaganda pero, en otras, recurrían al insulto, al chantaje y al amedrentamiento, incluso de familiares que llegaban al penal en los días de visita, «Llegué a Castro Castro en abril de 1995, ingresando al pabellón 2 B donde permanecí todo el año 1995 y 1996 y todo este tiempo sufrí presiones de parte de los internos organizados. En ese pabellón a veces me decían que era felicianista o Proseguir, luego fui trasladado»⁶⁶.

Otra interna cuenta,

Pidió estar en una celda sola, al saber esto las internas le comenzaron a decir traidora, que estaba traicionando la... quería estar sola... y le dijeron que iba a hacer escarmiento con ella, porque era «un mal ejemplo y otras chicas mas podían seguirme»...Su política era que todos me vieran mal, la policía, el Director y ellos mismos por mala conducta y hablaban con los demás internos, corrían todo tipo de informe, que era una soplona, que era la... me amenazaban, me insultaban y también comenzaron a hostigar a mi familia.⁶⁷

Al llegar al penal —relata una interna— que fue acosada por una reclusa que la conminaba a definirse como miembro del PCP-SL. Ante su negativa fue aislada y acusada de tener TBC, «Ellas marcaron todos mis utensilios para la comida y me prohibieron realizar cualquier otra actividad. Era considerada como nada»⁶⁸.

El examen médico que se hizo, para descartar la TBC, arrojó negativo. Sólo las oraciones, dice, la ayudaron a soportar las humillaciones.

⁶⁴ CVR, testimonio No. 700447

⁶⁵ CVR, testimonio No. 100146

⁶⁶ CVR, testimonio No. 700847

⁶⁷ CVR, testimonio No. 700398

⁶⁸ CVR, testimonio No. 700002

Todo esto ocurría en el pabellón B, donde se encontraban concentradas las reclusas que pertenecían al PCP-SL.

[...] creen que tienen la verdad absoluta, pero hay otras verdades. Creen que la realidad es la misma, y no es así. Es para volverse loca, [...] se creen dioses, repiten sus consignas.

Otra interna cuenta que fue recluida en el penal Miguel Castro Castro, donde estuvo 15 meses, allí,

[...] me di cuenta que mi apreciación del 87 fue superficial, y que realmente lo que hay en el penal era una dictadura y no un mundo justo, y fui más presa de ellas que de la policía, si no pensabas igual que ellas, tu pasabas a ser un enemigo, si tú preguntabas estabas en contra y ya me encontraba embarazada, en esa época tenía que cuidarme de la policía y de las internas.⁶⁹

El PCP-SL desarrolló, además, una campaña de hostigamiento y provocación sistemática contra la Guardia Republicana, incluso contra los empleados civiles. Esta hostilidad incluía gritos cotidianos de consignas como «guardia republicana carne de cañón», caldeando los ánimos de los guardianes, ya bastante alterados por los aniquilamientos a mansalva de efectivos policiales en las calles de Lima y otras ciudades.

2.22.3.3. Los desvinculados

Pese al predominio del Partido Comunista del Perú, el PCP-SL, dentro de las cárceles, y la presencia menos numerosa y menos beligerante de integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quienes, además, reclamaban para sí un perfil político propio, se dieron procesos de desvinculación ideológica y partidaria. De más de mil cien testimonios tomados en los penales, se pudo comprobar que aproximadamente el 50% de los internos se han desvinculado de las organizaciones subversivas a las que pertenecieron. Son gente que ha tomado distancia ideológica y partidaria del PCP-SL o el MRTA en algunos casos antes de caer detenidos pero en la mayoría de ellos mientras purgaban sus condenas. Aseguran en sus testimonios que ahora responden por sí mismos y que están dispuestos a pasar a un nuevo momento histórico en el que la lucha armada ya no tiene lugar.

En algunos casos la desvinculación se fue produciendo en la medida que descubrieron la crueldad de muchas de las acciones calificadas de revolucionarias y que no eran sino asesinatos, en su mayoría de población civil indefensa. Comprobar que el partido asesinaba los alejó para siempre y los llevó a recusar el proyecto violentista. En otros casos, han sido las discrepancias ideológicas

⁶⁹ CVR, testimonio No. 700023

el móvil del alejamiento. Pero también hubo quienes se acogieron a los beneficios del arrepentimiento para ganar su libertad.

El PCP-SL impuso sus reglas de organización pasando por encima de las circunstancias individuales de los internos. En la comida, por ejemplo, había quienes por sus dolencias gastrointestinales requerían una dieta especial que sus familiares les traían con esfuerzo, sin embargo, todo era centralizado a la fuerza, «pedí mi traslado de pabellón, pues no compartía la forma de vida con los senderistas organizados, sobre todo el compartir con las personas del pabellón todo lo que mis visitas me traían»⁷⁰.

No coincidir con sus ideas o retrasarse en las tareas encomendadas daba lugar a agresiones como se puede ver en los dos siguientes testimonios,

Luego se conformó un grupo de 20 internos que no querían mantenerse en ese pabellón, ya que era organizado, por lo que pidieron al Director del Penal que los cambiase de pabellón. Ante esto los organizados de ese pabellón los agredieron físicamente.⁷¹

Cuando es trasladado al penal Miguel Castro Castro, los subversivos organizados lo golpearon por no aceptar órdenes y acciones que tomaban como grupo, y que además no es el único caso de este tipo, por lo que el INPE lo reubicó en el 6A, pero allí lo rechazaban y se ha reubicado en el 6B.⁷²

La experiencia más interesante de desvinculación se dio en los pabellones piloto de Castro Castro. A fines de 1994, unos cincuenta internos decidieron desvincularse de los organizados y de sus prácticas políticas. Encontraron, felizmente, en los agentes pastorales de diversas iglesias, el apoyo y la comprensión que requerían para afianzar su desvinculación. Hoy son aproximadamente doscientos los que están en esta situación. Para el propósito reconciliador de la Comisión esta experiencia resulta enormemente aleccionadora. Un interno del penal Castro Castro, reflexiona de esta manera, «había tres prisiones, la prisión de las rejas de la autoridad, la prisión de los grupos organizados y la prisión mental para salir de las ideas que te habían conducido a las rejas, por eso la primera libertad que conquisté fue la libertad de mi conciencia dentro de las tres cárceles»⁷³.

En los primeros años de la década del ochenta había población penitenciaria perteneciente a grupos de izquierda no senderista. Un testificante cuenta que, «Lo que no se sabe es que el grupo de izquierda nunca llegamos a comulgar con la metodología de el PCP-SL. Hacíamos una lucha interna al interior de los penales, o sea armamos un *comité de presos políticos* al interior, de una lucha ideológica política bien fuerte por reprobar esos métodos que nos parecían bárbaros y que no tenían nada que ver respecto a las leyes humanitarias». También llegaron a separarse físicamente de los senderistas y trasladarse a otro pabellón. «Eso significó salir del pabellón “Azul”

⁷⁰ CVR, testimonio No. 700840

⁷¹ CVR, testimonio No. 700839

⁷² CVR, testimonio No. 700812

⁷³ CVR, entrevista a interno en taller de reflexiones sobre reconciliación en penal Castro Castro, noviembre del 2002

porque éramos sometidos a cierta coacción de parte de sendero. Había mucha presión psicológica por imponer su móvil y género de vida... yo estoy hablando del 82, 83». «El comité creció hasta tener 187 participantes a fines del 84. Esto provocó una tensión fuerte con los senderistas que desarrollaron una política como la del Frontón: considerar que Lurigancho también era una trinchera de combate»⁷⁴. William Zababurú manifiesta que «la separación de los senderistas fue importante y premonitoria porque logró salvar la vida de los “compañeros”, pues sospecha que cuando se dio la masacre de los penales pudieron haber muerto todos; también los no senderistas. Dice él que hay testimonios de quienes estuvieron presos en el otro pabellón durante esos momentos que fueron testigos silenciosos, casi impotentes para evitar lo que ocurrió en el pabellón industrial».

2.22.4. Obligado aprendizaje

2.22.2.4.1. El INPE y las políticas penitenciarias

En 1980 cuando los establecimientos penitenciarios del país empezaron a albergar internos e internas acusados por el delito de terrorismo y luego por traición a la Patria, la seguridad y la administración de los penales se encontraba a cargo de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El régimen aplicable a dichos internos era similar al de los acusados por delitos comunes, es decir, tenían derecho a permanecer en los patios, las visitas no se encontraban restringidas, etc. En 1991, con la dación del decreto legislativo N° 734, se autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas a los establecimientos penitenciarios, «cuando la situación imperante en dichos establecimientos provocadas o propiciadas por acciones de la delincuencia terrorista desborden el control del personal encargado de la custodia interna y externa de los mencionados Centros de Reclusión». Posteriormente, en 1992, cuando el régimen penitenciario varió con la dación del Decreto Ley N° 25475, tornándose restrictivo en el ejercicio de los derechos de los internos e internas acusados por los delitos de terrorismo y traición a la Patria, la Policía Nacional del Perú, ingresó a los establecimientos penitenciarios del país para encargarse de su seguridad. El personal del INPE que se encontraba a cargo de la seguridad de los establecimientos penitenciarios, fue sustituido por personal policial, pasando los primeros al área administrativa de los penales. El Órgano de Tratamiento de cada penal lo integró únicamente personal del INPE; y la seguridad interna y externa corrió a cargo de personal policial.

Luego de varios años, progresivamente, personal del INPE recobró las labores propias de vigilancia de la seguridad en los penales, empero, ya se veían casos en los cuales aquellas labores eran compartidas por su personal y el de la PNP, generalmente en penales ubicados en el interior

⁷⁴ CVR, testimonio No. 700447

del país, como es el caso del penal de Huamancaca en Huancayo. Los penales que albergaban a un gran número de internos por delitos de terrorismo y traición a la Patria, los de Lima principalmente, estuvieron a cargo de personal policial, bajo criterios de seguridad máxima.

2.22.4.2. Los comités de familiares

La experiencia de los comités de familiares de internos por delitos de terrorismo y traición a la Patria en el Perú, se inició en el departamento de Lima, cuando la mayoría de internos se encontraban reclusos en el penal de El Frontón. No se tiene una evidencia que estos comités se generaran en los departamentos del interior del país, a pesar que un número también considerable de los internos e internas se encontraban reclusos en penales como el de Ayacucho.

En Lima, el primer comité que se formó fue el «Comité de Familiares de Presos Políticos». Aprovechando los viajes en lancha hacia El Frontón, los días de visita, advirtieron que varios de ellos provenían del interior del país, muchos tenían poco o nulo conocimiento acerca de aspectos legales concernientes con el proceso judicial de sus familiares y muchos otros volvían en su busca luego de una larga temporada en la que por razones económicas no habían podido viajar. Fue en estas circunstancias que comenzaron a agruparse, con la finalidad de apoyarse en aspectos legales y económicos, principalmente.

No todos consideraron conveniente sumarse a este comité. Un grupo pequeño de familiares buscó diferenciarse de los que agrupaban a familiares de subversivos del MRTA y especialmente de los llamados «organismos generados» de el PCP-SL. Se dirigió a la Comisión Episcopal para buscar ayuda tanto económica como legal siendo amparados y, en septiembre de 1982, formaron el «Comité de Familiares de Presos Políticos de Izquierda Unida Independiente», integrado por 30 personas aproximadamente. Este comité también brindó ayuda legal a familiares de provincias, especialmente a los que eran analfabetos. Formaban comisiones para acudir a los medios de comunicación o hacer seguimiento de los procesos judiciales. Así mismo, conseguían materiales para la realización de trabajos manuales y, en general, realizaron acciones tendientes a lograr mejorar la calidad de vida de sus familiares presos. El comité funcionó 8 años más, luego de su formación.

Posteriormente, se han creado otros comités o agrupaciones de familiares de personas internas en los establecimientos penitenciarios como el «Comité de Familiares de Presos Políticos, Prisioneros de Guerra y Desaparecidos», la «Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio» (AFADEVIG) y la «Asociación de Familiares de Presos Políticos del MRTA», que actualmente realizan labores tendientes a la ayuda legal, primordialmente, de sus familiares detenidos. Cabe señalar también que los familiares de internos que alegan ser inocentes de los delitos de terrorismo y traición a la patria por los que fueron condenados, han estado y están

presentes en la lucha por lograr la excarcelación de sus familiares y mejores condiciones de reintegración a la sociedad, aunque no estén formalmente constituidos como asociación.

2.22.4.3. Reconciliación y propuestas

En octubre de 1993, Abimael Guzmán, admite que su captura y la de varios miembros de la dirección del Partido Comunista del Perú, el PCP-SL, constituyen un golpe muy duro a su organización, afectando substancialmente las condiciones para continuar la guerra popular. Públicamente, Guzmán propone un acuerdo de paz. Hoy esa propuesta ha sido reformulada como «solución política a los problemas derivados de la guerra», y en ella se plantea la revisión de sus expedientes y acceso al régimen penitenciario común, amnistía general en función a una futura reconciliación nacional, cierre de los penales de Yanamayo, Challapalca y base naval del Callao, revisión de la legislación antiterrorista, entre otras.

En la actualidad hay, aproximadamente, 2000 internos por terrorismo con condenas diversas, incluida la cadena perpetua. En mérito a una sentencia del Tribunal Constitucional, muchos de ellos están siendo vueltos a juzgar. Los problemas en la administración de los penales, en el régimen y el tratamiento penitenciarios, no han cesado. Como no ha cesado tampoco el accionar del PCP-SL fuera de los penales lo que da pie para presumir una reactivación de la lucha armada en la que nuevamente las cárceles vuelvan a ser un escenario del conflicto armado. En este clima de tensión y desasosiego la Comisión de la verdad debe tratar el tema de la reconciliación a sabiendas de las incomprendiones que esta parte de su trabajo despierta.

El D.S. Nro. 065, usa la expresión «La Comisión... propenderá a la reconciliación nacional», que denota el carácter iniciatorio de un proceso que para ser justos tuvo ya pasos previos importantes. La liberación mediante indulto y derecho de gracia de cientos de presos inocentes injustamente procesados y condenados por delitos de terrorismo, fue uno de ellos. Del mismo modo, la recuperación de la democracia significa de por sí la normalización del estado de derecho y por tanto la sujeción a normas y resoluciones del derecho interno e internacional que tienen y tendrán un impacto en la reconciliación. A esto hay que agregarle el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y los procesos espontáneos de reconciliación surgidos en las comunidades. Es a esta tendencia que se suma el trabajo de la Comisión. El objetivo es darle al proceso de reconciliación una orientación más meditada que asegure su continuidad. De hecho la verdad, la justicia y la reparación abonan substancialmente en favor de la reconciliación. La verdad, por su capacidad para develar las zonas oscuras de la historia y darles una explicación, y por el reconocimiento de la voz de las víctimas; la justicia, porque pone punto final a la impunidad, fuente de venganzas personales y sentimientos de exclusión; y la reparación, porque expresa la intención del Estado y de la sociedad de aliviar en algo el sufrimiento de las víctimas. De modo que estamos ante un proceso largo, complejo, muy particular e ineludible que la Comisión impulsa y transfiere a

la sociedad y al Estado. Este proceso tiene actores diversos siendo algunos de ellos, los internos que pertenecen o pertenecieron a organizaciones subversivas. La reconciliación en este particular caso demanda un sentido y una metodología propios.

Es pertinente ubicar el proceso de reconciliación dentro de la transición democrática para comprender mejor sus alcances. Toda transición es un esfuerzo por dejar atrás graves afectaciones a la vida ciudadana cuya subsistencia implica la necesidad de normalizar el estado de derecho. En nuestro caso, durante los veinte años de violencia, el Estado democrático se apartó del modelo constitucional y de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, en la creencia que por ese camino sería más eficaz en su lucha contra la subversión. No obstante, la transición peruana, por sus propias características, no supone pactos de impunidad porque las fuerzas regresivas que podrían exigir un estatuto especial están derrotadas. En consecuencia la reconciliación no es ni puede ser un proceso de negociación de beneficios justificada en las experiencias de otros países por el riesgo que acarrea para la transición desarrollar a plenitud el estado de derecho. En nuestro país hay autoridades constitucionalmente elegidas y nada impide una ofensiva democratizadora sin concesiones a las fuerzas salientes.

La Comisión comprende que las heridas de la guerra no han sanado aún y que en las actuales circunstancias el temor ciudadano a un resurgimiento de la violencia afecta la buena disposición que este proceso necesita. Pese a ello, la reconciliación es una necesidad que trasciende el ambiente poco optimista en el que le toca desenvolverse. Para algunos sectores de la sociedad es un tema inaplazable y para otros carece de sentido. Es deber de la Comisión explicar convincentemente la urgencia de vivir reconciliados y dejar al país un conjunto de pautas que encaminen el proceso.

La reconciliación no es olvido ni es impunidad. La verdad garantiza que el pasado se vuelva presente comprendido y referente obligado de nuestras decisiones. La justicia de los tribunales, hasta donde sea posible, saldará cuentas con los autores de los crímenes y violaciones a derechos humanos. En esa medida queda descartada cualquier propuesta de amnistía. Perdonar queda reservado al fuero personal de la víctima. La Comisión favorece el pedir perdón y el perdonar, en la medida de la sinceridad con que se hagan, conciente de que recordar sin rencor contribuye a restaurar la confianza y el vínculo perdidos. Es vital que la reconciliación sea comprendida por la ciudadanía como un imperativo ético y como una necesidad práctica, en ambos casos perfectamente coherentes con los postulados de la democracia y los derechos humanos.

Un primer paso reconciliatorio dado por la Comisión fue incorporar las declaraciones de los internos por terrorismo como parte de la búsqueda de la verdad. A renglón seguido realizó talleres de reflexión sobre el tema de reconciliación en los penales de Pícsi, (Chiclayo), El Milagro (Trujillo), Huacariz (Cajamarca), Cachiche (Ica), Chorrillos (Lima), Aucallama (Huaral), lo mismo que en Huancayo y Puno. En el penal de Castro Castro, que alberga al mayor número de subversivos, se tuvo así mismo una reunión de debate sobre este tema. Pese a los avances logrados,

hay que admitir que en este proceso se avanza y se retrocede. Como era previsible no todos los internos han reaccionado de la misma manera. Satisface comprobar que en el caso del MRTA, de los desvinculados, y de cierto grupo de militantes del PCP-SL, la disposición para la reconciliación es favorable. Sin embargo, hay un sector todavía numeroso del PCP-SL cuyo dogmatismo los lleva a justificar los crímenes cometidos y a preservar las tesis ideológicas sobre las cuales montaron su proyecto armado. En el caso de «Proseguir», ellos están manifiestamente a favor de la continuación de la guerra, lo que torna en impracticable el debate sobre este tema.

El punto de partida es la necesidad de restablecer el diálogo y aceptar que a través de la palabra es posible progresar en la superación de las diferencias. De este modo, en los talleres, fue posible aproximarse a la idea de «conciencia del daño causado», o sea, al aspecto fundamental de la reconciliación que consiste en aceptar que las acciones realizadas afectaron derechos de las personas. No se puede en este punto hablar de «costo de la guerra», porque los costos son para quien decide ir a la guerra y se expone a posibles menoscabos en su integridad; en este caso se trata de miles de seres humanos que no participaron directamente en el conflicto y a quienes se les causó deliberadamente daños físicos, psicológicos, sociales, económicos, etc. A partir de la conciencia del daño causado, es posible dar un paso hacia el reconocimiento de formas y grados de responsabilidad. Y aunque hubo quienes, coherentes con sus pedidos de «no a la impunidad», admitieron sus condenas, hubo otros que no llamaron a los crímenes por su nombre sino que sostuvieron en todo momento que se trató de «excesos, errores y limitaciones». En cuanto a las responsabilidades políticas, hay una mejor disposición para la autocrítica que los lleva a una posición de deseo de superación del pasado. Consideran que éste es un nuevo momento histórico en el que no hay condiciones para la lucha armada, aunque un sector importante no abandona la idea de la violencia como instrumento de transformación. La superación del pasado implica también pedidos de disculpas o perdón que varios expresaron claramente.

La Comisión comprende que la reconciliación entre víctimas y victimarios es la más exigente de todas. Urge por consiguiente evaluar realísticamente las posibilidades de restaurar esa relación rota a raíz de la guerra. No hay que olvidar que hay internos cuyas penas ya se cumplieron o se cumplirán en los próximos años y cuyo retorno a la vida social requiere de procesos locales de reconciliación que faciliten su integración. Pero, mientras se mantenga la pertenencia al partido, la sujeción a los líderes que no han variado su posición y la adhesión a una ideología de muerte y destrucción, la reconciliación no será posible. En una frase, mientras el PCP-SL siga siendo el PCP-SL, la reconciliación es inviable. Lo mismo en el caso del MRTA. Esto no quita que se pueda intentar a nivel personal una aproximación, lo cual implica pasar por una fase previa de desvinculación que abra el camino a la reconciliación.

Entender las razones o sinrazones de los perpetradores no es lo mismo que exculparlos, es sí condición indispensable para la aplicación de una política de reconciliación. La democracia no claudica si se acerca a los internos del PCP-SL o el MRTA. Esta fase previa, fundamentalmente

comunicacional y educativa está dirigida a la recuperación de la individualidad, el desarrollo del pensamiento crítico, la actualización del conocimiento, la revaloración de la vida como un derecho absoluto a partir del cuál —y no contra él— se desarrolla la praxis política, el reconocimiento de que la democracia ofrece espacios de participación y que hoy por hoy significa el principal consenso nacional y mundial. Este espacio es de apertura a la diversidad y no menoscaba el derecho a la libertad de creencias.

La fase previa a la reconciliación debe formar parte del tratamiento penitenciario entendiendo que el interno por terrorismo trae un componente político privativo por lo que las metodologías de rehabilitación, reeducación y resocialización no pueden ser las mismas que se aplican a los internos comunes. No hay que perder de vista, además, que en la población penal por terrorismo hay diferentes grupos, desde los totalmente desvinculados de las organizaciones subversivas hasta los que no han variado un ápice su posición y pertenencia políticas. El tratamiento penitenciario debe, en consecuencia, partir de una adecuada caracterización del interno la que no se reduce a un examen criminológico.

En el plano jurídico la adecuación de las normas a los estándares internacionales es de obligatorio cumplimiento para la democracia peruana. En esa medida deben observarse las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y sus principios básicos aprobados por Naciones Unidas; los instrumentos de derechos humanos de carácter general y las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Del mismo modo, se debe acatar el fallo del Tribunal Constitucional en materia de legislación antiterrorista. En este marco de respeto a las exigencias internacionales y nacionales del más alto nivel, las normas contenidas en el Código de ejecución penal y los decretos supremos que regulan el sistema penitenciario, deben restituir y preservar los derechos de los internos que sean compatibles con la reclusión sin afectar en lo más mínimo la seguridad y la tranquilidad de la sociedad, y el normal desenvolvimiento de la vida penitenciaria, así como la lucha actual contra los grupos todavía alzados en armas.

Políticamente, el clima más favorable a una reconciliación es una democracia viable y exitosa que deje sin fundamento a los proyectos totalitarios y en cuyo seno la participación política sea activa e incluyente. En esta medida, la democracia no puede ser ajena a las transformaciones que puedan operarse en las organizaciones subversivas. Deberá evaluarse con extrema cautela cualquier propuesta de legalización teniendo presente que una pretensión en este sentido pasa por el cese definitivo del alzamiento armado y la sujeción al estado de derecho.

En resumen, la Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que:

La reconciliación es un proceso ya iniciado, especialmente complejo si se trata de propender al restablecimiento del vínculo entre internos condenados por terrorismo y la sociedad y el Estado peruanos. El conocimiento de la verdad, la contribución con la justicia y las propuestas de reparación a las víctimas son pasos importantes en la reconciliación. Queda descartada la amnistía.

La reconciliación es un deber y una decisión práctica que asegura, sin olvido y sin impunidad, el término de la violencia armada.

Para que haya reconciliación debe haber, de parte de quienes han perpetrado crímenes, conciencia del daño causado, reconocimiento de responsabilidades, expresión de disculpas o perdón y deseo de superar el pasado en términos de una nueva convivencia regida por las reglas de la democracia y los derechos humanos.

La reconciliación no es viable con aquellos internos vinculados a las organizaciones subversivas que mantienen su ideología y su proyecto armado. Es condición previa en estos casos propiciar la desvinculación hasta donde sea posible.

La aplicación del tratamiento penitenciario debe ser diferenciada en atención al componente político de los internos por terrorismo, para lo cual convendría la creación de una instancia especializada en implementar dicha política. El acento debe estar puesto en la parte educativa y comunicacional, buscando generar espacios de recuperación de la capacidad crítica personal, de conocimiento del mundo actual, de revaloración de la vida como derecho absoluto, de reconocimiento de la democracia como sistema de participación política, etc.

Se deben propiciar formas de reintegración a la vida social de aquellos internos que son liberados por cumplimiento de sus condenas. Una buena manera es propiciar procesos locales de reconciliación.

Los derechos de los internos que sean compatibles con la reclusión deben ser preservados y/o restituidos en atención a las normas, resoluciones y recomendaciones nacionales e internacionales.

La reconciliación es un tema del presente pero sobre todo del futuro. Está sometido a las tensiones que surgen del deseo de vivir en armonía y la realidad de los conflictos subsistentes. El pasado, sin embargo, no es una carga sino una fuerza que nos impulsa hacia delante premunidos de las lecciones que evitarán que volvamos a sucumbir en el horror. Queda abierta la enorme responsabilidad de ahondar en la reconciliación hasta lograr compartir un ideal mínimo de vida que disuelva la sensación de amenaza y de peligro que surge del dramático pasado reciente y de la prédica extremista. La Comisión halla presente este ideal en la democracia y los derechos humanos.

Apéndice1

Algunas cartas escritas en las cárceles

El desarrollo de la ideología fundamentalista entre la militancia del PCP-SL, tuvo varios niveles. Debido a su carácter vertical y dogmático, los grados de ideologización fueron variados. En las esferas más altas del aparato partidario podemos hallar una mayor ortodoxia y dureza de pensamiento. En los cuadros intermedios, pero en especial entre los militantes de «base» y la «periferia», el grado de ideologización fue menor. Esta característica se refleja también entre los

reclusos/as que albergan las cárceles, acusados de pertenecer al PCP-SL. La CVR recibió las dos cartas, que a continuación reproducimos en su totalidad, desde los penales de Yanamayo y Chorrillos, creyendo conveniente publicarlas ya que muestran con claridad esos diferentes niveles de ideologización.

1. Carta desde el penal de Yanamayo

Señor Doctor Salomón Lerner
Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Lima.

Acudimos a Ud. Doctor Lerner y a su representada nuevamente, reiterando nuestros saludos, y manifestarle lo siguiente:

1. Hacemos conocer a Uds., nuestra posición de pleno acuerdo, apoyo y respaldo decidido, asumiendo a cabalidad la iniciativa y solicitud, que les hiciera a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Dr. Abimael Guzmán Reinoso —Presidente Gonzalo— y Elena Iparraguirre Revoredo —camarada Miriam—; para que por vuestro intermedio pueda viabilizarse ante el gobierno del Dr. Toledo, el que acceda y autorice una reunión en el PMBNC, entre el Presidente Gonzalo y c. Miriam con los militantes designados por ellos, con el objetivo de definir y decidir la posición oficial del PCP ante la CVR y la Reconciliación Nacional que propugnamos.

La importancia y trascendencia de dicha iniciativa y solicitud, son innegables, sirviendo a construir el complejo proceso de una futura Reconciliación Nacional, guiados por el rumbo ético de Servir al Pueblo de Todo Corazón.

Derivado de la aceptación y concreción de dicha importante reunión, juzgamos oportuno, solicitar a Ud. Dr. Lerner y a la CVR, analice, acceda y autorice, una Audiencia Pública, en la cual participe como protagonista de la guerra popular el PCP, representado por su Jefatura el Presidente Gonzalo y c. Miriam; y, otra Audiencia Pública en la cual participemos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, de los diversos penales de la República, cuya agenda proponemos sea el tratar sobre la política y legislación penitenciaria y condiciones de reclusión aplicadas en las décadas del 80 y 90, en el contexto de la guerra interna vivida en el Perú.

2. Como es de vuestro conocimiento, así como de la opinión pública. Nosotros, prisioneros políticos y prisioneros de guerra del PCP, venimos bregando resueltamente por la necesaria Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna; iniciativa política fundamentada solidamente por el Presidente Gonzalo, Jefatura estratégica y decisiva del PCP y la Revolución, en su contenido de 5 puntos, de innegable repercusión histórica. La cual aprobamos, estamos decididamente de acuerdo y luchamos activamente por hacerla realidad.

Al asumir ante Uds., nuestro resuelto apoyo y pleno respaldo con los testimonios del P. Gonzalo y c. Miriam, ante la CVR. Documentos de reconocido valor histórico. Solicitamos a Uds. los hagan públicos, pues, sirven a esclarecer la Auténtica Verdad Histórica de la guerra popular, a combatir la impunidad del genocidio, demandando juicio y sanción, no venganza, a quienes dirigieron el Estado en los sucesivos gobiernos del 80 al 2000, a sus más altos representantes y responsables, aun sueltos en plaza, quienes persisten obcecadamente en eximirse y no asumir ninguna responsabilidad de las políticas de Estado, la línea y política genocida que aplicaron a través de sus FFAA y FFPP

El presidente Gonzalo y c. Miriam, han asumido responsabilidad política en representación del PCP, de la preparación y dirección de la guerra popular en el Perú, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, de sus limitaciones, errores y excesos. A lo cual se suman los testimonios de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del PCP, tanto colectivos como individuales, los debates políticos con algunos Srs. Comisionados y funcionarios de la CVR, en particular de su sede Sur Andina; en base al mutuo respeto, venciendo incomprensiones, resistencias y oposiciones, con el fin de alcanzar la verdad histórica y ésta se abra paso. Expresamos nuestro desacuerdo por no recibir respuesta a la anterior carta que le enviáramos desde Yanamayo, al iniciar nuestro trabajo dentro de la CVR; y, recientemente, por la suspensión de la anunciada y confirmada visita de 3 comisionados (Monseñor Antunez de Mayolo, Padre Garatea y Pastoy Lay Sun), lo cual evidencia los serios problemas y la ladeamiento que venimos denunciando; a más de los entramientos y oposición a que desenvuelvan su trabajo en penales, por parte del gobierno y las altas autoridades del Ministerio de Justicia y del INPE

Seguimos con especial atención, las declaraciones públicas de los Srs. Comisionados, las cuales no sólo comprometen a la propia CVR, ante la opinión pública, sin ser desmentidas o aclaradas, como los reiterados e interesados despropósitos y exabruptos del Sr. Tapia, quien manifiesta una odiosidad patológica al P. Gonzalo y al PCP; del Sr. Degregori, el Sr. Morote, la Sra. Maccher, e incluso algunas suyas Dr. Lerner. Cuyo objetivo político es manifiesto, cargar la responsabilidad total en el PCP, encubrir, eximir y buscar la impunidad del genocidio; poniendo en riesgo la propia credibilidad y trabajo que por ley cumplen, expresando una tendencia de servir a los intereses políticos del actual gobierno, opuesto a tratar la Solución Política y negociación global demandada.

Dr. Lerner, le expresamos nuestro más enérgico rechazo, condena e indignación, desenmascarando el «especial» publicado por la prensa escrita y en particular el programa difundido en TNP el 22 de diciembre en curso; publicitado como informe oficial de la CVR sobre Lucanamarca. Reportaje irresponsable, superficial, subjetivo y unilateral; mostrando carencia de nivel y luces para hacer una evaluación objetiva de los hechos, que sirva a esclarecerlos y a sentar sólidas bases a una futura Reconciliación Nacional, definiendo con meridiana objetividad la responsabilidad de ambas partes, no una judicialización arbitraria. En dicho programa de la TNP,

con asistencia de los Comisionados Sra. Maccher y Sr. Degregori, pese a reconocer ambiguamente que fue un enfrentamiento entre ronderos armados, dirigidos y usados como carne de cañón por el gobierno y sus FFAA, en aplicación de la política genocida del Estado para combatir a la subversión, en la guerra antisubversiva; y del otro lado combatientes del Ejército Guerrillero Popular, dirigidos por el PCP, guiados por su política proletaria marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. Previo al enfrentamiento, las cabezas negras de los ronderos fueron conminados a rendirse lo cual rechazaron, escudándose cobardemente en mujeres y niños. Este enfrentamiento armado que Uds. niegan, lo pretenden presentar como un hecho aislado, como en otros casos «emblemáticos»; fuera del contexto político, militar, social, económico, cultural, de las complejas contradicciones sociales y aguda lucha de clases que en dicha zona se desarrollaba. Así, Lucanamarca, fue un hecho bélico, en el cual el PCP logró rotundo éxito, al conquistar el objetivo político buscado a través de dicha acción armada; frenó y quebró el plan contrasubversivo del gobierno de Belaunde y sus FFAA, de organizar, armar y usar mesnadas como fuerzas complementarias, enfrentando masas contra masas; no como ilusamente vociferan «el campesinado entre dos fuegos»; dicha acción armada fue acordada, aprobada, planificada y dirigida por el PCP, no fue un «acto de violencia irracional, de venganza», demandado reiteradamente por las masas del campesinado pobre, de la propia comunidad de Lucanamarca y de las aledañas, para someter a juicio popular a las cabezas negras y gamonales, quienes instigados por las FFAA, habían asesinado a militantes del PCP y a masas acusadas de apoyarlos, sufrían las correrías, abusos, opresión del poder local y sus ronderos de Lucanamarca. Adrede, en dicho programa ignoran la red de bases antisubversivas instaladas en dicha región por el gobierno y sus FFAA, así como, la posición oficial del PCP, hecha pública luego del balance hecho por su Comité Central; encubren el nefasto papel cumplido por las cabezas negras de los ronderos, gamonales, su red de soplónaje y de todos quienes medraron de la guerra contrarrevolucionaria a la cual sirvieron activamente. Lo principal, de este enfrentamiento armado, es que el PCP, mostró su capacidad de respuesta contundente que paralizó el negro accionar del gobierno, a los pocos meses de decidir el ingreso de las FFAA en aplicación de su política genocida dirigiendo la guerra contra subversiva, cosechó un fracaso y revés político y militar decisivo. Lo secundario, es el exceso, que en modo alguno niega o minimiza lo principal. Exceso producto del enfrentamiento armado. Ahí no se cortaron barrigas de gestantes, como arteramente imputan, ni menos hay pretendidas fosas comunes, todas las tumbas exhumadas por Uds. Están identificadas y fueron sepultados los cadáveres por sus deudos. No estamos de acuerdo con el espectáculo reprobado que montaron en una iglesia limeña y el innegable uso político que de él hicieron. Otra de las negras campañas montadas contra el P. Gonzalo y el PCP, la guerra popular, que rechazamos y condenamos enfáticamente. Son rotundos actos de guerra, ya grabados indelebles en la mente de las amplias masas del pueblo y en la historia, que un amañado en interesado informe «oficial» bajo la guía del «interés de seguridad del Estado, en defensa de la democracia», no se puede ni podrán negar. Lo claro y concreto es su inútil afán y

propósito de acallar el grito y clamor creciente de las verdaderas fosas comunes, como Cayara, Umaru, Bellavista, el genocidio de los penales en el 86 y 92 y muchos cientos más, a las cuales la CVR no sólo no presta atención oponiéndose a su exhumación e investigación de los hechos, en defensa del interés político del estado y gobierno que la nombró; más, su perentorio eco seguirá retumbando en vuestras conciencias. Tampoco hacen denuncia alguna, al acoso, hostigamiento, persecución a muchas de las masas, quienes denunciaron el genocidio y a los genocidas en sus testimonios en Audiencias Públicas; menos les preocupa o toman interés por las denuncias de nuestros familiares y amigos. Nosotros al ejercer el derecho fundamental por excelencia, la Rebelión se Justifica, contra el caduco Estado reaccionario peruano, levantándonos en armas bajo dirección del PCP; no hemos cometido crímenes contra la humanidad. Dentro de su orden reaccionario, el delito políticosocial es lo que nos pueden imputar, nosotros ya hemos saldado y cumplido la deuda con la sociedad y la libertad es nuestro derecho; la cual se abrirá paso. La historia, el pueblo son el tribunal inexorable ante el cual asumimos responsabilidad, no tenemos nada de que arrepentirnos.

Todos estos hechos se producen en un complejo, difícil escenario político de agudización de contradicciones en la otra colina, y en el propio seno del gobierno de turno. El Tribunal Constitucional, está por dar su fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad de la legislación antiterrorista. Culmina la legislación, sin que el Congreso promulgue las nuevas leyes, demandadas por la Corte Interamericana de Justicia. Los tribunales dilatan resolver en segunda instancia los juicios anulados en la primera instancia, por acciones de Habeas Hábeas. Mantiene las ilegales y anticonstitucionales leyes dadas por el gobierno del genocida vende patria de Fujimori. Tras invocar terminar con los «rezagos del terrorismo», como denomina a lo que queda de la acción armada, prosigue con los planes de pacificación, operativos policiales y militares, sin necesidad de declarar el Estado de Emergencia, restablece bases antisubversivas, reimpulsa las cuestionadas rondas urbanas y rurales; trafica demagógicamente con la pobreza, para proseguir aplicando su nefasto plan neoliberal, correlato de la imperialista globalización repudiada en todo el orbe; generando mayor rechazo del pueblo, sometido a más opresión, explotación, hambre, miseria, desempleo. Es pública la posición oficial del gobierno del Dr. Toledo de actuar dentro de la estrategia de «guerra contra el terrorismo mundial» y ha firmado una «alianza estratégica» con el gobierno de Bush. Rechazamos el término de «terrorismo» con que los imperialistas yanquis, justifican como gendarme del orbe, el combate a la lucha de los pueblos y naciones oprimidas, que empiezan a salir políticamente del repliegue.

A esto se suma la ilegal e inconstitucional Resolución del Ministerio de Justicia y del INPE, disponiendo arbitrarios traslados, con torturas, saqueo y rapiña de pertenencias, con el objetivo de reconcentrar prisioneros políticos y prisioneros de guerra en Yanamayo. En venganza por la exitosa huelga de hambre de inicios de año, y al indudable éxito político de los cientos de juicios anulados, siendo el principal el de la c. Miriam. Dentro del cada vez más importante

desarrollo de un nuevo momento de la lucha popular creciente. Por democracia y desarrollo que beneficie al pueblo, parte de la cual es lograr la libertad de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.

¿De qué Reconciliación, pretende tratar ignorando a uno de los protagonistas de la guerra interna vivida en el país, la que siguen negando, pese a ser el objeto de vuestro trabajo?

Agradecemos la atención que preste a la presente.

Atentamente.

Delegados de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del Partido Comunista del Perú, reclusos en el EPMS de Yanamayo, Puno:

Edmundo Cox Benzeville

Mario Efraín Gilvonio Misari

Roller Cometivos Utia

Felipe Tenorio Barbarán

Rodolfo Luna Delgado

(Carta recibida por la Sede Zonal Ayaviri-Puno de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el 16 de enero de 2003. Se ha transcrito la carta respetando la ortografía y redacción original).

2. Carta desde penal de Chorrillos

Cuando no se tiene más que el amor,
Por única razón,
Por única canción
Y por única ayuda.

Jacques Brel

Escribimos esta carta, confiadas en que, quienes recojan hoy, nuestro dolor, nuestros momentos de sufrimiento y, también nuestros sueños y nuestro clamor de libertad, son verdaderos seres humanos y, eso, nos basta. Les saludamos, llenas de esperanza, pues, los sabemos solidarios y creemos que sabrán mirarnos a los ojos, que, hoy, nuestras almas transitan en un intento desesperado de tocar los suyos.

Nosotras, mujeres, mujeres encarceladas, sentenciadas por delito de terrorismo y traición a la patria, por jueces sin rostro. Habitamos el Pabellón «A», que es el pabellón piloto, de mínima

seguridad del establecimiento penal de Régimen Especial de Mujeres de Chorrillos y, que, en esta oportunidad, queremos, darles a conocer sobre nosotras.

Aquí, habemos, mujeres inocentes, que hemos sido sentenciadas injustamente y, esperamos el indulto desde hace mucho tiempo. Otras, estamos aquí, el tiempo suficiente, ya, como para merecer un beneficio de semilibertad, que, legalmente nos corresponde solicitarlo. Otras; hemos tenido una vinculación periférica, circunstancial que hemos reconocido y somos testimonio vivos de lo que por años venimos demostrando, que hemos cambiado sinceramente, incluso desde antes de ser detenidas y esperamos que la Comisión de Conmutación evalúe nuestros expedientes. En otros casos, esperamos una reducción de pena por la aplicación de la Ley de Adecuación de la Pena o que se nos haga procedente un recurso de revisión.

En esta parte de nuestra carta; en estos minutos en los que se cuenta nuestra vida misma, con todos sus sueños, con todos nuestros deseos inmensos de permitirnos siempre vida a nuestro alrededor pero, también, esta misma vida, con todos sus fracasos, con todos sus heridas, con todos sus errores; quienes sí, con nuestra participación (periférica, circunstancial), con nuestros silencios, con nuestros temores, también con nuestros afectos, hemos ayudado a sostener este otro lado de la violencia, sentirnos, desde aquí, inmensos deseos de decir tantas cosas ... tantas ... También, porque, además, no es tan fácil decir, si hemos sido solamente víctimas, o hemos sido solamente testigos ... Después de todo, creemos que cada una, somos un poco responsables del mundo en que vivimos ... y, pues, hemos encontrado que sentimos por el pasado, pero también en ellos hallamos una manera de expresarles toda la ternura de nuestras humanidad presente.

Y en esta hora fría, en que la tierra
trasciende a polvo humano y es tan triste,
quisiera ya tocar, todas las puertas,
y suplicar a no sé quién perdón
y hacerle pedacitos de pan fresco
aquí, en el horno de mi corazón

Un día, irrumpieron en nuestras vidas y pretendieron quitárnosla; nos sacaron del hogar y nos arrancaron de nuestros padres, de nuestros hijos, de quienes éramos su alegría y sus sostén. Vinieron por nosotros sin conocernos. Muchos ni siquiera entendían el por qué. Desde entonces, nos encerraron y cambian nuestra vida por un expediente.

Han pasado muchos años ya, y, hemos soportado tantos sufrimientos: 23 horas y media de encierro; media hora de patio; visita por locutorios una vez al mes, sólo por media hora, en el que apenas alcanzabas ver la sombra de tu ser querido, la visita de nuestros hijos cada tres meses, sólo una hora. Aquí hemos sentido morir muchas veces; pero, cada vez, nos hemos aferrado desesperadamente a la vida, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros padres, por amor a la vida misma y, por nuestros sueños de libertad.

El Pabellón «A» se consideró, desde el inicio, como un pabellón que albergaría a quienes, al margen de ser culpables o inocentes, demostraríamos independencia de cualquier organización política subversiva; a pesar, de saber que, teníamos que salir obligatoriamente a cocinar en las peores condiciones de trabajo; a sabiendas que, por ello no recibíamos ningún beneficio.

No nos resignamos, al dolor, al encierro, a las sentencias injustas y desproporcionadas. Sin embargo hay quienes piensan que deberíamos ser encerrados. Nos juzgan tan fácilmente, sin pensar, que nos sólo se trata de nuestras vidas, sino también la de nuestros hijos, la de nuestros padres. Comprendemos. Es la situación dolorosa que hemos vivido, por años, hubieron muchas pérdidas humanas, mucha destrucción en manos de los grupos subversivos que, tampoco tuvieron en cuenta las vidas que habían detrás. Pero, quienes no apuestan por nosotras hoy, no saben, tampoco, de dónde venimos, qué fue de nuestras vidas. Tampoco saben cómo fueron nuestros juicios, cómo inventaron pruebas; que no tuvimos defensa o la tuvimos insuficientemente. No saben que, en nombre de la paz, encerraron a miles de inocentes que perdieron gran parte de sus vidas en cárcel y que aún claman por libertad. No saben que hay quienes hemos pasado 10, 12, 14 años en prisión y que ya nos corresponde salir. Pero: entendemos, que quienes no desean nuestra libertad no nos conocen. Lamentablemente: de nosotras, sólo se dice que somos «terroristas» o que somos «unos monstruos». Ojalá pudiéramos tener más posibilidades de darnos a conocer y demostrar que somos, sencillamente seres humanos.

Entonces, lo que tratamos, hoy, es tocarles el alma a todos ustedes que, tan humanamente acogen nuestra carta urgente; para decirles que, merecemos ir a nuestra casa; por todo lo dicho, por todo lo que las palabras no alcanzan expresar, por todo el nudo que se ata y desata en nuestra garganta y, sobre todo por nuestros deseos inmensos de estar con nuestros hijos, de compartir sus penas y alegrías, de verlos y hacerlos crecer en humanidad. Por nuestros deseos inmensos de comenzar y terminar el día con sus miradas, con sus sonrisas, por nuestros deseos de llenarlos de besos al despertarlos y no dejar ni un solo día, sin decirles cuanto los amamos. Por nuestros padres; porque no sigan llorando más nuestra ausencia, porque no sigan andando, por años, desolados de aquí por allá, tocando puertas sin tener respuesta; porque no sigan envejeciendo más de dolor y de impotencia. Por nosotras mismas, por nuestros inmensos deseos de vivir; por nuestros sueños, que Dios los sabe buenas. Ya no queremos más despedidas. Por Dios ¿hasta cuándo? Ya es mucho tiempo de amar y acariciar a la distancia. Ya es mucho tiempo de angustia de no saber nada de la familia y ni siquiera tener un teléfono para volver a vivir. Ya es mucho tiempo de no tener una respuesta cuando nuestros niños preguntan ¿cuándo mamá?; lo que soñamos es poder decirles, mañana y, a la noche, mirar juntos las estrellas y llamarlos a cada uno por su nombre.

No sabemos, que manos benditas, sostengan esta carta, pero, como dijimos, son las de un ser humano y eso nos basta, para enviarles este clamor de libertad y de justicia que sale de lo más profundo de nuestro corazón que, a pesar, del dolor no se ha secado de amargura y que, al contrario se enriquece y continúa amando y soñando.

Que Dios los bendiga

Con esperanza

Desde el pabellón «A» Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Especial de Mujeres-Chorrillos.

(Recibido por la CVR, sede Lima, el 23 de septiembre 2002. Se ha transcrito la carta respetando la ortografía y redacción original).

2.23. NARCOTRÁFICO, CONFLICTO ARMADO INTERNO Y CORRUPCIÓN

El presente capítulo sobre la vinculación entre narcotráfico y el conflicto armado interno resume tres extensos estudios realizados por la CVR. El primero de estos estudios estuvo orientado a analizar el marco legal internacional y nacional diseñado para combatir las redes de narcotráfico, que condiciona decisiones políticas importantes. El segundo estudio recogió todas las evidencias que relacionan el narcotráfico con la corrupción, constituyendo verdaderas redes que comprometen a todos los actores presentes en el escenario de la guerra interna; el tercer estudio se orientó, en un trabajo de campo directo, hacia la comprensión del microcosmos social de un centro urbano, Aucayacu, ubicado en el corazón del área cocalera, la historia de su violencia y las dinámicas de relación con los espacios rurales vinculados a él.

Cabe aclarar que el presente resumen analiza exclusivamente la dinámica del valle del Río Huallaga, principal cuenca cocalera del país. Al respecto, hemos señalado, en la historia regional de la región Nororiental preparada por la CVR¹, que el contexto socio-económico cocalero facilitó la inserción de los grupos subversivos en la región nororiental a la vez que condicionó la respuesta contra subversiva. También es cierto que el boom del precio de los derivados ilícitos de la coca, sobre todo en la segunda mitad de la década de 1980, casi se corresponde con el mayor índice de violencia vivido en la cuenca del Huallaga. Por último, debemos señalar que la expansión en la fabricación de derivados ilícitos de la hoja de coca está en relación directa con el aumento sostenido del consumo de drogas en países desarrollados del hemisferio norte, y los precios de estos derivados se originan, en buena medida, tanto por aquella demanda como por su condición de ilegalidad.

«Narcoterrorismo» es un término comúnmente aceptado, pero con los mismos argumentos podríamos hablar de «narcopolicia» o «narcoejército» luego de conocer la maraña de corrupción surgida en la intervención policial y luego militar en el Huallaga. En otras palabras, estas calificaciones son meros eufemismos, y no son correctas ni explican la dinámica de la relación entre narcotráfico y los actores presentes en el ciclo del conflicto armado interno.

La compleja vinculación entre narcotráfico y la violencia tiene incluso particularidades regionales que merecen ser destacadas. Así, si en el valle del Huallaga el dinero proveniente del narcotráfico sirvió para financiar a las columnas del PCP-SL en su lucha contra el ejército, en la selva del río Apurímac, en Ayacucho, el dinero proveniente de la PBC sirvió precisamente para financiar a las rondas campesinas, evangélicos, cocaleros y representantes de «firma» que finalmente, derrotaron y expulsaron al PCP-SL de la zona.

¹ Véase zona II de Historia del conflicto armado interno en la Región Nororiental.

2.23.1. La expansión de los cicales y la lógica de la política antidrogas

El tráfico de cocaína es una actividad multinacional que, según algunos cálculos, moviliza un promedio de 100 mil millones de dólares anuales, es decir se trata de una industria casi tan grande y poderosa como el petróleo, y que tuvo por décadas sus áreas de producción de materia prima en Perú y Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombia y su gran mercado de consumo en Estados Unidos de Norteamérica y cuyo auge, en la selva del Huallaga, en el cual se involucraron poblaciones enteras, abarca las décadas de 1970 y 1980.

La coca se cultiva en la Selva Alta, que tiene 275,491 kilómetros cuadrados (21.5% del territorio del Perú), en donde se ubican los 16 valles cocaleros —tradicionales y no tradicionales— sobre la vertiente Oriental de la Cordillera de los Andes, en los departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, Ayacucho, Cuzco, Puno y Madre de Dios.

Difieren mucho entre sí las diferentes cifras propuestas sobre el territorio utilizado para el cultivo de los cicales, pero nos remitimos a un informe del Senado de la República en el cual se afirmó que la superficie cultivada de coca en forma legal en el país era, en 1980, de 17 mil 862 hectáreas, mientras que la superficie ilegal alcanzaba 50 mil hectáreas, de las cuales 10 mil hectáreas estaban en el Alto Huallaga. Seis años después, en 1986, si nos atenemos a las declaraciones de los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Tocache (FEDIPT), los cultivos ilegales de coca, sólo en el Alto Huallaga, alcanzaban 195 mil hectáreas. De otra parte, si en 1980 el ingreso proveniente de esta actividad en el país se calculaba que provenía en un 97% del comercio de la PBC bruta, el 0.6% por PBC lavada y el 2.4% del clorhidrato de cocaína, siete años después se calculaba la PBC bruta en un 13.5%, la PBC lavada en 80% y el clorhidrato de cocaína en 6.5. Según algunos analistas, este crecimiento se explica por la transformación progresiva de campesinos cultivadores de coca en campesinos maceradores de pasta básica.

En cumplimiento de acuerdos con el gobierno norteamericano y en concordancia con normas internacionales, el Estado peruano impulsó, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, una política de combate al narcotráfico a través de programas de erradicación, sustitución e interdicción policial, convirtiéndose los productores campesinos de hoja de coca en el principal blanco de esta política que afectó la actividad económica fundamental de amplios sectores de productores del Huallaga.

Desde la promulgación en 1978 del Decreto Ley 22095 dirigido a combatir el narcotráfico, el Perú no sólo puso en vigencia un marco legal adecuado, sino también un aparato policial especializado denominado Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), un programa de sustitución de cultivos, la creación de un ente de Control y Reducción del cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) a cargo del resguardo de los bienes incautados y el COMUCOD, entidad multi sectorial, que se sumaron a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), único ente autorizado a comprar la coca «legal». El financiamiento de este frondoso aparato burocrático, derivado de una concepción policial del problema, implicó para el Estado un alto costo

económico y también humano en vidas de funcionarios civiles y policías que murieron en la guerra de la coca, pero los resultados de esta batalla no compensaron de ninguna manera ese alto costo material y humano que implicaba su ejecución.

Además, en los valles cocaleros, las acciones de interdicción policial anti narcóticos se realizaron en el marco de una estrategia de lucha contra insurgente más amplia, con diversos impactos sociales y políticos sobre la población local, originados por el accionar de los diversos actores presentes en las regiones cocaleras de la Selva Alta: (i) los grupos armados (PCP-SL y MRTA); (ii) los organismos de seguridad del Estado encargados de combatirlos, primero la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, luego la Policía Nacional, (iii) elementos del Ejército, la Marina y la Aviación, que desde 1984 se encargaron de la situación de seguridad e incluso del orden público en dichas regiones, en el marco de los estados de emergencia instaurados y mantenidos de manera continua por los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori.

En el segundo semestre de 1979 se realizó el «Operativo Verde Mar I», con resultados pobres en cuanto a destrucción de cicales y secadoras, pero lamentables en cuanto a la aplicación de métodos violentos; luego vendría el Operativo Verde Mar II, durante el cual los abusos se hicieron mayores y se llegó a detener a cientos de agricultores acusados por narcotráfico, exigiendo a los que tenían grandes extensiones a erradicar sus cicales y plantar otros cultivos, como una señal de arrepentimiento. Más aún, el gobierno de Belaunde Terry estableció mediante el Decreto Ley 22927 del 4 de marzo de 1980, la prohibición de compra de coca por la ENACO desde 1981, con lo cual la situación de los productores se agravó. En 1982, miles de campesinos cocaleros de Chinchao, Monzón, Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad, se trasladaron a la ciudad de Tingo María para iniciar una huelga indefinida con el pedido principal de reanudación del comercio legal de la coca a través de la Empresa Nacional de la Coca-ENACO. Luego de 11 días de huelga, el gobierno derogó esos artículos, con lo cual se restituyó el comercio legal de la coca. Esta prohibición tuvo un efecto contrario, pues durante casi dos años la coca fue a parar al mercado negro a precios bajos, con lo cual la producción y comercio de sus derivados tuvo un crecimiento sostenido y espectacular, que incluso llevó a algunos analistas a relacionar al gobierno con el narcotráfico, beneficiario directo de los dispositivos legales. Era el inicio de un ciclo de auge de la producción ilegal, lo que se ha llamado el «boom del narcotráfico».

En resumen, al inicio del ciclo de violencia nacional, en 1980, la acción de las fuerzas de seguridad se repartía entre la lucha antinarcóticos a cargo de la DINANDRO y la UMOPAR, y la lucha contra las nacientes columnas senderistas a cargo de las Fuerzas Armadas. Ha sido una constante la aplicación concertada de las estrategias policiales y militares de persecución, así como medidas de emergencia en el juzgamiento, como consecuencia de la aplicación de las directrices provenientes de los principales instrumentos internacionales, dirigidas preferiblemente contra el sector campesino, productor de la materia prima. De otra parte, las relaciones bilaterales con los EEUU han estado teñidas por las frecuentes diferencias y pocos consensos a los que se llegaban sobre el tema, según los intereses de este

país. La Guerra contra las Drogas, anunciada el 5 de setiembre de 1989, y la Estrategia Andina de US\$ 2,200 millones para 5 años, constituyeron el marco con el cual se pretendió encausar la política bilateral.

En términos generales, el resultado de las medidas orientadas a la interdicción del narcotráfico fue muy magro por varios factores, entre los cuales destacan el aumento del precio internacional de la cocaína y la debilidad del estado peruano para implementar una eficiente política antidrogas. Precisamente, las intenciones y fracasos de las medidas coercitivas permitieron a los grupos subversivos, sobre todo al PCP-SL, obtener apoyo social y relativo éxito en zonas donde la coca y el narcotráfico, junto con la corrupción de la burocracia estatal y la ineficacia de los programas de desarrollo alternativo, creaban las condiciones para impulsar el uso de la violencia a cambio de «un nuevo orden y justicia social».

En 1983, el diputado por Tingo María, de los registros del partido gobernante Acción Popular, Reynaldo Rivera Romero, fue desaforado del Congreso de la República luego que se le comprobaran sus vínculos con el narcotráfico, y en abril de 1984 fue asesinado el dirigente cocalero Tito Jaime Fernández, cuando ocupaba el cargo de alcalde de la provincia de Leoncio Prado por segunda vez, con lo que la defensa de la coca perdía un dirigente importante. Un hito importante en la historia regional fue el asesinato de 19 trabajadores del CORAH, en noviembre de 1984 que obligó a suspender la erradicación de plantíos de coca no sólo por los peligros contra la vida de todo el personal del CORAH sino también por los problemas que ocasionaba la erradicación forzada entre la población: abusos, robos, corrupción y, sobretodo, la incapacidad para generar actividades económicas alternativas. Cocaleros erradicados, niveles crecientes de inseguridad ciudadana, ausencia de un poder efectivo del Estado, en resumen, facilitaron el ingreso de los cuadros senderistas a la región.

También en 1984 se declaró el Estado de Emergencia e ingresó el ejército en la selva alta del Huallaga. En diciembre de 1985, el presidente García levantó el estado de emergencia en sus intentos por volver por los canales de normalidad, permitiendo el retorno policial y la continuación de las arbitrariedades contra la población campesina, así como las acciones de erradicación manual forzada. El resultado fue que la subversión incrementó sus bases de apoyo en las zonas cocaleras.

Otro hito crucial de esta historia ocurrió el 27 de marzo de 1989 con el ataque del PCP-SL a la estación policial de Uchiza, provincia de Mariscal Cáceres, que marca un punto de quiebre respecto a la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión.

La presencia de la subversión en las regiones cocaleras desde 1984 produjo distorsión y frecuentes dificultades políticas y operacionales en la conducción de los esfuerzos antidrogas: mientras las fuerzas armadas tuvieron la responsabilidad de combatir al PCP-SL y el MRTA, la Policía Anti drogas —financiada básicamente por EE.UU— mantuvo su rol de interdicción. Ello produjo constantes roces entre las fuerzas armadas y la Embajada de los EE.UU. en Lima, así como entre las propias agencias de seguridad y orden público peruanas. En 1989, durante la gestión del General Arciniega como jefe del Comando Político Militar de la zona del Huallaga, se dejó de perseguir

al campesino cocalero priorizando la lucha contra las columnas senderistas y simultáneamente, se hicieron presentes las acusaciones de corrupción al interior de las fuerzas armadas asentadas en el Huallaga, procedentes principalmente de la prensa y funcionarios norteamericanos.

La existencia de diversas modalidades de corrupción que infiltraron a todos los actores armados presentes, afectó la posibilidad de hacer trabajos coordinados, o de separar la guerra contra la subversión de una adecuada política de control de cultivos y de drogas, incluso antes de la existencia de la mafia controlada por Vladimiro Montesinos, como veremos en el acápite sobre corrupción más adelante.

Aunque hasta 1990 el Perú fue reacio a una vinculación castrense por los riesgos de corrupción y por su prioridad en la lucha contra el PCP-SL, esta situación cambió con el advenimiento de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Desde abril de 1995, se produjo una crisis de proporciones en la cuenca del Huallaga por diversas razones, entre las que destacan: el sobre stock de cocaína en los mercados internacionales; la auto provisión de hoja de coca y de PBC de grupos en territorio colombiano; los efectos de la interdicción aérea. La arroba de coca (5 kilos y medio) fue descendiendo del precio de los mejores tiempos, US\$ 20, hasta llegar a menos de la mitad de esa cantidad. En 1997 se creó la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas, CONTRADROGAS, encargada de la política de cultivos sustitutorios, convertida con el gobierno actual en DEVIDA, enfrentada nuevamente a paros y huelgas de productores cocaleros a los cuales se sigue considerando como ciudadanos casi fuera de la ley.

2.23.2. El PCP-SL y el narcotráfico

La Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación decía rotundamente en 1989:

La asociación entre el narcotráfico y Sendero Luminoso está ampliamente comprobada y opera en el departamento de Huánuco y la margen izquierda del Alto Huallaga. El objetivo es liberar dicho territorio de la presencia del Estado y otorgarse muchas facilidades para sus actividades. De esa manera, es Sendero quien controla los precios que se pagan a los campesinos productores de coca y obtiene una participación garantizando al mismo tiempo las cosechas y entregas por un lado, y la protección militar por el otro, a los narcotraficantes que, a su vez, los provee de armas.(Comisión del Senado sobre Violencia y Pacificación, p. 342.)

En el presente acápite presentaremos la vinculación entre los productores cocaleros, las redes de comercialización de derivados ilícitos y el proyecto senderista en el valle del Huallaga, con especial énfasis en el pueblo de Aucayacu, como un ejemplo que muestra la dinámica que los vincula.

Es fundamental recordar que la importante presencia del PCP-SL en el Huallaga significó la aceptación y el apoyo para sus postulados de amplios sectores de la población. Explicar este apoyo ayudará no sólo en la construcción de una memoria colectiva que reconozca esta aceptación sino

también en la atención a problemas que fueron y son desatendidos. Por lo tanto, debemos señalar como punto de partida la importancia que el reclamo por «la justicia» llegó a adquirir a raíz del apogeo del narcotráfico y el papel central que jugaba el uso de la fuerza para lograr esa justicia.

De otra parte, se constata con claridad una distribución de los territorios cocaleros de la cuenca del Huallaga, con diferente actuación de los grupos armados de acuerdo a sus propias estrategias y en sus distintas concepciones del problema agrario y de la coca en el país. Podemos distinguir entre el Alto Huallaga con presencia del PCP-SL, del Huallaga Central y Bajo, con presencia del MRTA.

2.23.2.1. El boom de la coca: «Entre la suerte y la muerte hay un paso»

La influencia del PCP-SL en el Alto Huallaga sigue un vector temporal que se inicia a principios de la década de 1980 y comienza, a partir de 1993, a perder fuerza rápidamente sin llegar a desaparecer por completo hasta la actualidad. Si bien el proyecto senderista no se propuso establecer vínculos con el narcotráfico, el objetivo de ampliar su base social llevó a los responsables regionales del PCP-SL en el Huallaga, desde su inserción en el valle a partir de los primeros años de los ochenta, a un acercamiento creciente con el negocio de los derivados de la hoja de coca, intentando intervenir en los puntos vitales de ese mercado y regular las relaciones sociales que se aglutinaron alrededor del mismo. Algo similar ocurrió años más tarde con el MRTA conforme se ampliaron los espacios cocaleros hacia el departamento de San Martín.

Es importante igualmente reconocer que si el narcotráfico nos remite a estructuras y variantes que gobiernan el desarrollo de ese comercio ilícito, el «boom» marca un punto de quiebre a partir del cual se instala una nueva forma de vida con valores que en el Alto Huallaga parecían poner al mundo al revés pues lo ilegal era aceptado u practicado libremente mientras el dinero venía fácil y resolvía todos los problemas. Esto se reflejaba en una particular geografía social en la cual todos los actores tenían relación con el tráfico de drogas, directa o indirectamente.

Lo que resalta del PCP-SL como movimiento político es el carácter estatal y totalizador de los vínculos que buscó establecer con las poblaciones donde llegó a asentarse para construir su «nuevo orden». La importancia del Alto Huallaga para entender ese proceso reside en que fue uno de los pocos lugares del país donde el PCP-SL consiguió dominar un territorio amplio y por un tiempo relativamente largo, entre diez y quince años. Según el criterio de muchos que viven en el valle del Huallaga, el PCP-SL llegó a ejercer una hegemonía efectiva sobre las zonas rurales a partir de la mitad de la década de 1980. Al «tomar el campo» PCP-SL estableció medidas de coacción sobre la producción de la pasta básica de cocaína y generó con ello su sustento de apoyo social. Aunque la verdadera dimensión de su dominio no es del todo clara y las matices del gobierno que desplegó son difíciles de precisar, resulta evidente que éste varió de lugar a lugar debido a la heterogeneidad del personal en posiciones de mando; al nivel de adhesión de la población rural a la política senderista;

pero también a causa de otros factores como la relativa cercanía de los cuerpos armados del Estado peruano o de los mercados grandes del narcotráfico como Uchiza o Ramal de Aspuzana, entre otros.

2.23.2.2. Geografía social

El primer objetivo del PCP-SL fue hacer desaparecer cualquier expresión de representación del Estado —cierre de ENACO, de proyectos del AID, del CORAH, etc.— junto con el asesinato de diversas autoridades y líderes de la sociedad civil (alcaldes, prefectos, policías, dirigentes de partidos políticos y gremios). Pero es necesario aclarar el impacto diferenciado del apogeo en «campo» y «ciudad» (en realidad, en el Huallaga, casi sinónimo de pueblo grande), así como de un segmento del mercado (o de clase) a otro. Sin duda, la cara más visible y estridente se conoció en las pequeñas zonas urbanas —Uchiza, Tocache, Aucayacu entre otros— donde desfilaron gracias a jugosos contratos conjuntos musicales, artistas y «vedettes» de fama nacional, así como se instalaron sucursales bancarias de los principales bancos del país que, sin ningún impedimento, compraban dólares baratos provenientes del negocio de la droga. Era el tiempo de los aerotaxis y motos en cantidad y de todos los modelos. En suma, una vida acelerada y peligrosa, con fronteras resguardadas por grupos armados, comunidades cerradas y, sobre todo, muchos muertos.

Un buen ejemplo del impacto del «boom» en la «ciudad» puede ser el pueblo de Tocache, con el burdel como centro de sociabilidad, mientras el «campo» puede estar representado por el pequeño caserío de Pacota, distrito de Nuevo Progreso, donde los mandos senderistas pretendían regular todo, hasta la vida sentimental de las personas. La «imagen urbana» nos remite al «libertinaje», el derroche de plata y cerveza sin límites, donde predominaba la ley del más fuerte. En la «imagen rural», por el contrario, se imponía el código moral radical, impuesto desde afuera y a la fuerza si era necesario; este era el «campo» del PCP-SL, donde las infracciones se pagaban muchas veces con la muerte, y se observaba, fiscalizaba e investigaba todo, donde no había «mujeres de bar» y a veces ni se vendía alcohol.

En la memoria colectiva de la zona, aún se recuerda que primero llegaron «los colombianos», clandestinamente, a internarse en el monte sin acercarse al pueblo, pero luego fueron apareciendo poco a poco hasta andar abiertamente por las calles de Tocache, previo pago a las autoridades de turno, cada uno con su grupo de hombres armados, sus «sicarios». Así empezó el apogeo, casi de la noche a la mañana. Luego apareció el pandillaje y rivalidad entre las distintas «firmas», con encuentros repentinos que casi siempre terminaban a balazos. Desde mediados hasta fines de los años ochenta fue casi imposible transitar entre Tingo María y Tocache sin ver por lo menos un muerto botado al borde del camino, con o sin un letrado acusador. La fama de «El Vampiro» radicó no sólo en que era tocachino «neto», sino que fue el primer peruano en Tocache en armar su propio grupo, el primero y más sanguinario, el que les hizo la guerra a los colombianos. Se constata entonces que la

expansión de las firmas, primero colombianas y luego peruanas, y sus «sicarios» es paralela al ingreso del PCP-SL en el Huallaga, ambos favorecidos por el auge de precios de derivados ilícitos de la coca.

El análisis de las actividades del PCP-SL en el Alto Huallaga tiende a girar alrededor de una tensión entre lo político y lo económico. Se suele presentar el vínculo de la población con el PCP-SL como algo poco profundo, meramente de conveniencia y por lo tanto pasajero. Si bien es cierto que, al tratarse de una población de colonos e inmigrantes temporales es lógico suponer que las motivaciones económicas pesaran mucho más que las políticas y que el contenido ideológico del discurso senderista que no tenía gran resonancia en el Alto Huallaga, sin embargo, la relación compleja entre política y economía nos obliga a entender el régimen de control que aplicó el PCP-SL en los lugares donde logró consolidarse y consiguió control territorial.

Si partimos de que el espíritu del proyecto senderista fue altamente moralista, es esencial considerar la fuerza de atracción que debió haber representado en el Alto Huallaga, espacio de desorden social que «exigía» o «reclamaba» el orden que llegó con la intervención del PCP-SL. Es decir, podríamos preguntarnos si no fue acaso la vida «desenfrenada» del apogeo la que creó las condiciones en las cuales el mensaje justiciero del PCP-SL encontró eco.

El inicio del apogeo de la droga en el Huallaga data de 1974 o 1975 en los pueblos inmediatamente al norte de Tingo María, siendo al parecer su centro el caserío de Anda. Los focos tempranos fueron relativamente discretos pues la droga se elaboraba en lugares escondidos en el monte y, una vez procesada, no circulaba de modo abierto en los caseríos o pueblos. El apogeo se manifestaba entonces básicamente en el consumo suntuario de la población local, en las fiestas alborotadas y en la aparición de artículos de lujo: carros, motocicletas, ropa ostentosa, joyas, relojes. Por su parte, la presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga no comienza a notarse hasta unos seis años después. Como hemos resumido en la Historia de la región Nororiental, poco después de los operativos anti-narcóticos Verde Mar I y II el terreno quedó abonado para la prédica senderista en defensa de los cocaleros ante la represión estatal. Los pobladores de Aucayacu, como también autoridades municipales de ese entonces, mencionan la huelga de cocaleros en 1981 como el acontecimiento que contó con presencia oculta de cuadros senderistas por primera vez. Según se deduce de la información recopilada, son tres las zonas donde el PCP-SL se asentó para organizar el campo. Dos estaban en la margen izquierda del río Huallaga: una de ellas comprendía el puerto Venenillo y los caseríos La Merced, Locro, Corvina, Los Cedros, entre otros, que luego conformaría el llamado «Bolsón Cuchara»; y la otra reunía los caseríos de San José de Pucate, San Martín de Pucate y Primavera frente a Aucayacu. La tercera zona fue el sector Gocen-Nueva Esperanza, situado en la margen derecha del río Huallaga, al norte de Pucayacu, cerca al caserío de Consuelo. Debemos recordar que la primera acción armada del PCP-SL en el Huallaga fue un ataque al puesto de la Policía Forestal de Pucayacu en 1982, un blanco a pocos kilómetros de la zona de Gocen, lo cual refuerza la hipótesis de que Gocen-Nueva Esperanza habría sido el primer núcleo del PCP-SL en el Alto Huallaga.

Lo cierto es que a inicios de 1982 grupos de senderistas ya estaban visitando los caseríos situados a lo largo de la margen izquierda del Huallaga, desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco, reuniendo a los pobladores para pregonar su política y anunciando las nuevas reglas que los pobladores debían acatar. Vistiendo polos negros, pasamontañas y portando escopetas, tramperos y revólveres, estos primeros grupos predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado en defensa de los cultivos de coca, en vista de que las huelgas pacíficas, según ellos, no conducían a nada.

A la par del creciente control senderista sobre el campo se constata el surgimiento de Ramal de Aspuzana como centro abierto de la droga. «Centro abierto» de la droga se refiere a la etapa de apogeo, cuando se comercializaba PBC e insumos libremente en las calles de los pueblos. Ramal de Aspuzana brotó como mercado importante entre 1981 y 1982, casi paralelamente al surgimiento del poblado de Paraíso y a los pueblos más grandes de Uchiza y Tocache. El grado de clandestinidad que gozaba el negocio de la droga dependía del accionar de los policías. El narcotráfico se ejercía abierta o libremente sólo en la ausencia de represión policial, sea por ausencia de una delegación policial sea por el soborno o la amenaza de violencia en su contra. Estos sitios serían seguidos posteriormente por Puerto Pizana y Sión, aunque nada impedía que un pueblo que dependía del narcotráfico oscilara múltiples veces entre centro abierto y centro «cerrado» o clandestino de la droga, siempre y cuando se produjeran momentos en que las fuerzas policiales dejaban de reprimir el negocio.

En las calles de Ramal de Aspuzana se produjo una actividad comercial bulliciosa donde el dólar había apartado a la moneda nacional, aunque el movimiento más importante se encontraba al otro lado del río, en el sector de Magdalena, donde operaban una serie de aeropuertos clandestinos desde los cuales se embarcaba la droga. Las primeras relaciones entre narcotraficantes importantes y el PCP-SL datarían de esa época, primeramente por el control de las pistas, es decir la concesión de permisos de uso a cambio de los pagos de derecho, y luego por la protección que los senderistas proveerían contra los operativos que efectuaba la UMOPAR en la zona.

En términos globales la expansión senderista dentro del Alto Huallaga siguió una tendencia de sur a norte por toda el espacio rural del valle, buscando organizar «el campo» y acercarse poco a poco a la «ciudad» o centros urbanos más importantes de cada sector. Siguiendo ese patrón, los dos atentados de gran envergadura en el pueblo de Aucayacu contra puestos de la Guardia Civil se dieron sólo después de la consolidación del control senderista en las zonas aledañas al pueblo, aunque antes de estas incursiones, hubo una serie de acciones menores como el atentado no mortal contra el ex alcalde Augusto Tovar Tovar a fines de 1982; el intento de asesinato en 1983 del gobernador en la puerta de su casa; una carta firmada a principios de 1984 por el grupo Pucallacta exigiendo la renuncia de todas las autoridades municipales, seguido por el atentado e incendio de la casa del alcalde Enrique Bruckman Falcón.

Entre 1983 y 1985, el PCP-SL procedió a instalar sus propias autoridades, con distintos grados de clandestinidad, en la mayoría de los caseríos de la zona rural desde Tulumayo hasta

Yanahuanca. Su presencia abierta se concentraba en las comunidades ubicadas a la derecha de la Carretera Marginal pero retiradas varios kilómetros de la misma, y en la margen izquierda del río Huallaga —sobre todo en la zona de Cuchara, frente a los pueblos de Aucayacu y Ramal de Aspuzana, y los sectores de la Morada y Huamuco—.

2.23.2.3. El Poder y los negocios

A la vez que el narcotráfico impuso una nueva técnica para refinar la droga pues las bolas de «bruta» cedieron en importancia frente a paquetes de pasta básica lavada conocida como la «base», el PCP-SL organizó su «nuevo estado» en los numerosos caseríos que controlaba, convertidos en «Comité Popular», el cual gobernaba los asuntos de la comunidad mucho más fuerte e intrusivamente que la desplazada directiva comunal. En efecto, la nueva autoridad se encargaba de «organizar» al pueblo, es decir, aplicar las instrucciones de la guerrilla y repartir las enseñanzas y tareas políticas del Partido. Si llegaba una persona nueva buscando terreno, esa persona tenía que entrevistarse con el delegado, quien antes de darle permiso para residir allí, le interrogaba exhaustivamente sobre su procedencia, su historia y sus propósitos. Sólo si conocía a alguien del caserío y venía recomendado encontraba acogida.

«Nombrar» autoridades era uno de los mecanismos centrales que utilizaba el PCP-SL para someter individuos al régimen administrativo dentro de su llamada «red territorial». Con ese nombramiento comenzaban las responsabilidades y tareas, la obligación tanto de rendir cuentas cada cierto tiempo a las autoridades superiores del partido (especialmente cuando llegaba la guerrilla o la fuerza principal) así como aceptar sus directivas, que no siempre eran fáciles de cumplir.

Si en un principio, el PCP-SL mató a la gente acusada o percibida como «maleante», luego asesinó selectivamente a las personas que no quisieron vivir bajo el dominio senderista o los obligó a salir de los caseríos. Todos los coccaleros, con excepción de los agricultores más pobres, tenían que entregar un porcentaje de cada cosecha al Comité, y la droga, que antes se procesaba de forma clandestina, se vendía públicamente en toda la margen izquierda del río Huallaga, en compra/venta libre aunque controlada pues sólo se permitía esa compra en sitios designados por el Partido, bajo la vigilancia de uno de sus militantes. Para entrar a comprar los acopiadores necesitaban una «recomendación», es decir contar con alguien de la zona que los contactara con los delegados del PCP-SL y los avalara antes de recibir autorización. Una vez autorizado, el acopiador podía comprar pero acatando las reglas que establecía el Partido.

En la zona de Aucayacu y en otros lugares se explica la intervención del PCP-SL en la transacción misma de la droga a partir de los abusos que cometían los traqueteros, que pesaban los kilos de PBC con una balanza adulterada o calculaban excesivamente el descuento que se aplicaba a la droga por agua o impurezas. El Partido encontró una solución formal a estas tretas de los traqueteros con la instalación de la balanza bajo administración del Comité Popular de cada

comunidad. El «control de la balanza» funcionaba en puntos establecidos a lo largo de la margen izquierda del Río Huallaga, ubicados cerca de los puertos principales y de acceso fácil para los traqueteros que cruzaban el río en pequeños botes desde Aucayacu o Ramal de Aspuzana. Había balanzas en Cerro Alegre (frente a Aucayacu), San Martín de Pucate (frente a Las Mercedes) y San José de Pucate (frente a Cotomono) igual que en los puertos de Moena y Muyuna, aunque parece ser que en la margen izquierda del río la institución de la «balanza legal» se extendía desde Venenillo hasta Magdalena y la Morada.

Además de la administración de cicales confiscados y su producción, el cobro de tributo a los cocaleros y la regulación de las transacciones de la droga dentro de sus respectivos sectores, los Comités Populares también controlaban, como dijimos anteriormente, las pistas o aeropuertos clandestinos desde los cuales las empresas o firmas de narcotraficantes embarcaban sus cargamentos de PBC, como en Bolognesi y Pavayacu (Aucayacu); Magdalena; La Morada, Huamuco y Nueva Esperanza (Consuelo), entre otros.

A mediados de 1987, el PCP-SL amplió la organización de los Comités Populares en la margen izquierda del río Huallaga, diversificando la cadena y responsabilidades de los representantes del Partido. El comité ya no dependía de un «delegado» sino de cinco, de los cuales tres eran principales: el mando político, mando militar y mando logístico. El mando político coordinaba las asambleas y se responsabilizaba por impartir la enseñanza política del Partido. El militar velaba por la seguridad de la comunidad, organizaba a las milicias o «fuerza de base» y seleccionaba a los mejores combatientes para su incorporación a la fuerza local o fuerza principal del Ejército Popular Guerrillero (EGP). Pero también cumplía funciones policiales de detener a personas que habían transgredido las reglas del Partido. El tesorero del Comité era el mando logístico, el encargado de administrar los fondos y propiedades «del pueblo» pero también de suministrar las medicinas o provisiones que requiriese el Partido.

Entre nueve y doce Comités Populares conformaban un «Bolsón», de los cuales en la margen izquierda del río Huallaga se conocen el Bolsón Cuchara (Venenillo), el Bolsón Pucayacu (Primavera, Cerro Alegre, Bolognesi, San José y San Martín de Pucate entre otros), el Bolsón Magdalena, el Bolsón la Morada y el Bolsón Huanuco. En orden jerárquico, después del «Bolsón» estaba el Comité Regional del partido.

En la estructura militar de Sendero, las Fuerzas Principales conforman la llamada «Red Móvil», sin base fija y movilizada de sitio en sitio. La fuerza local generalmente se desplaza dentro de la «Red Territorial», es decir las áreas ya organizadas y administradas por el Partido, y promueven acciones de menor envergadura. En el Alto Huallaga Sendero llegó a dividir el valle en cuatro zonas territoriales (T1, T2, T3, T4) desde Monzón hasta Campanilla, y se supone que cada «Fuerza Local» operaba dentro de un territorio determinado, si bien las fechas de inicio y terminación de la existencia real de estos «territorios» no están claras. Mientras tanto la Fuerza Principal operaba centralmente en áreas que todavía no habían sido organizadas o que se habían perdido a raíz de las acciones contra-

insurgentes de las Fuerzas Armadas. Aunque la Fuerza Principal desarrollaba campañas de larga duración, desplazándose entre corredores que comunican sierra y selva, solía emprender acciones, con el apoyo de las zonas ya organizadas, hacia zonas colindantes o fronterizas con las mismas. Para acciones a gran escala, por ejemplo la toma de pueblos grandes donde había presencia de cuerpos armados del Estado peruano, no actuaba sola sino se reforzaba con combatientes de las fuerzas locales y «de base» de los Comités Populares.

2.23.2.4. El PCP-SL se expande con la coca

Fue recién a mediados de la década de 1980 que el PCP-SL comenzó a desplazarse río abajo en el Huallaga, en dirección norte, hacia lo que para ese entonces emergía como la zona más importante del mercado de la droga: Uchiza, Paraíso y Tocache. A diferencia de la parte sur, desde Anda a Ramal de Aspuzana, donde en los primeros años del apogeo el narcotráfico no se ejercía con una extrema violencia, en la zona norte del Huallaga era mucho más común ver a patrones o narcos andar con pequeños ejércitos de sicarios que les servían de «seguridad» y como un instrumento de poder, tanto en las zonas urbanas como rurales. La llegada de PCP-SL significó que les sería más difícil, cuando no imposible, operar con libertad en el campo, y los campesinos cocaleros hipotéticamente tenían quien represente sus intereses no solamente frente a las agresiones del Estado peruano sino también frente a las presiones de los otros actores del mercado de la droga.

PCP-SL entró a Paraíso al principio de modo clandestino y luego de modo abierto a partir de una incursión armada, que inició el dominio sobre el pueblo que duraría hasta fines de los noventa. Fue recién en 1978 que apareció el cultivo de coca en Paraíso y sólo dos años después se convirtió en un centro de narcotráfico. Paraíso antecedió a Uchiza como un centro totalmente abierto al comercio de la droga por dos o tres años, y según algunas versiones la superó en volumen de negocio hasta que Uchiza emergió como el mercado más activo del Huallaga, a partir de 1984-85, posición que «defendería» hasta 1990. Paraíso resultó ser un lugar estratégico por ser un enclave de narcotraficantes donde no había presencia de las fuerzas policiales, por su relativo alejamiento de una vía de acceso rápido, y por sus fuertes nexos con los mercados y firmas de Uchiza y Tocache. El estallido inesperado del apogeo en 1980 había transformado un paraje netamente rural en un pueblo bullicioso y acaudalado, atrayendo personas no sólo de todas partes del país sino de México, Bolivia y Brasil si bien el grueso de la colonia extranjera la formaban los colombianos. De pequeña colonia agraria, Paraíso se transformó en punto de concentración para todos los elementos del apogeo tanto urbano como rural. En Paraíso vivían patrones colombianos y peruanos en «bonitas casas» con sus sicarios y traqueteros. Las calles principales se llenaron de restaurantes, bares y discotecas. A poca distancia se cultivaba coca, se maceraba la hoja y aterrizaban las avionetas. Lo único que no había para ser como los otros centros de la droga eran autoridades del Estado. Paraíso abarcaba entre 18 y 20 caseríos, cada uno con sus respectivas zonas de cultivo, contando además con ocho pistas de

aterrizaje que en realidad eran simples caminos vecinales que comunicaban a los distintos sectores y funcionaban como pistas para despachar cargamentos de pasta básica al extranjero.

A partir de su llegada al caserío de Paraíso todo marchó muy rápido. El PCP-SL organizó todos los sectores de Paraíso pero también las zonas de cultivos alrededor de Nuevo Progreso, Tocache y Uchiza, tomando así poco a poco el campo. Los patrones que antes tenían carta abierta para presionar a los campesinos con sus bandas de sicarios se vieron obligados a desplazarse hacia las zonas urbanas por miedo a que los agricultores informaran a los delegados de los Comités Populares.

Un buen ejemplo de este ejercicio de justicia y orden sucedió cuando un grupo armado de senderistas ingresó al pueblo de Nuevo Progreso y reunió a toda la población en la plaza de armas. Decían que venían «a poner orden» a causa de las muchas quejas que habían recibido: contra los «traqueteros» que estafaban a los agricultores en la compra de la droga, y que las «firmas» recibían droga fiada pero no cancelaban sus deudas. Dieron un plazo de 24 horas para que todos remediaran sus problemas de pago. «Y los hombres al ver que las cosas eran serias», cuenta un testigo, «se han puesto a derecho, creo que desde esa fecha la gente empezó a valorar su vida y a no deber». Poco después se formó un comité dentro de Nuevo Progreso y desde entonces, cualquiera que tuviera problema de cobranzas podía buscar al delegado y presentar su denuncia, sabiendo que allí «harían justicia».

La llegada del PCP-SL a Tocache sería más sutil al principio, quizá por tratarse de un pueblo más grande o quizás por ser una situación totalmente diferente. Según relata un ex sicario que trabajó para una de las firmas principales, una persona de confianza de «Machi», fue a Tocache para presentar a un emisario del PCP-SL a los narcos más importantes, entre ellos «Vampiro», «Mashico», «Aníbal», «Shushupe», «Aureo», el «gato Gerber». El representante senderista anunció que su organización iba a entrar al pueblo, pero no para enfrentarse con los narcos sino para ayudarlos a ordenar la ciudad, así como para poner en jaque a la policía y acabar con la delincuencia que azotaba a la zona urbana. Fue un ofrecimiento que al parecer la mayoría de los narcotraficantes recibió con agrado. El PCP-SL habría convencido a los jefes de «firmas» que el apoyo de su organización al ordenamiento del pueblo sería más eficiente si ellos, los narcotraficantes, invertían en el trabajo de los senderistas, trayéndoles incluso armamento de guerra de Colombia. Fue precisamente entre 1987 y 1988 que se notó una transformación en el armamento que utilizaban los grupos senderistas en sus acciones de guerra, pues si antes portaban revólveres y escopetas, luego llevarían metralletas, AKM, FAL y RPG.

Ese mismo año, 1986, los vuelos con droga comenzaron a salir del aeropuerto municipal de Tocache «con fuerza», a veces hasta cuatro o cinco veces al día. El narcotráfico estaba en pleno apogeo y la droga circulaba abiertamente.

«Chatín», importante mando logístico del PCP-SL que comprendía todo el sector de Tocache, manifestó luego de su captura, que él controlaba el negocio de la droga cobrando un porcentaje por cada kilo de PBC que salía por la pista clandestina de Cañuto, ubicada apenas a 40 minutos de la Base

de Bambamarca y a dos horas de Tocache. Según diversos testimonios, la pista fue construida por el coronel EP Luis Aparicio Manrique, con maquinaria pesada del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH). El PCP-SL cobraba por el uso de la pista, como anteriormente lo había hecho en Uchiza, donde fijó la «matrícula» (pago anual) que les permitía a las firmas operar en el lugar y pagar cupos de 10 mil dólares por cada vuelo. «Chatín» se encargaba de administrar la pista de Cañuto y además era un elemento sanguinario pues había asesinado por lo menos a cuarenta personas, entre militares y civiles.

Es indudable que el PCP-SL entabló una relación con el mercado de la droga mucho más profunda que las instituciones armadas que operaban en el Alto Huallaga, fueran éstas las Fuerzas Policiales, el Ejército o la Fuerza Aérea. Los nexos del grupo maoísta con la producción, el comercio y la distribución de la PBC son múltiples: en el *cultivo y elaboración*, los Comités Populares controlaban la tenencia de tierras y con ello el primer eslabón del mercado de la droga, el cultivo de la coca; en el acopio, el PCP-SL disponía los términos y condiciones de todos los que entraban a las zonas rurales para comprar la droga, acopiadores y traqueteros; en la *distribución*, a través de la vigilancia que ejercía sobre pistas clandestinas de aterrizaje en la zona rural; en las *concesiones* a empresas locales de la droga obligadas a sujetarse al Partido.

Esta ingerencia múltiple muestra claramente que, hacia fines de la década de 1980, el PCP-SL buscaba imponerse cada vez más sobre el mercado local, habiendo sustentado su expansión inicial en la administración de justicia y protección contra la represión de los operativos anti-narcóticos, sobre todo de la UMOPAR, y luego contra las labores de erradicación (CORAH).

En los primeros meses de 1987 ya había cientos de combatientes del PCP-SL concentrados en Tocache controlando a la población. El PCP-SL nombró delegados en cada manzana y organizó a los varones en una ronda nueva, esta vez sin la presencia de los sicarios. La llamada «ronda de cuadra» vigilaba las calles de la ciudad durante las horas nocturnas. Pequeños grupos de vecinos caminaban por sectores de tres manzanas, reportando cualquier situación que no podían resolver al Club Obrero, donde elementos armados del PCP-SL habían establecido un «Comité de Justicia Popular». Como dijimos, a fines de 1986 e inicio de 1987, el PCP-SL avanzó hacia el norte organizando a los pueblos y caseríos al norte de Tocache: Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo, entre otros, en una expansión rápida e intensiva alimentada por el fuerte movimiento de la droga en Puente Pizana, mercado importante de la droga a fines de los ochenta. La expansión de sus tareas organizativas llegaría hasta Punta Arenas/Campanilla, viéndose frustrada a partir de Juanjui por la presencia del MRTA.

Fue durante esta época que el PCP-SL habría comenzado a organizar los «Comités de poder popular paralelo» (CPPP) en los pueblos mayores que tenían presencia importante de fuerzas del orden, comités conocidos en el habla popular del Huallaga como «las Urbanas». La función de «las Urbanas» era mantener una red de espionaje, dedicarse al cobro de impuestos o colaboraciones de comerciantes y al asesinato selectivo de «malos elementos». Aucayacu sería un caso singular, pero

más tarde se sumarían a la lista Uchiza y Tocache, y una serie de caseríos pequeños a lo largo de la Carretera Marginal. En Aucayacu tuvo una fuerte presencia de 1986 a 1989, hasta que fue totalmente eliminado en 1992. En Tocache «la Urbana» duraría, según afirman algunos, hasta 1995.

A fines de mayo de 1987, el PCP-SL atacaría por primera vez el puesto policial de Uchiza y en junio declararían un paro armado en el Alto Huallaga. Entre Tulumayo y Nuevo Progreso obligaría a la población rural a participar en el bloqueo de la carretera, la destrucción de asfalto y la pintura de fachadas de viviendas a lo largo de la Carretera Marginal. Estos primeros paros serían una medida de fuerza poderosa, con la cual el PCP-SL no sólo lograba cortar la comunicación de vehículos entre Tingo María y el resto del Alto Huallaga, sino también demostraba su control total sobre el campo. Poco después comenzaría la destrucción de puentes sobre los ríos Pendencia, Pacae y Angashyacu. Con la destrucción de pistas y puentes, el viaje de 40 kilómetros entre Tingo María y Aucayacu, que antes se hacía en 45 minutos, se extendía a dos horas y media, sobre todo durante la estación lluviosa. El siguiente paso del PCP-SL fue la instalación de garitas de control a lo largo de la Marginal.

Parecía que el Alto Huallaga ya estaba bajo dominio senderista cuando el 15 de julio de 1987 paracaidistas de unidades especializadas de la policía tomaron el pueblo de Tocache en un gran operativo denominado «Relámpago». A todas luces, el PCP-SL y los narcotraficantes esperaban un contraataque policial porque ambos grupos se retiraron de la zona urbana antes del arribo de los primeros efectivos. Unidades especiales de la policía se instalaron tanto en Tocache como en Nuevo Progreso y en ambos centros urbanos la presencia del PCP-SL se volvió clandestina; si bien el abandono de Tocache debía de haber parecido en el momento sólo una retirada estratégica, el PCP-SL nunca volvería a intentar la ocupación abierta de un centro urbano dentro del Huallaga. En ese sentido, la toma y ocupación de Tocache, por ser la primera y última vez que el PCP-SL detentara un control abierto sobre la «ciudad», fue un caso límite. La regla fue más bien hostigar y presionar a la zona urbana desde el campo y, en ocasiones muy especiales, acumular fuerzas de todos sus «bolsones» para lanzar un ataque, entrar por un máximo de algunas pocas horas y salir de prisa antes que llegaran refuerzos de las fuerzas policiales o castrenses.

A raíz del Operativo «Relámpago» y la fuga al campo de las principales firmas, Tocache decayó como centro abierto de la droga, surgiendo Sión como nuevo foco del mercado de la droga. Sin embargo, Tocache seguirá siendo importante dentro del circuito del narcotráfico como centro de abastecimiento de insumos para la elaboración de la droga y productos de consumo como la cerveza y gaseosa. Continuarían saliendo los vuelos del aeropuerto municipal pero ya con menos frecuencia y de modo menos atrevido. Tocache tomaría un lugar muy secundario frente a Uchiza, donde el narcotráfico se mantendría en pleno apogeo y con una fuerza creciente hasta fines de la década de 1980.

Hacia mediados de 1987 comenzaron a presentarse en Paraíso los primeros conflictos con los narcotraficantes cuando se produjo la ruptura entre «Machi», el «capo» local, y el PCP-SL. Hay versiones diversas sobre la causa detonante. Algunos dicen que mientras «Machi» estaba de viaje en

Colombia, el PCP-SL habría matado a su hija o a toda su familia. Otros afirman más bien que los muertos eran once trabajadores de «Machi» que gente del PCP-SL vio hablando por radio y pensaron que se estaban comunicando con el ejército cuando sólo conversaban con su jefe; los senderistas dieron muerte a siete hombres del grupo de «Machi» en la Plaza de Armas de Paraíso, perdonando a los cuatro restantes bajo la condición de incorporarse a las filas de su movimiento. También existe una tercera interpretación: que señala que «Machi» había ordenado que un grupo de seis de sus hombres secuestraran a un ganadero de Paraíso, pero por fortuna la víctima conocía a sus captores y logró convencerlos para que lo soltaran. Poco después, el PCP-SL se enteró del secuestro y decidió enfrentarse con «Machi». Sea cual fuere el inicio del conflicto «Machi» llegó a «declarar la guerra» al PCP-SL y con la ayuda de la policía armó un «ejército» de cien hombres. Vistiendo uniforme policial «con rango de mayor o comandante» fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba senderista. El momento decisivo del conflicto sería el mes de noviembre de 1987 cuando, en un episodio que ya ha tomado matices de leyenda, las fuerzas del PCP-SL le tenderían una emboscada en la entrada de Paraíso. La emboscada fracasa, logrando sólo herirlo de bala, y «Machi» se atrincheró en el enorme «fortín» de concreto armado que había construido en el pueblo. Allí se inicia una batalla que dura cuanto menos 24 horas, dejando entre docenas o cientos de víctimas según diferentes versiones. Atrapado en su reducto, «Machi» sufre numerosas bajas entre su gente, pero al final logra salvarse gracias a dos helicópteros de la policía que llegaron en su auxilio.

En el segundo asalto al pueblo de Uchiza el 17 de marzo de 1989, la matanza de policías no sólo fue un hecho humillante para la institución policial sino que demostró, una vez más, el apoyo campesino con que gozaban los senderistas y el alto grado de corrupción de los responsables del destacamento policial. La táctica del PCP-SL de captar el rencor popular contra la policía para convertirlo en un argumento de poder propio se expresa en este evento con claridad, como veremos más adelante. Pero 1989 marcó un punto crítico en el despliegue del PCP-SL en el Alto Huallaga, pues el ataque a Uchiza coincide con una fuerte crisis en el precio de la droga que fuentes locales suelen atribuir ahora a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo cual causó una acumulación inusitada de PBC y una saturación del mercado local. Como consecuencia, el precio por kilo de «base» en el Huallaga comenzó desplomarse aceleradamente en 1990-1991, perdió más de la mitad de su valor y siguió bajando hasta llegar a niveles en que ya no era negocio procesar la droga. La caída de los precios y la contracción del negocio significaron, para el PCP-SL, el final de su «nuevo orden» en el Huallaga.

2.23.3. La corrosión de la droga

Ninguno de los actores presentes en el ciclo de violencia en el Huallaga escapó del inmenso poder corrosivo del narcotráfico. Algunos integrantes de la policía, por ejemplo, extorsionaron a los productores de coca de manera generalizada desde mediados de los años 70 hasta principios de los

años 80 aunque nunca intentó organizar a la población rural. Cobraron «cupos» por el embarque de droga desde los aeropuertos clandestinos pero no lo hacía en zonas rurales dominadas por el PCP-SL. También recibió sobornos de las firmas locales para «hacerse de la vista gorda» respecto a sus actividades en los centros urbanos, pero no trataron de arbitrar conflictos que surgían entre ellas. Miembros de las Fuerzas Armadas, por su lado, recibió pagos de los narcotraficantes locales para «dejarlos trabajar.» Se sabe que ayudaron en distintos momentos con los embarques de PBC al extranjero protegiendo la entrada y salida de avionetas en pistas clandestinas cerca a sus bases.

En el presente acápite resumimos la historia de la corrupción generada por el tráfico ilícito de derivados de la coca al interior del aparato del Estado antes y durante el período de conflicto armado interno. Hemos mencionado anteriormente que, por mandato constitucional, la prevención y el combate al narcotráfico están a cargo de la Policía y fue durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez que se promulgó la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DL N° 22095), el 2 de marzo de 1978. En ella se establecían los objetivos generales de la represión del Tráfico Ilícito de Drogas (TID) así como las pautas de acción de los órganos encargados de controlar la producción y comercialización de todas las variedades de coca, adormidera y marihuana, encargando a la Policía Forestal la reducción y sustitución de los cultivos, y a la Policía de Investigaciones, PIP, la investigación y represión de los cultivadores.

Con esta Ley, se declararon en emergencia los departamentos de Huánuco y San Martín así como la Provincia de Coronel Portillo, entonces perteneciente al departamento de Loreto, con fines exclusivamente de control del cultivo ilegal de la hoja de coca y represión al narcotráfico, debido, según se menciona en aquella Ley, «al notable incremento del cultivo de la coca con fines ilícitos en tierras que antes estuvieron dedicadas a cultivos de panllevar».

Por primera vez también, se encarga al Ministerio del Interior el planeamiento, organización y conducción de los operativos con el apoyo de los institutos de las Fuerzas Armadas, además de los otros sectores, creándose, como vimos, la Oficina de Control de Drogas, OFECOD.

Casi una década después, en pleno curso de las acciones subversivas, en septiembre de 1987, se creó el comando político-militar del Huallaga, con un destacamento al mando del coronel EP Rafael Moral Rengifo, encargado de conducir las operaciones militares contra subversivas en los departamentos de Huanuco y San Martín.

En las postrimerías de culminar su segundo mandato, en marzo de 1985, Belaunde Terry dictó la Ley N° 24150 que supeditó al control militar extensas áreas geográficas que habían sido declaradas en emergencia. En consecuencia, en los ámbitos de influencia del narcotráfico, como el Alto Huallaga, la policía tuvo que subordinar su accionar y función de prevención y combate al narcotráfico, a la autorización del Comando Político Militar. Eso colocó a las Fuerzas Armadas en permanente contacto con la problemática de las drogas.

2.23.3.1. A sangre y fuego

De la misma manera que la vinculación entre el PCP-SL y el narcotráfico fue notoria, también se conocía del alto grado de corrupción entre elementos de la PIP y la Guardia Civil acantonados en el Alto Huallaga, que tuvo como detonante el ataque a la comandancia de Uchiza por el PCP-SL, en marzo de 1989. Durante el enfrentamiento, que duró tres horas, perdieron la vida diez policías, incluyendo el jefe del destacamento policial Mayor de la Policía Nacional Carlos Farfán Correa, quien fue ajusticiado por los subversivos en la propia Plaza de Armas de Uchiza, poco después de ser tomado como rehén junto a un grupo de guardias, mientras los atacantes saqueaban e incendiaban el puesto policial.

Pocos meses antes del ataque, en un informe ante la asamblea de NNUU el 26 de noviembre de 1988, Enrique Bernaldes aseguró que en el Huallaga existían cien mil hectáreas de cultivos ilegales prácticamente bajo control del PCP-SL, convertido en una suerte de intermediario entre el coccalero y las «firmas», a cambio de una comisión. El gobierno de EEUU ya estaba al tanto de ésta conexión, según lo demuestran una serie de documentos internos del Consejo de Seguridad Nacional, pero no aprobó la estrategia del general EP Alberto Arciniega Huby de alianza con los campesinos coccaleros. Arciniega había llegado comisionado por el comandante general del Ejército general EP Artemio Palomino Toledo, para restablecer el orden interno al Alto Huallaga luego del asalto al puesto policial de Uchiza, con el objetivo de «ganarse» al campesino coccalero, que precisamente era la base social utilizada por la subversión para ejecutar sus ataques. De hecho, esta estrategia sumada a intensos operativos militares, marcaría el inicio de la derrota del PCP-SL en el Huallaga. Sin embargo, la «política Arciniega» no satisfizo a Washington que propició su salida del comando político-militar del Huallaga en noviembre de 1989, bajo la sospecha de estar aliado al narcotráfico, algo que por supuesto el general Arciniega ha rechazado tajantemente y las autoridades norteamericanas jamás han logrado probar.

Como estaba previsto, en mayo de 1991, Alberto Fujimori suscribió el convenio marco con los Estados Unidos, que en la práctica dio «luz verde» a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, con todos los riesgos que ello involucraba. Para ello, el 26 de septiembre de 1991, se expide el DS 137-91-PCM, que subordina el accionar de la Policía a las disposiciones de Comando Político-Militar en materia de subversión y narcotráfico.

2.23.3.2. Policía y corrupción

La corrupción policial es un tema que se ha venido discutiendo desde siempre. Durante la época de Morales Bermúdez, la famosa «Promoción» de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), a la cual pertenecían 35 generales, se adueñó entre otras direcciones, de la Dirección de Delitos contra el Patrimonio para repartirse los bienes que eran recuperados y proteger a ciertas bandas a cambio de

compartir el producto de sus robos. Esta descomposición -sólo comparable a la ocurrida dos décadas después en el Ejército con la famosa «promoción Montesinos», que copó los puestos de mando y se corrompió de la mano del ex asesor Vladimiro Montesinos- alcanzó su máxima expresión durante la gestión de Eduardo Ipinze Rebatta como director superior de la PIP, en 1983.

Al llegar Ipinze Rebatta a la Dirección Superior, el negocio ilícito del narcotráfico comenzó a cambiar de dueños. La PIP barrió a los «pequeños distribuidores» y «paqueteros» que eran protegidos por la Guardia Civil, y se concentró en las grandes mafias que llegaban a Lima procedentes del Huallaga.

La estación PIP de Apolo, en La Victoria, a donde iban a parar los traficantes intervenidos en la carretera Central, era una «mina de oro» apetecida por muchos policías. Algo similar ocurría con la estación PIP del Callao, a donde llegaban las personas detenidas con droga en el aeropuerto «Jorge Chávez». Un destaque a estos lugares llegó a costar diez mil dólares, pero en la época de Ipinze Rebatta, de la «venta» de los puestos más productivos se pasó al «alquiler». En otras palabras, una estación o división PIP debían producir una determinada cantidad mensual de dinero que era distribuida entre las cabezas de «La Promoción». No fue simple coincidencia que Reynaldo Rodríguez López, alias «El Padrino», dueño de la llamada «Villa coca», diera comienzo a una desconcertante prosperidad en tiempos de Ipinze Rebatta. Cuando el general Rómulo Alayza asumió la Dirección Superior de la PIP, se asegura que Rodríguez López le ofreció un espléndido banquete al cual asistió en pleno «La Promoción», que ya controlaba los altos mandos y todos los puestos claves de la PIP.

Con la captura de Rodríguez López quedó al descubierto la famosa red de protección oficial de la que gozaba. No sólo fue dado de baja y apresado el general PIP «Pepe Jorge», José Jorge Zárate. También fueron implicados en el caso de «Villa Coca» todos los jefes de la policía entre 1980 y 1985, los jefes policiales antidrogas, un asesor del primer ministro y varios empresarios. El general Irwin Jaime Llamosas, jefe de la División de Investigación Financiera de la PIP, fue dado de baja definitivamente y años más tarde aparecería como cercano colaborador de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. También fue dado de baja el general Ketin Vidal, quien según algunos proveía de información «privilegiada» a la mafia aprovechando su destaque en la División de Inteligencia de la PIP. Partes de inteligencia suscritos de su puño y letra fueron hallados en una caja fuerte de «El Padrino» Rodríguez López.

Otro ejemplo de la corrupción en las filas de la policía se constata en 1984 a raíz del juicio al narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, detenido en Lima cuando intentaba cerrar un «pase» de 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Vladimiro Montesinos ejerció la defensa de Porras, quien fue enviado al penal de Lurigancho pero a fines de ese mismo año fugó del país en una avioneta, con la ayuda precisamente de Montesinos y la complicidad de la policía que lo estaba investigando pues fue la propia policía, según el Coronel Pércovich, la que sugirió su traslado al Hospital Daniel A. Carrión del Callao, de donde fugó disfrazado de médico junto a dos efectivos de la

PIP apellidados Calderón y Delgado, con rumbo al aeropuerto «Jorge Chávez». El propio comandante Rivera Portel, jefe de Migraciones y Gamero Febres, jefe de Extranjería, lo ayudaron a embarcarse. Años después ambos serían convocados por Vladimiro Montesinos para trabajar en el SIN.

A partir de 1984, con la ayuda de la CIA y la creación de la Policía Aérea, el Ministerio del Interior logró detectar 48 aeropuertos clandestinos, los mismos que fueron fotografiados y permitieron formular el «Operativo Cóndor», de bombardeo masivo de pistas tanto en Perú como en Colombia, implementado con la ayuda de las autoridades norteamericanas. Una de las pistas dinamitadas pertenecía a un laboratorio clandestino ubicado en la frontera con Colombia, donde el narcotraficante Lucio Tijero producía clorhidrato de cocaína de alta pureza, una proeza para la época. Además, contaba en su haber con dos avionetas, una incalculable fortuna en bienes inmuebles en Iquitos y en Lima y, por supuesto, protección policial.

Como veremos a continuación, la descomposición policial fue un factor importante que ha permitió a las mafias operar con total impunidad en el Perú desde la década de 1960. Precisamente el allanamiento del complejo narco industrial de Tijero en Callarú, en agosto de 1985, dentro de la denominada «operación Cóndor» y a las tres semanas de haberse instalado el gobierno de Alan García, puso en evidencia el crecimiento desmesurado del poderío económico del narcotráfico, su colusión con el poder y su peligrosa alianza con los cárteles colombianos de la droga.

2.23.3.3. Se fortalece la DIGIMIN

Según la opinión del general en retiro Edgar Luque Freyre, quien se desempeñó durante cuatro años, entre 1987 y 1990, como director de la DIGIMIN durante la gestión de José Barzalo Burga y posteriormente con Agustín Mantilla Campos, uno de los principales énfasis del gobierno aprista fue organizar, desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, un sistema de inteligencia lo suficientemente competente como para hacer frente con éxito al fenómeno del terrorismo y también a las mafias internacionales de la droga que se habían instalado en el Perú. El propio Luque Freyre admite que entonces ya existían pruebas concretas de la alianza entre subversión y narcotráfico:

El narcotráfico abastecía determinado tipo de armamento y la subversión le protegía los vuelos para llevar droga al exterior. nosotros presentamos testimonios, fotografías, pero el gobierno (de Alan García) prefirió mantenerlo oculto por razones que a veces son difíciles de entender.

Desde su particular percepción, el narcotráfico había infiltrado numerosas esferas del poder, desde el Congreso hasta los organismos que se supone tenían que perseguir el delito, y ni que decir de la propia policía. La serie de escándalos como el referido al ex asesor Luis López Vergara, brazo derecho del ex ministro del Interior Luis Percovich Roca, involucrado con el narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, o la defenestración del senador Yashimura por su sociedad con Guillermo Cárdenas Guzmán, alias «Mosca Loca», en cuyo avión bautizado «Blanquita» se habían trasladado los principales candidatos de Acción Popular durante la campaña del 1980, no serían casos aislados. La captura del diputado aprista Miguel Ángel del Pomar, involucrado con una red de

narcotráfico internacional que enviaba cocaína a Alemania, o la del diplomático Francisco Tweedle, en cuya valija fueron hallados varios alijos con droga, fueron evidencias rotundas de su alto poder corrosivo. Años después, la grabación de una conversación telefónica entre el congresista de Cambio 90 por Chachapoyas, Manuel La Torre Bardales, el narcotraficante Abel Muñoz Seijas, contador de Demetrio Chávez Peñaherrera, y un sujeto identificado como Carpio, en marzo de 1993, confirmaría que estas acciones ilegales continuaron durante el gobierno fujimorista.

La corrupción entre elementos de la Policía Nacional, llámese PIP, Guardia Civil o Guardia Republicana, se complementa con el repliegue de estas instituciones de los espacios rurales ante el hostigamiento y los ataques cada vez más frecuentes del PCP-SL contra blancos policiales. La situación se modificó radicalmente al llegar Alberto Fujimori al poder, momento en que el Ministerio del Interior fue «tomado» por la fuerzas armadas. A la DIGIMIN fue nombrado el general EP Cáceres y el general Alvarado reemplazó a Agustín Mantilla. Todo el personal preparado para producir inteligencia en la DIGIMIN fue reclutado por el SIN de Vladimiro Montesinos. Sus equipos fueron transferidos y, según Luque Freyre, la información de inteligencia que existía sobre subversión y narcotráfico fue «capturada» por el asesor Montesinos. Pero no sólo se dismanteló el aparato de inteligencia del MININT, sino que, como dijimos, su accionar quedó subordinado a los Comandos Político-Militares en las zonas en emergencia, por lo cual por lo menos durante una década la policía no volvería a recuperar su autonomía y presupuesto, ni siquiera en el tema de la lucha antidrogas.

2.23.3.5. Uchiza: el mejor ejemplo, hito crucial

El detonante que posibilitó este orden de cosas fue el ataque al puesto policial de Uchiza, ocurrido el 27 de marzo de 1989. Aquel día, una columna subversiva de doscientos hombres se enfrentó a cerca de 50 efectivos policiales durante tres horas, perdiendo la vida diez policías, incluyendo el jefe del destacamento policial mayor de la PNP Carlos Farfán Correa, quien fue ajusticiado por los subversivos en la propia Plaza de Armas de Uchiza, poco después de ser tomado en rehén junto a un grupo de guardias. Todo indica que algunos grupos de narcotraficantes también participaron en el ataque debido, según diversos testimonios, a los «cupos» cada vez más altos que exigía la policía por brindar seguridad a los vuelos que decolaban con droga en el aeropuerto de Uchiza, afirmación corroborada por el Informe de Inspectoría N°01-89-IG-PNP de marzo de 1989.

Ante el dramático pedido de auxilio hecho por radio por el Mayor Farfán, en pleno ataque al puesto policial bajo su mando, la comandancia 76-CPNP de Tocache, ubicada apenas a una hora de Uchiza, respondió que no tenía orden del Jefe de Unidad para brindar su apoyo, mientras que el destacamento de la 64-CPNP-UMOPAR de Santa Lucía manifestó que no podía salir porque estaba lloviendo. Por su parte, el Ejército acantonado en Tingo María esperó órdenes superiores para salir en auxilio de los policías. Esta ayuda solicitada que nunca llegó muestra patéticamente no sólo las descoordinaciones existentes entre las fuerzas del orden sino también los intereses existentes.

Un policía sobreviviente del ataque a Uchiza, Marco Urtecho Meléndez, responsabilizó directamente al mayor Carlos Farfán y al capitán Walter Moscoso de permitir el aterrizaje de avionetas colombianas a cambio 10 mil dólares. De su declaración se desprende que los clases y guardias recibían 120 dólares por vuelo, mientras a los alfereces, capitanes y mayores les correspondía 300, 500 y 800 dólares respectivamente. Tal era el grado de protección e impunidad que en cualquier momento del día o de la noche las avionetas decolaban de Uchiza para recoger su ilícita carga en una operación que apenas tomaba entre cinco y ocho minutos. A nadie le preocupaba que las naves exhibieran matrícula y bandera colombiana. La orden del capitán PIP Walter Moscoso Carrera era que personal de la DOES permaneciera en alerta en la parte externa del aeropuerto, por si aparecían sorpresivamente helicópteros de la DEA o de UMOPAR, en cuyo caso debían intervenir a los colombianos que se hallaban en el aeropuerto de Uchiza. Los arreglos se hacían en la propia base policial hasta donde llegaban los jefes de las «firmas» para reunirse con el mayor Farfán Correa y el capitán Moscoso, quienes exigían 10 mil dólares de «cupo» por cada vuelo. Había días en que despegaban hasta cinco vuelos con droga. Según la información disponible, en la zona de Uchiza operaban 41 «firmas» de narcotraficantes, que tenían acuerdo con el PCP-SL para recibir seguridad en los aeropuertos clandestinos ubicados en Paraíso, Puerto Pizana, Pólvora y otros lugares adyacentes a Uchiza y Tocache, a cambio de dinero y armamento.

En Paraíso, al sur de Uchiza, los subversivos utilizaban la avenida principal del pueblo como «aeropuerto clandestino». El 1987, «Ormeño» era el mando militar del PCP-SL en la zona; con el tiempo sería mando militar de Comité Regional de Huallaga del PCP-SL y brazo derecho del responsable regional «Artemio». Ex licenciado del Ejército, de 38 años y contextura delgada, «Ormeño» tenía bajo su mando 60 hombres, en su mayoría procedentes de Pativilca, Barranca, Huánuco y Lima, los cuales, de acuerdo al testimonio de un desertor, participaron en el ataque a Uchiza. Quien encabezó las acciones fue un sujeto llamado «Tocino», de 35 años, natural de Pucallpa, «delegado» del PCP-SL en Paraíso. Según se desprende de la investigación policial, el ataque fue planificado por las «firmas» debido a las exigencias del personal de la 64-Comandancia de la PNP-UMOPAR al mando del mayor PNP Carlos Farfán, contra la población, que se contradecían también con el interés de los subversivos por controlar los cupos por el «trasteo» de droga en el Alto Huallaga.

Al poco tiempo de terminado el régimen aprista, cuando Agustín Mantilla Campos y su hermano abrieron una cuenta en el Dunmore Management, en la agencia del UBS en Miami, informaron al banco que *«operaban un servicio de minibuses y eran propietarios de una empresa de seguridad»*, actividades que hasta ahora han permanecido en el misterio. Con el tiempo, las cuentas se abultaron hasta llegar a más de dos millones y medio de dólares. Hasta abril de 1995, cuando Mantilla ya estaba en libertad, se realizaron numerosos débitos, incluidos veintiún pagos swift «hacia beneficiarios desconocidos», entre los que podría haber estado Vladimiro Montesinos. Parte de estos depósitos provendrían de jugosas comisiones por la compra de armas y equipos electrónicos cuando

Agustín Mantilla era viceministro y luego como Ministro del Interior, entre 1987 y 1989, las cuáles llegaron a sumar en total 74 millones de dólares.

Un «Reporte de Actividades Sospechosas» emitido por la filial del Swiss Bank Corporation (SBC) en Nueva York en el 2002, indica que Agustín y Jorge Luis Mantilla abrieron la cuenta con 300 mil dólares bajo la denominación «Killarney Management» el 26 de diciembre de 1990. Dos semanas después, Jorge Luis Mantilla abrió otra cuenta por un monto similar. En el mismo reporte del SBC, se señala que se detectaron, además, otras dos cuentas a nombre de los traficantes de armas de origen israelí Zvi Sudit Wasserman e Ilan Weil Levy, lo que confirmaría que el origen del dinero depositado en ellas provino de «coimas» por la venta de armas. Mantilla ha dicho a quienes han querido escucharlo que Zvi Sudid fue quien le presentó a Vladimiro Montesinos, aunque no ha precisado la fecha.

Tras el autogolpe de Fujimori, el 5 de abril de 1992, Mantilla fue sacado de su domicilio y luego acusado de tenencia ilegal de armas. Se le reconoce el coraje de haberse sometido a la justicia. Estuvo recluido en el Hospital de Policía durante quince meses. Lo que jamás se han conocido son las verdaderas razones de su detención, máxime cuando durante el gobierno aprista, gracias a su buena relación con Mantilla, Montesinos tuvo acceso privilegiado a información sobre narcotráfico y seguridad nacional. Incluso, hay quienes refieren que más de una vez los vieron llegar juntos a Palma del Espino, en Tocache, donde se quedaban a pernoctar.

2.23.3.5. El Ejército entra al Huallaga

En mayo de 1991, Alberto Fujimori suscribió un convenio marco con los Estados Unidos, que en la práctica dio «luz verde» a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, con todos los riesgos que ello involucraba. Un mes después de la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno peruano y el de EEUU, se amplió la capacidad de los institutos armados para asegurar y reforzar el control sobre las zonas cocaleras y de tráfico ilícito de drogas como el Alto Huallaga, asumiendo de esta manera una nueva responsabilidad a la que no estaban autorizados por la Constitución. La policía, desgastada por largos años de lucha contra el TID y el terrorismo, y la alarmante corrupción en sus filas, quedó así subordinada a la autoridad político-militar y los operativos antidrogas a la protección oficiosa del Ejército.

Cuando Roberto Arciniega llegó a la zona del Huallaga en 1989 la situación era explosiva. Un mes antes del ataque al puesto policial de Uchiza, la policía se había visto obligada a cesar la erradicación debido a acciones cada vez más violentas de parte de los cocaleros, que acusaban a la DEA de estar utilizando el «Spike», un insecticida altamente dañino para todo tipo de cultivos, no sólo de coca. Por su parte, los arroceros de San Martín habían bloqueado en varios tramos la carretera Marginal demandando que el gobierno les compre su producción, y mantenían un paro indefinido en toda la Región convocado por el Frente de Defensa de los Intereses de San Martín con su dirigente

Lucas Cachay a la cabeza. La sede del Banco Agrario en Tarapoto había sido quemada por los subversivos, que mantenían secuestrado al presidente de la Corporación de Desarrollo de San Martín. y la actividad petrolera se encontraba semiparalizada por la actividad subversiva, que extendía sostenidamente sus «zonas de control» en el Huallaga.

Era un hecho que en San Martín existía un problema social creado por la incapacidad del gobierno aprista para resolver las demandas de arroceros y maiceros, a quienes ENCI había dejado de comprar su producción, situación que el MRTA había capitalizado a su favor. El General Arciniega decidió licenciar al 30 por ciento de la tropa, para incorporar a reclutas de la zona, por su gran ventaja de conocimiento del terreno y por que en materia de derechos humanos «respetaban a su gente», según dice Alberto Arciniega. Además, inició un diálogo con los cocaleros a quienes les prometió no combatirlos: «Si lograba que le diera la espalda a Sendero, su derrota en el campo militar sería más sencilla y nos tomaría menos tiempo», reflexiona. Por lo mismo, en la primera oportunidad que tuvo de dialogar con los cocaleros, fue directo: «les dije que no eran narcotraficantes ni subversivos y me comprometí a que nadie los tocaría en tanto yo permaneciera en el Huallaga».

Arciniega propuso, en esencia, que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado peruano continuaba reprimiendo a la población *en general*. Su decisión de prohibir la actuación de las fuerzas policiales o la continuación de los programas de destrucción de los cultivos de la coca en el Huallaga reflejó su entendimiento que dicha represión dañaba las posibilidades de exigir de la población una alianza con las fuerzas del orden para disputarle al PCP-SL sus bases de legitimidad entre la población local.

Desde 1989, la expansión de las actividades del ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que a la larga afectaron el avance del PCP-SL: la colocación de bases militares en Uchiza, Palma del Espino (Santa Lucía), Tocache y Madre Mía, conjuntamente con la reorganización o refuerzo de la presencia del ejército en Aucayacu; la reanudación de trabajos de inteligencia y el mejoramiento de la Carretera Marginal. En 1990 se consolidaría la presencia del ejército con nuevas bases en Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana y Punta Arenas, mientras el apogeo de la droga comenzaría a perder la fuerza que lo había caracterizado durante buena parte de la década de los años ochenta. Las redes de narcotráfico se desplazarían hacia el Bajo Huallaga (Juanjuí, Bellavista, Picota), y en mayor medida hacia Aguaytía y Pichis-Palcazu. Hasta allí los seguirían elementos del PCP-SL.

Arciniega, cuestionado por las autoridades norteamericanas, fue sucedido en el cargo por el general EP Chacón Tejada, quién sólo permaneció cuatro meses en la jefatura Político-Militar del Frente Huallaga. Su sucesor, Mario Brito Gamero, fue abaleado por el MRTA apenas asumió el cargo, lo cual generó una gran inestabilidad en el Huallaga a pocos meses de que Alberto Fujimori se instalara el gobierno.

Entre 1990 y 1992, la corrosión del narcotráfico alcanzó a numerosos miembros del ejército. En Uchiza, lugar donde la policía fue expulsada por la subversión en 1989, el Ejército había asumido el control total, al punto que, incluso, «arbitraba las actividades de narcotráfico y repartía los cupos»,

como se menciona en el Informe de Inspectoría Nro 001/BCS 26, del 29 de enero de 1992, elevado al Comandante General del Frente Huallaga, por el coronel Luis Aparicio Manrique.

No resulta tan sorprendente comprobar que prácticamente todo el pueblo de Uchiza, incluyendo a su alcalde Demetrio Díaz Guevara y el resto de sus autoridades, estaba comprometido con el narcotráfico. Así lo revelaría el propio Díaz Guevara, asegurando que en la repartición de los cupos por cada avioneta que despegaba con droga participaban tanto el Ejército (2,000 dólares), como el Gobernador (2,000 dólares), el Alcalde (2,000 dólares) y el Frente Cocalero (2,000 dólares). No se menciona al PCP- SL pero es un hecho que también participaba del reparto (3,500 dólares), cifra similar a la percibida por la Policía de Santa Lucía.

2.23.3.6. Pistas y Bases militares

En lo que muy pocos repararon entonces es que no era mera coincidencia que la mayoría de las Bases contra subversivas emplazadas en el Alto Huallaga, como Saposoa, Bellavista, Barranca, Punta Arenas, Sión, Pizana, Bambamarca, Uchiza, Nuevo Progreso, Aucayacu y Monzón, entre otras, se hallaban muy cerca de pistas clandestinas que recién comenzaron a ser dinamitadas desde fines de 1992 y durante 1993.

A inicios de 1993, existían 18 pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico que estaban emplazadas cerca a una base contra subversiva en el Huallaga:

Pista «Convento» (BCS 30 Tarapoto)
Pista «Saposoa» (BCS Saposoa)
Pista «Sacanche» (BCS Bellavista)
Pista «Barranca» (BCS Barranca)
Pista «Santa Bárbara» (BCS Huicungo)
Pista «Campanilla» (BCS Punta Arenas)
Pista «Sión» (BCS Sión)
Pistas «Pólvora» y «Tanata» (BCS Pto Pizana)
Pista «Cañuto» (BCS Bambamarca)
Pista Uchiza (BCS Uchiza)
Pista «Progreso» (BCS Nuevo Progreso)
Pistas «Km 19» y «Km 8» (BCS Aucayacu)
Pistas «Cachicoto» , «Tantamayo» y «Maravillas» (BCS Monzón)
Pista «Agua blanca» (BCS 313 Tingo María)

La más importante, sin lugar a dudas, era la de Campanilla, por el volumen de droga que desde ahí se movilizaba; según el «capo» local, Demetrio Chávez «Vaticano», en dos años se sacaron 280 vuelos, habiendo llegado a operar incluso de noche con luz halógena para eludir los vuelos de interdicción aérea de los Tucano.

Empujados por los efectos del hongo —*fusarium oxysporum*— aparecido con fuerza en 1991 en Nuevo Paraíso, por la represión policial y militar, por el propio conflicto armado interno, pero sobretodo, por la caída de los precios internacionales, los productores se vieron forzados a abrir nuevos cultivos al norte de la región, bajando el curso del Huallaga: Campanilla, Juanjui, Bellavista, Saposo y de allí, el Bajo Huallaga surgieron como nuevos centros de narcotráfico.

2.23.3.7. Informe «Chanamé»

La realidad de Campanilla está crudamente descrita en el informe confidencial N° 016/91 de 1991, elaborado por un oficial de inteligencia de la DINTE identificado con el alias de «Chanamé», quien efectuó un recorrido de diez días por las localidades de Picota, Bellavista, Sacanche, Campanilla y Juanjuí. Según este agente, en el Eje de la Carretera Marginal, en un tramo de 140 kilómetros comprendidos entre Sacanche, Juanjuí, Campanilla y el puente Punta Arenas, existían pequeños poblados donde la gran mayoría de sus habitantes se dedicaban al narcotráfico protegidos en forma permanente por el PCP-SL y con el apoyo y conveniencia de las Fuerzas del Orden.

Las actividades de Demetrio Chávez Peñaherrera, «Vaticano», en Campanilla comienzan luego que este narcotraficante rompiera sus vínculos con el PCP-SL y se desplazara desde Uchiza a esa localidad, que el PCP-SL intentó tomar infructuosamente en más de cinco oportunidades. «Vaticano» se independizó del ordenamiento del PCP-SL y logró apoyo del ejército para solventar una milicia propia mientras operaba su negocio ilícito de acopio y embarque de droga. Chávez, con la ayuda de altos oficiales del Ejército, se convirtió así en un símbolo invencible y peligroso para la hegemonía ejercida por el PCP-SL en el negocio de la droga en el Huallaga.

En Campanilla, según se menciona en el «informe Chanamé», existía un destacamento militar con efectivos del Ejército pertenecientes a la Base Contrasubversiva N° 30 de Punta Arenas, todos ellos, como dice textualmente ese informe, «coludidos con el narcotráfico».

Para llegar a Campanilla era preciso hacer un recorrido de aproximadamente dos horas treinta minutos por río, a bordo de un deslizador con motor fuera de borda, el medio de transporte más rápido utilizado por narcotraficantes y «traqueteros» para llevar sus carga ilícita hacia Campanilla, desde donde era embarcada para Colombia. Sobre el eje del Río Huayabamba, afluente del río Huallaga, en caseríos como Pachiza, Huicungo y Dos de Mayo, los pobladores también estaban dedicados al narcotráfico. En éste sector, el PCL-SL había logrado expulsar definitivamente al MRTA luego de encarnizados enfrentamientos con bajas en ambos bandos. Los subversivos, controlaban un número importante de aeropuertos clandestinos como el de Dos de Mayo, según menciona «Chanamé».

En este lugar (Campanilla) los narcotraficantes se desplazan a bordo de camionetas rurales resguardados por sus sicarios que usan ropas ligeras. Se puede notar que portan armas como revolver y pistolas automáticas y metralletas colgadas del cuello, a vista y paciencia de los efectivos del Ejército.

Según el reporte, las caletas y laboratorios se encontraban en pleno centro de Campanilla, incluso existía una a dos cuadras de la Base Militar. Al caminar por las calles, era notoria la presencia de gran cantidad de jóvenes con mochilas, llamados transportistas o «traqueteros», sentados en las veredas, a la espera de sus pagos por la droga transportada. Se escuchaban casi públicamente las comunicaciones radiales de las «firmas» para coordinar con sus compradores en Colombia algún vuelo programado para el día. Uno de estos vuelos, según este reporte de inteligencia, decoló el 9 de noviembre de 1991, a las 15:00 horas. Se trataba de una avioneta de matrícula nacional cuya carga y descarga duró apenas entre 3 a 4 minutos, para lo cual utilizó parte de la carretera adaptada por «Limoniél», conocido luego como «Vaticano». Al jefe de la Base Militar le correspondían 4 mil dólares por vuelo, y si tenemos presente que cada día llegaban tres a cuatro vuelos, los «cupos» significaban cerca de 10 mil dólares diarios. Para esta actividad, conforme anotó «Chanamé», se cerraban las calles, teniendo acceso únicamente los dueños de las «firmas», sicarios y encargados de la seguridad perimétrica. Eso no es todo: la corrupción alcanzaba a mandos superiores del Ejército, como el comandante Arias Córdova, alias «Chuck Norris», quien hacía «trasteos», es decir traslado de volúmenes mayores de droga a bordo de helicópteros del Ejército. Un testigo presencial de este «arreglo» para llevar la droga de Sión a Bellavista explica este «contrato»:

Por una razón muy simple, si llevaban la droga por carretera tenían que pagarle a la policía, al Ejército, a los subversivos, pero si la sacaban en un helicóptero sólo abonaban los 50 mil dólares que costaba el vuelo y podían mover una tonelada.

Precisamente, uno de los principales argumentos del general Bellido Mora para deslindar su vinculación con el narcotráfico es la cantidad de oficiales del EP que fueron dados de baja y denunciados por su vínculo con el narcotráfico, entre 1992 y 1993, cuando ocupó la jefatura político-militar del Frente Huallaga. Se menciona la cifra de 56 oficiales denunciados ante el fuero militar, de los cuales sólo cinco fueron condenados.

El 16 de agosto de 1996 «Vaticano», quien había sido el narcotraficante más importante de Campanilla, denunció en plena audiencia judicial a Vladimiro Montesinos por haberle cobrado 50 mil dólares mensuales para operar la pista de Campanilla. En una audiencia posterior, el denunciante se presentó en estado deplorable con evidentes lagunas mentales y lenguaje incoherente.

Cuando Campanilla florecía con el narcotráfico, en enero de 1992, las Fuerzas del Orden presentes en el área geográfica del Frente Huallaga, eran las siguientes:

- División antidrogas del Alto Huallaga (DA DDAH-PNP) con base en Santa Lucía (120 policías) y destacamentos en Tingo María, Tocache y Nuevo Progreso.
- Ministerio Público, 2 fiscales ad hoc permanentes

- DEA (Agencia Antidrogas del Departamento de Justicia de los EEUU) con su propio personal, diez helicópteros, aviones AWAC y Orión e ingentes recursos económicos para operaciones y pago de informantes.

- Personal de Comando Sur del Ejército de los EEUU, instalada con medios electrónicos en el Puesto de Comando del Frente Huallaga a partir del 1 de marzo de 1992, para interceptar comunicaciones radiales.

- VI Región Aérea Territorial de la FAP (VI RAT) al mando de un Mayor General, tres aviones Tucano y pilotos para interceptación área.

- Destacamento «Leoncio Prado» del Ejército, con Batallones Contra subversivos y Bases Contra subversivas

¿Qué responsabilidad le corresponde a cada una de estas entidades antidrogas, que han sido incapaces durante tres décadas de contrarrestar el creciente desarrollo de las mafias dedicadas a la ilegal exportación de la droga e impedir su expansión del Huallaga a nuevas zonas cocaleras?

Los ejemplos que muestran el alto grado de corrupción ejercida por el narcotráfico entre integrantes del EP abundan y están plenamente documentados. El cierre de la pista a fines de 1992 obligó a las «firmas» a abandonar Campanilla, lo cual no sólo repercutió seriamente en la economía de la tropa que vio mermada su ración alimenticia sino que, sobre todo, dejó de percibir los «cupos» que hasta entonces pagaban las «firmas» a cambio de seguridad. Catorce hombres de la tropa, entre clases y soldados, decidieron entonces desertar llevándose consigo sus armas, lo que puso en alerta al Ejército, debido a que fácilmente podían terminar del lado de la subversión, pero finalmente se presentaron en el cuartel de Tarapoto. La desertión de este puñado de soldados de la Base Contra subversiva N° 30 de Punta Arenas, ocurrida en marzo de 1993, puso al descubierto la escandalosa colusión de por lo menos una decena de oficiales con el narcotráfico, pero además evidenció el alto grado de corrupción entre la tropa y los clases, a partir de los famosos «cupos» de la droga.

En octubre de 1992, ocho narcotraficantes fueron asaltados y asesinados por una patrulla del Ejército al mando del Alférez Werner Huamaní, apodado «Ninja», en la zona conocida como Boca del Río Balsayacu, para arrebatarles una carga de 350 kilos de pasta básica de cocaína. Sus cuerpos fueron arrojados al río y los ocho sacos con droga quedaron escondidos entre la vegetación para ser vendidos luego.

Otro ejemplo, documentado en el testimonio brindado por el SO2 Alfonso Sánchez Pacheco, «Pocho», ante el Inspector del Frente Huallaga de ese entonces, Coronel EP Oscar Córdova Reyes, sucedió la noche del 14 de agosto de 1993, cuando una avioneta de narcotraficantes aterrizó en el aeródromo de Saposoa, con la protección y ayuda de una patrulla del Ejército de la base contrasubversiva acantonada en esa localidad. Por prestar seguridad cada soldado de la tropa recibía 30 dólares; al suboficial «Pocho» le tocaron 2,000 dólares, y el técnico «Charlie» recibió una cifra similar de manos de quien realizaba el reparto, el teniente José Díaz Dávila, alias «Dante».

En 1994, el capitán de Caballería Gilmar Valdivieso Rojas, apodado «Cienfuegos», hizo abandono de destino y se presentó ante la subcomisión de Narcotráfico del Congreso Constituyente que presidía Julio Castro Gómez, para denunciar la colusión de ciertos oficiales del Ejército con el narcotráfico. Entre los denunciados figuraba su propio jefe, el comandante Miguel Najar Acosta, quien dirigía el Batallón Contra subversivo N° 26 de Tocache, donde se había producido la escandalosa liberación de un narcoterrorista apodado «Chatín» a cambio del pago de ciento ochenta mil dólares. «Chatín» era un importante mando logístico de la llamada T-4 del PCP-SL que comprendía todo el sector de Tocache. Al momento de su captura, el 5 de abril de 1993, por una patrulla del Ejército al mando de «Cienfuegos» en el paraje denominado Chahuallacu, tenía en su poder 200 kilos de droga. «Chatín» fue llevado con la droga a la Base de Bambamarca, pero no tardaría mucho tiempo en ser liberado, gracias a la intermediación del narcotraficante apodado «Cero Cero», quien acordó con el comandante Najar Acosta el pago de 180 mil dólares a fin de dejar libre al subversivo y devolverle la droga. El oficial exigió además al PCP-SL un lote de armas que debía ser entregada a los capitanes Gustavo Bernuy Bobadilla, «Ruíz», y Manuel Olguín Luna, «Sosa», como si se tratara de armas recuperadas en enfrentamientos.

Valdivieso Rojas fue el primero en denunciar cómo se hacían los famosos «arreglos» en las Bases Militares de Pizana, Sión, Punta Arenas y Uchiza, que se hallaban bajo el Puesto de Comando del Batallón Contra subversivo N° 26 de Tocache al mando del comandante Najar Acosta

Por cada vuelo se pagaban 10 mil dólares y todos los arreglos eran directamente con el comandante (Najar Acosta). Los narcos ingresaban a la Base de Tocache como si fuera su casa.

También denunció que, en Uchiza, el capitán Delgado, jefe de la base militar, alquilaba armamento a las «firmas» para dar seguridad a sus vuelos. Todas estas bases contra subversivas no recibían abastecimiento de víveres por parte del Ejército pues éstos los pagaban las «firmas» de narcotraficantes, como quedó en claro durante el juicio al General EP Jaime Ríos Araico, quien tuvo que aceptar que existió un pacto en este sentido, pero no directamente con el narcotráfico sino a través de las autoridades locales, según afirmó durante ese proceso.

Luego de denunciar a Najar Acosta, Valdivieso estuvo a punto de ser asesinado por gente de su propia institución. Además, se le abrió un proceso por insulto al superior, desobediencia, abuso de autoridad y falsedad. Para preservar su vida se vio obligado junto con su familia a abandonar el país pero volvió clandestinamente, y meses más tarde fue detenido cuando intentaba ingresar al Congreso, siendo confinado durante varios meses en una celda de la prisión militar, desde donde batalló con el apoyo del Instituto de Defensa Legal a fin de demostrar su inocencia. Finalmente, logró ser absuelto pero la justicia militar condicionó su liberación a no enjuiciar al Ejército por daños y perjuicios. Hoy su expediente engrosa la ruma de papeles de aquellos oficiales que aguardan ser reincorporados al Ejército

Recién mediante el DL N° 824 del 23 de abril en 1996, el Congreso dispuso el retiro definitivo de las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico. Luego de revisar todos estos hechos, no cabe duda que tienen mucho de razón quienes sostienen que el costo a pagar por el Ejército Peruano fue muy alto por los efectos nocivos del narcotráfico entre sus filas y su secuela corruptora, que contribuyó a su descrédito y desgaste.

2.23.3.9. El SIN en el negocio

Queremos terminar recordando que apenas Alberto Fujimori asumió el gobierno, se expidió la Ley Orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional mediante la cual Vladimiro Montesinos Torres tomó absoluto control del manejo y funcionamiento de los servicios de inteligencia de los Institutos Armados y la Policía Nacional, con lo que se le facilitó su interrelación, entre otros delitos, con el de narcotráfico. En 1991, al llegar al Huallaga, el general Jaime Ríos Araico detectó un destacamento de Inteligencia procedente de Lima al mando del comandante EP Esparza Morgan, quien operaba autónomamente, desconociéndose cuál era su misión y funciones. El propio Ríos Araico señaló durante el proceso judicial en su contra que Esparza jamás le proporcionó información alguna de inteligencia. Queda claro que el SIN estableció un canal directo con los responsables de Inteligencia (G2) de las Regiones Militares y, en el caso particular del Huallaga, con el G2 del Destacamento Leoncio Prado, Eduardo Alvarado Revoredo, quien bajo la cubierta de «Juan» operó inusualmente durante los años de mayor apogeo del narcotráfico (1992-1993), cuando Campanilla era el epicentro del «trasteo» de cocaína hacia Colombia, y «Vaticano» uno de los mayores jefes de «firma».

En 1993, bajo el Plan de Operaciones «Tentáculo», se instalaron ocho puestos de inteligencia dedicados exclusivamente a informar sobre el movimiento del narcotráfico en el Huallaga, todos a cargo de gente del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército). Así, nos encontramos con los PI «Minimarket» y «Bazar» en Tarapoto, el PI «Colectivo» Juanjuí-Yurimaguas, el PI «Cambista» en Uchiza, el PI «Latero» Tocache-Juanjuí, el PI «Colectivo «Moyobamba y «Colectivo» Huanuco. Además, la DINTE designó cuatro agentes directamente a la jefatura de Inteligencia del Frente Huallaga. En suma, el SIN resulta también, según múltiples evidencias, un actor más en la maraña corrosiva del narcotráfico.

2.23.4. Conclusiones

El tráfico de cocaína es una actividad multinacional tan grande y poderosa como el petróleo, y que tuvo por décadas sus áreas de producción de materia prima en Perú y Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombia y su gran mercado de consumo en Estados Unidos de Norteamérica. Su auge, en la selva del Huallaga, y en el cual se involucraron poblaciones enteras, abarca las décadas de 1970 y 1980.

En cumplimiento de acuerdos con el gobierno norteamericano y en concordancia con normas internacionales, el Estado peruano impulsó, desde la década de 1970, una política de combate al narcotráfico a través de programas de erradicación, sustitución e interdicción policial, convirtiéndose los productores campesinos de hoja de coca en el principal blanco de esta política que afectó la actividad económica fundamental de amplios sectores de productores del Huallaga.

Antes de que llegara el PCP-SL, el «boom» del narcotráfico creó una crisis seria de gobernabilidad para el Estado peruano pero simultáneamente una crisis de justicia para la población del Alto Huallaga. Ambos problemas nacieron a raíz de la *magnitud* del mercado de la droga, que convirtió un negocio ilegal en una práctica generalizada entre la población, convirtiéndose en la actividad predominante del valle. Además del impacto financiero que condujo a los bancos de Lima a abrir sucursales en los principales pueblos del Alto Huallaga con el fin de comprar los dólares baratos del narcotráfico e introducirlos a la circulación legal, el poder económico del apogeo de la droga tuvo un impacto aún más profundo en el mismo Estado peruano. Gustavo Gorriti ha comentado sobre el poder sorprendente del narcotráfico para *capturar* a las «instituciones democráticas» del país a lo largo del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry y luego en el de Alan García Pérez.

La influencia del PCP-SL en el Alto Huallaga sigue un vector temporal que se inicia a principios de la década de 1980 y comienza, a partir de 1993, a perder fuerza rápidamente sin llegar a desaparecer por completo hasta la actualidad. Si bien el proyecto senderista no se propuso establecer vínculos con el narcotráfico, el objetivo de ampliar su base social llevó a los responsables regionales del PCP-SL en el Huallaga, desde su inserción en el valle a partir de los primeros años de los ochenta, a un acercamiento creciente con el negocio de los derivados de la hoja de coca, intentando intervenir en los puntos vitales de ese mercado y regular las relaciones sociales que se aglutinaron alrededor del mismo. Algo similar ocurrió años más tarde con el MRTA conforme se ampliaron los espacios cocaleros hacia el departamento de San Martín. La importancia del Alto Huallaga para entender ese proceso reside en que fue uno de los pocos lugares del país donde el PCP-SL consiguió dominar un territorio amplio y por un tiempo relativamente largo, entre diez y quince años.

El accionar senderista distinguió dos espacios definidos, el rural y el urbano. En una primera etapa, en los sitios rurales, formó sus Comités Populares, luego en las zonas urbanas surgirían los Comités, llamados «la Urbana»; entre las dos esferas —rural y urbana— era en el campo donde la moral senderista se imponía con mayor severidad y donde la captación de sujetos aptos de seguir con la revolución era activa.

La complejidad de la relación del PCP-SL con el Alto Huallaga durante los años del «boom» del narcotráfico debería contribuir al rechazo de la idea de una identificación simple entre el PCP-SL como movimiento político-militar y la empresa de la pasta básica de cocaína, tal como se ha pretendido crear y difundir a través del término «*narcoterrorismo*». De la misma manera, no es posible hablar de «narco policía» o «narco ejército» a pesar que la corrupción generada por el narcotráfico alcanzó niveles insospechados entre los mandos y subalternos policiales y militares.

Son numerosos los casos de puestos policiales y BCS involucradas directamente en el negocio del narcotráfico, y podemos afirmar que ninguno de los actores presentes en el ciclo de violencia en el Huallaga escapó del inmenso poder corrosivo del narcotráfico.

En mayo de 1991, Alberto Fujimori suscribió un convenio marco con los Estados Unidos, que en la práctica dio «luz verde» a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, con todos los riesgos que ello involucraba. La policía, desgastada por largos años de lucha contra el TID y el terrorismo, y la alarmante corrupción en sus filas, quedó así subordinada a la autoridad político-militar y los operativos antidrogas a la protección oficiosa del Ejército.

En 1989, el General Arciniega propuso que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado peruano continuaba reprimiendo a la población en general si lo que se pretendía era una alianza de la población con las fuerzas del orden para disputarle al PCP-SL sus bases de legitimidad. Desde 1989, la expansión de las actividades del ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que a la larga afectaron el avance del PCP-SL: la colocación de bases militares en Uchiza, Palma del Espino (Santa Lucía), Tocache y Madre Mía, conjuntamente con la reorganización o refuerzo de la presencia del ejército en Aucayacu; la reanudación de trabajos de inteligencia y el mejoramiento de la Carretera Marginal.

Pero entre 1990 y 1992, la corrosión del narcotráfico alcanzó a numerosos miembros del ejército de tal manera que no podemos aceptar como mera coincidencia que la mayoría de las Bases contra subversivas emplazadas en el Alto Huallaga se hallaban muy cerca de pistas clandestinas que recién comenzaron a ser dinamitadas desde fines de 1992 y durante 1993

Se menciona la cifra de 56 oficiales del Frente Huallaga denunciados ante el fuero militar por tráfico de drogas, de los cuales sólo cinco fueron condenados (véase la lista en el anexo).

Apenas Alberto Fujimori asumió el gobierno, se expidió la Ley Orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional mediante la cual Vladimiro Montesinos Torres tomó absoluto control del manejo y funcionamiento de los servicios de inteligencia de los Institutos Armados y la Policía Nacional, con lo que se le facilitó su interrelación, entre otros delitos, con el de narcotráfico.

En esta relación compleja entre narcotráfico y el conflicto armado interno un gran enigma persiste respecto al destino de los fondos captados por los mandos senderistas en el Huallaga, que no se expresan en armamento adquirido en pocas cantidades ni en el envío de remesas a la dirección nacional del PCP-SL pues los documentos incautados a los dirigentes nacionales del PCP-SL muestran tanto un profundo desconocimiento de las actividades de los mandos regionales del Huallaga como de los fondos que manejaban, insinuando una autonomía de operaciones casi absoluta. Parece ser que el PCP-SL en el Huallaga no dependía de las ordenes de Guzmán y su propuesta de justicia en medio del boom de la coca origina el pragmatismo de los cuadros regionales involucrados en «el negocio», de la misma manera que muchos oficiales del EP y de la policía fueron incapaces de resistir al poder corrosivo del dinero proveniente del TID.

Anexo

Algunos procesos contra militares por TID: 1992-1995

Caso «Capulina» (1992)

My. Rafael Franco De la Cuba

presunta vinculación del personal militar de la BCS de Punta Arenas en actividades de TID.

Caso «Ríos Araico» (1992)

Gral. Brig. Jaime Ríos Araico

TC Marko Zárate Rotta

My. Marco Lander Moscol

My. Alejandro Muñante Salazar

Tco. 3 Roberto Zárate Aguilar

Civil Demetrio Díaz Guevara (alcalde)

Civil Carlos Rodríguez Chumioque (gobernador)

Presunto TID por jefe de CEC 115 Personal de Oficiales, personal auxiliar y civiles en Uchiza durante 1991.

Caso «Claudio» (1992)

Tte. Gregorio Velarde Queirolo, «Claudio»

presunta vinculación del personal militar de la BCS de Punta Arenas en actividades de TID.

Caso «Campana» (1992)

My. Evaristo Castillo Aste

responsable de la pérdida de documentos clasificados (Plan «Campana», su Anexo de Inteligencia y el Informe N°016/91/22 NOV 91)

Caso Capitán «Paris» (1992)

Cap. Víctor Gómez Gutierrez

Relacionado a la participación del jefe de la BCS «Leopardo» de Saposoa en operativo de la PNP /DEA de Santa Lucía

Caso «Madre Mía» (1992)

Cap. Ricardo Falconí Alvarez

Cap. Ignacio Trauco Rojas

Tte. Víctor Auza Montalvo

Stte. Guillermo Guerra Pinedo

SO1 Jorge Santistevan Chicoma

SO1 Walter Marín Salazar

SO2 Florentino Silva Chinguel

Presunto TID, seguridad a vuelos de avionetas de narcotráfico en el kilómetro 19 de la carretera Marginal, por personal de la BCS de «Madre Mía» del BCS 313 de Tingo María

Caso «Ninja» (1993)

Cap. José Penas Sandoval

Tte. Werner Huamaní Tipismana

Tte. Rosenberg Salazar Sarmiento

Tco. Aurelio Herrera Cáceres

SO1 Severiano Mancilla Contreras

SO2 Francisco Palomino Arévalo

Por el asesinato de ocho narcotraficantes ocurrido en Balsayacu, San Martín, el 28 de octubre de 1992, para robarles 300 kilos de droga.

Caso «Balsayacu» (1993)

Crl. Eduardo Alvarado Revoredo

Tc. Walter Bueno Castillo

Presunto tráfico ilícito de drogas (se negoció la droga robada por la patrulla) caso Balsayacu.

Caso «Bueno» (1993)

Tc. Walter Bueno Castillo

Tte. Julio Cruz Albán

Presunto TID del Jefe de la BCS N° 30 de «Punta Arenas»

Caso «el Sauce» (1993)

Stte. Walter Chavarri Stechmann

Presunto tráfico de drogas del Jefe de la BCS del «Sauce» del Batallón Contra subversivo N°30 de Tarapoto

Caso «Saposo» (1993)

Mayor FAP

5 Subalternos FAP

2 Capitanes PNP

Oficiales del Ejército

Acciones de narcotráfico (protección a vuelos) detectado por operación de interdicción aérea de Tucanos de la FAP en horas nocturnas en el aeródromo de Saposo.

Caso «Cienfuegos» (1993)

Crl. Miguel Najar Acosta

Crl. Héctor Rodríguez Cateriano

Cap. Antonio Saldaña Cabanillas

Cap. Manuel Olguín Luna

Cap. Gustavo Bernúy Bobadilla

Cap. Gustavo Flores Huamaní

Cap. Alejandro Cacho Costa

Cap. Marco Vizcarra Alegría

Cap. Luis Landivar Gutierrez

Presunto TID cometido por personal militar de la BCS N°26 de Tocache, donde se liberó a narcoterrorista «Chatín» y al senderista Elder Soto Chávez, a cambio de 140 mil dólares. Además le devolvieron droga incautada.

Caso «Vaticano» (1994)

Grl. Jaime Ríos Araico

Grl. Eduardo Bellido Mora

Cmte. Enrique Rodríguez Cateriano

Cap. Mario Vizcarra Alegría

Crl. Luis Aparicio Manrique

Crl. Marco Zárate Rotta

My. Marco Landor Moscol

My. Alejandro Muñante Salazar

My. Eliseo Gonzáles Chávez

Cap. Oswaldo Zapata Corrales

Cap. Carlos Hernández Aparcana

Cap. Carlos Marín Lira

Tte. Rolando Chiotty Valverde

Tec. Roberto Zárate Aguilar

SO2 Luis Gómez Carrasco

Procesados por presunta complicidad con el TID al permitir actividades del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, entre 1991 y 1994, en el Alto Huallaga.

Caso «Pirucho» (1994)

Cap. Carlos Flores

Cap. Carlos Obregón

Cap. Miguel Carvajal

Cap. Víctor Tenorio

Cap. Antonio Ferrari

Cap. Mario Chala

Tte. Hidrón Llapapassa

Tte. José Guerra

Alf. Jorge Torres

Alf. Freddy Isla

Cte. Harold Guevara

Acusados de la liberación del narcotraficante colombiano apodado «Pirucho» en BCS de Aucayacu

Caso «López Paredes» (1995)

Cmte. Ángel Dongo Caceres

Cmte. «Ivan»

Tte. Luis Alberto Morales Pizarro

Presunto TID por permitir la actividad ilícita de la organización, mantener vínculos y dar protección a los miembros de la mafia